JOSE ANDRES GALLEGO

LA POLITICA RELIGIOSA
EN ESPAÑA

1889 - 1913

EDITORIA NACIONAL

San Agustín, 5

MADRID

POLÍTICA RELIGIOSA

EN ESPAÑA

1975-1976

© José Andrés Gallego

Editora Nacional. Madrid (España)

Depósito legal: M. 12.325 - 1975. *Printed in Spain*

ISBN: 84-276-1247-8

Impreso en Ediciones Castilla, S. A.

Maestro Alonso, 21. Madrid

ÍNDICE

Presentación

I. Hacia una organización política de la Iglesia

II. El partido católico, 1889-1896

III. La época de los regeneradores, 1896-1898

IV. Resurrección del anticlericalismo, 1899

V. Planteamiento político de la cuestión religiosa, 1900-1902

VI. La solución conservadora: El Convenio de 1904

VII. Soluciones y quiebra del partido liberal fusionista, 1903-1907

VIII. La política ordenancista del Gobierno Largo de Maura, 1907-1909

IX. La política religiosa de José Canalejas (1909-1912)

Conclusión

Empleamos las siguientes abreviaturas, siempre en las notas:

ADN	: Archivo de la Diputación Foral de Navarra.
ADV	: Archivo Diocesano de Vic.
AHB	: Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona.
AHN	: Archivo Histórico Nacional.
AMAE/AES	: Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa Sede).
AMAE/SCS	: Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sección de Correspondencia. Santa Sede.
AMAE/SPS	: Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sección de Política. Santa Sede.
APG	: Archivo de la Presidencia del Gobierno.
APR/SpA	: Archivo del Palacio Real de Madrid. Secretaría particular de Alfonso XIII.
APR/SpM	: Archivo del Palacio Real de Madrid. Secretaría particular de María Cristina de Habsburgo.
BAM	: Biblioteca del Ateneo de Madrid.
BCB	: Biblioteca Central de la Diputación de Barcelona.
BCM	: Biblioteca de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
BCR	: Biblioteca de la Real Colegiata de Roncesvalles.
BDN	: Biblioteca de la Diputación Foral de Navarra.
BEV	: Biblioteca Episcopal de Vic.
BNM	: Biblioteca Nacional de Madrid.
BSP	: Biblioteca del Seminario Conciliar de Pamplona.

La prensa periódica, citada sin referencia a su origen, ha sido consultada en la Hemeroteca Municipal de Madrid y en los Archivos Municipal de Valencia y Diocesanos de Zaragoza, Valladolid, Valencia, Madrid, Segorbe y Calahorra, cuando no en los centros arriba enumerados. Algunos boletines eclesiásticos, también periódicos, nos han sido facilitados en Archivos Parroquiales de Osma, Cuenca, Vitoria, Segovia, Huesca, Astorga y Salamanca.

Hay indicaciones sobre otros fondos en el capítulo I, nota 154; capítulo II, notas 5, 25 y 125; capítulo III, notas 11, 22 y 24, y capítulo IV, nota 91.

En la reproducción de los documentos en nota, el doble guión (=) tiene valor de punto y aparte. Los puntos suspensivos indican siempre una abreviación nuestra, si no se advierte lo contrario (sic) de modo expreso. Todos los subrayados de las citas son propios de la fuente de que proceden. Indicamos entre paréntesis el fondo a que pertenecen las fuentes impresas. Va, en fin, modernizada —sólo en lo imprescindible— la ortografía de los textos citados, a excepción de los redactados en lengua catalana.

La ruptura entre Iglesia y Estado que parece implicar el largo proceso revolucionario europeo de las últimas décadas del XIX y la primera mitad del XX responde acaso, en alguna medida, a una cierta desacralización (quizá no sea propio seguir hablando de descristianización) ¹ paulatinamente desenvuelta en la cultura occidental.

Esta fuga del mundo moderno, que llega formalmente a romper su dependencia jurídica de la Iglesia, ofrece múltiples facetas, precisamente en cuanto que es reflejo de toda una actitud nueva del hombre ante la vida. Supone una profunda aunque muy lenta, secular, reforma de las estructuras del comportamiento individual. Abarca numerosos, tal vez casi todos los campos de acción y, desde luego, la política.

De ahí que, ya en las primeras décadas del siglo XIX, incluso en el XVIII ², la Iglesia haya buscado el camino de la recuperación de su antiguo puesto: tarda, por eso mismo, en mostrarse consciente del hecho desacralizador y en respetar como organización la autonomía de las actividades seculares.

A los tanteos que esa búsqueda da lugar puede otorgárseles (en España ya en los años 90 del XIX al menos) el nombre de «acción católica».

No se alude con él, en principio, a un proyecto de organismo con personalidad jurídica, ni siquiera al valor deificador del hacer del cristiano. Es más bien un mero énfasis en la necesidad de cohesión y de actuación sistemática para defender a la Iglesia, que se cree atacada por la mera configuración del «mundo moderno»: «acción católica —entonces se escribe— es la que resulta de los esfuerzos unidos de todos los católicos en sentido opuesto a la acción anticatólica, que por nuestra desgracia es hoy la predominante en el mundo» ³.

No es rara, por eso mismo, la paradójica filiación integrista que se descubre en buena parte de esa acción, por delante del catolicismo liberal ⁴. La Acción Católica «representa en su origen la reacción de los católicos contra la obra descristianizadora de la Revolución francesa»: como acción «de necesaria y legítima *defensa*... y especialmente, de *restauración*, debiendo ayudar a la Iglesia a reedificar aquello que el laicismo ha demolido» ⁵.

1. La Asociación de Católicos y la Juventud Católica, primeros ensayos.

Parece ser en Alemania donde se articula este propósito de modo coherente, por vez primera y a escala nacional. El parlamento de Francfort, que intentaba gestar una Alemania unida con el ímpetu de la revolución de 1848, planteó la cuestión del estatuto religioso a la hora de configurar el nuevo régimen. Y ello animó a algunos de los parlamentarios (a la cabeza el príncipe obispo de Breslau von Diepenbrock, el general prusiano Joseph Maria von Radowitz y el juez renano August Reichensperger) a crear allí mismo la Asociación Católica de Alemania (*Katolische Verei-*

nigung), verdadera primicia del movimiento activista laico confesional, que ya ofrecía soluciones a una perenne problemática. Se declaraba al margen de rivalidades políticas, neutral y apartidista por tanto, y dirigida a la defensa de la Iglesia y a la restauración del orden religioso, también en medios obreros. Evocaba, probablemente, *The Catholic Association*, constituida en 1823 por O'Connell para defender en política los derechos de la catolicidad irlandesa.

Pero ni la tolerancia religiosa de las décadas medias del siglo ni el coetáneo mantenimiento del catolicismo liberal debieron alentar un movimiento por principio defensivo. Y, así, fueron las crisis políticas centradas en 1870 las que dieron al menos pábulo a su expansión.

En la misma Alemania, entre 1871 y 1875, el *Kulturkampf* hizo posible una mayor cohesión. La legislación anticlerical inspirada por Bismarck terminó de inclinar a los católicos a apoyar al llamado Partido de Centro: grupo que, en realidad, constituía —contra la demasiado usual afirmación— un partido aconfesional, que vino a reunir a insatisfechos con la preponderancia de Prusia —también pero no sólo religiosa—, católicos y luteranos, sobre los demás estados del nuevo Imperio.

En los años 60, la política anticlerical del liberalismo belga inclinó a un grupo de laicos, animados por el éxito de las asambleas germanas de la Asociación, a organizar una reunión semejante en Bélgica. Con la tutela del arzobispo Sterckx, organizaron el Congreso de Malinas de 1863, de nuevo impresionados por la Asociación irlandesa. Y de él nació la correspondiente Asociación Católica belga, explícitamente apolítica, aunque el ímpetu activista evolucionara luego en presión política, que alcanzó el poder en 1884.

Fue en 1871 cuando debieron organizarse los primeros Comités Católicos en Francia, en los días de la *Commune*. En los mismos años 70, también había Asociaciones Católicas en Bohemia e Italia, donde había sido fundada en 1865 con el propio impulso de los comisionados en Malinas. Y de manera semejante, en España, surgió el mismo movimiento ante la presión anticlerical de la revolución de septiembre de 1868^o.

La Asociación española, primer intento conocido de organizar la acción laica corporativa, confesional, a nivel nacional, aparecía expresamente animada por la prosperidad de las Asociaciones belga y germana⁷ y por parecidos motivos. «Los sacrílegos atropellos» de aquella revolución y «obligaron a los católicos más notables de Madrid en reunir sus fuerzas para organizar una resistencia legal.» Y en unas conferencias celebradas en el domicilio del marqués de Viluma, aún en diciembre de 1868, acordaron las bases del movimiento, en seguida aprobadas por el obispo de Madrid y el nuncio⁸.

Según ellas, la agrupación surgía «para mantener hoy la unidad católica y defender siempre la libertad de la Iglesia». Utilizaría, a este fin, «todos los medios que están dentro de las leyes y de la moral católica»⁹. Una Junta Superior, radicada en Madrid, la dirigiría, ramificada en lo posible en Juntas Provinciales, de Distrito y Parroquiales. Había de trabajar «bajo la guía de los Prelados Diocesanos», «sin otro fin que el de contrarrestar la acción funesta de la impiedad», que apuntaba contra la Iglesia

al amparo «de las libertades de asociación, imprenta, emisión del pensamiento».

Su enfoque era, no obstante, «puramente religioso, ajeno por consiguiente a toda mira política sea cual fuere»¹⁰. «Son objetos de la Asociación —aclaraba su Reglamento—: Fundar o autorizar y propagar periódicos, o cualquiera otra clase de publicaciones que juzgue útiles a su fin especial: Crear y sostener escuelas de primera enseñanza para párvulos y adultos y cualesquiera otros institutos para el cultivo de las ciencias y artes cristianas: Promover y auxiliar obras de caridad cristiana... Asociaciones para mantener y acrecentar la frecuencia y el decoro del Culto Católico... círculos permanentes, literarios y de recreo»...¹¹ Intentaba lograrlo uniendo los esfuerzos, por un mero criterio de eficacia. Porque, para vencer el mal, «no hay otro medio que la unión íntima de los hijos fieles en el seno» de la Iglesia¹².

Podía decirse que, con ello —en el mero planteamiento teórico—, la Iglesia parecía dar desde el principio con una fórmula coherente con su doctrina: la recuperación social pero individual, hombre a hombre, por vía propagandística, cultural, litúrgica, de una civilización que se independizaba de ella.

Los fundadores acordaron que los miembros de la Junta Superior habían de ser laicos. Y, tras algunas conferencias, triunfó el criterio del tradicionalista Antonio Aparisi y Guijarro de que, además, fueran «católicos no políticos, desligados de compromisos»¹³: «que no han figurado de modo alguno en nuestras contiendas políticas, o ... alejados de ellas hace ya largo tiempo»¹⁴. Aunque a cuatro años del *Syllabus*, que había resellado la heterodoxia del liberalismo, una postura así sólo podía buscarse en las filas tradicionalistas en sentido amplio: carlistas, moderadas o independientes.

Presidió la primera Junta el marqués de Viluma, que había representado en los años 40 el ala más templada del moderantismo (bien definida por sus planes para casar a Isabel II con el conde de Montemolín)¹⁵. Fueron vicepresidentes un noble moderado —el conde de Vigo—, otro carlista —el de Orgaz— y León Carbonero y Sol, carlista, catedrático de árabe de la Universidad de Sevilla y director de una de las revistas más leídas confesionales: *La Cruz*. Entre los secretarios¹⁶ figuraba el abogado vicense, diputado carlista en 1867 y 1869, Ramón Vinader, y entre los colaboradores, los todavía neocatólicos Cándido y Ramón Nocedal¹⁷ b.

El mantenimiento de la neutralidad de la Asociación fue difícil: «lo que se llama *política* en el sentido concreto y usual de la palabra —habían previsto sus organizadores en el 68—, está formalmente excluido del espíritu y letra del objeto y del fin de la Asociación. Sabemos desde ahora que se intentará negarlo ...; pero ante Dios y ante la patria aseguramos que esta es la verdad»¹⁷.

Sucedió así. En algunos lugares, la autoridad impidió su establecimiento¹⁷ b. Se la confundió de inmediato «con las diversas sociedades, comités o círculos, que si bien proclaman los verdaderos principios católicos y defienden con ardor la unidad religiosa, se proponen también fines políti-

cos»¹⁷ c. «Los políticos, y que deseaban dar a la Asociación un carácter político —se diría después—, se desviaron de ella, y los que preferían acudir a medios de fuerza la miraron con prevención. Formose una sociedad titulada *Católico-monárquica*», en realidad carlista, «que duró muy poco tiempo y con azarosa vida, pero que se llevó la mayor parte de las fuerzas de la Asociación de Católicos. Luego que estalló la guerra civil, fue aquella disuelta y perseguida, y de rechazo y con mala fe se persiguió y disolvió a varias de nuestras Juntas.» Entre quienes aceptaban su apolítico tiempo y con azarosa vida, pero que se llevó la mayor parte de las fuer-
~~tiempo y con azarosa vida, pero que se llevó la mayor parte de las fuer-~~
Vicente de Paúl¹⁸, suprimidas en los primeros tiempos del Gobierno provisional.

La crisis provocada por la constitución de aquel Centro Católico Monárquico, que vino a presidir, según parece, el carlista conde de Orgaz, debió forzar la reorganización de la Junta Superior de la Asociación. En septiembre de 1870, le había ya sustituido en la vicepresidencia un noble, ajeno a la política, el marqués de Mirabel¹⁹, que luego sería presidente, muerto Viluma en octubre de 1872²⁰.

En verdad, la pureza de los propósitos del movimiento había quedado expresa en la carta que Pío IX dirigiera a la Junta en enero del 69. Lo recibía como «una gran Sociedad católica que, enteramente ajena a la política, se emplea únicamente en amparar y defender con todas sus fuerzas, y hasta con riesgo de la misma vida, la santa Iglesia católica, apostólica, romana»²¹.

Extendida enseguida por «las capitales más notables de España»²² —en Madrid, Santiago y Salamanca primero, luego a Sevilla, Segovia, Barcelona—, llegó a contar en su primer año de vida con 28 juntas provinciales²³. La discusión de la libertad religiosa en las Cortes Constituyentes de 1869 animó su primera iniciativa notable: una exposición al Congreso que suscribieron 4 millones de firmas en un país de 16 millones de habitantes²⁴.

Se dedicó así mismo a la publicación de obras apologéticas, entre ellas los 20.000 ejemplares editados del *Catecismo* sobre el protestantismo del arzobispo de Santiago cardenal Cuesta²⁵. Fomentó escuelas confesionales en toda la península. Durante el curso 71-72, centros de la Asociación educaban en Barcelona a 2.193 alumnos; en el 72-73, en Córdoba, regía 10 escuelas de obreros y otras 3 al año siguiente, además de un asilo para «jóvenes abandonados», tal vez en Madrid, y centros de enseñanza en Valencia y Zaragoza²⁶. E incluso pretendió establecer una universidad, al amparo de la libertad educativa decretada en 1868.

Con ese fin nacieron en Madrid, en septiembre de 1870, los Estudios Católicos, en la proliferación de universidades libres subsiguiente a aquella medida. En principio impartieron la segunda enseñanza, con un plan reforzado en las asignaturas de Religión y Latín, y Derecho y Filosofía y Letras hasta el grado de bachiller²⁷. Más tarde —en el curso 74-75 al menos— se ampliaron estas dos carreras hasta el doctorado y cursaban bachillerato en Ciencia²⁸.

Eran los profesores «bien conocidos en el orden de la enseñanza pública»²⁹. Entre ellos un catedrático de universidad: el escritor bilbilita-

io Vicente de la Fuente, historiador, asistente al II Congreso de Malinas en 1864¹, carlista en su juventud, colaborador de Viluma y Balmes en el intento de unir las dinastías, por último alejado de las luchas políticas²¹. Y dos que ganarían la cátedra tras la Restauración: el historiador Fernando Brieva y Salvatierra, tradicionalista de ideas, luego alfonsino²², y el filósofo Juan Manuel Ortí y Lara, tradicionalista independiente hasta la revolución del 68, que lo llevó al carlismo, siendo entonces catedrático del madrileño Instituto del Noviciado²³.

Figuraban en los Estudios otros tres conocidos profesores de la enseñanza media: el catedrático del Instituto de San Isidro Félix Sánchez Casado, el del de Segovia José Solano y Eulate —trasladado en 1870 a Madrid como ayudante del Museo de Ciencias Naturales— y el profesor de lengua latina del Instituto del Noviciado Emeterio Suaña y Castellet. Algunos hombres destacados en la vida pública: Francisco de Asís Aguilar, sacerdote y naturalista, más tarde obispo de Segorbe; Aureliano Fernández Guerra y Orbe, director general de Instrucción Pública bajo Isabel II; León Galindo de Vera, notario y escritor, que sería designado en segunda académico de la lengua, en 1873; Manuel Carbonero y Sol, hijo del director y futuro director de *La Cruz*, y el abogado Ramón Vinader²⁴.

Pero «los estudios se vieron poco favorecidos: sólo se matricularon 132 en segunda enseñanza y 85 en la superior» durante el primer curso, 1870-71, pese a recibirla gratuitamente más de la mitad²⁵, por el propósito de los fundadores de «ejercer su influencia en todas las clases de la sociedad»²⁶. En principio se mantenían «solamente con el socorro de muy contadas personas y por la abnegación de los profesores que han trabajado gratuitamente o poco menos»^{26 b}.

Durante el año académico 74-75, los Estudios parece contaban con unos 300 alumnos. En 1876, clausuraron sus aulas: «o por falta de entusiasmo y de perseverancia en sus fundadores o por no haber acudido en debida forma a la opinión para que lo sostuviese, o por no habersele dado mayor amplitud para que hallasen cabida dentro, no tan solo los cursos escolares, es decir, la comunicación científica elemental, sino también las conferencias, esto es, las investigaciones originales y los estudios superiores; y por otras causas que sería prolijo enumerar», según Costa²⁷. «Los padres católicos —confesaría uno de los profesores— prefieren enviar sus hijos a la Universidad, donde diariamente había una asonada... Los ensayos que se hicieron en otras partes no fueron más afortunados que los de Madrid.»

Hasta aquí llegó la Asociación de Católicos en España, a lo sumo ascendente hasta 1877. «Verificada la restauración de la Monarquía, una gran parte se cruzaron de brazos... La mayor parte de las Juntas de provincias se deshicieron, otras se negaron a contestar a la Junta Superior, y vivieron y aún viven aisladas» en 1889: así las de Valencia, Barcelona, San Sebastián, Zaragoza, Jerez²⁸.

En el 89, existía aún también la de Terrassa y algunas delegaciones de la de Madrid en pueblos de su provincia, que, con la capital, sostenía 23 escuelas parroquiales con unos 3.000 alumnos de toda edad y sexo como única actividad. El presidente de la Junta Provincial madrileña, Vicente de

la Fuente, propuso entonces, en su memoria sobre la Asociación ante el I Congreso Católico Nacional, la reelección de la Junta Superior, que no existía desde que, a la muerte de Mirabel, nadie quiso tomar la presidencia. Pero no tenía tanto sentido ahora. De este mismo congreso había de nacer una Junta Central que abarcaba los objetivos de aquella.

A partir de 1898, no hallamos datos que demuestren la subsistencia de la Asociación ³⁰.

Más duradera fue la Juventud Católica, movimiento coetáneo y paralelo, que había de inscribirse expresamente, como organización, ya en nuestra centuria, en el marco omnicomprendivo de la Acción Católica. La Juventud inauguró en Madrid sus actividades el 6 de enero de 1869, como «academia científico-literaria, compuesta exclusivamente de jóvenes católicos resueltos a defender la unidad religiosa en España, cualesquiera que sean las opiniones meramente políticas que cada uno profese» ⁴⁰. Parecía alentada por miembros de la Asociación —Vinader, Cándido Nocedal, Carbonero y Sol ^{40 b}— y relacionada con esta: uno de cuyos colaboradores, el filósofo Ortí y Lara, cedió aún en el 70 la dirección de su revista *La Ciudad de Dios* a otro miembro de la Asociación y de la Juventud, Aureliano Fernández Guerra, para que fuese órgano de este último movimiento ⁴¹. El propio Brieva y Salvatierra figuraría entre sus socios fundadores ^{41 b}.

Su actividad se ciñó a la organización de academias locales, donde se impartían enseñanzas cristianas, a la promoción de certámenes literarios y a prestar su concurso a entidades e iniciativas de todo tipo. «Las secciones de 'Fomento y desarrollo de asociaciones católicas'; de 'Enseñanza de las clases pobres', de 'La Prensa', y de 'Planteamiento y práctica de obras de caridad, culto y beneficencia' pertenecientes a la 'Comisión de propaganda' —resumía la Juventud barcelonesa en 1877, ejemplificando su cometido— han conseguido respectivamente fundar o reinstalar varias Academias de la Juventud católica en Cataluña y remover obstáculos que se oponen a la creación de otras; echar las bases para establecer Círculos católicos de obreros; apoyar con todas sus fuerzas la Asociación reparadora de Pío IX y las Conferencias de San Vicente de Paul; sostener escuelas gratuitas diurnas, nocturnas y dominicales para las clases menesterosas, a las cuales asisten más de trescientos alumnos de todas edades... Se han repartido hojas y folletos de propaganda en número extraordinario, se ha cooperado a las peregrinaciones... Las Secciones de 'Derecho', 'Industria y Comercio', 'Bellas Artes' y 'Médico-Farmacéutica', dedicadas constantemente a los estudios de sus ramos respectivos, han dado excelentes trabajos de aplicación práctica para la vida católica» ⁴².

Seguía, en definitiva, el ejemplo inicial de la Sociedad suiza de estudiantes católicos, nacida ante la supresión de conventos decidida por el Gobierno Aarau en 1841, y el patrón de la *Società della Gioventù Cattolica Italiana*, creada en 1868, a raíz, como la Asociación, del I Congreso de Malinas ⁴³.

La expansión de la Juventud española fue especialmente clara en Cataluña. Al menos existía en 1869 en Madrid, Granada, Salamanca, Sevilla ^{43 b}, en 1870 en Barcelona y Pamplona, en el 71 en Igualada, en el 72 en Alcoy, Santa Coloma de Queralt, Seu d'Urgell, Mataró, Sabadell, Vilano-

va i Geltrú, Manresa, Valencia, Alicante, Córdoba, León..., en 1874 en Albox de Almería. Detenida por las «críticas circunstancias» de la revolución en el 73, reanudó o inició su actividad en 1876 en Barcelona, Vilanova i Geltrú, Sabadell, Manresa, Solsona, Berga, Tarragona, Badalona..., en el 77 en Valladolid, Sevilla, León, Santiago, Córdoba, Sarriá..., en el 78 en Girona, Manlleu, Terrassa, San Hipólito de Voltregá, Centelles, Vilafranca del Penedés; en el 79 en Castelltersol y Molins de Rey; en el 80 en Vic y Valencia; en el 81 en Ulldecona, en el 82 en Seu d'Urgell, en el 83 en San Feliú de Torelló, en el 85 en San Andrés de Palomar, Lérida, Figueras, Bañolas, Canet de Mar, Tortosa... En 1878, el Consejo Central de la Juventud Católica había convocado su primer Congreso General en Madrid ⁴⁴.

116

Rel. 1/1/E+ 1875, bula ent x USSIA/1875-14
1876, aut. M. BARBERINI

2. La Unión Católica: acción legal

30

1875/14

Si la Asociación de Católicos apuntaba quizás a la recuperación de la sociedad por el individuo, la Restauración alfonsina y su legislación antirrevolucionaria inicial impulsaron tal vez un nuevo planteamiento para la defensa de la Iglesia frente al liberalismo, que pretendían estos movimientos. Fracasado el carlismo en guerra para unos, los activistas volvieron a buscar cauces legales, al amparo o en contra de la propia moderación del sistema vigente: sin el apoliticismo, por tanto, de la Asociación de Católicos.

«Organización legal», pedía ya en 1876, recogiendo una inquietud latente en las fuerzas vivas confesionales, el presbítero catalán Sardá i Salvany: «bajo la alta dirección del Papa y de nuestros Prelados, al amparo de la misma ley que dentro [de] la libertad de cultos debe proteger nuestro derecho...: organización con jefes conocidos, con reglamento y reuniones debidamente autorizadas, sin otros fines que el de la mayor gloria de Dios, el provecho de las almas y la defensa y propagación del Catolicismo» ⁴⁵. Organización, sin embargo, que también podía dirigirse hacia la aceptación del liberalismo como «hipótesis» circunstancial, conforme a la interpretación del *Syllabus* formulada por Dupanloup años antes ^{45 b}.

A decir verdad, aquel documento pontificio, publicado en 1864 como apéndice a la encíclica *Quanta cura*, anatematizaba los presupuestos doctrinales filosóficos del pensamiento liberal, en donde había fundado el nuevo régimen las llamadas libertades democráticas. Pero el *Syllabus* no condenaba las libertades en sí mismas, y, por tanto, hubieran sido susceptibles de ser defendidas a partir de principios distintos. Tal posibilidad no parece fuera realizada nunca, en el XIX español, con verdadera fuerza. La admisión de las inevitables instituciones nuevas hubo de ser fundada por tanto por los más tolerantes en aquella doctrina de la licitud de aceptarlas solo como *hipótesis* circunstancial, sobre la base de que la *tesis* católica —la rigurosamente ortodoxa— era la que condenaba sin duda tales instituciones. Era a la implantación de esta *tesis* a la que había que aspirar como meta remota (según los tolerantes) o inmediatamente (según los intransigentes, que por eso tildaban de heterodoxos a los anteriores).

Alejandro Pidal y Mon, heredero de dos familias de raigambre moderada en la primera fila de la política de Isabel II, configuró desde esa perspectiva el primer gran intento. Conservador en las Cortes de 1879 ⁴⁶,, s bien cercano al ideario tradicionalista como reacción ante la revolución septembrina, aun cuando nunca fuera carlista ⁴⁷, el político asturiano sintetizó su bandera de transacción en el discurso del Congreso del 16 de junio de 1880, desarrollado en un debate sobre la coyuntura gubernamental creada por la aproximación al poder de los constitucionales de Sagasta. La llamada resultaba oportuna por ello y por el deseo de participación en la lucha política manifestado por un sector legitimista frente a la neutralidad requerida por Cándido Nocedal. Pidal convocó entonces a la unión frente al peligro revolucionario que podía reverdecer en aquel Partido Constitucional (formado por hombres procedentes del sexenio revolucionario precisamente, que ahora pretendían regresar al poder bajo Alfonso XII), a conservadores, moderados y «honradas masas» carlistas, para luchar «al amparo de la legalidad», con frases conciliadoras que animaron una violenta queja en las minorías liberales del Congreso.

En enero del 81, desde un periódico legitimista, *El Fénix*, hizo realidad su propósito al reunir firmas de filiación dinástica distinta en un mensaje de adhesión a monseñor Freppel, por su reciente protesta contra la legislación anticlerical de la III República francesa. El acto fue desautorizado en *El Siglo Futuro* por Nocedal, representante máximo de Carlos VI en la península, tanto por lo que en el escrito tendía «evidentemente a desorganizar y deshacer el partido en España» como por «la mezcla de firmas» que había en él ⁴⁸ y que implicaba convivencia con el liberalismo. Y, en adelante, *El Fénix* y *La Fe*, que predicaba la moderación, de una parte, y *El Siglo* de otra sembraron la división en el frente del rey proscrito.

Todavía en enero, *La Fe* se retractó, amonestada por don Carlos, que ratificó su confianza a Nocedal. Y *El Fénix* cesó en diciembre ⁴⁹, cuando el grupo que lo alentaba, la Unión Católica, comenzaba a ser nueva organización.

Su creación tomó estado parlamentario el 16 de enero de 1881. Instado por el liberal Muros, Pidal justificó en las Cortes «su nueva actitud» ⁵⁰. Sin negar ni afirmar su disidencia del conservatismo, aclaró que el movimiento que venía gestando no era político, sino «unión de todos los españoles ... para la defensa de los intereses católicos de la Nación» ⁵¹. Volvió, por lo tanto, el fin omnicompreensivo de 1868: crear un cauce para la acción confesional de los laicos en circunstancias que se consideraban desfavorables para la Iglesia.

Y en efecto, según sus *Bases*, fechadas el 29 de enero de 1881, la Unión Católica, así creada, se cñó al esquema de la Asociación de Católicos (de cuyos miembros el marqués de Mirabel, León Carbonero y Sol, el conde Orgaz, León Galindo de Vera y Juan Manuel Ortí y Lara ⁵² figuraron entre los promotores de la nueva entidad). Nació esta con el «único y exclusivo objeto ... de procurar la unión de los católicos que quieran cooperar, por los medios legales y lícitos, a los fines religiosos y sociales» del movimiento, que eran: «favorecer, en lo que sus fuerzas alcancen, el establecimiento

o desarrollo de las obras y asociaciones de la Propagación de la fe y Dinero de San Pedro, Asociación de católicos, Juventud católica, Círculos de obreros y otras análogas; auxiliar con sus servicios en la Corte a los Párrocos y Juntas locales para lograr el pronto y favorable despacho de los expedientes de reparación de templos, y buscar recursos para auxiliar a los referidos párrocos cuando se trate de reparación de templos hecha por suscripción particular; auxiliar a las Ordenes religiosas y procurar recursos a los señores Obispos para el sostenimiento en los Seminarios de los jóvenes pobres que deseen seguir la carrera eclesiástica».

Con finalidad, pues, en nada política («la *Unión católica* no responde ni se hace solidaria de los actos de ninguno de sus individuos, sino sólo de aquellos que practiquen por encargo o de acuerdo con la Junta superior directiva», según el mismo documento), sería su presidente el arzobispo de Toledo, entonces menseñor Ignacio Moreno, cuya firma rubricó estas *Bases*. Le auxiliaría la Junta Superior Directiva, formada por los promotores de la agrupación (los cuatro primeros de los antes citados, con el primado, Pidal y los condes de Guaquí y Canga-Argüelles) y quien la propia Junta tuviera a bien nombrar. Comprometía su ortodoxia en aceptar «íntegramente las enseñanzas y doctrinas de la Iglesia, tales como aparecen más especialmente consignadas para este caso en la encíclica *Quanta cura* y en el *Syllabus* que la acompaña, entendido, explicado y aplicado como lo entienden, explican y aplican la Santa Sede y los Obispos»: plenamente antiliberal, por tanto, en principio ⁵³.

El apoliticismo de estos términos fue puesto de relieve por sus detractores confesionales como futuro compromiso. Todavía el cardenal Moreno insistió en ello al constituir la Unión en su archidiócesis oficialmente: «Para nada se mezcla el llamado fin político en reunión tan escogida: el único y principal objeto de ella es el interés de la Religión, sin que para esto se ponga el asociado en la dura necesidad de prescindir de sus opiniones políticas, ni se le priva de que pueda trabajar para la realización de ellas» ⁵⁴.

Los recelos que suscitara, como órgano considerado liberal, se exteriorizaron aún en la prudencia de León XIII antes de autorizar sus fines. En carta de 3 de marzo de 1881 el secretario de Estado, Jacobini, respondía al mensaje del cardenal Moreno al Papa para impetrar la aprobación de las *Bases* que «Su Santidad no podía menos de experimentar la impresión más favorable al conocer cuáles sean los pensamientos que tan notables personajes se proponen llevar a cabo con la nueva Sociedad... Mas antes de emitir juicio sobre asunto de tanta importancia, anhela el Padre Santo enterarse exactamente de todo lo que se refiere a la Unión naciente, la cual ha llamado ya la atención no sólo en España, sino también en otros países» ⁵⁵. En su sanción definitiva, aún en marzo, León XIII insistió en los lugares de las *Bases* que podían eliminar el temor a la heterodoxia. Alababa el Pontífice los empeños benéficos y propagandísticos de la Unión, su adhesión a la doctrina católica hasta la exclusión de los socios que la incumplieran y, especialmente, el compromiso de obedecer a los prelados, que había de ser «sin acepción de personas» ⁵⁶.

De hecho, sin embargo, pese a la insistencia de Pidal en la afirmación de la neutralidad política del grupo, los esfuerzos de transacción con la legalidad vigente de sus miembros debieron de provocar una primera escisión y contribuyeron a reavivar, sobre todo en 1882, la polémica entre *El Siglo Futuro*, cuya postura ya era denominada «integrista»⁵⁷, *La Fe y La Unión*, nuevo órgano pidaliano.

En diciembre de 1881, el carlista Nocedal quiso canalizar por medio de una peregrinación multitudinaria a Roma la fuerza de la protesta surgida en todo el mundo católico ante las ofensas inferidas en julio al cadáver de Pío IX. Pero León XIII acogió la idea como «romería, de carácter pura y exclusivamente católico»⁵⁸. Y lo propio hizo el episcopado español, en muchos casos insistiendo de manera expresa en tal apoliticismo. En enero del 82, sobre todo, los prelados de la provincia eclesiástica de Tarragona, a excepción del de Urgell, suscribieron su adhesión al proyecto con dos condiciones: que los obispos fueran «guías efectivos de la peregrinación y no meramente nominales» y que fuese «tan pura, exclusiva y completamente católica o religiosa, que no tenga de política ni la más remota apariencia». Había, por el contrario, de ser muestra de unión. Y para ello era preciso «que redactada por el eminentísimo y reverendísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo un acta de verdadera reconciliación y de sincera concordia entre los tres conocidos periódicos de Madrid, que representan otras tantas fracciones de las principales en que están por desgracia y por accidentales cuestiones divididos ... los católicos de esta nación, la firmen los respectivos Directores y la acepten los periódicos de provincias, adictos a cada uno de aquéllos»⁵⁹. Lo exigían así por las «cuestiones y discordias» introducidos en los preparativos⁶⁰. Pero, un mes más tarde, la Junta Central organizadora se disolvió. Aconsejaba en nombre del Papa la celebración de romerías diocesanas, en vista del diverso criterio expresado por los obispos a la hora de constituir las Juntas respectivas⁶¹.

En adelante, mantenido el enfrentamiento entre Unión e integrismo, las manifestaciones papales comenzaron a teñirse en España del obsesivo tono de concordia que caracterizaría todo su pontificado. «Nós quisiéramos —dijo en octubre de 1882 a los peregrinos de la diócesis de Toledo— que los católicos españoles estuvieran todos concordes y se dieran la mano recíprocamente para defenderlos [los intereses religiosos], promoverlos y procurarlos ... en una santa concordia de pensamientos y de acción, para oponerse a la incredulidad e impiedad que prevalecen.» «Nós no deseamos nada tanto —insistía en noviembre a los de Zaragoza— como que los católicos de España, dejando a un lado las aspiraciones de partido y calmando sus disentiimientos, hagan converger todo su celo y todos sus esfuerzos a la defensa de la causa religiosa y a la salvaguardia de los principios fundamentales de la sociedad. Por esto pedimos ardientemente a Dios que todos estén unidos en una misma fe, en la armonía de las voluntades, en el celo de la Religión y en el cumplimiento de los deberes recíprocos entre los que mandan y los que deben obedecer»⁶².

Así esbozado el *ralliement*, que luego caracterizaría también su pontificado, el 8 de diciembre el propio León XIII fechaba la encíclica *Cum multa* dirigida a la Iglesia peninsular; «habiéndose puesto de por medio las pa-

iones de partido —decía—, se descubren huellas de desuniones, que dividen los ánimos como en diferentes bandos y perturban no poco aun a las mismas asociaciones fundadas por motivo de religión. Sucede a menudo que los que investigan cuál es el modo más conveniente para defender la causa católica, no hacen de la autoridad de los obispos tanto caso como fuera justo. Aún más, a veces si el obispo ha aconsejado algo y aun mandado según su autoridad, no faltan quienes lo lleven a mal o abiertamente lo reprendan, interpretándolo como si hubiese querido dar gusto a unos, haciendo agravio a otros».

Contra el integrismo, advertía «la equivocada opinión de los que mezclan y como identifican la religión con algún partido político, hasta el punto de tener poco menos que por separados del catolicismo a los que pertenecen a otro partido. Esto en verdad es meter malamente los bandos en el augusto campo de la religión, querer romper la concordia fraterna y abrir la puerta a una funesta multitud de inconvenientes».

Era preciso, pues, «callar por un momento los pareceres diversos en punto a política, los cuales, por otra parte, se pueden sostener en su lugar honesta y legítimamente. Porque la Iglesia no condena las parcialidades de este género, con tal de que no estén reñidas con la religión y la justicia».

«El fundamento de esta concordia —aclaraba, con frase que llegaría a ser tópica— es en la sociedad cristiana el mismo que en toda república bien establecida: a saber, la obediencia a la potestad legítima» y, por tanto, en la Iglesia y en cada diócesis, a los prelados ⁶³.

En mensaje colectivo al Papa (en cuyas firmas faltó la del intransigente e inquieto obispo Lagüera, de Osma), el episcopado español acató esta doctrina. Con ello pretendía negar, decía, la división ante la encíclica que se había querido ver en la jerarquía peninsular ⁶⁴. Pero la intervención pontificia no apagó la polémica. Dejaba en realidad sin resolver el pleito doctrinal sobre la ortodoxia o heterodoxia de colaborar con el liberalismo, incluso como mera *hipótesis* circunstancial, y, por ello, venía a exhortar a la unión católicos cuando se discutía aún quiénes lo eran.

Parece que elementos integristas corrieron el rumor de que León XII había enviado instrucciones secretas a los prelados contrarios a los términos de su propia encíclica ⁶⁵, que había sido generalmente interpretada como amonestación a los mismos íntegros. Tras la *Cum multa*, lamentaría el arzobispo de Valencia, Antolín Monescillo, en mayo de 1883, los debates «siguieron y continúan de un modo y con entonación tan desusada entre los católicos, que ha dado motivos de pena y causado extrañeza dolorosa en el ánimo del atribulado Pontífice» ⁶⁶. En Cataluña, la jerarquía, que volvió a insistir colectivamente en la necesidad de la unión y el respeto a las opiniones políticas ⁶⁷, hubo de condenar varios periódicos carlistas (*La Vespa*, *Lo Bon Catolich*, *Lo Martell*, *La Bandera Católica*, *Lo Bon Cristiá...*) por ofensas a la autoridad eclesiástica y manifestaciones o prácticas contrarias a la subordinación exigida por la encíclica ⁶⁸.

Por su parte, Pidal acudió a Roma para fijar su posición. Y León XIII aconsejó a él y sus seguidores «engrosar el partido más afín», el Conservador, «no permaneciendo inútiles y estériles para el bien» ⁶⁹. El mismo

criterio expuso León XIII en reunión con el nuncio Rampolla, el secretario de Estado Jacobini y el primado cardenal Moreno: El Papa —resumiría un apunte sobre esta entrevista conservado por Pidal— «quiere la Unión Católica tal como la instituyó en su Breve... y que en todo caso no se atribuya a él su disolución». El nuncio y Jacobini deseaban también que subsistiera. Pero Rampolla advertía «que, dado el estado de las cosas, el clero no puede salir de la órbita religiosa, ni aun en procedimientos, sin desprestigiarse a los ojos de unos o de otros». En conclusión resumía por su cuenta el apunte (en términos que admitían implícitamente la intención política de la Unión, contra lo que sus *Bases* prometieran).

«I. La Unión Católica es imposible desde el momento que el Papa y los obispos que la aprobaron y bendijeron no cooperan, sea por lo que sea, a su realización y desarrollo como instrumento social.

II. El Centro Católico, a imitación del alemán, y dejando aparte a los obispos, no es posible desde el momento en que los católicos andan tan divididos respecto a principios y medios para el triunfo de la religión en la sociedad.

III. La acción individual es estéril.

IV. El retraimiento es culpable.

V. Solo resta, teniendo presentes los anteriores datos, introducirse en el Gobierno político posible, menos malo, y allí, sin cooperar a mal alguno positivo, tolerando lo que sea tolerable, procurar el mayor bien posible y evitar en la medida de las fuerzas de cada uno el mal mayor que nos amenaza. Esto es lo que se desprende de la Doctrina de la Iglesia y de Santo Tomás, y de la tesis escolástica, y de la hipótesis que estamos tocando»^{a b}.

Un mes más tarde de su viaje a Roma, en enero de 1884, Pidal entraba a formar parte, como ministro de Fomento, de un gabinete conservador canovista. Al parecer la iniciativa partió de Alfonso XII, que vino a coincidir así o a aprovechar el resultado, oído de labios de don Alejandro, de las entrevistas en Roma. Pidal había afirmado anteriormente, se dijo, que «se cortaría la mano antes de ser ministro con el señor Cánovas»⁷⁹. Ahora lo era expresamente «para allegar más activamente elementos conservadores y para representarlos»: porque, según palabras de Pidal al rey, «del estudio y balance que tengo hecho de las fuerzas y organismos existentes, ninguno se acerca a representar con más fuerza y eficacia lo que represento en estos momentos que el partido conservador».

La Unión Católica, en suma, fracasaba como entidad autónoma. Pero la solución de enrolarse en la situación tampoco había de complacer a los integristas, siempre en contra de la colaboración con el liberalismo. La respuesta de estos fue ahora más resonante. En el 84 aún, aparecía en forma de libro una colección de artículos del integrista Salvá i Salvany llamada a ser famosa y leída muy entrado en siglo xx: *El Liberalismo es pecado*⁷¹, que, si no concebido como tal en principio, había de convertirse pronto en «programa de su acción católica» para esa facción radical del carlismo⁷².

El opúsculo de Sardá repetía el concepto de liberalismo contenido en el *Syllabus*, interpretándolo, no obstante, en sentido analógico, y repetía también las condenas pontificias contra el catolicismo liberal, que veía reencarnado en la Unión Católica. Urgía la formación de un «partido católico, sea cualquiera el otro apellido que se le de», para defender a la Iglesia. Mas no sería tal, advertía, «ni aceptable en buena tesis para católicos, mas que el que profese y sostenga y practique ideas resueltamente antiliberales. Cualquier otro, por respetable que sea, por conservador que se presente, por orden material que proporcione al país, por beneficios y ventajas que *accidentalmente* ofrezca a la misma Religión, no es partido católico desde el momento en que se presenta basado en principios liberales, u organizado con espíritu liberal, o dirigido a fines liberales».

Tampoco era aceptable la aplicación a España de la doctrina de la *tesis* e *hipótesis*, «que tanto ha sonado en estos tiempos», a la hora de interpretar el *Syllabus*. Se podría acudir a ella en «el caso hipotético de una nación o Estado donde, por razones de imposibilidad moral o material, no puede plantearse francamente la *tesis* o el reinado exclusivo de Dios, siendo preciso que entonces se contenten los católicos con lo que aquella situación hipotética pueda dar de sí». Pero en España, según el censo de 1877, había apenas 30.000 acatólicos entre sus 16.600.000 de habitantes. No se daba, por tanto, la imposibilidad requerida.

El opúsculo no pudo conformar la línea transaccionista abrazada por León XIII. En marzo de 1884, el cardenal Jacobini había exhortado a Sardá a seguir en su obra periodística de propaganda, pero «teniendo en cuenta la necesidad siempre creciente de cimentar la concordia entre todos los católicos en el fomento de las buenas obras, bajo la dirección y dependencia de los propios Pastores»⁷⁷. En septiembre, no obstante, el presbítero catalán insistía en su desacuerdo «con los que profesando con sola la boca el *Syllabus* le niegan con sus obras; con los que a sí propios se declaran profesos de un Liberalismo más o menos mitigado, pero siempre Liberalismo; con los que aceptan como base perfectamente legal la tolerancia de cultos y el racionalismo de la enseñanza; con los que no tienen una palabra de protesta en favor de los derechos temporales del Papa»⁷⁸. La presencia de Pidal en el Ministerio daba, efectivamente, motivo al ataque.

En junio y julio de 1884, en el debate sobre la respuesta al discurso del trono, el tema había tomado plaza parlamentaria. Forzada por interpelaciones liberales, Pidal llegó a afirmar que, si en 1876 había defendido la *tesis* católica frente a la tolerancia de Cánovas al discutir el artículo 11, ahora, «por desgracia», la *hipótesis* era una realidad en la Constitución vigente, que le exigía adoptar una postura transaccionista. Cánovas se esforzó para emparentar el fondo tradicionalista de este discurso, incluso su desprecio de la soberanía nacional, con la ortodoxia liberal conservadora⁷⁹. Pero, atacado nuevamente por Castelar, el ministro de Fomento debió aludir en el mismo debate al poder temporal de los Papas, arrebatado por quienes quizá calificó —no lo transcribiría el *Diario de las Sesiones*— «reyes del Piamonte». Ante la protesta de la embajada italiana por el tono empleado, el Gobierno hubo de responder, por vía diplomática, «que habién-

dose dirigido ciertos ataques al ministro de Fomento por haber defendido en otro tiempo el poder temporal, que hoy nadie discute, y que ni directa ni indirectamente es objeto de debate en España, el ministro ... defendió su conducta de otro tiempo, declarando, sin embargo, que aquellas opiniones suyas nada tenían que ver con el respeto que merece por su parte, y por parte de todo el gabinete, el estado de cosas, universalmente admitido, del derecho internacional vigente»⁷⁶.

En numerosos escritos, la jerarquía eclesiástica cerró ahora contra la aclaración de Cánovas, repetida en las Cortes⁷⁷, por lo que contenía de reconocimiento del estado internaciona^l del reino de Italia, creado sobre la destrucción de la independencia de los Estados Pontificios. Los prelados de la provincia burgalesa, además, advirtieron en su protesta la afirmación del jefe del Gobierno, en el mismo discurso, de la renuncia a la unidad católica que suponía en la Unión y en Pidal la presencia del éste en el Ministerio. Se oponía, dijeron, a la doctrina de la Iglesia. Lo que era llamativo en una asociación, la Unión Católica, que había nacido con un fin religioso⁷⁸ y que se había definido apolítica.

En octubre del 84, ante Pidal como ministro de Fomento, el catedrático de la Universidad de Madrid Miguel Morayta alabó la libertad de cátedra en el discurso inaugural del curso académico. Y de nuevo el episcopado en pleno, a partir del prelado de Avila, Sancha, condenó sus palabras en términos que interpretó la prensa integrista como recriminación al ministro que las había autorizado implícitamente con su presencia. El hecho dio pie incluso al enfrentamiento del obispo de Tarazona con Pidal, que juzgó la correspondiente lamentación obra de «un venerable, achacoso y anciano Prelado, privado casi del uso de los sentidos»⁷⁹.

En realidad, los roces con el episcopado no hacían sino reflejar el relativo estancamiento del empeño de la Unión Católica, cuyo inicial esfuerzo neutralista parecía ciertamente abandonado desde el principio. Permanecía en último término, pese a las disensiones entre integrismo y jerarquía, cierto temor al abandono de la tesis católica. Era éste, por lo demás, otro posible modo de encauzar la acción defensiva de la Iglesia, como pretendía hacer ver monopolísticamente la misma facción radical del carlismo.

En noviembre de 1884, León XIII volvía a acentuar su afán de colaboración con los regímenes liberales en la encíclica *Inmortale Dei*. Sin ceder punto en la condena de su filosofía, afirmaba no obstante que «hablando en general es bueno y conveniente que la acción de los católicos salga de este estrecho círculo a campo más vasto y extendido, y aun que abrace el sumo poder del Estado». No para «aprobar lo que en el día de hoy hay malo en la Constitución de los Estados, sino para convertir eso mismo, en cuanto se pueda, en bien sincero y verdadero del público, estando determinados a infundir en todas las venas del Estado, a manera de jugo y sangre, vigorosísima, la sabiduría y eficacia de la Religión católica».

Para ello era preciso «conservar, ante todo, la concordia de las voluntades y buscar la unidad en los propósitos y acciones, lo cual se obtendrá sin dificultad si cada uno toma para sí, como norma de su vida, las prescripciones de la Sede Apostólica, y se obedece a los Obispos»⁸⁰.

La prensa integrista silenció frecuentemente la encíclica o su contenido⁸¹, que apuntaba en verdad directamente contra el abstencionismo predicado por *El Siglo Futuro* incluso frente a las pretensiones de configurar una oposición carlista legal.

Su actividad encontró un penúltimo apoyo en la jerarquía. En enero de 1885, planteada en las Cortes la trascendencia del conflicto entre Morayta y el episcopado, por el discurso de octubre anterior, y su secuela de manifestaciones estudiantiles anticlericales, sobre todo en la Universidad de Madrid. Cánovas afirmó la decisión del Ministerio de no secundar las condenaciones doctrinales de los obispos contra el catedrático con la expulsión de los profesores afectados, a semejanza de lo realizado en la «segunda cuestión universitaria» de 1875 por su propio partido⁸². Y el obispo de Plasencia, Casas Souto, comentó sus palabras en una pastoral cuajada de improperios contra el Estado (e implícitamente contra la posibilidad de aceptarlo): porque «jamás dio, da ni dará ninguna satisfacción y reparaciones a la religión y sentimientos católicos de los españoles, por amor a la Iglesia, por respeto a los derechos conculcados, porque así lo exija el deber y la justicia; . . . sino impulsado por egoísta y frío cálculo, por el interés de que se sostenga, prospere y triunfe la política liberal, *esencialmente hostil al catolicismo*»⁸³.

Acuciado por los republicanos⁸⁴, el Gabinete protestó oficialmente contra este escrito en Roma. Antes, el Vaticano ya había amonestado al obispo extremeño en carta que le dirigió el secretario de Estado: por «la forma poco serena» de su pastoral, que le daba «cierto carácter de manifestación política», contraría a «las amistosas relaciones, que atenta siempre a realizar los fines de la Iglesia, mantiene la Santa Sede con el Rey Católico»⁸⁵.

El carlismo combatió esta reprobación de modo explícito: «la tal declaración [de Roma] —advirtió un diario integrista— no era más que una apreciación particular de Monseñor Rampolla o Monseñor Jacobini, funcionarios políticos ambos, que no pueden tener en ningún caso fuerza ninguna contra una Pastoral»⁸⁶. El desliz canónico que estos términos implicaban tomó cuerpo enseguida, a raíz de la supuesta intervención del nuncio en Madrid, Rampolla, para lograr que el obispo de Puerto Rico renunciase, conforme a los deseos del Papa, a una interpelación senatorial anunciada al Gobierno sobre estas cuestiones. El 9 de marzo de 1885, *El Siglo Futuro*⁸⁷ publicaba un polémico artículo, «La misma cuestión», donde advertía la diversidad del ámbito de jurisdicción de nuncios y obispos. Meros representantes diplomáticos del Papa ante el poder civil aquellos, correspondía a estos la verdadera tutela de la religión, realizada además según dictados de su propia conciencia. Y a los obispos habían de obedecer, por tanto, los fieles —según repetían realmente las manifestaciones pontificias últimas.

En despacho oficial dirigido a Rampolla, el secretario de Estado, Jacobini, subrayó la heterodoxia de estas afirmaciones: porque olvidaban la obligación de los prelados de someter sus órdenes a los deseos del Papa y el derecho de este a dirigirse libre y directamente a sus súbditos, o a través de legados⁸⁸. Todavía Nocedal y el autor del escrito, Francisco María de las Rivas, silenciaron la retractación que se les pedía, hasta hacerla pú-

blica el 27 de abril, ante la amenaza del nuncio de llevar el asunto otra vez a Roma.)

La prensa integrista rechazó que hubiera habido condenación por parte de la Santa Sede (en el fondo insistiendo en reducir la autoridad de nuncio y secretario), ni mucho menos excomunión de Nocedal, como parece que llegó a escucharse en las calles de Madrid⁸⁸, seguramente al vocear los periódicos alfonsinos. «Creemos —afirmó incluso *El Correo Catalán*— que vendrán aclaraciones que devuelvan la tranquilidad a tantas conciencias como estas perturbaciones le quitan, y eviten el escándalo que causa a los débiles la apariencia de que los católicos prácticos son censurados y condenados por la Iglesia»⁸⁹.

Aún en mayo del mismo año 85, el diario de Nocedal publicó la carta del cardenal Pitra al director de *L'Amstelbode*, donde afirmaba el purpura do implícitamente la paralización del movimiento de renacimiento católico tras el pontificado de Pío IX (y la debilitación de la Iglesia, por tanto, bajo el de León XIII). El arzobispo de París, Guibert, protestó, también de modo implícito, en carta de adhesión al Papa. Pero este documento, la respuesta del Pontífice aprobándola y la retractación de Pitra, que negó su intención de menospreciarlo, tuvieron eco desfavorable, o no lo tuvieron, en la prensa del integrismo: «unos —escribió el obispo de Vic— ni siquiera han dado cuenta de tales documentos; otros los han insertado sin comentario alguno ...; otros se han permitido hacer sobre la carta del Papa, sobre su intención, sobre su alcance y su importancia, observaciones abiertamente contrarias a su significación»⁹⁰.

En realidad, estos sucesos no hacían sino exteriorizar el paulatino enrarecimiento de la postura integrista (ciertamente más temprano de lo que suele afirmarse), progresivamente desplazada de la línea política del pontificado y por eso mismo desamparada de la tutela jerárquica. Simbólicamente, en el invierno, «razones muy graves» habían movido al obispo de Urgell, Casañas, único del episcopado catalán que amparaba aquella fracción, a someter a examen de teólogos *El Liberalismo es pecado*, que él mismo había ensalzado en su aparición.

Aunque en febrero de 1885 los censores certificaron no sólo la ortodoxia sino la oportunidad del libro⁹¹, en el verano un presbítero del Principado, don Celestino Pazos, publicó un opúsculo de rectificación al de Sardá y Salvany, que había de tener más éxito que las anteriores diatribas, quizá por las tensiones coetáneas o por la calidad del autor, canónigo de Vic entonces, enseguida deán de Tortosa.

En *El proceso del integrismo*, con dureza no exenta de finura, Pazos desmontaba explícitamente la argumentación de Sardá contra la Unión Católica. No cabía culparla, decía, de catolicismo liberal, tal como estaba definido en la Iglesia. La asociación se había limitado a trabajar de acuerdo con el Papa: pero no sólo con León XIII, sino con el propio Pío IX, quien, en la alocución *Luctuosus* de 12 de marzo de 1877, había pedido «que los Obispos exciten a sus respectivos diocesanos a que del modo y por el medio que permitan las leyes de cada país, trabajen con empeño cerca de los que gobiernan»⁹².

Por lo demás, la Unión cumplía la doctrina más ortodoxa, incluido el

Syllabus, puesto que aceptaba la condena de la *tesis* liberal; y ni ofendía a los obispos ni había recibido las amonestaciones que el integrismo padecía —y enumeraba Pazos— en los últimos años.

En diciembre del 85, 24 prelados reunidos en Madrid para asistir a los funerales de Alfonso XII (los de Toledo, Zaragoza, Valencia, Valladolid, Granada, Jaca, Orihuela, Madrid-Alcalá, Cádiz, Córdoba, Málaga, Almería, Cuenca, Jaén, Barcelona, Sigüenza, Teruel, Zamora, Calahorra, Salamanca, Santander, Cartagena, Murcia y Ciudad Rodrigo) se pronunciaron, quizá por vez primera colectivamente, también contra la intransigencia. De acuerdo con la *Inmortal* Dei, declaraban «como asunto que es de actualidad, especialmente en varias de nuestras diócesis, que si bien la política debe basarse sobre la Religión, ... la Religión y la política son, sin embargo, cosas muy distintas y que jamás deben confundirse; y que, salva la unidad en la fe y en los principios católicos, puede con toda licitud sostenerse controversia, como dice nuestro Santísimo Padre, sobre la mejor clase de gobierno, sobre tal o cual forma de constituir los Estados, y puede haber sobre ello una honesta diversidad de opiniones».

Ninguna publicación, por tanto, «tiene la misión de calificar y menos de definir, si tal o cual teoría u opinión cabe o no dentro de la doctrina católica». Lo harían los obispos. Y a estos habrían de sujetarse enteramente los periódicos que quisieran titularse católicos. En las polémicas, todos deberían de recordar «las reglas prescritas por la caridad cristiana»⁹³.

Se dijo incluso que los prelados sopesaron en la reunión madrileña la posibilidad de prohibir en sus diócesis la lectura de «cierto periódico fascinador» —sin duda *El Siglo Futuro*—, pero que no lo hicieron por «temor a una obstinación cismática»⁹⁴. La prensa liberal —*El Imparcial*, *El Resumen*, *El Globo*— juzgó el escrito episcopal, en frase del primero, «sentencia de muerte del carlismo, y sobre todo del carlismo integrista»⁹⁵. Pero los legitimistas lo eludieron (y algún obispo también). Co-tejándolo con la *Inmortal* Dei, *El Correo Catalán* concluía la urgencia «de deshacer, con la Encíclica citada en la mano, el sofisma de que en España todas las formas de gobierno pueden defenderse libremente»⁹⁶. En teoría, pues, nada se había avanzado. Aunque era sintomático que los íntegros tuvieran que encararse ahora con la propia jerarquía eclesiástica.

«Somos cohibidos», lamentaba el arzobispo de Tarragona en su mensaje a León XIII de diciembre de 1885: «se hace el vacío, como suele decirse, a nuestro derredor, y se nos ataca con la conjuración del silencio. Más aún: hay quienes erigen cátedra contra cátedra, y defendiendo lo que está reprobado por Ti, Santísimo Padre, distraen la mente de los fieles, turban los corazones y hacen vanos nuestros trabajos.»

En Salamanca, la aplicación de las amonestaciones pontificias al integrismo por el obispo suscitó una violenta campaña de la prensa carlista contra el nuevo prelado, fray Tomás Cámara, que había de acompañarlo hasta su muerte en 1904. «Lamentable cosa es —afirmó el *Diario de Sevilla* explícitamente contra este obispo— que los primeros y más obligados custodios del depósito sagrado conviertan la cátedra Santa en tribuna y vaciadero de mezquindades y rencillas políticas»⁹⁷. Y otro periódico integris-

ta llegó a proponer esta plegaria: «Por Fray Tomás, que hace mucha falta en el cielo, y aquí nos estorba» ⁹⁷ b.

En Valencia, Monescillo debió de condenar *La Ilustración Popular Económica* por evitar con reincidencia la censura eclesiástica decidida por los prelados reunidos en Madrid en diciembre de 1885. Y el vicario capitular hispalense tuvo que obligar al *Diario de Sevilla* a retractarse de las injurias dirigidas por ello al arzobispo levantino. En Burgos, *La Fidelidad Castellana*, carlista como los anteriores, recibió una conminación semejante de su prelado ⁹⁸.

Quizás a iniciativa de aquel mismo *Diario* sevillano, en medios directivos de la prensa íntegra, se llegó a sopesar la conveniencia de responder con la renuncia al carácter confesional de las publicaciones, para eludir así la tutela jerárquica. Se habló de «secularizar el partido tradicionalista» ⁹⁹ y de acudir al Papa contra las decisiones coercitivas de los obispos. Pero aquí, hubo de venir a imponer el sosiego, que comenzaba a hacerse decisivo, la propia Comunión.

3. Génesis del Partido Integrista

«Antes de acabarse el año 1885», afirmarían después los integristas había ya dentro del carlismo «muestras de oposición y antipatía a los defensores de la integridad y pureza de las doctrinas, y de inclinación y benevolencia hacia sus adversarios, ... corrientes de conciliación que amenazaban arrastrar al partido carlista por nuevos y sospechosos derroteros» ¹⁰⁰.

Para reimplantar la disciplina, Carlos VII utilizó al escritor y antiguo periodista Navarro Villoslada, cuya presencia, alejada de las luchas políticas tiempo atrás, desviaba implícitamente el eje del legitimismo lejos de *El Siglo Futuro*, dirigido ahora por Ramón Nocedal, tras el fallecimiento de su padre en julio de 1885. En principio, parece que Navarro había sido instado, aún en el 85, a oscurecer este diario con la resurrección de *El Pensamiento Español*, activo en los últimos años isabelinos —con cierto aire balmesiano, de tradicionalismo transaccionista— y en el sexenio revolucionario ¹⁰¹. En marzo del 86, no obstante, el escritor se limitó a enviar una carta a *El Siglo* y a *La Fe*, de nuevo a la cabeza del carlismo templado. En ella declaraba su carácter incidental de consejero del monarca proscrito —de sucesor de Cándido Nocedal en definitiva— y, de acuerdo con aquel, insistía en la necesidad de terminar con los ataques contra la jerarquía. «Eso de retirarse a las trincheras de la política —decía sobre la iniciativa del *Diario de Sevilla*— para sustraerse a la acción episcopal además de ser inútil y aun contraproducente, implica una especie o concepto erróneo, cual es el de suponer que la política, hija de la moral, no cae bajo la jurisdicción y magisterio de la Iglesia» ¹⁰².

La carta fue discutida por los periódicos íntegros en «memorable resistencia», que dirigieron *La Cruz de la Victoria*, *La Verdad de Santander*, el *Diario de Sevilla*, *El Intransigente* de Zaragoza y *El Correo Catalán* ¹⁰³. Lo hacían sobre todo en razón de la sumisión que se les exigía en este

último párrafo. Contra ellos, Carlos VII ratificó explícitamente el contenido de la carta. Pero el 26, y a petición del mismo pretendiente, Villoslada aclaró que no había en ella renuncia a la autonomía, porque «en el terreno de la acción política sólo a la potestad temporal incumbe dar órdenes». Tampoco había, de otra parte, ni colaboracionismo con el régimen liberal ni afán de escindir el partido ¹⁰⁴.

La aclaración fue interpretada como triunfo del integrismo. Pese a ello, el escritor ratificó la condena arzobispal de *La Ilustración Popular Económica* de Valencia en 31 de marzo de 1885 y declaró en rebeldía, en abril, *La Verdad* de Santander, por falta de respeto a la persona del monarca proscrito ¹⁰⁵. Todavía en abril, Navarro Villoslada dimitía como representante suyo, por motivo de salud. «Una sola consideración me hace más llevadero el contratiempo de verme privado de tus servicios —le escribió el pretendiente—, y es la de que la obra que especialmente te encomendé, está ya llevada a feliz remate» ¹⁰⁶. Unos meses después, reorganizaba este el carlismo español en sentido que fue juzgado autoritario por los integristas: lejos «de nuestras antiguas formas patriarcales» ¹⁰⁷. Habría en cada región un delegado del rey proscrito. Ellos serían «cooperadores para mantener incólume el principio de autoridad», «a fin de que nadie alegue ignorancia y los directores y redactores de periódicos, muy singularmente, tengan una regla fija y segura en sus escritos, ya de polémica, ya de cualquier otro género que se rocen con los principios salvadores de nuestra causa» ¹⁰⁸.

El integrismo recibió todavía un pasajero impulso al comenzar 1887. El 10 de enero, ante la «repetida denuncia a la Sagrada Congregación del Índice» ¹⁰⁹ de *El Liberalismo es pecado*, al parecer por parte de Pazos, el secretario del dicasterio, el dominico Jerónimo Pío Saccheri, comunicó al obispo de Barcelona que, examinados los escritos de ambos, la sentencia había de ser favorable al primero: «*in primo nil invenit contra sanam doctrinam, indo auctor ejusdem D. Félix Sardá laudem meretur eo quia solidis argumentis, ordine et claritate expositis, sanam doctrinam in materia subjecta proponat atque defendat absque cujuscumque personae offensione*». Sobre *El proceso del integrismo* de Pazos, en cambio, «*aliqua in re correctione indiget, et insuper approbari non potest modus loquendi injuriosus quo auctor magis contra personam D. Sardá, quam contra errores qui supponuntur in opusculo dicti scriptoris*». Ordenaba, por tanto, que el autor de *El proceso* fuera amonestado por su prelado y que fuese evitada la difusión del folleto ¹¹⁰.

Ante la consecuente agitación triunfalista de los íntegros, publicado el escrito romano por *El Correo Catalán* del 29 de enero de 1887, Pazos hubo de refugiarse en Madrid sin haber recibido aún noticia oficial de la amonestación. El 1 de abril, manifestó por eso al ~~an~~uncio Rampolla, prudentemente, su deseo de conocer las injurias que la Congregación atribuía a su libro. E insistió en ello —y en pedir que se le indicasen los errores de que también hablaba aquella sin especificarlos— el 19 y el 28 en cartas al obispo de Tortosa, una vez éste le comunicó la sentencia. Pero no obtuvo aclaración. Su mera disposición a acatar lo que se le ordenara fue aceptada por Saccheri, en nuevo escrito al ordinario levantino, en mayo, como satisfacción suficiente ¹¹¹.

La sentencia romana fue transcrita y elogiada por numerosos prelados (los de Urgell, Tortosa, Plasencia, Badajoz, Pamplona, Tarazona al menos) ¹¹² y desde luego interpretada por el integrismo como el acto más importante de todo el Pontificado de León XIII en lo relativo a la vida de la Iglesia en España», en palabras de *El Siglo Futuro* ¹¹³. Pero todavía en abril, ya habían sido dados los pasos decisivos para restablecer la línea transaccionista.

En Exposición al Pontífice hecha pública en mayo de 1887 ¹¹⁴, anónimos adictos a la Unión Católica (luego se atribuyó a Pidal el resultado) ¹¹⁵ objetaron que la carta inicial de Saccheri «tenía un carácter del todo privado, contenía sólo una resolución dispositiva ... y no podía, por lo tanto, crear obligaciones nuevas para los católicos». Que, sin embargo, la mayor parte de los obispos (no en Cataluña, donde sólo el de Urgell la publicó) venían dándole carácter de decreto, que imponía la prohibición y recogida del folleto de Pazos. La *Exposición* hacía luego historia del talante integrista. Y concluía que, si *El Liberalismo es pecado* era «como el Programa del Integrismo», los esfuerzos de éste «para que no imperaran en España las instrucciones de la Encíclica *Cum Multa*», su repetida afirmación de albergar los únicos «buenos y legítimos católicos» y de aparecer «como representante legítimo de las fuerzas católicas, como campeón único e insustituible de la Iglesia, como partido católico y el único que puede aspirar a este dictado»; sus ataques al Estado alfonsino, su empeño en politizar al clero, su repudio de la doctrina de la *tesis* y la *hipótesis* ... todo quedaba en adelante rauficado como concorde con las intenciones de la Santa Sede en virtud de la aprobación supuesta en la carta de Saccheri ¹¹⁶.

Cuatro meses después de este escrito, muy comentado en los medios romanos ¹¹⁷, el 29 de agosto, el prefecto de la propia Congregación del Índice, cardenal Martinelli, respondía al obispo de Barcelona sobre las preces elevadas al Papa por individuos de su diócesis (donde fue editada la *Exposición*) acerca del «genuino significado» de aquel escrito de enero: «Las razones que han dado lugar a las dudas y ansiedades, han nacido de que algunos han querido extender los conceptos de esta carta a las cuestiones políticas que hierven entre los católicos de España; de lo que han seguido acres disputas entre los escritores de periódicos, aptas para perturbar conciencias y para fomentar disensiones.

Examinadas detenidamente por orden del Sumo Pontífice las susodichas preces, se ha visto claramente que las alabanzas que la carta del Padre Secretario tributa al opúsculo mencionado, de las cuales deducían principalmente el motivo de dudar, se refieren únicamente a la tesis en abstracto y a los principios generales de la doctrina que el señor Sardá ha expuesto clara y ordenadamente según las enseñanzas de la Iglesia, pero no a algunas proposiciones incidentales o alusiones allí tal vez contenidas que miran al orden concreto de los hechos o al estado de cosas políticas de España, pues no hubo intención alguna ni propósito de tocar a estas cosas. Por lo cual, de ninguna manera estuvo ni pudo estar en la mente de la Sagrada Congregación una más lata interpretación de estas alabanzas o el proferirlas en favor de los secuaces de un partido político y de su modo de proceder con detrimento de otro partido, como algunos han pre-

tendido. Carecen, por lo tanto, de fundamento los temores de errar de aquellos católicos que, dejando aparte la autoridad de los escritores privados, en la defensa de los derechos de la Religión y trato de los asuntos, siguen como norma de su conducta los solemnes documentos y enseñanzas del Romano Pontífice, principalmente aquellos que han sido expuestos en las cartas Encíclicas *Cum multa e Immortale Dei*» ¹¹⁸.

Todavía Sardá i Salvany discutiría el fondo de esta interpretación. Las cartas de la Congregación, escribía en 1888, habían sido publicadas en las *Acta Sanctae Sedis* (precedente, desde 1865, de las definitivas *Acta Apostolicae Sedis* fundadas por Pío X en 1908 como boletín oficial de la Santa Sede). Tenían, pues, carácter «público, oficial y universal, y de consiguiente, obligatorias en conciencia». Y la segunda, redactada por Martinelli, «no fue en modo alguno derogatoria de la primera, como también por algunos se quiso dar a entender, sino simplemente aclaratoria y afirmativa» ¹¹⁹.

Para entonces, comenzaba a salvarse la templanza de la postura legitimista en una crisis previsible.

En octubre de 1886, Carlos VII había comunicado la abdicación de su padre, don Juan, en él, con términos visiblemente moderados sobre sus intenciones: «*je m'efforcerai de concilier loyalement les institutions utiles de notre Espagne avec celles du passé ayant un caractere indispensable, me dévouant, avec les Cortes générales librement nommées, á la grande et difficile tache de doter ma chére patrie d'une constitution*» ¹²⁰.

En el invierno de 1887-88, la interpretación de estos términos filoliberales (por la promesa de Constitución) se mezcló en la polémica encabezada por *La Fe* y *El Siglo Futuro*. Ahora se trataba de aceptar o no que «el primero de los deberes es manifestar públicamente los sentimientos de adhesión inquebrantable a la real familia proscrita» ¹²¹ que así hablaba. Lo que, para el segundo y sus seguidores, equivalía a subordinar la ortodoxia, incluso y principalmente religiosa, a las autoridades humanas.

Sobre este punto, *La Fe* arguyó además la conveniencia de mantener la tolerancia de cultos de la Constitución alfoncina de 1876 antes que reimplantar una unidad católica que exigiera «espionaje religioso» o «represión heterodoxa», repulsivas en su criterio. Se trataba por tanto, en palabras de *El Siglo Futuro*, de respetar o no «el principio mismo de la Inquisición» ¹²², intangible para los íntegros. En su argumentación, *La Fe* se apoyó en ciertas frases del manifiesto de Morentín, de 16 de julio de 1874, en las que Carlos VII repudiaba también aquel tipo de espionaje espiritual ¹²³. Aunque el periodista Valentín Gómez se dijo autor del documento, el pretendiente afirmó su exclusiva paternidad. Y ello planteó con mayor acritud el dilema «entre la fidelidad a D. Carlos y la fidelidad a los principios capitales y esenciales de la monarquía cristiana» ¹²⁴.

Inútilmente, el propio rey proscrito exigió silencio a Nocedal en carta de 26 de enero de 1888. Y llamó a Luis María Llauder, director de uno de los diarios intransigentes más significados, *El Correo Catalán*, para convertirlo en mediador entre las dos fracciones. De la entrevista de ambos en Venecia surgió una declaración formal del escritor, publicada el 14 de marzo en aquel periódico, sobre «El Pensamiento del Duque de Madrid».

Para este, la unión de los católicos debía de consistir «en la afirmación de estos tres puntos. Obediencia al Papa y a la Iglesia en lo religioso, sumisión a la persona de D. Carlos en lo político, y en su consecuencia adhesión a los principios o bases de su bandera, que quiere conservar en toda su integridad y pureza, sin vacilaciones ni debilidades».

Sobraba, por lo tanto, la usual distinción entre integristas y semi-integristas dentro de su partido. «Si el que abraza la verdad íntegra puede ser carlista, el que la rechaza no puede pertenecer a nuestra comunión. Y pues con decir carlista queda significado esto, que cree D. Carlos que hemos de abandonar estos aditamentos que traen confusión» ¹²⁵.

Surgida ahora la polémica sobre la disciplina que se les imponía, la discusión (que llenaba ya la mayor parte de las publicaciones tradicionalistas) se agravó acaso con el artículo de Emilia Pardo Bazán, en *La Fe* del 30 de abril de 1888, «Confesión política». Aconsejaba decidirse por la templanza expresa en el escrito de Llauder (el rey le había hablado de tolerancia religiosa de nuevo). Había que convertir el carlismo en «partido escéptico» que diera «más valor a la rebaja de tributos que a la ley de matrimonios civil» ¹²⁶.

Exigido de nuevo el silencio por el rey, Nocedal planteó, en representación a Carlos VII de primero de junio, la cuestión de su jurisdicción sobre problemas doctrinales, implícita en todo esto. El monarca le respondió que «indudablemente para que haya unidad en nuestros trabajos se necesita un juez que esté por fuera y por encima de toda discusión», que había de ser «el rey, depositario del principio de autoridad». Y le conminó por última vez a la sumisión ¹²⁷.

Destacado en este debate *El Tradicionalista* de Pamplona, el subdelegado carlista en Navarra lo declaró expulsado del legitimismo aún en junio ¹²⁸. Y a comienzos de julio, por orden de don Carlos, su secretario Melgar ratificó la medida y la amplió a las nueve publicaciones tradicionalistas de Cataluña y a *El Siglo Futuro* por adherirse al diario pamplonés ¹²⁹.

Así nació el Partido Integrista, encabezado por Ramón Nocedal y *El Siglo Futuro* y justificado por el filósofo Ortí y Lara, que, en nueva evolución (vimos que había sido tradicionalista independiente y luego afín a la Unión Católica), destacó en las acusaciones de liberalismo formuladas contra el rey proscrito. Quizá treinta publicaciones ¹³⁰ y buena parte ¹³¹ de las fuerzas del carlismo constituyeron el nuevo grupo. Su definición quedó expresa en la «Manifestación» escrita de Burgos, firmada el 31 de julio por representantes de 24 periódicos ¹³².

El documento consideraba a don Carlos rebelde a su propia causa. Dentro del lema «Dios, Patria, Rey», presentaba «la unidad católica [como] la primera ley fundamental de la sociedad española», que había de concretarse, no en una mera declaración formal, sino en «el gobierno de Cristo Rey, Señor y Dueño absoluto de todas las cosas».

Concretaba esta dependencia en términos teocráticos de ortodoxia un tanto confusa: «Como el cuerpo al alma ha de estar unido y subordinado el Estado a la Iglesia, el lumínar menor al mayor, la espada temporal a la espiritual, en los términos y condiciones que la Iglesia de Dios señala, como lo establecen nuestras leyes tradicionales. La enseñanza ha de su-

jetarse a la autoridad de la Iglesia, y a su magisterio infalible y jurisdicción soberana han de someterse las doctrinas. Se han de reconocer todas las preeminencias, privilegios y fueros eclesiásticos establecidos por los sagrados cánones. Y (sin perjuicio de estar a lo que la Santa Sede, única autoridad en la materia, estime más conveniente en cada caso), la España tradicional no quiere regatear a la Iglesia de Dios sus derechos, ni pactar con ella como con potencia extraña lo que mutuamente se han de conceder; sino someterse humildemente a su jurisdicción y magisterio, reconocerle cuantos derechos y atribuciones nos enseña y sabemos por su doctrina que son suyos, y vivir con ella en las relaciones propias y naturales de subordinación y amor».

«Vicarios de Dios son los reyes» —insistía, en la misma línea del agustinismo político. Pero «el que ha de ser rey, antes de recibir el reino debe prestar juramento de guardar y cumplir sus leyes fundamentales, fueros y franquicias, y en primer término la unidad católica; y el que falte a su juramento quiere la ley que sobre hacerse merecedor de todas las maldiciones que lanza Dios contra el perjurio, pierda su dignidad», por medios que no indicaba.

«El rey ha de hacer siempre y promulgar en Cortes toda especie de leyes. Sin la voluntad de los reinos reunidos en Cortes no puede el rey poner ni cobrar tributos. En todos los casos graves está obligado el rey a oír los deseos de los reinos convocando sus Cortes, Cortes que no son pugilatos parlamentarios donde luchan por el poder los partidos políticos, proscritos de la España tradicional, sino verdadera representación de los pueblos y de las clases sociales que hay en los diversos reinos; cuyos procuradores no tienen voluntad propia que enajenar a un ministro, ni van a conquistar posiciones políticas ni ministerios que allí no se quitan ni ponen, ni a lucir su elocuencia, ni a sostener su opinión individual; sino son mandatarios que piden, reclaman y exponen, hacen y dicen lo que sus comitentes quieren y les encargan al darles los poderes, concretos y limitados a los asuntos que según la convocatoria se hayan de tratar. Y estas Cortes no legislan ni gobiernan; pero en ellas, y en las curias y concilios que les precedieron, y a petición suya, dieron los reyes todos nuestros grandes códigos, leyes fundamentales, fueros y libertades» ¹³³.

Paradójicamente, se dijo que la reunión de Burgos había sopesado la aceptación de la forma republicana de Gobierno ¹³⁴, tal vez influida por el recuerdo de la presidencia de García Moreno en el Ecuador, propuesta como ejemplo de constitucionalismo católico por la prensa confesional de la Revolución y los inicios del nuevo régimen ¹³⁵.

En realidad, el nacimiento del Partido Integrista no parecía reflejar un éxito sino una decadencia. A falta de cifras sobre el número de sus adictos, que permita cuantificarlo, es quizá significativa la evolución de una serie constante en la *Revista Popular* de Barcelona, el semanario de Sardá i Salvany. Desde su aparición en 1871, venía sosteniendo una «Suscripción Popular Hispano-Americana en favor del Romano Pontífice pobre», de la que, en todos los números, consignaba las limosnas que iban llegando. La recaudación dio estas cifras anuales: ¹³⁶

Año	Reales	Año	Reales	Año	Reales
1871	3.305	1879	78.866,22	1887	87.637,70
1872	14.381,18	1880	51.776,86	1888	40.543,44
1873	22.756,42	1881	82.491,18	1889	57.288,84
1874	34.300	1882	70.163,96	1890	35.254,08
1875	41.600	1883	111.394,27	1891	37.760,59
1876	18.171,92	1884	109.005,23	1892	38.212,87
1877	24.400	1885	78.610,96	1893	29.802,94
1878	49.564,22	1886	71.289,82		

Se había dado un primer avance de la publicación, según ello, en 1875 en continua expansión durante el período revolucionario. La Restauración pareció imponer la primera contracción, en el bienio de dictadura de Cánovas (aunque sucediera —1876— al tiempo de las discusiones de la tolerancia constitucional de cultos).

Volvió enseguida la expansión, que culminaba justamente en los años de enfrentamiento a la Unión Católica: 1881, 1882 y, sobre todo, 1883 y 84 cuando el director de la revista publicó *El Liberalismo es pecado*.

No hay síntoma de que esta evolución reflejara de algún modo la conjuntura económica ¹³⁷. Pareció, en cambio, hipersensible a los fenómenos de opinión. A partir del 87, fecha de la rectificación de la Congregación del Índice, comienza la decadencia franca en que subsiste el semanario en los años 90. Es cierto que, durante la «guerra sorda» de 1888, la revista acusó a la Unión de estar trabajando, domicilio por domicilio, para quitarle suscriptores ¹³⁸. Pero la cuantía de la disminución, según sus propias cifras, parece indicativa ya en el inicio del retroceso ¹³⁹:

	Año	Primer semestre	Segundo semestre	Primer semestre	Segundo semestre
	1887	1888	1888	1889	1889
<i>En Barcelona ciudad:</i>					
Bajas		103	105	271	76
Altas		95	33	73	15
Suscriptores al finalizar el trimestre ...	1.200	1.192	1.110	912	851
<i>Fuera de Barcelona:</i>					
Bajas		620	267	850	307
Altas		664	146	655	791
Diferencia total		+36	—193	—393	+423
Tirada media declarada				7.000	7.000

El aumento del segundo semestre de 1889 debió ser pasajero, a juzgar por el derrumbamiento del total recaudado para el Pontífice en 1890. Aunque la revista lo publicara para argumentar su fortaleza, es sintomático que, en 1889, elementos adictos le ofrecieran subvencionarla o suscribirse a varios centenares de números para mantenerla ¹⁴⁰.

No es menos sintomático quizá que, en la diócesis de Salamanca, instados los sacerdotes a adherirse al nuevo Partido Integrista, sólo «treinta y tantos» entre «más de trescientos» lo hicieran, en el otoño de 1888 ¹⁴¹. Tras las elecciones de 1890, *La Tradición Navarra* reconocía de sus propios colegas que «es el partido íntegramente católico tan sumamente reducido, que a duras penas y más por la casualidad que por propias fuerzas (no nos duelen prendas) ha logrado sacar triunfante un diputado» ^{141 b} en toda España.

En definitiva, según un dictamen arzobispal de 1894, el Partido Integrista se había ido «aislando cada vez más hasta perder por completo si no el tesón y el espíritu de batalla, la importancia como grupo y la influencia decisiva que alguna vez ejerció ... Su influencia en la política se reduce a la que este [Nocedal] personalmente pueda ejercer; tiene contados elementos en las masas populares, muy pocos en las clases ricas, escasos en las letras y ninguno en el ejército». Y se había enajenado «las simpatías de la mayor parte del Episcopado».

Quedaban, junto a él, otras dos fracciones notables en el tradicionalismo. De ellas, el carlismo ofrecía «una solución clara, precisa, humana, encarnado en un vástago ilustre de regia estirpe, con un programa bien definido». Era aún, además, «partido numerosísimo, verdaderamente popular y sincera y profundamente cristiano, ... pujante y vigoroso, acaso el más vigoroso de los partidos españoles, y sin duda alguna el más potente de los partidos católicos». Su núcleo principal estaba «en las clases populares, aunque cuenta con muchos partidarios en el Clero, no pocos en la nobleza, bastantes en las clases ricas y algunos en la política, la prensa y las Universidades», además de militares «de inferior graduación, quizás por lo mismo que tiene un ejército propio». Pero la única posibilidad de vencer estribaba en la guerra, y «hoy la guerra no se hace a fuerza de valor, sino a fuerza de dinero».

Por último, siempre según aquel escrito de 1894, Pidal acaudillaba «la fracción alfonsina ultramontana que constituye la derecha del partido conservador. Escasos son sus partidarios en el pueblo; pero en el Clero no le faltan, en el ejército los tiene muy numerosos, abundantes en las Universidades, y sobre todo en las Academias, en la literatura, el arte y la política. A su lado figuran o han figurado los nombres de más prestigio de las letras católicas españolas, los Fernández Guerra, los Tamayo y Baus, los Selgas, Cañetes, Rubió y Ors, Milá y Fontanals, Laverde Ruiz, los Menéndez Pelayo, los Marqueses de Pidal y de Vadillo, y tantos otros»: «principalmente los hombres de letras, los políticos, los literatos, los poetas, los hombres de más prestigio en Academias y sociedades científicas y literarias». Era «acaso la menos numerosa de las tres fracciones católicas, a pesar de lo cual, por ser la más ilustrada y por su intervención directa en la lucha legal conforme a su programa, es la que mejor representada

está en el Congreso y el Senado, y la única que tiene hombres acreditados en los diversos ramos de la política, la administración y la diplomacia. Mas, «agregados los católicos a una agrupación política en la que figuran hombres como de muy distintas ideas, la necesidad de la disciplina del partido amengua su libertad de acción» y tampoco su solución habría de ser por ello mayoritariamente aceptada¹⁴².

4. La Obra de los Congresos

En realidad, este esquema de fuerzas demostraba otra vez la persistencia del problema sobre la posición de los católicos en el llamado mundo moderno. Pero el Partido Integrista, la Unión Católica y el carlismo agotaban las posibilidades de solución. En Italia, el *non expedit* de Pío IX —la prohibición para los católicos de intervenir en la política legal de aquel reino creado sobre las ruinas de los Estados Pontificios entre otros— alentaba particularmente, desde los años 70, un intento de articular la acción confesional al margen de los partidos políticos y en todos los aspectos de la vida pública: la *Opera dei Congressi*, enraizada de nuevo en la experiencia de los congresos centroeuropeos de las décadas anteriores. Fue este mismo camino el que ahora, en el agravamiento del pleito español en los años 80, emprendió la jerarquía peninsular, como nueva manera de conseguir el entendimiento, marginando las diferencias políticas.

No conocemos las raíces precisas de su comienzo en España. En 1887 el obispo de Tortosa, Francisco Aznar y Pueyo, suscitó la I Asamblea Diocesana de las Asociaciones Católicas, que fue ya saludada explícitamente como primer intento («¡Por fin!», tituló su acogida la *Revista Popular*) y organizar en la península aquellos congresos.

La asamblea tortosina respondió a un patrón que fue modelo en adelante. Con las sesiones públicas, hubo trabajos en secciones sobre obras de fe y piedad, enseñanza, prensa, obras de caridad y Círculos Católicos de Obreros. Con todo ello quería expresamente articular la acción del laicado y del clero: la unión de los católicos, por tanto, en todo caso tamizado por el discurso tras discurso, por reivindicaciones de la unidad católica y el poder temporal y por un antiliberalismo expreso¹⁴³.

Después de un viaje a Roma en el 87 mismo, el obispo de Madrid-Alcalá, el burgalés Ciriaco María Sancha, notificó también por otra parte, en sus comentarios de agosto de 1888 a la encíclica *Libertas*, que estaba «meditando la conveniencia y provecho de un Congreso católico en nuestra Diócesis para conocer mejor el poder moral, estrechar más los vínculos de unión entre las fuerzas [confesionales] ..., y poder aplicar estas al servicio de la causa católica de la manera más acertada»¹⁴⁴. Lo proyectaba «a fin de ver si con él se conseguía la unidad de acción de todas las fuerzas colectivas de nuestra amada Patria, para resistir a la guerra que colectivamente se viene haciendo a nuestra fe y a nuestras tradiciones cristianas»¹⁴⁵.

La nueva reunión fue concebida para todo el país. Según se dijo entonces, España venía a ser con ella uno de los últimos países euroameri-

canos en organizar asambleas confesionales, pero «la primera en convocar un Congreso católico nacional» ¹⁴⁶.

El propio Sancha ¹⁴⁷ redactó el *Reglamento*. Definía como objetivos «defender los intereses de la Religión, los derechos de la Iglesia y el Pontificado, difundir la educación e instrucción cristianas, promover las obras de caridad y acordar los medios para la restauración moral de la sociedad», con la expresa prohibición de «mezclarse dentro del Congreso en política propiamente dicha» ¹⁴⁸. Desde diciembre de 1888, dirigía los preparativos una Junta Central presidida por el obispo de Madrid, con representación de todas las fracciones políticas confesionales: integristas (Ortí), carlistas (el marqués de Cerralbo, Navarro Villoslada), pidalianos (los marqueses de Pidal y Vadillo, Sánchez de Toca, Marcelino Menéndez Pelayo), tradicionalistas independientes como Vicente de la Fuente o el deán de la catedral madrileña Fernández Montaña ¹⁴⁹, antiguo secretario del cardenal Moreno.

Notificada la iniciativa al Pontífice ¹⁵⁰, catorce obispos respondieron afirmativamente a la invitación de asistir, aunque algunos manifestaron recelo sobre la autenticidad del antiliberalismo de sus intenciones ¹⁵¹. León XIII subrayó la importancia de aquello: «en este asunto ha tomado una parte importantísima gran número de Prelados, sin cuyo consentimiento nada se podrá acordar ni discutir, sean los que sean los autores» ¹⁵². Participaron, además, aquellas personalidades incluidas en la Junta organizadora.

En las sesiones del Congreso (en cuyos preparativos pareció trabajar la Juventud Católica) ¹⁵³, primaron las reivindicaciones del poder temporal pontificio, de la supresión del monopolio estatal universitario y el derecho de la Iglesia a intervenir e inspeccionar la enseñanza oficial y libre ¹⁵⁴. Respondían, en parte al menos, al creciente prestigio de las ideas y de los hombres de la Institución Libre de Enseñanza y al empeño temporalista expresamente demostrado por el propio Pontífice, quien, por las mismas fechas de abril de 1889, declaraba que «en el poder temporal no hay que ver una institución humana sino la libertad misma de los deberes y derechos apostólicos» ¹⁵⁵.

Se perseguía por lo tanto, ante todo, la misma finalidad predominantemente defensiva, formalista, confesionalista, legislativa, de la Asociación de Católicos, de la Unión de Pidal, del carlismo o del integrismo. Pero el Congreso proyectado volvía a apartar esta acción corporativa católica de los compromisos de la política. Y esto, que podía ser doctrinalmente más ortodoxo, podía resultar también todavía más ineficaz: porque renunciaba en principio a la forma de acción —la política— más adecuada a su finalidad legislativa. Los Congresos nacían, así, como un nuevo tanteo que partía otra vez del marginamiento fáctico del móvil básico de la Iglesia: la recuperación del individuo. En otras palabras: no rectificaban el posible error respecto al fin perseguido y, por ello, la rectificación de los medios venía a hacerse inútil.

Desde el punto de vista organizativo, la asamblea de 1889 decidió mantener la Junta Central de Madrid, que la había preparado. Presidida por el obispo de la diócesis y formada por quienes él nombrara, habría de velar

por el cumplimiento de las conclusiones del Congreso. Se haría escuchar por medio de «un diario católico, que, manteniéndose neutral en las diferencias que pueda haber entre los demás diarios católicos que revisten carácter político, se consagra exclusivamente al servicio de la Iglesia y a la defensa de sus derechos, teniendo siempre en cuenta, para cumplirlos fielmente, los repetidos y saludables avisos dados por Su Santidad para el mejor éxito de la prensa cristiana» ¹⁵⁶.

Desde noviembre de 1888, venía apareciendo dos veces por semana *El Movimiento Católico* para informar de los preparativos del propio Congreso ¹⁵⁷. En junio siguiente, la Junta y Valentín Gómez firmaron unas bases que reglamentaban su publicación diaria, desde el 1 de julio, bajo la dirección de aquel, antiguo carlista y tradicionalista alfonsino ahora. El periódico sería «propiedad y órgano de la Iglesia, representada para este efecto por la Junta Central», y mantendría una actitud totalmente apolítica ¹⁵⁸.

La elección había recaído en *El Movimiento* «por no tener noticia de que hubiera otro que reuniera sus condiciones» ¹⁵⁹.

En realidad, no era el historial del director el más propicio para asegurar el cumplimiento estricto de esta norma. Aragonés de Pedrola, Licenciado en Filosofía y Letras por Zaragoza y en Derecho por Madrid, Valentín Gómez se había dedicado desde muy joven al periodismo: como redactor de *El Espíritu* en 1863 y de *El Pensamiento Español* en el 67, desde cuyas páginas defendía ya entonces el tradicionalismo tolerante, pese a la significación carlista que siempre le caracterizó. Dirigió después *El Cuartel Real*, órgano oficial del gobierno de don Carlos durante la última guerra civil, y *La Reconquista*, cuya suspensión, al parecer le hizo conocer el destierro.

Al regresar a España, sin embargo, durante la primera década de la Restauración, esa misma postura tolerante lo había llevado a abandonar el carlismo para reconocer a Alfonso XII como rey legítimo. En 1881, entró a formar parte de la Junta Suprema de la Unión Católica, al lado de Alejandro Pidal, Canga-Argüelles, el conde de Orgaz y Carbonero y Sol: junto a los tradicionalistas, por tanto, que muy pronto pondría en entredicho la prensa intransigente ¹⁶⁰.

Pero, además, tampoco la fidelidad que *El Movimiento Católico* había de prestar a las orientaciones pontificias podía sostener su apoliticismo: por que las indicaciones coetáneas del Pontífice crecían con el tiempo en favor de la acción legal y confesional de los católicos.

En los primeros días de 1890, la encíclica *Sapientiae christianae* puso una vez más los contornos de la actitud ortodoxa. Ante el mundo moderno, decía en ella el Papa, era necesario dar testimonio de la fe de Cristo, que, sin embargo, no podía ser eficaz si los fieles luchaban desunidos. Era preciso, pues, acuerdo en las ideas, que sólo la Iglesia docente con el Pontífice como maestro supremo, podía definir. La obediencia era por tanto, requisito fundamental de la eficacia; y no sólo en los dogmas o en la doctrina, «sino que uno de los deberes de los cristianos es de jarse regir y gobernar por la autoridad y dirección de los Obispos, y ante todo, por la Sede Apostólica».

Como sociedad perfecta y superior a todas, la Iglesia, no obstante, permanente sobre cualquier estructura política, no debía de «ocuparse en declarar qué forma de gobierno le agrada más, con qué leyes se ha de gobernar la parte civil de los pueblos cristianos»; sino que había de ser «indiferente a las formas de gobierno, mientras queden a salvo la religión y la moral». Y, por eso, «arrastrar la Iglesia a algún partido, o querer tenerla por auxiliar para vencer a los adversarios, es propio de hombres que abusan inmoderadamente de la Religión». Pero, al contrario, «si en alguna parte se ve que ... [el cristianismo] peligra por las maquinaciones de los adversarios, deben cesar todas las diferencias, y unidos los ánimos y proyectos, peleen en defensa de la Religión que es el bien común por excelencia, al cual todos los demás se han de referir»¹⁶¹.

No tardó el mismo Papa en poder concretar para los españoles las advertencias de aquel texto. Comunicada a últimos de enero de 1890 por monseñor Benavides la reunión del segundo Congreso Católico en Zaragoza, aquél le respondió que «el mayor y más apetecido resultado que ha de lograrse de este Congreso es el aumento y la confirmación de la concordia de todos los ánimos para defender la causa común de la Santa Madre Iglesia en las actuales circunstancias tan terriblemente combatidas»¹⁶². Salvador Casañas, obispo de Urgell, atendió de inmediato la indicación pontificia por medio de una carta pastoral, en la que, rompiendo su línea filointegrista, exhortaba a sus fieles a dejar a un lado las diferencias de partido para unirse en el pensamiento y en la acción¹⁶³. El mismo León XIII, el 20 de marzo, le escribía para felicitarle: «Porque es en verdad deplorable, que de algunos años acá, engañados muchos de ellos y divertidos por pasiones de partidos o banderías políticas, no menos que por intereses humanos, [los católicos españoles] hayan descendido a la arena para combatir unos con otros bajo la dirección y mando de unos pocos que abusan de la eximia religiosidad de ese pueblo para humillar a los adversarios, con quienes están en disonancia en materias políticas, para satisfacer codicias y aspiraciones privadas y para convertir en propia sustancia las cosas que son de Dios.»

Lamentaba en especial el Pontífice que, en tales contiendas, hubieran «tomado parte algunos eclesiásticos olvidados de su deber, y, lo que es aún peor, algunos religiosos, de antiguo distinguidos por su fidelidad y amor a la Sede Apostólica» (en donde se dijo aludía a algunos miembros de la Compañía de Jesús)¹⁶⁴. Requería, en fin, «que los católicos todos, atendiendo a la voz de sus Pastores, y puesto a un lado todo mundano interés..., se lancen a la carrera, a manera de falange, para la defensa de la Madre común, la Iglesia, afligida hoy por tan grandes pesadumbres y combatida por tantos y tan enfurecidos enemigos»¹⁶⁵.

Entre los posibles aludidos, destacaba sin duda Sardá i Salvany. El 6 de enero de 1890, fecha de resonancias monárquicas en la cristiandad, la *Revista Popular* había brindado un homenaje a León XIII, que el Papa agradeció al autor de *El Liberalismo es pecado* con una alabanza por su empeño «de que por su medio se propague cada día más la sana doctrina de la Iglesia». Pero le recordó también que aquello se

lograría «fácilmente, si los que se dedican a publicaciones diarias fomentan con diligencia el espíritu de concordia y paz, para no dejar arrastrar de las pasiones de partido, que en diverso sentido agitan a los fieles de España; si religiosa y fielmente obedecen a lo que tiene mandado la Sede Apostólica para el fin de extirpar estas disensiones, asegurar en los ánimos la concordia y unión...; finalmente, si en su modo de proceder enseñan y practican la obediencia debida a los Obispos»¹⁶⁶.

18. Celebrado el segundo congreso en Zaragoza en octubre del año 90, con asistencia de treinta y cuatro prelados, nueve de los quince discursos programados para las sesiones públicas glosaron otra vez la restitución de los poderes temporales al Pontífice. Pero, en realidad, el arzobispo de Zaragoza, cardenal Benavides, había subrayado al comenzar la asamblea su fin unionista. En la tercera sesión, Sardá i Salvany habló sobre la soberanía romana, y los aplausos le interrumpieron una y otra vez, sobre todo tras los párrafos que pudieran indicar su persistencia en la actitud que se le había reprochado. No es posible —determinó Sardá— «entre la verdad y el error ciudadanía común y mutuo respeto, y mucho menos la culpable tolerancia e inverosímil confraternidad que por algunos constantemente se nos predica»¹⁶⁷. Y todavía para la sesión siguiente se preparaba al parecer otro disturbio en torno a la actuación de Ortí y Lara, que no llegó a realizarse, oficialmente por enfermedad del orador.

En el sermón de rúbrica, fray Tomás Cámara, obispo de Salamanca recordó la finalidad de la asamblea al resumir los resultados prácticos de los dos congresos celebrados antes: uno, la colaboración y el prestigio creciente de la jerarquía; otro, la mayor difusión de las palabras de Papa y los prelados sobre las discusiones periodísticas, efectivamente más comedidas desde entonces; un tercero, la progresiva unión de los católicos, que se estaba fraguando. Por último, los obispos reunidos allí aprobaron treinta y tres «reglas prácticas» para los católicos españoles. De ellas, las catorce primeras se referían a sus relaciones con la jerarquía y les ordenaban «evitar cuanto pueda dar motivo u ocasión a divisiones sea por medio de conversaciones privadas, sea por otro cualquier modo de propaganda; declarando en esto formalmente gravada su conciencia». Recordaban también el deber de obediencia, bajo pecado grave, a los prelados y al Papa, no sólo en materia de fe, sino «cuando prescriben la línea de conducta que debe observarse». Prohibían cualquier tipo de comentario de los documentos pontificios y episcopales sin autorización del ordinario de la diócesis, y exigían la previa censura para la publicación de cualquier escrito de persona eclesiástica, lo firmase o no, aunque lo presentara bajo seudónimo o bajo el nombre de otro individuo.

Desautorizaban, asimismo, las asociaciones tituladas católicas que no tuvieran aprobación jerárquica. En las autorizadas, prohibían «toda discusión política; y sólo podrán tener aquellas revistas o periódicos que consienta el Ordinario», como en los seminarios, bajo la responsabilidad moral del rector y superiores, y en las asociaciones políticas que quisieran ser tenidas por confesionales.

Las diez reglas siguientes trataban de las relaciones entre católicos. Recordaban la obligación de dejar a un lado los negocios y empresas humanos cuando estuviera en juego el interés de la Iglesia, «uniéndose entre sí a manera de falange para la defensa de la causa de Dios, como si no perteneciesen a diversas parcialidades políticas ni tuviesen en lo humano intereses encontrados», «sin que esto signifique que no puedan sostener pacíficamente sus ideales políticos respectivos, con tal que se abstengan de recíprocos ataques, y sobre todo, de calificar de anticatólicas las opiniones de sus adversarios, si la Iglesia no las condena». Esto era especial y terminantemente aplicable, además, en cualquiera de sus actividades, a los sacerdotes y religiosos, a quienes, moderando tal vez los preceptos del Papa, exhortaban a procurar «abstenerse de tomar parte activa en las cuestiones políticas sin el permiso de los respectivos Prelados».

En las nueve reglas últimas, los obispos repetían la doctrina ius-publicista de la necesidad de relaciones entre el Estado y la Iglesia. A ésta competía decidir las medidas a adoptar para sus propios intereses. Era la jerarquía, por tanto, la que había de dirigir «la defensa del reinado social de Jesucristo en la tierra»; porque «los demás, incluso los clérigos, regulares o seculares, son *colaboradores* en su cargo y *ejecutores* de las deliberaciones del Papa y los Prelados». Y animaban, por fin, a los católicos a participar en las elecciones municipales, provinciales y nacionales, conforme a las alusiones que sobre ello había hecho la encíclica *Sapientiae christianae*¹⁶⁸.

En la carta que, el 15 de noviembre de 1890, el Papa remitió al cardenal Benavides, en respuesta al mensaje de los prelados congresistas, volvió a hacer hincapié en la necesidad de unión de los católicos, «aun aquellos pocos que todavía resisten obstinados a nuestras amonestaciones». Y exhortaba a la jerarquía a trabajar en ese sentido¹⁶⁹. Pero, por aquellos meses, había surgido ya, en el polémico horizonte tradicionalista, la eterna duda de dónde competía, dentro o fuera de la legalidad, realizar la unión que se impetraba.

Antes de la celebración de la asamblea zaragozana, el diario integrista *La Región*, de Salamanca, había acusado a varias cofradías y asociaciones religiosas de la ciudad de albergar a individuos liberales, algunos de los cuales se habían inscrito como socios del Congreso Católico que se iba a celebrar. Los aludidos, que no eran sino miembros del Partido Liberal-Conservador de Cánovas del Castillo, acudieron al obispo, que abrió un expediente de averiguación. En él se hizo constar que eran todos doctrinalmente ortodoxos; que decían condenar las libertades modernas, y, si alguno se titulaba liberal, lo hacía para oponerse al epíteto de absolutista. Cámara explicó por tanto, en Decreto de 30 de septiembre de 1890, que, al condenar el liberalismo, la Iglesia había precisado lo que entendía por ello y, fuera de este sentido, ningún otro sistema estaba condenado, si bien fuera mejor que los católicos sinceros renunciasen a aquel calificativo político. Glosó después, en una pastoral, la encíclica *Libertas*, de 1887, para concluir que, en sentido condenatorio, no cabía tildar de liberales a cuantos militaban en los partidos españoles de gobierno. Y, ante la disconformidad

de algunos integristas, escribió al cardenal Rampolla, el 7 de noviembre de 1890, para exponerle estas dos cuestiones y pedirle aprobación a las respuestas que él mismo proponía:

«1.º ¿Pueden los católicos españoles desempeñar los empleos públicos dependientes de la voluntad del Gobierno?

La Encíclica *Inmortale Dei* lo manifiesta claramente...

2.º ¿Hemos de apellidar liberales ... a cuantos militan en los partidos gubernamentales de España, puesto que de éstos unos se intitulan *liberales* ... y los otros *conservadores liberales*?

... El liberalismo condenado por la Iglesia, ha de ser un sistema doctrinal, y por consiguiente, un conjunto de proposiciones falsas y reprobadas... Quien quiera que no profesa estas doctrinas o proposiciones no será liberal condenado, y si se apellida, no obstante, liberal en otra acepción, podrá ser sospechoso por el equívoco, en los países que le cause ...

También el tradicionalismo está desechado por la Iglesia, y aquí los católicos más fervorosos, así los carlistas como los integristas, se llaman tradicionalistas sin escándalo de nadie, más bien con general aplauso»¹⁷⁰

Ciertamente, lo que el obispo de Salamanca proponía un tanto temerosamente, era nada menos que la exégesis estricta del *Syllabus*, frente a la interpretación analógica vigente desde su aparición, que justificaba a quienes creían incompatible el catolicismo con la legalidad liberal y que dominaba incluso los cerebros más tolerantes de la ortodoxia. Un mes más tarde, en diciembre de 1890, de nuevo el obispo de Urgell respondió a la consulta de un párroco sobre la postura a adoptar ante las elecciones próximas que, si los eclesiásticos, como ciudadanos, tenían derecho a votar, no debían de hacerlo para no comprometerse en política. (La cuestión venía debatiéndose en la prensa confesional durante todo el año 90.)¹⁷¹ En cuanto a la posibilidad de apoyar a un candidato liberal aunque fuera templado y hombre bueno, no estaba permitida, añadía Casañas, de no ser que adoptase aquel calificativo por ignorancia imprudente y fuera, en realidad, un buen cristiano¹⁷².

El secretario de Estado de la Santa Sede aprobó, desde luego, con fecha 17 de febrero de 1891, aquellas dos contestaciones dadas a sus propias preguntas por fray Tomás Cámara. Pero, al notificarlo a sus diócesanos en abril, éste cuidó de hacer constar, para evitar recriminaciones tradicionalistas, que la resolución de Rampolla era particular y no del Papa¹⁷³.

El veredicto no fue concluyente. Desde noviembre, el obispo hubo de repetir las amonestaciones a *La Región* por falta de respeto a la autoridad eclesiástica. En enero del 92, el director del periódico, Manuel Sánchez Ascensio, llegó a exigir al vicario general de la diócesis autorización para procesar por la jurisdicción civil al penitenciario de la catedral salmantina, Primitivo Vicente. Aducía que *El Criterio*, publicación inspirada por Cámara, de la que era aquél censor por nombramiento episcopal había publicado el 26 algunas frases injuriosas contra Ascensio, que, a no haber sido censuradas, convertían al eclesiástico en coautor. Desatendió tal exigencia por el vicario, que la juzgó impertinente, todavía «cuatro

acaudalados propietarios de la provincia, casi de una familia»¹⁷⁴ (Juan A. Sánchez del Campo, Manuel Sánchez Tabernero, Fulgencio Tabernero¹⁷⁵ y Juan Lamamié de Clairac) y el profesor de Derecho Civil de la Universidad, Enrique Gil Robles¹⁷⁶, apoyaron públicamente al periodista. Cámara declaró «~~el~~ uno y otro proceder escandaloso y de tendencia cismática»¹⁷⁷. Y prohibió, «bajo pecado mortal, la publicación y lectura del diario *La Región*» y «cualquier papel periódico que redactaren D. Manuel Sánchez Asensio o D. Enrique Gil Robles»¹⁷⁸.

Por lo demás, algunos sí debieron transigir ante la insistencia del Pontífice y los obispos. En Sardá i Salvany influyeron las advertencias de León XIII¹⁷⁹, al menos para alejarle de la lucha política. Pero sobre todo en Ortí y Lara, quien, de detractor notorio de la Unión Católica de Pidal en los años 80, iba a pasar en los 90 a defender la colaboración en el régimen alfonsino —con claro antiliberalismo en todo caso— desde las páginas de *El Movimiento Católico*¹⁸⁰.

En septiembre del 91, León XIII había vuelto a insistir a un grupo de peregrinos españoles en la necesidad de mantener la unión¹⁸¹. Y, el 30 de noviembre, respondiendo al monseñor Sanz y Forés sobre la reunión del tercer Congreso Católico en Sevilla, se limitó a advertir la conveniencia de «que todos cuantos aman la casa de Dios unan sus esfuerzos y trabajen con empeño para conseguir que Dios sea honrado en todas partes con sentimientos de piedad»¹⁸².

El nuevo congreso se celebró en octubre de 1892. Sus sesiones no registraron al parecer ninguna nota discordante, y ni siquiera el tema de la soberanía pontificia tuvo la acritud de otras veces. «Siendo esta asamblea ajena a toda mira política y aun a todo negocio puramente humano —habían subrayado los congresistas en su mensaje a León XIII del 18 de octubre, en la apertura—, la idea que [en] estos instantes nos alienta a todos, es el fomento de los intereses católicos.» Eran, por este orden, el poder temporal del Papa, la libertad de acción para la jerarquía y «distinguir entre los deberes que como católicos nos ligan a la Iglesia y como ciudadanos a los Supremos Gobernantes»¹⁸³, en frase descomprometida.

No hubo apenas más problema en la siempre polémica superficie de la catolicidad de aquellos años. Los congresos y las palabras del Papa habían conseguido, ciertamente, que la discusión perdiera fuerza. Sobre todo habían contribuido quizá a sensibilizar la opinión católica en la urgencia de tomar partido activista. Al primer congreso habían asistido 14 prelados y se habían inscrito 1.948 socios; al segundo, 34 y 4.287, respectivamente; al tercero 27 y 4.850. Al cuarto en Tarragona, en 1894, acudirían 23 y 5.084; al quinto, de 1899 en Burgos, 4.793 socios; al sexto y último, en Santiago, en 1902, 3.524¹⁸⁴.

La solución radical de fray Tomás Cámara, en pro de una interpretación estricta del *Syllabus*, tuvo moderada acogida. Y, por tanto, de nuevo el colaboracionismo como mal menor ocupó la plaza de postura avanzada, aunque siguiese revestida de la misma actitud de defensa. Mantenida la desviación doctrinal de aquella interpretación, pero latente al tiempo la conciencia de que la administración de los Estados necesitaba de la ges-

tión de hombres ortodoxos, la recuperación del mundo moderno por la Iglesia (que, en último término, era el problema que se debatía) parecía difícilmente viable. León XIII había perfilado bien la doctrina política eclesial en la *Sapientiae christianae* (indiferencia ante las formas de gobierno; politización de la Iglesia en circunstancias anormales sólo). Y esta anomalía de la situación que pudiera reclamar una acción católica corporativa, si existía desde luego en Francia, donde el Papa venía procurando el *ralliement* con la III República, no se daba en España. Aquí, en respeto de los gobernantes monárquicos desde 1876, conservadores como liberales, respecto a la Iglesia, tenía la actitud condenatoria de los prelados y las pretensiones de unión política católica alentadas por el Pontífice de un cierto aire acróico.

En el fondo, seguía sin comprenderse que la recuperación (la cristianización, en rigor) de la sociedad solo podía tener sentido como camino para la cristianización del individuo y que la batalla —si tenía que haber batalla— debía de ceñirse a los campos en que los ataques se dieran: que contestar con una acción política defensiva en nombre de la Iglesia cuando los políticos gobernantes no atacaban a la propia Iglesia tenía poco sentido y, en el peor de los casos, podía suscitar la lógica reacción anticatólica que ahora no existía, si los empeños políticos eclesiásticos llegaban a prosperar.

NOTAS

¹ Vid. en este sentido Jean Delumeau: *Le catholicisme entre Luther et Voltaire*. Paris, P. U. F., 1971, pág. 330 s.

² En algunos escritos de la Ilustración católica del XVIII palpita una expresa toma de conciencia de la mayoría de edad de los fieles, concretada en ataques contra el autoritarismo de la Iglesia «feudal» (vid. Bernard Plongeron: *Recherches sur l'«Aufklärung» catholique en Europe occidentale (1770-1830)*, «Revue d'histoire moderne et contemporaine», XVI (1969), 555-605).

Revista Popular, XLVI (1894), 17. Vid. *ibidem*, XLIV (1893), *passim*, reflexiones sobre el mismo tema, la «acción católica», a raíz de la carta de León XIII al pueblo italiano de 8-XII-1892.

⁴ Advierte ya tal filiación, que se prolongará en la acción social también, Jean-Marie Mayeur: *Catholicisme intransigeant, catholicisme social, démocratie chrétienne*, «Annales E. S. C.», 26 (1972), 483-499.

⁵ Monseñor Luis Civardi: *Manual de Acción Católica*, t. II, Barcelona, ediciones José Vilamala, 1940, pág. 145.

⁶ Conocemos escasa bibliografía sobre las Asociaciones Católicas en cuestión. Sobre la alemana y la belga, vid. R[oger] Aubert: *Le pontificat de Pie IX (1846-1878)*, reed., Tournai, Bloud & Gay, 1963, pág. 58 ss., 170 s., Frank Eyck: *The Frankfurt Parliament 1848-1849*, London, Macmillan, 1968, pág. 141 ss., y La Cruz (1864), II, 221 s. Sobre la italiana, *Revista Popular*, XV (1878), 3 ss. Conoce la existencia de la española Angelo Gambasin: *Gerarchia e laicato in Italia nel secondo Ottocento*, Padova, Editrice Antenore, 1969, pág. 21. Acerca del aconfesionalismo del Centro alemán, vid. Werner Richter: *Bismarck*, Barcelona, Ediciones G. P., 1967, pág. 250 ss. Sobre los Comités franceses, A. Latreille, J. R. Palanque, E. Delaruelle, R. Rémond: *Histoire du Catholicisme en France. La période contemporaine*, Paris, Editions Spes, 1962, pág. 439 s., y

Jacques Gadille: *La pensée et l'action politiques des évêques français au début de la III^e République. 1870/1883*, t. I, Paris, Hachette, 1967, pág. 240 s. Una visión del aspecto clerical de este movimiento general activista, Giorgio Feliciani: *Azione collettiva e organizzazione nazionale dell'episcopato cattolico da Pio IX a Leone XIII*, «Storia Contemporanea», III (1972), 325-366.

⁷ Vid. *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, VI (1869), 324.

⁸ Vicente de La Fuente: Resumen de su memoria sobre «Origen, desenvolvimiento, beneficios y estado actual de la Asociación de Católicos», en *Crónica del Primer Congreso Católico Nacional Español*, Madrid, Tipografía de los Huérfanos, 1889, t. II, pág. 398. Cfr. *El Pensamiento Español*, 12-XII-1868, que da amplia información sobre la creación de la Asociación de Católicos.

⁹ «Bases para una Asociación de Católicos», apud *La Cruz* (1868), II, 505.

¹⁰ Circular de la Junta Diocesana del Distrito del Burgo de Osma, de la Asociación de Católicos, apud *Boletín Eclesiástico del Obispado de Osma*, 9-IV-1870.

¹¹ Cit. *ibidem*.

¹² Carta del obispo de Pamplona a la Junta Diocesana de Navarra, apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, VII (1869), 195. Sobre la personalidad de este prelado, vid. José Manuel Cuenca: *El pontificado pamplonés de don Pedro Cirilo Uriz y Labayru (1862-1870)*, «Hispania Sacra», XXII (1969), 129-285.

¹³ La Fuente: Resumen..., 398.

¹⁴ *La Cruz* (1868), II, 505. Contra la insistencia de la prensa en atribuir tendencias políticas a la Asociación, casi repite las mismas palabras *El Pensamiento Español*, 18-II-1869: la Junta fue compuesta, dice, «de personas completamente extrañas a la política, o alejadas hoy y quizás para siempre de ese campo, o muy poco señaladas en él».

¹⁵ Vid. María Teresa Puga: *El matrimonio de Isabel II*, Pamplona, Universidad de Navarra, 1964, pág. 164 ss.

¹⁶ Lo eran también Francisco José Garvía y Enrique Pérez Hernández, que formaron con los demás citados la primera Junta directiva (cfr. *La Cruz* (1868), II, 507).

^{16 b} Ambos aparecen como asesores jurídicos de la Asociación cara a las próximas elecciones, junto a Aparisi, Galindo de Vera, Vinader, Luis Echeverría, Manuel María Herreros, Francisco de P. Lobo, Cruz Ochoa, Enrique Pérez Hernández, Santiago Tejada y Luis Trelles (cfr. *El Pensamiento Español*, 28-XII-1868). Sobre el grupo neocatólico, vid. Miguel Artola: *Partidos y programas políticos, 1808-1936*, Madrid, Aguilar, 1974, t. I, pág. 266 s., 298 ss.

¹⁷ *La Cruz* (1868), 504.

^{17 b} Cfr. *El Pensamiento Español*, 22-I-1869.

^{17 c} *Ibidem*, 14-I-1869.

¹⁸ La Fuente: Resumen... 399. Sobre la Sociedad Católico-monárquica, vid. Artola: *op. cit.*, 302.

¹⁹ Cfr. *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, VIII (1870), 328, donde aparece ahora como tesorero Antonio Lizarraga —acaso emparentado con el general carlista del mismo nombre y apellido— y como secretario Juan Tro y Ortelano.

²⁰ Cfr. La Fuente: Resumen..., 399.

²¹ La carta del Pontífice a la Junta Superior de la Asociación de Católicos, de 7-I-1869, era significativa tanto por la coyuntura sociopolítica que reflejaba como por el incipiente activismo laico que percibía: «Nada ciertamente puede sernos más grato —comenzaba—, nada más deseado ni más acepto, que ver cómo en medio de tan grande persecución suscitada por las potestades del infierno contra la Religión católica, surgen en todas partes hombres que, animados de excelente espíritu religioso, y adornados de otras insignes dotes de carácter y de inteligencia, protegen y defienden con denuedo la causa de la Iglesia católica y sus doctrinas saludables y sus derechos venerandos. = Sumo júbilo, por tanto, hemos sentido, amados hijos, al recibir vuestra gratísima carta del próximo pasado Diciembre, inspirada por el más profundo sentimiento

de amor y reverencia hacia Nós y hacia esta Cátedra de Pedro, centro de la unidad católica. = Por ella hemos sabido con singular regocijo de nuestro ánimo que habíais sido elegidos por muchos católicos españoles, insignes por el lustre de su virtud y noble condición, para fundar en España una gran ... [aquí lo transcrito arriba] romana. = Apenas hallamos palabras para expresaros cuán grata ha sido esta determinación para Nós, que tan profundamente lamentamos la condición tristísima y nunca bastantemente llorada, en que de resultados de la gravísima perturbación del orden público se encuentra hoy España, tan señalada por su amor a la Iglesia católica y por su reverencia a esta Apostólica Sede. = De esta perturbación nace que hombres malvados, con todo linaje de fraudes y atentados inicuos, a todo se atrevan, con propósito de echar por tierra, si fuera posible, a la Iglesia católica en la nación española, y de arrancar de raíz su doctrina salvadora, que tan provechosa es, aun para la felicidad temporal de los pueblos, de conculcar todos los derechos divinos y humanos y de inficionar y corromper y empujar hacia la perdición con perversas doctrinas las almas y las inteligencias de todos. = Por tanto, amados hijos míos, felicitamos con toda Nuestra alma, y tributamos las mayores y merecidas alabanzas, lo propio a vosotros que a todos los católicos españoles, tan maravillosamente encendidos en este insigne afecto a la Iglesia católica ... = Y al llegar aquí no podemos menos de tributar los más cumplidos elogios a tantas piadosísimas y nobilísimas Españolas, que con ánimo resueltamente católico y varonil han tenido a gloria ser las primeras en salir abierta y públicamente a la defensa de la integridad e incolumidad de nuestra Religión santísima, y en oponerse a los sacrílegos atentados de los impíos» (apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, VII (1869), 325 s.). Pío IX alude a una de las primeras exposiciones, ya abundantes en diciembre de 1868 (y reseñadas en *La Cruz* (1868), II 529 ss.), firmada por mujeres y dirigida como las demás al Gobierno provisional para protestar contra los actos antirreligiosos de los primeros días de la revolución de septiembre. Sobre la situación de la Iglesia en estas circunstancias, vid. José Manuel Cuenca: *La Iglesia española ante la revolución liberal*, Madrid, Rialp, 1971, 290 pp. Hay datos sobre ello en el estudio de Jesús Martín Tejero: *España y el Concilio Vaticano I*, «Hispania Sacra», XX (1967), 99-175. En cambio, se detiene en 1857, pese a su título, Agustín Arce: *Cirilo Alameda y Brea, O. F. M. (1781-1872)*, *ibidem*, XXIV (1971), 257-356.

²² La Fuente: Resumen..., 400.

²³ Cfr. *El Pensamiento Español*, 20-I y 10-II-1869. En Navarra, ocupada enseguida por la guerra carlista, sólo parece que llegara a existir la Junta Diocesana, en Pamplona. En Soria, hubo al menos Junta Provincial en la capital y de Distrito en el Burgo, con idea de constituir las también en Almazán, Agreda y Medinaceli y crear Juntas Parroquiales en todos los pueblos (cfr. *Boletín Eclesiástico del Obispado de Osma*, V (1867-1870), 539). Hay noticias de las de Barcelona, Valencia, Córdoba, Zaragoza, Granada, San Fernando, al menos desde 1872 (vid. *Revista Popular*, II (1872), 17, 270; IV (1873), 167; XI (1876), 14, 389). Cfr. también Artola: *op. cit.*, 299.

²⁴ Sobre esta exposición, como fuente sociológica religiosa, presentamos a las I Jornadas de Metodología Histórica de Santiago de Compostela (abril 1973) una ponencia: *Aproximación cartográfica a la religiosidad peninsular. Los españoles ante la libertad del sexenio revolucionario*. Sobre ese debate de las Cortes, Pedro A. Perlado: *La libertad religiosa en las Constituyentes del 69*, Pamplona, Universidad de Navarra, 1970, 426 pp.

426 pp.

²⁵ Cfr. *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, VII (1869), 442 y s., que publica la lista de obras impresas por la Asociación.

²⁶ Cfr. *Revista Popular*, II (1872), 258, 342; IV (1873), 167; XV (1878), 63.

²⁷ Cfr. *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, VIII (1870), 324.

²⁸ Cfr. Vicente Cacho Viu: *La Institución Libre de Enseñanza. I. Orígenes y etapa universitaria, 1860-1881*, Madrid, Rialp, 1962, pág. 393.

²⁹ Circular sobre los Estudios Católicos, apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, VIII (1870), 327.

³⁰ Vid. *La Cruz* (1864), II, 236.

³¹ Vid. Ramón Celma Bernal: Prólogo a Vicente de La Fuente: *Historia de a siempre augusta y fidelísima ciudad de Catayud*, Zaragoza, Caja de Ahorros de la inmaculada, 1969, pág. XIII.

³² Fue al menos preceptor de Alfonso XIII desde el invierno de 1900-1901.

³³ El ingreso de Ortí en el carlismo en 1869 se desprende implícitamente de *El Movimiento Católico*, 31-VIII-1895. Se afirma aquí que, en el 68, en la redacción de *El Pensamiento Español*, de la que Ortí formaba parte desde el 57, no había más carlista que Valentín Gómez. Pero, ante la revolución, fue este el único que, sin éxito, desaconsejó la adscripción del diario al carlismo, precisamente por la labor de defensa católica que había de desempeñar. Más tarde, el filósofo debió ingresar en la Unión Católica pidaliana de primera hora (cfr. *Revista Popular*, XXIII (1882), 109, donde se lee: «Su buena fe [de Ortí] le condujo también a él por algunos instantes ... a un campo que no es el de más confianza para los sanos católicos», refiriéndose al de la Unión). Pero, en 1882, ante el tono de transaccionismo con la legalidad predicado por los adictos a esta asociación, volvió contra ellos, sobre todo a partir de su artículo «La Unión fautora del liberalismo», publicado en *La Ciencia Cristiana y El Siglo Futuro*. Penetraba con ello en filas integristas, aún fieles a don Carlos, a quien dejó, no obstante, en el 88, al figurar entre los fundadores del Partido Integrista. En 1893, por último, aceptó francamente el tradicionalismo tolerante con la legalidad alfonsina, hasta el fin de sus días. Hay que ver, pues, al menos seis y no tres fases en la evolución de este personaje. Sobre esa base, vid. Andrés Ollero Tassara: *Juan Manuel Ortí y Lara, filósofo y periodista (bibliografía)*, «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses», XII (1966), 9-95; del mismo, *En torno a la Revolución del 68: un pensador tradicional ante la transformación de la sociedad decimonónica*, «Atlántida», VI (1968), 642-657, y *Universidad y Política. Tradición y Secularización en el siglo XIX*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1972, 238 pp.

³⁴ Además de Florentino Rodríguez Luengo, Domingo de Olabarría, Vicente Olivares, Francisco de la Concha Alcalde y Benigno Cafranga (cfr. *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, VIII (1870), 326 s.).

³⁵ La Fuente: Resumen..., 400.

³⁶ Circular de los Estudios Católicos, apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, VIII (1870), 325.

^{36b} *Revista Católica de España* (1871), I, 458, cit. Ollero: *Universidad...*, 100.

³⁷ Apud J. G. Cheyne: *Joaquín Costa, el gran desconocido*, Barcelona, Ariel, 1972, pág. 176. Costa sitúa la clausura en 1875; Cacho Viu, en cambio —de quien tomamos las cifras de alumnos—, en el 76 (cfr. *op. cit.*, 393; también Ollero: *Universidad...*, 101).

³⁸ La Fuente: Resumen..., 401.

³⁹ En 1898 existe aún la de Barcelona; en el 97, las de Valencia y Terrassa; en el 96, la de Zaragoza, según la *Revista Popular*, passim. En enero de 1901 se constituye en Pamplona una Asociación de Católicos, con fines semejantes, no sabemos si en relación con las anteriores (cfr. *La Avalancha*, 24-1-1901). Sobre una hipotética evolución de La Fuente, en torno a 1884, en sentido de tolerar el régimen liberal, vid. Ollero: *Universidad...*, 148.

⁴⁰ *El Pensamiento Español*, 7-I-1869.

^{40b} Cfr. *La Ciudad de Dios*, I (1870), 57, donde aparecen en la inauguración de los actos de la Juventud en diciembre de 1869, «después de una no breve interrupción» de sus actividades.

⁴¹ Cfr. Ollero: *Juan Manuel Ortí y Lara...*, 37 s.

^{41b} Lo fueron con él Juan Catalina García, Lesmes Sánchez de Castro, Francisco Martín Melgar, el conde de Villalobos, el marqués de Monesterio, Gabino Martorell, Francisco Sánchez de Castro, José de Cútolí y Peñalba, el vizconde de Bahía-Honda, Francisco Hernando Eizaguirre, Luis María de Tro y Moxó, Manuel Fernández Llamazares, algunos de ellos colaboradores de *El Pensamien-*

to Español (que los enumera en 7-I-1869), aunque desligados en ello del diario, según indicación expresa de su director, Navarro Villoslada (cfr. *ibidem*).

⁴² Circular de la Juventud Católica de Barcelona, 1-XII-1877, apud *Revista Popular*, XIII (1877), 341.

⁴³ Vid. Charles Molette: *L'Association Catholique de la Jeunesse Française*. París, Armand Colin, 1968, introducción.

^{43 b} Cfr. *El Pensamiento Español*, 5 y 29-III-1869.

⁴⁴ Tomamos todos los datos del apartado «Noticias y variedades» de la *Revista Popular* de estos años.

⁴⁵ *Ibidem*, X (1876), 354.

^{45 b} La filiación doctrinal de Alejandro Pidal respecto a Dupanloup está afirmada en *Integrismo y oportunismo, o sea, nocedalismo y pidalismo...*, Madrid, Imprenta Fortanet, 1885, pág. 20. Debo esta indicación bibliográfica, y las contenidas en las notas 97^b y 98, a la Dra. Maria Cristina Diz-Lois.

⁴⁶ Se desprende tal significación de Muros: *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*. Sesión del 17-I-1881. Para situar y completar esta problemática, vid. Artola: *op. cit.*, 535 ss.

⁴⁷ Lo afirman Cánovas y el propio Pidal: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 16-VI-1880.

⁴⁸ *El Siglo Futuro*, 15-I-1881.

⁴⁹ Vid. José Navarro Cabanes: *Apuntes bibliográficos sobre la Prensa Carlista*, Valencia, Sanchís, Torres y Sanchís 1917, pág. 109 ss., 132.

⁵⁰ Muros: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 16-I-1881.

⁵¹ Pidal: *ibidem*. Alude a la influencia del obispo Zeferino González en Pidal, José Manuel Cuenca: *Estudios sobre la Iglesia española del XIX*, Madrid, Ed. Rialp, 1973, pág. 201.

⁵² Sobre Orti, vid. nota 30 *supra*.

⁵³ He aquí las Bases fundacionales de la Unión Católica, que parecen aclarar al fin la configuración jurídica de este movimiento, frecuentemente aludido pero nunca descrito por la historiografía: «1.^a Con el nombre de *Unión católica* se crea una asociación cuyo único y exclusivo objeto será el de procurar la unión de los católicos que quieran cooperar, por los medios legales y lícitos, a los fines religiosos y sociales consignados en la carta dirigida a los señores Obispos exponiéndoles los propósitos de la *Unión católica*, y en las contestaciones de los Prelados aprobando dicha carta. = 2.^a Pueden entrar a formar parte de esta Asociación todos aquellos que acepten íntegramente las enseñanzas y doctrina ... [aquí, lo transcrito arriba con este comienzo] Obispos. 3.^a La *Unión católica*, nacida bajo la bendición y los auspicios de los Prelados de la Iglesia de España, queda sometida a la suprema dirección e inspección de los señores Obispos, quienes serán además, por sí o por medio de sus delegados, los presidentes natos de las asociaciones que se formen en sus respectivas diócesis. = 4.^a Constituido en Madrid el centro de esta asociación, el presidente de la *Unión católica* es el Cardenal Arzobispo de Toledo, que será auxiliado por una Junta superior directiva, formada entre los mismos asociados. = La Junta superior directiva designa para vicepresidentes dos individuos de su seno; nombra para secretarios, como para los demás cargos o comisiones que crea oportuno conferir, a los asociados que estime conveniente; dirige, dentro de las bases establecidas, los trabajos de la Asociación, y decide de la admisión de los que deseen ingresar en ella. = Entrarán desde luego a formar la Junta superior directiva los señores firmantes de la carta a los Prelados, y los presidentes de las secciones que han de formarse, sin perjuicio de aumentar su número, designando a más personas pertenecientes a la Asociación cuando el Presidente, de acuerdo con la Junta, lo estime necesario. = 5.^a A semejanza de la Junta superior, cuando los señores Obispos lo juzguen conveniente, formarán Juntas diocesanas, que presidirán por sí o por medio de sus delegados. Los Prelados presidentes de estas Juntas, cuando se hallen en Madrid, formarán parte de la Junta superior. = También se formarán en los pueblos Juntas locales, presididas por las personas que el Prelado designe, las cuales, a su vez, formarán parte de la Junta diocesana cuando se encuentren en la capital

de la diócesis. = Las vacantes que ocurran en las Juntas serán cubiertas por designación de los presidentes, de acuerdo con los individuos de la Junta. = 6.^a Para el mejor orden de los trabajos la *Unión católica* se dividirá en secciones, que serán por ahora las siguientes: Obras religiosas. — Obras de caridad y de mejora social. Educación y enseñanza. — Literatura y ciencias. — Arte cristiano. Propaganda. — Relaciones con obras y círculos católicos de España y de fuera de España. = Cada sección se compondrá de un presidente, que formará parte de la Junta superior directiva, un vicepresidente, dos secretarios, y de los individuos que se designen para formar parte de ellas. = Las secciones darán cuenta de sus trabajos a la Junta superior directiva y a las reuniones generales de la Asociación. = 7.^a La *Unión católica* se propone, como fines prácticos inmediatos, favorecer, en lo que sus fuerzas alcancen... [aquí, lo transcrito arriba] carrera eclesiástica. = También preparará los trabajos para que, cuando el Presidente de la asociación y la Junta superior lo estimen oportuno, puedan celebrarse asambleas generales de la *Unión católica*. = 8.^a La *Unión católica* no responde ... [de nuevo lo transcrito arriba] superior directiva. = Si algún asociado emitiera doctrinas o ejecutare actos públicos que contrarian la doctrina o fines de la asociación, a juicio de los Prelados y Juntas directivas, dejará de pertenecer a la *Unión católica*. = 9.^a Se formarán reglamentos que determinen las relaciones de las Juntas entre sí y con la superior; los medios de allegar recursos para el sostenimiento y desarrollo de la Asociación, y para proveer a todo lo que sea necesario para los fines de la misma. = Madrid, 29 de enero de 1881, fiesta del insigne Doctor de la Iglesia san Francisco de Sales, bajo cuyo patrocinio se pone la *Unión católica*.—Juan Ignacio, Cardenal Moreno, *Arzobispo de Toledo*. El conde de Orgaz. El conde de Guaqui. El conde Canga Argüelles. León Galindo de Vera. León Carbonero y Sol. Alejandro Pidal y Mon. El marqués de Mirabel. = El gobernador civil de la provincia, en oficio de 3 del corriente, da traslado de una real orden, fecha 1.^o del que rige, y en que se aprueban las bases anteriores» (apud *Revista Popular*, XX (1881), 118-119).

⁵⁴ Cit. *ibidem*, 133 s.

⁵⁵ *Ibidem*, 198-199.

⁵⁶ Rescripto pontificio dirigido a la Junta Superior Directiva de la Unión Católica: «Amados hijos: salud y apostólica bendición. Con singular complacencia hemos recibido la obsequiosísima carta que nos enviastéis al llegar el día de nuestra exaltación al trono pontificio. En ella nos significáis vuestro designio de crear en España una sociedad a que habéis puesto nombre de *Unión católica*, y de organizarla con el objeto de fomentar los intereses católicos y combatir esforzadamente en defensa de nuestra Religión augusta. = Y por cierto nos hemos llenado de gozo al veros, acordándoos de las tradiciones de vuestros mayores, que sobre todo se gloriaban del nombre de católicos, unir vuestras fuerzas y proponeros utilizar todos los medios que permiten las leyes, para defender valerosos a la que es inmaculada Esposa de Cristo y madre vuestra amantísima, perseguida y lacerada en todo el orbe. Estimamos, pues, que de vuestra parte merece recomendarse con peculiar alabanza el cuidado que os proponéis tener, así de informar en la verdad y en la virtud a la adolescencia, tan acosada en torno por las asechanzas del error y del vicio, como de cultivar el corazón y el entendimiento de los artesanos, cooperar a los fines de los institutos de caridad, difundir escritos y libros ricos en sana doctrina, y atender a las necesidades de los obispos y de los párrocos. = Y para que la nueva sociedad no se pierda ni se ofusque en el laberinto de cavilaciones vanas, con excelente acuerdo habéis establecido que la condición precisa e indispensable para el ingreso ha de ser la firme y fiel adhesión a los preceptos y doctrinas propuestos en documentos solemnes de esta Sede Apostólica; y que sean expulsados el número de los socios aquellos que por sus palabras o por sus obras resulte que sinceramente no profesan aquellas doctrinas, o se desvían de tales mandatos. = Sobre todo aprobamos, y esto ha de contribuir sobremanera a la concordia y acrecentamiento de la misma sociedad, que, teniendo, como queréis tener, por presidentes vuestros a los Pastores de la Iglesia, sujetéis enteramente a su dirección y consejo todos

vuestros proyectos y todos vuestros trabajos. Esta, con efecto, es la institución divina de la Iglesia: que sea propio de los Obispos dictar las reglas: preceder en todo con la doctrina y el ejemplo. Es, en cambio, obligación de los fieles seguir las huellas de sus Pastores, abrazar con dócil ánimo sus preceptos y mostrarles su amor de hijos, afanándose en obras útiles con asiduidad y eficacia. = Si, pues, vosotros, sin acepción de personas, os desvivís por obedecer y seguir los mandatos y consejos de vuestros Prelados, manteniendo concorde el pensamiento y unidos los corazones por estrecho vínculo de caridad, vuestra sociedad, logrando de día en día mayor número de adictos y favorecedores, producirá hermosos y abundantísimos frutos ... = Dado en Roma en San Pedro, a los 19 de marzo de 1881, año IV de nuestro pontificado: (*ibídem*, 237).

⁵⁷ Vid. Máximo Filibero: *León XIII, los carlistas y la monarquía liberal. Cartas a los Sres. D. Ramón Nocedal, D. Alejandro Pidal y D. Valentín Gómez* Valencia, imprenta de Manuel Alufre, 1894, t. II, pág. 204 (BNM).

⁵⁸ Carta de León XIII a Nocedal, en respuesta a la que le dirigió este e 8-XII-1881, apud *Revista Popular*, XXII (1882), 21-22.

⁵⁹ *Ibídem*, 102-103. Las adhesiones de otros prelados, en las págs. 39-54-55, 69-70.

⁶⁰ Aclaración del obispo de Barcelona, cit. *ibídem*, 103.

⁶¹ *Ibídem*, 116.

⁶² Apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, XV (1882) 332 s. y 372, respectivamente.

⁶³ Apud León XIII: *Colección completa de las Encíclicas de Su Santidad*. Valladolid, Tip. y Casa Editorial Cuesta, s. d., págs. 200-202 (BSP).

⁶⁴ Vid. el mensaje apud *Revista Popular*, XXIV (1883), 168 s. Lagüera explicó más tarde su postura, en carta de 30-VII-1888 a León XIII: «Años atrás, por el correo y sin antecedente alguno», le fue enviada la misiva, que no firmó porque contenía «frases, con las cuales no estaba conforme», pese a su explícita adhesión al Pontífice (apud *Boletín Eclesiástico del Obispado de Osmá*, 13-IX-1888).

⁶⁵ *Exposición a S.S. León XIII acerca de la actual crisis religiosa por varios católicos españoles*, Barcelona, Tip. de la Casa Provincial de Caridad, 1887, págs. 8-9, 32, 54 (BCB), Jacobini, secretario de Estado de León XIII, lamentaría en efecto «la carta reservada por lo mal interpretada que ha sido por los obispos españoles» (apud Melchor Fernández Almagro: *Historia política de España contemporánea [Desde la Revolución de Septiembre hasta la muerte de Alfonso XII]*, Madrid, Ed. Pegaso, 1956, pág. 586).

⁶⁶ Cit. Filibero: *op. cit.*, II, 206.

⁶⁷ Vid. *Exposición...*, 32.

⁶⁸ Cfr. Navarro Cabanes: *op. cit.*, 140. Recoge la misma noticia Jaime Carrera Pujal: *Historia política de Cataluña en el siglo XIX*, t. V, Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1958, cuyo penúltimo capítulo es buena fuente de datos acerca de las luchas intelectuales católicas del Principado durante la segunda mitad del siglo.

⁶⁹ Marqués de Lema: *Mis recuerdos (1880-1901)*, Madrid, C.I.A.P., 1930, pág. 57. Vid. Melchor Fernández Almagro: *Cánovas. Su vida y su política*, 2.ª edición, Madrid, Ediciones Tebas, 1972, pág. 362 y s.

^{69b} Apud Fernández Almagro: *Historia política...*, I, 586 s.

⁷⁰ Cit. Francisco Pi y Margall y Francisco Pi y Arsuaga: *Historia de Es-*

^{70b} Apud Fernández Almagro: *Historia política...*, I, 589. Sobre la iniciativa de Alfonso XII, *ibídem*, 587 s.

paña en el siglo XIX, Barcelona, Miguel Seguí, Editor, 1902, t. VI, pág. 257.

⁷¹ Félix Sardá y Salvany: *El Liberalismo es pecado*, 5.ª ed., Barcelona, Librería y Tipografía católica, 1887, 183 págs. (BSP).

⁷² *Exposición...*, 28.

⁷³ Apud *Revista Popular*, 6-III-1884.

⁷⁴ *Ibídem*, 18-IX-1884.

⁷⁵ Vid. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 23-VI-1884.

⁷⁰ Cit. Pi y Margall...: *op. cit.*, VI, 260.

⁷¹ Vid. *Diario de las Sesiones... Senado*, 17, 18 y 21-VII-1884.

⁷² Vid. las protestas episcopales en la *Revista Popular*, XXVII (1884), 118-22, 132 ss., 164, 184. Según Florentino Pérez-Embid, «Cánovas quiso utilizar [la negociación con Italia] para obtener de la Santa Sede la desautorización de la prensa carlista» (*Los católicos españoles ante la política de la Restauración Liberal*, «Nuestro Tiempo», núm. 48, junio 1958, pág. 660). Entre la escasa bibliografía sobre el tema que esquematizamos, vid. David Ruiz González: *Alejandro Pidal o el posibilismo católico de la Restauración. Posiciones doctrinales y práctica política*, «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos», XXIII (1969); J. N. Schumacher: *Integrism. A Study in Nineteenth Century Spanish Politico-Religious Thought*, «The Catholic Historical Review», XLVIII (1962); José Manuel Cuenca: *El catolicismo liberal español: Las razones de una ausencia*, «Hispania», XXXI (1971), 581-592; del mismo: *Aproximación al estudio del catolicismo peninsular a fines del XIX*, «Atlántida», IX (1971), 314-336, donde se puede hallar una bibliografía más completa.

⁷³ *Diario de las Sesiones... Senado*, 8-I-1885. Vid. la documentación que sobre ello publica *La Cruz* (1885), I, 117-124.

⁷⁴ Apud León XIII: *op. cit.*, 302-304.

⁷⁵ Vid. *Exposición...*, 18, 40, 45.

⁷⁶ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 9, 14, 26-I-1885 y ss. Vid. Pablo de Azcárate: *La cuestión universitaria, 1875. Epistolario de Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón*, Madrid, Ed. Tecnos, 180 pp.

⁷⁷ Sobre bases bíblicas, la pastoral advertía que «todo ese catolicismo oficial se reduce a palabras que pasan; y si están consignadas en escritos, a letra casi enteramente muerta. Con el inequívoco lenguaje de los hechos [el Estado español] manifiesta elocuentemente el desprecio con que miró y mira a la Iglesia; el poco caso que hace de sus derechos imprescriptibles e inalienables ...; parece algunas veces que sólo quiere estar unido a ella para hacerla sentir sus desdenes. Desconoce frecuentemente su autoridad, conculca a menudo sus derechos, y cuando esto no sucede, se da libertad a todos para atacarlos y escarnecerlos. = Cuando la Iglesia hace llegar sus quejas a los poderes públicos, estos las desprecian, por muy moderadas que sean y muy fundadas que estén. Protesta contra la conculcación de sus derechos, y un silencio desdenoso, o a lo más evasivas corteses, es toda la justicia y reparación que ordinariamente obtiene. ... = Verá con amargo dolor el despotismo con que el Estado obliga a los padres que quieren dar una carrera literaria a sus hijos a llevarlos a los centros oficiales de enseñanza, en donde con el dinero de esos desgraciados se paga a los catedráticos que se los envenenan con toda clase de errores ... Los profesores marcados con el sello de la Bestia seguirán en sus cátedras de pestilencia, y, como la mujer perdida que vio San Juan sentada sobre el monstruo de siete cabezas... [sic] de color rojo y lleno de nombres de blasfemia, brindarán en esos centros con todas las abominaciones e inmundicias ... = En aquellas mismas situaciones en que, ofendidos brutal y fieramente los sentimientos religiosos del pueblo español por impías provocaciones, ha protestado con viril energía ..., el interés de esa revolución misma fue el móvil principal que impulsó a los partidos que ocupaban el Poder a hacer protestas de catolicismo y a dar algunas satisfacciones a la Iglesia ... = Por eso [el Estado] mitiga su fiera, finge moderación, parece que se retira y no quiere continuar ofendiendo la religión; pero todo esto no son más que arterias de la revolución, semejantes a las del leopardo en el desierto, para lanzarse con seguridad de éxito sobre su presa. ... El derecho de patronato, por ejemplo, le sirve sobremanera para premiar con piezas eclesiásticas servicios no prestados a la Iglesia en el santo ministerio, sino otros enteramente profanos, quizá flacos servicios hechos a tan Santa Madre; para llevar la ineptitud, y tal vez algo más, a corporaciones que deben constituir el consejo de los Prelados en la gobernación de la Iglesia; para conceder a otros, poco dignos tal vez, ascensos que no hubieran obtenido jamás por caminos regulares y canónicos; para llevar

quizá elementos de perturbación y desorden a donde reinaba la paz más completa, la más envidiable armonía». Va fechada en 23-I-1885 (apud *La Cruz* (1885), I, 262-282).

⁸⁴ Vid. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 19-II-1885.

⁸⁵ Nota del Ministerio de Gracia y Justicia, que al parecer transcribe tualmente las explicaciones de la Santa Sede (apud *La Cruz* (1885), I, 430-4

⁸⁶ Cit. *Exposición...*, 35.

⁸⁷ Cfr. despacho oficial del secretario de Estado al nuncio, apud *La Cruz* (1885), I, 521-524.

⁸⁸ Vid. *Revista Popular*, XXVIII (1885), 296 ss.

⁸⁹ Cit. *Exposición...*, 37.

⁹⁰ Cit. *ibidem*, 42. Vid. las cartas del arzobispo de París, de León XII de Pitra, entre otros numerosos lugares, en el *Boletín Oficial Eclesiástico Obispado de Pamplona*, XVIII (1885), 187 ss.

⁹¹ Vid. *Revista Popular*, XXIX (1885), 72-74.

⁹² Cit. Celestino de Pazos: *El proceso del integrismo. Refutación de errores que contiene el opúsculo del doctor Sardá y Salvany, «El Liberalismo pecado»*, Madrid, Imp. de E. de la Riva, 1886, pág. 30. (BSP). Tiene 123 pp.

⁹³ Apud *Revista Popular*, 21-I-1886.

⁹⁴ Filibero: *op. cit.*, II, 206.

⁹⁵ Cit. *Exposición...*, 49.

⁹⁶ Cit. *ibidem*, 50.

⁹⁷ Cit. *ibidem*, 51 y 53. Sobre los conflictos de fray Tomás Cámara, vid. Al Vázquez García: *El padre Cámara, figura preclara del episcopado español fundador de los estudios eclesiásticos superiores de Calatrava*, «Hispania 3 cra», XII (1954), 327-358.

^{97 b} Cit. *Los integristas en Valladolid (Septiembre de 1895) por Carl Moral y Roten*, Valladolid, Imprenta y Librería Religiosa, Nacional y Extra jera, 1896, pág. 19.

⁹⁸ Cfr. *Exposición...*, 5, y Navarro Cabanes: *op. cit.*, 52 s., 71. Sobre el ma tenimiento de estas luchas en Burgos, vid. *Escándalo integrista en Burgo Refutación de «La Fidelidad Castellana» por un amante de la verdad y un carta del Sr. Magistral D. Ignacio de Artiñano*, Burgos, Imprenta y estereotip de Polo, 1887, 53 pp.

⁹⁹ Cit. *Exposición...*, 56.

¹⁰⁰ «Manifestación de la prensa tradicionalista», 31-VII-1888, apud *El Tr dicionalista*, 19-VIII-1888 (ADN).

¹⁰¹ Vid. Navarro Cabanes: *op. cit.*, 46.

¹⁰² Apud *La Cruz* (1886), I, 316.

¹⁰³ «Manifestación...»

¹⁰⁴ Apud *La Cruz* (1886), I, 417. Reproduce éste y otros documentos sobr ello *ibidem*, 415-419.

¹⁰⁵ Vid. la declaración de Navarro Villoslada contra *La Verdad*, en 10-IV-1888; *ibidem*, 466 s.

¹⁰⁶ Carta de Carlos VII de 25-IV-1886, *ibidem*, 588 s.

¹⁰⁷ «Manifestación...»

¹⁰⁸ Orden del marqués de Valde-Espina al Delegado de Vizcaya, 20-III-1887 mandándole promulgar la nueva organización, cit. *ibidem*.

¹⁰⁹ Sardá: *El Liberalismo...*, 3.

¹¹⁰ Cit. *ibidem*, 3 s.

¹¹¹ Vid. todos estos documentos en *La Cruz* (1887), I, 584-607, 615-616, 806-808 y II, 86-87.

¹¹² Vid. *Exposición...*, 124-127, 148.

¹¹³ *El Siglo Futuro*, 30-III-1887, cit. *ibidem*, 28.

¹¹⁴ Cfr. *Revista Popular*, XXXII (1887), 346.

¹¹⁵ Vid. Filibero: *op. cit.*, I, 55.

¹¹⁶ *Exposición...*, 14 y 159 ss. Vid. la referencia bibliográfica completa en la nota 65 supra.

¹¹⁷ Vid. *Revista Popular*, XXXIII (1887), 20.

¹¹⁸ Apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, XX (1887), 212 s.

¹¹⁹ *Revista Popular*, 19-IV-1888. El *Boletín Eclesiástico del Obispado de Osma*, que había publicado en castellano y aplaudido la amonestación a Pazos (4-III-1887), publicó en latín y sin comentarios la rectificación (12-X-1887). El *Mensajero del Corazón de Jesús* (1888), I, 482, también interpreta este segundo escrito como defensa de la obra de Sardá.

¹²⁰ Apud «Manifestación...»

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² Apud *El Tradicionalista*, 29-I-1888 ss.

¹²³ Cita esas frases Melchor Fernández Almagro: *Historia política de la España contemporánea*. 2. 1885-1897, Madrid, Alianza Editorial, 1968, pág. 71.

¹²⁴ *El Tradicionalista*, 17-II-1888.

¹²⁵ Apud Filibero: *op. cit.*, I, 291. Sobre el viaje de Llauder a Venecia, cfr. Aurelio Martín Alonso: *Diez y seis años de Regencia (María Cristina de Hapsburgo-Lorena) (1885-1902)*, Barcelona, Casa Editorial Vda. de Luis Tasso, 1914, pág. 66. Es posible que la entrevista se realizara a raíz de una peregrinación catalana a Roma, en la que Llauder participó pero tras la cual permaneció en Italia, según hemos leído en la prensa coetánea.

¹²⁶ Cit. «Manifestación...»

¹²⁷ Apud *El Tradicionalista*, 22-VI-1888.

¹²⁸ Vid. la carta del subdelegado, de 26-VI, *ibidem*, 28-VI-1888.

¹²⁹ Cfr. «Manifestación...»

¹³⁰ *El Centinela de Palma de Mallorca*, *Lo Crit de la Pàtria*, *La Cruz de la Victoria*, *El Diario de Cataluña* de Barcelona, *El Diario de Lérida*, *El Diario de Sevilla*, *Dogma y Razón* de Barcelona, *El Eco Cascantino*, *El Eco de Queralt*, *El Estandarte Riojano*, *El Euskaro*, *La Fidelidad Castellana* de Burgos, *El Fiestista de San Sebastián*, *El Gorbea de Vitoria*, *El Integrista* de Gerona, *Lo Mestre Titas* de Barcelona, *El Morellano*, *El Norte Catalán* de Vic, *El Restaurador* de Castellón, *El Semanario de Figueras*, *El Semanario de La Bisbal*, *El Semanario de Tortosa*, *El Siglo Futuro* de Madrid, *El Tradicionalista* de Pamplona y *La Verdad* de Santander (firmantes de la «Manifestación...»). Tomamos la localidad de algunos periódicos de Navarro Cabanes (*op. cit.*, *passim*), que añade además, como adheridos a *El Siglo Futuro*, el *Diario de Calatayud*, la *Revista Católica* de Alcoy, *La Voz Ampurdanesa* de Figueras, *La Verdad* de Berga y *El Vasco* de Bilbao.

¹³¹ Vid. conde Rodezno: *Carios VII, Duque de Madrid*, Madrid, Espasa Calpe, 1929, pág. 147 ss., que valora quizá demasiado a los disidentes.

¹³² Vid. nota 100 supra.

¹³³ *Ibidem*. Sugiere el carácter heterodoxo de la «Manifestación», que ya le ha sido atribuido, el primer párrafo transcrito (vid. la obra clásica de M. X. Arquillière: *L'Agustinisme politique. Essai sur la formation des théories politiques du Moyen-Age*, París, J. Vrin, 1955).

¹³⁴ Cfr. Filibero: *op. cit.*, II, 207.

¹³⁵ Lo hemos hallado frecuentemente en *La Cruz* y la *Revista Popular*. Alude a ello Melchor Fernández Almagro: *Historia...*, 2, 73.

¹³⁶ Constan en la última página de todos los números de la *Revista Popular*.

¹³⁷ Hemos comparado la serie que publicamos con el índice general de precios en esos años elaborado por Juan Sardá: *La Política Monetaria y las fluctuaciones de la Economía española en el siglo XIX*, Madrid, C. S. I. C., 1948, pág. 305.

¹³⁸ Vid. *Revista Popular*, XXXV (1888), 43, en julio del 88.

¹³⁹ Publicados *ibidem*, XXXVII (1889), 402. Entre el 15 de junio y el 20 de julio de 1888, por su parte (mes crucial en la crisis integrista) *El Tradicionalista* de Pamplona declara perder 119 suscriptores y ganar 167 (cfr. 20-VII-1888).

¹⁴⁰ Cfr. *Revista Popular*, XXXVII (1889), 402.

¹⁴¹ Circular del obispo de Salamanca, apud *La Cruz* (1889), I, 594.

^{141 b} Cit. *Los integristas en Valladolid...*, 51.

¹⁴² [Antonio María de Cascajares y Azara]: *La Organización Política de los Católicos Españoles*, Valladolid, Est. tip. de H. de J. Pastor, 1894, pág. 20-28 (APR/SpA).

¹⁴³ Cfr. *Revista Popular*, XXXIII (1887), 257.

¹⁴⁴ Apud *Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Madrid-Alcalá*, 7-VIII-1888.

¹⁴⁵ Carta de Sancha al episcopado español, 20-X-1888, apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 30-XI-1888.

¹⁴⁶ León Carbonero y Sol: *Crónica del Primer Congreso Católico, Nacional Español*, Madrid, Establecimiento Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 1889, pág. 8 (BCR). Como las demás *Crónica(s)* de los congresos redactadas por León Carbonero y Sol, se conservan en BCR encuadradas dentro de los tomos de *La Cruz*. No tienen nada que ver con las *Crónica(s)* oficiales de las mismas asambleas, que citamos más adelante.

¹⁴⁷ Según el *Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Madrid-Alcalá*, (1888), 516.

¹⁴⁸ *Ibidem*, 555.

¹⁴⁹ Vid. los componentes de la primera Junta Central *ibidem* (1889), 7-9.

¹⁵⁰ Cfr. *ibidem* (1888), 440.

¹⁵¹ Vid., en este sentido, la carta del obispo de Osma, Lagüera, al arzobispo de Burgos, 17-X-1889, apud *El Siglo Futuro*, 22-XII-1898.

¹⁵² «... esperamos que su realización sea conforme a nuestros deseos y [tienda] a aumentar más y más nuestra alegría, porque sabemos que los católicos españoles..., prescindiendo de opiniones políticas, prepararán el camino para la celebración de esa Asamblea, en la que tratarán especialmente de las cosas que atañen a la defensa de la Religión y al bien de la Iglesia. Pero lo que más nos agrada es que en este asunto ... [aquí lo transcrito en el texto] ... autores, sino bajo la dirección y autoridad de dichos Prelados. ... = Pero estos frutos han de resultar mucho más abundantes cuanto más firmemente se persuadan los fieles españoles, de que esto exige que, pospuestos los respetos humanos, se esfuercen más y más con sus estudios y fuerzas en defender los derechos de la Religión y la gloriosa causa de la Iglesia. = ... Para aconsejar más esta unión dirigid vuestras exhortaciones y emplead vuestra autoridad, a fin de evitar toda causa de división» (carta de León XIII a Sancha, 19-IV-1889, apud *Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Madrid-Alcalá* (1889), 229 s.). Se habló entonces de los esfuerzos de Crispi, jefe del Gobierno italiano desde 1887, para conseguir que el Gabinete español de Sagasta aplazara el Congreso (cfr. *Revista Popular* XXXVI (1889), 14). Francesco Crispi había acentuado su actitud anticlerical ante los trabajos de aproximación de León XIII a la III República francesa que venían a incidir sobre la política italiana galófoba justificada en la ocupación francesa de Túnez, en 1881, contra las aspiraciones colonialistas del Gobierno de Roma.

¹⁵³ Vid. *Revista Popular*, XXXVI (1889), 198.

¹⁵⁴ Vid. Joaquín Sánchez de Toca: *El Congreso Católico y la libertad de enseñanza*, Madrid, Tip. de Manuel Ginés Hernández, 1889, 288 pp. (BCM), y *Crónica del Primer Congreso Católico Nacional Español. Discursos pronunciados en las sesiones públicas de dicha asamblea, celebradas en la iglesia de San Jerónimo de Madrid. Abril y mayo de 1889*, Madrid, Tip. de los Huérfanos, 1889, 2 volúmenes. No hemos hallado otra documentación que la incluida aquí y en los boletines de la diócesis, pese a los buenos oficios de don Vicente Serrano, en el Archivo Diocesano de Madrid.

¹⁵⁵ Carta de León XIII, de 29-IV-1889, ante la retractación de monseñor Bonomelli, obispo de Cremona, de su artículo «Roma, Italia y la realidad de las cosas», publicado en *La Rassegna Nazionale* de Florencia (apud *Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Calahorra y la Calzada*, 21-VI-1889).

¹⁵⁶ Conclusiones del Congreso, apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 29-V-1889.

¹⁵⁷ Vid. *Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Madrid-Alcalá* (1888), 563. Parece confundir *El Movimiento* con *El Universo*, Constantino Bayle: *El segundo*

Marqués de Comillas, Don Claudio López Bru, Madrid, Administración de Razón y Fe, 1928, pág. 194.

¹⁵⁸ Bases del acuerdo, apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 23-VII-1889.

¹⁵⁹ Circular de Sancha, apud *Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Madrid-Alcalá*, 20-VIII-1889. Notificada además que la Junta eligió *El Cruzado* como «publicación económica de propaganda católica», aunque todavía no habían sido firmadas las bases del acuerdo con su director.

¹⁶⁰ Cfr. Sánchez Portero: *Noticia y antología de poetas bilbilitanos*, Calatayud, s. i., 1969, pág. 93-94; José Navarro Cabanes: *op. cit.*, 49; Fernández Almagro: *Historia...*, 2, 138; Atanasio Sinués Ruiz: *Pedrola, Notas históricas en torno a la Parroquia*, Pedrola, Cooperativa Comarcal del Campo «San Roque», 1968, pág. 375-377.

¹⁶¹ León XIII: *op. cit.*, 432 ss.

¹⁶² Apud *Crónica del segundo Congreso Católico Nacional Español...*, Zaragoza, Tipografía de Mariano Salas, 1891, pág. 21 ss. (BDN).

¹⁶³ Apud *La Cruz* (1890), I, 386 ss.

¹⁶⁴ Cfr. José Luis L. Aranguren: *Moral y sociedad*, Madrid, Edicusa, 1965, pág. 179.

¹⁶⁵ Apud *Crónica del Segundo Congreso...*, 27 ss.

¹⁶⁶ *Ibidem*, 33 s. Todavía reaparecería, no obstante, la polémica, en junio de 1890, en torno a si la Providencia de Dios se manifestaba en dar o no dar el triunfo a las causas justas o injustas (vid. *La Cruz* (1890), II, 66).

¹⁶⁷ Apud *Crónica del segundo Congreso...*, 278. Cfr. *ibidem*, XXIX s., 35 ss., 79 ss.

¹⁶⁸ *Ibidem*, 663 ss. Cfr. XXXI, 35 ss., 43, 645, 649 ss.

¹⁶⁹ *Ibidem*, 696 ss. Parece que el mensaje del Congreso a León XIII fue redactado por el padre Miguel Mir, jesuita, sin aprobación previa de sus superiores, y que hubo de abandonar la Compañía por ello. Mir publicó su carta dimisoria y la contestación, y luego un documento justificativo. Reconciliado más tarde, volvería a la Compañía, en la que murió en 1912 (cfr. *Heraldo de Madrid*, 30-XII-1912). Vid. Ramón Ruiz Amado: *Don Miguel Mir y su Historia interna documentada de la Compañía de Jesús. Estudio crítico*, Barcelona, Librería Religiosa, 1914, 182 pp. (BDN). El mensaje enfatizaba la adhesión al Papa y los obispos: «En el orden de las cosas espirituales encomendadas a la Iglesia no queremos pensar, ni sentir, ni intentar nada que no venga mandado y aprobado por su autoridad.» E insistía también en el «vil e indecente ... espionaje, que se ejerce en las personas que por razón de su oficio están cerca de Vuestra Santidad» y sobre el Papa mismo (apud *Crónica del segundo Congreso...*, 67-74).

¹⁷⁰ Apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 2-VI-1891.

¹⁷¹ Vid. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 25-I-1890, y *La Cruz* (1890), I, 192.

¹⁷² Cfr. *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 2-I-1891.

¹⁷³ Cfr. *ibidem*, 2-VI-1891.

¹⁷⁴ Alocución del obispo de Salamanca, 31-III-1892, apud *La Cruz* (1892), I, 489 s.

¹⁷⁵ En 1895 la *Revista Popular* recoge la noticia de que el acaudalado salmantino Fulgencio Tabernero ingresa en la Compañía de Jesús (XLIX) (1895), 96). No es claro si es el mismo «opulento hacendado de Salamanca», homónimo, casado y con tres hijas en los años 80, «de arraigadísimas creencias y sólida piedad», del que habla E. Roig y Pascual: *La madre María del Sagrado Corazón de Jesús*, 2.^a ed., Barcelona, Balmes, 1940, pág. 249.

¹⁷⁶ Vid. la semblanza que de su propio padre traza José María Gil Robles: *No fue posible la paz*, Barcelona, Ed. Ariel, 1968, 851 pp.

¹⁷⁷ Alocución..., cit. nota 174 supra, 490.

¹⁷⁸ Decreto del obispo de Salamanca, 1-IV-1892, apud *La Cruz* (1892), I, 486.

¹⁷⁹ Vid. *Una polémica instructiva* [Barcelona], Imp. Diario Mercantil, [1892], 56 pp. (BEV), contra Sardá, por esa transacción. Aunque la *Revista Popular*

nunca abandonaría su actitud tradicionalista a ultranza, ahora al margen de la lucha política.

¹⁸⁰ Vid. Ollero Tassara: *En torno...* (nota 33 supra).

¹⁸¹ Cfr. *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 8-X-1891.

¹⁸² Apud *Crónica del tercer Congreso católico nacional español...*, Sevilla, Est. Tip. de El Obrero de Nazaret, 1893, pág. 11 (BSP). Cfr. *ibidem*, 7 ss.

¹⁸³ *Ibidem*, 75, ss.

¹⁸⁴ Cfr. *Crónica(s)* oficiales citadas de los tres primeros Congresos católicos (notas 154, 162 y 182 supra); *Crónica del cuarto Congreso nacional español...*, Tarragona, Establecimiento tipográfico de F. Arís e hijo, 1894; *Crónica del 5.º Congreso Católico Español, celebrado en Burgos el año 1899*, Burgos, Imprenta y Estereotipia de Polo, 1899; *Crónica del Sexto Congreso Católico Nacional Español*, Santiago, Imprenta del Seminario Central, 1903 (BSP), para los datos de socios y, en el tercero y cuarto Congreso, de prelados. Sobre el número de prelados asistentes al primero y segundo, cfr. León Carbonero y Sol: *Crónica del primer Congreso...*, 561, y del mismo: *Crónica del segundo Congreso Católico, Nacional Español celebrado en Zaragoza*, Madrid, Establecimiento Tipográfico «Sucesores de Rivadeneyra», 1890, pág. 372. El mismo, en su *Crónica del tercer Congreso Católico, Nacional Español celebrado en Sevilla en 1892*, *ibidem*, 1892, pág. 291, habla de 25 y no 27 prelados (las Crónicas de Carbonero, en BCR, encuadradas en los tomos de *La Cruz*). La *Revista Popular*, L (1896), 269, especifica que al cuarto asistieron 18 obispos, 2 arzobispos, 2 cardenales y el nuncio, con 5.100 socios.

II. EL PARTIDO CATOLICO, 1889-1896

Conten. 144 y p. 145
7 AGP

1. La política de Cascajares y Azara

En verdad, la desunión de los católicos culminante en 1889 no era problema exclusivamente español. Las Iglesias de Francia, de Italia, de Portugal, de Bélgica, presenciaban por entonces polémicas y escisiones semejantes. Lo mejor de las preocupaciones de León XIII estaba dirigido, de hecho, a esa cues ión, aunque sólo Bélgica y Alemania ofrecían acaso un ejemplo positivo de acción intraestatal verdaderamente efectiva, concretada en sendos partidos confesionales en las dos décadas anteriores. Tal vez movido por ello, el mismo año 89 al menos, el Pontífice procuraba en Francia, «dans le cadre des institutions existantes, la création d'un parti conservateur attirant à lui tous les gens d'ordre, incroyants compris. Parti conservateur, non pas réactionnaire, qui devrait à la fois renoncer à tout espoir de relever de trône et s'attacher à l'étude des problèmes sociaux»¹. Y la idea fue enseguida adoptada en España por el obispo de Calahorra, monseñor Cascajares.

Individuo de familia noble, Antonio María de Cascajares y Azara había realizado una carrera eclesiástica cumplidamente aristocrática. Nacido en Calanda de Aragón en 1834, en un hogar de ascendencia política densa, era nieto del diplomático José Nicolás de Azara² y hermano de aquel diputado progresista, Félix Cascajares, que pretendió poner de acuerdo en 1867 a carlistas y revolucionarios para derrocar a Isabel II³. Ingresó en el 46 en el Colegio de Artillería de Segovia y, diez años después, fue promovido a teniente, con destino en Madrid⁴, cuando el enlace de su hermano Felipe con doña María de Santa Pau y Cascajares, de quien el futuro obispo parece estaba enamorado, debió pesar en su carácter temperamental hasta decidirle por la veste eclesiástica⁵.

En 1860, apenas recibida la tonsura, obtuvo un beneficio en su lugar natal. En adelante, desempeñó oficios curiales en Zaragoza y en las catedrales de Toledo y Burgos. En 1881, Alfonso XII lo presentaba para regir la sede e iglesia prioral de las órdenes militares en Ciudad Real y, dos años más tarde, para la episcopal de Calahorra, adonde llegó en julio de 1884⁶.

Su raigambre alfonsina no pareció apartarle en principio del común patrón antiliberal. En 1889, enfocó una multitudinaria peregrinación al santuario de Valvanera (expresión de la resurrección romera típica de esta época) «como el punto de partida para emprender desde luego una especie de Santa Cruzada contra el enemigo común de Dios y de su Cristo: «el liberalismo». Que no aludía, sin embargo (aquí su actitud ante los conflictos tradicionalistas coetáneos), «únicamente de determinadas formas políticas de gobierno, en el régimen de la sociedad civil, y de esta o aquella dinastía reinante o de la que le disputa el trono, fundándose en derechos que tiene, con más o menos razón, por justos y legítimos»⁷.

Era obligación de los católicos «obedecer a las autoridades constituidas

non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam ... En las cuales palabras, *propter conscientiam*, San Pablo nos da claramente a entender la obligación que la misma conciencia nos impone de *no obedecer* cuando contra ella nos manda cosas en las que no podemos complacer a los hombres, rindiendo tributo a la torpe adulación y vil servilismo, pero desagradando a su divina Majestad»⁸.

3 Su transigencia quedaba, pues, un tanto diluida. En 1891 era aún alabado «por su enérgica condena del maldecido *Liberalismo*»⁹. Pero entonces ya había madurado un proyecto político nuevo para dirimir el problema católico.

La iniciativa de Cascajares surgía en realidad de un entresijo que debordaba la cuestión religiosa. La postura de los integristas frente a la jerarquía había tomado aspecto que fue juzgado en el 89, por algunos obispos y por la prensa confesional moderada, como verdadero cisma¹⁰. En el 90, las exhortaciones activistas electorales de la encíclica *Sapientia christianae* coincidieron con la promulgación del sufragio universal consagrada por el Partido Liberal de Sagasta. De aquella coyuntura partiría, en efecto, un movimiento electoral católico, expresado en numerosas pastorales de los años 90 y 91, que marginaron definitivamente el abstencionismo preconizado por los integristas como secuela de su repudio de la Constitución liberal de 1876¹¹.

Pero el criterio de la jerarquía en esas pastorales fue bien diverso. En febrero de 1890, al referirse a la desunión de los católicos, el obispo de Astorga Grau y Vallespinós se limitaba a aconsejar «*prudencia de espíritu* que dicta lo oportuno en cada caso»¹². El de Plasencia, Casas Souto, insistía en septiembre en el mismo problema, para recordar, sin embargo, ante las elecciones de 1891, el carácter liberal, condenable, por tanto, de los partidos Liberal y Conservador y, desde luego, de los republicanos¹³.

Es difícil determinar hasta qué punto esta sensibilización de las fuerzas católicas venía impuesta además por un giro económico, que acaso estuvo en el sustrato de la postura general antiparlamentaria de fin de siglo.

En el otoño de 1891 el período de la *febre de l'or* parecía haberse quebrado. «La situación económica era verdaderamente difícil.

Los cambios sobre las plazas extranjeras subían; los valores del Estado bajaban; la industria vinícola estaba seriamente amenazada por el feroz arancelario de Francia; provincias enteras clamaban por que se les socorriese: las del Mediodía sufrían nuevas inundaciones; el país entero vivía en la más honda alarma. Se lamentaban los presentes, se temían los futuros males»¹⁴. Y era en esta psicosis donde venía a articularse el nuevo planteamiento político.

70 Cascajares comunicó su proyecto de 1891 a la reina Cristina en un *memorandum*¹⁵, poco relacionado en realidad con el estilo clerical de sus escritos anteriores. En él se proponía relatar «el estado actual de los partidos en España» y advertir que, respecto a los primeros años del reinado de Alfonso XII, ese estado era ahora «crítico y premonitorio de una descomposición inevitable», que habría de suceder en un futuro «acaso más próximo de lo que generalmente se cree».

Centrado el documento en el bipartidismo del régimen de la Restauración, el grupo de Cánovas, «que lleva el nombre poco simpático del partido liberal-conservador», vivía sólo, en opinión tajante del prelado, «de la autoridad personal que sobre él ejerce su jefe, y del interés egoísta de conservar el mando, y con el mando todas las ventajas puramente materiales que a sus hombres proporciona». «Otro período de oposición, aunque fuese menos largo, daría definitivamente al traste con la existencia de aquella agrupación política y, por lo tanto, con la jefatura del señor Cánovas del Castillo.»

A juicio del obispo, la creación del Partido Conservador sí había estado suficientemente justificada en un principio: por la misión de reorganizar el Estado, «cerrando la dolorosa época de la Revolución de septiembre, calmando las pasiones enardecidas y dirigiendo la actividad y los ideales mismos del pueblo español, desgarrado durante años por la sangrienta y ruinosa guerra civil, hacia las útiles tareas de la paz». Pero esta misión no había podido ser cumplida del todo. La oposición provocada por la tolerancia religiosa de la Constitución de 1876 entre carlistas, pidalianos y moderados históricos, «contuvo no poco la marcha restauradora de la política del señor Cánovas, y le movió a crear un nuevo partido liberal que le hiciese el juego en el llamado turno pacífico de las instituciones, y abriese las puertas de la monarquía legítima a muchos de los revolucionarios de septiembre, más cansados que arrepentidos de su obra demoledora de 1868».

«Realizado todo esto, llamado al Poder el señor Sagasta [en 1881¹⁶], y demostrando durante la primera época de su dominación que su partido, a pesar de lo erróneo de sus principios fundamentales, era un partido de gobierno, el antiguo prestigio del señor Cánovas del Castillo y de la poderosa agrupación que dirigía fue disminuyendo visiblemente hasta el punto de que ya al señor Cánovas no se le consideraba como el *hombre necesario* para la existencia y consolidación del Trono, ni al partido conservador más que como uno de los dos que habían de turnar constitucionalmente en el Poder.» Por ello, «su misión podía darse por terminada, como su política podía ser sustituida por otra sin peligro para la sociedad y para las instituciones».

El prestigio de Sagasta, además, quedó resellado en su segunda etapa de gobierno, inaugurada en 1885, con la muerte de Alfonso XII. Durante los años siguientes el caudillo liberal «afirmó resueltamente la opinión que ya se había formado respecto de sus dotes de gobierno atrayendo a la legalidad importantes personalidades democráticas, conquistando el apoyo del mejor estadista de los republicanos, el señor Castelar¹⁷, y procurando no tener rozamiento ninguno con la Iglesia, a la cual dejó que libremente estableciera nuevos institutos religiosos, que se reuniera en Congresos católicos, que proclamara la necesidad del poder temporal del Papa y que derramase por todas partes su bienhechora y saludable influencia».

Perdida, pues, la baza política, sólo un programa acertado para remediar los crecientes problemas económicos (que constituían «una gran cuestión que tiene hoy el privilegio de sobreponerse a las demás, porque es cuestión de vida o muerte») hubiera podido dar nueva vida al organismo

conservador. Pero a pesar de las decisiones adoptadas para reorganizar la Hacienda en los primeros años de la Restauración, que la heredó exhausta de las convulsiones revolucionarias, «o las medidas aquellas fueron insuficientes, o las circunstancias de Europa han influido desastrosamente sobre nosotros, o la iniciativa individual no ha suplido las deficiencias del gobierno; ello es que hace tiempo nos encontramos en una crisis formidable, que muchas provincias agrícolas están completamente arruinadas, que las industrias desfallecen, que el comercio arrastra una vida miserable, que los impuestos agobian a los contribuyentes y que el dinero no busca más que esa renta infecunda del papel del Estado, que es hoy estímulo verdaderamente escandaloso para la holgazanería de los ricos y bien acomodados, y será mañana, si Dios no lo remedia, causa inmediata de la miseria del país».

En consecuencia, «se necesitaba un gran hacendista, enérgico e inteligente, que se impusiera al ministerio entero. El partido conservador no lo tiene; sus soluciones económicas no satisfacen a nadie», y, por tanto, su porvenir, «en un plazo no remoto», estaba en la disolución.

«Mayores probabilidades de vida —proseguía el obispo— tiene seguramente el partido liberal fusionista que acaudilla el señor Sagasta», a juzgar por su prestigio y por la progresiva incorporación a sus filas de tantos elementos no alfonsinos. «Pero no se consiguen ciertas ventajas del momento sin que surjan graves inconvenientes para lo porvenir. Esa atracción llevada a cabo con feliz éxito por el señor Sagasta ha ocasionado disidencias importantes en el seno de su partido, donde hay hombres de valía que no miran con buenos ojos el predominio de los antiguos demócratas.» Con su acción debilitadora del poder monárquico, «se corre riesgo inminente de que a la hora en que los republicanos, hoy discordes y divididos en cien fracciones distintas, caigan en la cuenta de que deben unirse contra el trono, aunque en lo demás no se entiendan, el trono desaparezca sin estrépitos y surja la república como una planta cuya simiente ha ido transformándose con el calor y la humedad en el seno de la tierra para salir luego a la superficie».

No era, decía además, «únicamente la división de tendencias políticas lo que produce el malestar del partido liberal fusionista; es también la diversidad de criterios económicos»: Gamazo se había manifestado rotundamente proteccionista y, en cambio, Moret, uno de los hombres más destacados del liberalismo, enarbolaba de antiguo el criterio librecambista. «En éste y en otros puntos —afirmaba aludiendo a un rasgo importante de la Restauración— está más cerca el señor Gamazo del señor Cánovas que del señor Moret.» Y, por eso, tampoco el Partido Liberal sería capaz de resolver el problema económico, única cuestión que podía hacer a un Gobierno, en opinión del prelado, popular y útil.

«No es preciso tener el don de profecía para vaticinar que, después de algunos años de mando, no muchos, al partido liberal-fusionista le cabrá poco más o menos la misma suerte que al partido liberal-conservador y que la opinión pública y el interés público agujoneados fuerte e incessantemente por el irresistible acicate de la necesidad de la vida material, pedirán a gritos algo nuevo, algo desconocido que a lo menos les de la

esperanza de salir por cualquier parte y por cualquier camino de la espantosa situación en que se encontrarán seguramente, si antes no acude a poner el oportuno remedio una mano enérgica, autorizada y generosa, capaz hasta de saltar por encima de las leyes antes que consentir en la ruina de la monarquía y de la patria»¹⁸.

Para resolver tal estado de cosas el obispo de Calahorra proponía a la reina, en el mismo *memorandum* del 91, la formación de un partido fuerte¹⁹. Y los acontecimientos sucedidos en los últimos meses de 1891 mostraron de inmediato su oportunidad:

Los temores albergados por el prelado sobre la cohesión del canovismo tenían fundamento en algunos sucesos de años anteriores. Ya en 1879 las figuras de Romero Robledo y de Francisco Silvela se perfilaban por su personalidad y su prestigio como apoyos de Cánovas y presuntos herederos, a largo plazo, de la jefatura del partido. Pero esa misma preeminencia resaltaba también las diferencias entre ambos. Romero Robledo «respondía bien a la conformidad de gran número de españoles con vivir, más o menos alegremente, al día, sin experimentar la necesidad de resolver problema alguno»²⁰, frente a lo cual la elegancia y sensibilidad de Silvela no parecían ofrecer posibilidad de entendimiento.

Cánovas no lo creyó así. En 1884 incluyó a ambos en un mismo Gabinete. Pero la cesión del gobierno a Sagasta, realizada a la muerte de Alfonso XII por el jefe conservador, indispuso a este con Romero Robledo, que no encontraba justificación para el abandono y que formó, en 1885, un nuevo partido, el Reformista, acaso sin más fin que el poder. En 1889, convencido, sin embargo, de la inutilidad de sus esfuerzos por aquel camino, que tampoco le llevaba a la presidencia del Consejo, Romero abandonó la idea reformista y comenzó a desandar lo andado.

Pero, en 1891, cuando los círculos políticos comenzaban a considerar cosa hecha su retorno al Partido Conservador, Silvela ya había aireado sus principios con demasiada claridad. Pretendía conseguir economías en los gastos, reajuste de los servicios, criterio recto en la administración y empeño para acabar con los vergonzosos amañes electorales, que eran, justamente, la especialidad de Romero Robledo, que lo hacía atractivo a los ojos de Cánovas ante el sufragio universal que acababa de ser legislado. Sin esperar a ser dimitido, manifestó Silvela su desconformidad con la reconciliación y abandonó el Gobierno. Planteado el asunto en el Consejo de 19 de noviembre de 1891, Cánovas pudo reorganizar el Gabinete, con Romero Robledo como ministro de Ultramar y las dimisiones del silvelista Fernández Villaverde, ministro de Gracia y Justicia, y del propio Silvela. Este, con renovada e infecunda elegancia, pidió a sus seguidores que mantuvieran la unión y disciplina del partido²¹: lo que, a pesar de todo, venía a confirmar urgentemente las advertencias del obispo aragonés.

En diciembre, y a petición propia²², monseñor Cascajares fue preconizado arzobispo de Valladolid²³. Pero la intensidad de aquellas fechas no le impidió comprender la gravedad y la oportunidad que el momento político le brindaba. El *memorandum* sobre la situación de los partidos legales —explicó a la reina María Cristina en una extensa carta de 24 de diciembre de 1891— estaba escrito antes de la incorporación de los rome-

ristas al Partido Conservador y de las dimisiones de Silvela y Fernán Villaverde, «personas ambas, pero muy singularmente la primera, de notable representación y de no menor importancia en el partido gobernante». Pero estos acontecimientos, lejos de contradecir aquellas ideas, habían ratificado su convicción «de que el actual partido conservador apenas diferencia del partido liberal, y vienen, por consiguiente, a hacer más necesaria la formación de otro grupo fuerte y poderosamente cimentado en los grandes principios religiosos y sociales que sirva de verdadero contrapeso a los atrevimientos y temeridades del partido liberal cuyas complacencias con las fuerzas más serias del republicanismo pueden en un dado poner en grave riesgo a la institución monárquica».

Cascajares insistía también a la reina en la gravedad del problema económico, latente una vez más, ahora por la próxima expiración, prevista para el 1 de febrero de 1892, del tratado de comercio hispanofrancés. El hecho había de dañar seriamente la industria vitivinícola española si no era renovado el convenio, como se temía, «de resultados de las tarifas prohibitivas votadas en las cámaras francesas». La cuestión económica se imponía en la política mundial de tal manera —argüía el obispo en la misma carta— «que el poderoso Emperador de Alemania no ha vacilado en colocar, con inusitadas alabanzas, al Canciller Caprivi casi por encima del mismo príncipe de Bismark, sólo porque ha conseguido que el Parlamento votara sus proyectos aduaneros. Toda Europa está hoy preocupada con esta cuestión, y así no debe extrañar a V. M. que yo insista en creer, según dije en el documento de referencia, que en España caerá indefectiblemente todo partido que no se aplique con energía, con acierto y con el más elevado patriotismo a la solución de aquel arduo y trascendental problema».

Faltaba únicamente crear el instrumento de la reforma; porque, a la vista de la situación política española, «sólo una nueva agrupación compuesta de los elementos más sanos y a la vez más discretos del país, puede llevarla a cabo». ¿Era posible concebir esperanzas sobre su formación? La crisis conservadora había venido a dar la respuesta: «La cooperación de dos hombres públicos tan importantes como los señores Silvela y Villaverde, asociados a otros muy valiosos con que cuenta todavía el partido conservador juntamente con no pocos que permanecen alejados de la política militante, facilitarían mucho la realización del proyecto, y más si lo tomaba bajo su poderosa tutela el general Martínez Campos que ya debe estar persuadido de lo poco que sirven para los altos fines de una verdadera reconstitución política y administrativa esas estrellas errantes del partido liberal que han entrado en la órbita del que capitanea el señor Cánovas del Castillo»²⁴.

El propio Cascajares anunciaba a la reina, en el texto que comentamos, su propósito de conferenciar en Madrid, durante su próxima visita a la corte, con los personajes encartados. Pero motivos que no conocemos debieron de impedir que el proyecto siguiera adelante²⁵. En 1893, cuando Alejandro Pidal insistió a Silvela en la necesidad de que se reconciliara con Cánovas, don Francisco le contestó con palabras que, si en un principio parecían coincidir con las del ya arzobispo de Valladolid, después las re-

chazaban tajantemente: «Lo que Cánovas debería hacer es retirarse. Ayudando a Martínez Campos usted, Villaverde y yo, en poco tiempo organizaríamos un partido conservador amplio, que sería robustísimo, al que podría dársele un nombre nuevo, llamándole, por ejemplo, Unión Conservadora.» «Bien sé que esto no es posible, porque él no se retira por nada del mundo ... Descartada esa solución, que es la única buena, no examino la de reorganizar yo otro partido, porque no soy, a Dios gracias, tan mentecato que haya pensado jamás en tal desatino» ²⁶.

2. *El Partido Católico*

Durante los cuatro primeros años de su arzobispado, comenzado el 9 de mayo de 1892, en que entró solemnemente en Valladolid, los esfuerzos de Antonia María de Cascajares y Azara respondieron a una densa preocupación pastoral, que si en algunos escritos le animó a insistir en la necesidad de la unión de los católicos pedida por el Papa ²⁷, nunca dejó entretener públicamente lo que en privado manifestó a la reina.

La ocasión para comenzar a hacerlo surgió en abril de 1894. En el muelle de Valencia, algunos de los 13.000 romeros que participaban en la peregrinación a Roma organizada por el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras y por el arzobispo levantino fueron apedreados por grupos republicanos, «liberales y francmasones» según la prensa tradicionalista ²⁸. El 14 de abril, el arzobispo y los obispos de la archidiócesis vallisoletana dirigieron una protesta al presidente del Consejo de Ministros por ello ²⁹. Y el 15, el propio monseñor Cascajares fechó una pastoral en la que, a partir de aquellos sucesos, sugería la conveniencia de organizar a los fieles «en apretado haz, únicamente como católicos», prescindiendo de los partidos, «para la defensa de los intereses católicos en todos los terrenos legales» y, con ello, «la regeneración de nuestra desgraciada patria» ³⁰.

La alusión volvía a ser oportuna, porque, según notificó la agencia de noticias Fabra, se esperaba que el discurso que el Papa iba a dirigir a aquellos peregrinos fuera «de gran importancia social y política», relacionada con esos problemas. Contendría alusiones «a la situación especial de los católicos españoles, invitándoles a la armonía y a la unión, e indicándoles la conveniencia de no buscar nunca soluciones por medios violentos o extralegales» ³¹.

«Es necesario —dijo, en efecto, León XIII el 18 de abril de 1894 a los romeros españoles— que den tregua a las pasiones políticas que los descomiendan y dividen, y dejando a la Providencia de Dios dirigir los destinos de las naciones, obren enteramente acordes, guiados por el Episcopado, para promover por todos los medios que las leyes y la equidad permitan, los intereses de la Religión y de la patria, y compactos resistan a los ataques de los impíos y de los enemigos de la sociedad civil.

Es además deber suyo sujetarse respetuosamente a los poderes constituidos, y esto se lo pedimos con tanta más razón cuanto que se encuen

tra a la cabeza de vuestra noble nación una reina ilustre, cuya piedad devoción a la Iglesia habéis podido admirar» ³².

Nunca hasta entonces había expresado públicamente el Papa su deseo de acatamiento a la legalidad liberal española de manera tan clara. Pero tampoco ahora sus palabras tuvieron una acogida unánime. Los transaccionistas vieron en ellas toda una orden de adhesión a las instituciones de la Restauración alfonsina. Y, en consecuencia, *La Unión Católica*, órgano de los pidalianos, y *El Movimiento Católico*, portavoces máximos del colaboracionismo, declararon desde sus columnas terminado el pleito dinástico. Pero esto sólo dio comienzo a una agria polémica con la prensa carlista, que no consideró la alocución pontificia más que como mandato de contemporización con el régimen establecido.

«Ya no son posibles —sentenciaba *El Movimiento* el 19 de abril de 1894— las tergiversaciones, ni los distinguos, ni los sofismas» ³³. Durante los primeros días de mayo publicó una serie de artículos de Ortí y Lara sobre «El deber de los católicos españoles con los poderes constituidos». El 8, «fin, al desconfiar de una especie difundida por *El Estandarte*, según la cual Carlos VII había escrito al Papa para advertirle que no pensaba hacer declaración de sus derechos, el diario de Valentín Gómez sugería que el pretendiente había de renunciar a ellos públicamente: puesto que, de lo contrario, contradecía al Pontífice» ³⁴.

La sugerencia contenía la condena implícita de la postura carlista. Y *El Liberal* del 13 dio a conocer ya en parte, antes de que lo hiciese el 17 el *Boletín eclesiástico* de Toledo, una pastoral aclaratoria que había anunciado *El Correo Español* ³⁵. En ella, el cardenal primado, Monescillo, insistía en proponer a los católicos su fórmula de «unión en la unidad de fe, con exclusión de jefaturas laicas», que había expresado siendo arzobispo de Valencia. «Es atrevida y muy arriesgada la idea —advertía— de ligar situaciones políticas los destinos sagrados de la causa de Dios; pues sucedería que los antidinásticos, fueren republicanos o carlistas, mirarían con prevención odiosa a los que siendo Ministros de Dios no fueran todo para todos con objeto de salvar las almas, desempeñando con santa libertad e independencia el ministerio que no han recibido de los hombres, sino de Dios...

Quede, pues, consignado y establecido que la unión entre católicos y carlistas puede responder a miras de partido, nunca desinteresadas... Lamentaba ayer ciertos políticos que el Papa hubiera recomendado a los católicos franceses la obediencia a la República, y piden hoy a gritos que el Papa preceptúe a los carlistas lo que conviene a intereses privados. Siendo, pues, materia de precepto la sumisión a los Poderes constituidos que son o fueren, en esto consiste la conformidad bien entendida» ³⁶.

Aunque *El Movimiento Católico* quiso interpretarla a su favor ³⁷, cierto es que la «admonición familiar» del prelado, que así la titulaba, bien pudo interpretarse como rectificación al diario de los Congresos Católicos ³⁸.

En su defensa, siempre en debate con la prensa carlista ³⁹, *El Movimiento* publicó íntegras las pastorales que, por las mismas fechas, había dado a conocer los prelados de Huesca y de Avila para recalcar el deber

de acatar a María Cristina como reina de España, conforme a los deseos del Pontífice ⁴⁰. Pero la aparición de la pastoral colectiva firmada a instancias del cardenal Rampolla ⁴¹ a primeros de junio de 1894 por los 24 prelados asistentes a la peregrinación de abril detuvo la polémica: «Sujeción respetuosa —advirtieron en ella, recordando estos términos de León XIII—: para nosotros son como palabras sacramentales. Estas palabras no son grito de combate, sino luz de atracción: no deben aumentar las discordias, sino aunar las voluntades. Pueden moverse los católicos por todo el campo de las leyes patrias, que no dejan de estar sujetos a los poderes constituidos los que respetan las leyes y ajustan a ellas su conducta. Excusado es declarar que la ley ha de ser justa para ser ley, conforme enseña el santo obispo de Hipona, como que también exige rendida obediencia, mientras no sea evidente su injusticia, esto es, su oposición a la ley de Dios o de su Iglesia» ⁴².

Valentín Gómez dijo cerrar ante ello la discusión ⁴³. Por su parte, integristas y carlistas pretendieron cumplir a su criterio las exhortaciones del Pontífice, uniéndose entre sí como antaño. A juicio de *El Siglo Futuro*, «esos católicos, mestizos, fusionistas o conservadores, que jamás admitirán ese programa [antiliberal del tradicionalismo] mientras no dejen de ser lo que son, recibirán golpe de muerte si, dando treguas a las pasiones políticas, y obedeciendo a la voz del Papa, nos uniésemos sinceramente nosotros, en el terreno y del modo que el Papa señala para defender el programa que nos da el Papa» ⁴⁴.

Pero tampoco esta posibilidad prosperaría. En julio, la prensa carlista comenzó a poner en duda la nobleza de los propósitos de Ramón Nocedal, en concreto la autenticidad de su disposición a acatar a don Carlos ⁴⁵.

La polémica y las palabras pontificias de abril, que replantearon la posibilidad del «partido *posibilista*» católico ⁴⁶, brindaron a monseñor Cascajares la oportunidad de prologar la edición, en 1894, de un intento de sistematización de su pensamiento. *La Organización Política de los Católicos Españoles*, que así lo tituló, fue escrita por el arzobispo en dos partes, fechada la primera en febrero del 94 y la segunda en junio del mismo año ⁴⁷: división respetada en su impresión porque el contenido de ésta venía a resaltar el posible acierto de aquélla, probado por los acontecimientos coetáneos.

Impresa con cuidado en 70 espaciosos folios, la obra partía de una introducción sobre la oportunidad política y eclesial de su contenido, para desarrollar, después, las razones pastorales que aconsejaban llevar a cabo los propósitos del autor. Los basaba doctrinalmente en la encíclica *Inter Innumeras Sollicitudines*, dirigida a los franceses en 1892 «para que aceptasen sinceramente la forma republicana» ⁴⁸, y en la amarga insistencia del Papa sobre el mismo problema en años sucesivos. Este énfasis demostraba, decía Cascajares, que aquella exhortación obedecía a algo más que a «un simple interés político»: «a todo un plan cuya realización llena el pontificado de León XIII, y que expuso con profundísima sabiduría en la Encíclica *Inmortale Dei*».

Urgían además tal plan «las circunstancias tristísimas que rodean a nuestra desgraciada nación, y que son quizá presagios de un porvenir aún más triste»: «Son hechos que hemos de confesar con dolor —argüía el prelado, visiblemente afectado por el cambio de la coyuntura económica—, que nuestra hacienda corre a la bancarrota y nuestros fondos están por los suelos en el extranjero...; que las provincias protestan contra los tratados de comercio, los cuales consideran ruinosos; que nuestro glorioso ejército ha hecho sin culpa suya, mal que pese a nuestro orgullo nacional el confesarlo, un desairado papel ante un puñado de rifeños» que atacaron las obras de fortificación del campo de Melilla en octubre de 1893; «que tal vez no le va a hacer más airoso nuestra diplomacia con el sultán marroquí; que a consecuencia de los sucesos de Melilla el ejército se siente humillado y herido en su honor militar, y el pueblo, desilusionado al ver en que han venido a parar sus generosos impulsos, oculta su indignación bajo el velo de una apatía que como hecho es muy grave, porque demuestra que no tiene confianza en los que gobiernan, y conio síntoma es más grave todavía, porque, convirtiéndole en materia dispuesta para todo, se parece mucho a la calma precursora de las grandes tempestades». A esto había que añadir «los progresos del anarquismo, favorecidos por la dolorosa situación de la clase obrera y por el mal estado de la enseñanza primaria, algunos de cuyos representantes piden limosna, y fomentados por la propaganda de la prensa revolucionaria e impía».

La bomba de junio de 1893 contra la residencia de Cánovas del Castillo la que estalló a los pies del general Martínez Campos en septiembre, la dramática del Liceo de Barcelona en noviembre, las que explotaron en Sevilla y otros puntos del país «en el infausto [año] que acaba de espirar» forzaban a tildar de «gravísima la actual situación de España». A ella, además las fuerzas vivas de la política monárquica no podían ofrecer, en opinión del prelado, remedio viable.

«Con razón o sin ella —decía, apoyando sus previsiones de 1891—, el partido fusionista que gobierna se ha gastado y se ha hecho impopular por muchas causas, y especialmente por la cuestión de Melilla, y es muy posible que no pueda sostenerse en cuanto se abran las Cortes; el partido conservador, único que hasta aquí podía alternar con él, se halla en pleno período de desorganización; un ministerio nacional sólo resolvería provisoriamente la tremenda crisis que se viene encima, cada día más amenaza dora y terrible»... De modo que, en tales circunstancias, era necesaria «una autoridad de gran fuerza y energía a la vez que de prestigio», que sólo los tradicionalistas podían ofrecer, pero que no ofrecían, por falta de unidad¹⁰: «Hace pocos años, y a pesar de la Encíclica *Cum multa* ... no se podía hablar de unión de los católicos sin incurrir en la nota de lo que dio en llamarse *mesticismo*, que para gran parte de los católicos equivalía a la de catolicismo liberal.» Ahora, en cambio, incluso los integristas decían desear el entendimiento, y todo obligaba a considerar «evidente que habían cambiado mucho las cosas, merced principalmente a la influencia de los Congresos católicos». Pero ni el entendimiento ni la acción llegaban: «Hay integristas del señor Nocedal, integristas disidentes del señor Campión» (político y escritor vasquista, empeñado en resaltar los aspectos

religiosos y regionales del tradicionalismo), «integristas-carlistas del señor Menéndez de Larca», quien, alejado de don Carlos con Nocedal, manifestó enseguida su desacuerdo con éste; «carlistas sin más aditamento, católicos independientes representados por *El Movimiento Católico*, alfonsinos agregados a la derecha conservadora bajo la dirección del señor Pidal, católicos republicanos de todos los matices habidos y por haber, cuando, según todos proclaman, no debía haber más que católicos de la Iglesia».

«Pretenden unos —advertía por eso en la misma línea doctrinal, poco clara— que la unión debe limitarse a las relaciones de orden espiritual entre los fieles y los Prelados, y éstos y el Papa, o cuando más, al mutuo apoyo para promover obras católicas de influencia religiosa y social, como misiones, cofradías, conferencias, círculos de obreros y aun, si se quiere, Congresos católicos, pero no debe extenderse a acción política, en la cual sólo deben guiarse por las instrucciones del jefe de su partido; y creen otros, los más, que estando ellos en posesión de la verdad y el derecho, la unión ha de realizarse con todas sus consecuencias mediante la sumisión de todos los demás grupos al partido o la fracción a que ellos pertenecen. Los primeros interpretan mal el pensamiento del Papa; los segundos lo hacen imposible por el excesivo apego a su propio parecer.»

«El suponerlo [lo contrario] equivaldría a decir que el Papa abandonaba en poder de los enemigos de la Iglesia el campo principal, donde más daño puede hacerse a los intereses católicos»: «la dirección de los negocios públicos», dejada hasta ahora en manos de «las sectas»: de modo que el arzobispo venía así a contradecirse, al haber reconocido antes el respeto de los gobernantes de la Restauración hacia la Iglesia. Y era esta una contradicción decisiva: porque en ella basaba precisamente sus exhortaciones a favor de la acción política.

La acción, no obstante, no había de ser desarrollada, «como suponen algunos, después de haber derribado lo existente: La Encíclica *Inmortale Dei* da por supuesto que los católicos han de aceptar para ello las Instituciones establecidas en cada nación, y hasta las leyes vigentes, malas y todo, aunque no para aprobarlas, sino «para convertir lo malo que tengan en bien sincero y verdadero».

«Hoy no harían mella en favor de la abstención los argumentos de jurar la Constitución con el artículo 11», que establecía tolerancia para los cultos no católicos. La Encíclica *Inmortale Dei* autorizaba a aceptar la legislación liberal, y la *Inter Innumeras Sollicitudines* de 1892 disponía que la aplicación de aquélla «exige en Francia por las razones alegadas la organización política de los católicos franceses para la lucha legal dirigida a cristianizar la legislación mediante la aceptación leal y sincera de las instituciones republicanas allí establecidas». En consecuencia, «el único modo de aplicar a España conforme a los deseos de la Santa Sede la misma inmortal encíclica, será también... la organización política de los católicos españoles para la lucha legal enderezada a cristianizar la legislación, mediante la aceptación leal y sincera de la monarquía de don Alfonso XIII, aquí establecida»⁵⁰. Para ello, no había más posibilidad «práctica y factible que la formación de un gran partido, único, donde unidos todos los católicos en *santa concordia de pensamiento y de acción*, con-

sagren sus esfuerzos comunes a la defensa de los intereses cristianos. Y esta unión no puede verificarse en ninguno de los grupos existentes, porque ninguno tiene derecho a imponer su opinión a los demás, tratándose como se trata de cosas que Dios ha dejado a las disputas de los hombres»⁵¹: lo que implicaba otra contradicción. Se marginaban los partidos existentes, en aras de la libertad de opinión política, pero preconizaba la creación de un partido confesional único, que consecuentemente exigía a su vez, la imposición de una dirección única, tanto en lo dogmático como en lo propiamente opinable.

Escritas estas líneas en Valladolid, en febrero de 1894, aquel discurso de León XIII a los 13.000 peregrinos españoles que lo visitaron en abril, animó al arzobispo Cascajares a empuñar de nuevo la pluma para comentar aquellas palabras como sanción de su propio pensamiento y para concretar los pasos necesarios a su realización. «Lo primero que hay que hacer —apuntó entonces—, una vez se cuente con la adhesión de suficiente número de católicos resueltos, es sentar las bases y trazar un programa claro, práctico y lo más completo que sea posible para la nueva agrupación, partido o como quiera llamársele.» A este fin, proponía la reunión de «una junta extraordinaria de Prelados, a quienes podrían ilustrar no pocos sabios eclesiásticos y seglares, o aprovechar para el caso el primer Congreso católico que se celebrará en Tarragona, y discutir amplia y serenamente el asunto»⁵².

Pero, probablemente, el pequeño libro de monseñor Cascajares sobre *La Organización Política de los Católicos Españoles* no fue dado a conocer hasta bien entrado el año 95. Y, aun entonces, su difusión fue reducida a tal vez casi nula, a juzgar por la ausencia de alusiones conocidas sobre él⁵³ y, sobre todo, por los términos en que se expresa una recensión inédita, manuscrita en dos pliegos sin firma, que se ha conservado entre las páginas del escrito de Cascajares que llegó al Palacio Real de Madrid. Sus afirmaciones hacen pensar que fue una crítica, acaso pedida por el prelado a la reina o aconsejada por ésta, que impidió tal vez la publicación del opúsculo:

«El libro —comienza el manuscrito, refiriéndose a ello— está inspirado en un buen espíritu, pero su conjunto y algunos detalles contradicen su buen propósito»⁵⁴, especialmente en las amistosas referencias que hace sobre el carlismo. Porque, «si dicho partido tuviera los elementos que dice y representara las fuerzas sociales que indica, no se explicaría su derrota ni su actitud. Trasciende, no sólo en esa parte sino en cuantos lugares habla del carlismo, cierta afición a lo pasado y un sabor ultramontano que destruye el ánimo del lector desapasionado»⁵⁵.

«Quizá consiste eso en que el autor no se da cuenta ni al parecer estima las fuerzas sociales modernas que han hecho la revolución y engendrado la Monarquía constitucional. Reconoce a veces que los servidores de ésta y, según él, los de la revolución, tienen estadistas, banqueros, periodistas, literatos, etc., pero no explica ni deja comprender que esos elementos no existirán, ni por tanto tendrían razón de ser, si las ideas que sostienen y las causas que representan, no arrancaran de las entrañas de la misma sociedad. Hiciera esto el autor, marcarse bien el valor y la fuerza

de los elementos que constituyen la vida moderna contrapesando los de la antigua sociedad en el carlismo cobijados, y entonces la tesis que sostiene o sea, la transacción de todos para sostener el trono de Alfonso XIII, bajo la inspiración católica y religiosa del Pontífice, resultaría fundada, lógica y evidente.

Este es, después de todo, el espíritu de las Encíclicas de León XIII en las cuales se ha inspirado»⁵⁶.

Si estas opiniones fueron sugeridas o aceptadas por la regente y llegaron a Cascajares, parece comprensible que el consejero de María Cristina sumiera su escrito, en 1895, cuando la recensión fue redactada, en un prudente olvido, en el que ya estaba en el 94, en realidad tal vez porque la intervención de los prelados asistentes a la peregrinación en la polémica lo hizo inoportuno.

3. *Maduración y primeras gestiones*

En el otoño e invierno de 1893-94 la opinión de las fuerzas vivas confesionales había sazonado por otra parte para aceptar mejor la iniciativa del arzobispo. Claudio López Bru, marqués de Comillas, capitalista ya significado por su acción patrocinadora de actividades católicas, maduraba también la conveniencia de «formar un bloque de resistencia y de ataque: una verdadera cuña que se metiera entre los partidos para acabarlos de rajar, para no dejarles libertad de movimiento, cuando se orientaran contra los intereses de la religión; y aún acaso lograra substituirlos en el gobierno»⁵⁷.

Debió exponer su idea a Juan Manuel Ortí y Lara, y éste, a su vez, a Sancha, ya arzobispo de Valencia, que consideró a López Bru «la persona llamada providencialmente para esta obra del todo necesaria». Pero, al reflexionar sobre ello, el propio Comillas eludió certeramente la postura de Cascajares: «Las condiciones de España —escribió acaso entonces— no son las de Alemania, donde la lucha es contra protestantes, ni las de Bélgica o Francia, donde los católicos tienen enfrente a los declaradamente anticlericales»⁵⁸.

Parece pensó, pues, en «una agrupación política intermedia entre la conservadora y la carlista, que, bajo la denominación de tradicionalista, por ejemplo, nunca con la de católica, velase de una manera especial por los intereses religiosos en las Cámaras»⁵⁹. Como la Unión Católica, tendería «a constituir gobierno o bien fusionarse con el partido conservador, si éste lo hacía posible y las circunstancias lo aconsejaban».

Pero tampoco tal idea llegó a convencerlo. En abril del 94, a raíz de la peregrinación obrera a Roma, en cuya organización tomó parte activa el capitalista con el mismo Sancha, Rampolla insistió a Comillas, con conocimiento del general de la Compañía, Luis Martín, «sobre la conveniencia de formar un partido católico que recogiera las energías desparramadas en otras agrupaciones». Pero López Bru «replicó que por ser tantos los partidos políticos en España, uno nuevo no serviría sino de aumentar el número y la confusión. Yo preferiría, añadió, trabajar en el campo social y preparar así el camino a la unión de los católicos»⁶⁰.

Aún debió pretender, en fecha imprecisa, articular una cierta organización política. En ella, «la Junta Suprema Nacional, partiendo de las Encíclicas del Papa y de las instrucciones de los prelados, señalaría las reformas que debieran introducirse en las leyes para que la religión quedase amparada. En conseguirlas se comprometerían a trabajar a una todos los católicos de los diversos partidos, sin renunciar a ellos, cada cual en su puesto, municipio, diputación, cortes, y todos unirían sus fuerzas en las elecciones para ganar puestos, tomando por norma apoyar la candidatura de entre las suyas, que en cada distrito tuviera más votos, a juicio de un tribunal compuesto de tres personas imparciales, elegidas por los jefes políticos de cada diócesis o por el Prelado. Y para que las campañas parlamentarias no las malograra la impotencia o el ímpetu individual, ... una Junta Superior, de seis individuos, nombrada por la Junta Nacional, señalaría el punto y hora de los debates»⁶¹.

No es claro si este plan fue realmente pensado en 1894⁶². Ni si completaba la reorganización que el mismo López Bru debió proponer también entonces para la Junta Central de los Congresos Católicos, existente desde 1888.

Tendría ésta a su cargo, en este nuevo proyecto del marqués de Comillas: «1.º, la preparación de los Congresos Católicos, de acuerdo con los Prelados, en cuyas diócesis debieran celebrarse; 2.º, llevar a la práctica las conclusiones de los mismos; 3.º, la dirección general de la propaganda católica en todos sus ramos. De cada punto de estos se encargaría una de las tres secciones, en que la Junta se dividía, a cuyo frente estaría un Vicepresidente elegido por el Prelado de Madrid entre los 18 vocales, dos por cada provincia eclesiástica, señalados por los Metropolitanos respectivos».

La Junta había de defender «los intereses católicos en el orden religioso, benéfico y social, así en la propaganda como en la acción, ayudando al clero en el cumplimiento de sus deberes sacerdotales, y sin tener acción política en relación con los partidos, aunque estudia y vigila la acción de los gobiernos y del Parlamento en cuanto puede referirse a los intereses cuya guarda le está confiada»⁶³.

Con ello, el marqués respondía a una problemática que se planteaba a la vez en el IV Congreso Católico Nacional, al que parece iba destinado ese esquema.

La reunión fue celebrada en Tarragona del 16 al 21 de octubre de 1894. Asistieron a ella veintitrés prelados y el nuncio, Serafín Cretoni, y el tema debatido por encima de todos fue, naturalmente, el de la concordia política. En carta al Papa del 22 de enero anterior, al notificarle la convocatoria del Congreso, el arzobispo tarraconense, Tomás Costa, había hecho hincapié en las reivindicaciones temporalistas de rigor. Al responderle el 30 inmediato, el Pontífice dijo desprender también de su carta la intención de los organizadores de «promover aquellas cuestiones que más contribuyan a estrechar los ánimos de los concurrentes con los lazos de la fe y de la caridad, si que también a sostener los derechos de la Sede Apostólica y a defender los principios fundamentales del orden religioso y social»⁶⁴. Pero el discurso de abril a los peregrinos y la consiguiente polémica fueron los hechos que orientaron la asamblea desde el mismo sermón

inaugural, en el que Morgades, obispo de Vic, sentó las bases para una verdadera teología de la unidad.

Era claro, no obstante, que la persistencia misma de la temática durante cinco años decía poco en pro de su eficacia. Así fue denunciado en las sesiones con toda acritud: hasta el punto de que, entre las conclusiones adoptadas finalmente, también se denunció la escasa difusión de los acuerdos anteriores, el exceso de disposiciones y temas y la organización deficiente de la Junta Central, sin ramificaciones siquiera en las diócesis. Y sólo contra esto se encaminaron las decisiones de la reunión.

En realidad, la prudencia de la asamblea venía aconsejada por el acuerdo nuevamente exteriorizado en la jerarquía eclesiástica. El cardenal primado, Monescillo, había teleografiado significativamente a la organización que sólo se adhería «a lo religioso que acuerde el Congreso»⁶⁵. En el otoño de 1894, *El Movimiento Católico* volvió a insistir en la necesidad de acatar lealmente la monarquía alfonsina conforme al discurso de abril de León XIII. «*Sumisión a los poderes constituidos* —llegó a afirmar en el diario Francisco de Paula Salcedo, en frase anticarlista, interpretada sin embargo como referencia al primado—. Esto es lo que quiere el Papa, y donde hay patrón, no manda marinero, aunque el marinero sea el primero en la tripulación.»⁶⁶.

El periódico fue prohibido por ello en la archidiócesis de Toledo. Monescillo calificó su conducta habitual de «agitación mercenario-cismática». Valentín Gómez, por su parte, dio a entender su propósito de recurrir contra la prohibición y contra tales juicios, sin duda al nuncio de la Santa Sede.

Advertido en la prensa explícitamente el silencio de los demás obispos, el de Madrid-Alcalá ordenó al censor de *El Movimiento*, Joaquín P. San Julián, que comprobara «si real y efectivamente son exactos los informes que Su Eminencia el Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo ha recibido, y en el periódico se ha injuriado a Su Sagrada Persona, o se ha fomentado el cisma entre los católicos». Pero la respuesta del censor eludió el dictamen, insistiendo en las buenas disposiciones de la redacción del diario⁶⁷.

El 7 de noviembre, no obstante, y en defensa ya explícita de *El Movimiento Católico*, el obispo de Tuy, Menéndez Conde, publicaba una pastoral contra carlistas e integristas en la que desautorizaba a toda la prensa en cuanto a religión se refería: «materias dogmáticas, de moral, de régimen y disciplina, y en general de todo lo que hoy es motivo de discordia entre los católicos españoles»⁶⁸.

Todavía el 10 de diciembre de 1894, en respuesta al mensaje de los obispos reunidos en el Congreso Católico de Tarragona, el Pontífice volvió a alabar la relevancia dada a las palabras «que Nós, movidos del amor a vuestro pueblo, repetidas veces os hemos enseñado. Sobre todo confiamos —insistía— que no se borrará de vuestra alma, que es deber de los católicos, dejado a la Divina Providencia el juicio de los derechos, cualesquiera que éstos sean, mostrar todo respeto a los que administran la cosa pública; lo cual con tanta mayor voluntad debería al presente hacerse, cuanto que al frente de su reino tiene el pueblo español a una señora, que, por las virtu-

des de su alma y singular devoción a la Sede Apostólica, es acreedora a todo honor y estimación» ⁶⁹.

En años sucesivos, la cuestión del entendimiento entre los tradicionalistas pareció desplazada al fin, acaso por el agravamiento de los problemas de Ultramar, catalizador de todas las atenciones. Lo mismo sucedió, por menos tiempo, con los deseos de Cascajares. Sus ideas no fueron comentadas en Tarragona. Ni siquiera asistió al Congreso. Cuando en los meses de marzo de 1895 y 96 trazó su firma a los pies de sendas pastorales sobre la catástrofe del buque *Reina Regente* y sobre la renovada guerra de Cuba, nada de lo que en ellas decía evocaba su pensamiento político ⁷⁰.

De nuevo a propia petición, el arzobispo consiguió de la reina que, en la segunda mitad de 1895, pidiera por carta al Papa su nombramiento de cardenal ⁷¹, y, en efecto, León XIII se lo otorgó en consistorio de 29 de noviembre inmediato ⁷². Pero, trasladado a Roma en junio de 1896 para recibir el capelo de sus manos, Cascajares aprovechó la estancia para dar otra vez pábulo a sus ideas políticas. Además de ver al Pontífice, se entrevistó a diario con el padre Luis Martín, general de la Compañía de Jesús y buen amigo suyo, que se decía, además, consejero de León XIII y fiel reflejo de su espíritu de concordia con el mundo moderno. Sometió sus proyectos quizás a otros priores de institutos de perfección y a personalidades de la Curia, y recabó la opinión pontificia por medio de Rampolla ⁷³, nunció en Madrid hasta 1887, cardenal y secretario de Estado ahora con quien María Cristina de Habsburgo seguía manteniendo, al parecer correspondencia acerca de los asuntos de España ⁷⁴. Sólo entonces, el nuevo cardenal se sintió seguro para proponer a la reina la difícil vertiente dinástica que también ocultaba su pensamiento, cuya realización continuaban aconsejando con insistencia, creía él, los últimos acontecimientos.

Así se lo comunicó Cascajares a la regente en una carta fechada en Roma el 25 de junio de 1896. Volvía a hablar en ella de la ineficacia de los partidos históricos, «gastados y deshechos» e incapaces «de hacer frente a un desbordamiento revolucionario que podría presentarse en el momento menos pensado, ni menos elevar a España a la altura que merece, si además estos partidos llevan la inmoralidad y corrupción en sus entrañas». Concluía de nuevo «la necesidad de formar un partido, que podamos llamar de la gente honrada, sinceramente católico y sinceramente dinástico».

Al cardenal no se le ocultaba que uno de los obstáculos más delicados y difíciles de salvar para impulsar a los católicos era el que estribaba en los motivos legitimistas del carlismo, y a solucionar este pleito dirigía un aspecto decisivo de sus ideas: «Tiempo hace que me he convencido —decía sobre su proyecto— [de] que era una utopía irrealizable, si no se empezaba por la raíz y fundamento que es la reconciliación de las familias de V. M. y la de don Carlos. Sin resolver antes la cuestión dinástica, jamás se hará nada serio y estable, porque siempre esa gran masa, que es muy grande, Señora, que obedece a don Carlos, estará distanciada del Trono legítimo de V. M.» ⁷⁵.

De este prudente modo, pensando en los temores que infundía la debilidad del futuro Alfonso XIII, que, de morir, había de dejar los derechos de la corona a su hermana María de las Mercedes, princesa de Asturias

el prelado sugería, sin expresarlo, el casamiento de la infanta con Jaime de Borbón, hijo y heredero de los títulos del pretendiente.

En realidad, esa idea había sido sopesada ya por algunas personalidades carlistas, que, muerto Alfonso XII en 1885, antes de nacer su hijo varón, la consultaron al obispo de Oviedo, Ramón Martínez Vigil. Pero el nacimiento de Alfonso XIII en 1886 había paralizado los tratos⁷⁶, que, además, diferían en el alcance, si no en la forma, de los de Cascajares. En 1896, vivía ya Alfonso XIII, y el cardenal no pretendía la implantación del carlismo, sino, según sus allegados, procurarle un fin digno para consolidar el trono alfonsino⁷⁷, si bien es cierto que el fallecimiento del infante hubiera puesto la corona en manos de don Jaime, como consorte o como rey legítimo.

«Nada, Señora, había dicho a Vuestra Majestad hasta hoy, porque no siendo aún Cardenal, pudiera creerse que era un memorial para obtener el capelo; por otra parte, no tenía bastante confianza en mi propio juicio, y quería, antes de exponerlo a V. M., consultarlo con hombres eminentes.» Una vez en Roma, «expliqué todo mi pensamiento a una persona y talento eminente que quiere mucho a V. M. y que tiene medios para conocer íntimamente no sólo la situación de España, sino la de otras Cortes; y puedo decir, que después de oírme se levantó, me abrazó y me dijo: «Pensamiento feliz, eminencia, y único; sin él es imposible consolidar jamás la *situación de España*.»

Alentado por este parecer [—escribía el 25 de junio—], fui anoche a ver al Cardenal Rampolla y, expuesto lisa y llanamente el proyecto, me contestó: "Hace mucho tiempo que, meditando sobre las cosas de España, no he visto otro camino que el que V. E. me dice para la salvación." Y llegado el caso de realizarlo —le pregunté—, ¿podríamos contar con el apoyo del Vaticano? "Puede Vuestra Eminencia decir a S. M. la Reina —me contestó— que cuente con todo el apoyo del Santo Padre y el mío."

Había llegado, pues, el momento de consumar la reconciliación de las dinastías. «¿La aceptará don Carlos? [—se preguntaba el prelado en la carta de Roma—] Paréceme también que sí, una vez convencido, como debe estarlo, de que él, lo mismo que don Jaime, suceda lo que quiera, no han de ocupar el trono de San Fernando ..., mucho más ahora que por su reciente casamiento [don Carlos] ha quedado completamente desautorizado entre los suyos»; porque, en efecto, el matrimonio del rey proscri-to celebrado en Praga en abril de 1894 con María Berta de Rohán había sido muy censurado en los medios tradicionalistas.

Era preciso, por lo tanto, iniciar los trabajos y, para ello, buscar un mediador. «Para comenzarlo nadie más a propósito que la reina Doña Isabel, que más de una vez ha dicho a Don Carlos personalmente y por escrito estas palabras: «Convéncete, Carlos, [de] que mientras no unamos la familia, nada haremos de provecho.» Después el Vaticano, que puede influir inucho con Don Carlos y Don Jaime, y luego S. M. el Emperador de Austria, que tanto quiere a V. M., y sé positivamente que le es agradable este proyecto»⁷⁸.

Para llevarlo a cabo, aconsejaba, «primero, la más absoluta reserva; segundo, pocos intermediarios, cuantos menos mejor: los absolutamente

necesarios, nada más ...⁷⁹ Cánovas y Sagasta no deben saber nada que estuviera hecho». Porque, reconciliadas ambas dinastías, acudirían sin duda, a su entender, a formar el partido «muchos fusionistas, no pocos conservadores, los carlistas en masa» y los integristas⁸⁰.

«Medítelo un momento V. M. —terminaba—, en cuanto le dice aquí su fiel súbdito, y con su clarísimo talento verá en seguida que nada, absolutamente nada, va a perder por intentarlo, y en cambio, de realizarlo va a ganar mucho, va a consolidar el Trono, a levantar a España de su postración y a dejar una página de oro en la Historia»⁸¹.

El prelado certificó la carta, que había sido escrita por su secretario Regino Martínez, dirigiéndola a don Alfonso de Aguilar, secretario del regente⁸². Pero María Cristina no acusó recibo. El 2 de julio de 1896, el cardenal salió de Roma para España, y llegó a Valladolid en la madrugada del 4⁸³. El 9, Regino Martínez volvía a escribir a Aguilar para inquirir sobre la recepción de la primera misiva⁸⁴; pero tampoco tuvo respuesta.

Por aquellas fechas, la vieja polémica sobre la unión de los católicos estaba padeciendo uno de sus estentóreos rebrotes. En *El Mensajero de Corazón de Jesús* de junio de 1896, un conocido publicista, el jesuita Julián Alarcón, había glosado el tema en un artículo extenso. En él afirmaba que para llegar a un acuerdo entre las fuerzas ortodoxas, «lo primero de todo lo urgente, lo imprescindible es trazar la línea de separación de los dos campos contrarios; saber quiénes son enemigos y quiénes amigos, y no tolerar que nuestros enemigos vengan a nuestro campo con la cien veces traidora bandera blanca, ni pretender con insensatez que el enemigo no admita en sus reales para ir así ganando poco a poco la batalla sin disparar un tiro y sin que se vierta ni una sola gota de sangre»⁸⁵.

Las frases de Alarcón eran aplaudidas por carlistas e integristas y discutidas por los tradicionalistas alfonsinos (Ortí y Lara publicó contra ella sus «Nuevas reflexiones acerca del integrismo» en *El Movimiento Católico*)⁸⁶ cuando el arzobispo regresaba de Roma. Inmediatamente, el 16 de julio de 1896, escribió a su paisano Valentín Gómez para invitarlo a conferenciar en Avila sobre sus proyectos de fusión dinástica: «Por más que leo y vuelvo a leer lo que usted dice, y dicen Sardá y Ezenarro y Alarcón en *El Mensajero*, y Nocedal en *El Siglo* y *El Correo* y *La Unión*, no veo claro cómo creo conduzca a nada práctico la tan deseada y discutida unión de los católicos puesta de nuevo sobre el tapete. Tal como se ha planteado ahora es un problema, no veo, repito, fácil ni práctica la solución.

Otro es mi pensamiento; mejor dicho: el método o medio para llegar a esa unión»⁸⁷.

La entrevista ciertamente se realizó. Y, con ella, el director de *El Movimiento* debió quedar ligado estrechamente a la empresa de su amigo.

En julio del mismo año 96, sin respuesta aún de la reina regente, que veraneaba en San Sebastián, a su carta de Roma, el arzobispo creyó llegado el momento de aclarar el silencio. El 25 le anunció por escrito su visita. Llegado a la capital donostiarra el 4 de agosto, al día siguiente recibió al general Polavieja, que llevaba el encargo de invitarlo a comer el 6 con la regente⁸⁸. Una vez ante ella —relató más tarde el secretario del cardenal—, «aunque temeroso, se decidió a preguntar a la Señora si había in-

cibido sus cartas. Y la Reina por toda respuesta dio un giro tan radical a la conversación, que el prelado pudo comprender sin dificultad que la Reina no aprobaba cuanto él había hecho en Roma»⁹⁰.

Inmediatamente después de la entrevista, Cascajares dejó San Sebastián y, el 7, estaba nuevamente en Valladolid, donde había de permanecer hasta mediar octubre⁹¹, atareado primero en los preparativos del Congreso Eucarístico de Lugo, que una caída le impidió presidir⁹², y más tarde en la redacción de una nueva pastoral.

Allí, al comenzar septiembre, había de llegarle una carta del padre Luis Martín, aún llena de esperanzas: «Me alegro —decía ignorando lo sucedido— que la propuesta consabida agradase tanto en el Vaticano, y deseo que no desagrade ahí a la persona interesada. La cosa requiere tacto y constancia; pero es tan importante, que con solo conseguir eso se evitarían, acaso para el porvenir, males sociales sin fin, y acaso catástrofes irremediables; aun así y todo, el cielo está tan nublado, que no sabemos lo que puede venir, y si ese medio bastará para conjurar la tempestad. Al menos ese podría ser uno de los medios más eficaces para más tarde poder concertarse algo que prometa. Sin eso quizá lo haya, mas yo no lo veo.

Aquí llego y no puedo más»⁹³.

El juicio hubiera sido alentador si no mediara ya, como mediaba, la actitud de la reina.

4. *El primer fracaso*

Pese al desaire, Cascajares publicó en septiembre de 1896 una pastoral que divulgaba al fin su pensamiento. Según decía en ella, los numerosos males de la situación española actual hacían hoy más urgente que ayer la búsqueda de remedios. A los persistentes conflictos de Ultramar, incluidos los nuevos síntomas de conspiración en Puerto Rico y la prolongada agitación rifeña, se unía «en su interior peligrosísima crisis: los gastos de la guerra agotan la riqueza nacional, arruinan la industria y el comercio y obligan a entregar en manos de extranjeros con empréstitos y contratos ruinosos las llaves de nuestra hacienda; la agricultura agoniza bajo el peso de los impuestos, y el hambre se enseñorea de las poblaciones rurales. Desorganizados los partidos que turnan en el poder, retraídos los demás, la política arrastra una situación de penosa incertidumbre y terrible malestar. El pueblo desconfía de nuestros políticos, de nuestros diplomáticos y hasta de nuestros generales, y la prensa aviva esta desconfianza con sus censuras, con sus juicios prematuros y sus apasionamientos de partido. Hay en la atmósfera presagios de tempestad, mal disimulada con esa aparente calma nacida de la desesperación».

La ineptitud de los gobernantes exigía por tanto de los subordinados la unión para «dar cuanto tenemos y cuanto somos por la salvación de la patria». La unidad había de tejerse, en opinión del cardenal, entre los lazos «de la fe y de los sentimientos católicos»: porque la profesión masónica de muchos cabecillas cubanos y el origen semejante de la rebelión filipina, cebada en la persecución de los religiosos españoles, había venido

a demostrar que «hoy como ayer, bajo la cuestión que aparentemente se ventila en el campo de batalla, late otra cuestión mucho más honda, una cuestión religiosa».

«La organización de las fuerzas católicas —deducía de ello el prelado sin más razonamientos— con tanta insistencia pedida por S. S. León XIII y nunca realizada por miserables rencillas de menor cuantía, ... pudiera salvar a España de la presente crisis y de cuantas la Providencia se digne enviarnos.» «Con esos elementos podría constituirse un partido verdaderamente nacional, en el que cabrían todos los hombres honrados y verdaderamente patriotas, un partido que con tales elementos podría antes de mucho ponerse en disposición de ser llamado al poder por nuestra Augusta Soberana»⁹⁴.

El Movimiento Católico publicó íntegra la pastoral, bajo el epígrafe «Documento importantísimo», en el número del 25 de septiembre. Durante las siguientes semanas, sus colaboradores, entre ellos Ortí y Lara, jalearon las ideas del cardenal haciéndolas suyas y rebatiendo los ataques de *El Correo Español*.

Argumentaba éste, contra el partido propuesto, que habría de ser dirigido por los obispos, conforme a las doctrinas de León XIII, siendo así que ningún prelado se inmiscuía ya en asuntos políticos, por el compromiso temporal que supondría lo contrario para la Iglesia. La realización de aquellos propósitos exigiría además la aceptación de la Constitución de 1876, que el órgano legitimista juzgaba inaceptable para un católico, y, por otra parte, el partido ideado por Cascajares, que reconocía semejante al Centro alemán, no tenía sentido en España, donde faltaba la dualidad religiosa del Imperio⁹⁵.

La pastoral del arzobispo volvía a ser, sin embargo, oportuna. Meses atrás, el general Weyler había sido nombrado gobernador de la isla de Cuba, a raíz de la dimisión de Martínez Campos en enero del 96, que fue motivada al parecer por el desacuerdo interno de los medios ministeriales respecto a los asuntos de Ultramar. Mientras el general cesante había adoptado una actitud condescendiente con los rebeldes, confiado en que el problema se resolvería mejor con la autonomía que con las armas, el jefe de Gobierno, Cánovas del Castillo, opinaba lo contrario. Hasta tal punto pareció que era esta la razón del cambio, que Weyler, antes de marchar, hubo de subrayar que no representaba, como se decía, una política sanguinaria y de exterminio.

El nuevo gobernador no consiguió sofocar la insurrección y, en cambio, se hicieron indispensables refuerzos para proseguir la campaña. En octubre de 1896, Cánovas reconocía la necesidad de enviarle veinticinco mil hombres sobre los doscientos mil que ya tenía. Pero la Hacienda del país no estaba en condiciones de soportarlos y, para colmo de males, fracasaban en aquellas mismas semanas las negociaciones con las que se pretendía contratar un empréstito de mil millones de pesetas, que las Cortes habían autorizado como condición para la llamada ley de auxilios a los ferrocarriles y que era alentadora esperanza para la maltrecha economía del Estado.

El fracaso de estas cuestiones se hizo público el 19 de octubre de 1896⁹⁶ y, ante tal situación, monseñor Cascajares y Azara se apresuró a abandonar Valladolid, mediado el mismo mes, para establecerse en la capital de España. Se disponía a desarrollar un plan de asalto al poder, puntualmente previsto y conocido más tarde. Parece pretendía provocar una crisis gubernativa que permitiera la constitución de un Gabinete adicto a sus propósitos, y la gestión, ante don Carlos y ante María Cristina, de los términos del acuerdo entre las dos ramas de los Borbones españoles, en tanto aparecía, si no estaba designada ya, la figura capaz de aglutinar a los elementos ahora dispersos en un poderoso y único partido.

Según dijo después Vázquez de Mella sobre el primer punto, el prelado ambicionaba, sin otro preámbulo, la formación de un Gobierno nacional en el que estuvieran representados todos los sectores políticos posibles, allegados los unos con la excusa de las gravísimas circunstancias que atravesaba el país⁹⁷ y enterados los otros de que el Gabinete de concentración proyectado había de posibilitar el camino de la fusión dinástica, urgida por el arzobispo⁹⁸.

Antes de emprender la marcha a Madrid, el 15 de octubre del 96, el prelado aragonés notificó su viaje por escrito a Francisco Silvela, a cuyo alejamiento de la ortodoxia conservadora desde 1891 no había conseguido poner freno el empeño de Martínez Campos en los años siguientes⁹⁹. Y escribió también a José Canalejas, amigo del prelado, católico practicante a despecho de su liberalismo, que había pasado del campo republicano a la monarquía de la mano de Martos, para ocupar más tarde, en 1888, su primera cartera ministerial, la de Fomento, en un Gobierno sagastino¹⁰⁰.

Llegado Cascajares a Madrid en la tarde del 16, el político conservador le esperaba ya en el convento de los paúles, donde aquel había de hospedarse, y allí mantuvieron ambos, Silvela y el cardenal, una larga conversación.

El 17, el arzobispo escribió al propio Silvela y a la reina, notificando a esta su llegada¹⁰¹ y advirtiéndole que, en la entrevista inmediata, el político disidente le había reconocido «la gravedad de las circunstancias y la necesidad urgente de poner un remedio por medio de una crisis que se hace absolutamente precisa».

Conocida la coyuntura de octubre, no es difícil comprender el énfasis del cardenal, que acaso había vislumbrado el momento propicio para ocupar la primera cota de sus propósitos. Si Francisco Silvela, enemistado con Cánovas, había de ser el mentor político del Partido Católico, nada mejor para encumbrarlo que desplazar al mismo Cánovas aprovechando el mal momento en que se hallaba su Gobierno.

Tres soluciones habían sopesado el prelado y Silvela en su conferencia del 16: «Primera —consignaba aquel en su carta a la reina— Ministerio Cánovas, dando algunas carteras a los silvelistas, sobre todo la de Hacienda a Villaverde. Segunda, Ministerio Azcárraga; y, con éste, Silvela aceptaría cualquier cartera. Tercera, Ministerio Silvela.» Examinadas las condiciones de las tres, ninguna parecía mejor al arzobispo que la segunda: «Un Ministerio Azcárraga-Silvela salvaría, no lo dude V. M., la situación»; seguramente, porque la formación de un Gabinete sólo con silvelistas hu-

biera supuesto la ruptura completa con la política conservadora anterior y, en cambio, bajo la tutela del general Azcárraga, personalidad sobresaliente del canovismo, podría conseguirse un camino suave para llevar a disidente hasta el Gobierno sin romper con la situación previa de manera tajante, sobre todo si la conspiración contaba con la aquiescencia de aquel militar¹⁰².

Todavía el mismo 17 de octubre, Cascajares volvió a escribir a María Cristina en parecidos términos, que dan idea de la oportunidad agobiante que veía en el momento político: «La situación, Señora, es grave; V. M. tiene que obrar pronto, y con su talento y con su gran corazón poner remedio, sin miedo. Se impone la unión del partido conservador; Cánovas y Silvela no puede salir adelante; el hombre hoy es don Francisco Silvela»¹⁰³.

Pero las gestiones se apresuraron aún más en los días siguientes. El 18 el prelado recibió a Canalejas; el 19, a su buen amigo Gamazo, el prohombre liberal que encarnaba la veta renovadora y moderada del fusionismo, y, el 20, se entrevistó largamente con la reina y recibió de nuevo a Silvela. El 21, volvió a conferenciar con Gamazo, y, seguidamente, escribió una vez más a la regente a fin de insistir en los consejos ya expresados: «Señora: Anoche, como tuve el honor de manifestar a V. M., vi a [Silvela]¹⁰⁴ y después de hablar detenidamente, convinimos en que el pretexto para conseguir que dejase Cánovas el poder era decir en Consejo el estado de la guerra de Cuba; las exigencias apremiantes de la de Filipinas, para la cual el general Blanco ha pedido con urgencia 6 millones de duros, reclaman que la cuestión del empréstito se resuelva inmediatamente; no se puede demorar el pago de las atenciones militares, ya atrasadísimas en Ultramar, y sin dar solución inmediata al problema de los recursos, no es posible continuar, ni es prudente dejar que los acontecimientos nos arrollen en el último momento o que exigencias enormes nos agobien a última hora.

Si el gobierno actual no tiene resuelta esa cuestión o no puede resolverla en el término máximo de un mes, es preciso reunir las Cortes para que ellas reclamen del país el concurso que no se ha sabido o no se ha podido encontrar en el extranjero.

No dudan... [sic], ni yo tampoco, de que, al plantear en esos términos la cuestión ... V. M.¹⁰⁵, Cánovas dejará inmediatamente el poder, pudiendo entonces V. M. formar el Ministerio Azcárraga-Silvela, que sería recibido con aplauso unánime de todos, y único que parece podría salvar la difícil situación que se atraviesa.»

Preciso era, pues, provocar la crisis que diera al traste con el Gobierno, y, para ello, nada mejor que la indiscreción periodística que el arzobispo notificaba también a la reina: «El suelto —advertía en la carta que comentamos— saldrá mañana en *El Imparcial*, y creo que ha de agradar a V. M.»¹⁰⁶. En efecto, el 22 de octubre de 1896, Madrid pudo leer un suelto titulado «Justicia y Patriotismo» inserto en las columnas de *El Imparcial* y destinado a conmover la opinión política de la corte:

«Hemos oído a persona autorizada —aseguraba el artículo en el diario independiente, ligado ahora a los propósitos del cardenal— que S. M. la Reina después de escuchar al señor presidente del Consejo, manifestó de

un modo muy explícito su deseo de que se respondiera a los sacrificios extraordinarios y admirables del país y al heroísmo incomparable del soldado, con actividad, diligencia y esfuerzo proporcionados en la dirección de la guerra, y que el Gobierno impulsara e interviniera en la realización del plan de campaña que ha de dar seguridad de recoger y utilizar los frutos de esos sacrificios del país en breve plazo, como también que vigilara, corrigiera y castigara, sin contemplación alguna, los abusos y defectos que pueda haber en la administración de la guerra y en todo lo que con ella tiene relación, así en la Península como en Cuba»¹⁰⁷.

En estos términos, que pretendían enfrentar a la corona con su Ministerio, la moralización de la administración, la terminación de las guerras de Ultramar y la situación penosa de la Hacienda, es decir, los problemas principales, agravados en octubre de 1896, contra los que se debatía estérilmente el Gobierno, eran utilizados de nuevo, ahora públicamente, como medio para procurar la caída de Cánovas.

«Esta iniciativa de S. M. la Reina, que, por cierto, han omitido los ministros al dar cuenta del Consejo a la prensa periódica —advirtió *El Movimiento Católico* al comentar el mismo día 22 las «Gravísimas palabras» de *El Imparcial*—, es la expresión exacta del sentimiento público.» «Pero lo que no nos explicamos es que después de las gravísimas y valerosas palabras de S. M. la Reina, el Sr. Cánovas del Castillo no haya planteado la cuestión de confianza, porque en ellas se declara terminantemente que el Sr. Cánovas abandona la intervención constante y eficaz que debe tener en la guerra todo jefe de Gobierno, y deja en lamentable impunidad los abusos que *pueda haber* en la administración militar, así en la Península como en Cuba.»

Si, por fin, Cánovas se da cuenta de que debe dimitir —añadía—, «entonces, es posible que S. M. la Reina, interpretando una vez más la voluntad pública, como la ha interpretado nombrando al general Polavieja segundo cabo de Filipinas, fijará su atención en el ilustre general Azcárraga, única figura respetable, inmaculada y realmente popular que en estos momentos merece la confianza del pueblo y del Ejército»¹⁰⁸.

La prensa oficiosa negó inmediatamente que la regente hubiera pronunciado aquellas frases y que la negociación del empréstito hubiese fracasado. «Con más vehemencia que nadie —aseguró *La Epoca*— desea su majestad que las guerras terminen, pero en su altísimo criterio, ni ha dado ni dará nunca motivo para que los generales en jefe de la campaña imaginen que se desconfía de su aptitud y de su patriotismo.

Si S. M., o el Gobierno responsable, abrigaran semejantes desconfianzas, antes de darlas a conocer de modo que pudiera enterarse de ellas el público, tomarían resueltamente las medidas que aconsejase el bien de la patria»¹⁰⁹.

La polémica levantada hubo de complacer sobremanera al inquieto arzobispo de Valladolid, quien, por aquellos días, intensificaba sus relaciones con los caudillos de las distintas fuerzas encartadas en la situación. La reina, el liberal Gamazo, el demócrata Canalejas, Francisco Silvela y el general Polavieja repitieron una y otra vez con él sus entrevistas entre el 22 y el 25 de octubre de 1896, en que el arzobispo pudo abandonar Ma-

drid ¹¹⁰; y, aún el 31, Azcárraga, Silvela y Polavieja, complicado también en sus proyectos, se reunieron en casa de éste, suscitando la curiosidad de los círculos políticos ¹¹¹.

Al día siguiente de su llegada a Valladolid, el 26, el cardenal podía escribir a Valentín Gómez estas palabras concisas y expresivas sobre su visita a la reina:

«*La entrevista bien, y queda bien enterada. Paréceme que pronto veremos grandes sucesos. De Weyler depende todo. ¿Acabará pronto con Maceo? Esta es la cuestión*» ¹¹².

Por las mismas fechas, Castelar había escrito privadamente a Adolfo Calzado, el 21 de octubre, una carta que corroboraba las afirmaciones del prelado aragonés. Dos dificultades tiene el Gabinete Cánovas —decía el orador republicano—: «primera, el empréstito; segunda, Weyler. Empréstito no hay». En cuanto a Weyler, «solamente una victoria podría remediarlo todo y todo rehacerlo. Pero, ¿dónde está la victoria?» «Si Weyler sale bien y no pretende alzarse con el santo y la limosna no hay nada que decir: Cánovas a perpetuidad, y es lo mejor que puede pasarnos. Si Cánovas con Weyler sale mal, ¿qué será de nosotros? El país tendrá que optar por la República o por D. Carlos. Para la República no hay nada preparado para D. Carlos está todo preparado. Los jesuitas dicen haberse convenido la Reina y el Emperador de Austria para que aquélla, por representación de su hijo, abdique la corona en D. Carlos.» Pero eso —sentenciaba en términos visiblemente semejantes, aunque de signo contrario, a los del cardenal—, «el optimismo tiene dos refugios: que no crezca la insurrección filipina, y que limpie Weyler Pinar del Río. ¿Lo limpiará? *Ecco il problema*» ¹¹³.

Pero las esperanzas del arzobispo de Valladolid no se cumplieron. Fracasada la negociación del empréstito de los mil millones, el consejo de ministros del 31 de octubre acordó rebajarlo a cuatrocientos, con garantía en la renta de aduanas, y comisionó al Banco de España para realizar la operación. Temeroso del fracaso, pidió sólo doscientos cincuenta, y, sin embargo, consiguió mucho más. El 16 de noviembre, se supo que la suscripción rondaba los seiscientos millones de pesetas ¹¹⁴.

Salvado así el Ministerio, Cascajares quizá buscó una salida airosa, renunciando ahora al mutismo de la regente sobre sus proyectos.

«Señora: El silencio de V. M. me hace creer que no merezco ya la confianza con que V. M. tanto me honraba.

He tenido la desgracia de desagradarla. Llegado este caso, todo hombre de honor tiene trazado el camino que debe seguir, que es: siendo Prelado pedir perdón a V. M., renunciar a la Prelacia y retirarse a un monasterio para prepararse a morir.

Por otra parte, mi salud es notorio que está muy quebrantada. Pido pues, Señora, a V. M. se digne concederme su real autorización para llevar a Su Santidad la renuncia del arzobispado» ¹¹⁵.

Según Vázquez de Mella, la reina le contestó que lo perdonaba: que su encono no llegaba hasta el punto de exigirle semejante sacrificio, puesto que conocía su lealtad ¹¹⁶.

Los círculos políticos comenzaron a sospechar con todo, vagamente

lo que se quería hacer. «D. Jaime de Borbón, hijo del pretendiente D. Carlos —notificó *La Correspondencia de España* el 26 de octubre de 1896—, ha cumplido ya 26 años y está soltero, y ahora parece que se piensa seriamente en casarle.» «Parece que aquellas corrientes de simpatía que hace cincuenta años quisieron unir a la Reina doña Isabel II con su primo el conde de Montemolín, se reproducen ahora, y que algo de esto se tratará en fecha no muy lejana entre personas a las que agrada el proyecto» ¹¹⁷.

«En Toledo —concretó confusamente la prensa de días inmediatos— reside el Cardenal Monescillo, que vive en relaciones cordialísimas con D. Carlos, de quien tiene en España la representación en el orden religioso.

El Sr. Cánovas celebró una conferencia muy larga con el Cardenal Monescillo, y en ella se habló del matrimonio de la Princesa de Asturias con D. Jaime, proyecto que el Sr. Cánovas tiene desde hace mucho tiempo, y en el que con tanto empeño colabora el Sr. Pidal» ¹¹⁸.

Ante noticias tan contradictorias, la prensa oficiosa conservadora negó de inmediato las gestiones ¹¹⁹. Ciertamente, bastaba conocer los hechos narrados hasta aquí, para comprender que Cánovas no podía haber tomado parte en tales trabajos. Pero, además, *El Correo Español* del 30 de octubre precisó la postura del carlismo, recordando de paso de manera expresa, tal vez intencionadamente, aquel intento de Félix Cascajares y Azara de unir a progresistas y carlistas contra Isabel II en 1867: «Que los príncipes no se casan, y que nuestra bandera, que no admite remiendos de ninguna otra, jamás servirá para remendar las demás, y finalmente, que el augusto Príncipe D. Jaime es el primer súbdito de Carlos VII» ¹²⁰.

En realidad, las negociaciones que estas noticias suponían sí habían sido llevadas a cabo por otras personas, probablemente por las mismas fechas de octubre de 1896, como segundo capítulo de la conspiración tramada por el arzobispo de Valladolid. Pero, según parece, la regente no aceptó siquiera la intención del prelado aragonés, que «no cristalizó —aseguraría más tarde el secretario del cardenal— precisamente por la actitud de la Reina» ¹²¹. Por otra parte, tampoco don Carlos lo acogió bien. Sabemos que fue enviado un emisario a Venecia para tratar el asunto y que lo habló con varias personas, pero no con el pretendiente, que se negó a recibirlo siquiera ¹²². En verdad, pese a lo que Cascajares esperaba, la orientación política de don Carlos estaba muy lejos de cualquier intento de concordia. De hecho, en el verano de 1897, negó también su consentimiento a las relaciones de don Jaime con la princesa Matilde, hija de Luis de Baviera, heredero de este trono, en el que luego fue Luis III, alegando que los partidarios del carlismo habrían visto mal que fuera su esposa un miembro de la familia de María Cristina de Habsburgo ¹²³.

Por lo demás, el intento del arzobispo de Valladolid no trascendió ni mucho menos como otros proyectos matrimoniales de don Jaime, hasta el punto de que la historiografía carlista lo ha ignorado casi por completo ¹²⁴. No parece tampoco que volviera a ser intentado entre 1897 y 1900. Algún tiempo después de aquella fecha, el propio cardenal Cascajares lamentó ante Vázquez de Mella, en una conversación mantenida en El Escorial, que su proyecto no había podido ser realizado por las diferencias

que había entre dos de los principales conjurados y porque Cánovas Romero Robledo empezaban a sospechar¹²⁵. Así fracasaba, con carácter tan definitivo como lo fuera la decisión de don Carlos, uno de los propósitos, quizá el más ambicioso, del arzobispo de Valladolid, y su gestión hubo de reducirse de momento a los esfuerzos del general Camilo Polavieja.

NOTAS

¹ Jacques Chastenet: *Histoire de la Troisième République. II. La République des républicains. 1879-1893*, Paris, Librairie Hachette, 1964, pág. 259-261.

² Vid. Carlos E. Corona Baratech: *José Nicolás de Azara. Un embajador español en Roma*, Zaragoza, C. S. I. C., 1948, 455 pp.; José López de Toro: *Cartas de José Nicolás de Azara al cardenal Lorenzana*, «Boletín de la Real Academia de la Historia», CLXI (1967), 7-28. Hay más datos sobre el obispo Cascajares en nuestro estudio *Regeneracionismo y política confesional en España* («Archivo Hispalense», núm. 166 (1971). Lo resume Javier Tusell: *Historia de la democracia cristiana en España*, t. I, Madrid, Edicusa, 1974, y, en cambio, no emplea la bien trabajada obra de Oscar Alzaga: *La primera democracia cristiana en España*, Barcelona, Ariel, 1973.

³ Cfr. conde de Rodezno: *Carlos VII, Duque de Madrid*, Madrid, Espas Calpe, 1929, pág. 42 ss.

⁴ Cfr. Manuel de Castro y Alonso: *Episcopologio vallisoletano*, Valladolid, Tipografía y Casa editorial Cuesta, 1904, pág. 477 s. (BNM).

⁵ Debemos esta noticia a don Joaquín Martínez del Peral y Fortún, marqués de Valdeguerrero, descendiente de la familia del prelado. Fuera de las noticias contenidas en los boletines de las diócesis, no hemos hallado documentación sobre la actuación política de Cascajares ni en el Archivo Diocesano de Calahorra, ni en el de Valladolid, ni en el de Zaragoza. No hemos conseguido encontrar el archivo de Vázquez de Mella, que debería contener la correspondencia que leyó en la sesión del Congreso de los Diputados del 21 de diciembre de 1910 (vid. *Diario de las Sesiones* correspondiente), además de otras cartas a la que sólo alude allí y desde luego toda la documentación política del archivo de Valentín Gómez, que este dejó al orador carlista para aquella ocasión según nos comunica don Luis Gómez Mesa. Aunque no ha podido facilitarnos su lectura, el conde de Cascajares conserva en Calahorra algunas cartas del obispo, que no añaden, al parecer, nada a las que aquí utilizamos. Así mismo, conserva algunas, de contenido familiar, el marqués de Valdeguerrero, a quien no hemos referido ya. En el Archivo Romano de la Compañía de Jesús, según nos comunica el padre Lamalle, hay también algunos escritos de monseñor Cascajares, pero nada que revele sus gestiones políticas, de las que tuvo al menos noticia su amigo el general de la Compañía Luis Martín. Tampoco nos han servido los buenos oficios del padre Fernández Regatillo para tener acceso al archivo del marqués de Comillas. Del general Polavieja, que nos consta guardó su correspondencia política, no conseguimos localizar sin embargo más que la relativa a su gobernación de Cuba y Filipinas, conservada en parte en el archivo de piélagos y en parte en el Archivo de Indias de Sevilla, conforme a las indicaciones que nos facilitan amablemente doña Rosario Parra y don Octavio Gil Munilla. Contamos en cambio con los recuerdos de don Camilo García de Polavieja nieto de aquél, y algunas interesantes indicaciones de otros familiares. Por sus descendientes, sabemos que los archivos de José Canalejas, Francisco Silvela y Germán Gamazo, relacionados así mismo con el prelado, se han per-

dido, casi todo en la guerra de 1936-39. En todas estas gestiones, hemos contado con la colaboración de don Manuel Fal Conde, don Manuel Aznar Bosque, los señores secretarios de los Ayuntamientos de Calahorra y Pedrola, patrias respectivamente de monseñor Cascajares y de Valentín Gómez; don Luis Miguel Enciso y don Amando Represa Rodríguez, en la localización de documentos en Valladolid; la señora condesa viuda de Gamazo y don José María Gamazo y García de los Ríos, el marqués de Lema y don Torcuato Luca de Tena, los últimos para la búsqueda de posible documentación del colaborador de Pidal y de algún trabajo publicado sobre todo ello por ABC, respectivamente.

⁶ Cfr. Castro y Alonso: *op. cit.*, 478 ss.

⁷ Pastoral, apud *Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Calahorra y la Calzada*, 21-VIII-1889. Vid. *ibidem*, 24-XII-1886, 30-VI y 26-IX-1887, 30-IV-1889, que lo sitúan en la misma línea antiliberal.

⁸ Pastoral, *ibidem*, 16-X-1889.

⁹ *Revista Popular*, XLI (1891), 395.

¹⁰ Vid. *La Cruz* (1889), I, 601.

¹¹ Vid., en este sentido, por ejemplo, la pastoral del obispo de Vic y la circular del de Salamanca *ibidem* (1891), I, 337-352 y 44-46 respectivamente.

¹² *Ibidem* (1890), I, 464-478.

¹³ Vid. *ibidem* (1891), I, 62-88 y 47 ss.

¹⁴ Francisco Pi y Margall y Francisco Pi y Arsuaga: *Historia de España en el siglo XIX...*, Barcelona, Miguel Seguí editor, 1902, t. VI, pág. 720 ss.

¹⁵ Vid. carta de Cascajares a la reina, 24-XII-1891 (APR/SpM, c.ª 6, núm. 10), donde aquél se refiere a un *memorandum* remitido antes a la regente en el que habla exactamente de los puntos tocados en el documento que vamos a comentar. Este texto, sin embargo, en el lugar de donde lo tomamos (Antonio María de Cascajares y Azara: *La Organización Política de los Católicos Españoles*, Valladolid. Establecimiento Tipográfico de H. de J. Pastor, 1894, págs. 33 ss.), fue presentado como escrito dirigido privadamente a un amigo. Otros motivos de prudencia pudieron animar al arzobispo a ocultar la identidad del receptor, y, en cualquier caso, el *memorandum* regio tenía el mismo contenido que el que ahora comentamos. El libro citado de Cascajares y Azara procede de APR/SpA. Conoció esta documentación, en parte, Melchor Fernández Almagro: Cánovas. *Su vida y su política*, 2.ª ed., Madrid, Ed. Tebas, 1972, 671 pp.

¹⁶ Lo ha estudiado José Cepeda Adán: *Sagasta y la incorporación de la izquierda a la Restauración. El gobierno de 1881 a 1883*, en «Historia social de España. Siglo XIX», Madrid, Guadiana de Publicaciones, 1972, pág. 309-336.

¹⁷ Puede verse la evolución, desde otro ángulo, en nuestro estudio *La última evolución política de Castelar*, «Hispania», XXX (1970), 385 ss.

¹⁸ Apud Cascajares: *op. cit.*, 33 ss.

¹⁹ Cfr. carta cit. nota 15 supra.

²⁰ Melchor Fernández Almagro: *Historia política de la España contemporánea. I. 1868-1885*, Madrid, Alianza Editorial, 1968, pág. 341.

²¹ Cfr. *ibidem* (1), 408, y (2) 17 ss., 69-70, 129-130, 159 ss. Vid. Julio Maestre Rosa: *Francisco Silvela y su regeneracionismo tradicionalista*, «Revista de Estudios Políticos», núm. 187 (1973), 191-226.

²² «Señora = Con el fallecimiento del señor Arzobispo de Valladolid, se presenta ocasión a V. M. de sacarme de aquí, si V. M. en su alto criterio, lo juzga conveniente. = Dígnese Señora V. M. recibir el cariño, profundo respeto y adhesión, con que soy de V. M. humilísimo súbdito y capellán. = Señora = A L. R. P. de V. M. = Antonio María Obispo de Calahorra = Calahorra, 17 de septiembre 91.» «A S. M. La Reina Regente = Señora: El correo de anoche me trajo una carta de Roma, de la Secretaría de Estado, anunciándome que en Consistorio que tendrá lugar el 17 del próximo diciembre, sería yo preconizado Arzobispo de Valladolid. = No sé, Señora, cómo expresar a V. M. mi profundo agradecimiento; es tan inmenso que es imposible traducirlo en palabras: precisamente me encuentro enfermo en cama hace unos días, ¿cuánto pues he de agradecer a V. M. me saque de un clima que conocidamente me hace daño? Ya sabe V. M. que no tiene súbdito más leal ni que más ame a V. M. = En cuanto N[uestro] Señor

me conceda un poco de salud, tendré el honor de dar personalmente a V. M. las más rendidas gracias por tantas bondades como para mí tiene. = Dios guarde Señora, la preciosa vida de V. M. y de su Augusto Hijo, esperanza de la Patria, y prospere y bendiga a toda la Real Familia, como yo la bendigo desde el fondo de mi alma. = Señora = A L. R. P. de V. M. = El Obispo de Calahorra = Calahorra, 30 de noviembre de 1891» (APR/SpM, c.^a 6, núm. 10).

²³ Cfr. Castro y Alonso: *op. cit.*, 486.

²⁴ «Calahorra, 24 de diciembre de 1891 = Señora: = Si V. M. ha tenido la dignación de someter al examen de su propia sabiduría y de su gran prudencia el documento que tuve la honra de poner en sus Reales Manos cuando se sirvió recibirme en audiencia particular, habrá notado, por algunas de las observaciones contenidas en el referido Memorándum, que estaba escrito antes de que ciertos cambios ocurridos en la marcha de la política actual dieran por resultado la fusión de los elementos romeristas con los conservadores y la salida del ministerio de los señores Silvela y Villaverde, personas ambas ... [aquí lo transcrito arriba] ... gobernante. = Estos cambios no alteran, sin embargo, el sentido general del documento mencionado, antes bien confirman la idea en él expresada de que el actual ... [de nuevo arriba] ... monárquica que vuestro Augusto Hijo representa y V. M. guarda por bienhecho designio de la Providencia Divina. = Acerca del extraordinario y excepcional interés que la cuestión económica despierta en todos, nada tengo que decir, porque los hechos han venido a confirmar de una manera tan elocuente y decisiva las observaciones que respecto de este grave asunto me permití hacer en aquel documento, que V. M. misma puede advertir cuán viva e inusitada es la agitación producida en todo el reino por el peligro que corre uno solo de los ramos de la riqueza pública, de resultas de las tarifas prohibitivas votadas en las cámaras francesas. = Esta cuestión económica se impone de tal suerte que el poderoso ... [de nuevo lo transcrito arriba] ... problema. = Pero este problema está unido a una política no menos enérgica, acertada y patriótica, y, a mi modo de ver, sólo una nueva ... [arriba] ... a cabo. = La cooperación ... [arriba] ... Castillo. = Obedeciendo a las sabias indicaciones de V. M., el Prelado que suscribe conferenciará con algunos de esos personajes cuando vuelva de nuevo a esa corte y explorará con cautela sus ánimos para ver si se hallan inclinados a cooperar al pensamiento cuyo programa conoce V. M.: pero en esto, como en todo, a su altísima decisión queda sometido este su leal súbdito que pide a Dios toda especie de bendiciones y felicidades para V. M., vuestro Augusto Hijo y toda la Real Familia, cuya preciosa vida conserve largos años. = Señora: = A L. R. P. de V. M. = Antonio M[arí]a, Arzob[isp]o prec[onizado] de Valladolid» (APR/SpM, c.^a 6, núm. 10).

²⁵ La respuesta de la reina a la carta de monseñor Cascajares transcrita en la nota anterior podría ser esta, conservada en minuta: «Al Muy Rev[erendo] S[eñ]or don Antonio Cascajares y Azara, Arzobispo de Valladolid = Palacio de Mad[rid] 9 de Mayo 1892. = Muy Reverendo señor Arzobispo. = He leído con el mayor detenimiento e interés la carta que tuvo la amabilidad de dirigirme, y me apresuro a contestarla antes de ausentarme de esta capital, para manifestarle que en el asunto por que se interesa, juzgo que no debe dar paso alguno, pues habiéndose hecho diferentes otras combinaciones desde que sobre el particular hablamos, se ha colocado en situación tal que por la fuerza misma de los acontecimientos, ha de resolverse por sí solo, sin necesidad de que se haga nada para ello. = No dude S[eñ]or Arzobispo del placer q[u]e tengo al poderle dar tal noticia, y al rogarle no nos olvide en las oraciones que eleva al Cielo, le reitero las seguridades de la sincera estimación con que quedo de V[ost]ro muy afecta. = Minutas = [Hav una abreviatura ininteligible]» (*ibidem*). El original de las cartas enviadas por María Cristina de Habsburgo a monseñor Cascajares fue destruido, por mandato del propio arzobispo en el lecho de muerte, según nos comunica don Antonio de Miranda Mateo, conde de Cascajares.

²⁶ Carta de 2-IV-1894, apud Francisco Silvela: *Artículos, Discursos, Conferencias y Cartas*, Madrid, Mateu Artes Gráficas, 1923, t. II, pág. 78-79.

²⁷ Vid. *Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid*, 15-V-1893.

²⁸ Cfr. *El Movimiento Católico*, 12-IV-1894 ss., y *Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid*, 21-IV-1894.

²⁹ Vid. *El Movimiento Católico*, 17-IV-1894.

³⁰ «¿No es hora de que los católicos españoles abramos los ojos y nos resolvamos a defender por nosotros mismos nuestros sagrados intereses? ¿No es vergüenza que siendo los más y los mejores, hayamos dejado y dejemos a la nación española a merced de unos pocos que la han llevado a la triste situación actual? ¿No es hora de dejarse de cuestiones secundarias y organizarnos los católicos, en apretado haz, únicamente como católicos? La peregrinación [a Roma de 1894] ha descubierto que tenemos a nuestra espalda fuerzas inmensas, y nos ha hecho patente el secreto de nuestro poder. Efecto tan maravilloso no se hubiera seguramente logrado, si en la peregrinación no se hubiese prescindido de partidos. Lo que ahora se ha hecho para la peregrinación, ¿por qué no ha de hacerse, de un modo permanente, para la defensa de los intereses católicos en todos los terrenos legales?» (apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid*, 21-IV-1894).

³¹ *El Movimiento Católico*, 18-IV-1894.

³² Apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 10-V-1894.

³³ *El Movimiento Católico*, 19-IV-1894. Cfr. *ibidem*, 23 y 28-VIII-1895, 17-VIII-1896; Máximo Filibero: *León XIII, los carlistas y la monarquía liberal. Cartas a los señores don Ramón Nocedal, don Alejandro Pidal y don Valentín Gómez*, Valencia, Imp. de Manuel Alufre, 1894, t. I, pág. 55, y t. II, pág. 226 ss.; [José Roca Ponsal]: *Observaciones que el Cap. XIII del Opúsculo del señor Cardenal Sancha, Arzobispo de Toledo, ha inspirado a un ciudadano español*, Sevilla, Imp. de Francisco de P. Díaz, 1899, pág. 29 (BSP).

³⁴ Cfr. *El Movimiento Católico*, 5-V-1894 ss.

³⁵ Cfr. Filibero: *op. cit.*, II, 238.

³⁶ Apud *Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo*, 17-V-1894.

³⁷ Vid. *El Movimiento Católico*, 14 y 16-V-1894.

³⁸ *Vid. El Correo Español*, 7-X-1897, aunque podría referirse a la condena posterior de *El Movimiento Católico* por Monescillo, aún en 1894.

³⁹ Vid. *El Movimiento Católico* y *El Correo Español*, 16-V-1894 ss.

⁴⁰ Vid. *El Movimiento Católico*, 16, 23, 28-V-1894 ss.

⁴¹ Vid. *ibidem*, 14-V-1894.

⁴² Cit. *ibidem*, 5-VI-1894.

⁴³ Vid. *ibidem*, 7, 26 y 30-VI-1894.

⁴⁴ Cit. Filibero: *op. cit.*, II, 228.

⁴⁵ Cfr. *ibidem*, 234 s.

⁴⁶ *Ibidem*, 197 s.

⁴⁷ Vid. Cascajares: *La Organización...*, 38 y 60.

⁴⁸ «Los espíritus estrechos, incapaces de elevarse hasta la altura desde donde se miran las cosas en el Vaticano, no vieron al principio en el documento pontificio [*Inmortale Dei*] más que la exhortación del Papa a los católicos de la nación vecina, para que aceptasen sinceramente la forma republicana; de aquí la extrañeza y aun el escándalo de algunos ignorantes que consideran idénticas o poco menos las palabras *república* e *impiedad*; de aquí las incomprendibles e injustificables resistencias de algunos católicos franceses afiliados a los partidos monárquicos; de aquí la indiferencia con que otros católicos de diversos países han oído la augusta voz del Padre Santo, dando por supuesto que habla sólo a los franceses; de aquí, finalmente, y en el sentido contrario, los diritambos de algunos cándidos demócratas, entre los cuales se ha distinguido en España el Sr. Castelar, presentaándonos al Pontífice poco menos que convertido por él al buen camino de la reconciliación entre la democracia y la Iglesia. Pero las anargas quejas ...» (*ibidem*, V. s.). Castelar visitó a León XIII el mismo año 1894 (cfr. *La última evolución*, cit. nota 17 supra, pág. 392), y estas líneas debieron ser escritas por Cascajares en la segunda mitad de ese año. ¿Se refieren a una entrevista o a otra relación anterior?

⁴⁹ Cascajares: *La Organización...*, VII s. Hasta aquí, la introducción. Sigue luego la primera parte de la obra, redactada en febrero de 1894 (pág. 11-38).

⁵⁰ *Ibidem*, 11-15. Contra ello se argüiría, decía, la fuerza del carlismo y del integrismo. «Todos ellos parten de un supuesto verdadero, a Dios gracias, que es el profundo arraigo que todavía tiene en el pueblo español el sentimiento católico; pero, por desgracia, no se siguen de ahí las consecuencias que sacar. Que el honrado labrador español, que forma el núcleo más numeroso y sano de la población de España, ... es profundamente católico, no cabe duda; pero ¿qué tenemos con eso, si, por más que así se proclame en hermosas teorías, a llegar al terreno práctico, ni aquí ni acaso en ninguna parte es el pueblo el que arregla esas cuestiones? ¿No vemos cómo en todas las elecciones obtiene indefectiblemente el Gobierno, sea el que fuere, inmensa mayoría?» (pág. 18). «si la dinastía reinante cayese, tendríamos la República, tendríamos la guerra civil con todos sus horrores, tendríamos ... [sic] cualquier cosa menos la restauración cristiana... Porque ... ninguno de los grupos en que están divididos los católicos tiene ni tendrá jamás, mientras permanezcan aislados, medios suficientes para realizarla. = ... Desde que por culpa quizá de todos ... fracasó el pensamiento de la Unión católica, que era algo parecido a lo que actualmente propongo, por efecto de las lamentables y escandalosas contiendas suscitadas en la prensa con tanta pena del Papa y de los Prelados como alegría de nuestros enemigos, los católicos que pudiéramos decir militantes se dividieron en innumerables fracciones, fáciles de reducir a tres grupos perfectamente caracterizados por sus tendencias y aficiones. El elemento más piadoso, el que antepone a todo la pureza de la doctrina constituyó el partido llamado integrista, que todo lo espera de la devoción al Corazón de Jesús. La parte batalladora, el elemento militar de la última guerra civil, siguió adherido ... [a] D. Carlos de Borbón, y para éstos no hay más solución posible que el entronizamiento de don Carlos, y como medio la guerra. Alrededor del señor Pidal, y, ya agregándose con él a la derecha conservadora o manteniéndose indiferentes en política, se agruparon principalmente los hombres de letras, los políticos, los literatos, los poetas, los hombres de más prestigio en Academias y sociedades científicas y literarias, los cuales ponen su confianza en la acción lenta, pero constante, de la política.» Fuera de éstos, no valía la pena hablar de otros grupos menores. «¿A qué hablar, por ejemplo, del exiguo número, ni siquiera constituido en grupo de católicos republicanos, si por rectas que sean sus intenciones, el día en que triunfase la República, o tendrían que renegar de ella, o se verían arrastrados por la fuerza brutal del número a resoluciones contrarias a su conciencia?» (pág. 19 s.). Respecto al integrismo, «omnipotente algún día, ... su absoluta intransigencia, no sólo religiosa sino también política, le fue enajenando simpatías, y, separado luego violentamente de aquel príncipe [don Carlos], se ha ido aislando cada vez más hasta perder por completo, si no el tesón y el espíritu de batalla, la importancia como grupo y la influencia decisiva que alguna vez ejerció en la acción católica. Hoy apenas ha logrado un acta de diputado, que aún está *sub judice*, para su jefe el Sr. Nocedal; su influencia en la política se reduce»... (sigue el texto correspondiente a la nota 142 del capítulo I) (página 21).

⁵¹ *Ibidem*, 28. Acaba esta parte escrita en febrero de 1894 con la transcripción del probable *memorandum* dirigido a la reina en 1891, que hemos comentado antes y que aquí se presenta como manifestaciones hechas «privadamente a un amigo nuestro» en aquel año (pág. 33-38). La segunda parte, fechada en junio del 94, se justifica en la peregrinación obrera a Roma, «acontecimiento de excepcional importancia religiosa y que ha venido a dar fuerza a nuestra argumentación» (pág. 39). Incluye para demostrarlo su propia carta pastoral del 17 de abril, a raíz de los sucesos del muelle de Valencia, y el discurso de León XIII a los peregrinos (pág. 39-43). Cascajares insiste después en la adhesión a la monarquía alfoncina que éste imponía, pese incluso (y entraaba aquí en la polémica entre *El Movimiento Católico* y *El Correo Español*) a los derechos personales de Carlos VII, «por los cuales no hay hoy dos mil españoles que expongan voluntariamente su vida, aun considerándolos ciertos» «Es cierto: hay una parte de la política, la puramente humana, que no cae ordinariamente y por su naturaleza bajo la jurisdicción del Pontífice; pero ...

hay cosas que, al llegar a convertirse por las circunstancias en medios *necesarios* para un fin religioso, quedan *ipso facto* subordinadas a él, y entonces, *excepcional y accidentalmente*, caen bajo la autoridad pontificia.» Por tanto: «Si para el bien de la Iglesia, menos aún, para el bien de España fuese necesaria la renuncia de D. Carlos a los derechos que creen tener, D. Carlos no obraría como príncipe cristiano si no estaba dispuesto a renunciar». El Papa, sin embargo, no niega esos derechos ni pide la renuncia: «lo que quiere el Papa ... es que la reivindicación de esos derechos no sirva de rémora a la acción de los católicos españoles, como católicos; ... no es una renuncia lo que pide, es una *tregua*» (págs. 48-50).

⁵² *Ibidem*, 59.

⁵³ El único ejemplar que hemos podido localizar es el de APR/SpA, leg. 322. Pudo tratarse de una obra de tirada muy reducida, destinada a un público restringido, a semejanza de la memoria de Dupanloup, obispo de Orleans, sobre *La crise de l'Eglise*, por citar un ejemplo típico de esta clase de usos. Aquella memoria, publicada en 1878, tuvo una tirada de sólo 200 ejemplares, que fueron repartidos entre los miembros del cónclave que había de elegir al sucesor de Pío IX (vid. Jacques Gadille: *La pensée et l'action politique des évêques français au début de la IIIe République. 1870/1883*, Paris, Hachette, 1967, t. I, páginas 79-80).

⁵⁴ «... buen propósito. = En primer lugar en las páginas VII y VIII se lee un largo párrafo que debe desaparecer, pues escrito hace más de un año contiene una serie de previsiones que no solo no se han realizado sino que por el resultado contrario a lo que allí se dice desacreditaría a su autor. Aparte de esto, y de algunos otros detalles de hecho que convendría revisar, si ahora se publica el libro, nótase en él un juicio y apreciación de los hechos y sucesos públicos muy superficial y tomado de los periódicos de oposición. Este defecto desaparece cuando el autor, persiguiendo acontecimientos pasados, sintetiza la historia de los último años, mostrando entonces un juicio imparcial y una apreciación muy sana sobre todo en cuanto a la Restauración se refiere. Es también claro, oportuno y preciso, el comentario a las palabras de S. S. y la manera como procura inculcar sus ideas entre los hombres políticos. En cambio el juicio y apreciación del partido carlista que se contiene en las páginas XVII a XX, es evidentemente parcial y exagerado, pues si dicho partido tuviera ...» (sigue lo transcrito en el texto más adelante) (APR/SpA).

⁵⁵ «... desapasionado por el efecto de las últimas exhortaciones y del propósito general del libro. = Quizás consiste eso ...» (*ibidem*).

⁵⁶ «... se ha inspirado su autor, y ésta la verdadera fuerza y sólida base de la Monarquía constitucional de España, representada por la Reina Regente. Si así no fuera, y si a los ojos de la mayoría de los españoles no representase esta necesaria transacción y esta transformación bienhechora que el principio monárquico tiene en nuestra patria, no sería lábaro de paz y esperanza de engrandecimiento a que aspiramos todos los españoles» (*ibidem*).

⁵⁷ Constantino Bayle: *El segundo Marqués de Comillas, Don Claudio López Bru*, Madrid, Administración de Razón y Fe, 1928, pág. 705 s. (BCB).

⁵⁸ Cit. *ibidem*, 106.

⁵⁹ *Ibidem*, 106 s. La datación de todos estos pasos es francamente confusa, como todo lo que se refiere a fechas en la obra de Bayle. En realidad, la documentación que publica es lo único verdaderamente valioso en ella.

⁶⁰ Cit. *ibidem*, 104, 107.

⁶¹ *Ibidem*, 107 s.

⁶² De serlo, se trataría de un claro procedente, muy temprano, de las Juntas de Acción Católica difundidas entre 1901 y 1903, de las que hablaremos más adelante.

⁶³ Cit. *ibidem*, 238.

⁶⁴ Apud *Crónica del cuarto Congreso católico español*, Tarragona, Establecimiento tipográfico de F. Arís e hijo, 1894, pág. 11. Cfr. *ibidem*, 7 ss., 27 s. sobre las asistencias y la carta de Costa.

⁶⁵ Cit. *El Correo Español*, 7-X-1897.

⁶⁵ *El Movimiento Católico*, 24-X-1894.

⁶⁷ Los textos proceden del edicto del obispo auxiliar de Toledo, José Ramo Quesada y Gascón, prohibiendo *El Movimiento Católico*, con fecha 26-X-1894: «Aviso pastoral del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo con motivo de la prohibición de *El Movimiento Católico*», fecha 30-X-1894; *El Movimiento Católico*, 3-XI-1894; informe del censor eclesiástico de *El Movimiento*, fechado 10-XI-1894: todo apud *La Cruz* (1894), II, 485-603. La prohibición cesó por decreto arzobispal de 8-XII-1894 (*ibidem*) (1895), I, 69-73).

⁶⁸ Cit. *ibidem* (1894), II, 616.

⁶⁹ Apud *Crónica del cuarto Congreso*, 701 s.

⁷⁰ Vid. *Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispo de Valladolid*, 20-III-1895 y 25-III-1896.

⁷¹ «Valladolid, junio 17 — 95 = Señor don Alfonso de Aguilar = Muy Sr. mío y distinguido amigo: Muchas gracias por su felicitación de San Antonio. = La última vez que tuve la honra de ver a S. M. me dijo que cuando me ocurriese algo, me valiera de V., «que es joven muy reservado y de toda mi confianza (sic) [sic]. Felicito a V., que grande honor es merecer la confianza del Monarca, y vamos al asunto: La Señora, siempre tan buena para mí, me encargó avisara cuando algo supiera; este algo es, que por conducto, al parecer seguro se me dice que en Agosto habrá Consistorio para la creación de Cardenales. Creo es, pues, la ocasión oportuna de enviar S. M. la carta al Papa. Quien me asegura lo del Consistorio, me asegura también que sabiendo el Papa directamente por la Señora su deseo, no la desairará; la cosa es destruir las intrigas y enredos de Rampolla, que tiene como secuestrado o cosa así al Papa, y no le dice más que lo que conviene a sus fines. = La indisposición de la Princesa, parece no es ocasión de ir con embajadas a S. M., y yo no quiero por todos los Capelos del mundo, ser indiscreto y menos molestar: entienda V., por tanto, amigo mío, el alcance de esta carta, que es cumplir el encargo recibido de S. M. dejando a la discreción de V. el dar o no cuenta de ello a S. M.; haga V. y abra con entera libertad: Ahí sobre el terreno, V. mejor que yo sabrá lo que procede hacer. = Créame su afectísimo amigo y Cap[ellán] que le bendice B[esa] S[u] M[ano] † Ant[oni]o M[ar]ía Arzobispo.» En la misma cuartilla hay una anotación de letra distinta, probablemente síntesis de la respuesta del secretario de la reina o de la propia regente: «Que S. M. no le olvida y que tendrá muy presente su indicación de enviar la carta» (APR/SpM, c^a 6, núm. 10).

⁷² Cfr. *Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid*, 1-XII-1895.

⁷³ «Señora: = Por el telegrama que tuve el honor de dirigirle habrá sabido mi feliz llegada a esta Capital. Gracias a Dios sigo bien aun cuando el calor es horrible. = Vi al día siguiente a Su Santidad. La audiencia duró tres cuartos de hora. El Papa está todo lo bien que puede estarse a los 87 años. Estuvo amabilísimo y casi todo el rato hablando de V. M. de S. M. el Rey y de su AA. RR.; me hizo infinidad de preguntas: realmente quiere a V. M. Hizo un justo y merecido elogio de sus virtudes, talento y extraordinarias dotes de gobierno. No hay que decir el placer con que oía al Santo Padre. Vi después al Cardenal Rampolla que estuvo también muy amable: estas amabilidades las debo a la benevolencia de V. M. para mí. Paso el día recibiendo visitas; son innumerables las ceremonias que tienen que observar los nuevos Cardenales. El P[adre] General de los Jesuitas viene todos los días; somos amigos antiguos y hemos hablado mucho y de muchas cosas; mañana veré por la noche largamente al Cardenal Rampolla. = Muchas son las cosas y de sumo interés algunas que tendré el honor de contar a V. M. = Pensamos salir de aquí el día 1.º de julio. = Señora: = A L. R. P. de V. M. = † Ant[oni]o o M[ar]ía, Cardenal Cascajares. Roma, 22 de junio de 1896.» La carta debió ser remitida con esta otra de su secretario: «22 de junio 96 = Señor D. Alfonso de Aguilar = Muy señor mío y de toda mi consideración: Mi Sr. Cardenal me encarga rogar a V. que ponga lo antes posible la adjunta carta en las Augustas Manos de S. M. = No escribe a V. el Sr. Cardenal porque en este momento tiene dos Sres. Cardenales de visita. = Con la mayor atención me repito de V. afectísimo y Cap[ellán] que le bendice

b[esa] s[u] m[ano]. = Regino Martínez.» (APR/SpM, c.^a 6 ,núm. 10). Según Vázquez de Mella, Cascajares manifestó sus propósitos, en este viaje a Roma, a varios priores de órdenes religiosas y personalidades de la curia (cfr. *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, sesión de 21-XII-1810).

⁷⁴ Cfr. conde de Romanones: *Doña María Cristina de Habsburgo Lorena*, en «Obras completas», t. II, Madrid, Ed. Plus-Ultra, s. d., pág. 439.

⁷⁵ La carta comenzaba refiriéndose al nombramiento de monseñor Nava, nuncio apostólico en Bruselas, para la nunciatura de Madrid y a las divisiones existentes en el Sacro Colegio sobre los considerados papables, en previsión de la muerte de León XIII. «Ahora, Señora, voy a tener el honor de hablar de otro asunto que interesa en extremo a V. M. Vuestro humilde capellán, Señora, quiere a V. M. como un padre quiere a su hija: por otra parte, V. M. me ha elevado a una altura a la que no pude soñar; natural es, a fuer de bien nacido, que mi corazón esté lleno de agradecimiento y mi cabeza busque servir y ser de alguna utilidad a V. M. Me ha hecho V. M. Cardenal; nada más puede darme; mi consejo, por tanto, podrá o no valer: eso V. M., con superior talento, lo juzgará, pero no podrá dudar de que es un consejo leal y sincero. = Gastados y deshechos los actuales partidos, es evidente que no pueden fundar nada estable, nada sólido. ¿Cómo han de afianzar el Trono de una manera fuerte, capaz de hacer frente a un desbordamiento ... [aquí lo transcrito en el texto] ... entrañas? Con tales elementos no es posible fundar nada. Es, pues, claro, como la luz del mediodía, la necesidad ... [de nuevo arriba] ... dinástico. Con este partido V. M. hoy, S. M. el Rey mañana, afianzan su Trono y puede V. M. hacer algo grande y llegar a la Historia un nombre tan ilustre como el de Doña María de Molina o Isabel la Católica. = Cuatro años hace ya, como sabe V. M., que persigo este pensamiento; tiempo hace que» ... (arriba) (apud Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910).

⁷⁶ Vid. M. Arboleya Martínez: *Sobre el Tradicionalismo Político (Cartas de un obispo español y un personaje carlista)*, Madrid, Librería de don Gregorio del Amo, 1910, 37 págs. (BNM).

⁷⁷ «Es intolerable que se presente haciendo traición al Rey, al hombre más dinástico del siglo XIX. Porque todos los actos políticos del Cardenal Cascajares se dirigieron siempre, con la fuerza de sus iniciativas levantadas, a consolidar el Trono de Don Alfonso, único modo, según la apreciación del Prelado, de salvar a la Nación y asegurar su futuro engrandecimiento. Y no es que el Cardenal dejara de hacer justicia a todos y llamara malo a lo mucho bueno que tiene ese partido de convicciones e ideales; ni puedo negar que aquel egregio príncipe, político consumado, tuvo buenos amigos en los adictos a D. Carlos. Lo que él vio claro, es que sólo resurgiría la España grande apretando la Corona a las sienes del Rey actual; porque con disturbios, con guerras intestinas, ni con hondas perturbaciones sociales, jamás se robustecieron las Naciones. Y para alcanzar lo que él juzgaba fin salvador, concibió el proyecto en torno al cual se ha creado esa novela, en la cual hay algo de verdad y mucho de fantasía. = La verdad es que el Cardenal Cascajares, al ir a Roma a recibir el capelo cardenalicio, llevó en su ánimo el proyecto de unir las dos ramas borbónicas, rayando a robustecer el árbol de la dinastía la gran fuerza de la familia deserrada. Por conducto del sapientísimo Cardenal Rampolla sometió a la Santa Sede su proyecto; solicitó el apoyo del P. Luis Martín, general de la Compañía de Jesús, de otros generales de Órdenes religiosas y de altas personalidades de a Curia Romana. = Cuando contó con la cooperación de tan valiosos elementos, dio cuenta detallada de su plan a la Reina Doña Cristina, en carta que yo escribí» (que ha de ser la que venimos comentando de 25-VI-1896) (carta de Regino Martínez, secretario de Cascajares, a Canalejas, de 1910, a raíz de la discusión de la supuesta complicidad de este político —apud Canalejas: *Diario de las Sesiones... Congreso...* 21-XII-1910).

⁷⁸ Continuación de la carta de Cascajares a la reina de 25-VI-1896, el orden de cuyos párrafos alteramos en el texto. Vid. nota 75 supra: «... del Trono legítimo de V. M. = Pero esta reconciliación, esta unión, ¿es posible? ¿La aceptará don Carlos? ... [arriba] ... San Fernando. = Podrán suscitar veinte guerras

civiles más; pero sin éxito, sin otro éxito que arruinar la Patria y enconar los ánimos. Don Carlos ya de esto está convencido, mucho más ahora que por su reciente casamiento ha quedado completamente desautorizado entre los suyos y que ve a su hijo...» (Vázquez de Mella interrumpe aquí la lectura de la carta sin reanudar después la frase.) «¿Quién podría mediar para llevar a cabo este proyecto? Para comenzarlo ... [arriba] ... este proyecto. = Nada, Señora, habí dicho ... [de nuevo arriba, en párrafos anteriores] ... hombres eminentes, y por esto he venido a Roma, y crea V. M. que no ha sido sin esfuerzo, porque me encontraba mal de salud, y tanto arreció el ataque, que en Burdeos, el médico que desde Valladolid me acompañaba, me prohibió en absoluto continuar el viaje; realmente me sentía morir. Dios sea bendito llegué a Roma, y consulté expliqué todo mi pensamiento ... [arriba] ... y el mío. = Vi también a nuestro embajador, y sin detalles nada más que en líneas generales sobre la necesidad de formar un partido, le expuse el proyecto y lo acogió con gran entusiasmo ofreciéndose para todo lo necesario. = Y ¿cómo llevarlo a cabo? Creo necesario primero... (sigue el texto correspondiente a la nota siguiente inmediata) (*ibidem*). No hallamos en la historiografía carlista una explicación suficiente de la animadversión de los legitimistas hacia doña Berta de Rohan a raíz del casamiento. Después —sobre todo cuando se divulgaron sus supuestos esfuerzos para enfrentar a Carlos VII con su hijo, incluso acusando a éste de algún intento de abuso sobre ella misma— sí existe la explicación (vid. Francisco Mergar: *Don Jaime, el Príncipe Caballero*, Madrid, Espasa Calpe, 1932, pág. 97 ss del mismo: *Veinte años con don Carlos*. Memorias de su secretario. Madrid, Espasa Calpe, 1940, pág. 173 ss., 214 ss.; del mismo nombre (hijo del anterior) *El noble final de la escisión dinástica*, Madrid, Cuadernos de Política e Historia, 1964, pág. 51 ss.).

⁷⁹ «... nada más. Desde luego, si me considera V. M. útil para algo, ya sé que puede disponer de mí con entera libertad. Cánovas»... (carta de Cascajares a la reina, 25-VI-1896, apud Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones. Congreso...*, 21-XII-1910).

⁸⁰ «... estuviera hecho. Y ¿quiénes podrían formar este nuevo partido? Una vez hecha la reconciliación, no dude V. M. ... [sic], muchos fusionistas, no pocos conservadores, los carlistas en masa, claro es que los integristas entrarían naturalmente y por la misma fuerza de las cosas a formar parte de este partido fuerte y poderoso. Medítelo» ... (arriba) (*ibidem*).

⁸¹ *Ibidem*. En la transcripción de esta carta, hemos respetado la puntuación; lo que no hicimos con ella ni con los demás documentos del mismo origen al darlos a conocer en *Regeneracionismo y política confesional en España, 1881-1899*, «Archivo Hispalense», núm. 166 (1971), 149 pp.

⁸² «25 junio 96. Señor don Alfonso de Aguilar = Muy Sr. mío y distinguido amigo: Ruego a V. tenga la bondad de poner en las Augustas manos de S. M. la Reina la adjunta carta. = Me repito de V. afectísimo amigo que le bendice. = † El Cardenal Cascajares. = Saldré de aquí el 2 de julio para Valladolid. S. M. no dispone otra cosa» (APR/SpM, c.^a 6, núm. 10).

⁸³ Escrita la carta de Cascajares el 25-VI-1896, «certificada se dirigió al secretario de la Augusta Señora. La Reina no acusó recibo. El Cardenal, lejos de desmayar ante el silencio de la Reina, me mandó escribir segunda vez, y esta segunda carta se le envió a S. M. por el conducto diplomático. La Reina contestó. Regresó el Cardenal a España, y el mismo día de su regreso fue a Miramar a ver a María Cristina (carta de Regino Martínez a Canalejas, 19-VI-1896, apud Canalejas: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910). La fecha de la visita del cardenal a la reina está equivocada, a juzgar por los datos que manejamos a continuación. Y tampoco parece posible, por falta de tiempo —el cardenal regresó el 2 de julio—, la insistencia por conducto diplomático. Se confunde probablemente con la carta a que aludimos en la nota 85 infra.

⁸⁴ Cfr. Vázquez de Mella: *ibidem*, v nota 82 supra.

⁸⁵ «Señor don Alfonso de Aguilar. = Mi respetable amigo: el lunes llegamos a ésta felizmente, gracias a Dios; el señor Cardenal como nunca de bueno. = Me encarga Su Em[inen]cia preguntar a V. si recibió una carta certificada des

toma con fecha 25, del pasado. = Con la mayor atención me repito de V. afectí-
lmo amigo SS y cap[ellá]n q[ue] b[esa] s[u] m[ano], Regino Martínez = Va-
ladolid, 9 julio 96» (APR/SpM, c.^a 6, núm. 10).

⁸⁵ *El Mensajero del Corazón de Jesús*, junio 1896.

⁸⁷ Vid. *El Movimiento Católico*, 17-VIII-1896.

⁸⁸ «... sobre el tapete; tal como se ha planteado ahora el problema, no
veo, repito, fácil ni práctica la solución. = Otro es mi pensamiento ... [arriba] ...
a esa unión; pero como ni en una ni en dos cartas puede desarrollarse, invito
a usted a que tome el sábado el tren mixto de las nueve de la mañana y vaya
a Avila; yo lo tomaré aquí el mismo día a las ocho. Usted llegará a las doce a
Avila, yo a las doce y media, comeremos con el Obispo (le damos un alegrón), y
por la tarde, usted y yo echaremos un párrafo, explicaré a usted mi plan, y
será como el primer jalón para el éxito del otro asunto que dije a usted me
preocupaba. = No falte usted: primero, porque el asunto merece la pequeña mo-
lestia de tres horas de tren; segundo, porque escribo al Obispo que vamos y nos
tendrá preparada la comida; y tercero, porque tengo el tiempo limitado y no
puedo disponer más que del sábado. = Como el plan no lo saben ni *deben* sa-
berlo más que allá en Roma, aquí en Oriente, yo, y usted cuando se lo diga,
el sábado al Obispo dice usted que lo he citado para pasar un día con él y
nos dé de comer, que no sabe usted más. Adiós, suyo, Calanda» (apud Vázquez
de Mella: *Diario de las Sesiones... Congreso*, 21-XII-1910). Cascajares encabeza
la carta dirigiéndola a «Pedrola», como dirige las redactadas para el padre
Luis Martín a «Melgar», y firma «Calanda», sustituyendo en todos estos casos
el nombre por el lugar de nacimiento de cada cual. El obispo de Avila era
Blanc y Barón, amigo íntimo de Cascajares (vid. Castro y Alonso: *op. cit.*, 491).

⁸⁹ Cfr. diario del cardenal, apud Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones...
Congreso...*, 21-XII-1910.

⁹⁰ Carta de Regino Martínez a Canalejas, 1910, apud Canalejas: *ibidem*.

⁹¹ Cfr. diario del cardenal, apud Vázquez de Mella: *ibidem*.

⁹² Vid. *El Movimiento Católico*, 25-VIII-1896, que hace referencia a una
caída sufrida por el arzobispo.

⁹³ Apud Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910.

⁹⁴ Apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid*, 18-
IX-1896.

⁹⁵ Cfr. *El Movimiento Católico* y *El Correo Español*, 25-IX-1896, ss.

⁹⁶ Cfr. Pi y Margall...: *op. cit.*, VII, 146, 171 s., y Fernando Soldevilla: *El
año político 1896*, Madrid, Imp. de Enrique Fernández de Rojas, 1897, pág. 409
(BDN).

⁹⁷ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910.

⁹⁸ Cfr. Juan Vázquez de Mella: *Obras completas*, vol. IV, 2.^a ed., Madrid,
Junta del homenaje a Mella, 1943, pág. 239. En *El Movimiento Católico*, sí se
había hablado, a raíz de la pastoral de septiembre, de la necesidad de constituir
«un Gobierno genuinamente nacional, que fuese la expresión legítima de sus
ideas y aspiraciones» (las del partido que consiguiera aglutinar las fuerzas ca-
tólicas) (13-X-1896). Quizá quedaba algún recuerdo de estas gestiones cuando
Jaume Collell escribía en la *Revista Popular* del 20-II-1902, que «León XIII al
subir al trono pontificio ... deseaba ardientemente dos cosas: la pacificación
religiosa en Alemania, y la unión de los católicos en España ... En España,
pensaba el Papa, más que en un Centro católico parlamentario, ... constituir un
Gobierno sinceramente católico que representase genuinamente las creencias
de la nación». En el lugar citado en esta misma nota, Vázquez de Mella añadía,
en términos inverosímiles, que el Ministerio proyectado albergaría a un repre-
sentante del carlismo (incluso se barajaron nombres, según él) y que, en el
momento oportuno, provocaría un golpe de estado, con fuerzas armadas del
tradicionalismo y la parte adicta del ejército alfonsino. Siempre según el ora-
dor legitimista, algunos personajes, entre ellos (y esto es menos probable, por
la templanza de ambos), el obispo de Salamanca, Cámara, y el de Oviedo, Martí-
nez Vigil, llegaron a proponer a Cascajares que, si llevaba a cabo tales manio-
bras, realizase ya el restablecimiento completo del carlismo mediante la abdica

ción de María Cristina de Habsburgo y la imposición de una regencia de C los VII (cfr. Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-19. En su carta a Canalejas, Regino Martínez insiste en que «el proyecto de casa D. Jaime con la Princesa de Asturias, no [era] para atraer a D. Carlos, s. para acabar patrióticamente con el carlismo, para consolidar el trono de L Alfonso XIII» (apud Canalejas: *ibidem*).

⁹⁹ Vid. Pi y Margall...: *op. cit.*, VII, 675 s.

¹⁰⁰ Sobre ambas cartas, cfr. diario de Cascajares, apud Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910. Sobre la amistad del carder con Canalejas, vid. Diego Sevilla Andrés: *Canalejas*, Barcelona, Ed. Aed, 1956, pág. 376. Sobre el catolicismo de éste, vid. duquesa viuda de Canaleja *La vida íntima de Canalejas*, Madrid, Afrodísio Aguado, s.d., passim. Sobre evolución política, José Francos Rodríguez: *La vida de Canalejas*, Madrid, Ti de la «Rev. de Arch., Bib. y Museos», 1918, pág. 38 ss., 63 ss. La complicid de este político en los proyectos del arzobispo sería divulgada por Vázquez de Mella en el lugar citado, dentro de la campaña tradicionalista contra la polít anticlerical de aquel, que así resultaba contradictoria. Canalejas negó tal colaboración, aunque no su posterior relación con Polavieja, que había de enca enar en cierta medida las ideas de Cascajares. Pero tampoco esta distinción e clara: «¿No estuvo el Sr. Canalejas —sugería el conservador *La Epoca* e 1902— en íntimas relaciones y en frecuente correspondencia con el genera Polavieja y el cardenal Cascajares cuando se trataba de nuevo la formación d un partido católico en España ...?» (apud *El Siglo Futuro*, 22-VII-1902). Po las mismas fechas, un periodista tradicionalista decía así mismo del polític «que ayer sumándose a Polavieja pretendió resucitar aquel partido político qu se llamara *Unión Católica*» (Miguel Casals, apud *Revista Popular*, 26-VI-1902). Y (lo que es más importante) el diario canalejista no refutó los argumentos de Mella sobre la relación de Canalejas y Cascajares, sino que insistió tan solc en el papel secundario que en el proyecto tuvo el primero. Lo que, por tanto implicaba su complicidad: «el Sr. Vázquez de Mella ha evidenciado un seric intento de constitución de un partido católico, que eliminara de la gobernación del país a todas las fuerzas liberales». Pero, pese a ello y al papel secundario que desempeñó, «el señor Canalejas podrá replicar al *leader* tradicionalista, limitándose a glosar el socorrido *distingue tempora et concordabis jura*» (*Heraldo de Madrid*, 22-XII-1910). De hecho, *El Correo Español* de estos mismos días recogió manifestaciones de Francos Rodríguez, director de *Heraldo*, en las que, declarándose testigo de aquella colaboración, insistía en el papel secundario de Canalejas.

¹⁰¹ Cfr. diario de Cascajares, apud Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910.

¹⁰² «... me atrevo a rogar a V. M. —añadía el cardenal en la carta— piense en ello y obre pronto, muy pronto, Señora, y crea V. M. a su humilde Cardenal, que no tiene más mira que el bien de V. M. Los momentos son críticos y no se puede perder tiempo. Por si puedo ser útil a V. M., sepa que estoy en el convento de los Paúles; hay teléfono. Mándeme. Ya sabe que soy todo suyo» (*ibidem*).

¹⁰³ *Ibidem*.

¹⁰⁴ En la transcripción del *Diario de las Sesiones (ibidem)* hay puntos suspensivos. Allí, Vázquez de Mella dice además que esta carta fue escrita por Cascajares «cuando acababa de celebrar la entrevista con el Sr. Canalejas». Pero basta releer el diario del cardenal, que el mismo orador transcribe, para comprobar que la última conversación la había mantenido con Gamazo y la del día anterior —«anoche»— con Silvela.

¹⁰⁵ Dice «a V. M.»; pero tal preposición quita el sentido de la carta.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ *El Imparcial*, 22-X-1896.

¹⁰⁸ *El Movimiento Católico*, 22-X-1896.

¹⁰⁹ Cit. *El Siglo Futuro*, 23-X-1896. Cfr. *El Movimiento Católico*, 23-X-1896.

¹¹⁰ «Octubre 22. = Come S[u] E[minencia el cardenal Cascajares] con Gama-

zo y el Obispo de Zamora. = Silvela conferencia con S. E. a las seis de la tarde. = Por iniciativa de S. M. es nombrado en el Consejo de ayer general de Filipinas Polavieja. = S. E. había indicado a S. M. lo que convenía que se hiciera este nombramiento. = Este nombramiento es admirablemente recibido por la Nación. = Octubre 23. Silvela conferencia con S. E. de seis a seis y media de la tarde. = Después visita S. E. a los señores general Polavieja y don José Canalejas. = Viene Aguilar a la una y media a decir a S. E. que mañana a las seis de la tarde le espera S. M. = Octubre 24.—Visita a S. M. y le entrega una carta. = Octubre 25. Canalejas visita a S. E. a las once y media. Sale S. E. en el sudexpreso a las tres y media de la tarde para Valladolid, y llega a las nueve y media de la noche» (resumen del diario de Cascajares, apud Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910). Sobre este diario dice Regino Martínez en su carta a Canalejas de 1910: «El Conde de Cascajares, sobrino y heredero del Cardenal, tiene en su poder un libro *escrito por mí*, un dietario en el cual yo anotaba lo que creía de más importancia en la vida del Cardenal insigne ... Allí podrán ver en todo su desarrollo el proyecto de casar a D. Jaime con la Princesa de Asturias» (apud Canalejas: *ibidem*).

¹¹² Cfr. *El Movimiento Católico*, 31-X-1896.

¹¹³ Apud Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910.

¹¹⁴ *Correspondencia de Emilio Castelar. 1868-1898*, Madrid, Establecimiento tipográfico «Sucesores de Rivadeneyra», 1908, pág. 374 s. (BDN).

¹¹⁵ Cfr. Pi y Margall...: *op. cit.*, VII, 172.

¹¹⁶ Apud Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910.

¹¹⁷ Cfr. *ibidem*.

¹¹⁸ Cit. *El Movimiento Católico*, 27-X-1896.

¹¹⁹ Cit. *ibidem*, 28-X-1896.

¹²⁰ Cfr. *ibidem*, 29-X-1896.

¹²¹ *El Correo Español*, 30-X-1896.

¹²² Carta de Regino Martínez a Canalejas, apud Canalejas: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910.

¹²³ Cfr. Vázquez de Mella: *Obras completas*, IV, 240.

¹²⁴ Cfr. Melgar: *Don Jaime...*, 97 ss., y *El noble final...*, 53.

¹²⁵ No se alude para nada a estas gestiones *ibidem*, ni en Melgar: *Veinte años...*; Rodezno: *op. cit.*; Román Oyartzun: *Historia del carlismo*, 3.^a ed., Madrid, Ed. Pueyo, 1965, 462 págs. En cambio, Manuel Fal Conde sí se ha referido al proyecto de Cascajares en alguna ocasión («¿Futuro del carlismo?», *El Pensamiento Navarro*, 5-V-1968) y, respondiendo a una consulta mía a raíz de ese artículo, me asegura que había sido tratado también por Melchor Ferrer (en un lugar de sus obras que no he sabido localizar) y acaso por Momblanch.

¹²⁶ Cfr. Vázquez de Mella: *Obras completas*, IV, 240.

III. LA EPOCA DE LOS REGENERADORES, 1896-1898 *que Filipinas, OLAECHEA*

Just

1. *Camilo Polavieja*

Decididamente, las gestiones de Cascajares para realizar su pensamiento habían fracasado en noviembre de 1896. Ni el Gabinete adicto era viable, ni era aceptada la solución del pleito familiar de los Borbones. Pero uno de sus pasos sí comenzó su singladura entonces hacia un hipotético éxito. Por iniciativa de la reina, en el consejo de ministros del 21 de octubre, el general Camilo García de Polavieja había sido nombrado segundo cabo de la capitanía general de Filipinas. «S[u] E[minencia] —advierte textualmente el diario del secretario del cardenal al consignarlo— había indicado a S. M. lo que convenía que se hiciera este nombramiento.»¹

Nació en Madrid en 1838, en el seno de una familia acomodada cuyas dificultades económicas le obligaron no obstante a abandonar en el 58 los estudios para el ingreso en el cuerpo de estado mayor del ejército. Movido sin embargo por una decidida vocación militar, Polavieja había sentido plaza de soldado voluntario en aquel mismo año, para cubrir después una hoja de servicios velozmente apretada. Sargento primero en 1860 por méritos de guerra, fue destinado como alférez en 1863 al ejército de Cuba, donde había de pasar buena parte de su vida. Teniente en el 64, capitán en el 70, comandante al año siguiente, fue teniente coronel en el 73 y coronel en 1874, siempre también por méritos de guerra (forjados ahora en el frente carlista de Valencia y Cataluña y en el ejército del Norte mandado por Martínez Campos). El mismo motivo lo llevó a La Habana en noviembre del 76, ya como brigadier de confianza del hombre de Sagunto, hasta recibir el grado de teniente general, siempre por méritos bélicos, en 1880. Devuelto a España en el 81, se hizo cargo de la capitanía general de Andalucía. Capitán general de Puerto Rico en 1888, en el 90 el Gobierno de Cánovas le encargó el mando superior civil y militar de Cuba, del que limitió en 1892 ante la desatención que el Gabinete mostraba por sus consejos autonomistas. De nuevo en España, pasó a desempeñar la jefatura del cuarto militar de María Cristina, quien acaso logró para él la concesión pontificia del título de marqués en 1895².

Camilo Polavieja era sobrino del conde de Morphy, hombre sin hijos, con cierta predisposición al mecenazgo, que había sido secretario particular de Alfonso XII. En sus salones, conoció y trabó amistad con Isabel II, que luego había continuado con María Cristina y el propio rey³. En 1883, este había llamado la atención a Canalejas sobre la valía del militar, como hombre cuyas condiciones «merecen ser muy atendidas por los hombres públicos»⁴. Y, de hecho, parece que su designación como segundo cabo de la capitanía general de Filipinas en el 96 fue «muy bien recibido por las Cortes»⁵.

Cuando Camilo Polavieja desembarcó en el archipiélago, el movimiento separatista se veía ya dominado por el odio a los frailes, que, encar-

gados de hecho de la administración de las islas, desde el siglo xvi, mantenían una estructura misional de gobierno en plena época de despegue democrático de los intelectuales nativos. Odio alentado por las sociedades secretas, importadas de España, que daban juntamente un tinte religioso al movimiento emancipador en la última década del xix ⁶.

Indeciso si no complicado en estas actividades masónicas según los religiosos, la sustitución de Blanco, gobernador militar de Filipinas hasta entonces, venía siendo urgida en aquellos mismos meses del 96 por el arzobispo de Manila, fray Bernardino Nozaleda, y por los provinciales de las órdenes que había en las islas, que lo vieron aún más remiso ante el levantamiento separatista armado de agosto ⁷. El nombramiento de Polavieja tuvo desde el principio, por tanto, un sello claramente afecto a estas peticiones ⁸, a las que parecía contestar. Acaso por influencia de ellas, su designación de segundo cabo se convirtió en la de gobernador general sustituyendo a Blanco, antes de desembarcar en diciembre en Manila. Y la inmediata ejecución de varios rebeldes que hizo llevar a cabo fue aireada por la prensa radical española en ese sentido: para presentarlo como «instrumento de las venganzas de los frailes» ⁹. La acusación alcanzaría su cénit con el fusilamiento del caudillo isleño José Rizal, atribuido en adelante a la crueldad de Polavieja ¹⁰, aun cuando, al parecer, él lo había desaconsejado al Gobierno de Madrid ¹¹.

Su campaña guerrera fue un cúmulo de victorias. Las provincias de Zambales, Bataán, Tárlac, Pampanga, Nueva Ecija y Manila quedaron pacificadas por completo, y, en Cavite, los rebeldes ofrecían ya escasa resistencia ¹². En los primeros meses de 1897, la opinión peninsular podía ver en él, por tanto, el primer hombre que había conseguido traducir en hechos las promesas de paz. Y esto era necesario para el encumbramiento político que al tiempo se buscaba. Entonces se comenzó a pensar en Polavieja, «que se creyó sinceramente predestinado a ser el salvador de España según afirmación de Romanones, como futuro jefe de un gran partido que reemplazase al de Cánovas o Sagasta» ¹³.

¿Respondió este proyecto a otras iniciativas o fue desde el principio la misma agrupación católica que pretendía Cascajares? Nocedal y Vázquez de Mella, que vivieron estas gestiones, afirmarían taxativamente la identificación ¹⁴. En todo caso, el cardenal debió encontrar en Polavieja (si no la preparó) la oportunidad para sus ideas, y desde el principio vimos procuró su prestigio.

El Movimiento Católico comenzó de inmediato una sistemática labor de alabanza al nuevo gobernador, con insinuaciones significativas: «Con más cuidado le tendría [a Cánovas] —advertía en diciembre de 1896— que al general Polavieja lograrse un triunfo señalado en la isla de Luzón, y viese a España con el inmenso prestigio de una pacificación gloriosa ... y podría evitarse que el sentimiento público lo aclamara como a un gran y benemérito servidor de la patria en quien podía depositar su confianza» ¹⁵. El era «hoy la esperanza de España» ¹⁶; «es el hombre que a [en Filipinas] se necesita hoy y mañana. Luego ... [sic] es probable que sea también el hombre que se necesita aquí» ¹⁷; «su desembarco en Ba

celona, después de la victoria, pudiera tomar las proporciones de un Brumario».

«Azcárraga en el ministerio de la Guerra demostrando que cabe ser piadoso y el primer ministro de su época; Silvela levantando la bandera de la moralidad administrativa; Comillas fundando los círculos de obreros; los masones descubiertos en sus trabajos contra la integridad de la patria; los periódicos que pasaban por más liberales haciendo la causa de los frailes en Filipinas, que es la causa de la patria ...; el espíritu general inquieto y manifestando sin rebozo deseos de orden y de autoridad; todo, todo, en fin, trabaja inconscientemente para el mismo resultado, y todo parece irse agrupando, sin quererlo tal vez ninguno, por la fuerza de las cosas, alrededor» de Polavieja ¹⁸.

Durante el invierno de 1896 a 1897, monseñor Cascajares apoyó también su candidatura política en Madrid. En los primeros días de enero, se entrevistó para ello con la reina, con Canalejas y Arias Miranda, y luego con Silvela, que, unas fechas después, pronunciaría un discurso en la redacción de *El Tiempo*, donde advirtió que, en adelante, ni él ni sus partidarios formarían una disidencia. Serían por el contrario, dijo, un grupo que aspiraba al poder para acabar con los actuales procedimientos políticos, «cachacosos, caducos, anémicos y evidentemente perjudiciales al bien público» ¹⁹, modificando, por tanto, su actitud de antaño, expresamente contraria a formar un nuevo partido ²⁰.

El arzobispo se entrevistó además, por las mismas fechas, con el general Azcárraga y Germán Gamazo, quien por entonces, según Vázquez de Mella, decidió abandonar el proyecto, aunque no la amistad del prelado. Habló también con la marquesa de Polavieja, Concepción Castrillo ²¹, que, durante la estancia del general en Filipinas, venía desarrollando una intensa actividad en la metrópoli, en conspiraciones antigubernamentales de alón con «silvelistas y otros elementos». Según significativa advertencia del marqués de Lema, la animaban individuos del clero «de los que, por derivaciones de ideas y ese desconocimiento del gobierno temporal, muy comprensible en quienes no recibieron esa misión de Dios, han apoyado frecuentemente en España a lo que creen significa fuerza» ²².

Siempre en el mismo invierno, el arzobispo de Valladolid escribía una carta a Polavieja que sintetizaba bien las posiciones alcanzadas: «Sepa, mi querido general —decía—, que de la reina al último español aplauden y comían los éxitos que va usted alcanzando. Nadie duda que dominará usted en breve plazo la insurrección, y todas las miradas se dirigen a usted, y no pocos empiezan a ver en usted el hombre que se necesita: "Polavieja". Este nombre anda ya en labios de hombres que antes dudaban. Fíjese al Señor siga siendo a usted próspera la fortuna; concluya pronto esta guerra; deje sentadas las líneas generales para el porvenir de ese Archipiélago y vuelva a España a recibir el tercer entorchado con aplauso de todos los buenos, para ser después el brazo que sostenga el trono. A grandes cosas está usted llamado; pero permítame un consejo de amigo que le quiere bien: no se comprometa con nadie, ni se afilie a ningún partido; usted debe estar sobre todos éstos y conservar íntegros sus prestigios, para hacer lo que indico arriba. De mantener el fuego sacro me encargo yo; esté

tranquilo y seguro sobre este punto. He visto en estos días varias veces a la Reina y hemos hablado mucho del general de Filipinas» ²³.

Que la popularidad era real comenzó a verse pronto, cuando, en marzo del 97, el gobernador decidió dimitir de su cargo al serle negados por el Ministerio los veinte batallones que necesitaba para asegurar las conquistas de su campaña. Presentada la dimisión el día 9, el 11 Cánovas propuso el nombramiento de un nuevo capitán general del archipiélago a la reina. Pero, inesperadamente, María Cristina pidió al jefe del Gobierno que telegrafiasse antes a Polavieja para cerciorarse de que su enfermedad le impedía continuar en las islas. El militar contestó que, de momento, no, y el Gabinete quedó en situación desairada, hasta el punto de que, al medio marzo, se propalaron rumores de crisis. **L**on todo, los batallones no fueron enviados y el general volvió a dimitir el 21 del mismo mes, insistiendo en los motivos de salud ²⁴, al parecer realmente afectado por una enfermedad de los ojos que lo tenía casi ciego ²⁵. En el mando de Filipinas sustituyó a Polavieja Fernando Primo de Rivera, que parece inició en sus despachos una sistemática labor de deslucimiento de la gestión polaviejista, «como obedeciendo —apunto *El Correo*— a una consigna trazada desde Madrid» ²⁶.

Al regresar aquel a la península, la acogida que se le tributó en Barcelona el 13 de mayo de 1897 había sido organizada por silvelistas, canalejistas y liberales significados y por otras personalidades católicas, entre ellos el marqués de Comillas, sin que dejara de atribuirse una intervención más directa al cardenal Cascajares. Sólo en la capital del Principado, Polavieja fue aclamado al parecer por cuarenta mil personas, y, tanto allí como en Zaragoza, donde llegó el día 15 para ser recibido de modo semejante, no faltaron los actos religiosos, resaltados más tarde por las crónicas dadas la personalidad espiritual del militar. En el muelle de Barcelona dato de interés, diría Pi y Margall que se escuchó por primera vez el grito «¡Viva el general cristiano!» ²⁷, que, desde entonces, había de convertirse en apodo del exgobernador de Filipinas.

El 16, Polavieja llegó a Madrid, donde, unos días antes, *El Imparcial* había pedido a los demás periódicos y a todas las asociaciones madrileñas apoyado por el canalejista *Heraldo de Madrid*, que colaborasen para conseguir una manifestación popular de homenaje, pese a las protestas de la prensa gubernamental. Para evitarlo, el ministro de la guerra ordenó al capitán general de Aragón que fuese modificado el horario del desfilamiento. Pero, a pesar de todo, la manifestación fue realizada. Cuando el militar llegó a Madrid, la multitud inundaba el itinerario desde la estación a Palacio y al domicilio del general. Al atravesar la plaza de Cibeles y embocar la calle de Alcalá hacia la Puerta del Sol, los carruajes apenas podían abrirse camino entre el gentío. Soldevilla aseguraba que no había ninguna exageración en afirmar que eran más de sesenta mil personas las que presenciaron su paso sólo en la calle Alcalá ²⁸, de aquel Madrid con medio millón de almas.

El acontecimiento acabó en demostración antigubernamental cuando el militar salió de cumplimentar a la regente y aparecieron la reina y las infantas en un balcón del edificio, dando ocasión a Polavieja a vitorearlas.

coreado por los manifestantes. A partir de este hecho, *El Imparcial* se esforzó en sembrar discordia entre el Gabinete y la reina. Y el órgano oficioso de aquél, *La Epoca*, hubo de publicar un suelto, dictado por el propio Cánovas a un redactor del periódico, en donde aseguraba que era casual la presencia de la real familia en el balcón en aquellos instantes y que otros comentarios «resultarían irrespetuosos para Su Majestad»: indirecta reconvencción a la regente que Romanones tildaría de «palmetazo» y Sagasta calificó de «bellaquería». Aunque parece que María Cristina quitó importancia al artículo ²⁹, la crisis del balcón, que así fue denominado el hecho, era una nueva prueba de manifiesta predilección hacia el general cristiano por parte del trono. En una carta privada escrita el 25 de mayo, Emilio Castelar deslizaba este juicio terminante sobre los sucesos: «Es evidente que llevan una inteligencia secreta contra Cánovas, la Reina, Silvela, Martínez Campos y Polavieja. Querrán los conspiradores hacer un gobierno intermedio.» ³⁰

El temor era tanto más delicado cuanto que el militar continuaba envuelto en un fondo antidemocrático. Alabado con acentos apoteósicos —como al salvador de la patria y la raza— por carlistas ³¹ e integristas ³², desde luego por el tradicionalismo alfonsino de *El Movimiento Católico*, y en general por sectores eclesiásticos regulares ³³, su personalidad quedaba perfilada definitivamente con tonos religiosos incluso, no muy lejanos del clima boulangista de la derecha francesa finisecular. Parecía «destinado a ser desde la Presidencia del Consejo de Ministros, no sólo el mantenedor de la política frailuna de aquel desdichado Archipiélago de la Oceanía, sino también el más decidido brazo de la reacción, que tan insolentemente obra y amenaza en el mismo corazón de la Península» ³⁴.

2. *Hacia la unión de los conservadores*

~
- 194

Ante el éxito de Polavieja y la previsible intensificación de los trabajos políticos, el cardenal Cascajares había conseguido de María Cristina una decisión importante: la concesión de un obispo auxiliar, cuyo nombramiento pontificio, en marzo del 97, había recaído en don Mariano Ciudad Olmos, canónigo penitenciario de la catedral vallisoletana ³⁵. Al comunicarlo oficialmente, el arzobispo se expresó en términos significativos: justificándolo en la debilidad de su salud, pero también «por haberse extendido notablemente el campo de nuestra acción, en asuntos extraños a esta Diócesis, pero no extraños a nuestro sagrado carácter y ministerio... Su Santidad aprueba, desea y aplaude que gastemos buena parte del tiempo y de nuestras débiles fuerzas en semejantes negocios, por entender que son de mayor gloria de Dios» ³⁶.

En verdad, su insistente intromisión política lo había convertido en figura eclesiástica eminentemente politizada. En junio de 1897, a raíz de la crisis gubernativa motivada por la agresión del duque de Tetuán, ministro de Estado, al senador liberal Augusto Comas, con quien discutía en los pasillos del Senado acerca del problema de Cuba, se rumoreó en los círculos políticos, sobre todo en el Liberal de Madrid, que el arzobispo ara-

gonés había influido en el ánimo de la regente para que continuara Cánovas en el Gobierno. No había sido así³⁷; pero Canalejas y Arias Miranda le escribieron advirtiéndoselo, y monseñor Cascajares les respondió con una carta airada y amplia, expresamente destinada a la divulgación, pero acaso más significativa de lo que él mismo pensaba. Has entonces, había confiado en «que, para fortuna de todos y el bien de Patria, por tanto, habían pasado para no volver aquellos tiempos en que los partidos liberales imputaban todo lo que les contrariaba en sus miradas políticas a la *reacción*, y salían a relucir las *camarillas* y andaban de buen boca nombres respetabilísimos. Veo, con honda pena, que desgraciadamente me han engañado mis buenos deseos; porque, para mal de todos, para mal de la Patria por consiguiente, se quiere por algunos que volvamos a aquellos tiempos»³⁸.

La «reacción», y una reacción presidida por el arzobispo de Valladolid, volvía a aparecer, por tanto, como un nubarrón de tormenta en el aparatado cielo español del año 97. «Fue Polavieja a Filipinas —escribió Pi y Margall el 22 de mayo—, no porque lo quisiera el Gobierno, sino porque así convino a los intereses de ciertos hombres que trabajaban hace tiempo en las tinieblas para llevarnos a la más insensata de las reacciones.» «Se le llama, sin duda, general cristiano ..., por creerse que con él ha de ganar algo el cristianismo. Ese algo, ¿qué puede ser sino el restablecimiento de esa unidad católica porque suspira un clero incapaz de medir sus armas con los cultos disidentes, cuanto más con la ciencia y la filosofía?»³⁹

Pero sí, efectivamente, el acercamiento al militar de algunos elementos tradicionalistas había comenzado a resellar el movimiento de Polavieja: los esfuerzos de monseñor Cascajares se encaminaban ahora sobre todo a ganar para él (como en 1891 para Martínez Campos y en el 96 para Azcárraga), la colaboración de Silvela. «La Providencia especial que decía Narváez teníamos los españoles —había escrito el cardenal al político el 1 de marzo de 1897, ante la dimisión del general— es la que trae a Polavieja a la Península. Esa Providencia nos pone delante de los ojos el remedio a nuestras desdichas. Sería en mi concepto gran locura cerrarlos y dejar pasar la ocasión para salvar a España y al Trono, no aprovechando los prestigios de un caudillo que regresa vencedor. Sólo una espada ayudada de un hombre civil puede sacarnos del atolladero. Esto, por evidente excusa explicaciones»⁴⁰.

Un mes antes, a principios de febrero, se rumoreaba que Martínez Campos apoyaría un Ministerio Pidal-Silvela, y, enseguida, la crisis de mayo y junio referida dio pie al disidente conservador para recalcar su cambio de criterio, implícitamente favorable a los proyectos del prelado. Sí, en marzo de 1896, había insistido en su idea, que conocemos ya, de «que no se podía intentar la formación de un partido conservador contra Cánovas» ahora, ante el rumor de que el jefe del Gobierno pensaba retirarse y entregar el poder al fusionismo, Silvela se apresuró a reclamar otra vez «el concurso de otras fuerzas que de otras partes vengan»⁴¹ para sustituir al Partido Conservador hipotéticamente malogrado.

Al mitin de la Alhambra, el 12 de junio de 1897, donde pronunció estas palabras, asistió, según Llanos y Torriglia, una buena representación de «las llamadas clases neutras» (el término lo utilizaba ya *Heraldo de Madrid* en 1896 ⁴²), «que por entonces hacían sus primeros pinitos de intervención» ⁴³ y que eran, precisamente, las convocadas para nutrir las filas de la actitud regeneracionista del novecientos.

La llamada de Silvela equivalía, desde luego, a pretender la formación de un nuevo partido, distinto del de Cánovas, que, en julio, en el discurso de Burgos con que inició la campaña de propaganda pertinente, dijo habría de llamarse Unión Nacional (y no Unión Conservadora como en 1893 había sugerido a Pidal): porque pretendía que en él cupiesen todos (se habló ya, incluso, de los integristas) y el segundo nombre resultaba estrecho ⁴⁴. Evidentemente, en esta buena disposición de Silvela, si la hubo, para secundar al cardenal, pudo haber un criterio oportunista, forzado por su disidencia: «*Solament ab politichs descontents —advirtió entonces un semanario catalán— podria en Silvela formar lo seu partit: descontents den Cánovas, descontents den Sagasta, descontents de lo república, sumanthi tanbe'ls integristas, si es veritat que s'hi decantan. ... la seva especial situació [de Silvela] entre conservadors y lliberals fa que per un costat pугan ajaures a sa jefatura los elements avançats y, per altre costat, sas últimas declaracions catòlicas [de Burgos], qual sinceritat no'ns toca a nosaltres averiguar, contribuïeixen a que també pугan seguirlo, no solament los integristas, sinó també'ls que quedan d'aquellas consabudas masses honrradas ja divorciadas den Pidal*» ⁴⁵. Lo que era, en suma, un puntual recuento de las mismas fuerzas en que pensaba Cascajares.

A mediados de julio de 1897, Valentín Gómez publicó un artículo de alabanza al disidente conservador, a quien presentó en *El Movimiento Católico* como el político del futuro ⁴⁶. A fin de ahuyentar los prejuicios tradicionalistas, reproducía este párrafo, al que se refería probablemente *La Veu de Montserrat*, del discurso pronunciado en Burgos por Silvela: «Nos empeñamos en el combate y nos lanzamos a la acción —había dicho—, al amparo, ante todo, de nuestra fe tradicional, proclamando, como punto fundamental de nuestras creencias, el respeto a aquellos sentimientos católicos que profesamos, no sólo en el hogar, sino en la plaza pública» ⁴⁷. Es difícil saber hasta qué punto estas y aquellas palabras escondían un acuerdo expreso con el arzobispo de Valladolid. Acaso aquél se había limitado hasta entonces a dar una mera aprobación tácita a sus gestiones. Pero, en algunos casos, es claro que la interacción fue un hecho, y, de cualquier manera, el criterio del exministro canovista evolucionaba ahora totalmente al unísono del pensamiento del prelado, contradiciendo incluso, para ello, ideas anteriores.

En agosto de 1897, por tanto, el resurgir católico querido por el cardenal, en torno ahora de Silvela y del general de Filipinas, parecía mostrar posibilidades cercanas de existir. Aureolado Polavieja con el prestigio de las armas, invitado Silvela a realizar con él la alianza para el poder, el obstáculo fundametal que subsistía era Cánovas del Castillo, cuya presencia en la vida pública suponía la supervivencia del sistema biparti-

dista que él mismo había creado e impedía la imposición de la figura de Francisco Silvela en el panorama moderado. Pero, inesperadamente, el domingo 8 de agosto de aquel año, Cánovas fue asesinado por un anarquista, y su muerte ofreció, de improviso, una brutal oportunidad a monseñor Cascajares.

Extendida la noticia de la muerte el mismo día 8, y sobre todo el 9, por toda España, el cardenal aragonés marchó inmediatamente, el 10, de Valladolid a San Sebastián, para entrevistarse allí el 11 con la reina y escribir enseguida a varias personalidades del mundo político a quienes el verano había alejado de la corte. Allí también había de llegarle, el día 14, una precipitada carta de Valentín Gómez, escrita ante el dramático suceso:

«Me parece, mi querido Sr. Cardenal —le insinuaba el periodista amigo—, que la ocasión no puede ser más oportuna para realizar aquel pensamiento. Desapareció el único obstáculo por un medio aterrador e inesperado.

¿Resistirá aún la Señora? Yo creo que no hay más solución —añadía refiriéndose a Silvela— que la que representa el vigor y la energía de la autoridad, la defensa social y una política firme y resuelta en Cuba y Filipinas. ¿Quién la representa? No hay que decirlo. El, con Azcárraga, con Polavieja, o con Martínez Campos, o con los tres a la vez, ocupando sus puestos respectivos, es lo que parece indicado.

¿Por qué no escribe allá en este sentido? Piénselo. Yo he hablado con él y está dispuesto a todo. Las circunstancias no le arredran» ⁴⁸.

La respuesta del arzobispo no se hizo esperar tampoco: «Conforme en todo cuanto usted me dice; figúrese usted si habré trabajado en ese sentido en estos días. Ayer le escribí a El; mañana espero su contestación; daré pasado el último asalto de presente, digo de presente porque me marcharé el martes; pero no a Valladolid, porque mi situación aquí va haciéndose difícil, ya por la cosa pública, ya también por la muerte del de Toledo» ⁴⁹, Monescillo, arzobispo de aquella diócesis, cuyo fallecimiento acababa de hacerse público ⁵⁰ y a cuya mitra aspiró de inmediato el cardenal aragonés.

Después de escribir estas líneas, el prelado marchó a Loyola, donde pasó el día con su amigo Canalejas, que acababa de manifestar, a finales de junio, su separación del partido de Sagasta, motivada por la nueva orientación autonomista que éste había adoptado respecto a Cuba. Habló también, en días sucesivos, con la regente y Polavieja, y, el 16 de agosto, recibió la contestación de Valentín Gómez: «Azcárraga —le decía— irá pronto a esa, y conviene que le encuentre ahí, y que hable con él, porque está muy bien inclinado, y hay que quitarle si acaso el polvillo que haya podido echarle a los ojos el enredador de Antequera», el inquieto Romero Robledo, empeñado en impedir la jefatura de Silvela sobre los conservadores. «Firme y adelante, que el triunfo es nuestro. Tenemos a Martínez Campos, a Polavieja y a Blanco. Pidal no se opone, y la gente honrada de los canovistas lo desea» ⁵¹. Y es que, de nuevo, los propósitos del cardenal de Calanda tenían la oportunidad de coincidir al menos con idénticas preocupaciones que los prohombres conservadores albergaban:

Muerto Cánovas el 8 de agosto de 1897, María Cristina de Habsburgo había nombrado presidente interino del Gobierno al general Azcárraga, en espera de que el partido gobernante resolviera el problema sucesorio creado por el asesinato. Según el marqués de Lema, en los primeros momentos la opinión se inclinó hacia la jefatura de Alejandro Pidal; pero la carga religiosa que inevitablemente se veía en él y en sus partidarios y la enemiga de la regente, que lo creía demasiado afín al carlismo, hicieron impensable la solución. Un sector minoritario, dirigido por el presidente del Senado, José Elduayen, marqués del Pazo de la Merced, pensó en el duque de Tetuán por razón de afinidades personales. Romero Robledo, enfrentado siempre con Silvela, cuya jefatura temía, ofreció su apoyo a Pidal, que, sin embargo, no aceptó los ofrecimientos de quien, en frase del mismo don Alejandro, representaba para los conservadores «la falta de seriedad y consecuencia»⁵². La reina María Cristina y Martínez Campos, por último, se inclinaron desde el primer momento por Francisco Silvela, y el presidente del consejo, el general Azcárraga, se mostró indeciso. Su Gobierno se había titulado fiel continuador de Cánovas y, desde luego, la candidatura del disidente excanovista equivalía a rectificar la política del jefe muerto, si bien este deseo de continuidad suponía en él, que parece había estado bien dispuesto para responder con Silvela a los propósitos del cardenal Cascajares, un cambio de actitud, al que se había referido acaso Valentín Gómez en la correspondencia transcrita.

El 18, Azcárraga comunicó al Consejo de ministros que, consultadas todas las personalidades moderadas, «coinciden las opiniones de los señores Martínez Campos, Polavieja y Pidal, en que el partido conservador debe procurarse a toda costa inteligencia con el señor Silvela»⁵³. Para urgirlas, parece que la reina accedió a que el Ministerio subsistiera hasta octubre, de modo que, antes de la reunión de las Cortes, fuera modificado con la entrada de un silvelista o fortalecido con el apoyo de este grupo, o, si esto no se conseguía, cediera el poder a Sagasta⁵⁴. A pesar de los esfuerzos de Martínez Campos, Azcárraga insistió en sus vacilaciones⁵⁵, y, el 29 de agosto, Polavieja pudo notificar a la regente de este modo los términos en que estaba planteada la crisis del partido: «He hablado largamente con Silvela —le escribió— que opina deben ser los liberales lo antes posible Gobierno tanto porque así lo exige la situación de Cuba, como para que no se disuelvan como así sucedería si continuasen en la oposición. Dice además que en ésta debe reorganizarse el partido conservador bajo su programa, que es una esperanza para el país y no con el que tenía Cánovas ya completamente desacreditado». De lo contrario —creía el general, conforme en esto con el cardenal Cascajares—, la opinión «en su gran mayoría se echaría en brazos del carlismo». En San Sebastián, «se me habló de que yo fuera Ministro de la Guerra de Sagasta»; pero «lo creo muy contrario a los verdaderos intereses de V. M. El partido liberal morirá a manos de Cuba y Filipinas, y no creo convenga a V. M., que al desprestigio del partido liberal, se sume el mío cuando las circunstancias impondrán que esté intacto para poder servir con utilidad a V. M. y a la Patria»⁵⁶.

El 29 de septiembre de 1897, en efecto, Azcárraga dejó el poder, antes de

octubre como se había dicho, y, al referir la crisis, la prensa subrayó el papel que Polavieja había desempeñado en su temprana solución: Llegada la familia real de la capital de Guipúzcoa a Madrid el 28, el 29 por la mañana había acudido el militar a Palacio, donde habló primero con la infanta Isabel y después con la reina, en una entrevista que, según se dijo, tuvo una influencia decisiva en la crisis. Al parecer, algunos elementos del Gabinete habían sugerido a María Cristina que determinados generales verían mal el acceso al poder de los sagastinos, si éste se realizaba, refiriéndose probablemente al propio general cristiano y quizás a Martínez Campos. Pero, en la conversación, Polavieja desvaneció esos temores, afirmando que el honor militar no hubiera permitido a ningún general español rechazar las soluciones que la reina juzgara convenientes. Quedaba capacitada, pues, para obrar conforme a sus deseos y para encargar del gobierno a Sagasta⁵⁷, que lo aceptó por lealtad, según dijo, «dispuesto al sacrificio, sin que me aliente la esperanza y sabedor de lo que me espera»⁵⁸. Conforme a la relación de Romanones, le esperaban «la guerra de Cuba y Filipinas, la Hacienda exhausta, los carlistas inquietos, la conspiración republicana en marcha, el anarquismo haciendo de las suyas y, sobre todo, la amenaza de los Estados Unidos dibujándose clara en las palabras duras y cortantes de su embajador»⁵⁹. Unos días antes de la caída de los conservadores, había advertido éste al ministro español de Estado que, si la guerra de Cuba no estaba terminada el 1 de noviembre inmediato, el Gobierno de los Estados Unidos se consideraría en libertad para adoptar las medidas que considerase oportunas a fin de asegurar la paz estable en las Antillas.

La solución de la crisis gubernamental (que «en mi humilde opinión ha sido acertadísima, de mano maestra», escribió el arzobispo Cascajares a Palacio) disuadió al prelado de trasladarse a Madrid de nuevo como había pensado. El viaje —advirtió a la regente— «se prestaría a muchos comentarios, nada favorables para mí. Siendo la mayor parte de los nuevos Ministros amigos míos, no es decoroso que me presente ahí hasta tanto salga en la *Gaceta* la presentación para [el arzobispado de] Toledo sea para quien quiera»⁶⁰. Muy poco después, sin embargo, escribía también a Canalejas para anunciarle su viaje a la capital del reino y, en su estancia, habló con el político demócrata y Arias de Miranda, con la reina repetidas veces y con Valentín Gómez, probablemente sobre los acontecimientos políticos. El 21 de octubre regresó a Valladolid⁶¹ y allí hubo de conocer el nombramiento de Sancha para la sede primada de Toledo. Sobre el temple sentimental del arzobispo aragonés, la noticia fue una desilusión hiriente. «Los muertos —escribió a don Alfonso de Aguilar el 29 de diciembre— agradecemos mucho el recuerdo de los vivos.» «Como la caída ha sido tremenda, porque era cosa que estaba en la conciencia de todos, lo mismo tirios que troyanos, y el pretexto de la salud no me convencía, traté de averiguar y me dirigí a Roma; calcule V. mi admiración al leer la contestación que textualmente dice así: «El Gobierno propuso en seco al Card [enal] Sancha; aquí no ha llegado recomendación en favor de V [uestra] Em [inen]cia»⁶². La recomendación, en realidad, sí parece había existido⁶³; pero la oportunidad de alcanzar el cénit de la jerar-

guía eclesiástica española, desde donde el cardenal Monescillo había repudiado, años ha, sus ideas políticas, no volvería nunca, y la desilusión, probablemente, lo marginó del desenvolvimiento posterior de los hechos durante aquel invierno.

Gracias a los esfuerzos de Pidal, que «anunció que él marchaba directamente a la unión con Silvela y sus elementos y que le siguiera quien quisiese», y al general Martínez Campos, que propuso en octubre de 1897 a los prohombres moderados la formalización de una alianza, solamente parlamentaria y electoral de momento, Silvela, Villaverde, Pidal, Cos Gayón y el general Azcárraga, que la aceptaron, llegaron a la unión completa de las fracciones en que había venido a dividirse el Partido Liberal-Conservador a la muerte de Cánovas. Tan sólo el duque de Tetuán constituía una disidencia «que las gentes con gracejo dieron en llamar "los caballeros del Santo Sepulcro", pues ellos, no se sabe por qué, creíanse los guardadores de la tradición de Cánovas»⁶⁴. Romero Robledo fundó a su vez otro partido, «que formaban el amor propio y el despecho», en frase lapidaria de Pi y Margall⁶⁵.

En un opúsculo fechado el 30 de octubre por Sánchez de Toca, el antiguo compañero de Alejandro Pidal reclamaba la última necesidad en el perfil del reelaborado Partido Conservador: la proposición de ideales que le dieran sentido; porque un ideal, la moralización de la vida social española, había de constituir su fin. Así atraerá, decía, no sólo a los sectores populares de la sociedad, sino también «valiosos elementos de clases directoras apartados de ella por prejuicios de pesimismo, desvío o indiferencia para el desempeño de oficios públicos». Por otra parte, entre las «masas de creyentes [que son "la inmensa mayoría de nuestras clases populares", afirmaba] se encuentran los manantiales de la fuerza del número y de las convicciones enérgicas que necesitan las clases directoras». «Todo esto es lo que debe representar y personificar la jefatura de nuestro partido conservador. Este es también, sin duda, el ideal que invoca el señor Silvela como base capital de los fines y medios de conducta política.» Pero, si el porvenir había de quedar definitivamente claro, era preciso que lo expusiese pronto y bien «con programa que tenga por naturaleza ser obra y no alabraz»⁶⁶. Unas semanas después, el 23 de diciembre, el propio Silvela esbozó así, en *El Tiempo*, los puntos de coincidencia entre los núcleos conservadores aliados: «respeto a las creencias católicas que queremos se mantengan en las leyes orgánicas» (lo que era una apertura al tradicionalismo y a Polavieja acaso), «administración local, honrada, solvente y descentralizada», «orden y método en la instrucción pública, reforma en las leyes penales y de enjuiciamiento criminal», «mejora del sistema colonial, establecimiento de la disciplina social y protección al trabajo nacional». Los muchos y los buenos que estén conformes con esos principios —concluía— deben agruparse con total olvido de procedencias»⁶⁷. Las bases estaban, pues, definitivamente fijadas.

—Por último, el 3 de enero de 1898, en la toma de posesión de la nueva junta directiva del Círculo Conservador madrileño, de la que había sido nombrado presidente Alejandro Pidal, abogó éste en términos un tanto vagos por la creación de un «partido conservador a la moderna [sic],

que aúne y multiplique todas sus energías políticas para mantener incólumes todas las libertades sociales, amenazadas por los despotismos anárquicos»⁶⁸. Por su parte, en el discurso que pronunció el día 6 en Badajoz, Silvela pidió también la fusión de las diversas fracciones conservadoras: «Con los que convienen en lo esencial con lo que ha dicho recientemente señor Pidal —precisó al día siguiente en la misma ciudad—, la unión es un deber»⁶⁹. Considerados estos hechos como ratificación pública del acuerdo, la Unión Conservadora —así fue denominado el nuevo grupo, contrariando otra vez lo que sobre su futuro nombre había advertido el propio Silvela antes de la muerte de Cánovas— estaba conseguida. El 21 de enero, sobre un borrador de don Francisco levemente modificado por Pidal y los demás firmantes, la agrupación publicó su manifiesto inaugural, en donde dejaba constancia del programa que pretendía llevar a cabo. La paz, la rectitud administrativa y la política educacional eran los propósitos que se imponía para realizar en Filipinas; la reforma de la administración local, el sentido descentralizador y la liquidación de las cargas económicas impuestas por las guerras de Ultramar constituían el núcleo de la política general a seguir. Se trataba, en definitiva, de la clausura del estilo y las preocupaciones de Cánovas y la imposición del programa de Silvela. No hubo proclamación explícita de jefatura a favor de nadie; pero, desde entonces, actuó como jefe con aquiescencia de todos⁷⁰.

3. *El manifiesto de septiembre de 1898*

Monseñor Cascajares veía cumplida de esa manera, incluso en mayor medida de lo que pensaba, una parte fundamental de sus propósitos, Francisco Silvela mantenía su disposición favorable para secundarlos. Pero esto no fue así, por motivos que no conocemos. En realidad, la nueva unión no era aquella concentración que deseaba el cardenal, con inclusión de elementos ajenos a los dos grandes partidos de turno. Ahora, se trataba de un grupo exclusivamente conservador, como el nombre repudiado antes y utilizado ahora blasonaba, que además, como resultado de un pacto entre partes teóricamente semejantes, podía imponer sus peculiares intereses al grupo al nuevo jefe del partido. En febrero de 1898, el prelado volvió a la sede del Gobierno, para una estancia rápida de dos únicos días. En esa ocasión, visitó a Polavieja y habló con él de un manifiesto que el militante preparaba. Acudió también a ver a Silvela y a Gamazo, que sin embargo, según Vázquez de Mella, no intervinieron «para nada en esta última época en que pudiera decirse que todos los trabajos del partido católico ... van a concretarse y tener una fórmula en el Manifiesto del general Polavieja». Y es que, ciertamente, fue acaso entonces cuando Silvela cambió de nueva actitud ante el futuro político y ante los proyectos del cardenal aragonés, con quien, en 1897, había coincidido, si no colaborado. De hecho, las entrevistas de febrero parecieron dejar un sabor amargo en las esperanzas del arzobispo. Acaso permanecía el dolor del primado de las Españas, que acababa de perder. Pero también es posible que constatará entonces la evolución del jefe moderado, quien, de disidente dispuesto a aprovechar cualquier

quier camino que diera impulso a su postura, se veía ahora, de la noche a la mañana, convertido en caudillo de un partido que no necesitaba auxilios y que le exigía, además, fidelidad a sus propios compromisos.

Como expresión de aquel cambio pesimista, antes de que el general cristiano publicase el manifiesto que preparaba, el cardenal de Valladolid dio a luz una pastoral, fechada el 20 de febrero de 1898, donde anunciaba con crudeza y claridad (que sería luego atribuida a influencia de Costa ⁷², no del todo probada) las irregularidades políticas, administrativas, médicas, de las guerras ultramarinas ⁷³, y se refería a la situación general del país para apuntar los problemas con estilo descarnado, plenamente relacionado con la coetánea literatura del Desastre: «Es la verdad... —decía— que pesa sobre nosotros en nuestras colonias una guerra mortífera que arrebató sin gloria lo más florido de la juventud española, que nos vemos seriamente amenazados de complicaciones internacionales que nos envuelvan en otra guerra más desastrosa todavía, que nuestra hacienda está arruinada, nuestra política indecisa y vacilante, nuestro comercio arruinado, nuestra industria agonizando, nuestra agricultura exangüe; que nuestro pueblo, agotadas sus energías, su sangre y su dinero en una lucha estéril, perdida la confianza en los gobernantes, se ha entregado a esa atonía de la desesperación, síntoma terrible de lo que puede ser la explosión de tantas iras reprimidas», tanto más peligrosas cuanto el régimen político no era potente ya para calmarlas: «de los dos partidos que turnaban en el Poder, el conservador quedó deshecho, sin que hasta la fecha haya logrado reconstituirse juntando bajo una bandera los diversos elementos con que había formado tan robusto organismo aquella voluntad de hierro» (Romero Robledo y Tetuán permanecían al margen de la Unión Conservadora), y «el Liberal, quebrantadísimo en anteriores campañas, dirigido por un hombre ilustre a quien debe la patria grandes servicios en momentos de crisis solemnes, pero a quien enfermedades físicas y desfallecimientos morales han mermado las energías ahora más que nunca necesarias, debilitado por importantes disidencias, acaso próximo a desacreditarse del todo por el casi seguro fracaso de la solución autonómica que dio al problema cubano [en octubre de 1897], no reúne las condiciones de robustez y consistencia necesarias para resistir el peso abrumador de los gravísimos compromisos que sobre él han amontonado los asuntos pendientes».

No era viable, para resolver el problema, el recurso a un Ministerio nacional, útil acaso momentáneamente, pero transitorio en cualquier caso; ni la república, que «tiene para España bien desastrosos recuerdos y no puede inspirar confianza a los católicos»; ni el carlismo, que «no puede disponer de más medios que la guerra, la horrible guerra civil» ⁷⁴. «Un remedio quedaría si, atentos a la voz del Papa hubieran los católicos españoles formado el núcleo de fuerzas sanas por la constitución de un gran partido organizado para la lucha política y en el cual podrían caber y unirse en un gran ideal y una gran aspiración todos los hombres de buena voluntad, todos los que aman la Religión, la Monarquía, la moral, la sociedad y la familia, las grandes instituciones nacidas o desarrolladas al calor del espíritu cristiano. Pero España necesita soluciones rápidas, inmediatas, y a pesar de los deseos del Papa y de las exhortaciones del Epis-

copado, el gran partido católico no se ha formado ni ofrece por ahora posibilidad alguna de formarse, merced a la confusión de ideas y a la lucha de intereses que en mal hora introdujo el enemigo común en el campo católico español»⁷⁵.

La pastoral suscitó una inmediata polémica, que el prelado esperaba («digo verdades y es más que algo política»⁷⁶, había escrito a Palacio). La aplaudieron *El Imparcial*, *Heraldo de Madrid*, *La Epoca*, *La Correspondencia de España*, *El Día*, los diarios tradicionalistas *El Correo Español* y *El Siglo Futuro*. Fue repudiada por *El Globo*, frecuente portavoz del republicanismo de Castelar y, sobre todo, por *El Nacional*, que defendía al general Weyler, complicado en las responsabilidades ultramarinas ahora aludidas: «Nuestro nuevo compañero en la prensa —ironizó—, don Antonio María Cascajares... ha tenido la ocurrencia de dar a su escrito la forma de Pastoral episcopal»⁷⁷. Incluso reclamó inútilmente la protesta del Ministerio en Roma contra el prelado⁷⁸.

En marzo de 1898, la baraunda de comentarios adversos aconsejó al arzobispo la publicación de una respuesta, *En Justa defensa*. En ella protestaba contra quienes le habían acusado de abandonar la dinastía reinante en brazos del carlismo⁷⁹, y consignaba, en cambio, en nuevo giro esperanzador, «la convicción que hoy tenemos, fundada en las innumerables felicitaciones que se nos han dirigido, de que son muchos más de los que creíamos los elementos sanos con que se puede contar en España para realizar el gran ideal que hace tanto tiempo acariciamos: *la organización política de los católicos españoles para la lucha legal...* [¿] ¿Qué falta [para conseguirlo]? Un hombre enérgico, de voluntad firme, con valor para arrostrar impopularidades, que siempre serían pasajeras y que sepa y quiera llevar a cabo este pensamiento»⁸⁰. No sabemos si el hombre en quien pensaba era aún Polavieja, como Vázquez de Mella afirmaría⁸¹.

Publicado el folleto defensivo, las diatribas a la pastoral de febrero cedieron ante el tema de los posibles entendimientos que el proyecto exigía. En principio, el carlismo reiteró su criterio, contrario al partido católico: «por falta de principio diferencial y concreto, entre los que en España son católicos y los que no lo son»; «porque falta el programa»; «porque falta dinero para constituirlo»; «porque el partido católico dinástico no evitaría la guerra civil»; «porque haría a la religión y a la patria muchísimos menos beneficios de los que hace ahora, a pesar de su alejamiento del poder la Comunión carlista», y «porque el verdadero modelo del Centro Católico alemán y la única esperanza de la patria, son los carlistas»⁸². Sólo el integrismo consignó su buena disposición, de manera dispar con todo: «siempre que verdaderamente se trate de salvar lo esencial prescindiendo de lo accidental y secundario», en frase de *La Tradición Navarra*⁸³, o asegurando, como *El Constituyente* de San Lúcar de Barrameda, que el partido católico era ya el de los íntegros, «que estamos dispuestos a reconocer la dinastía, siempre que ésta acepte y gobierne con los principios fundamentales de nuestro programa»⁸⁴.

De momento, nada se concretó, y la atención, desplazada de estos asuntos hacia la consumación del Desastre, ya en guerra con los Estados Unidos, durante los meses centrales de 1898, no regresó a ellos hasta la pu-

blicación de los documentos políticos de Polavieja. Fueron éstos, primero, la *Relación documentada* de su política en Cuba, fechada en abril, que concluía con una despedida del general «en espera de que el país pueda necesitar algún día mis modestos servicios, seguro de que me encontrará dispuesto a prestárselos sin condiciones»⁸⁵. Apareció después el anunciado manifiesto, redactado por Augusto Suárez de Figueroa, director de *Heraldo de Madrid*, con la colaboración de Canalejas⁸⁶, que entregó al efecto unas extensas notas, de las cuales sólo algún punto hubo de ser modificado⁸⁷, y la de Rafael Gasset⁸⁸ y monseñor Cascajares⁸⁹.

Publicado el 10 de septiembre de 1898 en el *Heraldo*, el manifiesto estaba redactado en forma de carta dirigida a una «persona extraña a la política militante» y era, desde el comienzo, una llamada a las que se dio en denominar clases neutras de la nación: a la España —decía el documento— «que no se resigna a morir», expresada en los diarios ofrecimientos que llegaban al militar para prometerle «el concurso de elementos de gran significación, o de colectividades y Asociaciones respetables». Alejado por completo del estilo espiritualista de Cascajares, proponía una meta exclusivamente temporal. Contenía, al fin, los propósitos, no ya de fusión católica, sino de simple reforma política que albergaba el militar. Se refería especialmente a la necesidad «en la enseñanza, en la Justicia, en la Administración, en todo, ... [de] transformaciones radicales que no se detengan ante la protesta de los intereses creados ni de los falsos derechos adquiridos» y que procuren «elevar la cultura del país, convirtiendo la enseñanza de bachilleres y doctores en educación de hombres formados para las luchas de la vida y de ciudadanos útiles a su patria»; «organizar los Tribunales de modo que entre ellos y la conciencia popular se restablezca aquella confianza que los desafueros de la política les arrebataron»; «restaurar la Hacienda, fundándola en prácticas de sinceridad, trayendo a tributar todas las manifestaciones de la riqueza, haciendo efectivo el principio de la proporcionalidad de las cargas, poniendo término a la inestabilidad de los tributos y llevando un sentido social a la exacción de los impuestos indirectos, que pesan con abrumadora gravedad sobre las clases menesterosas»; suprimir «los malos hábitos que han viciado nuestras instituciones parlamentarias» y, sobre todo, «purificar nuestra administración, imponer desde lo más alto a lo más bajo las ideas del deber y de la responsabilidad y destruir sin compasión y sin descanso ese afrentoso caciquismo de que me repugna hablar, pero en cuya extirpación me emplearía con tal empeño, que por sólo no lograrla había yo de considerar fracasados todos mis intentos».

La vida económica del país habría de desenvolverse para ello «sin las trabas de una centralización que levanta ya entre nosotros alarmantes protestas»; de modo que era forzoso pensar «en llegar a una amplia descentralización administrativa ... y en acometer en ese sentido la reforma de las instituciones municipales y provinciales».

«Necesitamos organizar, sin pérdida de tiempo —añadía además—, el servicio obligatorio para que cese una desigualdad irritante, condenada por voz casi unánime del país.» «Debemos dedicarnos a la constitución de reservas [militares] efectivas, difundir las enseñanzas prácticas, asegurar

la competencia en el mando», y, en las relaciones internacionales, «no del confundirse la reconstitución interior de un país con el aislamiento a que nos han condenado los que gobernaron a España en los últimos cuarenta años». «Por instinto de conservación habremos de salir de él poniéndonos en condiciones de que nuestro concurso sea estimado en el mundo.»

Para conseguirlo, rechazaba la acusación de dictadura y de «reacción teocrática» que se atribuía a sus propósitos, y subrayaba, tal vez conforme a los consejos recibidos del cardenal Cascajares durante la gobernación de Filipinas, que no pretendía «formar un partido, en la acepción corriente de la palabra, ni siquiera... de averiguar la suerte que el porvenir reserva a las agrupaciones actuales: o se disolverán, dejando lugar a otras nuevas, o resurgirán transformadas después de una depuración de responsabilidades que aleje de ellas a los que no previeron o no supieron evitar la catástrofe. Nuestra empresa, demasiado grande, no puede tener por instrumento cosa tan pequeña, en realidad, como un partido a la española. Apelaba por eso al sentimiento público, a «todos los elementos neutros de la opinión», a las iniciativas y energías «perdidas hoy en la viciosa organización de los partidos políticos» y, en fin, «a todos los buenos españoles para que le apoyasen»⁹⁰.

4. Los primeros apoyos

«Los que por ahorrarse el trabajo de estudiar a los hombres —advertía Polavieja en el manifiesto—, prefieren tomar el juicio que corre acerca de ellos, me suponen representante de una especie de reacción teocrática encaminada a subvertir los poderes del Estado y arrancar de la conciencia sus naturales fueros. No tienen más causa cierta para discurrir así, que ser, por creencia y por práctica, fervorosísimo cristiano, haber constituido mi familia y educado a mis hijos en el santo temor de Dios y creer sinceramente que las potestades civiles, al par que defienden sus derechos, mantienen a la Iglesia en la órbita que le es propia, deben facilitarla el ejercicio de aquel alto ministerio social a que está consagrada y cumplir con ello los pactos solemnemente establecidos»⁹¹.

En verdad, la aureola teocrática tejida en torno al militar en su gestión de Filipinas no le había abandonado. «Neos, íntegros, carlistas, ultramontanos, teócratas —escribía privadamente, en septiembre de 1897, Castelar, que vimos creía ver la conspiración del general, de Silvela y de Marí Cristina contra Cánovas—, se alzapriman en requerimiento y busca del régimen absoluto»⁹².

En mayo de 1898 el orador republicano exteriorizó estos temores (que en él equivalían a un cambio importante de actitud hacia el régimen)⁹³ en un resonante artículo, publicado por la *Nouvelle Revue Internationale* y reproducido luego por *El Nacional* de Madrid: «La corte se mezcla demasiado a los asuntos políticos y compromete, por intervenciones que no convienen a su carácter ni a su papel propio, la irresponsabilidad que no puede existir sino cuando los cortesanos permanecen ajenos a los decretos de los ministros y a las leyes de las Asambleas. En estos últimos tiempos, la

corte ha comprometido la persona del Papa en la cuestión de Cuba; la corte ha demostrado preferencia por generales como Polavieja, en daño de generales como Weyler»...⁹⁴

Tras la publicación del manifiesto de septiembre, el general cristiano siguió contando con todo con los elementos liberales (a la cabeza los canalejistas) e independientes (Gasset y *El Imparcial*)⁹⁵ que le habían secundado desde su vuelta a España. De hecho fue acogido el escrito con reservas por la prensa conservadora y mal por la sagastina, que comprendió la suplantación del turno que Polavieja pretendía, pero desfavorablemente también por los tradicionalistas, expresamente desconfiados ante el cortejo liberal del general cristiano⁹⁶.

Durante los dos meses siguientes a su publicación, *El Imparcial* y *Heraldo de Madrid* pudieron incluir, día tras día, largas listas de adhesiones al general, hasta contabilizar, en octubre del 98, «22 periódicos que se han declarado sostenedores del programa de 1.º de septiembre»⁹⁷. Se aseguraba que, junto a los demócratas Augusto Suárez de Figueroa y Francos Rodríguez, y además de Rafael Gasset, iban a suscribirlo dos nuevos sagastinos: el duque de Tamames y el inquieto conde de Romanones⁹⁸, que, si bien ciertamente sopesó la idea, la rechazó más tarde, movido, según dijo, por su fidelidad a Sagasta⁹⁹ o acaso por la herencia de la jefatura liberal, que ya se había insinuado en el horizonte.

Se dijo que Polavieja contaría además, no sólo con el consabido apoyo de *El Imparcial* y *Heraldo*, sino además con el de *El Globo*, que, efectivamente, había recibido bien su manifiesto, y con *El Nacional*, que, dirigido por don Adolfo Suárez de Figueroa, hermano del director de *Heraldo*, tantas diatribas lanzara, sin embargo, contra los documentos del militar y de nonseñor Cascajares. Y el *Diario de Barcelona* recogió incluso la composición prevista para el futuro Gobierno de que ya se hablaba. Presidido por don Camilo, Tamames ocuparía la cartera de Estado; Chinchilla la de Guerra; Augusto Suárez de Figueroa sería ministro de Fomento, y el conde de Romanones se encargaría de la Gobernación del Estado¹⁰⁰.

El 15 de septiembre Canalejas pidió permiso al jefe del Gobierno para organizar la oportuna campaña de propaganda. «El general Polavieja —pudo omentar *El Imparcial* en esa misma fecha— recibe diariamente centenares de cartas y telegramas... Entre los adheridos figuran comerciantes e industriales de importancia, catedráticos, ingenieros, médicos, abogados, obreros y gran número de militares»¹⁰¹.

Había, en efecto, movimientos favorables de opinión en Valencia, Girona y Navarra (de Estella, sobre todo), en numerosas poblaciones de Aragón y de Cataluña, en Vascongadas y Galicia, en Andalucía, donde se adhirieron algunos silvelistas de Sevilla y Cádiz, personalidades de Málaga, de Córdoba, de Granada, Almería y Jaén, con el director de su instituto, don Mateo Tuñón de Lara, al frente; testimonios de adhesión formulados por un buen número de periódicos independientes del país; apoyo manifiesto de varias cámaras de comercio, de asociaciones de propietarios y contribuyentes, de gremios industriales y de diversas entidades económicas. Según afirmación de *Heraldo*, aún en septiembre de 1898, contaba más de 30 personajes, entre senadores y diputados, «dispuestos a apoyar con

sus votos y su influencia la política del ilustre caudillo»¹⁰².

Pero enseguida comenzaron también a afluir corrientes comprometidas. En el verano se comenzó a hablar «de que el general Polavieja ha ofrecido su concurso al jefe del partido conservador»¹⁰³, que, el 16 de agosto, había de entonar su propio canto regeneracionista en el artículo *Sin pulso*, publicado en *El Tiempo*¹⁰⁴.

Ya el 31 de agosto, el militar había rechazado el ofrecimiento de modo terminante: «No estoy identificado con los políticos —dijo—, sino con aquellos elementos que sigan el camino del bien para conseguir la regeneración de la patria». Y el propio *Heraldo* consignó entonces que Silvela no había dicho a nadie «—y así nos autoriza para manifestarlo— que cuenta con el concurso del general Polavieja, ni que éste se halle afiliado al partido conservador».

Lo que el señor Silvela ha expuesto en conversaciones acerca de este asunto es que... si él fuese llamado a desenvolver esa política, estima como un verdadero éxito el lograr la ayuda del ilustre caudillo, aunque ningún compromiso exista hoy entre ellos»¹⁰⁵. La invitación, no obstante, quedaba así expresada.

Los rumores de acercamiento crecieron al acabar septiembre, provocando cierta disconformidad entre el gobernador de Filipinas y Canalejas «hasta el punto de haberse suspendido por telégrafo el reparto en provincias de las circulares de propaganda»¹⁰⁶. Pero no debía de ser cierta la aproximación. Sí era verdad que las gestiones existían, tal vez alentadas o vigiladas por la reina, con don Eduardo Dato como intermediario de los dos políticos y unas cuantas cartas cruzadas entre ambos¹⁰⁷. Mas algunos extremos programáticos impedían la unión. «Mis buenos deseos —escribió Polavieja a la regente el 6 de octubre de 1898, aludiendo a un momento concreto de las negociaciones—, ayudados de una ligera lectura que me hizo ayer Dato de la carta que me trajo de Silvela y las explicaciones que a dicha carta me dio, me hicieron concebir la ilusión de que Silvela y yo podríamos unirnos para el mejor servicio de V. M. y de la patria, y así manifesté al eminentísimo cardenal Cascajares», presente en Madrid en aquel nuevo por aquellos días¹⁰⁸. «Cuando luego la leí con detenimiento comprendí que la unión no puede verificarse tal como me la propone Silvela por tener fundamentos contrarios a cuanto conviene y desea el país, pero también desea el ejército».

Como yo sólo deseo cuanto conviene a V. M. y a la patria sacrificando a los dos en un todo mi personalidad, le vuelvo a escribir insistiendo en venir a un acuerdo que corresponda a cuanto exigen la gravedad de las circunstancias»¹⁰⁹.

Según dijeron luego los conservadores, en un principio Polavieja había exigido la sumisión de Silvela a su programa y a su jefatura. Pero, convencido de la inutilidad de esta segunda petición, se limitó a condicionar su apoyo a la aceptación del manifiesto de septiembre y de los compromisos que había contraído con fuerzas vivas catalanas representadas por el industrial Sallarés y el arquitecto Doménec Montaner acerca de la creación de una diputación única en el principado y del establecimiento de un concierto económico entre aquella región y el Estado. Persuadido al pa-

cer Silvela después de duro forcejeo, acordaron al fin que el propio jefe de los conservadores redactase las bases de la unión conforme a las ideas del general. Lo hizo; pero, llegado el momento de firmarlas, Polavieja no quiso hacerlo, por razones desconocidas. Intervino Martínez Campos, que consiguió un nuevo arreglo, según el cual, cuando fuesen llamados al Gobierno, Silvela presidiría el Gabinete, el ex gobernador de Filipinas sería ministro de la Guerra y el propio Martínez Campos, capitán general de Madrid ¹¹⁰. En esto parecían estar todos cuando, a finales de octubre, el 26, Polavieja dirigió otra carta, ahora al *Diario de Avisos de Zaragoza*, para confirmar tajantemente su actitud inicial: «que yo no seré nunca individuo, ni jefe de la unión conservadora»; que no pretendía acaudillar un grupo, sino realizar unas ideas: de modo que, si las aceptaba Silvela públicamente «sin modificaciones ni atenuaciones, tendrá mi simpatía, nunca mi sumisión» ¹¹¹.

El enojo del jefe moderado ante su nuevo giro, si existieron cambio y enojo, se tradujo en otra carta dirigida al militar en términos violentos ¹¹² y en una continuación paciente de las negociaciones. Fueron quizá reanudadas con el artículo que Silvela publicó en *La Epoca* el 31 de octubre de 1898, anunciado como expresión definitiva de su actitud ante la posibilidad de una inteligencia con el general. En él declaró abierta la entrada a su partido, sin nombrar a Polavieja, a quienes quisieran unírsele para realizar una parte de las aspiraciones consignadas en ciertos programas de reformas.

Heraldo de Madrid, que recogía la noticia el 1 de noviembre, insistió en la buena disposición del militar, pero advirtió también que Polavieja no estaba dispuesto a confundirse con ninguno de los partidos históricos ¹¹³. En esta afirmación, en realidad, latían las condiciones que Canalejas había impuesto ante los rumores. Defendería siempre —dijo a sus seguidores— el programa de Polavieja, a quien secundaría lealmente, pero sólo mientras no llegara a unirse con Silvela, en detrimento de su propio abolengo democrático ¹¹⁴.

En la primera quincena de octubre, el *Herald* de París había afirmado que el militar había escrito una carta a Canalejas en la que se manifestaba disconforme con sus ideas políticas y advertía que no descaba gobernar si tenía que hacerlo con políticos de oficio ¹¹⁵ (lo que era inverosímil de no admitirse la versión de Planas i Casals, según la cual los elementos nuevos del polaviejismo, ajenos hasta entonces a la política activa, pidieron al general la ruptura con el disidente de Sagasta) ¹¹⁶. Pero, a primeros de noviembre se conoció la adhesión al militar publicada por las antiguas juntas silvelistas y la junta de gobierno del Círculo de la Unión Nacional, de Sevilla ¹¹⁷. Tres días después, don José Canalejas juzgó llegado el momento de precisar su postura por sí mismo, en el discurso que pronunció en Hellín el 7 de noviembre con este propósito: «El general Polavieja —dijo en aquella ocasión— ha podido creer que necesitaba para su obra el concurso de los elementos políticos menos gastados. Si busca ese concurso en las fuerzas acaudilladas por el señor Silvela, yo, que le he acompañado en las ideas, me separaré de él si su práctica se ha de encomendar al partido silvelista. El programa del general Polavieja, por ser

radical y ultrademocrático, sólo puede ser defendido por políticos muy liberales» ¹¹⁸.

El discurso, muy comentado por toda la prensa, precisaba claramente las posturas. Canalejas, que parecía admitir hasta entonces la aproximación de Silvela como un elemento renovador más, puesto que nada había dicho contra ella, la rechazaba ahora con un argumento sencillo e irrevocablemente cierto. Sin un contrapeso liberal —y él no bastaba para hacerlo—, la alianza resultaría, quisiera o no, conservadora; máxime si no era Polavieja la figura predominante en la coalición, sino Silvela, y si, además, entraban grupos integristas y fuerzas moderadas del catalanismo.

Por otra parte, a finales de octubre, dirigentes del integrismo habían hecho entrega a Polavieja de una espada costeada por suscripción popular, abierta en 1897 por *El Siglo Futuro* en pago a su gestión de Filipinas ¹¹⁹. Ahora, también el 7 de noviembre del 98, el mismo diario publicó un nuevo programa del partido. Decía rechazar en él el absolutismo, en favor de una monarquía templada, gobernada por el Rey con las Cortes, de constitución estamental, y enmarcada en la unidad católica. La básica descentralización administrativa habría de concretarse en el establecimiento de conciertos económicos entre las provincias y el Estado, en tanto que, en los presupuestos generales se procuraría cercenar los gastos; todo con criterio antiliberal, desde luego, pero no antidinástico: «Las anchísimas bases de nuestra organización se amoldan a todo sin exigir cambios de dinastía, ni oponerse a ninguna, ni siquiera concretarse a determinadas formas» ¹²⁰. Lo que, en definitiva, podía encerrar el sí al transaccionismo. «Gracias a Dios —comentó la *Revista Popular* sobre este párrafo— ... que se ha soldado, al fin, una palabra que bien aprovechada podría ser para todo buen católico español fórmula de unión». La acogía «sólo sí ¡ay!, con e temor de que ya resulte tardía» ^{120 b}.

La orientación polaviejista del integrismo fue comprendida de inmediato: «Este documento —aseguraba *El Imparcial* el 8 de noviembre, esbozando quizá su propio alejamiento—, se inspira en un espíritu de apoyo al general Polavieja y su programa», en el que «han encontrado los amigos del señor Nocedal la mayor analogía con sus ideales» ¹²¹. Incluso se creyó a ambos jefes políticos «en relación y hasta en relativa inteligencia» ¹²².

Al interpretar la noticia de *El Imparcial* como una afirmación velada de que el acuerdo entre el militar y el integrismo era un hecho, *El Nacional* aventuraba ya la idea de que Canalejas no seguiría en aquella agrupación que, más que un partido, parecía «un cajón de sastre»; ni Silvela probablemente, aceptaría la unidad católica de los íntegros ¹²³.

El acercamiento de los tradicionalistas intransigentes arrastraba, por tanto, y esto era lo alarmante, la inquietud religiosa. Y así fue denunciado crudamente por aquellas fechas; porque, en frase divulgada entonces: la «aleación entre Canalejas, Polavieja y Nocedal» era irrealizable: «combustión imposible», con palabras de *El Día* ¹²⁴.

En realidad, el acuerdo no era tan claro. La acogida del manifiesto de septiembre por parte de *El Siglo Futuro* no había sido favorable, y la apor-

rente frialdad con que el mismo diario reproducía ahora los comentarios transcritos sobre su propio programa parecía denotar cierta indecisión. De hecho, las reseñas de noviembre denunciaron en seguida que no todos los integristas estaban de acuerdo en apoyar a Polavieja. Algunos de sus periódicos negaron explícitamente que hubiera entendimiento. Otros, en cambio, aplaudieron la posibilidad de que existiese. *La Revista Católica* de Alcoy llegó a afirmar que el manifiesto de Polavieja y el de las cámaras de comercio, publicado entonces, eran, en realidad, un mero eco del programa defendido siempre por los integristas. Pero también se dijo que las ideas expresadas por el general en septiembre no eran siquiera totalmente católicas; porque dejaban a salvo la conciencia de cada cual y no pretendían fundar el Estado teocrático a que ellos aspiraban ¹²⁵.

5. La burguesía en torno a Polavieja

→ vid. SANZ-PASTORS
y el Miguel del Santo OLIVER

Al menos en septiembre de 1898 había comenzado a advertirse también el imprevisto acercamiento a Polavieja de otra fuerza política, catalana, pero diversa del catalanismo, que acentuaba el tono regenerador del nuevo grupo.

La guerra de Ultramar pareció intensificar la contracción del comercio internacional español y, por tanto, del Principado, impuesta por el giro general proteccionista culminante en los primeros años 90. En realidad, la mayor parte de la producción textil de su industria era ya consumida en la propia península. Pero de las escasas exportaciones de tejidos, el 95 por 100 se encaminaba a Cuba y Filipinas, monopolizadas para Cataluña, de hecho, con el arancel de 1891 ¹²⁶.

La clausura de estos mercados pudo sensibilizar políticamente a determinados elementos de las fuerzas vivas de la región, en diverso sentido. Algunos (entre estos Alberto Rusiñol, importante y activo fabricante textil), centralista en ello, habían protestado de la concesión de autonomía a Cuba decidida por el Gobierno de Sagasta en 1897. Para organizar la oposición, en fecha imprecisa, incluso celebraron una reunión «*secreta o reservada d'els representants més autoritzats de les associacions econòmiques [de Cataluña] ... en un centre republicà de la Portaferrissa per intentar una entesa amb els partits republicans*». Mas la moderación de Sol y Ortega no permitió el acuerdo ¹²⁷.

Quizá en el 97 mismo, Polavieja pensaba ya en conseguir el mismo apoyo ¹²⁸. Según Carrera Pujal, su acción decidida en Filipinas le había atraído la simpatía de buena parte de la burguesía de Cataluña y, de hecho, el presidente de la Diputación de Barcelona, Andrés Sard, propuso en la sesión del 4 de mayo de 1897 que la corporación participase en el recibimiento que se le preparaba ¹²⁹. *El Imparcial* había publicado en marzo unas declaraciones regionalistas del militar ¹³⁰, que fueron aplaudidas por algunas personalidades del Principado ¹³¹. Polavieja se puso en relación con Juan Sallarés, prestigioso economista y presidente del Fomento del Trabajo Nacional desde el mismo 97, también significado como industrial católico ¹³², que hizo de mediador en las gestiones ¹³³. Publicado el manifiesto el 10 de

septiembre de 1898, Sallarés fue quizá el primer catalán que expresó su adhesión, esperanzado ante «las concretas declaraciones de su programa sobre descentralización administrativa, representación personal y propia de las grandes fuerzas sociales, formas de tributación concertada¹³⁴ y política económica». «Se ha hecho usted intérprete —le dijo al general en el telegrama al que pertenecían estos párrafos— [de la] aspiración [de las] clases productoras, que le prestarán su más decidido apoyo para que pueda llevarlas a la práctica»¹³⁵.

Frente a la acogida de la burguesía, en cambio, la del nacionalismo fue francamente tibia: *La Veu de Catalunya* no lo consideró aceptable¹³⁶ y *La Renaixensa*, órgano de la *Unió Catalanista*, negó altura al manifiesto y le recriminó por no abordar el problema de la estructura misma de la política española, que consideraba raíz de la cuestión¹³⁷. Pero la influencia de los individuos relacionados ya con el militar comenzó a forzar muy pronto el giro simpatizante de un sector del propio catalanismo. En carta pública de 12 de septiembre, dirigida a don Narciso Verdager Callís para su publicación en *La Veu*, don Luis Doménech Montaner, presidente del Ateneo de Barcelona y arquitecto notable¹³⁸, manifestó discretamente su adhesión al general cristiano: «*L'esperit en favor de la autonomia administrativa de Catalunya —dijo—, que's manifesta d'una manera general en les classes ilustrades de la nostra terra, y que comensa a ser acceptat com perfectament legal y possible dintre d'Espanya per persones qui tal vegada en dies pròxims ne podrien implantar desde'l poder alguns dels principis capitals, requereix ser estudiat y tractat ab gran circumspecció per los periòdichs catalanistes.*»

Comprendía esa autonomía deseada, «*ara com aspiració no ja dels catalanistes sino de la major part dels catalans ilustrats: Una sola Diputació, general de Catalunya; lo concert econòmic ab l'Estat pera los gastos esclusius del poder central; la fixació y recaudació dels impostos, exceptuant lo de Aduanes; les obres públiques; lo foment miner, forestal y agrícola; la ensenyança en tots sos graus y altres de menor importancia, y s'hi consideren anexes: La administració de justicia fins a última instancia, ab funcionaris catalans o naturalisats; la intervenció en la defensa de la terra per la Diputació; lo servey forçós en la reserva y sols dintre de Catalunya; lo sufragi per classes, corporacions y gremis; l'us del catalá com llengua oficial dintre de nostra terra y la iniciativa y consentiment ineludibles de la Diputació general de Catalunya pera tota reforma de nostre dret civil.*

No es aquest lo programa complert del catalanisme, pero es l'estat actual de la opinió ilustrada a Catalunya; y, si per persones d'honrada procedencia privada y política se presentés una solució en aquest sentit, me sembla que seria nostre deber apoyarla, procurant accentuarla lo más possible en concepte autonómich»¹³⁹.

El solo hecho de enviar la carta y la acabada síntesis programática que incluía denotaban preparación y gestiones previas muy determinadas; pero el prisma periférico, como a individuo del círculo político de Madrid, con que se miraba allí a Polavieja, y la inquietante presencia, como posible aliado del militar, de Francisco Silvela, no facilitaron la entrega de los efectivos nacionalistas. Si, el 18 de septiembre de 1898, *La Veu* comenzó a

publicar en catalán el manifiesto del general cristiano, también cuidó de advertir que no había enviado «*ni que pensém enviar la nostra adhesió a En Polavieja*»¹⁴⁰. Había de expresar éste, con más claridad, la firmeza de sus disposiciones, para obtener su apoyo.

En verdad, ya lo había hecho por escrito a los presidentes de varias de las asociaciones de patronos de Cataluña, representativas de la burguesía del Principado¹⁴¹, entre ellos a Doménec Montaner. Y a él, en respuesta a un estudio remitido antes por el arquitecto (que lo había realizado «*ab lo consell y aprobació d'entitats a quinas tenia jo la obligació moral de consultar, y a demanda d'altras entitats no polítiques de Catalunya que creuen ser precisa avuy la administració autonómica de nostra terra*», contestó Polavieja el 30 de septiembre formulando sus propósitos sobre las cuatro provincias catalanas en cinco puntos fundamentales:

«1.º Implantar, desde luego, el concierto para la tributación directa por medio de cupos que podrán ser revisados periódicamente con aumento o rebaja según las alteraciones que haya tenido la riqueza afecta al impuesto.»

«2.º Acometer la reorganización de la vida municipal sobre bases que den la debida representación en los Ayuntamientos a las fuerzas sociales y a los intereses corporativos en sus varias manifestaciones de capacidad, capital y trabajo.»

3.º Refundir «en una sola las cuatro Diputaciones de las actuales provincias.»

4.º Permitir la organización independiente de «la enseñanza profesional y técnica para el mejor desarrollo de sus intereses».

5.º Respetar «las instituciones jurídicas de cada región y el no tocar a ellas si no cuando fuera para perfeccionarlas con arreglo al espíritu, usos y necesidades de las regiones.»

«Para el logro de mis propósitos —terminaba— no me cansaré de repetir que no quiero constituir un partido político, sino obtener el concurso y la activa cooperación de todas aquellas fuerzas sociales y, principalmente, de las de carácter colectivo, que estén conformes con mi pensamiento y dispuestas a ayudarme en la difícil obra de reconstruir al país»¹⁴².

Bastaban tales términos, publicados en *La Veu de Catalunya* del 16 de octubre de 1898 a petición de Doménec y con autorización del militar¹⁴⁴, para comprender que las intenciones de gobierno del general cristiano iban mucho más lejos que a una simple reforma de detalles. Se trataba de estructurar, de nueva planta, el esquema institucional de la administración española. Esto pareció ser, mucho más que el manifiesto de septiembre, lo que totalizó la evolución clara y atenta del catalanismo colaboracionista hacia el militar. El 22 de octubre, *La Veu de Montserrat* constataba «*l'aprobació general ab que ha sigut rebuda la carta del general Polavieja*», de 30 de septiembre¹⁴⁵. El 23, *La Veu de Catalunya* afirmó, con argumento que había de ser constante en los meses siguientes y clara ilustración de los perfiles de su colaboración con la política central, que «*lo més festejat per rosaltres será aquell de qui'n esperém majors retorns al dret de Catalunya*». «*Fins ara, d'entre'ls polítics d'Espanya qui esperen tenir en ses mans*

lo govern, lo qui més de dret s'ha compromés ab Catalunya, fentli solemne y pública promesa de tornali part de lo seu, es lo general Polavieja»¹⁴⁴.

El acercamiento consiguiente entre catalanistas y burgueses polaviejistas no había alcanzado, en cambio, en igual medida, a un tercer grupo, el de los regionalistas conservadores, que pensaban en la candidatura de su propio jefe: «Nosotros —había escrito Mañé i Flaquer en el *Diario de Barcelona*, a primeros de octubre sobre Silvela y Polavieja— aún nos hacemos la ilusión de que unidas aquellas dos eminencias, secundadas por hombres de valer, independientes y libres de responsabilidades como el señor Durán que no faltarían, se podría reproducir aquel partido nuevo que en 1858 se llamó "La Unión Liberal"»¹⁴⁵. La candidatura ministerial de Durán i Bas, personalidad relevante del historicismo jurídico, ya afamado, parecía se preparada así, como posibilidad conservadora mejor de incluir un individuo de prestigio en Cataluña que no despertase inquietudes en Madrid¹⁴⁶.

El obstáculo que la sola personalidad del jefe conservador suponía para los catalanistas no bastaba a salvarlo, no obstante, la eminente presencia del jurisconsulto, según continuó declarando la prensa nacionalista durante aquellos meses¹⁴⁷. Y, del propio catalanismo, por otra parte, tampoco todos confiaban en Polavieja. En octubre y noviembre, numerosos organismos de las cuatro provincias, ayuntamientos y asociaciones de todo tipo manifestaron, sin citar al general, su apoyo a la reivindicación del concierto económico y de la diputación única, que él había ofrecido¹⁴⁸. Pero, entre los círculos políticos nacionalistas, la opinión estaba dividida en pro y en contra de la colaboración¹⁴⁹.

De nuevo el 7 de noviembre de 1898, como resultado de conversaciones habidas entre ellas en las semanas posteriores al Desastre¹⁵⁰, manifestada ya en su relación con Polavieja¹⁵¹ personalidades de las asociaciones económicas barcelonesas, esto es, de la Sociedad Económica de Amigos del País, el Fomento del Trabajo Nacional, la Liga de Defensa Industrial y Comercial y el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, con el Ateneo de la ciudad, constituyeron en Barcelona una «Junta de adhesiones al programa del general Polavieja», presidida por el industrial silvelista Ferrer i Vida que dirigió al ex gobernador de Filipinas un telegrama donde declaraba que el organismo pretendía «secundar calurosamente sus nobles iniciativas encaminadas a la regeneración de nuestra infortunada patria»¹⁵². El día 1 inmediato, la nueva Junta publicó una circular en la que decía haber asumido, «por inspiraciones del patriotismo, la representación de lo que se ha dado en llamar masa neutra del país o sea la que nunca ha participado de las ventajas que a manos llenas han conseguido los partidos políticos». «Nos aspiramos a crear un nuevo partido ... : pretendemos únicamente que todas las fuerzas vivas de la nación se agrupen y organicen a la mayor brevedad para que encaminando las aspiraciones comunes, dando forma a la idea que a todos nos anima, la lleven al terreno de la práctica con la salvación de la Patria.» «No pretendemos proclamar jefatura alguna política. Quédesc para los partidos avezados y nacidos del poder personal. Pero encontramos nuestros ideales dentro de un programa, y de él nos amparamos y en su defensa combatimos: el programa del general Polavieja»¹⁵³.

Firmada por treinta y dos personajes, la última salvedad, contraria a todo personalismo, evitaba un compromiso demasiado exigente, y la alusión a la masa neutra volvía a dejar constancia del elemento social que constituía el catalanismo polaviejista: «Son sus promovedores —dijo más tarde Canalejas— banqueros ultramontanos, sacerdotes respetables, aunque extraviados, hombres de abolengo conservador, antiguos jefes de las legiones de don Carlos, viejos integristas, o integristas disidentes»¹⁵⁶.

A primeros de noviembre de 1898 también, cuando apareció la Junta de adhesiones, las mismas cinco entidades económicas antes citadas, «corporaciones que representan —advertía en Madrid el *Heraldo*— todas las fuerzas vivas de Cataluña»¹⁵⁷, acordaron que sus presidentes formasen una comisión para exponer ante la reina el deseo de los elementos independientes de Cataluña para que fueran aplicadas desde el poder las conclusiones en que el general Polavieja había desarrollado algunas de las ideas de su manifiesto en la correspondencia mantenida con ellos. A ese fin, marcharon a Madrid Bartolomé Robert, de la Sociedad Económica de Amigos del País; Juan Sallarés i Pla, del Fomento; Carlos de Camps, que presidía el Instituto Agrícola; Sebastián Torres, de la Liga de Defensa, y Doménec Montaner, del Ateneo, es decir, los cinco presidentes de las cinco entidades, que, el 14 de noviembre, expusieron sus pretensiones a la reina. El mensaje leído en aquella ocasión, redactado por el doctor Robert, contenía, de nuevo, un formidable alegato regeneracionista: «Penetrados de la aguda crisis por que está atravesando España en estos momentos y del luctuoso porvenir que le aguarda», comenzaba, acudían «en solicitud de aquellas reformas sustanciales que en opinión de los exponentes, podrán conducir a la regeneración de un país, hoy poco menos que agotado, si no moribundo». Pretendían «que el sistema representativo por clases sustituya al parlamentarismo vigente y que se conceda una amplia descentralización administrativa regional, conservando el Poder Central únicamente aquellos atributos de acción común sobre todo el territorio y los que exijan las relaciones internacionales», lo cual se concretaba en las siguientes medidas legislativas:

«Primera.—Los Ayuntamientos, las Diputaciones y el Senado, serán elegidos directamente o indirectamente por Gremios, Clases y Corporaciones.

Segunda.—Se dividirá el territorio de España en grandes regiones de limitación natural por su raza, idioma e historia; concediendo a cada una de ellas amplia descentralización administrativa, para que puedan establecer conciertos económicos, fundar enseñanzas técnicas, tener iniciativas para la conservación y reforma de su Derecho propio y facultad para emprender cuantas obras públicas sean necesarias para la más rápida explotación de las fuentes de riqueza.

Tercera.—Continuarán a cargo del Poder Central aquellas funciones que demanden la actual e indestructible unidad política de España para mantener la conexión de las diversas regiones y las relaciones internacionales»¹⁵⁸.

Ante el acto oficial de los cinco presidentes, *La Renaixensa* comentó una vez más, el 15 de noviembre, la evolución sufrida por estos catalanes que no habían sido catalanistas hasta entonces. Creía en ellos y se alegraba

ba de su acercamiento. Pero no confiaba en cambio en el hombre elegido para realizar sus propósitos: en Polavieja, a quien consideraba demasiado viejo para encarnar la radical política que exigían los autonomistas¹⁶⁰.

No todos pensaban, sin embargo, de esa manera: *La Veu de Montserrat* juzgó el mensaje «*document històric y transcendental*»¹⁶⁰; en días inmediatos, la prensa adicta se cubrió de adhesiones al acto y, el 22, en un manifiesto redactado por Prat de la Riba, implícita, pero claramente, *Unió Catalanista* se proclamó en favor del general cristiano: «*Si mentir no podem implantar en sa integritat tot lo nostre programa, un Govern qualsevol que sia, que governi ab lo país y no ab los partits, se fa seure una part dels nostres principis, Catalans, ... ajudemlo tots ab sinceritat per tots los medis honrats, ab la propaganda y ab nostres actes a dins a fora de las Corporaciones populares pera que arrelin com en los millors temps de Catalunya; no li posem entrebanchs en tot allò que, essent d'interés general, no sia contrari als principis nostres, però sense afiliárnoshis avans per lo contrari, reservantnos nostra llibertat d'acció, a fi de seguir defensant y propagant íntegrament totas las Bases de nostre únic programa*»¹⁶¹.

Al parecer, el texto primitivo del manifiesto había sido modificado ante las protestas de los intransigentes¹⁶², que quizá juzgaron la adhesión demasiado confiada.

Al cabo, la tirantez entre colaboracionistas y totorreistas (los partidarios del *tot o res*) terminó por provocar la ruptura en el seno de la *Unió*. Los dos grupos escindidos permanecieron dentro de la organización; pero mientras estos se encerraban en *La Renaixensa* —que languidecía hasta desaparecer en 1905—, aquellos revitalizaron *La Veu de Catalunya*. El día 15 de diciembre de 1898, con el respaldo económico de elementos que constituían la Junta de adhesiones a Polavieja¹⁶⁴, una sociedad anónima creada para ello firmó la escritura pública de compra del semanario, con el compromiso de publicarlo ahora diariamente. *La Veu* misma lo notificó el 2 de enero de 1899, subrayando que persistiría en ella la orientación catalanista¹⁶⁵. El 2 de enero de 1899, bajo la dirección de Prat de la Riba, apareció el número uno. Sospechándolo acaso, en diciembre, *La Publicidad* había afirmado que el periódico estaba subvencionado por el marqués de Comillas e inspirado por los jesuitas. Y, en efecto, en la renovada publicación, cuyos primeros deficitarios meses de vida, por cierto, exigieron nuevos desembolsos de los accionistas, no faltó a diario un anuncio de la Compañía Trasatlántica, propiedad del marqués¹⁶⁶. Su presencia no desentonaba en el carácter católico confesional aún acusado en algunos catalanistas, como Puig i Cadafalch o el propio Prat de la Riba¹⁶⁷.

Se hablaba ya, por lo demás, de que Polavieja había ofrecido dos Carteras del futuro Gobierno a los catalanes, una de ellas —la de Fomento— a Sallarés^{167 b}.

No paraban tampoco en estas las fuerzas regeneradoras con las que Polavieja pudo contar. Siempre en noviembre del 98, dos nuevos y afines grupos parecieron ligados al movimiento: el regeneracionismo aglutinado en

torno a Basilio Paraíso y a Joaquín Costa, que volvía a quebrar ahora su trayectoria política.

Ya en noviembre de 1897, Costa había escrito a Rafael Altamira, catedrático de la Universidad de Oviedo, ofreciéndole la idea de formar un partido de estilo regenerador; pero no le concretó su pensamiento hasta el año siguiente, cuando el Desastre urgió la perentoria necesidad de reorganizar el país. En una nueva carta fechada el 6 de agosto del 98, insistió a Altamira en la oportunidad de crear una agrupación política impulsada por el núcleo intelectual ovetense y por los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, que, de esta manera, «(naturalmente, sin dar la cara como tal [Institución:]), cobraría nueva vida, hallaría nuevo objetivo, que ya le va faltando».

Quienes lo intentasen, puntualizaba, «tendrían que anunciarse y salir a luz como una asociación sin vaguedades ni generalidades, muy *concreta*; como partido político: un partido ni radical ni conservador, ni monárquico ni republicano, ni católico ni anti-católico, ni individualista ni socialista: *oportunist*a, y aunque diga empírico, a la inglesa, definido por su *programa*; programa según una manera nueva, desarrollado en doce o quince proyectos de ley, decretos, etc., sobre lo fundamental, urgente y hasta ahora desatendido; partido de *maneras* conservadoras (y contenido radical más bien), que no arremetiese con los políticos *viejos*, presentándose ante ellos petulantemente a pedirles cuenta del pasado, maldecirles e invitarles a retirarse; que no rompiese con ellos en tanto no rompan con ellos los hechos y los orillen o los arrastren y transformen; que no pidiese ni rechazase el poder; o más claro, cuyo fin no fuese, según uso, la conquista de la *Gaceta*, sino la realización, *por sí o por quien quiera que ocupe el poder*, de su programa nacional y humanitario (más humanitario que nacional); que no se dijera órgano de la opinión (todos se dicen lo mismo), ni de la masa neutra (incapaz de formar partido), etc., sino de las necesidades esenciales, fundamentales de España y de los españoles».

Las bases estaban, pues, claras desde el comienzo; pero lo cierto fue que, también desde el principio, vio muy difícil su éxito y, de hecho, no tuvo entonces intención de ser él quien formase el partido, sino de acercarse en Hendaya o Fuenterrabía para aplaudir allí su triunfo, si llegaba ¹⁶⁸.

El 18 de octubre, sin embargo, *El Liberal* publicó unas declaraciones suyas —«Lo que piensa Joaquín Costa»—, que, previa mutilación de la censura, provocaron un eco intenso en la opinión del país. De inmediato, Mataix, uno de los más fieles colaboradores de Polavieja (que debió aproximarse a éste de filas canalejistas), le escribió, y Augusto Suárez de Figueroa, director de *Heraldo de Madrid*, que aún seguía entonces los pasos del militar, comentó favorablemente los propósitos de Costa. Este le respondió agraciéndole «su cariñoso llamamiento» sin comprometerse, no obstante, a nada. «Se necesita toda la afición que V. me tiene ... para cifrar esperanzas en espíritus muertos, sin fe, sin entendimiento, aunque alguna vez les haya asistido la voluntad» ^{168 b}.

Parecía insistir, por tanto, en su actitud de inhibición ante la situación española (manifestada ya en 1897) cuando, en el crucial mes de noviembre de 1898, una reunión extraordinaria, suscitada por el propio Costa y cele-

brada en Barbastro, de la Cámara agrícola del Alto Aragón, emitió una consulta, fechada el día 13 y redactada por él mismo, que fue dirigida a las demás cámaras agrícolas, a las de comercio, a las ligas de productores, gremios, sindicatos, círculos de labradores y a todos los industriales y comerciantes del país. En ella, decía considerar preciso «que con toda urgencia salgamos de este estado de pasividad, indiferenciado y amorfo, que nos organicemos en partido *nacional*, en partido *regenerador*, con sus periódicos, sus comités, y sus asambleas, con un programa desarrollado y gacetable, a fin de reclamar su inmediata realización de los gobiernos que se formen de los demás partidos, mientras conserven fuerza para constituirlos y los constituyan, a pesar nuestro, y caso de que se nieguen o que lo demoren, reclamar el Poder en la misma forma que ellos y con igual derecho cuando menos».

En la última parte del largo escrito, quedaba plasmado el programa sugerido para realizar la «política reductora o simplificadora», «sumarísima», «modesta, callada, de recogimiento», «reparadora, y por tanto para la blusa y el calzón corto principalmente»¹⁶⁹, que la situación exigía. Política, por tanto, realista, en la que aparecían bastantes puntos de contacto con el manifiesto de Polavieja: la moralización administrativa, la enseñanza práctica, la reducción en los gastos y el servicio militar obligatorio, además de la coincidencia completa en el aire general de ambos documentos.

Unos días después, el 20 de noviembre, se constituyó en Zaragoza otra asamblea, la de las cámaras de comercio, presidida también por un aragonés, el industrial Basilio Paraíso. Unos noventa representantes de toda la península, reunidos allí hasta el 26, acordaron unas conclusiones programáticas que, en sustancia, abundaban en el programa de Costa y en el de general cristiano. Como éste, hablaban de la necesidad de un régimen verdaderamente representativo, de extender el sistema electoral a la representación por clases, de la descentralización administrativa, la efectividad de la enseñanza, el servicio militar obligatorio, la reorganización del ejército y la marina, la reducción de gastos y la independencia entre la justicia y la administración. El 30, una comisión de la asamblea entregó un mensaje a María Cristina con las peticiones acordadas¹⁷⁰. Y, al parecer, la semejanza entre los propósitos de aquella reunión y el contenido del manifiesto de Polavieja no tardó en traducirse en actitud de colaboración. Algunos polaviejistas catalanes (no todos, ni desde luego los catalanistas) expresaron claramente su simpatía por aquella reunión (Andrés Sard entre ellos)¹⁷¹ en la que destacó Alberto Rusñol¹⁷², y más tarde, explícitamente se afirmó que los reunidos en Zaragoza y Polavieja habían puesto de acuerdo sus programas¹⁷³.

Con este nuevo y relativo apoyo, sumado el catalanismo colaboracionista y atenta la Unión Conservadora, además de la benevolencia integrista, la concentración en torno al general comenzaba a ser un hecho. Pero un hecho que, a pesar de tantas gestiones, no tenía de momento cohesión suficiente para ser considerado partido de gobierno, ni tampoco daba esperanzas de que llegara a serlo alguna vez. Todos los apoyos eran condicionales; la fuerza estrictamente polaviejista era minoritaria, aún más dis-

minuida por las vacilaciones de Canalejas, y el entendimiento con los conservadores tampoco estaba conseguido.

A primeros también de noviembre de 1898, el cardenal Cascajares hizo unas declaraciones a *La Crónica Mercantil* de Valladolid en las que, si volvió a quedar patente su desacuerdo con Silvela, no manifestó tampoco entusiasmo por Polavieja. El primero, comentó, «que es el jefe de gobierno más próximo y probable, será seguramente también un fracasado, como todos los hombres públicos que tienen contraídos compromisos de sistema o de partido». Porque, «para regenerar la patria y para librarla de los tres grandes vicios que minan la existencia de la política actual, la inmoralidad, el expedienteo y el caciquismo, se necesitan hombres nuevos, hombres de acrisolada honradez y de enérgico carácter, hombres injertos en Francisco de Asís y Bismarck»¹⁷⁴.

Firme, por tanto, en sus ideas iniciales, escribió a Palacio el 22 en términos parecidos a estos que publicó la prensa, y, tres días después, el 25 de noviembre, don Alfonso de Aguilar le respondió largamente «por encargo de S. M. la Reina»¹⁷⁵:

«Muchas son las verdades —le decía— contenidas en su carta y tales como V[uestra] E[minenci]a ve y aprecia las cosas, las ve y las aprecia S. M. acaso con algo menos de pesimismo. Que es menester a todo trance seguir un nuevo camino y emprender grandes reformas es indudable y ese es el propósito de la Señora. Pero es también menester no precipitarse y proceder con mucha cautela.

La moralidad, la descentralización, la desaparición del caciquismo, son principios con los cuales no puede menos de estar conforme, porque claramente se ve que eso es lo que el país necesita, y esas serán las bases de las reformas, pero V. E.¹ sabe muy bien cuáles son las dificultades con que se tropieza para implantarlas desde luego.

Habla V. E. de nuevo partido, de gente nueva, poniendo de lado a Sagasta y a Silvela, como fracasado el uno e imposibilitado el otro por sus muchos y antiguos compromisos. Esta es una verdad innegable, pero ¿dónde está ese nuevo partido, esa gente nueva? Que den a conocer su existencia, que hagan ver su fuerza y yo no dudo que una vez conocidos, si lo merecen, serán elementos con los que se ha de contar. Que es necesario un Bismarck, es indudable, pero los Bismarcks no se fabrican y si no surge de las circunstancias no se puede improvisar. V. E.^a conoce el programa y los buenos propósitos que animan al general Polavieja, programa simpático a la mayoría del país, pero ¿ha podido formar con él un partido de gobierno? ¿Llegará a vencer las dificultades con que tropieza? La idea de creer que con sólo tener la *Gaceta* se puede gobernar es peregrina, pues ¿y el Parlamento, no hay que contar con él?

Del Congreso de Zaragoza dudo que salga nada provechoso por el camino que ha emprendido. No se si será un mal o un bien. Si sus aspiraciones son iguales a las de los catalanes, las considero muy peligrosas, porque si la descentralización a que aspiran es igual a la que pretende Cataluña y si a esta van unidas reformas análogas a las que figuran en la exposición presentada por los catalanes es sencillamente no ya el regiona-

lismo, sino el federalismo dentro de la Monarquía, cosa, cuya gravedad no puede escapar a la perspicacia de V. E.^a.

En resumen, Señor Cardenal, tiene V. E.^a mucha razón al presentarme alarmado a la Señora. A Ella no se le oculta lo difícil de la situación por que atraviesa, pero ¿dónde está ese hombre, ese carácter tan necesario en estos momentos? Si V. E.^a conoce a ese hombre propóngaselo a la Reina en seguridad de que si Ella, con su criterio recto y claro, lo encuentra en condiciones y con valor bastante para implantar reformas tan difíciles no le escatimará su apoyo»¹⁷⁶.

Monseñor Cascajares, parece que no lo tenía. Alejandro Silvela, aupado por Polavieja hasta un prestigio notable, si él había fracasado, no cabía, pues, sino desechar la idea de gobernar por sí solo y hacer, con lo que tenía, lo poco que buenamente pudiera llevar a cabo. La hora del partido había transcurrido; se aproximaba, por tanto, el momento de conformarse con las coaliciones.

6. La coalición de Silvela y Polavieja

A primeros de diciembre de 1898, lo cierto era que tantas fuerzas regeneradoras como acababan de manifestarse en España permanecían disgregadas, según *El Siglo Futuro*, porque junto a las ideas sanas y comunes a todos subsistían otras inaceptables para algunos¹⁷⁷. Los rumores políticos insistían en que el acercamiento de Polavieja a Nocedal inquietaba ahora a los conservadores, que «saben que mientras con él no se arregle no serán poder»¹⁷⁸.

Las gestiones estaban, sin embargo, en un punto tal de estancamiento que la ultimación de las negociaciones de paz con los Estados Unidos, tras la guerra de Cuba, decidió a Silvela a manifestar rotundamente su deseo de formar Gobierno, aunque pudiera molestar con ello a quienes preferían aguardar el éxito de su acuerdo con el general cristiano, incluida tal vez la reina.

El 16 de septiembre, el jefe de la Unión Conservadora había declarado ya en *El Liberal* que Sagasta debía de abandonar el poder en cuanto la paz fuera firmada¹⁷⁹. Ahora, el 2 de diciembre, unas nuevas declaraciones en el diario republicano vinieron a recordar que había llegado el momento de cumplir aquellas exigencias, «so pena de quedar corroborado que un *poder personal* está por encima de la Constitución y tiene que sufrir el país como una afrenta». Caído Sagasta, añadía, no quedaba «otro término de solución que el llamamiento al poder del partido conservador tal y como hoy está constituido, sin aguardar a que se le sumen y se identifiquen nuevas agrupaciones, por respetables y dignas que sean. No se puede esperar a que los ensayos y las intenciones de jefaturas y partidos con política o sin ella, cuajen, porque entonces el poder moderador tenderá a que estar constantemente suspendido en su función, hasta tanto acabara de promulgarse todos los programas de los varios miles de españoles que se creen en estado de darlos a luz ... por otra parte sabe todo el mundo que el partido conservador, como respondiendo a necesidades públicas

fuertemente sentidas, no ha de excluir al que por sus condiciones afirma los prestigios de su fuerza social y política» ¹⁸⁰.

La última invitación no bastaba a dejar bien a Polavieja, ni auguraba un acuerdo amistoso, si es que el entendimiento llegaba a ser un hecho. «Es posible —explicó *El Correo*, de filiación fusionista— que el artículo refleje la irritación causada por ciertas combinaciones de que se viene hablando» ¹⁸¹. Y el propio Martínez Campos, contrapeso siempre importante en la política moderada, comentó desfavorablemente «las inoportunas arrogancias del Sr. Silvela», cuando lo necesario era «una concentración de los elementos conservadores todavía dispersos». Una vez logrado este propósito —dijo, como si en ello estribara el obstáculo mayor—, «llegará la ocasión de decir quién ha de engreirse con la jefatura» ¹⁸².

Polavieja negó de nuevo el acercamiento desde *El Liberal*: «No tengo ni puedo tener nada en común —subrayó— con los demás partidos políticos, y pierden lastimosamente su tiempo los que imaginan que plegando mi bandera voy a someterme a fusiones imposibles. Se pueden fundir personas, lo que no se pueden fundir son los programas, sobre todo cuando encierran soluciones radicalmente distintas. Con deliberado propósito me aparté en mi manifiesto de todo partido político, de toda organización vigente, para que ahora incurra en los errores que condeno.» «Este es el sentimiento de la nación, y en Cataluña, en Aragón, en Navarra, en cuantas partes existe un núcleo de opinión que a mi bandera se acoge, proclaman como condición de su adhesión fervorosa a las nuevas ideas que no tienen, que no quieren tener nada de común con los partidos políticos de nuestros desastres causantes.»

«Con el país conspiro y para su salvación, no con partido alguno» ¹⁸³.

Evidentemente, si, en efecto, el militar actuaba conforme a este criterio, la espera resultaba inútil, y nada más sensato que la petición del poder expresada por Silvela y repetido a mediados de diciembre ¹⁸⁴.

Por aquellas mismas fechas, sin embargo, comenzó a gestionarse con fuerza definitiva la unión de los conservadores y Polavieja, expresamente reclamada por *El Imparcial* ¹⁸⁵. La coalición fue conseguida, según parece, gracias a la actividad del general Martínez Campos ¹⁸⁶, si bien el peso de las negociaciones lo habían compartido Gasset ¹⁸⁷ y Eduardo Dato. Posteriormente, Dato las había abandonado; porque, según se dijo, estaba llamado a ocupar una cartera en el futuro Gobierno y no parecía delicado que fuese él quien mediara en el acercamiento. Las reanudó Villalonga, diputado por Figueras, hasta el momento mismo en que los dos prohombres hubieron de entenderse personalmente ¹⁸⁸, aunque también se habló más tarde de «un distinguido escritor navarro» ¹⁸⁹ que intervino en el acuerdo, y se aseguró «que el principal intermediario entre el general Polavieja y el señor Silvela, ha sido el cardenal Cascajares» ¹⁹⁰. «Aquellos genios protectores que buscaron al general Polavieja en su retiro para deslumbrarle con el papel regenerador con que le brindaban —diría después Romero Robledo—, genios que indudablemente tendieron sus alas para amparar también al señor Silvela ..., consiguieron la unión deseada» ¹⁹¹.

Se habló igualmente —y esto importa mucho— de que la concordia venía impuesta desde Palacio en previsión de la temida muerte de Sagasta,

cuya salud suscitaba temores desde los primeros meses del 98 y se había agravado ahora, a finales de diciembre ¹⁹², como si la inesperada desaparición de Cánovas en 1897, experiencia dolorosa cercana aún, lo hubiera aconsejado. Era desde luego posible que la lealtad de Polavieja a la reina le indujera a renunciar a su autonomía para evitar a aquella el problema que planteaba la urgencia de Silvela ¹⁹³.

Por lo que fuere, era lo cierto que, muy poco después de aquellas manifestaciones tajantes del ex gobernador de Filipinas, el 5 de enero de 1899, se dio por consumada la alianza en una conferencia celebrada en esa fecha entre el general cristiano y el jefe conservador, en casa del primero ¹⁹⁴. Finalmente, conforme había sido anunciado, en la toma de posesión de la nueva junta directiva del Círculo Conservador madrileño, el 7, Francisco Silvela, elegido presidente, declaró y justificó su acuerdo con Polavieja en que «la crisis profunda por que el país atraviesa ... no es una crisis política, sino de régimen, y de ese modo serían inmensos los peligros que todo correría si a las debilidades presentes no opusiéramos una inmensa concentración de fuerzas conservadoras y de fuerzas sociales ajenas a todo prejuicio político». «Y de ahí que, cuando se ha levantado en España un movimiento iniciado en la desconfianza de los hombres y de los partidos políticos, que ha removido indudablemente masas neutras de opinión, valiosos sentimientos de las provincias, importantes vitalidades de las regiones, de clases mercantiles, de clases agrícolas, de hombres de buena fe que acuden al grito del dolor, en todas partes escuchado, de la patria, haya entendido y entienda que era mi deber hacer, y haya hecho y haga, cuanto de mí dependa para enlazarme con esos elementos, ... porque los que llevan ... el pensamiento de organizar el sufragio, dando participación en los Ayuntamientos, en las Diputaciones y en las Corporaciones de todo género a los gremios y representaciones sociales; los que aspiran a la modificación del Jurado, evitando los abusos que escandalizan la conciencia pública; los que proclaman las enseñanzas religiosas y sociales que salen de los altos labios del Vaticano para iluminar la ciencia y tranquilizar los espíritus; los que esto hacen son conservadores, quieran o no llamárselo» ¹⁹⁵.

El 9 de enero, Polavieja escribió a sus correligionarios de Murcia para consignar públicamente las ideas aceptadas por Silvela ¹⁹⁶. Después de algunas nuevas entrevistas entre ambos personajes, el día 13, el general se dirigió por carta a aquel para recordarle las bases de su programa, que el jefe conservador había aceptado ya: «impuesto sobre la renta, descentralización administrativa, importancia de la vida regional, muerte del caciquismo, reorganización de las enseñanzas técnicas e industriales por regiones capaces, reorganización del ejército y de la marina, respeto al Concordato y al Vaticano, reforma de las leyes Municipal y Provincial, cambiando por completo el modo de ser de Ayuntamientos y Diputaciones, eligiendo los individuos por contribuyentes, capacidades y pueblos, conciertos económicos, etc., etc.»

Habiendo sido aceptado este programa, añadía el general, «no podía negarme a prestar mi concurso a esa obra, ni el de mis amigos.

Pero bien entendido, *que no formamos en las filas del partido conservador, ni hemos de sujetarnos a su organización, sino que, por el contrario, aun dentro de esa armonía, hemos de seguir organizando nuestras fuerzas con independencia*»¹⁹⁷.

Silvela respondió al militar el 15, señalando la coincidencia en lo esencial de sus programas. El 16, en fin, el general volvió a escribirle aceptando formalmente la colaboración y su jefatura gubernamental¹⁹⁸.

➤ Pero, en los días inmediatos al discurso de Silvela, la prensa habló ya de varias contrariedades que ponían en peligro el acuerdo¹⁹⁹. Enseguida de ser publicadas las cartas de 13 y 15 de enero de 1899 entre ambas fue denunciada la escisión aparecida en el año del integrismo, en pro y en contra de colaborar con la nueva alianza²⁰⁰. El sector disidente, dispuesto a la colaboración, se agrupó en torno a un nuevo periódico, *La Información*, genuinamente polaviejista, publicado en Madrid desde el mismo mes de enero por redactores separados para ello de *El Siglo Futuro*²⁰¹. En realidad, el grupo escindido no se diferenció del ortodoxo sino en su postura de acción. Si el integrismo continuó su actitud insultante hacia los católicos liberales y, por tanto, hacia la Unión Conservadora, *La Información* comenzó muy pronto una labor que fue considerada inquisitorial contra Silvela²⁰².

Por las mismas fechas, los catalanistas manifestaron también paralelas vacilaciones. «*Admetem —escribió La Veu de Montserrat el 7 de enero— la possibilitat de que, rendintse a l'empenta de grans influències en vigílies de buscar al cap y a la fi una solució o altra, la que aparega més viable, al actual problema polítich, en Polavieja haja acceptat aqueixa unió ab un home que, vulgas no vulgas, representa encara la política vella, causa de tants desastres, y es ademés una personalitat desacreditada. Admetem aquesta possibilitat ... perquel país no ha sabut respondre a una crida de cumplerta descentralizació*». Por eso, si llegaba a formar Gobierno la nueva coalición, «*haurem de considerar aquesta nova situació política con un compàs d'espera*»²⁰³: que era tanto como relegar a un segundo plano la colaboración ofrecida al general por los nacionalistas.

Lo propio vino a suceder con los burgueses catalanes. También a principios de enero del 99, la prensa afirmó que el acuerdo entre Polavieja y el jefe moderado había sido realizado sobre «bases convenidas y fijadas con toda solemnidad»²⁰⁴, una parte de las cuales, que consignaba la dirección de la política administrativa a seguir —en sustancia, la ofrecida por el militar a Doménec Montaner el 30 de septiembre de 1898—, fue publicada por el *Diario de Barcelona*. Pero, interrogado Silvela sobre ello por *La Reforma* de Madrid, afirmó que se trataba sólo de un simple trabajo periodístico, sin más trascendencia, y Fernández Villaverde manifestó que, en cualquier caso, la diputación única para regiones como Cataluña, que allí se pedía, no era cosa fácil de conseguir, porque se opondrían las propias provincias²⁰⁵.

Ante tal actitud, el 13 de enero de 1899, el *Diario del Comercio* de la ciudad condal insistió en la existencia del documento; pero advirtió además que, si Francisco Silvela llegaba a eludir el cumplimiento de aquellas bases, el general se vería precisado a romper la alianza: para evitar el con-

tacto «de los políticos que quieren deshonorar los programas antes de implantarlos» ²⁰⁶.

«Era evident —explicó *La Veu de Montserrat* al día siguiente, con pesimismo realista— que [las promesas descentralizadoras] *havian molt alarmat a la majoria dels conservadors militants que, naturalment, no tractaràn de servir-se d'aqueixa aproximació dels elements neutres den Polavieja més que com escambell per escalar el poder*» ²⁰⁷.

Para justificar la evolución conservadora, se aseguró más tarde que las bases en cuestión contenían ideas acordadas entre los catalanes y el militar, que, sin embargo, no habían sido aceptadas por Silvela ²⁰⁸. Pero los motivos de fondo parecían más claros. Según recordaría *La Veu de Catalunya*, don Raimundo Fernández Villaverde, presunto ministro de Hacienda del futuro Gabinete, era enemigo reconocido de las reivindicaciones autonomistas ²⁰⁹, y no parecía sensato esperar nada de él. Silvela estaba «*atent per sobre de tot al interés dels seus clients, parlant per ells, pensant ab ells, y reforint a n'ells tots los seus propòsits y paraulas*», entre los cuales, según Prat de la Riba, pocos podían ser tan temibles para la burguesía catalana como los de Villaverde, «*mestre consumat en l'art de donar elasticidad al impuesto*» ²¹⁰.

¿Por qué, a pesar de todo, mantuvo Polavieja su acercamiento a los conservadores, que rechazaban sus compromisos programáticos? Acaso pesaron aquí los deseos de la reina. Pero, de esta manera, la coalición recién formada aparecía ya falta de cohesión antes de haber alcanzado el poder, cuando la oposición liberal aguzaba además sus armas para la lucha, que, en su caso, era cuestión de subsistencia.

NOTAS

¹ Apud Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910

² Vid. la primera página de la hoja de servicios de Polavieja fotocopiada en José Andrés Gallego: *Regeneracionismo y política confesional en España, 1889-1899*, «Archivo Hispalense», núm. 166 (1971), 80-81.

³ Cfr. Anselmo Villar y Amigo: *Homenaje póstumo dedicado al glorioso soldado español Marqués de Polavieja*, Madrid, Establecimiento tipográfico de Ernesto Catalá, 1914, pág. 36, 79, 84, 181 s. (BNM).

⁴ Cit. José Francos Rodríguez: *La vida de Canalejas*, Madrid, Tip. de la «Rev. de Arch., Bib. y Museos», 1918, pág. 178.

⁵ *El Siglo Futuro*, 22-X-1896.

⁶ Vid. José Andrés Gallego: *El separatismo filipino y la opinión española*, «Hispania», XXXI (1971), 77-102, donde no se atienden, sin embargo, los aspectos económicos que debió haber en la cuestión (vid. Pedro S. de Achútegui y Miguel A. Bernad: *Religious revolution in the Philippines. The Life and Church of Gregorio Aglipay. 1860-1960*. Volume One. *From Aglipay's Birth to His Death: 1860-1940*, Manila, Ateneo, 1960, 578 pp.) y se sobrevalora quizá —habría que comprobarlo mejor— el papel de la masonería, aunque su actividad allí fue innegable.

⁷ Parece que, al tiempo en que Cascajares sugería a la reina el nombramiento de Polavieja para la gobernación militar de Filipinas, los hermanos Pidal, amigos de Nozaleda, presionaban para que el general Blanco fuera rele-

vado de aquel puesto (cfr. Francisco Pi y Margall y Francisco Py y Arsuaga: *Historia de España en el siglo XIX*, Madrid, Miguel Seguí, Editor, 1902, t. VII, 225 s.). El 30 de septiembre, un grupo de españoles residentes en el archipiélago enviaban a *El Imparcial* un telegrama advirtiéndolo: «Si gobierno no adopta medidas enérgicas destituyendo Blanco telégrafo, encargando mando un general de los que aquí hay, sea cualquiera su jerarquía militar, situación insostenible. — Más de 25.000 rebeldes con armas. Provincia Cavite entera sublevada. — Provincia Batangas crece insurrección. Españoles huyen refugiándose en Manila. Rogamos *Imparcial* eleve Reina protesta patriótica respetuosa, advertencia precursora que dirigimos.» El 31, Nozaleda y los provinciales de las órdenes de las islas dirigieron otro telegrama a los dominicos de Madrid, divulgado por la prensa: «Situación agrávase. Rebelión extiéndose. Apatía Blanco, inexplicable. — Para conjurar peligro es necesario muy apremiante nombramiento jefe. Opinión acorde» (apud Pi y Margall: *op. cit.*, VII, 246). El 4-X-1896, los procuradores de aquellos institutos elevaban esta exposición a la regente: «A S. M. la Reina. = Señora, cumple a los Procuradores de las Ordenes religiosas de Filipinas que suscriben, en días de tanta desgracia para la Patria, como especialmente luctuosos para Filipinas, cumple Señora a los mismos en momentos tan críticos, acudir al Trono y depositar a los pies de V. M., a la par que los sentimientos de su más acrisolada e incondicional adhesión, los de la más acendrada e intensa gratitud, por la parte tan especial que V. M. toma en el dolor que embarga por modo acerbo a las Corporaciones religiosas filipinas, como lo demuestra con toda evidencia el telegrama de sentido pésame dirigido por V. M. al Excmo. Señor Arzobispo de Manila y las honras fúnebres mandadas celebrar a iniciativa de V. M. por el eterno descanso de los que han sucumbido. = El acendrado patriotismo de las Ordenes religiosas filipinas y su cordial amor al Trono, jamás puestos en duda, no permitirán en cuanto esté de su parte, aun a través de las más duras pruebas y cruentos sacrificios, no permitirán, Señora, repiten, que la hermosa y sin igual perla filipina se desprenda, ni por un momento siquiera, de la corona que ciñe las sienes de V. M. en el período de minoridad de su augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII (q. D. g.). = Al recurrir hoy, los Procuradores que suscriben, a depositar sus respuestas a los reales pies de V. M., lo hacen movidos del ineludible deber que le impone la voz de sus Prelados, si siempre para ellos digna de obediencia, por modo especial en los actuales momentos, en que enemigos ingratos contra la Religión que les sacó de la barbarie, contra la Patria que les emancipó de sus feroces reyezuelos e ilustró y amparó con sus leyes paternales y contra sus Reyes llenos siempre hacia ellos de benevolencia y amor, han levantado rebeldes la bandera de exterminio de ideales tan venerados. = Gravísimos son Señora, sin duda alguna, los telegramas publicados hasta ahora, pero el que tenemos el honor de presentar a V. M., y que no ha visto aún la luz pública, es de una gravedad y trascendencia incontrovertibles. Dice el telegrama: «Madrid — Dominicos — Continúa situación grave. General Blanco no inspira confianza. Archipiélago y militares piden política represión que él rechaza. Se impone relevo General Blanco. Manifieste Reina, Presidente Consejo de Ministros, de parte Arzobispo, Provinciales Ordenes religiosas. (Singular 21 de septiembre por la mañana).» = De la letra de ese despacho y aún más el espíritu del mismo parece inferirse clara y lógicamente, que en la fecha indicada continuaba la gravedad de la situación, que la masa de la población fiel al Archipiélago y por modo concreto el elemento militar pedía medidas más enérgicas que las hasta entonces empleadas, haciéndose en este concepto de una necesidad para la seguridad de todos y pronta salvación de las Islas el nombramiento de otro caudillo que con más suerte que el actual concluya rápidamente, por medio de una política más enérgica, tan nefasta insurrección, olvidando el sosiego a los pueblos fieles horripilados con tan sangrientas hecatombes. = Conseguida la tranquilidad y paz apetecidas y normalizada tan congozosa situación, no dudan las Corporaciones regulares de Filipinas y sus representantes acreditados cerca del Gobierno de S. M. que éste, al meditar sobre las causas generadoras de tan tremendos y sangrientos desastres, no sólo hará un prolongado paréntesis en el camino de nuevas reformas, sino que meditará

hondamente, en bien de la Religión, de la Patria y del Trono, los nuevos derroteros que aparten de Filipinas las leyes y reformas dadas en estos últimos tiempos, unas verdadero germen de tamaños desastres, y otras elemento o medio ambiente el más adecuado y que más ha favorecido la incubación de las ideas masónico-separatistas, que en tan corto espacio de tiempo han operado tan radical y perturbador transformismo, llevando la desolación a aquellas pacíficas comarcas, el luto a tantas familias, y más que el desdoro, el odio a lo que más ama España, que es su Religión y el Trono de sus Reyes, que en mejores tiempos la hicieron dueña de dilatadas regiones de ambos hemisferios. = Tal es Señora el encarecido ruego que por el triunfo de los venerados ideales mencionados, los Procuradores que suscriben, llenos de gratitud y confianza elevada a V. M., a quien el Señor colme de bendiciones, y cuya importantísima vida: así como la de toda la real familia, Dios guarde muchos años. = Madrid, 4 de Octubre de 1896. = Señora = A L. R. P. de V. M. = Fr. Matías Gómez = Procurador de Dominicos. = Fr. Cecilio García = Proc[urado]r de Franciscanos = Fr. Eduardo Navarro = Proc[urado]r de Agustinos. = Fr. Juan C. Gómez = Proc[urado]r de Recoletos» (APR/SpM, c.^a 6, núm. 40, «Filipinas. Ordenes Religiosas»).

⁸ Melchor Fernández Almagro afirma incluso que fueron los hermanos Fidal los que influyeron en el nombramiento de Polavieja como respuesta a las protestas de su amigo Nozaleda (*Historia política de la España contemporánea*. 2. 1885-1897, Madrid, Alianza Editorial, 1968, pág. 349). Pero, en la primera quincena de septiembre de 1896, cuando comenzó a hablarse de la sustitución de Blanco, los posibles sustitutos de quienes se hablaba eran Borrero, Prim de Rivera, Serriñá y Moltó. Parece que Cánovas presentó dos candidatos, que fueron rechazados por la reina con disgusto del jefe del Gobierno, para elegir a Polavieja (cfr. Fernando Soldevilla: *El año político 1896*, Madrid, Imp. de Enrique Fernández de Rojas, 1897, pág. 371 s. y 415) (BDN).

⁹ «Han decidido los frailes la destitución de Blanco —escribía Pi y Margall en noviembre del 96— y la han obtenido, porque son hace tiempo los arbitros de la suerte de nuestros gobernadores en Filipinas ... Han logrado ahora el nombramiento de Polavieja. Según va instruido, ya veremos cómo Polavieja pone aquellas islas. Ha admitido por de pronto ir aparentemente de segundo cabo, y realmente de gobernador supremo. = Bien se conoce que estamos en plena reacción religiosa. Predominan ya sus caracteres esenciales: la crueldad, la hipocresía» (apud Pi y Margall...: *op. cit.*, VII, 340).

¹⁰ Vid. conde de Romanones: *Doña María Cristina de Habsburgo Lorena* en «Obras completas», Madrid, Plus-Ultra, s.d., pág. 548. Polavieja tomó posesión de la capitania general de Filipinas el 13 de diciembre de 1896; el 14 hizo pasar por las armas a los primeros separatistas, el 16 a otros 6 y el 18 a veintinueve (aunque la fuente de estos datos es Pi y Margall...: *op. cit.*, VII, 252 ss.).

¹¹ Según Villar y Amigo: *op. cit.*, 143. Nos comunica don Camilo Polavieja nieto del gobernador de Filipinas, que éste temía que la ejecución de Rizal equivaliera a crear un mártir nacional. Que así se lo manifestó al Gobierno Cánovas. Pero éste ratificó la sentencia del tribunal. Por otra parte, me permito copiar este párrafo de una carta privada de la Rvda. madre Elisa García de Polavieja, sobrina del general, dirigida a mi esposa: «mi padre, bastante mayor que él, cuando salió de la academia fue a Filipinas como ayudante suyo ... le oí contar el empeño que había tenido en que no muriese Rizal. El quer estuviere preso en España». Según queda dicho, la documentación relacionada con este asunto fue donada por el Estado español al filipino, según nos informa el doctor Gil Munilla. En el Archivo de Indias quedan sólo sus papeles sobre Cuba y, en el del Ejército, tan sólo algunos recuerdos personales.

¹² Cfr. Aurelio Martín Alonso: *Diez y seis años de Regencia (María Cristina de Habsburgo-Lorena) (1885-1902)*, Barcelona, Casa Editorial Vda. de Lu Tasso, 1914, pág. 293.

¹³ *Notas de una vida*, en «Obras completas», II, 101.

¹⁴ Vid. Nocedal: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 10 y 12-IV-1902; Vázquez de Mella: *ibidem*, 21-XII-1910. En el mismo sentido, *El Siglo Futuro*, 22-VII-1902, que recoge la afirmación de *La Epoca*, ya citada.

¹⁵ *El Movimiento Católico*, 5-XII-1896. En el mismo sentido, 3, 9 y 30-XII-1896.

¹⁶ *Ibidem*, 22-I-1897.

¹⁷ *Ibidem*, 26-II-1897.

¹⁸ *Ibidem*, 8-III-1897.

¹⁹ Apud Fernando Soldevilla: *El año político 1897*, Gerona, Tipografía del Hospicio Provincial, 1898, pág. 17 (BDN).

²⁰ Contra lo que se suele decir: que la sugerencia hecha por Silvela a Pidal en 1893 de formar un partido al margen de Cánovas, que podría llamarse Unión Conservadora, y la creación de un grupo con este nombre, en efecto, en enero del 98, demuestran la firmeza y continuidad del pensamiento del primer político (vid. nota 26 del capítulo II).

²¹ Sobre las entrevistas de enero de 1897, cfr. diario de Cascajares, apud Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910.

²² *Mis recuerdos (1810-1910)*, Madrid C.I.A.P., 1930, pág. 202. Según nos comunica el actual marqués de Lema, todo el archivo de aquel —colaborador de Pidal y Mon— y la continuación de los recuerdos citados quedaron destruidos durante la guerra de 1936-39.

²³ «Excelentísimo señor Marqués de Polavieja. = Muy querido general y amigo: He tenido el gusto de conocer y ofrecer mis respetos a la Marquesa y a su hermana. Muy amables han estado las dos conmigo. = Paso a paso he seguido y sigo a usted, mi general; días de angustia y zozobra pasé a su llegada a Manila; he gozado después lo indecible al ver cómo Nuestro Señor protege a usted. Sepa ... [aquí, lo transcrito arriba] ... general de Filipinas = Adiós; escriba alguna vez, y reciba un cariñoso abrazo y la bendición de su amigo y capellán que besa su mano, El Cardenal Cascajares» (apud Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910). Por las últimas líneas transcritas arriba, esta carta debió ser escrita después de las entrevistas de Cascajares y la reina del 4 y 10 de enero de 1897 (cfr. diario, *ibidem*). A la primera de ambas ha de aludir esta otra carta: «Avila, 2 enero 1897. = Sr. D. Alfonso de Aguilar. = Mi querido amigo: Me vine aquí a pasar unos días con el Obispo, y aquí me encuentra su carta con un día de retraso por haber ido a Valladolid. = Diga V. a la Señora cuán grande y profundo es mi agradecimiento por su cariñosa felicitación de año nuevo, y dígame también, que mañana domingo a las 5 y 45 de la tarde llegaré a esa con el favor de Dios, en el tren mixto, por si de algo puedo servirla en las actuales circunstancias. = Sírvase V., amigo mío, esperarme en los Paúles, para darme las órdenes de S. M. Ya sabe la Señora que soy completamente suyo. = Hasta mañana, pues. Siempre de V. afectísimo amigo y Cap[ellán] n. q. b. s. m. = † El Cardenal Cascajares.» De la nueva oportunidad que el arzobispo veía en estos momentos da idea este tercer escrito: «Valladolid, 8 diciembre 1896. = Sr. D. Alfonso de Aguilar. = Reservado. = Mi querido amigo: La madeja se va enredando mucho. El despacho de Cánovas no sé a dónde va a llevarnos. Considero la situación muy grave. Vea V. a la Señora y dígame que si me considera que puedo serle de alguna utilidad en la presente ocasión, que se digne indicárselo a V. y enseguida me vendrá ahí. Es tarde y espera el Correo. = De V. afectísimo amigo y Cap[ellán] n. q. b. s. m. = El Cardenal Cascajares» (APR/SpM, c.ª 6, núm. 10).

²⁴ Vid. real orden de 24-III-1897, admitiendo la dimisión de Polavieja (APG, Sección Ministros de la Corona, leg. 5, núm. 156, expediente de Camilo García de Polavieja). Desde el punto de vista de este estudio, es desencantadora la pobreza de este archivo —cuya consulta nos ha sido amablemente facilitada por la señora María del Carmen Salas. Sorprende comprobar que no existen siquiera acas de los Consejos de ministros de la época que estudiamos, y sólo libros de recuerdos desde 1902 (vid. APG, A-2, vol. 1), que son aún más sobrios que las notas de prensa remitidas por el Gobierno después de cada reunión. Sí puede ser, en cambio, para investigaciones de temas sociopolíticos.

²⁵ Cfr. Villar y Amigo: *op. cit.*, VII, 641.

²⁶ Cit. Soldevilla: *op. cit.* (1897), 156.

²⁷ Cfr. Pi y Margall...: *op. cit.*, VII, 641. Sobre los preparativos del recimiento, Fernández Almagro: *op. cit.*, 2, 450 s. (que incluye a los seguidores de Romero Robledo entre los que trabajaron en ello, lo que no parece verosímil Soldevilla: *op. cit.* (1897), 154; *La Veu de Montserrat*, 15-V-1897; Enric Jardí *El Doctor Robert i el seu temps*. Barcelona, Ed. Aedos, 1969, pág. 35 (que insiste en la participación de Comillas).

²⁸ Cfr. *op. cit.* (1897), 160 ss., y *El Movimiento Católico*, 12-V-1897 ss.

²⁹ Romanones: *Doña María Cristina...*, 447 s. Vid. Melchor Fernández Almagro: *Cánovas. Su vida y su política*, 2.^a ed., Madrid, Ed. Tebas, 1972, pp. 553-555.

³⁰ *Correspondencia de Emilio Castelar, 1868-1898*. Madrid, Establecimiento tipográfico «Sucesores de Rivadeneyra», 1908, pág. 352 (BDN).

³¹ Vid. *El Correo Español*, 14-II-1897.

³² Vid., por ejemplo, «Fantasía. Al invicto caudillo español D. Camilo Polavieja», de José Malet y Mayosas, fechada en Barcelona en mayo de 1897. «El genio militar de los grandes capitanes creíase extinguido; pero revive hoy exuberante en tus ínclitas proezas. = La sumisión dócil y genuina a los preceptos y doctrina de la Iglesia católica, calificada de humillante servidumbre, es la más noble divisa y la de que más [sic] te enorgullecies...» (apud *Revista Popular*, LII [1897], 291 s.).

³³ Los alumnos del Colegio de Santo Domingo de Orihuela, dirigido por los jesuitas, dedican el domingo 16-V-1897, por ejemplo, una «brillante Coror poética» a Polavieja en la que se declaman poemas con estos títulos: «Primera parte: «El Katipunán» Jura el masonismo en Filipinas guerra a España ... «Ir de esperanza». Elige la Reina al católico y bizarro militar D. Camilo Polavieja para general de Filipinas ... *In hoc signo vinces*. Regala Polavieja una medalla de la Inmaculada a cada uno de sus soldados»... (programa, *ibidem*).

³⁴ Pi y Margal...: *op. cit.*, VII, 635 s.

³⁵ Vid. *Biografía del Ilustrísimo Señor Don Mariano Ciudad Olmos, Obispo titular de Arquelaída*. Valladolid, Imprenta de Juan Rodríguez Hernando, 1901, 15 págs. (BNM). «Sr. D. Alfonso de Aguilar. = Mi querido amigo: Adelantándome a los deseos de S. M. vi ayer al Ministro de Gracia y Justicia; me saludó diciendo: "S. M. me ha hablado con el mayor interés para que se dé a V. u. Obispo Auxiliar." Justamente, Sr. Conde, le repliqué, mi visita tenía ese objeto. = El Conde estuvo amabilísimo; por su parte es cosa corriente. De su casa me fui a la Presidencia, no se nos enfadó D. Antonio [Cánovas] si no se cuenta con él; no estaba y le escribí diciéndole que esperaba no haría oposición en el Consejo, y que como no conozco al de Hacienda le rogaba le hablase él. = Creo, por tanto, que la cosa será hecha en breve plazo; como Cánovas es así y yo no le soy muy simpático, bueno sería que le hiciera la Señora alguna indicación: con sólo que le pregunte si le he escrito creo le bastará. = Tengo ya el collar [de Carlos III]; la primera vez que vea a la Señora me presentará con él; mas esto no se lo diga V. = Adiós; suyo afectuoso amigo q. b. s. m. = El Card[enal] Cascajares.» Escrita esta carta el 11 de febrero de 1897, el 13 de marzo ya estaba resuelto el problema: «Valladolid 5-III-97. = Sr. D. Alfonso de Aguilar. = Mi querido amigo: El Papa ha nombrado ya el Obispo Auxiliar, a Penitenciario a quien yo le propuse. Estoy, pues, de enhorabuena y soy el Príncipe más feliz del Globo. A la Señora lo debo como todo. Sin Ella sería cerca a la izquierda. Estoy contentísimo. Tenga la bondad de entregarle la adjunta carta. = Suyo afectuoso amigo q. b. s. m. = El Card[enal] Cascajares.» Añade hay otra carta sobre ello: «Valladolid, 19 Marzo 97. = Sr. D. Alfonso de Aguilar: He recibido el R. D. de nombramiento de Obispo Auxiliar que por orden de S. M. me envía V. Hágame el favor de dar a la Señora, tanto el nombre del Obispo como en el mío las más rendidas y expresivas gracias, ofreciéndole al mismo tiempo el testimonio de nuestra gratitud y adhesión, V. créame su afectuoso amigo y Cap[ellán] que le bendice y B. S. M. = † El Card[enal] Cascajares» (APR/SpM, c.^a 6, núm. 10).

³⁶ «... de Dios. No es cosa nueva para quien ha leído con atención la historia de la Iglesia, que un Prelado haya intervenido en algo más que en la administración de sacramentos y en el gobierno exclusivo de la Diócesis de su jurisdicción eclesiástica. Hay muchas otras cosas que tienen íntima relación y conexión con los intereses y misión espiritual de la Iglesia» (apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid*, 27-III-1897).

⁷ Carta de la reina al Cardenal Cascajares. = Madr[id] 12 Junio 97. = Muy reverendo S[eñ]or C[ardenal]. = He recibido ayer su carta y tengo mucho gusto en contestarla, asombrándome de lo que en ella me dice. = Ignoro de dónde pueden haber nacido tales rumores que en esta ocasión, menos que en ninguna otra tienen el más ligero asomo de verosimilitud, pues ni siquiera cartas suyas he tenido en esos días. Dada la malicia de las gentes y para evitar cualquiera mala interpretación creo que ha obrado V. con mucha prudencia no viniendo entonces a Madrid aplazando su viaje por unos días, pues cuento tener el gusto de saludarle aquí antes de salir para S[a]n Seb[asti]án. = Al enviarle mis cariñosas felicitaciones por la festividad de mañana [San Antonio] le reitero la estimación que le profeso, quedando de V. muy afecta. = Minutas.» Cascajares, que quizá había tenido alguna ligera dificultad en palacio por su viaje de enero de 1897, contesta: «Sr. D. Alfonso de Aguilar. = Mi distinguido amigo: Hágame V. el favor de hacer presente a S. M. mi profundo agradecimiento por su dignación de felicitarme por mi santo. = *Reservado*. = La Señora aprueba mi prudencia en no haber ido cuando la crisis a esa para evitar habladurías, pero luego dice: "cuento tener el gusto de ver a V. aquí antes de salir para San Sebastián". Esas palabras textuales que pongo entre comillas, me tienen en la mayor perplejidad y no sé qué hacer, temiendo no suceda lo que en Enero. Como V. ha escrito la carta sabrá el pensamiento y el deseo de la Señora; dígamelo francamente: ¿la Señora quiere que vaya? Póngame V. un renglón y saldré en el primer tren; ¿o significan y son aquellas palabras tan sólo un cumplido? [sic]. Saque V. de dudas a su af[ectis]mo amigo. = Q. b. s. m. = † El Card[enal] Cascajares. = Valladolid, 14 de Junio de 1897.» El secretario le respondió «que venga», según consta en una anotación marginal hecha sobre la carta anterior. A ello contesta el cardenal: «Sr. D. Alfonso de Aguilar. = Mi distinguido amigo: Recibida su carta. Pasada mañana, domingo, predico en la Catedral; y por la noche saldré, con el favor de Dios, para Madrid. Hágame, pues, el favor de decir a S. M. que desde el Lunes a primera hora me tiene a su disposición como siempre en los Paúles. = Queda de V. af[ectis]mo amigo y Cap[ellá]n que le bendice y B. S. M. = El Cardenal Cascajares. = Valladolid, 18 Junio 97.» Entre enero y junio el arzobispo había estado aún otra vez en la corte, a finales de abril: «20 Abril 97. = Sr. D. Alfonso de Aguilar. = Mi distinguido amigo: El Sr. Cardenal me encarga decir a V. que el jueves a las 7 de la mañana estará en esa Corte, en su residencia acostumbrada de los Paúles, y que haga V. el favor de decir a la Señora que tiene al Sr. Cardenal, como siempre a su disposición. = Con la mayor atención se repite de V. af[ectis]mo amigo SS y Cap[ellá]n q. b. s. m. = Regino Martínez» (APR/SpM, c.^a, número 10).

³⁸ «Mucho me sorprende la noticia que ustedes me comunican de las afirmaciones que se hacen sobre la supuesta intervención mía en la última crisis, nada menos que aconsejando a S. M. la solución de aquélla, en la forma como la Augusta Señora ha tenido por conveniente resolverla. Si pudiéramos aislar la especie vertida de la gravedad que en sí encierra, tendría yo motivos para ilusionarme con la importancia que, en estos asuntos, se me quiere atribuir, viéndome convertido de la noche a la mañana en un personaje político de ilimitada influencia, capaz de hacer y deshacer Ministerios a medida de mi voluntad; pero como la cuestión es de una índole tan delicada y reviste caracteres de suma gravedad, aquellas aparentes ilusiones se desvanecen para dar entrada en el alma a tristes pensamientos, pues es bien triste el considerar lo cargada que se encuentra la atmósfera política, el calor que van tomando las pasiones y el extremo en que hemos tenido que colocarnos, para echar a volar *cuentos* —que no otro nombre merecen— tan absurdos y tan desatinados como lo son el

decir que el Cardenal de Valladolid ha aconsejado a S. M. en éste o en otro sentido, en sitios donde sólo con el desdén debe recibirse todo lo que y sea serio y formal, máxime cuando las circunstancias difíciles y angustiosas por que está pasando la Patria, exigen que no se escuche lo que no sea la voz de la razón y que se estudien con serenidad de juicio y elevación de miras los medios más a propósito para remediar tantos males. = Mucho agradezco a ustedes, amigos míos, lo que ustedes han hecho en mi favor, desmintiendo rumores tan desprovistos de verosimilitud, y mucho más reconocido quedaré a ustedes, si, como les ruego, hacen constar que el Cardenal de Valladolid tiene por norma de conducta *el no meterse jamás donde no le llaman y no dar consejos cuando ni se le piden ni hay para qué pedirlos*. = Lo que sí tenía por muy cierto y muy seguro el Cardenal de Valladolid era que, para fortuna ... [aquí lo transcrito arriba] ... tiempos. = ¡De qué manera tan lamentable obcecación política! ¿No habíamos convenido todos por el conocimiento que de ellos nos han dado once años de experiencia, que entre las altas dotes de gobierno que adornan a S. M. la Reina Regente descuella la exquisita corrección con que observa los preceptos constitucionales? ¿Qué fundamento hay, pues, para decir ahora que S. M. solicita consejos de los que no son llamados a ilustrarla? = No tiene el menor viso de verdad, es completamente falso, y háganlo ustedes constar así en todas partes, que yo haya aconsejado nada a S. M. = Siempre con el más afectísimo amigo q. b. s. m., El Cardenal Cascajares» (apud Canaleja: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910).

³⁹ Apud Pi y Margall...: *op. cit.*, VII, 640 ss.

⁴⁰ Apud Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910.

⁴¹ Discurso de Silvela, 12-VI-1897, apud Francisco Silvela: *Artículos, Discursos, Conferencias y Cartas*. Madrid, Mateu Artes Gráficas, 1923, t. II, página 234.

⁴² Vid. *El Siglo Futuro*, 8-X-1896.

⁴³ Comentarios a Silvela: *op. cit.*, 297.

⁴⁴ Cfr. *La Veu de Montserrat*, 24-VII-1897.

⁴⁵ *Ibidem*, 7-VIII-1897.

⁴⁶ Cfr. *El Movimiento Católico*, 15-VII-1897.

⁴⁷ Cit., *ibidem*, 16-VII-1897.

⁴⁸ Carta de 12-VIII-1897, apud Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ Cfr. *La Veu de Montserrat*, 14-VIII-1897, que lo notifica.

⁵¹ Apud Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910 donde se lee: «Pidal no se opone (D. Alejandro Pidal no ha intervenido para nada en este asunto), y la gente...» Parece tratarse de una interpolación de Mella.

⁵² Cit. Lema: *op. cit.*, 231.

⁵³ Cit. Soldevilla: *op. cit.* (1897), 293.

⁵⁴ Cfr. *ibidem*, 293 ss.

⁵⁵ Cfr. *El Movimiento Católico*, 30-VIII-1897. Vid. Pi y Margall...: *op. cit.* VII, 821, y Duque de Maura y Melchor Fernández Almagro: *¿Por qué cayó Alfonso XIII? Evolución y disolución de los partidos históricos durante su reinado*, 2.^a ed., Madrid, Ed. Ambos Mundos, 1948, pág. 406 ss.

⁵⁶ «... desacreditado. = Esto es de suma importancia en lo porvenir, pues si el país llegara a perderlas [esperanzas] dentro del actual orden de cosas, es su gran mayoría se echaría en brazos del carlismo. = Pretende lo contrario la fracción que acaudillaba Cánovas, sin comprender, que, muerto éste, ni tiene fuerzas propias ni apoyo en la opinión. He hablado también con otras personas desapasionadas y piensan lo mismo que Silvela. = Según se me ha asegurado Escobar con la Epoca dirige ya sus miradas a Silvela para sumarse con él en cuanto encuentre momento oportuno. El General Martínez Campos se ha unido a Silvela que paso a paso va aumentando sus huestes. = En esa se me ha hablado de que yo fuera Ministro de la Guerra de Sagasta y lo creo muy contrario ... [aquí lo transcrito en el texto] ... a la Patria. = De mi estado general sig

mejorando y del ojo lentamente.—Queda con el más profundo respeto = Señora = A L. R. P. de V. M. = Camilo G. de Polavieja. = Madrid, 20 de Agosto de 1897» (APR/SpM, c.¹ 9, núm. 10, «Crisis. Agosto de 1897»).

⁵⁷ Cfr. Soldevilla: *op. cit.* (1897), 326 ss., y *El Movimiento Católico*, 29-IX-1897.

⁵⁸ Cit. Romanones: *Doña María Cristina...*, 459.

⁵⁹ Romanones: *Sagasta, o el Político*. Madrid, Espasa Calpe, 1930, pag. 189.

⁶⁰ «3 Octubre 97. = Sr. D. Alfonso de Aguilar. = Querido amigo: A pesar de haber puesto a V. un telegrama esta mañana, bien meditado el viaje encuentro que no es oportuno en estos momentos, se prestaría ... [aquí lo transcrito arriba en segundo término] ... quien quiera. Dígalo así a la Señora, que Ella que es tan discreta y procede en todos sus actos con la mayor delicadeza, estoy seguro que aprobará la mía en esta ocasión. Al mismo tiempo dígame V. que la felicitó por su acierto en la solución de la crisis; en ... humilde opinión ha sido acertadísima, de mano maestra. = Unos días se pasan pronto; vivísimos descos tengo de verla, para darla [sic] personalmente las gracias por tantas bondades como me dispensa. = El día pasado fui un tonto; se me pasaron unas ganas de acompañarla hasta Medina... y fui tan bobaina que no me atreví a decírselo. Es que sucede una cosa particular con esta Señora; cuanto más se la trata más se la quiere, esto es natural; pero que inspire más respeto no lo es y a mí me sucede esto: tres o cuatro veces tuve en la punta de la lengua el pedirle permiso para acompañarla y al fin no me atreví. = Adiós: Suvo afectísimo amigo que le bendice y b. s. m. = † A. M. Card[enal] Cascajares.» El telegrama a que alude decía: «Llegaremos mañana tren mixto seis tarde. Regino.» Hay otra carta: «4 Octubre 97. = Sr. D. Alfonso de Aguilar. = Mi querido amigo: En el periódico "El Norte" que se publica en esta Capital, que viene a ser por su gran circulación como "El Imparcial" en Madrid, entre otros telegramas ha publicado hoy el que mando a V. adjunto. Le encuentro de mucha gravedad porque es echar sobre S. M. el relevo de Weyler que es la madre del cordero; y como entiendo que esto puede perjudicar mucho a S. M., me apresuro a enviarle para que Ella, si le parece, mande rectificar enseguida. = Suyo afectísimo amigo. = A[ntonio] M[aría]. Card[enal] Cascajares.» El artículo a que se refiere dice: *Representante probable.—Reparos del general Correa.—Accede al fin.* = Madrid, 3 (11.10 n.) = (11.15 n.). = Esta noche han tenido una extensa conferencia los señores Sagasta y León y Castillo, en la cual parece que se ha decidido que este señor no desempeñe ninguna cartera, como ayer se dijo, sino probablemente se le concederá el cargo de embajador en París. = Posteriormente don Práxedes conferenció con el general Correa con objeto de que aceptara la cartera de Guerra. = El señor Correa manifestó que no la aceptaba con la condición de relevar al general Weyler y a Primo de Rivera, porque pensaba que no eran los momentos presentes los más oportunos para ello. = El señor Sagasta insistió repetidas veces, y por fin dijo el general que antes de comprometerse quería conferenciar con S. M. la Reina. = Don Práxedes le autorizó para ello y a última hora se afirma por personas autorizadas para ello, que el general Correa ha aceptado la cartera de Guerra con la condición de relevar inmediatamente a los capitanes generales de Cuba y Filipinas» (APR/SpM, c.¹ 6, núm. 10). En realidad, la crisis venía resolviéndose conforme a las previsiones de todos. El 15 de agosto de 1897, el republicano Gumersindo de Azcárate había escrito a Francisco Giner de los Ríos: «Ya puedes figurarte el efecto que me haría la tragedia de Santa Agueda [el asesinato de Cánovas]. Espero que, por propia conveniencia, aunque los conservadores queden en el poder, no llevarán las cosas por ciertos caminos. Si, como parece probable, continúa Azcárraga de Presidente para no resolver de golpe la cuestión de jefatura, y entra Silvela, será quedando subordinado Pidal y excluido Romero Robledo. Me figuro que ahora continuará Azcárraga para que no se disuelva el partido conservador, y que en septiembre entrará Sagasta, y aún me parece que todo se hará de acuerdo con éste» (apud Gumersindo de Azcárate. *Estudio biográfico documental. Semblanza, epistolario, escritos* por Pablo de Azcárate. Madrid, Ed. Tecnos, 1969, pag. 198).

⁶¹ De esta estancia es otra carta de Cascajares a Aguilar, fechada en Madrid el 18-X-1897, en la que dice que «es urgente, pero muy urgente que hag[ue] llegar a las Reales Manos de S. M. la adjunta carta» que no conocemos (APR SpM, c.^a 6, núm. 10). Sobre las visitas, cfr. Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910.

⁶² «29 de Diciembre de 1897. = Sr. D. Alfonso de Aguilar. = Mi querido amigo: Los muertos ... [arriba] ... vivos; doblemente he agradecido a V., por este año la felicitación de Pascuas. Felicísimas las deseo a V. y buen año 9. Como la caída ... [arriba] ... Em[inen]cia.» = Está visto, amigo D. Alfonso, que los italianos *mienten* como bellacos. Dígaselo a la Señora, para que vea hasta dónde llegan los Italianos. = Repito mi felicitación y quedo de V. af[e]ctí[sim]o amigo que le bendice y B. S. M. = † A[ntonio] M[aría], Card[enal] Cascajares» (APR/SpM, c.^a 6, núm. 10).

⁶³ «3 de Enero 1898. = Sr. D. Alfonso de Aguilar. = Querido amigo: Su carta me ha trastornado. ¿Cómo ha podido pasarle por la imaginación que puedo dudar de S. M.? Para ponderar hasta dónde llega la bellaquería de los italianos, le decía a V. lo que de Roma me contestaban; y decía a V. "dígaselo a la Señora" precisamente para eso, para que admirase la frescura con que miente en aquella tierra. = Hágame el favor de entregar la adjunta a la Señora. = Suy af[e]ctí[sim]o amigo Q. B. [hay una tachadura] = A[ntonio] M[aría], Card[enal] Cascajares» (*ibidem*). La carta del ministro de Gracia y Justicia, Groizard, arzobispo de Sevilla, Spínola, de 13-X-1897, debe aludir, como supone Javiere al capelo cardenalicio de Monescillo (no a su carácter de primado) para que María Cristina proponía al prelado hispalense. De lo contrario, si pretendi hacerle arzobispo de Toledo, lo que no es probable, Cascajares hubiera sido postergado por la propia regente. Dice el escrito: «En mi último despacho con su majestad la reina he tenido el honor de indicarle el nombre de usted para ocupar tal alta dignidad. Su majestad la reina ha acogido con la mayor satisfacción mi propuesta y me ha autorizado para significar a nuestro Padre Santo el placer que tendría de que aceptase su recomendación» (cit. José María Javiere: *Don Marcelo de Sevilla*. Barcelona, Juan Flors, editor, 1963, pág. 409).

⁶⁴ Lema: *op. cit.*, 240 s.

⁶⁵ *Op. cit.*, VII, 822.

⁶⁶ Joaquín Sánchez de Toca: *La crisis presente del partido conservador. La jefatura y los ideales*. Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández 1897, passim (80 pp.) (BNM). Debo esta indicación bibliográfica a Ricardo Gutiérrez Nieto.

⁶⁷ Apud Silvela: *op. cit.*, II, 386.

⁶⁸ Apud *El Imparcial*, 4-I-1898.

⁶⁹ *Ibidem*, 8-I-1898. Cfr. 7-I-1898.

⁷⁰ Cfr. Pi y Margall...: *op. cit.*, VII, 927 ss., y Silvela: *op. cit.*, II, 389 s.

⁷¹ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910.

⁷² Cfr. Cirilo Martín-Retortillo: *Joaquín Costa, impulsor de la reconstrucción nacional*. Barcelona, Ed. Aedos, 1961, pág. 56, 69. La amistad de Joaquín Costa y Cascajares es un hecho documentado sobre el que habremos de volver (el nombre del cardenal figura por ejemplo en la agenda de direcciones de primero, que se conserva en AHN, Sección Diversos, Títulos y Familias, legajo 109). Pero puede que esa amistad no existiera aún en febrero del 98, si es cierto que fue Santiago Alba, muy relacionado con el arzobispo, el que «llegó a procurar[le] [a Costa] la adhesión del cardenal Cascajares» en el otoño posterior (Maximiano García Venero: *Santiago Alba, monárquico de razón*. Madrid Aguilar, 1963, pág. 41).

⁷³ «No queremos, y lo sabe el Señor que conoce el fondo de los corazones acusar a nadie, ni entregar nombres de personas a la animadversión pública. Pero los datos expuestos en documentos que son del dominio de todos y que están autorizados por firmas respetables, ahí han quedado como testimonio desconsolador de que, si en la paz no hemos sabido llevar a nuestras colonias con la severa moralidad de la administración y el imperio incorruptible de la justicia, aquel convencimiento íntimo de que, no habiendo ni el más ligero

pretexto para rebelarse contra la Metrópoli, ésta encontraría en la fuerza de su razón medios suficientes con que exterminar a los traidores y turbulentos, en la guerra no se ha mirado con el esmero y la caridad convenientes por la salud de nuestros heroicos hermanos. = Expediciones de enfermos y moribundos han venido a los puertos de la Península en número tan considerable y en tan triste situación, que más que de una guerra parecían venir de desiertos donde el hambre y la fatiga los hubieran aniquilado. Treinta y dos mil más quedaban en los hospitales de Cuba muriéndose de anemia, de fiebre y de tuberculosis... Si tantos millones como han salido del caudal de los contribuyentes españoles no sirven para dar de comer a los valerosos defensores del honor patrio, ¿para qué sirven?... [sic]. = Arrojar los tesoros de nuestra sangre y de nuestro dinero a las salas de un hospital insuficiente, porque no se han sabido administrar bien, es cosa que arranca lágrimas del corazón, y ojalá que en todo ello no haya más que incapacidad y desidia que, si lo que no creemos ni podemos creer, hubiese otras causas que afectasen al orden moral y a la integridad de la conciencia, ¡ah! entonces no lágrimas de pena sino gritos de indignación debían salir de todos los pechos honrados para pedir a Dios y a los hombres los más terribles castigos contra los pérfidos autores de tantas desventuras» (apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid*, 25-II-1898). Sigue en el texto transcrito arriba a continuación.

⁷⁴ Este sería el párrafo más debatido del escrito: «Hablan algunos de un ministerio nacional, y esto pudiera ser ciertamente una solución que, impuesta por las circunstancias, daría resultados momentáneos solamente en el caso de que un grave e inminente peligro de la patria, la guerra con los Estados Unidos, por ejemplo, obligase a todos los buenos españoles a prescindir de lo accesorio y unirse en apretado haz para salvar lo esencial. Pero esto es una solución transitoria, sólo para aquel momento, y los males que la situación presente de la nación ha creado en todos los órdenes, y señaladamente en la hacienda, cuya restauración no puede menos de ser sumamente laboriosa y lenta, exigen soluciones de más dura, organismos políticos más sólidamente constituidos. ¿Cuáles pueden ser éstos? Según las aficiones de cual, unos presentan la solución en la república, otros en el carlismo. Pero la república tiene para España bien desastrosos recuerdos y no puede inspirar confianza a los católicos, a pesar de sus promesas, mientras existe el hecho de que muchos de sus jefes no pierden ocasión de hacer manifestaciones rabiosamente anticatólica, y la prensa de su partido, con raras excepciones, combate a diario y con encarnecimiento al catolicismo: cuya división, por otra parte, es a la vez una garantía que puede tranquilizarnos respecto a las probabilidades de su triunfo, y demostración palpable de que no es la república la llamada a constituir un núcleo suficientemente vigoroso para resolver los arduos problemas a que nos referimos. No falta en cambio, al carlismo robustez, cohesión y fe en sus ideales; pero para realizarlos, no puede disponer de más medios que la guerra, la horrible guerra civil, ya por tres veces infructuosamente sostenida con tanto heroísmo como contraria fortuna» (*ibidem*).

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ «Sr. D. Alfonso de Aguilar. = Querido amigo: Por el correo de hoy envío a V. dos Pastorales que acaban de traer de la imprenta; tenga V. la bondad de entregar una a S. M.; la otra quédese la V.: como digo *verdades* y es más que algo política la tal Pastoral, deseo como es justo, tenga de ella conoci[mien]to S. M. por mí, antes que la prensa la discuta. = Ocupadísimo no puedo más. Suyo af[ectisi]mo amigo. = † El Cardenal» (APR/SpM, c.ª 6, número 10).

⁷⁷ «Cascajares ha publicado en un periódico de Valladolid el siguiente artículo de fondo que en otro lugar comentamos. Cascajares ha tenido la ocurrencia de dar a su escrito la forma de Pastoral episcopal ... El ex-oficial de artillería ha remendado unos cuantos artículos de periódico, y a título de novedad, amparados bajo la autoridad indiscutible del capelo, sirve hoy a la España católica, un montón de vulgaridades y atrevimientos impropios del lugar donde se fulminan. = El Sr. Cascajares ha pasado siempre, entre el Clero y fuera del Clero, por una medianía y por hombre de poca firmeza en el juicio.

Siendo Obispo de Calahorra cultivó la amistad de los jesuitas, contra los cuales se declaró desde la silla de Valladolid. Suspiraba por el Arzobispado de Toledo, conquistó, para obtener este puesto, la voluntad de S. M. la reina cuando la corte del Vaticano impuso la candidatura del Cardenal Sancha, Sr. Cascajares atribuyó el triunfo del Papa y su derrota a tibieza de la reina en la defensa de su ambición. = Desde entonces, el Arzobispo de Valladolid aca todas las ocasiones para desahogar sus enojos contra el gobierno del Sr. I. gasta y contra el trono mismo.» Ahora, en su pastoral, «después de abominar contra todo lo existente, ofrece el negro vacío de lo insoluble como triste término de sus profanos escarceos» (apud *El Siglo Futuro*, 28-II-1898). La última afirmación se fundaba en que, al reproducir buena parte de la pastoral, *El Imparcial* del 27-II-1898 había suprimido el último párrafo sobre el partido católico, terrando la transcripción con el párrafo que copiamos en la nota 74 supra. *Correo Español*, 3-III-1898, transcribe las líneas finales sobre el partido consional. Sobre las alabanzas y los dictérios, vid. *El Imparcial*, *Heraldo Madrid*, *El Correo Español* y sobre todo *El Siglo Futuro*, 27-II-1898 ss., q reproduce los diversos juicios de otros periódicos. Cfr. también *La Cruz* (189 I, 205-214).

⁷⁸ Cfr. *El Siglo Futuro*, 28-II y 9-III-1898.

⁷⁹ «Extraordinaria sorpresa nos ha causado ver los comentarios, l cábalas, las impugnaciones y defensas que en los periódicos, en los círculos p líticos y en todas partes ha suscitado nuestra última sencilla y humilde Pastoral Ni la escribimos para dar golpes de efecto que no están en nuestro carácter ni en nuestras costumbres, ni acertamos a descubrir en ella motivos suficientes para la algarada que ha levantado ... = Suponer que un sentimiento de despect por ambiciones no satisfechas ha guiado nuestra pluma es injuriar gravemente nuestra persona y nuestra dignidad, mucho más cuando para ello falta el fundamento del motivo, pues ni hemos abrigado en nuestro pecho las supuestas ambiciones, ni por consiguiente, experimentado la contrariedad de verlas defraudadas ... = No menos gratuita es la acusación contra la que protestamos con todas las energías de nuestra alma, de los que han calificado nuestra Pastoral de *facciosa* y la han supuesto solapadamente dirigida contra la dinastía y las instituciones reinantes. Ni de cerca ni de lejos se puede sacar del citado documento semejante conclusión, ni nuestros antecedentes permitirían interpretarla en ese sentido cualquier expresión dudosa, aun en el caso de que la hubiera. Debemos a S. M. la Reina y a la Real Familia atenciones que son con profundísimo reconocimiento. Pero además es público y notorio que entre los Pr lados que con más eficacia han secundado las repetidas recomendaciones de S. S. León XIII a los católicos españoles, habrá habido quien nos gane en profundidad de doctrina y elocuencia para exponerla; pero no seguramente en constancia e insistencia para recordarla» (apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid*, 15-III-1898).

⁸⁰ *Ibidem*. Se hizo tirada aparte.

⁸¹ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910. «Sr. D. Alfonso C. Aguilar. = Querido amigo: Hágame el favor de entregar a S. M. la Reina, la adjunta carta y uno de los dos folletos "En justa defensa" que acaban de venir de la imprenta, y envío a V. por este mismo correo. El otro tiene el gusto de dedicarle a V. su afectuoso amigo y Cap[ellán] n.º q. b. s. m. = El Card[enal] Cascajares. = 10 Marzo 98.» Esta vez le responde la propia reina: «Madrid, 11 de Marzo de 1898.—Em[inentí]simo Sr. Cardenal. = D[on] Antoni María Cascajares. = Muy Reverendo Señor Cardenal: = No he acusado antes el recibo de su Pastoral, porque esperaba para hacerlo la llegada de su segundo folleto, cuyo envío ya me anunció. = Hoy recibo su "En justa defensa" y le escribo antes de leerlo, para que no crea que he formado mi juicio acerca de la Pastoral, después de leída la defensa. Conozco a V. muy bien para no haber comprendido desde luego la idea que le guiaba al escribir la Pastoral, y sus buenos propósitos. Tan segura estoy de su adhesión y cariño hacia mí y mi Hijos, que me reía al ver que los periódicos le tachaban de ingrato, de faccioso y hasta de revolucionario (1). (Creo que con decirle que para mí, era inútil

haber escrito la defensa, le digo bastante.) = A V. no le habrá extrañado, seguramente, que los periódicos hayan discutido su Carta Pastoral, porque siendo como es eminentemente política, no podrá menos de ser analizada por la prensa con mayor o menor benevolencia según su modo de apreciarla (1.^o).—No dude Señor Cardenal, del aprecio y cariño en que le tiene siempre su muy afecta.» Probablemente, la llamada y el paréntesis que transcribimos indican una trasposición de esa frase en la carta definitiva, de la que este documento es minuta. Por lo demás, el cardenal parecía menos decidido a intervenir en los asuntos de la reina, como cabe adivinar también en algunas de las cartas de 1897 antes transcritas y se advierte en ésta de mayo del 98: «Sr. Don Alfonso de Aguilar. = Mi distinguido amigo: Con un día de retraso recibo hoy su carta del 29. = Como V. sabe, tuve el honor de escribir a S. M. proponiéndole el pensamiento de la ida ahí de los Prelados Senadores; en la misma carta decía a la Señora que yo estaría en esa el Domingo y en efecto, el sábado a las siete de la mañana llegué a Madrid. Sin previa invitación, no me creí autorizado para ir a ofrecer mis respetos a S. M. y esperé; pues avisar a V. que allí estaba primero, y después que me iba era lo mismo que decirlo a la Señora, y esto me pareció irrespetuoso, y en cierto modo obligarla a que me recibiera, toda vez que no ignoraba la Señora que me encontraba en Madrid; y debí pensar y realmente pensé, que cuando no me había enviado recado ninguno por V., como lo ha hecho otras veces era porque, fuera por lo que quisiera, no le pareció oportuno a S. M. recibirme en esta ocasión. Y ¿qué había de hacer en Madrid, si mi ida no tuvo otro fin que tener la honra de saludarla? Venirme como lo hice el Jueves aprovechando el Sud-express. = Además, me encontraba realmente indispuerto; a duras penas pude ir con el Senado a Palacio; y la idea de tener que hacer cama fuera de mi casa me decidió a marchar. Estoy ya bien, gracias a Dios, y hoy he celebrado ya la Santa Misa. Hecha la historia, queda de V. afectísimo amigo = q. b. s. m. = † A[ntonio] M[aría] Card[enal] Cascajares, 1 Mayo 1898» (APR/SpM, c.^a 6, núm. 10).

⁸² El Correo Español, 18-III-1898. Cfr. *ibidem*, 15 y 17-III-1898.

⁸³ Cit. *El Siglo Futuro*, 17-III-1898.

⁸⁴ Cit. *ibidem*, 17-XI-1898.

⁸⁵ Marqués de Polavieja: *Mi política en Cuba. Relación documentada por el teniente general ... Lo que vi, lo que hice, lo que anuncié*. Madrid, Imprenta de Emilio Minuesa, 1898, pág. 342 (BNM).

⁸⁶ Cfr. Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones ... Congreso ...*, 21-XII-1910; Romanones: *Notas ...*, 102; Villar y Amigo: *op. cit.*, 102 y 112.

⁸⁷ Cfr. Planas y Casals: *Diario de las Sesiones Congreso ...*, 6-VII-1899.

⁸⁸ Cfr. Romero Robledo: *ibidem*, 1-VII-1899, y Villar y Amigo: *op. cit.* 107.

⁸⁹ Cfr. Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones ... Congreso ...*, 21-XII-1910.

⁹⁰ Apud *Heraldo de Madrid*, 10-IX-1898. Lo transcribe íntegro Melchor Fernández Almagro: *Historia política ...*, t. II, 869-877 (edición de Ed. Pegaso. Madrid, 1959, puesto que la más reciente de Alianza Editorial ha suprimido los apéndices y el índice onomástico de ésta). En el manifiesto, Polavieja explicaba la tardanza de su aparición —que en efecto le sería reprochada—: «Yo no podía ni debía hablar durante la guerra. Tampoco me era lícito responder a excitaciones semejantes en los momentos en que el Gobierno entablaba la negociación que nos ha conducido al protocolo de Washington» con los Estados Unidos.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² *Correspondencia...*, 358.

⁹³ Vid. José Andrés Gallego: *La última evolución...*

⁹⁴ Cit. Pi y Margall: *op. cit.*, VII (2.^a parte), 1525. Sobre los debates parlamentarios y periodísticos a que el artículo dio lugar, vid. Carmen Llorca: *Emilio Castelar. Precursor de la Democracia Cristiana*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1966, pág. 1328 ss. Cascajares escribe a la reina ante ello: «Señora: = Si puede llevar algún consuelo a la primera de las damas españolas, a la Augusta Madre, a la Reina Regente la protesta contra el escrito de Castelar, sepa, Señora, V. M. que el Card[enal] Arzobispo de Valladolid protesta indignado

con toda la energía de su alma contra el insolente exabrupto de Castelar. Sé un demente cegado por satánica soberbia es capaz de atreverse a dirigir 1 mañas calumnias y groseros insultos a la Reina que por sus virtudes y tales es justamente bendecida por el Romano Pontífice y admirada por todos los Soberanos y hombres de estado de Europa. = Señora: = A L. R. P. V. M. = † A[ntonio] M[aría] Card[enal] Cascajares. = Valladolid 2 de Junio de 1898.» La reina le responde a vuelta de correo: «Excmo. Sr. Cardenal Dn. Antonio M[aría] Cascajares = Madrid 4 de Junio 1898. = Muy Reverente Sr. Cardenal: = He tenido mucho gusto en recibir su carta del día 2 y agradezco en el alma su amable recuerdo, pues es una nueva prueba de que me tiene siempre presente. = El asunto que motivó su carta, no me ha causado esa la menor molestia ni sorpresa, ni me la podrá causar, pues conociendo como conozco su origen y sus inspiradores no podrá esperar otra cosa. Más que a mí ha perjudicado dicho artículo a sus propios autores, a quienes la soberbia y el despecho han inducido a cometer acto semejante que los ha colocado en evidente ridículo. = Espero que su salud se habrá repuesto desde su último viaje y que la entrada del verano le ayudará a su total restablecimiento. = Crea V. S[ñ]or Cardenal en el verdadero aprecio en que le tiene su muy afecta» (APR/SpM, c^a 6, núm. 10). En realidad, no parece que hubier sido esa la intención de Castelar. El 3-VI-1898, el orador escribía a Gumersind de Azcárate: «Yo soy un mero cronista que solo escribe aquello que piensa y siente. Como el poder real ha tomado vuelos extraordinarios por culpa de todos, he querido detenerlos y cortarlos, imputando no a la reina, como pudes ver en el artículo, sino a los cortesanos estas ingerencias» (apud *Gumersind de Azcárate...*, 386). El marginamiento de Weyler y la preferencia hacia Polavieja de que había hablado Castelar en su escrito pudieron ser entrevistos desde el principio. María Cristina había concedido al general cristiano la Gran Cruz de San Fernando el 28-IV-1897. Weyler, considerándose desprestigiado, pidió una consideración semejante por carta a Cánovas de 7-V e instancia a la reina (ambas en APR/SpM, c^a 5, núm. 39). Pero no la obtuvo.

⁹⁹ «Mas para reorganizar la Administración —decía sorprendido Gumerindo de Azcárate en carta a Francisco Giner de los Ríos de 7-IX-1898— hay que cambiar de política... [sic], pero justamente para satisfacer esa necesidad publicará mañana *El Imparcial* el manifiesto del General Polavieja y se formará el tercer partido, ¡con él, Canalejas, Romanones, Gasset, Suárez de Figueroa!» (apud *Gumersind de Azcárate...*, 204).

¹⁰⁰ *El Correo*, sagastino, negaba originalidad al manifiesto y aconsejaba la unión de Polavieja al Partido Conservador. *La Epoca*, conservadora, insistía en lo último, aunque alababa el documento. Lo alababa también *El Tiempo*, silvelista, aunque le negaba originalidad y ponía en duda su éxito. Lo despreciaron *El Siglo Futuro*, integrista, y *El Correo Español*, carlista, sobre todo «por las personas (dicho sea sin menoscabo ni ofensa) que aparecen formando como el cortejo del autor del manifiesto ..., personalidades todas ellas que militan en partidos y agrupaciones y empresas de todos los más fracasados en política» (*El Siglo Futuro*, 10-IX-1898). Reproducen los comentarios de estos y otros periódicos *Heraldo de Madrid*, 11-IX-1898, y *El Siglo Futuro*, 12-IX-1898.

¹⁰¹ *Heraldo de Madrid*, 2-X-1898. Cfr. *ibidem* y *El Imparcial*, todo octubre y noviembre de 1898.

¹⁰² Cfr. nota 95 supra y *El Siglo Futuro*, 15-IX-1898.

¹⁰³ Vid. Romanones: *Notas...*, 102.

¹⁰⁴ Cfr. *El Siglo Futuro*, 15-IX-1898, y *La Veu de Montserrat*, 17-IX-1898.

¹⁰⁵ *El Imparcial*, 15-IX-1898.

¹⁰⁶ *Heraldo de Madrid*, 17-IX-1898. Cfr. *ibidem*, 18-IX, 2-X, 11-XI-1898.

¹⁰⁷ *Ibidem*, 25-IX-1898.

¹⁰⁸ Lo reproduce íntegro Fernández Almagro: *Historia política...*, II, 866-869 (edición de Ed. Pegaso).

¹⁰⁹ *Heraldo de Madrid*, 1-IX-1898.

¹¹⁰ Cit. *El Siglo Futuro*, 24-IX-1898.

¹¹¹ Vid. *ibidem*, 4-XI-1898.

¹⁰⁸ El Cardenal había pasado unos meses difíciles: «Sr. D. Alfonso de Aguilar. = Mi distinguido amigo: Su Em[inen]cia me da el encargo de escribir a V. —como lo hago con mucho gusto— ampliando el telegrama que habrá ya llegado a manos de V. concebido en estos términos: «Estoy peor, Médicos prohíben viaje. Tan débil que ni aun puedo decir Misa.» El Sr. Card[enal], en cuanto recibió el Domingo las cartas de S.M. y de V., decidió asistir a las solemnes ceremonias [de la primera Comunión de Alfonso XIII], a pesar de no encontrarse bien de su dolencia. Aquel mismo día, sus médicos le dijeron los temores que abrigaban de que recayera con alguna gravedad poniéndose en viaje; pero su Em[inen]cia, muy deseoso de corresponder al alto honor que la bondad de S.M. la Reina le dispensaba de acompañar a S.M. el Rey en los solemnes momentos de su primera Comunión y de recibir el Santo Sacramento de la Confirmación, rehusó el dar a S.M. cuenta del sentir de los médicos, con la esperanza de que tal vez pasados un par de días reformaran su parecer. No ha sido así: esta mañana los dos han vuelto a procurar disuadirle de su empeño, y, al fin, en vista de la insistencia del Sr. Card[enal], se lo han prohibido en absoluto. No he de ocultar a V. que a nosotros nos ha tranquilizado esta resolución: diez días ha estado en cama, sin tomar otra cosa que algunos caldos y muy poca leche; diecisiete lleva sin celebrar el Santo Sacrificio, porque la grandísima debilidad que siente le impide para hacerlo. Generalmente, en las primeras horas de la mañana, alguno de los familiares le damos la Sagrada Comunión. Todo esto nos alarma y de tal modo que creí prudente avisar a su familia, y hace tres días que su hermana se encuentra entre nosotros. No es hoy de cuidado, gracias a Dios, la enfermedad; pero, dada la naturaleza quebrantada de Su Em[inen]cia, ¿cualquier retroceso nos proporcionaría un serio disgusto? = Hágame V. el obsequio de poner esto en conocimiento de S.M. y de manifestar a la Augusta Señora lo que al Sr. Card[enal] apenas estas dificultades y el verse privado de honra tan estimable. = Con la mayor atención, me repito de V. af[ectí]simo amigo S.S. y Cap[ellá]n q.b.s.m. = R. Martínez = Valladolid 21 de Junio de 1898». En octubre, sin embargo, según indicamos, estaba en Madrid: «Sr. D. Alfonso de Aguilar = Mi querido amigo: Mañana Martes a las seis de la tarde llegaré a esa. Hágame V. el favor de decir a la Señora si se dignará recibirme el Miércoles, pues el jueves por la mañana tengo precisión de marchar a Valladolid. = De V. af[ectí]simo amigo q.b.s.m. = † El Card[enal] Cascajares, = 3 Oc[tu]bre 98» (APR/SpM, ca⁶ 6, núm. 10).

¹⁰⁹ *Ibidem*, ca⁴ 4, núm. 57.

¹¹⁰ Cfr. *El Siglo Futuro*, 4-XI-1898.

¹¹¹ Cit. *ibidem*, 29-X-1898.

¹¹² Cfr. *ibidem*, 4-XI-1898.

¹¹³ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 1-XI-1898.

¹¹⁴ Cfr. *El Siglo Futuro*, 4-XI-1898.

¹¹⁵ Cfr. Fernando Soldevilla: *El año político 1898*. Madrid, Imprenta de Enrique Rojas, 1898, pág. 434 (BDN).

¹¹⁶ Cfr. *Diario de las Sesiones ... Congreso...*, 6-VII-1899.

¹¹⁷ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 4-XI-1898.

¹¹⁸ Cit. Francos Rodríguez: *op. cit.*, 179.

¹¹⁹ Vid. *El Siglo Futuro*, 29-IX y 21-X-1898.

¹²⁰ *Ibidem*, 7-XI-1898.

^{120 b} *Revista Popular*, 17-XI-1898.

¹²¹ *El Imparcial*, 8-XI-1898.

¹²² Cit. *El Siglo Futuro*, 9-XI-1898.

¹²³ Cit. *ibidem*.

¹²⁴ Cit. *ibidem*, 10 y 14-XI-1898.

¹²⁵ Cfr. *ibidem*, 11, 14, 16, 17 y 24-XI-1898.

¹²⁶ Vid. la síntesis que de la coyuntura económica finisecular en Cataluña hacen Joan Connelly Ullman: *La Semana Trágica. Estudio sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en España (1898-1912)*, Barcelona, Ed. Ariel, 1972, pág. 119-123, y sobre todo Edouard Escarra: *El desarrollo industrial*

de Catalunya (1909-1908), Barcelona, Ed. Grijalbo, 1970, págs. 114-123. Ha ratificat la escassa importància del comerç internacional per a la indústria tèxtil 1900 Jorge Nadal Oller: *La economía española (1829-1931)*, en «El Banco de España. Una historia económica», Madrid, Servicio de Estudios del Banco España, 1970.

¹²⁷ Amadeu Hurtado: *Quaranta anys d'advocat. Història del meu tem 1894-1930*, 2.^a ed., Barcelona, Ed. Ariel, 1969, pág. 48.

¹²⁸ Cfr. Pi y Margall...: *op. cit.*, VII (2.^a), 1498.

¹²⁹ Cfr. Carrera Pujal: *Historia política de Catalunya en el siglo XIX*, Barcelona, Bosch Casa Editorial, t. VI, pág. 214.

¹³⁰ Vid. *El Imparcial*, 26-III-1897.

¹³¹ Cfr. Carrera Pujal: *op. cit.*, 214.

¹³² Vid. *Revista Popular*, XII (1877), 390. Lo que no le impedía defender finales de siglo la jornada máxima de doce horas para los menores de veintitrés años, frente a quienes propugnaban las de ocho y diez horas (vid. E. Gir y Raventos: *Bibliografía dels moviments socials a Catalunya, país valencià i illes*, Barcelona, Ed. Lavinia, 1972, ref. 3/604 s., sobre Sallarés).

¹³³ Cfr. Alberto y Arturo García Carraffa: *Prat de la Ribera*, Barcelona, In Hijos de Domingo Casanovas, 1917, pág. 78.

¹³⁴ La reivindicación del concierto económico entre Catalunya y el Estado había sido formulada ya en las Bases de la Asamblea de la *Unió Catalana* de 1894 (cfr. Jardí: *op. cit.*, 55).

¹³⁵ Apud *Heraldo de Madrid*, 15-IX-1898.

¹³⁶ Vid. *La Veu de Catalunya*, 10-IX-1898 ss.

¹³⁷ Vid. Carrera Pujal: *op. cit.*, VI, 241 s.

¹³⁸ Vid. Oriol Bohigas: *Arquitectura modernista*, Barcelona, Ed. Lumen 1968, 330 págs., donde se le considera el mejor arquitecto catalán del modernismo, tras Gaudí.

¹³⁹ Apud *La Veu de Catalunya*, 18-IX-1898.

¹⁴⁰ *Ibidem*.

¹⁴¹ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 8-XI-1898.

¹⁴² Carta de Doménec al director de *La Veu de Catalunya*, *ibidem*, 16-X-1898.

¹⁴³ Apud García Carraffa: *op. cit.*, 79 ss.

¹⁴⁴ Cfr. *La Veu de Catalunya*, 16-X-1898.

¹⁴⁵ *La Veu de Montserrat*, 22-X-1898.

¹⁴⁶ *La Veu de Catalunya*, 23-X-1898.

¹⁴⁷ Cfr. *La Veu de Montserrat*, 8-X-1898.

¹⁴⁸ Cfr. *La Veu de Catalunya*, 6-XI-1898, que reproduce unas declaraciones de Durán a *El Liberal* de Madrid, que contienen todo un nuevo programa generacionista.

¹⁴⁹ Vid. *La Veu de Montserrat*, 29-X-1898.

¹⁵⁰ Vid. *La Veu de Catalunya* de esos meses.

¹⁵¹ Cfr. Carrera Pujal: *op. cit.*, VI 248.

¹⁵² Vid. Jardí: *op. cit.*, 57.

¹⁵³ Vid. texto correspondiente a la nota 131 supra.

¹⁵⁴ Apud *Heraldo de Madrid*, 8-XI-1898. Jardí (*op. cit.*, 64 s.), siguiendo a Josep Pla, afirma que esta Junta era movida por Joan Costa, «un model lampista del carrer del Pas de l'Ensenyança, home viu, sense instrucció, viciat (que) entrava i sortia a Palau com aproximadament a casa seva», persona que també era molt influent al Foment. Segons el mateix autor, *Prat de la Ribera*, que durant tot aquell període havia maldat per polititzar el moviment econòmic, «tractà de posar al davant dels polaviejistas homes d'antecedents catalans. Lluís Ferrer i Vidal, que havia escrit articles catalanitzants a «La Epoca» de Madrid, és elegit president de la Junta. También, pero no sólo por este texto parece inútil rectificar a quienes han insistido en el alejamiento de Prat respecto a Polavieja, al menos en estos meses del otoño de 1898.

¹⁵⁵ ADV, leg. 533, «Correspondencia, 1899». La transcribe íntegra Villar Amigo: *op. cit.*, 224 ss.

¹⁵⁶ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 5-VII-1899. Firmaban la circular

cit. nota 155 supra el silvelista Luis Ferrer i Vidal como presidente, los vice-presidentes Jose Masriera, Vero Vidal, el secretario Pedro de la Rosa (aunque tal cargo había sido atribuido a Ferrán Agulló, según Jardí: *op. cit.*, 65, y Jesús Pabón: *Cambó, 1876-1918*, Barcelona, Ed. Alpha, 1952, pág. 182), los vocales Trinidad Riús i Torres (paradójicamente colaborador, en 1907, del almanaque del periódico anticlerical republicano *La Campana de Gracia*, según Joan Torrent y Rafael Tasis: *Història de la premsa catalana*. Barcelona, Ed. Bruguera, 1966, t. I, pág. 241). Eusebio Serra, Juan Torres, el arquitecto (fértil en edificios religiosos) Enrique Sagnier Villavecchia, Manuel Cuadras Feliu, José de Armenteras, Manuel Marqués, Eusebio Bertrand, Dr. Miguel A. Fargas, Salvador Bernades, Dionisio Conde, Daniel Mateu, Camilo Mulleras, José Arañó, Juan Girona, Dr. E. Roig i Bofill, Jerónimo Deniel, Antonio de Satrústegui, Manuel Reventós i Codorniu, Santiago López, Juan Cantarell, G. Codina Sert, Isidro Valls, Gustavo Peyra, Antonio Carbonell, Joaquín Soler Batlle y Luis de Dalmases i de Olivart. Según Carrera Pujal (*op. cit.*, VI, 241), el alma de la Junta fue Alberto Rusiñol.

¹⁵⁷ *Heraldo de Madrid*, 8-XI-1898.

¹⁵⁸ Apud García Carraffa: *op. cit.*, 82 ss. Ratifica a Robert como autor del mensaje Jardí: *op. cit.*, 57.

¹⁵⁹ Cfr. Carrera Pujal: *op. cit.*, VI, 248.

¹⁶⁰ *La Veu de Montserrat*, 19-XI-1898.

¹⁶¹ Reproducido *ibidem*, 26-XI-1898. Cfr. *ibidem* y *La Veu de Catalunya*, 15 a 30-XI-1898.

¹⁶² Cfr. García Carraffa: *op. cit.*, 97.

¹⁶³ Vid. Pedro Gómez Aparicio: *Historia del periodismo español. De la Revolución de septiembre al desastre colonial*, Madrid, Editora Nacional, 1971, página 373.

¹⁶⁴ Cfr. García Carraffa: *op. cit.*, 99 s.

¹⁶⁵ Cfr. *La Veu de Catalunya*, 25-XII-1898. Sobre la historia de este diario, vid. la enciclopédica obra cit. de Torrent y Tasis, págs. 156 ss.

¹⁶⁶ Vid. *ibidem*, 2-I-1899 ss., y Maximiano García Venero: *Vida de Cambó*, Barcelona, Ed. Aedos, 1952, pág. 105.

¹⁶⁷ José Puig i Cadafalc fue miembro activo de la Congregación barcelonesa de la Inmaculada Concepción y San Luis Gonzaga (cfr. *Revista Popular*, XLII (1892), 110), y Prat de la Riba, de la Sección Catalanista de la Juventud Católica, también de la Ciudad Condal (cfr. *ibidem*, XLIV (1893), 270).

^{167 b} Cfr. García Carraffa: *op. cit.*, 81, y Jardí: *op. cit.*, 69.

¹⁶⁸ AHN, Sección Diversos, Títulos y Familias, leg. 103. Cfr. *ibidem*, carta de Costa a Altamira de 26-XI-1897. En la carta transcrita de 26 de noviembre Costa afirma, sobre la constitución de ese partido que acaba de describir, que «Giner, parece, lo considera obligado en conciencia». Pero él ve muy difícil el triunfo.

^{168 b} Carta sin fecha, *ibidem*. Vid. *El Liberal*, 18-X-1898.

¹⁶⁹ Cit. Pi y Margall...: *op. cit.*, VII (2.^a), 1.507 ss.

¹⁷⁰ Cfr. *ibidem*, 1529 ss.

¹⁷¹ Cfr. Carrera Pujal: *op. cit.*, VI 251 s.

¹⁷² Cfr. Jardí: *op. cit.*, 53.

¹⁷³ Cfr. Romero Robledo: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 27-VI-1899, y Martín-Retortillo: *op. cit.*, 190.

¹⁷⁴ Cit. *Ei Siglo Futuro*, 10-XI-1898.

¹⁷⁵ «Em[inentisi]mo Sr.: Cardenal = D[o]n Ant[oni]o M[aría] de Cascajares. = Arzobispo de Valladolid. = Madrid 25 de Nov[iembre] 1898. = Muy respetado Sr. Cardenal. = Por encargo de S. M. la reina contesto a la carta que con fecha 22 del actual La ha dirigido V. E.^a [sic] y que S. M. ha leído con toda la atención que merece. = Ante todo quiere S. M. que dé a V. E.^a expresivas gracias por el interés que con su carta le demuestra, interés que Ella sabe viene del cariño que la profesa [sic]. = Muchas son las verdades... (APR/SpM, c.^a 6, núm. 10). No se conserva la carta inicial de Cascajares.

¹⁷⁶ *ibidem*.

- 177 Cfr. *El Siglo Futuro*, 1-XII-1898.
 178 Miguel Morayta en *La Publicidad*, cit. *ibidem*.
 179 Vid. *El Liberal*, 16-IX-1898.
 180 Apud *El Liberal*, 2-XII-1898.
 181 *El Correo*, 2-XII-1898.
 182 Apud *El Siglo Futuro*, 5-XII-1898.
 183 Apud *El Liberal*, 10-XII-1898.
 184 Vid. *Heraldo de Madrid*, 11-XII-1898.
 185 Vid. *El Imparcial*, 9-XI, 7-XII-1898, cuya llamada a la unión, sin firma fue atribuida al propio Gasset (cfr. *El Siglo Futuro*, 9-XI-1898) en el primer de los casos. «Hacia ya 21 días —determina *La Tradición Navarra*, 6-I-1899— que se estaban practicando gestiones para llegar a dicha unión.»
 186 Cfr. *La Tradición Navarra*, 6-I-1899.
 187 Cfr. Soldevilla: *op. cit.* (1898), 487.
 188 Cfr. *La Tradición Navarra*, 6-I-1899.
 189 *El Pensamiento Navarro*, 17-I-1914.
 190 *La Tradición Navarra*, 18-I-1899.
 191 *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 1-VII-1899.
 192 Cfr. Pi y Margall...: *op. cit.*, VII (2.^a), 1539.
 193 «Josep Pla, en el seu llibre sobre Cambó, ... té per segura la conjuntura a l'entorn de Polavieja per a donar la clàssica cuartelada i diu que la reina assabentada del complot, va cridar el general a Palau i el féu desistir» (*Jard op. cit.*, 61).
 194 Vid. *La Tradición Navarra* y *El Pensamiento Navarro*, 6-I-1899.
 195 Apud Silvela: *op. cit.*, II, 499 ss., y *Heraldo de Madrid*, 7-I-1899.
 196 Vid. *Heraldo de Madrid*, 14-I-1899.
 197 Apud Fernando Soldevilla: *El año político 1899*, Madrid, Imprenta fotograbado de Enrique Rojas, 1900, pág. 13 s. (BDN).
 198 Cfr. Silvela: *op. cit.*, II, 516 ss.
 199 Cfr. *La Tradición Navarra*, 10-I-1899.
 200 Cfr. *ibidem*, 18-I-1899.
 201 Cfr. *Heraldo de Madrid*, 9-III-1899. En los ficheros de la Hemeroteca Municipal de Madrid figuran algunos números sueltos de *La Información*, que no han sido localizados cuando hemos querido consultarlos. Reproduce su prospecto de presentación, violentamente antiliberal, la *Revista Popular*, LVI (1899, 328 s.).
 202 Cfr. *Heraldo de Madrid* y *La Tradición Navarra*, 18-I-1899 ss.
 203 *La Veu de Montserrat*, 7-I-1899.
 204 *Heraldo de Madrid*, 10-I-1899.
 205 Cfr. *ibidem*, 10 y 11-I-1899, y *La Veu de Catalunya*, 12-I-1899.
 206 Cit. Soldevilla: *op. cit.*, (1899), 14.
 207 *La Veu de Montserrat*, 14-I-1899.
 208 Cfr. *La Tradición Navarra*, 11 y 12-I-1899.
 209 Cfr. *La Veu de Catalunya*, 19-I-1899.
 210 *Ibidem*, 20-I-1899.

IV. RESURRECCION DEL ANTICLERICALISMO, 1899

1. *Replanteamiento de la cuestión religiosa*

Desde el otoño de 1898 al menos, el tono tradicionalista y conservador del movimiento polaviejista había venido a mezclarse con la campaña anticlerical que, meses atrás, comenzara la prensa republicana más radical: *La Publicidad*, *La Campana de Gracia* y *La Esquella de Torratxa* en Barcelona; *El Pueblo* de Valencia; *El Motín*, *Las Dominicales*, *El País*, *El Progreso* y *Don Quijote* en Madrid, entre otros ¹.

Seguía esta campaña a su vez las acusaciones de los separatistas filipinos dirigidas en el mismo 98 a las órdenes misioneras sobre su culpabilidad en la guerra ante España. Tema, por lo demás, plenamente ligado a la política isleña de Polavieja.

La administración del archipiélago había llegado ciertamente al 98 con la misma estructura misional de la época de conquista. Las órdenes religiosas (sobre todo los agustinos, recolectos, dominicos, franciscanos y jesuitas) poseían haciendas que ocupaban unas 175.000 hectáreas con 130.000 habitantes (cantidades pequeñas pero notables en los 300.000 kilómetros cuadrados y casi 7 millones de almas de las islas a fin de siglo). La escasez de funcionarios peninsulares dejaba de hecho en los religiosos españoles el poder civil y, desde luego, el eclesiástico, apenas compartido por un escaso clero nativo secular: 830 sacerdotes en 1898, a los que apenas se había dado acceso a dos centenares de parroquias.

El anticlericalismo cundía consecuentemente en los programas nacionalistas, ya en los años 80, y en los escritos sobre Filipinas, en los 90, de la prensa republicana de la metrópoli. Pero se había convertido en campaña violenta al comenzar el año 98. «Los laborantes filipinos —protestaban en abril los procuradores de aquellas ordenes—, en unión de algunos sec-tarios españoles, al tratar de extraviar la opinión pública con manifiestos, libelos infamatorios y otros medios de reprobada propaganda, han convenido, después de la paz oficial del Archipiélago, en atacar de consuno con toda clase de violencias a los misioneros españoles, sosteniendo que sólo estos son los responsables de la última insurrección colonial, asegurando al propio tiempo con el más inaudito descaro que con su ilimitado poder teocrático, con su funesta ingerencia en todos los ramos de la Administración, con su codicia insaciable, con su crasa ignorancia, con su tradicional enemiga a la ilustración y progreso de aquellos *oprimidos* pueblos, y con sus abusos e inmoralidades de toda clase, han producido el inextinguible odio de raza, el persistente malestar y el partido antiespañol que actualmente existe en las islas» ^{1 b}.

En el verano, la campaña parecía pretender sus ataques también contra los institutos de la península. «Imposible parece —advertía Sardá i Salvany en agosto de 1898—, mas es lo cierto, que hay empeño en agitar de nuevo la opinión pública y las prevenciones populares contra las Ordenes religiosas, y en promover contra ellas artificial algarada.» En el otoño, en

fin, se divulgaban acusaciones contra su «extrajerismo» («invasión de extranjeras Corporaciones», en términos de raíz francesa) y se centraba en la Compañía^{1 c}.

Ahora, el acercamiento del integrismo a Polavieja fue interpretado como «maniobra afortunada de los jesuitas»: porque, en el fondo, «son estos los que triunfan en toda la línea desde hace ya muchos años». «Los jesuitas son los que han movido sus peones en las provincias vascas, para que por ellas pasee Polavieja, como Jesús cuando entró en Jerusalén; y ellos los que por medio del Padre Sanz, visitante diario de la regia cámara y del Padre Montaña, confesor de la reina, esperan vencer el ánimo de ésta cuando llega el momento oportuno»².

La nueva orientación mostraba de otra parte clara oportunidad política para el Partido Liberal. Lo cierto era que el liberalismo tenía que hacer algo para subsistir ante la aproximación a los conservadores de fuerza impulsadas en la crisis del 98. En último término, llegaban éstas con la intención de relevar a los partidos históricos de la tarea del Gobierno, poniendo en duda a veces el futuro mismo de los supuestos democráticos del régimen de Cánovas, y hallaban en la oposición tan sólo el débil frente del partido de Sagasta, con importantes disidencias, y la esterilidad del fraccionado republicanismo.

Inmediatamente después del discurso de Silvela en el Círculo Conservador de Madrid, Romero Robledo, su no menos histórico enemigo, que había dejado un año antes el partido que formara Cánovas a raíz del nombramiento del primero para su presidencia, publicó un artículo en *El Nacional* del 8 de enero de 1899 en donde exhortaba a la creación de una concentración de todas las fracciones liberales. Silvela y Polavieja —decía— «tienen la misma bandera que el partido carlista: reacción y regionalismo. La armonía que hemos pedido y defenderemos y creemos que prosperará en defensa de la Monarquía y de la nación, de toda la familia liberal, quedaría pactada y sellada el mismo día en que un Gobierno tal se constituyese ... *La inteligencia de todas las fuerzas liberales para levantar a la Patria del abismo en que cayó, se realizará en el Gobierno o en la oposición.* Por amor al país, pedimos a Dios que se realice en el Gobierno»³.

La idea de Romero, acaso sugerida por su oportunismo y su antigua enemiga al jefe de los conservadores, no era en realidad nueva. Antes que él, el 10 de diciembre de 1898, *El Nuevo País* había analizado las dos supuestas concentraciones de las que ya se hablaba entonces, formada una por Silvela, Polavieja y Martínez Campos, y la otra por Sagasta, Weyler, Canalejas y el propio Romero, y combatía, en nombre de los republicanos, la «conjura reaccionaria» que suponía aquella. Advertía, según reseñó *Heraldo*, «que una *Liga a la inglesa*, una *coalición* por ideas con sentido democrático, sería una aspiración simpática para los elementos radicales»⁴.

«De sus palabras dedúcese bien —comentó ahora el diario de Canalejas en editorial del 8 de enero de 1899 sobre el artículo de Romero Robledo— cómo para el brioso orador y jamás rendido combatiente, el camino está a la izquierda, es decir, en una concentración que modificara el programa liberal y reconstituyera sus huestes y su hechura»⁵.

La invitación de Romero tomó cuerpo inmediato. *El Correo*, de orientación sagastina, advirtió la influencia del general cristiano en Silvela que creía ver en las frases pronunciadas por éste el 7 de enero en el Círculo Conservador madrileño, en donde había pedido la representación gremial y se había referido además a la proclamación «de las enseñanzas religiosas y sociales que salen de los labios del Vaticano»; se lo reprochaba porque tales palabras podían alterar la paz espiritual del país⁶ (aunque, en verdad, el matiz de defensa católica ya había aparecido en el programa del Partido Conservador de 1898). En días sucesivos, la campaña siguió formalizándose. Aún en la primera quincena de enero del 99 —la noticia corría el 12—, algunos prohombres liberales se proponían entrevistarse con Sagasta para hacerle ver la conveniencia de trazar un programa de reformas anplio y radical, que constituyera la razón de ser del Partido Fusio-nista frente a las aspiraciones de Silvela y Polavieja. Y, también el 12 de enero, comenzó a hablarse de que Castelar preparaba un manifiesto, «del cual dicen que ha de producir impresión profunda y ha de tener verdadera trascendencia»⁷. «En él se hará al pueblo español un llamamiento para defender los democráticos ideales de don Emilio, y se comenzará la campaña contra las tendencias "reaccionarias y clericales ... de cierto partido político", aludiendo al de concentración conservadora»⁸.

La evolución de Castelar era importante y significativa para mostrar la trascendencia del replanteamiento de la cuestión religiosa. Hasta el declive del Partido Liberal, él había sido mentor y cerebro de Sagasta, según parece. La liberalización de la monarquía española en los años 80 era considerada por algunos como obra suya y, cuando, aprobado el sufragio universal, propuso el saneamiento de la Hacienda como nueva meta de los liberales, Sagasta lo había aceptado, encarnándolo en los presupuestos del año 93. Imposibilitado luego el proyecto de saneamiento por la guerra de Melilla, en septiembre de 1894 Castelar licenció sus huestes y se retiró de la política activa. Pero, a partir de entonces, una lenta evolución se había ido operando en el ánimo del tribuno. Todavía en septiembre de 1898 volvió a aconsejar a Sagasta en un *memorandum* un programa de contenido económico. Mas, desde 1896 al menos, venía recelando de la acogida de la reina a tradicionalistas y conservadores. Y, al cabo, este hecho redundó en un recrudecimiento de su republicanismo, precisamente a fin de siglo⁹.

El 19 de enero de 1899, Romero Robledo insistió en señalar, en declaraciones publicadas por *El Liberal* de Madrid, el peligro regionalista y el peligro «ultramontano» encerrados en el programa de Polavieja, que venía a plantear de nuevo, según él, la cuestión religiosa, y que hacían urgente la necesidad de una concentración liberal¹⁰. El 20, Valeriano Weyler, inquieto por hallar su puesto frente al general cristiano, se sumó a las declaraciones de Romero y aludió también al regionalismo y a la amenaza reaccionaria que la alianza suponía para el problema religioso. Asimismo, en el consejo de ministros del 21, Sagasta advirtió a la regente, según dijo la prensa, el peligro que suponía suscitar de nuevo esta segunda cuestión en el país y alentar el espíritu regionalista¹¹. Al mediar enero, en una carta que publicó *El Noticiero Universal* de Barcelona, Canalejas afirmaba por

fin que, en el discurso de Silvela del día 7, «resulta olvidada toda la su tancia democrática del manifiesto del general Polavieja, y se enuncia conceptos que *todos* los liberales y demócratas españoles estiman precu sores de una reacción que comprometería los progresos políticos realiz dos contradictoriamente desde 1868 hasta el día». «Yo no he de sustraern —añadió, completando así su cambio de orientación— a la *solidaridad* que entre *todos* los elementos liberales, desde la extrema izquierda a la e tremada derecha, establezca, dentro o fuera del Gobierno, la amenaza de un reacción, que considero el mayor mal de cuantos peligros se ciernen ho sobre España»¹².

En principio, ninguno de los miembros de la perseguida alianza pol viejista conservadora pareció dar importancia a la actitud de los lib rales. El 20 de enero, Silvela explicó en *El Liberal* que el acatamiento a l enseñanzas del Vaticano prometido en el discurso del Círculo Conserv dor no tenía ningún sentido político. No era una condición, dijo, para pe tener a su partido, si no expresión del talante cordial con que habían c resolverse las cuestiones sociales. Y, para mayor seguridad, prometió re petar el artículo once de la Constitución de 1876, que ofrecía toleranc para los cultos no católicos¹³.

Sin embargo, ni estas ni ulteriores declaraciones bastaron. Después c un nuevo artículo de Castelar en *Nouvelle Revue Internationale* mediad el mes de enero de 1899, en el que atacaba al regionalismo de la coalición¹⁴ el 7 de febrero *El Liberal* publicó otro escrito del prohombre republican en donde enumeraba sus cargos contra Silvela: «Su menosprecio de la d mocracia —decía—; su odio a las concentraciones democráticas; su creen cia de que las fuerzas populares del país propenden a don Carlos; su empi ño en ingerir dentro de nuestra política civil el Vaticano; los propósitos enderezados a destruir la enseñanza laica y sustituir las Universidades de Estado con Universidades de monasterio; las anatemas fulminantes despo didos sobre la institución del Jurado, con ánimo de malherir así los dere chos individuales como la soberanía nacional; todos los encarecidos pro yectos de aumentar las contribuciones indirectas porque pesan principa mente sobre las muchedumbres ciudadanas; el análisis quirúrgico de lo actuales comicios con el dañado fin de abolir el sufragio universal; esa resurrecciones de los gremios y corporaciones medioevales unida con e retroceso teocrático y con el restablecimiento de la vieja región feudal; hacen del jefe de los conservadores, tan mal avenido con las leyes mc dernas, un revolucionario, mientras de los republicanos, mejor avenidos co la presente legalidad liberal, conservadores verdaderos»¹⁵. El 27 de febre ro, publicaba otro artículo en *El Liberal*, en donde expresamente decí: preferir «a todas las soluciones una sincera concentración democrática en que puedan entrar sin escrúpulo todos cuantos aman la libertad y sir ven al progreso», para suceder en el Gobierno a Sagasta¹⁶.

El día 20 anterior, las Cortes habían rcabierto sus puertas y, de inmedia to, el asunto tomó estado parlamentario. El 22, en defensa de una petición de convocatoria de Cortes constituyentes, Salmerón ofreció el apoyo de los republicanos a quienes se enfrentasen con «esa conjunción del Vaticano y del espíritu reaccionario»¹⁷. Sagasta, remiso aún en aceptar la nueva orien

tación, contestó a las alusiones de Salmerón poniendo en duda que nadie pretendiera replantear la cuestión religiosa, que tanto había costado olvidar a los españoles ¹⁸, y Silvela, que intervino el 23, aseguró que, «entre las cuestiones que nosotros no necesitamos tocar y que seríamos unos insensatos si tocáramos, [la religiosa] está en primer término» ¹⁹. Pero, el 28, una nueva proposición, cuyas firmas encabezaba Romero Robledo y cerraba Adolfo Suárez de Figueroa, vino a mostrar que el acercamiento liberal era ya un hecho, aunque fuera tan sólo para reclamar del Congreso vagamente, entre otros extremos:

«Que cierre la puerta a la reacción, afianzando todas las libertades conquistadas, incluso, y en primer término, la de la conciencia.

Que no admita equívocos sobre el sagrado deber de conservar la unidad nacional, dictando leyes con carácter de generales para todas las provincias de nuestro territorio» ²⁰.

Parecían evidentes tanto la necesidad de defender las instituciones liberales, amenazadas por las declaraciones de Silvela, como el agobio con que se pretendía la concentración liberal, ante el desequilibrio entre el agonizante Partido Liberal Fusionista y la nueva Unión Conservadora, reforzada con Polavieja. Se perfilaba, pues, un tema de lucha que podía dar coherencia al frente liberal pero tan rotundamente defensivo que sólo podía ser esgrimido en la oposición o en una concentración circunstancial. El fusionismo no contaba, por tanto, con un verdadero programa. Y como, además, Sagasta comprendió que no contaba tampoco con mayoría en el parlamento, pidió a la reina, el 1 de marzo, la disolución de las Cortes. Después de las consultas usuales, María Cristina optó por el relevo y, el día 3, Silvela le entregaba la lista del nuevo Gabinete.

2. *El Gobierno de marzo*

Además de Polavieja, ministro de la Guerra, y de todas sus implicaciones religiosas, el Ministerio de marzo de 1899 contaba con otras figuras de significación comprometida: Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, en la cartera de Fomento, muy apoyado según Romanones por determinada orden religiosa ²¹ (lo que también se dijo del militar por los agustinos ²², sin claro fundamento), representaba, en opinión de Castelar, el «vaticanismo» del Gobierno, mientras el regionalismo, segunda característica, encarnaba en el ministro de Gracia y Justicia, Manuel Durán i Bas, ya conocido en todo el ámbito nacional por sus trabajos para codificar el derecho foral de Cataluña ²³.

Junto a ellos se alineaban elementos estrictamente conservadores: Durán mismo lo era, aunque su foralismo y el nacionalismo de su hijo, Durán i Ventosa, confundieran a la opinión madrileña. La presidencia del Consejo y el Ministerio de Estado quedaba a cargo de Silvela; Fernández Villaverde, al frente de la Hacienda; Dato, de la Gobernación, y de la cartera de Marina, José Gómez Imaz. De modo que, conforme había afirmado Silvela en el Congreso, a pesar de las oposiciones el Gabinete ofrecía un elenco de grandes posibilidades y había conseguido suscitar un movimien-

to de esperanza: «Se abría ante nuestro pueblo —escribiría Martín Alosó—, el horizonte de la ansiada reconstitución sobre las bases de la moralidad, la justicia y la vigorización de todas las fuerzas nacionales. El ansiado reorganización, de nueva vida, esperaba del jefe conservador acción vigorosa, energía sin desfallecimientos y perseverancia inquebrantable e los nobles propósitos» ²⁴.

Pero en su seno se manifestó pronto un segundo obstáculo —además del liberal—, nacido de su propia estructura. Las tensiones internas ya habían apuntado en enero de 1899, según vimos. En marzo, reaparecieron con nueva vitalidad. A los tres días de vida del Ministerio, en el nombramiento de gobernadores civiles del día 7, parece que Polavieja impuso la designación de varias personas, de las que se comentó con sorpresa que había ido a recibir instrucciones, no al Ministerio de la Gobernación, sino al de la Guerra, y dos días después, el 9, el mismo general debió llevar a la firma de la reina, sin previa consulta ni comunicación al resto del Gobierno, la designación de Jiménez Castellanos para la Capitanía General de Madrid con el consiguiente malestar de los demás ministros ²⁵. Si pudo proceder todo ello de la inexperiencia política del ex gobernador de Filipinas, quien se acusaba entonces de dejarse manejar por una camarilla «semifemenina, semiperiodística», bien pudo deberse también a un desacuerdo inmediato a la formación del Gobierno, nacido a la hora de distribuir los cargos. De hecho, la «cuestión de los puestos» constituyó entonces el centro de la tirantez en las relaciones entre silvelistas y polaviejistas ²⁶.

Durante el mismo mes de marzo, el militar montó, al parecer, en el Ministerio de la Guerra, con vistas a la campaña electoral, un verdadero gabinete político, dedicado a la organización de comités, del que salían, según protestó la prensa conservadora, «instrucciones telegráficas para candidatos y gobernadores que han de apoyarlos, contrariando en no pocos casos otras órdenes dictadas del Ministerio de la Gobernación» ²⁷. Y, en consecuencia, la obra del Gobierno quedó anquilosada desde el primer momento.

El 10 de marzo, a la semana de existencia, el Comité Ejecutivo de las Cámaras de Comercio visitó a Silvela para entregarle las conclusiones votadas por la Asamblea de Zaragoza y comunicarle que consideraba urgentísima su aplicación. Silvela se manifestó conforme; pero, a pesar del apremio, no creyó oportuno por el momento llevarlas a Consejo de Ministros y el día 13 inmediato el Comité volvió a reunirse por ello: «La comisión no se llama a engaño --declaró—. Si el Gobierno cree que va a entreteñerla con palabras nada más, se equivoca» ²⁸. De manera que los presuntos aliados y los adictos de marzo comenzaban a engrosar las filas de la oposición.

El hecho era más grave cuanto que los elementos catalanes ligados a Polavieja manifestaban vacilaciones parecidas. Es cierto que Silvela se hacía esfuerzos para atraerse la opinión de Cataluña. El 21 de enero, el *Diario del Comercio* barcelonés había notificado ya que, por imposición de Polavieja, aquél había desechado a Planas i Casals, encarnación para los catalanistas hasta entonces del régimen electoral caciquil en vigor, como jefe de los conservadores de aquellas provincias ²⁹. En los primeros días

del Gobierno, el asunto se concretó en el nombramiento de nuevo alcalde para Barcelona, cargo del que pendía, conforme al régimen imperante, el sistema electoral. Planas y los conservadores apoyaban la candidatura de Josep Coll i Pujol, «mostrantse bastant intransigents, amenassant en fer aquest assumpto qüestió de Gabinet», y «los silvelistas del senyor Ferrer y Vidal», presidente de la Junta de adhesiones a Polavieja, la de Ernest Vilaregut, con más disposición, al parecer, a dejar en libertad al Gobierno³⁰. «Curt de vista ha de ser —escribía por eso Prat de la Riba en *La Veu* el 13 de marzo— qui veja en la provisió de l'Alcaldia de Barcelona, un plet de personas, un conflicte de pretendents. ... De part d'en Planas hi va la pèrdua o la conservació del seu poder, que té totes sas arrels y treu tots sos medis de l'Ajuntament de Barcelona. De part dels altres hi va tot, perquè hi va lo compliment de la primera de sas promesas, la extirpació del caciquisme y perquè seguint en Planas de amo suprém de Barcelona, cap de las aspiracions del seu programa descentralisador podria veures plantejada»³¹.

El problema había sido llevado el día 11 al Consejo de Ministros; pero, tras una conferencia que mantuvo el jefe del Gobierno con Durán i Bas, el cargo recayó en el doctor Robert, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, no afiliado a ninguna organización política, aunque simpatizante de Polavieja y del nacionalismo. La noticia —dijo *La Veu de Catalunya*—. «si per una part significa la victoria de la moralitat administrativa y de la valua intelectual, representa per altra banda la derrota del caciquisme»³².

Acaso para alentar también la adhesión del Principado, había sido gestionado asimismo el nombramiento de monseñor Morgades como obispo de Barcelona y, para sustituirlo, Torras i Bages en el episcopado de Vic, y el 19 de abril, *La Veu* pudo notificar ambas designaciones³³. Fino cultivador de la tradición catalana el nuevo prelado vicense³⁴, era por su parte Morgades hombre activo, que tal vez figuraba en la línea regionalista más descomprometida —pese a la filiación catalanista que se empeñaron en atribuirle los círculos madrileños— y estaba relacionado con la burguesía adicta a Polavieja³⁵. De modo que ofrecía un digno contrapunto jerárquico —simbólico, mas no comprometedor— de la presencia de Durán i Bas en el Gobierno e incluso de Robert en la alcaldía de la ciudad condal.

Pero el entusiasmo con que los nacionalistas acogieron estas medidas no bastó a hacerles confiar en la gestión del Ministerio. El 4 de abril Prat de la Riba publicó en *La Veu* su «*Llissó de historia*», en donde recordaba cómo Silvela, ministro de la Gobernación del Gobierno Martínez Campos en 1878, había sido uno de los que se opusieron, desde el mismo seno del Ministerio, al cumplimiento de la política autonómica ofrecida a Cuba por aquel general³⁶.

En marzo de 1899 el Gobierno aparecía ya, por tanto, inutilizado por el enfrentamiento de sus antiguos simpatizantes y por la escisión de sus miembros. Y, en cambio, la oposición liberal crecía en coherencia, continuamente reanimada por Castelar, que culpaba a Silvela de «concertar una

alianza con los peores enemigos de nuestras libertades, con todos los elementos reaccionarios, sintetizados en el general Polavieja»³⁷.

Durante la segunda quincena de abril, la prensa más inquieta, monárquica incluso, había continuado haciendo eco a las manifestaciones del orador republicano, no tanto acaso para acatar su jefatura como para mostrar conformidad con la nueva orientación defensiva a que invitaba. En la noche del 5 de mayo un grupo de los antiguos seguidores de Castelar (Pérez Costales, ex ministro de 1873, el progresista Sol y Ortega y Martí de Olías, el director de *El Globo*, entre otros) le dirigió un mensaje de adhesión y de ánimo por su retorno a la política activa, leído ante él por Miguel Moya, director de *El Liberal*. Señalaban el peligro de muerte que corrían las instituciones democráticas conseguidas por el posibilismo a estar ahora en manos de «gentes venidas al Gobierno con sorpresa del país por conjuras clericales, al amparo de soberbias palatinas y satisfacción cortesanías»³⁸.

Castelar les respondió justificando, en efecto, su regreso político en el peligro que corrían aquellas libertades. Pero también advirtió que no pretendía ir más allá: «Así, volviéndonos a nuestra derecha, debemos decirle que no subsistirán los poderes extraños a la sociedad, si repugnan unirse y legitimarse con el óleo de la soberanía nacional; y a nuestra izquierda que no sueñe con fórmulas redentoras, por ningún pensador inventadas, que no caiga con los más reaccionarios de la Monarquía en proponer dentro de la República una trucidación de nuestro Estado único, predecesor de igual trucidación de nuestra España una.» «A nuestra derecha, que no suprimirá el presupuesto universitario; y a nuestra izquierda, que no suprimirá el presupuesto eclesiástico. A nuestra derecha, que en medio de la libertad científica existirá una escuela oficial; como a nuestra izquierda que en medio de la libertad religiosa existirá una oficial Iglesia.» «Desecha toda idea —concretó— de fundar una República con los republicanos solos y para los republicanos solos; es la República como el sol para todos los españoles, forma suprema de la libertad y del derecho»³⁹.

Pretendía, por tanto, mantener unas conquistas alcanzadas casi dieciocho años antes, en peligro ahora, sin señalar ninguna otra meta. Y *Heraldo de Madrid*, que aplaudió los propósitos democráticos del orador, lo advirtió con toda claridad: «Es un error —dijo en su editorial del 7 de mayo de 1899—, un error sin disculpa pensar que una gran concentración democrática sólo debe limitarse a una especie de "defensiva" sin arranque y sin otro fin que el de contrarrestar las maniobras gubernamentales de los ministros del señor Silvela»⁴⁰. Faltaba, pues —y *Heraldo* no lo hacía aún— constituir un nuevo programa que encauzase la inquietud recién nacida con metas más concisas.

Castelar no pudo estar presente en el desenvolvimiento de su llamada. Aquejado, al menos desde la primavera de 1898, de una enfermedad no bien diagnosticada, con dolencias y paralizaciones reumáticas, según unos, y una bronquitis catarral aguda, según se dijo entonces, murió en San Pedro del Pinatar, en la finca murciana de unos amigos, durante la madrugada del 25 de mayo de 1899⁴¹. Para entonces la esterilización del Gabinete, por unos y otros, ya había dado pie para que, desde abril, se comenzase a

hablar de crisis: «Silvela —había dicho *Heraldo de Madrid* el 22— ha considerado siempre a los elementos polaviejistas como una impedimenta peligrosa que es necesario abandonar en el primer alto del camino; Polavieja, que no lo ignora, ha pretendido aprovechar el tiempo apercibiéndose para una batalla que no llegará a darse» ⁴².

La solución se hizo inaplazable cuando el roce en los nombramientos pasó a ser incompatibilidad entre los programas, mal asimilados sobre todo en la cuestión económica. El saneamiento de la Hacienda había constituido un compromiso fundamental de la Unión Conservadora desde su formación y Fernández Villaverde, que representaba esa intención en el Gobierno, pretendía alcanzar la nivelación presupuestaria mediante impuestos a los bienes de consumo y economías en las partidas de gastos. La primera de estas dos medidas había de quebrantar intereses de la burguesía, y la segunda, la disminución de los gastos, tendría que obstaculizar por fuerza los proyectos militares de Polavieja.

En enero, las dos partes de la coalición habían admitido la política de economías y las dos habían prometido la reorganización del ejército; pero ninguna detalló la manera de realizarlo. De ahí que, en abril, al plantear el asunto en el seno del Gobierno, se manifestase una abierta incompatibilidad entre la política de Villaverde y los propósitos del general, que pedía un aumento de treinta y tres millones de pesetas en el presupuesto de la Guerra. «Parece que tanto el señor Villaverde como el general Polavieja —advirtió *Heraldo* el 27— mantienen con tesón sus respectivos puntos de vista, y que el señor Silvela no creyó prudente tratar del asunto en el Consejo de ayer, apelando al sistema de los aplazamientos, que tanto se ha censurado al señor Sagasta, para ir ganando tiempo y buscar una transacción que impida por ahora el planteamiento de la cuestión política» ⁴³. Transacción más difícil desde el momento en que, el 22 de mayo, Polavieja firmó una exposición dirigida a la reina en la que proponía la presentación a las Cortes de un presupuesto extraordinario para los gastos de fortificación de costas y fronteras, que ascendían a ciento sesenta millones de pesetas ⁴⁴.

3. La política de realidades

A pesar de las seguridades dadas en un principio por Silvela e incluso por el general Polavieja, la pretendida concentración liberal tuvo bien pronto hechos concretos en los que fundar su oposición. El 5 de mayo de 1899, Castelar había hablado de la reacción en la enseñanza oculta bajo «el antifaz de la libertad», y, ciertamente, la frase era perfectamente comprensible como respuesta al significado del apellido Pidal, que presidía el Ministerio de Fomento. La reacción —advirtió el orador republicano en el mismo discurso— «por un modo jesuítico pretende presentar satisfacciones a las ideas más radicales, al suprimir la enseñanza oficial o rodearla de competencias artificiosas insuperables que la entregan completamente al clero, aupado hasta las antiguas cátedras y director de la instrucción por innumerables y artificiosos privilegios» ⁴⁵. Por esto, la opinión

liberal había recibido con inquietud los rumores que se empezaban a palpar antes de mediar mayo sobre una reforma de la segunda enseñanza en sentido conservador.

Publicada en la *Gaceta* del 30, el nuevo plan se inspiraba en efecto en la tradicional educación humanística basada en el estudio de la cultura clásica. Estipulaba cuatro cursos de Religión y seis para el Latín, además de exigir el conocimiento del catecismo para el examen de ingreso en Bachillerato, en tanto reducía los estudios científicos y los de lenguas vivas ⁴⁶.

Pi y Margall llegó a tachar la reforma de «verdadera infracción constitucional» ⁴⁷ por impedir la tolerancia religiosa. «Aunque se esperaba que estuviesen inspiradas en un espíritu reaccionario —afirmó de las nuevas disposiciones *Heraldo*—, nadie creía que el marqués de Pidal y el señor Hinojosa [director general de Instrucción Pública] hubieran llegado a tanto» ⁴⁸. Salmerón aseveró del primero que había demostrado «inaudito atrevimiento arrojándose a reformas tan ultraclericales» ⁴⁹.

No quedaba clara, con ello, la actitud de Silvela. Y, al menos desde entonces, comenzó a perfilarse cierto empeño transigente en él. El 12 de junio, la discusión del acta de diputado de Miguel Morayta, acusado de favorecer la separación de Filipinas como dirigente de la masonería española, acabó con la admisión del gran maestre, declarada con ciertas irregularidades por el presidente de la sesión, el conservador ex liberal García Alix. Cinco procuradores adictos al ministro de la Guerra, un integrista, un carlista y siete independientes suscribieron incluso un voto de censura contra García Alix por ello ⁵⁰.

Desde abril, la prensa de la oposición venía acentuando además su enfrentamiento al Gobierno, en Cataluña sobre todo, en torno a la política económica que esperaba de Villaverde. A partir de los primeros días de mayo, corrió el rumor de que el ministro de Hacienda pensaba establecer nuevos impuestos en la contribución territorial e industrial y se dio por decidido que el Gobierno no pensaba atender las peticiones de la Asamble de las Cámaras Agrícolas y de Comercio ⁵¹.

A decir verdad, el Gabinete no había dado comunicación oficial alguna de sus propósitos hacendísticos. En el mensaje del trono leído en la apertura de las Cortes, el 2 de junio, la reina había afirmado que era la Hacienda el objeto primordial del Gobierno, sin otro comentario, y, a renglón seguido, prometió «proyectos de ley que reorganicen nuestras fuerzas militares de mar y tierra sobre la base del servicio general obligatorio y completen las defensas de costas y fronteras», «que lleven amplia descentralización a la administración provincial y municipal» y que consigan «la fijación definitiva de las instituciones forales que se deban conservar en el derecho civil y las alteraciones que la experiencia ha evidenciado como precisas en el Jurado, en la justicia municipal, en el Código de Comercio, en la Ley Electoral y en la de Incompatibilidades», entre otras medidas, si referirse para nada a los nuevos impuestos ⁵². Pero, el 17, don Raimundo Fernández Villaverde leyó a la cámara el proyecto de presupuesto para 1900, ejemplo de estudio trabajado, con el que pretendía sanear la

moneda y convertir la deuda de Ultramar en deuda interior ⁵³, arbitrando medios para resolver el problema crucial de la economía española, que el propio ministro resumió ante el Congreso: «en un presupuesto en déficit y cuyas rentas públicas no exceden en recursos permanentes, verdaderamente ordinarios y anuales, de 750 millones, encontrar 300 millones de pesetas [que constituían la deuda del Estado] reorganizando los gastos y aumentando los ingresos». Para ello proponía «dotar el presupuesto con rentas anuales, permanentes, a fin de ofrecer ... esa garantía al crédito público» y, al mismo tiempo, «enlazar de una manera indisoluble las cuestiones relativas al crédito con las relativas a los presupuestos». Concretaba el primer punto en una larga serie de proyectos de ley, entre ellos los de reforma en la contribución industrial y de comercio, contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria y otros que afectaban a la cuantía de algunos impuestos ⁵⁴.

Ante la nueva legislación, la amplia oposición liberal y burguesa reaccionó de inmediato. La comisión permanente de las Cámaras de Comercio promovió para el 21 de junio de 1899 una manifestación antigubernamental en toda España, puntualmente secundada en Cataluña con el mitin del teatro Novedades y la tumultuosa protesta que Barcelona presenció aquel día; invitó a los contribuyentes a negarse a pagar las cargas propuestas y organizó un cierre de tiendas en toda España para el día 26 siguiente. Sevilla, Valladolid, Reus, Valencia y Murcia fueron los focos principales de los disturbios. Pero los hubo, sobre todo, en Zaragoza, donde el 26, 12.000 personas, entre obreros, industriales y comerciantes, se pronunciaron colectivamente contra el Gobierno, enfrentándose con la fuerza pública en un choque sangriento, que forzó la declaración del estado de sitio y prosiguió durante el 27 y el 28 ⁵⁵.

El mismo 26 de junio, la comisión de las Cámaras de Comercio había presentado al Congreso una exposición, en la que decía considerar los proyectos económicos de Villaverde «una lamentable equivocación en lo que al capítulo de ingresos se refiere, y un golpe certero contra la integridad de la patria, respetuosamente hablando, en lo que al capítulo de gastos concierne». Por ello, creía indispensable «que la cifra de los gastos se reduzca en una cantidad que no baje de *pesetas ciento cincuenta millones*» ⁵⁶. Pero Silvela manifestó que el Gobierno no estaba dispuesto a ceder en nada ⁵⁷; actitud tanto más peligrosa cuanto, de aquella coyuntura, el liberalismo iba a ganar, al fin, un programa concreto.

En los tumultos del 26 de junio, a raíz del cierre de tiendas, parece se advirtió «la intervención de agitadores de oficio, con miras extrañas al objeto de la protesta, en actos y gritos hostiles a las órdenes religiosas, en particular contra la Compañía de Jesús» ⁵⁸, sobre todo en Sevilla y aún más en Zaragoza. Aquí, desoída por el gobernador civil, la multitud había acudido al colegio de los jesuitas para incendiarlo y, al impedírselo las descargas del ejército (se habló de siete muertos y de más de treinta heridos), pretendió entrar en el templo del Pilar para apoderarse de la espada que Polavieja había puesto a los pies de la Virgen a su regreso de Filipinas ⁵⁹. En Valencia, la propia casa de la Compañía fue así mismo ame-

nazada por los amotinados. En Barcelona, grupos de manifestantes lanzaron piedras contra el palacio episcopal y amenazaron varias iglesias. «No consta —aseguró después *El Iris de Paz*— que en Zaragoza se compraron al precio de tres, cuatro y cinco duros, los brazos sicarios que forzaron la residencia de los PP. Jesuitas y aplicaron a sus puertas la tea incendiaria».

Nos consta que en Barcelona fueron asalariados también los muchos que apedrearon por la calle a indefensos religiosos y vociferaron villanamente contra los conventos» ⁵⁰ b.

Ciertamente, no era la primera vez, en la nueva campaña, que la Compañía era objeto de ataques. En noviembre del 98, según vimos, *La Publicidad* había asegurado su participación en el encumbramiento político de Polavieja y en la aproximación a él de elementos católicos de las provincias vascas y de Cataluña (aquí con la participación del marqués de Comillas). Durante el mismo año de la derrota, se les acusó también de proteger las maquinaciones belicistas del carlismo, hasta el extremo de que María Cristina había escrito al general de los jesuitas para que lo evitase. Aunque el padre Martín negó insistentemente esos temores ⁵⁰, que, en verdad, no eran tan verosímiles como su apoyo al militar.

En los primeros meses de 1899, en efecto, la colaboración de la Compañía con éste parecía estar en la mente de bastante lelementos radicales. Ante el nombramiento de Torras i Bages, *El País*, de Madrid, había hecho este comentario, significativo en su exageración: «Política vaticana, ténase muy presente, es política separatista, y separatistas son Nocedal, Polavieja, el P. Montaña, los jesuitas, bastantes obispos, todos los frailes y gran número de carlistas, los que han aceptado la unión con Nocedal y Polavieja.» «La verdad pura y amarga —concretaba— es que desde el aniquilamiento intelectual de León XIII, Rampolla, enemigo de España y amigo de los extranjeros que desean su ruina, ha rectificado la política amplia del sabio anciano sustituyéndola con la suya, estrecha, baja, miserable y retrógrada, inspirada en los fines de los jesuitas» ⁵¹.

En realidad, la propia jerarquía hubiera corroborado una parte de estos temores: «la cosa —escribía en 1895 el cardenal Cascajares al secretario de la reina— es destruir las intrigas y enredos de Rampolla, que tiene como secuestrado o cosa así al Papa, y no le dice más que lo que conviene a sus fines» ⁵². Y un sacerdote carlista sugería asimismo, en 1899, que los escritos leonianos de los últimos años, sobre la política de *ralliement*, ante todo, permitían dudar incluso que hubieran sido redactados por el Pontífice, «que no parece estar ya para escribir Encíclicas *Aeterni Patris*», con expresa alusión a Rampolla ⁵³.

La violencia contra la Compañía aparecía ahora envuelta en circunstancias que, a los menos comprometidos, parecieron extrañas. Los sucesos de junio de 1899 que provocaban aquellas manifestaciones anticlericales expresaban en buena parte las tendencias burguesas atraídas por Polavieja, que, cuando no se habían declarado al margen de asuntos confesionales, como hizo Costa ⁵⁴, habían contribuido precisamente a provocar, con su sola presencia, la inquietud del liberalismo. «A última hora del sábado —escribía por eso, privada e ingenuamente a su obispo, un presbítero de

Manresa el domingo 10 de julio, ante el giro de una protesta contra los impuestos— me anunciaron que se notaba alguna agitación y se oían bravatas contra los PP. Jesuítas y Clero (como si nosotros tuviéramos que ver con los presupuestos)»⁶⁵ ...

Desde el mismo momento de los ataques, la opinión católica, incluso la antipresupuestaria, los atribuyó unánimemente a la masonería, favorecida por el Gobierno «*ab les seves debilitats en lo den Morayta*»⁶⁶; porque «*la reacció que representava el ministeri Silvela-Polavieja-Durán-Pidal queda vençuda y a discreció dels francmasons el dia en qu'en Morayta fou acceptat en el Congrés mercè a un pucherazo den García Alix y, naturalment, la francmasoneria no ha volgut dixer de traure profit d'aquella gran victoria*»⁶⁷.

También la jerarquía eclesiástica, generalmente, y de modo oficial, atribuyó entonces los sucesos a la organización masónica, que acababa de librar una batalla semejante en su apoyo al nacionalismo filipino con el propósito de terminar con el irregular dominio de las órdenes religiosas en aquel archipiélago.

En verdad, los sucesos anticlericales de junio de 1899 pudieron parecer una contestación inmediata de la masonería a la oposición violenta que, por aquella intervención en Ultramar, polaviejistas, carlistas e integristas habían presentado en el Congreso, en las sesiones de los días 10 y 12, para impedir la admisión del gran maestro del Oriente Español, Miguel Morayta. Este, por otra parte, era de quienes difundían con más empeño las acusaciones sobre la protección de los jesuitas al general cristiano. El propio Polavieja había insistido en la culpabilidad de aquella organización en el separatismo mientras desempeñó la gobernación de Cuba y Filipinas. E incluso el objeto principal de los nuevos atentados no era sino el supuesto enemigo capital de la masonería: la Compañía de Jesús que, en opinión de Krause, divulgada entonces por Morayta, había formado, precisamente con aquella sociedad, el motor de la historia de los siglos XVIII y XIX⁶⁸.

Discutible es, con todo, si en los últimos años de la centuria, las organizaciones secretas, legalizadas por los gobiernos liberales como toda asociación y desprovistas así de buena parte de su carga misteriosa, tenían suficiente fuerza en España y podían, por tanto, mantener una potente ofensiva. Según Lerroux, que ingresó en ella entonces, la masonería de finales de siglo, de la que «se contaban maravillas entre los muchachos de imaginación exaltada y temperamento revolucionario», no tenía misterios «ni otra cosa alguna de las que yo esperaba encontrar»: «había perdido su condición de eficacia en una crisis moral que estalló como una cloaca que revienta ... la mayoría de los actores eran desocupados, *hojalateros* y tontos de capirote, o tunantes que explotaban a los otros»⁶⁹. Y la misma nota decadente señalaron hombres poco sospechosos, como Menéndez Pallarés⁷⁰ o Pi y Margall⁷¹, por aquellos años. Aunque también es cierto que, cara a la provocación de una agitación callejera, las sociedades masónicas españolas podían contar con cierta fuerza, a tenor de estas cifras de 1894⁷².

<i>Centro organizador</i>	<i>Logias</i>	<i>Afiliados</i>
Gran Oriente Nacional	239	20.000
Gran Oriente Ibérico	148	22.000
Gran Logia Simbólica de Sevilla	64	4.600
Gran Oriente Español	—	16.000
Gran Consejo Ibérico	80	2.300
TOTALES	531	64.900

Mostraban, de otra parte, síntomas de expansión. Del Gran Oriente Nacional sabemos que tenía 12.528 afiliados en 1880, 14.358 en el 82 y 20.000 en el 94; 149 logias en el 80 y 239 en 1894 ⁷³.

En todo caso, si colaboró en la agitación de junio de 1899 hubo de haberlo al unísono de otras fuerzas radicales y de la campaña político-religiosa que, también durante los últimos días de aquel mes, comenzaron a promover personajes de distinta tendencia, como Canalejas y Blasco Ibañeta, de común acuerdo, al parecer, con la intención sabida de crear un ambiente propicio al replanteamiento parlamentario del problema.

El 30 de junio, y a petición del primero ⁷⁴, Blasco comunicó al Congreso que un periódico republicano, *El Porvenir Navarro* de Pamplona, había denunciado, en un colegio dirigido por religiosos, hechos realizados «contraviendo las leyes de la naturaleza y faltando a la decencia de las costumbres» ⁷⁵. En la misma sesión y en la siguiente, el republicano Sol y Ortega y Romero Robledo subrayaron por otra parte la necesidad de disminuir el presupuesto de gastos eclesiásticos ⁷⁶, dando pie así a que, el 5 de julio, Canalejas replanteara el asunto en el discurso que fue llamado «de los cinco ismos» ⁷⁷, durante la ritual discusión de la respuesta al mensaje de la corona: «Cinco notas capitales —indicó en él el que fuera aliado de Polavieja— constituyen la síntesis de la política de este Ministerio; y esas notas son... el *reaccionarismo* que se expresa en los últimos párrafos del discurso regio; el *clericalismo*, de que pronto hablaré; el *militarismo* ...; el *regionalismo* ... y el *capitalismo*, que es la nota característica del nuevo presupuesto.» «Desde hace mucho tiempo —concretó sobre el segundo punto—, desde que la ley de asociaciones del partido liberal, modificando el estado de derecho que sostuvo el Concordato, dejó desenvolverse en España ciertas instituciones religiosas; desde que el partido liberal ... estableció ... la enseñanza de la religión en los institutos; desde que el partido liberal, interpretando (yo soy responsable de ello en toda su integridad) la definición de un artículo del Código civil, dejó plena la facultad de adquirir; desde que, en suma, cedieron todos aquellos elementos, con el ansia y el deseo de que no volviera a reproducirse en España jamás, ni ensangrentando los campos, ni perturbando las conciencias, ni procurando disturbios en los hogares, ningún género de lucha religiosa, esas fuerzas fueron ganando el terreno que les abandonaban los elementos liberales, justo es decirlo, más propicios para pronunciar discursos, organizar *meetings*, más entusiastas para hacer profesiones en la prensa, que

solicitos en procurar instituciones docentes y educativas que apoyen a las confesionales.» Por eso, ante la situación creada al amparo de la pasividad liberal, el instinto del pueblo «en ocasiones dirige, y es tristeza, todas las iniciativas de su agresión, todas las acometividades de sus impulsos de protesta, contra ciertas órdenes que habían disfrutado de la paz y del respeto absoluto de los españoles, hasta que en mal hora se quiso hacer un arma de gobierno, un arte de influencia política de los institutos religiosos» ⁷⁸.

Tras el discurso de Canalejas, técnicamente magistral por cierto entre los suyos, el anticlericalismo callejero del 26 de junio de 1899 tenía al fin argumentación concreta para subsistir como política. El orador había advertido que la ley de asociaciones, donde se reconoció este derecho a la Iglesia, había lesionado el Concordato, que sólo autorizaba unos institutos religiosos determinados. Y señalaba también el peligro de la acumulación de la propiedad en manos de los frailes. La cuestión religiosa empezaba, pues, a tener razones precisas y podía comenzar a ser motivo de inquietud para la Iglesia. En julio, los obispos de Granada y de Málaga dirigían sendas cartas públicas a Silvela en las que protestaban, entre otras cosas, de «la glorificación y desatentada apoteosis que de día en día recibe la gran impiedad de nuestra época, la masonería», y de «las proposiciones contra las Ordenes religiosas y, especialmente, contra la esclarecida Compañía de Jesús» ⁷⁹ a que nos hemos referido. En agosto, en cambio, cuando la corte veraneaba en San Sebastián, varios elementos republicanos proyectaban la celebración de un mitin en la capital guipuzcoana para reclamar la expulsión de los miembros de los institutos de perfección y la revisión de los famosos procesos de Montjuic ⁸⁰, tema palpitante de los últimos años del siglo XIX, porque acusaba a las autoridades del castillo de haber atormentado a la mayor parte de los 87 individuos procesados a raíz del atentado anarquista de la calle de Canvis Nous, ocurrido el 7 de junio de 1896.

En el replanteamiento, por tanto, de la cuestión religiosa venían a acumularse, en sucesivas fases, motivos y objetivos distintos. Junto al motivo inicial de estricta defensa democrática que Castelar había encarnado, habían surgido los argumentos especialmente antijesuísticos del radicalismo y, en última síntesis, la concreción del nuevo programa que necesitaba el liberalismo en las órdenes y congregaciones religiosas, por obra de Canalejas. Más confusa fue, en cambio, la evolución del pensamiento de éste desde su alejamiento de Polavieja. Es posible que, en parte, hubiera en él un movimiento de revancha y un efectivo desacuerdo con la intromisión política de los regulares, si existió. En sus esquemas intelectuales, bien pudo estar presente también (y ésta es una hipótesis de interés) la enemiga a la enseñanza religiosa, cuyos colegios simbolizaban la educación tradicional y tradicionalista contraria a sus renovadores propósitos, de la Institución Libre de Enseñanza, uno de cuyos predecesores, el catedrático krausista Francisco de Paula Canalejas, republicano posibilista y tío del político, había ejercido sobre éste notable influencia ⁸¹. Pero, en todo caso, parece claro que se trataba de dotar de un objetivo preciso —reclamado

ya, según vimos, por *Heraldo de Madrid* en mayo anterior— a la conjunción liberal que todos deseaban.

Sobre este último punto, se acusaría pronto a Canalejas de imitar :vilmente el ejemplo de Francia, en la política antirregular del Gobierno Waldeck-Rousseau. Pero, al menos para la primavera de 1899, la afirmación no podía ser convincente. El Gabinete francés de defensa republicana había sido constituido, sí, en junio de aquel año; pero no parece que jefe del Gobierno se pronunciase en pro de la limitación de los religiosos hasta septiembre. Entre radicales y masones franceses, según Sorlin, había protestas relacionadas con ese extremo ya en 1898, centradas, obstante, en la «invasión clerical» conseguida por los centros religiosos de enseñanza y por la formación derechista que en ellos recibía la juventud francesa. Pero, hasta el otoño de 1899, las proposiciones de aquellos sectores se encaminaron sólo, al parecer, a la búsqueda de soluciones legales —el *certificat d'études* sobre todo— que evitasen el monopolio educativo de las comunidades ⁸². Canalejas había sentido siempre —esto es negable— una atracción poderosa por los esquemas intelectuales y políticos de Francia, cuyos planteamientos, sin duda, sí influyeron en los españoles a partir del invierno de 1900 a 1901. Pero, en los sucesos del 99, difícil ver algo más que la coincidencia cronológica en una misma solución —la limitación de la influencia religiosa— para un mismo problema —la atomización liberal, en Francia y España, frente a la pujanza de las posturas moderadas ⁸³.

4. Crisis definitiva

Los rumores de crisis en el Gabinete Silvela-Polavieja se acentuaron menos desde julio de 1899, sobre todo por el desacuerdo entre los gastos necesarios en el Ministerio de la Guerra y la orientación hacendística. Tan firmes eran las posturas que el millón de pesetas que la reina puso de su propio pecunio a disposición del ministro de Hacienda el 14 de julio no pudo hacer ceder a los ministros ⁸⁴.

La oposición antigubernamental de regeneracionistas y catalanistas a la crisis interna eran cuestiones, además, estrechamente unidas entre sí.

«Si alguien tenía compromisos o había sostenido ideas favorables al concierto —dijo la prensa oficiosa de finales de julio ante la reclamación del concierto económico con la Diputación de Barcelona, prometido según los polaviejistas catalanes por el Gabinete—, serían en todo caso compromisos particulares, pero que no pueden estimarse colectivos de todo el actual Gobierno» ⁸⁵. Y, por las mismas fechas, Villaverde telegrafió al presidente del Fomento de Barcelona para negarle rotundamente que él hubiera prometido jamás el concierto «ni aun la esperanza más vaga de una autonomía fiscal» ⁸⁶.

La escisión del Gabinete llegó a tal extremo en agosto, que se habló incluso de una intriga, negada después por Dato, en la que participaban personajes ministeriales, para conseguir la dimisión de Polavieja ⁸⁷. Finalmente, en el primer consejo celebrado después de la vacación veraniega

el 20 de septiembre, el dilema fue planteado en toda su acritud ⁸⁸. Con objeto de hacer una demostración de fuerza al resto del Gobierno, según se dijo, el 23 por la noche el ministro de la Guerra se hizo visitar por jefes y oficiales de la guarnición de Madrid, que acudieron al Ministerio en número superior a los ciento treinta, para manifestar su apoyo a la postura de don Camilo ⁸⁹. En el consejo del 25, el general sometió formalmente a estudio su presupuesto, en el que rebajaba tan sólo tres millones, y el extraordinario para la fortificación. Pero Fernández Villaverde se opuso por completo y anunció su dimisión si el departamento de Guerra no aumentaba las economías hasta casi veinte millones de pesetas, para llegar a los cuarenta que quería retirar del total pedido a las Cortes, según comunicó el 26 por carta al propio militar ⁹⁰. Por último, en el consejo del 28, hizo leer éste un amplio informe en donde pretendía demostrar que le era imposible economizar más dinero sin desorganizar los servicios ya establecidos ni lesionar intereses del personal ⁹¹. En vista, pues, de que no se podía llegar a ningún acuerdo, todos los ministros entregaron la renuncia de sus cargos a Silvela para facilitar la resolución de la crisis, que acabó el 30 con la salida de Polavieja y la inclusión de Azcárraga en la cartera vacante ⁹².

El Nacional publicó un artículo hiriente, pero expresivo, sobre el suceso: «Se va del ministerio solo, completamente solo, despedido como un huésped molesto, como un criado cuyos servicios no considerara útiles el amo que le paga, sin producir en su caída la más ligera conmoción, sin que nadie le salude al paso agitando en el aire un pañuelo» ⁹³. «Cayó —escribiría Pi y Margall— sin haber hecho nada de lo que para la regeneración del país propuso ... Sin aparato alguno, sin previas consultas, sin vacilaciones de ningún género»; también sin el auxilio de Palacio porque «lo vedó el juego de las instituciones» ⁹⁴.

Más tarde, Romanones atribuyó la caída a la disconformidad de Martínez Campos con el ministro de la Guerra, «al cual desembarcó del palacio de Buenavista cuando le vino en gana, no sin producir verdadero disgusto a doña María Cristina, que tenía en mucho las condiciones del héroe de Parañaque, y fundaba en él grandes esperanzas». «Polavieja —añadiría después—, a pesar de su buena voluntad y de sus proyectos de organización militar, por no perder sus ilusiones en una soñada jefatura, perdió la confianza que la Reina, como bastantes otros, había puesto en él» ⁹⁵.

Quedaba, de la conjunción, Durán i Bas. Y, de él, aludiendo a su hijo, el catalanista Durán i Ventosa, dijo inmediatamente *El Imparcial*, al notificar la dimisión de Polavieja en el número primero de octubre, que su nombre iba «unido al de algunos colaboradores o simpatizantes de *La Veu de Catalunya*, donde se leen a diario cosas que no puede leer un patriota sin viva indignación» ⁹⁶. La realidad era que el ministro había aconsejado a su hijo que se abstuviera de toda actividad catalanista mientras él permaneciese en el Gobierno; consejo que Luis Durán i Ventosa siguió al parecer fielmente. Sin embargo, la sola filiación ideológica del hijo bastaba para que algunos elementos no catalanes creyeran nacionalista a su padre ⁹⁷. «El señor Durán y Bas —advertía, por eso, *El Imparcial* de Madrid— nos merece personalmente toda especie de consideraciones, pero la represen-

tación de sus compromisos nos preocupa como españoles ... En Barcelon sería un poderoso elemento de concordia. En la calle Ancha de San Bernado puede ser un peligro para el porvenir» ⁹⁸.

Se le trazaba, pues, el camino para marchar. Y el motivo para hacerlo no se hizo esperar tampoco. La decisión del comité de las Cámaras de Comercio adoptada en junio para resistir el pago de los impuestos con «cierre de cajas» —el *tancament de caixas* catalán— había sido aplaudida por la oposición burguesa durante todo el verano. Y fue corroborada primeros de octubre, ante el decreto de embargo a los contribuyentes que no habían pagado, por una campaña de *La Veu de Catalunya*, que culminó con la negativa del doctor Robert, alcalde de Barcelona, a firmar los procedimientos de embargo. El escándalo acabó con la dimisión del alcalde presentada el día 12, y con la del propio ministro de Gracia y Justicia. Este se disculpó en que consideraba insuficientes las medidas de descentralización administrativa proyectadas por Silvela, y dimitió el 23, para ser sustituido por el conde de Torrealanaz ⁹⁹.

De esta manera acababa la aventura política de Camilo Polavieja. En el principado, Prat y los suyos fundaron el *Centre Nacional Català*, y los burgueses polaviejistas formaron la *Unió Regionalista* durante el mismo mes de octubre ¹⁰⁰, para seguir abogando por el concierto económico prometido. Algunos engrosaron más tarde las filas de la Unión Nacional ¹⁰¹ de Paraíso y Costa, constituida en la asamblea de Valladolid el 14 de enero de 1900. Por último, el 14 de diciembre de este mismo año, el general consideró disuelto su grupo, y únicamente algunos de sus partidarios rechazaron el fracaso; parece eligieron como jefe a Mataix ¹⁰². Polavieja, enfermo del hígado y de estómago, perdida otra vez la vista ¹⁰³, no volvió a la vida pública sino incidentalmente. Se limitó a acudir a algunas reuniones de ex ministros conservadores y a insistir en los proyectos de reorganización militar en los que había fracasado. Todavía en junio de 1901, expuso al Senado la necesidad de realizar aquel plan de fortificaciones que pretendió el Gobierno, y así lo manifestó también a Sagasta y a Silvela. En 1905, el empeño en la reina madre en nombrarle jefe del Estado Mayor Central dio al traste con el Gobierno de Maura, que no aceptó la imposición ¹⁰⁴. Pero nada más.

Solo en Cataluña, donde la opinión tendió quizás a disculpar su fracaso por la oposición que había encontrado en el Gabinete ¹⁰⁵, pudo notarse de inmediato la influencia de su paso por el Ministerio, que ha sido concretada en seis aspectos: «Desplazamiento de la burguesía y de las clases económicas, iniciado por los polaviejistas, hacia el Catalanismo; idéntico desplazamiento de la masa neutra, en torno al doctor Robert; nombramiento de Morgades para la sede de Barcelona y de Torras y Bages para la de Vich; entrada de los primeros diputados catalanistas —Abadal, Soler y March— en el Parlamento; nombramiento de una Comisión encargada de codificar el Derecho catalán; comienzo de la disolución de la política turnante dirigida en Barcelona por Planas y Casals, Comas y Masferrer» ¹⁰⁶. De su gestión, en fin, había de nacer uno de los más poderosos órganos de acción política catalana. El 25 de abril de 1901, la fusión del *Centre Nacional* de Prat de la Riba y la *Unió Regionalista*, donde militaban antiguos partidarios del general tan significados como don Luis Ferrer i Vidal,

los doctores Robert y Fargas, Alberto Rusiñol, Manuel Reventós y los hermanos Girona, permitió la fundación de la *Lliga Regionalista*¹⁰⁷.

Por su parte, perdido el apoyo del regeneracionismo y la novedad catalana, el Gabinete de Silvela quedó convertido en un Gobierno conservador más, sin otro propósito que la aprobación de los presupuestos¹⁰⁸. Pero la actitud anticlerical del liberalismo sobrevivió también a Polavieja. Y a él, como a otros políticos, lo evocó con grotesco ropaje: «Para los españoles de entonces . . . el nombre de Polavieja significaba un militarote ciñendo rosario en lugar de faja, abasteciendo de filetes tagalos las fresqueras de los reverendos cebones y holgazanes, asesino de Rizal, confabulado en siniestros planes de intrigas palaciegas con Dios sabe qué miras extrañas en daño de la Patria ..., [sic] y una porción de cosas más, todas ellas aderezadas con la consabida salsa de los horrores cometidos en Filipinas, y el relleno más sabroso aún, predilecto de aquella cocina en que los jovenzuelos de principios de siglo nutríamos nuestras ansias liberales y nuestros entusiasmos laicos: la fantasma del odiado jesuitismo de levita o de guerrera "fabricando" Generales y Ministros en las sacristías y supeditando todos los grandes caprichos de la Patria a los caprichos e intereses de zafios chupacirios con entorchados y de histéricas monjas con diadema...» [sic]¹⁰⁹.

Retirado Polavieja, quedaba solo, como en un principio, monseñor Antonio María de Cascajares y Azara, cuyo aparente alejamiento, real o no, de las conspiraciones políticas desde 1898 le aisló de las complicaciones de la crisis y de los ataques posteriores.

Hombre temperamental, sentimental y acaso primario, a juzgar por sus reacciones inmediatas, que a veces semejabán cierta ingenuidad; activo organizador, de inteligencia ágil, batallador incansable, pero de tendencias quizá simplistas, que, por todo ello, basculaba entre la depresión y el optimismo sin apenas solución de continuidad; elegante y sencillo, distinguido de porte y un poco infantilmente rumboso; la caracterología moderna lo hubiera tipificado quizá como un individuo colérico, cuyo rasgo más politizable, por decirlo así, fue la tenacidad. Baste decir que todas sus acciones, que hemos relatado como realizadas por un infatigable conspirador, fueron hechas en realidad, según apuntamos en algún momento, por un hombre habitualmente enfermo, acuciado de agudos dolores que lo tenían postrado en cama con frecuencia¹¹⁰.

Por eso, cuando su proyecto de agrupar a los católicos alrededor de Polavieja fracasó, el arzobispo de Valladolid no dio por fracasados en cambio sus propósitos. Lejos de amilanarse ante la evolución de Silvela, cuando, en octubre de 1899, aquella preocupación hacendística del Ministerio planteó también la posibilidad de reducir el presupuesto del clero, se apresuró a prevenir a la reina, con menos oficiosidad que otras veces, de que, «si se confirmasen esos rumores, el Gobierno nos obligaría a Prelados y Cabillos a tomar una actitud que pudiera traer muy graves consecuencias»¹¹¹. Y, como botón de muestra, le remitió una *Exposición que el Ilmo. Gabildo Metropolitano de Valladolid dirige a su Emmo. y Rvmo. Prelado, sobre los rumores de rebajar el presupuesto eclesiástico*, impresa y fechada el mismo 8 de noviembre en el que escribía a la reina. En ella los canó-

nigos de la seo castellana, después de hacerse eco de una exposición semejante del cabildo zaragozano, aseguraban que los propósitos de Ministerio no iban contra el clero parroquial, sino contra el catedral, «que, con malicia volteriana, se pretende presentar como divorciado enemigo de aquel»¹¹².

Al margen, sin embargo, de tal hecho, más interés encierra saber que el cardenal acaso pretendió de nuevo, con nuevas gestiones, realizar su pensamiento: «Gambón, que tantas confidencias recibió de su paisano —relataría Ciges Aparicio—, dice que, malograda la Unión Nacional, Costa no quiso atender "elevadas indicaciones". Lo que él calló, por razones "que no son del caso mental", lo dijo explícitamente Silvio Kossti en una conferencia de Zaragoza después de muerto Costa. Y es que la Reina Regente, aconsejada por el cardenal Cascajares, le ofreció el Poder, pero en colaboración de Gamazo...»¹¹³.

Se ha afirmado que la iniciativa partió de María Cristina, que fue quien pidió consejo al arzobispo, y que el prelado se lo dio después de largas entrevistas con el León de Graus, acompañando además su opinión con un vasto programa y el procedimiento para realizarlo¹¹⁴. Se ha dicho también que fue Santiago Alba, relacionado con don Joaquín al menos desde el invierno del 98 al 99, quien le procuró la adhesión del cardenal¹¹⁵, que fue Costa el que rechazó la idea de colaborar con Gamazo, «del que estaba distanciado no obstante los puntos de coincidencia doctrinales que entre ambos existían, y por otra parte, parece ser que la reina no aceptó el veto que Costa puso a los políticos de turno»¹¹⁶.

Basta, en todo caso, recordar el esquema trazado hasta aquí sobre la personalidad de Cascajares y su pensamiento para comprender que el nuevo hecho encaja bien en los criterios y entre los actos políticos del prelado. Deseaba la formación de un partido con las fuerzas más alejadas hasta entonces de la vida pública, que habrían de sanearla en torno a la espada regeneradora de Polavieja y a la política reformista de Silvela, y fracasado el general, pocos podían reencarnar aquellos propósitos como Costa y Gamazo. Claro exponente el último de la línea regeneradora fusionista, ya en 1887 alentaba la constitución de una Liga Agraria encaminada a resolver la crisis del campo español con un estilo tal, que, en frase de Fernández Almagro, «hemos de ver en ella el antecedente inmediato de otras Ligas y Uniones [la de Costa entre ellas], en que las "fuerzas vivas" pretendieron, a raíz del desastre ultramarino, ser el instrumento de nuestra regeneración política y económica»¹¹⁷.

No sabemos hasta donde pudo llegar el intento del arzobispo aragonés. De existir, hubo de ser entre marzo de 1900 y julio del año siguiente, según la versión de Ciges Aparicio, o inmediatamente después del Desastre del 98, acaso cuando el cardenal comprobó el relativo fracaso de Polavieja, conforme a la cronología de Martín Regatillo, que, de ser cierta, abre una sugestiva hipótesis historiográfica sobre la presencia del cardenal en la irrupción en la política del León de Graus:

En el otoño de 1898 Joaquín Costa había rechazado, según vimos, el llamamiento que, a raíz de sus declaraciones de *El Liberal* del 18 de octubre, Mataix y Suárez de Figueroa le habían hecho. Parecía persistir por tanto en

su decisión, que había escrito a Rafael Altamira en agosto anterior, de no ser ~~A~~ quien dirigiera la regeneración gubernamental de España. Rechazaba el llamamiento y se alejaba de Madrid «por dos semanas —decía, a finales de octubre o comienzos de noviembre— con objeto de reponerme un poco y adelantar algo en mi estudio o ensayo político», que el director de *Heraldo* debía conocer ¹¹⁸.

El 13 de noviembre inmediato, sin embargo, muy pocos días más tarde, apareció la consulta de las Cámaras Agrícolas altoaragonesas, y, en ella, redactada por Costa, pedía formalmente el poder si los partidos históricos no eran capaces de realizar la obra de reforma que precisaba el país.

● ¿Qué había sucedido para motivar este cambio de actitud, al menos desde agosto de 1898?

También entonces, en la mente del arzobispo de Valladolid, las pretensiones parecieron haber evolucionado, según vimos. La carta que el secretario de la reina le dirigió el 25 de noviembre reflejaba la desilusión del fracaso de Polavieja en la constitución de un nuevo partido y le invitaba a proponer a la regente el hombre fuerte que, como Costa, decía necesitaba España.

Igual que en la carta a la reina que motivó esta contestación, unos días antes, a primeros de noviembre (*El Siglo Futuro* lo reprodujo el 10), monseñor Cascajares había declarado también a la *Crónica Mercantil* de Valladolid la necesidad de «hombres injertos en Francisco de Asís y Bismarck». Y con paralelismo sospechoso, en la consulta de Barbastro, fechada el 13 inmediato, Costa reclamó así mismo hombres «impersonales: Bismarcks, injertos en San Francisco de Asís, con más de San Francisco que de Bismarck» ¹¹⁹: de manera que, probablemente, el cardenal tuvo conocimiento de este texto antes de su publicación.

Sabemos, en concreto, que la carta que envió a Costa el prelado (cuya relación con don Joaquín está sobradamente documentada) a raíz de la consulta en cuestión fue uno de los más decisivos testimonios de aplauso que recibió por su programa ¹²⁰. Y, en fin, ambos mantuvieron «las mejores relaciones amistosas, cimentadas en el paisanaje y reforzadas más tarde en una sincera admiración que el ilustre purpurado sentía por el luchador altoaragonés» ¹²¹.

¿Era ese Bismarck del otoño del 98, Costa? ¿Fue entonces cuando el cardenal propuso su candidatura a la reina y conoció el texto de la consulta que iba a ser emitida? ¿Fue entonces cuando Santiago Alba los relacionó, si fue él quien lo hizo? En todo caso, ¿qué papel jugó el arzobispo en la decisión de Costa, si es que, en efecto, fue adoptada por aquellas fechas, de participar en la vida pública? He aquí una cuestión sobre la que los datos conocidos no permiten pronunciarse.

En cualquier caso, el proyecto no debió prosperar demasiado, advertiría Ciges, «cuando tanto despego muestra Costa en sus cartas por el joven rey con quien había de gobernar». «Con oferta o sin oferta del Poder, tan poco obligado se consideraba a doña María Cristina, que dos años antes de morir publicó un juicio severísimo sobre ella, seguido de proceso, y de graves insultos al político que tomó en la Prensa la defensa de la dama» ¹²².

Como intención al menos del cardenal Cascajares, la idea de un equipo

Costa-Garnazo, nueva expresión de la alianza Polavieja-Silvela, un facto revisionista sobre un motor político, era perfectamente verosímil, diéras o no, aunque no prosperase. Y además, bien pudo ser el complemento necesario, como antaño, para el replanteamiento de sus deseos de fusión dinástica.

En 1900, los círculos políticos comenzaron a recibir rumores de matrimonio entre la hija de Alfonso XII, princesa de Asturias (a quien Cascajares quería casar con don Jaime) y don Carlos de Borbón y Borbón, hijo del conde de Caserta, que había luchado junto a Carlos VII y se titulaba heredero de los derechos a la corona de Nápoles. Ante las primeras noticias, el cardenal escribió a Arsenio Martínez Campos, presidente del Senado aún (murió en septiembre de aquel año), para pedirle encarecidamente que hiciera lo posible para conseguir que la boda se realizase con el heredero legitimista y no con don Carlos. Pero el general le contestó al parecer en términos muy discretos, cuidando no comprometer a nadie que él no intervenía en política desde hacía tiempo y que, por otra parte la naturaleza del asunto exigía estudiarlo despacio; que, sin embargo, si veía a la reina, le daría a conocer su deseo.

Al mismo tiempo, y con parecidas peticiones, el prelado escribió también al presidente del consejo de ministros, que lo era todavía Francisco Silvela. El jefe del Gobierno le respondió que María Cristina reconocía los nobles propósitos del cardenal; pero que respetaba mucho y creía que eran base de la felicidad los sentimientos naturales del corazón y, por eso, respetaba también los de su hija, que estaba enamorada de don Carlos ¹²³.

La negativa agotó la última posibilidad. En la superficie de la vida pública española, la década política de monseñor Cascajares no dejaba más que una estela de inquietudes democráticas. En realidad, esta fue la segunda consecuencia política importante del matrimonio de doña María de las Mercedes, violentamente discutido en el invierno de 1900 a 1901. El 27 de julio del primer año de la centuria, murió el arzobispo ¹²⁴. Su herencia, insisto (y es ésta una tesis de cierta trascendencia), fue el anticlericalismo del siglo xx: en el que pudo haber o no influencia de Francia y de sociedades secretas, pero que fue, sobre todo, en principio, una respuesta defensiva contra el principio religioso confesional que era el aglutinante de tradicionalistas y conservadores frente al liberalismo: con un planteamiento de fuerzas —esto sí— visiblemente semejante al francés.

5. *El Congreso Católico de Burgos*

El tono religioso de la oposición radical, que había comenzado a debilitar la firmeza de Silvela, y la quiebra interior del Gobierno de 1899 habían terminado también de incapacitarle para realizar aquellos propósitos de fusión católica que preocupaban al Pontífice. Tildado de clerical e inconexo, el Gabinete no había podido abordar del todo (como parecía haberlo sugerido el mensaje de la corona en la apertura de las Cortes) la atracción del tradicionalismo a la legalidad constituida. Y esto ocurría pre-

cisamente en el momento en que el tema de la unión de los católicos, olvidado quizá por los conflictos de Ultramar, estaba rebrotando.

Durante todo el verano de 1899, la remozada cuestión religiosa, fijada aún en asuntos un tanto anecdóticos, mantuvo la inquietud en el país. En Cádiz, en junio, el alcalde prohibió colocar placas con la efigie del Sagrado Corazón de Jesús y el lema «reinaré» en las fachadas de las casas ¹²⁵, interpretándolo como práctica tradicionalista. En Castellón, el mismo hecho dio lugar a choques sangrientos entre «católicos y librepensadores» a finales de julio y primeros de agosto ¹²⁶, que se prolongaron en parecidos disturbios de Vinaroz, Algora, Salamanca ¹²⁷. Se trataba, en verdad, de una mera e inmediata respuesta a la exhortación pontificia de mayo anterior en pro de tal devoción, encauzada de esta manera por la propia jera- rquía eclesiástica y por el Apostolado de la Oración ^{127 b}.

Prohibida la colocación de los emblemas por el gobernador de Castellón, el obispo de Tortosa había protestado por escrito al ministro de la Gobernación. Este le respondió pidiéndole que aconsejara a los fieles no hacer acto ninguno de ostentación pública, por prudencia, aunque les asistiese el derecho y hubiera de ofrecerles el amparo legal del Gobierno. Pero, más adelante, el mismo prelado dirigió una exposición a la reina con idéntico motivo, y ello obligó acaso a que, el 11 de agosto, el nuncio de Su Santidad y el presidente del consejo celebraran una entrevista, posiblemente sobre esta cuestión ¹²⁸.

Para entonces, Dato había dirigido ya una circular a todos los gobernadores para ordenarles que amparasen el derecho de los católicos a colocar letreros o cualquier tipo de signo religioso en la vía pública. Pero les indicó también que pidieran a las autoridades eclesiásticas que evitasen el motivo de los conflictos, desaconsejando la realización de actos de culto que pudieran ser, en realidad, «instrumento de pasiones políticas» ¹²⁹. En el mismo sentido contestó el Gobierno al obispo de Tortosa, telegraphiándole Silvela y Dato los días 6 y 7 respectivamente.

En general, parece que la jerarquía se mostró dispuesta a la colaboración ¹³⁰, salvo en algunos casos. Así, en una pastoral leída el 20 de agosto en todas las iglesias de Castellón, el propio obispo levantino, Pedro Rocamora y García, alentó a los fieles a seguir poniendo los emblemas, a pesar de que los sectores radicales veían en la colocación un deseo expreso de herir sus sentimientos liberales ¹³¹.

La protesta de la jerarquía contra los atentados se alzó, sin embargo, al máximo en las sesiones del Congreso Católico Nacional inaugurado en Burgos el 30 de agosto, bajo la presidencia de Antonio María de Cascajares y Azara y bajo las normas inspiradoras del Pontífice, expresadas por el cardenal Rampolla en su carta a Martínez Vigil, obispo de Oviedo, el 16 de agosto de 1897. En ella había afirmado que el Papa, preocupado por la unión de los católicos españoles, deseaba «que para asegurar la aceptación de la fórmula de esta Unión, los Obispos redacten en el Congreso de Burgos el programa de la misma» ¹³². Ciertos acontecimientos, además, sucedidos en 1899, habían mantenido el interés de la reunión y del problema, un tanto arrinconado hasta entonces, tras los polémicos sucesos de 1894. f

El 19 de abril del 99, *La Información*, periódico escrito, como sabemos,

por redactores que dejaron *El Siglo Futuro* para seguir a Polavieja, había publicado íntegro, «defiriendo a altas indicaciones», el capítulo decimotercero de los *Consejos del Cardenal Sancha al clero de su Arzobispado*, recientemente impresos. En ellos, el primado de Toledo recordaba las orientaciones dirigidas a los católicos por León XIII para aceptar las instituciones liberales: «Ante esa voluntad tan expresa y terminante del Romano Pontífice —subrayaba—, no cabe buscar en consejos del espíritu privado el terreno para la unión de todos los católicos. Ese terreno no es otro que la aceptación sincera y leal del régimen constitucional, sin subterfugios y sin segunda intención, en cuanto que es el establecido en nuestra Patria y constituye la base de la legalidad vigente». Si la Constitución de 1876 podía contener, desde luego, principios contrarios a la doctrina de la Iglesia como se aseguraba de la tolerancia de cultos, «la moral teológica enseña que es lícito tolerar algunos males, cuando no se pueden evitar, y juntamente con ellos hay bienes que se deben defender y conservar»¹³³.

Desde la propia sede toledana, quedaba rectificada así la postura del anterior primado, Monescillo, y la que mantenía un sector jaráquico. «Las bases del acuerdo (o unión) —advirtió el arzobispo de Sevilla, Spínola refiriéndose a la concordia entre los católicos, en una circular de 26 de abril del 99 fiel a la línea intransigente— no pueden menos que ser aceptadas por todos los verdaderos fieles: en materia de dogma y moral, la voz de la Iglesia, columna y firmamento de la verdad; en asuntos religiosos políticos el *Syllabus*; pero el *Syllabus* entendido, según el pensamiento de su augusto Autor..., y del insigne Pastor que a éste a sucedido...; en un punto a conducta la dirección del Papa y de los Obispos»¹³⁴.

No cabía, pues, contempORIZACIÓN alguna con el liberalismo condenado. Y, para demostrarlo, en la segunda quincena de mayo, la censura de la misma diócesis de Sevilla consideró «no sólo lícito, sino además conveniente y utilísima la publicación» de unas *Observaciones que el capítulo XIII del Opúsculo del Señor Cardenal Sancha, Arzobispo de Toledo, ha inspirado a un ciudadano español*¹³⁵.

Con licencia de monseñor Spínola, las *Observaciones* fueron impresas en el anonimato, que ocultaba, según se supo enseguida, a don José Roca Ponsa, magistral de la catedral sevillana¹³⁶, antiguo director del quincenal carlista *Revista de Las Palmas*¹³⁷. Calificaba en ellas de «gravísima» la cuestión contenida en el escrito del cardenal; porque «afecta al presente y porvenir de nuestra Patria» y «consigna novedades que cambian de manera radical al modo de ser de los fieles de nuestra nación». Por ello añadía, para refutarlas, ciento veinte páginas, en las que se apiñaban los argumentos siguientes:

Que León XIII había pedido la unión de los católicos, pero no el entendimiento entre católicos y liberales: «porque la unión ha de verificarse en España para combatir el liberalismo», y, por tanto, y en último término, «la única verdadera división que existe entre los católicos españoles, es entre carlistas e integristas».

Que, a pesar de las exhortaciones pontificias, «la unión no impide la continuación de los partidos, ni que trabajen, sin contiendas, sin faltar a la caridad, para la realización de sus ideales».

Que el respeto debido a los poderes constituidos no implicaba además que esos poderes fueran legítimos.

Y, por último, que, si, en un régimen democrático, el pueblo soberano podía «censurar, revocar los poderes e impugnar los actos de los Delegados» de su soberanía, esto significaba que, cuando «un católico, o muchos católicos, hacen la oposición, siquiera sea la más radical, a un Gobierno a la moderna, no hay desobediencia»: «lo que hay es la manifestación de la Autoridad originaria y principal contra la delegada, una protesta del Poderante contra el Poderhabiente».

«Aceptada leal y sinceramente la Constitución —argüía más adelante—, sin subterfugios ni segundas intenciones, o los católicos forman un partido nuevo entre los turnantes, o se suman con los partidos existentes. No hay término medio.» Representaba la primera postura, decía, monseñor Cascajares y Azara (cuyo pensamiento volvía a ser entonces apreciado)¹³⁸. Este, manteniendo al menos la condenación del liberalismo, a diferencia del cardenal Sancha, proponía sin embargo, «como único medio para hacerla triunfar, la formación de un partido católico, o la unión de todos los católicos para aspirar al poder, bajo los auspicios de la Reina Regente, con ánimo de raer el liberalismo de España, desde las alturas del Gobierno». Y eso tampoco era viable por la necesidad de un jefe, la inseguridad de que la reina llamase al poder al nuevo partido y, en fin, la duda de que los católicos mismos quisieran entrar en él¹³⁹.

Es claro que el magistral de Sevilla no se contaba, pues, entre los tradicionalistas que vieron y aceptaban el sentido integrador del movimiento de Polavieja. Y esto era comprensible por la relativa esterilidad de su llamamiento. «*L'agrupació dels catòlics espanyols* —escribiría pronto *La Veu de Montserrat*— *destriada dels antichs partits tradicionalistes, y més o menys engroixida per gent neutra agena fins ara a la política, demostra tant poca influència que sa existència apenes se té en compte, els seus periòdichs no circulan y per altra part es excessivament afecta a la política imperant debeladora de tota energia*»¹⁴⁰.

En realidad, el sentido católico del movimiento todavía permanecía en cierta medida. Por las mismas fechas en que Roca Ponsa redactaba sus *Observaciones*, en mayo de 1899, el nuncio de Su Santidad en España escribía a *La Información* para comunicarle, por encargo del cardenal secretario del Pontífice, que León XIII agradecía sus manifestaciones de sumisión y lo bendecía. «Al tener la satisfacción de cumplir este encargo —añadía el representante del Vaticano—, hago votos que la Bendición Apostólica le fortalezca para luchar contra las influencias perniciosas y antirreligiosas y trabajar sin descanso para la unión de las fuerzas católicas en el terreno legal, según las normas trazadas por el R[omano] Pontífice»¹⁴¹.

Roca Ponsa, que daba cuenta de esta carta del nuncio como apéndice a su estudio del capítulo XIII, advirtió que el Papa se había limitado a agradecer la sumisión de *La Información* de Madrid y que lo demás era sólo opinión de su representante. Asimismo, un religioso exclaustro y exilado en París por propagar ideas carlistas en la diócesis valenciana (cuando la regía el ahora arzobispo de Toledo), José Domingo Corbató, escribió entre junio y julio un pequeño libro contra *Los consejos del Carde-*

nal Sancha, donde discutía la interpretación proalfonsina de las palabras de León XIII en la peregrinación de 1894. Entre un sinfín de citas y alusiones —algunas a Ortí y Lara, a don Valentín Gómez y a monseñor Cajares, por cierto «no acorde con el sentir tradicionalista» según Corbato—, insistía confusamente en la licitud de ir al cisma si, en efecto, la Santa Sede ordenaba la sumisión al régimen liberal ¹⁴².

También Ramón Nocedal, jefe del integrismo, decidido por fin contra Polavieja a pesar del prudente retraimiento de su grupo en las elecciones de diputados, se apresuró a señalar que la actitud de Spínola, al autorizar las *Observaciones*, echaba por tierra la postura del cardenal Sancha. En vista de ello, en julio de 1899, el primado de Toledo hubo de publicar una pastoral en la que respondía a todas las impugnaciones. En el documento, el prelado volvió a aconsejar a los sacerdotes de su diócesis la obediencia a los poderes constituidos y lamentaba que la censura eclesial de Sevilla hubiera permitido la publicación del folleto anónimo, que suponía de filiación integrista. Aludía también a la personalidad política de Nocedal, para recordar que, en alguna ocasión, había dado lugar a las amonestaciones del Papa. Y concluía proponiendo que, puesto que no se trataba de sembrar la desunión entre los ciudadanos españoles, lo más sensato era suspender todo juicio en espera de que llegase la oportuna resolución de Roma, en confirmación de uno u otro parecer ¹⁴³; resolución que había pedido por carta el Pontífice.

Los tradicionalistas no aceptaron la espera. En la segunda quincena de julio, el arzobispo de Sevilla, que había publicado el 15 una nueva exhortación a la unión de los fieles ante el inicio de la campaña anticlerical ¹⁴⁴, recibió una representación del carlismo encabezada por el jefe local, Maestre, que le testimonió su adhesión al escrito. El prelado les exhortó a la defensa de los intereses de la religión, de la que dijo que ellos eran —según comunicó al Congreso Romero Robledo— adalides primordiales ¹⁴⁵. Inmediatamente después, el 25, acudió un comité del Partido Integrista para manifestarle también su adhesión ¹⁴⁶. Enseguida, la propia reina transmitió al prelado andaluz, por medio de fray Patricio Panadero, las «quejas, resentimientos y desconfianzas» que su conducta le provocaba, a lo que el arzobispo respondió largamente el 8 de agosto:

Sobre la publicación de las *Observaciones* de Roca Ponsa en su diócesis, le dijo Spínola, preciso era recordar «que autorizar la impresión de un escrito no es hacerse solidario ni declararse partícipe de todas y cada una de las opiniones o doctrinas de su autor, sino simplemente aseverar que el escrito no contiene enseñanzas opuestas a las de la Iglesia». «También se ha creído ver un signo de mi hostilidad al Trono en lo acaecido en el Senado el día que juré mi cargo de Senador ... Discutíase el Mensaje contestación al discurso de la Corona, y yo defendí ante mis hermanos los otros obispos, que se sentaban conmigo en los escaños de la alta Cámara, que no debíamos votar» ¹⁴⁷. La razón, en que me fundaba, redúcese a que esa votación por su naturaleza es esencialmente política; que significa la aprobación de un pensamiento político de un partido; que vale tanto en suma como la adhesión a ese partido, y la oposición a los otros, que turnan o no turnan en el mando: y esta actitud, decía yo, no es la que conviene a los prelados:

van al Parlamento para defender los altos intereses de la Religión y Patria, y han de mantenerse por ende en absoluta independencia de lo que de cerca o de lejos huele a espíritu de bandería.»

Ocurrió después la presentación en el Congreso de las proposiciones Morayta y sus compañeros ¹⁴⁸, y este acto incalificable, junto con el infreno inaudito de la prensa y el desencadenamiento horrible de las zas del Averno, me hizo comprender que la causa sacratísima de la orría grave peligro; pensamiento, que me llenó el alma de amargura, le obligó a exhalar un grito de dolor en una Pastoral que dirigí a mis cesanos.

Este documento, que publiqué sólo en el *Boletín*, circuló por todas par-, y me valió felicitaciones y adhesiones por millares. Entonces fue cuando se me presentó una comisión del Círculo tradicionalista o carlista de a capital, protestándome sus individuos fidelidad como católicos.

Yo la recibí y le signifiqué mi agradecimiento; en lo cual no creo haber metido incorrección alguna, ni entiendo la advertirá nadie, que con imercialidad estudie las cosas; pues lo que hice con los carlistas hubiéralo echo con los republicanos y con cualquiera que se llamasen católicos sic]» ¹⁴⁹.

A pesar de estas razones, y acaso para evitarse nuevas complicaciones on el trono, cuando, el domingo 20 de agosto de 1899, más de mil personas, entre ellas numerosos integristas y comisiones de los pueblos de la rovincia sevillana, volvieron a entregar al prelado un mensaje de conformidad con su pastoral y enviaron después un telegrama al Papa, monseñor Marcelo Spínola parece cuidó entonces de aclarar que el acto no tenía ningún carácter político y que él siempre se había mantenido en el terreno que correspondía a su oficio eclesiástico ¹⁵⁰.

Los pormenores de la polémica, sin embargo, ya habían trascendido al exterior, cumplidamente reseñados por la prensa, y se esperaba «con avidez —aseguró *El Imparcial*— el fallo de Roma» ¹⁵¹. En seguida, el 24 de agosto, Spínola recibió un telegrama del cardenal Rampolla, cuyo texto fue publicado el 26, que contestaba al del acto del día 20 anterior: «Nada desea tanto Su Santidad como la comunión de todos los católicos españoles, fundada, por supuesto, en la obediencia a sus prelados y en el *acatamiento práctico de las instrucciones consabidas de la Santa Sede*. Confiamos en que estos sentimientos son los que inspiran a los fieles cuya felicitación transmite, y Su Santidad les agradece sus filiales protestas, bendiciéndoles con su arzobispo» ¹⁵².

Pocos días después, *El Porvenir* de Sevilla publicaba aún una carta de Roca Ponsa en la que insistía de nuevo en los argumentos de las *Observaciones*:

«Primero, la cuestión es saber si el Pontífice manda aceptar las actuales instituciones con la Constitución de 1876, sincera y lealmente, sin subterfugios y sin segunda intención.

Segundo, el Papa no manda a los católicos que acepten las instituciones, sino que guarden sumisión respetuosa.

Tercero, el Papa no resuelve las cuestiones de derecho dinástico, pues una cosa es la política y otra la moral y la religión» ¹⁵³.

➤ Pero, en realidad, para aquellas fechas, el mismo León XIII, había escrito al cardenal Sancha una larga carta, firmada el 22 de agosto en Roma: que sancionaba, a petición del propio arzobispo, la polémica suscitada por su obra: «Era el objeto del libro —recordaba el Papa— amonestar al clero y a los católicos de tu diócesis, para que no se dejasen arrastrar por consejos o conveniencias de interés privado, sino que por el contrario, dejando esto aparte, se uniesen de un modo concorde bajo la dirección de su prelado para el decoro y tranquilidad de la religión y de la patria. Como No también hemos dirigido muchas veces esta exhortación a los católicos, no podemos negar que hemos sentido un gran dolor al verte tratado tan injuriosamente y sin la debida reverencia. No solo fue, sin embargo, por Nos motivo de pena el ver ofendida tu persona y alta dignidad, sino también el considerar cuán temeraria y desconcertadamente juzgan no pocos aun entre aquellos que quieren por otra parte ser considerados como sostenedores de la religión, y como enemigos de los que atacan el orden religioso y social» ¹⁵⁴.

Al permitir la publicación en la prensa del telegrama dirigido por Silvela a Dato, ministro de jornada en la corte veraniega, el día 27, el Gobierno interpretó públicamente la carta pontificia, que había de ser notificada a la reina por el pronuncio, como una condena encaminada «a los carlistas y a los íntegros y a los que, sin autoridad para ello, declaran fuera del catolicismo a quienes les parece». Y dispuso además que el *Boletín* de la archidiócesis toledana la publicase «antes de que empiece el congreso de Burgos» ¹⁵⁵, para que el texto fuera reproducido después por los periódicos.

Tampoco se conformaron con esto, sin embargo, algunos elementos tradicionalistas. En principio, *El Siglo Futuro* no transcribió ni mencionó siquiera la carta del Papa. En cuanto al órgano oficioso del carlismo, *El Correo Español*, la reprodujo en su primera plana con comentarios respetuosos, pero quizá reticentes ¹⁵⁶. Para entonces, el Congreso Católico de Burgos había sido inaugurado ya, con la consiguiente expectación; porque se esperaba que en él se discutiera este tema.

Abiertas sus sesiones el 30 de agosto, con asistencia de unos treinta prelados, el primer discurso hubo de corresponder a monseñor Cascajares, que presidía el acontecimiento y que no supo ocultar en él aquella amarga visión que mantenía en los últimos años: «Hay necesidad de un milagro —confesó— para la resurrección de España»; mas «España puede hacer ese milagro con la ayuda de Dios y de los hombres de buena voluntad». Para ello «es ante todo y sobre todo necesaria la unión de los católicos, pero la unión verdadera, tantas veces pedida por el Papa y por los Prelados» ¹⁵⁷.

Esta era, vagamente esbozada, la temática prevista para el Congreso. Y, en efecto, el 1 de septiembre, Alfredo Brañas, el definidor del galleguismo político, catedrático de economía política y hacienda pública de la Universidad de Santiago, habló de los «Peligros que amenazan a la Sociedad en el siglo xx si se aparta del Cristianismo», para repetir una vez más el criterio de los tradicionalistas intransigentes, sólo un día después de la divulgación de la carta al cardenal Sancha: «Dos diferencias —dijo— se

ran actualmente a los católicos de España: una *esencial* o de fondo, otra *accidental* o de forma. La primera divide a los católicos en liberales o parlamentarios, y católicos anti-liberales y anti-parlamentarios. Esta distinción trascendental y profunda, porque entre ambas ramas de católicos no y reconciliación posible. El parlamentarismo es liberal, profesa las doctrinas de la soberanía del pueblo, de los parlamentos soberanos, de las libertades públicas de conciencia, enseñanza, imprenta, etc., condenadas por los Pontífices y prelados y por los tratadistas católicos, desde Santo Tomás Cardenal Belarmino, desde Suárez hasta Balmes. Los católicos que proscriben esta política no son verdaderos católicos». Por lo demás, «tratándose de católicos que no profesan el liberalismo y están acordes en el fondo de su programa, no hay grandes obstáculos para realizar la unión, formando un gran partido católico»¹⁵⁸. Dicho de otro modo, la unión era posible sólo entre carlistas e integristas; pero no había que pensar siquiera en los italianos ni en quienes defendiesen posturas similares. En síntesis, Brás se hacía portador, por tanto, de la actitud que representaba Spínola, quien el catedrático gallego cuidó, por cierto, de aludir y alabar con palabras que fueron rubricadas —advirtió *El Imparcial*— con «una ovación indescriptible». Ello animó al orador a pedir que se dirigiera un mensaje de adhesión al prelado, y estrepitosos aplausos acogieron también la propuesta. Por último, la lectura de la formularia conformidad con el Congreso enviada por el arzobispo sevillano, que no asistía a las sesiones, levantó parecidas «tempestades de aplausos, lo cual es de gran significación»¹⁵⁹.

El mensaje a Spínola no llegó a formularse. Se rumoreaba que iba a ser enviado uno a la reina, y esto produjo tal malestar entre los congresistas que la proposición de uno de ellos para que no se mandase a nadie más que al Papa fue recibida con vivos aplausos y aprobada por aclamación.

El mismo día primero de septiembre, a propuesta del presidente de esta tercera sesión, Martínez Vigil, el Congreso proclamó la unión de los partidos católicos bajo la autoridad de los obispos y del Papa, y acordó la redacción de un programa por parte del episcopado y la fundación de un periódico que lo defendiese, como antaño hiciera *El Movimiento Católico*. Pero tan definidos acuerdos no bastaron tampoco para enfriar el ambiente. En la cuarta sesión, el 2, uno de los oradores, Marcelo Macías, pidió el restablecimiento del poder temporal de los pontífices, y no faltaron los consiguientes vivas al Papa rey. Más adelante, en la misma fecha, subió a la tribuna el catedrático de Valencia Manuel Polo y Peyrolón, cuya conferencia se esperaba con gran expectación del auditorio. Hablando sobre «La masonería española», propuso la creación de una unión católica internacional para combatirla a ella y a quienes actuasen bajo su influencia, y se refirió a los sucesos de Castellón, que consideraba permitidos por las autoridades. Finalmente, pidió la unión de todos contra el liberalismo, provocando grandes aclamaciones y aplausos¹⁶⁰.

Las intervenciones no permitían albergar demasiadas esperanzas de tolerancia con la legalidad vigente. «Toda la leyenda de nuestra feroz intransigencia —comentaba *El Imparcial*—, que tantas prevenciones y tantos odios nos ha proporcionado, con su espíritu ciegamente sectario, lleno de soberbia y de codicia del poder, y negativo del verdadero espíritu cristiano por

carencia de caridad y mansedumbre, reaparece entera en esas furibundas declamaciones de una demagogía negra, no menos temible, pero más oí-
tinada que la roja» ¹⁶¹.

Publicada en uno de los periódicos que más eco habían hecho a los p-
ósitos de monseñor Cascajares, la queja era especialmente significativa
aunque no estuviese formulada contra él. Del cardenal, según Castro
Alonso, que asistió al Congreso, «bien puede decirse que, gracias a su
quisito tacto y prudencia, no se rompió la unidad en aquella Asamblea, q-
indudablemente fue la más movida de todas cuantas se han celebrado
España» ¹⁶².

El mismo día en que fue clausurada, el 4 de septiembre, el catedr-
tico de la Universidad de Valladolid, Royo Vilanova, publicó también u-
artículo en la prensa local que sintetizaba bien lo que había sido el aconte-
cimiento. Dos hechos habían resaltado en él, decía: uno, la fría acogida
al telegrama de adhesión del cardenal Sancha, frente a las aclamaciones
Brañas por sus elogios a Spínola; otro, los aplausos tibios al conde de O-
gaz, que había pedido el reconocimiento de los poderes constituidos, e-
contraste con las ovaciones a la frase que allí se oyó: «Dejémonos c-
legalidades ficticias» ¹⁶³.

Más animadas, con todo, que las sesiones públicas, habían sido aún la-
reuniones de trabajo por secciones, entre las cuales la segunda, de «asun-
tos de propaganda», tuvo especial animación y concurrencia, hasta el e-
tremo de que «personas extrañas al Congreso procuraron con no sana in-
tención entrar en el local fingiendo tener billetes de congresistas» ¹⁶⁴.

Para justificar aquella agitación de las sesiones públicas, la crónica of-
cial de la asamblea advirtió que las mesas de los periodistas estaban en e-
«sitio más distante de la tribuna de los oradores». Ello «sería la causa d-
que no oyendo bien todas las expresiones de éstos, interpretaran alguna-
equivocadamente dando lugar a que, conocidos los aplausos con que fueron
acogidos, se fantaseara acerca del espíritu dominante en la asamblea: l-
que hubo de cierto es que una vez más se manifestó allí que los católicos
no transigen con los errores condenados por la Santa Sede, y que no s-
ha extinguido en sus corazones el entusiasmo por los ideales y aspiraciones
santas de la Iglesia de Dios» ¹⁶⁵.

En cualquier caso, parece ser que la actitud disgustó al nuncio de Su
Santidad y que, por eso, llegado a Burgos procedente de San Sebastián para
presidir la clausura del Congreso, lo hizo sin dirigir la palabra a los reuni-
dos ¹⁶⁶. «Poco respetada ha sido —lamentó *La Correspondencia* el 7 de sep-
tiembre— la autoridad del Estado; pero aún lo ha sido menos la de la
Iglesia» ¹⁶⁷.

Sin embargo, del Congreso vino a surgir un nuevo proyecto de organizar
políticamente a los católicos, en la línea apartadista de la Asociación de
Católicos de 1868, lejos de la Unión pidaliana, del integrismo y del parti-
do de Cascajares. En Burgos, el episcopado formuló una declaración
en la que subrayaba «una vez más que nuestra aspiración constante es
el restablecimiento de la Unidad Católica, gloria antes de nuestra Patria,
y cuya ruptura es origen de muchos males; declaramos asimismo que re-
probamos todos los errores condenados por el Vicario de Jesucristo en sus

instituciones, Encíclicas y Alocuciones Consistoriales, especialmente los comprendidos en el *Syllabus*, y todas las *libertades de perdición* hijas del llamado *derecho nuevo, o liberalismo*, cuya aplicación al gobierno de nuestra patria es ocasión de tantos pecados, y nos condujo al borde del abismo. Comprendiendo, sin embargo, que nos hallamos en un período en el que podemos llamar de reconquista religiosa, por las ~~causas~~ ^{causas} antes mencionadas, y obedeciendo en esto como en todo al pensamiento expreso de Su Santidad, creemos un deber de nuestro ministerio docente el de firmar que la Unión de los Católicos, que los miembros del Congreso vehementemente nos han pedido que realicemos, ha de efectuarse dentro de la legalidad constituida, y esgrimiendo cuantas armas lícitas pone la misma en nuestras manos».

A este fin, los prelados concretaban nueve puntos en los que se pedía a los católicos que sacrificasen, «por el momento», «sus opiniones privadas y sus divisiones, para consagrarse principalmente a la defensa de los derechos de la Iglesia y de la Sociedad». Pero advertían que la Unión que se pretendía afectaba a lo religioso y a lo políticorreligioso, «donde se modelan las relaciones entre la Iglesia y el Estado»: no a los intereses puramente políticos, aunque estos quedaban, desde luego, subordinados.

La Unión emplearía en concreto todos los medios «que la legalidad existente pone en nuestras manos, especialmente las elecciones para todos los mandatos y cargos públicos, la prensa periódica, el derecho de asociación y el tomar parte activa en todos los actos, oficios y empleos de la vida pública, bajo la dirección del Episcopado».

Se organizaría «por medio de una Junta central y de Juntas provinciales o diocesanas y locales, y con la fundación de uno o más periódicos»¹⁶⁸ de acuerdo, en definitiva, a los planteamientos que vimos sugería el marqués de Comillas, quizá en 1894.

Cumpliendo en ello deseos pontificios, la jerarquía acordó también un programa provisional con diecisiete bases a procurar por este larvado grupo político confesional. Destacaba entre ellas el empeño «para que se restrinja la tolerancia religiosa a lo que taxativamente permite la ley fundamental». Se pedía al Gobierno que apoyase a los obispos en la censura de los libros de texto. Reclamaban «libertad académica de enseñanza en favor de la Iglesia, sin sujeción a centros oficiales docentes», y que la instrucción oficial y privada fuera realmente católica, bajo supervisión de los obispos¹⁶⁹.

Respecto a la trascendencia política inmediata de la reunión, los elementos más tolerantes, que, en líneas generales, eran las personalidades eclesiásticas asistentes, consiguieron que se enviara un mensaje a María Cristina. Pedían en él que influyese en los gobiernos del país a fin de cortar la extensión del protestantismo, refrenar la prensa anticlerical en sus ataques a la jerarquía, a los institutos religiosos y al clero, e impedir la enseñanza de doctrinas no católicas en universidades, institutos y colegios, así como las conocidas profanaciones a las imágenes del Corazón de Jesús¹⁷⁰. Al mismo tiempo, los prelados reunidos en Burgos elevaron una exposición al presidente del Consejo de Ministros, en la que lamentaban los sucesos de junio, que creían preparados por la masonería, ocurridos en Zaragoza,

Barcelona, Valencia, Castellón y otras ciudades. Reclamaban también puesta en vigor de la confesionalidad de la enseñanza determinada por Concordato, mediante la prohibición de fundar escuelas laicas, la negación de subvenciones a los establecimientos acatólicos y la expulsión del profesorado que se apartase de la doctrina ortodoxa en sus explicaciones en universidades e institutos, «dejando a los obispos ejercer libremente en enseñanza aquella suprema inspección propia de su magisterio, reconocido por nuestras leyes» ¹⁷¹. Asimismo, el 4 de septiembre, dirigieron un tercer mensaje al Pontífice en el que acataban la exhortación hecha a la jerarquía en su carta al cardenal arzobispo de Toledo para que enseñaran a sus diocesanos «los deberes que tienen los fieles para con la autoridad eclesiástica» frente a quienes negaban la obediencia a los obispos e incluso al Papa ¹⁷².

La reina contestó el 16 prometiendo que influiría cuanto pudiera para cortar las manifestaciones anticlericales ¹⁷³, y el Gobierno hizo lo propio negando que no las hubiera reprimido cuando se produjeron y asegurando que había sido cosa de minorías ¹⁷⁴. Por su parte, León XIII respondió el 25 para agradecer el mensaje; pero añadía: «*Haud minus autem alacre voluntatem vestram dileximus in hortationibus accipiendis, quas, in Hispanorum bonum, dedimus in epistola al dilectum Filium Nostrum Archiepiscopum Toletanum. Sapienter profecto concordi sententia edixistis, nihil aptius ad populorum vestrorum utilitatem conducere, quam si Apostolicæ Sedis consilia et nutus sancte quisque integreque observet. Hoc quidem cunctis studio gratulamur vobis*» ¹⁷⁵.

Las palabras del Papa habían recibido contestación de antemano, cuando a primeros de septiembre, alegando que no consideraba que las letras pontificias enviadas a Sancha aludieran a sus *Observaciones*, Roca Ponsa, el magistral de la catedral de Sevilla, envió a la Sagrada Congregación del Índice un nuevo folleto titulado *En propia defensa*, que tenía como fin justificar la publicación del anterior. En vista de su empeño, el 27, en carta a Spínola, el propio León XIII dijo al prelado que no dudaba de que se esforzaría «*ut exorta diuque producta decertatio tollatur omnino itemque, reprobaturum quod et decertationis ipsius causa et Litteraturarum nostrarum ad Archiepiscopum Toletanum occasio fuit*». La alusión era clara. Y, por si no lo era, Rampolla escribió al pronuncio en Madrid, para hacerle constar que, con estas palabras, el Papa aludía a aquella obra, que, por voluntad del Pontífice, debía de llamar «al dicho Canónigo a fin de intimarle que no dé a luz el Opúsculo indicado "En propia defensa" ni publique una nueva edición de las "Observaciones"» ¹⁷⁶.

«Repetiré aquí lo que dije a mi dignísimo Prelado —escribió más tarde Roca Ponsa—: en lo que se refiere a doctrina, no quiero apartarme un ápice de las enseñanzas del Papa.» «Y por esto, porque el Papa ha condenado el error de los que sostienen que la Iglesia debe conciliarse con el liberalismo, he sido, soy y seré, con la gracia de Dios, antiliberal, mientras se digne el Señor conservarme la vida.» Y por eso también, el mismo año 1899, el magistral de Sevilla publicó a cambio otro pequeño libro, al que pertenecen los párrafos anteriores. Recogía artículos aparecidos ya en *El Correo de Andalucía* sobre *El Congreso de Burgos y el Liberalismo*

así lo llamó), con la finalidad expresa de demostrar el carácter antiliberal e aquella reunión y cómo, en definitiva, había corroborado las tesis sostenidas por él en sus *Observaciones* de mayo: porque «los prelados son los rimeros en condenar el liberalismo como el señor Cardenal Cascajares... en maldecirle prorrumpiendo con un expresivo ¡muera!, como el señor obispo de Oviedo»¹⁷⁷.

Externamente al menos, las cosas habían quedado, pues, donde estaban. Pero el proyecto de partido católico parecía marginado definitivamente, aunque algunos elementos interpretaron la carta al cardenal Sancha y las bases aprobadas por el Congreso como una exhortación a realizarlo¹⁷⁸. Copiaría en seguida —argüía lógicamente *El Correo Español*— «con el trenando obstáculo de cerrar en ese partido las fronteras del catolicismo»¹⁷⁹.

NOTAS

¹ Cfr. Mauricio: *La Gran Traición*, Barcelona, Imprenta a cargo de Miguel Borrás, 1899, pág. 107 (BEV).

^{1b} Protesta dirigida «A la Nación» por los procuradores de las órdenes religiosas de Filipinas, Madrid, abril 1898, apud *Revista Popular*, LIV (1898), 407. Sobre la estructura misional del gobierno de las islas seguimos nuestra nota *El separatismo filipino y la opinión española*, «Hispania», XXXI (1971), 77-102.

^{1c} *Revista Popular*, LV (1898), 81 (editorial de Sardá y Salvany) y 369 (acusaciones de extranjerismo). Sobre los jesuitas afirma en la pág. 255: «La Masonería ha dado a sus secuaces la consigna de denigrar a la Compañía de Jesús. Los periódicos de la secta no se dan punto de reposo en combatir a la ínclita Orden religiosa levantando calumnias y falsos testimonios que dicen tomados de periódicos católicos de otros países.» La coetánea campaña de la masonería contra los religiosos franceses que constata la historiografía de este país (hemos de volver sobre ello) podría abogar por esta relación, en la que insisten otras fuentes pero sobre la que no conocemos prueba concluyente. Es obvia, por lo demás, la importancia de una investigación desapasionada de las organizaciones masónicas, aún por realizar.

² Cit. *El Siglo Futuro*, I-XII-1898.

³ Cit. *Heraldo de Madrid*, 8-I-1899.

⁴ *Ibidem*, 10-XII-1898. En el mismo sentido, cfr. *La Veu de Montserrat*, 10-XII-1898, donde también se habla de una coalición liberal que se opusiera a la conservadora.

⁵ *Heraldo de Madrid*, 8-I-1899.

⁶ Cfr. *La Tradición Navarra*, 10-I-1899.

⁷ *Heraldo de Madrid*, 13-I-1899.

⁸ *El Pensamiento Navarro*, 13-I-1899.

⁹ Cfr. nuestro estudio sobre *La última evolución política de Castelar*, «Hispania», XXX (1970), 385-393, trazada precisamente a partir de ese *memorandum* de septiembre de 1898.

¹⁰ Vid. *El Liberal*, 19-I-1899.

¹¹ Cfr. Fernando Soldevilla: *El año político 1899*, Madrid, Imprenta y fotograbado de Enrique Rojas, 1900, pág. 16 ss. (BDN).

¹² Apud *Heraldo de Madrid*, 15-I-1899.

¹³ Cfr. *ibidem*, 20-I-1899.

¹⁴ Cfr. Soldevilla: *op. cit.* (1899), pág. 19.

¹⁵ Apud *El Liberal*, 7-II-1899.

¹⁶ *Ibidem*, 27-II-1899.

¹⁷ *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, sesión 22-II-1899.

¹⁸ Cfr. *ibidem*.

¹⁹ *Ibidem*, 23-II-1899.

²⁰ *Ibidem*, 28-II-1899.

²¹ Cfr. conde Romanones: *Notas de una vida*, en «Obras completas», Madrid, Ed. Plus-Ultra, s. d., t. III, pág. 114.

²² Cfr. Manuel Ciges Aparicio: *España bajo la dinastía de los Borbon* Madrid, M. Aguilar editor, 1932, pág. 390.

²³ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 4-III-1899. Vid Juan Bautista Solervicens: *Manuel Durán y Bas*, Barcelona, Ayuntamiento, 1965, 89 pp., que traza una seblanza del personaje sobre todo como jurista.

²⁴ Aurelio Martín Alonso: *Diez y seis años de Regencia (María Cristina Hapsburgo-Lorena) (1885-1902)*, Barcelona, Casa Editorial Vda. de Luis Tas 1914, pág. 455.

²⁵ Cfr. Francisco Pi y Margall y Francisco Pi y Arsuaga: *Historia de España para en el siglo XIX*, Barcelona, Miguel Seguí, editor, 1902, t. XII (2.^a parte), pág. 1784.

²⁶ Cfr. Soldevilla: *op. cit.* (1899), 13.

²⁷ *Ibidem*, 106. Cfr. 91 ss.

²⁸ *Heraldo de Madrid*, 14-III-1899. Cfr. *ibidem*, 10-III-1899.

²⁹ Cfr. *La Veu de Catalunya*, 22-I-1899.

³⁰ *Ibidem*, 8-III-1899. Cfr. Enric Jardí: *El Doctor Robert i el seu temps* Barcelona, Ed. Aedos, 1969, pág. 69 ss.

³¹ *La Veu de Catalunya*, 13-III-1899.

³² *Ibidem*, 15-III-1899. Jardí (*op. cit.*, 73 s.) desmiente las afirmaciones vertidas enseguida en la opinión madrileña sobre la creencia de Robert en la superioridad de los catalanes a partir del estudio de su constitución craneal.

³³ Vid. *La Veu de Catalunya*, 19-IV-1899. En realidad, ya había pensado Morgades para la sede barcelonesa el anterior Gobierno Sagasta (cfr. Jardí *op. cit.*, 79). Aunque la preconización por el Papa fue notificada en 19-VI-18 por el embajador (AME/AES, leg. CDXXXVI, exp. 1263).

³⁴ Vid. su obra cumbre: Josep Torras i Bages: *La tradició catalana*, 3.^a ed. Barcelona, Ed. Selecta, 1966, 428 pp.

³⁵ En ADV, leg. 533, «Correspondencia, 1899», se conservan cartas de Alberto Rusiñol, entonces presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Juan Güell, capellán del marqués de Comillas, entre otros. Aunque no damos otro valor que el de testimoniar la relación y cierta afinidad con Morgades.

³⁶ Cfr. *La Veu de Catalunya*, 4-IV-1899.

³⁷ Cit. Carmen Llorca: *Emilio Castelar, Precursor de la Democracia Cristiana*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1966, pág. 331.

³⁸ Cit. Pi y Margall...: *op. cit.*, VII (2.^a), 1794.

³⁹ Apud *Heraldo de Madrid*, 6-V-1899.

⁴⁰ *Ibidem*, 7-V-1899.

⁴¹ Cfr. *ibidem*, 13-I y 25-V-1899. «Ya ves tú cómo murió Castelar —escribió Joan Maragall el 28-V-1899 en carta a un amigo—. Se trata de un verdadero luto nacional porque él personificaba la España que también se está muriendo» (apud *Correspondencia Maragall-Roura*, Barcelona, Ed. Polígrafa, 1969, pág. 195).

⁴² *Heraldo de Madrid*, 22-IV-1899.

⁴³ *Ibidem*, 27-IV-1899.

⁴⁴ Cfr. Anselmo Villar y Amigo: *In memoriam. Homenaje póstumo dedicado al glorioso soldado español Marqués de Polavieja*, Madrid, Establecimiento tipográfico de Ernesto Catalá, 1914, pág. 200 (BNM).

⁴⁵ Apud *Heraldo de Madrid*, 6-V-1899.

⁴⁶ Vid. *ibidem*, 12, 30 y 31-V-1899.

⁴⁷ *Op. cit.*, VII (2.^a), 1800.

⁴⁸ *Heraldo de Madrid*, 31-V-1899.

⁴⁹ Cit. *ibidem*, 7-VI-1899.

- ⁵⁰ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 10 y 12-VI-1899, y Martín Alonso: *op. cit.*, 463 ss.
- ⁵¹ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 3-V y 11-VI-1899, y *La Veu de Catalunya*, abril y mayo 1899.
- ⁵² *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 2-VI-1899.
- ⁵³ Vid. la tesis doctoral de Gabriel Solé Villalonga.
- ⁵⁴ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 17-VI-1899.
- ⁵⁵ Cfr. *ibidem*, 26 y 27-VI-1899, y *La Veu de Catalunya*, 16, 19, 21 y 22-VI-1899. Vid. Jardí: *op. cit.*, 82 ss., y Pedro Voltres Bou: *Las dos huelgas de contribuyentes en la Barcelona de fin de siglo*, «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña», V (1971), 43 ss.
- ⁵⁶ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 26-VI-1899.
- ⁵⁷ Cfr. *ibidem*, 27-VI-1899.
- ⁵⁸ Melchor Fernández Almagro: *Historia política de la España contemporánea*, 3. 1897-1902, Madrid, Alianza Editorial, 1968, pág. 230.
- ⁵⁹ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 26 y 27-VI-1899, *Heraldo de Madrid*, 28-VI-1899, y *La Avalancha*, 24-VII-1899.
- ⁶⁰ Cit. *La Avalancha*, 8-IX-1899.
- ⁶¹ Vid. APR/SpM, c^o 18, núm. 8.
- ⁶² Cit. *La Veu de Catalunya*, 3-V-1899.
- ⁶³ Carta de 17-VI-1895, APR/SpM, c^o 6, núm. 10.
- ⁶⁴ José Domingo Corbató: *Los consejos del Cardenal Sancha o apología católica del carlismo*, 2.^a ed., Barcelona, Imprenta de Francisco J. Altés, 1899, página 72. (Nos facilita esta referencia el Dr. José Manuel Cuenca.)
- ⁶⁵ «Yo no he abordado ni tocado nunca esta cuestión [religiosa], porque me han absorbido la atención otros aspectos del problema nacional»: apunte, AHN, Sección Diversos, Títulos y Familias, leg. 111. Vid. el apéndice que sobre el tema incluye George J. Cheyne: *Joaquín Costa, el gran desconocido*, Barcelona, Ed. Ariel, 1972.
- ⁶⁶ Carta de don José Alabern a Morgades, 10-VII-1899, ADV, leg. 533, «Correspondencia, 1899».
- ⁶⁷ *La Veu de Montserrat*, 1-VII-1899.
- ⁶⁸ *Ibidem*, 8-VII-1899.
- ⁶⁹ Cfr. Miguel Morayta: *Masonería española. Páginas de su historia*, Madrid, Nos, 1956, pág. 43.
- ⁷⁰ Cfr. Alejandro Lerroux: *Mis memorias*, Madrid, Ed. Afrodisio Aguado, 1963, pág. 516 s.
- ⁷¹ Vid. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 28-I-1904.
- ⁷² Vid. *op. cit.*, VII, 67.
- ⁷³ Cfr. Iglesias y García: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 17-XII-1910, y *Revista Popular*, 24-VII-1902.
- ⁷⁴ Cfr. León Carbonero y Sol: *Crónica del Congreso Antimasónico Internacional celebrado en Trento en 1896*, Madrid, Imprenta de «El Movimiento Católico», 1896, págs. 413 y 321 (BCR, en el tomo de *La Cruz*, 1897).
- ⁷⁵ Cfr. Luis Antón de Olmet y Arturo García Carraffa: *Canalejas*, Madrid, 1913, pág. 154 s.
- ⁷⁶ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 30-VI-1899. La prensa navarra tergiversó la noticia. En la reseña de las Cortes, *El Pensamiento Navarro* afirmó: «El diputado republicano Blasco Ibáñez hace una pregunta referente a un colegio de Religiosos de Santiago» (1-VII-1899). Sin embargo, a partir del mismo día, *La Tradición Navarra* comenzó a publicar una serie de artículos del presbítero Pérez Goyena sobre «Los Escolapios», reproducidos en *El Pensamiento* desde el 2, para «rebatir una insinuación infame que contra ellos se ha levantado estos días en Pamplona», referida a la castidad. Estos hechos son antecedente inmediato de los conflictos provocados por el grupo republicano pamplonés en 1900, que estudia Juan María Lecea Yabar: «*Vieja Navarra*» y «*Nueva Navarra*», Pamplona, «Diario de Navarra», 1973, 210 pág.
- ⁷⁷ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 30-VI y 1-VII-1899.
- ⁷⁸ Cfr. Antón de Olmet: *op. cit.*, 155.

⁷⁶ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 5-VII-1899.

⁷⁹ Carta del obispo de Málaga, apud *La voz del episcopado. El drama El tra y las órdenes religiosas*, «Apostolado de la Prensa», mayo 1901, pág. 12 (BSI). La del arzobispo de Granada se dirigía también contra «las últimas proposiciones del referido Sr. Morayta y del Sr. Blasco contra las Ordenes religiosas la Compañía de Jesús» (apud *La Cruz* (1899), II, 73-76).

⁸⁰ Cfr. *El Imparcial*, 11-VIII-1899.

⁸¹ Cfr. duquesa viuda de Canalejas: *La vida íntima de Canalejas*, Madrid: Afrodisio Aguado, s.d., págs. 42, 175 s. No conocemos, sin embargo, ni un solo dato que documente esa suposición que esbozamos. Es cierto que, en las oposiciones a Cátedra de Literatura de la Universidad Central, que perdió en 1888, fue considerado candidato apadrinado por los krausistas. Pero veremos cómo en su programa de 1906, dirigido a López Domínguez, daba a entender su desapego del grupo institucionista.

⁸² Vid. Pierre Sorlin: *Waldeck-Rousseau*, Paris, Librairie Armand Colin 1966, pág. 429 ss. En el mismo sentido, Malcolm O. Partin: *Waldeck-Rousseau, Combes, and the Church: The politics of anticlericalism, 1899-1905*, Durham N. C.; Duke University Press, 1969, pág. 23: Waldeck-Rousseau eligió al socialista Millerand «to proclaim officially the government's intention of initiating further anticlerical actions», tal vez justificadas, a la larga, en las actividades antirrepblicanas de algunos religiosos, sobre todo los asuncionistas, en las elecciones de 1898, en relación con el nacionalismo antidreyfusista. Pero, como hecho, parece que fue ya el 19-X-1899, en su discurso de Lille, cuando Millerand anunció el propósito del Gobierno de defender un proyecto de ley de asociaciones que pusiera fin a las actividades políticas de los institutos de perfección. Vid. además John McManners: *Church and State in France 1870-1914*, London: SPCK, 1972.

⁸³ Afirmamos aquí la necesidad de revisar, en el estado actual de nuestros conocimientos, la acostumbrada afirmación de que el rebrote del anticlericalismo español en 1899 responde a una mera imitación de los planteamientos franceses, tal como lo viene asegurando la bibliografía sobre el período.

⁸⁴ Cfr. *El Imparcial*, 8-VII-1899, y Martín Alonso: *op. cit.*, 470.

⁸⁵ Cit. Soldevilla: *op. cit.* (1899), 275. Cfr. *ibidem*, 274.

⁸⁶ Cit. Pi y Margall...: *op. cit.*, VII (2.ª), 1838.

⁸⁷ Cfr. Soldevilla: *op. cit.* (1899), 295.

⁸⁸ Cfr. *El Imparcial*, 21-IX-1899.

⁸⁹ Cfr. Pi y Margall...: *op. cit.*, VII (2.ª), 1843 s.

⁹⁰ «Excmo. Señor Teniente General = D. Camilo Polavieja = Mi querido amigo y compañero: La cifra de economías o de reducciones orgánicas que deb hacerse en ese Departamento Ministerial, para cubrir con los demás la total rebaja de cuarenta millones de pesetas que se propone realizar el Gobierno en el proyecto de Presupuesto de gastos presentado a las Cortes, es la de 19.980.000 pesetas. = Muy suyo afectísimo amigo s. s. = q. s. m. b. = R. Villaverde = s[e]pt[embr]e 26/99 = No es necesario añadir que se trata de economías reales, no ficticias o que exijan suplementos de créditos en el curso de ejercicio, pues han de proponerse también a las Cortes medidas muy restrictivas respecto a la concesión de esas ampliaciones de créditos. = La economía pedida concretamente a las Cortes de un 15 por 100 del personal en tres años y de un 5 por 100 del material en el de 1899-1900 va comprendida, por lo que a esta se refiere, en la cifra que se fija. = Alguna de las combinaciones ideadas para Fomento podría como ayer dije, reducir la economía necesaria en Guerra; pero nunca por bajo de la cifra de 17.238.000 pesetas» (APR/SpM, c.º 9, núm. 13).

⁹¹ *Ibidem* hay unas cuartillas grapadas —sin duda el informe de Polavieja— en la primera de las cuales se lee: «Leído en el último Consejo de Ministros, y motivó la crisis por exigir el Ministro de Hacienda se hicieran en Guerra las economías pedidas en su carta.» He aquí el texto, interesante para el estudio de la política militar española: «La baja hecha en el proyecto de presupuesto del Ministerio de la Guerra está basada en no desorganizar los servicios establecidos actualmente, ni lastimar los intereses ya creados del personal,

nás allá de los límites que la prudencia y la justicia aconsejan. = En este proyecto aparece una partida de importancia, como aumento sobre las anteriores, para atender al personal de jefes y oficiales excedentes que proceden de los ejércitos de ultramar. Pudiera pretenderse que esta partida sufriera rebaja, dando a aquellos la mitad de sus sueldos, en lugar de los 4/5 que les están señalados; pero además de que las disposiciones vigentes así lo establecen, constituyendo, hasta cierto punto, un derecho adquirido por este personal, hay a razón suprema de que una reducción semejante vendría a privarle de lo necesario para la vida; y para demostrarlo, basta señalar el sueldo que cada clase percibiría, teniendo en cuenta el descuento con que sería gravado.

EMPLEOS	Sueldo entero íntegro	Sueldo de los 4/5 con el descuent- to del 11 %	Sueldo mitad con el des- cuento del 11 %
Coronel	7.500	5.340,00	3.337,50
T. Coronel	6.000	4.272,00	2.670,00
Comandante	5.000	3.560,00	2.225,00
Capitán	3.000	2.136,00	1.335,00
1.º Teniente	2.250	1.602,00	1.001,25
2.º Teniente	1.950	1.388,40	867,75

Debe tenerse presente para no rebajar el sueldo de los excedentes, la mayor tributación que el presupuesto señala a las clases militares por cédulas personales y descuentos y que se expresa a continuación.

	Con el presupe- sto vigente.	Con el proyecto de presupuesto.
	Pes[e]tas	Pesetas
Importe aproximado de las cédulas personales	75.000,00	250.000,00
Importe aproximado de los descuent- tos sobre sueldos	4.018.838,60	6.387.057,00

Tal reducción en sus haberes pondría a los oficiales y a sus familias, pues la mayoría son casados, en situación angustiosa y depresiva, con desprestigio de su clase y de la Nación. = Como ejemplo práctico puede citarse el caso de un teniente, que, con 32 duros y medio de sueldo mensual en la Península, haya ido a la campaña, y habiendo recibido en ello el empleo de capitán por sus heridas, vuelva de nuevo a la Península, y sólo perciba 22 duros mensuales, después de haber derramado su sangre en defensa de su Patria. = La creación de los terceros batallones en los regimientos de Infantería y de Zapadores-minadores es de imprescindible necesidad hoy que los efectivos de pie de guerra son mayores cada día en todos los ejércitos; y, para alcanzarlos, es necesario tener dispuestos de antemano los cuadros de unidades que, en el momento preciso, se nutran de fuerza, pues no puede pasarse de cierto límite en el número de hombres que han de ir al mando de cada oficial. Esto es lógico, pero además lo comprueba la experiencia, pues siempre que ha habido campaña, ha sido preciso establecerlos, improvisando cuadros, y creando oficiales sin la instrucción suficiente, que, al terminarse aquella, han venido a aumentar el número de excedentes, con perjuicio del Tesoro, como en la actualidad sucede. = Nada, sin embargo, se conseguiría con estos terceros batallones, si no se llenase otra condición necesaria para la movilización, y es la rapidez en todas las operaciones para pasar de los efectivos de paz a los de guerra. Esta rapidez sólo se puede obtener con una ordenada agrupación de las reservas, de modo que, al de-

cretar la movilización, cada agrupación marche a su destino sin dilaciones ocasionadas por largas distancias que recorren, o por necesidad de dar destino, aquellos momentos, a los reservistas, y a llenar esta necesidad, va encaminada la nueva división de zonas, que, con una demarcación reducida, abreviarán concentración, y facilitarán todas las operaciones de la movilización, y el tablecimiento de los batallones de primera y segunda reserva, donde los individuos habrán de prestar servicio, una vez movilizados, nutriendo los cuerpos activos, con los de los tres primeros años de servicio, que bastarán para cubrir sus plantillas de pie de guerra, dándoles instrucción en el número suficiente pasando a sus hogares, una vez adquirida, pero dependiendo del cuerpo activo que hará directamente el llamamiento, para la más rápida incorporación. = En necesidad es tanto más de sentir, cuanto que al reducirse los contingentes en filas, hay que compensarlo con la buena organización de las reservas, a fin de estar prevenidos, tanto para las contingencias interiores, como para las de orden exterior. = Por otra parte, la no creación de los terceros batallones sólo produciría 645.080 pesetas de economía y dejar las zonas completamente desorganizadas, como están hoy, 714.732, o sea: la supresión de estas dos reformas (que se completan) daría una economía total de 1.359.812 pesetas. = La disminución de unidades activas traería consigo la de la fuerza defensiva u ofensiva del país, y tendría que quedar con escasa guarnición, como han estado, con gran riesgo, las Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla; y desguarnecidas algunas ciudades importantes, que es necesario tener ocupadas, para evitar alteraciones de orden, que puedan ocurrir, haciendo preciso llevar tropas de otros puntos, originándose gastos de transporte considerables. = El excedente de jefes y oficiales aumentaría considerablemente; lo cual unido a la amortización del 50 % de vacantes que hoy se realiza, originaría tal lentitud en los ascensos, que se llegaría a los diferentes empleos en edades demasiado avanzadas y sin la necesaria aptitud física para desempeñarlos bien en campaña. = La economía que se obtiene con la supresión de unidades no es la que a primera vista parece; porque la tropa tendría que distribuirse en los otros cuerpos, pues el contingente fijado por la ley no se altera, y los oficiales, al pasar a la excedencia, sólo pierden 1/5 de su sueldo. El estado siguiente explica la economía que se obtendría suprimiendo una unidad en cada arma. = ECONOMIA que se obtiene por el 1/5 de sueldo de los jefes y oficiales, y por el total de las gratificaciones, raciones, &c.

	Pesetas
Un regimiento de Infantería	48.265
Un batallón de Cazadores	30.420
Un regimiento de Caballería	48.840
Un regimiento montado de Artillería	51.492
Un batallón de Artillería de plaza	26.653
Un regimiento de Ingenieros	47.456
Suma	243.126

Conviene comparar el presupuesto de 1892-93, llamado de la paz, con el proyecto para el ejercicio de 1899-1900, después de liquidado aquel.

	Pesetas
Importa el proyecto de presupuesto para 1899-1900	174.329.539,—
Deducción de la Guardia Civil con sus reenganches	25.746.695,—
Haberes de repatriados	19.217.823,—
Economía que se hace	7.914.280,—
Queda el presupuesto en	121.450.741 —

Se liquidó el presupuesto de 1892-93 sin la Guardia Civil en	119.853.978,—
Aumento en el proyecto de presupuesto sobre el de 1892-93.	1.596.763,—

Falta solamente añadir las cantidades que el ramo de Guerra ha entregado en distintas ocasiones al Tesoro. = DE LOS FONDOS DEL MONTEPIO

Desde 1808 a 1828	240.000.000 Rls. von.
En 1831	40.874.326 »
Al suprimirse el Montepío	500.000.000 »
TOTAL	780.874.326 »

DE LOS FONDOS DE REDENCIONES Y ENGANCHES:

Para la guerra del Pacífico	6.250.000 Ptas.
Ley de 24 de junio de 1885	31.000.000 »
Ley de 2 de agosto de 1886	37.495.331 »
En renta del 4 % interior, 34.000.000 nominales	26.167.256 »
TOTAL	100.912.587 »

Entregado en total por el ramo de Guerra al Tesoro, desde el año 1808: 296.131.168,50 pesetas.»

No se explica el origen de la última cifra. Para conocer mejor las pretensiones de reforma militar de Polavieja, vid. *Ministerio de la Guerra. Colección legislativa del Ejército. Año 1899*, Madrid, Imprenta y litografía del depósito de la Guerra, 1899, 411-LVIII pp. y seis apéndices s. p., que hemos consultado en el Ministerio del Ejército.

⁹² APG, Sección Ministros de la Corona, leg. 5, núm. 156, expediente de Polavieja, conserva el original de su dimisión, que justifica «no estando conforme con la opinión de mis compañeros los señores ministros respecto a las economías que deben introducirse en el ramo de Guerra».

⁹³ Apud Soldevilla: *op. cit.* (1899), 329.

⁹⁴ *Op. cit.*, VII (2.^a), 1844 s.

⁹⁵ Doña María Cristina de Habsburgo Lorena, en «Obras completas», Madrid, Ed. Plus-Ultra, s. d., págs. 444 y 464.

⁹⁶ *El Imparcial*, 1-X-1899.

⁹⁷ Cfr. Alberto y Arturo García Carraffa: *Prat de la Riba*, Barcelona, Imprenta Hijos de Domingo Casanovas, 1917, pág. 103.

⁹⁸ *El Imparcial*, 1-X-1899.

⁹⁹ Vid. Voltes Bou: *op. cit.*; *El Imparcial*, 6, 7, 12 y 24-X-1899; *La Veu de Catalunya*, julio a septiembre 1899.

¹⁰⁰ Cfr. *El Imparcial*, 16-X-1899.

¹⁰¹ Cfr. Maximiano García Venero: *Historia del nacionalismo catalán (1793-1936)*, Madrid, Editora Nacional, 1944, pág. 239; del mismo: *Melquiades Álvarez. Historia de un liberal*, Madrid, Ed. Alhambra, 1954, pág. 99.

¹⁰² Cfr. Angel Salcedo Ruiz: *Historia de España (Resumen crítico)*, Madrid, Ed. Calleja, 1914, pág. 861.

¹⁰³ Según los recuerdos familiares de su nieto, don Camilo García de Polavieja.

¹⁰⁴ Cfr. Villar y Amigo: *op. cit.*, 80, 200.

¹⁰⁵ Cfr. García Carraffa: *op. cit.*, 103 s.

¹⁰⁶ Pabón: *op. cit.*, 186.

¹⁰⁷ Jardí habla (*op. cit.*, 90 s.) de un proyecto de partido que habrían de constituir Paraíso, Agulló y Rusiñol, en fecha imprecisa, en cualquier casodatable entre el otoño de 1899 y la primavera del año 1.

¹⁰⁸ De ser ciertas las cifras que publica Miguel M. Cuadrado (*Elecciones y partidos políticos de España (1868-1931)*, Madrid, Taurus, 1969, vol. II, 640 s.),

el Gobierno tendría que haberse visto en serias dificultades para subsistir tras la salida de Polavieja. En las elecciones, había obtenido una débil mayoría de 222 diputados, frente a 169 de las oposiciones. De aquellos, 24 eran pidalianos y unos 40 (seguramente menos) polaviejistas, que, al dejar de ser gubernamentales, habrían podido hacer caer al Ministerio. No hallamos huella de tensión de ese tipo en las fuentes coetáneas. Por otra parte, Pi y Margall (*op. cit.*, VI (2.^a), 1789) habla de 248 diputados ministeriales.

¹⁰⁹ Segarra y Juliá en *La Vanguardia*, 31-I-1914, apud Villar y Amigo: *op. cit.*, 123 s.

¹¹⁰ Cfr. Manuel de Castro y Alonso: *Episcopologio vallisoletano*, Tipografía y Casa Editorial Cuesta, 1904, pág. 477 ss. (BNM).

¹¹¹ «Sr. D. Alfonso de Aguilar = Reciba V., mi querido amigo, mi entusiasta y sincera felicitación. Siempre creí que S. M. confirmaría a V. en el cargo que interinamente le había confiado. Con razón puede V. estar satisfecho por la prueba de cariño y de confianza que S. M. le ha dado nombrándole su Secretario; mil enhorabuenas, y, como nosotros decimos, *ad multos annos*. Regin felicitaba a V. también cariñosamente. = Pronto, del Viernes al Sábado, pienso ir a esa. Tales y tan graves rumores circulan acerca de las economías que en el personal del Clero piensa hacer el Gobierno, que quiero prevenir a S. M., por lo que si se confirmasen esos rumores, el Gobierno nos obligaría a Prelados y Cabildos a tomar una actitud que pudiera traer muy graves consecuencias. Los Cabildos han comenzado ya a agitarse como verá V. por la adjunta exposición. = Repito mi felicitación y hasta pronto. De V. afectísimo amigo, cap[ellán] = q. b. s. m. = † El Card[enal] Cascajares = 8 N[oviembre] 99 (APR/SpM, c.^o 6, núm. 10).

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ Costa, *el gran fracasado*, Madrid, Espasa Calpe, 1930, pág. 144 s. En el mismo sentido, Luis Antón del Olmet: *Costa*, s. l., s. i. (Col. «Los grandes españoles»), s. d., pág. 237.

¹¹⁴ Cfr. E. Tierno Galván: *Costa y el regeneracionismo*, Barcelona, Ed. Barce, 1961, pág. 167, y Martín-Retortillo: *Joaquín Costa, impulsor de la reconstrucción nacional*, Barcelona, Ed. Aedos, 1961, pág. 69.

¹¹⁵ Cfr. Maximiano García Venero: *Santiago Alba, monárquico de razón*, Madrid, Aguilar, 1963, pág. 41. Es lástima que George J. G. Cheyne (*Joaquín Costa, el gran desconocido*, Barcelona, Ed. Ariel, 1972, pág. 20) no precise la fecha de la recomendación de Cascajares para la obtención de «una modesta pensión» en beneficio del tío de Costa, mosén Lucas Martínez. Aclararía el problema del comienzo de sus relaciones, que quedó planteado antes (al menos) a raíz de la supuesta influencia costiana en la pastoral de febrero de 1898. Costa, por cierto, conocía tal pastoral: «Van corridos dos años del santo alzamiento nacional de Zaragoza —escribía el 20 de septiembre de 1900 en Madrid en artículo «enviado al *Heraldo de Aragón* para su *Album sobre Zaragoza en 1900, fiestas del Pilar*—; y la España grande, la España de los pequeños, sigue clavada en el madero lo mismo que en 1898; sin que en tan largo espacio de tiempo se haya hecho más sino demostrar que las clases directoras no quieren desclavarla, y que ella no se sabe desclavar». Y esto sucedía «por lo que decía en una sentida pastoral el Cardenal Cascajares: porque no hay quien reflexione» (manuscrito, AHN, Sección Diversos, Títulos y Familias, leg. 106). El arzobispo había comenzado su escrito: «*Con gran desolación está desolada la tierra*, exclamaba el Profeta del Señor, *porque no hay nadie que reflexione*» apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid*, 25-II-1898).

¹¹⁶ Martín-Retortillo: *op. cit.*, 69.

¹¹⁷ *Historia política...*, (2), 75. Vid. Félix de Llanos y Torriglia: *Germán Gamazo, el sobrio castellano*, Madrid, Espasa Calpe, 1942, pág. 151 ss.

¹¹⁸ Carta a Augusto Suárez de Figueroa, sin fecha, AHN, Sección Diversos, Títulos y Familias, leg. 103.

¹¹⁹ Cit. Pi y Margall...: *op. cit.*, VII (2.^a), 1505.

¹²⁰ Cfr. Giges: *op. cit.*, 128 s., y Marcelino Gambón Plana: *Biografía y bibliografía de D. Joaquín Costa*, Huesca, Faustino Gambón Castellón, impresor y editor, 1911, 89 pp.

¹²¹ Martín-Retortillo: *op. cit.*, 56.

¹²² *Op. cit.*, 145.

¹²³ Cfr. Vázquez de Mella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-XII-1910.

¹²⁴ Vid. José Andrés Gallego: *Regeneracionismo y política confesional en España, 1889-1899*, «Archivo Hispalense», núm. 166 (1971), 147 ss.

¹²⁵ Vid. *Revista Popular*, LVI (1899), 383.

¹²⁶ Vid. *ibidem*, LVII (1899), 15 ss.

¹²⁷ Vid. *El Imparcial*, 9-VIII-1899.

^{127 b} Vid. *El Mensajero del Corazón de Jesús* (1899), II, 322 s.

¹²⁸ Cfr. *El Imparcial*, 9, 12 y 21-VIII-1899.

¹²⁹ En APR/SpM, c^o 5, núm. 11, hay una apunte manuscrito sin firma que dice: «Conflicto de Castellón = En Consejo se acordó dirigir una circular telegráfica a los gobernadores p[ar]a que amparen el derecho de los católicos a poner letreros y atributos en la vía pública procediendo de acuerdo con la autoridad eclesiástica para que la expresión de sentimientos religiosos no se desnaturalice y se convierta en instrumento de pasiones políticas. En ese sentido se contesta al Sr. Obispo de Tortosa». Los emblemas en cuestión, generalizados en toda la península (hay correspondencia sobre su difusión por la diócesis de Vic en ADV, leg. 533, «Correspondencia, 1899»), son aún muy frecuentes (en 1975) en los pueblos de Navarra. Responden a un patrón único: la imagen del busto de Jesucristo, mostrando el corazón, hacia donde señalan las manos. Debajo, el lema «Reinaré», y todo, enmarcado en un óvalo, de 33 por 43 cm. Los distribuía, por cinco pesetas, la librería religiosa de Bernardo Gazapo, de Bilbao (vid. *El Mensajero del Corazón de Jesús* (1898), II, 223).

¹³⁰ Cfr. *El Imparcial*, 14 y 17-VIII-1899.

¹³¹ Vid. la pastoral, fechada el 12-VIII-1899, apud *La Cruz* (1899), II.

¹³² Apud *Crónica del 5.º Congreso Católico Español, celebrado en Burgos el año 1899*, Burgos, Imprenta y Estereotipia de Polo, 1899, pág. 636 s. (BSP).

¹³³ Cit. [José Roca Ponsa]: *Observaciones que el Cap. XIII del Opúsculo del Sr. Cardenal Sancha, Arzobispo de Toledo, ha inspirado a un ciudadano español*, Sevilla, Imprenta de Francisco de P. Díaz, 1899, págs. 5, 9 s. (BSP).

¹³⁴ Cit. *ibidem*, 55.

¹³⁵ Vid. nota 133 supra.

¹³⁶ Cfr. *El Imparcial*, 30-VIII-1899.

¹³⁷ Cfr. José Navarro Cabanes: *Apuntes bibliográficos de la Prensa Carlista*, Valencia; Sanchís, Torres y Sanchís, 1917, pág. 130. Vid. la entusiasmada carta que, como «tradicionalista», dirige a *El Correo Catalán*, en *El Correo Catalán. Efeméride Bibliográfica* [Barcelona], s. i. [1926], s. p. (BNM).

¹³⁸ Vid. Vicente Cardenera: *Sobre la necesidad de una nueva y pronta organización de las fuerzas católico-políticas en España*, Huesca, Imprenta de T. Blasco, 1899, 32 pp. (BEV).

¹³⁹ [Roca Ponsa]: *op. cit.*, passim.

¹⁴⁰ *La Veu de Montserrat*, 2-IX-1899.

¹⁴¹ Cit. [Roca Ponsa]: *op. cit.*, 116.

¹⁴² *Op. cit.* (nota 63 supra), 14. Más tarde, Corbató dirigiría en Valencia un semanario, *La Señal de la Victoria*, sin censura eclesiástica, que, junto a su opúsculo *El Inmaculado San José*, fue puesto *sub iudice* en Roma, en 1907, a petición del arzobispo levantino Guisasola, por sugerir la concepción inmaculada de San José y ciertas frases dudosas sobre su paternidad real. Condenado finalmente por la Congregación del Santo Oficio, Corbató se retractó, no sin ciertas reticencias sobre sus relaciones con el prelado (vid. *La Cruz* (1907), I, 226-236, 315-322, 553-557. Vid. también Vicente Cárcel Ortí: *La biblioteca del Padre Corbató, legada al Colegio del Patriarca*, «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXIX (1963), 134-149; del mismo: *Escritos impresos del padre Corbató*, *ibidem*, XLI (1965), 80-102).

¹⁴³ Cfr. *El Imparcial*, 25 y 26-VII-1899.

- ¹⁴⁴ Integra en *La Cruz* (1899), II, 49-58.
- ¹⁴⁵ Vid. Romero Robledo: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 22-VII-1899 y Cruz Ochoa: *ibidem*, 24-VII-1899.
- ¹⁴⁶ Cfr. *El Imparcial*, 26-VII-1899.
- ¹⁴⁷ No hallamos tal defensa en el *Diario de las Sesiones... Senado*. Alude probablemente, a conversaciones extraparlamentarias.
- ¹⁴⁸ Se trata de una proposición incidental pidiendo la expulsión de los jesuitas. Tampoco la hemos sabido hallar en el *Diario de Sesiones... Congreso*. Pero aparece advertida en otras fuentes.
- ¹⁴⁹ Carta de 8-VIII-1899, APR/SpM, c.ª 6, núm. 31. Publica una copia con ligeras modificaciones de ortografía y sintaxis que apenas la alteran (en absoluto su contenido), José María Javierre: *Don Marcelo de Sevilla*. Barcelona, Juan Flors, editor, 1963, págs. 378-381.
- ¹⁵⁰ Cfr. *El Imparcial*, 21-VIII-1899.
- ¹⁵¹ *Ibidem*, 26-VII-1899.
- ¹⁵² Cit. *ibidem*, 26-VIII-1899.
- ¹⁵³ Cit. *ibidem*, 30-VIII-1899.
- ¹⁵⁴ Cit. *ibidem*, 31-VIII-1899. Hay una versión estilísticamente peor en APR/SpM, c.ª 6, núm. 27.
- ¹⁵⁵ Apud *El Imparcial*, 29-VIII-1899. En APR/SpM, c.ª 6, núm. 27, hay otra versión de este telegrama, también más deficiente de estilo.
- ¹⁵⁶ Vid. *El Imparcial*, 1-IX-1899.
- ¹⁵⁷ Apud *Crónica del 5.º Congreso...*, 71 ss.
- ¹⁵⁸ *Ibidem*, 157 s.
- ¹⁵⁹ *El Imparcial*, 2-IX-1899.
- ¹⁶⁰ Cfr. *Crónica del 5.º Congreso...*, passim.
- ¹⁶¹ *El Imparcial*, 3-IX-1899.
- ¹⁶² *Op. cit.*, 494.
- ¹⁶³ Cfr. *El Imparcial*, 5-IX-1899.
- ¹⁶⁴ *Congreso Católico de Burgos. Mensajes y noticia histórica*. Burgos: Imprenta y Estereotipia de Polo, 1899, pág. 29 (BAM, donde aparece fichado ignoramos por qué, como obra del cardenal Cascajares). Vid. Antonio Martínez Sacristán: *Memoria sobre el punto o tema primero de la segunda sección del Congreso Católico Nacional de Burgos*. Astorga-La Bañeza, Imprenta y Librería de la Viuda e Hijo de López, 1899, 20 pp. (BEV).
- ¹⁶⁵ *Congreso Católico de Burgos...*, 27.
- ¹⁶⁶ Cfr. Pi y Margall...: *op. cit.*, VII (2.ª), 1839.
- ¹⁶⁷ Cit. *ibidem*.
- ¹⁶⁸ «Los asociados se obligan: 1.º A apoyar eficazmente a los candidatos de la Unión en todas las elecciones. 2.º A defender los intereses de la Religión según el programa aprobado por el Episcopado. 3.º A no prestar apoyo directo ni indirecto a ningún candidato ni hombre político que no se comprometa solemnemente a la defensa de ese programa. 4.º A apartarse de la temeridad de quienes no solamente otorgan y niegan patentes de catolicismo sino que llegan en su osadía a establecer límites a la potestad del Romano Pontífice y de los Obispos en las cuestiones político-religiosas... = Los candidatos a las elecciones municipales, provinciales y de Cortes, los directores de la prensa, de Círculos y de cualquiera otra manifestación pública de la vida política, que deseen pertenecer a esta Unión, deberán ponerlo en conocimiento de su Prelado, el que de acuerdo con sus Hermanos les manifestará de qué manera han de recibir la dirección inmediata para unificar su acción en el Senado, en el Congreso, en la Diputación, en el Ayuntamiento, en el periódico y en cualquier otro acto que interese indirectamente al fin de esta Unión. = ...La Unión de los católicos no se propone erigir, cambiar ni destruir insituciones o Gobiernos, sino únicamente defender a la Iglesia y purificar las leyes de los errores que las vicien» (apud *Crónica del 5.º Congreso...*, 637 ss.).
- ¹⁶⁹ *Ibidem*.
- ¹⁷⁰ Cfr. *El Imparcial*, 23-IX-1899. Fechado el día 3, debió ser mandado en realidad bastante después.

¹⁷¹ Cit. *ibidem*, 26-IX-1899.

¹⁷² Apud *Crónica del 5.º Congreso...*, 645 ss.

¹⁷³ Cfr. *El Imparcial*, 24-IX-1899.

¹⁷⁴ Cfr. *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 20-X-1899.

¹⁷⁵ Apud *Crónica del 5.º Congreso...*, 800.

¹⁷⁶ Apud [José Roca Ponsa]: *El Congreso de Burgos y el Liberalismo por el Magistral de Sevilla*. Sevilla, Imprenta de Francisco de P. Díaz, 1899, páginas 152 s. (BDN).

¹⁷⁷ *Ibidem*, 63, 153 s. Este folleto parece difundido en febrero o marzo de 1900 (vid. *El Mensajero del Corazón de Jesús* (1900), I, 286).

¹⁷⁸ Vid. [Federico Olmeda]: *El nuevo partido católico o exposición de los pensamientos de un católico español, hechos por el mismo en punto a la unión de los católicos*. Burgos, Imprenta y Librería del Centro Católico, 1899, 80 págs. (BEV). El autor, beneficiado de la seo burgalesa, hacía contrapunto así a Roca Ponsa.

¹⁷⁹ *El Correo Español*, 19-IX-1899.

V. PLANTEAMIENTO POLITICO DE LA CUESTION RELIGIOSA, 1900-1902

Mano 221 x 111 1900/2, CASTILLO P

1. *La reelaboración del programa liberal*¹

El Gobierno Silvela había quedado reducido a un simple Gabinete conservador en el otoño de 1899, tras la salida de Polavieja y Durán i Bas. En adelante, su gestión se centró en los presupuestos de Villaverde. Pero, en el aspecto religioso, los mismos presupuestos presentaron un flanco especialmente manejable para que la oposición fusionista liberal continuase buscando en ellos la reelaboración de su programa.

Bajo diversos conceptos, el Estado venía otorgando a la Iglesia una subvención, sobre todo en las denominadas «obligaciones eclesiásticas» del Ministerio de Gracia y Justicia, como indemnización por las desamortizaciones. Y esto era vulnerable por dos flancos fundamentales: el desajuste salarial entre el alto y el bajo clero, realmente infradotado², y lo elevado de la cantidad global destinada al culto y al estamento clerical. La cifra podía ser disminuida en parte por medio de la reforma del Concordato vigente y, en parte también, con la simple aplicación de lo dispuesto en él: porque algunas de las instituciones suprimidas en aquel pacto de 1851, subvencionadas por el Estado, subsistían aún.

El Gobierno Silvela había sido, en realidad, consciente de tales posibilidades desde su misma formación, y parece que, por vía diplomática, buscó soluciones. En la primavera del 99, pensó en comisionar al cardenal arzobispo de Toledo, Sancha, para gestionar en Roma la unificación de las demarcaciones diocesanas y provinciales³; lo que quizá realizó en su viaje de 1900⁴. En septiembre del 99, el nuncio de Su Santidad y el ministro de Gracia y Justicia se entrevistaban repetidamente para estudiar además la reducción de la dotación del clero⁵.

Ambas propuestas habían recibido incluso, en agosto de este año, cierto respaldo de la jerarquía. Tres miembros del cabildo de la catedral valenciana (el arcipreste Urbano Lolumo, el arcediano Vicente Rocafull y el magistral Juan Garrido) firmaron entonces una circular dirigida a todos los demás capítulos catedrales y colegiales de España. En ella les pedían que elevaran una exposición al ministro de Gracia y Justicia —contra los anunciados propósitos de reducir los haberes del clero para contribuir a la recuperación de la Hacienda— sobre estas bases:

«1.º Necesidad absoluta de no elevar el descuento [en los haberes del clero] sobre el que hoy tiene el carácter de donativo transitorio.

2.º Dada la angustiosa situación del Erario y la necesidad forzosa de acudir a su alivio, sostener como preferible a nuevas reducciones la supresión de Diócesis.

3.º En caso de que razones de orden supremo se oponen a la supresión de Diócesis, defender como preferible a nuevos quebrantos la amortización de prebendas y beneficios de gracia hasta el 33 por 100»⁶.

Pero los firmantes fueron acusados de liberalismo. El obispo de Cuenca prohibió expresamente a su clero que suscribiera tal exposición. Y, quizá por indicación superior, los tres beneficiados se desdijeron de ello ⁷.

No hubo reformas. En el otoño, durante la discusión de aquellas obligaciones eclesiásticas en el Congreso, liberales y republicanos insistieron en la necesidad de reformar el Concordato y de aplicar, sin trato con la Santa Sede, las disposiciones del mismo que no habían sido cumplidas ⁸. La discusión no prosperó tampoco. En adelante, el tema religioso abandonó de nuevo la actualidad política, y el Gobierno no volvió a referirse a trato alguno con el Vaticano, absorbidos unos y otros entonces, silvelistas y liberales de todo cuño, por la discusión de las demás partidas de los presupuestos hasta los días últimos de marzo de 1900.

Probablemente para evitar el replanteamiento del tema, Silvela cuidó de acentuar el despegue del rebrote tradicionalista (iniciado ya con la dimisión de Polavieja) a la hora de reorganizar el Gabinete el 18 de abril de ese año. Obtuvo la dimisión del marqués de Pidal y, conforme a algunas peticiones del regeneracionismo, desdobló el ministerio vacante, el de Fomento, en Instrucción Pública de una parte, y Agricultura, Industria Comercio y Obras Públicas de otra. De este encargó a un hombre independiente de espíritu netamente regeneracionista también, Rafael Gasset, director hasta entonces de *El Imparcial* y abanderado de importantes avances técnicos de los programas regeneradores (la política hidráulica de Costa entre otros). Del Ministerio de Instrucción Pública, al ex liberal García Alix ⁹, que parece llegaba dispuesto a realizar la ponencia educativa institucionista presentada a la Asamblea de Productores de Zaragoza de 1899 ¹⁰.

Urgida ésta por algunos sectores, que veían desigual competencia para la enseñanza estatal en los colegios religiosos ¹¹, fue concretada en el decreto de 20 de julio de 1900, por el que establecía un plan de enseñanza media de orientación técnica y no humanística ¹², en sustitución del aprobado por el marqués de Pidal un año antes. Otro decreto de 21 de agosto limitó, con el anterior, la dispensa de título profesional de que gozaban los religiosos educadores, para formar tribunales de examen, sólo a los escolapios, agustinos y jesuitas, como tradicionalmente dedicados a la enseñanza ¹³.

Terminante e insistente García Alix en sus declaraciones de aquellos meses (sobre todo en el discurso de la Universidad de Valladolid), abogó contra la completa libertad educativa y contra los centros privados, en pro de la intervención estatal. Y su consiguiente enfrentamiento con los pidalianos, que defendían la libertad de enseñanza precisamente porque permitía el predominio de la Iglesia ¹⁴, pareció totalizar el giro liberalizador de Silvela.

Un suceso incidental, sin embargo, dio al traste con el Gobierno en octubre del 900. Oficialmente, se debió a desacuerdo en su seno sobre la persona que había de regir la Capitanía General de Castilla la Nueva (Weyler, según Linares, ministro de la Guerra, enemistados ambos con Polavieja, y éste, según los demás, en desagravio de su dimisión) ¹⁵.

A juicio de algunos, la crisis sobrevino por la oposición de Silvela a la boda de la princesa de Asturias con don Carlos de Borbón ¹⁶, noble de estirpe carlista, según vimos, de cuyo enlace se había empezado a hablar entonces con preocupación creciente. En verdad, si fue así, la negativa estaba muy en la línea seguida por el jefe conservador desde el otoño de 1899, cuando, al comprobar la protesta formidable que su inclinación a los tradicionalistas provocaba, se había esforzado en rectificarla por todos los medios: primero, alejando del Gobierno a Polavieja y a Durán i Bas; después, contraponiendo a la gestión de Pidal la de García Alix; ahora, ahuyentando quizá el peligro que los liberales podían entrever en el acercamiento de una familia carlista a la casa real: siempre para que el fusio-nismo no pudiera ver (ni buscar), en la Unión Conservadora, la carga anti-liberal que se le había atribuido.

El nuevo problema, ciertamente, bastaba a provocar tales peligros. Carlos de Borbón y Borbón, el presunto esposo de la infanta, era hijo del heredero de los derechos a la corona de Nápoles, el conde de Caserta, que había luchado junto a Carlos VII en la última guerra civil española. Y por ello, aunque aquel vivía desde 1888 en España, de cuyo ejército formaba parte ¹⁷, los liberales podían encontrar en su ascendencia, como futuro rey consorte de España si Alfonso moría, el regreso de la reacción antide-mocrática temida en el 99.

La prensa comenzó a recoger rumores sobre la boda, que circulaban desde hacía tiempo, al menos en abril de 1900 ¹⁸. En el verano, los diarios liberales empezaron ya a preparar y anunciar explícitamente la nueva ofensiva con el recuerdo del artículo 56 de la Constitución, que consi-g-naba el deber de someter a la aprobación de las Cortes los contratos y estipulaciones matrimoniales del sucesor de la corona. (Lo era María de las Mercedes hipotéticamente.) Advertían además la enemistad de España con el reino de Italia, creado en parte sobre el trono de Nápoles, que el enlace podía suscitar, a pesar de las declaraciones filoliberales del propio don Carlos ¹⁹.

Opuesto probablemente Sagasta a comprometer al Partido Liberal con la celebración del matrimonio si sucedía a los conservadores en el poder, Azcárraga hubo de formar por eso, en octubre de 1900, un Ministerio «puente», que, en frase de Pi y Margall, «pareció sencillamente un Gobier-no casamentero» ²⁰. Entre sus primeras medidas, de otra parte, tuvo que figurar la suspensión de las garantías constitucionales el 1 de noviembre, a raíz del alzamiento de varias partidas carlistas en Cataluña ²¹.

Reabiertas las Cortes el 20, el 23 Azcárate interpelaba al Gabinete acerca del enlace. En adelante, el tema dominó los debates parlamentarios. Pero, contra él, se pronunciaron ya al unísono, acordes nuevamente en confusa ofensiva frente a la «reacción», los centristas de Romero Robledo, fusio-nistas, demócratas y republicanos de todas las tendencias ²². Y fue en estos discursos donde se consignaron puntos poco conexos con el tema matrimonial, que replanteaban definitivamente, sin embargo, la cuestión religiosa. Era preciso someter al derecho común «las órdenes monásticas que nos invaden», en frase de Azcárate ²³; en concreto a la hora de satis-

facen las contribuciones anejas a las actividades educativas, industriales agrarias, según Fernando Gasset ²⁴, y a la hora de evitar el monopolio de la enseñanza y el crecimiento de los bienes en manos muertas, en términos de Canalejas. Todo ello exigía —añadió éste— la unión de las fracciones liberales para lograrlo ²⁵.

Esta última intervención había de ser juzgada más tarde como principio de la campaña anticlerical del siglo xx ²⁶, y a Canalejas como su promotor ²⁷. Pero de inmediato —ahora sí— se denunció también su excesiva similitud, traducción a veces, con otra alocución pronunciada por Waldeck-Rousseau en Toulouse ²⁸. Como el político gallego, el jefe del Gobierno francés había hablado de la existencia de dos juventudes separadas en Francia, formada una en los centros congregacionales y la otra en los del Estado; del desarrollo de los bienes inmobiliarios de los institutos de perfección y de la oposición económica entre el mísero clero bajo secular y los religiosos ²⁹.

Estas palabras se situaban en la evolución programática del Gabinete gallego, que, de Ministerio de Defensa de la República, había pasado a mantener la cohesión de las izquierdas en torno a sí mediante un plan de reformas radicales, concretado sobre todo en dos nuevas leyes sobre asociación y enseñanza. Presentadas ambas al Parlamento el 14 de noviembre de 1899, la *Loi relative au contrat d'association* venía a prohibir el establecimiento de asociaciones religiosas sin autorización gubernativa, con tres meses de plazo, desde que fuera promulgada, para que las asociaciones ya existentes pidieran tal permiso, so pena de ser disueltas. Apuntaba ante todo, según se dijo, contra los jesuitas y los asuncionistas, blanco escogido de la opinión anticlerical por su apoyo a la monarquía y al nacionalismo, exacerbado al acabar el siglo ³⁰.

Se intentaba en definitiva mantener agrupadas, en torno al Gabinete las fuerzas radicales, de cuyo acuerdo dependía quizá la seguridad del régimen y, desde luego, la vida del Gobierno, ante esta presión ya ensayada por las derechas. Obvio era por tanto el ejemplo que tal planteamiento podía ofrecer a los españoles, cuando la falta de cohesión del Partido Liberal de Sagasta, escindido y sin programa, amenazaba la subsistencia misma del sistema de Cánovas.

Se dijo, de hecho, que Canalejas pretendía conscientemente dar un contenido radical al programa del liberalismo para aglutinar a todos los elementos que lo profesaban y contrarrestar así el empuje del Partido Conservador, que no se atrevería a arrebatarles la bandera anticlerical ³¹. Por eso, Francos Rodríguez, amigo y correligionario suyo, afirmó de él explícitamente que «quería para España algo de lo que en Francia realizaba entonces Waldeck-Rousseau» ³². Y la prensa tradicionalista anunció en seguida que la legislación vecina sería pronto traducida «y representada en nuestro teatro político» ³³. Inmediatamente después de aquel discurso, en efecto, el 18 de diciembre de 1900, Azcárate había añadido un punto de interés sobre la limitación del número de frailes, esbozado ya por Canalejas en julio del 99: «De las Ordenes religiosas que hoy viven... en España —dijo—, hay unas que están concordadas, y hay otras que están

toleradas»³⁴: distinción que planteaba el previsible problema jurídico tal como estaba establecido en Francia desde comienzos del siglo XIX³⁵.

Formalizado así el nuevo programa liberal en el invierno final de la centuria, la revitalización del sistema político que con él pareció pretenderse no tardó en concretar la disyuntiva en que quedaba el fusionismo: «Ni se concibe ni se necesita en España —precisó *El Liberal*, el 15 de diciembre de 1900— un partido liberal que no sea democrático y que no haga suyo el programa defensivo, sustentado ayer... por el señor Canalejas»³⁶. De modo que Sagasta había de aceptarlo o renegar de la representación de la izquierda monárquica, que justamente era su razón de ser.

En la sesión parlamentaria del 18, Sagasta se decidió públicamente por el primer camino. Pero, como manifestando su desconfianza en tal disposición, Canalejas anunció que, si se consideraba nuevamente, desde entonces, dentro del fusionismo militante, no lo estaba aún en el Partido Liberal de gobierno, al que apoyaría cuando estuviera en el poder, pero sin figurar en sus filas³⁷.

El Gabinete conservador de Azcárraga intentó neutralizar la ofensiva con una actitud que pareciera ecuaníme. Hizo cesar como preceptor real al padre Fernández Montaña, sustituido por Brieva y Salvatierra, tradicionalista también, a raíz de la protesta liberal que suscitó el artículo de aquél en *El Siglo Futuro* sobre «Los errores del señor Canalejas en el Congreso», a quien juzgaba heterodoxo por liberal³⁸. Y publicó (tal vez por la utilización de catecismos con anatemas contra el liberalismo en la enseñanza media, denunciada por Morayta en las Cortes)³⁹ la circular del 15 de enero de 1901 del ministro de Instrucción Pública, García Alix, enviada a los rectorados de los centros educativos, a fin de que impidieran al profesorado la divulgación de doctrinas contrarias a la Constitución⁴⁰. Aunque esto fue interpretado por elementos radicales como atentado contra la libertad de cátedra⁴¹, en tanto que, con otras decisiones (la prohibición, en concreto, de algunos actos externos de culto católico, por creerlos relacionados con los levantamientos carlistas)⁴², contribuyó a enfrentarlo también con los legitimistas e integristas.

El 16 de enero, la cámara francesa comenzó a debatir el proyecto de ley de asociaciones. Y la prensa liberal española advirtió en seguida el peligro de que los religiosos desautorizados inmigraran a España, donde se sumarían a los ya existentes y a los repatriados de Filipinas, cuyo regreso se esperaba para la primavera. Se calculó asimismo que, de los mil quinientos cuarenta y seis conventos que existían en Francia, la nueva ley de Waldeck-Rousseau acarrearía la supresión de más de dos tercios, cuyos individuos habrían de buscar asilo en otros países. El peligro pareció tan temible que se dijo del Gobierno mismo que gestionaba ya en enero ante la Santa Sede, con renovada prudencia, la posibilidad de que el Vaticano desviase de España al menos una parte de la probable corriente inmigratoria⁴³.

Había, pues, en todo ello, materia suficiente para dar contenido a la protesta liberal, y de nuevo algunos hechos marginales contribuyeron a popularizarla. El 30 de enero, el teatro Español, de Madrid, estrenó el

jesuitas, viciados

drama *Electra*, donde Galdós opuso la visión pesimista del mundo religioso frente al deseo de vivir, encarnados en la forzada enclaustración de una muchacha. Y la representación inaugural fue interrumpida ya por gritos contra los jesuitas y «los reaccionarios» y vivas a la libertad, seguidos en días sucesivos de manifestaciones continuas ⁴⁴.

Cuestión aparte es saber si la obra, realmente oportuna, había sido escrita con intenciones políticas. Sus comentaristas asegurarían la mera coincidencia de su estreno con la actualidad gubernamental y la espontaneidad de la agitación ⁴⁵. Baroja dijo, en cambio, que el propio «don Benito y Maeztu fueron los que dirigieron la distribución estratégica de los amigos en la sala del teatro Español» ante la primera representación entre ellos don Pío y Azorín. Y que fue don Ramiro el que, en un momento tenso, «con voz tonante dio un terrible grito de ¡Abajo los jesuitas!» ⁴⁶. Pero sí parece cierto que la obra había sido escrita antes, en el verano de 1900 ⁴⁷, que fue tiempo de calma.

En todo caso, los disturbios en torno a ella se agravaron en los primeros días de febrero de 1901, y, en adelante, *Electra* se convirtió en símbolo de la lucha anticlerical en numerosas ciudades, dentro y fuera de España.

Por las mismas fechas, la prensa divulgaba además un proceso que evocaba el relato de *Electra*: el de Adelaida de Ubao, acusada ante los tribunales por su madre de haber ingresado en un convento sin su autorización. Sólo la vista de la causa ante el Supremo, el 7 de febrero (defendida aquella por don Antonio Maura y ésta por Salmerón), provocó una nueva manifestación madrileña, antijesuita como las motivadas por *Electra*, que parece congregó a un millar de personas ⁴⁸. Y, el mismo día, la llegada a la villa del conde de Caserta, para presenciar la jura constitucional de su hijo, aumentó la inquietud. Las algaradas anticlericales, muchas con expresas alusiones a la Compañía, se extendieron a partir del día a numerosas ciudades españolas: Zaragoza, Barcelona, Valladolid, Valencia, Granada, Salamanca, Alicante, León, Cádiz, Almería, Murcia, Málaga, Santander, Sevilla, Cuenca, La Coruña, Badajoz, Lugo, Guadalajara..., interrumpidas hasta que la proclamación del estado de guerra el 14 paralizó los disturbios y posibilitó la celebración del matrimonio real en la misma fecha ⁴⁹.

La jerarquía eclesiástica (los prelados de Sevilla, Lérida, Oviedo, Vitoria, Valladolid, Santander, Tortosa, Jaén y Salamanca al menos) había comenzado ya a rebatir los argumentos de la campaña contra los religiosos, además de condenar el drama de Galdós ⁵⁰. Pero la difícil situación del orden público en la semana anterior al enlace bastó a aconsejar tajantemente la formación de un Gobierno fusionista que diera satisfacción a aquellas inquietudes. «El partido liberal —sentenciaba *El Imparcial* el 1 de febrero— es la única bomba de apagar incendios» ⁵¹. Y, el 19, *El Liberal* puntualizó con claridad lo que se quería de él después de los debates del invierno: «Las solas congregaciones que aquí pueden funcionar en derecho, son las de los Misioneros, las de Hospitalarios de San Juan de Dios, las de Escolapios, las de San Vicente de Paúl, las de San Felipe Ner

una más de las aprobadas por el Sumo Pontífice.» «Resulta, por consiguiente, que están fuera de la ley las innumerables y multicolores congregaciones que hoy siembran la discordia en nuestros hogares y tienen entablada contra nuestro comercio, nuestra industria y nuestro trabajo una abrumadora concurrencia»⁵².

El Universo, el diario tradicionalista alfonsino de Ortí y Lara, refutó la afirmación. Se esforzó en demostrar documentalmente que todos los institutos de perfección estaban dentro de las leyes en vigor. Que, además, todas las asociaciones católicas aprobadas por la Iglesia, y en particular las corporaciones religiosas, habían sido reconocidas en España, no sólo como existentes, sino con verdadera capacidad jurídica. En fin, que, sobre estar todas reconocidas por la ley de asociaciones de 1887 y por el Concordato, algunas debían de ser protegidas por el propio Gobierno, a tenor, todo ello, de los artículos 29 y 43 del mismo pacto de 1851⁵³.

Un problema jurídico y un pleito de orden público eran, por tanto, los fuegos a apagar, cuando, el 25 de febrero de 1901, Azcárraga presentó la dimisión de su Gabinete. La reina intentó aún el mantenimiento de los conservadores bajo el mando de Raimundo Fernández Villaverde, paulatinamente alejado de Silvela, por razones mal aclaradas, que buscaba ahora, desde las filas moderadas, un lugar intermedio camino del liberalismo.

A esto respondió, probablemente, la alusión al excesivo desarrollo de las órdenes religiosas consignada por el ex ministro de Hacienda en la nota que razonó sus pretensiones de gobierno. Pero ello sólo sirvió tal vez para afincar a los liberales en la oportunidad de sus protestas⁵⁴ y para denunciar, por otra parte, las fisuras que agrietaban el Partido Conservador, si no desde la muerte de don Antonio Cánovas en 1897, que alejó al duque de Tetuán y a Romero Robledo, al menos desde los dos años finales del siglo.

En el Ministerio de 1899 habían comenzado a distenderse ya las buenas relaciones entre Silvela, Pidal y Villaverde. El mismo Azcárraga se encontró con ello al constituir su Gobierno en 1900. Entonces, en propias palabras, «fue su primer propósito, reforzarle atrayendo elementos políticos que si [están] apartados de la mayoría conservadora, profesan, no obstante, en lo esencial sus mismos principios. Mas explorados los respectivos estados de ánimo se vio que las circunstancias no presentaban todavía la debida sazón para que estos propósitos pudieran alcanzar entonces éxito satisfactorio». Hubo de quedar en mero Gabinete silvelista, «aunque con diferencia tan fundamental como la de no hallarse a su frente el jefe del partido»⁵⁵.

Silvela, por otra parte, en frase de un escrito sin firma dirigido a la reina el 3 de marzo de 1901, permaneció sumido en adelante en «todos los enormes quebrantos que han dado a su jefatura los fracasos de su gestión presidencial del Consejo de ministros llevada con tan mala fortuna, que este período tan crítico para nuestra reconstitución nacional, queda ya con nota indeleble de caracterizarse como uno de los más aciagos de

nuestra historia, por su esterilidad, estancamiento y desconcierto de las funciones de gobierno.»

En cuatro finalidades primordiales, a juicio del mismo autor ignoto, había de cifrarse ahora, en marzo del primer año del siglo, la solución del problema político:

«1.º Conjurar la formidable tempestad de opinión próxima a estallar sobre Silvela y sobre la Corona misma si en la ocasión presente continuar el silvelismo como depositario exclusivo de la confianza Constitucional de la realeza.

2.º Prevenir el peligro inminente de que nuestro Parlamento se convirtiera de ahora en adelante por largo período en cráter revolucionario o por lo menos en instrumento meramente negativo incompatible con toda operación de gobierno, por los estados pasionales llevados al paroxismo de la exasperación entre los que se consideran preteridos a virtud de lo que denominan el bloqueo de la regia prerrogativa por los partidos históricos.

3.º Procurar la pacificación de estas pasiones en hervidero, ganando guerras a la monarquía, convirtiendo a sus enemigos en sus más resueltos partidarios.

4.º Conseguir por último a virtud de esta operación realizada sobre los sentimientos personales y colectivos de los factores perturbados de nuestra política que los cinco o seis primeros años del nuevo reinado, la regencia pueda continuar desenvolviendo por el concurso de las fuerzas morales y el acatamiento general, la misma benéfica acción tutelar y directiva que el texto constitucional le ha permitido ejercitar hasta los 16 años del Rey.»

Desplazado Silvela de las posibilidades de un nuevo Gobierno por ello y por la denuncia de la descohesión de su partido, quedaba de rechazo desviada de la corona «la temerosa tormenta de opinión» y la suposición de que estaba «bloqueada o secuestrada por confabulación de los partidos históricos». Restaba, sin embargo, la solución de la difícil crisis. Para ella la Unión Conservadora no presentaba acaso más solución viable (presupuesto el fracaso de Fernández Villaverde por su alejamiento de Silvela y por la negativa de Tetuán y de Romero Robledo a acatar su jefatura) que el regreso de Azcárraga al poder, para, bajo su tutela, reunir otra vez el partido. Por lo demás, «la solución liberal sólo sería un deslumbramiento efímero, que si por de pronto distrajera y sosegara a los ánimos por el entretenimiento de expectativa pública que producían estos cambios en el ánimo del vulgo ..., al cabo de muy corto tiempo se encontrará con las dificultades actuales agravadas quizá»⁵⁶.

En la nota de dimisión del 25 de febrero de 1901, Azcárraga había advertido igualmente a la reina que ninguno de los partidos históricos bastaría por sí solo, en su estado actual, para resolver el problema político. Y le aconsejó que procurase un Gobierno de concentración⁵⁷. Parece que, por eso, María Cristina depositó de nuevo su confianza en el general dimisionario. Pero, fuera por la oposición violenta de Villaverde, mal explica-

da ⁵⁸, o por el anónimo consejo, que sugería el llamamiento formulario de don Raimundo, éste se encargó de formar el Gabinete. Con la pretensión de hacerlo heterogéneo mediante el concurso de elementos de diversas facciones, publicó un programa mínimo conciso que contenía estos propósitos: nivelar los gastos y los ingresos del Estado, reformar la ley electoral para purificar el sufragio y, según indicamos, «dar solución al delicado problema del desarrollo excesivo de las Ordenes religiosas» por medio de «prudentes y previsoras medidas encaminadas a vigilar la observancia del Concordato y a restablecer, donde falte, la igualdad tributaria» ⁵⁹, como había pedido en febrero el Círculo Industrial de Madrid. Pero ni los conservadores podían secundarlo ni los fusionistas habían de renunciar así al radicalismo, que parecía su única posibilidad de subsistir. Como estaba previsto, Villaverde fracasó en su intento, y la reina cumplió con el turno pacífico llamando a Sagasta el 5 de marzo.

Handwritten notes:
1890, HANBURY / FORT COUL /
LOPEZ / GUIA

2. Nueva y vieja legislación.

Que la conversión al anticlericalismo de Práxedes Mateo Sagasta en el invierno de 1900 a 1901 había de dar lugar a serias dudas era algo previsible ante el historial más reciente del político. En junio de 1899, cuando republicanos y demócratas comenzaban a perfilar los contornos de la nueva gestión, el caudillo fusionista había contrapuesto, como programa del partido, uno eminentemente económico, explícitamente desgajado del de las Cámaras de Comercio que reuniera Paraíso en el 98. Al tiempo, daba por seguro frente a las advertencias de Castelar, «que las libertades públicas no sufrirían quebranto, pues tienen por campeón al partido liberal, y su mejor defensa en la monarquía constitucional» ⁶⁰.

Muy pocos, ni aun los sectores tradicionalistas, habían de creer por tanto en la sinceridad de su evolución de 1901: Salcedo Ruiz escribiría que Sagasta «no veía en el anticlericalismo sino una plataforma de aquél [Canalejas] para formarse un partido radical» ⁶¹, y Romanones corroboró que el problema religioso no entusiasmó a don Práxedes: «su contenido nunca fue objeto de su predilección; mas al ver cómo servía de bandera a Canalejas, y el entusiasmo que producía en muchos, lo tomó también en su mano para remozar el programa del partido» ⁶².

De ahí que sus primeras manifestaciones sobre el futuro de su actitud fueran cuidadosamente comedidas: «Seré muy liberal —aseguró el 18 de febrero, cuando se avecinaba la crisis— pero procederé poco a poco y con muchísimo tiento». Porque, en el mismo Concordato cuyo cumplimiento se pedía, había disposiciones «de cuya ejecución nos vendría más daño que provecho» ⁶³.

En realidad, el nuevo programa pretendido por la democracia tenía argumentos numéricos innegablemente palpables. Sin entrar ahora en valoraciones morales, el estado religioso había crecido en estas cifras recordadas entonces (que habrán de ser probablemente revisadas) tras la parcial supresión de comunidades de la Revolución Gloriosa ⁶⁴:

Año	Comuni- dades	Religio- sos	Religio- sas	Total	Clero secular	total
1868	900	?	?	16.000	?	?
1886	?	2.000	17.000	19.000	?	?
1888	?	1.684	14.592	16.276	32.435	48.711
1900	?	12.146	42.722	54.868	33.403	88.271
1902	3.115	10.745	40.188	50.933	?	?
1904	3.253	10.630	40.030	50.660	?	?

Ante las declaraciones de moderación de febrero de 1901, los más radicales advirtieron a Sagasta, por ello, la urgencia del cumplimiento del artículo 29 del pacto del 51, cuyo sentido comenzaba a discutirse ⁶⁵. Quizá para intentar que el propio radicalismo se agotase en sus deseos, el jefe del Partido Liberal Fusionista pretendió aún de Canalejas que formase en el Gabinete que preparaba en marzo.

Pero éste se negó porque «no era posible que aceptase ninguna gran posición en el mando de las huestes ministeriales sin que surgieran pronto, en el seno del Partido Liberal, diferencias de criterio. Y entonces tuve el honor de exponer... [a Sagasta] lo que yo pensaba... relativamente a la tendencia y a la orientación del Partido Liberal» ⁶⁶, que abogaba por el intervencionismo de cuño regalista en las cuestiones de la Iglesia ⁶⁷.

El Gabinete, pues, cuyos ministros aprobó la reina el 6 de marzo de 1901, quedó formado bajo la presidencia del jefe fusionista por hombres sólo de su hechura: el duque de Almodóvar del Río en el Ministerio de Estado, el marqués de Teverga en el de Gracia y Justicia, Urzáiz en el de Hacienda, el general Weyler en el de la Guerra, Moret con la cartera de Gobernación, el duque de Veragua con la de Marina, Romanones en Instrucción Pública y Villanueva en Agricultura e Industria.

Su primera y dificultosa meta fue la de sostener, ante las exigencias de los más radicales, que ya dudaban de su firmeza, el señuelo de la política anticlerical. Considerada por todos los sectores única razón de ser del Gabinete ⁶⁸, fue por eso apodado «Electra», conforme al simbolismo atribuido al drama de Galdós.

Las primeras medidas del Gobierno tuvieron por ello un marcado sabor liberalizador. El 7 de marzo de 1901 fue levantado el estado de guerra impuesto por el Gabinete Azcárraga, y, el 20, una circular del Ministerio de Instrucción Pública a los rectores universitarios subrayó el mantenimiento de la libertad de cátedra con el mismo espíritu que había inspirado la real orden del 3 de marzo de 1881, frente a una posible interpretación distinta de la circular conservadora del 15 de enero de 1901 ⁶⁹. La advertencia bastó para provocar las protestas de los obispos de Santander, de Barcelona y de Tarazona, en nombre éste de todos los prelados de la provincia eclesiástica de Zaragoza, la de los obispos de la provincia hispalense y la del arzobispo de Burgos, que se dirigió a Sagasta para advertir la anticonstitucionalidad de la disposición ⁷⁰.

El 22 de marzo otra circular de Urzáiz ordenó a los delegados provinciales de Hacienda que hicieran una relación de todas las industrias regentadas por comunidades religiosas o por alguno de sus miembros, a fin de regular, sobre ella, el pago de la contribución, que no solían satisfacer a pesar de que la ley no los exceptuaba. Se refería especialmente, según el propio texto, a «la fabricación de chocolates, confección de ornamentos sacerdotales y de culto, fabricación de jabones y otros artículos de perfumería y de impresión de tarjetas de visita, membretes de papel, de cartas, de estampas y recordatorios», como labores más frecuentes que los frailes realizaban. Y exigía de ellos que dieran de alta sus industrias en el plazo de quince días⁷¹. Más tarde, el propio Urzáiz manifestó a la prensa que sólo pretendía satisfacer a la opinión pública; pero que, en realidad, no había allí materia sobre la que operar⁷².

El 27 de marzo, un decreto del Ministerio de la Guerra reorganizó el cuerpo eclesiástico militar, para rebajar casi todos los sueldos del clero castrense en una quinta parte y disminuir el número de individuos que lo formaban, al paso que anunciaba una reforma más radical⁷³. Y un nuevo decreto de 12 de abril, firmado por el ministro de Instrucción Pública, renovó las normas vigentes sobre exámenes y textos de enseñanza media, exigiendo el título de doctor o licenciado (entonces poco común entre los religiosos) para formar parte de aquellos tribunales y suprimiendo «el privilegio evidentemente injusto que algunos colegios disfrutaban, de que fueran a verificar en ellos los exámenes comisiones de catedráticos de los Institutos»⁷⁴.

Probablemente todas estas medidas, en parte encaminadas a satisfacer las reclamaciones del invierno, pretendían también atraer hacia el Gobierno a la opinión radical que, ante la convocatoria de elecciones, hecha para el 19 de mayo de 1901, agudizaba la nota religiosa de sus proclamas. Pero, frente a la ya formal oposición, también los diversos grupos tradicionalistas renovaron sus esfuerzos en pro de la concordia, casi olvidados desde la dimisión de Polavieja, mediante la formación de candidaturas «de unión de católicos o de católicos unidos»⁷⁵, de acuerdo con las normas del Congreso de Burgos. En ellas la defensa de la Iglesia, ahora más ciertamente atacada, en apariencia al menos, que en 1899, desdibujó las diferencias personales o dinásticas, con la ayuda además del clero, que, en algunos lugares, parece llegó a interrumpir el Sacrificio de la Misa para indicar la obligación de votar a los candidatos confesionales⁷⁶. Los resultados, con todo, apenas reflejaron avance de unos u otros, fuera de una leve inclinación liberal y del correspondiente triunfo del Gobierno, respecto a los de 1899⁷⁷.

Que, además, y por encima de las pequeñas e iniciales medidas intervencionistas (acaso más trascendentales, como pareció entender en algunos momentos la jerarquía eclesiástica), lo que la opinión anticlerical quería era una nueva aplicación o una reforma de la legislación en vigor, era cosa evidente ante las alusiones expresas de la prensa democrática durante los primeros meses de 1901. Pero, tras la documentada defensa que el diario de Ortí y Lara, *El Universo*, a la que ya aludimos, hizo entonces de la legalidad de todos los establecimientos religiosos, *Heraldo de Madrid*

vino a fundar jurídicamente la postura de los radicales: de manera que en los trabajos de ambos periódicos, pudieron basar sus futuras actitudes los parlamentarios recién elegidos.

El 23 de marzo, el institucionista Eduardo Soler, catedrático de la Universidad de Valencia, afirmó en el diario de Canalejas que los institutos de perfección de la Iglesia no estaban autorizados por la ley de asociaciones aprobada en 1887. No habían sido constituidos conforme a los artículos 3.º y 6.º de aquella norma, que preceptuaban los trámites a seguir, sino por real orden de admisión solicitada de los Gobiernos. Añadió Soler que el artículo 44 del Concordato declaraba textualmente «quedadasalvas e ilesas las reales prerrogativas de la Corona de España» y, por tanto, el derecho a disolver aquellos institutos, como había practicado el decreto-ley de 18 de octubre de 1868.

Unos días después, el 31 de marzo de 1901, *El Imparcial* abundó en los argumentos de *Heraldo*, para urgir al Gabinete el cumplimiento de la legislación. Y, por su parte, *El Universo* respondió a ellos que, ciertamente, los institutos estaban acogidos a la autorización de los Gobiernos y no a la ley de asociaciones; pero que eso sucedía precisamente porque el artículo segundo de esta ley los exceptuaba de las demás disposiciones de su artículo. Y, sobre el regalismo del Concordato, que, a renglón seguido, el propio artículo 44 decía mantenerlo «en conformidad a los convenios anteriormente celebrados entre ambas potestades», que eran la concordia de Façeneti y los pactos con Clemente XII, de 1737, y con Benedicto XIV de 1753, en los cuales nadie podía demostrar la concesión o el reconocimiento de tal regalía, que no estaba incluida en el Patronato y cuya práctica histórica, además, cabía poner en duda⁷⁸.

Seguramente, detrás de la naciente polémica jurídica, latían las verdaderas pretensiones de unos y otros. Pero, a partir de entonces, los políticos comenzaron a teñir sus declaraciones con los argumentos legales debatidos en la prensa, que ganaron ahora las propias protestas de la jerarquía⁷⁹, con tanta más viveza cuanto que la legislación no estaba ciertamente clara.

«A fin de que en toda la Península haya el número suficiente de ministros y operarios evangélicos —había dispuesto el artículo 29 del Concordato de 1851— de quienes puedan valerse los Prelados para hacer misiones en los pueblos de su diócesis, auxiliar a los Párrocos, asistir a los enfermos y para otras obras de caridad y utilidad pública, el Gobierno de S. M., que se propone mejorar oportunamente los colegios de Misiones para Ultramar, tomará desde luego las disposiciones convenientes para que se establezcan donde sea necesario, oyendo previamente a los Prelados diocesanos, casas y congregaciones religiosas de San Vicente de Paúl, San Felipe Neri y otra Orden de las aprobadas por la Santa Sede, las cuales servirán al propio tiempo de lugares de retiro para los eclesiásticos, para hacer ejercicios espirituales y para otros usos piadosos», y a cuya subsistencia, según el artículo 35, proveería el propio Gobierno «por los medios más conducentes».

Menos explícito era el 30, sobre el establecimiento de las comunidades femeninas, que no decía permitir en su totalidad. Si hablaba de con-

servar el instituto de las Hijas de la Caridad y «las casas de religiosas que a la vida contemplativa reúnan la educación y enseñanza de niñas u otras obras de caridad», sobre los demás institutos (que habían de ser, por tanto y sobre todo, los de clausura) los prelados podrían proponer —«propondrán», textualmente, sin precisar a quién— «las casas de religiosas en que convenga la admisión y profesión de novicias»⁸⁰. Lo que, sin embargo, de acuerdo de nuevo con el planteamiento francés, que tampoco hizo cuestión de las corporaciones femeninas⁸¹, no fue empleado por los mentores anticlericales, que las consideraron autorizadas en su totalidad en un principio⁸².

Pero las dificultades fructificaron en torno de las exégesis del artículo 29. Interpretado a la letra, lo que su redacción completamente positiva parecía indicar era una obligación escueta del Gobierno para adoptar las medidas convenientes en orden a unos institutos determinados y a otro por determinar, sin aludir en ningún sentido a los demás que pudieran existir y que, sencillamente, el Concordato ignoró. Cualquiera de las tres posturas posibles ante ellos —legalización nueva, prohibición o tolerancia— hubiera respetado, por tanto, sus disposiciones.

En todo caso, la tercera orden innominada del artículo 29 no fue acordada nunca, y difícilmente podría cubrir aquellos servicios o recibir la subvención precisa una asociación que no existía. Se dijo, en 1901, que era a los escolapios a quienes correspondía ocupar aquel tercer lugar⁸³, quizá porque su instituto había sido de los primeros restablecidos por Isabel II después de la desamortización, antes incluso de 1851, o tal vez por la simpatía que algunos destacados fusionistas le profesaban⁸⁴. Pero lo cierto fue que no hubo base legal que lo justificase y, en cambio, los tradicionalistas sugirieron que la tercera orden en cuestión podía ser distinta en cada diócesis y, por tanto, que habría unas 60 autorizadas, con derecho, además, a recibir la subvención establecida⁸⁵.

Para resolver el problema, se acudió al recuerdo de la gestación del Concordato, en busca de detalles que descubrieran la mente del legislador. Pero tampoco los hechos eran claros. Los liberales insistieron en que el silencio de aquel pacto sobre los demás religiosos no obedeció a un error, sino al empeño de los políticos isabelinos por ignorar precisamente el problema. Y, en efecto, bien pudo suceder así. En enero de 1845, la Santa Sede había sondeado cuidadosamente a los negociadores españoles sobre ello sin obtener otra respuesta que la intención de restablecer algunos institutos determinados. En 1847, el representante del Estado dijo en el Vaticano que el Gobierno estaba «decididamente resuelto no sólo a proveer a la conservación» de las casas religiosas subsistentes, «sino también a procurar que otros, al tiempo y lugar oportunos, aumenten semejantes piadosas fundaciones, principalmente las que están dedicadas a las Misiones o a las Escuelas o a asistir y consolar a la humanidad doliente»⁸⁶. Pero esto, de manera confusa, no permitía pensar tampoco en un deseo de liberalización total, y fue, en definitiva, el criterio que llevó a hablar, desde aquel mismo año, sobre el aumento de los misioneros de San Vicente de Paúl y San Felipe Neri en concreto.

En la polémica de febrero y marzo de 1901, *El Universo* arguyó que el 12 de abril de 1851, Pío IX había expedido un *motu proprio* por el que sometía a la jurisdicción episcopal todas las órdenes religiosas que fuera establecidas en España durante los diez años siguientes ⁸⁷. Y se evocó también más tarde una frase del propio Pontífice en el consistorio del 5 de septiembre del 51, según la cual había suscrito el Concordato «para que en España se conserven y restablezcan y aumenten las Ordenes Religiosas» ⁸⁸. Pero, en realidad, también estas palabras podían abundar en la interpretación de una consciente ignorancia del problema por parte de los negociadores, que, como la opinión liberal deseaba, permitiría y exigiría el sometimiento de los institutos no concordados al derecho común.

Cuatro obstáculos importantes al menos mostraba aún, con todo, esta postura. Y a ellos hubo de aferrarse la defensa romana:

En primer lugar, el mismo Concordato decía la manera de cubrir sus propias lagunas: «Todo lo demás —afirmaba el artículo 43— perteneciente a personas o cosas eclesiásticas, sobre lo que no se provee en los artículos anteriores, será decidido y administrado según la disciplina de la Iglesia canónicamente vigente» ⁸⁹. Y esto, de modo sin duda inconsciente, venía a sancionar la existencia de los institutos aprobados por la Santa Sede, incluyéndolos de esa manera en el tratado de 1851, los acogía al artículo segundo de la ley de asociaciones de 1887 (arma fundamental de los liberales), que decía excluir del resto de sus cláusulas sólo a las «asociaciones de la religión católica autorizadas en España por el Concordato» ⁹⁰. Aunque, en realidad, cabía discutir si el reconocimiento de personalidad jurídica que implicaba aquel artículo 43 equivalía también al derecho de establecerse en la península.

La segunda defensa estribó en la propia norma del 87. Aunque la disposición excluyente del artículo 2.º afectase, según los liberales, sólo a las tres órdenes del 29 del Concordato y a las femeninas, en vez de a todas de ambos sexos como pretendían tradicionalistas, conservadores y eclesiásticos, lo cierto era que la simple lectura de la ley hacía comprender a los dos sectores contendientes, en su gran mayoría, que no estaba hecha para ser aplicada a los religiosos, sobre todo a los de clausura. Así, entre otros, el artículo 12 permitía a la autoridad gubernativa «penetrar en cualquier tiempo en el domicilio de una asociación y en el local en que celebre sus reuniones». El 15 declaraba a la autoridad judicial «única para decretar la disolución» de las mismas. Y el 19, en fin, derogaba «todas las disposiciones anteriores en cuanto se opongan a esta ley» ⁹¹. Todo ello hubiera terminado de denunciar que no había sido escrita para los institutos de la Iglesia si la historia de su promulgación no lo indicase ya.

Precisamente porque la comisión dictaminadora del proyecto, en 1887, no quería incluirlos, uno de sus miembros, que disintió de los demás, Alfonso González, había presentado un voto particular para pedir que la ley dispusiera que todas las asociaciones formadas en su mayor parte o en su totalidad por extranjeros, o dirigidas por individuos no españoles, que reconocieran subordinación a potencias extranjeras o poderes residentes fuera de España, excepto las mercantiles, estuviesen sometidas también a la ley y pudieran ser suspendidas o disueltas por el Gobierno en cua-

quier momento, sin necesidad de recurrir a ninguna representación de otra potencia. Los institutos religiosos entraban de lleno en el supuesto; porque algunos estaban formados o presididos por extranjeros, o tenían su casa central fuera de España, y, en último término, todos dependían de Roma. Sin embargo, Sagasta hizo notar a González, en la sesión del 2 de marzo del 87, que no había ningún peligro efectivo por el momento. Tras una leve discusión, el diputado liberal aceptó el criterio de su jefe y retiró la enmienda ⁹²: tal vez porque lo importante era promulgar la libertad de asociación y no parecía oportuno plantear consecuencias posibles que entorpecieran su paso. Además, por boca del presidente de la comisión dictaminadora de la nueva ley, Romero Girón, el fusionismo defendía que «el Sumo Pontífice tiene libre toda la potestad espiritual respecto a las órdenes monásticas» ⁹³.

Es probable que la postura de González estuviera animada por la política anticlerical francesa del Gabinete Ferry, que había expulsado de aquel país alrededor de cinco mil religiosos, muchos de los cuales entraron en España ⁹⁴. Pero lo que era entonces actitud de un solo individuo se convirtió, en 1901, en opinión más general —total tampoco— del liberalismo. Aunque reconoció la inadaptabilidad de la ley a los institutos, se inclinó en parte por su aplicación a pesar de ello, al menos como primera medida, en tanto no fuera aprobada otra ley mejor.

En apoyo de esta tesis, arguyeron la excepción del artículo 2.º dirigida sólo a las órdenes concordadas, y el hecho de que, en el 1.º, se dijeran en cambio incluidas «las asociaciones para fines religiosos» y que, en el propio artículo 2.º, se hablase también de «las demás asociaciones religiosas» ⁹⁵ no autorizadas en 1851: reconociendo, pues, que, en efecto, las había. Pero los defensores advirtieron que las órdenes y las congregaciones no agotaban todos los tipos posibles de asociaciones religiosas. El ordenamiento canónico reconocía la existencia de asociaciones de fieles, por ejemplo, y a ellas apuntaba, seguramente, el texto del 87.

La tercera defensa eclesiástica radicó en otro cuerpo legal frecuentemente recordado durante el primer año del siglo. Desde 1877, el Estado español, a través del Ministerio de Gracia y Justicia, había ido expidiendo órdenes de autorización para establecer comunidades a quienes lo habían pedido. Por este conducto, hasta 1900, habían penetrado, al parecer, 34 congregaciones de varones, que ocuparon ciento quince casas nuevas, y treinta y nueve femeninas ⁹⁶. Tal legislación, según algunos fusionistas incluso, daba a sus beneficiarios una «posesión de estado», sancionada por los años y por el criterio de tantos gobiernos, liberales muchos (el propio Canalejas había firmado dos de las autorizaciones en 1889), que nadie podía quitársela arbitrariamente ⁹⁷. Algunos conservadores reconocieron, no obstante, que varios de los permisos, otorgados sin dificultad apenas, fueron concedidos sin el informe favorable de la Nunciatura, que protestó por ello ⁹⁸. Y, en todo caso, *eius est tollere cuius est condere*, recordaría Azcárate ⁹⁹. Aquel estado de derecho era concesión gratuita que libremente podía ser anulada, máxime si, como se dijo, en todas las autorizaciones se había consignado la reserva de que los nuevos institutos permanecerían «sometidos todos a los preceptos que deriven de los Ministerios de la Go-

bernación, de Fomento y de Guerra, por lo que se refiere, respectivamente al orden público, a la enseñanza y al servicio militar»¹⁰⁰.

La cuestión era, por tanto, ciertamente confusa. La imprecisión de la leyes y las peculiaridades seguidas en la praxis daban argumentos a todos. Los más de ambas posturas deseaban, por ello, una reforma de la legislación. Pero también esta conformidad dio lugar a debate, sobre si la reforma debía de ser objeto de negociaciones previas o no. El artículo 45 de Concordato (cuarta defensa de los religiosos) indicaba que el Papa y el Rey de España habrían de ponerse de acuerdo «para resolverla amigablemente» «si en lo sucesivo ocurriera alguna dificultad»¹⁰¹. Nadie ignoraba que este escape final era un arma potente, en cuanto dilatoria, en manos de la diplomacia pontificia. Y, en consecuencia, los liberales dieron en hablar de las prerrogativas del poder civil, que posibilitaban la acción sin negociación, conforme a los criterios regalistas, profusamente invocados entonces por ellos e incluso por algunos conservadores¹⁰², frente al para dójico liberalismo de tradicionalistas y republicanos federales¹⁰.

3. Grupos y actitudes

Ni la formación ni la legislación inicial del Gabinete liberal de Sagasta consiguieron en principio que la agitación cesara. Los disturbios callejeros, normalmente antijesuíticos (por motivos poco claros, ligados probablemente a la hipotética complicación de la Compañía en aquel movimiento de Polavieja) se habían reproducido en la segunda quincena de marzo de 1901 en Vilanova i Geltrú y Castellón, y en abril y mayo, en La Coruña, Valladolid, Jaén, Baracaldo, Ortuella y Bilbao, Ubeda, Barcelona, Madrid, Las Palmas, Vinaroz y Ronda. Aparecían envueltos a veces con reivindicaciones laborales, otras con el estreno de *Electra* y algunas con las procesiones del jubileo concedido por León XIII en conmemoración del nacimiento del siglo xx¹⁰⁴; efeméride que había de convertirse desde entonces en ocasión de conflictos para todo el país: desde el momento en que los radicales dijeron ver en la celebración manifestaciones políticas, por obra de la participación en ellas de personalidades carlistas¹⁰⁵.

Para acabar con tal estado de cosas, a mediados de mayo, el ministro Moret dirigió una instrucción a las autoridades provinciales para que prohibieran «las manifestaciones públicas, religiosas o antirreligiosas, fuera de aquellas consagradas por la tradición»¹⁰⁶, a fin de reprimir los disturbios, de modo anticonstitucional según algunos. Pero, el 23 de junio, los asistentes al mitin republicano del Liceo Rius, de Madrid, excitados por los discursos de Blasco Ibáñez, Soriano y Lerroux, apedrearon varios conventos y edificios eclesiásticos. El mismo día, hubo actos antirreligiosos en las calles de Alcoy; en Valencia, republicanos radicales atacaron a los participantes en el jubileo del 24, justificándolo después en su posible organización tradicionalista; lo mismo sucedió el 23 y el 24 con las multitudinarias procesiones de Pamplona, hostilizadas por algunos militares y republicanos, y aún el 17 y 18 de julio con las de Zaragoza, que revistieron acritud especial¹⁰⁷.

Aquel deseo pacifista del Gobierno respondía a una actitud que Sagasta había concretado el 10 de mayo en su protocolario discurso a la mayoría parlamentaria, al lamentar la resurrección de la cuestión religiosa, «en mal hora suscitada» de nuevo ¹⁰⁸. Pero, desconfiada por esto la opinión liberal ¹⁰⁹, en el ritual mensaje del trono a las Cortes del 11 de junio anunció la «la definición del estado jurídico de las Ordenes religiosas dentro de las leyes vigentes, propósito que, unido a la imperiosa necesidad de transformar el presupuesto eclesiástico, reduciendo su cifra y mejorando la dotación de los párrocos rurales, llevará ... a negociar la reforma del Concordato» ¹¹⁰. La oferta, sin embargo, no obtuvo ya completa confianza: «Aquí [en el Vaticano —notificó *Heraldo de Madrid* ante el mensaje—] se cree que ese proyecto [de definir la situación jurídica de las órdenes] está exclusivamente destinado a contener los espíritus anticlericales; que dará lugar a largas negociaciones, y que Sagasta *tendrá tiempo* de dejar el Poder antes de la aprobación del proyecto» ¹¹¹.

Recluido, por tanto, el Gabinete en actitud confusa desde sus primeras semanas de existencia, deseoso de inhibirse, pero también de mantener su rectorado de las fracciones liberales, planteado por otra parte el problema jurídico y social en la calle, los debates parlamentarios subsiguientes hubieron de enfrentar prácticamente solo a las oposiciones. El 27 de junio, para interpelar al Gobierno sobre los últimos sucesos anticlericales de Madrid, Valencia y Pamplona, Silvela decidió incumplir el reglamento del Congreso, que impedía debatir ningún tema, fuera del examen de actas y de las comunicaciones del propio Ministerio o del Senado, hasta la definitiva constitución de la Cámara, que fue realizada el 2 de julio.

En esa ocasión, y también ante otra interpelación de Blasco Ibáñez sobre los mismos hechos el día 3, el Gabinete procuró todavía rehuir el asunto. En el dictamen propuesto el 6 como respuesta al mensaje del trono, no solo no aludió a las negociaciones con Roma sino que habló de «defender nuestras católicas, tradicionales creencias, de la perturbación que censurables intereses o imprudentes fanatismos pudieran producir en la conciencia del pueblo» ¹¹². Pero el tema estaba en la calle, y el debate sobre tal respuesta no sólo hizo hincapié en la cuestión religiosa, sino que sirvió para dilucidar al fin los diversos contornos de cada postura, comenzando a desarrollar aquella exégesis de la legislación.

Los primeros en precisar su visión del asunto, en la discusión del dictamen de contestación a la corona, fueron los diputados tradicionalistas. El mismo 6 de julio del año 1, Irigaray, Barrio y Mier, Sanz, el marqués de Tamarit y Llorens firmaron una enmienda al dictamen en la que pedían el restablecimiento de la unidad católica mediante la derogación del párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución, garantías de libertad para las asociaciones religiosas de ambos sexos y represión de los atropellos que soportaban quienes «sostenían por escudo su indefensión y por amparo su propia debilidad». Todo ello fue débilmente apoyado por Irigaray, diputado por Aóiz, con errores canónicos tan notables como la defensa del origen divino del estado religioso ¹¹³.

Le respondió la comisión dictaminadora por boca del diputado de mayoría Alfonso González, quien, tras hacer profesión de catolicismo confesar que recogía el criterio de Canalejas, centró ya la discusión en tema jurídico. Defendió la interpretación estricta del artículo 29 y la consecuente aplicación a los institutos no concordados de la ley de asociaciones. Su descuidado cumplimiento (que, entre otras cosas, daba al Gobierno la posibilidad de disolver los que juzgara inconvenientes) debía de ser atendido en adelante por el Ministerio, según dijo, del mismo modo que había de impedir la acumulación de la propiedad en manos muertas y derogar la inmunidad militar de los frailes ¹¹⁴.

Retirada la proposición de Irigaray y discutidas las demás por el procedimiento de manifestaciones en contra de la totalidad del dictamen, mismo día 8 los representantes de la Unión Republicana, formada por Irujo, Salmeronianos y progresistas en 1900, Gumersindo Azcárate, Muro, Prieto y Caules, Fernando Gasset, Juan Gualberto Ballesteros, Melquiades Álvarez y José Marengo firmaron otra enmienda. En ella pedían que el párrafo segundo de la contestación al mensaje, que se limitaba a confiar «en Dios en el amor de la Patria», reclamase del poder público que mantuviese «enfrente de la teocracia el principio de la independencia y secularización del Estado, oponiéndose así a cuantos intenten restablecer entre nosotros lo que llamó don Antonio Cánovas la inquisición modernizada» ¹¹⁵. En sesión del 10 de julio de 1901, Melquiades Álvarez consumió el primer turno en contra del dictamen, en defensa de aquella petición, para insistir primero en la moderación de la postura que representaba, ajena a la clamorosa magogía de los republicanos radicales (pensaba en Blasco Ibáñez y en Serrano seguramente) ¹¹⁶, y propugnar la libertad de cultos, la afirmación resuelta de la soberanía del poder civil en la política y «la secularización del Estado, no de la sociedad». Concretaba este planteamiento en la disolución de los institutos de perfección no concordados o, al menos, en su sumisión a la ley común de asociaciones y en la limitación de la capacidad adquisitiva que el Código civil les concediera. Se conformaba, pues, con el criterio canalejista de Alfonso González, aun cuando redujera esta cuestión de los religiosos a un mero primer paso de un programa secularizado más ambicioso ¹¹⁷.

En su respuesta, que parecía dar al fin la de Sagasta, Segismundo Moret, ministro de la Gobernación, rechazó la posibilidad de la disolución, que desautorizaba a todos los gobiernos que habían concedido permisos de 1877, y también la aplicación estricta de la ley del 87, en cuya inadaptabilidad a la vida conventual insistió. Y sugirió, por ello, la necesidad de reformar el Concordato, y de aplicar en tanto, ciertamente, el derecho común: pero solo en la medida en que fuese compatible con la naturaleza de los institutos. De manera que su discurso, diverso del criterio de González, reflejó expresamente igual diversidad de actitudes en el seno de la mayoría gubernamental, que fue puesta de relieve de inmediato ¹¹⁸.

También el día 8 de julio del año 1, en el Senado, el marqués de Pidal había presentado una enmienda al proyecto de respuesta a la corona de aquella cámara, que esbozaba divergencia semejante de criterios, esta vez en el frente tradicionalista. Lejos del enfrentamiento antiliberal, implícito

la proposición de Irigaray, sugería la necesidad de respeto a «los principios mismos de la libertad, base fundamental de nuestro derecho público». Su olvido, manifestado en las perturbaciones de «la paz religiosa y social de que España gozaba», había de ser impedido en adelante por el Gobierno, siempre «respetuoso con las libertades y derechos de todos». Proponía asimismo que el Gabinete asegurase no hacer «nada en lo que el régimen y libertad de la Iglesia se refiere, sino con el concierto de la potestad espiritual». Y, en concreto, ni desconocer ni mermar «por ningún concepto el principio de la libertad de asociación del ciudadano para todos los fines que la Constitución y las leyes establecen», ni perseguir «aquellas reformas, que, por establecer deliberadamente injustos e inusitados procedimientos de excepción para los alumnos que no estudien en los establecimientos oficiales, pugnan abiertamente con la recta y leal aplicación del principio de libertad de enseñanza que la Constitución del Estado a todos garantiza»¹¹⁹.

Fuera de la oportunista llamada a los sentimientos liberales del fusionalismo que en la proposición hubiera, tales palabras insistían en el peculiar enfoque pidaliano de la apertura reclamada de los tradicionalistas por la ley XIII, formulada en términos genuina y ortodoxamente liberales, semejantes, por lo demás, a los que, por la misma época, utilizaban algunos elementos de la catolicidad francesa¹²⁰.

Conforme a esta actitud, el debate en el Senado, que discutió la enmienda de Pidal hasta el día 15, se centró sobre todo en las medidas iniciales, sobre enseñanza especialmente, del Gobierno. Solo el propio marqués formuló una postura jurídica clara acerca del artículo 29, que dijo encaminado, no a permitir el establecimiento de las congregaciones que citaba, sino a imponer unas obligaciones sobre ellas al Estado. Las demás quedaban, por tanto, incluidas en el artículo 43, que sancionaba el derecho canónico vigente para cubrir las lagunas del sistema concordatorio¹²¹.

Menos decidida había sido una tercera enmienda de las presentadas al Congreso, también el día 8 de julio, por pidalianos y carlistas (la firmaron el marqués de Santillana, Barrio y Mier, José del Prado, el marqués de Vadillo y el conde de Albay). Pedían la represión de los ataques a la Iglesia mediante el cumplimiento escrupuloso de la Constitución y el castigo de los atropellos y, a manera de cambio prudente, que era una posible advertencia a las intenciones del Gobierno, impetrar del Pontífice, ante «la mezquindad de la dotación del clero secular», autorización «para hacer una reforma que permita mejorar su situación sin alterar la cifra del presupuesto del clero, que por ser una restitución, es intangible». Consumido por el marqués de Campo-Amero, el día 11, el segundo turno en contra del dictamen de contestación al mensaje del trono, el 12, en el tercero, defendió esta proposición el marqués de Vadillo. Abundó con precisión jurídica notable en el criterio de Pidal sobre la inclusión de todos los institutos en el artículo 43 del Concordato y su exclusión consecuente de los preceptos de la ley de asociaciones. A instancias de Romero Robledo, que interrumpió al marqués, Silvela canonizó esta exégesis como la propia del Partido Conservador¹²². Y ello acabó de agrupar las posturas en torno a dos extremos —tradicionalistas y conservadores de un lado, demócratas y re-

publicanos de otro— sin mayor divergencia que la de los templados sagastinos, partidarios de negociar con Roma y aplicar en el ínterin, circunstancialmente, el derecho común.

Nada hubo ya notable fuera de las intervenciones indicativas de Anton Maura y José Canalejas, que respondieron a alusiones personales y centraron las últimas jornadas del debate. Cada vez más ajeno al fusionismo, primero, que insistió en la opinión conservadora sobre el artículo 43, renunció además lo que consideraba doble juego del Gobierno, que hablaba de negociaciones con Roma y toleraba al tiempo los disturbios. Y pidió sobre todo claridad para saber lo que buscaba ahora el partido de Sagasta si era un nuevo programa, distinto del seguido hasta entonces. El 16 de julio le respondió Canalejas con uno de sus más brillantes discursos, donde se manifestó contra el valor que se quería dar a aquel artículo 43. Tanto el pacto español como el francés, dijo entonces, «dejaban el problema de las congregaciones religiosas, o reducido a un equívoco, que ese es el mal de nuestro Concordato, o totalmente excluido, como en el Concordato francés; pero jamás constituyendo parte integrante de una extraterritorialidad, valga la palabra, de la soberanía de Roma en el territorio de España o Francia».

Por último, Sagasta, el 18, cerró la discusión con la puntualización sencilla de su propia postura. Existían tres institutos concordados y una ley de asociaciones para los demás. No había, pues, problema. La contestación fue aprobada inmediatamente¹²³, y el asunto quedó reducido, de momento, a ver a dónde llegaba la decisión del Gobierno.

Durante el verano de 1901, el problema político, trasladado con la corte a San Sebastián, y recluido en la prensa sobre todo, urgió la acción del Ministerio con asuntos muy determinados. En abril anterior, un decreto del Gabinete portugués había declarado secularizados todos los institutos de perfección de la Iglesia: reducido el ámbito legal de su ministerio a las colonias, mientras, en la metrópoli, prohibía la fundación de noviciados, colegios y toda actividad proselitista. En la misma época, entre enero y junio de 1901, el parlamento galo había discutido la ley de asociaciones. Los diarios españoles siguieron puntualmente los vericuetos por donde discurría la cuestión en ambos países, hasta consignar, al fin, la firma de la ley francesa por el presidente de la república vecina, Loubet, el primer día de julio¹²⁴.

La nueva disposición francesa exigía de los institutos ya establecidos que pidieran autorización al Gobierno, para permanecer constituidos, en el término de tres meses: supeditación al Estado que inclinó a desconfianza de que todos los religiosos la aceptasen y, por tanto, de la permanencia de muchos de ellos en Francia. Se suponía, por de pronto, que ni jesuitas ni asuncionistas lo harían, puesto que contra ellos parecía especialmente rígida la ley. Promulgada en julio, benedictinos y carmelitas optaron también por el exilio voluntario. En suma, cumplidos los tres meses, seiscientos quince institutos habían pedido la autorización y doscientos quinientos se habían negado a ello¹²⁵, de cuyos integrantes setecientos al menos pasaron a España durante el verano¹²⁶.

A últimos de julio de 1901, la prensa había comenzado a hablar ya de la llegada de religiosos franceses a Bruselas y, en agosto, de los temores que infundía en Italia la posible inmigración¹²⁷. Pero fue en la segunda quincena de septiembre cuando la inminencia del cumplimiento del plazo de la nueva ley hubo de provocar la salida del mayor contingente y, en consecuencia, las primeras alarmas. «Se anuncia —dijo de la frontera guipuzcoana el 23 *Heraldo de Madrid*— que están para llegar, también procedentes de Francia, muchos frailes y monjas no sometidos a la ley de Congregaciones»¹²⁸. El 28, aseguraba ya «que desde que se votó y publicó la ley de Waldeck-Rousseau sobre Congregaciones han pasado diariamente por San Sebastián de 80 a 85 religiosos franceses»¹²⁹, con exageración notable¹³⁰.

De acuerdo con el acostumbrado paralelo, se había vuelto a insistir en la insuficiencia de medios económicos del clero rural: «Ni para comer un poco de pan de trigo ni la modesta olla española —lamentaba el propio *Heraldo de Madrid* al mediar agosto— ganan la mayor parte de los párrocos y de los maestros de escuela en nuestra patria»¹³¹. Y, a fin de subrayarlo, el 31, publicó una carta de un párroco rural que protestaba contra los impuestos que gravaban su dotación, la acumulación de riquezas por parte de los religiosos y la actitud de los obispos que se lo permitían¹³².

Nada notable dijo la jerarquía sobre ello durante aquellos meses, al parecer más preocupada por la legislación educativa de García Alix y de Romanones, que debatiera el Senado, y que provocó, en septiembre, una detallada protesta de los prelados de la provincia eclesiástica aragonesa¹³³. Pero al Gobierno, en cambio, sí le urgía zanjar con rapidez aquel problema. La negociación con Roma, que aún no estaba iniciada¹³⁴, constituyó por ello desde el principio otro gran tema de las informaciones del verano.

Un obstáculo para su desarrollo advirtió insistentemente la prensa liberal entonces. En febrero de 1901, Alejandro Pidal había llegado a Roma como embajador español ante la Santa Sede¹³⁵, y, evidentemente, su significación ultraconservadora lo desaconsejaba para una acción anticlerical. Durante el verano, se rumoreó de hecho, que el ministro de Gracia y Justicia ya había enviado, hacía tiempo, instrucciones a Pidal para negociar la reforma del Concordato, y que don Alejandro se negaba a obedecerlas. Pero, en la segunda mitad de agosto —y luego en septiembre y en octubre—, informadores pidalianos publicaron una rectificación, según la cual el representante en Roma no había recibido «orden ni instrucción alguna en tal sentido»¹³⁶. Para ocultar tal vez la culpabilidad del Gobierno, se comenzó a insistir entonces con empeño en la inminencia de «un relevo sin nuevas consultas» en vista «de las vacilaciones y escrúpulos»¹³⁷ de Pidal, que sus amigos negaban, ante la negociación de la reforma¹³⁸. Y, durante aquellos meses, se barajaron los nombres de Moret, del marqués de la Vega de Armijo y de Teverga como posibles sustitutos¹³⁹. Pero, a la postre (y era significativo), el liberal Sagasta continuó representado en Roma por el más destacado tradicionalista alfonsino.

No hubo pues, de momento, intento de reforma del Concordato. Mas el Gobierno sí alumbró una medida importante sobre el problema de la inmigración religiosa. El 22 de julio, Alfonso González, el primer defensor

parlamentario de la sumisión legal de los religiosos, sustituyó en el Ministerio de la Gobernación a Villanueva, que lo regía interinamente raíz de la elección de Moret como presidente del Congreso el 15¹⁴⁰. Mu pocos días después de su intervención en las Cortes, en donde había defendido el criterio canalejista de someter todos los institutos masculino menos los tres del artículo 29, a la ley de asociaciones, fácil era entender que Sagasta jugaba probablemente la baza radical. González acababa de destacar de nuevo como uno de los escasos fusionistas permanentemente anticlericales (lo fue ya en el 87, cuando se discutió la ley). Y de otra parte, lejos de ser hechura de don Práxedes, presentaba el mejor historial para triunfar y fracasar en aquella cuestión sin comprometer al Gobierno de acuerdo acaso con cierto uso de Sagasta, pretendido al parecer con Canalejas ante la formación del Gabinete, de dejar que los propios agitadores de la opinión realizasen desde el poder lo que antes pedían en la oposición. El Ministerio quedaba así inmune de las responsabilidades de fracaso y, en cambio, aureolado por la complicación en la victoria, si llegaba.

Lo que, por lo demás, pretendía González, lo había ratificado ya, en realidad, el mismo Gabinete, cuando, en la circular del 22 de marzo sobre las actividades lucrativas de los frailes, Urzáiz afirmó que «las congregaciones no autorizadas por los art[ículo]s 29 y 31 del Concordato, ... que son las más numerosas, están sujetas a la ley de asociaciones de 30 de junio de 1887, y han debido ser registradas en el Gobierno civil conforme al artículo 7.º de la misma»¹⁴¹. Igual criterio simplificó Sagasta el 18 de julio de 1901 en el Congreso. Pero fue la oportunidad del hombre nuevo y el aumento de los frailes no españoles, ante la proximidad del fin del plazo francés de autorización, lo que exigió, por fin, calmar el malestar con la medida: Sagasta encomendó al ministro de la Gobernación la redacción de un decreto que frenara el desarrollo de los institutos de perfección de modo que chocase lo menos posible con los intereses de la Iglesia. Y González lo hizo sobrepasándose, según la dudosa afirmación de Romanones en el cumplimiento del encargo¹⁴², cuyo texto, comunicado por don Alfonso al Ministerio de Estado, como era de rigor¹⁴³, quedó aprobado el 18 de septiembre en el Consejo de ministros.

De momento, todos ellos ofrecieron guardar reserva absoluta hasta su promulgación, «a fin de evitar que las Asociaciones religiosas tuvieran tiempo para poner en juego las influencias de que siempre disponen; y así lo cumplieron»¹⁴⁴. La reina firmó el decreto el 19, y, el 20, la *Gaceta* de Madrid lo publicó.

La nueva medida anunciaba la reforma de la ley de 1887 «para poner en armonía el ejercicio de las facultades de inspección con la índole diversa de las Asociaciones». Pero, de acuerdo con lo afirmado ante las Cortes, sometía de momento al derecho común las comprendidas en la ley de 1887 (sin consignar cuáles eran: en cuya imprecisión acaso estuvo la siempre previsora mano de Sagasta), conforme a estos preceptos:

«Artículo 1.º Se concede un plazo de seis meses, a contar desde la publicación del presente real decreto en la *Gaceta* de Madrid, para que las Asociaciones ya creadas y comprendidas en los preceptos de la ley de 30

le junio de 1887 puedan inscribirse en el registro correspondiente de los gobiernos de provincia y cumplir las demás formalidades que determinan los artículos 4.º, 9.º, 10 y 11 de aquella ley misma.

Artículo 2.º Los gobernadores de las provincias cuidarán especialmente de exigir a las Asociaciones que se creen desde esta fecha el cumplimiento de los mismos requisitos, usando en otro caso de las facultades que la propia ley les concede.

Artículo 3.º Para que los extranjeros constituyan en España Asociaciones comprendidas en los preceptos de la ley de 30 de junio de 1887, o ingresen en las ya creadas, será condición indispensable que los fundadores, directores o presidentes de las Asociaciones mismas acrediten ante el Gobierno de provincia que aquéllos se hallan inscritos como súbditos de la nación a que pertenezcan en el Consulado correspondiente, solicitando al mismo tiempo su inscripción en el propio gobierno de provincia»¹⁴⁵.

4. *La negociación con Roma*

La prensa liberal aplaudió el decreto, con la excepción de los republicanos radicales, que lo juzgaron limitado. La Unión Republicana subrayó el acercamiento doctrinal que reflejaba la nueva medida entre el fusionismo y ellos¹⁴⁶: cuestión decisiva por demás para el futuro monárquico. Pero la misma prensa recordó enseguida al Gobierno su «incontestable derecho a tomar medidas contra la inmigración en la Península de las Congregaciones extranjeras, y que no tiene para el caso, en absoluto, necesidad alguna de entenderse con el Nuncio», máxime cuando la conducta de Sagasta «se halla conforme con las tradiciones del partido que acaudilla»¹⁴⁷.

La advertencia, tomada por *Heraldo* el 24 de septiembre de 1901, de *Le Figaro*, seguramente para fundar los ánimos del Ministerio, era tanto más necesaria cuanto que el Gabinete había publicado aquel decreto sin previa comunicación al nuncio, monseñor Rinaldini¹⁴⁸. Este, además, llamado a Roma para informar al Papa de la situación de España y hablar acaso de la reforma del Concordato, había pasado el 18 de septiembre por San Sebastián, donde se entrevistó con la reina, Sagasta y Almodóvar separadamente, sin que le dijeran nada de la norma, que conoció al detenerse en París¹⁴⁹.

El 22, el encargado de negocios del Vaticano en España acudió por eso al Ministerio de Estado «con carácter oficial a protestar solemnemente» del decreto, «por haberlo publicado sin acuerdo de la Santa Sede, a pesar de que a su juicio interpreta viciosamente [el] Concordato, y porque se ha procedido con desconsideración hacia el Nuncio al no prevenirle de lo que se iba a hacer, precisamente en los momentos en que recibía atenciones de Su Majestad y del Gobierno»¹⁵⁰.

Probablemente para curarse en salud, Sagasta comunicó la protesta a Canalejas, y este le aconsejó formulara «una explicación benévola y amistosa» para zanjar el conflicto¹⁵¹. Pero Sagasta proyectaba tal vez una negociación en regla sobre las consecuencias y la aplicación de la medida de

González, quizá para evitar el enfrentamiento con la Santa Sede que podía suponer el cumplimiento estricto de la norma recién dictada. Ya en su entrevista del día 22 con el encargado de negocios de la Santa Sede, el subsecretario de Estado (ausente de Madrid el duque de Almodóvar) le advirtió que el plazo de seis meses que otorgaba el decreto «permitirá la debida inteligencia entre las dos Potestades»¹⁵². Y, el mismo día, el propio Almodóvar escribió a Rinaldini una carta conciliadora sobre el alcance de la norma y las razones que la justificaban. Afirmó en ella que el Gobierno veía «un peligro real en el número de religiosos y religiosas que atraviesan la frontera»; que la inmigración había aumentado (lo que no pudo ser verdad, de ser ciertas las fechas) después de su partida hacia Roma, y él movió al Consejo de Ministros a adoptar la medida, para evitar también el recrudecimiento de las agitaciones anticlericales. Por lo demás, no había nada en ella contrario al Concordato. «La situación de las Ordenes religiosas —puntualizaba en concreto— no ha sufrido ninguna alteración, y el plazo de seis meses para cumplir las obligaciones que implica la ley de Asociaciones, deberá ser ampliado a determinar cuáles son las Asociaciones que deben legitimar su existencia bajo sus reglas, y cuáles otras que deben estar regidas por una modificación en la ley mencionada, lo cual será objeto de una negociación con la Santa Sede»¹⁵³. De manera que los términos de Canalejas y la imprecisión del texto del decreto, al hablar simplemente de «las Asociaciones ya creadas y comprendidas en los preceptos de la ley de 30 de junio de 1887» (cuyo alcance precisamente se iba a discutir), parecían denunciar así su ambigua intención.

Para que pudiera adelantar la justificación del Gabinete ante el Secretario de Estado, el 22 de septiembre aún, el propio duque de Almodóvar telegrafió a Alejandro Pidal sobre los antecedentes de la medida de González. Venía ésta exigida por «la entrada de religiosos de ambos sexos que procedentes de Francia, buscan residencia en España sin solicitar permiso». Y había sido aprobada en consejo posterior a la partida de Rinaldini, quien por eso, decía, no pudo tener conocimiento de él; con el recuerdo, además, de que el plazo de seis meses «facilitará la inteligencia entre [la] Santa Sede y [el] Gobierno»¹⁵⁴.

Molestos a pesar de tales explicaciones, que fueron comunicadas por el embajador al Papa y a Rampolla, ambos juzgaron lo ocurrido, según Pidal, «más aún que como una descortesía, como un síntoma revelador de un sistema de procedimiento, [y] el sentido dado al Real decreto, como una violación abierta del Concordato». Hasta el punto de que el embajador lo encontró «como en vísperas de una franca ruptura de hostilidades»¹⁵⁵. Sin llegar a esto, en nota de protesta fechada el 30 de septiembre de 1901 el secretario de Estado del Pontífice advirtió al Gobierno la sorpresa producida por la publicación de la medida dos días después de la partida de Rinaldini. Aquella no era «conforme a los usos diplomáticos ni a la especial deferencia que el Santo Padre tenía derecho a esperar». «Tal precedente parece poco a propósito para disponer favorablemente el ánimo de Su Santidad para entablar futuras negociaciones.» Sobre éstas, afirmaba que, desde la época del Concordato, «la Santa Sede, el episcopado, los católicos juristas insignes y eminentes políticos españoles, sin excluir a los

ministros de la Corona que han formado parte del actual Gobierno, han sostenido siempre y en las mismas Cámaras que en aquel solemne pacto bilateral estaban reconocidos implícita, pero positivamente, todos los institutos religiosos aprobados por la Santa Sede». Y, en consecuencia, el artículo 2.º de la ley de asociaciones los eximía a todos, como concordados, del resto de sus cláusulas. Si el Ministerio lo interpretaba de otro modo, era el momento de aplicar lo dispuesto en el artículo 45 del Concordato; es decir: negociar ¹⁵⁶.

El Vaticano suscribía, en suma, la exégesis conservadora de la legislación, recientemente resellada por el libro de Joaquín Buitrago Hernández sobre la existencia legal y la capacidad civil de *Las Ordenes religiosas y los religiosos*, cuya impresión había terminado el 27 de agosto y contenía un sopesado y denso estudio jurídico del problema, explícitamente justificado en los disturbios del invierno ¹⁵⁷, que fue, a partir de entonces, fuente obligada para su defensa.

Por consejo de González ¹⁵⁸, el 5 de octubre, el duque de Almodóvar volvió a escribir urgentemente a Pidal para que recomendase al cardenal Rampolla silencio sobre la existencia de aquel documento de 30 de septiembre, «que si fuera conocido en España daría ocasión a sacudidas de la opinión entre los exagerados y embarazaría la acción del Gobierno». Advertía, además, que la nota vaticana había provocado «impresión dolorosa» en Madrid por su «exceso de rigor» ¹⁵⁹. Más sosegadamente, el 19, el propio ministro de Estado envió al embajador una real orden en donde expresaba la postura jurídica del fusionismo. Canonistas como el actual obispo de León, Lafuente y Salazar —decía en ella— afirmaban que las congregaciones restablecidas por el Concordato eran las mencionadas en los artículos 29 y 30, y las demás, por tanto, estaban incluidas en la Ley de asociaciones. «Una práctica viciosa hizo, sin embargo, que algunas Congregaciones pidieran y obtuvieran Reales órdenes especiales de autorización; pero claro es que la repetición de actos contra la ley no alcanzaban a derogar a ésta ni podrían ser invocados como título suficiente, sobre todo, cuando ... un movimiento enérgico de la opinión pública llamase a los Gobiernos a la observancia estricta del precepto legal», urgido además por la inmigración de los religiosos franceses. Recordaba también a la Santa Sede que nada había reclamado cuando fue promulgada la ley del 87, ni en marzo de 1901, ante el decreto sobre las industrias regidas por frailes. Pero puntualizaba asimismo que, «deseoso el Gobierno de S. M. de llegar (a tenor del art[ículo] 45 del Concordato, que al prescribir la forma de resolver amigablemente cualquiera dificultad, excluye el procedimiento de la protesta u otro violento) a términos de franca y perfecta inteligencia, y persistiendo en el propósito que en el preámbulo del Real decreto [de 19 de septiembre] se menciona de someter a las deliberaciones de las Cortes la necesaria reforma de la ley», estaba el Ministerio «desde ahora favorablemente dispuesto a escuchar las sugerencias que sobre este punto tenga a bien formularle la Santa Sede, en la inteligencia de que si bien su convicción honrada es la que queda expuesta, no habrá de negarse, sino antes bien ansía llegar a términos que, dejándola a salvo los sagrados derechos que al Sumo Pontífice corresponden, hagan posible también el cumplimiento de los ineludibles deberes que a la

Potestad civil competen». Todo ello sin perjuicio de que, además, fuera negociada la reforma del Concordato «en su día y con la extensión debida»¹⁶¹. Así, fiel a la línea contemporizadora de Sagasta, si rechazaba toda actitud amenazante, tampoco suponía entrega ciega, como luego se dijo, a los deseos de Roma.

La opinión política tardó en conocer la orientación de esta correspondencia diplomática. Parece que, en principio, la jerarquía eclesiástica aconsejó a los superiores de los institutos de perfección que no los inscribiesen en los registros civiles ni cumplieran los requisitos del decreto de González¹⁶¹ —lo que, de los franceses inmigrados, solo cincuenta y dos cartujos habían realizado a finales de octubre de 1901¹⁶². Y la prensa liberal, si duda temerosa de la tendencia transigente de Sagasta, siguió esforzándose por mantener el ánimo radical que requería del Ministerio. Ante el decreto y ante la siempre recordada reforma del Concordato, según *Heraldo de Madrid*, el Vaticano pensaba seguir la política de «dar largas a los asuntos» creyendo que son harto frágiles las bases de dicho Gobierno para que Sagasta pueda resolver una cuestión tan delicada y difícil como la resuelta por Waldeck-Rousseau¹⁶³. Roma seguiría «la política de contemporizar» aguardando a que la situación política de España sea menos incierta»¹⁶⁴.

La transacción que había realizado el Gabinete hubo de conocerse sin embargo de modo paulatino. Ya el 18 de octubre, el romerista Bergamini interpelló al Ministerio, reabiertas las Cortes, sobre lo que pensaba hacer con las asociaciones que no cumplieran la medida de septiembre. Se decía que, «después de las insinuaciones, más o menos confidenciales, hechas por el Gobierno allí donde podía haber suscitado algún recelo aquel decreto..., no significa éste más que una especie de satisfacción medrosa dada a la opinión para que, transcurridos los seis meses del plazo fijado, continuemos el período de tolerancia de catorce años, a que alude en su preámbulo el señor ministro de la Gobernación». Y González, con apariencia de firmeza, no respondió con claridad a esta cuestión¹⁶⁵.

Todavía en octubre de 1901 se comenzó a hablar de que el episcopado que había continuado durante el verano sus pastorales de réplica al anticlericalismo¹⁶⁶, preparaba una protesta formal en el Senado. Parece que «las más altas personalidades» (el marqués de Pidal sobre todas) se esforzaban en impedirlo para evitar el enfrentamiento. Y en efecto, los trabajos del embajador neocatólico, su hermano, lo debieron mitigar, si, como es probable, los Prelados recibieron instrucciones de Roma, sobre las que el Pontífice y Alejandro Pidal trataban ya en el Vaticano a comienzos de los meses. La prensa liberal glosó con todo la reunión de los obispos senadores en Madrid, a últimos de octubre y primeros de noviembre, con intranquilidad visible por el valor que la opinión pudiera dar a una protesta formal de la jerarquía y por la ambigüedad con que el Gobierno llegaba ante las Cortes. No había aclarado públicamente aún (puesto que aquella correspondencia diplomática permanecía oculta) si pretendía o no tratar con Roma y, en caso afirmativo, cómo pensaba encaminar los tratos¹⁶⁷.

La temida interpellación, no obstante, se limitó a glosar el texto de la exposición que los prelados de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela acababan de dirigir al parlamento. Apoyaban en ella la libertad del

culto católico y la de enseñanza, conforme a la Constitución del reino, la derogación de la legislación educativa de Romanones y, por supuesto, también de la medida de González. Martínez Vigil, obispo de Oviedo, que abrió el debate en el Senado el 7 de noviembre, preguntó tan solo al Ministerio si estaba dispuesto a hacer lo que en aquella exposición pedían. El ministro de la Gobernación respondió la conocida exégesis restrictiva del artículo 29, que dijo obligaba a someter a la ley de asociaciones a los institutos no aludidos ni en él ni en el artículo siguiente (los femeninos también, por tanto). Y el prelado contestó a su vez que, en el peor de los casos si mantenía esa opinión, el Gobierno podía únicamente entablar negociaciones con la Santa Sede, según preceptuaba el Concordato para las cuestiones dudosas, pero no imponer arbitrariamente su propio criterio. Precisadas así las dos posturas, el 8 cerró Sagasta la breve discusión con la promesa escueta de que, si el Vaticano difería claramente de aquella interpretación del artículo 29, el Ministerio apelaría en consecuencia al 45, que imponía la búsqueda de una solución amistosa¹⁶⁸. Esto era, en realidad, lo que el Gobierno había prometido ya a la Santa Sede en su correspondencia de septiembre y octubre, que ahora, de este modo, comenzaba a hacerse pública.

El 9 de noviembre, monseñor Tomás Costa, arzobispo de Tarragona, y los prelados de Oviedo, Tarazona, Tortosa, Palencia, Coria y Segorbe¹⁶⁹, que habían tomado parte en los debates del Senado, enviaron un mensaje al Papa, remitido el 10 por el arzobispo de Tarragona al cardenal Rampolla. En él, tras subrayar su adhesión permanente al sucesor de Pedro y su estimación de los religiosos, narraban los resultados de la discusión «por la derogación del infausto Decreto» de septiembre. A lo largo de ella, no habían conseguido sino la afirmación «contenida en el discurso con que el Presidente del Consejo de Ministros cerró el debate parlamentario», en el que dijo: «Si hay diferencia entre la interpretación que le da (al Concordato) el Gobierno, la Corona de España y la que le da el Sumo Pontífice, entonces es cuando puede venir la aplicación del art[ículo] 45. *Y yo declaro que si tal caso llegara, no tendría inconveniente en aceptar esa interpretación y apelar al art[ículo] 45*». De ello desprendían los prelados «que el Gobierno ignora el pensamiento de la Santa Sede, y que por eso se niega a suspender los procedimientos anunciados contra las Congregaciones». Lo comunicaban al Pontífice «por si considera llegado el momento de manifestar de una manera explícita a S. M. la Reina (q. D. g.) y su Gobierno, que no entiende los artículos del solemne Convenio de 1851, relativos a las Ordenes y Congregaciones religiosas, como los entiende el Gobierno español, y que por lo mismo, no cabe modificar el estado presente de las cosas sin el acuerdo de ambas supremas Potestades»¹⁷⁰.

Naturalmente, Rampolla respondió el 16 al arzobispo tarraconense, por encargo del Papa, «que la Santa Sede no dejó de manifestar al Gobierno español cuán gravemente preocupaba su ánimo el conocido Decreto, ni dejó de expresar le claramente el modo como la Santa Sede interpreta la legislación española en lo que mira a las Congregaciones religiosas»¹⁷¹: como, en efecto, había realizado en sus protestas de octubre. El 25, significativamente, *El Correo*, diario sagastino, publicó el texto de la carta de los obispos

sin ningún comentario, y la protesta de la opinión democrática y republicana, que no había advertido la trascendencia de la promesa de Sagasta, alzó violentamente. La sugerencia episcopal, se dijo, obligaba a negociar con Roma lo que era competencia de los poderes públicos; «porque atribuye presidente del Consejo el compromiso de apelar al art[ículo] 45 del Concordato» y de suspender el cumplimiento de la medida de González en cuanto le constase la protesta de Roma ¹⁷². El 27 de noviembre, el republicano Ballesteró llevó el asunto ante el Congreso ¹⁷³, y, el 28, la prensa dio a conocer la respuesta del cardenal Rampolla a monseñor Costa, que terminaba aclarando el doble juego del Gobierno.

Tradicionalistas, dinásticos o no, y demócratas y republicanos denunciaron el engaño de Sagasta, quien, «conociendo ya hace tiempo la voluntad del Papa, ofrecía, sin embargo, no resolver esos asuntos sino de acuerdo con Roma» ¹⁷⁴. Pero, en adelante, toda pretensión de replantear el asunto ante las Cortes fue rechazada por el Gabinete en razón de que no podía debatirse entonces lo que era objeto de negociaciones.

Solo un hombre, Alfonso González, no podía transigir con la nueva promesa; puesto que se basaba en la destrucción de su propio decreto y de la justificación de su llegada al Ministerio. Y, en consecuencia, optó por una solución clara y medida. Probablemente tras el conocimiento de la postura nueva de Sagasta y antes del fin de año, parece redactó un nuevo decreto que aclaraba el de 19 de septiembre en el sentido de su propio criterio. Pero, al presentarlo en Palacio, la reina le manifestó, según se dijo, que había resuelto «no firmar decretos que se relacionen con esos asuntos» ¹⁷⁵. En la actitud de la regente, si fue esa, pesó tal vez una misiva autógrafa del Papa León XIII, en la que se dijo amenazaba con apoyar a Carlos VII ¹⁷⁶. Mas, para el ministro de la Gobernación, el camino estaba trazado. Razónando su dimisión por falta de salud, al parecer real, fue interinamente relevado por Villanueva por decreto del 8 de enero de 1902 ¹⁷⁷, si bien luego pospuso su cese definitivo a petición del jefe del Gobierno.

Al Gabinete no le cabía, pues, otra salida que un término feliz de las negociaciones con el Vaticano, no solo en lo relacionado con los institutos de perfección de la Iglesia, sino también en la reforma de la administración eclesiástica establecida por el Concordato.

Este último extremo había sido reclamado de nuevo, en noviembre de 1901, en la discusión de los presupuestos. El voto particular de García de Monfort, miembro de la comisión dictaminadora sobre ellos, respaldado por los diputados de la Unión Nacional, había propuesto la reducción de los gastos del Estado en más de ciento diez millones de pesetas mediante economías en las partidas de Guerra y Agricultura y en las obligaciones eclesiásticas del Ministerio de Gracia y Justicia, de modo que, sólo en estas últimas, se obtuviera una disminución de más de diez millones.

Para lograrlo, indicó la necesidad de negociar con Roma la reducción del presupuesto, pero, al tiempo, la posibilidad de revisar el Concordato, cuyo cumplimiento estricto daría pie a otras economías sin necesidad de tratos. «Y, a fin de regularizar pronto y debidamente la organización eclesiástica de España, se propone a las Cortes que fijen un término de *tres meses* para que el Gobierno concluya sus negociaciones con la Santa Sede» ¹⁷⁸.

Rechazada esta iniciativa, habían sido los conservadores los que irónicamente, quizá para poner de manifiesto la debilidad del radicalismo gubernamental, pidieron que el Ministerio negociase con la Santa Sede las restricciones en el Concordato reclamadas de Silvela, en 1899, por los propios unionistas. Demócratas y republicanos exigieron lo mismo, y también la supresión, sin tratos, de los organismos subsistentes pero no concordados. Al cabo, el ministro de Gracia y Justicia, marqués de Teverga, prometió el 29 de noviembre de 1901 que el Gabinete gestionaría en Roma la reducción del presupuesto eclesiástico pedida en aquellas sesiones¹⁷⁹. Probablemente para concretarlo, Teverga mismo redactó, de acuerdo con Sagasta, un proyecto de reforma del pacto del 51, que pudo ser enviado al embajador ante la Santa Sede a últimos de diciembre. Salcedo Ruiz aseguró más tarde que aquel proyecto de reforma, «con ideas muy radicales», había sido remitido a Alejandro Pidal «sabiendo que no había de ser aceptado; pero el fin era ganar tiempo»¹⁸⁰, tal vez ante la cercanía de la mayor edad de Alfonso XIII.

En efecto, el proyecto no fue aceptado siquiera por el embajador Pidal, que dimitió por ello el 18 de enero de 1902. Advirtió también no obstante, al propio Sagasta, que, «si le conviniera más que presentase las bases, no tengo inconveniente en hacerlo después de haberle expuesto con lealtad mi opinión y la suerte que las auguro»: «en el Vaticano entienden que estamos en negociaciones sobre el Real decreto de González y que, mientras no se ultima [la] negociación, se deben suspender los efectos del Real decreto sin que proceda entrar en negociaciones sobre otro Concordato mientras no se ponga en claro la inteligencia y el cumplimiento del que rige»¹⁸¹. Se aseguró más tarde que, sin dar cuenta al Gobierno, Pidal había llegado a convenir con Rampolla una reducción del presupuesto eclesial sin alterar en nada el tratado de 1851¹⁸². Pero, de hecho, al aceptar la dimisión, Almodóvar no le pidió que diera curso a las bases¹⁸³, que fueron olvidadas por unos meses. Incluso las credenciales de despedida del embajador no fueron presentadas a León XIII hasta el 18 de marzo de 1902¹⁸⁴. Quizá por eso, en su nota del 3 de enero, la Santa Sede no respondió sobre el proyecto de reforma, que no conocía oficialmente, sino sobre la situación jurídica de los religiosos discutida desde octubre.

El 3 de enero de 1902, en efecto, el cardenal Rampolla entregó al embajador español una nueva nota sobre el decreto de septiembre, que Pidal comunicó al ministro de Estado el día 10. Sobre la discusión concordataria decía el secretario de Su Santidad que el artículo 30 autorizaba todos los institutos femeninos establecidos y cuantos los obispos quisieran instalar. Respecto al 29, no tenía ningún fin restrictivo, sino la imposición de un compromiso al Ministerio. «Esa otra Orden [de la que hablaba el artículo 29] no puede y no debe ser en la intención de los que estipularon el Concordato *la misma e idéntica* en todas las diócesis, puesto que en tal caso no se hubiera hablado indeterminadamente de *otra Orden*, sino que hubiera sido más sencillo y más razonable precisar[la].» Suscribía, en definitiva, las palabras de monseñor Brunelli, que citaba, según el cual «la expresión y *otra Orden* se ha usado por prudencia en vez de la de y *otras Ordenes* para no provocar el furor de los exaltados y del periodismo de su secta. Además debe entenderse de un modo *demonstrativo* y no ya *taxativo*

como si se hubiese querido restringir su sentido a uno solo de los Institutos Regulares; y es esta la inteligencia amigable con los Señores Ministros

Todas las demás órdenes y congregaciones —añadía aún Rampolla— estaban implícitamente consignadas en los artículos 1, 2 y 43 del Concordato. La praxis de los gobiernos lo rubricaba así, desde las reales cédulas referidas por Bravo Murillo en 1852 para permitir el establecimiento de los jesuitas en Loyola y de los franciscanos descalzos, con fines misionero. Y lo demostraba también el hecho de que, en 1868, hubiera novecientos conventos con dieciséis mil religiosos. En los discutidos decretos de autorización emanados del Ministerio de Gracia y Justicia desde 1877, se consignaba la fórmula de que «por el Poder civil no hay inconveniente en que se funde dicha Comunidad»; la exención del servicio militar para los individuos de institutos no concordados suponía la existencia jurídica de todos ellos, y, en fin, el libre derecho de asociación para los religiosos había sido declarado en el Congreso español el 17 de noviembre de 1871 y en el debate de la ley de 1887, que suscitó una enmienda sobre ello del diputado Canga Argüelles y la reclamación de explicaciones por el propio Rampolla. El nuncio entonces de Su Santidad en Madrid. En último término —concluyó el cardenal en su nota—, «surgiendo dudas sobre ello, éstas no pueden ser resueltas más que de común acuerdo entre ambas partes interesadas» ¹⁸¹

De momento, el solo hecho de que existieran las negociaciones bastó a Sagasta para eludir el tema religioso en los debates políticos. Toda alusión a él faltó asimismo en los programas parlamentarios elaborados en el Consejo de Ministros el 2 y el 15 de enero de 1902. Y cuando el 14, en la Cortes, el integrista Nocedal replanteó el asunto del cumplimiento de la medida de septiembre y las negociaciones con Roma, no obtuvo sobre esta explicación alguna de Sagasta y, de González, sólo la diplomática respuesta de que él tenía la intención «de que el decreto se cumpla en las condiciones que el mismo decreto determina y en las que taxativamente se marca en su preámbulo, que forma parte del real decreto» ¹⁸⁶.

Pero la duda de Nocedal, con todo, tenía un claro fundamento, en el que insistían los sectores eclesiásticos. En *Razón y Fe* de febrero, el padre Villada, de la Compañía de Jesús, interpretó también las frases de Sagasta en el Senado del 8 de noviembre como una transacción: «con toda solemnidad, ante la nación entera —afirmó el jesuita—, se ha comprometido el Gobierno a no ejecutar el triste decreto, por lo que atañe a los religiosos antes de que se presente y apruebe en las Cortes un proyecto de ley que modifique la de Asociaciones del 87» ¹⁸⁷.

Lo que en realidad había asegurado el jefe liberal era que «la ley se modificará en cuanto a hacer desaparecer de ella las dificultades que tenga la inspección del poder civil en todas las Congregaciones religiosas» ¹⁸⁸. Pero tan imprecisa afirmación fue luego concretada, de nuevo el 14 de febrero de 1902, en la nota «muy confidencial» que el duque de Almodóvar remitió al nuncio: «el Gobierno de S. M. —notificaba en ella— considera llegado el momento de presentar a las Cortes del Reino el proyecto de ley modificativo de la de Asociaciones de 30 de junio de 1887, en lo que debe afectar a las Ordenes religiosas no comprendidas taxativamente en los artículos 29 y 30 del Concordato vigente, cumpliendo así lo expuesto en el

Real decreto de 19 de septiembre último, respecto a la necesidad de armonizar el ejercicio de las facultades de inspección que al Estado incumben con la índole diversa de las mencionadas Ordenes religiosas. ... inspirará este proyecto de reforma en el sentido de concederles toda la independencia y libertad compatibles con la legítima intervención que a la potestad civil compete.

En consecuencia, propondrá a las Cortes del Reino:

1.º Que la autoridad gubernativa no pueda penetrar en la parte de casa o monasterio dedicada a la clausura canónica. No podrá establecerse clausura en el local en que se ejerza industria, se dé enseñanza o tengan residencia o habitación los alumnos;

2.º Se declarará que para los efectos de la ley de Asociaciones no se entenderá por sesiones o reuniones los actos dedicados al culto o a la devoción por los institutos religiosos; y

3.º Se derogará para las asociaciones de religiosos profesos aprobadas por la Santa Sede el párrafo 2.º del artículo 8.º de la citada ley, que dispone que ninguna asociación pueda adoptar denominación idéntica a la de otra ya registrada en la provincia o tan parecida que ambas puedan fácilmente confundirse»¹⁸⁹.

Se pretendía, pues, una solución prudente, que, era, en realidad, un modo de conservar la situación con normas más seguras: la legalización de una postura media y liberal que sancionara la sumisión de toda asociación al derecho común y permitiera a un tiempo el mantenimiento de la vida religiosa en sus condiciones actuales.

Muy oportunamente, el día 16, cincuenta mil obreros iniciaron la huelga general en Barcelona, y, desde el 17 de febrero al 10 de marzo de 1902, los políticos quedaron pendientes de tales sucesos. No faltó en ellos la nota religiosa (en Sabadell fue saqueado el colegio de maristas)¹⁹⁰; pero tampoco propasaron los límites frecuentes. Solo el 8 de marzo, Romero Robledo se decidió a advertir la cercanía de la terminación del plazo que el decreto de septiembre había concedido a las asociaciones para inscribirse legalmente¹⁹¹. Acaso hacía eco a idéntica advertencia formulada en *El Imparcial* de la mañana, donde se sugirió también que «la clausura de las Cortes será la más evidente demostración de miedo»¹⁹² del Gobierno ante el problema religioso. Y, ciertamente, tres días después, aquellas fueron clausuradas¹⁹³.

5. Crisis y fracaso

Avanzado el segundo año del siglo, la urgencia del decreto de septiembre, en cuyo texto se empeñaba la palabra de un ministro, y la necesidad de coherencia ante la proclamación de Alfonso XIII, prevista para mayo, aconsejaron la reorganización del Gabinete. La excusa vino con la dimisión de Urzáiz el día 11 de marzo de 1902, que se dijo había interpretado la suspensión de las sesiones, conforme a las explicaciones de Sagasta mismo, como la decisión de retirar el proyecto de ley para limitar la capaci-

dad de emisión del Banco de España que aquel había propuesto. Don Alfonso González insistió en su propio cese, pedido desde enero, en el Consejo de ministros del 13 de marzo. Y todos sus compañeros lo imitaron para facilitar a la regente la solución de la crisis. Ante la opinión general sobre la conveniencia de hacer un Gobierno de concentración de todas las tendencias que inaugurase en paz el nuevo reinado, doña María Cristina le encomendó al propio Sagasta. Este rehusó el encargo, acaso tras la negativa de Maura a formar parte de él, y ofreció, a trueque, la formación de un Gabinete de coalición democrático-liberal ¹⁹⁴.

Parecía tratarse, por tanto, de pretender de nuevo una apariencia radical para su política templada, pero nada menos que con la inclusión de Canalejas, a quien ofreció una cartera, tal vez en la entrevista que mantuvieron el 15 de marzo ¹⁹⁵. Como medida de precaución, el orador democrático indicó a Sagasta su deseo de reunirse antes con determinadas personas para acordar el programa futuro del Gobierno. El 16, Moret, Weyler, e jefe del partido y Canalejas —todos los invitados salvo Vega de Armijo y Montero Ríos, que dijeron estar enfermos— acudieron a casa de Sagasta para discutir los problemas fundamentales. Eran: el cumplimiento del decreto de González, a punto de expirar su plazo, la reforma de la legislación del Banco de España, la cuestión social y la catalana, además de la fecha de reunión de Cortes. Moret y Canalejas fueron encargados de redactar los acuerdos que allí quedaron adoptados. Y, por la tarde del 16 aún, los mismos reunidos aprobaron lo escrito ¹⁹⁶, que fue considerado, en realidad, como el programa impuesto por Canalejas a modo de condición a su entrada en el Ministerio, y que, para el problema eclesial, disponía textualmente:

Agen

«A) Que no procede la derogación del decreto de 19 de septiembre.

B) Que para preparar la ejecución del mismo se interese de las autoridades provinciales y se recabe del ministerio de Gracia y Justicia, para su examen por el Consejo de ministros, los datos y los títulos de existencia legal en España de las Asociaciones, ejecutando desde luego el decreto; pero teniendo en cuenta, respecto de las diversas Ordenes religiosas, el Concordato y las negociaciones entabladas.

C) Que en último término, y para regular definitivamente el ejercicio del derecho de asociación en todas las esferas de la vida social, especialmente en lo que afecta a las clases obreras, se someta al Parlamento una ley orgánica del derecho de asociación, en sus diversas manifestaciones de derecho público, de derecho privado y de carácter económico.

D) Activar la negociación ya entablada, en cumplimiento de la oferta consignada en el discurso del Trono, acerca de la transformación del presupuesto eclesiástico» ¹⁹⁷.

En su reseña del acuerdo, *El Liberal* sumó otro punto, no incluido en el texto transcrito, que era, sin embargo, decisivo para obligar a Sagasta. Los reunidos habían acordado, según aquel diario, «que se establezca, para sus efectos entre las órdenes religiosas, la siguiente división:

«A. *Ordenes concordadas*, es decir, las tres, de todos conocidas, que se consignan en el Concordato.

B. *Ordenes toleradas*, que son todas las restantes.

C. Respecto a las órdenes toleradas dedicadas a la vida contemplativa, se adoptarán las disposiciones emanadas del decreto de 19 de septiembre»¹⁹⁸.

El 17 de marzo de 1902, el jefe del Gobierno presentó el programa a la reina, que lo aceptó¹⁹⁹. Y el 19, quedó formado el nuevo Gabinete con Segismundo Moret en el Ministerio de la Gobernación, Canalejas en el de Agricultura, su adicto Juan Montilla en Gracia y Justicia y Tirso Rodríguez en el de Hacienda, en tanto que Almodóvar, Veragua, Romanones y Weyler permanecían en sus puestos de Estado, Marina, Instrucción Pública y Guerra²⁰⁰.

El Liberal lo saludó como «Algo que nace muerto»: porque «divorciados van, desde antes de jurar, sus diversos factores»²⁰¹, que habían de enfrentarse de inmediato con el decreto de González, cuyo plazo expiraba el día 20.

Antes de la constitución del Ministerio sin embargo, el 10 de marzo, el propio Alfonso González cesante había transigido. Por indicación del marqués de Pidal, había sugerido a Sagasta que el Gobierno propusiera al Vaticano una transacción: que Roma, distinguiendo entre Asociaciones laicas y Comunidades religiosas, declarase:

«1.º Que, aunque no considera a las Asociaciones laicas de lleno bajo el imperio de la ley de asociaciones, lo acepta y reconoce.

2.º Que, entre las Comunidades religiosas distingue las que hayan obtenido y las que no hayan obtenido autorización del Gobierno.

3.º Que, en cuanto a las que la han obtenido, Roma las considera en el Concordato, por lo cual y siendo esta inteligencia contraria a la del Gobierno, pide la aplicación del artículo 45 del Concordato p[ar]a discutir; y

4.º Que, en cuanto a las que no han obtenido autorización, suplirán ésta con la inscripción [en el Registro Civil]; pero desde la inscripción quedará, como respecto de las anteriores, a discutir si les son o no aplicables los preceptos de la ley de asociaciones»²⁰².

Aceptada la sugerencia por Sagasta y propuesta al nuncio el 12 por Almodóvar, Rinaldini había reparado aún que aquella inscripción de los institutos podía ser negada por los gobernadores, en cuyo caso el acuerdo era una ficción. El Ministerio respondió que, a tenor del artículo 4.º de la vigente ley de 1887, aquella sólo podía negarse a las asociaciones ilícitas; que, no obstante, para evitar malentendidos, se haría constar que la inscripción no podría ser rehusada. Ocurrió luego la crisis del 19 de marzo de 1902, con la inclusión de Canalejas (que fue enterado expresamente de lo que se había propuesto a Roma y acordó, con los demás ministros, mantener en secreto tal negociación a la hora de redactar el programa gubernativo)²⁰³. Cerciorado el nuncio de que el nuevo Gobierno

mantenía la oferta ²⁰⁴, Rinaldini escribió a Almodóvar que ya había comunicado las bases a la Santa Sede y que el cardenal Rampolla le había manifestado que el Pontifice las aceptaba en estos términos: «*Sa Sainteté veut que l'ordre [?] omette la déclaration du 1^{er} point concernant les Associations laïques, parceque celles-ci n'ont jamais été comprises dans les questions actuelles pendantes avec la S. Siègè ... Quant au 2^e et 3^{eme} point, la S^t Siègè n'entend préjuger en rien la thèse qu'il soutient: à savoir, que les Communautés religieuses, qui ont reçu une approbation du Gouvernement doivent être considérées comme autorisées déjà par le Concordat mais étant le Gouvernement d'un avis contraire, la S. Siègè consent à discuter sur cette question en base de l'article 45 du même Concordat.*»

«Quant au 4^{me} point, il est bien entendu, que les Communautés Religieuses, qui n'ont reçu aucune approbation du Gouvernement jusqu'ici, n'auront à accomplir d'autre formalité que celle de l'Inscription, laquelle en aucun cas ne pourra leur être refusée. Une fois accomplie cette formalité, les dites Communautés seront considérées comme reconnues par l'Etat et comme telles elles seront comprises parmi les autres dont il s'agit sous le N.º 3 des bases envoyées» ²⁰⁵. Almodóvar lo aceptó el 24, al responder al nuncio «que el actual Gobierno mantiene los puntos de vista y las bases sobre las que planteó la negociación su antecesor» ²⁰⁶.

Preciso era, pues, con tal defensa (y quizás a ello respondió la colaboración de Canalejas en la ocultación de lo propuesto), mantener la apariencia de formalidad que la opinión democrática seguía exigiendo de nuevo Ministerio. Por eso, para poder controlar el cumplimiento de la norma de Alfonso González el ministro de Gracia y Justicia recibió el 20 de marzo una real orden del de Gobernación donde este pedía cuanto datos y antecedentes tuviera sobre aquel asunto. El propio Moret envió una circular (y copia de ella al ministro de Estado) a los gobernadores civiles en la que les mandaba que remitieran «nota de las Ordenes y Asociaciones religiosas existentes en las provincias respectivas, especificando, además las condiciones de su existencia, a qué se dedican, si están o no autorizadas por real orden y cuáles han cumplido y cuáles no los requisitos acordados en el decreto citado» ²⁰⁷.

Montilla llevó ya al primer Consejo de ministros del Gabinete los datos reclamados por Moret. Para estudiarlos, el Consejo designó una ponencia formada por el duque de Almodóvar, Montilla y Canalejas. A instancias de este —quien tal vez mostraba con ello que estaba sobreaviso de posibles dilaciones y engaños—, fue nombrada otra, constituida por él mismo, Montilla y Moret, a fin de redactar el proyecto de ley de asociaciones: de modo que, si había aceptado la transacción con Roma sobre el decreto de septiembre, no renunciaba en cambio a una nueva norma general que contemplase la situación de los institutos religiosos.

«Para determinar con seguridad las Comunidades religiosas de ambos sexos a quienes alcance el decreto de 19 de septiembre» y, en concreto, según la tercera orden del artículo 29 «ha de ser una misma para todas [las diócesis] o diversas para cada una», Moret pidió al ministro de Estado, por real orden de 22 de marzo, el texto de «las reclamaciones que la Santa Sede haya podido formular con ocasión del referido Real decreto, y cuanto sobre

el particular crea oportuno manifestar V. E., toda vez que el artículo 45 del Concordato prevé el caso de una diferencia de apreciación entre las dos Potestades, que sólo puede resolverse por medio de una negociación»²⁰⁸. A ello respondió Almodóvar el 28 que «el Poder civil español limitó su compromiso a las Casas y Ordenes enumeradas expresamente en los artículos 29 y 30 del Concordato, conservando íntegra su libertad para apreciar respecto de las demás el momento, la forma y las condiciones en que cabría admitirlas en el territorio nacional; que estas Comunidades no concordadas deben estar, por lo tanto, sujetas a la ley de 1887, y, por último, que se está en el caso de acogerse al artículo 45 del Concordato para concertar con la Santa Sede un arreglo sobre esto»²⁰⁹.

—Reanudadas las sesiones de Cortes, el 5 de abril del año 2, en el Congreso el jefe del Gobierno leyó el programa del Ministerio formado el 19 de marzo, del que se dijo recogía las bases acordadas en aquel mes²¹⁰ y que había sido redactado por Canalejas²¹¹. Proponía en él, junto a otros puntos secundarios, la aprobación de una ley nueva de asociaciones que respondera mejor a los actuales «problemas de *derecho público, derecho privado y orden económico*»: eco probable del pensamiento del demócrata sobre la evolución intervencionista del liberalismo²¹¹. Pero anunciaba además el cumplimiento inmediato, «con todas sus indeclinables consecuencias», del decreto de González, que sólo habían acatado, según dijo, algunos institutos religiosos. Puntualizaba que, «tratándose de una ejecución estricta del Real decreto de 19 de septiembre, parece innecesario declarar que el Gobierno se atiene a lo establecido en el artículo 2.º de la ley de 30 de junio de 1887, sobre cuya interpretación formuló la Secretaría de Estado de la Santa Sede reclamaciones recogidas por el Ministerio anterior ... En la actualidad se activa la tramitación de estas reclamaciones que las constantes prácticas internacionales sustraen por ahora al conocimiento de las Cámaras, a las que en razón oportuna se comunicará también el resultado de las negociaciones entabladas para la reforma del presupuesto de obligaciones eclesiásticas». Así quedaba desterrada completamente de las Cortes cualquier interpelación sobre el vidrioso problema de los compromisos contraídos con Roma.

Advertió también el programa que el Consejo de ministros estaba revisando «las autorizaciones [de comunidades regulares] acordadas en una serie de Reales órdenes suscritas por gobernantes de diversos partidos en distintas épocas». Y, en suma, consignó otros aspectos sociolaborales, económicos y administrativos, en ningún caso tan precisos, no obstante, como los religiosos²¹², que contribuían, con todo, a terminar de perfilar la nueva orientación intervencionista que parecía pretender Canalejas para el Partido Liberal.

Silvela lo subrayó claramente en el debate ulterior, al advertir a este el peligro de dejarse llevar por actitudes extremas²¹³. Pero, en realidad, el temor de los conservadores y la confianza de los demócratas en su radicalismo no hacían sino agravar el previsible desprestigio que podía afectarle cuando se descubriera su participación, al menos tolerante, en la transacción con Roma que suponían aquellas bases de marzo sobre el decreto de septiembre.

El 5 de abril de 1902, el nuncio comunicó oficialmente al Gobierno, por carta al duque de Almodóvar, que el Vaticano estaba dispuesto a negociar sobre estas bases: «Primera. Manteniendo siempre la Santa Sede firme su tesis de que las Comunidades religiosas que han obtenido la aprobación del Gobierno, deben ser de hecho consideradas y autorizadas por el Concordato y sosteniendo el Gobierno criterio opuesto, la misma Santa Sede consiente en discutir tal punto, de conformidad con el artículo 45 del Concordato. Segunda. Las Comunidades religiosas hasta ahora no autorizadas por el Gobierno no tendrán que cumplir otra formalidad más que la inscripción civil, la cual no podrá ser negada. Tercera. Cumplido este requisito se considerarán reconocidas por el Gobierno y, en tal concepto, serán comprendidas en la clase de las anteriores»²¹⁴. Insistente el Ministerio en el ocultamiento, la reseña oficiosa que publicó la prensa tergiversó el sentido de la nota. Recogió el primer punto con rigor; pero, del segundo y del tercero, dijo sólo que las únicas asociaciones religiosas que habían de considerarse comprendidas en el decreto de septiembre eran las no autorizadas ni concordadas, de las que deberían «someterse a la ley común las que tengan carácter laico»²¹⁵.

Dirigido el acuerdo a quitar toda virulencia a la medida de González, su ofrecimiento no suponía, sin embargo, la claudicación que luego se achacaría a Sagasta y Moret. La disposición segunda del 5 de abril no hizo sino legalizar la situación de los institutos establecidos sin autorización de ningún tipo: de modo que los asimilaba, por la tercera base, a los autorizados ya, cuyo estatuto jurídico no obstante, concordatario o no, continuaba discutiéndose. En su respuesta al nuncio del día 6 de abril, el duque de Almodóvar lo subrayó así, al advertir que el Gabinete tomaba «nota de que respecto a la primera y segunda [base] mantiene firmemente la Santa Sede su tesis de que las comunidades religiosas aprobadas por el Gobierno deben considerarse como autorizadas por el Concordato; pero en vista de que el Gobierno de S. M. mantiene la opinión contraria, accede la Santa Sede a que se discuta el asunto conforme a lo dispuesto en el artículo 45 del citado Pacto.

Aceptadas por las dos Potestades en la forma expuesta las referidas bases, el Gobierno de S. M. entiende que son el punto de partida para ulteriores negociaciones respecto a las comunidades religiosas en España de conformidad con lo pactado en el Concordato y acerca de la proyectada reforma del mismo, sin que prejuzguen en nada ambos puntos»²¹⁶.

El Estado español, por tanto, no se comprometía más que a negociar, aun cuando, en adelante, tal compromiso recibiera el nombre, altisonante entonces, de *modus vivendi*. Mera transigencia mínima entre partes que permitía negociar sobre ella, según definición del Derecho internacional, las fuentes de la época y la historiografía posterior la dotarían en seguida de una abultada entidad²¹⁷, que nunca tuvo. Acaso contribuyeron a ello las corrientes historicistas que entonces imperaban, con su tendencia a prescindir de las formalidades jurídicas y a valorar, por tanto, acuerdos de esa índole. Y también influyó la trascendencia política que ciertamente revestía. Moret dirigió una real orden, fechada el 9 de abril de 1902, a los gobernadores civiles, en donde dictaba las reglas de actuación deducidas de

aquellas bases. Según la nueva norma, tales autoridades debían de invitar a todas las asociaciones religiosas existentes y no concordadas a someterse a la Ley de asociaciones mediante su inscripción en el registro oportuno, o tomar «en caso contrario las disposiciones coercitivas que las leyes establecen». Las autorizadas por el Gobierno habían de mostrar para ello «el documento original por el que se concedió la autorización», y las no autorizadas expresamente, «la aprobación canónica de la Autoridad eclesiástica y ... la lista de las personas que la componen». De las asociaciones que en adelante se establecieran, debían de exigir los mismos requisitos, conforme a lo dispuesto en el segundo artículo del decreto de González. Del mismo modo había de aplicarse el artículo 3.º de aquella norma, «con el rigor que en el mismo se previene», «a toda clase de Asociaciones, así civiles como religiosas, que cuenten entre sus miembros o reciban temporal o permanentemente a súbditos extranjeros».

Ordenaba además que procurasen que «las Asociaciones y Congregaciones religiosas que ejerzan alguna industria, cualquiera que sea su situación legal, si no estuvieren inscritas en la matrícula de la contribución industrial correspondiente», lo hicieran «sin pérdida de tiempo» ²¹⁸.

Según Moret, la orden fue ampliada dos días después con otra circular a los gobernadores donde les explicaba que lo indicado venía a satisfacer las exigencias de la Santa Sede, pero que mantenía el fondo del decreto de septiembre ²¹⁹. Elementos eclesiásticos advirtieron años más tarde que la orden de abril de 1902 no había recogido exactamente lo acordado con Roma. Aquella no hablaba «sólo de Congregaciones religiosas existentes, sino además de las futuras, o sea de las que se establezcan después de la real orden, y de las que cuenten extranjeros entre sus miembros, y también de las Asociaciones laicas no monásticas» ²²⁰, para las que mantenía las medidas restrictivas del decreto de González. Pero esto, que volvía a denotar acaso exigencias de cuño democrático y procuraba ocultar en lo posible la transacción, no fue protestado ahora por Roma.

En verdad, aquel *modus vivendi* podía facilitar un punto de partida para negociar sobre él en adelante los puntos en litigio. Pero el simple hecho de que sus bases hubieran sido mantenidas en secreto por el Consejo de ministros, Canalejas incluso, hablaba del temor que al Gabinete inspiraba la opinión liberal, que había de acusarlo de rendición ante la diplomacia vaticana; puesto que, ciertamente, lo que se esperaba o se exigía del Gobierno era una medida bien distinta ²²¹.

Empezó a advertir que no era esto lo que se preparaba el liberal Celleruelo en la sesión parlamentaria del 9 de abril, al subrayar la ineficacia de la política fusionista en la resolución de los problemas actuales y «las profundas diferencias que, en la doctrina y en el procedimiento, separan a los dos hombres más importantes de ese Gobierno», Moret y Canalejas. Sus promesas anticlericales, en concreto, iban «a quedar reducidas a la más modesta expresión del ruido», a juzgar por los avances que algún diario publicaba aquel día sobre lo negociado con Roma ²²². Divulgada la orden de Moret el 10, Melquiades Álvarez lo calificó en las Cortes el 11 de «derogación vergonzosa de aquel Real decreto» de González. En el debate a que dio lugar esta interpelación, Moret y Sagasta insistieron en que los

tratos con Roma eran el único camino legal, conforme al artículo 45 de Concordato, y Canalejas ratificó que lo indicado por aquella norma de septiembre requería la aclaración de varios conceptos que eran objeto de negociación con Roma. La negociación, subrayó, no la había comenzado él. Estaba ya iniciada cuando integró el Gobierno²²³ y no la juzgó inconveniente aun cuando anulase la disposición de González, porque esta ya había logrado su objetivo al reducir a setenta y dos los setecientos cincuenta religiosos extranjeros que habían motivado su publicación²²⁴.

La razón podía ser válida; pero, lo fuera o no, Canalejas había permitido al menos (y la había aprobado con su presencia en el Gobierno) la política de ocultación de la realidad a la opinión del país. Y sin embargo, partir de entonces, comenzaron a surgir argumentos para justificar que abandonase a Sagasta como si hubiera sido también él víctima del engaño. Su colaborador Francos Rodríguez aseguraría más tarde incluso que había hablado el día 11 en el Congreso sin conocer la existencia de la real orden del 9²²⁵. Y, basándose en ciertas afirmaciones periodísticas inmediatamente desmentidas por el Gobierno, la historiografía posterior (hasta nuestros días) ha creído que toda la gestación de aquel *modus vivendi* del que hablamos fue hecha por Moret, Sagasta y Almodóvar a espaldas del demócrata²²⁶.

No fue así. Canalejas —ironizó después la prensa confesional— «aturullado por Necedal y Maura dijo una mentirilla *anticlerical*, fingiendo no saber palabra de lo que sabía tan bien como el mismísimo señor Nuncio»²²⁷. Conoció, según vimos, lo que se pretendía. Pero, tras la sesión del 11 de abril, hubo de evitar que su firmeza democrática quedase en vuelta en el nuevo y reincidente desprestigio de Moret y Sagasta. Para ello les advirtió por escrito «que no debíamos continuar por aquel camino sino hacer efectiva la promesa de la ley de Asociaciones»²²⁸. La petición obligaba en definitiva a convertir de una vez en hechos las promesas de acción, y, conforme a la actitud adoptada con González, el jefe del Gobierno tuvo que optar también ahora por prescindir del ministro. Se negó a presentar al proyecto entonces y, desde el mismo día 11, Canalejas dijo considerarse fuera del Gabinete y la prensa comenzó a ser consciente de la crisis²²⁹.

La oposición se agrió más todavía cuando, el 8 de mayo de 1902, el nuncio envió una circular a los obispos, en la que, tras advertir que «el Padre Santo, por especial deferencia hacia S. M. la Reina Regente y su Gobierno, se ha servido hacerle algunas consideraciones compatibles con los principios de la Iglesia», transcribía textualmente, palabra por palabra, aquellas tres bases aceptadas por el cardenal Rampolla en su carta del 5 de abril al duque de Almodóvar²³⁰, que invitaban a las asociaciones religiosas a inscribirse en los registros civiles, sin que tal inscripción pudiera serles negada. La circular fue publicada por la prensa del mismo 8 de mayo y, en adelante, la aireada y desairada opinión liberal notificó que Canalejas dejaría el Gobierno en cuanto fuera celebrada la jura constitucional del rey²³¹. El día 10, Romero Robledo levó el texto eclesiástico en la cámara baja; Canalejas eludió expresamente toda responsabilidad sobre él²³². El 10 aún, presentó formalmente la dimisión en carta dirigida a Sagasta, que,

al parecer, le pidió que asistiera al Consejo de ministros del día siguiente, que había de presidir la reina. En la reunión, el primero accedió a aplazar su decisión. Y, según Francos Rodríguez, acordaron presentar el 1 de junio el proyecto de ley de asociaciones, que era lo que él quería, «sin la menor ingerencia del Nuncio, y con el propósito de que no se clausurase el Parlamento hasta dejar aprobado tal proyecto, que formarían juntos Canalejas, Moret y el duque de Almodóvar»²³³. Para hacerlo, antes y después del 17 de mayo de 1902, día de la jura constitucional del rey, la ponencia designada en marzo para elaborar la futura norma se reunió al menos tres veces en el Ministerio de la Gobernación²³⁴. El 26, reunidos de nuevo los tres ponentes —Moret, Montilla y el propio Canalejas— acordaron al fin unas bases sobre las que podía elaborarse el texto definitivo²³⁵. Para ello contaron con cuatro proyectos. El primero, del duque de Almodóvar, estaba redactado en el sentido de las proposiciones diplomáticas hechas por el Gobierno a Roma en el proyecto concordatario de Teverga, y, conforme a la reseña de Francos Rodríguez, disponía:

«Que ninguna asociación religiosa podría establecerse sin *expresa* autorización, concedida por ley votada en Cortes.

Que no se tramitaría ninguna petición de comunidad que no estuviera autorizada por la Santa Sede.

Que se respetaría la voluntad de los que quisieran romper el claustro, reconociéndoles la integridad de sus derechos civiles.

Que se limitaría la facultad de enseñanza a las congregaciones.

Que las asociaciones dedicadas a industrias pagarían la contribución exigida a los demás ciudadanos.

Que no se considerarían como lícitas las asociaciones compuestas de extranjeros.

Que se limitaría la facultad de adquirir a los términos estrictos de los fines espirituales de la Asociación.

Que en todo tiempo el Estado podría disolver las asociaciones, fuera de las tres concordadas.»

En la línea de éste se situó el proyecto más general de Segismundo Moret, que formulaba siete bases poco comprometidas:

«La primera, para definir el derecho de asociación en el mismo sentido de la ley Waldeck-Rousseau.

La segunda, relativa a la personalidad y capacidad de adquirir las asociaciones.

La tercera, relativa a la necesidad de autorización de las Cortes para establecer en España una nueva comunidad.

La cuarta, para la revisión de las comunidades existentes por un simple Real orden.

La quinta, relativa al registro de las comunidades en los Gobiernos civiles y reglas para la ruptura de la claustración en casos de orden público o por demanda de los enclaustrados.

La sexta, en la que preveía los casos de disolución de las comunidades.

La séptima, referente a los artículos del Concordato y su interpretación en sentido restrictivo.»

Más radical fue el proyecto de Canalejas, que fue juzgado por sus contrarios «adaptación a España de la [ley] francesa de 1.º de julio de 1901, llamada ley Waldeck-Rousseau»²³⁶. Disponía en él, en primer lugar, que ningún instituto de perfección podría establecerse en España sin «expresa autorización, concedida mediante una ley hecha en Cortes», que nunca podría ser otorgada a los que careciesen de la aprobación de Santa Sede ni a los que «contasen bula o breve por los cuales hubiesen sido prohibidos»: de modo que, de antemano, parecía quedar eliminada la Compañía de Jesús.

Ninguna persona menor de edad podía ingresar en ellos, y el Estado comprometería a amparar a los miembros de una comunidad que «desearan romper los vínculos que a ella los ligaren, y ... a este efecto facilitar la excomunión». Los centros religiosos de enseñanza quedarían sometidos a las leyes generales que regulaban la oficial. Era necesario, por tanto, que sus profesores «se hallen provistos de todos aquellos títulos, condiciones y garantías que la ley exige a los demás ciudadanos». Y, en cualquier caso, quedaban sometidos a la inspección gubernativa, que alcanzaría también al cumplimiento de las disposiciones sobre higiene y salubridad pública. Así mismo, las industrias y el comercio realizados por regulares estarían sujetos «al pago de la correspondiente contribución», y, en lo referente al vidioso tema de la propiedad, ni las órdenes ni las congregaciones podrían adquirir jamás otros inmuebles «que el edificio donde estuviesen instaladas». Todos los valores mobiliarios que poseyesen habrían de ser colocados en títulos nominativos; no podrían recibir donaciones y legados más que en las condiciones impuestas en el Código civil, y, aun en este caso, habrían de ser enajenados, si no eran estrictamente necesarios para la vida de la institución.

Las que estuviesen compuestas en su mayor parte por no españoles serían disueltas; de acuerdo con el Consejo de ministros, el de Gracia y Justicia podría «retirar la autorización disponiendo el cierre de la casa, monasterio o convento de que se trate»; serían nulas todas las donaciones intervivos y testamentarias, a título oneroso o gratuito, hechas a favor de personas interpósitas; la autoridad civil podría «penetrar en cualquier tiempo en los conventos o monasterios», y, en fin, sobre los institutos existentes el Gobierno procedería «a la revisión de todas las autorizaciones otorgadas hasta la fecha»²³⁷.

Según dijo la prensa el 27 de mayo de 1902, el acuerdo de la ponencia había fraguado en torno a un cuarto proyecto, transaccionista, de Montilla. Pero las bases esenciales del entendimiento que entonces fueron publicadas coincidían con las de Canalejas. Según nota oficiosa dada a conocer por los tres reunidos, esos principios admitidos por todos eran:

«1.ª No podrá establecerse en España ninguna Orden religiosa sin previa autorización, la cual le será concedida mediante una ley.

2.ª Las Ordenes que se establezcan en lo sucesivo en territorio español, se someterán en materia de enseñanza a las leyes generales y estarán en todo sujetas a la inspección del Gobierno.

3.^a No podrán adquirir ni conservar más inmuebles que el que represente el lugar de su residencia.

Y 4.^a Las Ordenes religiosas podrán ser disueltas en cualquier momento, por motivos de orden público, bastando que así lo acuerde el Consejo de Ministros» ²³⁸.

— El mismo 27, el propio Consejo aprobó el proyecto definitivo. Pero Sagasta se negó ahora a admitir que las Cortes fueran abiertas, so pretexto del viaje que el nuevo rey iba a realizar a Andalucía y porque, pocos días más tarde, hubieran tenido que ser clausuradas ante el comienzo del verano. Terminante y categóricamente, Canalejas le respondió que era la supuesta amenaza del nuncio a abandonar Madrid, de que hablaba la prensa, si el Gobierno presentaba a las cámaras un proyecto de ley de asociaciones, lo que le inducía a negarse a ello. Apoyado esta vez por Moret, que también jugaba su baza radical en la necesidad de abrir pronto las Cortes, ambos parece dimitieron. Pero Moret permaneció en el Ministerio, acaso convencido por Sagasta de que podía gobernar por decretos. También Weyler manifestó a la prensa días después que había permanecido en el Gabinete por evitar una dificultad a Alfonso XIII a pocas fechas de su jura de la Constitución, a pesar de que estaba conforme con Canalejas. Pero, de hecho, solo este abandonó el Gobierno, el 29 de mayo ²³⁹.

El 10 de junio acabó la prórroga del plazo que el decreto del 9 de abril había dado a los institutos de perfección no concordados para inscribirse en los Gobiernos civiles como ordenaba la ley de asociaciones. Pero, a pesar de las seguridades de portavoces fusionistas sobre la disposición del Gabinete a impedir la existencia de los que no lo hubieran hecho, la opinión radical dio por segura una nueva transacción: «Preparémonos —escribía *El Liberal* el 8 de junio— a contemplar los rodeos que dan y las habilidades que emplean para salvar de las disposiciones por ellos mismos dictadas, a las órdenes que carecen de la documentación requerida» ²⁴⁰. En verdad, el Ministerio no cumplió la disposición, aunque la estadística que Moret presentó al Consejo de ministros del 18 sí daba materia para hacerlo ²⁴¹:

ESTABLECIMIENTOS RELIGIOSOS

Inscritos en los Gobiernos Civiles

Con carácter definitivo

de varones	209
de hembras	992
<hr/>	
TOTAL	1.201

Con carácter provisional

	56	
de varones	266	
de hembras	1.144	
TOTAL	1.410	
TOTAL INSCRITOS		261

Pendientes de inscripción

Por defecto de título o falta de clasificación	15
---	----

No inscritos

Por considerarse concordados	151
Por no haberlo solicitado	3
Por motivos ignorados	200
TOTAL NO INSCRITOS	35

TOTAL ESTABLECIMIENTOS EXISTENTES	3.11
---	-------------

De varones con 10.745 individuos	529
De hembras con 40.188	2.586
TOTALES	3.11.

NOTAS

¹ El núcleo inicial de este quinto capítulo, sobre el período 1900-1902 fue tesis de licenciatura orientada por el Dr. José Manuel Cuenca, publicada después, tras una primera reelaboración, en «Ius canonicum», XII (1972) 173-221. Para encuadrar el problema jurídico a que se refiere, vid. José Manuel Castells: *Las asociaciones religiosas en la España contemporánea (1767-1965)* Madrid, Taurus, 1973.

² Sobre la situación del bajo clero avanzamos algunos datos, que han de merecer un estudio aparte, en *España, 1875-1900 (Dualismo social, Restauración, Desastre)*. Barcelona, Ed. Vicens-Vives, en prensa.

³ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 25-IV-1899. No menciona tal viaje, que no debió existir, Isidoro García Herrera: *El cardenal Sancha, arzobispo de Toledo, 1833-1909*, 2.ª ed., Madrid, Escuela Gráfica Salesiana, 1969, 672 págs.

⁴ Vid. AMAE/SPS, leg. 2.677, expediente «1900. Asunto Obispo Barcelona Sr. Morgades», que contiene una interesante relación de las conversaciones que Sancha mantuvo en Roma sobre la política catalanista de aquél. Al menos a raíz de la pastoral de Morgades que aconsejaba el empleo del catalán en los sermones y en la enseñanza del catecismo, parece que el Gobierno Silvela se propuso, en enero de 1900, «gestionar del Papa que prohiba al obispo de

Barcelona tratar de asuntos que se hallan fuera de su misión espiritual». Se habló incluso de que el nuncio y el ministro de Gracia y Justicia se entrevisarón para ver de su traslado a otra diócesis (*El Imparcial*, 20-I-1900). Sobre el viaje de Sancha a Roma, hallamos esta carta suya la reina: «Señora: = Antes de ayer fui favorecido con una audiencia de Su Santidad, y cumpliendo fielmente el encargo de V[ues]tra Majestad, supliqué al Padre Santo que, con su notoria prudencia y alta sabiduría, se dignase tomar alguna medida con el Sr. Obispo de Barcelona, a fin de devolver la paz y restablecer el orden, algo perturbados en aquella Ciudad y Provincia. = Le extrañó sobremanera la conducta de dicho Prelado, y dijo que estudiaría el medio más conveniente para remediar los males de referencia. Se mostró muy inclinado N[ues]tro S[an]t[is]imo Padre a ordenar que el Sr. Morgades viniera a Roma. = También hablé del asunto con el Excmo. Sr. Cardenal Rampolla, y aunque le parecía grave la medida de sacar de su Diócesis a un Prelado, ya anciano, en embargo, prometió meditar con interés el asunto y hablar con Su Santidad. = El Padre Santo quiso que le diera noticias de la salud de V. M. y de S. M. el Rey, y le dije que, gracias a Dios, se hallaban bien, y que V. M. me había encargado que le ofreciera sus respetos y testimonios de consideración. = Le he hallado más joven y con más vigor que el año 1894, que le vi la última vez. Recibe diariamente mucha gente, y es muy poca la fatiga que siente después de hablar mucho. = Dignese V. M. admitir el homenaje de gratitud, respeto y alta consideración, con que queda siempre = De Vuesta Majestad = humilde, devotísimo y fiel servidor, = Ciriaco M.^a Cardenal Sancha Hervás, Arzobispo de Toledo. = Roma, 22 de Mayo de 1900.» María Cristina le responde el 30 sobre esta minuta: «Emmo. Señor Cardenal = Don Ciriaco M.^a Sancha, Arzobispo de Toledo = Palacio de Madrid, 30 de Mayo de 1900. = Muy Reverendo Señor Cardenal. = Con el agrado con que siempre recibo las suyas, he leído su carta de 22 del actual, produciéndome gran satisfacción el interés con que procura V. desempeñar el delicado encargo que he confiado a su clara inteligencia y celo y adhesión nunca desmentidos, así como la favorable disposición en que ha encontrado a Su Santidad, que tantas pruebas me tiene dadas de su paternal afecto. = No dudo, pues, que dada la importancia que entraña este asunto y aprovechando circunstancias tan propicias, conseguirá V. que nuestro Santísimo Padre adopte aquellas medidas que en su alta sabiduría considere más convenientes al fin que se persigue. = Puede V. asegurar a Su Santidad de la satisfacción que me producen las noticias que V. me comunica respecto a su preciosa salud, y reiterarle los sentimientos de mi respetuosa adhesión y gratitud. = Me es muy grato, Señor Cardenal, al propio tiempo que muy expresivas gracias repetir a V. el aprecio y la estimación que le profeso, quedando suya muy afecta = S. M.» (APR/SpM, c.^a 6, núm. 27).

⁵ Cfr. *El Imparcial*, 17 y 27-IX-1899.

⁶ Apud *El Correo Español*, 18-VIII-1899.

⁷ Vid. *La Cruz* (1899), II. 114-117.

⁸ Vid. Bergamin: *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, sesión del 23-XI-1899, y Comyn: *ibidem*, 30-XI-1899.

⁹ Cfr. *El Imparcial*, 19-IV-1900.

¹⁰ Cfr. María Dolores Gómez Molleda: *Los reformadores de la España contemporánea*. Madrid, C.S.I.C., 1966, pág. 446.

¹¹ El 25-VII-1899, Vincenti había presentado a las Cortes (vid. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, correspondiente) «una exposición de la Asociación de Enseñanza privada, que forman los colegios particulares que se dedican a la preparación de la segunda enseñanza, ... [para] que se derogue el Real decreto sobre segunda enseñanza del Sr. Pidal, y que las Corporaciones religiosas extranjeras, a tenor de lo que prescribe la Constitución y la ley de Instrucción pública, cesen en el ejercicio de la enseñanza, y en cuanto a las españolas, que se sometan a la ley común, cesando el privilegio y el régimen de favor en que hoy se mueven, con gran daño de los colegios privados, que educan y a la vez contribuyen a las cargas del Tesoro».

¹² Cfr. *El Liberal*, 4-VIII-1900. No hallamos referencia a esta legislación Yvonne Turin: *La educación y la escuela en España de 1874 a 1902. Liberalismo y tradición*. Madrid, Aguilar, 1967, 380 pp.

¹³ Cfr. P. V.: *Existencia legal de las Corporaciones religiosas en España*. Madrid, Imprenta de San Francisco de Sales, 1901, pág. 45 (BDN).

¹⁴ Vid. Esteban Vallina y Subirina: *El certamen universal de 1900 y reforma de la enseñanza del Excmo. Sr. Marqués de Pidal con otras impresiones anotadas en mi cartera de viaje*. Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos del S. grado Corazón de Jesús, 1900, 336 pp. (BNM).

¹⁵ Cfr. *El Liberal*, 21-X-1900, y Francisco Pi y Margall y Francisco Pi y Suñer: *Historia de España en el siglo XIX*. Barcelona, Miguel Seguí, editor, 1900 tomo VII (Segunda parte), págs. 1890 ss.

¹⁶ Cfr. Luis Antón de Olmet y Arturo García Carraffa: *Maura*. Madrid Imprenta de «Alrededor del Mundo», 1913, págs. 222 s.

¹⁷ Cfr. Azcárraga: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 19-XII-1900.

¹⁸ Vid. *El Imparcial*, 10-IV-1900.

¹⁹ Cfr. *El Liberal*, 2, 9 y 29-VII-1900.

²⁰ *Op. cit.*, VII (2.ª), 1899.

²¹ Cfr. *El Liberal*, 29-X a 2-XI-1900.

²² Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 20 y 23-XI-1900.

²³ *Ibidem*, 24-XI-1900. Parece traducir el término francés «l'invasion clérical», consagrado ya en la campaña anticlerical de 1880 (vid. Jacques Gadille: *La pensée et l'action politiques des évêques français au début de la III République, 1870/1883*, t. II, París, Hachette, 1967, pág. 262).

²⁴ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 29-XI-1900.

²⁵ Cfr. *ibidem*, 14-XII-1900.

²⁶ Vid. Morote: *ibidem*, 15-XII-1905.

²⁷ Vid. en ese sentido Gómez Acebo: *ibidem*, 8-XI-1902; Canalejas: *ibidem*, 10-V-1902; Marqués de Pidal: *ibidem*, Senado, 11-VII-1901; cardenal Sancha: *El Kulturkampf internacional*, 2.ª ed. corr., Madrid, Librería religiosa de D. Enrique Hernández, 1901, pág. 35 (BSP).

²⁸ Cfr. Marqués de Pidal: *Diario de las Sesiones... Senado*, 11-VII-1901.

²⁹ Debe ser el discurso reseñado por Pierre Sorlin: *Waldeck-Rousseau*. París, Librairie Armand Colin, 1966, pág. 219 s.

³⁰ Cfr. Juan Roger: *Ideas políticas de los católicos franceses*. Madrid, C.S.I.C., 1951, pág. 341, y Jacques Kayser: *Les grandes batailles du radicalisme des origines aux portes du pouvoir 1820-1901*. París, Marcel Rivière & Cie., 1962, página 297.

³¹ Cfr. Angel Salcedo Ruiz: *Historia de España (Resumen crítico)*. Madrid, Ed. Calleja, 1914, pág. 697; Duque de Maura y Melchor Fernández Almagro: *Por qué cayó Alfonso XIII. Evolución y disolución de los partidos históricos durante su reinado*, 2.ª ed., Madrid, Ed. Ambos Mundos, 1948, pág. 22 s.

³² José Francos Rodríguez: *La vida de Canalejas*. Madrid, Tip. de la «Rev. de Arch., Bib y Museos», 1918, pág. 251.

³³ *El Universo*, 15-I-1901, cit. Gómez Molleda: *op. cit.*, 430.

³⁴ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 18-XII-1900.

³⁵ Al menos desde el decreto napoleónico de 1804 (vid. A. Latreille, J.-R. Palanque, E. Delaruelle, R. Rémond: *Histoire du Catholicisme en France. La période contemporaine*. París, Editions Spes, 1962, págs. 198 ss., 227 ss.).

³⁶ *El Liberal*, 15-XII-1900.

³⁷ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 18 y 19-XII-1900.

³⁸ Vid. *El Liberal*, 24 a 31-XII-1900. El ministro de Estado llegó a redactar una nota de protesta al nuncio, fechada en 26-XII-1900, que no llegó a enviar, donde insistía en la significación de Fernández Montaña como miembro del Tribunal de la Rota, que hacía más inoportuna su actitud (apud AMAE/SPS, leg. 2.677, expediente «Fernández Montaña. Publicación de un artículo en *El Siglo Futuro*. Diciembre 1900»). Vid. José Fernández Montaña: *El Syllabus de Pío IX, con la explicación debida y la defensa científica...*, Madrid, 1905.

³⁹ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 2-I-1901. Transcribimos algunos

le esos textos oficiales paradójicamente antiliberales en *España, 1875-1900...*

⁴⁰ Cfr. V. Minteguiaga: *La libertad de la cátedra y el Ministerio de Instrucción pública*, «Razón y Fe», enero 1902, pág. 46.

⁴¹ En realidad, pareció interpretarse así toda la política de García Alix. El republicano Azcárate escribe a Francisco Giner el 16-IX-1900: «Me cargó leer el otro día en *El Liberal* que García Alix había hecho lo que no se atrevieron a hacer los otros, ni Pidal. Se refería, sin duda, a aquello de que la enseñanza, en el Instituto, ha de ser *espiritualista*; idea feliz de la Sección correspondiente del Consejo [de Instrucción pública], y supongo que con el voto de Méndez Bejarano y de Becerro de Bengoa, al señalar el sentido de las asignaturas, olvidándose de que en el R. D. correspondiente se deja a salvo la libertad del profesor en cuanto al método, al plan y al sentido doctrinal» (apud *Gumersindo de Azcárate. Estudio biográfico documental. Semblanza, epistolario, escritos*, por Pablo de Azcárate, Madrid, Ed. Tecnos, 1969, pág. 210).

⁴² Vid. sobre ello Irigaray: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 8-VII-1901.

⁴³ Cfr. *El Liberal*, 16, 22, 28 y 30-I-1901.

⁴⁴ Cfr. *ibidem*, 31-I-1901, ss. Vid. la obra de Galdós en *Obras completas*, Madrid, Aguilar, 1961, tomo VI, págs. 848-897.

⁴⁵ Vid. Joaquín Casaldueiro: *Vida y obra de Galdós (1843-1920)*, 2.ª ed. ampl., Madrid, Ed. Gredos, 1961, pág. 32, y Ricardo Gullón: *Galdós, novelista moderno*, Madrid, Taurus, 1960, pág. 32.

⁴⁶ Cit. Gómez Molleda: *op. cit.*, 432. *El Liberal*, 31-I-1901, afirmaríase en efecto, que, en la primera representación, se oyó un grito «¡mueran los jesuitas!» desde las galerías y, más tarde, otro «¡abajo los reaccionarios!»

⁴⁷ Cfr. Marcos Guimerá Peraza: *Maura y Galdós*, Las Palmas, Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1967, pág. 80 ss.

⁴⁸ Vid. *El Liberal*, 8-II-1901. La sentencia sería favorable a la madre. En 1905, no obstante, cumplida la mayoría de edad —que era la piedra de toque del conflicto—, «la señorita Ubao» (como la conoció la prensa coetánea) entró en el noviciado de las Esclavas de Jesús, en Azpeitia (cfr. *La Cruz* (1905), II, 474).

⁴⁹ Cfr. *El Liberal*, 8 a 14-II-1901.

⁵⁰ Vid. *La voz del episcopado. El drama Electra y las órdenes religiosas*, «Apostolado de la Prensa», CXIII, mayo 1901, pág. 28 ss., y *La Cruz* (1901), I, 293, 398-400, 295, 297, 377 s., que reproducen los escritos de los obispos citados.

⁵¹ *El Imparcial*, 15-II-1901.

⁵² *El Liberal*, 19-II-1901.

⁵³ Cfr. P. V.: *op. cit.*, 20 s

⁵⁴ Cfr. Salcedo Ruiz: *op. cit.*, 866.

⁵⁵ Instancias de dimisión de Azcárraga, 25-II-1901, APR/SpM, c.ª 9, núm. 16.

⁵⁶ Alteramos el orden —no el sentido— de los párrafos en el original: «Crisis de 25 Febrero 1901. = La presente crisis es un primer aspecto del magno y delicadísimo problema político creado por la necesidad de preparar el nuevo reinado durante los últimos meses de la Regencia. = Todo el mundo presiente la necesidad de una extraordinaria previsión de gobierno en este punto, por lo mismo que los años más peligrosos de la minoría real son aquellos en que la ficción constitucional hace mayor al Rey de diez y seis años. = De esto se desprende claramente lo que debe buscarse como finalidad primordial en las soluciones de esta delicadísima crisis. = Estos fines son: = 1.º Conjurar la formidable tempestad ... [aquí, lo transcrito arriba] 16 años del Rey. = El memorándum del Gabinete dimisionario era el preliminar y la ocasión mejor para iniciar esta gran obra. = Si Silvela hubiera visto claro el gran alcance de este documento y del acto colectivo sobre él realizado por el último Gabinete, el delicadísimo problema aparecería ya poco menos que resuelto de plano del modo más feliz. = Esa base proporcionaba en efecto a Silvela la mejor ocasión para librarse de la tempestad deshecha que se cernía sobre él y en la cual habría naufragado irremisiblemente quizá aún antes de que se abriera el Parlamento. Sin el giro dado a los sucesos por el *Memorandum*, Silvela, por

consideraciones inexcusables de dignidad personal y de honra política, no haber tenido más remedio que precipitarse a ojos cerrados en el abismo abierto ante él. El *Memorandum* le ha librado de ese peligro de segura perdición en un gran catástrofe personal y colectiva. Pero además si se hubiera apoderado de la sagacidad política de esa extraordinaria ocasión que se le brindaba, tomando las circunstancias creadas por ese documento como punto de partida para iniciar, plantear, negociar y dirigir por sí mismo la obra de concordia, situándolo en la presidencia del Congreso y llevando a sus competidores a un Gabinete presidido por Azcárraga como segundo suyo, semejante resolución suya convertiría de plano en señor de la situación rehabilitándose plenamente y con un golpe de todos los enormes quebrantos que han dado a su jefatura ... [con el nuevo arriba] estancamiento y desconcierto de las funciones de gobierno. = Pero en lugar de apoderarse de esta gran ocasión con el alto sentido y sagacidad de estadista, Silvela ofuscándose con pequeñez de pasiones, ha cometido el gravísimo desacierto de considerar el *Memorandum* y las consultas cual conjuración contra él, y por este inconcebible error ha hecho que lo que estaba destinado a rehabilitarlo colocándolo súbitamente como supremo director de la transformación más trascendental de nuestros elementos parlamentarios, venga, a la inversa, a liquidarse en el mayor quebranto de su autoridad de jefe, pues en política, cosas, personas y situaciones no valen por lo que son en sí, sino por lo que de ellas sienten las gentes. = A virtud de esta actitud de Silvela la presente crisis ha entrado respecto de él en giro que es ya muy difícil rectificar, pero al menos en cuanto a lo primordial, es decir, a lo que más importa a la paz pública y a las instituciones, según antes queda apuntado el suceso hasta ahora va desenvolviéndose con completo éxito, pues desde ahora se advierte claramente que la Corona ha desviado de sí la temerosa tormenta de opinión que ha amenazado las pasiones más peligrosas convirtiendo en amigos a los enemigos, y que los elementos por los cuales el Parlamento anunciaba convertirse en cráter, ponen toda su confianza en la imparcialidad y sabiduría de la Corona que supo quitarles todo pretexto para suponerla bloqueada o sustraída por confabulación de los partidos históricos. = En las peripecias que va teniendo la crisis se dibujan también claramente los estados de ánimo y la obsesión de pasiones de unos y otros. = El suceso evidencia ya el grandísimo acierto de la Corona al llamar en primer término, según indicaba el *Memorandum*, al jefe de la Unión Conservadora para encomendarle el planteamiento y la dirección de esta gran obra de concordia. El primer paso dado por él pone de manifiesto que por no haber tenido el sentido de la realidad creado en cosas y personas al plantear su programa de conducta se inutilizó para concordia con el Duque de Tetuán y declarándose éste inconciliable con él sobre la base que le proponía, debió haber evitado al menos con el mayor miramiento que por ningún concepto viniera a resultar que él figurara como obstáculo para esta concordia que otros alcanzaron. Mas sobre esto también se ha producido con la ofuscación de presentarse como el único obstáculo irreductible con que ha tropezado el General Azcárraga al hacer la concentración conservadora. = En este estado de las cosas el problema de conducta ofrece delicadísimos aspectos. La solución liberal sólo sería un deslumbramiento efímero, que si por de pronto distrajera y sosegara algo a los ánimos por el entretenimiento de expectativa pública que producían estos cambios en el ánimo del vulgo aficionado siempre a que se le renueven los gobernantes, al cabo de muy corto tiempo se encontrará con las dificultades actuales agravadas quizás aun dando por supuesto que pudiera felizmente legalizar la situación económica dentro del plazo constitucional después de la convocatoria de los comicios. = Se ha logrado vencer al fin la resistencia de Azcárraga para que en último caso y si la Corona considerase que así era preciso, hiciera él por sí la concentración, aun sin el concurso de Silvela. Mas para tal intento son de mucha cuenta las condiciones personales del General poco dispuesto por sus propias prendas de carácter a estos papeles de gran firmeza de resolución. Por esto mismo en el evento de que sobre esta base se buscara el desenlace de la crisis, parece de buena prudencia ir agotando antes todos los trámites pre-

vios que vayan poniendo de manifiesto que el General es el único que sirve de núcleo de concordia y que sin él no hay concentración posible. A este efecto quizá conviniera recurrir primero a Villaverde a título de Presidente del Congreso para intentar la concentración como solución parlamentaria. Con la investidura de tan principal papel, a juzgar por impresiones recibidas ayer no sería extraño que aun resistiéndolo Silvela, se empeñara en esa dirección. Mas es seguro que fracasaría ante irreductibles resistencias de Tetuán y Romero. Con lo cual quedaría evidenciado lo antes apuntado y que todos quieren la concordia mientras ésta les coloque en personal preeminencia y que únicamente Azcárraga la busca independientemente de sus conveniencias personales. = Queda por último la solución de la vuelta del mismo al Gabinete dimisionario presentado ante las Cortes con la posición de haber dimitido para que se hiciera la concordia, y volviendo a su puesto porque unos y otros crearon extraparlamentariamente dificultades a tal solución, por lo cual consideraba de su deber llevar esta misma cuestión ante el propio Parlamento. = Las ventajas de esta última solución serían —1.º Que por el mismo ambiente de transacción y concordia establecido con las agrupaciones disidentes a virtud de las negociaciones de la presente crisis, no es probable crearan ellas dificultades de obstrucción al presupuesto que presentara este Gabinete.—2.º Que con esta solución, Silvela, a su vez, se sentiría menos inconciliable que con cualquier otra, y en los tratos íntimos de la vida parlamentaria habría manera de preparar las vías y medios para que los elementos conservadores en las próximas elecciones no aparezcan descompuestos en plena anarquía sin autoridad acatada. = Domingo —3— Marzo —1901» (*ibidem*, c.^a 9, núm. 15). El *memorandum* a que se refiere es la instancia citada en la nota anterior, destinado a la publicidad y sintetizado por Maura y Fernández Almagro: *op. cit.*, 35. Las consultas que también habrían molestado a Silvela aparecen enumeradas en una relación del mismo lugar de APR: «Crisis de 25 — Febrero 1901. = Tejada de Valdosera 10 1/2 del 27/2 = Villaverde 11 del 27/2 = Sagasta 10 1/2 del 28/2 = Silvela 5 del 27/2 = Montero Ríos ausente = Vega de Armijo 2 del 28/2 = Tetuán 5 del 28/2 = Gamazo 6 del 28/2 = Romero Robledo 11 del 1 de Marzo = López Domínguez 2 del 1 de Marzo.»

⁵⁷ Cfr. *loc. cit.*, nota 55 supra.

⁵⁸ Vid Maura y Fernández Almagro: *op. cit.*, 35.

⁵⁹ Cit. Francos Rodríguez: *op. cit.*, 229.

⁶⁰ Apud Fernando Soldevilla: *El año político 1899*, Madrid, Imprenta y fotogrado de Enrique Rojas, 1900, pág. 177 (BDN).

⁶¹ *Op. cit.*, 697.

⁶² Conde de Romanones: *Sagasta, o el Político*, Madrid, Espasa-Calpe, 1930, pág. 206.

⁶³ Apud *El Liberal*, 19-II-1901.

⁶⁴ Los tomamos de nuestro estudio *España 1875-1900...*, citado ya.

⁶⁵ Cfr. *El Liberal*, 19-II-1901.

⁶⁶ Canalejas: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 5-XI-1902.

⁶⁷ Como ejemplo, vid, el prólogo de Canalejas a Juan Nido y Segalerva: *Problemas trascendentales. Estudio sobre las regalías de la Corona de España*, Madrid, Librería de los Sucesores de Hernando, 1910, 232 pp. (BDN). Le atribuye además cierta tendencia socializadora, a lo Millerand, Melchor Fernández Almagro: *Historia política de la España contemporánea. 3. 1897-1902*, Madrid, Alianza Editorial, 1968, pág. 292.

⁶⁸ Vid. en ese sentido *El Imparcial*, 7-III-1901 ss.; Silvela: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 27-VI-1901; Isaba: *ibidem*, 18-VII-1901; Bergamín: *ibidem*, 18-X-1901; Domínguez Pascual: *ibidem*, 24-X-1901.

⁶⁹ Cfr., respectivamente, *El Imparcial*, 8 y 21-III-1901.

⁷⁰ Cfr. *ibidem*, 29-III-1901; Minteguiga: *op. cit.*, 59; *La Cruz* (1901), I, 298-300, 384-387, 506-509, que transcribe algunas de ellas.

⁷¹ Apud *Diario de las Sesiones... Senado*, 12-VII-1901.

⁷² Cfr. Marqués de Pidal: *ibidem*.

⁷³ Cfr. *El Imparcial*, 28-III-1901.

2

- ⁷⁴ Cit. R Ruiz Amado *La inspeccion de la enseñanza privada*, «Razón y Fe», octubre 1902, pag 146 Cfr *El Imparcial*, 14-IV-1901
- ⁷⁵ Irigaray *Diario de las Sesiones Congreso*, 16-VII-1901
- ⁷⁶ En Gandesa y Pamplona al menos, segun Canalejas *ibidem*, 3-VII-1901.
- ⁷⁷ Vid Miguel M Cuadrado *Elecciones y partidos politicos de España (1868-1931)*, Madrid, Taurus, 1969, vol 2, pag 673, cuyas cifras, no obstante, vuelven a ser demasiado distintas de otras fuentes de la epoca (vid Pi y Margall : *op cit*, VII (2^a), 1916)
- ⁷⁸ Artículos recogidos en P V *op cit*, 61 ss, 70 ss En el mismo sentido de *El Universo*, vid J Garcia Ocaña *Las Ordenes religiosas y la intervencion del Estado Continuacion*, «Razon y Fe», mayo 1902, pag 73 s
- ⁷⁹ Vid por ejemplo *Boletin Oficial Eclesiastico del Obispado de Pamplona*, 30-III-1901, y *La voz del episcopado*, 12 ss, 50 ss
- ⁸⁰ Apud Federico Suarez *Genesis del Concordato de 1851* «Ius canonicum», III (1963), 243, 245
- ⁸¹ Vid. Latreille *op cit*, 227 ss, Adrien Dansette *Histoire religieuse de la France contemporaine L'Eglise catholique dans la mêlée politique et sociale*, ed rev et corr, Lagny-sur Marne Flammarion, 1965, pag 183 ss, Guy Chapman *The Third Republic of France The first phase 1871-1894*, London MacMillan & Co Ltd, 1962, pag 152
- ⁸² Vid Alfonso Gonzalez *Diario de las Sesiones Congreso*, 8-VII-1901; Barrio y Mier *ibidem*, 16-VII-1901, Melquiades Alvarez *ibidem*, 5-XI-1901.
- ⁸³ Cfr. Alfonso Gonzalez *ibidem*, 8-VII-1901
- ⁸⁴ Vid Luis Anton de Olmet y Arturo Garcia Carraffa: *Moret*, Madrid, Imprenta de Juan Pueyo, 1913, pag 34
- ⁸⁵ Cfr. Barrio y Mier *Diario de las Sesiones Congreso*, 16-VII-1901.
- ⁸⁶ Cit Suarez *op cit*, 179 ss Cfr *ibidem*, 112 ss, 195, y Juan Perez Alhama *La Iglesia y el Estado español Estudio historico juridico a traves del Concordato de 1851*, Madrid, 1967, passim, E de La Puente Garcia *Relaciones diplomaticas entre España y la Santa Sede, durante el reinado de Isabel II (1843-1851)*, Madrid, Imprenta Enar, 1970, 48 pag
- ⁸⁷ Cfr P V *op cit*, 13
- ⁸⁸ Cit Maura *Diario de las Sesiones Congreso*, 16-VII-1901.
- ⁸⁹ Apud Suarez *op cit*, en apendice
- ⁹⁰ En apendice, *Diario de las Sesiones Congreso*, 25-VI-1887
- ⁹¹ *Ibidem* Subrayaron su inadecuacion Moret *ibidem*, 10-VII-1901, Barrio y Mier *ibidem*, 16-VII-1901, Romero Robledo *ibidem*, 18-VII-1901, Dato, en *El Imparcial*, 21-X-1901
- ⁹² Cfr *Diario de las Sesiones Congreso*, 25-II a 2-III-1887.
- ⁹³ Cit Fernandez Almagro *Historia politica* (2) 50
- ⁹⁴ Vid Fabie *Diario de las Sesiones Congreso*, 18-VI-1880, y Jacques Chastenet *Histoire de la Troisieme Republique II La Republique des republicains, 1879-1893*, Paris, Librairie Hachette, 1964, págs 62 ss.
- ⁹⁵ *Diario de las Sesiones Congreso*, 25-VI-1887.
- ⁹⁶ Cfr. Canalejas *ibidem*, 11-VII-1903
- ⁹⁷ Vid Maura *ibidem*, 15-VII-1901
- ⁹⁸ Cfr. Garcia Alix *ibidem*, 16-VII-1903
- ⁹⁹ Cfr *ibidem*, 14-IV-1902
- ¹⁰⁰ Canalejas *ibidem*, 11-VII-1903
- ¹⁰¹ Apud Suarez *op cit*
- ¹⁰² Vid Fernandez Villaverde *Diario de las Sesiones Congreso*, 30-X-1901, y Romero Robledo *ibidem*, 5-XI-1901
- ¹⁰³ Vid Victor Pradera *ibidem*, 5-XI-1901, y Pi y Margall *ibidem*, 15-VII-1901, respectivamente
- ¹⁰⁴ Vid *El Imparcial*, 20-III a 21-V-1901
- ¹⁰⁵ Vid Blasco Ibañez e Irigaray *Diario de las Sesiones Congreso*, 3-VII-1901
- ¹⁰⁶ *El Imparcial*, 18-V-1901
- ¹⁰⁷ Cfr *ibidem*, 24-VI-1901 *Diario de las Sesiones Congreso*, 27-VI, 3-4,

8, 17 a 19-VII-1901. Vid. dos testimonios de los conflictos de Zaragoza en Fernando Castán Palomar: *Cavia, el polígrafo castizo*, Pamplona, Ed. Gómez, 1956, 272 págs., sobre la reacción del periodista, y José Andrés Gallego: *Regeneracionismo y política confesional en España, 1889-1899*, «Archivo Hispalense», número 166 (1971), 148 s., sobre la del cardenal Cascajares, que murió a raíz del ataque anticlerical al Pilar, por apresurar su entrada en Zaragoza, preconizado arzobispo de esta sede tras la muerte de monseñor Vicente Alda.

¹⁰⁸ Cit. Fernández Almagro: *Historia política...* (3) 280.

¹⁰⁹ Vid. *El Imparcial*, 11-V-1901.

¹¹⁰ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 11-VI-1901.

¹¹¹ *Heraldo de Madrid*, 3-VII-1901.

¹¹² *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 6-VII-1901. Cfr. *ibidem*, 27-VI y 3-VII-1901.

¹¹³ Cfr. *ibidem*, 6 y 8-VII-1901.

¹¹⁴ Cfr. *ibidem*, 8-VII-1901.

¹¹⁵ *Ibidem*.

¹¹⁶ Vid. las líneas generales de este movimiento, en A. Cucó Giner: *Sobre el radicalismo valenciano*, «Hispania», XXIX (1969), 117-129.

¹¹⁷ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 10-VII-1901.

¹¹⁸ Cfr. *ibidem*.

¹¹⁹ *Ibidem*. Senado. 8-VII-1901.

¹²⁰ Vid. Sancha: *op. cit.*, 137, y marqués de Lema: *Mis recuerdos (1880-1901)*, Madrid, C. I. A. P., 1930, pág. 258.

¹²¹ Cfr. *Diario de las Sesiones... Senado*, 11 y 12-VII-1901.

¹²² *Ibidem*, Congreso..., 8 a 12-VII-1901.

¹²³ *Ibidem*, 13 a 18-VII-1901.

¹²⁴ Vid. *El Imparcial*, marzo a junio 1901, y Sancha: *op. cit.*, 173.

¹²⁵ Cfr. Roger: *op. cit.*, 341, y José María Javierre: *A cincuenta años de la «Ley del Candado»*. La España caída de finales de siglo, «Ecclesia» (1960), 531-533.

¹²⁶ Cfr. Alfonso González: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 25-X-1901.

¹²⁷ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 28-VII, 25 y 26-VIII-1901.

¹²⁸ *Ibidem*, 23-IX-1901.

¹²⁹ *Ibidem*, 28-IX-1901.

¹³⁰ Según esto, en dos meses y medio tendrían que haber pasado unos siete mil. Lo que no coincide con las estadísticas publicadas antes ni con la afirmación de González (vid. nota 126 supra). Aunque es cierto que la contabilidad de la inmigración fue insegura por su naturaleza (vid. en ese sentido Lombardero: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 29-X-1901), la cifra de *Heraldo* es inverosímil.

¹³¹ *Heraldo de Madrid*, 17-VIII-1901.

¹³² Cfr. *ibidem*, 31-VIII-1901.

¹³³ Vid. *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 16-IX-1901.

¹³⁴ A pesar de que lo afirma Moret (*Diario de las Sesiones... Congreso...*, 10-XI-1906), no hay huellas de negociación en estos meses en AMAE.

¹³⁵ Cfr. *El Liberal*, 23-II-1901.

¹³⁶ *Heraldo de Madrid*, 27-VIII-1901. Cfr. *ibidem*, 15, 26 y 30-IX, 2-X-1901.

¹³⁷ *Ibidem*, 13-IX-1901.

¹³⁸ Vid. Romero Robledo: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 25-X-1901.

¹³⁹ Vid. *Heraldo de Madrid*, julio y agosto 1901.

¹⁴⁰ Cfr. *ibidem*, 22-VII-1901. Hay error sin duda en la fecha de 22 de junio que, para el nombramiento de González, dan Pi y Margall...: *op. cit.*, VII (2.^a), 1917, y Fernández Almagro: *Historia política...* (3) 273. Vid. Moret: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 27-VI-1901; González: *Ibidem*, 8-VII-1901; Villanueva: *ibidem*, 15-VII-1901, donde constan sus cargos en esas fechas.

¹⁴¹ Apud *El Imparcial*, 23-III-1901.

¹⁴² Cfr. conde de Romanones: *Notas de una vida*, en «Obras completas», Madrid, Ed. Plus-Ultra, s. d., t. III.

¹⁴³ Cfr. telegrama 15-IX-1901 del ministro de la Gobernación al de Estado, comunicándoselo, apud. AMAE/SPS, leg. 2.677, expediente «Real decreto del Ministerio de la Gobernación de 19 de septiembre de 1901...»

¹⁴⁴ *El Liberal*, 26-IX-1901.

¹⁴⁵ Apud *Heraldo de Madrid*, 20-IX-1901.

¹⁴⁶ Vid. *ibidem*, 20 y 21-IX-1901, y J. García Ocaña: *Un conflicto. El Real Decreto de 19 de septiembre y las Órdenes religiosas*, «Razón y Fe», diciembre 1901, 437-454. Hay una acusación interesante sobre las manifestaciones lorrrepublicanas de Canalejas en esta época en la copia de la carta de Antonio Ledesma a Moret, de 18-IX-1901, remitida probablemente por éste a Canalejas, que guarda APR/SpM, c.^a 15, núm. 14.

¹⁴⁷ *Heraldo de Madrid*, 24-IX-1901.

¹⁴⁸ Cfr. Canalejas: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 11-VII-1903.

¹⁴⁹ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 24, 26, 27 y 30-IX, 4-X-1901.

¹⁵⁰ Telegrama del subsecretario al ministro de Estado, 22-IX-1901, AMAE/SPS, leg. 2.677, exp. «Real decreto...», donde narra aquél su entrevista con el encargado de negocios de la nunciatura. «Como carecía yo —añade el subsecretario— de instrucciones de V. E. me limité a explicar confidencialmente lo ocurrido quitándole importancia y explicándole, por considerar de buena fe y con pleno convencimiento el Gobierno que el Concordato sólo se refiere a las Congregaciones expresamente citadas en el mismo, haciéndole presente que en dicho Real Decreto se concede un plazo de 6 meses y se habla de presentar un Proyecto de ley todo lo que permitirá la debida inteligencia entre las dos Potestades.»

¹⁵¹ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 11-VII-1903.

¹⁵² Vid. nota 150 supra.

¹⁵³ Cit. Luis Morote: *Los frailes en España*, Madrid, Imprenta de Fortanet, 1904, pág. 68 (BNM), y Albó: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 10-XII-1901. Es fiel traducción de la minuta original, en francés, apud AMAE/SPS, leg. 2.677, exp. «Real decreto...»

¹⁵⁴ «Ruego V. E. restablezca los hechos y significación de ellos en su verdadero punto. Preocupa al Gobierno de S. M. la entrada de religiosos de ambos sexos que procedentes de Francia buscan residencia en España sin solicitar permiso ...; causando por ello un recrudecimiento de efervescencia contra órdenes religiosas: entendió deber suyo adoptar disposiciones encaminadas a contener ingreso de aquellos que se continúan [sic] penetrando incógnitamente. Tuvo el Nuncio conocimiento por mí de la preocupación del Gobierno de S. M. y si no lo tuvo del proyecto del R. D. fue porque lo acordó el Consejo de Ministros después de su salida de España vista la ineficacia de cualquier otra medida ... No significa R. D. propósitos contrarios al Concordato ni lo interpreta viciosamente al disponer se acomoden a lo prevenido en leyes de asociaciones aquellas que deban estar reguladas por sus preceptos: establece término seis meses ... y durante dicho plazo se presentará proyecto de ley a las Cortes todo lo cual facilitará inteligencia entre S. Sede y Gobierno de S. M. Sirvase V. E. manifestar lo expuesto al Cardenal Secret[ario] Estado dándole toda clase de seguridades acerca intenciones Gobierno S. M.» (telegrama del ministro de Estado al embajador ante la Santa Sede, 22-IX-1901, AMAE/SPS, leg. 2.677, exp. «Real decreto...»)

¹⁵⁵ «Comuniqué al Cardenal Secretario de Estado sus explicaciones, rogándole aplazase todo hasta mi regreso a Roma ... Contestóme accediendo, sin hacer notar diferencia proceder. = Llegado a Roma, conferencia dos veces sin poder desvanecer toda la mala impresión producida en el ánimo del Cardenal Secret[ario] Estado y de Su Santidad lo ocurrido esa, considerado más aún que como una descortesía como un síntoma revelador de un sistema de procedimiento. El sentido dado al Real decreto como una violación abierta del Concordato y habiendo todo ello influido sobre el ánimo atribulado de Su Santidad, los encontré como en vísperas de una franca ruptura de hostilidades. = El mismo Nuncio, tan vejado se hallaba, que no acertaba a darse cuenta de lo ocurrido. Logré, después largos esfuerzos, convencerle de la buena

voluntad del Gobierno de S. M. y de que sus ideas y propósitos no podían ser as que presidían sin lograr hacer extensiva esta convicción a la forma exterior del acto ... = Secretario de Estado, después de consultar con Su Santidad, me dijo que la Santa Sede no podía menos de llamar la atención del Gobierno en una nota, que procuraría redactar en la forma más mesurada posible.» Transcribe a continuación un extracto de esa nota y añade: «La importancia dada aquí a las Ordenes religiosas ha crecido grandemente por el plan atribuido a enemigos de la Iglesia de poner frente a frente ambas jurisdicciones como medio seguro de acabar con la autoridad espiritual de la Santa Sede» (telegrama del embajador al ministro de Estado, *ibidem*. Corregimos la versión, reformada estilísticamente, de Morote: *op. cit.*, 69 s.).

¹⁵⁶ AMAE/SPS, *loc. cit.* nota 154 supra.

¹⁵⁷ Joaquín Buitrago y Hernández: *Las Ordenes Religiosas y los religiosos. Estudio jurídico sobre su existencia legal y capacidad civil en España*, Madrid, Tipografía de don Adolfo R. de Castroviejo, 1901, 489 págs. (BNM).

¹⁵⁸ Vid. despacho núm. 77, 4-X-1901, del subsecretario al ministro de Estado, AMAE/SPS, leg. 2.678, expediente «1909-1910. Proyecto de reforma del Concordato y Ley de Asociaciones», donde aquel comunica que acaba de hablar con el ministro de la Gobernación, que opina ha de pedirse reserva a la Santa Sede sobre su nota para evitar protestas en la opinión pública:

¹⁵⁹ *Ibidem*, leg. 2.677, exp. «Real decreto...»

¹⁶⁰ *Ibidem*.

¹⁶¹ Cfr. Moret: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 7-VII-1903.

¹⁶² Cfr. González: *Ibidem*, 29-X y 19-XI-1901.

¹⁶³ *Heraldo de Madrid*, 15-X-1901. Cfr. *ibidem*, 26 y 27-IX, 4, 11, 15 y 28-X-1901.

¹⁶⁴ *Ibidem*, 28-X-1901.

¹⁶⁵ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 18-X-1901 s.

¹⁶⁶ Vid. varios escritos de diversas autoridades —entre ellas los arzobispos de Sevilla y Granada— contra las ofensas ante el Pilar de las algaradas anticlericales de julio en Zaragoza (apud *La Cruz* (1901), II, 190-284); la pastoral colectiva de los prelados de la provincia eclesiástica de Zaragoza contra la prensa anticatólica (*ibidem*, 302-308), la del obispo de Santander contra las reformas de Instrucción pública (*ibidem*, 309), las exposiciones a las Cortes de los prelados de la provincia eclesiástica de Santiago, los de la de Valladolid y los de la de Granada, las tres contra la política anticlerical del Gobierno, con fecha 21-X, 4-XI y 6-X, respectivamente (*ibidem*, 491-512).

¹⁶⁷ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 10, 23-X a 7-XI-1901.

¹⁶⁸ Cfr. *Diario de las Sesiones... Senado*, 7 y 8-XI-1901.

¹⁶⁹ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 26-XI-1901, que añade, sin embargo, al arzobispo de Sevilla, al arzobispo titular de Bostra y al obispo de Salamanca.

¹⁷⁰ Apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 17-XII-1901

¹⁷¹ *Ibidem*.

¹⁷² *Heraldo de Madrid*, 28-XI-1901. Cfr. *ibidem*, 26-XI-1901.

¹⁷³ Vid. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 27-XI-1901.

¹⁷⁴ *Heraldo de Madrid*, 28-XI-1901.

¹⁷⁵ Apud. Fernando Soldevilla: *El año político 1902*, Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas, 1903, pág. 9 (BDN).

¹⁷⁶ Cfr. Manuel Ciges Aparicio: *España bajo la dinastía de los Borbones*, Madrid, M. Aguilar, editor, 1932, pág. 392. A juzgar por la correspondencia conocida de León XIII no es verosímil que utilizase esa amenaza. Parece más probable que recordara a la reina —si hubo tal carta— sus esfuerzos por atraer a los carlistas a la legalidad liberal. En todo caso, no la hallamos ni en APR ni en AMAE. Leemos en alguna parte que esa carta estuvo entre los papeles de Moret, que no hemos localizado.

¹⁷⁷ Cfr. *El Imparcial*, 9-I-1902.

¹⁷⁸ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 13-XI-1901.

¹⁷⁹ Cfr. *ibidem*, 15 a 29-XI-1901.

¹⁸⁰ *Op. cit.*, 868.

¹⁸¹ «... mi dimisión puede darla por presentada. [Aquí, lo transcrito arriba ... la suerte que las auguro y después de haber leído literalmente ampliación de su carta. Y no tomo sobre mí sólo el presentar la dimisión por temor a la interpretación que pueda darla [sic] parte de la opinión del país. En el caso que V. E. quiera darla por presentada, únicamente me permito advertir que tengo ya aceptado por Cuerpo Diplomático, Príncipes y Cardenales el comité oficial para el santo del Rey. Respecto al Vaticano, tengo por seguro que una vez presentadas (las bases) las pasarán a la Congregación de Cardenales antes de contestarlas. Creo le convenga saber que en el Vaticano entienden...» (telegrama de Pidal a Sagasta, 18-I-1902, AMAE/SPS, leg. 2.677, exp. «Real decreto...»)

¹⁸² Cfr. *Heraldo de Madrid*, 8-II-1902.

¹⁸³ Vid. telegrama de Almodóvar a Pidal, 19-I-1902, AMAE/SPS, leg. 2.677 exp. «Real decreto...»

¹⁸⁴ Cfr. telegrama de Pidal al ministro de Estado, 18-III-1902, AMAE/SCS leg. 1.741.

¹⁸⁵ Apud despacho núm. 2, 10-I-1902, del embajador Pidal al ministro de Estado, AMAE/SPS, leg. 2.677, exp. «Proyecto de reforma del Concordato». Hay una versión estilísticamente mejorada en Morote: *op. cit.*, 94 ss. La nota va fechada el 3, no el 10.

¹⁸⁶ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 14-II-1902.

¹⁸⁷ P. Villada: *La nueva ley de Asociaciones*, «Razón y Fe», febrero 1902, 166 s.

¹⁸⁸ Cit. *ibidem*, 167.

¹⁸⁹ AMAE/SPS, leg. 2.677.

¹⁹⁰ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 19-II-1902.

¹⁹¹ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 8-III-1902.

¹⁹² *El Imparcial*, 8-III-1902.

¹⁹³ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 11-III-1902.

¹⁹⁴ Cfr. *ibidem*, 5-IV-1902; *El Imparcial*, 14-III-1902; Máximo [Ángel Salcedo Ruiz]: *El Anticlericalismo y las Ordenes Religiosas en España (Historia.—Crítica.—Derecho)*, Madrid; Sáenz de Jubera hermanos, editores, 1908, pág. 403 (BNM) (obra que constituye una réplica a la de Luis Morote citada ya), y Diego Sevilla Andrés: *Antonio Maura. La revolución desde arriba*, Barcelona Ed. Aedos, 1954, pág. 143.

¹⁹⁵ Vid. *El Imparcial*, 16-III-1902.

¹⁹⁶ Cfr. *ibidem*, 17-III-1902, y Canalejas: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 5-XI-1902.

¹⁹⁷ Cit. Morote: *op. cit.*, 99 s.

¹⁹⁸ *El Liberal*, 19-III-1902.

¹⁹⁹ Cfr. *El Imparcial*, 18-III-1902.

²⁰⁰ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 5-IV-1902.

²⁰¹ *El Liberal*, 19-III-1902.

²⁰² «Mi querido Sr. Presidente: Acabo de celebrar una larga entrevista con el Marqués de Pidal. = Mi impresión total es la de que tal vez se lograra de Roma algo importante y, haciéndolo por telégrafo, quizá antes del día 19. Podría ser esto que Roma, distinguiendo entre Asociaciones laicas ... [aquí lo transcrito arriba] ley de asociaciones. = El Marqués de Pidal, que me ha dicho no ser ésta sino una opinión suya, está dispuesto a ayudar en lo posible a obtener de Roma estas declaraciones. Yo ni he aceptado ni he rechazado nada, expresando que no hablaba sino en nombre propio y sólo como amigo suyo: me he reservado únicamente avisarle acerca de esto y acerca del momento en que haya de hacer su pregunta en el Senado. = No doy estas noticias también al Duque de Almodóvar, porque calculo que V. le verá. A ver yo a Vds. no puedo ir porque estoy mal de veras desgraciadamente, aunque haya podido hacer el esfuerzo de la conferencia, que ha sido muy larga» (carta de González a Sagasta, 10-III-1902, AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «Proyecto de reforma...») Morote no habla de esta carta.

²⁰³ Cfr. *El Liberal*, 13-V-1902, y Morote: *op. cit.*, 74 s.

²⁰⁴ En tarjeta de Rinaldini al duque de Almodóvar, de 20-III-1902, aquél afirma haber recibido la visita de Moret, como nuevo ministro de la Gobernación. Después de esa entrevista, «*j'ai reçu une communication de l'Eme. Card. Rampolla relative à l'envoi des bases que Vous m'aviez remises lundi matin dernier avant la crise. Son Emin, cependant me manifeste seulement les bonnes dispositions du S. Père à ce sujet et me prévient qu'il m'a envoyé une lettre contenant explications. J'espere que le changement de Ministère ne modifiera pas ce que Vous m'aviez remis par écrit. J'attends la lettre du Cardinal pour Jeudi ou Vendredi matin*» (AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «Proyecto de reforma...»).

²⁰⁵ Carta «*confidentielle*» del nuncio al ministro de Estado, 21-III-1902, *ibidem*, leg. 2.677, exp. «Real decreto...» El ministro de Estado seguía siendo Almodóvar; no Moret, como erróneamente afirmamos en *Planteamiento de la cuestión religiosa en España, 1899-1902*, «*Ius cacticum*», XII (1972), 211.

²⁰⁶ Carta del ministro de Estado al nuncio, 24-III-1902, AMAE/SPS, leg. 2.677, exp. «Real decreto...» Por el mismo error y en el mismo lugar citado en la nota anterior, decimos equivocadamente que esta carta fue escrita por Moret en vez de Almodóvar.

²⁰⁷ Apud *El Liberal*, 21-III-1902. Vid. las reales órdenes citadas en AMAE, *loc. cit.*, nota anterior.

²⁰⁸ AMAE, *loc. cit.*, nota 206 supra.

²⁰⁹ *Ibidem*.

²¹⁰ Cfr. Sagasta: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 25-XI-1902.

²¹¹ Cfr. Daniel López: *El Partido Liberal. Conversaciones con D. José Canalejas*, primera serie, Madrid, Establecimiento Tipográfico Editorial, 1912, pág. 116 (BDN).

^{211b} Contra lo que parece desprenderse de Juan Marichal: *Unamuno y la recuperación liberal (1900-1914)*, en «*Spanish Thought and Letters in the Twentieth Century*», Nashville, Vanderbilt University Press, 1966, págs. 331 ss.

²¹² *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 5-IV-1902.

²¹³ Cfr. *ibidem*, 7-IV-1902.

²¹⁴ Apud Melchor Fernández Almagro: *Ultimo Gobierno de la Regencia de doña María Cristina*, «*Revista de Estudios Políticos*», núm. 97 (1958), 26. Traduce literalmente el original francés, apud AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «Proyecto de reforma...»

²¹⁵ *El Liberal*, 5-IV-1902.

²¹⁶ Carta, AMAE/SPS, leg. 2.677.

²¹⁷ Vid. *El Liberal*, 13-V-1902, que es el primer lugar que conocemos donde recibe el nombre de *modus vivendi*; Romero Robledo: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 15-VII-1903; P. Villada: *Sobre la real orden contra las Asociaciones religiosas: obra urgente*, «*Razón y Fe*», mayo-agosto 1910, 344; Juan Vázquez de Mella y Fanjul: *Obras completas*, vol. III, 2.^a ed., Madrid, Junta del homenaje a Mella, 1941, pág. 299; Ciges: *España...*, 393; Agustín Blánquez Fraile: *Historia de España*, 3.^a ed., Barcelona, Ed. Ramón Sopena, 1934, pág. 747, entre otros lugares.

²¹⁸ AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «Proyecto de reforma...»

²¹⁹ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 9-VII-1903.

²²⁰ Villada: *Sobre la real orden...*, 344 s.

²²¹ Vid. por ejemplo *El Liberal*, 2-IV-1902.

²²² *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 9-IV-1902. Vid. *El Liberal*, 10-IV-1902, que insiste en ello.

²²³ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 11-IV-1902.

²²⁴ Cfr. *ibidem*, 9-IV-1902.

²²⁵ Cfr. *op. cit.*, 257.

²²⁶ Vid. *El Liberal*, 12-V-1902, donde comienza a tejerse la leyenda, desmentida por el Gobierno a partir de esta misma fecha según refleja el propio diario.

²²⁷ Miguel Casals, en *Revista Popular*, 22-V-1902.

²²⁸ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 11-VIII-1903.

- ²²⁹ Cfr. *ibidem* y *El Liberal*, 11-IV-1902 ss.
- ²³⁰ Cit. Romero Robledo: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 10-V-1902.
- ²³¹ Cfr. *El Liberal*, 8 y 10-V-1902.
- ²³² Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 10-V-1902.
- ²³³ *Op. cit.*, 276. Cfr. Canalejas: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 5-XI-1902, y Romero Robledo: *ibidem*, 6-VII-1903.
- ²³⁴ Vid. *ibidem*, 25-XI-1902, y *El Liberal*, 15 a 23-V-1902.
- ²³⁵ Cfr. *El Liberal*, 27-V-1902.
- ²³⁶ Francos Rodríguez: *op. cit.*, 277 s.
- ²³⁷ Apud Morote: *op. cit.*, 112 ss.
- ²³⁸ Apud «Extracto de la Memoria escrita por el señor D. Dalmacio Iglesias García», en *Crónica del Sexto Congreso Católico Nacional Español. Discursos pronunciados en las sesiones públicas. Reseña de las Memorias y trabajos presentados en las secciones de dicha Asamblea celebrada en Santiago de Compostela en julio de 1902*, Santiago, Imprenta del Seminario Central, 1903, pág. 409 (BSP). Vid. *El Liberal*, 27-V-1902, y Maura: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 9-VII-1903, que también transcribe las bases del acuerdo. Las dos primeras, insiste el «Extracto» citado, estaban «copiadas de la ley W[aldeck]-Rousseau» (*loc. cit.*, 409).
- ²³⁹ Cfr. *El Liberal*, 28 a 30-V-1902.
- ²⁴⁰ *Ibidem*, 8-VI-1902.
- ²⁴¹ Publicados *ibidem*, 19-VI-1902.

VI. LA SOLUCION CONSERVADORA: EL CONVENIO DE 1904

1. *La reforma liberal del Concordato*

La reincorporación del tema religioso a la primera línea de los programas políticos de España había quedado formalizada así, entre 1899 y 1902, en torno sobre todo a la limitación y sumisión jurídica de las órdenes y congregaciones. Pero, en la primavera de 1902, la denuncia del doble juego del Gobierno Sagasta dejó bien dibujadas las posturas diversas que dividían el liberalismo ante este problema:

Anclado el republicanismo más radical (Blasco Ibáñez, Lerroux) en un designio de agitación con pretensiones imprecisas; en cambio la Unión Republicana, creada en 1900 por los antiguos progresistas y seguidores de Salmerón, formulaba quizá la actitud más cercana a un individualismo genuino. Consideraba la hegemonía atribuida a los institutos de perfección sólo como un factor de la «enfermedad» española. Sobre todo importaba, en su criterio, «sustituir la menguada tolerancia religiosa de la Constitución vigente por la amplia libertad de conciencia y de cultos» e implantar además el matrimonio civil. «No obstante lo cual —había dicho Azcárate en 1901—, por culpa de todos, se va a tomar el accidente por la esencia», reduciendo el problema a saber del Partido Liberal Fusionista y de su jefe «si disolverán o no las comunidades religiosas, si aplicarán el Concordato o intentarán celebrar uno nuevo, si harán cumplir la ley relativa al derecho de asociación o la reformarán y nada más»¹.

El Gabinete de Sagasta había pretendido resolver el problema jurídico, en último término, con una solución de compromiso: la sumisión de los institutos no concordados al derecho común, pero a un derecho común reformado para que pudieran desenvolverse en él con normalidad. Su fracaso, no obstante, abrumadoramente denunciado en mayo del año 2, acarreó quizá como fruto primero la cohesión mayor de los demócratas —monárquicos y republicanos (nunca tuvieron nombre bien diferenciado) en la raya de la legalidad, afines por sus respectivos radicalismo y moderación, aquellos en el campo alfonsino y estos en el del gorro frigio.

Tal acercamiento había sido ya iniciado en el 99 en torno a Canalejas, a quien ahora decía secundar una amplia minoría de sesenta senadores y diputados². Y sucedía al mismo tiempo en que el Partido Conservador tomaba conciencia de otra aproximación paralela, tiempo atrás insinuada, que parecía síntoma claro de participación en la evolución coetánea de las democracias occidentales: el de los antiguos gamacistas, separados del Partido Liberal y acaudillados por Antonio Maura. En 1902 también, sugerían estos su acercamiento a Silvela, alejados del fusionismo en todos los terrenos y escépticos en concreto ante el renacimiento de la cuestión religiosa³.

El parlamentarismo de la Restauración caminaba acaso, por tanto, hacia el mantenimiento del sistema en términos de legalidad violenta, típico

rasgo de esta fase de la III República francesa. En el fondo, parecía latir el predominio de los sectores moderados en los regímenes burgueses, impuesto al menos por el enfrentamiento progresivo de los grupos de reivindicación obrera. Pudo ser este enfrentamiento lo que contribuyó a llevar al conservatismo a la adopción de la más estricta ortodoxia religiosa defensiva en el fondo, acentuada en las postrimerías del siglo XIX. De ella era símbolo en España que el Partido Liberal-Conservador de Cánovas viera siendo denominado solo Conservador con Silvela ⁴.

Pero, además, este agriamiento del bipolarismo esencial atribuido a la cultura contemporánea, venía a apagar la euforia y el prestigio revolucionario de los partidos liberales pequeñoburgueses, ahora de centro, abocados por ello a un esfuerzo de cohesión y de radicalización que solo respondía acaso a la necesidad de subsistir, pese a sus indudables aciertos programáticos.

En el Consejo de ministros del 29 de mayo de 1902 en que Canalejas dejó la cartera de Agricultura ante la actitud incierta de Sagasta, el Gabinete español dio fe de esos esfuerzos al confesar, tal vez ingenuamente, la necesidad de adoptar alguna medida para «demostrar al país que con el ministro dimisionario no se ha ido el liberalismo del Gobierno». Y acordó advertir a la Santa Sede que era necesario activar las negociaciones sobre la situación jurídica de las asociaciones religiosas de modo que estuvieran finalizadas en junio. Si al terminar este mes no sucedía así, se notificaría al Vaticano un plazo, probablemente de dos meses, para su ultimación. Sobrepasado este (antes, por tanto, de la reapertura de Cortes en otoño), el Gabinete consideraría rotos los tratos y obraría con toda libertad ⁵. Las negociaciones urgiditas de esta manera se referían al voluminoso proyecto de reforma del Concordato elaborado por el marqués de Teverga en diciembre de 1901, que, de hecho, no había sido presentado al cardenal Rampolla, secretario de Estado de León XIII, por el nuevo embajador de España ante la Santa Sede, Gutiérrez Agüera, sino mucho después: al comienzo de abril de 1902 ⁶.

El proyecto de Teverga ahora entregado circunscribía «sus aspiraciones a dar nueva forma y organización al servicio eclesiástico y personal a él adscrito, y a fijar con precisión la situación legal de las Congregaciones religiosas no concordadas, sin tocar a los demás artículos del Concordato». La primera de las dos metas quedaba reducida, en último término, a la restricción de las dotaciones de culto y clero por medio de la supresión de numerosas personas canónicas, entre estas catorce diócesis. El Ministerio lo justificaba en «la angustiosa situación en que el Tesoro nacional se encuentra, hoy agravada por las desdichas pasadas» de Ultramar, aun cuando la reducción pudiera ser lógica de por sí: «en tiempos relativamente bonancibles el presupuesto de culto y clero era excesivo y no guardaba relación con lo que a esta importante atención destinan otras naciones católicas».

Se proponía ahora, por lo tanto, una primera economía de más de cinco millones de pesetas, concretada en las quince primeras bases de la parte dispositiva del proyecto, que recogían peticiones revisionistas hechas por los liberales en la discusión de los presupuestos de años anteriores.

En cuanto a la cuestión jurídica de los religiosos, Teverga repetía claramente la exégesis templada de Sagasta: «Extinguidas las Ordenes monásticas por la ley de 29 de julio de 1837, sin más excepción que los Colegios de la misión de Asia y algunas casas de Escolapios, Hospitalarios, Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl y Beatas dedicadas a la beneficencia y enseñanza», el Concordato del 51 había designado «en los artículos 29 y 30 las Congregaciones de ambos sexos que se habían de establecer y podían vivir bajo el amparo y protección del Estado». Sobre ellas, pues, nada tenía que objetar el Ministerio, «aunque sería conveniente señalar con precisión ... la Asociación monástica» no concretada en el 29 (que vimos aludía a las de San Vicente de Paúl y San Felipe Neri y una tercera a designar). Así se evitarían las dudas suscitadas sobre si «ha de ser, como las otras, una sola para toda la nación, o podrá ser distinta en los diversos obispados de la Península».

Lógica parecía, por otra parte, ya que no la extinción, la reducción considerable de los colegios de misión, concordados también en 1851. Perdidas las colonias de Ultramar, habían de bastar «una o dos Ordenes monásticas adscritas al servicio religioso en nuestras posesiones de Africa y golfo de Guinea».

Pero más graves eran los problemas suscitados por «las demás Corporaciones establecidas en España al amparo de la libertad de asociación ... [por] su excesivo número, así como la necesidad de que se acomoden a las disposiciones legales, sujetándose a las prescripciones de la legislación civil, si se les ha de reconocer existencia legal y personalidad jurídica». Porque «a nadie es dado sustraerse —razonaba Teverga— a la acción de las leyes del país donde se vive»⁷.

Sumisión que, además, no equivalía a mantener la situación presente: «También convendría poner límite al excesivo número de Congregaciones que en la Península se establecen, no siempre con la aprobación de Su Santidad, ni aun de los respectivos prelados diocesanos ...; porque, como todas han de vivir necesariamente de la caridad o de las industrias que ejerzan, ya por las dificultades que la continua dádiva ocasiona o por la competencia que hacen a las pequeñas industrias en los pueblos en que fijan su residencia, producen perturbación y desequilibrio en la vida local, dando lugar a que las Congregaciones religiosas no sean, por regla general, miradas con el respeto y cariño a que se harían acreedoras».

Era preciso, pues, «regular su vida legal, y en lo posible, limitar prudentemente su excesivo número, suprimiendo aquellos conventos en los que el de religiosos de uno y otro sexo sea inferior al que los mismos cánones consideran preciso para que pueda hacerse vida monástica y evitar que para en adelante se creen nuevas Ordenes sin que preceda mutuo acuerdo entre ambas potestades, obteniendo previamente la aprobación de Su Santidad y autorización del Gobierno de S. M. para establecerse en la Península, ni se puedan establecer nuevos conventos sin el asentimiento de los prelados diocesanos y autoridades civiles»⁸.

Tales valoraciones venían concretadas en la parte dispositiva del proyecto de reforma, que contenía veintiséis bases: quince sobre la reestructu-

ración administrativa de la Iglesia española, y once sobre los institutos de perfección.

En aquéllas, el Gobierno pedía la reducción a diócesis sufragáneas de las metropolitanas de Granada, Tarragona y Valladolid, por la escasa importancia actual de las dos primeras sedes y el reducido territorio adscrito a la tercera; y la elevación a archidiócesis de Barcelona, en sustitución de Tarragona, por su primacía económica y social en Cataluña (base I). Sugirió la supresión de catorce obispados (b. II) con sus seminarios (b. IX): los de Astorga, Coria, Guadix, Jaca, Menorca, Mondoñedo, Orense, Plasencia, Tarazona, Tortosa, Tuy, Tenerife, Urgell y Vic, en opinión revisable del Gobierno. Sus prelados, canónigos y beneficiados irían ocupando ulteriormente los vacantes por orden de antigüedad en el cargo (b. VIII).

Reclamaba así mismo la supresión de todas las colegiatas, a excepción de las de Covadonga, San Isidoro de León, Roncesvalles, La Granja y Alcalá de Henares (b. V) y, en las diócesis subsistentes la de «las Dignidades de Arcediano y Maestrescuela y los Canónigos de oficio Doctoral y Lectoral, y un número de Canónigos y Beneficiados, que equivalga a la cuarta parte de los que hoy tienen asignados», además de los tesoreros en las iglesias metropolitanas y de uno de los arciprestes de la de Zaragoza (b. III). Todos ellos serían sustituidos con canónigos honorarios nombrados entre los sacerdotes dignos que gozasen además de «medios de decorosa subsistencia» (b. IV).

Impetraba economías en la asignación estatal destinada al culto en las catedrales, colegiatas (b. VI) y seminarios (b. VII). Reducía la posibilidad de nombrar obispos auxiliares «solo en casos de muy reconocida necesidad y de modo que, si el prelado que lo requiriera pretendía el oficio para una persona determinada, él correría a cargo de su dotación (b. X). Pedía que el Estado hubiera de pagar únicamente las dotaciones de los cargos provistos y no de los vacantes también (b. XI).

Anunciaba además una nueva división territorial, que hiciera desaparecer los islotes que algunas diócesis tenían dentro de otras; que tendiese a igualar el número de pobladores de cada circunscripción (b. XII) y que distribuyera el territorio de las suprimidas (b. XIII). Proponía una reestructuración parroquial paralela, «procurando reducir el número de curatos que no sean absolutamente necesarios y conseguir que las parroquias no tengan menos de 500 a 600 habitantes», si las condiciones geográficas lo permitían (b. XIV). Y aseguraba, en fin, que de la suma de las dotaciones anuladas —que calculaba en 5.276.543,04 pesetas— el veinte por ciento sería destinado a mejorar las de los párrocos cuya asignación no llegara a mil pesetas anuales, y el ochenta a aliviar las cargas del Tesoro (b. XV).

En cuanto a las once bases sobre los religiosos, comprometían al Pontífice y al jefe del Estado a designar la tercera orden innominada del artículo 29 del Concordato (b. XVI). Todas las restantes, «no mencionadas en dicho artículo, vivirán al amparo de la legislación común, sometidas a las disposiciones de la ley de asociaciones de 1887 o a las que en uso de soberanía se dé la nación, entendiéndose que los asociados no gozarán de derecho alguno individual por el hecho de pertenecer a cualquiera de dichas órdenes» (b. XVII). Habían de contribuir por tanto «como los demás ciu-

dadanos y sociedades de todas clases a levantar las cargas del Estado, pagando los impuestos que les correspondan por sus propiedades rústicas o urbanas y por las industrias que ejerzan» (b. XIX), de acuerdo con las protestas elevadas entre los liberales contra la práctica contraria, en el invierno de 1900 a 1901.

Para recoger, de modo paralelo, las mantenidas corrientes regalistas, enemigas de toda jurisdicción exenta, la base XVIII disponía que «las Congregaciones monásticas establecidas en España estarán sometidas a la inspección, vigilancia y obediencia de los Prelados diocesanos en todo lo que se refiere al servicio espiritual y canónico, y a las autoridades civiles en sus relaciones con el Estado y existencia jurídica». Y, sobre esta, el establecimiento futuro de cualquier otro instituto de perfección no instalado todavía en España requeriría «mutuo acuerdo entre ambas potestades», aprobación previa del Pontífice y autorización gubernativa por el Real decreto (b. XX). La apertura de una nueva casa, «aun cuando sea de las Congregaciones autorizadas», exigiría el asentimiento del respectivo prelado diocesano y la autorización por real orden del Gobierno (b. XXI)

Se anunciaba que serían suprimidas todas las comunidades con menos de doce religiosos profesos, «que por las disposiciones canónicas de la Iglesia se consideran necesarios para la vida monástica» (b. XXII), a excepción de «las comunidades religiosas que no hacen vida conventual y que por su instituto están dedicadas a obras de beneficencia, enseñanza, caridad, o asistencia a enfermos, ancianos o desvalidos» (b. XXIII). Eran anuladas también las subvenciones, exenciones y privilegios concedidos por el Estado a los colegios de misión en Ultramar, que quedaban sometidos al derecho común (b. XXIV). En cambio, serían conservadas «como misioneras las órdenes monásticas que [el Gobierno] considere necesarias para el servicio espiritual de nuestras posesiones de Africa y golfo de Guinea», con «los auxilios y privilegios que al presente disfrutan, pero solo por el tiempo que se considere preciso utilizar sus servicios» (b. XXV). Y, «en todos los casos no previstos en el Convenio que entre el Sumo Pontífice y S. M. C[atólico]a se celebre, las Congregaciones religiosas en lo espiritual y canónico estarán sujetas a los Obispos y disposiciones de la Iglesia, y en lo temporal o sea en lo que afecte a su existencia y vida legal, a la legislación común española y a las Autoridades civiles» (b. XXVI) ⁹.

2. *Negociaciones con el Vaticano*

En cumplimiento de los acuerdos del Consejo de ministros del 29 de mayo de 1902 en orden al urgimiento de la negociación de esta reforma, y también por la pretensión de ajustar a ella el texto de la ley de asociaciones vigente, el 3 de junio, el duque de Almodóvar, ministro de Estado, envió una nota al embajador cerca del Santo Padre, Gutiérrez Agüera, para que la leyese al secretario de Estado del Pontífice. En ella el Gabinete requería «una pronta y conciliadora solución, porque pese a sus anhelos de concordia y a su incondicional respeto al Supremo Pontífice, no le es dable en un plazo prudencial, el dejar de cumplir lo que estima sus debe-

res en cuanto a la sumisión y dependencia a la ley de las Congregaciones religiosas»; cuestión que constituía «no solo una de las bases fundamentales de su programa sino una exigencia imperiosa de las presentes necesidades nacionales».

Además, explicaba, «el Gobierno de S. M. se siente apremiado, por motivos de origen diversos, a someter a la decisión del Parlamento la modificación de la ley de Asociaciones, y aprovechará esta oportunidad para facilitar el ejercicio de la facultad de inspección que al Poder civil incumbe en forma compatible con la índole de las congregaciones religiosas». Se decía por ello, «favorablemente dispuesto a escuchar las sugerencias que tenga bien formularle la Santa Sede; pero siempre sobre la base de que los institutos, comunidades o congregaciones de carácter religioso en sus relaciones externas con la sociedad civil han de quedar sujetos a las disposiciones de la ley general que se dicte o pueda dictarse; salvando siempre cuanto a su vida interna se refiera, según cánones y estatutos de la Iglesia»¹⁰.

Gutiérrez Agüera respondió el día 10 que, conforme a las amables expresiones del secretario de Estado, el asunto seguía en estudio¹¹. Pero con junio, acababa el primer plazo concedido a la Santa Sede a finales de mayo para reanudar la negociación. Acaso para conformar los ánimos de los más exigentes (pero insistiendo con ello en la brecha reabierta por García Alix en 1900, en orden a una legislación intervencionista en la enseñanza privada), el 1 de julio del mismo año 2, el Ministerio publicó un decreto del conde de Romanones por el que se reservaba la inspección de los establecimientos no oficiales, incluidos por tanto los de la Iglesia, y señalaba la necesidad de autorización estatal previa para su creación. En opinión de conservadores y tradicionalistas, la libertad de enseñanza mantenida por el artículo 12 de la Constitución de 1876 quedaba así limitada en la práctica y, en consecuencia, incumplidos «los dogmas y compromisos del partido liberal»¹², que avanzaba un nuevo paso en la evolución estatista preconizada en cierto modo por Canalejas.

Como en 1901, la cuestión religiosa fue urgida aún en el verano por los acontecimientos franceses. El Gobierno Waldeck-Rousseau, que había reinaugurado la política de sumisión de los institutos de perfección de la Iglesia, fue sustituido en junio por el Gabinete Combes. Alterando al parecer los templados propósitos del senador moderado, el nuevo Ministerio utilizó en sentido restrictivo la nueva ley de asociación que promulgara aquél, negando la autorización a numerosas congregaciones¹³. La prensa española hizo eco puntual de la política vecina y, desde finales de julio de 1902, recrudeció los temores sobre la inmigración religiosa. Al tiempo, el Gobierno Sagasta insistía en minimizar su importancia y en prometer que obligaría a los regulares extranjeros a sujetarse al derecho común y, sólo si se negaban a ello, a abandonar de nuevo el país¹⁴.

Pero tampoco ante esto respondió el Vaticano a los apremios. El último día de junio, en que finalizaba el plazo informal dado por el Gobierno español a Roma para llegar a un acuerdo, el Consejo de ministros se reunió por ello, quizá con ánimo de aparentar firmeza, sin adoptar al cabo ninguna decisión. La prensa liberal insinuó incluso que el Ministerio ni siquiera habría presentado la proposición de reforma del Concordato y del presu-

puesto eclesiástico. Y cuando, en agosto, el duque de Almodóvar hubo de asegurar por eso que el Gabinete estaba decidido «a romper de una vez con el Vaticano» si la respuesta no llegaba pronto, *El Liberal* se limitó a augurar que «esta terminante declaración provocará seguramente la sonrisa de los menos maliciosos»¹⁵.

Al parecer, después de la nota del mes de junio, el embajador en Roma había reclamado la contestación en dos ocasiones. La vacación estival, que hubo de afectar a varios de los cardenales que formaban la comisión designada al efecto, y la remisión de la proposición española a los propios institutos afectados para que la estudiaran, debieron de impedir que la respuesta llegase antes. Acaso la retardó además Rampolla intencionadamente para medir la sospechada debilidad del Gabinete. Pero, en todo caso, ni siquiera el Ministerio parecía albergar verdadera esperanza: «dudo mucho —declaró un personaje fusionista mediado agosto sobre la Santa Sede— que se preste a hacer nada positivo contra las órdenes religiosas»¹⁶.

La respuesta, llegada finalmente, corroboró el temor. Anunciada el 26 y comunicada el 27 por Gutiérrez Agüera, el cardenal Rampolla comenzaba advirtiendo que las reformas proyectadas por Teverga «han producido penosa impresión en el ánimo de Su Santidad». Si era necesario disminuir los gastos del Estado, debía de comenzar a hacerlo el Ministerio en los demás ramos de la Administración, cuyas dotaciones no eran contrapartida de un hecho similar a la desamortización eclesiástica. Y, aun en el caso de que fuera preciso alterar las obligaciones destinadas al culto y al clero, había de «dejar principalmente a la Santa Sede el determinar sobre cuáles puntos podrían recaer semejantes reducciones».

Estas eran además, en opinión del Vaticano, excesivas, y se basaban en criterios diversos de los de Roma: la interpretación restrictiva del artículo 29, en concreto, y el propósito de alterar la exención de la jurisdicción episcopal que gozaban los institutos dependientes de sus propios prelados. Era difícil asimismo, decía el secretario de Estado, esperar que todos los obispos se pusieran de acuerdo para designar una sola orden que pudiera extenderse por todas las diócesis para cubrir la imprecisión de aquel artículo del Concordato.

La Santa Sede, por lo tanto, se avenía a facilitar únicamente la reforma administrativa. Proponía que la estudiara una comisión mixta, formada al efecto por tres representantes del Gobierno y tres de Roma, y presidida por el primado de Toledo. Habría de «proceder a la circunscripción de las Diócesis, con arreglo al artículo 5 del Concordato»¹⁷, que nunca se llegó a ejecutar», y ver la posibilidad de suprimir alguna de las existencias o introducir otras economías.

Pero, sobre los religiosos, remitía un contraproyecto de Convenio con catorce bases, en donde se afirmaba que el Gobierno mantendría la protección y los privilegios otorgados a los misioneros de Ultramar (b. II) y a los del Africa española (b. III), a los escolapios (b. IV) y a las dos órdenes citadas en el artículo 29 (b. I). La de San Felipe Neri, extinguida prácticamente, sería sustituida por otra designada entre la Santa Sede y el Estado español (b. V). Todas las demás, en cambio, gozaban de existencia legal en virtud de los artículos 1, 2, 3 y 43, «por el solo hecho de haber sido

canónicamente aprobadas por el Sumo Pontífice y de formar parte integrante del organismo de la Iglesia católica», que era lo que esos artículos sancionaban, sin alusión al estado religioso¹⁸. Quedarían, no obstante, «sujetas al derecho común en todo lo que no se oponga según las leyes canónicas al régimen interno, a la vida religiosa, al fin espiritual de la comunidad y a la obediencia y subordinación de los religiosos a sus respectivos prelados» (b. VI): es decir: a los regulares (b. VII) y no a los diocesanos como pretendía el Gobierno.

La autorización del obispo correspondiente bastaría para que los institutos ya existentes en España abrieran nuevos establecimientos (b. VIII); pero la instalación de algún nuevo instituto exigiría acuerdo previo entre el Ministerio y el Vaticano (b. XII). Todos sin excepción estarían sujetos al pago de los impuestos «como los demás ciudadanos» y solo como estos, tanto por sus fincas rústicas y urbanas como por sus industrias (b. IX). Salvo las dedicadas a beneficencia y enseñanza (b. XI), las comunidades con menos de doce miembros profesos serían disueltas en el término de un año. Pero «los mismos superiores conservarán todos los derechos de propiedad sobre las casas y bienes de las Comunidades suprimidas de los cuales podrán disponer libremente» (b. X).

Roma y Madrid, en fin, habrían de ponerse de acuerdo en adelante, si había disconformidad entre los cánones y el derecho común, en los asuntos no previstos en el Convenio (b. XIII), que formaría parte del Concordato (b. XIV)¹⁹.

Parece que, a primeros de septiembre de 1902, el Gabinete divulgó el contenido de la nota de Rampolla, sobre la que la prensa hacía inquisiciones continuas. Al discutirla el 5 en el Consejo, Moret defendió la tesis, diversa ciertamente de su apoyo anterior al asociacionismo de Canalejas, de que los institutos religiosos, como parte integrante de la Iglesia, no podían estar sometidos al derecho común —aunque Roma lo había aceptado. El Gobierno había de negociar por ello, con la Santa Sede, cuáles y cuántas asociaciones habían de existir en España; de modo que ninguna otra pudiera establecerse, ni aun amparándose en la ley de 1887. De lo contrario, «si el Gobierno se obstinara en someter a la ley común a las Asociaciones religiosas, surgiría inmediatamente la dificultad de determinar qué ley era esa. Si fuera la vigente, España habría enajenado el derecho a modificarla, en cuanto a ellas pudiera referirse. Si fuera otra, que haya de votarse y sancionarse, no podría tener eficacia alguna una negociación que al día siguiente de quedar terminada hubiera de ser infringida por una de las partes contratantes»²⁰.

Almodóvar sostuvo la opinión de Moret en los consejos posteriores. Montilla y Romanones subrayaron que aquello contrariaba la promesa de presentar una ley nueva de asociaciones a las Cortes. Parece que el ministro de Estado y Moret redactaron incluso un proyecto de respuesta al Vaticano en donde urgía la necesidad de «resolver que las Asociaciones religiosas todas queden excluidas del fuero común y que se determine de una vez cuáles de dichas Asociaciones han de ser aceptadas, integrando la Iglesia de España». Mientras no acabaran las negociaciones —añadían— sobre ello y sobre la reforma del Concordato (el Ministerio aceptaba la creación

de la comisión mixta), «procede una abstención absoluta de actos o resoluciones, por las dos potestades, que a las Asociaciones religiosas puedan afectar» ²¹. Lo que podía ser una forma, efectivamente, de eludir otra vez aquel proyecto de ley.

En el Consejo de ministros del día 20 de septiembre de 1902, Romanones opuso a Moret y Almodóvar su propio esbozo de contestación a Roma, en el que defendía el carácter concordatario de sólo tres asociaciones y la sumisión de las demás al derecho común. Pero los ministros aprobaron el proyecto de aquellos ²², que, sin embargo (un tanto inexplicablemente), fue escrito finalmente en la línea habitual:

Por real orden del 21, el ministro de Estado comunicó al embajador ante el Pontífice lo que había de responder al cardenal Rampolla. Contestaba Almodóvar a la Santa Sede que la reducción presupuestaria ya había afectado a todas las clases sostenidas por el Estado, como sugería el secretario del Papa. Incluso la sufrían los tenedores de la deuda pública, que sólo recibían el ochenta por ciento de la renta establecida; lo que, si se hubiera aplicado a los emolumentos de los sacerdotes, habría supuesto una cantidad mayor de la pedida ahora. Aceptaba, con todo, la formación de la comisión mixta; aunque insistía en la oportunidad de todas las reformas consignadas en el proyecto presentado en abril. Pero, sobre los institutos, divergía nuevamente de la postura vaticana, para insistir en la interpretación restrictiva del artículo 29. De este se desprendía «con entera claridad la intervención eficaz del Estado ... en cuanto se relaciona con el establecimiento de institutos monásticos dentro de nuestro territorio». Tal intervención ya había sido practicada con la real orden de 1880 del conservador Bugallal, destinada a prohibir la instalación de religiosos inmigrados en las provincias limítrofes con Francia, a raíz de la política de Ferry. Esta medida había recordado textualmente la necesidad, para fundar cualquier comunidad en las demás regiones, de «la autorización especial del Gobierno, que podrá concederla previos los informes y con las condiciones que en cada caso juzgue convenientes» ²³.

Tampoco suscribía Almodóvar el criterio romano sobre la innominada orden del artículo 29 del Concordato, ni sobre la existencia legal de los demás institutos en virtud de los artículos 1, 2, 3 y 43, ni sobre la jurisdicción de los prelados regulares. Y, en todo caso, subrayaba la obligación gubernativa «de moderar el excesivo impulso hacia la vida contemplativa, que ha ocasionado fundadísimas alarmas y no escasos sinsabores en los últimos tiempos; la casi totalidad de los españoles, apartada de intransigencias radicales, ve un riesgo para la paz pública y para la Iglesia en el aumento desmedido de monasterios».

El Gobierno enviaba en consecuencia un contraproyecto de convenio, de diez bases. En ellas insistía en que la tercera orden del artículo 29 fuera la misma en todas las diócesis de España y sugería como beneficiaria la de los agustinos calzados (b. I) y, como sustituto de la congregación extinta de San Felipe Neri, la de predicadores de Santo Domingo (b. III). A excepción de las concordadas, de las de misioneros, hospitalarios y escolapios, todas las demás órdenes y congregaciones, «existentes en la actualidad en España ... y que hayan sido previamente autorizadas por la Potestad

civil, estarán sujetas a la legislación común, cualquiera que sea la que el Poder legislativo crea conveniente establecer en cuanto no se refiera a régimen interior; entendiéndose que no podrá establecerse ninguna casa de monasterio o residencia de las mismas, sin permiso del Gobierno, el cual para concederlo, deberá oír al Prelado ordinario de la Diócesis» (b. IV), e vez de que bastara el permiso de este, conforme había propuesto el Vaticano. E insistía en la sumisión de los institutos a los prelados diocesanos «en todo lo que se refiera al servicio espiritual y canónico dentro de las respectivas Diócesis» (b. V).

No había acuerdo, pues, entre el Estado y Roma, más que en la necesidad de previo entendimiento entre ambas potestades para instalar un instituto nuevo (b. VI); en que estuvieran sujetos todos al pago de los impuestos (b. VII) y en que fueran suprimidas las comunidades con menos de doce miembros (b. VIII), salvo las dedicadas a beneficencia (b. IX) ²⁴.

La prensa democrática aventuró reseñas de la nota dirigida a Roma llenas de sumisión al Papa y de aire de transacción de nuevo. *El Liberal*, incluso, afirmó el 21 de septiembre de 1902 que «la contestación acordada en Consejo anoche a la famosa Nota del Vaticano, mal que pese a la mal entendida reserva de los ministros, es el definitivo fracaso de la situación: la bancarrota de todos sus compromisos» ²⁵. Pero, en realidad, el contraproyecto de Almodóvar distaba de ofrecer facilidades a la Santa Sede: «El tono general de su escrito —había de advertir el propio ministro de Estado al embajador Gutiérrez Agüera en carta que acompañó a la nota—, si le parece a V. un poco vigoroso, responde a la manera de tratarnos Roma en su respuesta. Nos ha parecido necesario abandonar las humildades acostumbradas con la Santa Sede al vernos juzgados con injusticia y rigor en la nota de Rampolla, quien al propio tiempo nos ofrece un *marché de dupes*. En el contraproyecto ... La resolución del Gobierno es muy firme. Negociará cuanto sea necesario a justificar sus deseos de concordia; y si después de un tiempo prudencial continúa el Vaticano en sus intransigencias, hará el Gobierno lo que le convenga» ²⁶.

Como para ratificar esta firmeza, que acaso respondía a las desconfianzas de demócratas, de día en día más crecientes, y a la conveniencia de infundir ánimo al representante diplomático, el 18 de octubre el Consejo de ministros acordó presentar a las Cortes el proyecto de ley de asociaciones tantas veces anunciado, que había de someter al derecho común a los institutos de perfección ²⁷. Pero, cuando el parlamento abrió otra vez sus puertas el día 20, no hubo proyecto nuevo. Advertida la indecisión de la política ministerial en las interpelaciones de Romero Robledo, del general López Domínguez y del integrista Necedal, Moret en el Senado y Sagasta en el Congreso manifestaron ya su decisión de conformarse con negociar en Roma y olvidar la presentación de una ley que sustituyera a la de 1887, en vista de las necesidades más urgentes que tenía el país. Reducida así la cuestión a «un escabel para que subiera al poder el Partido Liberal y plegase luego la bandera», Canalejas anunció con estos términos su definitiva ruptura con Sagasta y su empeño en el camino anticlerical ²⁸, también frente al criterio defensivo de conservadores y mauristas. «Fechas memorables —sentenciaría *El Liberal* el 7— serán el 5 y el 6 de noviembre

de 1902. Señalan la consumación del derribo que desde 1898 venía pidiendo España, y el término de la comandita liberal-conservadora que durante un cuarto de siglo monopolizó el Gobierno.

Si puede seguir viviendo el régimen que tantas desgracias nos ha traído, las izquierdas se orientarán para lo futuro en la dirección trazada anteayer por el señor Canalejas, y las derechas en la trazada ayer por el señor Maura» ²⁹.

Patente así la crisis del Partido Fusionista, Sagasta hizo de ello cuestión de confianza inmediata ante el rey, que se la confirmó. Pero, en la consiguiente reestructuración del Gobierno, aquel no consiguió constituir ni el Ministerio de «concentración liberal por la izquierda» que pretendió primero y que su mera presencia hizo imposible, ni el Gabinete liberal-robledista que planeó después, ni siquiera en principio el «ministerio homogéneo del Partido Liberal», que consiguió por último en una reunión de exministros convocada ante la división del partido. Presentado el nuevo Gabinete a Cortes el 19 de noviembre, la oposición cerrada que en días sucesivos hicieron las minorías (republicanos y demócratas, carlistas e integristas, mauristas y conservadores, robledistas y «caballeros del Santo Sepulcro» —los seguidores del duque de Tetuán y de la tradición de Cánovas) dio al traste con Sagasta el día 2 de diciembre, en la votación de unas medidas secundarias sobre asuntos marítimos ³⁰. Su agonía parlamentaria —diría Romanones— había sido larga: «en cada sesión se repetía la misma escena, y se acusaba el desfile más o menos silencioso de sus amigos, que buscaban otro cobijo, seguros de que el poder de Sagasta no tendría mañana» ³¹. El futuro era tanto más incierto cuanto «más vigorosas, enérgicas, compactas» avanzaban «las fuerzas de la derecha» —no sólo los conservadores—, según dijera Canalejas en el propio Congreso ³².

3. *Agotamiento del Partido Conservador histórico*

El 8 de diciembre de 1902, tras una laboriosa crisis, Silvela formó su Gabinete con antiguos pidalianos, conservadores y mauristas (Abárzuza en Estado, Maura en Gobernación, Allendesalazar en Instrucción Pública, Vardillo y Sánchez de Toca en Agricultura y Marina, Dato en Gracia y Justicia, Linares en Guerra y Fernández Villaverde en Hacienda) ³. Pero el nuevo Gobierno pareció más bien un buen proyecto que un todo coherente. Desde el verano, los mauristas habían advertido «que antes, en y después de esa coalición, el señor Maura y sus amigos conservarían indeleble la significación política con que nacieron a la vida pública» ³⁴. Y aun tan condicionado acercamiento hizo aflorar de nuevo las fisuras conservadoras de 1900 entre Silvela y Villaverde. Remiso en forma parte del Gobierno, se creía este preterido al parecer por la sombra de Maura cara a la sucesión en la jefatura del partido, conforme a las versiones moderadas ³⁵, o quizá temeroso de «un renombre de recaudador tiránico» ³⁶ que había de sobrevenirle al proseguir la política economizadora inaugurada en 1899.

Reacio en un principio a aceptar el poder en tanto fuera despejado el problema de Roma ³⁷, la actitud del Ministerio mostró desde el comienzo intenciones de sobreesimiento. El 20 de diciembre del año 2, recién constituido, fue derogado el decreto de Romanones de 22 de noviembre que prohibía el uso de las lenguas vernáculas para la enseñanza del catecismo en las escuelas primarias ³⁸, y, en adelante, el tema religioso fue eludido. «Se lamenta el Gobierno actual —se dijo tras el Consejo de ministros del 17 de diciembre— de que asunto tan grave se lo haya legado su antecesor en condiciones tan lastimosas, que se hace difícil toda gestión eficaz y en armonía con las prerrogativas del Poder civil» ³⁹.

Solo ante la noticia de la posibilidad de suprimir diócesis, cabildos y beneficios, hubo en octubre y en noviembre manifestaciones de protesta en Astorga y en Jaca. Y una oleada de exposiciones descendió sobre el rey, el Ministerio y el Papa, en campaña alentada por el cabildo de la seo de Toledo. Las habían escrito al menos los obispos sufragáneos y el alto clero de la provincia eclesiástica granadina, el cabildo y el clero de la diócesis de Plasencia, los cabildos catedral y colegiales de Toledo, los catedrales de Solsona, Santiago, Osma, Orense; los de la provincia eclesiástica de Valladolid, los de la de Burgos —con sus obispos—, el de Tarazona, el de Barcelona —también con su prelado—, el de Zaragoza; el cabildo, los párrocos y el clero de Ciudad Rodrigo, los obispos de Osma, Tarragona, Hermópolis —administrador apostólico de Solsona— ... ⁴⁰.

Sobreesido sin embargo el problema por el Gobierno conservador, lo replanteó, ya en 1903, la proximidad del sufragio, sobre todo con la campaña electoral de los republicanos.

Parecían estos animados por el éxito en las elecciones municipales de marzo y quizá por la esperanza de que las generales siguiesen el propósito purificador que iniciara Silvela en 1899 y que ahora encarnaba Maura en el despacho de Gobernación. «Se equivocarán los que crean —dijo por eso *El Imparcial* entonces— que esa cuestión ha muerto. El problema religioso puede aparecer de repente en forma activa y peligrosa; aparecerá, de fijo, como fórmula de programa, proclamada por los candidatos republicanos en las próximas elecciones.» «En ella el Gobierno está obligado a no perder tiempo alguno, ya que se perdieron cerca de dos años por los liberales» ⁴¹, quienes, por otra parte, habían dejado la cuestión inconclusa. El 27 de noviembre de 1902, el secretario de Estado de León XIII había remitido una nota al embajador español que la crisis del Gobierno español impidió responder.

En ella, Rampolla marginaba la discusión de la reforma de la administración eclesiástica; ya que la comisión mixta que habría de estudiarla era aceptada por el Gabinete. Pero la controversia se limitaba ahora al tema de los religiosos en dos cuestiones principales. Frente a la tesis vaticana de la inclusión de todos los institutos en el Concordato por modo implícito, el Ministerio había expuesto la interpretación restrictiva del artículo 29 (con apoyo histórico que rebatía el cardenal) y el deseo de que los religiosos dependieran de los obispos, conforme Pío IX había dispuesto en verdad en 1851, aunque solo temporalmente y por la dispersión de los que entonces existían, como hacía constar el secretario de Estado ⁴². «Por lo demás

—advertía Rampolla—, según el derecho canónico, los Institutos religiosos no son del todo independientes de los Prelados diocesanos; por el contrario, su dependencia de los mismos en la vida exterior es tal, que hace injustificado todo recelo.»

La Santa Sede accedía solo, por lo tanto, a que la tercera orden sin nombrar del artículo 29 fuera elegida «por los respectivos Obispos en su propia diócesis ... entre las autorizadas por el Gobierno y a que dicha Orden no tenga derecho a subvención alguna por parte del Estado». Y aceptaba que, cuando los prelados autorizasen nuevas comunidades, «en vez de tener necesidad de dar simplemente participación al Gobernador de la Provincia, estén obligados a obtener la inscripción previa en el Registro Civil». Todo se concretaba en un nuevo proyecto de Convenio, que reducía a seis meses el plazo de un año concedido a las comunidades con menos de doce miembros para ser disueltas y aceptaba sustituir la orden de San Felipe Neri por la de los predicadores de Santo Domingo ⁴³.

Lejos del regalismo de la postura fusionista ⁴⁴ aunque totalizando el régimen privilegiario para el estado religioso, el Gobierno Silvela intervino en el asunto en marzo de 1903. En una entrevista confidencial entre monseñor Rinaldini y el ministro Abárzuza, este propuso, en vez de aquel Convenio, un proyecto de decreto concordado, que transformaba sensiblemente la postura intervencionista de Almodóvar. El Gabinete comenzaba por respetar «su personalidad jurídica —de que hoy disfrutaban—» a todas las órdenes y congregaciones «existentes hasta la fecha en España», «entendiéndose que la ley de Asociaciones no las comprende en sus preceptos» (base I). Solo debían de inscribirse en un registro especial que existiría en el Ministerio de Gracia y Justicia (b. X). No hablaba ya, por tanto, de concretar la tercera orden del artículo 29. Pero en cambio consignaba que ninguna gozaría de «subvención ni auxilio alguno del Estado» y, en fórmula imprecisa, que todas habían de estar «sometidas a los Diocesanos y a los Prelados propios, según las reglas de sus Estatutos y las disposiciones del Derecho canónico y de la Disciplina Eclesiástica vigente en España, así como a las leyes generales del reino en lo relativo al Derecho penal y a las demás leyes civiles y administrativas» (b. II). En concreto, se verían sujetas «a los impuestos del país por sus bienes o por las profesiones o industrias que ejerzan en condiciones de igualdad respecto de los demás Españoles», sin que pudieran ser objeto «de ninguna tributación o exacción especial» (b. III).

Las comunidades con menos de doce miembros serían suprimidas (b. V). Los nuevos establecimientos de los institutos constituidos ya en España requerirían previo consentimiento del obispo correspondiente y autorización gubernativa de real orden (b. IV), y la instalación de nuevos institutos, acuerdo previo entre la Santa Sede y el Gobierno (b. VI); aunque podrían crearlos también los extranjeros, con sujetarse solo «a las mismas condiciones de este decreto» (b. IX).

El proyecto especificaba que los escolapios proseguirían en las condiciones disfrutadas hasta entonces (b. VII). Pero las asociaciones de laicos o de eclesiásticos sin vida común ni «carácter de Orden monástica» serían

sometidas a la Ley de asociaciones y al derecho general, «sin limitación alguna para el presente ni para el porvenir» (b. VIII) ⁴⁵.

Después de comunicarlas al cardenal Rampolla, Rinaldini respondió a Abárzuza a primeros de abril de 1903 la satisfacción con que el secretario de Estado había comentado las bases. Advertía tan solo que la primera, al referirse a las comunidades ya existentes con personalidad jurídica en España, parecía eludir la legalización de las no autorizadas ni concordadas, cuyo futuro preocupaba a la Sede Apostólica ⁴⁶. Lo que podía resolverse, según precisó en mayo, con una nota diplomática en la que el Ministerio consignara que la primera base comprendía a todos los institutos «existentes de hecho en España».

Además de mejorar los términos canónicos del futuro decreto, en esta nueva carta, el nuncio razonaba al ministro que las órdenes concordadas debían de recibir subvención estatal como hasta entonces. Que había de ser suprimida además toda alusión a la disciplina canónica vigente en España; porque la Santa Sede no podía aceptar por principio cualquier práctica especial en la regulación de la vida religiosa. Y que, en cambio, si advertiera que, en caso de discordia, Roma y Madrid se entenderían para resolver las dificultades (b. II). En el sometimiento de los institutos a los impuestos generales, sobrada la palabra «profesiones»; puesto que los que poseían —y los afectados por tanto— eran aquellos, y no sus individuos (b. III). Y, de la supresión de las comunidades con menos de doce miembros, había de constar el plazo de seis meses que se les otorgaba y excluirlas «que no hacen vida conventual y que en virtud de su instituto se dedican a obras de beneficencia, enseñanza, caridad, asistencia a los enfermos» (b. V) ⁴⁷.

Fuera de algún detalle de terminología, el Gobierno conservador se avino a todo, por carta del ministro de Estado a Rinaldini en mayo aún, salvo a la petición de que los institutos concordados siguieran recibiendo subvención. Después de consultarlo a Roma, el nuncio transigió con ello el 6 de junio y dio por terminadas las negociaciones previas a la conclusión del acuerdo ⁴⁸. Pero, cuando, en julio, Abárzuza le remitió el proyecto de decreto, el ministro de Estado incluyó en él, inexplicablemente (quizá por evitar una recriminación pública tras la coetánea crisis política, que se mostraba desfavorable para el Gabinete), algunas modificaciones nuevas. Para que fueran contempladas por el decreto, las comunidades deberían de haber cumplido las disposiciones de la real orden de 9 de abril de 1902, que había reclamado su inscripción civil. Esto excluía al menos a las doscientas tres que no lo hicieron ⁴⁹ y a las que hubieran sido creadas después. Además, cualquier autorización futura para un establecimiento religioso habría de aparecer en la *Gaceta de Madrid*. Y, sobre todo, los extranjeros que quisieran constituir comunidades en España habrían de naturalizarse previamente en el reino «con arreglo a la ley común», y los que simplemente residieran en alguna de las españolas, someterse «a todas las disposiciones del derecho común que rijan en España para los súbditos extranjeros» ⁵⁰. Precisión esta última oportuna, provocó, no obstante, la inmediata negativa del nuncio a aceptar el decreto, en razón de que dejaba a los religiosos foráneos «en la durísima y hasta cruel alterna-

iva de salir de España o de renunciar a su nacionalidad para poder vivir tranquilamente»⁵¹.

El Gabinete había notificado la existencia de las negociaciones al país en el mensaje de la corona al parlamento del 18 de mayo de 1903⁵². En seguida, la prensa divulgó el contenido de la propuesta, juzgando que, con ella, «el amplio sentido liberal del partido conservador ha acabado para siempre»; puesto que el fondo de aquellas bases era «poco satisfactorio para la potestad civil»⁵³.

Según fue difundida la errónea idea de que los tratos habían concluido y que el Ministerio pretendía publicar el decreto concordado en cuanto clausurase las Cortes, el tema tomó plaza en el Congreso, llevado en junio por Ordóñez y en julio por Moret, secundado por Canalejas y Almodóvar y, en parte, por Romero Robledo y Salmerón. Pero, el 18 de julio, un día después de que Abárzuza mandase a Rinaldini el proyecto de decreto modificado (que tal vez tuvo en ello la explicación a que aludíamos), el Gabinete en pleno dimitió⁵⁴, sin que siquiera fuese recibida acaso la protesta del nuncio.

Nunca fue confirmada la razón de la crisis, «cuyas causas quedarán para siempre envueltas entre sombras»⁵⁵. Pronto se atribuyó a un enfrentamiento, negado por Silvela, entre Maura y el rey, quizá molesto por el triunfo virtual de la Unión Republicana (que había conseguido aglutinar fuerzas dispersas del gorro frigio bajo la jefatura de Salmerón, entre ellas Costa) en las elecciones de abril para el Congreso. Había obtenido 36 escaños, en tanto que el Gobierno no contaba más que 232, en una cámara de 403, de los cuales 40 eran mauristas y ponían por tanto en Maura la suerte de Silvela. «Si el actual ministro de la Gobernación saliera del gobierno, si las necesidades de su política le llevasen a unir esa falange en cualquier momento de la discusión a las oposiciones, éstas sumarían 211 votos y el partido conservador sólo tendría 192»⁵⁶.

Los mauristas atribuyeron la caída a intrigas de Fernández Villaverde, que había abandonado el Ministerio ya⁵⁷, y este, a mero desacuerdo en el Gobierno «sobre la forma de concesión de algunos importantes créditos a varios capítulos del presupuesto del Ministerio de Marina, y sobre la cuestión más trascendental de la reorganización de los servicios de este Departamento, del programa de construcción de la nueva escuadra y del plan de recursos para realizarla»⁵⁸. Pero, en cualquier sentido, mostraba la escisión de los conservadores y aconsejó al monarca dar oportunidad a Villaverde —lugarteniente formulario de Silvela aún— para crear su propio Ministerio, que vivió hasta diciembre, a merced de una mayoría minimizada por el alejamiento del maurismo.

Conforme a sugerencias liberales, el nuevo Gabinete Fernández Villaverde sobreescribió la causa de la negociación con Roma, detenida además por el fallecimiento de León XIII en julio de 1903. En las Cortes, el tema religioso fue tratado en otoño, en torno a algunas algaradas anticlericales y a las obligaciones eclesiásticas del presupuesto estatal, y, al cabo, falto de mayoría parlamentaria (que había aclamado en el Congreso a Maura el 11 de noviembre, tras su discurso contra las explicaciones del Gobierno acerca de las elecciones municipales últimas, hasta el punto de animar a Silve-

la a cederle públicamente la jefatura conservadora), Villaverde cayó e de diciembre de 1903 ⁵⁹.

Con su Gobierno se apagaban, en realidad, los últimos vestigios del e lo de Cánovas: regalista y prudente por demás en los conflictos religiosos para no exasperar al fusionismo. Pese a que Villaverde había disenti de aquel hombre de Estado en 1891 al lado de Silvela, la postura de e era más indecisa ya desde 1896 al menos, en que empezó a acercarse las filas del tradicionalismo para constituir su propio partido. En 1899, Silvela había pretendido romper esa incipiente relación, según vimos. Pe en su último Gobierno, volvió a dejar constancia de su proclividad hacia l grupos titulados católicos al colmar las aspiraciones eclesiásticas según l planteara Alejandro Pidal en las últimas décadas: en pro de la libera zación del sistema educativo, que a ninguna institución como a la Iglesia l día beneficiar en España.

Tal pretensión había sido agudizada recientemente por la legislación tatalista de Romanones en 1901 y 2: segundo frente clave en el deba que provocaba desde entonces protestas ininterrumpidas en la prensa c fesional y en la jerarquía eclesiástica. La queja había cristalizado en Congreso Católico de Santiago de 1902, donde el clero y los tradicionalist formalizaron su oposición a los ataques que sufrían los institutos de p fección de la Iglesia y «la libertad académica de la enseñanza según la l fundamental». Concluían, en este caso, la necesidad de derogar aquella l gislación educativa del fusionismo y, en el primero, la urgencia de u acción defensiva de los religiosos por vías legales, el fomento de la pre católica y la «acción negativa» de ignorar la prensa anticlerical ⁶⁰.

La exposición que los quince prelados asistentes a la asamblea elevar al rey, para reclamar con acritud la protección de los religiosos y de enseñanza privada, apenas consiguió una respuesta displicente del Gobie no Sagasta ⁶¹. Pero, en 1903, Silvela satisfizo ambas cuestiones con aqu lla negociación fallida del decreto concordado y la presentación de un p yecto de reorganización de la enseñanza en sentido liberalizador. El 29 c mayo, el ministro conservador de Instrucción Pública leyó al Senado u proposición de ley según la cual «todo español podrá fundar y sostene establecimientos de instrucción y educación adoptando con entera liberta las disposiciones que juzgue más conducentes a su buen régimen literario». Al Estado competía solo «el derecho de inspeccionarlos en cuanto s refiera a la moral y condiciones higiénicas» y de sancionar los títulos co feridos con un examen final de reválida únicamente ⁶².

El tema fue llevado al Senado por Montero Ríos y al Congreso por Romanones, y, en las postrimerías del debate, envuelto en los discursos sobr la contestación del mensaje del trono, *Heraldo de Madrid* constató la nue va situación de la política española con acentos canalejistas no exentos d importancia: «El partido conservador de Cánovas murió con Cánovas ... Tuvo una debilidad el hombre de la Restauración: la de acoger en su tiendas a la falange desertora del ejército carlista; pero, al acogerla, l hizo abjurar de sus propósitos en favor de la unión católica, y al recibirla las *homradas masas*, las despojó, al menos en apariencia, de sus hábitos frailunos ...

No así después: el señor Silvela, de alma floja y desmayada, poco sensible al amor por las ideas, ha consentido que el caudal propio del partido conservador se engrose con afluentes místicos, y ya toda la corriente es una misma; toda ella corre, cada vez más crecida e impetuosa, a invadir tierras y lugares sobre los que quiere ejercer el dominio de la invasión»⁶³.

Es difícil saber en qué medida Silvela fue consciente de la transformación que él mismo había sancionado en el acuerdo con Polavieja de 1899, o si lo fue en diciembre de 1903 Maura. El Gobierno presidido por este entonces⁶⁴, sucesor del de Fernández Villaverde, fue saludado ya como expresión clerical. Y los acontecimientos inmediatos hicieron de él, de hecho, brazo armado de la Iglesia española con tonos semejantes y aun menos indecisos. Sobre todo lo fue desde el momento en que *El País* notificó el nombramiento para el arzobispo de Valencia de fray Bernardino Nozaleda, agustino que regía la sede de Manila durante el Desastre⁶⁵.

1. *El Convenio concordatario de Antonio Maura*

Lerroux y Morayta dieron estado parlamentario al tema de esta designación el 24 de diciembre de 1903, y, pese a la inmediata clausura de las Cortes⁶⁶, en adelante toda la prensa liberal, monárquica y republicana, sin apenas excepciones, prorrumpió en improperios. Se hablaba sobre todo de la hipotética responsabilidad de Nozaleda en la rendición de Manila en 1898 y de su trato posterior con las autoridades estadounidenses. Entre otros extremos de interés para la historia de la emancipación del archipiélago, ambas gestiones lo hacían inepto según los liberales para la sede valenciana, por antiespañol, y mostraba el inaudito atrevimiento del Ministerio al proponerlo⁶⁷.

En enero de 1904, se multiplicaron las manifestaciones soliviantadas contra Maura y Nozaleda desde todos los ángulos: Vega de Armijo, Salmerón, Canalejas, Romanones hablaron sobre ello; el tema fue popularizado incluso en los *couplets* de los teatros madrileños⁶⁸; la jerarquía protestó de la campaña en un documento colectivo rubricado por Sancha⁶⁹ y en varios escritos aislados⁷⁰, y, reabiertas las Cortes, Romanones interpeló al Gobierno sobre ello el 26, en un debate mantenido hasta el 4 de febrero por republicanos y fusionistas.

En rigor, no parece que hubiera, del lado del Gabinete, intento ideológico ninguno en la designación del agustino. Y la ofensiva liberal por otra parte, fuera de lo que en ella hubiese de sincero, debió abundar seguramente en raíces políticas más que patrióticas. (La presencia de Morayta y la complicación de la masonería en los discursos parlamentarios son un indicio, y el oportunismo obligado de los fusionistas, otro.) Algunos lo refirieron además al desprecio que Maura mostrada hacia la prensa, protagonista principal de la campaña⁷¹. Mas del Gobierno fue, en todo caso, la responsabilidad del nombramiento, «propuesto sin recomendación de nadie»⁷², a iniciativa de Sánchez de Toca, que, enemistado con Pidal y conocedor de la estrecha amistad que unía a este y al prelado,

quería simplemente, según dijo, alejar al arzobispo de su amigo ⁷³, en una diócesis cuya frecuente agitación lo desaconsejaban sin embargo.

Nozaleda se defendió en un escrito, la *Defensa obligada*, que publicó en febrero. Y denunció además a don Roberto Castrovido, director de *El País*, que había comenzado los dictámenes, para otorgarle su perdón una vez la sentencia del Supremo condenó al periodista en 1906 por falta de pruebas en sus acusaciones ⁷⁴. Para entonces, quizás aconsejado por la Santa Sede, el agustino había renunciado ya a la mitra de Valencia, y nunca volvió, en agosto de 1905, y había sido preconizado en diciembre como obispo titular de Petra ⁷⁵.

Desde el debate, Maura quedó teñido de un mayor tono antiliberal, pero no, patente en el arqueo que le hizo de la campaña Nozaleda Alejandro Pidal: «el *agigantamiento* de la figura de usted y la *picota de la prensa*. Después, ... la inocencia vindicada del sacerdote, del español, del religioso, del Prelado y de las Ordenes, y la reacción moral del país ... [sic] que se lamenta no cristalice en algo que no se desvanezca y se pierda» ⁷⁶.

En puntual relación, desde el momento en que el Gobierno anunció que ultimaría las negociaciones con la Santa Sede y que sus resultados serían impuestos por decreto, si sólo interpretaban el Concordato, o por la ley aceptada por las Cortes si lo modificaban, se aseguró que su actitud ante ello sería claudicante ⁷⁷. La ley sobre el descanso dominical, que presentó en marzo de 1904, fue también acusada de clerical, repudiada quizás especialmente por los pequeños industriales y comerciantes. Por otra parte, definidos en los grupos republicanos, desde la ofensiva a Nozaleda multiplicaban estos en las calles sus algaradas, y llegaron en las Cortes a la obstrucción de los proyectos del Gabinete más descomprometidos, en un entendimiento cada vez más sólido con el Partido Liberal ⁷⁸.

También el viaje de Alfonso XIII a Cataluña durante el mismo año fue presentado por los radicales como un proyecto aventurado, que aconsejaban al jefe del Gobierno el marqués de Comillas y otros hombres de significación católica, Alberto Rusiñol y algún nacionalista. Con él, Maura intentaba atraer «la parte del catalanismo que aportaron los reaccionarios, los clericales, los ultraconservadores», en una nueva versión, según se dijo, de lo realizado por Camilo Polavieja en el 98 ⁷⁹. Lo que, en el fondo, podía ser verdad, si no con esos términos, como enseñó muy pronto la escisión de la *esquerra* (pese a que en ella figurase el antiguo polaviejista Doménec Montaner ⁸⁰) y la continua presencia de Comillas en la organización de los festejos ⁸¹.

Respecto a las gestiones con el Vaticano, aunque el ministro de Estado Rodríguez San Pedro aseguró al Congreso en marzo que ya tocaban a su fin ⁸², no fueron reanudadas en realidad hasta el 5 de abril de 1904. La tranquilización de la opinión pública, clausuradas las Cortes ante el viaje real a Cataluña, hizo entonces «conveniente y hasta indispensable el no demorar por más tiempo la prosecución y rápido término de aquellas negociaciones, cuyos puntos principales estaban ya determinados de común acuerdo».

En la nota verbal donde rezaban estas líneas, el ministro justificó ante Rinaldini las últimas reformas del proyecto de decreto introducidas por

Abárzuza en julio de 1903. La reducción de los institutos comprendidos en él solo a los que hubieran cumplido las formalidades de la orden de 9 de abril de 1902 se encaminaba únicamente, dijo, a contabilizar cuáles se hallaban contemplados ya en el Concordato, y exceptuados por tanto de las disposiciones de la ley de asociaciones, y cuáles habían de atenerse en cambio al presente decreto. Si alguno no se hubiera inscrito en el registro civil, como determinaba aquella orden, «por dificultades burocráticas u otros motivos de trámite», «cabría que se solventase fácilmente por determinaciones ocasionales, tomadas en mutua inteligencia, hasta conseguir ... que todas las Congregaciones o Casas existentes real y legítimamente en España en el momento de publicarse las nuevas disposiciones, estuviesen realmente inscriptas».

En cuanto a la exigencia de que los religiosos extranjeros se naturalizasen en España para fundar comunidades, o que se sometieran al derecho común para los no españoles si solo pretendían residir en España, el ministro advertía la prohibición constitucional de que los extranjeros ejercieran cargos de autoridad sin previa nacionalización. Y, más prácticamente, subrayaba que lo contrario supondría «un obstáculo casi invencible para que cualquier Gobierno español autorizase una nueva Orden o Casa que tratase de establecer un extranjero». Por tanto, el Ministerio no transigía con la Santa Sede más que en la petición de que el acuerdo entrase en vigor en forma de ley y no de decreto ⁸³.

Consultado por el nuncio a Roma, Rampolla respondió que el Ministerio debía de formalizar la propuesta en un nuevo proyecto articulado ⁸⁴. Y así fue remitido a Rinaldini el 2 de mayo de 1904 por Rodríguez San Pedro, como proposición de convenio, no ya de real decreto, que reprodujo el modificado por Abárzuza de 17 de julio de 1903, con algunas variaciones terminológicas. Aprobado por la congregación romana pertinente el 10 de junio del año 4, con ligeros retoques, que fueron aceptadas por el Gabinete, el ministro indicó al nuncio simultáneamente la conveniencia de formar la comisión mixta para el estudio de la reorganización administrativa de culto y clero, tal vez a fin de paliar el efecto que el acuerdo suscitaría probablemente en los liberales. Firmado finalmente el Convenio el 19 por Rinaldini y Rodríguez San Pedro, la sanción del protocolo para crear aquella comisión fue dilatada por el Vaticano hasta mediado julio. El Gobierno debía de consignar en él la salvedad de que ninguna diócesis sería suprimida si entrañaba peligro de agitación contra la Santa Sede o el mismo Ministerio o si la propia diócesis podía mantenerse por medios propios ⁸⁵. No hubo temor. Durante mucho tiempo, la comisión no fue sino un propósito. El interés, por tanto, se centró en las medidas del Convenio sobre los institutos, cuya parte dispositiva, aun extensa, debe quizá de figurar aquí:

«1.º Las Ordenes y Congregaciones religiosas existentes en España en la fecha de la ratificación del presente convenio y que hayan cumplido antes de ella con las formalidades establecidas en la Real Orden circular de 9 de abril de 1902, gozarán de la personalidad jurídica de que hoy están en posesión, se considerarán comprendidas en la excepción establecida en

el párrafo primero del artículo 2.º de la ley de 30 de junio de 1887, y se regirán por sus reglas y disciplina propia y por las disposiciones de este mismo convenio.

2.º Las Ordenes y Congregaciones religiosas no tendrán derecho a subvención ni auxilio alguno del presupuesto del Estado, y estarán sometidas, en cuanto a su régimen canónico, a los diocesanos y Prelados propios, según las reglas de sus estatutos y las disposiciones del Derecho canónico y de la disciplina eclesiástica vigente, y en cuanto a las relaciones con el Poder civil, en las leyes generales del Reino.

En caso de discordancia, la Santa Sede y el Gobierno de S. M. se entenderán amigablemente para allanar las dificultades que pudieran surgir.

3.º Las casas o conventos de las citadas Ordenes y Congregaciones religiosas estarán sujetas a los impuestos del país por sus bienes o por las profesiones e industrias que ejerzan, en condiciones de igualdad respecto de las demás personas jurídicas o súbditos españoles, y no será objeto de ninguna tributación o exacción especial.

4.º Se mantendrán las casas y conventos que a la fecha de la ratificación de este convenio tengan establecidas las Ordenes y Congregaciones religiosas citadas en el artículo 1.º; pero no podrá abrirse ni establecerse ninguna otra en la que se haga vida común sin previo consentimiento del Prelado diocesano, y sin autorización dictada por Real orden. Estas autorizaciones se publicarán necesariamente en la *Gaceta de Madrid*.

5.º Las casas o conventos de las Ordenes y Congregaciones religiosas en que haya menos de doce individuos que hagan vida común se suprimirán, agregándose los religiosos o religiosas a otros conventos o casas de la misma Orden, y quedando los edificios y propiedades en que se hallasen establecidos los que supriman a la libre disposición de los superiores. Se exceptúan del anterior precepto las Comunidades religiosas que no hacen vida conventual o que en virtud del instituto, se dedican a obra de beneficencia, enseñanza, caridad y asistencia a los enfermos, a los ancianos, a los pobres y abandonados, como también las casas de procuración y los Sanatorios que pudieran tener las diferentes Ordenes y Congregaciones en algunos lugares especiales. El presente artículo tendrá fuerza ejecutiva transcurridos que sean seis meses de la publicación de este convenio en la *Gaceta de Madrid*.

6.º No se podrá establecer en España ninguna Orden o Congregación nueva sin que esté autorizada por Su Santidad y sin previo acuerdo del Gobierno con la Santa Sede, consignando en Real decreto publicado en la *Gaceta de Madrid*.

7.º La Orden de los Padres Escolapios continuará en las mismas condiciones, derechos y beneficios que hoy disfruta.

8.º Las asociaciones para fines religiosos, cuyos individuos no estén unidos por vínculos de profesión religiosa ni hagan vida común y, por tanto, no tengan el carácter de Orden o Congregación religiosa, se entienden de que, sin perjuicio de la autoridad que corresponde a los Obispos en la Dirección del régimen espiritual y religioso de las mismas, se regirán por la ley general de Asociaciones y los principios del Derecho común, sin limitación alguna para el presente y para lo porvenir, debiendo inscribirse

en el Registro especial a que se refiere el artículo 7.º de la mencionada ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887 y cumplir los demás preceptos de la misma.

9.º Los extranjeros no podrán constituir en España Ordenes y Congregaciones religiosas de las mencionadas en el artículo 1.º sin haberse naturalizado previamente en el Reino con arreglo a la ley común. Los religiosos que conservando su condición legal de extranjeros ingresen o residan en algún convento o casa religiosa existente en España, seguirán sujetos a todas las disposiciones del Derecho común vigentes para los súbditos extranjeros.

10.º En el Ministerio de Gracia y Justicia se abrirá un registro especial, en el que se inscribirán las Ordenes y las Congregaciones religiosas a que se refiere esta concesión y las que, por acuerdo de ambas potestades, se constituyan en lo sucesivo.

11.º El Ministerio de Gracia y Justicia, de acuerdo con el Consejo de Ministros y en concordia con la Santa Sede, dictará las medidas reglamentarias y aclaratorias que pudieran necesitar la ejecución del presente convenio en lo relativo a las Ordenes y Congregaciones religiosas establecidas, o que se establezcan, por acuerdo de las dos potestades.

12. El Canje de las ratificaciones del presente convenio se verificará en Madrid lo antes que fuere posible.

Madrid, 19 de junio de 1904»⁸⁰.

Publicado el acuerdo el 23 en la *Gaceta de Madrid*, fue leído el mismo día en el Senado⁸⁷ (reabiertas las Cortes a últimos de mayo) con el propósito de dejarlo «al sol durante los meses de verano» según frase de Maura⁸⁸. Pero la previsible discusión no respetó el estío. Inmediatamente, liberales de todas las tendencias, republicanos y monárquicos, empeñados en alcanzar la cohesión perdida, publicaron sin firmas un suelto de protesta en el que se comprometían a detener el paso del tratado en Cortes «por atentatorio a la soberanía del Estado»⁸⁹. La prensa prorrumpió de nuevo en manifestaciones contra lo que juzgaban cesión ante el Pontífice, hasta augurar la licitud de todo medio para ahogar la medida y la necesidad de constituir un bloque liberal, al ejemplo de Francia, que podría contar al menos con ciento ocho diputados del actual Congreso⁹⁰.

Para apoyar tal actitud, el periodista republicano Luis Morote dio a conocer su libro sobre *Los frailes en España*, aparecido seguramente en octubre. En él utilizaba, con cierto rigor, numerosos documentos de las negociaciones con la Santa Sede iniciadas en 1901 y ultimadas por Maura, a fin de defender el derecho del Estado a legislar en materia de institutos de perfección y resaltar la vejación a las prerrogativas del poder civil que palpitaba en los escritos vaticanos y en las claudicaciones de conservatismo. A juicio de Morote, era «caso de honra en las oposiciones liberales impedir que se apruebe el Convenio», en la alta cámara primero, y luego en el Congreso, con la obstrucción si fuera necesaria⁹¹.

Suspendidas las sesiones el 14 de julio de 1904, las agresiones anticlericales volvieron a recrudecerse durante el verano⁹² tal vez como eco de

recrudescimiento del problema político. Pero fue en el otoño cuando efectivamente la incipiente coalición liberal mantuvo en la cámara baja una actitud rayana en la violencia, que culminó en la obstrucción contra los suplicatorios para procesar a Lerroux, Soriano, Blasco Ibáñez y otros diputados republicanos por delitos de prensa⁹³. La discusión del acuerdo con la Santa Sede se prolongó del 3 al 28 de noviembre en el Senado. Acorde con las oposiciones, se habían repartido sus artículos para multiplicar las enmiendas —más de diez en total—, que pretendían alterarlos sustancialmente. Defendían en ellas la exégesis estricta del artículo 29 del Concordato (enmienda Sánchez Román), la disolución de las comunidades no autorizadas ni concordadas (López Mora), la sumisión de las demás a la ley de asociaciones (Ranero) y al derecho común sus establecimientos de enseñanza (Calleja y Portuondo) y económicos (Navarro Reverter), y la necesidad de una ley hecha en Cortes para la instalación de un instituto nuevo (Gimeno), entre otros extremos que informaron la discusión, con las notas significativas de Montero Ríos, cuyas declaraciones contrarias al Convenio habían sido rotundas en los prolegómenos del debate, y del obispo de Tuy, en nombre de la jerarquía eclesiástica.

En la votación definitiva, el texto fue aprobado por 157 votos contra 36. La abstención de los seguidores de Montero Ríos (los moretistas y los republicanos no votaron) hubiera sido suficiente para impedir el paso de la ley (al menos en la sesión del 29: puesto que bastantes senadores gubernamentales no asistieron), por falta de los 177 votos —la mitad más uno de los escaños que existían— necesarios para cualquier aprobación⁹⁴. Esto, en principio, denunció una vez más el desacuerdo entre los liberales, pero también el de los conservadores, y mostró sobre todo la inviabilidad del proyecto en el Congreso: «Empleando los medios reglamentarios para que la discusión sea detenida y minuciosa —había dicho de él *El Imparcial* en septiembre, invitando a la enmienda y la obstrucción—, acudiendo todos los diputados de las minorías ..., será rechazado ese convenio, que es una afrenta para el Estado español», con la que ni siquiera era segura la conformidad de los conservadores Villaverde y Dato. «Tal como se presenta el asunto —insistía el diario de Gasset—, van a tener razón aquellos que anunciaban que el señor Maura se contentará con que se discuta el concordato en la alta Cámara y no se atreverá a la batalla del Congreso»⁹⁵.

Fue así. En diciembre, el Congreso no discutió más tema religioso que las obligaciones eclesiásticas del presupuesto del Estado y los choques sangrientos entre republicanos y católicos en Valencia⁹⁶. El 14, el Gabinete en pleno dimitió por el asunto de la jefatura del cuarto militar de Alfonso XIII, querida para Loño por Linares, ministro de la Guerra, opuesto una vez más a Polavieja, candidato real⁹⁷.

El Ministerio Azcárraga, que lo sustituyó con el efímero programa de conseguir la aprobación de los presupuestos, anunció su propósito al país y al Pontífice de llevar al Congreso el Convenio con la Santa Sede⁹⁸; pero no tuvo tiempo. Suplido el 27 de enero de 1905 por un nuevo Gobierno de Fernández Villaverde, de pretensiones hacendísticas, que vivió sin las Cortes hasta junio, el acuerdo fue así sobrepasado.

El último conflicto religioso del período conservador lo suscitó la publicación de una carta en mayo en la que Alfonso XIII decía al cardenal asañes que estaba poniendo «verdadero empeño» para que el Gabinete abriera la apertura de una capilla protestante en Barcelona con signos exteriores, conforme a la interpretación usual del artículo 11 de la Constitución. El hecho pareció en principio marginal. Pero, en realidad, abría un nuevo frente —el de la libertad religiosa— en el programa del liberalismo.

A la letra, lo que el cardenal había pedido al rey, ante la noticia de la apertura de la capilla, no fue que la evitase sino que fuera despojada de los signos externos alusivos a su confesión. El primero de mayo, Alfonso XIII le respondió por esto «haberlo puesto a discusión hace ya días en el Consejo de mis ministros, y buscado de consuno con ellos el medio más eficaz de corregir un abuso incompatible con la legislación vigente y los unánimes sentimientos de la Nación española»⁹⁹. Publicada esta carta en el *Boletín Eclesiástico* barcelonés, quizás imprudentemente, Villaverde excusó cualquier explicación. Pero todavía el mismo boletín dio a conocer otra misiva, esta del propio jefe del Gobierno, donde decía al cardenal que, de acuerdo con la Constitución y la legislación, no se consentiría «la apertura de la capilla sin que desaparezcan todos los signos exteriores»¹⁰⁰.

Ante una comisión de las asociaciones católicas de Barcelona, Casañes afirmó, el 24 de mayo de 1905, que había publicado la carta del monarca por considerarla constitucional y porque de ella se había tratado ya en Consejo de ministros. Para entonces, sin embargo, la prensa liberal, incluso monárquica, se pronunciaba abiertamente contra el criterio y la real intervención: «El Rey —había subrayado *El Imparcial* el 18— no pude escribir cartas privadas en que se defina el más leve punto de derecho, ni la más insignificante materia del régimen nacional»¹⁰¹.

En el mejor de los casos, el escrito alfonsino fue atribuido al Gabinete: «Quería el Gobierno —sugirió *Heraldo de Madrid* el mismo día— halagar ciertos sentimientos, y desmintiendo sus antecedentes y rectificando por atavismo intolerable la historia de la Restauración, calificó de *atentado* hechos que los gobernantes liberales y conservadores realizaron en obediencia al texto constitucional»¹⁰². Pero, en rigor, Alfonso XIII quedaba contradicho incluso en esta excusa, y el asunto ofrecía, de otro lado, atractivo indudable para el Partido Fusionista. Reclamada ya por los republicanos bajo el Gobierno de Sagasta, la libertad de cultos podía convertirse en arma de cohesión.

El 15 y 16 de junio, Salmerón y Soriano dieron estado parlamentario al tema, firmando aquel una proposición a fin de que el Congreso declarase la carta «absolutamente incompatible con la esencia misma del régimen parlamentario y con la letra y el espíritu de la Constitución vigente»¹⁰³. No fue aprobada. Pero, unos días después, otra proposición carlista para ver si el Gobierno tenía mayoría dio al traste con él por 45 votos frente a 204, incluidos en estos los mauristas¹⁰⁴. Así, el dividido fusionismo recuperó el poder.

Se cumplía, con ello, una tercera fase del planteamiento de la cuestión religiosa española. Llevada primero a la política como arma contra la conjunción Silvela-Polavieja de 1899, precisada después como programa por el último Ministerio de Sagasta, la gestión del proyecto de la reforma concordada había sido el primer paso formal en la resolución de aquel problema. En verdad, el Convenio elaborado por el Gabinete de Silvela luego aprobado por el de Maura, podía permitir un control efectivo y el desenvolvimiento de los religiosos. Dejaba sometidos todos sus institutos a la legislación fiscal común, desprovistos de toda subvención privilegiada —salvo en el caso extraño de las Escuelas Pías—; pendientes de autorización ministerial los establecimientos nuevos; encauzada la inmigración francesa, en fin, según los propios moldes del derecho común.

Pero un principio sobre todos había enfrentado al liberalismo: el de legalizar globalmente en el Convenio la situación de todos los institutos ya establecidos, sin mantener la discusión sobre la enmarañada pluralidad de situaciones jurídicas en que se hallaban hasta entonces: concordados, autorizados, tolerados, por una legislación mal expresada y una praxis confusa. En esta tesitura, pues, el fusionismo había de librar su propia batalla por la estructuración de un estatuto jurídico intervencionista. Más acuciante cuanto más extremadas se venían mostrando las exigencias de demócratas y radicales, parecía más difícil ahora por el desacuerdo y el apuntado entre los propios liberales acerca de lo que se quería hacer. Dividido, el Partido Liberal llegaba así al Gobierno, en una de las coyunturas más débiles y críticas de su historia.

NOTAS

¹ Apud *El Liberal*, 23-II-1901.

² Cfr. José Francos Rodríguez: *La vida de Canalejas*, Madrid, Tip. de la «Rev. de Arch., Bibl. y Museos», 1918, pág. 280 s.

³ Cfr. Maura: *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, sesión de 11-IV-1902.

⁴ Las protestas contra ello se repiten en la prensa y en las Cortes de fin y comienzo de siglo.

⁵ *El Liberal*, 30-V-1902.

⁶ Vid. AMAE/SPS, leg. 2.677, expediente «Proyecto de reforma del Concordato», despacho 33, 5-IV-1902, donde el nuevo embajador en Roma, Gutiérrez Agüera, notifica al ministro de Estado la presentación del proyecto. Añade que, de la conversación mantenida, ha sacado la conclusión de que el Vaticano no se avendrá a que las negociaciones se lleven en Madrid y que «las hará depender de la solución que tengan las dificultades suscitadas con motivo del Decreto de 19 de Septiembre sobre Asociaciones Religiosas, respecto al cual me ha hablado [el secretario de Estado] de unas bases de arreglo que ha debido comunicar a V. E. el Nuncio de Su Santidad en Madrid». En el despacho núm. 37, 12-IV-1902, el embajador transcribe la nota con la que ha acompañado el proyecto de reforma al enviarlo a Rampolla. De real orden de 21-IV, el ministro de Estado acusa recibo y le manda copias de la documentación que ha resuelto el problema del cumplimiento del decreto de 19-IX-1901 (*ibídem*).

⁷ «No basta que estas instituciones religiosas —explicaba Teverga sobre ello— estén aprobadas por Su Santidad para que por esa sola circunstancia, aunque necesaria a la existencia canónica, se puedan establecer en España sin autorización del Gobierno y sin sujeción a la ley civil, porque de esta, y no de las disposiciones canónicas, reciben la sanción legal. = A nadie es dado sustraerse a la acción de las leyes del país donde se vive, y este principio universal de Derecho es también de general observancia en todas las naciones, obligando lo mismo al ciudadano que al extranjero, el cual es claro que no gana derecho alguno por el hecho de asociarse a los nacionales para constituir una personalidad jurídica, y obligando igualmente a las Asociaciones de todas clases, incluso las religiosas, si no están regidas por una ley especial que regule su existencia. = En España la hay, indudablemente, en cuanto a que el Concordato es ley del reino, para las Congregaciones religiosas por él autorizadas, toda vez que dichas Corporaciones están exceptuadas por el art. 2.º de la ley de Asociaciones, de la legislación común; pero todas las demás, aunque por un exceso de celo religioso, de todo punto inadmisibles, se pretenda que viven al amparo del Concordato, preciso será reconocer que no tienen en él cabida ni por virtud de él se han podido establecer, siendo, por tanto, preciso fijar, por modo definitivo, su existencia legal. = Acepta el Gobierno el principio de que, con arreglo a la Constitución del Estado y la ley de Asociaciones, todos los españoles tienen derecho a asociarse para los fines de la vida humana, pero con sujeción a las leyes que regulan su ejercicio, y claro está que, inspirándose en las ideas liberales que constituyen su programa de gobierno, no ha de excluir de esta regla general a los ciudadanos que quieren congregarse para hacer vida monástica, pero tampoco los ha de exceptuar del cumplimiento de los preceptos legales, siendo bajo este punto de vista necesario que por modo claro y preciso se establezca en el nuevo Convenio que las Congregaciones religiosas no comprendidas taxativamente en los artículos 29 y 30 del Concordato de 1851 estén sujetas a las disposiciones de la ley común que rige en toda España para todos los ciudadanos. = Sin duda se objetará que las Congregaciones religiosas no encajan bien en la ley de Asociaciones, ni por sus fines, ni por la regla o institución canónica por que se rigen, ni aun por las condiciones de su vida monástica; pero si tal ocurriera ... siempre será más fácil y ocasionaría menos conflictos aclarar los preceptos de la ley, en el sentido que sea preciso para asegurarles tranquila y pacífica existencia, que sacarlos de la legislación común y llevarlos a otra especial, que seguramente les sería más perjudicial y garantizaría menos su vida legal que la ley general, al amparo de la que viven todos los ciudadanos y todas las entidades jurídicas que en la nación existen. = También convendría poner límite...» (sigue lo transcrito arriba tras la nota) (Proyecto de reforma del Concordato, *ibidem*).

⁸ *Ibidem*. Reproduce, sin apenas variantes, todos estos párrafos del proyecto de reforma —y más— Luis Morote: *Los frailes en España*, Madrid, Imprenta de Fortanet, 1904, pág. 79-92 (BNM).

⁹ AMAE/SPS, leg. 2.677, exp. «Proyecto de reforma...»

¹⁰ *Ibidem*. Al acusar recibo del despacho del embajador de 12-IV-1902 por real orden de 26-IV, firmada por el subsecretario del ministerio de Estado, se había insistido ya en la necesidad de gestionar la reforma «con toda la actividad posible» (*ibidem*).

¹¹ Cfr. *ibidem*, despacho núm. 56, 10-VI-1902, del embajador al ministro de Estado.

¹² R. Ruiz Amado: *La inspección de la enseñanza privada*, «Razón y Fe», octubre 1902, 137. Cfr. *El Liberal*, 2-VII-1902.

¹³ El desacuerdo entre las intenciones templadas de Waldeck-Rousseau y el radicalismo de Combes fue advertido muy pronto en España: vid. *El Imparcial*, 20-V-1904, y Luis Morote: *op. cit.*, 5. Por lo demás es cuestión admitida en la historiografía francesa: vid. Paul Bouju y Henri Dubois: *La Troisième République*, París, Presses Universitaires de France, 1952, pág. 63, por citar una síntesis elemental.

¹⁴ Vid. *El Liberal*, todo julio y 4 y 8-VIII-1902.

¹⁵ *Ibidem*, 12-VIII-1902. Cfr. 1-VII y 13-VIII-1902.

¹⁶ *Ibidem*, 17-VIII-1902. Cfr. 18-VIII-1902.

¹⁷ «Art. 5.º En atención a las poderosas razones de necesidad y conveniencia que así lo persuaden, para la mayor comodidad y utilidad espiritual de los fieles, se hará una nueva división y circunscripción de Diócesis en toda la Península e islas adyacentes.» A continuación, el artículo enumeraba las silla metropolitanas y diócesanas mantenidas, suprimidas o creadas. Pero la redistribución de su territorio no se había realizado aún al comenzar el siglo XI, salvo en lo concerniente a las diócesis nuevas y suprimidas, que el propio Concordato detallaba ya (apud Federico Suárez: *Génesis del Concordato de 185. «Ius Canonicum»*, III (1963), 234).

¹⁸ «Artículo 1.º La Religión Católica, Apostólica, Romana, que con exclusión de cualquier otro culto continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de S. M. Católica, con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados Cánones. = Art. 2.º En su consecuencia, la instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas pías o privadas de cualquiera clase será en todo conforme a la doctrina de la misma Religión Católica; y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los Obispos y demás Prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe, y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas. = Art. 3.º Tampoco se pondrá impedimento alguno a dichos Prelados ni a los demás sagrados ministros en el ejercicio de sus funciones, ni los molestará nadie bajo ningún pretexto en cuanto se refiera al cumplimiento de los deberes de su cargo; antes bien cuidarán todas las autoridades del reino de guardarles y de que se les guarde el respeto y consideración debidos, según los divinos preceptos, y de que no se haga cosa alguna que pueda causarles desdoro o menosprecio. Su Majestad y su Real Gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo a los Obispos en los casos que le pidan, principalmente cuando hayan de oponerse a la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y pervertir sus costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos.» «Art. 43 Todo lo demás perteneciente a personas o cosas eclesiásticas, sobre lo que no se provee en los artículos anteriores, será dirigido y administrado según la disciplina de la Iglesia canónicamente vigente» (*ibidem*, 233-234, 248).

¹⁹ Apud despacho núm. 68, 27-VIII-1902, del embajador español ante la Santa Sede al ministro de Estado, AMAE/SPS, leg. 2.677, exp. «Proyecto de reforma...» Cfr. *ibidem*, telegrama del mismo al mismo, 26-VIII-1902.

²⁰ *El Liberal*, 6-IX-1902. Cfr. *ibidem*, 28-VIII y 7-IX-1902.

²¹ Apud Fernando Soldevilla: *El año político 1902*, Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1903, pág. 325-326. Cfr. *El Liberal*, 7 y 9-IX-1902.

²² Cfr. *El Liberal*, 21-IX-1902.

²³ Apud Fabié: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 18-VI-1880, donde consta íntegro el texto de la orden, al que pertenecen estas líneas.

²⁴ AMAE/SPS, leg. 2.677, exp. «Proyecto de reforma...»

²⁵ *El Liberal*, 21-IX-1902. Vid. *ibidem*, 22-IX-1902.

²⁶ He aquí el texto íntegro: «Mi querido amigo: = El Conde de la Unión cuya salida para Roma he teleografiado a V., lleva esta carta con la Real orden y contraproyecto en réplica a la contestación del Vaticano. = Sobre un punto del contraproyecto llamo la atención de V., aunque por [la] primera lectura lo percibirá. Me refiero a la base IV cuyo desarrollo actual ha de ser motivo de inmediatas preguntas. En la redacción de las bases formuladas por Teverga quedaba el concepto de la instalación de conventos de las órdenes no concordadas sin determinación. Se aprovechó la Curia Romana del silencio en tan importante extremo para proponernos su base VIII. Ha sido necesario razonar en la nota y condicionar en el contraproyecto la facultad del Gobierno para resolver en cuantas ocasiones se pretenda fundar un monasterio aunque sea de orden autorizada. = Otro punto ha de ser objeto de inmediatas demandas de

aplicación: la forma en que hayan de sujetarse a la ley común las órdenes no concordatarias. Ya se dice, a juicio mío, lo suficiente en la Real orden para que sea entendido el propósito. Si pretenden mayores esclarecimientos sería lo más conducente a obtenerlos que presente la Secretaría de Estado ejemplos prácticos. Nosotros contestaríamos. = El tono ... [aquí lo transcrito arriba] ... en el contraproyecto. Después de la amenaza de guerra civil se creyó fuerte para ganar aún más terreno del que tolerancias y negligencias les han dejado omar. = La resolución...» (de nuevo arriba) (carta de 23-IX-1902, AMAE/SPS, eg. 2.678, expediente «Proyecto de reforma del Concordato y Ley de Asociaciones»). Con la amenaza de guerra civil, quizá vuelve a aludir a la carta de León XIII a María Cristina de que hablamos en el capítulo anterior.

—²⁷ La promesa inspiró temores en la jerarquía eclesiástica. En septiembre de 1902, el arzobispo de Sevilla, Spinola, había dicho proyectar incluso una asamblea de los obispos senadores en Madrid, antes de la reapertura de las Cortes, para exigir del Ministerio «una declaración categórica acerca de lo que se propone hacer con las Asociaciones religiosas» y sobre las reformas de Instrucción pública (*El Liberal*, 24-X-1902; cfr. *ibidem*, 2 y 18-X-1902).

²⁸ Canalejas: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 5-XI-1902; cfr. *ibidem* 20-X a 6-XI-1902.

²⁹ *El Liberal*, 7-XI-1902.

³⁰ Cfr. Sagasta: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 19-XI-1902, y *El Liberal*, 3-XII-1902.

³¹ Conde de Romanones: *Sagasta, o el Político*, Madrid, Espasa Calpe, 1930, pág. 208.

³² Cit. Francos Rodríguez: *op. cit.*, 290.

³³ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 8-XII-1902.

³⁴ *El Español*, 1-VIII-1902, apud *El Liberal*, 2-VIII-1902.

³⁵ Cfr. Luis Antón de Olmet y Arturo García Carraffa: *Maura*, Madrid, Imprenta de «Alrededor del Mundo», 1913, pág. 247 ss.

³⁶ Maximiano García Venero: *Santiago Alba, monárquico de razón*, Madrid, Aguilar, 1963, pág. 64.

³⁷ Vid. *El Liberal*, 8-IX-1902.

³⁸ Cfr. *ibidem*, 22-XI a 21-XII-1902, y *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 24-XI-1902.

³⁹ *La Cruz* (1903), I, 48.

⁴⁰ Reproducidos *ibidem*, 50-70, 145-149, 230-240. En el mismo sentido, vid. el folleto de José Antonio Bragulat: *La reforma del Concordato*, Lérida, Imprenta de la Academia Bibliográfica, 1902.

⁴¹ *El Imparcial*, 15-III-1903. Para una valoración de esta coyuntura política, vid. Jesús Pabón: *Cambó, 1876-1918*, Barcelona, Ed. Alpha, 1952.

⁴² «Omitiendo otras observaciones que podrían hacerse [decía en concreto Rampolla], el Cardenal que suscribe se limitará a ocuparse en esta Nota de dos puntos principales, que dominan todo el proyecto de Convenio. = En primer lugar, el principio fundamental del contraproyecto del Gobierno, es la interpretación restrictiva dada al Concordato, especialmente en el art. 29. La Santa Sede ha excluido siempre dicha interpretación y los argumentos expuestos en la Nota del 3 de enero de este año conservan su valor, no obstante los hechos aducidos ahora en contrario por el Gobierno de S. M. = En efecto, si por una parte no se puede negar que el Decreto de 3 de mayo de 1854, con el cual se restablecía una Comunidad religiosa de Jerónimos en el Convento de El Escorial, fue revocado por otro de 11 de septiembre del mismo año, por considerarlo contrario al Concordato y a la Ley del 37, no debe omitirse por otra que Monseñor Franchi, Encargado de Negocios de la Santa Sede, no dejó en dicha circunstancia de hacer de palabra y por escrito las más vivas demostraciones, dirigidas a hacer notar que el motivo indicado en la exposición del Decreto de que el Concordato se oponía al restablecimiento de los Religiosos, al par que la Ley del 37, además de ser falso, era también sumamente ofensivo para la Santa Sede. = Del mismo modo, si la Santa Sede en 1880 no hizo observaciones contra la Circular emanada del Ministerio de Gracia y Justicia para

impedir que se estableciesen en el suelo español los Religiosos expulsados de Francia, la razón de este silencio se debe únicamente atribuir al hecho que, en realidad, no obstante dicha Circular, varias Ordenes o Congregaciones religiosas fueron libremente acogidas en España. Por lo tanto, la indicada actitud de la Santa Sede no prueba de ningún modo que aprobase las disposiciones contenidas en dicha Circular, que no tenía valor después de los hechos que venían verificándose. = No mayor [sic] que los antecedentes expuestos muestra deberse admitir la interpretación restrictiva del art. 29 del informe emitido a este propósito por el Consejo de Estado, toda vez que una opinión del Consejo de Estado, no es suficiente para fijar la interpretación de un pacto bilateral y de carácter internacional, tanto más cuanto que en tan solemne convenio las dos partes han estipulado expresamente en el art. 45, en que de hecho está comprendido el caso de que se trata, que las cuestiones eventuales se resolverán de acuerdo entre las dos Potestades. Además, de los informes comunicados a la Santa Sede resulta que la mayoría del Consejo sostuvo en efecto que debe entenderse por las palabras *otra Orden*, una Orden determinada y única que los Prelados colectivamente deberán indicar, mientras que la minoría, respetable por el número y calidad de las personas, opinó que cada Obispo debía determinar en su propia Diócesis una Orden entre las aprobadas por la Santa Sede. Esta divergencia hizo que el Gobierno suspendiera la resolución por algún tiempo, pero en 1868, de acuerdo con el Nuncio Monseñor Franchi, aceptó el parecer de la minoría, conviniendo además en que su aplicación debería ser gradual empezando por aquellas Diócesis que hubieran ofrecido mayor economía respecto a la adquisición de la casa y mayores facilidades por parte del personal. Si tal convenio no tuvo después efectos se debe exclusivamente a la revolución ocurrida en Septiembre de 1868. = Pasando ahora al segundo punto, el Gobierno desearía que los Institutos religiosos dependieran de los Prelados diocesanos, en virtud de la Nota cangeada a este propósito entre la Santa Sede y el Gobierno de S. M. Católica en la época de la conclusión del Concordato. = Pero importa recordar ante todo que en las negociaciones para la estipulación del Concordato, habiendo exigido el Gobierno que en artículo especial se declarase la dependencia de las Ordenes religiosas de los Prelados diocesanos, la Santa Sede opuso negativa formal, consintiendo sin embargo que se accediera a tal demanda del mejor modo posible con el cange de dos notas diplomáticas. = Esto no obstante, si bien se examinan tales documentos y el Breve respectivo del Sumo Pontífice Pío IX, expedido el 12 de abril de 1851 aparece con evidencia que se hizo entonces por la Santa Sede una concesión temporal, no destinada a ser renovada sucesivamente por tiempo indefinido. Dicho hecho tal concesión fue limitada *ad decenium* y renovada tres veces *ad quin quenium*, lo que indica claramente la temporalidad de la misma. Además tal disposición benigna fue motivada por las *peculiares condiciones* de España en aquel tiempo, como se lee en el Breve mismo, puesto que a causa de la dispersión de los Institutos religiosos por espacio de más de 15 años, no existían entonces en el territorio español Comunidades religiosas constituidas, sino más bien individuos dispersos, que era oportuno dependerían provisionalmente de los Prelados diocesanos, ya para facilitar la reorganización, o ya para evitar injustificables recelos de los partidos avanzados. Habiendo cesado por lo tanto aquellas *peculiares condiciones*, se deduce, como consecuencia lógica, que la concesión de que se trata, tampoco tiene ya razón de ser. Todo esto viene confirmado también por el hecho de que casi todas las Ordenes religiosas dependen ya desde hace varios años de sus respectivos Superiores Generales. = Por lo demás» .. (sigue lo transcrito arriba) (AMAE/SPS, leg. 2.677, expediente «Real decreto del Ministerio de la Gobernación de 19 de septiembre de 1902...»).

⁴³ *Ibidem*. Vid. allí mismo el expediente «Proyecto de reforma del Concordato», despacho núm. 81, 28-XI-1902, en el que el embajador subraya al ministro de Estado, recogiendo palabras de Rampolla, que la prohibición, aceptada por Roma, de que ningún instituto pudiera establecerse sin previo acuerdo entre ambas potestades, no había sido convenida con ninguna otra nación católica. Lo que mostraba, decía, la condescendencia de la Santa Sede.

⁴⁴ Aunque el Gobierno Silvela intentó reivindicar por decreto «la parte que le las regalías de la Corona retenían los Obispos para cubrir algunas dignidades y beneficios», según Juan de La Cierva y Peñafiel: *Notas de mi vida*, 2.ª ed., Madrid, Instituto Editorial Reus, 1955, pág. 50.

⁴⁵ AMAE/SPS, leg. 2.678, expediente «Negociaciones con la Santa Sede para regular la situación jurídica de las Ordenes religiosas por medio de un decreto concordado».

⁴⁶ Cfr. *ibidem*, expediente «Proyecto de reforma del Concordato y Ley de Asociaciones», carta de 2-IV-1903 del nuncio al ministro de Estado, donde dice: «Ne pouvant pas me rendre à l'audience diplomatique demain, vendredi, à cause d'une cérémonie religieuse, que je dois aller présider de 4 à 6 1/2 m.; j'ai pensé communiquer par écrit à Votre Excellence, ce que l'Eme. Cardinale Rampolla m'a répondu, par lettre reçue tout à l'heure, au sujet de l'ouverture confidentielle que me fit confidentiellement V. Ex. il y a 15 [¿14?] jours sur la question pendante des Ordres religieux. = Son Eminence a pris note du criterium de V. Ex. sur la manière de considérer les Communautés religieuses, s'éloignant de celui du gouvernement libéral, qui les désignait comme des simples associations religieuses, tandis que V. Ex. les considère comme elles sont au réalité, des Instituts ou corps organiques de l'Eglise. Mais quant à la base pour légaliser leur existence en Espagne (en dehors de celles comprises dans le Concordat), que V. Ex. aurait l'intention de proposer pour un nouveau Decret à concordar entre les deux pouvoirs, c. a. d. la base des Decrets d'autorisation officielle émanés jusqu'ici par les Gouvernements précédents; la S. Siège ne pourrait pas laisser de se préoccuper de toutes les autres communautés actuellement existantes, qui n'ont pas été autorisées par un acte officiel du gouvernement. Cette difficulté la S. Siège la considère bien grave, et pour cela il serait désirable et préférable que la dite base fût reformée d'avance, afin de que lorsque V. Ex. reprendrait les négociations diplomatiques sur la légalisation des Communautés religieuses existantes à présent en Espagne, on ne se heurte dès le commencement contre un obstacle très sérieux.»

⁴⁷ Carta de 20-V-1903 y contraproyecto adjunto, *ibidem*, expediente «Negociaciones con la Santa Sede...»

⁴⁸ Cfr. *ibidem* cartas del nuncio al ministro de 3 y 6-VI-1903 y del ministro al nuncio de 28-V y 10-VI-1903.

⁴⁹ Vid. *El Liberal*, 19-VI-1902.

⁵⁰ Proyecto adjunto a la carta del ministro al nuncio de 17-VII-1903, AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «Negociaciones con la Santa Sede...»

⁵¹ Carta del ministro de Estado, 18-VII-1903, *ibidem*. En ella, advertía además que, dado el mal estado de salud de León XIII —que, en efecto, falleció muy pronto—, no sabía cuándo podría recibir nuevas instrucciones de Roma.

⁵² Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 18-V-1903, y *Examen de las bases presentadas por el Gobierno de S. M. a la Santa Sede para la reforma del Concordato de 1851 según las ha publicado la prensa periódica* por el C. de P., Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, 1903, 40 pp. (BEV).

⁵³ *El Imparcial*, 23-V-1903.

⁵⁴ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 25-VI, 7 a 18-VII-1903.

⁵⁵ *Heraldo de Madrid*, 20-VII-1903.

⁵⁶ *El Imparcial*, 5-V-1903. Da cifras ligeramente distintas Miguel M. Cuadrado: *Elecciones y partidos políticos de España (1868-1931)*, Madrid, Taurus, 1969, vol. 2, pág. 699. Sobre la crisis, vid. Duque de Maura y Melchor Fernández Almagro: *Por qué cayó Alfonso XIII*, 2.ª ed., Madrid, Ed. Ambos Mundos, 1948, pág. 49 ss., y Carlos Seco Serrano: *Alfonso XIII y la crisis de la restauración*, Esplugues de Llobregat, Ariel, 1969, pág. 62 ss.

⁵⁷ El 23 de mayo de 1903, «situado en franco antagonismo respecto de Maura», según García Venero; *op. cit.*, 64.

⁵⁸ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-X-1903.

⁵⁹ Cfr. *ibidem*, 27 a 29-X, 11, 14, 18 a 25-XI-1903.

⁶⁰ *Crónica del Sexto Congreso...*, 432-433.

⁶¹ Vid. *El Liberal*, 12, 13, 14 y 18-VIII-1902.

⁶² Cit. *El Imparcial*, 30-V-1903.
⁶³ *Heraldo de Madrid*, 13-VII-1903. Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso*. 27-VI, 2 a 17-VII-1903.

⁶⁴ Con Rodríguez San Pedro en el ministerio de Estado, Sánchez de Toledo en Gracia y Justicia, Linares en Guerra, Ferrándiz en Marina, Osma en Hacienda, Sánchez Guerra en Gobernación, Domínguez Pascual en Instrucción pública, Allendesalazar en Agricultura y Maura en la Presidencia del Consejo (cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 7-XII-1903).

⁶⁵ El nombramiento fue comunicado por el encargado de negocios ante la Santa Sede al ministro de Estado el 14-XI-1903 (vid. AMAE/SCS. leg. 1.741), divulgado por *El País* el 24-XII y sancionado por decreto del último día del año.

⁶⁶ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 24 y 26-XII-1903.

⁶⁷ «He aquí los principales cargos que se me hacen, por el orden de su importancia: = 1.º Haber sido un traidor a la Patria y un mal español, por haber tenido tratos con los americanos durante el cerco de Manila y por haber negociado con el almirante Dewey la entrega de la plaza, valiéndome del capellán católico del *Olimpia*.—*El País*, 2 de enero.—*El Imparcial*, 3 de enero.—*El Liberal*, 4 de enero.—*El Imparcial*, 7 de enero; etc., etc. = 2.º Haber abogado celosamente en las Juntas de Autoridades, y singularmente en la habida después del segundo *ultimatum*, para que se rindiera la plaza, determinando con mi voto y con mi influencia el acuerdo de capitular.—*El País*, 2 de enero.—*El Liberal*, 5 de enero.—*Heraldo de Madrid*, 5 de enero.—*El Globo*, 6 de enero.—*El Imparcial*, 7 de enero. = 3.º Haber influido sobre las Autoridades españolas para la formación de las milicias filipinas, disposición que equivalía a decretar la pérdida de la Isla.—*La Correspondencia Militar*, 4 de enero.—*El Imparcial*, 5 de enero.—*El Liberal*, 5 de enero.—*Diario Universal*, 5 de enero. = 4.º Haber huido cobardemente de la ciudad sitiada, embarcándome en un buque alemán.—*El País*, 3 de enero; y otros. = 5.º Haber demostrado un patriotismo tibio y dudoso, no facilitando auxilios espirituales a los soldados que luchaban en las trincheras, ni procurando víveres a los defensores de la plaza y al vecindario de Manila que padecía hambre.—*El Imparcial*, 1.º de enero.—*El Imparcial*, 3 de enero.—*Heraldo de Madrid*, 5 de enero.—*El Globo*, 6 de enero.—*El Liberal*, 6 de enero; etc., etc. = 6.º Haber salido al encuentro de los americanos vencedores para saludarlos.—*El Imparcial*, 1.º de enero. = 7.º Haber negado ante los yanquis victoriosos mi condición de español, diciendo que sólo dependía del Papa. Haber negociado la nacionalidad americana. No haber querido nacionalizarme español, porque cobraba de los americanos.—*El Liberal*, 3 de enero.—*El País*, 3 de enero.—*El Liberal*, 4 de enero.—*El País*, 6 y 8 de enero. = 8.º Haber protestado del alojamiento de los soldados españoles en las iglesias y conventos después de la capitulación, y haberme presentado al General americano para conseguir de él que los arrojara de los templos.—*El Liberal*, 3 de enero.—*El Imparcial*, 7 de enero.—*Heraldo de Madrid*, 3 de enero.—*La Correspondencia Militar*, 4 de enero.—*El País*, 4 de enero.—*El Liberal*, 9 de enero. = 9.º Visitar diariamente a los americanos; haber ido a Cavite con el capellán del *Olimpia* y haber bendecido a los buques yanquis, y haber felicitado a los americanos en el aniversario de su triunfo sobre nuestra escuadra, pronunciando un discurso de salutación.—*La Correspondencia Militar*, 4 de enero.—*El Liberal*, 5 de enero.—*El País*, 8 de enero.—*El Liberal*, 3 de enero.—*Diario Universal*, 5 de enero. = 10.º Haber permanecido en mi puesto de Arzobispo de Manila, ejerciendo autoridad y jurisdicción, después de terminada en Filipinas la soberanía española, sometido a la dominación americana y bajo la inmediata dependencia de un Gobierno extranjero, por lo que dicen perdí mi nacionalidad española.—*El Imparcial*, 3 de enero.—*Diario Universal*, 3 de enero.—*El País*, 4 y 8 de enero; etc., etc. = 11. Haber prescindido del clero español, entendiéndome en seguida con el clero indígena distribuyéndole curatos, y haber organizado cultos para los católicos americanos después de la toma de Manila, y haber hecho que la procesión del Corpus fuese escoltada por las tropas americanas.—*El Imparcial*, 3 de enero.—*El Liberal*, 5 de enero.—*El Liberal*, 7 de enero. = 12. No haber salido de Filipinas hasta que los americanos dejaron de pagarme y me echaron de Fili-

inas, y entonces, en vez de venir directamente a España, haberme ido a Roma, como representante de las Ordenes religiosas, para defender allí sus cuantiosos bienes.—*El País*, 3 y 8 de enero.—*Diario Universal*, 3 de enero.—*El Imparcial*, 3 de enero.—*El Liberal*, 5 de enero.—*El Globo*, 6 de enero. = 13. Haber conspirado contra el general Blanco y haber intrigado para su relevo.—*Diario Universal*, 3 de enero.—*El País*, 4 de enero. = 14. Haber sido cruel y sanguinario, induciendo al general Polavieja a fusilar a Rojas y a Rizal, de quien me dicen asesino.—*El País*, 2 de enero.—*Diario Universal*, 3 de enero. = 15. Haber sido un déspota irritante, provocando con esta conducta el odio de los clérigos filipinos a España.—*El País*, 24 de diciembre.—*El Liberal*, 9 de enero.—*El País*, 7 de enero. = 16. Haber imposibilitado la pacificación del país después del pacto de Biacnabató, por defender los desmanes de los frailes con los naturales.—*Heraldo de Madrid*, 5 de enero.—*El Liberal*, 7 de enero.—*El País*, 8 de enero» (Nozaleda: *Defensa obligada contra acusaciones gratuitas*, Madrid, Establecimientos tipográficos hijos de J. A. García, 1904, pág. 6-8 (BNM)). Hay otra reseña de los cargos en Maura: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 3-II-1904. Además, había sido acusado ya por su comportamiento en el momento de los sucesos: Vid. Ugarte, *ibidem*, 18-VI-1898. Sobre los defensores del prelado, vid. Severino Aznar: *El affaire Nozaleda*, Madrid, Librería de Francisco Buendía, 1904, 43 pp. (BSP).

⁶⁸ Transcribe algunos Fernando Soldevilla: «En Valencia hay una silla / que es muy cómoda y muy buena. / Pero está llena de clavos... / ¡Cualquiera se sienta en ella!» «Con sayal de dominico / lo pasaron por aquí. / Llevaba la nariz fuera, / ¡por eso lo conocí!» «En tu puerta planté un pino / y en tu ventana un rosal. / Y en Valencia un dominico / no me lo dejan plantar.» «Los rusos, al ir ahora / a la guerra del Japón, / en vez de fusiles llevan / frailes de repetición.» «Quien a su Patria hace traición / sólo ante Dios la deuda paga, / y no merece ni el honor / de fusilarle por la espalda.» «Antes eran los Obispos / españoles, por lo menos: / ahora se guardan las mitras / para los filibusteros.» (apud *El año político 1904*, Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1905, págs. 5-8) (BDN).

⁶⁹ «Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros. = El Cardenal Arzobispo de Toledo, en nombre de todo el Episcopado español, y con la expresa autorización del mismo, recurre a V. E., oprimido su espíritu por la campaña sistemática de injurias, de calumnias y de escándalos que por medio de la prensa, de reuniones públicas y otras varias maneras se viene haciendo contra la Religión Católica, contra la Iglesia y Ordenes religiosas, y contra los principios fundamentales de la Monarquía española y de todo orden social; agravándose en estos momentos su profunda pena y justo dolor por la serie de agravios e injurias inferidos injustamente al docto y dignísimo Arzobispo de Manila, con motivo de su merecida presentación por S. M. el Rey (q. D. g.) para la Sede Arzobispal de Valencia. = El Episcopado español, Excmo. Señor, no puede menos de sentir y deplorar las ofensas hechas a uno de sus hermanos, esclarecido por sus servicios, méritos y virtudes, y creería faltar a su deber si no tomase su defensa al verle tan perseguido y contra toda razón calumniado. = Dígnese V. E., por lo tanto, admitir nuestra viva protesta que, en cumplimiento de ineludibles deberes del cargo episcopal, elevamos respetuosamente a V. E. contra los desmanes e injusticias aludidos; rogando encarecidamente a V. E. que con su alta autoridad ampare la fe de nuestros mayores y las Instituciones cristianas, combatidas y ultrajadas por un espíritu tenaz y sectario que sobre lastimar los derechos e inmunidad de la conciencia católica, es socialmente peligroso e incompatible con los sentimientos del verdadero patriotismo. = Toledo, 15 de enero de 1904.—El Cardenal Sancha, Arzobispo de Toledo» (apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 1-II-1904).

⁷⁰ De numerosos prelados y de los cabildos de Toledo, Valencia, Oviedo, Málaga, Osma y Covadonga, entre otras organizaciones católicas (cfr. Nozaleda: *op. cit.*, 54 ss.).

⁷¹ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 26-I a 4-II-1904, sobre todo las alusiones a la masonería de los días 29-I a 4-II, y al desprecio de la prensa en

29-I (Canalejas), 3-II (Moya) y 4-II (Ortega Munilla).

⁷² Maura, *ibidem*, 26-I-1904.

⁷³ Vid. La Cierva: *op. cit.*, 61, y Duque de Maura...: *op. cit.*, 128.

⁷⁴ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 7-I y 18-II-1904; *El Imparcial*, 10-II-1905; *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 15-VI-1906.

⁷⁵ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 14, 16 y 18-I, 18-II-1904, y el telegrama del embajador ante la Santa Sede al ministro de Estado, II-XII-1905, AMAE/SC leg. 1.741.

⁷⁶ Apud Duque de Maura...: *op. cit.*, 410. En el mismo sentido, vid. *ibidem* otra carta de Pidal a Maura, págs. 412-413.

⁷⁷ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, Maura, 7-XII-1903; Salmerón Canalejas, 11-XII-1903.

⁷⁸ Vid. *ibidem*, de enero a marzo de 1904, especialmente 22 y 23-II, 7, 16 22-III, y Melchor Fernández Almagro: *Historia del reinado de don Alfonso XII* 2.^a ed., Barcelona, Montaner y Simón, 1934, pág. 53. Hay una reseña de la historia de la ley en Joaquín de Encinas: *La tradición española y la revolución*, Madrid, Rialp, 1958, págs. 242-243.

⁷⁹ *Heraldo de Madrid*, 18-IV-1904. Cfr. *ibidem*, 22-III-1904.

⁸⁰ Cfr. Pabón: *op. cit.*, 241 ss.

⁸¹ Vid. Constantino Bayle: *El segundo Marqués de Comillas, Don Claudio López Bru*, Madrid, Administración de «Razón y Fe», 1928, págs. 94-96.

⁸² Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 16-III-1904.

⁸³ AMAE/SPS, leg. 2.678, «Negociaciones con la Santa Sede...»

⁸⁴ Ciertamente, la respuesta del cardenal no fue clara. En carta de 26-IV-1904 del nuncio al ministro de Estado, aquel transcribía así, en francés, la contestación del Secretario de Estado: «He sabido con placer las buenas disposiciones del Ministerio actual, relativamente a la muy importante cuestión de la situación jurídica de las Ordenes religiosas en España, y tengo, por consiguiente, la confianza de que se podrá finalmente llegar a un amistoso acuerdo cuando el Gobierno haya examinado y estatuido sobre algunas observaciones hechas por la Santa Sede, y presentadas por V. S. al señor ministro de Estado, y haya fijado su proyecto en todos sus detalles» (apud Morote: *op. cit.*, 138-139; cfr. el original en francés *loc. cit.*, nota anterior). Es posible que Rampolla no supiera que el Gabinete había respondido ya en la nota verbal de 5 de abril o que no diera a ésta valor oficial en tanto no estuviera escrita. Morote lo interpreta como añagaza diplomática: «curiosa, por no calificarla de otro modo» (*op. cit.*, 139).

⁸⁵ Cfr. AMAE/SPS, leg. 2.678, «Negociaciones con la Santa Sede...»: cartas del nuncio al ministro de Estado de 26-IV, 11 y 16-VI-1904; del ministro al nuncio de 14, 15 y 18-VI-1904; telegrama del ministro al embajador ante la Santa Sede de 4-VI-1904 y del embajador al ministro de 6 y 10-VI-1904. El 23-VI-1904, el ministro de Estado telegrafió al embajador ante la Santa Sede en estos términos: «Hoy habrá llegado ahí proyecto Protocolo remitido por Nuncio sobre nombramiento Comisión mixta convenida que proponga nueva circunscripción diócesis y otros extremos relacionados con ello. Siendo el Protocolo mera expresión de lo ya convenido en Notas de acuerdo y teniendo dicha Comisión carácter meramente informativo, interesa que el Cardenal Secretario de Estado manifieste pronto su aprobación y autorice Nuncio para la firma comunicándolo aunque sea por telégrafo = San Pedro» (AMAE/SCS, leg. 1.741). En carta del 24 inmediato, el nuncio comunicó al ministro, sin embargo, que, en el protocolo, debería de ser añadido un artículo donde constase que no se suprimiría ninguna diócesis con peligro grave de agitación popular contra el Vaticano o el Gobierno, ni tampoco si se podía mantener por medios propios, conforme había advertido Roma ya en su nota de 24-VIII-1902. Después de otras dos cartas del nuncio, de 29 y 30-VI-1904, en el mismo sentido, el ministro se avino a modificar el protocolo en respuesta fechada este último día. Prosiguieron intercambiando, ellos dos y el embajador en Roma, nuevas comunicaciones, hasta el 12-VII al menos (AMAE/SPS, leg. 2.677, expte. «Protocolo relativo al nombramiento de una comisión mixta...»), v. al cabo, se llegó al acuerdo contenido

en esta carta del nuncio al ministro, de 12-VII-1904: «*Son Eminence [Rampolla] en effet me dit que je suis autorisé par la St. Siège à firmer le projet de Protocole, dont il est question, à condition cependant que les deux clauses demandées par la Siège et acceptées déjà par le Gouvernement et que j'ai en l'honneur de Vous indiquer dans une lettre confidentielle du 24 Juin dernier, sans former objet d'un Article spécial dans le même Protocole, soient consacrées par un échange de Note Officielle entre le Gouvernement et le Nonce Apostolique*» (*ibidem*, leg. 2.678, Proyecto de reforma del Concordato y Ley de Asociaciones).

⁸⁶ Apud *Diario de las Sesiones... Senado*, 23-VI-1904, apéndice 2.

⁸⁷ Como proyecto de ley, fue precedido por esta significativa «Exposición a las Cortes»: «Dudas de carácter jurídico y necesidades de índole económica, motivaron negociaciones que han dado origen al convenio para cuya ratificación solicita el Gobierno de Su Majestad ser autorizado por las Cortes. = Versaban las expresadas negociaciones sobre la situación en que se encuentran en España las diferentes Ordenes religiosas establecidas de diversos modos, y sobre la interpretación y alcance que al efecto debiera darse, tanto a los artículos del Concordato vigente, que tratan de tan importantes materias, cuanto a los preceptos de la ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887 que con ella se relacionan; así como a las autorizaciones que fueron otorgadas a las Ordenes y casas religiosas existentes en territorio español, lo mismo que a las resoluciones dictadas acerca de tan capital asunto por los sucesivos Gobiernos de S. M.; y, por otra parte, tendían en su principio las mismas negociaciones a procurar la reducción de las actuales Diócesis y circunscripciones eclesiásticas, con otros puntos más o menos enlazados con esta deseada nueva división. = Con este doble objeto se comenzó a negociar en 1901, haciéndose directamente en Roma, entre Su Eminencia el Cardenal Rampolla, Secretario de Estado de Su Santidad el Papa León XIII, de santa memoria, y el Embajador de S. M. C.; llegándose como primer efecto de ello a concertar por el cambio de notas del 24 de agosto y 21 de septiembre de 1902, y a semejanza de lo que en alguna otra ocasión se había hecho, el establecimiento de una Comisión mixta que trazase el plan de la indicada reducción y demás extremos enlazados con esto, procurando armonizar con las necesidades del presupuesto la realización de los altos fines confiados a la Iglesia. = ... [El Gobierno tiene] la seguridad de que en el término breve quedará constituida y entrará en funciones la Comisión estipulada. = La segunda parte de dicha negociación, que ... tocaba a la situación jurídica de las Ordenes religiosas, comprende dos períodos muy marcados: uno que llega hasta el arreglo provisional contenido en la Real orden de 9 de abril de 1902 ...; y otro que abraza la continuación y término de dichas negociaciones, mantenidas en Madrid entre el Nuncio de Su Santidad y el Ministro de Estado, como prosecución y complemento de las iniciadas primeramente en Roma. = En este último período, considerando ambas potestades grandemente conveniente hacer desaparecer toda ambigüedad e incertidumbre en asunto de tanta trascendencia, y de no menor interés el fijar de modo estable la normalidad de cuanto se refiere a las Ordenes religiosas en España, han llegado al acuerdo que claramente se traduce en el convenio firmado el 19 del corriente, introduciendo algunas reformas en el vigente Concordato, aclarando las dudas suscitadas y tratando de evitar que surjan otras nuevas, mediante la deseada armonía entre las disposiciones de la Iglesia y de los derechos y la acción tuitiva del Estado» (*ibidem*).

⁸⁸ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 2-VII-1904.

⁸⁹ Cit. V. Minteguiaga: *La carta del Rey de la Constitución vigente*, «Razón y Fe», mayo-agosto 1905, 309.

⁹⁰ «El nuevo convenio —resumió *El Imparcial*, el 25-VI-1904— da por concordadas a todas las [órdenes y congregaciones] inscritas en 1902 conforme a la Real orden de 9 de Abril, y esto hace que el Estado no pueda legislar sobre ellas sino de acuerdo con Roma.» De modo que el Gobierno «se entrega ligado de pies y manos a la Iglesia». Vid. *ibidem*, *El Liberal* y *Heraldo de Madrid*,

del 23-VI en adelante y Suárez Inclán, *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 2 y 4-VII-1904.

⁹¹ *Op. cit.*, 193-194. Aunque en líneas generales la utilización de los documentos es correcta, hay algunos errores y omisiones de cierta importancia, que obligan a acudir a los originales, como venimos haciendo. Además, la investigación de Morote no fue exhaustiva y sobre todo, tuvo intenciones marcada y declaradamente polémicas, que provocaron la contestación de Máximo [Ángel Salcedo Ruiz]: *El Anticlericalismo y las Ordenes Religiosas en España (Historia.—Crítica.—Derecho)*, Madrid, Sáenz de Jubara hermanos, editores, 1908, 512 págs. I (BNM).

⁹² Vid. por ejemplo *El Imparcial*, 31-VIII y 19-IX-1904, y *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 14-VII-1904.

⁹³ Cfr. *ibidem*, 13 a 29-X-1904.

⁹⁴ Cfr. *ibidem*, *Senado*, 3 a 29-X-1904.

⁹⁵ *El Imparcial*, 2-IX-1904.

⁹⁶ Vid. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 3 a 13-XII-1904.

⁹⁷ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 15-XII-1904.

⁹⁸ Cfr. *ibidem*, 22-XII-1904. En su despacho número 101, de 29-XII-1904, el embajador ante la Santa Sede relató así al ministro de Estado su entrevista con Pío X: «Descendiendo a asuntos políticos me manifesté su vivo deseo de que el actual Ministerio continúe en el propósito que abrigaba el anterior de promover en el Congreso de Diputados la aprobación del proyecto de autorización para ratificar el Convenio con la Santa Sede recientemente votado por el Senado; y aunque sin instrucciones especiales de V. E. me he creído en el caso de exponerle que así debía esperarse atendida la significación política del Gobierno y las manifestaciones públicas hechas por el mismo acerca de este punto.» El ministro contestó al embajador, para que lo transmitiera en el Vaticano, por real orden de 4-I-1905: «En respuesta debo manifestar a V. E. que, aunque subido al poder en circunstancias difíciles, el actual Gobierno, como continuador de la política conservadora, procurará cumplir, en cuanto sea posible, los compromisos del que le ha precedido.» El 20, en su despacho núm. 10, el embajador le notificó por último que ya lo había comunicado (AMAE/SCS, leg. 1.741).

⁹⁹ «Madrid, 1.º de Mayo de 1905. = Muy Reverendo Señor Cardenal: = Con gran interés y profunda simpatía he leído la carta que V. Emcia. se ha servido dirigirme en el día 22 del mes pasado, cuyo contenido viene a confirmar noticias que ya tenía acerca del intento de abrir una nueva capilla protestante en la católica ciudad de Barcelona.. = Que pongo verdadero empeño en ver resuelto este asunto según lo claramente establecido en el texto de la Ley Fundamental y las posteriores disposiciones ejecutorias de la misma, pruébalo el hecho de haberlo puesto a discusión... [aquí lo transcrito en el texto]... Nación española. = Como Rey católico e hijo sumiso y creyente de la única Iglesia verdadera, me apena profundamente este nuevo atentado a la Fe de nuestros mayores y a la Religión del Estado, cuyos destinos ha tenido a bien confiarme en estos momentos la Divina Providencia, y no vacilo en asegurarle, Señor Cardenal, que he de hacer cuanto pueda dentro de mis atribuciones de Soberano Constitucional para que por mi Gobierno se desbaraten los proyectos que expone V. Emcia., de quien imploro la bendición reiterándole toda mi respetuosa estimación y cariñosa benevolencia. = Alfonso XIII = Emmo. Señor Cardenal Salvador Casañas y Pagés, Obispo de Barcelona» (apud *Revista Popular*, 18-V-1905).

¹⁰⁰ «Madrid, 2 Mayo 1905. = Emmo. Sr. Cardenal Casañas, Obispo de Barcelona. = Venerable Prelado y distinguido amigo: Desde que me escribió V. Emcia., no he dejado de ocuparme en el asunto a que se refiere su carta relativa a la apertura de una capilla protestante en Barcelona. Empecé por comunicar aquel escrito al señor Ministro de la Gobernación, celebré después con él una conferencia y, por último, hemos tratado de los graves asuntos que abraza, en Consejo de Ministros. = Nuestro acuerdo ha sido, naturalmente, conforme al texto de la ley fundamental del Estado y a las Reales órdenes vigen-

es, que declaran su sentido. No se consentirá, pues, la apertura de la capilla sin que desaparezcan todos los signos exteriores a que V. Emcia. en su carta se refiere; no habrá, pues, condescendencia, y las leyes del Reino serán fielmente cumplidas. En tal sentido contestará también el Gobierno a la nota que ya he recibido del Gobierno inglés. = Es con la mayor consideración su atento amigo y s. s. q. b. s. a. p. = R. Villaverde» (*ibídem*, 11-V-1905). Puede seguirse el eco intenso que hace la prensa a este escrito y al transcrito en la nota anterior en *El Siglo Futuro*, 17-V-1905 (que copia la carta del rey) y ss. Vid. también Minteguiaga: *La carta del rey...*, 295-306; *El Imparcial*, *El Liberal* y *Heraldo de Madrid*, 16-V-1905 ss.

¹⁰¹ *El Imparcial*, 18-V-1905.

¹⁰² *Heraldo de Madrid*, 18-V-1905.

¹⁰³ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 15-VI-1905. Cfr. *ibídem*, 16-VI-1905.

¹⁰⁴ Cfr. *ibídem*, 14 a 21-VI-1905.

VII. SOLUCIONES Y QUIEBRA DEL PARTIDO LIBERAL FUSIONISTA, 1903-1907

1. *Génesis y disgregación del fusionismo*¹

El desacuerdo entre los mismos liberales sobre el programa anticlerical a seguir era muy explicable ante la historia fusionista del cuarto último del siglo. El partido se había ido formando por un continuo acopio de agrupaciones que nacían para reivindicar la Constitución de 1869, compendio del individualismo, que instauraba entre otras la plena libertad de cultos y enseñanza. Grupos que, sin embargo, al cabo habían ido transigiendo con el sistema de convivencia establecido por Cánovas.

Uno de los primeros en ceder, ya en el 75, fue el mismo Sagasta, jefe de los llamados constitucionales (precisamente por defender el texto del 69), que acató a Alfonso XII ante el ejemplo semejante de algunos correligionarios. Rodeado por hombres de prestigio, su triunfo entre las minorías en las elecciones para las Cortes de 1876 ya prejuzgó su elevación al rango de «oposición de Su Majestad» en el bipartidismo pretendido, aunque intentase Cánovas, fallidamente, confiar a Ruiz Zorrilla la formación del necesario Partido Liberal.

Tal rango, no obstante, había requerido que Sagasta aceptara los presupuestos canovistas, que habían de concretarse en una Constitución, la del 76, amplia pero conservadora. Y esta cesión dio excusa al general Serrano para formar otro partido en el 76 aún, secundado por su incondicional López Domínguez, con el código del 69 por bandera. Este partido se convertiría en Izquierda Monárquica en 1882, por la fusión del grupo de Serrano y el Partido Democrático Monárquico, creado en el 81 por hombres que se habían alejado de Sagasta, Moret entre ellos, por el mismo prurito constitucional.

La Izquierda sirvió de puente de acceso a la monarquía alfonsina a antiguos progresistas, como Montero Ríos, y republicanos como Canalejas. Llegó a formar incluso Ministerio en 1883. Pero, a partir del 85, se diluyó en las filas de Sagasta, llamadas fusionistas ya por la adhesión de algunos disidentes (Alonso Martínez, Vega de Armijo y Venancio González entre otros) que habían pretendido en el 76 constituir un grupo más, de centro, entre el liberal y el de Cánovas.

Fortalecido de este modo, el frente sagastino restableció de hecho y de derecho, en los años siguientes, las libertades del 69: también la de enseñanza y la de asociación, que permitieron el desarrollo fulgurante de la educación y del estado religioso, autorizados por los gobiernos fusionistas en cumplimiento de su fin programático, en pro de un régimen universal de libertad.

Lejos de todo intento de radicalismo, los sagastinos secundaron el cuidadoso tacto de los canovistas al afrontar los temas eclesiales, en actitud expresa desde el comienzo. En el mensaje de la corona a las Cortes de 1881, el primer Gabinete liberal cuidó ya de advertir su «adhesión

filial a la Iglesia» y subrayar que las relaciones con la Santa Sede era «tan afectuosas y cordiales como cumple a la historia y a las veneradas tradiciones católicas de la Nación española»². El Gobierno de la Izquierda Monárquica del 83 mantuvo esta actitud también, incluso con altisonante declaraciones confesionalistas³. Y, en la fórmula de unión de este partido con el de Sagasta, se hizo constar tan solo el propósito de garantizar la tolerancia religiosa del artículo 11 —sin aludir a libertad de cultos— y los demás principios liberales de la Constitución conservadora: «las leyes no podían prohibir y restringir por ninguna causa, incluso de religión, aquellos derechos, ni su posesión y ejercicio»⁴.

Desde 1885, «el partido liberal —diría el conservador Silvela— inició su política en la Regencia bajo las aspiraciones de la más exquisita prudencia, poniendo singular empeño en tranquilizar los sentimientos católicos del país, con el sano propósito de no suscitar alarmas ni proporcionar elementos de agitación pasional al carlismo»⁵.

Igual disposición volvió a exteriorizarse en la ley tolerante de 1887 promulgada por un Gobierno fusionista previo consentimiento pedido a León XIII, para considerar válidos los matrimonios civiles entre los no católicos, y en la de asociaciones, en el mismo año⁶. Así, una década más tarde, Pi y Margall acusaba a los sagastinos de no haber restablecido la libertad religiosa como habían hecho con las demás libertades de la Constitución de 1869. Y, por eso también, cuando el problema religioso fue replanteado en 1899, Gamazo recordó que él militaba aún en el Partido Liberal que había merecido las bendiciones de los papas⁷.

Era difícil, pues, hallar razones en el pasado de los fusionistas para abogar ahora por la limitación de la libertad asociativa —no así para la libertad de cultos, que, en cambio, apenas recordaban—. Se imponía, por tanto, no un regreso al programa abandonado del 69, sino una revisión de sus principios mismos individualistas, incardinada desde luego en la evolución estatalista del liberalismo europeo coetáneo. Y esto había de ser cuestión difícil, aun en el propio seno del partido: difícil y crucial, cuando en 1903 murió Sagasta sin claro sucesor.

Consciente acaso de los dos problemas, sucesorio e ideológico, en diciembre de 1902, Sagasta había encomendado la radacción del nuevo y necesario programa del partido a Eugenio Montero Ríos, jurista insigne, ministro de don Amadeo y plenipotenciario en la conferencia de París de 1898. A la muerte de aquél, en enero inmediato, una reunión de ex ministros del partido (a la que no asistieron ya los canalejistas, separados del grupo en 1902 según veíamos, precisamente por la ambigüedad de la política religiosa) ratificó el encargo al canonista gallego, sin abordar en cambio el tema de la vacante jefatura.

En su proyecto de programa, Montero Ríos sancionó, sobre los institutos de perfección cristiana, la total libertad de asociación, conforme a los tradicionales principios del liberalismo, y, en las actividades temporales, su completa sumisión al derecho común: en un puro regreso al planteamiento del 69, por tanto, ratificado con las aspiraciones a la separación entre la Iglesia y el Estado, que también consignaba, probablemente sugeridas por el caso francés.

Pero en la discusión de este programa en otra reunión de ex ministros, aún en enero del año 3, solo y precisamente la parte religiosa del escrito fue rechazada. Manifestada así la crisis, en adelante, un directorio nombrado para ello (Montero Ríos, Puigcerver, Groizard, Teverga y Almodóvar) intentó llegar a un entendimiento en varias reuniones, fracasadas también. Porque, al liberalismo puro de los dos primeros, oponían los otros, apoyados por hombres como Moret y Romanones, la actitud regalista ya formulada en la correspondencia con la Santa Sede de 1901 y 1902, que había de permitir al Estado la intervención en el desenvolvimiento de la vida regular.

De momento, el temor a la ruptura del partido llevó a la aprobación de un programa sin alusión concreta al tema religioso, consignando además el mantenimiento de la libertad de asociación en cuanto fuera compatible con la moral y el derecho ⁸.

Mas la ruptura quedó patente en mayo de 1903, cuando Montero Ríos se separó del directorio por el empeño de este en convocar una asamblea de la minoría parlamentaria, que él juzgó inoportuna ante las previsibles escisiones que en ella habían de aflorar ⁹.

El 15 de noviembre, con todo, otra asamblea promovida por Romanones y Merino para elegir caudillo, con asistencia de cuantos liberales hubieran sido alguna vez diputados o senadores, fracasó en el intento. Y esto arrojó a ambos bandos a la organización autónoma de las propias fuerzas. Aun en noviembre, inmediatamente después de la asamblea, Montero fundó el Partido Liberal Democrático con Canalejas y López Domínguez, quien, en 1902, alejado asimismo de Sagasta, había creado un nuevo grupo regeneracionista sin programa concreto ¹⁰. El acuerdo de ahora se hizo sobre un proyecto de programa escrito por Canalejas, que puso buen cuidado en aclarar especialmente la cuestión religiosa hasta llegar a «una absoluta coincidencia en el criterio y soluciones de gobierno» ¹¹. Coincidencia sorprendente y dudosa —acaso mera táctica— por la reconocida moderación de Montero Ríos ¹², a pesar de sus declaraciones filorradicales de entonces.

Moret fue proclamado jefe por los demás, Romanones entre ellos, que, más afín a Canalejas, no encontró sin embargo puesto en las filas directivas de este ¹³. En tanto, mantenía posición paralela a la de Moret y Montero, sin fuerza apenas pero con plena autonomía, el marqués de la Vega de Armijo, principal superviviente de aquel otro partido de centro nacido en el 76 entre conservadores y liberales.

Se rehacía, pues, el cuadro de fracciones que habían constituido el fusionismo. Escalonados los grupos originarios y los de ahora según el orden Vega de Armijo-Moret-Montero-López Domínguez-Canalejas, el equilibrio de las fuerzas no permitía suponer una avenencia próxima. La ruptura había sido impuesta porque en la asamblea colectiva del 15 de noviembre de 1903, ninguno de los candidatos a la jefatura obtuvo las dos terceras partes acordadas de los sufragios de los asistentes, en una votación que vino a cuantificar las tres posturas. Frente a 210 monteristas, 194 votaron a Moret, y sólo uno al marqués de la Vega de Armijo. En las minorías parlamentarias, la proporción no fue la misma. Cuando en noviem-

bre de 1904 votó el Senado el Convenio del Gobierno Maura con el Vaticano sobre el problema religioso, 36 senadores lo hicieron con Montero, y sólo 15 fueron a la abstención entre los liberales restantes y los republicanos¹⁴. En el Congreso, eran canalejistas 9 diputados, y 93, liberales¹⁵, cuya distribución, no obstante, no ha sido realizada.

En esta coyuntura, la evidencia de la necesidad de unión replanteó, como en enero del 99, el tema de la concentración de las izquierdas, ahora sugerida por el ejemplo galo. Definida por Clemenceau, la formación de un *bloc*, que habían comenzado Waldeck-Rousseau y Combes, parecía el único escape del liberalismo ante la cohesión de los conservadores y la amenaza del tradicionalismo, esforzado a la acción durante el cuarto último del siglo. Y así fue reclamada nuevamente en España en la primavera de 1904¹⁶, como ratificación del acuerdo que venían mostrando las minorías en la oposición a Maura desde el planteamiento del caso Nozaleda.

La conclusión en junio de aquel Convenio con la Santa Sede, juzgado como sumisión del Estado a la Iglesia, alentó expresamente la formación del bloque¹⁷. Incluso se entrevió en la publicación de aquel suelto de protesta contra el tratado, suscrito por «los liberales y demócratas monárquicos y los republicanos». En él, no obstante, se aludía también a «las fundamentales e irreductibles diferencias que los separan»¹⁸, y, en último término, concertó sólo una acción de defensa, únicamente negativa.

La urgencia de fijar los términos de este ataque contra el Convenio, que había clausurado el ínterin abierto por el *modus vivendi* de 1902 por medio del reconocimiento legal de todos los institutos establecidos ya en España, cristalizó en octubre del año 4, en la entrevista de Montero Ríos, Vega de Armijo, López Domínguez y Canalejas. Tras ella, pudo este convencer a Moret para la formación de una ponencia, constituida por Gullón, Romanones y Teverga, encargada de estudiar la unidad necesaria de criterio y conducta. En su proposición, la comisión llegó a un acuerdo mínimo sobre el problema religioso. Todos los liberales aceptaban el deber estatal «de mantener, mientras subsistan sus compromisos actuales, las dos Ordenes [religiosas de San Felipe Neri y San Vicente de Paúl] pactadas en el vigente Convenio [concordatario de 1851] y otra, solamente otra, para la totalidad de nuestro territorio, sometiendo cuantas con distintos fines, diversas denominaciones o diferente carácter pretendan introducirse, a todos, absolutamente todos los preceptos que determinen y regulen el establecimiento y la vida de las Asociaciones y Corporaciones laicas»¹⁹. Pero no precisaron si el derecho común sería reformado para facilitar la vida religiosa, como intentó Sagasta en 1901, o si el Estado haría uso de alguna regalía para regir, limitar y suprimir incluso los establecimientos regulares.

Aún en octubre de 1904, Moret manifestó a Montero Ríos la conveniencia de unir completamente las dos fracciones; puesto que ya se habían entendido en las ideas. Pero, en la correspondencia publicada entonces, dejó éste la decisión a sus adictos, sin animarles a ello²⁰. Y, cuando, el 29, el Senado votó el Convenio con la Santa Sede, la diversidad quedó bien demostrada en la abstención de los seguidores de Moret en la votación frente a la participación de los monteristas. Aun siendo negativa, dio el

En las elecciones generales fueron designados 229 liberales ²⁶, esc mayoría de por sí, cuya distribución entre los jefes oficiosos del liberalismo supeditaba la estabilidad del Gabinete, y de cuantos pudieran sunderle, a un juego de equilibrio en la gobernación, capaz de contentar pareceres de todas las fracciones. Esta razón acaso indujo al presidente del consejo a abordar un programa ya totalmente descomprometido, centrado en la aprobación de un presupuesto con superávit por medio de la reducción de los gastos del Estado: razón de ser tan importante como inválida: puesto que se trataba del programa aireado por los conservadores desde 1891 al menos.

En el discurso de la corona en la apertura de las Cortes del año 1901 el Gobierno ofreció protocolariamente resolver «la cuestión de las Congregaciones religiosas, acatando como es debido los intereses eternos de la Iglesia, sin mermar por ello la integridad de la soberanía del Estado». Pero, de hecho, nunca reanudó negociaciones con la Santa Sede ²⁷ y, en noviembre, Montero Ríos manifestó públicamente su intención de rechazar toda ingerencia del clero regular en la política, pero de respetar también su derecho a existir. «Ni soy regalista ni jacobino —dijo—; soy liberal demócrata.» El Ministerio mantendría, pues, el régimen privilegiado que el Concordato concedía a algunos institutos de perfección, y los demás podrían subsistir dentro de la legislación común ²⁸.

En adelante, en el debate en torno a la respuesta al discurso del trono la cuestión religiosa fue eludida ²⁹. Y cuando, el primero de diciembre, dejó Montero Ríos el poder, seguramente disconforme y débil ante la procedente demostración de fuerza del ejército en el asalto de noviembre a los locales del *¡Cu-Cut!* y de la *Veu de Catalunya* por una crítica infundada ³¹, las desconfianzas de los republicanos ante la seriedad del anticlericalismo fusionista se habían vuelto a plantear ³².

Agitado de nuevo el tradicionalismo en torno a su posible intervención en la política legal; mejor unidos los conservadores con Maura tras el fallecimiento de Fernández Villaverde en julio ³³; triunfantes los catalanes en las elecciones municipales de noviembre, hasta entenderse incluídos con la Unión Republicana a raíz de aquellos atentados de la oficialidad barcelonesa ³⁴; no le quedaba al Gabinete que presidió Moret, al sucesor de Montero Ríos, otra salida que la de pretender de nuevo el bloque de izquierdas, con aires de defensa nacional a la Waldeck-Rousseau, frente al nacionalismo y el clericalismo.

Abordó el primer frente con la presentación del proyecto de ley de jurisdicciones en enero del año 6, por el que los autores de delitos contra el ejército quedaban sometidos al fuero militar en vez de a la jurisdicción civil. Aprobada esta ley en marzo, el interregno consiguiente para la boda del monarca dejó al Gabinete en la necesidad de autojustificar su permanencia ³⁵.

En la presentación del Ministerio a Cortes, en diciembre de 1905, Moret había ofrecido presentar el proyecto de ley de asociaciones elaborada por Canalejas, Almodóvar, Montilla y él en 1902, para regular la vida religiosa ³⁶. Las minorías radicales desconfiaron de ello: porque, en el año 2, Moret mismo había abandonado luego, con Sagasta, tales ofrecimientos.

orum suficiente para la aprobación, según quedó indicado, y estuvo al orde de separar por ello a Canalejas del grupo democrático.

Así, en junio de 1905, cuando, caído Villaverde del poder, y con él el conservatismo, Montero Ríos fue encargado de constituir el nuevo Gabinete, Moret declaró acatar su jefatura. Pero advirtió que, en adelante, sería jefe del Partido Liberal el mismo que lo fuera del Gobierno y, de hecho, no dio facilidad alguna para la formación del Ministerio ²¹.

Radicalización del liberalismo histórico

Latente esta divergencia sobre la solución del problema religioso en la raíz del desacuerdo, la piedra de toque de los gobiernos del partido se guió desde el comienzo en las negociaciones con la Santa Sede.

Las dificultades provenían tanto de la expectación de los republicanos demócratas ante el comportamiento que sobre ello siguiera el fusionismo como de la exigencia de la postura vaticana, justificada en aquel convenio entre Madrid y Roma sobre institutos de perfección cristiana, ratificado por el Senado sólo y apoyado por conservadores y tradicionalistas. El nuncio Rinaldini recordó expresamente su existencia a los nuevos ministros de Estado y Gracia y Justicia ²². Mas también los canalejistas le hicieron enseguida eco de la opinión contraria. En un editorial de rancos Rodríguez, *Heraldo de Madrid* lo subrayó en términos precisos, le perfilaban la disyuntiva del nuevo Ministerio: «En aquello que se entiende ser propio de un régimen mixto, o ya concordado entre la Iglesia y el Poder civil, la única línea de conducta, de corrección y de probidad contractual es el proceder de mutuo acuerdo entre ambas potestades; pero, entiéndase bien, exclusivamente en lo que se refiere a la ejecución y aplicación de aquel régimen establecido o pactado, no, ni nunca, al establecimiento de soslayo de otro nuevo, siquiera se pretenda explicarlo, y un justificarlo, por la improcedencia de un *modus vivendi* que no debió torgarse ni siquiera como base inicial para negociar» ²³.

Ni el *modus vivendi* ni el Convenio, creador del nuevo orden aludido, constituirían, por lo tanto, estado alguno de derecho a respetar. Era preciso negociar de nuevo, pero sólo para aclarar lo concordado: no para introducir un nuevo régimen jurídico.

En rigor, la advertencia venía a reclamar un tratamiento claro del problema tras la experiencia engañosa de Sagasta en 1902. Mas la actitud del Gabinete de Montero Ríos hizo precisamente arma, no de la transacción ni del acuerdo, sino de la adopción del criterio individualista del fusionismo histórico. Ante las elecciones de septiembre de 1905, el jefe del Gobierno manifestó de real orden su programa social y religioso, que, en esto, ofreció vagamente respeto al Concordato, «rectamente entendido»; omisión de las actividades mercantiles e industriales de los regulares al derecho común —según venían reclamando la Cámara de Comercio y el Círculo de la Unión Mercantil madrileños desde 1901 ²⁴— y la regulación de la enseñanza privada —y de la religiosa en ella— también «sobre la base de la ley común» ²⁵.

mientos. Tras el debate de las obligaciones eclesiásticas del presupuesto del Estado ³⁷, el tema abandonó en efecto la actualidad política durante los primeros meses de 1906. Pero en mayo, cuando iba a celebrarse la boda de Alfonso XIII, la prensa anunció el programa futuro del Gobierno, que consignaba la libertad de cultos —no ya solo la tolerancia de la Constitución—, la ley de asociaciones, la secularización de los cementerios y la reforma de las condiciones para el matrimonio civil ³⁸. Era quizá respuesta oportunista al problema de la capilla protestante y a una nota del nuncio, que, en abril, había reclamado la atribución a la potestad eclesiástica de la custodia y dominio de los cementerios pertenecientes a los municipios y la invalidación de los enlaces civiles sin previa abjuración del catolicismo ³⁹.

Moret negó más tarde la paternidad del programa ⁴⁰, acaso oriundo de medios institucionistas ⁴¹, que en todo caso, inauguraba otra serie de esfuerzos liberales por atraer a la Unión Republicana hacia un nuevo posibilismo ⁴².

En principio, su realización necesitaba la disolución de las Cortes y la elección de otras con mayoría propiamente moretista que apoyara el programa. Dio esto lugar a que salieran del Gobierno en junio de 1906 los dos ministros monteristas, disconformes con ello, que había albergado para mantener la unidad: García Prieto y Santamaría de Paredes, además de Romanones, aparentemente fracasado en Gobernación por el intento de regicidio ocurrido en la boda real. Sustituidos por el posibilista Celleruelo y los gubernamentales San Martín y Quiroga Ballesteros ⁴³, el empeño inseguro de Moret en la disolución del parlamento chocó con la actitud de las demás fracciones. En las consultas de rigor, todos los caudillos políticos aconsejaron al rey que no diera al jefe del Gobierno el decreto de disolución: no sólo Maura, sino Montero Ríos, Vega de Armijo, López Domínguez y Canalejas, que dijo considerar el texto constitucional suficientemente amplio, si se interpretaba en sentido liberal, como para de hecho permitir el librecultismo. De modo que Moret hubo de abandonar el Ministerio a comienzos de julio ⁴⁴.

Al dejar el poder, Moret mismo puntualizó el programa ofrecido, con la reforma constitucional del artículo 11 en sentido librecultista y la democratización del Senado como puntos básicos ⁴⁵. La solución dada a la crisis por Alfonso XIII hubo de ser, por tanto, todo lo liberal posible para salir airosa. Desaconsejado para la presidencia Canalejas por su aureola radical ⁴⁶ o por su relativa juventud, formó Gobierno el general López Domínguez, con monteristas de diversa procedencia, Romanones y el canalejista Amalio Gimeno en Instrucción Pública.

Urgido ciertamente por los republicanos, que previeron que este tercer Gobierno liberal también eludiría el tema ⁴⁷, el nuevo Ministerio había hallado ya un escollo previo a su encumbramiento. El 13 de abril de 1906, según vimos, el nuncio había reclamado, en nota al Gabinete Moret, contra el abuso que algunos jueces municipales venían cometiendo al consentir que los católicos celebraran matrimonios solo civiles. Pedía que invalidase todos los contraídos sin el canónico. Porque, siendo confesional el Estado, ningún contrayente español podía rechazar el sacramento sin ab-

jurar del catolicismo, según se deducía del artículo 11 de la Constitución del 42 del Código civil, de la base tercera del mismo Código y de todas las disposiciones matrimoniales del Concordato. Y, en la misma nota, y a partir de dos reales órdenes sobre la materia dictadas tiempo atrás por González Besada y Romanones, el representante del Vaticano reclamaba así mismo para la potestad eclesiástica la custodia y dominio de los cementerios.

Durante la protocolaria vista que Romanones hubo de hacer al nuncio como ministro de Gracia y Justicia del Gobierno López Domínguez, aquel le recordó la nota y expresó su esperanza de recibir en breve una respuesta ⁴⁹, que le fue remitida el 3 de julio del mismo año 6. En ella, Romanones eludió la primera petición y rechazó la de los cementerios. Pero, al Consejo de ministros del 29, llevó un nuevo proyecto de contestación, que defendía la libertad constitucional de los españoles para elegir la forma de su matrimonio. Afirmaba además que ninguna de las cuestiones planteadas había sido concordada y, sobre la segunda, que a la autoridad de la Iglesia atañía tan solo el acto religioso del enterramiento; no la guarda y la propiedad del camposanto, que era municipal, en donde estaba preceptuado incluso que hubiera un lugar reservado para los acatólicos ⁵⁰.

Aprobada la nota de contestación en el Consejo y remitida al titular de Estado, el nuncio respondió, a comienzos de agosto, con una nueva nota y una carta al ministro, en la que renunciaba a toda reclamación amistosa y ponía el asunto en manos de la Santa Sede. El acontecimiento pareció «el prólogo de una ruptura», según afirmación, quizá precipitada, de *El Liberal*. Protocolariamente, Romanones ofreció su dimisión al Consejo de ministros del día 8, que la rechazó de modo unánime. Y, en pareja acritud, durante su conversación con el embajador ante la Santa Sede (ahora el marqués de Tovar) el Papa confirmó, probablemente refiriéndose a la relegada cuestión de la interpretación del Concordato, su decisión de rechazar cualquier reclamación «en lo que él estimaba fueros y prerrogativas de la Iglesia» y su propósito de no admitir ninguna petición encaminada a revisar el texto concordado en el 51; «tosca brusquedad de cura de aldea», según el periódico republicano español, que preludiaba una crisis de importancia ⁵¹.

La tensión parecía inoportuna. Mediado julio de 1906, «pregoneros oficiales» habían anunciado el reanudamiento de las negociaciones con el Vaticano ⁵², pendientes desde el Convenio con el Gobierno Maura sobre la situación jurídica de los religiosos y la reorganización de la administración y el clero. Insistente mentor del Gabinete López Domínguez como órgano de expresión de Canalejas, *Heraldo de Madrid* lo había reclamado el 26, al recabar la finalización de los trabajos diplomáticos para aclarar aquel asunto, la secularización de la enseñanza y la interpretación amplia del artículo 11. Pero quizás en estas exigencias latía ya el temor, manifestado por los republicanos y por el propio Canalejas, de que el Gobierno recurriera a las típicas dilaciones de los anteriores ministerios fusionistas ⁵³.

De hecho, presentada la dimisión de la embajada en Roma por el marqués de Tovar, la prensa habló de su sustitución, como representante

ante la Santa Sede, primero por Montero Ríos, que parece se negó a aceptar, luego por Canalejas y al cabo por el marqués de Teverga, redactor del proyecto liberal de reestructuración jurídica del clero en 1901. Pero, en septiembre de 1906, fue un diplomático de oficio, Enrique de Ojeda y Perpiñán, quien recibió el encargo ⁵³.

Acusado el Gobierno de retardar la obra religiosa ante la vacación estival ⁵⁴, el paréntesis hubo de ser cubierto con decretos de apariencia menor, según la práctica creada por Sagasta y aconsejada ahora por José Canalejas ⁵⁵. El 15 de agosto de 1906, una orden de Instrucción pública dispuso la formación de una relación de centros de enseñanza privada «actualmente abiertos sin autorización legal»; les conminaba a solicitarla y obtenerla antes del 1 de octubre so pena de clausura, «sean fundados y sostenidos por particulares, seglares o eclesiásticos, o por institutos religiosos» ⁵⁶. Y, el 27, otra orden circular de Romanones abordó la espinosa cuestión del matrimonio no canónico, planteada por el nuncio. Insalvable el obstáculo legal del Código civil, que imponía a los católicos contraer el prescrito por la Iglesia, resolvía el ministro que «no se exija a los que pretendan contraer matrimonio civil ... declaración alguna relativa a la religión que profesen» ⁵⁷. Lo que era un hábil modo de salvar la imposición del Código y, además, una respuesta decidida a la amenaza de Rinaldini de llevar el asunto ante la Santa Sede ⁵⁸.

«No sabemos —comentaría *El Liberal*, en tono nuevamente derrotista— a cuántas puertas se ha llamado antes de llegar a este desenlace; pero se ha llegado al fin». «El jalón, aunque chico, es sólido ... Después de todo, ese sencillo documento implica la restauración del matrimonio civil en España» ⁵⁹.

En rigor, la eficacia de la medida era dudosa, fuera de su valor de símbolo. En última instancia, podía deducirse de ella únicamente que el Estado continuaría teniendo por católico (lo que en sí mismo parecía inocuo) a aquellos que, sin retractarse de su religión, cometieran un acto —el contrato matrimonial sin sacramento— condenado por la Iglesia ⁶⁰. La jerarquía protestó al modo usual, a partir de la circular fechada por monseñor Menéndez Conde el 1 de septiembre. En ella, el obispo de Tuy atacaba la real orden en términos tajantes, cuyo tono, sin embargo, consiguió para ella un eco inopinado. Parecía nacida la medida de Romanones, afirmaba, «sencillamente por ganarse la palma de anticlerical que en ridículo certamen se disputan las diferentes fracciones del partido liberal y hasta los varios personajes de una misma fracción». Pero su contenido, que a su entender debió de consultarse a Roma, podía «considerarse como una excitación dirigida a los católicos para que desprecien y conculquen las leyes divinas y eclesiásticas relativas al matrimonio, excitación a la cual se da cierta eficacia colocando a los transgresores bajo la protección del Código civil».

En consecuencia, advertía a sus feligreses «que ni la Real Orden de un ministro, ni cualquiera otra disposición de cualquier poder secular les exime de la observancia de las leyes de Dios y de la Iglesia; que el matrimonio civil entre católicos no es más que un *concubinato legal*, que constituye a los que le contraen en un estado permanente, y por consiguiente ha-

bitual, de rebelión contra la Iglesia, y les priva de los beneficios de ésta que mientras ese estado dura, mientras esa unión no se rompa o no se regularice canónicamente, no pueden ser admitidos a la participación de los Sacramentos, y que aun en peligro de muerte no puede verificarse la reconciliación si persiste la voluntad de mantener ese vínculo inmoral»⁶¹

La circular de Tuy brotaba de un ambiente enrarecido por las proclamas anticlericales. Durante todo el verano, las reclamaciones de la prensa radical, alentadas por las manifestaciones programáticas de los propios ministros —Gimeno sobre todos⁶²— habían provocado un sinfín de protestas. Al principio de julio de 1906, en un mensaje a su prelado, envuelto en la conciencia de la importancia social del periodismo demostrada por la jerarquía a comienzo del siglo, el clero leonés arremetía contra las publicaciones liberales, «entendiendo por tales, así los que quieren cohonestar su verdadero liberalismo con el nombre de católicos, como los rabiosamente anticlericales: lo mismo los periódicos de Madrid, *La Epoca*, *El Imparcial*, *Heraldo*, *El Liberal*, *Diario Universal*, *El Globo*, *El País*, y *Las Dominicales*, que los otros *ejusdem furfuris*»⁶³. A los mismos, con *ABC* y *El Motín*, y a la masonería, condenaba el obispo de Guadix el 25, en una divulgada pastoral donde llamaba a los programas liberales «producto de las logias y patrocinados por ellas»⁶⁴, conforme a una opinión, de certeza nunca probada, que había de prosperar en adelante⁶⁵.

El arzobispo de Zaragoza y el prelado de Tortosa en agosto habían atacado también, en términos del primero, «los programas que se anuncian con peligro y amenazas para el catolicismo»⁶⁶: supresión de la enseñanza de la religión en las escuelas, divorcio, desamortización, y supresión de los institutos regulares, en síntesis del segundo. Publicada la protesta del prelado de Tuy, los obispos de Córdoba, Ciudad Real, Salamanca, Badajoz y Valencia en septiembre; los de Barcelona, Coria, Canarias, Málaga, León, Santander, Mallorca, Menorca, Ciudad Rodrigo, Sigüenza, todos los de la provincia eclesiástica granadina juntamente y el vicario capitular hispalense en octubre; los prelados de Tortosa, Huesca, Tarragona, Osma y Madrid-Alcalá en noviembre; numerosos cabildos, suscribieron escritos de conformidad con el de Tuy, a veces con la misma calificación, por otra parte tradicional en la Iglesia, de «concubinato» para el matrimonio civil⁶⁷.

Leída la circular de Menéndez Conde en el Consejo de ministros del 12 de septiembre, molesto Romanones por el trato que en ella recibía, el Gobierno anunció, a propuesta suya, la decisión de procesar al prelado, aunque sólo para forzar una disculpa⁶⁸. Ausente de Madrid el ministro de Estado, el subsecretario se entrevistó el 14 con el nuncio por ello, sin obtener satisfacción. Rinaldini reconoció los términos del escrito episcopal «violentos, agresivos y desentonados». Pero dio pie únicamente para esperar una reconvención privada, no oficial: porque «el mismo carácter arrebatado y levantisco del prelado de Tuy, le obliga a la mayor cautela, toda vez que está seguro, no solamente de que no le obedecerá, sino que llegará hasta atacarle e insultarle, creando así una situación desairada al Nuncio y promoviendo un conflicto ... muy difícil de sofocar»⁶⁹.

A sugerencia del propio Rinaldini, el Gobierno acudió a la Santa Sede. , el 20 de noviembre, prudentes ambas partes al defender sus actitudes, pero firme el Ministerio «ante la agitación de la opinión y la prensa» ⁷⁰, Roma comunicó al Gobierno una solución suficiente: «que el Papa ordenase al Obispo escribir una carta de excusas al Ministro» de Gracia y Justicia, cuyos términos serían convenidos entre el ministro de Estado y el secretario del Pontífice, para ser publicados si el Gobierno lo deseaba ⁷¹.

Acogida por el Gobierno y Romanones como un éxito ⁷², la carta fue redactada en Roma y aprobada por López Domínguez, en términos que cerraban cierta innegable humillación ⁷³. A últimos de septiembre, la prensa divulgó que Pío X reprendía en efecto al prelado gallego por la forma, no por el contenido de su escrito ⁷⁴. Pero, iniciado octubre, lo que se conoció fue un nuevo documento del obispo de Tuy donde reafirmaba su postura: «Sébase —advertía— que las amenazas y correctivos que se nos impusieran no nos impedirían cumplir los deberes de nuestro ministerio pastoral, según nos lo dicte nuestra conciencia honrada.

No podemos tolerar en silencio que la religión esté sirviendo de cabeza de turco para el juego de algunos políticos.» ⁷⁵

De inmediato, el Gobierno acordó llevar el caso ante el Supremo, con amenaza de hacer de ello incluso cuestión de confianza. El rey aceptó la decisión en el Consejo del 4, celebrado en La Granja ⁷⁶. Y, el 5, sin duda por imposición de la nunciatura, Romanones recibió al fin la misiva de Menéndez Conde, escrita en estos términos: «No pudiendo ya dudar que es cierto que V. E. se ha sentido molestado con algunas frases de la Circular de 1 de septiembre, me cumple declarar que mi propósito, al escribir la Circular, fue defender los derechos de la Iglesia y los intereses de la Religión, y de ningún modo ofender a V. E. ni en su persona, ni en su alta representación.» ⁷⁷

Razón y Fe aventuró que el Gabinete no insistió en denunciar al ordinario, no tanto acaso por la carta «cuanto por imposición ajena y cortar más graves conflictos para el Gobierno» ⁷⁸. En todo caso, la crisis sí dejó una secuela: A comienzos de octubre de 1906, el metropolitano de Valencia, monseñor Guisasola, se había sumado a la postura de Menéndez Conde con una pastoral ⁷⁹. Desde el 3, las manifestaciones callejeras contra el prelado se multiplicaron en la capital levantina, alentadas por la prensa republicana, que denunció en el documento episcopal alusiones personales locales, negadas por el arzobispo. Ocupado éste en la visita pastoral de algunos pueblos, el ayuntamiento republicano de Valencia llegó a aprobar incluso una proposición al Ministerio en la que reclamaba su traslado. Mediado octubre, las manifestaciones se extendieron a otras localidades de la diócesis, a partir de Alcoy, y, aún en noviembre, las amenazas de los republicanos ante el anuncio de su regreso siguieron desaconsejándolo. Guisasola, en fin, permanecería en Madrid hasta febrero de 1907, expulsado de hecho de su propia diócesis ⁸⁰.

3. La Ley de asociaciones

Si no en la medida en que sus coetáneos lo afirmaron⁸¹, «Canale —diría un correligionario suyo— consideró al Gobierno López Domínguez como si él mismo lo presidiera»⁸². El fue el «verdadero inspirador de política anticlerical que desde el primer momento practicamos», afirmó Romanones⁸³. Durante todo el verano de 1906, sus cartas a Gime y al director de *Heraldo de Madrid*, Francos Rodríguez, aconsejaron al Ministerio el camino a seguir, atendido probablemente por el creciente prestigio que venía rodeándole, al menos desde el primer invierno de centuria, como el mejor garante para la opinión democrática.

Su ascendencia sobre el Gabinete se concretó en agosto del año 6 en un vasto programa que entregó al presidente del Consejo. En él, Canale anteponía la cuestión religiosa a todas las demás, y hacía historia del problema con seriedad poco frecuente. Concretaba la urgencia del control estatal —no de la supresión, que rechazaba— de la enseñanza religiosa y la necesidad de proteger la laica y estatal. Aconsejaba, antes de aparecer la orden de Romanones, la intervención civil en el contrato matrimonial. Pedía que revisase la exención del servicio militar para seminaristas y religiosos y que fuera aprobada una legislación que terminara con «la desigualdad tributaria, el privilegio de *mano muerta*, la *ocultación* de propiedad eclesiástica». Y urgía, sobre todo, la aprobación de una nueva ley de asociaciones para los institutos de perfección cristiana, de acuerdo con las bases elaboradas en mayo de 1902, que él mismo resumía: «la intervención del Poder legislativo para autorizar toda nueva congregación; la facultad del Gobierno para suspenderlas y aun suprimirlas por razones de interés público, la autorización de adquirir tan sólo como propiedad inmueble el edificio destinado al domicilio de la Asociación y ciertos límites a la propiedad mueble, el conocimiento por el Estado del número de sus individuos y del desarrollo de su vida económica, la negativa de efectos jurídicos civiles y amparos coercitivos a las obligaciones contractuales por lo que afectan a los votos perpetuos de *pobreza, castidad y obediencia*».

Todo ello, decía, estaba «substancialmente recogido de la ley francesa» de Waldeck-Rousseau, y había de ser elaborado durante el verano para que el Gabinete pudiera presentarlo en forma de proyecto, en la misma reapertura de las Cortes, so pena de «gravísimo menoscabo de su autoridad y riesgo de un final desastroso».

En el proyecto a redactar se habría de tratar también «el problema de las Fundaciones» y «la diversidad entre la santificación *de las almas* y los demás fines de la vida social, *beneficencia, enseñanza*, etc., a que se consagran las asociaciones de carácter mixto, que ya van siendo las más». Y había de afrontar además «la reforma tributaria que suponen los impuestos sobre el derecho de *acrecer* y de la *mano muerta*».

Nada de ello reclamaba acuerdo previo con la Santa Sede; aunque era cierto que estaban aún pendientes de negociación la reforma administrativa de la Iglesia española y la determinación de cuáles fueran los institutos concordados. Menospreciable la primera cuestión por su cuantía insig-

ificante, quedaba en cambio la segunda, que había dado lugar al *modus vendi* de 1902 y al Convenio concordatario de 1904. Aquél había de ser anulado, y rechazado éste, para proceder «en seguida a revisar las autorizaciones firmadas por los Ministros de Gracia y Justicia, revocables o quienes las dictaron». No supondría esto forzosamente la supresión de tales institutos. «Lo que pretendo —subrayaba— es que se afirme el derecho del Gobierno para examinar esas concesiones, revocando las que estimen oportuno revocar: *varias o ninguna*.. Y por lo menos que sometan su revisión a las Cortes.»

Sólo sería necesario acordar con la Santa Sede, por lo tanto, cuáles eran los institutos concordados. Lo cual les aseguraría únicamente su derecho a existir, sin cortapisas de Gobierno alguno: no su exclusión de los preceptos de la futura ley de asociaciones, como se disponía en la vigente de 1887, que pretendía derogar.

Supuesta sin embargo la negativa vaticana ante estas condiciones, aconsejaba Canalejas notificar, no consultar, el proyecto de nueva ley a Roma, y declarar en él que había dos institutos concordados y un tercero a nombrar, entre Madrid y el Vaticano, que sería el que exigiera negociación.

Era obvio que el tema de la libertad de cultos había de ser replanteado tras la promesa de Moret. «Me consta —consignaba— que Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza, Melquiades Álvarez y otros elementos de la extrema derecha del partido republicano, Azcárate y muchos de los antiguos centralistas, Salmerón y no pocos de los que le siguen, entienden *ahora* que la fórmula de *libertad de cultos* es la única que puede agrupar a todos los buenos liberales. ... Es evidente que casi todo, no todo el Partido Republicano, los más de los periódicos, Moret y los suyos, han de sostener que ellos son los verdaderos depositarios de las doctrinas liberales, y nosotros, mixtificadores mañosos, que para retener el poder y congraciarnos con el trono y los elementos conservadores, desertamos de la bandera democrática.» Pese a lo cual, no parecía procedente aceptar su planteamiento: El respeto formal a los cultos disidentes sin acabar con el catolicismo del Estado, según lo propusiera Moret, no requería «reformular la Constitución, ni promulgar ninguna ley, ni siquiera que el Rey autorice ningún decreto: basta con una Real orden circular». Como tampoco aconsejaba una reforma constitucional el párrafo primero de ese artículo 11, que reconocía el catolicismo religión del Estado, dada la indudable mayoría católica del país, que lo hacía imprudente; ni la abolición del juramento sobre los Evangelios exigido a los parlamentarios, reformable asimismo por una ley normal⁸⁵.

En los principios del verano de 1906, Canalejas había comenzado a urgir a los ministeriales, no sin ciertos temores por su firmeza, la realización de este programa. Entrevistado con Gullón, Alvarado y López Domínguez, les había manifestado la absoluta necesidad de plantear a Roma el tema de la ley de asociaciones por medio de una nota diplomática terminante y precisa, sin repetir de nuevo la interminable discusión de principios inaugurada por Sagasta. «Hay que hacer —escribía a Gimeno con frase significativa— lo que pudiéramos llamar, cubriendo las formas, un

ultimátum.» Debían de realizarlo pronto, además: no pocos días antes de la reunión del parlamento, que debía tener lugar en la primera quincena de octubre a lo sumo ⁸⁵, en busca siempre de la apariencia de firmeza que faltaba al Partido Liberal.

Conforme a sus recelos, los tratos diplomáticos no fueron comenzados entonces, temeroso el Gobierno por «la actitud de varios elementos y muy principalmente de Palacio». Pero, expuesta la situación de esta manera a Alfonso XIII por Canalejas mismo y confirmada así en septiembre el respaldo real ⁸⁷, todas sus directrices sobre la ley de asociaciones fueron puntualmente adoptadas al fin por el Consejo de ministros del 10 de octubre. Resolvió éste, primero, elaborarla como ley de excepción para las religiosas, no como normativa general acerca del derecho de asociación hacerlo, en concreto, a partir de las bases de 1902, y realizarlo sin consulta ni pacto con el Vaticano, a espaldas desde luego del Convenio de Maura ⁸⁸.

Sobre estas indicaciones lo redactaron Dávila, ministro de la Gobernación, y el republicano José Morote, afecto a Canalejas. Y, al mediar octubre de 1906, el texto articulado pudo ser ya atendido por el Consejo ⁸⁹. Reabiertas las Cortes el 23, el mismo día fueron presentados los presupuestos para 1907 y, el 25, al fin, el proyecto de asociaciones, promesa de cinco años de fusionismo.

Su contenido, versión de la disposición francesa de 1901, venía resumido en el preámbulo, donde se declaraba regalista y pedía el «apoyo de las valiosas fuerzas que integran la izquierda de la política española». Ofreció el respeto del Estado a las órdenes y congregaciones «nominalmente designadas [en el Concordato] y a las que en Africa han de cumplir su misión espiritual», además de la tercera orden del artículo 29 cuando fuera concretada de acuerdo con la Santa Sede. En cuanto a las demás, «el Gobierno se atribuye el poder de autorizar por la ley determinadas Asociaciones y, como consecuencia de tal poder, procederá al examen y revisión de cuantas se establecieran en España sin estar comprendidas en el Concordato».

El articulado recogía en substancia la ley Waldeck-Rousseau ⁹⁰, no sin aportaciones del proyecto español, que quedan de relieve al confrontar los artículos españoles —en números arábigos— con los franceses —en caracteres romanos:

Destinadas ambas medidas a todas las asociaciones, igualmente de finidas en los dos textos (1.º, I), aunque exceptuadas las mercantiles de la norma española (2.º), negaba ésta además fuerza civil a «los pactos que celebren y los compromisos que contraigan los asociados renunciando a los derechos ... de la Constitución». Protegía por ello, explicitando así un artículo de la disposición francesa, a quien quisiera romper los vínculos no contractuales con cualquier entidad (3.º, IV). Y, aunque reconocía a ambas el derecho de las asociaciones a adquirir, poseer y administrar (4.º, VI), el proyecto español hacía depender del Gobierno, no del gobernador de la provincia (5.º, V), la constitución de aquellas asociaciones que poseyeran más bienes de los indispensables para sus fines estatutarios (6.º).

Prohibían las dos la posesión de los no indispensables a esos fines si eran inmuebles (14.º, VI, XI; 16.º), tanto si se trataba de bienes propios como de los allegados por «actos o contratos simulados o realizados por personas interpuestas» (15.º, XVII). Y sometía la española las actividades industriales y comerciales a la legislación fiscal común, «sin excepción alguna» (17.º).

«Las Asociaciones de las Ordenes Religiosas y cuantas impliquen renuncia perpetua de las libertades que al ciudadano corresponden por el título I de la Constitución del Estado y de los derechos que mengüen su plena capacidad civil» —concretaba además— habrían de ser especialmente autorizadas por ley, tanto para su establecimiento inicial (7.º, XIII), como para el de «filiales, nuevas casas o sucursales» (8.º, XIII).

«Por causas de orden público o de seguridad del Estado», el Gobierno podría suspenderlas (9.º), y también el gobernador civil, entre otros motivos (2.º, III; 18.º 19.º, 20.º) por incumplimiento de los artículos tercero o catorce o por haber sido constituidas «sin sujeción estricta a esta ley»; si bien la declaración de ilegalidad sería competencia de los tribunales ordinarios (21.º, VII).

«Las Asociaciones compuestas en todo o en parte de extranjeros», o al menos dirigidas por tales, podrían ser suspendidas asimismo por el Ministerio, oído el Consejo de Estado, en España (22.º), y por el presidente de la república, oído el Ministerio, en Francia (XII), con trámites semejantes (23.º, 24.º; IX, XVIII).

La autoridad de los gobernadores civiles alcanzaría, en fin, al control cuantitativo personal y económico (10.º, 11.º, 12.º; V, XV) y a la penetración en los locales, en la península, permitida también a los alcaldes, incluso en las zonas de claustro, previa notificación en este caso a la autoridad eclesiástica (13.º).

Una disposición adicional excluía de los preceptos de la ley española a «los Colegios en la actualidad existentes de Misioneros Franciscanos para Marruecos y Tierra Santa y de Hijos del Inmaculado Corazón de María para las posesiones españolas de Africa, así como las casas y Congregaciones de San Vicente de Paúl y de San Felipe Neri, por lo que se refiere a institutos de varones, y las de las Hijas de la Caridad y Hermanas Concepcionistas para las posesiones españolas antes citadas, así como las demás religiosas comprendidas en el art[ículo] 30 del Concordato de 1851, por lo que se refiere a institutos de mujeres», además de «una tercera Orden de varones de las aprobadas por la Santa Sede, cuando ésta y el Gobierno español determinen cuál ha de ser».

Otra disposición transitoria advertía que, salvo éstas, todas las demás asociaciones religiosas quedarían sujetas a revisión por el Consejo de ministros, que confirmaría o revocaría por decreto su autorización, conforme se anunciaba en el preámbulo⁹¹.

Aprobado el proyecto en el consejo del 18 de octubre de 1906⁹², el ministro de Estado, Pío Gullón, había enviado el 20 a Ojeda, embajador ya en Roma, una carta que debía de leer al secretario de Estado de Pío X, Merry del Val, sustituto de Rampolla en el nuevo pontificado. Notificaba en ella que el Gobierno creía necesario, por urgencia social que en nada

constituía «problema religioso», presentar un proyecto de ley de asociaciones sobre los institutos de perfección cristiana. El proyecto implicaba «denuncia de derogación» del *modus vivendi* de 1902 y del Convenio de 1904, y establecería «la justa intervención del Estado en cuanto a corporaciones religiosas afecta»⁹³.

La carta fue leída el 26 en Roma, al día siguiente de la presentación en Cortes del proyecto, por voluntad del Gabinete. Merry del Val advirtió de inmediato que no podía «aceptar responsabilidad alguna respecto de las consecuencias que el nuevo anuncio de la ley o su aplicación ulterior podrían producir entre ciertos elementos en España, ... los Obispos y el Clero Español, sobre los cuales, volvió a insistir el Cardenal, no podría la Santa Sede ejercer la influencia que le habría sido posible ejercer y que hubiera ejercido ciertamente, como consecuencia lógica de un acuerdo previo con el Gobierno de S. M.»⁹⁴.

Aún intentó el Ministerio paliar esta tensión en otra entrevista de Ojeda y el cardenal, celebrada seguramente el 28, para entregar al secretario del Pontífice una «promemoria» moderadora. En ella consignaba el Gabinete, indeciso al parecer, «el inquebrantable propósito de contar con la Santa Sede, en cuanto sea compatible con el ejercicio de la Potestad Civil y de entablar cuanto antes negociaciones al efecto, que habrán de ser inspiradas en el espíritu de la más amistosa y deferente consideración». Por lo cual esperaba que, «mientras se discute el proyecto y llegue a ser ley, adopte la Santa Sede una actitud de expectante confianza y recomiende el mismo espíritu de concordia y de transigencia en que se inspira la política del Gobierno».

En la entrevista, Ojeda consiguió convenir con Merry del Val «en que, sin perjuicio de prestar su apoyo franco y decidido al Gobierno en caso de llegar con él a la inteligencia apetecible, comunicaría ahora instrucciones al Clero español a fin de que se abstenga al presente de todo juicio público, de toda acción hostil y nada haga, ni publique, ni intente, sin previa consulta con la Santa Sede»⁹⁵. Pero estas instrucciones no fueron enviadas: porque, el 29, Pío X conoció el texto de la futura ley y se negó a ordenarlas mientras no fuera negociado el articulado del proyecto. Acaso como represalia, Merry notificó además a Ojeda que enviaría en breve, «por orden de Su Santidad», una nota sobre las cuestiones del matrimonio civil y cementerios⁹⁶.

La nota, al parecer, estaba ya redactada antes de que el embajador llegase a Roma: «Se ve claramente —afirmaría Ojeda— que la Curia Romana hizo depender el envío de la Nota sobre el matrimonio Civil, del giro que el Gobierno de S. M. diese al proyecto de Ley de Asociaciones y de la esperanza que aquí se abrigó siempre de que este asunto sería objeto de una negociación con la Santa Sede.»⁹⁷

Recibida el 29 mismo, el Vaticano intentaba rebatir en ella la fundamentación jurídica de la orden de Romanones y concluía que, «para admitir a los católicos al matrimonio civil, no puede bastar la sola petición de los mismos, sino que debe constar de un modo positivo y directo que han abandonado su propia Religión».

Sobre los enterramientos, afirmaba que «el cementerio católico ha sido siempre considerado como cosa sagrada excluida por esta razón del comercio y de la ingerencia profanos, y parte accesoria de la Iglesia, hasta en el caso de que se encuentre materialmente separada ... Esto no obstante, la Santa Sede en esta cuestión como en la del matrimonio civil, no se opone a llegar a una amistosa inteligencia con el Gobierno Español»⁹⁸.

Paralela a esta correspondencia, el nuncio y el ministro de Estado intercambiaron otra en tonos menos moderados. El 27, cuando el proyecto de ley de asociaciones fue conocido, Rinaldini protestó ante Gullón: porque faltaba previo acuerdo con el Vaticano, conforme disponía el artículo 45 del Concordato para las cuestiones dudosas, y porque el ministro le había asegurado «que tanto la Santa Sede, cuanto yo, tendríamos conocimiento de ese proyecto antes de su presentación a las Cortes»⁹⁹. Gullón le respondió el 29 que no recordaba haberle prometido nunca mostrarle el texto de la ley: notificarla sí, y así lo había hecho Ojeda en Roma el 20. En cuanto al artículo 45, las disposiciones adicionales del proyecto exceptuaban a las asociaciones «garantizadas por el Concordato» (en contra aquí del criterio de Canalejas): de modo que no había incumplimiento. «La sobriedad un tanto acerba —terminaba— que creo percibir en la Nota de V. E., no me impedirá consignar que la prioridad y la competencia por el Gobierno Español reservadas a la Potestad civil para funciones legislativas y nacionales, son, a nuestro ver, muy compatibles, no sólo con las creencias que profesamos, sino también con la deferencia y el sentido respeto que sinceramente tributamos a la Santa Sede.»¹⁰⁰

La tirantez entre ambos personajes, en torno a la hipotética inclusión del estado religioso mismo en los artículos 1.º, 4.º y 43 del Concordato y por tanto en el 45, se prolongó en la correspondencia mantenida hasta el 8 de noviembre de 1906¹⁰¹. Pero en el fondo, tanto en las protestas episcopales, no unánimes del todo, como en la relativa parsimonia con que Roma atendió el asunto, incluso con invitaciones a la cordialidad con el Estado, pudo observarse ya «su convicción de que no pasaría a ser ley el proyecto»¹⁰², compartida con la opinión peninsular¹⁰³, dada la división de la mayoría fusionista.

La división, aún no experimentada, era sobradamente conocida de todos por la experiencia de los gobiernos anteriores de Montero y Moret. Pero había sido adivinada en las declaraciones hechas en octubre por Montero Ríos, en las que se reafirmó ferviente partidario de la total libertad de asociación, aunque añadiera que no dificultaría cualquier orientación, aun contraria a la suya, de un Gabinete liberal¹⁰⁴.

4. Epílogo

A mediados de noviembre de 1906, el anuncio de la formalización de los debates parlamentarios sobre la ley de asociaciones consiguió un breve lapso de intranquilidad en Roma. Ante el rumor de la intención del Vaticano de romper con España, negada ante las Cortes por Gullón¹⁰⁵.

Merry del Val no ocultó a Ojeda que el agravamiento de la situación iba a obligar a la Santa Sede a abandonar su abstencionismo, dejando «a Episcopado Español su más entera libertad de acción y de expresión»¹⁰⁶. El 19, en una nota de respuesta a la promemoria del 28 de octubre, el secretario del pontífice reclamó nuevamente la necesidad de acudir al artículo 45 —a las negociaciones por tanto— para tratar del carácter concordatario de los institutos. Y advirtió que, de lo contrario, declinaba «toda responsabilidad de las consecuencias que puedan derivarse»¹⁰⁷. Pero, en verdad, no era evidente la firmeza ni la autenticidad del Ministerio. Al tiempo de estas notas, seguramente en la primera quincena de noviembre, Romanones había ofrecido al nuncio en una entrevista «que si el Vaticano renunciaba a hacer protestas o a adoptar actitudes violentas, el gobierno de S. M. se comprometería por su parte ya sea a que no se aprobase la ley de Asociaciones o a no aplicarla dado el caso de que fuese aprobada».

«Tan transparente ... treta» —así la calificó Merry del Val— no podía ser aceptada por Roma «después de su reciente experiencia con Francia cuyo Gobierno ... había alucinado con promesas semejantes al Vaticano hasta que consideró propicio y oportuno el momento para su rompimiento»¹⁰⁸.

Nombrada el 26 de octubre la comisión que había de dictaminar la ley en el Congreso, bajo la presidencia del canalejista Francos Rodríguez, y reunido luego el parlamento por secciones, los conservadores habían manifestado en todas ellas, por indicación expresa de Maura, su deseo de no tener complicidad alguna en lo relativo al proyecto, y su abstención por tanto, pese a la convicción expresa de que no llegaría a convertirse en ley¹⁰⁹.

Las protestas episcopales habían surgido ya así mismo, presentes al principio en los escritos de conformidad con el obispo de Tuy y de condena de los diarios liberales. El 30 de octubre el de Tortosa; en noviembre los de Huesca, Tarragona, Osma, Zaragoza, con adhesión de todos sus sufragáneos, Málaga y Pamplona; en diciembre los de Madrid-Alcalá y Badajoz; el 23 de enero del año 7 Menéndez Conde, suscribieron documentos de protesta¹¹⁰. El 20 de noviembre de 1906, un telegrama del cardenal primado, Sancha, al jefe del Gobierno calificó el proyecto de «opresor de conciencias, contrario [a la] libertad de la Iglesia y ofensivo [para la] Religión del pueblo español»¹¹¹. Y, un mes después, el propio Sancha firmó un mensaje de los obispos al monarca en parecidos términos, para pedirle que no firmara la nueva ley si llegaba a triunfar¹¹². «... teniendo en cuenta —le respondió privadamente el rey— los deberes que me incumben como Soberano Constitucional de Este Reino considero necesario ponerlo en manos de mi Gobierno para que se tenga en cuenta en momento oportuno»¹¹³.

Al lado de la jerarquía, la propaganda en pro de los religiosos, en folletos y hojas¹¹⁴, movida por las asociaciones católicas seculares, partió también de las protestas contra la orden sobre matrimonios. Ante ella, el Comité de Defensa Social de Barcelona había llegado a sugerir en octubre la posibilidad de procesar a Romanones en virtud del artículo 388

del Código Penal, que castigaba los excesos en las atribuciones de los funcionarios, y exhortó a la celebración de mítines e interpelaciones parlamentarias contra aquella medida ¹¹⁵. En noviembre de 1906, dos miembros de ese mismo Comité, Trias y Parellada, en nombre de más de cien mil firmantes de entidades confesionales de Barcelona, Lérida, Reus, Morella, Huesca y Santander, manifestaron formalmente su disconformidad con el proyecto de asociaciones ante el ministro de la Gobernación ¹¹⁶. Mediado el mes, las Cortes empezaron a recibir exposiciones contra la ley, algunas tan notables como las de Palencia, Mallorca, Málaga, Pontevedra, Sigüenza, Almería, Jaén y sus correspondientes entornos, suscritas respectivamente por 89.791, 29.000, 64.299, 96.546, 41.433, 24.014 y 36.747 firmas ¹¹⁷. Hubo, en suma, más de 220 exposiciones de protesta a las Cortes, y sólo 8 a favor de la política anticlerical ¹¹⁸, que no alcanzaban a empañar la magnitud de aquéllas ¹¹⁹.

De noviembre del año 6 a enero del 7, carlistas, integristas y tradicionalistas alfonsinos, muchas veces reunidos, organizaron mítines de protesta en Tortosa, con 4.000 asistentes y 80.000 adhesiones; en Castellón, con 3.000 y 80.000, respectivamente; en la barriada barcelonesa de Gracia, en Jerez, en Olot, con 4.000 representantes de 44 pueblos comarcales; en Gandía (6.000), Córdoba, Terrassa, Palafrugel, Igualada, Gerona (4.000), Málaga, Elgoibar, Compostela, Palencia, Alba de Tormes, Andújar, Oviedo, Alcalá de Henares, Algemés, Granada, Martorell, Mataró, Carrión de los Condes, Onteniente, Alcoy, Alcañiz, Palma, Beniarrés, Burgos (con 50.000 adhesiones de más de 200 pueblos de la provincia), Reus (5.000 asistentes), Manresa (4.000 y 50.000 adheridos), Sevilla (5.000 mujeres), Vic, Cervera, Vil·lareal, Jaén, Cádiz, Tafalla, Logroño, Barcelona (30.000), Santander (5.000), Bilbao (30.000) ¹²⁰.

El día 2 de diciembre, 3.000 católicos se reunían en Madrid en el Centro Católico Obrero de la calle de Bailén, bajo la presidencia de los marqueses de Santillana y Pidal y el general Azcárraga, para aplaudir los documentos de protesta de la Junta Central de Acción Católica y del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras. Y, el mismo día, dos mil «damas católicas de la aristocracia madrileña», reunidas en el domicilio de la duquesa viuda de Bailén, enviaron sendos mensajes al Papa y al monarca contra el proyecto de asociaciones, suscrito el último por más de 30.000 firmantes ¹²¹. El 9, 50.000 navarros invadían Pamplona en una manifestación de proporciones desusadas, presididos por el neocatólico Vadillo, el integrista Nocedal y el carlista Vázquez de Mella ¹²².

Pero, a la oposición de tradicionalistas, conservadores y eclesiásticos, había de añadirse «la resistencia taimada de muchos liberales» respecto al Ministerio ¹²³. A raíz de la interpelación de Azcárate al Gobierno de 7 de noviembre de 1906, acerca de su política anterior, Moret pudo aplaudir el 10 el empeño gubernativo para aprobar la ley de asociaciones, siempre que, no obstante, se consiguiera antes la reforma constitucional del artículo 11 en pro de la libertad de cultos, por él reivindicada ¹²⁴.

Dictaminado aquel proyecto por la comisión el 19 e iniciada el 21 la discusión de los presupuestos del Estado, urgidos por la cercanía del fin de año, el 26 el presidente del Congreso, que lo era Canalejas, comu-

nicó su decisión de que se debatiera al tiempo la ley de asociaciones frente a toda esperanza dilatoria. La decisión triunfó por 164 votos contra 4 y la abstención de los conservadores, no sin que Moret pusiera una vez más en evidencia la escisión de la mayoría: primero, declarando su mayor radicalismo en el asunto de las asociaciones; más tarde, reclamando explicaciones del Gobierno para indicar o no a sus seguidores que votara con él ¹²⁵.

Por fin, el 28, disculpándose al parecer en su temor de una inminente ruptura con el Pontífice, Moret asestó el golpe de gracia al Gabinete López Domínguez en una nota dirigida al rey con el beneplácito de Maura. En ella refería la tensión denunciada en la sesión del 26, de la que hacía responsable al Gobierno. «Pero si el peligro quedó ayer conjurado —advertía—, todavía hace creer que reaparecerá a todo momento y provocará al fin la división de la mayoría, y con ella la caída del partido liberal. He hecho todos los esfuerzos que me han sido posibles para evitar ese gran daño; al presente que no me será posible lograrlo en adelante, acudo ante el Poder moderador de la vida política para declinar la responsabilidad de lo que pueda ocurrir» ¹²⁶.

Amedrentaba, en definitiva, con negarse a apoyar al Gobierno. Antes Montero Ríos había amenazado ya, contradiciendo otras promesas, con alejarse de la presidencia del Senado si el proyecto de asociaciones prosperaba ¹²⁷. El Ministerio, en fin, sin mayoría parlamentaria, hubo de dimitir el mismo 28. El 29, Canalejas dejó la presidencia del Congreso en desacuerdo con la formación del nuevo Gabinete ¹²⁸.

Moret formó Gobierno sucesor el 30 de noviembre de 1906, recibiendo el Senado y el Congreso el 1 de diciembre con tales muestras de desagrado, de parte republicana sobre todo, que el 3 dimitió ¹²⁹, convencido de la imposibilidad de continuar.

Todavía el liberalismo constituyó un Gobierno de concentración presidido por Vega de Armijo, con el canalejista Gimeno, el monterista Barroso, el moretista Pérez Caballero y Navarro Reverter, seguidor de López Domínguez. Apremiado por la necesidad de aprobar los presupuestos antes de fin de año, en su presentación a Cortes, el 6, el presidente aseguró que había de «continuar la discusión de todo aquello que anteriores Ministerios liberales han puesto sobre la mesa del Congreso» ¹³⁰.

Pero, en realidad, ya se había insinuado que el monarca aceptó la carta de Moret para tranquilizar al Vaticano ¹³¹, y se rememoró enseguida que Vega de Armijo no había sido nunca partidario del proyecto de ley de asociaciones ¹³², convencido sin duda, no obstante, del escaso porvenir de su propio Gobierno.

Rechazada por el Congreso el 6 la dimisión de Canalejas para su presidencia, en la misma sesión la quiebra de la mayoría volvió a manifestarse en la algarada con que fue acogida la respuesta del moretista Cobián a una alusión nocedaliana. La reglamentación de las asociaciones proyectada, dijo, «no se puede aceptar ni como liberal ni como demócrata, porque ese proyecto de ley de Asociaciones es la oposición, es el medio más eficaz de despedazar el principio de la libertad de asociación consagrado en la Constitución de 1869 y en la Constitución vigente» ¹³³.

El 10 fue reanudada la discusión del proyecto. Pero en una entrevista, el mismo día, de Moret, Canalejas y Vega de Armijo, la división de pareceres subsistió ¹³⁴. El debate fue proseguido intermitentemente, el 13 y el 18 nada más; porque la urgencia de los presupuestos reclamaba toda atención y tiempo. Aprobados al fin el 31, las Cortes fueron clausuradas hasta el 21 de enero de 1907 ¹³⁵.

En diciembre del 6, el jefe del Gobierno y acaso Romanones intentaron rehacer el proyecto de asociaciones. En principio se dijo que por medio de una negociación con Roma, negada por el Ministerio. Después se supo que lo hizo Sánchez Maquel, escritor y catedrático de Literatura, por encargo del presidente del Consejo ¹³⁶. El texto reformado respetaba la disposición transitoria del antiguo y confiaba a las Cortes —no al Gobierno— la revisión de las autorizaciones de las comunidades ya instaladas o por establecerse. Presentado el 14 de enero del año 7 al Consejo y consultado a Canalejas, Montero, López Domínguez y Moret, sólo obtuvo la aquiescencia del primero. Se dijo que López Domínguez arguyó que se reconocía en él excesiva capacidad adquisitiva a los institutos; Montero, que era ley de excepción, contra su parecer de someterlos al derecho común; Moret, en fin, insistió en la prioridad de la libertad de cultos ¹³⁷.

Entregado con todo el 21, cuando las Cortes fueron reabiertas, a la comisión dictaminadora del Congreso, el entonces romanonista Alcalá Zamora consiguió en ella, empero, la retirada del proyecto íntegro, excusada en la necesidad de rehacer su articulado con las variantes reclamadas por el Gobierno. Lo que significaba, sin embargo, impedir en la práctica que la ley prosperase. Canalejas habló de conjura política activada por Romanones, que la justificó más tarde como «única manera de evitar la caída fulminante» del Gabinete, presupuesta la oposición de la corona ¹³⁸. En todo caso, enfrentados ambos políticos, atomizada ya la opinión liberal, reacio Navarro Reverter a continuar en un Gobierno de porvenir estéril ¹³⁹ y Gimeno por su fidelidad canalejista, Vega de Armijo abandonó el poder el 24, al parecer cuando Canalejas hizo saber al rey que no continuaría apoyando su Ministerio ¹⁴⁰.

Durante aquel Gobierno, los medios vaticanos habían readquirido la tranquilidad de antaño. A mediados de diciembre de 1906, ante la expulsión del nuncio Montagnini por el Gobierno de París, el cardenal Della Chiesa llegó incluso a pedir a Ojeda que la embajada española en la ciudad francesa se hiciera cargo de los papeles de aquella nunciatura. Desautorizado por el Gobierno de Madrid, el hecho dio lugar a uno de los momentos de mayor compromiso diplomático entre París y Roma ¹⁴¹.

En tanto, el Vaticano publicaba su confianza en la inofensividad de los asuntos de España. No sorprendía la escisión final del fusionismo, como tampoco había de extrañar la caída de su último Gobierno ¹⁴². Los conservadores, en efecto, colmaban la esperanza de la diplomacia romana.

Se clausuraba así el segundo gran intento de rehacer el Liberal como partido de gobierno. Estéril por demás, el período 1905-1906 había sido suficiente para exteriorizar la crisis conjurada por Sagasta: crisis de jefatura y de programa, y crisis, sobre todo, de adecuación entre el régimen y la realidad social.

El Partido Liberal, para muchos, parecía buscar tan sólo la mera subsistencia como organización. En su Gobierno del año 6, Moret lo confirmó de modo expreso. Primero, el problema: «que el partido liberal no reunía, no sumaba, no atraía una porción de fuerzas vivas del país, que en otros tiempos estuvieron con él». Después, la razón: «que la línea que nos dividía del partido conservador era una línea vaga, absolutamente esfumada». La solución por último: «que el partido liberal llevase a su programa íntegramente la cuestión religiosa, única que divide y establece separación entre los dos partidos»¹⁴³. «Es indispensable —había dicho ya en noviembre de 1902— ... que el Partido Liberal esté completamente deslindado del Conservador. Pero ¿dónde están los linderos? ¿Qué cuestión queda en España que nos divida? ¿El sufragio universal? Todos lo hemos aceptado. ¿La descentralización administrativa, la organización de la Administración local? Entre el proyecto del señor Maura y el proyecto que lleve mi firma, las diferencias son tan pequeñas, que yo pudiera suscribir el suyo y Su Señoría el mío. ¿Acaso las cuestiones de Hacienda? No tenemos en ella nada que nos separe ... ¿Dónde están, pues, las diferencias?, ¿con qué íbamos a marchar? Pues no podemos encontrar la diferencia sino en un punto»: que era, con palabras diversas, la cuestión religiosa¹⁴⁴.

«Exhausto de contenido el programa liberal —confirmaría Romanones— por haberse realizado ya los grandes principios del sufragio universal y del jurado, fue necesario darle nueva sustancia con la política anticlerical.»¹⁴⁵

La disconformidad entre los propios fusionistas había de añadir aún otra característica a aquella coyuntura. De modo unánime, tradicionalistas y eclesiásticos (el obispo de Tuy también, en su circular), incluso republicanos¹⁴⁶, lo interpretaron como una mera lucha por la jefatura vacante. «El movimiento anticlerical que se trata de promover en España —juzgó Sardá i Salvany— es puramente obra de partido; empresa utilitaria de unos cuantos caballeros que necesitan ahora explotar ese filón como antes explotaron otros; convencionalismo puro, comedia pura, labor artificial»¹⁴⁷.

Y POLITIC

NOTAS

¹ Trazamos una visión paralela a la de este primer punto en *España, 1875-1900 (Dualismo social, Restauración, Desastre)*, Barcelona, Ed. Vicens-Vives, 1973, «Génesis de la oposición: el Partido Liberal Fusionista».

² *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, sesión del 20-IX-1881.

Vid. Melchor Fernández Almagro: *Historia política de la España contemporánea. I. 1688-1885*, Madrid, Alianza Editorial, 1968, pág. 406.

⁴ Apud Francisco Pi y Margall y Francisco Pi y Arsuaga: *Historia de España en el siglo XIX*, Barcelona, Miguel Seguí, editor, 1902, t. V., pág. 300-302, a quienes seguimos, con la obra citada de Fernández Almagro, para trazar el desenvolvimiento inicial de fusionismo.

⁵ Francisco Silvela: *Artículos, Discursos, Conferencias y Cartas*, Madrid, Mateu, Artes Gráficas, 1923, t. III, pág. 160 s.

- ⁶ Vid., respectivamente, Amadeo de Fuenmayor Champín: *El matrimonio y el Concordato español*, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1963, pág. 48 s., y *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 25-II a 2-III-1887.
- ⁷ Cfr., respectivamente, Pi y Margall...: *op. cit.*, VII, 606, y Félix de Llanos y Torriglia: *Germán Gamazo, el sobrio castellano*, Madrid, Espasa Calpe, 1942, pág. 211.
- ⁸ Cfr. *El Imparcial*, 12-I a 7-II-1903.
- ⁹ Cfr. *ibidem*, 18-V-1903.
- ¹⁰ Vid. la circular fundacional apud *El Siglo Futuro*, 2-VII-1902.
- ¹¹ *Heraldo de Madrid*, 20-XI-1903. Cfr. *ibidem*, 2 a 24-XI-1903.
- ¹² Vid. el significativo dibujo de Gedeón, 3-XII-1903, que reproduce Fernando Díaz-Plaja: *La España política del siglo XX...*, Barcelona, Plaza & Janés, 1970, pág. 53.
- ¹³ Vid. la narración del propio conde Romanones: *Notas de una vida*, en «Obras completas», Madrid, Ed. Plus-Ultra, s. d., t. III, pág. 173.
- ¹⁴ Cfr. *Diario de las Sesiones... Senado*, 28-XI-1904.
- ¹⁵ Cfr. Miguel M. Cuadrado: *Elecciones y partidos políticos de España (1868-1931)*, Madrid, Taurus, 1969, vol. II, pág. 699.
- ¹⁶ Vid. *Heraldo de Madrid*, 9-V-1904.
- ¹⁷ Vid. *ibidem*, 25-VI-1904, y *El Imparcial*, 29-IX-1904.
- ¹⁸ Apud V. Minteguiaga: *La supremacía del Estado*, «Razón y Fe», septiem bre-diciembre 1904, 309.
- ¹⁹ Apud *El Imparcial*, 11-X-1904. Cfr. *ibidem*, 6-X-1904 ss.
- ²⁰ Cfr. *ibidem*, 28-X-1904.
- ²¹ Romanones, moretista, fue ministro a título personal, según el duque de Maura y Melchor Fernández Almagro: *Por qué cayó Alfonso XIII. Evolución y disolución de los partidos históricos durante su reinado*, 2.ª ed., Madrid, Editorial Ambos Mundos, 1948, pág. 84.
- ²² Cfr. *Heraldo de Madrid*, 3-VII-1905.
- ²³ *Ibidem*, 4-VII-1905.
- ²⁴ Vid. *Revista Popular*, 29-III-1906.
- ²⁵ Apud *Heraldo de Madrid*, 19-VIII-1905. Vid. Daniel López: *El Partido Liberal. Conversaciones con D. José Canalejas. 1.ª serie*, Madrid, Establecimiento tipográfico editorial, 1912, pág. 117 (BDN).
- ²⁶ Cfr. Cuadrado: *op. cit.*, II, 716.
- ²⁷ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 11-X-1905.
- ²⁸ Pese a afirmarlo *El Liberal*, 14-VI-1906, no hay rastro de ello en AMAE.
- ²⁹ *Diario de las Sesiones... Senado*, 9-XI-1906. Vid. *ibidem*, 16.
- ³⁰ Vid. *ibidem*, 22-XI-1905 ss.
- ³¹ Cfr. Romanones: *op. cit.*, 192. El chiste de *Cu-Cut!* que dio pie a esta cuestión ha sido publicado por Joaquín de Camps i Arboix: *Història de la Solidaritat Catalana*, Barcelona, Ed. Destino, 1970, pág. 40.
- ³² Vid. Menéndez Pallarés, *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 12-XII-1905.
- ³³ Vid. Maximiano García Venero: *Santiago Alba, monárquico de razón*, Madrid, Aguilar, 1963, pág. 67.
- ³⁴ Vid. Jesús Pabón: *Cambó, 1876-1918*, Barcelona, Ed. Alpha, 1952, pá gina 255 ss.
- ³⁵ Como advirtió previamente *El Liberal*, 14-IV-1906.
- ³⁶ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 2-XII-1905.
- ³⁷ Vid. *ibidem*, 4 a 31-XII-1905.
- ³⁸ Cfr. *El Imparcial*, 20-V-1906.
- ³⁹ Cfr. *El Liberal*, 11-VI-1906.
- ⁴⁰ Cfr. José Francos Rodríguez: *La vida de Canalejas*, Madrid, Tipografía de la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», 1918, pág. 363.
- ⁴¹ Vid. María Dolores Gómez Molleda, *Los reformadores de la España contemporánea*, Madrid, C.S.I.C., 1966, pág. 439.
- ⁴² Vid. Maximiano García Venero: *Melquiades Álvarez. Historia de un li beral*, Madrid, Ed. Alhambra, 1954, pág. 172-173.

⁴³ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 23-X-1906, y Maura...: *op. cit.* 98 s. Debió ser entonces cuando, ante la insistencia de Moret en que Santiago Ramón Cajal formara parte del Gobierno (cfr. *ibidem*, 99, y Romanones: *op. cit.*, 203), el Nobel aragonés le respondió significativamente: «I aseguro a usted que no me queda tiempo para perderlo en tonterías» (cfr. *Heraldo de Aragón*, 12-X-1906).

⁴⁴ Aunque de *El Liberal* se desprende que, tras la reestructuración, Moret debió pensar en olvidar el programa librecultista y volver a la presentación del proyecto de ley de asociaciones (vid. *ibidem*, 14-VI y 5-VII-1906).

⁴⁵ Cfr. Maura...: *Por qué...* 102-103.

⁴⁶ Cfr. Francos Rodríguez, *op. cit.*, 339.

⁴⁷ Vid. *El Liberal*, 10 y 29-VII-1906 y todo agosto.

⁴⁸ Cfr. Romanones, *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 13-XI-1906.

⁴⁹ Cfr. *El Liberal*, 30-VII-1906.

⁵⁰ *Ibidem*, 9-VIII-1906.

⁵¹ *Ibidem*, 17-VII-1906.

⁵² Cfr. *Heraldo de Madrid*, 26-IX-1906; *El Liberal*, 28 y 29-VII-1906, que sugería, sin duda contra la corona: «A Moret, por prendarse de la libertad de cultos, se le dieron los pasaportes. = Y el Gobierno actual, que ha olvidado sin duda, el mismo poste, aplaza, temeroso de igual suerte, la renovación del eterno litigio con el Vaticano.» La intervención del rey en las crisis políticas ha sido revisada por Carlos Seco Serrano: *Alfonso XIII y la crisis de la restauración*, Barcelona, Ed. Ariel, 1969. Sobre la desconfianza en Canalejas insiste Francos Rodríguez: *op. cit.*, 388.

⁵³ Cfr. *El Liberal*, 25 y 27-VII; 19-VIII y 15-IX-1906: AMAE/SCS, leg. 174 despachos núms. 55, de 30-VIII-1906, y 60, de 21-IX-1906, donde el encargado de negocios ante la Santa Sede notifica al ministro de Estado trámites de relación con la dimisión y el nombramiento.

⁵⁴ Vid. *El liberal*, 29-VII-1906.

⁵⁵ «Llegar a octubre y presentarse a las Cortes con un arsenal de tópicos y algún que otro papel mojado es incompatible con nuestra dignidad personal. El Rey *puede* y acaso *debe* cambiar de ministro si la política de los actuales no se ajusta al criterio que él sustenta y al concepto que tiene de la situación actual del país ... Insisto en cuanto he escrito a usted, a Romanones que me contestó mostrándome su conformidad; a Dávila, a Navarro Revertere y he hablado con Alvarado, con Gullón y con el General [López Domínguez]. Se *puede*, se *debe* por Real Orden (hay que evitar en lo posible solicitar firmas de decretos) hacer mucho en casi todos los Ministerios, por lo que respecta al problema clerical, en Instrucción, en Gracia y Justicia, en Hacienda, en Guerra. Pero esto hay que hacerlo en una política de conjunto, es decir, todos al unísono ... Y eso se puede hacer ahora dejando los Reales decretos y los proyectos de ley y el planteamiento definitivo del problema de asociaciones para cuando, a mediados de este mes, vuelva el Rey» (carta de Canalejas a Gimeno, de agosto 1906, apud Francos Rodríguez: *op. cit.* 387 ss.).

⁵⁶ Apud *Heraldo de Madrid*, 16-VIII-1906.

⁵⁷ Cit. Fuenmayor: *op. cit.*, 49. Vid. V. Minteguía: *La Real orden-circular sobre los matrimonios civiles*, «Razón y Fe», septiembre-diciembre 1906, pág. 16.

⁵⁸ Vid. Romanones, *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 13-XI-1906.

⁵⁹ *El Liberal*, 27 y 28-VIII-1906.

⁶⁰ «Se predica y se asegura que la celeberrima Real Orden no haría aumentar en dos docenas el número escasísimo de matrimonios civiles que vienen celebrándose en España, y un chusco de la propia escuela del señor Ministro se ha adelantado a decir, que si mañana se casa una de las hijas de su Excelencia (que no sabemos si las tiene), lo que hará será casarse por la Iglesia y no ante el juez municipal» (*Revista Popular*, 20-IX-1906).

⁶¹ He aquí los párrafos más significativos de la circular: «cuando más se necesita que se aúnen los esfuerzos de todos para combatir tendencias tan antisociales como antirreligiosas, parece que algunos altos funcionarios del Es-

ado no encuentran cosa mejor en qué ocuparse que la de ensanchar los respiraderos de las malas pasiones, sin duda para que nuestra sociedad acabe de perecer moralmente apestada. = El señor Ministro de Gracia y Justicia acaba de publicar con gran ruido y aparato, como si se tratara de una medida capaz de remediar todos los males que la nación padece y de conjurar todos los peligros que la amenazan, una Real Orden relativa al matrimonio, que no puede producir resultado mejor que el que arriba dejamos apuntado. = Se trata de la interpretación de un artículo del Código civil vigente, el cual dice que *los católicos deben casarse canónicamente...* = Mas al actual Ministro de Gracia y Justicia no le ha parecido bien esto, porque quiere según cuentan, dar al matrimonio civil toda la importancia que merece. Y para ello coge el mencionado artículo del Código, lo mira a través del cristal coloreado según sus gustos, y declara que, al decir que los católicos deben casarse canónicamente, no establece un precepto, sino que sólo aduce una razón de orden moral: y como si las razones de orden moral ningún valor tuvieran para el señor Ministro, resuelve que el matrimonio civil es para los católicos también, y suprime en consecuencia la práctica de exigir la declaración de no serlo. = ... A primera vista parece que la substancia es muy poca... = Así nos explicamos que alguien, que no se cree obligado a guardar al señor Ministro respeto de que Nos aún no queremos prescindir, haya calificado su obra de *insigne tontería*, bien que refiriéndose principalmente a la orgullosa complacencia que el autor parece sentir por ella. = ... Por eso nos explicamos también que algunos no ligados por ciertas consideraciones que un Prelado no puede dejar de tener en cuenta, se pregunten con asombro: = —¿Y puede hacer esto un Ministro de la Corona? —¿Cómo a un Rey católico se le dan tales consejeros? —¿Y por qué los que profesamos el Catolicismo, que es la religión del Estado, hemos de tener que aguantarlos?» (*ibidem*, 20-IX-1906).

⁶² Vid. Maura...: *Por qué...*, 419: «Habrà usted leído en *La Epoca* la intervención de Amalio Gimeno —escribía Azcárraga a Maura el 12 de julio de 1906—, cuyo final no es muy tranquilizador, y, por cierto, que me ha llamado la atención que *El Universo* de ayer, al publicar esa intervención, le ha suprimido el final, en que dice que, en lo que se refiere a las Congregaciones y Ordenes religiosas, será tenaz y quizá pronto se verá el resultado de su tenacidad.»

⁶³ Comunicación a su prelado, apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 15-IX-1906.

⁶⁴ *Carta pastoral que el Excmo. e Ilmo. Señor Dr. D. Maximiano Fernández del Rincón, Obispo de Guadix, dirige a sus amados diocesanos con motivo de los proyectos que algunos hombres políticos intentan realizar en contra de los derechos de la Iglesia*, 4.^a ed., Mariano Escar, tipógrafo, s. d., pág. 22 (BDN).

⁶⁵ Vid. *Revista Popular*, 23-VIII-1906.

⁶⁶ *Ibidem*, 30-VIII-1906.

⁶⁷ Cfr. Antonio Villadevall: *La voluntad nacional en frente del jacobinismo afrancesado de Romanones y Canalejas*, Barcelona, Gustavo Gili, 1907, página 19 ss., donde se sintetizan los escritos episcopales (BDN). Vid. la calificación, empleada en 1893 por un párroco, apud *La Cruz* (1893), 1, 405 ss.

⁶⁸ Vid. Romanones: *op. cit.*, 208 y Francos Rodríguez: *op. cit.*, 397, que transcribe una carta dirigida por Canalejas sobre ello, al propio director de *Heraldo de Madrid*: «El lance del Obispo de Tuy hay que examinarlo con serenidad y como uno de los obstáculos, y no el menos grave, que encontraremos en nuestra campaña [sic] Al Obispo, a mi juicio, no se le puede procesar criminalmente porque no hay injuria ni desacato, ni nosotros tenemos tampoco medios propicios como los de Francia. Al Obispo hay que remitirlo a la censura de la opinión liberal y a las bromas gedeónicas, porque no se produce como un Prelado evangélico, sino como un foliculario vulgar y ramplón. Al Nuncio sí hay que decirle que vea cómo respeta la autoridad ese señor Prelado, y seguir adelante el camino que apenas si se ha empezado, no a recorrer, sino a pensar en recorrer, impávidos, serenos hasta el éxito.»

⁶⁹ Telegrama del subsecretario al ministro de Estado, 15-IX-1906, AMAE SPS, leg. 2.678, expediente «Telegramas relativos a la Pastoral del Obispo de Tuy», donde aquél, tras su conversación de «anoche» con Rinaldini, explica: «Mi impresión es que ni Nuncio ni Cardenal Primado, reconvendrán al obispo en forma oficial, ni le pedirán retractación o excusas públicas. Parece dispuesto el Nuncio a hacerlo en forma privada, y a desaprobando los términos de la pastoral que confesó ser violentos, agresivos y desentonados; pero me añadió que el mismo carácter arrebatado ... [aquí lo transcrito en el texto] muy difícil de sofocar. Su opinión es que el Gobierno debe acudir a la Santa Sede como lo hizo Cánovas en 1875.» Parte de esta documentación de AMAE y de la utilizada en el capítulo IX, de la misma procedencia, ha sido empleada por José María Javierre: *Merry del Val*, Barcelona, Juan Flor editor, 1961, pág. 395 ss.

⁷⁰ En telegrama de 16-IX-1906, el encargado de negocios español en el Vaticano notifica al ministro de Estado que ha hablado con el subsecretario de Estado del Pontífice, en ausencia de Merry del Val: «manifestóme por lo pronto censura al Obispo de Tuy por conducta irregular no solamente respecto al Gobierno de S. M. sino también con referencia a la S[an]ta Sede con quien si pudo entenderse privadamente en el asunto no debió intervenir públicamente en la cuestión sabiendo que había negociaciones pendientes sobre la misma entre ambas partes. Díjome que telefonaría inmediatamente a Cardenal [Secretario de Estado] y que creía que éste le autorizaría para dirigir un telegrama al Nuncio para que amonestase al Obispo ... Habiéndome preguntado si era cierto como decía un telegrama que el Ministerio de Gracia y Justicia estaba dispuesto a llevar a los Tribunales al Obispo dispé su alarma manifestándome que precisamente mi gestión tendía a evitar ese penoso acto.» En nuevo telegrama del 19, el encargado español, Muledo, comunica al ministro de Estado que ha hablado con Merry del Val: «díjome que ante todo deploraba el incidente de la Pastoral ... Añadió que sin embargo había que distinguir en el punto dos cuestiones. Una de fondo o doble y la otra de forma. Respecto a la primera debía manifestar que la S[an]ta Sede había lamentado la publicación de la Real Orden sobre materia concordada y mixta hecha por el Gobierno de S. M. prescindiendo de la Santa Sede cuando tan fácilmente hubiera sido llegar a un acuerdo mutuo satisfactorio. En cuanto a la cuestión de la forma censurable e inoportuna de la Pastoral envía hoy un telegrama al Señor Nuncio ... para que conferencie nuevamente con el Señor Ministro de Gracia y Justicia a fin de que estudien ambos la mejor manera en que haya de darse al Señor Ministro la debida satisfacción» (*ibidem*). El mismo 19, acaso sin conocer este texto, el consejo de ministros, reunido en la corte estival de donostiarra, planteó la posibilidad de procesar al prelado si el Papa no lo desautorizaba públicamente (cfr. *Heraldo de Madrid*, 20-IX-1906). En telegrama del mismo 19, López Domínguez comunicó al ministro de Estado, Gullón, que el consejo acordaba «que siendo punible la Circular Tuy debe esperarse el resultado de la negociación entablada con Roma, pero encareciendo a V. E. que ante la agitación de la opinión y la prensa encarezca mucho a Roma la urgencia de solución ... fijando a S[an]ta Sede el fin de este mes para que resuelva pues si así no fuera quedaría el Gobierno en libertad de proceder en defensa de sus derechos y de su dignidad acudiendo al Supremo». En telegrama, el 20, Gullón respondió a Muledo: «tengo el sentimiento de no compartir en este caso los juicios expresados por el digno mencionado Señor Cardenal [Secretario de Estado] acerca de la Circular del Señor Ministro de Gracia y Justicia, que entendemos perfectamente comprendida en las atribuciones y límites de la Potestad civil». Sobre la protesta de Menéndez Conde, agradecía la buena disposición de Roma; pero insistía en que el asunto debía de ser resuelto como en 1885 ante la pastoral del obispo de Plasencia contra el Estado —públicamente— y dentro del mes en curso. La respuesta fue urgida aún el 20, en telegrama del mismo Romanones al ministro de Estado, ante la publicación de la primera pastoral de adhesión a Menéndez Conde, firmada por el Obispo de Córdoba José Proceso y Pozuelo (AMAE/SPS, loc. cit., nota 69).

⁷¹ Telegrama del subsecretario de Estado al ministro, probablemente de 20 IX 1906, *ibidem* Dice en el «excusas al Ministro Gobernacion», y no de Gracia y Justicia, seguramente por error Transcribe el resultado de su entrevista con el nuncio, que le ofrecio esta solucion a sugerencia del Vaticano.

⁷² Segun se desprende de varios telegramas conservados *ibidem*

⁷³ En telegrama de 24 IX 1906 (*ibidem*), el subsecretario de Estado comunica al ministro de Estado que el nuncio le habia llevado la carta de disculpas redactada en Roma para que Menendez Conde la firmase Habiendola aprobado ya Lopez Dominguez, Rinaldini escribiria enseguida al obispo, siempre «segun instrucciones de Roma» El texto de la carta era «Habiendo llegado a mis oidos noticias confirmadas por la prensa de que algunas expresiones de mi circular de (aqui la fecha) han sido interpretadas como ofensivas para el ministro de Gr[acia] y Justicia pongo empeño en declarar que no he tenido nunca intencion de ofender ni su persona ni su representacion oficial, habiendo estado bien lejos mi pensamiento de ello, porque profeso la debida consideracion tanto a la una como a la otra y a esto por si y por su procedencia»

⁷⁴ Cfr *El Liberal*, 28 IX 1906

⁷⁵ Apud Fernando Soldevilla *El ano politico 1906*, Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas 1907, pag 397 s (BDN)

⁷⁶ Cfr *El Liberal*, 2 a 6 X 1906

⁷⁷ Apud *Revista Popular*, 11 X 1906

⁷⁸ R M V *Las Instrucciones pastorales de los Obispos contra el anticlericalismo actual*, «Razon y Fe», septiembre diciembre 1906, 395

⁷⁹ Apud *Revista Popular*, 25 X 1906

⁸⁰ Cfr *Diario de las Sesiones Congreso*, 19 a 21 XI 1906 y 8 VI 1907, y *El Liberal*, 19 X 1906

⁸¹ «Ya habra usted visto —escribia Canalejas a Gimeno— la campaña de habilidades periodisticas de nuestros adversarios Telegrafian unos que yo voy al Vaticano, en lo cual no ha pensado nadie Telegrafian otros que tenemos diez y siete gobernadores y no dijeron los cuarenta y nueve por el buen parecer Hay quien supone en Espana que lo menos de amigos nuestros estan colocados en altos puestos siete u ocho y no hay mas que los dos Subsecretarios elegidos por dos Ministros en uso de un derecho tradicional En ninguna Direccion ni en el Gobierno de Madrid ni en la Alcaldia, ni en la Fiscalia del Tribunal de Cuesta hay nadie nuestro» (apud Francos Rodriguez. *op cit*, 383 s)

⁸² *Ibidem* 340

⁸³ *Op cit* 206

⁸⁴ «Todo lo que la letra de los articulos delCodigo permita por medio de interpretaciones expansivas hemos podido y debemos hacerlo sin notificarlo» (apud Francos Rodriguez, *op cit* 350), ¿Motivo esta indicacion la medida de Romanones?

⁸⁵ Programa publicado integramente *ibidem*, 340 380

⁸⁶ Carta *ibidem*, 387 ss Cfr 382 ss

⁸⁷ Carta de Canalejas a Gimeno *ibidem* 393

⁸⁸ Cfr *El Liberal* 9 X 1906 Segun Soldevilla, el 20 de septiembre el consejo de ministros habia aprobado una nota de respuesta a Roma, que no hemos hallado en AMAE en estos terminos «1º Que el Gobierno reconoce que las Ordenes religiosas forman parte integrante de la Iglesia y, por consiguiente, estan sujetas a la dependencia y jurisdiccion del Santo Padre = 2º Que aceptando este principio el Gobierno desea llegar a un acuerdo con la Santa Sede para determinar de modo que evite nuevas dificultades para lo porvenir las Ordenes religiosas que hayan de tener vida legal en Espana sin que se haga cuestion cerrada de que sean las mismas que establece el actual Concordato, sino que el numero y la denominacion de ellas es lo que sera la base del acuerdo = 3º Que se acepta por el Gobierno español la Comision mixta que ha de examinar y proponer las reducciones posibles en el presupuesto del clero» (apud *op cit*, (1906) 331) Opuesta al criterio de Canalejas, en contra de entablar nueva negociacion tal vez por eso no fue enviada, si existio

⁸⁹ Cfr. *El Liberal*, 16, 18 y 20-X-1906.

⁹⁰ Además de afirmarlo Canalejas en su programa de agosto, lo aseguró lógicamente la opinión conservadora y tradicionalista (cfr. Máximo: *El Ant clericalismo y las Ordenes Religiosas en España...*, Madrid, Sáenz de Jubera hermanos, 1908, pág. 464). Francos Rodríguez se contradice. Recoge la afirmación de aquél sobre la filiación francesa de su proyecto, se la atribuye también al hablar del de 1902, pero la niega al referirse al de 1906 (cfr. *op. cit.*, 398 s.) que era en realidad el mismo.

⁹¹ DSC, 25-X-1906. La ley francesa, apud *Journal officiel*, 2-VII-1901, no ha sido facilitada amablemente por el profesor Jean-Baptiste Etcharren.

⁹² Cfr. *El Liberal*, 19-X-1906.

⁹³ AMAE/SPS, leg. 2.678, expediente «Presentación de un proyecto de ley a las Cortes sobre ejercicio del derecho de asociación».

⁹⁴ *Ibidem*, despacho núm. 72, 27-X-1906, del embajador al ministro de Estado: «Muy Señor mío: Cumpliendo las instrucciones que me daba V. E. en su telegrama del 25 del corriente recibido en la noche del mismo día, aye: 26, por la mañana, fui a ver al Eminentísimo Señor Secretario de Estado, a quien leí y dejé copia de la Nota de V. E. del 20 del corriente. = Su Eminencia después de escuchar atentamente su lectura, me manifestó que la Santa Sede agradecía y estimaba en todo su valor la deferencia del Gobierno de S. M. as como el espíritu amistoso en que se inspiraba, pero que no debía ocultarme la impresión penosa que había producido en el ánimo de Su Santidad el que el Gobierno de S. M. presentase a las Cortes el proyecto de Ley de Asociaciones, sin previo acuerdo con esta Curia y sin comunicarle, tan siquiera fuese confidencialmente, sus disposiciones generales. = Añadió Su Eminencia que no debía por tanto extrañar el Gobierno de S. M. que la Santa Sede hiciese sus reservas desde ahora y no pudiese aceptar responsabilidad alguna ... [aquí lo transcrito en el texto] ciertos elementos en España, y como yo le instara a que concretase más su pensamiento, me dio a entender en términos vagos y como opinión personal suya que los elementos a que aludía podrían muy bien ser los Obispos y el Clero Español ... [de nuevo en el texto] Gobierno de S. M. = Contesté a Su Eminencia que siendo omnímoda la facultad del Gobierno, por la Curia Romana perfectamente reconocida, de legislar en ésta y en todas las demás materias, siempre que las nuevas disposiciones no afecten a lo anteriormente concordado con la Santa Sede, las reservas que ésta hacía respecto del proyecto de Ley de Asociaciones, me parecían, por lo menos prematuras toda vez que aquella desconocía aún el texto de la Ley. = Invocó el Cardenal las versiones y los textos que de ella ha dado la prensa, indicándome que de ser unos y otros auténticos, había fundamento sobrado para justificar las alarmas y recelos de la Santa Sede, a lo cual repliqué que me era imposible apreciar estas disposiciones, puesto que las instrucciones de V. E. se limitaban a que anunciase simplemente a la Santa Sede, guiado el Gobierno por sentimientos de deferencia que Su Eminencia había agradecido y reconocido, su propósito de presentar una nueva Ley de Asociaciones, movido a ello por las razones consignadas en la copia de la Nota que acababa de entregarle. = Volvió Su Eminencia a reiterarme las buenas disposiciones en que se hallaba la Santa Sede y el sentimiento por no haber podido patentizarlas en un acuerdo previo con el Gobierno de S. M. que desde que comenzó a agitarse este asunto, deseaba vivamente conseguir Su Santidad, y después de haberle asegurado yo de las mismas amistosas y conciliadoras disposiciones por nuestra parte, dio término mi conferencia con el Secretario de Estado. = En la misma tarde de ayer hice una visita de cortesía al Cardenal Rampolla quien ... me repitió poco más o menos los mismos conceptos que el Cardenal Merry [del Val] respecto de la contrariedad que había experimentado la Santa Sede, por no haber sido la Ley de Asociaciones objeto de un mutuo y previo acuerdo entre ambas Potestades.»

⁹⁵ En la promemoria, tras el primer párrafo transcrito, el Gobierno insistía: «no pretende que la Santa Sede, sin conocer aún el proyecto de Ley de Asociaciones, forme de él juicio favorable o siquiera concreto. Pero sí apetece que

en tendencia moderada, la forma en que ha sido presentado, la discreción con que se han introducido contadas novedades, y el respeto absoluto a todo lo concordado, que en dicho proyecto se advierte, convengan a Su Santidad y a su ilustre Secretario de Estado, de que el Gobierno de S. M. contrariamente a ciertos recelos que la Curia Pontificia abriga, representa soluciones medias y esencialmente conciliadoras, que se recomiendan a la prudencia de todos» (promemoria, apud despacho núm. 73, 29-X-1906, del embajador al ministro de Estado, *ibidem*). En la entrevista con Merry del Val para la entrega de la promemoria, según el mismo despacho, Ojeda insistió en «cuanto en la promemoria se aseguraba en nombre del Gobierno de S. M. respecto del decidido propósito de éste de tratar con la Santa Sede todos aquellos puntos que directa o indirectamente se relacionen con las facultades, derechos e intervención que el Concordato le reconoce. Añadí que formulados estos propósitos del Gobierno en la forma que anteriormente y en la promemoria acababa de hacerlo en nombre suyo, no cabía alegar como razón de las reservas y abstención de la Santa Sede, la carencia de negociaciones que serían un hecho dentro quizá de breves días, mientras que toda actitud recelosa por parte de esta Curia que contribuyese a fomentar inquietudes o a sugerir a nuestro Clero la posibilidad de una actitud hostil a los proyectos del Gobierno, podría ser notoriamente perjudicial al proseguimiento sereno y conciliador de las negociaciones, que ambas Potestades anhelaban. = Pude observar el efecto que en el ánimo de Su Eminencia producía mi razonamineto, mas no por ello vencí su repugnancia a hacer intervenir a la Santa Sede en los momentos actuales. Expúsele en sentidas frases el sentimiento que su resolución me causaba, tanto más, le dije, «cuanto que es contraria a los verdaderos intereses del Rey, quien me ha encargado manifestar a Su Santidad y a Vuestra Eminencia, que al prestar su apoyo al actual Gobierno, lo hace convencido de que así evita a la Santa Sede mayores males, y que, en la moderación del programa del actual Gabinete, está la base, sólida y práctica a la vez, de una completa inteligencia con la Santa Sede adaptada a los requerimientos de nuestros tiempos... = Su Eminencia, por fin, se rindió a mis razones, y convino conmigo en que, sin perjuicio de prestar ... [de nuevo lo transcrito en el texto]. = Añadió Su Eminencia que esperaba la Santa Sede que a esta muestra de sus amistosas disposiciones, correspondiese el Gobierno de S. M. evitando declaraciones agresivas en la Prensa y en las entrevistas [sic] con corresponsales españoles, y sobre todo extranjeros, y haciendo entender a los órganos ministeriales o adictos, así como a cuantos personajes afectos al Gobierno acostumbran a ventilar sus opiniones en la prensa, la necesidad de un período de recogimiento y de mutua benevolencia que permita encauzar las negociaciones con la serenidad, moderación, imparcialidad y compostura, que son indispensables a su éxito» (*ibidem*).

⁹⁶ Despacho núm. 74, 30-X-1906, del embajador al ministro de Estado, *ibidem*, donde explica que el cambio de actitud le fue comunicado el 29 por carta de Merry del Val; que se debía, probablemente, a la llegada de la *Gaceta de Madrid* a Roma, con el texto del proyecto de ley de asociaciones; que Ojeda escribió el mismo 29 al cardenal para intentar que se mantuviera el acuerdo; pero una nueva carta de éste, el 30, ratificó la nueva postura.

⁹⁷ Despacho núm. 75, 30-X-1906, del embajador al ministro de Estado, donde se adjunta la nota del secretario de Estado, fecha 29, sobre el matrimonio civil y la jurisdicción de los cementerios, recibida «por mí casi simultáneamente» a la carta citada en la nota anterior. «Ahora bien, a mí me consta por habérmelo así manifestado tanto el Cardenal como Monseñor della Chiesa que la contestación de la Santa Sede que hoy remito estaba ya redactada con anterioridad a mi llegada a Roma. Enlazando este hecho con las cartas del Cardenal que por despacho separado [núm. 74] remito, se ve claramente que la Curia... [sigue lo transcrito en el texto] negociación con la Santa Sede. Desvanecida ésta, en primer lugar con la presentación del proyecto a las Cortes y leído ayer por la mañana en el Vaticano su texto íntegro, en la *Gaceta de Madrid*, que tan dolorosa impresión ha causado a Su Santidad según me manifiesta el Cardenal Merry, el Vaticano no ha vacilado ya en dar su contestación al Gobierno y en adoptar una

actitud si no francamente hostil, por lo menos contraria a la política del Gobierno. = Por lo demás, V. E. observará que aún dentro de esta actitud, el Secretario de Estado, conforme con la nota dominante en sus conversaciones conmi y en sus cartas, nota que asimismo he echado de ver en las entrevistas que tenido con personajes conspicuos e influyentes del Vaticano, deja la puerta abierta al Gobierno para negociar sobre estos asuntos y reitera sus favorables disposiciones para llegar a una inteligencia con el Gobierno de Su Majestad» (*ibidem* 98 «Por los informes de Monseñor Rinaldini, Nuncio Apostólico cerca de S. Majestad Católica, la Santa Sede ha venido en conocimiento de las recientes disposiciones emanadas del Gobierno español, respecto al matrimonio civil a los cementerios. No estando dichas disposiciones en conformidad ni con doctrina canónica en las materias indicadas ni con los acuerdos celebrados este propósito entre las dos altas Partes, el que suscribe Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad experimenta el estricto deber de llamar —por medio de Vucencia— la atención del Gobierno de Su Majestad Católica sobre gravedad de las mismas ... = I = Matrimonio Civil. = Por lo que respecta al matrimonio civil, el Cardenal que suscribe, no puede en primer lugar dudar de poner de relieve el modo verdaderamente insólito de proceder del Gobierno Español con la Santa Sede. = En efecto, a la Nota del Nuncio remitida al Sr. Ministro de Gracia y Justicia el 12 de abril último, el Sr. Ministro Conde de Romanones respondía con la suya de 3 de julio, haciendo comprender que si bien el Gobierno no tenía intención de conceder más de aquello que había establecido la Real Orden del Marqués de Vadillo de 28 Diciembre 1901 a favor del matrimonio religioso, no pensaba *sin embargo*, en derogar la disposición en ella contenida, y lo cual suponía a los aspirantes al matrimonio civil, la declaración, al menos oral, de no profesar la religión católica. Y habiendo el Señor Nuncio salido al encuentro de esta Nota, manifestando al Ministro su dolorosa sorpresa al ver poco meditadas sus observaciones, y anunciándole su deseo de llevar inmediatamente la cuestión a conocimiento de la Santa Sede para recibir de ella las oportunas instrucciones; a pesar de esto : pocos días después, el aludido Ministro daba a luz, sin ninguna inteligencia con la misma, la Real Orden del 27 de agosto, que anulaba lo dispuesto en la citada Real Orden del Señor Marqués de Vadillo. = ... tratándose de una controversia en materia mixta y concordada, era justo antes de la promulgación de la disposición misma, llegar a un cambio de opiniones y de acuerdos con la suprema Potestad espiritual. = Pasando ahora a lo que la cuestión merece el Señor Conde de Romanones sostiene en la Real Orden mencionada que, a tenor del art. 42 del Código Civil, no debe exigirse a aquellos que solicitan contraer matrimonio civil, declaración alguna relativa a la Religión que profesan por contener la demanda misma una declaración suficiente de no profesar la Religión Católica ... = Para demostrar cuán infundada es esta tesis del Señor Ministro, conviene anteponer dos observaciones. La primera es que en el artículo 42, para aquellos que profesan la Religión Católica, se establece una verdadera incapacidad jurídica para el matrimonio civil, de modo que ni siquiera el Gobierno puede, de ningún modo, reconocer como válido el matrimonio civil contraído por los mismos, atribuyéndole efectos civiles. = La segunda es que el art. 42 aunque, como artículo del Código, no pueda llamarse concordado, sin embargo, sus palabras y el sentido del mismo son concordados entre la Santa Sede y el Gobierno español, porque están del todo conformes con la base convenida, según la cual debía redactarse y fue redactado el artículo... = Sentado esto, es sabido, en primer lugar, y por lo que respecta a la historia de las Negociaciones que han mediado entre los dos Poderes, que el año 1882 el Gobierno español había sometido a las Cortes un proyecto de Código Civil, en el cual el matrimonio civil era facultativo para España. = El Santo Padre protestó, enviando además una carta personal al Rey. Después de largas negociaciones se convino que, excluido el matrimonio civil facultativo para los católicos, no habría para ellos otra forma válida de matrimonio fuera de la canónica. De esta inteligencia nació la base concordada, de la cual debía extraerse y fue extraído el artículo 42. = ... Además de este argumento histó-

rico, es de observar que el magistrado, una vez recibida la demanda de matrimonio civil, debe investigar si por acaso se opone algún impedimento; como el párroco, recibida la demanda de matrimonio religioso, siendo importantísimo evitar la nulidad de los matrimonios. Este deber del magistrado resulta también del art. 89 del Código Civil y del espíritu que informa la legislación matrimonial en todas las naciones. Y puesto que la profesión de la Religión Católica constituye para los católicos un impedimento para la validez de la forma civil, se sigue que el magistrado, recibida la solicitud del matrimonio civil, debe investigar, del mejor modo que pueda, si existe tal impedimento ... Si, por ejemplo, colocados los anuncios para el matrimonio civil, exigidos por el citado artículo 89, el párroco denunciase la existencia de este impedimento, ¿quién puede negar que el magistrado estaría en el deber de investigarlo? = Y no se diga que el magistrado está dispensado de estas investigaciones anteriores por el hecho de que la misma petición de contraer civilmente, con tenga una declaración implícita de no profesar la Religión Católica. Tanto más cuanto que esto se funda en la presunción de que todos los españoles deben saber que a tenor del art. 42, la petición del matrimonio civil implica en sí misma una declaración de apostasía. = Mas esta no es sino una mera presunción desmentida muy a menudo por los hechos, porque es notorio que muchos de aquellos que pidieron y obtuvieron la forma civil, profesaron y continuaron profesando la Religión Católica. = ... Por lo demás, la tesis del Señor Conde de Romanones es contraria a toda la jurisprudencia jamás interrumpida desde la promulgación del Código Civil y aprobada explícitamente por la mencionada Real Orden del Señor Marqués de Vadillo. = ... De lo dicho hasta ahora aparece claramente que para admitir a los católicos ... [sigue en el texto] ... = II = Cementerios. = Por lo que respecta a los cementerios Monseñor el Nuncio en la citada nota del 12 de abril, llamaba la atención del Gobierno de S. M. Católica, sobre varias disposiciones ministeriales por las cuales se había denegado al párroco de Remimamet, en la Archidiócesis de Valencia, el derecho exclusivo de construir y administrar el cementerio parroquial, empleándose en ello los fondos de la fábrica de la Iglesia. El Señor Ministro contestó a esta Nota con la ya mencionada del 3 de julio, en la cual se trata de sostener la legalidad de dichas disposiciones ministeriales. Pero, cuán fundado fuera, el mencionado derecho de los párrocos, salvo siempre los de la autoridad civil en lo que se refiere a la policía e higiene, aparece de las siguientes breves observaciones. = ... el cementerio católico ...» (sigue en el texto) (nota de 29-X-1906, apud despacho núm. 75, *ibidem*).

⁹⁹ Carta de 27-X-1906, *ibidem*.

¹⁰⁰ Carta de 29-X-1906, *ibidem*.

¹⁰¹ Cfr. cartas del nuncio al ministro de Estado de 30-X, 2 y 8-XI-1906, y de éste aquél, de 1 y 6-XI-1906, *ibidem*.

¹⁰² Despacho núm. 77, 9-XI-1906, del embajador al ministro de Estado, donde comunica las razones que le ha expuesto el cardenal Della Chiesa, subsecretario de Estado del Pontífice, para explicar por qué la Congregación de Cardenales no ha dictaminado sobre el proyecto de ley de asociaciones: «que el Episcopado español no habiendo hasta ahora consultado a la Santa Sede, ésta no tenía por qué adoptar actitud inmediata; que sin duda alguna la abstención de los Obispos se basaba en su convicción de que no pasaría a ser ley el proyecto; que esta convicción la abrigaba también la Santa Sede y que, por lo tanto, le parecía ocioso y quizá imprudente comunicar consignas y provocar disensiones antes de que un peligro evidente e inevitable amenazase los intereses de la Iglesia» (*ibidem*).

¹⁰³ Cfr. *Revista Popular*, 25-X-1906.

¹⁰⁴ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 13-X-1906.

¹⁰⁵ Cfr. *DSC*, 5-XI-1906.

¹⁰⁶ Despacho núm. 80, 15-XI-1906, de Ojeda a Gullón, *loc. cit.*, nota 93 supra. Según él, el cardenal le dijo «que el Gobierno de S. M. no podría de hoy en adelante contar con la abstención prometida y hasta ahora lealmente lle-

vada a efecto por la Santa Sede». Afirmación extraña, porque esa abstención había sido denegada por el Papa según vimos.

¹⁰⁷ Apud dcho. núm. 84, 20-XI-1906, entre los mismos, *ibidem*.

¹⁰⁸ Dcho. núm. 92, 24-XI-1906, entre los mismos, *ibidem*. Ojeda duda la veracidad, «en presencia de tan extraordinaria fase del asunto», que conoce por Merry.

¹⁰⁹ Cfr. *El Imparcial*, 27-X-1906.

¹¹⁰ Apud Viladevall: *op. cit.*, 50 ss.

¹¹¹ Apud *Revista Popular*, 29-XI-1906.

¹¹² Apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 15-II-1906.

Los católicos, decía, «no podrían cumplir sus ordenamientos sin hacerse culpables de pecado mortal y de incurrir en excomunión y censuras canónicas impuestas contra los que invaden la jurisdicción eclesiástica».

¹¹³ He aquí la minuta de la carta: «*Particular*. = Madrid, 26 de diciembre de 1906. = Muy Reverendo Señor Cardenal: = Con el respeto debido a un Hijo fiel de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana he recibido la carta en que, con fecha 20 del mes actual, se sirve poner en Mi conocimiento los reparos que en unión de los demás Venerables Prelados españoles, formo la contra el Proyecto de Ley regulando el ejercicio del Derecho de Asociación, leído en el Congreso de los Diputados por el Señor Ministro de la Gobernación en el mes de octubre último, y solicita a la par Mi protección para el fin de impedir la aprobación y sanción de dicho Proyecto si más tarde fueren requeridas. = Agradezco sinceramente al Episcopado de España, su lealtad y confianza con que recurre a Mi Persona, patentizando una vez más la inteligencia sincera y feliz unión que para provecho de todos existe entre aquellos buenos servidores de la Monarquía y la Corona. = Por lo demás, no veo en el ... [sic] de manifestarle que [aquí, lo transcrito supra] oportuno. = Me es muy grato, Señor Cardenal, hallar tan favorable oportunidad para que le transmita a los demás Señores Prelados las seguridades de la reverente estima que me merecen, a las que añado de modo particular la expresión de la benevolencia afectuosa que siempre guardo a su Venerable Persona. [Hay una firma]: Alfonso = Emmo. Señor Cardenal Sancha. = Arzobispo de Toledo.» La carta debió de ir acompañada de otra, del secretario real probablemente, cuya minuta dice: «[Hay un membrete:] Secretaría particular de S. M. el Rey — Madrid, 4 de enero de 1907 = Emmo. Señor Cardenal = D. Ciriaco M.^a Sancha = Muy respetable Señor Cardenal: De orden de S. M. el Rey nuestro Señor (g. D. g.) tengo el gusto de remitirle la adjunta carta, contestando a la que Vd. le dirigió días pasados, en nombre del Episcopado español. = Debo manifestar a Vd. que el Augusto Soberano ha expresado su deseo y así me encarga se lo haga a Vd. presente, de que dicha carta, no se publicada, sin consultar previamente con Vd. y obtener su autorización para ello. = No duda S. M. conociendo como conoce a Vd., su buen juicio y prudencia y los sentimientos de leal adhesión y afecto que siempre le han animado hacia el Trono, que se hará perfectamente cargo de las razones que inclinan su Real ánimo para dirigir a Vd., por mi conducto aquel ruego. = Me es grato con este motivo reiterarme de Vd. Señor Cardenal, con la mayor consideración y respecto su más at.^a s. s. y amigo — q. b. s. p. a.» (APR/SpA, legajo 314, expte. «1908. Cartas de Cardenales»).

¹¹⁴ Vid. las divulgadas en Madrid en noviembre de 1906, recogidas en *Las Ordenes religiosas y el proyecto de ley de Asociaciones*, «Apostolado de la Prensa», enero 1907 (CLXXXI), 49 ss.

¹¹⁵ Cfr. *Revista Popular*, 18 y 25-X-1906.

¹¹⁶ Cfr. *ibidem*, 15-XI-1906.

¹¹⁷ Cfr. Viladevall: *op. cit.*, y DSC, 16-XI-1906 ss.

¹¹⁸ Vid. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, vol. 15 de la legislatura 1905-1906, índice.

¹¹⁹ Aunque se hiciera «firmar a las niñas de los colegios, para aumentar el número de firmas» (Soldevilla, *op. cit.* (1906), 492).

- ¹²⁰ Cfr. R. M. V., *La protesta nacional*, «Razón y Fe», enero 1907, 126-131; *El Imparcial*, diciembre 1906, enero 1907; *Revista Popular*, 18-XI a 27-XII-1906. En caso de divergencia, tomamos siempre las cifras menores.
- ¹²¹ Cfr. *Revista Popular*, 6-XII-1906.
- ¹²² Cfr. *ibidem*, 13-XII-1906.
- ¹²³ Francos Rodríguez: *op. cit.*, 400.
- ¹²⁴ Cfr. *Diario de las Sesiones. Congreso.*, 7 y 10-XI-1906.
- ¹²⁵ Cfr. *ibidem*, 26-XI-1906.
- ¹²⁶ Apud García Venero: *Santiago Alba...*, 389.
- ¹²⁷ Cfr. Agustín Blánquez Fraile: *Historia de España*, 3.ª ed., Barcelona, Ed. Ramón Sopena, 1934, pág. 843.
- ¹²⁸ Cfr., respectivamente, *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 28-XI y 5-XII-1906.
- ¹²⁹ Cfr. *ibidem*, 1 y 3-XII-1906.
- ¹³⁰ *Ibidem*, 6-XII-1906.
- ¹³¹ Cfr. *El Liberal*, 1-XII-1906. Ha de ser revisado con Seco Serrano: *op. cit.*
- ¹³² Cfr. Martínez Asenjo: *Diario de las Sesiones. Congreso...*, 13-XII-1906.
- ¹³³ *Ibidem*, 6-XII-1906.
- ¹³⁴ Vid. *El Imparcial*, 11-XII-1906.
- ¹³⁵ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso.*, 10 a 31-XII-1906.
- ¹³⁶ Cfr. *El Liberal*, 15 y 17-XII-1906; Máximo: *op. cit.*, 480 s.
- ¹³⁷ Cfr. *El Imparcial*, 15 a 17-I-1907.
- ¹³⁸ *Op. cit.*, 220. Cfr. *El Imparcial*, 23-I-1907.
- ¹³⁹ Cfr. *El Imparcial*, 24-I-1907.
- ¹⁴⁰ Cfr. Romanones: *op. cit.*, 220.
- ¹⁴¹ Vid. telegrama de Ojeda al ministro de Estado, 12-XII-1906, **AMAE/SCS**, leg. 1.741; Javierre: *op. cit.*, 332 s.
- ¹⁴² Vid. *El Imparcial* 21-I-1907.
- ¹⁴³ Cit. Maura.: *Por qué...*, 97 s.
- ¹⁴⁴ *Diario de las Sesiones. Congreso...*, 10-XI-1902.
- ¹⁴⁵ *Op. cit.*, 210.
- ¹⁴⁶ «Este palabrero combate entre liberales de distintas parroquias sobre quién es más demócrata, más regalista y más anticlerical, va tomando los caracteres de un sainete, de cuyas extravagancias se ríen ya a mandíbula batiente, no sólo los conservadores, sino los tradicionalistas» (*El Liberal*, 1-VIII-1906).
- ¹⁴⁷ *Revista Popular*, 23-VIII-1906. Mella lo describió también en un comentario y grandilocuente artículo de *El Correo Español*, 6-IX-1906.
- ¹⁴⁸ Apud Francos Rodríguez: *op. cit.*

VIII. LA POLITICA ORDENANCISTA DEL GOBIERNO LARGO DE MAURA, 1907-1909

Figura Antonio Maura, probablemente, entre las personalidades más discutidas de la política peninsular contemporánea. Encarnación de la voluntad reformista de la España real del novecientos para unos, o del autoritarismo de la España tradicional, había llegado a la jefatura del Partido Conservador de filas liberales, Ministro fusionista en el 92, vimos disidió de Sagasta con Gamazo para iniciar junto a él una parábola que previsiblemente le había de aproximar a Francisco Silvela.

Regeneracionistas los dos, ansiosos de moralización política, esencialmente disconformes con el estilo radical que el fusionismo intentaba revestir desde el 99, la unión de sus dos grupos, maurista y conservador, se había realizado en 1902. En el 4, Maura había presidido su primer Ministerio y heredado la jefatura de Silvela. Y, tres años después, encabezaba este segundo Gobierno, llamado «largo» por dos años de vida en una década que conoció diez presidentes del Consejo, él incluido.

Si el primer Gabinete de Antonio Maura había ofrecido uno de los sufragios más auténticos hasta entonces entre las elecciones españolas y el Convenio con Roma, el segundo se anotaría una amplia serie de medidas legales renovadoras: la reforma electoral de 1907¹ y la de la justicia municipal, las leyes sobre colonización interior, azúcares, la deseada desgravación del impuesto de consumo en los vinos, normas sobre emigración, previsión social, usura(bancos agrícolas, huelgas, tribunales industriales, policía, condenas condicionales, telecomunicaciones, magisterio: 264 leyes en total, más 132 sólo aprobadas por la cámara baja y 18 pendientes de la autorización del Gobierno².

Ratificaba así «la benévola expectación de España, cansada de la extrema amovilidad de los Ministerios», que lo acogió en 1907 «con el beneplácito con que se recibe la hora de reposo tras de las de zozobra»³, que habían caracterizado aquel bienio fusionista que clausuraba Maura.

Y, sin embargo, en torno a él había de trabarse la oposición más coherente de la primera década del siglo. ¿Por qué?

Romanones repetiría una razón, superficial quizá, pero constante en los ataques coetáneos al presidente: «Maura era jactancioso sin poderlo remediar; jactancioso de buena fe, resultaba soberbio, no por enaltecer sus condiciones y su superioridad, sino por rebajar la de sus adversarios: nada le detenía en su camino, dispuesto siempre a destruir cuantos obstáculos encontraba a su paso.»⁴

«Maura —apunta Francos Rodríguez— tuvo una clara visión de las entonces más apremiantes necesidades de gobierno ... Acertaba al pedir que las instituciones locales se robusteciesen para que sirvieran de cimiento a una organización nacional digna y fecunda; pero erró al creer que al conjuro de su deseo se rendirían todas las voluntades del país ... sintió pujos de dómine de colectividades, entregándose a minucias en que resultaban afanes increíbles de aparecer molesto. En vez de un programa con-

creto, definido y hondo adoptó el difuso, incierto, de modificarlo todo a la vez y de mostrarse como ejerciendo el monopolio de la autoridad y de la justicia.»⁵

Se ha afirmado que ese designio de moralización obedeció a su identificación con grupos renovadores del tradicionalismo, que, como él, participaban de lo que cabe denominar regeneracionismo confesional en la España del novecientos. «Todos los que hemos estudiado este período de la política —se ha llegado a decir— sabemos que a Maura contribuyó a frustrarle su relación íntima con las gentes de extrema derecha.»⁶

Pero, ¿existió esa relación? ¿Cómo pudo adecuarse al nuevo esquema planteado por el fraccionamiento del Partido Liberal Fusionista y la aparición de Solidaridad Catalana, que venía precisamente a sustituir el juego tradicional? ¿Cómo se ordenan, pues, las fuerzas gobernantes en la política de los años 7 al 9 de nuestro siglo?

1. Génesis de Acción Católica

La gran floración de manifestaciones católicas multitudinarias enfrentadas al Gobierno López Domínguez en el invierno de 1906 y 7 había añadido en verdad un elemento nuevo a la crisis del sistema político. Eran en cierto modo el corolario de varias décadas de esfuerzos para unir las fuerzas confesionales frente al liberalismo.

El tema de esta unión, resucitado en el 99 según vimos, se había mantenido en los años siguientes en torno a la cuestión, secundaria aparentemente, del periodismo confesional.

Vimos que, en 1898, *El Movimiento Católico* había dejado de aparecer en la imposibilidad de subsistir económicamente. Aún en el 98, parece que el primado, Sancha, propuso una derrama de acciones a las diócesis para crear otro diario que lo sustituyera como órgano de expresión de la jerarquía, y que, en el Congreso Católico de Burgos, se volvió a sopesar el tema de su financiación⁷. Pero había de ser en 1900 cuando lo consiguiera el obispo de Salamanca, fray Tomás Cámara, acaso máximo adalid jerárquico del liberalismo político ortodoxo. Comprometió para ello al filósofo Ortí y Lara en la dirección y a sí mismo en la dificultad de costear el nuevo periódico, que comenzó a vivir con el apoyo financiero del marqués de Comillas, don Claudio López Bru⁸, plenipotente propietario de la Compañía Trasatlántica, y quizá con el de los Pidal⁹.

De este modo, en Madrid, nacía *El Universo* —eco de *L'Univers* francés— el primero de octubre del último año del siglo, recibido por la Santa Sede «en la esperanza de que el nuevo diario ayude eficazmente a la organización y a la unión de las fuerzas católicas»¹⁰, anunciado por Cámara como publicación «que, sin carácter oficial determinado, mantendrá y difundirá el pensamiento de los Congresos católicos»¹¹.

No presentaba otra parcialidad política en principio —también común a la actitud del clero— que su declaración contraria a la forma republicana de gobierno¹². Pero, en realidad, igual que *El Movimiento*, era desde el principio plenamente conforme con la legalidad alfoncina.

La condición de órgano de la Junta Central de los Congresos Católicos fue impuesta al parecer por el propio Comillas, que ocupaba la vicepresidencia en ella desde el 99, por designio de la jerarquía eclesiástica. Pero tal significación en el diario contribuyó a replantear la aceptación o no del régimen liberal como campo común a los católicos. Por esto, parece que el vocal representante del integrismo en aquella Junta, don Juan Bautista Lázaro, se separó muy pronto del partido de Nocedal, y, en cambio, el del carlismo, Bartolomé Feliú, dimitió de su cargo ante la aparición de *El Universo*. Opuestas ambas agrupaciones a designar nuevos representantes, la Junta fue considerada desde entonces «algo como del partido católico alfonsino»¹³.

La oficiosidad de *El Universo* como órgano jerárquico, que respondía acaso al recuerdo de las polémicas que suscitara *El Movimiento Católico*, cesó por otra parte en el año 2, si es cierto que entonces una reunión de obispos en Madrid la trocó en oficial¹⁴. El 6 de julio, el cardinal Rampolla, aún Secretario de Estado, escribía a Ortí y Lara que el Papa iba advirtiendo «cómo alrededor del periódico de V.S. se ha formado una suave atmósfera de concordia y adhesión incondicional a la palabra de la Santa Sede»¹⁵. Pero no había de cesar por ello al desacuerdo entre los tradicionalistas. Pocos días después, en la inauguración del sexto y último Congreso Católico Español, celebrado en Santiago, el cardinal Martín de Herrera, arzobispo compostelano, reprochaba de nuevo la actitud que adoptaban, no sólo los liberales, sino «los jansenistas, que sin misión para ello erígen en definidores de la doctrina católica y correctores de Obispos»¹⁶. En el sermón inaugural de la misma asamblea, el obispo de Tuy, Menéndez Conde, así mismo atacó no sólo al liberalismo, sino a la desunión de los católicos y al deseo de algunos de mostrarse como únicos defensores de la integridad ortodoxa. Y estas palabras, que fueron consideradas por la prensa alfonsina como condenaciones del carlismo y del integrismo, fueron rechazadas abiertamente por la prensa de ambos partidos, que incluso interpretó el Congreso como asamblea antiliberal, fiel a su propia línea¹⁷.

En verdad, la historia de los inspiradores de *El Universo* prefiguraba ya la inevitable orientación alfonsina del diario. Catedrático de Filosofía de la Universidad Central, el tradicionalismo de Ortí y Lara lo había conducido en el 68, según vimos también, con toda la redacción de *El Pensamiento Español*, a las filas carlistas, obligado no tanto acaso por espíritu legitimista como por su enfrentamiento al régimen liberal. En 1888, firmaba con Nocedal el manifiesto de escisión del Partido Integrista, en cuyas filas figuró hasta que, en el año 93, la insistencia de León XIII en la línea de *ralliement* le indujo a la aceptación de la legalidad restaurada. No adscrito desde entonces a ningún partido, su prestigio y postura lo aconsejaban para luchar por «la unificación de la defensa de los intereses católicos bajo la dirección de los Obispos»¹⁸, según la fórmula, tópica ya, de León XIII. Y una postura semejante, acaso menos doctrinal, y en absoluto política, parecía adoptar el marqués de Comillas, tradicionalista alfonsino empeñadamente alejado de todos los partidos por el deseo expreso de no suscitar recelos en sus trabajos confesionales.

La semejanza, no obstante, ocultaba tal vez dos maneras distintas de comprender la acción de los católicos: como labor de defensa legal corporativa aquel, o como obra, también pero sólo en parte legal, de cristianización del mundo, en el caso del ennoblecido capitalista, acaso más atento a un esfuerzo de recuperación social, interna, individual por tanto.

En el 94 había rechazado López Bru aquella exhortación del cardenal Rampolla para fundar un partido confesional. E incluso abandonó su propia idea de constituir otro grupo político tradicionalista alfonsino que, sin titulación católica, defendiera a la Iglesia. Todavía Ortí y Lara volvió a invitarle a realizar el primer proyecto en 1899, como «expresión de lo que piensan muchas personas de excelente espíritu y criterio, entre ellas algunas que, por su carácter y autoridad, tienen voto calificado»¹⁹. Pero parece que Comillas nunca fue partidario de formar una nueva fracción que abriera otra fisura en los partidos confesionales y suscitase la oposición de las agrupaciones liberales. Su esfuerzo, por lo tanto, se orientó a conseguir una estricta influencia católica social, que había de concretarse en su gestión como vicepresidente de la Junta Central de los Congresos y del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras.

En 1901, sin embargo, la evolución del fusionismo hacia un programa de control religioso esbozó circunstancias suficientes quizá para justificar una manera de acordar los partidos cara a la acción política, sin menoscabo de su individuación, tal como había sido planeado en la Unión de los Católicos, proyectada como organización formal por el Congreso de Burgos de 1899.

En mayo de 1901, a instancias del arzobispo de Sevilla, Spínola, y de su órgano periódico *El Correo de Andalucía*, un grupo de tradicionalistas hispalenses formó una Unión o Liga Católica encaminada al cumplimiento de las exhortaciones pontificias en pro del activismo. Trabajaría de acuerdo a los escritos de Pío IX y León XIII «condenatorios de los errores modernos, ... siguiendo en su labor las instrucciones del Papa y los Obispos». Y perseguiría estos fines:

a) Propagar la prensa católica, fomentándola y auxiliándola, para que se coloque a la altura conveniente.

b) Favorecer a la clase obrera con cuantos medios sea posible, y principalmente fundando asociaciones y círculos, conforme a las enseñanzas de León XIII.

c) Votar en las elecciones, tanto de Concejales como de Diputados provinciales, Diputados a Cortes y Senadores, candidatos netamente católicos»²⁰.

Por lo demás, «la unión no era un partido político, sino el instrumento de cohesión de los católicos» de cualquier procedencia²¹.

Al acto inaugural del 2 de junio asistieron 500 comisionados de 49 localidades de la diócesis, entre ellos «muchos presbíteros»²². En 1902, la Liga contaba ya con «millares de inscritos» y una organización activa. En 1903, en fin, presentaba su primera candidatura propia a las elecciones

municipales ²⁰ y contaba «con núcleos importantes en varios pueblos de aquella región» ²¹ b.

La organización sevillana coincidió o alentó algún movimiento semejante inmediato. Vimos que en las elecciones generales de mayo de 1901, en Navarra, se había formado una «candidatura de unión de católicos o de católicos unidos» con carlistas, alfonsinos e independientes, que triunfó en Aóiz.

Para sacarla adelante había trabajado una Asociación de Católicos creada en enero anterior en Pamplona, que se declaró «ajena en absoluto a toda mira política (como lo prueba el hecho de que la Junta provincial o directiva se compone de individuos de todos los partidos), con el objeto exclusivo de defender el Credo Católico y su fin el bienestar social...; valiéndose... de todos los medios lícitos y honestos, consentidos por la moral y por la ley, y muy especialmente ejercitando ante los tribunales de justicia las acciones que procedan en defensa del dogma católico, de los institutos y asociaciones religiosas o piadosas y de las personas particulares que la misma determine, que fueran ofendidas por los excomulgados» ²² c.

Todos los miembros habrían de aceptar las doctrinas del *Syllabus, Cum multa, Libertas y Sapientiae christianae*: en línea antiliberal activista, por tanto.

Lo harían «desde luego al amparo de las leyes del Estado». Pero «los asociados que pertenezcan a alguna agrupación política, se entenderá que no abdicar de sus ideales (políticos) [sic] por pertenecer a esta Unión, en la que caben todos los individuos de cualquier procedencia política que ... admitan todas las enseñanzas de la Iglesia, y condenen y anatematicen cuanto ella anatematiza y condena».

Se orientaban a «secundar la acción moralizadora de la Iglesia en todos los órdenes de la vida social: obligándose principalmente a sostener la prensa católica, neutralizar la acción de las sociedades secretas, y fundar Asociaciones y Centros católicos...

... Es deber especial de los católicos coaligados, elegir representantes de la Nación, de la Provincia y del Municipio a los que, reuniendo las condiciones de aptitud, antepongan la defensa de los intereses católicos al ideal político y la disciplina del partido» ²⁴.

Así mismo, explícitamente animadas «por el honroso ejemplo de los católicos sevillanos», fuerzas vivas de Córdoba se esforzaban ya en mayo del propio año 1 para formar, bajo la presidencia de su obispo, «la Junta central de los católicos cordobeses que en defensa de la religión y de la patria se unen para contrarrestar la nefanda propagación de las ideas disolventes que propagan nuestros enemigos» ²⁵. Y antes de julio de 1901 existían Ligas también en Lérida, Valladolid «y otras provincias españolas» ²⁵ b.

Ante las elecciones generales de 1903, funcionaron Ligas Católicas al menos en Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Granada, Burgos y Vizcaya, donde obtuvieron el triunfo de los diputados Urquijo, en Bilbao, y Arcillona en Guernica ²⁶. Antes de mediar el año, las había también en Orihuela, Valencia, Palencia, Lérida «y otras capitales de España» ²⁷.

Según el reglamento de la de Orihuela, tenían «por objeto la defensa de los intereses de la Religión y de la patria en el terreno político y social, con entera sumisión a las enseñanzas de la Iglesia y a la autoridad de su Prelado». Podían pertenecer a ella «todos los católicos, cualquiera que sea su procedencia política, con tal que renunciando a los errores modernos condenados por Pío IX y León XIII, y deseando en momentos tan críticos para la santa Madre Iglesia ponerse del lado de su Madre, estén dispuestos a posponer sus intereses políticos a los intereses de la Religión».

«Como medio principal ... procurarán ponerse de acuerdo para llevar a los Municipios, Diputaciones y Comicios candidatos netamente católicos, cualesquiera que sean sus opiniones en lo que es de libre apreciación, siempre que, exentos de todo compromiso de partido, y sin poder ostentar otra representación que la de la Liga, estén dispuestos a ajustar sus programas a las doctrinas de la Iglesia contenidas en el *Syllabus*, Encíclicas *Quanta cura*, *Inmortale Dei*, *Libertas*, *Sapientiae christianae* y demás documentos pontificios, expresándolo así ... de un modo explícito y terminante.»

Al socialismo, de otro lado, ofrecían oponer «la democracia cristiana», estableciendo «Círculos o centros de acción donde a la propaganda doctrinal, desarrollada en escuelas nocturnas, conferencias a obreros, prensa y otros elementos de difusión de la verdad, se una la creación de Asociaciones cooperativas o de mutuo auxilio entre las clases necesitadas, cajas rurales que contengan los desastrosos efectos de la usura, secretariado gratuito del pobre» etcétera ²⁸: propósito relativamente democristianos, por lo demás, en donde se vertían las preocupaciones tal vez del obispo oriolano Maura i Gelabert, especialmente sensible a esa problemática.

En los primeros meses del mismo año 3, varios prelados españoles se habían reunido en Madrid en torno a Sancha para impulsar esta misma red de organizaciones. En palabras expresas de León XIII, pretendían articular «la acción católica», «para crear y consolidar en España la unión de todos los católicos» mediante el establecimiento de juntas diocesanas acordes con la de los Congresos, que en estos años empezaba también a llamarse Junta Central de Acción Católica ²⁹. Notificada tal iniciativa a Roma, el Papa la aplaudió en carta al arzobispo de Toledo de 22 de abril, en 1903, en donde subrayaba que, además, la dirección del movimiento había de corresponder al propio primado ³⁰.

Para comunicarlo, aprovechó Sancha la estancia en Madrid, en mayo, de otros 32 obispos, llegados para celebrar el jubileo pontificio de León XIII ³¹. De ellos, no obstante, reunió sólo a siete: los de Barcelona —cardenal Casañas—, de Salamanca —Cámara—, de Madrid —Guisasola—, de Tuy —Menéndez Conde—, de Sión, de Cuenca y a Nozaleda, dimitido arzobispo de Manila, aún no preconizado para Valencia. En la entrevista, acordaron «sostener y apoyar la Junta central de intereses católicos [o de los Congresos, o de Acción Católica] existente en Madrid bajo la presidencia efectiva del ordinario de aquella diócesis, y la honoraria del

de Toledo ... y rogar respetuosa y encarecidamente a los demás prelados ordinarios de España, que si no las hubiera, constituyan en sus respectivas diócesis Juntas de personas idóneas y de notorio celo, que se pongan en comunicación con la central de Madrid, a fin de hacer más fácil la concordia y la unión de los católicos». La primera meta había de ser la «celebración de un Congreso de enseñanza y métodos de la misma en la ciudad de Salamanca», acaso como eco de la legislación estatalista de Romanones, y el estudio de otros proyectos que hicieran posible «la organización de las fuerzas católicas, a fin de que se descarten de opiniones personales de escaso aprovechamiento»³².

Según se precisó enseguida, el proyecto se encaminaba a «resistir a las ideas modernas, que intentan destruir la Iglesia y la sociedad civil, usando los mismos medios de que ellas se sirven para propagarse y arraigarse, que son la enseñanza, las leyes y el Gobierno, y procurando ocupar todos los cargos públicos, desde el de simple concejal al de ministro». Se realizaría de manera «que esta Unión, sin ser partido político, acoja en su seno a los secuaces de todos los partidos, siempre que profesen la fe católica, se sujeten a la obediencia de los Prelados y del Papa, y se comprometan a trabajar bajo la dirección de aquéllos». Lo haría de modo «que sin ser monárquica, imperialista, representativa, o republicana, ni dejar de serlo, acepte la forma de gobierno establecida»³³, como mera adecuación oportunista, al parecer, a un hecho dado, pero sin ser «Cofradía ni fusión contra o a favor de partidos determinados y puramente políticos»³⁴.

Ante los comentarios de campo liberal, que recibieron las noticias como si se tratara de un partido nuevo³⁵, el 29 de junio, en otra reunión madrileña, los prelados de Toledo, Salamanca, Sión, Madrid y Cuenca, el arzobispo Nozaleda, el de Zaragoza, que ya lo era Soldevilla, y los obispos de Tarazona, Jaca y Osma, precisaron que «no entra en el ánimo de Su Santidad, ni tampoco se proponen los Prelados presentes, formar un partido político, ... sino únicamente organizar las dispersas fuerzas católicas, para la defensa de los intereses religiosos y sociales». Insistían en la conveniencia de generalizar para ello «las Juntas Católica, o sean ligas, establecidas ya en algunas diócesis», como órganos de acción, siempre que suscribieran que «la acción católica deberá ejercerse con el respeto y acatamiento debidos a los Poderes públicos constituidos y sin apartarse de las vías legales». Sus miembros, además, habían de prescindir —sin renunciar a ello— «de propias opiniones y particular parecer en las materias discutibles», si bien «la unión de los católicos no requiere la fusión política de los mismos». Podrían pertenecer a las Juntas, por tanto, los de cualquier grupo ortodoxo³⁶, de acuerdo con la nueva línea purista de Pío X.

En los comienzos del año 4, el nuevo Papa alentó ya la difusión de las Ligas, a fin de que formaran un «*bloc* católico», conforme a la experiencia, o precisamente por ella, del radicalismo francés de Emile Combes. Bloque que agruparía a «todos los católicos, sean carlistas, alfonsinos o integristas en España; orleanistas, bonapartistas o republicanos en Francia, organizándose para la acción social y política»³⁷.

Con mayor claridad, por tanto, Pío X se adscribía al deseo activista de León XIII, aun cuando consignara la secundariedad del problema dinástico

frente a la exhortación proalfonsina habitual en su antecesor ³⁸ y subrayase la necesidad de una labor social católica. Pero, si Sancha y el Pontífice parecían admitir que la cesión de principios políticos que exigía la nueva organización era circunstancial, impuesta por eventuales situaciones políticas y sociales, también parecían pretender desde el comienzo consolidar la unión, realmente, cara a una cierta longevidad ³⁹. Y, además, el planteamiento de aquél tenía de hecho cierto aire enfrentado al tradicionalismo integrista y carlista ⁴⁰, que, en este caso, poco cuadraba acaso con el apartidismo real que parecían profesar Pío X o Spínola ⁴¹.

Que no había conformidad sobre el modo de cumplir estos empeños de la Santa Sede, volvió a ser evidente por otro lado en un acontecimiento paralelo, también de acción católica.

Desde el primer momento, parecía haberse entendido la necesidad que estos proyectos tenían de exteriorizarse con los mismos medios arbitrados por el mundo moderno liberal: las elecciones sobre todo y, singularmente, la prensa. En este último campo, la iniciativa partió ahora también del grupo sevillano. A ello hubo de responder la fundación de *El Correo de Andalucía* en febrero de 1899 bajo el patrocinio del arzobispo Spínola. A ello y al propósito de poner al servicio de la Iglesia un periódico ni carlista ni integrista, pero tampoco tradicionalista alfonsino como *El Movimiento Católico*.

«En cuanto a política —declaró su primer editorial—, *El Correo de Andalucía* no pertenecerá a ninguna de las agrupaciones en que los católicos españoles se dividen. No por esto pretende formar una agrupación más ... aspira sólo a trabajar a la sombra de la autoridad del prelado, para ofrecer a los hombres de bien un diario como la exigencia de los tiempos reclama, dentro de la verdad» ⁴².

En el invierno de 1903 a 1904, aquella formidable campaña de la prensa liberal monárquica y republicana contra el ex arzobispo de Manila Nozaleda y su designación para la sede de Valencia por el primer Gobierno de Maura, pese a la leyenda antiespañolista que rodeaba al prelado ⁴³, pareció urgir este tipo de acción. Aparecieron de inmediato condenaciones explícitas. En febrero del año 4, la Junta ordinaria de Celadores del Apostolado de la Oración de Burgos acordaba ante ello, en vista de «la mala fe de muchos periódicos y revistas que ocultan el veneno anticlerical», entre éstos *El Imparcial*, *Heraldo de Madrid*, *La Correspondencia*, *El Liberal* y *Diario Universal*, citados expresamente, evitar su mera lectura y, desde luego, la suscripción, en términos que suscitaron tanto querellas judiciales como adhesiones ⁴⁴. Y, acaso urgido por el mismo ambiente, Spínola decidió la convocatoria de una asamblea de periódicos confesionales, acaso a instancias del oratoriano Mariano Estévez ⁴⁵ o quizá sugerida, según el propio arzobispo, por la Asociación de la Buena Prensa que ya entonces existía en Sevilla, ramificada en numerosas diócesis.

Consciente de que ese medio de difusión era, «si no el que más, uno de los más potentes instrumentos de guerra», el arzobispo preparaba el acto para que, «juntos los católicos, se enardeciesen para la pelea ... y concertaran un plan de batalla» ⁴⁶.

Con el parabién del Pontífice ⁴⁷, esta I Asamblea de la Buena Prensa dijo dirigirse a una «misión noble y santa: La guerra, la destrucción, el aniquilamiento de todo periódico, de todo libro, de todo impreso no católico, ... y la protección, el auxilio, la difusión de todo impreso, de todo libro, de todo periódico en que se difunda la verdad de Cristo» ⁴⁸.

Ciertamente, la respuesta fue unánime. Se adhirieron a la Asamblea 147 publicaciones ⁴⁹: probablemente más de las estrictamente religiosas, de las que parece había en España en 1900 ⁵⁰. En fe a la cohesión que se intentaba, *Heraldo de Madrid* habló de que eran los carlistas quienes organizaban la reunión, en favor del Ministerio Maura y en contra de los diarios liberales, él incluido ⁵¹. Pareció incluso que la prensa anticlerical llegó a temer las consecuencias económicas del enfrentamiento de la población católica ⁵². Pero, al cabo, la Asamblea fue más disputa que fraternización:

En presencia de Sancha, dirigió Roca Ponsa la ofensiva contra los colaboracionistas con la legalidad vigente. El debate debió agravarse cuando el magistral hispalense dijo que «pertenecen a la mala prensa todos los periódicos afiliados a un partido liberal» ⁵³. Y uno de los asistentes de su grupo pudo presumir luego que «la idea antiliberal ha triunfado en toda la línea, en lo que podía y se nos ha dejado que triunfase» ⁵⁴.

En las conclusiones se hizo constar que era «de imperiosa necesidad la unión de la Prensa Católica», como estaba previsto, pero también la licitud de divergencias sobre las formas de gobierno y el repudio al «error llamado liberalismo y a los que a sí mismos se llaman liberales». Y se eludió implícitamente el reconocimiento de *El Universo* como órgano oficial de la Iglesia española (tal como lo proyectara Cámara) al afirmar la conveniencia de fundar «un gran rotativo católico, para contrarrestar los estragos de la prensa rotativa anticristiana» ⁵⁵.

2. La última gran polémica sobre la unión de los católicos

De hecho, los frutos de esta actividad, en rigor defensiva, no llevaban pareja la organización necesaria y pretendida de las fuerzas católicas. Es cierto que las exhortaciones de la jerarquía habían aumentado sobre la participación electoral. Candidaturas «católicas», antiliberales, habían surgido ya ante las elecciones municipales de 1899, al menos en Teruel, Castellón y Guipúzcoa ⁵⁶, y, en las generales de 1901, en Aoiz según vimos ⁵⁷. En las provincias de Barcelona de 1903 fracasaba una «candidatura católica regionalista» que había unido el catalanismo de la *Lliga* con el Comité de Defensa Social recién creado ⁵⁸.

En 1899, incluso se intentó organizar la constitución de estas candidaturas confesionales por medio de una asociación política neutral, el Apostolado de la Acción, que probablemente no prosperó. En su proyecto, una red de juntas parroquiales, provinciales y nacional, constituidas sucesivamente por sufragio orgánico de los mayores de veintitrés años, hubiera designado los candidatos idóneos ⁵⁹.

La organización surgió después con las Ligas. Pero, en las elecciones de marzo de 1905 sólo triunfó en España uno de sus candidatos.

Spínola se hizo eco de una segunda y preocupada exhortación de Pío X en pro de su desarrollo ⁶⁰, para reconocer, no obstante, su escasa vitalidad su aislamiento entre los políticos confesionales —lógicamente carlistas integristas— que les hacían el vacío.

En una larga respuesta desde *El Siglo Futuro* al arzobispo, considerado hasta entonces adalid antiliberal, desde su enfrentamiento a Sancha de 1896 el jefe del integrismo, Nocedal, culpó de esa debilidad al propio espíritu de las Ligas, que, al permitir la entrada de individuos del Partido Conservador, liberales al fin, se convertían según él en partidos encaminados a sustituir al integrista y al carlista. En su criterio, lo que el Papa y la jerarquía habían pretendido al reclamar la unión de los católicos era el entredimiento de estos dos últimos grupos. Y así lo demostraba la Liga Católica navarra, dominio de los integristas y única próspera, frente a la decadencia de todas las demás, guiadas erróneamente por el criterio promaurista de *El Correo de Andalucía* ⁶¹.

Desatendida la polémica directa y enviada por Spínola su pastoral de mayo y los artículos de Nocedal a Roma, el Papa escribió al arzobispo hispalense el 27 de junio del año 5 una carta que subsanaba la recriminación de León XIII en 1899. Pío X aprobaba ahora su exhortación, insistía en «la gran ventaja que estas Ligas traen a la religión» y en su adecuación «a la necesidad de los presentes tiempos» y pedía «que, dejando a un lado particulares opiniones, todos determinen y resuelvan hacer pública profesión de fe católica y afiliarse a esas Asociaciones, a fin de que fielmente se guarden los principios católicos» ⁶².

La rectificación fue tanto más sonora cuanto que, en los primeros días de julio de 1905, los términos del debate se habían agravado, a raíz de una circular enviada al episcopado y a los tribunales eclesiásticos por el Centro General sevillano de la Asociación Nacional de la Buena Prensa, que rechazaba en ella, con tono radical, los ataques nocedalinos contra los periódicos sustentadores de las Ligas Católicas ⁶³.

Ante la carta pontificia, Nocedal alegó su decidido apoyo a estas organizaciones, de las que sólo había resaltado «defectos notorios en la constitución de algunas Ligas, que imposibilitan existan» ⁶⁴. Que pretendía únicamente rechazar, en concreto, a quienes, «aun invocando el *Syllabus* en lo público, quieren llevarnos a formar con Pidal y con Maura uno de los partidos liberales que turnen en el poder» ⁶⁵, según su convicción expresa, divulgada ya en julio del año 4, de que el jefe conservador pensaba reagrupar a los católicos en un partido confesional «a semejanza del belga» so pretexto de defender su Convenio con la Santa Sede ⁶⁶.

En agosto de 1905, Nocedal reemprendió todavía los ataques a la Asociación sevillana de la Buena Prensa, a las Ligas Católicas y a los transaccionistas Pidal, Ortí y Comillas, partidarios de Maura, según él, para insistir ahora en la condena moral de quienes apoyasen a candidatos liberales en las próximas elecciones de noviembre ⁶⁷. Decisiva intimidación, que había de llevar a la polémica a los realizadores de *Razón y Fe* en dos artículos de difusión notoria.

En octubre, en efecto, un conocido publicista jesuita, el padre Venancio Minteguiaga, dio a conocer «Algo sobre las elecciones municipales» en

aquella revista. Lamentaba, ante el sufragio convocado para noviembre, el principio comprobado de que, en tanto «los sectarios, los socialistas y republicanos, suelen ser ordinariamente los más puntuales en votar», los demás destacaban «por el sinnúmero de abstenciones». Juzgaba esta postura inconsecuente con la importancia de los ayuntamientos, por sus frecuentes gestiones religiosas, y con el espíritu católico, que habría de informar su actuación pública. «A pesar de todas las arbitrariedades y de todos los despotismos caciqueriles —decía—, mientras haya alguna manera posible de ejercer el derecho, mientras haya un recurso legal y armas que oponer a las armas de los enemigos y medios para descubrir y poner coto a sus abusos y demasías, es menester no abandonen la lucha electoral los que sienten arder en su pecho la llama de la Religión y del bien público.»

No habría triunfo, no obstante, sin acuerdo entre ellos. Pero, si esta unión necesaria había de limitarse a los católicos allí donde se bastaran para vencer, donde no, sería lícito votar a «un candidato indigno cuando concurre con otro más indigno»⁶⁸.

Tales afirmaciones recogían lo expuesto años atrás por León XIII en *Inmortale Dei* y *Sapientiae christianae* entre otros lugares y lo enseñado ahora por Pío X, sobre todo en la Encíclica *Il fermo propósito*, que había roto al fin, en junio, el abstencionismo electoral impuesto a los católicos italianos por Pío IX. Expresamente, el escrito de *Razón y Fe* fue ratificado en octubre por los obispos de Barcelona —Casañas—, de Toledo —Sancha—, de León, de Teruel, Sevilla —Spínola—, Zaragoza, Jaca y Tortosa. Pero fue, en cambio, rechazado en la prensa integrista y carlista, no por su llamamiento a la unión, sino por el consejo sobre los candidatos «menos indignos», que eran sobre todos, naturalmente, los conservadores.

La polémica se prolongó aún de octubre de 1905 a febrero de 1906, en términos de gravedad creciente. En un supremo esfuerzo de subsistencia, pedido expresamente por Nocedal, *El Siglo Futuro* publicó a diario largas misivas de adhesión a su postura⁶⁹.

El desacuerdo ganó incluso las filas jesuitas. En diciembre del año 5, el padre Villada publicó en *Razón y Fe* de nuevo, donde cristalizaba así, según se ha dicho, «la modificación de actitud en la Compañía»⁷⁰, otro estudio de planteamiento teológico, en apoyo de Minteguiaga, siempre justificado en la doctrina del mal menor⁷¹. Pero, en enero de 1906, el también jesuita Ugarte opuso su criterio intransigente sobre las elecciones desde las páginas de *El Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús*⁷² y, en febrero, la misma revista bilbaína dio a luz otro trabajo del padre Vilariño, que matizaba la doctrina de unos y otros hasta reducir al máximo las posibilidades morales de apoyar al liberalismo en los comicios. Según este último trabajo, cabía en efecto, en alguna extraña ocasión, la necesidad de votar a los «menos malos». Pero, ¿quiénes lo eran? «De suyo, dicen, *ceteris paribus*, el republicano y socialista y anarquista es el peor, luego el liberal radical, luego el moderado.» Pero, de hecho, los moderados y católicos liberales «son más temibles, porque son más insidiosos y suelen ser más duraderos»⁷³.

Ante los dos escritos iniciales de *Razón y Fe*, se había comenzado ya a recriminar la tolerancia mostrada por sus censores y superiores, pero

también, en términos irónicos, a «los prelados de la Iglesia que tales monstrosidades consienten y aun las patrocinan, y hasta el Papa que no los excomulga»⁷⁴. Urgido formalmente por la prensa católica el dictamen jerárquico, monseñor Guisasola, obispo de Madrid, envió los dos artículos de Minteguiaga y Villada a la curia romana para que los juzgase. Pío X le respondió, en su carta *Inter catholicos Hispaniae*, de 20 de febrero de 1906, en la misma línea de aquella encíclica italiana, que «nada hay en ellos que no sea enseñado actualmente por la mayor parte de los doctores de moral ... por lo cual deseamos y queremos que cesen por completo las disensiones surgidas y demasiado fomentadas por largo tiempo».

«Los que se esfuerzan por destruir la Religión o la sociedad —añade—, ponen la mira principalmente en apoderarse, si les fuere dado, de la administración pública, y en ser nombrados para los Cuerpos legislativos. Por lo tanto, es menester que los católicos eviten con todo cuidado tal peligro, y así, dejados a un lado los intereses de partido, trabajen con denuedo por la incolumidad de la Religión y de la Patria, procurando con empeño, sobre todo, esto, a saber: que, tanto a las asambleas administrativas como a las políticas o del reino, vayan aquellos que, considerada las condiciones de cada elección y las circunstancias de los tiempos y de los lugares, según rectamente se resuelve en los artículos de la citada revista [*Razón y Fe*], parezca que han de mirar mejor por los intereses de la Religión y de la Patria en el ejercicio de su cargo público»⁷⁵.

«*Causa finita est*», corroboró por tanto Guisasola; «mas si, por el contrario, viésemos desatendidas Nuestras paternales exhortaciones y fallidos Nuestros deseos, conformes a la voluntad declarada del Romano Pontífice, no seríamos remisos en cumplir su último soberano encargo de reprimir prudentemente todo conato de nuevas contiendas entre católicos sobre un punto ya definitivamente resuelto»⁷⁶.

A comienzos de marzo, sin embargo, el marqués de Lema, seguidor de Pidal, interpretó en las Cortes la carta del Pontífice, incidentalmente como condenación de *El Siglo Futuro*, que, a su vez, se defendió arguyendo que el Papa no aludía en ella a la concreta situación de España. Comenzado por esto un intercambio largo de cartas plagadas de distinguos y matizaciones, entre el obispo de Madrid y Nocedal, en ambos casos de estilo farragoso, sobre la obligatoriedad de acatar la política del mal menor, la discusión fue mantenida aún hasta el 12 de junio. En esta fecha el sucesor de Guisasola en el episcopado de Madrid, Salvador y Barrera nombrado aquel para la mitra de Valencia, acusó a Nocedal de rechazar las normas del Pontífice y amenazó con hacer uso de su autoridad eclesiástica⁷⁷.

Así acababa la más larga polémica católica de los veinte años últimos, que acaso reflejó el desfase definitivo del Partido Integrista, irremediablemente marginado por los esfuerzos asimilistas de la Iglesia. De 1888 a 1906, sus huestes se habían ido reduciendo, a juzgar —un tanto *grosso modo*— por los periódicos que firmaron el manifiesto fundacional del 88 y los que estuvieron representados en la asamblea del partido de mayo del año 6: 24 y 14 respectivamente, en época de despegue de la prensa confesional⁷⁸.

Todavía en la II Asamblea de la Buena Prensa, reunida en Zaragoza en julio de 1908, hubo debates de «mestizos» contra carlistas e integristas. Pero la adhesión a ella de 4.500 personas, 211 periódicos y todos los prelados de la península y el funcionamiento de juntas preparatorias de la reunión, conforme a los dictados de la jerarquía, en 47 diócesis, parecieron mostrar una situación diferente, en la que el deseo de hacer había desbordado la polémica sobre los límites entre los que la acción era lícita ⁷⁹.

Quizá por vez primera, el Papa había subrayado expresamente la desviación del grupo nocaliano, incluso tras la carta *Inter Catholicos Hispaniae*. Así se había referido, en el discurso a los peregrinos vascos de 1906 a «las erróneas interpretaciones de Nuestra palabra, que habían sido dadas, ciertamente de buena fe, por algunos de entre aquellos que en política se llaman *integristas*». Aunque, en esta ocasión, pareció cuidar más de hacer notar el carácter circunstancial de la renuncia a las propias reivindicaciones políticas que implicaba la unión de los católicos para la acción: «cuando se trata de defender los intereses de Dios y de su Iglesia, debe cada uno de vosotros prescindir generosamente de sus propias opiniones y unirse estrechamente a su Obispo para formar, sin distinciones de partidos, aquella unión de católicos que constituye la fuerza ... Con esto, Nós no intentamos obligaros a renunciar a vuestras lícitas opiniones políticas, sólo queremos que, dejando aparte estas diferentes opiniones políticas, los católicos que pertenecen a los varios partidos, se unan todos en la defensa de la causa de la religión y del orden, por cuanto esta causa es superior a todas las otras y con razón se sobrepone a todos los partidos» ⁸⁰.

En cuanto a las Ligas, en septiembre de 1906 seguían siendo un proyecto apenas. «Es lástima —escribía Sancha entonces, como presidente de la Junta Central de Acción Católica— que aún haya que lamentar en nuestro suelo notoria disgregación de fuerzas, cuyos trabajos se esterilizan por funcionar dislocados y vivir sustraídos a una dirección común, como lo están en Alemania, Italia, Bélgica y algunas regiones de otros países» ⁸¹.

Con mayor o menor continuidad, no obstante, había Ligas en Sevilla, Manresa, Vic, Barcelona, Lérida, Valencia, Santander, Oviedo, Palencia, Valladolid, Salamanca, Coria... ⁸².

Algunos focos se mostraban especialmente fuertes. En Barcelona, en junio de 1903, el cardenal Casañas había creado la Junta Diocesana de Intereses Católicos, formada por los presidentes de las asociaciones confesionales de la ciudad condal ⁸³. En 1906, la Junta convocó una asamblea que había de reunir «todas las sociedades, centros, juventudes, y en general ... todas las Asociaciones católicas» de la diócesis, para tratar «las más importantes cuestiones sociales y religiosas» ⁸⁴.

En Zaragoza, el arzobispo Soldevilla constituyó en la primavera del mismo año 6 «una federación de fuerzas cristianas» o «Liga de acción social», presidida por un «Consejo Supremo de Asociaciones y acción social del arzobispado» ⁸⁵, que obtuvo la inmediata adhesión de todas las agrupaciones confesionales de la capital. En una circular comentada, ante la urgen-

cia de enfrentarse al programa anticlerical anunciado por el Gobierno. López Domínguez, el mismo prelado declaró dirigir la federación «a esos y otros fines salubérrimos de *acción católica*»: a «resistir legalmente» ofensiva política y a realizar la obra social propuesta por León XIII en *Rerum novarum* y en la *Graves de communi*, ratificada luego por Pío en su *motu proprio* sobre la «acción popular cristiana»⁸⁶; en buen entendimiento de la doble vertiente, política y social, del pensamiento leoniano.

También en 1906 el prelado de Salamanca y en 1907 el arzobispo burgalés preparaban la formación de sendos Consejos Diocesanos de Acción Católica-Social⁸⁷.

Así mismo proliferaban las exhortaciones electorales, tal vez vez ligadas a las contenidas en la encíclica *Il fermo proposito* de junio de 1906. En el otoño de este año, el cardenal Casañas había pedido en Barcelona la participación de los católicos unidos en las elecciones, «cualquiera que sea el partido político a que pertenezcan, sacrificando en cuanto fuera necesario las simpatías y afecciones personales y de partido, en aras del bien común», que habría de precisar una Junta creada para ello⁸⁸. Hubo instrucciones semejantes de los prelados de Toledo, Sevilla, Tortosa, Santander. Pero «el resultado ha sido casi nulo —se afirmaría—, pues únicamente se ha presentado un reducidísimo número de candidatos católicos: del cual tan sólo ha salido triunfante de las urnas una minoría insignificante, ya por haberse empezado demasiado tarde los trabajos por esta indolencia y descuido para todo, que son condiciones innatas en nuestro país; ya por la oposición y resistencia contra los candidatos católicos por parte del elemento oficial, y principalmente por repugnancia invencible en toda persona prudente y honrada de aventurarse en una lucha» de tales características⁸⁹.

En julio de 1906, en una pastoral muy difundida, el obispo de Guadix volvía a insistir en la obligación de votar en los comicios «incluso los clérigos ..., bajo pena de pecado mortal», si el Ministerio López Domínguez seguía defendiendo el programa antirreligioso⁹⁰.

En los escritos de protesta contra la circular de Romanones que permitía el matrimonio civil de los católicos, varios prelados (el de Tuy entre ellos) reclamaron la unión también. Los de la provincia compostelana, en octubre, así mismo animaban «a tomar parte en la acción católica, ya que los males que venimos deplorando hace años proceden principalmente de nuestra inacción»⁹¹. En diciembre, el propio Pío X aludía a las necesidades españolas en el consistorio del día 6, al exhortar a que, «donde se preparan contra la religión planes nocivos, los católicos, dejados a un lado generosamente los intereses de partido y las disensiones de los ánimos se atrevan a todo lo que las leyes permitan y la conciencia cristiana no prohíbe, con el fin de que sean felizmente rechazados»⁹².

La clara referencia al proyecto de ley de asociaciones elaborado entonces estaba recibiendo ya, por fin, una respuesta positiva. Sugeridos inicialmente por el Comité barcelonés de Defensa Social, que en octubre de 1906 advirtió la conveniencia de organizar mítines de protesta contra la referida circular de Romanones⁹³, las manifestaciones contra el proyecto de ley

proliferaron ahora, según vimos, como versión multitudinaria de aquel activismo. Fueron organizadas por asociaciones católicas de diverso cariz, cuando no grupos tradicionalistas políticos, en todos los extremos de la península, entre octubre y enero. Al tiempo, sociedades y colectividades de todo tipo mandaron a las Cortes más de 220 exposiciones en contra del proyecto⁹⁴, que sólo obtuvo 8 a favor. Y, en los escritos y en los mítines frecuentemente figuraron políticos de todas las tendencias monárquicas: de modo que, por un momento, pudo pensarse que la antigua ambición de unir a los católicos estaba realizándose.

«La fuerza de los acontecimientos, que es razón superior a todas las razones —escribía el viejo integrista Sardá i Salvany en Cataluña— obrándonos en los católicos españoles el milagro de la unión, que hasta hoy tan en vano se nos venía predicando»⁹⁵.

Aún en diciembre, *El Correo Catalán* puntualizó el modo de fraguar el entendimiento, en una iniciativa de valor especial por su origen carlista: «Concordia en todo cuanto sea puramente religioso, independencia en lo que entre en la esfera de la acción política»; acuerdo previo en los asuntos mixtos⁹⁶.

La unión fue reclamada palpablemente por el arzobispo de Toledo Sancha y el carlista Vázquez de Mella durante el mitin de Barcelona, del 20 de enero de 1907, al que asistieron más de 20.000 personas, según las fuentes oficiales fusionistas, para escuchar a Mella y oír el telegrama del primado, en la presencia del alfonsino marqués de Comillas⁹⁷. Después, cuando el Gobierno liberal de Vega de Armijo dimitió el 24, el orador legitimista pudo decir sobre el proyecto de ley de asociaciones que habían sido «esas muchedumbres carlistas y católicas las que le han derribado y le han hecho morir»⁹⁸, «ante la silba estruendosa —ratificó Sardá— con que la ha hundido en el [foso] toda la masa católica de la nación»⁹⁹.

3. *La actitud del Gobierno Maura*

¿Fue esta nueva potencia canalizada de inmediato por el Gobierno Maura de 1907? En 1904, vimos que el integrista Necedal había hablado de la intención de constituir un partido católico en torno al jefe conservador¹⁰⁰. En realidad, el rumor ya había recaído sobre su antecesor Silvela, quien, efectivamente, al menos sopesó algún tiempo esa posibilidad, en sus relaciones de los años 90 con el cardenal Cascajares.

En 1903, cuando el primado Sancha dio a conocer su plan para organizar las Juntas de Acción Católica, no solo se las vio como partido, sino que el fusionismo atribuyó al Gobierno de Silvela la intención de apoyarlo. A la muerte de León XIII, la prensa internacional achacó al cardenal Vives la invención de una candidatura para el pontificado, con Gotti como Papa, Rampolla como su secretario de Estado y el propio purpurado español «inspirador oculto de la política futura del Papado», que habría de prolongarse en España con «el triunfo del partido que va a crear el cardenal Sancha» con el aliento del Gobierno conservador¹⁰¹.

La idea, sin embargo, fue expresamente repudiada por el primado. Todavía se afirmó después que el nuevo secretario de Estado de Pío X, el español Merry del Val, era entusiasta de la política de Maura¹⁰². Pero, de hecho, hubo algún desacuerdo entre el jefe del Gabinete, en su primer mandato, y la jerarquía. Así, en el reglamento de aplicación de 1904 para la ley de descanso dominical, que no respetaba algunas fiestas litúrgicas¹⁰³; en el proyecto de ley de reclutamiento del mismo año, que afectaba a la inmunidad de algunos institutos de perfección y suscitó protestas de Sancha y otros prelados¹⁰⁴, y en el de organización y atribuciones de los juzgados y tribunales, también de 1904, que motivó una exposición del episcopado al rey para «impetrar declaraciones terminantes» «en vista de la universalidad y carácter absoluto de algunas de sus disposiciones, por una parte, y, por otra, del silencio constante respecto a personas y cosas eclesiásticas, siempre que de excepciones se trata»¹⁰⁵.

Ante la formación del segundo Gobierno Maura, en 1907, se sopesó de modo explícito, no ya la mera posibilidad de que los tradicionalistas («los católicos», en el equívoco lenguaje usual) actuaran en la legalidad, sino la conveniencia de que apoyasen al Partido Conservador. En marzo, José Polo Benito, encargado de cátedra del seminario salmantino y secretario del Centro Sacerdotal de Salamanca —entidad creada en 1906 por el obispo como «centro de cultura, de formación, de mutua ayuda y vigorosos alientos para la acción social» en la diócesis^{105 b}— defendió en la *Semana Católica* que era «de necesidad absoluta, y de urgencia universalmente reconocida, que los católicos alentemos y protejamos a los que, desde las alturas del Poder, tienen fuerza y deseos para hacer que triunfe la causa de Cristo».

En la polémica local inmediata, muy pronto generalizada, el Centro Sacerdotal de Salamanca publicó un escrito en donde subrayaba la licitud pero además la conveniencia de hacerlo. Sin embargo, sometido el asunto por el obispo a Roma, Merry del Val eludió el compromiso en su contestación del 10 de abril. La cuestión era, dijo, «sumamente delicada», sobre todo por la proximidad de las elecciones. Pío X acababa de exponer en cartas a los prelados de Madrid y de Barcelona «qué línea de conducta deban seguir los católicos españoles, para concurrir más eficazmente a la defensa de los intereses religiosos de su patria.

Su Santidad, por tanto, no cree deber añadir hoy nuevas lecciones a las que ya ha dado, y no duda que V. S., inspirándose en los citados documentos, sabrá dar a sus diocesanos las direcciones que sean más oportunas». Conforme a esta autorización, en mayo, el Consejo Diocesano de Acción Social Católica resolvía designar al periódico *El Lábaro* como órgano del Consejo, expresamente para realizar «la defensa de la política conservadora»¹⁰⁶.

La propia trascendencia de este acontecimiento y la evasiva vaticana resaltaban no obstante su carácter incidental. Es cierto que, ya en 1902 se daba por sentado en medios conservadores (siguiendo explícitamente a fray Tomás Cámara y a su discípulo el padre Conrado Muñón) que «el liberalismo condenado por la Iglesia —en términos de *La Epoca*— es el naturalismo político, el Estado sin Dios, no las libertades particulares

ni siquiera las instituciones del gobierno popular, siempre que no se informen en el espíritu naturalista»¹⁰⁷. Pero en 1908, cuando representantes del Partido Integrista acudieron al Vaticano para que se les indicase la actitud a adoptar, en vista de las últimas polémicas, las exhortaciones a la tolerancia que en Roma recibieron distaban de suscribir esta interpretación del liberalismo ni aquella canonización del Partido Conservador.

Esa decisión de los integristas de acudir a la Santa Sede directamente había sido adoptada según parece en la asamblea del partido, de mayo de 1906, quizás ante la difícil situación doctrinal en que las intervenciones jerárquicas en aquellos debates venían dejándolo. Tras la muerte de Nocedal en 1907, en plena disyuntiva de colaborar efectivamente o no con los liberales de *Solidaritat Catalana*, «se consiguió, gracias a la insistencia del elemento catalán, llevar a Roma —medio a remolque— [sic] a los primates del partido; allí fueron recibidos más que paternal, maternalmente por la Santa Sede, y allí hubieron de oír, con la aprobación de su programa, la *rectificación de su conducta*. Y de tal manera halló la Santa Sede materia de rectificación, *errores de procedimiento*, en el partido integrista, que el eminentísimo purpurado designado al efecto, y a quien asesoraba personalmente Su Santidad, invirtió siete largas sesiones, algunas de ellas de más de tres horas, en condenar actitudes, trazar planes y rebatir conceptos que se tenían por irreprochables y *hasta por consustanciales de la acción católica* en el campo político.

De estas rectificaciones son conciso resumen las bases que se entregaron al señor Olazábal, AUTORIZÁNDOLE [sic] para tenerlas reservadas —a condición de ponerlas en práctica prudencialmente— ya que, implicando *un notable cambio de conducta*, no resultara su inmediata publicación mortificante o deprimente para los mismos a quienes se dictaban»^{107b}.

Estas *Instrucciones dadas en Roma a los directores del partido integrista* en 1908, que fueron divulgadas en la primavera del año 9, puntualizaron desde luego, con precisión no usual, los términos de la actitud querida por la Santa Sede sobre el comportamiento político de los católicos. Pero mantuvieron de manera implícita la consideración del conservatismo como liberal condenable y, por tanto, sólo la licitud de secundarlo como mal menor. Convenía, afirmaban, que el integrismo siguiera sosteniendo la bandera de la unidad religiosa, frente a la tolerancia de cultos y las libertades individualistas. Mas esto no le autorizaba a «acusar a nadie como no católico o menos católico por el solo hecho de militar en partidos políticos llamados o no llamados liberales», cuyo nombre, no obstante, era desaconsejable.

«Lo bueno y honesto que hagan, digan y sostengan los afiliados a cualquier partido y las personas que ejerzan autoridad puede y debe ser aprobado y apoyado». Y deberían incluso de «estar siempre prontos para unirse con todos los buenos sea cual fuere su filiación política, en todos los casos prácticos que los intereses de la religión y de la patria exijan una acción común».

Esta unión supondría tan solo «sacrificar ... las opiniones privadas y las divisiones de partido, salvo la existencia de los mismos partidos, cuya disolución a nadie se le puede exigir». No pretendería tampoco, únicamen-

te, «unión de fe y de doctrina», que ya existía en el hecho de pertenecer a la Iglesia, ni asociación o cofradía o «academia», sino —y esto era fundamental— acuerdo para «una 'acción práctica' no constante y permanente o *per modum habitus*, sino de circunstancias y necesidades o *per modum actus*» ¹⁰⁷ c.

Pese a estos escritos, no conocemos, en rigor, datos para afirmar ningún acuerdo explícito entre la jerarquía y Maura, a ningún nivel. Sí hubo en el Gobierno, en cambio, un designio de ordenación, de tono incluso religioso (quizá tan sólo valoración de la Iglesia como constitutivo del orden establecido), que hubo de complacer no obstante a una parte notable de la opinión eclesiástica.

Esta suerte de tácita compenetración pudo advertirse en la propia constitución del equipo ministerial de 1907, con Juan de la Cierva en Gobernación, de quien la opinión liberal trazaría enseguida una imagen «ordenadista e intransigente» ¹⁰⁸; Rodríguez San Pedro, el realizador del Convenio de 1904 con la Santa Sede, en Instrucción Pública y el marqués de Figueroa, de clara significación católica, en Gracia y Justicia.

Cuidadoso en principio, en el primer Consejo de ministros, el 25 de enero de 1907, día de la formación del Gobierno, Maura reconoció su intención de estrechar las relaciones con la Santa Sede, pero de modo que no fuera provocativo para los liberales. Y se afirmó muy pronto que pretendía abrir una nueva negociación con Roma; mas no para replantear aquel Convenio del año 4, sólo aprobado por la cámara alta, sino precisamente a fin de «poner límite a las asociaciones religiosas y ... señalar también el número máximo de los individuos que puedan formar parte de cada congregación» ¹⁰⁹. Parece incluso, según Castells, que Maura «en este tiempo requirió a los jefes de la oposición monárquica para que juntos todos, se resolviera definitivamente el problema religioso, interviniendo de común acuerdo tanto en las negociaciones pertinentes como en las resoluciones que se acordaran»; pero «que tal invitación fue declinada por los encontrados jefes de la minoría liberal» ¹⁰⁹ b.

En cuanto a los dos temas cruciales que había planteado el anterior Gobierno López Domínguez, una real orden de 28 de febrero derogó la circular de Romanones de agosto del año 6 sobre el matrimonio civil de los católicos ¹¹⁰. Pero, hubo desacuerdo entre Madrid y Roma sobre los términos administrativos en que había de resolverse la cuestión, hasta octubre de 1907 ¹¹¹.

A raíz de un litigio entre el ayuntamiento y el vicario capitular de Lérida, por otra parte, una segunda orden de 5 de marzo de este año ratificó la autoridad municipal sobre los cementerios que fuesen propiedad de los ayuntamientos, sin facultad, no obstante, para prescindir del capellán, ni para inutilizar los cadáveres —en definitiva incinerándolos, contra las normas de la Iglesia—, ni otra cosa que perjudicase la misión espiritual de la jurisdicción eclesiástica ¹¹².

La apariencia de compromiso, sin embargo, no tardó en presentarse. Aún en marzo, la colaboración del alcalde de Vigo a petición del obispo de Tuy, ajena al parecer al Ministerio, en la captura de un franciscano

que había abandonado el convento de Cañedo sin autorización del superior, dio justo pie a la prensa liberal para protestar contra el empleo de la fuerza gubernativa como instrumento coactivo de la Iglesia ¹¹³. Y fue la reimposición del arzobispo de Valencia sin duda la que levantó la primera protesta unánime.

En octubre del año 6, la adhesión del prelado al enfrentamiento de Menéndez Conde —el propio obispo de Tuy— a aquella circular de Romanones había sido utilizada por los republicanos para suscitar una oposición que de hecho impidió la entrada de Guisasola en la ciudad levantina según vimos. Sin consulta ni petición de Roma ¹¹⁴ ni del arzobispo, el Gabinete decidió imponer su regreso. Concentrados por orden de La Cierva 150 guardias civiles a caballo y 700 infantes en Valencia, el regreso fue sugerido al prelado por el Gobierno, «con respeto, pero con energía» ¹¹⁵; y luego al Vaticano, ante la indecisión de Guisasola, que debió temer por su vida.

El 23 de febrero, el prelado fue conducido a la ciudad con la protección de las fuerzas armadas ¹¹⁶. Y ante las consiguientes críticas del ayuntamiento, que no parece llegó con todo a tomar ningún acuerdo sobre ello, en marzo el Ministerio suspendió su mandato a veintisiete concejales republicanos, que fueron sustituidos por gubernamentales. El camino, por tanto, vigilado por la Guardia Civil, cuyos contingentes pudieron aumentar con un crédito extraordinario votado al efecto, quedó expedito al ministro de la Gobernación para acabar con el dominio levantino de Blasco Ibáñez y Soriano en las elecciones municipales del 10 de marzo. Procedimiento que escuchó críticas, al parecer, de los propios conservadores ¹¹⁷.

En cuanto a las negociaciones diplomáticas, el Gabinete nunca replanteó el Convenio con la Santa Sede de 1904, que resolvía la situación jurídica de los institutos de perfección ¹¹⁸, tal vez para evitar la oposición liberal, que se había anunciado terminante al discutirlo en el Senado aquel año.

Sí procuró, en cambio, precisar la parte de aquellos tratos aceptada por los gobiernos fusionistas: la formación, concretamente, de una comisión mixta que gestionase la reorganización de la administración y el presupuesto del clero. Pero la firma del protocolo consiguiente no fue trazada por el Vaticano con la premura pedida por Madrid en junio de 1907 y, aunque el Estado nombró sus dos vocales para la comisión en agosto, la Santa Sede no lo hizo. Todavía en 1915 y 1917, gobiernos españoles habrían de recordárselo ¹¹⁹.

En realidad, ya en 1909 se había hecho oír la oposición de la propia jerarquía a tal reorganización administrativa. Protestó el cabildo de Gaudix por la temida desaparición de su obispado. «Ante el peligro de que se suprimieran por el partido conservador algunas Diócesis —contó después el obispo de Jaca sobre fecha imprecisa—, hízose una eficaz campaña de prensa, con la cooperación hasta de periódicos liberales, para quienes las pequeñas economías que podrían obtenerse no compensaban los perjuicios que irrogarían a algunos pueblos, con la alteración de la paz moral, y aun acaso de la material en los mismos.

El Cabildo y Ayuntamiento de Jaca escribieron a los Cabildos y Ayuntamientos de las capitales de las catorce Diócesis cuya supresión se pedía en las bases sobre las que habían versado las negociaciones con el Vaticano, a fin de intentar una acción común en pro de sus intereses amenazados; se demandó el auxilio de los Diputados y Senadores católicos y de los representantes de las poblaciones que podían ser perjudicadas; se enviaron exposiciones a los Poderes públicos, formándose Juntas de Defensa, compuestas de representaciones de todas las fuerzas vivas del país; y en algunos puntos se tomaron acuerdos como el de no pagar contribuciones en el caso de que la Diócesis fuera suprimida, y otros que no creemos conveniente referir ahora»¹²⁰, que en todo caso rechazaban el pretendido entendimiento entre jerarquía y Gobierno.

El 12 de octubre de 1907, los prelados del arzobispo de Zaragoza firmaban una documentada exposición a las Cortes sobre la dotación de culto y clero, en cuya redacción se adivinaba acaso la pluma ágil y ubérrima del obispo de Jaca, López Peláez, activista político y social de problemática costiana¹²¹. La exposición trazaba la miserable situación del bajo clero, contra la obligación constitucional del artículo 11, que forzaba al Estado a «mantener el Culto y sus ministros», y contra el 36 del Concordato, que preveía la elevación de aquellas dotaciones «cuando las circunstancias lo permitan». No solo nunca las había mejorado sino que, en concepto de ayuda a la nación, el Estado descontaba de las cantidades concordadas el 14 por ciento, contra el artículo 31 del propio Concordato, a juicio del escrito eclesiástico¹²².

Leída la exposición en el Congreso el día 14, la comisión dictaminadora para los presupuestos la atendió parcialmente, rebajando el descuento del 14 al 7 por ciento de los sueldos inferiores a las 750 pesetas. Pero, en la inútil discusión, los tradicionalistas insistieron al Ministerio en la necesidad de la reforma con fuerza que no tuvo sombra de oposición siquiera desde las minorías liberales¹²³.

En rigor, el mismo tono de esta actividad impedía afirmar de nuevo entendimiento estricto entre el tradicionalismo y el Gobierno. A comienzos del año 1908, llegó a decirse que con participación de «importantes elementos ..., incluso algunos catalanes que han estado hasta ahora apartados de las luchas políticas», se gestionaba la aceptación de la Constitución vigente por el Partido Integrista «o su mayoría ..., con la reserva de que se modifiquen con el tiempo los artículos referentes a la libertad de cultos.

Los integristas no ingresarían en el Partido Conservador, sino que aspiran a formar nuevo grupo político, la extrema derecha, con el título de Partido Católico»¹²⁴.

La impresión del acuerdo entre el Gabinete y el tradicionalismo pareció rebrotar en la prohibición realizada por el gobernador civil en marzo de la tradicional procesión cívica de los liberales valencianos ante las tumbas de los ajusticiados por Cabrera en la guerra civil. Pero el consiguiente debate parlamentario, que agrupó a los tradicionalistas con los conservadores frente a republicanos y monárquicos liberales, tampoco reflejó sino el propósito ordenancista de nuevo del Ministerio Maura, empeñadamente

dispuesto además a desarraigar la autoridad republicana de aquel enclave levantino ¹²⁵.

Un periodista adicto al tradicionalismo había mostrado acaso los verdaderos términos del supuesto acercamiento, ya en 1904:

«Para los Presidentes de Consejos de Ministros gobernar era contemporizar.

Para Maura, hasta hoy, es defender y hacer triunfar la justicia, es imponerla a los que la aborrecen porque la temen ...

No vayas ... a imaginarme maurista.

... no aplaudo al liberal, sino a la justicia que defiende y a *la sal* con que lo hace» ¹²⁶.

Y el mismo esquema —compenetración frecuente entre fuerzas de orden, pero no entendimiento expreso o continuado— debió regir en Cataluña, cuya problemática venía a primar ahora en la política peninsular.

En Barcelona, la euforia activista del tradicionalismo había fructificado en fundaciones de diversa índole. De ellas, quizá ninguna había sido tan decisiva en el campo político como el Comité de Defensa Social, que había comenzado a articular una tercera fuerza, en pro de una estricta defensa religiosa, entre el tradicionalismo integrista y carlista y el Partido Conservador, pero ajena a ambos extremos. Sobre su origen sólo cabe apuntar que coincidió con la organización en Francia, en el mismo año 3, de «Comités de defensa religiosa» de estilo cercano al español ^{126 b}.

Legalizado el último día de febrero de 1903, se definía el Comité (grupo quizá apuntado con la mayor frecuencia entre los que apoyaron la gestión de Maura) como una asociación para «la defensa de los intereses religiosos, morales y sociales de todas clases» por «todos los medios lícitos» ¹²⁷.

Lo formaba una minoría de profesionales católicos, laicos generalmente, de esquemas ideológicos netamente tradicionalistas o afines de cualquier modo a un cierto conservatismo integral: antiguos carlistas en algunos casos, pero siempre independizados ahora, de hecho, de cualquier partido, y ceñidos al más estricto respeto de la legalidad vigente, sólo para emplearla en aquellos fines ¹²⁸. Era obra, en definitiva, sobre todo de juristas dispuestos a sacar fruto de la situación con el criterio más realista, secundados por un grupo socioprofesional amplio pero definido, burgués pero distinto de los sectores de la producción y el pensamiento movidos por el catalanismo.

Eran activos miembros ¹²⁹ el marqués de Juliá, los abogados Benito de Pomés —a quien valieron sus trabajos como dirigente católico, especialmente en las congregaciones marianas, el título de conde de Santa María de Pomés, concedido en 1905 por Pío X a petición del cardenal Casañas ¹³⁰—, Alvaro María Camín, Rafael Vallet i Sabater, José Casajoana i Oliver; catedráticos de la Universidad de Barcelona: Magín Fábrega i Cortés, José Jordán de Urriés, Juan de Dios Trías i Giró —antiguo colaborador de la Juventud Católica barcelonesa ¹³¹—, Rafael Rodríguez de Cepeda —senador, conocido de antiguo por su participación en las tareas de los grupos confesionales levantinos, ya en los años 80 ¹³²—, Gonzalo del Castillo y Alonso, José Doménec y Estapá; los arquitectos —como el anterior—

Mercader y Enrique Sagnier i Villavecchia —antaño polaviejista—; algunos miembros destacados del clero; Celestino Ribera —ex rector del Seminario de la ciudad condal—, José Parellada —también procedente de la Juventud Católica¹³³, alejado después del Comité para dedicarse a la acción socialcristiana—, Ildefonso Gatell, Cayetano Soler, Salvador Oller i Padrol; médicos: Menacho, Cirera, Guerra; el dibujante Dionisio Baixeras; periodistas como José Rafael Carreras y José de Palau y de Huguét, que había sido director de la revista *Dogma y Razón*, sumada a Nocedal en 1888, y más tarde del *Diario de Cataluña*¹³⁴; el diputado Dalmacio Iglesias; Narciso Pla i Deniel, prestigioso jurista cultivador del derecho catalán, esforzadamente alejado de todo partido pese al proselitismo que con él procuraron la *Lliga* y Mañé i Flaquer¹³⁵. Presidieron el Comité, primero, Alejandro Pons, que debió morir en 1907; luego el polaviejista Luis de Dalmases.

Hombres con hechos y talante llenos de decisión, lo hicieron organismo de presión política que parecía responder a un sector de opinión coherente, arraigado, poco dado a la lucha política pero capaz de articular una acción legal efectiva. Sus estatutos, de otra parte, garantizaban su impermeabilidad ante influencias extrañas, merced a las disposiciones de elección de miembros y directivos.

En 1906, inauguraba el Comité una Sección Jurídica para reprimir legalmente «las noticias y frases injuriosas publicadas en la prensa contra personas e institutos religiosos». De ellas habían tramitado, hasta diciembre del año 7, 75 expedientes y 8 causas criminales, a los que habrían de añadirse otros 54 expedientes en el bienio 1908-1909¹³⁶.

Desde 1907, contó además con una Junta de Propaganda para «la organización y celebración de conferencias, conversaciones, mítines, reuniones públicas» de acción católica¹³⁷.

Tuvo asimismo una Sección de Prensa y Artes Gráficas, empeñada en contrarrestar la incipiente pornografía, y otra más de enseñanza, decididamente alineada en pro de la completa libertad contra «el odioso monopolio oficial», pero en contra también de las escuelas laicas.

En 1907, tenía, en fin, una Sección de Cuestiones Sociales, poco eficaz, y otra Política, esforzada ante todo en la preparación de los comicios, conforme a las exhortaciones de la jerarquía, a todos los niveles y con carácter independiente, puesto que estaba el Comité «desligado de todo partido político»¹³⁸.

Habría hecho triunfar así, según sus cifras, un candidato propio de los tres presentados en las elecciones municipales barcelonesas de 1905; aunque el triunfo no fue reconocido¹³⁹ y tardó en repetirse. «El trabajo —justificaba el secretario del Comité en 1907— es difícil; el absoluto desinterés con que ... procede la Sección aleja de su lado a los que ante todo se proponen medros personales o triunfos de partido»¹⁴⁰.

Parece fue en el año 5 cuando se abrió en Madrid un nuevo Centro de Defensa Social, de igual nombre y finalidad, y semejante estructuración, quizá con el respaldo de Claudio López Bru, marqués de Comillas¹⁴¹, fundado a imitación pero autónomo de aquel de Barcelona. Y, dos años más tarde, con Barcelona misma y con Madrid, la organización se exten-

día en cinco centros independientes y 25 delegaciones, todas del Comité de la ciudad condal: en Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife y en 26 localidades del Principado ¹⁴². A ellas aún se añadieron, en 1908 y 9, siete delegaciones más ¹⁴³ y centros en relación no definida «en Reus, Sevilla, Zaragoza, Jerez, Madrid, Vitoria, Oviedo, Gijón y otras partes [donde] se agrupan, organizan, luchan y triunfan elementos que llevan nuestro nombre y nuestro espíritu» ¹⁴⁴.

Siendo organización minoritaria por naturaleza, su expansión fue indudable en los años de Maura, aún sin saber el punto de partida, conforme a las evaluaciones de socios del Comité de Defensa Social de Barcelona ¹⁴⁵.

Bienio	Altas	Bajas	
1906-7	71	23	(6 por defunción).
1908-9	161	31	(6 por defunción).

Su actividad, en todo caso, había de ser de continuo encomiada por numerosos miembros de la jerarquía eclesiástica, en pago a su efectiva presencia organizadora en las más graves circunstancias de la política de estos años.

En cuanto a sus reiteradamente afirmadas relaciones con Maura, en marzo de 1908 el abogado Rafael Vallet i Sabater, secretario de la Sección Política del Comité de Defensa Social de Barcelona, pronunció una significativa conferencia sobre la reforma electoral llevada a cabo por el Gabinete conservador, cuyo encomio, como «esfuerzo en favor de la purificación del sufragio universal y de la moralización» ¹⁴⁶, subrayó ya la identidad de miras entre ambos.

Identidad de fines y autonomía reflejó así mismo la entrevista barcelonesa, aún en marzo, del propio jefe del Gobierno con los representantes del Comité encargados de hacer entrega de un mensaje al monarca en pro de la represión del terrorismo. «Vamos paralelamente con ustedes», les dijo Maura ¹⁴⁷. Pero sus inmediatas preguntas sobre los objetivos del Comité y su relación con el Centro madrileño del mismo nombre demostraron más interés que previo conocimiento.

Cuando hubo acuerdo conocido, parece fue circunstancial, y, en algún caso, mera coincidencia. Así, en 1907, el Gobierno conservador atendió en parte, con algunas normas, la exposición que, meses atrás, había remitido el Comité a las Cortes sobre el castigo del anarquismo ¹⁴⁸. Y, más tarde, la entidad barcelonesa apoyó expresamente el proyecto contra el terrorismo al ser discutido por la opinión y el parlamento ¹⁴⁹. Un entendimiento local volvió a existir en Barcelona en 1908.

Cuando, en octubre, una nueva entrevista barcelonesa sobre la situación de la ciudad condal reunió a Maura y a los representantes de Defensa Social, la afinidad se advino más íntima. «El Comité no pertenece —le recordó su presidente, Luis de Dalmases— a partido político alguno, pero se preocupa seriamente de los intereses de Barcelona y de toda España.

ansiendo su progreso moral al lado del material, y aplaudirá cuanto se haga en este sentido y combatirá lo que se le oponga.» Maura le respondió «en términos de gran intimidad y confianza». Se confesó alentado por «el apoyo de la opinión más o menos determinado que siente a su alrededor». Pero era necesario que esa opinión llegara a los comicios. «El día que se unieran para hacerlo así en España cuantos piensen bien, seríamos omnipotentes contra el mal» ¹⁵⁰.

¿Pasó de esta reconocida compenetración y de alguna actuación conjunta aconsejada por las circunstancias, la unión de Maura con los grupos confesionales entre 1907 y 9? «Alguien ha censurado las relaciones de nuestra Sociedad con los Poderes públicos y los hombres que los representan —advertiría el Comité en 1910—; pero a buen seguro que no se ha tomado el trabajo de examinar lo que decimos cada vez que a ellos nos acercamos. ... nuestras representaciones, así verbales como por escrito, no han tenido nunca otro objeto que el de reclamar el remedio de las necesidades públicas cuando no el de protestar.» Tal había sido, en concreto —añadió—, el móvil de aquellas entrevistas con el rey y con Maura ¹⁵¹.

Por su parte, Comillas consideraba al jefe del Gobierno «estadista irremplazable hoy por hoy, de profundos sentimientos religiosos», no obstante «algunas graves censuras doctrinales aún no corregidas» ¹⁵². En 1909, el Gabinete y el Comité se aliaron en Barcelona para las elecciones municipales de mayo. En 1915, en cambio, el Centro madrileño subrayaría expresamente su independencia del jefe del Partido Conservador al aceptar el entendimiento electoral con el Gobierno Dato y el grupo liberal de García Prieto, frente al de Romanones y a los republicanos, en contra del criterio abstencionista que Maura dijo esperar de aquel organismo ¹⁵³.

4. *Nuevo orden de fuerzas en Cataluña*

En marzo de 1907, Pío X escribía al cardenal Casañas una carta de encomio por la multitudinaria manifestación barcelonesa del 20 de enero contra el proyecto de ley de asociaciones del caído Gobierno López Domínguez. Resaltaba de ella «el ejemplo de unidad» de los catalanes, que «han dado público testimonio de anteponer en sus corazones la religión a los partidos». Ejemplo que habían de seguir todos los españoles —y mantener los catalanes— «ora cuando [el catolicismo] sea objeto de algún ataque por parte de los enemigos, ora cuando la condición de los tiempos exija acudir a los comicios para tomar parte en la administración de cada localidad o en el gobierno del Reino» ¹⁵⁴.

La carta fue pensada por el Pontífice «como apercibimiento a los demás obispos» sobre la actitud que habían de adoptar en la cuestión política ¹⁵⁵. Era, además, hartamente oportuna, según notó Merry del Val, ante las elecciones anunciadas para marzo y abril ¹⁵⁶: máxime en Cataluña, donde probaba sus primeras fuerzas una nueva organización, que imponía además un planteamiento diverso a los grupos enfrentados por el problema religioso, hasta entonces plasmados en el esquema de dos frentes que simbolizaba, a un extremo, el Comité de Defensa Social.

En el invierno de 1905-6¹⁵⁷, el movimiento de Solidaridad Catalana, creado como grupo de presión política, había reunido a todos los partidos autonomistas del Principado —integrista, carlista, *Unió Catalanista*, *Lliga* y *Esquerra*, parte de la Unión Republicana, federalismo— frente al centralismo del Partido Liberal, manifestado en su respaldo al ejército tras aquellos ataques de la oficialidad barcelonesa a los locales del ¡*Cu-Cut!* y *La Veu de Catalunya*. Pero, en el pensamiento de Cambó, la nueva organización podía llegar a suplantar la polarización conservatismo-liberalismo del sistema de Cánovas por el enfrentamiento regionalismo-socialismo¹⁵⁸. Tal pretensión, que parecía afanarse por adecuar la realidad legal a la España real, suponía no obstante una difícil claudicación de las demás reclamaciones programáticas de cada uno de los grupos integrados en Solidaridad. Y, en concreto, requería un acuerdo entre grupos confesionales y grupos defensores de la política anticlerical.

En rigor, esta actitud no era ajena al historial del catalanismo más moderado que Cambó encarnaba. Ya en 1904, el integrista Juan Balanzó i Pons —solidario más tarde, sin embargo— había dirigido unas *Cartas catalanistas al meu bon amich don Albert Rusinyol* en las que lamentaba que el nacionalismo no se declarase confesional y a veces admitiera «fraternal convivencia con sus opuestos»¹⁵⁹. En 1906, esta postura volvió a exteriorizarse en *La Nacionalitat Catalana* de Prat de la Riba, que sugería la independización —luego fundamental para la historia de España— del hecho nacional: «una Catalunya lliure —decía— podria ser uniformista, centralisadora, democrática, absolutista, católica, lliurepensadora, unitaria, federal, individualista, estadista, autonomista, imperialista, sense deixar de ser catalana»¹⁶⁰. Y la misma actitud fue advertida mejor entonces, en la propia *Solidaritat*. Ya en los comienzos del año 6, en un comentado folleto sobre *La Crisis del Catalanismo*, José Pella i Forgas planteó entre otros temas la ausencia de criterio uniforme en tal movimiento sobre la cuestión religiosa¹⁶¹. Sardá i Salvany insistió en ello en junio, al advertir en la *Revista Popular* cómo el entendimiento solidario acogía a «monárquicos y republicanos, carlistas y alfonsinos, creyentes y librepensadores», en tanto «católicos carlistas, católicos alfonsinos y católicos integristas» no eran capaces de conseguir la unión¹⁶². Y la advertencia se convirtió en protesta cuando, en 1906, adeptos católicos de Solidaridad —la *Lliga* especialmente— mostraron un empeñado esfuerzo por alejar de sus manifestaciones todo indicio de confesionalismo.

En noviembre, cuando la Junta de la *Lliga Regionalista* formuló su protesta contra la ley de asociaciones preparada por el Partido Liberal, «al combatre la lley d'Associacions —manifestó sin embargo— ... no la presentém com una lley que ataquí la religió; presentém-la tal com es; com un nou atac a la llibertat»¹⁶³: enfoque peculiar, de interés remarcable, que no aceptó el ámbito madrileño ni una parte de la opinión política catalana.

En los comienzos de 1907, la insistente protesta de Sardá i Salvany tuvo cierto eco, favorable y desfavorable, en la prensa de Cataluña. El 7 de febrero, de nuevo la *Revista Popular* dio al tema un sesgo doctrinal inevitablemente polémico. Aun cuando el pacto solidario era en sí mismo

lícito —advirtió un sacerdote de Defensa Social, Cayetano Soler, ante las elecciones municipales y generales de marzo y abril—, también implicaba «mutua ayuda para sacar triunfantes los candidatos presentados», que obligaría a los católicos «a votar en unos distritos a católico-liberales y en otros, a sectarios enemigos de la Religión de Cristo». Y esto no podía ser lícito ni siquiera a tenor de los principios del «mal menor», que habían de anteponer los católicos independientes, los conservadores o incluso los fusionistas más templados a los republicanos ¹⁶⁴.

En el mismo trabajo y en un folleto publicado un mes más tarde sobre *La solidaridad catalana y la conciencia católica*, Soler emplazaba a la autoridad eclesiástica para resolver la cuestión. La respuesta, no obstante, fue tolerante por completo. El vicario general de la diócesis de Mallorca, Antonio María Alcover, afín al catalanismo, afirmó expresamente en el propio Comité de Defensa Social de Barcelona la conveniencia de votar la candidatura solidaria —en la que figuraba el republicano anticlerical Salmerón ¹⁶⁵. Parece que el mismo cardenal Casañas lo confirmó, e incluso los conservadores de la ciudad condal declararon ver bien su triunfo, porque suponía la derrota del lerrouxismo ¹⁶⁶. Se diría más tarde que el Vaticano admitía, si no alentaba, la colaboración de los católicos con Solidaridad Catalana para instrumentalizarla también contra el Partido Liberal ^{166 b}.

La propaganda electoral jerárquica fue, en toda España, desusadamente intensa. Debió iniciarse en febrero con pastorales de los prelados de Santiago, Salamanca, Vitoria, Guadix, Madrid, Palencia; en marzo con la del de Zamora; de Santander y de Toledo en abril. Centradas en la carta *Inter Catholicos Hispaniae* de Pío X, prohibían con frecuencia, para organizar mejor las fuerzas católicas, la votación a candidatos que no hubieran antepuesto su confesión católica a su línea política. El arzobispo de Zaragoza publicó unas detalladas normas donde ordenaba la elección de aquellos que se declarasen «netamente católicos», «con la aprobación del Prelado», o de los menos radicales donde no hubiera ninguno confesional ¹⁶⁷. Se llegó, incluso, a difundir una fórmula de confesión que había de ser aceptada y firmada por aquellos que pretendieran la representación de la Iglesia y el apoyo del clero ¹⁶⁸, que debió predicar frecuentemente desde el púlpito en favor de sus defensores ¹⁶⁹.

Surgieron, de este modo, candidaturas mixtas como la católico-integrista-carlista de Pamplona o la católico-carlista-bizcitarra de Bilbao, activamente apoyada por el obispo de Vitoria ¹⁷⁰. Y, donde no fue posible constituir las, los votos eclesiales se orientaron hacia el conservatismo, a veces con aliento expreso de los ordinarios, algunos de los cuales —el arzobispo Soldevilla en sus instrucciones a los zaragozanos— alabaron expresamente la política religiosa de los primeros meses del Gabinete Maura.

El Gobierno ganó en Valencia las elecciones provinciales del 10 de marzo. Y, en Barcelona, la diputación elegida fue al fin de la solidaria, que se dijo votaron, gráficamente, con poyo oficial, «hasta los asilados de las Hermanitas de los pobres» ¹⁷¹, conforme, en definitiva, al dictamen del gobernador civil, Ossorio, que vio entonces al clero plenamente comprometido en la organización autonomista ¹⁷².

El triunfo de la Solidaridad fue absoluto en los comicios generales de abril y mayo de 1907¹⁷. Ganó 41 de las 44 actas catalanas de la cámara baja y todas las del Senado. Así, el Congreso, dominado por una gruesa mayoría gubernamental de 252 diputados, dejaba escaso margen para la oposición tradicional. Mantenidos los tradicionalistas, demócratas y republicanos no solidarios en cifras semejantes a las de los comicios anteriores —11, 9 y 17, respectivamente—, el Partido Liberal de Moret y Montero Ríos, reducido a 69 escaños, quedaba virtualmente en la necesidad de abrir de nuevo la brecha radical y pretender el inevitable bloque de las izquierdas, único modo, desde el 99, de mantener con vida la herencia de Sagasta. Esto, si no se aventuraba, como llegó a temerse, a conspirar con el ejército para impedir la apertura de aquellas Cortes¹⁷⁴ amparadas por la sombra de *Solidaritat*, nacida ésta del enfrentamiento catalanista con el Gobierno de Moret de 1905 y el ejército.

Las posturas permanecieron inalteradas durante la primera etapa del Ministerio Maura. Reabiertas las Cortes el 13 de mayo de 1907, el mensaje de la corona evitó por completo la cuestión religiosa, para ceñirse a las mejoras económicas y militares y sobre todo al proyecto de ley sobre administración local. Diputados republicanos intentaron fallidamente, tras la constitución definitiva del Congreso en junio, replantear el tema religioso con interpelaciones sobre el comportamiento del Gabinete ante el ayuntamiento de Valencia y una enmienda al dictamen de respuesta al monarca en pro de la enseñanza aconfesional¹⁷⁵. Fue inútil. Minimizado el fusionismo, la Solidaridad, por otra parte, había desordenado el ya disperso frente del gorro frigio, al dividir la Unión Republicana¹⁷⁶.

En el breve período parlamentario anterior al verano de 1907, se esbozaron, con todo, dos líneas de interés capaces de transformar ese estado de fuerzas. La vaguedad de las intervenciones solidarias, de un lado, reveló la dificultad de mantener coherentes grupos tan alejados en sus reivindicaciones programáticas. De otro, la misma vaguedad permitió a Maura resumir el entendimiento de los autonomistas en el deseo de autogestión local, que era precisamente, según dijo, lo que el Gobierno pretendía también con el proyecto de administración leído el 7 de junio por La Cierva.

En realidad, esta llamada respondía a una afinidad tácita, nacida por encima de todo acuerdo expreso: *«l'originalitat d'aquelles Corts —escribiría Hurtado— ... estava en les afinitats d'origen i de pensament que existien entre la majoria conservadora i la nostra minoria preponderant. ... En realitat, es tractava d'un reflex semblant al de Catalunya enfront d'una mateixa amenaça. En el pensament de Maura, com en el nostre, els fets venien a demostrar que aleshores, com sempre, el problema essencial de la vida pública espanyola era constituir el país amb les seves forces naturals en lloc de sacrificar-lo a la constitució d'un Estat. ... Un instint secret nos deia que el veritable enemic era fora del partit que governava, i els nostres discursos d'oposició tenien sovint la novetat de no amar dirrigits contra el Govern, sinó contra els liberals»*¹⁷⁷.

El resquebrajamiento de *Solidaritat*, en cambio, partió seguramente de la *Lliga* sobre los otros grupos integrantes, quizá por aquel deseo de

Cambó de utilizar la fuerza de aquella como germen de un partido único catalán bajo su égida¹⁷⁸. Parece fue esa hegemonía la que, muy pronto, movió a la *Esquerra* a organizar por medio de su periódico, *El Poble Català*, una campaña contra Cambó y la *Lliga*, so pretexto de un acuerdo entre el político y Maura, que aquél negó, acerca del proyecto de administración local.

La ofensiva del diario equivalía al posible alejamiento de la *Esquerra* de Solidaridad Catalana, que, de este modo, aun con las adhesiones de tradicionalistas, federales y salmeronianos, podía iniciar la ruta hacia el futuro que Sol y Ortega le vaticinara: «La *Lliga* con Cambó, formando un fuerte partido reaccionario, intransigente, los elementos de la Defensa Social, mezclados con conservadores, ultramontanos y carlistas; una especie de liga católica, vaticanista, de plutócratas y caciques»¹⁷⁹.

En adelante, el proceso mostró ciertos empeños religiosos. *El Poble Català*, ahora en plena línea anticlerical, llegó a ser condenado por Casañas en julio de 1908, en vista de su desprecio del magisterio de la Iglesia y de algunos escritos que el obispo juzgó inmorales y racionalistas¹⁸⁰. Antes, en mayo de 1907, Sardá i Salvany había vuelto a replantear el tema de la licitud del entendimiento solidario tras las elecciones de diputados, para intentar ahora la atracción de carlistas e integristas, solidarios también, hacia una unión confesional, «futura Solidaridad católica española», ajena al aconfesionalismo del movimiento autonomista. Los tradicionalista daban, según él, «el nervio y fuerza y respetabilidad principal a la Solidaridad catalana»¹⁸¹, y, en la protesta del invierno anterior contra el proyecto de ley de asociaciones, ellos «fueron el alma del movimiento y formaron el núcleo más poderoso de él y más consistente. Nadie desde treinta años para acá pudo darse hasta entonces cuenta de su número y de su fuerza, y sobre todo de su admirable cohesión»¹⁸².

Durante el verano de 1907, un publicista jesuita, el padre Juan de Abadal, propuso en un folleto el mismo acuerdo, expresamente opuesto a la Solidaridad Catalana, cuyo programa no aludía a «las reivindicaciones del Catolicismo», siendo por tanto «un programa religiosamente neutro y prácticamente liberal»¹⁸³. Y la insistencia de la *Revista Popular* replanteó la polémica, en verdad desoída por los propios catalanistas.

En el otoño, el tema penetró en las publicaciones del tradicionalismo adicto al movimiento, con visos de escisión. Desde Madrid, los elementos más intransigentes, *El Siglo Futuro* por el integrismo¹⁸⁴ y el carlista salmantino Gil Robles desde *El Correo Español*, por el carlismo, subrayaron el sinsentido del acuerdo de sus correligionarios catalanes con elementos contrarios a la Iglesia¹⁸⁵. En la Asamblea del Partido Integrlista de mayo de 1906, Nocedal había ordenado entusiásticamente «que todas las Juntas, periódicos y Círculos del partido se adhirieran sin distingos ni reticencias al movimiento de Cataluña» (lo que era una importante transformación de táctica y actitud en el grupo totorreista). Pero la inmediata enfermedad del caudillo íntegro, que lo llevaría a la muerte el primero de abril de 1907, lo marginó de las campañas solidarias, y su sucesor en la jefatura Juan Olazábal, no siguió aquella línea de conducta. «Nuestros compromi-

sos con la Solidaridad fueron olvidados —lamentaría un dirigente catalán—, y diré, sin temor de exagerar, *con cierta complacencia*»^{185 b}.

En febrero de 1908, el ayuntamiento de Barcelona aprobó un proyecto de apertura de cuatro escuelas municipales populares, en las que el aprendizaje de la religión católica sería voluntario y el agrupamiento de los alumnos, mixto, en contra del criterio educativo de la Iglesia. Casañas publicó una carta pastoral contra ello. La Junta Diocesana de Defensa de los Intereses Católicos suscribió su protesta a comienzos de marzo¹⁸⁶. Y, enseguida, el Círculo Regionalista Católico —tímido contrapunto del aconfesionalismo solidario—, el Comité de Defensa Social, el Centro Monárquico Conservador y el Círculo Tradicionalista acordaron organizar un mitin¹⁸⁷, en un entendimiento que realizaba la unión católica circunstancial pedida por el Papa, pero que comenzaba a romper por la derecha —como *El Poble Català* por la izquierda— la cohesión solidaria, al alejar en este trance al tradicionalismo.

Se advirtió de inmediato que eran los concejales de *Solidaritat* los que apoyaban el proyecto. Pero no sólo los republicanos: «también los concejales de la derecha (católicos tan significados —advertiría a Maura el gobernador civil, Ossorio— como Puig i Alfonso y Durán i Ventosa), a cambio de lograr que la enseñanza sea catalana»¹⁸⁸. Frente a ellos, en el Ayuntamiento, un miembro del Comité de Defensa Social, Narciso Pla i Deniel, dirigió la defensa de la enseñanza de la religión. Y, al lograr del alcalde barcelonés el propósito de suspender el acuerdo, en uso de sus atribuciones, la propia *Solidaritat* se pronunció, en escrito oficioso, «absolutamente contraria a esa decisión, «como atentoria a la autonomía..., que nos obliga a mantener todos los acuerdos, así de este Ayuntamiento, como de los sucesivos», «hasta en medio de los presentes apasionamientos»¹⁸⁹.

Incluso desde las filas moderadas de la *Lliga*, Prat de la Riba manifestó su desacuerdo con las protestas confesionales contra algo que era tan sólo una declaración de principios¹⁹⁰. Y, suspendido al fin el proyecto municipal a comienzos de mayo por el alcalde, Cambó tronó en las Cortes contra la intolerancia, con frases que habían de suscitar una amplia queja en la opinión católica: «el jacobinismo, el radicalismo, la demagogia —afirmo—, no es patrimonio ni característica de las izquierdas; se encuentra lo mismo al servicio de las derechas»¹⁹¹.

Frente al esquema catalanismo-radicalismo de los comienzos de la vida del Gobierno de Maura, pretendía alzarse de nuevo, de este modo, el antagonismo tradicional del sistema de Cánovas, según volvió a anunciar como inminente el fracaso de Solidaridad Catalana en las elecciones municipales barcelonesas de diciembre de 1908.

Significativamente, el triunfo de los republicanos antisolidarios en ellas —Lerroux, Sol y Ortega, Hermenegildo Giner de los Ríos— fue recibido en Madrid por los bloquistas como «el fracaso total y absoluto de Maura»¹⁹². Pero no fue menos significativa la derrota de los autonomistas enfrentados al bloque de izquierdas. Fracasaron los tres republicanos de la candidatura: Cruells, Layret, uno de los sostenedores del proyecto de escuelas laicas del Ayuntamiento, y Suñer i Capdevila, republicano conocido

únicamente por su anticlericalismo. Y sólo fue elegido el solidario Ramón Albó, de significación fundamental y reiteradamente católica, miembro por nombramiento episcopal de la Comisión Directiva y Ejecutiva del Consejo Diocesano barcelonés de las Corporaciones Católico-Obreras ¹⁹³.

El hecho fue juzgado generalmente por la prensa confesional como síntoma del retraimiento de la opinión fiel a la Iglesia. Al conocerse la candidatura, el Comité de Defensa Social había salido al paso de los consiguientes debates sobre la licitud de apoyar a anticlericales tras la gestión del Ayuntamiento elegido en 1907, para insistir en «la obligación de votar al único candidato católico» ¹⁹⁴. Muerto Casañas en octubre del año 8, las autoridades eclesiásticas no habían manifestado su opinión.

Contra el criterio de la prensa carlista madrileña y salmantina, tampoco *El Correo Catalán* se había opuesto a la candidatura de Solidaridad. Pero los carlistas catalanes se dijeron «francamente disgustados ante ella» y algunos anunciaron su abstención ^{194 b}. «El pueblo catalán —dijo luego *El Siglo Futuro*, ante el triunfo de Albó— ha demostrado en las elecciones que es católico ante todo, y que permanece fiel al ideal catalanista, pero no puede, ni debe ni quiere nada con los enemigos de su fe» ¹⁹⁵, influido acaso en mayor medida, según se aseguró, por la actitud del Comité y los ataques de Sardá i Salvany y de la prensa conservadora, que por el silencio del legitimismo.

¿Hubo infravaloración de las fuerzas confesionales por parte especialmente de la *Lliga*? En adelante, en todo caso, la decadencia de Solidaridad apoyó el replanteamiento del esquema político habitual: conservadurismo-fusionismo en el entorno madrileño, moderación-radicalismo en el catalán. El 17 de diciembre, cuatro días después de las elecciones, la Junta Directiva del Comité de Defensa Social de Barcelona acordaba formalmente «combatir el programa antirreligioso expuesto por el señor Moret en Zaragoza» en noviembre de 1908 ¹⁹⁶. Se perseguía explícitamente oponer al de las izquierdas un «bloque de las derechas» (término ya aceptado por los grupos católicos confesionalistas de comienzos de siglo), curiosamente justificado por «aquella palabra sagrada que señala para el premio eterno los que estarán a la derecha en el último de los días» ¹⁹⁷.

En cuanto al carlismo, su alejamiento de Solidaridad debió sobrevenir prácticamente al menos en julio de 1909, a raíz de una agria polémica entre *El Correo Catalán* y *El Poble Català*, surgida por ciertas frases de estro injuriosas para don Jaime ¹⁹⁸.

2

5. El retorno al sistema de Cánovas

En Barcelona, en 1909, el incipiente bloque apuntó en la alianza del Gobierno de Maura y el Comité de Defensa Social ante las elecciones municipales de mayo. Quisieron ambos, en realidad, «la coalicción de las derechas ... perseguida desde mucho antes pública y privadamente por el Comité» ¹⁹⁹. Mas faltó entendimiento con la *Lliga*, empeñada en el proyecto solidario, y el triunfo fue republicano.

A pesar de los llamamientos del propio Comité, la derrota se repitió en octubre, caído ya el Gobierno conservador. En los comicios provinciales, también en Cataluña, luchó la candidatura integrista-carlista-conservadora-Defensa Social, con «la seguridad, resultante de los datos del escrutinio, de que si la Lliga Regionalista hubiese aceptado la coalición que se le propuso por el Comité, en Barcelona habría triunfado la candidatura en orden» ²⁰⁰.

Por parte liberal, la constitución de las Cortes de 1907, en que los tres sectores, según vimos —autonomista moderado, tradicionalista y conservador—, sumaban bajo el Gobierno Maura casi 300 diputados, de 405, hizo forzoso pretender el reagrupamiento de las oposiciones. Se buscó, en efecto, en 1908, entre «los políticos liberales desde la izquierda monárquica hasta la más radical, frente a la ostensible unión de los elementos de la derecha, alentada con vehementes complacencias por algunos elementos conservadores» ²⁰¹.

El entendimiento era además posible, tras la ruptura del Partido Liberal Fusionista en 1903. En la oposición, los esfuerzos por reunificarlo habían dado ciertamente fruto. En febrero de 1907, Montero Ríos reconoció la jefatura de Moret, ratificada en una reunión de 31 ex ministros liberales —con asistentes y adheridos—, Vega de Armijo entre ellos.

López Domínguez y Canalejas, por su parte, habían formado en marzo el Partido Demócrata Monárquico, con sólo nueve prohombres: Pío Gullón, Capdepón, Rodrigáñez, Sánchez Román, Dávila, Gimeno, Calbetón, Alonso Castrillo y Francos Rodríguez. Con una justificación casi explícitamente religiosa: porque «no dieron cuenta quienes debían darla ... de cómo en las cumbres del mando se fueron de su memoria las ideas proclamadas en las horas de combate» ²⁰².

En las Cortes de Maura, la disminuida oposición brotó de filas republicanas siempre. Sólo en la primavera de 1908 centró al fin Canalejas la ofensiva contra el Gobierno. Hasta entonces, el dominio de la opinión ordenancista había mantenido ausente la cuestión religiosa de la primera línea de los temas políticos ²⁰³, ocupada en principio por el debate sobre el proyecto de administración local. Pero, en enero del año 8, el *Diario Universal* hizo una revelación que terminó de urgir a los sectores liberales la recuperación de su puesto ofensivo. Desde 1893 al menos, algunos institutos de perfección cristiana habían solicitado indemnización por los conventos que fueron incautados por el Estado a raíz del decreto de 18 de octubre de 1868. Ante la magnitud de la cuantía, Gamazo resolvió por real orden de 9 de marzo de 1894, ratificada luego por Villaverde el 6 de abril de 1900 y por Amós Salvador el 20 de febrero de 1906, que la reclamación quedaría en suspenso en tanto no se gestionara con la Santa Sede un acuerdo aceptable. Pero, el 25 de abril del año 7, otra orden de Osma, no publicada en la *Gaceta*, dio curso a aquellos expedientes.

Considerado como favor costoso hecho a los eclesiásticos, republicanos y demócratas —Canalejas entre ellos— clamaron en el Congreso contra Maura en una amplia interpelación durante el invierno del año 8. Minimizada ésta, sin embargo, por la cercana muerte del rey y el heredero de Portugal, la reanudó el propio Canalejas de mayo a julio, en otra larga

discusión sobre la política educativa y religiosa del Ministerio ²⁰⁴. Pero fue la presentación del proyecto de represión del terrorismo, reclamado insistentemente por los elementos de orden de Barcelona, que había sido bautizada ya «la ciudad de las bombas», lo que impulsó la unión ²⁰⁵.

El proyecto encerraba ciertas cláusulas atentatorias contra la libertad de prensa. Y fue un grupo de prensa el que apoyó el acuerdo: la Sociedad Editorial de España, constituida en 1906.

En abril de este año, los accionistas de los tres diarios de mayor tirada —*El Liberal*, *El Imparcial* y *Heraldo de Madrid*— habían adoptado aquella razón social bajo la presidencia del periodista Miguel Moya, director de primero. Las tres publicaciones mantendrían su estilo peculiar: republicano no independiente aquél; regeneracionista el segundo, que, en manos de la familia Gasset, había basculado del silvelismo al fusionismo; canalejista: *Heraldo*, que en Canalejas tuvo uno de sus más fuertes accionistas desde 1893.

La unión quedó apodada *trust* en adelante, pese a las quejas que contra el nombre adujo *El Liberal*, consciente del sentido monopolístico de la nueva palabra, de moda entonces ²⁰⁶. Pero nadie previó lo que en él se gestaba: un formidable grupo de presión periodística, en el preciso instante de despegue de la prensa española.

Según La Cierva, él fue quien procuró a Miguel Moya la cantidad pedida por Canalejas para la venta del *Heraldo*, de conformidad con Maura, que alentó a su colaborador para obtenerla, «creyendo que era una gran fuerza que de ir en un sentido o en otro podía hacer mucho bien y mucho mal». Conservadora fue la financiación, que antes había pretendido Moya del tradicionalismo vizcaíno (de Urquijo exactamente) ²⁰⁷, en una paradoja no exenta de sentido y de ocasiones análogas ²⁰⁸.

¿Por qué variaron luego de actitud? Según La Cierva siempre, por su negativa desde el despacho de la Gobernación a admitir la lista de candidatos del *trust* al Congreso ante las elecciones de 1907. Candidatos republicanos o liberales todos, no los pudo aceptar por «la necesidad de mayoría para realizar el programa del Gobierno» ²⁰⁹. Lo que llevó en efecto, según vimos, a una aplastante disminución de la oposición fusionista.

El proyecto de ley de terrorismo facilitó motivos para el ataque en la primavera del año 8, hasta lograr que Maura lo retirase del Congreso por sacar adelante el de reforma de la administración. Y el triunfo demostró también la conveniencia de formalizar la oposición en un bloque de izquierdas.

Pactado en un banquete dado a Moya para celebrar aquel éxito, Moret sentó las bases del acuerdo en su famoso discurso del 18 de noviembre en el Casino Liberal de Zaragoza. El problema: el avance de la reacción, del clericalismo, de las órdenes religiosas en concreto. La dificultad: la desunión del frente liberal. La única base posible de entendimiento —«el punto en el cual debemos coincidir todos los que formamos en las izquierdas»—: la libertad de conciencia, plasmada en la enseñanza, en el matrimonio, en el nacimiento y en la muerte, y la sujeción de los religiosos no concordados al derecho común.

Programa moderado en el fondo, no hablaba de separación entre Iglesia y Estado —que le había sido desaconsejada expresamente por Clemenceau a Moret en septiembre anterior, en términos perentorios, ante la libertad de acción de la jerarquía contra el Estado que había supuesto en Francia la ruptura de 1903²¹⁰. Pero tampoco reflejaba la moderación del oportunista Moret cuando, en 1907, procuraba convencer a Maura de su enemiga a la ley de asociaciones del Gobierno López Domínguez y la necesidad de acabar con el anticlericalismo²¹¹.

Para cumplir la amenaza de ahora, en su discurso de noviembre de 1908 en Zaragoza, aquél llamaba «a los demócratas, a los republicanos, a los socialistas, a cuantos tienen algún interés en la vida pública»²¹².

Por los republicanos no solidarios de la Unión, Melquiades Álvarez aceptó la llamada públicamente en su discurso de Santander del 28 de noviembre de 1908. El predominio del Vaticano sobre la corona, dijo, tenía convertida a «España en feudo del Pontificado». Para evitarlo, era preciso establecer la libertad de conciencia, pero de modo que convenciera «a todos de que tal obra no va contra la Iglesia católica, sino contra los que la explotan y de ella se sirven para fines políticos». Y esto sólo podía realizarse por la unión de «todos los que aman la libertad»²¹³.

Aceptado por Canalejas, López Domínguez y Montero Ríos, más reacio con todo al acuerdo con los republicanos, e incluso por socialistas y comunistas según la sorprendente afirmación de Romanones²¹⁴, el bloque comenzó ya en noviembre una campaña de mítines propagandísticos por toda la península. Defendía un programa mínimo común concretado en la reforma constitucional, en pro de la implantación del librecultismo y de la constitución del Senado por medio del sufragio universal, y en la supremacía del poder civil sobre el eclesiástico²¹⁵.

Se erguían, pues, las posiciones de antaño, cuando la Semana Trágica vino a replantearlas.

NOTAS

⁽¹⁾ Vid. Javier Tusell Gómez: *Para la sociología política de la España contemporánea: el impacto de la ley de 1907 en el comportamiento electoral*, «Hispania», XXX (1970), 571-631.

² Cfr. Diego Sevilla Andrés: *Antonio Maura. La revolución desde arriba*, Barcelona, Ed. Aedos, 1954, pág. 304.

³ José Francos Rodríguez: *La Vida de Canalejas*, Madrid, Tip. de la Rev. de Arch., Bib. y Museos, 1918, pág. 407 s.

⁴ Conde de Romanones: *Notas de una vida*, en *Obras completas*, tomo III, Madrid, Ed. Plus Ultra, 1949, pág. 175.

⁵ *Op. cit.*, 423 s.

⁶ Maximiano García Venero: *Santiago Alba, monárquico de razón*, Madrid, Aguilar, 1963, pág. 75.

⁷ Cfr. Constantino Bayle: *El segundo marqués de Comillas, Don Claudio López Bru*, Madrid, Administración de «Razón y Fe», 1928, pág. 194 s. Las dificultades provenían, según explicaba el obispo de Orihuela, Maura i Gelabert al

marqués de Comillas en 1898, de que «los católicos afiliados al partido carlista, al integrista, a los partidos liberales, por necesidad han de mirar con prevención al periódico católico independiente, y serle más o menos abiertamente hostiles» (cit. *ibidem*, 195). Sobre la personalidad de este prelado, portaestandarte de la democracia cristiana española, hemos de esperar el estudio que prepara el Dr. José Manuel Cuenca.

⁸ Cfr. Abel Vázquez García: *El Padre Cámara, figura preclara del episcopado español y fundador de los estudios eclesiásticos superiores de Calatrava*, «Hispania Sacra», VII (1954), 336. De hecho, entre la escasa publicidad del nuevo diario, figuró desde el número 1 un anuncio de la Compañía Transatlántica del marqués (vid. *El Universo*, 1-X-1900 ss.). Falta un estudio sobre el interesante pensamiento político de Cámara.

⁹ Según José Tarín-Iglesias: *Periodismo de ayer y hoy*, Barcelona, Ed. Poliglota, 1959, pág. 92.

¹⁰ Carta de Rampolla a Ortí, apud. *El Universo*, 1-X-1900.

¹¹ Circular de 16-IX-1900, *ibidem*, 10-X-1900.

¹² Vid. *ibidem*, 9-X-1900.

¹³ Bayle: *op. cit.*, 240. Cfr. *ibidem*, 194 s., 239-241, que seguimos, no obstante, con reservas; porque, en este y otros casos, confunde claramente las fechas.

¹⁴ Cfr. *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 28-VI-1902. Al menos, el *Boletín Eclesiástico del Obispado de Salamanca*, 53 (1906), 87, anuncia *El Universo* como «propiedad de la Junta de Congresos Católicos que preside el Emmo Cardenal Arzobispo de Toledo».

¹⁵ Apud J. de Ivan del Alcazares: *Rectificaciones Político-Religiosas*. s. I, s. i., [1903], pág. 42 (BEV).

¹⁶ Cit. Fernando Soldevilla: *El año político 1902*, Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1903, pag. 469 (BDN). Seguimos, sin embargo, la *Crónica del Sexto Congreso Católico Nacional Español*, Santiago, Imp. del Seminario Central, 1903, 760 pp. (BSP).

¹⁷ Vid. *El Correo Español*, 21-VII-1902, y *El Siglo Futuro*, 18-VII a 29-VIII-1902, carlista e integrista respectivamente. No sólo en la *Crónica* citada, sino en la *Revista Popular*, 24-VII-1902, entre otros lugares, puede verse íntegro el discurso del obispo de Tuy.

¹⁸ Circular del obispo de Pamplona acerca de la designación de *El Universo* como órgano de los Congresos Católicos, apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 28-VI-1902.

¹⁹ «Creo llegado el momento —escribía Ortí a Comillas en noviembre de 1899— de tomar usted mismo a su cargo la dirección inmediata de las fuerzas católicas en el campo de la política. No es este tan sólo un juicio mío, sino es la expresión ... [aquí, lo transcrito arriba] calificado. Fuera de ciertos católicos, fervientes, si se quiere, pero preocupados, apenas conozco, de los que están animados por un celo puro y discreto, quien no tenga fijos los ojos en usted como en quien *únicamente* puede impulsar y dirigir la obra comenada por nuestros Prelados, conforme a las intenciones y deseos de Su Santidad, a la actividad de los católicos españoles... De los partidos reinantes nada sustancial y sólidamente bueno se puede esperar, puesto que carecen de verdadera luz y espíritu católico, y los guía únicamente el interés mundano. Es, por tanto, necesario no andarse por las ramas, sino poner la segur a la raíz. En el principio todo serán dificultades y contradicciones aun de los buenos, capaces de abatir y desanimar a los que sólo cuentan con fuerzas y elementos del todo humanos» (cit. Bayle: *op. cit.*, 110). Sobre los proyectos anteriores reseñados, cfr. *ibidem*, 103 ss.

²⁰ Apud. *La Cruz* (1901), I, 526.

²¹ Cit. José María Javierre: *Don Marcelo de Sevilla*, Barcelona, Juan Flors, editor, 1963, pág. 400.

²² *La Cruz* (1901), I, 527.

²³ Cfr. Javierre: *Don Marcelo...*, 400 s., y *La Avalancha*, 8-V-1902.

^{23 b} *La Avalancha*, 24-VII-1903.

^{23 c} *Ibidem*, 24-I-1901.

²⁴ Apud. *La Cruz* (1901), II, 466.

²⁵ *Ibidem*, II, 48.

^{25 b} *La Avalancha*, 8-VII-1901.

²⁶ Cfr. *La Cruz* (1903), I, 91.

²⁷ Cfr. *ibidem*, 376, 399, 471. La de Valenciz existía ya en 1902 (cfr. *La Avalancha*, 24-X-1902).

²⁸ Apud *Revista Popular*, 7-V-1903.

²⁹ Según Bayle: *op. cit.*, 240. De hecho, es a partir de ahora cuando se confunden en una misma entidad las Juntas denominadas de Acción Católica a veces, a veces de Defensa de Intereses Católicos, o aún, más raramente, ya de los Congresos. En cambio, no parece que la primera denominación sea anterior a 1903. Al tratarse de una misma organización cuyo nombre varía, debe haber acronia cuando el *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 11-IV-1910, afirma que el Congreso Católico de Tarragona aprobó en 1894 las reglas «de la Junta central y de las Juntas diocesanas de los congresos Católicos o de acción católica». En cuanto al origen de las denominaciones, si esta última puede ser italiana, la anterior evoca, tal vez, los comités franceses de 1871 «pour la défense des intérêts catholiques» o «de défense des intérêts religieux et sociaux» (vid. Jacques Gadille: *La pensée et l'action politiques des évêques français au début de la III^e République. 1870/1883*, Paris, Hachette, 1967, tomo I, pág. 240 ss.).

³⁰ «A nuestro querido hijo Ciriaco María Sancha y Hervás, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, del título de San Pedro *in Monte Aureo*, y Arzobispo de Toledo. Toledo. = León XIII, Papa = Querido hijo Nuestro: Salud y bendición apostólica. Nuestro querido hijo el secretario de Estado Nos ha dado conocimiento de las conferencias celebradas hace poco en Madrid por algunos Obispos españoles, bajo tu presidencia, con el objeto de estudiar los medios más conducentes para promover entre vosotros la acción católica. Gran satisfacción Nos ha causado la noticia de esas conferencias, pues muchas veces y públicamente hemos enseñado que Nuestro mayor anhelo era que los españoles se uniesen en estrechísima concordia. Las citadas conferencias demuestran con evidencia que los Prelados españoles, no solamente convienen con Nós en la necesidad de esta concordia, sino que procuran con todo empeño restaurar entre los fieles la unión de voluntades. El que a esas conferencias haya concurrido gran número de Obispos no puede menos de producir saludables frutos en el pueblo cristiano, especialmente porque hace ver la necesidad de que cada cual prescindida de sus propias opiniones y distintos pareceres en materias discutibles, si queremos atender con eficacia a los intereses de la Religión, que hoy se hallan en grave peligro. = Por lo cual ardientemente deseamos que los Obispos españoles insistan con ánimo constante y firme en encarar abierta y públicamente la necesidad de mantener la unión entre todos los católicos, pues de ahí se seguirá, sin género de duda, que vuestras disposiciones conmuevan al pueblo con más energía y consigáis más fácilmente realizar vuestros propósitos. = Hemos abido también que en dichas conferencias han indicado algunos la conveniencia de crear en todas las diócesis Juntas particulares que obren de acuerdo con la Junta constituida en Madrid como principal. No podemos menos de aplaudir esta indicación sabia y oportunamente pensada, pues juzgamos que ha de ser muy eficaz para crear y consolidar en España la unión de todos los católicos. Por lo cual abrigamos la plena confianza de que todos los Obispos de esa nación han de aceptar esa idea, no solo con su asentimiento, sino también con su cooperación. Es, sin embargo, Nuestra voluntad que en la ejecución de la empresa y en la determinación de las bases por que se han de regir estas Asociaciones, corresponde la dirección a tí, que ocupas la más alta dignidad entre los Obispos de España. Mucho te recomienda a Nuestros ojos tu actividad, tu experiencia y tu fiel adhesión, por las cuales no necesitas para ello estímulos de ningún género. Creemos, sin embargo, necesario desvanecer y estimular tu modestia, lo cual hacemos gustoso, exhortándote encarecidamente a que te pongas con ánimo valiente y esforzado al frente de tan alta empresa, en la plena segu-

ridad de que has de contar con el apoyo de todos tus compañeros de dignidad. Y si, conociendo la debilidad humana, consideras necesario el auxilio, vino para tan grande empresa, Nós pedimos a Dios que se digne inspirarte, como prenda de las gracias celestiales, damos con gran benevolencia, la bendición apostólica a ti, a los demás Obispos y a los fieles españoles. = Da en Roma, en San Pedro, el día 22 de abril de 1903, vigésimosexto año de Nuestro Pontificado. = *León XIII, Papa*» (apud *Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Madrid-Alcalá*, 10-VI-1903). Advierte ya el interés del estudio de las Ligas Católicas José Manuel Cuenca: *Estudios sobre la Iglesia española del XI*. Madrid, Ed. Rialp, 1973, pág. 225 ss. Pese a la importancia de la figura de cardenal Sancha, no conocemos otro trabajo actual sobre él que la apología de Isidoro García Herrera: *El cardenal Sancha, arzobispo de Toledo, 1831-1909*, 2.ª ed., Madrid, Escuela Gráfica Salesiana, 1969, 673 pp.

¹ El 12 de mayo de 1903, además de los siete prelados que se citan más adelante como reunidos con Sancha en esta fecha, se hallaban en Madrid el arzobispo de Compostela —José Martín de Herrera—, el de Valladolid, el de Tarragona, el de Burgos, el de Sevilla y el de Zaragoza, y los obispos de Oviado —Martínez Vigil—, Vitoria, Málaga, Pamplona, Palencia, Lugo, Badajoz, Sigüenza, Tortosa, Coria, Jaén, Avila, Jaca, Segorbe, Segovia, Tarazona, Ermiópolis y Claudiópolis —administrador apostólico de Barbastro el último—, el administrador apostólico de Solsona (cfr. *Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Madrid-Alcalá*, 30-VI-1903). Desconocemos los motivos por los que no asistieron a la reunión con el primado. Algunos eran expresamente ajenos a sus ideas políticas.

³² Circular de Sancha, 29-V-1903, *ibidem*, 10-VI-1903.

³³ Circular del Obispo de Pamplona, apud *Boletín Oficial Eclesiástico de la Obisepado de Pamplona*, 20-VI-1903.

³⁴ Tomás Larumbe y Lander: «Reflexiones...», *ibidem*, 15-X-1904.

³⁵ Vid. el editorial «¿Un partido nuevo?» de *El Imparcial*, 4-VI-1903.

³⁶ Circular de Sancha, 2-X-1903: «Los Prelados que asistieron a la susodicha reunión del 12 de mayo, fueron los siguientes: de Toledo, Barcelona, Salamanca, Sión, Madrid, Tuy, Cuenca y dimisionario de Manila. = *En la segunda reunión del 29 de junio se tomaron otros acuerdos que son los siguientes*: = 1.º Se refería a la Junta Central [de los Congresos], que había anunciado su dimisión. Como esta posteriormente no fue admitida, carecía ya de objeto lo acordado. = 2.º Vista la utilidad que para defender y promover los intereses de la Religión y de la Sociedad, reportan las Juntas Católicas o sean Ligas, establecidas ya en algunas Diócesis, se reconoce la conveniencia de crearlas donde aún no las haya, siempre que en su objeto y procedimiento se sujeten estrictamente a las bases fijadas por Su Santidad en la Carta *Quos Nuper* [de 22 de abril anterior], y demás instrucciones y documentos pontificios. = *Las bases a que se refiere el artículo anterior son estas*: = a) Prescindir de propias opiniones y particular parecer en las materias discutibles, para atender con eficacia a los intereses de la religión, que hoy se hallan gravemente amenazados.—Carta *Quos Nuper*. = b) La acción católica debe ejercerse con el respeto y acatamientos debidos a los Poderes públicos constituidos, y sin apartarse de las vías legales.—Discurso de Su Santidad a los peregrinos españoles [de 1894]. = c) La filiación política, o el hecho de pertenecer a determinado partido, mientras no implique oposición a la autoridad y enseñanzas de la Iglesia, no será obstáculo para entrar a formar parte de las Juntas católicas. = d) No entra en el ánimo de Su Santidad, ni tampoco se proponen los Prelados presentes, formar un partido político con ocasión de la Carta *Quos Nuper*, sino únicamente organizar las dispersas fuerzas católicas, para la defensa de los intereses religiosos y sociales. = e) Se hace constar una vez más que la Iglesia no responde, ni se hace solidaria, de lo que diga o haga la prensa periódica, aunque se llame católica, —y mucho menos si funciona sin censura eclesiástica—, cuando, usando de atribuciones que sólo corresponden a la Santa Sede y a los Obispos, califica teológicamente doctrinas, o decide privadamente acerca de la ortodoxia de las personas. Esc

no obstante, la Iglesia verá con agradecimiento y bendecirá los trabajos que a misma prensa haga en defensa de los intereses de la Religión, ajustándose a las instrucciones y consejos dados por Su Santidad para los publicistas católicos. = f) La unión de los católicos no requiere la fusión política de los mismos. En aquella se respetan y pueden conservarse lícitamente los sistemas, escuelas y opiniones particulares, mientras que a la segunda no. = 3.º En obsequio a la disciplina, elemento indispensable para el éxito de la unión colectiva de los católicos, el Clero secular y regular deberá abstenerse de escribir en periódicos, sin previo permiso del respectivo Ordinario.—Const. *Officiorum...* [sic] = 4.º Obtenido el consentimiento del Rdo. Sr. Obispo de Salamanca para la celebración de un Congreso sobre Enseñanza en aquella ciudad, se declara la conveniencia de estudiar y preparar detenidamente un buen programa, cuyo trabajo queda desde luego encomendado a la notoria competencia del ilustrado Prelado de aquella Diócesis. = 5.º Se recomienda encarecidamente a los fieles y personas piadosas la imperiosa necesidad de auxiliar generosamente, con recursos económicos, todas las obras católicas, y muy especialmente las de carácter social; y = 6.º Aprovechando la oportunidad de la actual reunión, los Prelados en ella presentes, se preocupan vivamente de los problemas sociales, y con la mira de estudiar los medios más idóneos y prácticos para mejorar la condición moral y material de la clase obrera, acuerdan que se celebre en Madrid, previo permiso del Ordinario, una asamblea dedicada exclusivamente a tratar de los puntos principales enunciados en la sapientísima Encíclica *De Conditione Opificum* llamada con razón la *Carta fundamental del trabajo*. = ... Toledo 2 de octubre de 1903» (apud *Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Madrid-Alcalá*, 10-XI-1903).

³⁷ Relación de los miembros de la Liga Católica de Pamplona sobre su entrevista con Pío X, 20-II-1904: «Díjoles Su Santidad que por el citado Cardenal [secretario de Estado] tenía noticia del objeto que les llevaba a Roma. Entonces los comisionados expusieron sus deseos, que eran los consignados en el Mensaje y Reglamento de *La Liga*, y solicitaron la bendición Apostólica para todos los individuos que la componen. Entoces Su Santidad dijo que no sólo aprobaba *La Liga* sino que veía con suma satisfacción los propósitos de la misma, y que bendecía ampliamente la obra que *La Liga* representa y a todos los individuos que a ella pertenecen. Con sentido acento que expresaba su honda amargura se lamentó de las divisiones de los católicos por cuestiones dinásticas, que calificó de secundarias, que la defensa de los derechos e intereses de la Iglesia y la Sociedad están muy por encima y es independiente de todas esas y otras cuestiones, y que para atender a aquellos supremos intereses se hace precisa la unión de todos los católicos, sean carlistas, alfonsinos o integristas en España; orleanistas, bonapartistas o republicanos en Francia, organizándose para la acción social y política todas las fuerzas católicas, que sólo deben moverse y responder al impulso religioso. «Es necesario, (añadió textualmente), *formar el orbe católico, católico solo, católico a secas, sin aditamento alguno de carlista, alfonsino, ni nada; y después, cuando estas fuerzas estén unidas y organizadas, cuando el block católico esté formado, entonces se verá cuál es la solución más conveniente, si las circunstancias aconsejan adoptarla.*» Insistiendo más todavía en esta idea salvadora de la Unión repitió que en la unión está la fuerza, y que la última oración del Salvador a su eterno Padre fue para pedirle que todos fuésemos unos, «*que así como Tu ¡oh Padre! estás en Mí, y Yo en Ti, así sean ellos una misma cosa en nosotros*» (apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 26-III-1904).

³⁸ No todos parecían entender así, no obstante, tal criterio. Según la prensa española, en Inglaterra se había reunido por primera vez, en noviembre de 1902, una «Liga católica democrática», ya con más de 6.000 adeptos, que explícitamente pretendía crear un «partido político católico» (*La Avalancha*, 24-I-1903). La actitud politizante del pontificado de León XIII parecía mantenerse así en sus últimos meses de vida incluso.

³⁹ Sobre Sancha, basta releer el documento contenido en la nota 36; se bre Pío X, sus frases textuales subrayadas en la nota 37.

⁴⁰ Vid. sobre todo el acuerdo 1.º, párrafos b) y e), nota 36.

⁴¹ Basta recordar la primera encíclica del pontificado de Pío X, donde advierte que no ha de ser instrumento de partido sino ejecutor del lema *retaurare omnia in Christo*. «No ignoramos —añade— que muchas personas, impulsadas por el amor de la paz, es decir, de la *tranquilidad del orden*, se asocian y agrupan para formar lo que llaman el partido del *orden*. ¡Vanas esperanzas!» (apud *Revista Popular*, 15 y 22-X-1903).

⁴² Cit. Javierre: *op. cit.*, 383, donde afirma que lo redactó Roca Ponsa, lo que es significativo dado el acendrado antiliberalismo de este.

⁴³ Lo hemos situado en el capítulo VI.

⁴⁴ Apud *Revista Popular*, 17-III-1904. Cfr. *ibidem*, 7-IV-1904, sobre las que relas. Se adhieren a la postura burgalesa el Apostolado de la Oración de Carrión de los Condes, que añade el conservador *La Epoca* a la serie de publicaciones nocivas, y el de Puebla de Sanabria, que no cita periódicos concretos (vid. *ibidem*, 9-VI-1904).

⁴⁵ Cfr. Javierre: *op. cit.*, 419.

⁴⁶ Circular de Spínola, 21-I-1904, apud *Revista Popular*, 25-II-1904.

⁴⁷ Al mensaje de 31-XII-1903, dirigido por la Asociación sevillana de la Buena Prensa al Papa para notificarle la Asamblea, Merry del Val respondió el 11-I-1904 que había «merecido el pleno favor de Su Santidad» (*ibidem*, 25-II-1904).

⁴⁸ Llamamiento de la Asamblea Nacional de la Buena Prensa a los católicos españoles, *ibidem*, 18-II-1904.

⁴⁹ Cfr. *ibidem*, 7-VII-1904.

⁵⁰ Cfr. Tarín-Iglesias: *op. cit.*, 100.

⁵¹ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 9-II-1904.

⁵² Vid. *Revista Popular*, 23-VI-1904.

⁵³ Cit. *El Imparcial*, 24-IX-1908.

⁵⁴ Francisco M[ar]ía Cruz: *La Cuestión de la Buena Prensa*, Valencia, Biblioteca Española, 1905, pág. 26 (BEV).

⁵⁵ «Asamblea Nacional de la Buena Prensa. Conclusiones aprobadas», apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 16-VIII-1904. No debieron ser más eficaces sus conclusiones concretas. La creación de una Agencia de Información para la prensa confesional, pretendida allí, era aún una de las ambiciones del obispo de Jaca, Antolín López Peláez, en 1910 (vid. *El Mensajero del Corazón de Jesús*, I (1910), 456 s., y *La Ilustración del Clero*, IV (1910), 253 s.).

⁵⁶ Cfr. Folleto *importantísimo. Apostolado de acción. Solución para la unión de los católicos contra el masonismo y liberalismo, por un católico español*, Barcelona, Tipografía Católica, 1899, 15 pp. (BSP).

⁵⁷ Irigaray: *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*,

2. Afirman la colaboración del Comité Maximiano García Venero *Historia del nacionalismo catalán (1793-1936)*, Madrid, Editora Nacional, 1944, pág. 243, y Borja de Riquer (*Les eleccions de la Solidaritat Catalana a Barcelona*, en «*Política i economia a la Catalunya del segle XX*», Barcelona, Ed. Ariel, 1972 («*Recerques*», 2), pág. 95), pese a que el Comité acababa de nacer, a fines de febrero de 1903. Es claro el carácter al menos «católicorregionalista» de la candidatura en la *Revista Popular*, 5-III y 30-IV-1903, y Alberto y Arturo García Carraffa (*Prat de la Riba*, Barcelona, Imp. Hijos de Domingo Casanovas, 1917, pág. 211), aunque no hay alusiones religiosas, y sí un mero planteamiento regionalista, en *La Veu de Catalunya*, 20-II a 10-III-1903. Respecto a las elecciones generales inmediatas de 1903 también Joan Connelly Ullman habla de una candidatura conjunta de la *Lliga* y la Junta Diocesana barcelonesa de Defensa de los Intereses Católicos (*The Tragic Week. A Study of Anticlericalism in Spain, 1875-1912*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1968, pág. 78). No pudo ser así: las elecciones se celebraron en abril y la Junta fue constituida en junio (cfr. *Revista Popular*, 9-VII-1903, y la propia Ullman: *op. cit.*, 74).

⁵⁹ Vid. nota 56 supra.

⁶⁰ En el telegrama enviado por Merry del Val en nombre de Pío X a la Asamblea Regional de las Corporaciones Católicas-Obreras reunidas en Valencia en mayo de 1905, la exhortaba a facilitar «el desarrollo de la acción social católica y muy especialmente la difusión de las Ligas Católicas» (apud *Revista Popular*, 25-V-1905).

⁶¹ Cfr. *El Siglo Futuro*, 6, 8, 12, 15, 17, 20, 24 y 26-VI-1905.

⁶² «Pío, Papa X = Venerable hermano, salud y apostólica bendición. = Cuál fuera nuestro pensamiento acerca de las Ligas Católicas de España, plúgonos expresarlo cuando quiera que la ocasión se presentó, y al hacerlo, tributamos la debida alabanza a dichas Ligas, alentándolas a la vez al logro de los provechosos fines que se proponían. = Mas al repasar con especial complacencia las palabras con que poco ha exhortabas a los fieles de Sevilla en las páginas del boletín diocesano a apoyar ese género de agrupaciones. Nos ha parecido oportuno agregar Nuestras exhortaciones a tu discurso, teniendo por cierto que ha de tomar grande incremento la unión de los católicos con los hombres insignes, esperanza de los buenos, en que fue siempre fecunda España. = Y, a la verdad, si para alcanzar el bien de la Iglesia y de la religión mucho vale la unidad de sentimiento; si nada conduce al engrandecimiento de las mismas, sino antes obsta, el afecto a las parcialidades políticas. Nos no hallamos cosa más útil ni más oportuna para que conservéis incólume tanto don, como que, dejando a un lado particulares opiniones, todos determinen y resuelvan hacer pública profesión de fe católica y afiliarse a esas Asociaciones, a fin de que fielmente se guarden los principios católicos. = Nadie, pues, que sea justo apreciador de las cosas, puede desconocer la gran ventaja que estas Ligas traen a la religión, ni cómo responden a la necesidad de los presentes tiempos, sobre todo si detenidamente se considera que, aisladas las fuerzas, no es posible acudir a salvar la situación, sino que se necesita oponer a la multiplicada malicia de los enemigos la fuerza de los buenos, juntos a modo de un Ejército. = Por lo cual, no podemos menos de elogiar nuevamente a estas ilustres Asociaciones, al amparo de las cuales y merced a ellas han de crecer los trabajos y esfuerzos de los católicos, y se desbaratarán las asechanzas fraguadas por enemigas artes. = Queremos hacer saber a todos los que en España han promovido estas Ligas, que Nós ante todo aprobamos su celo, como que juzgamos que merced a él combaten a los adversarios del catolicismo y a la vez defienden fuertemente y en manera conveniente a los tiempos presentes del sentimiento católico. = Lo propio decimos, y por señalado modo se refiere, a los que con su dinero o su trabajo ayudan a la excelente obra de la Buena Prensa, todos los cuales sabemos que se esfuerzan en propagar la verdad católica y defenderla hábilmente, sirviéndose de muy idóneos escritores de todo género, y por lo mismo se han hecho acreedores a Nuestra gratitud. = Otorgado a los dichos su premio por estas Nuestras palabras, entendemos que es justo y digno alabar principalmente tu diligencia y celo, que al instituir las mencionadas Asociaciones y al exhortar a los fieles a agruparse en ellas con el solo fin del amor a la Iglesia, has merecido muy bien de Nós e interpretado rectamente Nuestro pensamiento. = Sobremanera Nos alegramos de que en esa empresa no te hayan faltado ni entre los sagrados ministros ni en el orden seglar quienes hayan cooperado con valiosa y fiel ayuda a tu designio, por lo cual a ellos extendemos Nuestras alabanzas. = Ni en manera alguna dudamos que si perseveras en tu ardoroso celo, en su esfuerzo los fieles y en su pura intención todos se afirmará en España el catolicismo, gozándose ella en sus abundantes y muy gratos frutos. = ¡Y para que más copiosamente caigan sobre los españoles las luces celestiales, con que cada día vean mejor los provechos que reportan las Asociaciones ajenas a los partidos civiles, damos amorosamente la bendición apostólica en el Señor, así a las citadas Sociedades y a sus presidentes y auxiliares, como principalmente a ti. = Dado en Roma, en San Pedro, el día 2º de junio del año 1905, segundo de Nuestro Pontificado. = Pío, Papa X» (apud *Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla*, 8-VIII-1905, que reproduce y toma mos del de Osma).

- ⁶³ Apud *El Siglo Futuro*, 1-VII-1905. Cfr. números siguientes.
- ⁶⁴ *Ibidem*, 13-VII-1905. Vid., en el mismo sentido, 11, 24, 27 y 28-VII-1905.
- ⁶⁵ *Ibidem*, 26-VII-1905. En el mismo sentido, 1-VIII-1905.
- ⁶⁶ Apud *El Imparcial*, 7-VII-1904.
- ⁶⁷ Cfr. *El Siglo Futuro*, 1, 16, 31-VIII y todo septiembre y octubre de 1905
- ⁶⁸ Apud *Documentos importantísimos. De elecciones. Reglas de conducta para los católicos*, Madrid, Imp. de la Revista de Archivos, 1906, págs. 9-27 (BDN)
- ⁶⁹ Cfr. *El Siglo Futuro*, de octubre de 1905 a febrero de 1906.
- ⁷⁰ José María Javierre: *Merry del Val*, Barcelona, Juan Flors, editor, 1961, página 533.
- ⁷¹ Apud *Documentos importantísimos...*, 27-34.
- ⁷² Apud *El Siglo Futuro*, 10-I-1906.
- ⁷³ Remigio Villariño: *Lo que queremos todos*, Bilbao, Imp. del Corazón de Jesús, 1906, 32 pp., que es una separata del artículo de *El Mensajero* (BEV).
- ⁷⁴ *Revista Popular*, 8-II-1906.
- ⁷⁵ «Al venerable Hermano Victoriano, Obispo de Madrid, Arzobispo preconizado de Valencia. = Madrid. = Pío PP X = Venerable Hermano, salud y bendición Apostólica. = Ha llegado a nuestro conocimiento que entre los católicos de España se han originado ciertas disputas, que han exacerbado no poco en estos últimos meses las antiguas discordias de partido. Se han tomado de propósito ocasión para tales disputas de dos artículos publicados en la revista *Razón y Fe*, acerca del deber de los católicos de concurrir a los comicios para elegir a los que han de administrar la cosa pública y acerca de la norma que ha de seguirse para escoger entre los candidatos, cuando hay competencia. = Por Nuestra parte hemos querido fuesen examinados los dos referidos artículos, y nada hay en ellos que no sea enseñado actualmente por la mayor parte de los doctores de moral, sin que la Iglesia lo repruebe ni contradiga. No existe, pues, razón para que los ánimos de tal modo se enardeczan; por lo cual deseamos y queremos que cesen por completo las disensiones surgidas y demasiado fomentadas por largo tiempo. Esto, ciertamente, tanto más lo deseamos, cuanto que, si alguna vez, ahora más que nunca es necesaria la mayor concordia de los católicos. = Tengan todos presente que, ante el peligro de la religión o del bien público, a nadie es lícito permanecer ocioso. Antes bien, los que se esfuerzan ... [aquí, lo transcrito arriba] cargo público. = Estas cosas, venerable Hermano, deseamos que tu y los demás Obispos de España aviséis y persuadáis al pueblo, y que reprimáis para en adelante con prudencia tales disputas entre los católicos. = En prenda de los divinos dones, y en testimonio de Nuestra benevolencia, damos a todos con sumo afecto la Apostólica bendición. = Dado en Roma, en San Pedro, el día 20 de febrero de 1906, tercero de Nuestro Pontificado. = Pío PP. X» (apud *Documentos importantísimos...*, 5 ss.).
- ⁷⁶ Circular, apud *Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Madrid-Alcalá*, 28-II-1906.
- ⁷⁷ Vid. la correspondencia entre Guisasola y Nocedal en *El Siglo Futuro*, 3 y 5-III, 4 a 7 y 9-IV, 12-V a 11-VI-1906. Ante la amenaza de Salvador y Barrera, Nocedal cierra completamente la discusión por carta de 9-IV-1906. Vid. también el *Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Madrid-Alcalá* (1906), 194 ss., que publica las cartas de Guisasola.
- ⁷⁸ Sobre la prensa declarada integrista en 1888 y 1906 respectivamente, cfr. J. Gaztelu: *Los Vascos y Sus Fueros*, San Sebastián, Imp. de Martín, Mena y Cía., 1915, pág. 115, y *El Siglo Futuro*, 12-V-1906.
- ⁷⁹ Cfr., sobre estos datos, *Revista Popular*, 23-VII y 1-X-1908, y *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 15-VII-1908. Sobre el tono polémico, M. Arboleya Martínez: *La verdad sobre la Asamblea de Zaragoza. Artículos publicados en «El Carbayón»*, Oviedo, Imp. «El Carbayón», 1908, p. 82 pp. (BNM). Sobre prensa adherida, *Crónica de la segunda Asamblea Nacional de la Buena Prensa, celebrada en Zaragoza...*, Zaragoza, Tip. La Editorial, 1909, página 29 ss., que rectifica las cifras incompletas de mi estudio *La iglesia de*

Sevilla y las polémicas sobre la acción política de los católicos españoles, 1900-1906, «Archivo hispalense», núm. 171-173 (1973), 73.

⁸⁰ Apud *Boletín Eclesiástico del Obispado de Osma*, 17-VII-1906. Así mismo, ante los telegramas de adhesión enviados al Papa en junio de 1907, tras la Asamblea del Partido integrista, por su nuevo jefe Juan Olazábal, y por los diputados carlistas como inicio de su campaña parlamentaria, Merry del Val respondería, por encargo de Pío X, insistiendo en la necesidad de conseguir la unión (cfr. *La Cruz* (1907), I, 571 s.; II, 87).

⁸¹ Carta al obispo de Madrid, 2-VIII-1906, apud *Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Madrid-Alcalá*, 20-IX-1906. En ella le comunica el primado «como presidente de honor de la Junta central de la Acción católica» (sic) un plan trazado por esta, que no detalla, «para que resulte en España una organización social, sólida y numerosa de católicos, ... puesta a disposición de los Prelados para defender la Religión contra los enemigos que la combaten».

⁸² Cfr. Constantino Bayle: *op. cit.*, 244; Javierre: *Don Marcelo...* 400; *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 6-V-1904 (sobre las juntas de la provincia eclesiástica zaragozana), y Soler y Marc: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 7-XII-1906, sobre la de Manresa; *La Cruz* (1905) I, 178, sobre la de Valencia. La de Vic aparece en las protestas contra el proyecto de ley de asociaciones de 1910.

⁸³ Cfr. *Revista Popular*, 9-VII-1903.

⁸⁴ Cit. *ibidem*, 31-V-1906.

⁸⁵ Cit. *ibidem*, 30-VIII-1906.

⁸⁶ Cit. *ibidem*, 25-X-1906.

⁸⁷ Cfr. *La Cruz* (1907), I, 94, sobre Burgos, y *Boletín Eclesiástico del Obispado de Salamanca*, 53 (1906), 175 s., donde el Consejo se denomina de Acción Social Católica.

⁸⁸ Alocución sobre las elecciones, apud *Revista Popular*, 2-XI-1905.

⁸⁹ *La Cruz* (1905), II, 379.

⁹⁰ *Carta pastoral que el Excmo. e Ilmo. Señor Dr. D. Maximiano Fernández del Rincón, Obispo de Guadix y Baza, dirige a sus muy amados diocesanos con motivo de los proyectos que algunos hombres políticos intentan realizar en contra de los derechos de la Iglesia*, 4.^a ed., Zaragoza, Mariano Escar, tipógrafo, s. d., pág. 57 (BDN).

⁹¹ Apud Antonio Viladevall, S. J.: *La voluntad nacional en frente del jacobinismo afrancesado de Romanones y Canalejas*, Barcelona, Gustavo Gili, 1907, pág. 43 (BDN).

⁹² Cit. P. Villada: *Las elecciones legislativas de 1910*, «Razón y Fe», mayo-agosto 1910, pág. 77.

⁹³ «Cabe a esta Sección [de Propaganda del Comité de Defensa Social de Barcelona] la gloria de haber iniciado en Cataluña aquellas reuniones públicas o *meetings* contra el proyecto de ley de asociaciones ... La Junta Directiva, a propuesta de la Sección de Propaganda, se dirigió, en efecto, a todas sus Delegaciones, sugiriéndolas la idea de mover la opinión de sus respectivos distritos por medio de *meetings* y los celebrados en Olot, Igualada, Tortosa, Manresa, Gerona, Cervera, Santa Coloma de Farnés y otros puntos, [fueron] resultado de los trabajos de nuestras Delegaciones» (*¿Para qué sirve el Comité de Defensa Social? Memoria leída en la Asamblea General del día 22 de diciembre de 1907 por el Secretario D. Cayetano Pareja Novelles*, Barcelona, Tipografía R. Cardona, 1908, pág. 14 (BCB)).

⁹⁴ Vid. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, Legislatura de 1906, vol. 15, índice, voz «Asociaciones».

⁹⁵ *Revista Popular*, 13-XII-1906.

⁹⁶ Cit. *ibidem*.

⁹⁷ Cfr. Romanones: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-I-1907, y *El Imparcial*, 21-I-1907. El discurso de Juan Vázquez de Mella, en sus *Obras Completas*, vol. 24, Madrid, Junta del homenaje a Mella, 1934, pág. 60 ss.

⁹⁸ Discurso del 28-I-1907, *ibidem*, vol. 14, pág. 147.

⁹⁹ *Revista Popular*, 31-I-1907.

¹⁰⁰ Cfr. *El Imparcial*, 7-VII-1904.

¹⁰¹ *Heraldo de Madrid*, 16-VII-1903.

¹⁰² Vid., por ejemplo, *El Liberal*, 31-X-1906, donde se afirma que el Vaticano y Maura habían acordado provocar la caída del Gabinete López Domínguez mediante la discusión de su política comercial.

¹⁰³ Vid. *Revista Popular*, 7-IX-1904.

¹⁰⁴ Vid. las exposiciones de Sancha, de 25-III-1904, y de los prelados de la provincia eclesiástica de Zaragoza, de 8-IV-1904, apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 6-V-1904.

¹⁰⁵ *Ibidem*, 28-III-1905.

^{105 b} *Boletín Eclesiástico del Obispado de Salamanca*, 53 (1906), 347.

¹⁰⁶ Todos los documentos apud *La Cruz* (1907), II, 347 s. Cfr. *¿Netos o... Datos para juzgar de cierta actitud política aconsejada a los católicos españoles y de una polémica sostenida por el Centro Sacerdotal de Salamanca*, Salamanca, Imprenta de Calatrava, 1908, 249 pp. (BEV).

¹⁰⁷ Apud *El Siglo Futuro*, 22-VII-1902. «... que el Liberalismo no sea pecado —escribía en 1910 el obispo de León a Azcárate—, ... bajo cierto aspecto también lo creyó así Pío IX y yo, aceptando el *Syllabus* en todas sus enseñanzas, también lo creo» (apud *Gumersindo de Azcárate. Estudio biográfico documental. Semblanza, epistolario, escritos*, por Pablo de Azcárate, Madrid, Edic. Tecnos, 1969, pág. 326). Vid. Florentino Zamora: *Fray Conrado Muñiz Sáenz (1858-1913)*, «Celtiberia», VIII (1958), 253-274.

^{107 b} *El Pensamiento Navarro*, 14-II-1909: Carta abierta del ex integrista Juan Balanzó y Pons a los dirigentes del partido.

^{107 c} *Instrucciones dadas en Roma a los directores del partido integrista*. «1. Sostener la tesis católica en España y con ella el restablecimiento de la Unidad Católica, y luchar contra todos los errores condenados por la Santa Sede, especialmente los comprendidos en el *Syllabus* y las libertades de predicación, hijas del llamado derecho nuevo o liberalismo, cuya aplicación al gobierno de nuestra patria es ocasión de tantos males. Esta lucha debe efectuarse dentro de la legalidad constituida, esgrimiendo cuantas armas lícitas pone la misma en nuestras manos. = 2. No acusar a nadie como no católico o menos católico por el solo hecho de militar en partidos políticos llamados o no llamados liberales, si bien este nombre repugna justamente a muchos y mejor será no emplearlo. Combatir sistemáticamente a hombres y partidos por el solo hecho de llamarse liberales, no sería justo ni oportuno; combátanse los actos y las doctrinas reprobables, cuando se producen, sea cual fuere el partido a que estén afiliados los que ponen tales actos o sostienen tales doctrinas. = 3. Lo bueno y lo honesto que hagan, digan y sostengan los afiliados a cualquier partido y las personas que ejerzan autoridad puede y debe ser aprobado y apoyado por todos los que se precian de buenos católicos y buenos ciudadanos, no solamente en privado, sino en las Cortes, en las Diputaciones, en los Municipios y en todo el orden social. La abstención y oposición *a priori* están reñidas con el amor que debemos a la religión y a la patria. = 4. En todos los casos prácticos en que el bien común lo exija, conviene sacrificar en aras de la religión y de la patria las opiniones privadas y las divisiones de partido salvo la existencia de los mismos partidos, cuya disolución a nadie se le puede exigir. = 5. No exigir a nadie como obligación de conciencia, la afiliación a un partido político determinado con exclusión de otro, ni pretender que nadie renuncie a sus aficiones políticas honestas como deber ineludible; pues en el campo meramente político puede lícitamente haber diferentes pareceres, tanto respecto del origen inmediato del Poder civil, como del ejercicio del mismo y de las diferentes formas externas de que se revista. = 6. No sería justo ser de tal manera inexorables por los menores deslices políticos de los hombres afiliados a los partidos llamados liberales que por tendencia y por actitud política sean ordinariamente más respetuosos con la Iglesia que la generalidad de los hombres políticos de otros partidos que se creyera obra buena atacarlos sistemáticamente, presentándoles como a los peores enemigos de la religión y de la patria, como a "imitadores de Lucifer", etc.; pues semejantes

calificativos convienen al "liberalismo doctrinario" y a sus hombres en cuanto sean sostenedores contumaces y habituales de errores y doctrinas contrarias a los derechos de Dios y de la Iglesia, abusando del nombre de católicos en sus mismas aberraciones, y no a los que quieren ser verdaderos católicos por más que en las esferas del gobierno o en su acción política, falten en algún caso práctico, por ignorancia o por debilidad, a lo que deben a su religión o a su patria. Combátanse con prudencia y discreción estos deslices, nótese estas debilidades que tantos males suelen causar, pero en todo lo bueno y honesto que hagan, déseles apoyo y oportuna cooperación, exigiendo a su vez por ella cuantos bienes se puedan *hic et nunc* alcanzar en beneficio de la religión y de la patria. = 7. Estar siempre prontos para unirse con todos los buenos, sea cual fuere su filiación política, en todos los casos prácticos que los intereses de la religión y de la patria exijan una acción común. Esta unión no es unión de fe y de doctrina, pues en tales cosas todo católico debe estar unido con los demás católicos, y todos ellos sujetos y obedientes a la Iglesia y a sus enseñanzas; esta unión, por su naturaleza, no es una asociación católica, ni una cofradía, ni una Academia, es una "acción práctica" no constante y permanente o *per modum habitus*, sino de circunstancias y necesidades o *per modum actus*. = 8. En los casos prácticos, o con esta unión *per modum actus* o sin ella, todos debemos cooperar al bien común y a la defensa de la religión; en las elecciones, apoyando no solamente nuestros candidatos siempre que sea posible vistas las condiciones del tiempo, región y circunstancias, sino aun a todos los demás que se presenten con garantía para la religión y la patria, teniendo siempre a la vista el que sean elegidas el mayor número posible de personas dignas, donde se pueda, sea cual fuere su procedencia, combinando generosamente nuestras fuerzas con las de otros partidos y de toda suerte de personas para este nobilísimo fin. Donde esto no es posible, nos uniremos con prudente gradación con todos los que voten por los menos indignos, exigiéndoles las mayores garantías posibles para promover el bien y evitar el mal. Abstenernos no conviene, ni es cosa laudable, y, salvo tal vez algún rarísimo caso de esfuerzos totalmente inútiles, se traduce por sus fatales efectos en una casi traición a la religión y a la patria. Este mismo sistema seguiremos en las Cortes, en las Diputaciones y en los Municipios y en los demás actos de la vida pública. Nuestra política será de penetración, de saneamiento, de sumar voluntades, no de restar y mermar fuerzas, vengan de donde vinieren. Cuando las circunstancias nos lleven a votar por candidatos dignos, o entre indignos, por los menos indignos, o por enmiendas que disminuyen el efecto de las leyes, cuya exclusión no podemos lograr, ni esperar; una leal y prudente explicación de nuestro voto justificará nuestra intervención. En las cosas dudosas en que directa o indirectamente se refieren a asuntos religiosos, consultaremos nuestras dudas con los Prelados. 9. Sobre la censura de nuestros periódicos obedeceremos fielmente a cuanto prescribe la Encíclica *Pascendi*, y si algún conflicto ocurriese evitaremos toda publicidad y buscaremos el consuelo y remedio apelando únicamente a las autoridades eclesiásticas. = 10. Nuestros ardientes votos son que en el gobierno del Estado renazcan las grandes instituciones de la tradicional monarquía española que tanta gloria dio a la religión y a la patria, y trabajaremos para la ascensión progresiva de nuestras leyes y modos de gobierno hacia aquel grandioso ideal, pero no dejaremos de aprovechar todo lo bueno y honesto de nuestras costumbres y legislaciones, para mejorar la condición católica y social de nuestros gobernantes, recordando que esperar lo mejor sin aprovechar lo bueno, es matar en su raíz toda esperanza del mismo ideal a que aspiramos. = 11. En cuanto a la defensa de la religión y de los intereses religiosos; en lo referente a la sumisión de los poderes constituidos y a la obediencia y sumisión incondicional a nuestros Prelados, queremos en todo atenernos a las enseñanzas de la Santa Sede, principalmente de Pío IX, León XIII y Pío X, y a las disposiciones del glorioso Episcopado español» (apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 15-IV-1909).

¹⁰⁸ Melchor Fernández Almagro: *Historia del reinado de don Alfonso XIII*,

2.^a ed., Barcelona, Montaner y Simón, 1934, pág. 102.

¹⁰⁹ *El Imparcial*, 27-I-1907. Cfr. *ibidem*, 26-I-1907.

^{109 b} José Manuel Castells: *Las asociaciones religiosas en la España contemporánea. Un estudio jurídico-administrativo (1767-1965)*, Madrid, Taurus, 1973, p. gina 340.

¹¹⁰ Cfr. P. Villada: *La Real orden de 28 de febrero sobre el matrimonio civil*, «Razón y Fe», enero-abril 1907, 466.

¹¹¹ Madrid lamentaba fundamentalmente la negativa de algunos párrocos a proporcionar las certificaciones necesarias a quienes deseaban contraer matrimonio sólo civil. Roma insistió, por su parte, en que la petición de esos certificados debería de hacerse «en una forma cortés». Vid. sobre ello AMAE/SCS, leg. 1.741, telegramas del ministro de Estado al embajador ante la Santa Sede, I-III y 29-XI-1907, y despacho núm. 64, de 13-IX-1907, del embajador al ministro y AMAE/SPS, leg. 2.678, expediente: «Matrimonio Civil. Derogación de la Real Orden de 27 de Agosto de 1906.»

¹¹² Cfr. *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 15-V-1907.

¹¹³ Cfr. Fernández Almagro: *op. cit.*, 103. Este padre Muñíos, que es el nombre del franciscano, no parece tenga que ver con el discípulo de Cámara.

¹¹⁴ Al menos, no hallamos huella de esto en AMAE.

¹¹⁵ Juan de la Cierva y Peñafiel: *Notas de mi vida*, 2.^a ed., Madrid, Instituto Editorial Reus, 1955, pág. 78.

¹¹⁶ Cfr. *El Imparcial*, 24-II-1907.

¹¹⁷ Cfr. Beltrán: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 8-VI-1907.

¹¹⁸ Ni siquiera hemos hallado explicación diplomática alguna de este silencio sobre el convenio en AMAE.

¹¹⁹ Sobre la firma del protocolo, vid. AMAE/SCS, leg. 1.741, telegramas entre el embajador ante la Santa Sede y el ministro de Estado, de 14-VI- a 17-VII-1908. Sobre los vocales, AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «Nombramiento de Vocales de la Comisión mixta para la reforma del Concordato de 1851». Contra la que afirmamos en un principio, la Iglesia sí nombró sus vocales, al menos en 1917: fue uno de ellos Vidal i Barraquer (cfr. Joan Viladrich i Viladomat: *El cardenal, de prop*, «Serra d'Or», 15-X-1968, 17).

¹²⁰ Antolín López Peláez: *El presupuesto del Clero*, Madrid, Imp. de los Hijos de Gómez Fuente, 1910, pág. 341 (BSP). Cfr. *Exposición que el Ilmo. Cabildo y Corporación de Sres. Beneficiarios de la S. y A. I. Catedral de Guadix dirigen a la Comisión Mixta nombrada para la modificación del Concordato*, Guadix, Imp. de Flores, 1909, 23 pp. Ataca también el Convenio, por restringir los derechos de la Iglesia, la *Revista Popular*, 6-X-1904.

¹²¹ En AHN, Sección Diversos, Títulos y Familias, leg. 113, hay una carpeta —«Polémica y Biografía = Congreso Católico de Burgos = 1899»—. Con este autógrafo de Joaquín Costa sobre el Congreso: «Su programa social y económico viene a coincidir con el mío. = Dice que él ha sido práctico y las Cámaras gricolas no. (Pero las Cámaras han creado lo de Jumilla (Caja) y Barbastro (política hidráulica, leg. Canal de Tamarite por el Estado y plan general de canales y caminos vecinales... [sic] = Otra carpeta hay de esto: propósitos del Obispo de Jaca, coincidiendo con eso mío.» Es dentro de la primera carpeta, sin embargo, donde se halla un recorte de *Heraldo de Aragón*, de noviembre de 1905, donde el obispo jacetano, Antolín López Peláez, declara su propósito de «reducir a tres nada más los cursos de Teología en su Seminario, dando, en cambio, mayor amplitud a los estudios de Derecho». Además, «atento a la cuestión social, quiere crear en el Seminario la cátedra de Agricultura, no como mero estudio de adorno, sino con fines esencialmente prácticos». «Quiero —me decía [el obispo al redactor]— que mis curas rurales sepan sembrar patatas y enseñar a sembrarlas a sus feligreses.» A este recorte del diario zaragozano va cosido otro autógrafo de Costa que dice: «Mis ideas puntadas, etc., coincidiendo con Congresos Católicos y con esto del obispo de Jaca.» Siempre en la misma carpeta del leg. 113, hay otro artículo *El Noticiero*, 11-V-1906, titulado «Curso social. El P. Vicent», sobre la I Semana Social. Al margen de este segundo recorte se ve la letra de Costa:

120

«Esto le aconsejé yo a Pellicer, de Zaragoza, a Piñera, de Ciudad Real, etc. Esto en mis *Ideas apuntadas en la Exposición de París de 1867...* Esto a Severino Aznar...»

¹²² Apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 25-X-1907.

¹²³ Vid. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 27 a 31-III-1908.

¹²⁴ *El Imparcial*, 22-III-1908.

¹²⁵ Vid. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 27 a 31-III-1908.

¹²⁶ *Revista Popular*, 4-II-1904, artículo de «Cantaclaro».

^{120 b} *La Avalancha*, 24-VII-1903.

¹²⁷ Es hora de fijar quizá la naturaleza y la fecha de aparición del Comité,

presente con frecuencia en la bibliografía sobre el período (vid., entre los numerosos ejemplos, Javier Tusell: *Sociología electoral de Madrid*, Madrid Edicusa, 1969, pág. 83), sin que se haya podido nunca, que sepamos, precisar lo que era. He aquí los *Estatutos del Comité de Defensa Social* (Barcelona, Imp. de Henrich y C.^a, 1904, 8 pp. (BCB): 1.º Se constituye, con domicilio en esta ciudad [Barcelona], una Asociación nombrada Comité de Defensa Social. Art. 2.º El objeto del Comité será la defensa de los intereses religiosos, morales y sociales de todas las clases. = Art. 3.º Pondrá en práctica todos los medios lícitos que considere convenientes para la consecución de aquel fin. = Art. 4.º Los socios serán: de *número*, *adjuntos*, *adheridos* y *corresponsales*. = Para ingresar como socio de *número*, o bien como socio *adjunto*, es preciso profesar la Religión Católica, y ser admitido por la Junta Directiva, a propuesta de tres socios de cualquiera de las categorías existentes. Los de *número* deberán satisfacer la cuota anual de sesenta pesetas, y de treinta pesetas los *adjuntos*. Unos y otros podrán ser elegidos para los cargos de las Juntas Directiva, Consultiva y de Propaganda, con voz y voto que será personal, y no podrá, por tanto, ser delegado en otro socio. = Serán socios adheridos las personas o entidades que, hallándose conformes con el fin del Comité, cooperen a su realización, ya de un modo personal ya pecuniariamente. = Por último, serán socios corresponsales los individuos o entidades que, hallándose igualmente conformes con el citado fin del Comité, residan fuera de Barcelona, y sean designados por la Junta Directiva. = Art. 5.º La Dirección, Gobierno y Administración del Comité corresponderán a una Junta Directiva, compuesta de Presidente, Vicepresidente 1.º, Vicepresidente 2.º, Tesorero, Contador, Secretario, Vicesecretario y seis vocales. = La Junta Directiva será renovable por mitad cada dos años. En el caso de vacantes sobrevenidas antes de este término podrá dicha Junta llenarlas interinamente nombrando a socios de *número*, o *adjuntos*, que ejercerán el cargo que les corresponda hasta la inmediata Asamblea General. Dichas vacantes podrán producirse por defunción, por dimisión, o por faltar a cinco sesiones consecutivas sin excusar la falta citada de asistencia. = La admisión de socios en el Comité será facultad de la Junta Directiva, haciéndose en votación secreta, con bolas blancas y negras. El socio propuesto deberá reunir dos terceras partes de las primeras, cuando menos, para ser admitido. = Art. 6.º El Comité tendrá una Junta Consultiva y otra de Propaganda, cuyo número de individuos fijará la Directiva, la cual hará libremente la designación y distribución de los cargos, entre los socios de *número* y *adjuntos*. Tanto la Junta Consultiva, como la de Propaganda, podrán ser presididas por el individuo de la Directiva que ésta elija al efecto. = Art. 7.º La Asamblea General, a la cual podrán concurrir todos los socios de *número* o *adjuntos*, será convocada por la Junta Directiva siempre que lo crea conveniente, debiendo reunirse, cuando menos, cada dos años, en el mes de Diciembre, para hacer los nombramientos de la Junta Directiva. Esta facultad la ejercerá la Asamblea por medio de cuatro compromisarios elegidos por la misma, los cuales, en unión de otros cuatro delegados de la Directiva, formarán la Comisión, de carácter transitorio, a la que corresponderán dichas atribuciones. Presidirá esta Comisión, con el voto de calidad correspondiente, el delegado de mayor categoría en la Directiva; en caso de duda el de mayor antigüedad en la misma, y en igualdad de circunstancias, aquel de dichos delegados que tenga prioridad de inscripción en las listas de ingreso en el

Comité. = No podrán discutirse en las Asambleas Generales otras proposiciones que las presentadas por la Directiva, o las que lo hayan sido a la misma, autorizadas por la firma de quince socios de número o adjuntos, diez días antes de la celebración de la Asamblea. = Los acuerdos de ésta se tomarán por mayoría de votos, cualquiera que sea el número de socios presentes. = Art. 8.º En el caso de disolución del Comité se pondrá todo el haber del mismo a disposición del Prelado para su inversión en obras benéficas o de utilidad social. Art. 9.º La Sociedad tendrá su domicilio en esta ciudad, calle de la Canuda, 3 pral. = Artículo Transitorio.—El Presidente, Vicepresidente 2.º, Tesorero, Secretario y tres Vocales que elija el Comité al constituirse, ejercerán sus cargos hasta la Asamblea General del mes de Diciembre de 1907. En la correspondiente al 1905 deberán proveerse las de Vicepresidente 1.º, Contador, Vicesecretario y de los tres vocales designados por suerte en sesión de la Directiva convocada con manifestación de este objeto, quedando desde entonces establecido el debido turno para las renovaciones ulteriores. En dicha Asamblea de 1905, o antes si lo considerase conveniente la Junta Directiva, presentará a la aprobación de aquélla las modificaciones de los presentes estatutos que la experiencia le haya aconsejado. = La primera Asamblea General elegirá por mayoría de voto a la primera Junta Directiva. = Barcelona veinte y seis de Febrero de mil novecientos tres. = Presentado por duplicado en este Gobierno Civil, hoy día de la fecha, a los efectos de la ley de Asociación.—Barcelona 28 de Febrero de 1903. = El Gobernador. = C. Espinosa de los Monteros.»

¹²⁸ Ullman afirma que la Junta barcelonesa de Defensa de los Intereses Católicos «*was not conservative enough to please one group of Catholic lawyers: essentially old-time Carlists. Sometime around 1907 they organized the Comité de Defensa Social*» (op. cit., 74). El enfrentamiento no parece probado, sin embargo. Durante estos años, es frecuente la colaboración de ambos organismos en manifestaciones públicas. Y, sobre todo, el Comité nació en febrero de la Junta en junio de 1903. En cuanto a la filiación de los socios del Comité, El Pensamiento Navarro, 19-VII-1910, carlista, los califica de «elementos dinásticos», alfonsinos.

¹²⁹ Tomamos los nombres de miembros del Comité de las fuentes citadas sobre él en este trabajo.

¹³⁰ Vid. La Cruz (1907) I, 264.

¹³¹ Cfr. Revista Popular, XXXIV (1888). Vid. E. Giralt y Raventos: *Bibliografía del moviments socials a Catalunya, país valencià i les illes*, Barcelona Ed. Lavinia, 1972, ref. 3/668, donde aparece su tisonomía intervencionista en cuestiones sociales.

¹³² Vid. Revista Popular, XXXIII (1887), 410 ss.

¹³³ Vid. *ibidem*, XLIX (1895), 238. Parece que, en 1898 había sido propuesto por María Cristina y aceptado por León XIII para la sede episcopal de Segovia (cfr. *ibidem*, LIV (1898), 48), que sin embargo no ocupó.

¹³⁴ Cfr. *ibidem*, XXXIII (1887), 410, ss., y XXXIV (1888). Vid. Giralt: op. cit. 2/112.

¹³⁵ Enric Jordi (*El Doctor Robert i el seu temps*, Barcelona, Ed. Aedos 1969, pág. 118) habla de su afinidad al Centre Nacional Català. Aparece en la directiva del Patronato Obrero barcelonés de San José en la Revista Popular LII (1897).

¹³⁶ Cfr., respectivamente, *¿Para qué sirve...*, 4, y *Dos años de acción católica en Barcelona. Memoria leída en la Asamblea general celebrada el día 31 de diciembre de 1909 por el secretario del Comité de Defensa Social D. Cayetano Pareja Novelles*, Barcelona, Imprenta y Papelería Sanmartí, 1910, pág. 6 (BCB), donde se cita, entre las rectificaciones conseguidas, «la de la invención de "El País" de Madrid acerca del banquete que supuso celebrado en el palacio episcopal de Vich con motivo del fusilamiento de Ferrer».

¹³⁷ Circular de la Sesión de Propaganda, apud Revista Popular, 28-III-1907.

¹³⁸ *¿Para qué sirve...*, 8 y 11.

¹³⁹ Vid. Revista Popular, 4-I-1906.

¹⁴⁰ *¿Para qué sirve...*, 9.

¹⁴¹ Debe referirse al Centro de Madrid, cuando habla de la creación del Centro de Defensa Social, María Dolores Gómez Molleda: *Los reformadores de la España contemporánea*, Madrid, C.S.I.C., 1966, pág. 450, que también se refiere a la tutela de Comillas. Se hace eco de esta misma afirmación Tusell: *Sociología...*, 82, y la da como indudable Bayle: *op. cit.*, 213. Aquí, sin embargo, habla de la legislación social del Gobierno Silvela en 1900 como preparada en el Comité por medio de Eduardo Dato. En realidad, ni Dato aparece entre los miembros que conocemos ni la asociación existía entonces. Por otra parte, tampoco hemos hallado alusión a Comillas en las actividades del Comité de Barcelona, ni, según nos comunica, tampoco las ha encontrado en el de Madrid don Juan María Guasch Borral, en la investigación que realiza sobre el diario *El Debate*. La relación entre el marqués y la organización es, no obstante, verosímil por su similitud de planteamientos y por la discreción de Comillas. Sobre la gestación del Centro de Madrid, vid. *El Debate*, 12-VII-1911, siempre sin alusiones a López Bru.

¹⁴² Tarragona, Valls, Tortosa, Montblanc, Vilafranca, Vilanova i Geltrú, Manresa, Igualada, Figueras, Olot, Tárrega, Tremp, Seu d'Urgell, Solsona, Terrassa, Sabadell, Santa Coloma de Farnés, Cervera, Os de Balaguer, Santa Coloma de Queralt, Gerona, San Feliú de Llobregat, Mataró, San Feliú de Guíxols, Arenys de Mar, Monistrol de Montserrat (cfr. *¿Para qué sirve...*, 21).

¹⁴³ Mora de Ebro, San Martín Sarroca, San Ginés de Vilasar, Cambrils, Canet de Mar, Pallejá y Collbató (*Dos años de acción católica...*, 17).

¹⁴⁴ *Ibidem*, 18.

¹⁴⁵ Cfr. *ibidem*, 17, y *¿Para qué sirve...*, 22.

¹⁴⁶ Síntesis de la conferencia, apud *Revista Popular*, 19-III-1908.

¹⁴⁷ *Ibidem*.

¹⁴⁸ «... una vez en el poder el partido conservador, otro de sus primeros actos de Gobierno, fue el de sustraer del conocimiento del Jurado en las Audiencias de Barcelona y Gerona los delitos anarquistas, confiándolos a los tribunales togados, según lo solicitado por el Comité» (*¿Para qué sirve...*, 5).

¹⁴⁹ La Sección de enseñanza del Comité «visitó a varios senadores por Cataluña para interesar la aprobación del proyecto de ley sobre el terrorismo» (*Dos años de acción católica...*, 8).

¹⁵⁰ Síntesis de la entrevista, apud *Revista Popular*, 5-XI-1908.

¹⁵¹ *Dos años de acción católica...*, 11-12.

¹⁵² Cit. Bayle: *op. cit.*, 113.

¹⁵³ Vid. *El Centro de Defensa Social a los electores católicos de Madrid*. Madrid, Imprenta de Fortanet, 1915, 16 pp. (BEV). De hecho —aunque difiere del planteamiento de las fuerzas políticas que hemos deducido de este folleto—, en las elecciones de 1914 para el Congreso se presentó en Madrid una candidatura de coalición monárquica con dos romanonistas, tres conservadores no mauristas y Martín Lázaro, de Defensa Social (cfr. Tusell: *Sociología...*, 100).

¹⁵⁴ «Pío PP. X = Amado Hijo Nuestro, salud y Bendición Apostólica. = Nos ha llenado, en verdad, de muchísima satisfacción el ejemplo que acaba de dar Cataluña en la defensa de los derechos de la fe católica, con tanto mayor motivo, cuanto que en la causa de la religión, es decir, cuando públicamente se estaba deliberando sobre un proyecto de ley contra la libertad de las Congregaciones religiosas, todos los catalanes, aunque separados tal vez por opiniones políticas, se han opuesto a ella con unanimidad de sentimientos digna de admiración, y han dado público testimonio de anteponer en sus corazonas la religión a los partidos, y de que por ningún motivo se podrán dividir sus fuerzas cuando corran peligro los intereses de la fe. = Esta manifestación de los sentimientos religiosos la consideramos sobre manera convenientísima a los católicos. Y este suceso Nos ha producido además gran consuelo, por cuanto en esta ocasión hemos visto observadas con fiel esmero las instrucciones dadas más de una vez por Nuestro Antecesor León XIII, de feliz memoria, y por Nos, y de cuyo cumplimiento debáis vosotros reportar especial provecho. = Resta ahora tan sólo que la acción en tales momentos realizada en Cataluña y en otros puntos se manifieste constantemente en circunstancias análogas, y no sólo ahí,

sino en todos los pueblos de España, aprovechando toda oportunidad de defender los intereses de la Religión, ora cuando sea objeto de algún ataque por parte de los enemigos, ora cuando la condición de los tiempos exija acudir a los comicios para tomar parte en la administración de cada localidad o en el gobierno del Reino. = Obrando así, será, en verdad, un hecho patente que España, cualquiera que sea el curso de los acontecimientos políticos, mantiene muy viva la fuerza de su antiguo sentimiento religioso, y atiende con todo empeño y con la acorde sinceridad de voluntades a sus legítimos y saludables intereses. Para contribuir a la realización de esta esperanza, no ceses de prestar concurso de tu solicitud, la cual tenemos la certidumbre de que completará como hasta aquí, con su esfuerzo los demás obispos de España. Entre tanto sea a ti enhorabuena, que tienes merecida por tu celo pastoral, y en testimonio de Nuestra estimación, recibe la Bendición Apostólica que con la mayor efusión de Nuestra alma te damos en el Señor. = Dado en San Pedro de Roma, el día cuatro de Marzo del año MCMVII, el cuarto de Nuestro Pontificado. = *Pío PP. X*» (apud *Revista Popular*, 28-III-1907).

¹⁵⁵ AMAE/SCS, leg. 1.741, telegrama del embajador ante la Santa Sede al ministro de Estado, de 23-III-1907, donde Ojeda recoge manifestaciones hechas sobre ello por Merry del Val.

¹⁵⁶ Carta de Merry a Casañas, 5-III-1907, apud *Revista Popular*, 28-III-1907.

¹⁵⁷ Amadeu Hurtado advierte que es difícil decir cuándo aparece la Solidaridad, en todo caso en aquel invierno. Quizá su primer acto fue el recibimiento en Barcelona de los diputados catalanes retirados del Congreso ante el proyecto de ley de jurisdicciones (cfr. *Quaranta anys d'advocat. Història del meu temps. 1894-1930*; 2.ª ed., Barcelona, Ed. Ariel, 1969, pág. 84-85). Vid. las notables cartas de Hurtado a Azcárate y Giner en *Gumersindo de Azcárate...*, 394-406.

¹⁵⁸ Vid. Jesús Pabón: *Cambó, 1876-1918*, Barcelona, Ed. Alpha, 1952, pág. 290. Vid. sobre esto nuestra nota en torno al libro de Camps i Arboix, *La Solidaritat Catalana*, en «Hispania», XXXII (1972).

¹⁵⁹ Cit. *Revista Popular*, 19-V-1904.

¹⁶⁰ Enrich Prat de la Riba: *La Nacionalitat Catalana*, Barcelona, Tip. L'Anuari de la Exportació, 1906, pág. 44 (BCB). Vid. *Revista Popular*, 21-V-1908.

¹⁶¹ Vid. *ibidem*, 1-II-1906, y Giralt: *op. cit.*, 3/502.

¹⁶² *Revista Popular*, 13-VI-1906. Vid. *ibidem*, 25-X-1906.

¹⁶³ Cit. *ibidem*, 29-XI-1906.

¹⁶⁴ *Ibidem*, 7-II-1907.

¹⁶⁵ Vid. Antoni María Alcover: *Conducta política que s'imposa avuy a n'els catòlics. Conferència en el Comitè de Defensa Social de Barcelona*, Barcelona, Tip. de S'Anuari de la Exportació, 1907, 31 pp. (BEV).

¹⁶⁶ Cfr. Pabón: *op. cit.*, 275 s., sobre la postura de Casañas. La *Veu de Catalunya* no alude al tema en todo el mes de marzo de 1907. El 5 afirma que, vistas las declaraciones prudentes de Salmerón, Corominas y Junoy, candidatos solidarios, incluso el conservador *Diario de Barcelona* había declarado ver bien su triunfo, frente al radicalismo, aunque, de hecho, tras la victoria, es este período el que calla cualquier comentario.

^{166b} Vid. José Manuel Cuenca: *Aproximación al Catolicismo Peninsular e Iberoamericano en el Pontificado de Pío X*, «Boletín de la Real Academia de la Historia», CLXIX (1972), 551.

¹⁶⁷ Apud Fernando Soldevilla: *El año político 1907*, Madrid, Imp. de Ricardo de Rojas, 1908, pág. 98. Cfr. *ibidem*, 81 s. (BDN).

¹⁶⁸ «El candidato a la Diputación a Cortes se compromete: = 1.º A defender las prerrogativas de la Santa Madre Iglesia Católica, apostólica, romana, bajo la dirección del Prelado. = 2.º A combatir por todos los medios el proyecto de ley de Asociaciones. = 3.º A defender y apoyar la independencia económica de la Iglesia. = 4.º A sostener y defender la supremacía de la Iglesia, cualquiera que sea el Gobierno que intentare atentar contra ella. = Si está usted conforme con las bases anteriores, sírvase decírmelo en su firma» (cit. *ibidem*, 103). Vid. extractos de todas las pastorales citadas en *La Cruz* (1907) I, 237-255, 312-421.

- ¹⁶⁹ Vid. *Diario de las Sesiones... Senado*, 4-VI-1907.
- ¹⁷⁰ Cfr. *La Veu de Catalunya*, 30-III-1907 y *La Cruz* (1907) I, 237.
- ¹⁷¹ Soldevilla: *op. cit.* (1907), 88. Cfr. *ibidem*, 81 s., 98.
- ¹⁷² Vid. Pabón: *op. cit.*, 276.
- ¹⁷³ Las primeras han sido puntualmente estudiadas por Borja de Riquer: *op. cit.*
- ¹⁷⁴ Vid. Hurtado: *op. cit.*, 126 s.
- ¹⁷⁵ Vid. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 13-V-1907, con el mensaje de la corona; 6-VI-1907, con las intervenciones de Soriano y Beltrán sobre los sucesos de Valencia; 11-VI-1907, con la enmienda de Gil y Morte.
- ¹⁷⁶ Vid. Miguel M. Cuadrado: *Elecciones y partidos de España (1868-1931)*, Madrid, Taurus, 1969, t. II, pág. 731 s. De aquí tomamos las cifras anteriores sobre la distribución de los escaños en las elecciones de abril de 1907. Son ligeramente distintas las cifras de Soldevilla (*op. cit.* (1907), 226), que aumenta notablemente el contingente tradicionalista —16—, y los datos «oficiales» de *El Imparcial*, 24-IV-1907. Excluidos los 9 canalejistas, los liberales fueron 65 según Máximiano García Venero: *Melquiades Álvarez. Historia de un liberal*, Madrid, Ed. Alhambra, 1954, pág. 177 s.
- ¹⁷⁷ *Op. cit.*, 127-129.
- ¹⁷⁸ Cfr. *ibidem*, 139.
- ¹⁷⁹ Cit. Máximiano García Venero: *Historia del nacionalismo catalán*, 333. Sigue la evolución del movimiento, a través de *El Poble Catalá* y de *La Veu de Catalunya*, Joaquim de Camps i Arboix *Història de la Solidaritat Catalana*, Barcelona, Edicions Destino, 1970, 285 pp.
- ¹⁸⁰ Vid. la condena en la *Revista Popular*, 13-VII-1908.
- ¹⁸¹ *Ibidem*, 2-V-1907. Cfr. 8-V-1907.
- ¹⁸² *Ibidem*, 23-V-1907.
- ¹⁸³ Juan de Abadal: *La alianza católica*, Barcelona, Gustavo Gili, 1907 (BCB).
- ¹⁸⁴ *La Veu de Catalunya*, 2-IV-1907, en su necrología de Ramón Necedal, lo afirma defensor de *Solidaritat*. En realidad, se diría también entonces que, en sus últimos tiempos, receló como los demás.
- ¹⁸⁵ Vid. *Revista Popular*, 7 y 28-XI, 19-XII-1907.
- ^{185 b} Carta abierta de Juan Balanzó y Pons, apud *El Pensamiento Navarro*, 14-II-1909.
- ¹⁸⁶ Vid., apud. *Revista Popular*, 25-II-1908, los escritos de Casañas y de la Junta.
- ¹⁸⁷ Cfr. *ibidem*, 2-IV-1908.
- ¹⁸⁸ Carta de 18-II-1908, apud Duque de Maura y Melchor Fernández Almagro: *¿Por qué cayó Alfonso XIII?*, Madrid, Ed. Ambos Mundos, 1948, pág. 428 s.
- ¹⁸⁹ Cit. *Revista Popular*, 7-V-1908.
- ¹⁹⁰ Vid. *La Veu de Catalunya*, 30-IV-1908.
- ¹⁹¹ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 12-V-1908. El presupuesto municipal de cultura sería dictaminado negativamente en diciembre de 1908 por la Comisión Provincial de Instrucción Pública, en decisión unánime de sus miembros (3 carlistas, 2 conservadores, un republicano regionalista, otro de la Unión y un lerrouxista) «por las extralimitaciones legales que se observan en el mismo» (*El Pensamiento Navarro*, 19-XII-1908). El gobernador negó su aprobación (cfr. *ibidem*, 2-III-1909).
- ¹⁹² Cit. Pabón: *op. cit.*, 324.
- ¹⁹³ Vid. *Revista Popular*, 11-VII-1907. La significación predominantemente católica de Ramón Albó queda patente en sus manifestaciones como candidato en las elecciones de 1903. Y es una figura que aparece de continuo en las actividades confesionales barcelonesas de la primera década del siglo, también en la acción socialcristiana.
- ¹⁹⁴ Circular, *ibidem*, 24-XII-1908. Cfr. *Dos años de acción católica...*, 10.
- ^{194 b} *El Pensamiento Navarro*, 12-XII-1908. Cfr. *ibidem*, 22 y 24-XI 13-XII-1908 ss.

¹⁹⁵ «Para los católicos —según *El Correo Español*—, aun pensando en el mal menor, la candidatura de Solidaridad representaba un tremendo agravio. ... Y muchos, seguramente, se han abstenido.» El Comité de Defensa Social, recordó *El Iris de Paz*, había desaconsejado votar a los republicanos solidarios. «Por esto, sin duda, muchos eliminaron de la candidatura los nombres de los radicales, y otros se abstuvieron de ir a votar, contribuyendo también a ello la propaganda antisolidaria del Sr. Sardá» (apud *Revista Popular*, 24-XII-1908). Interpreta también los resultados como prueba del retraimiento de los católicos el *Diario de Barcelona*, 14-XII-1908 y ss. Cuando se haga el estudio sociológico que esta elección merece, habrá que valorar la fuerza de los grupos tradicionalistas, habitualmente descuidados en los trabajos sobre la Solidaridad Catalana. Interesaría, en concreto, saber hasta qué punto lo fue la «escassa força política» del carlismo catalán coetáneo, que afirma Riquer en su notable estudio de la elección de 1907 (*op. cit.*, 98). Los carlistas se atribuirían a sí mismos entonces, en Barcelona, 16.000 votos (*El Pensamiento Navarro* 23-I-1909). Sobre las elecciones de 1908, hay que advertir que del propio carlismo brotaron voces rechazando el retraimiento que se le atribuía. Según J. de LL., la candidatura solidaria, íntegra, fue votada «por casi todo el cuerpo electoral. Digo por casi todo, pues lo menos les han restado tres mil votos los consejos de algunos periódicos como el Brusi (*Diario de Barcelona*) y la *Revista Popular*, de Sardá y Salvany, que han dicho claramente que no se podía votar más que a Albó... Estuve en varios círculos carlistas, en el de San Jorge de los integristas, en el *Centre nacionalista republicà* y en las redacciones de los periódicos, y nadie se explicaba el triunfo de la candidatura lerrouxista. ¿Es que los electores solidarios se abstendían de votar a determinados candidatos suyos? No es esto, pues los datos numéricos prueban que se ha votado con lealtad por todos. En todas las secciones se votaba por los solidarios la candidatura convenida para copar los cuatro puestos. Como se habían de elegir cuatro diputados, cada elector votaba a tres candidatos, y así, combinando los nombres se puede sacar triunfantes a los cuatro, pero se pierde la cuarta parte de la fuerza, ... = ... La combinación electoral de candidaturas solidarias estaba bien hecha, pero han faltado votos para llegar al copo. ... han votado la candidatura de solidaridad, en números redondos 39.000 hombres, y la candidatura lerrouxista 30.500 hombres. El solidario católico señor Albó ha logrado 29.237, o sean 1.000 más que su último compañero de candidatura señor Suñer y Capdevila. ... Se ha visto que el cuerpo electoral solidario ha ido lealmente al copo. Si los solidarios no se hubieran propuesto copar, está claro que su candidatura formada solamente por tres candidatos habría triunfado por 10.000 votos de mayoría; pero como se tiraba a impedir que Lerroux saliera diputado por la minoría, se ha perdido la batalla» (carta de Barcelona, *ibidem*, 16-XII-1908). A la vista de los resultados, no parece claro el traspaso de votos republicanos de Solidaridad al lerrouxismo, que explicaría la derrota según Isidre Molas: *Lliga Catalana. Un estudi d'Estasiologia*, Barcelona, Edicions 62, 1972, vol. I, 79.

¹⁹⁶ Telegrama al rey, apud *Revista Popular*, 17-XII-1908.

¹⁹⁷ Resumen de la conferencia de Gonzalo del Castillo en el Comité de Defensa Social de Barcelona, *ibidem*, 31-XII-1908.

¹⁹⁸ Cfr. *ibidem*, 8-VII-1909.

¹⁹⁹ *Ibidem*, 3-VI-1909. Ante las elecciones, y en vista del fracaso de diciembre, los representantes de las diversas fuerzas solidarias acordaron organizarse por separado. A fines de abril, se hablaba de una candidatura republicana de *Esquerra*, federalismo y progresismo, otra carlointegrista y una tercera *Lliga-Defensa Social* (cfr. *El Pensamiento Navarro*, 24-IV-1909 ss.), que debió deshacerse antes de los comicios.

²⁰⁰ *Dos años de acción católica...*, 10.

²⁰¹ Francos Rodríguez: *op. cit.*, 449.

²⁰² Manifiesto fundacional del Partido, *ibidem*, 404.

²⁰³ Hemos comprobado, negativamente, la ausencia del tema religioso en las páginas de *El Imparcial* de 1907, 8 y 9.

²⁰⁴ Vid. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 28-I a 6-II-1908, y 6-V a 24-VII-1908. El primero de los dos temas dio lugar a una negociación con Roma que heredaría el posterior Gobierno Canalejas. Vid. AMAE/SPS, leg. 2.678, expediente «1908-1910. Ley de caducidad de créditos contra el Tesoro. Reservas de la Santa Sede por lo que se refiere a la Iglesia». Sintetiza este asunto Castells: *op. cit.*, 341 ss.

²⁰⁵ Vid. J. Romero Maura: *Terrorism in Barcelona and its impact on Spanish politics, 1904-1909*, «Past & Present», núm. 41 (1968), 130 ss.

²⁰⁶ Vid. *El Liberal*, 7-V-1906. La moda palpita en algunos anuncios de establecimientos madrileños y algún conflicto de compañías teatrales (así, «El Trust Joyero», instalado en la Puerta del Sol, 12, y en la calle del Carmen, 1).

²⁰⁷ La Cierva: *op. cit.*, 76.

²⁰⁸ Así se desprende del estudio de Gonzalo Redondo: *Las empresas políticas de Ortega y Gasset*, Madrid, Ed. Rialp, 1970, vol. I, por lo que se refiere a la financiación, en la segunda década del siglo xx, de *El Sol*.

²⁰⁹ La Cierva: *op. cit.*, 85.

²¹⁰ Vid. la nota, francamente sugestiva para entender y valorar el problema francés, de la conferencia entre Moret y Clemenceau, transcrita por el conde de Romanones: *Notas de una vida*, en *Obras completas*, Madrid, Ed. Plus-Ultra, 1949, t. III, pág. 208-210.

²¹¹ Vid. la notable carta de Alejandro Pidal a Maura sobre una conferencia con Moret, apud Maura y Fernández Almagro: *Por qué...*, 116 s.

²¹² Discurso de Moret, apud *El Imparcial*, 20-XI-1908.

²¹³ Integro *ibidem*, 1-XII-1908.

²¹⁴ Cfr. *op. cit.*, 278 s.

²¹⁵ Vid. *El Imparcial*, 29-XI-1908 ss.

IX. LA POLITICA RELIGIOSA DE JOSE CANALEJAS (1909-1912)

(20 pol)

1. *Los grupos políticos y el Gobierno Moret*¹

En julio de 1909, ante la movilización de tropas catalanas decretada por el Gobierno Maura para llevar la guerra a las cabilas que hostigaban los establecimientos mineros españoles del Rif, las organizaciones socialistas y ácratas del Principado acordaron la huelga general. La razonaban en los intereses capitalistas que venía a defender con ello el Ministerio, cuyo esfuerzo pesaría, en cambio, sobre los pobres, incapaces de recurrir a «la redención a metálico» del servicio militar en armas.

Por motivos aún debatidos² —espontaneidad, o empeño del Partido Radical de Lerroux—, la huelga tomó un sesgo revolucionario en los últimos días de julio, que se tradujo en destrucciones totales o incompletas de numerosos edificios religiosos de Barcelona y lugares cercanos.

En su aspecto político, el suceso abocó al encarcelamiento de más de 1.000 individuos³. Pero enseguida —en realidad alentada por el propio Gabinete conservador⁴— se difundió la idea de que el Ministerio daba en acusar a un solo hombre, Francisco Ferrer Guardia, como principal responsable⁵.

Fuera iniciado por grupos adeptos a intereses financieros franceses, deseados de impedir la guerra hispanorrifeña y con ella la explotación minera del Rif por capitales españoles, como afirmó Cambó, o por las organizaciones anarquistas y anarquizantes de todo el mundo, en los términos de Unamuno⁶, la propia represión dio pie a una campaña internacional que vino a presentar los consiguientes procesos como obra de la España inquisitorial⁷.

Tras la condena de Ferrer en consejo de guerra y su ejecución en octubre del año 9, las manifestaciones antiespañolas se multiplicaron en toda Europa: Bolonia, Nápoles, Génova, Spezzia, Milán, Florencia, Berna y otras ciudades suizas, Berlín, Praga, Viena, Liorna, Lille, Lins, Lievin, Brest, Lyon, Cette, Toulouse, Rennes, Marsella, Londres, París, Orán, Salónica, Spek...⁸.

Quizá desentendido el Ministerio de restablecer oficialmente la verdad de lo sucedido y probar su ecuanimidad ante los procesos⁹, la realidad de los hechos, contra las exageraciones de la prensa foránea, fue paradójica y lealmente puesta de relieve por algunos elementos de la oposición: desde el socialista Pablo Iglesias y los republicanos al entonces liberal ABC (que en su patriótica campaña hallaría, precisamente, la posibilidad de levantar su decaída economía)¹⁰. Pero, en un frente único, las mismas fuerzas iniciaron al tiempo su propia y enérgica lucha contra la política del Gobierno en Marruecos y Cataluña.

La tensión estalló el 19 de octubre. Las Cortes habían sido reabiertas el 15, en plena agitación —de nuevo acaso por el prurito formalista del Gabinete, pese a la inoportunidad que se vio en ello. Y Moret, indeciso

el 18, pronunció el 19 un discurso contra él, para pedir su dimisión en aras de la defensa internacional de España, mezclada con el Ministerio en la campaña ¹¹.

La crisis abocaba a la quiebra formal del bipartidismo de la Restauración. A petición del propio Maura, Moret anunció la ruptura por liberales y demócratas de «todas las relaciones parlamentarias» con el Gobierno. A juicio del primero (que tal vez había forzado esta actitud al enviar a Dato a casa de Moret para obtener esas palabras, como aclaración al discurso de éste en el Congreso), la postura del liberal rompía «la normalidad constitucional» ¹². Decidido con ello a plantear al rey la cuestión de confianza, Maura puso al monarca implícitamente en la disyuntiva de respaldar al Ministerio «hasta que mudaran las circunstancias» ¹³; esto es: a quedarse con el Partido Conservador como único de gobierno en tanto no surgiera un sustituto del Fusionista, o a renunciar a aquél implícitamente, si pretendía continuar con ambos. Y el rey optó por la segunda posibilidad, más airosa, menos comprometida y en cualquier caso liberal ¹⁴.

Formado el Gabinete Moret el 21, Maura delineó su criterio para el futuro en el discurso a las mayorías conservadoras del 25. No podía considerar al nuevo Ministerio —afirmó— como expresión del Partido Liberal. No cabía ante él, por tanto, más que una «implacable hostilidad». Le opondría la fuerza, no ya conservadora: la de cuantos sintieran la necesidad «de oponerse al triunfo de la revolución» ¹⁵. Paso trascendental, porque venían a coincidir en él quizá, sólo tácticamente, tres posturas afines, que, equivocadamente acaso, ya se habían creído unidas antes. Una, el propio Partido Conservador de Maura en su acentuado hermetismo. Otra, el bloque de derechas iniciado por tradicionalistas independientes (tal vez el Comité de Defensa Social ante todos) en 1908. Por último, la opinión católica removida por la Semana Trágica, frecuentemente pronunciada por la represión en plenos días de la campaña internacional para el indulto ¹⁶.

En verdad, la afinidad no se tradujo en la alianza explícita ni siquiera después de los sucesos barceloneses de julio. Cuando en agosto, el vicario capitular de Barcelona protestó de ellos para impetrar ayuda económica del Estado, «sin perjuicio de incoar, como serán incoados a la mayor brevedad, los oportunos expedientes para la reparación o nueva construcción de los edificios eclesiásticos perjudicados», el Gabinete conservador rechazó el compromiso, en decisión que seguía demostrando quizá su independencia de criterio ¹⁷.

Tras la crisis de octubre de 1909, la misma raíz ordenancista del jefe moderado pareció forzar un acercamiento mayor: «el instinto de conservación de una sociedad alarmada —se diría— derivó en un reaccionarismo que Maura, dadas otras circunstancias, quizá no se hubiera prestado a en carnar» ¹⁸. En él cabían Defensa Social, conservadores y carlistas desconfiados de don Jaime (muerto don Carlos el 18 de julio), a quien se había atribuido en 1904 afirmaciones netamente anticlericales y liberales, desmentidas después ¹⁹. Pero tampoco ahora cabía hablar de unión entre ellos sino más bien de un común brote defensivo.

El primero de octubre de 1909 se reunían en el Comité de Defensa Social de Barcelona «importantes elementos de carácter social y político, para cam

biar impresiones sobre la próxima lucha electoral, acordándose tomar parte en ella sobre la base de la unión de las derechas, realizada, no por la absorción de unos elementos por otros, sino por la conjunción de todos ellos» ²⁰. Siempre antes de la crisis, «valiosos elementos sociales que sienten la necesidad de que en las próximas elecciones se unan todas las derechas en una sola candidatura que represente la protesta de los buenos ciudadanos contra los sucesos de julio, vienen efectuando diferentes trabajos para conseguirlo en esta ciudad [condal], como se ha hecho en el distrito de Manresa-Reus, estando dispuestos a presentarlo si se malograrán sus gestiones, reclamando el voto de los que en las presentes circunstancias anteponen la defensa de los más sagrados intereses a los exclusivismos de partido» ²¹. Y de tales esfuerzos debió proceder la candidatura carlo-integrista-conservadora-Defensa Social para las elecciones provinciales del 24 de octubre en la capital catalana. Su derrota estribó otra vez, según decíamos, en la negativa de la *Lliga* a formar en el bloque, aún empeñada en el aconfesionalismo que quería para la Solidaridad, de acuerdo con los informes oficiales de la votación ²²:

	<i>Votos</i>
Unión de derechas	2.861
<i>Lliga</i>	5.031
Izquierdas	6.579

En toda España triunfaron en octubre cinco integristas, 15 carlistas y seis católicos independientes ²³.

El planteamiento catalán se repitió en diciembre de 1909, en elecciones municipales, a nivel nacional. Carlistas e integristas votaron al maurismo, coaligado a su vez con Defensa Social —que, sin embargo, en Barcelona, logró esta vez el concurso de la *Lliga*—. En los focos republicanos —Valencia— hubo coalición «conservadora-liberal-neo». De 3.199 concejales elegidos en las ciudades con más de 6.000 habitantes hubo 750 conservadores, 109 carlistas y 46 católicos independientes; aunque las proporciones fueron menores en las capitales de provincia. Aquí, de 639 concejales electos, fueron 72 conservadores, 34 carlistas, tres integristas y 18 independientes confesionales ²⁴.

Reflejo de la euforia activista que estas cifras plasmaban, pareció significativo que, durante todo el año 9, las armerías eibarresas vendieran 500.967 armas, 51.704 más que en 1908. Según interpretó la misma prensa tradicionalista fue adquisición realizada «en gran parte por los elementos de orden, para propia defensa» ²⁵.

Fue así mismo reflejo de ese aliento la proliferación de agrupaciones herederas del estilo de Defensa Social: para canalizar la acción hacia el despliegue de la adormecida mayoría católica. En 1908 (valga ello como ejemplo, sin el carácter prioritario entonces que más tarde tendría), el jesuita Angel Ayala, ex director de los luses en Madrid, había comenzado a organizar «una nueva Congregación mariana» ²⁶ b: la Asociación Católica

Nacional de Propagandistas (A.C.N. de P.). Lo hizo al parecer a instancias del nuncio Vico, que, en diciembre de 1903, impuso las insignias a los primeros congregantes.

La Asociación llegaba con «el propósito de la propaganda, entonces entendida como propaganda exclusivamente oral»: sin «ningún plan concreto de tipo social, ni siquiera de tipo religioso, ni mucho menos de tipo político», ni otro fin que «dar mítines»²⁶; aunque, desde el primer momento, la prensa tradicionalista —que la recibió favorablemente— dijo que pretendía «singularmente enaltecer y promover la acción social católica»^{26 b}. «De ahí pueden salir nuestros sucesores», escribía en el mismo sentido Severino Aznar^{26 c}, carlista y escritor afamado en su defensa del sindicalismo horizontal católico.

Las posibilidades de esta acción eran tanto más claras cuanto que las victorias electorales de liberales y republicanos en aquellos comicios de 1909 no suponían en rigor triunfo completo del Gobierno Moret. El bloque de las izquierdas que lo llevó a Palacio se había roto de inmediato. Sus integrantes menos moderados y los socialistas y republicanos ajenos a él (radicales, federales, progresistas) habían formado en noviembre la Conjunción Republicano-Socialista cara a las mismas elecciones. Muy pronto, la engrosaron también los bloquistas más moderados, Melquiades Álvarez y Gumersindo de Azcárate a la cabeza, quizá desconfiados de la probidad de Moret respecto a su programa de reforma constitucional, o tal vez convencidos de la soledad en que iban quedando, con visos de acercamiento al centro, al formarse la Conjunción.

Ni siquiera en el liberalismo monárquico había acuerdo en torno a Moret. Quedaba en pie el Partido Demócrata Monárquico fundado en 1907 por López Domínguez y Canalejas, precisamente ante el incumplimiento de los programas anticlericales por el primer Gobierno Moret y el de Montero Ríos. En el actual, los demócratas estaban representados por el ministro de Hacienda Juan Alvarado. Pero Canalejas manifestaba ya sus reparos ante el Gobierno al hablar de disgusto por la ausencia de «ciertas personalidades liberales»²⁷: acaso Romanones y García Prieto, eliminados por Moret quizá para evitar su rivalidad en la jefatura del grupo sagastino²⁸.

El porvenir del Gabinete de 1909 dependía por tanto, una vez más, de su capacidad para lograr la confianza de tantas fracciones ajenas si no enfrentadas a él. Y lo había de conseguir siendo coherente con su radicalismo verbal.

En el otoño, el Ministerio Maura había clausurado las llamadas escuelas laicas, entre ellas las dirigidas por el anarquista Ferrer Guardia, dentro de la represión subsiguiente a la Semana Trágica. Ante las peticiones de reapertura, en noviembre, el episcopado español elevó una exposición en donde lo juzgaba contrario al Concordato²⁹. El Gobierno Moret contestó remitiendo el escrito al Consejo de Instrucción Pública para que lo informase. Aunque su pretensión quedó clara enseguida, a la vista de las dificultades creadas por el Gobierno Civil de Barcelona para el examen, por la Junta Municipal de Primera Enseñanza, con mayoría confesional, de los expedientes sobre los centros clausurados, requeridos a fin de emi-

ir dictamen sobre su situación futura. Incluso fueron reabiertas algunas escuelas sin autorización formal ³⁰.

El dictamen del Consejo fue negativo ³¹. Para apoyarlo, el Comité barcelonés de Defensa Social organizó un mitin de protesta el 23 de enero de 1910, y otro el 2 de febrero, en Madrid, el Centro del mismo nombre y la Juventud Católica ³².

Pero la contraofensiva fue iniciada de inmediato por la Conjunción Republicano-Socialista con el mitin del 13 de febrero en la corte, en pro de la apertura de aquellas escuelas —pero también en pro (segundo escollo de Moret) de la realización por el Gobierno del programa religioso ofrecido por su presidente desde la gestación del bloque liberal en 1908 ³³.

El 3 de febrero de 1910, en fin, firmaba Alfonso XIII un decreto que suspendía el derecho de los párrocos a inspeccionar los centros privados «de acuerdo con las peticiones —aclaraba el extracto oficial del Consejo de ministros— de los profesores de la Institución Libre de Enseñanza» ³⁴. Y, el mismo día, el Gabinete levantaba la clausura de las escuelas laicas.

El decreto, de hecho, venía a resarcir a un sector docente de los últimos enfrentamientos con los educadores religiosos. En junio de 1909, la inscripción de doscientos profesores católicos de todos los niveles de la enseñanza, laicos y clérigos, había alterado la línea aconfesionalista pretendida por liberales y republicanos —al frente Ortega Munilla y Vincenti— para la II Asamblea de la Junta Reformista de Instrucción Nacional reunida en Valencia. Sus sesiones degeneraron en violentas diatribas ³⁵. Y acababa de suceder lo mismo en el Congreso de Primera Enseñanza celebrado en Barcelona desde el 26 de diciembre del mismo año 9. Aquí, a la hora de designar las presidencias de las secciones, «la candidatura de los elementos católicos» había triunfado sobre la titulada «minoría liberal democrática y progresista» ³⁶.

En términos políticos, este activismo confesional expresaba a los liberales el «aliento que los neos, los jesuitas, los tradicionalistas y los de Defensa social les prestan» a los conservadores ³⁷, y subrayaba la necesidad de «oponerse a la reacción, y al empeño de Maura de abatir la libertad con el concurso de los carlistas» ³⁸.

Pero la solución del pleito, ágil en el asunto educativo, no resultaba fácil en cuanto al cumplimiento del programa de 1908. Moret contaba oficialmente con un partido «casi unánime en la afirmación de la libertad de cultos; divididas las opiniones respecto de una reforma constitucional [del artículo 11] ...; esperanzados varios liberales en la posibilidad de la transacción con Roma, que otros, entre ellos Canalejas, consideraron punto menos que imposible» ³⁹.

Abordó primero esta pretensión, estancada aún en los términos de 1906. No había acuerdo con el Vaticano sobre los religiosos, cuya situación estribaba en la interpretación que se diera al artículo 29 del Concordato, que protegía a tres congregaciones (las de San Felipe Neri y San Vicente de Paúl y una tercera a designar). Según los liberales, la existencia de las demás dependía de la libre decisión del Ministerio. Según el Vaticano, todas habían sido autorizadas implícitamente, y sólo aquellas apoyadas, por el texto concordatario. Se había logrado, pues, únicamente, cierto

entendimiento con la firma del protocolo para constituir una comisión mixta, aún no realizada no obstante, para la reorganización del presupuesto y la administración del clero.

En diciembre del año 9, se habló de órdenes recibidas por el embajador ante la Santa Sede, Ojeda, para negociar «la reforma del Concordato con la comisión especialmente designada para ello por el Vaticano y presidida por el cardenal Vannutelli». Incluso se afirmó la existencia de un proyecto de Moret y otro de Maura —quizá el de 1904⁴⁰—. Pero debió ser en enero de 1910 cuando los tratos comenzaron oficialmente. El 2 el ministro de Estado, Juan Pérez Caballero, remitió al nuncio en Madrid, Antonio Vico (y copia de ello al embajador), una nota donde ofrecía reanudar las negociaciones «inspirado en un sincero propósito de cordia y armonía tan amplio como sus arraigadas convicciones y como lo permiten las circunstancias por que atraviesa el país».

El replanteamiento del problema era realista y moderado, dentro de la postura liberal: «puesto que la [congregación] de San Felipe Neri se ha extinguido y la tercera a que alude la expresada disposición [del artículo 29] no ha sido designada, no tiene inconveniente el Gobierno español en conceder ese régimen de favor a otras dos Ordenes religiosas para que en unión de la de San Vicente de Paúl existan realmente las tres a que alude el Concordato».

Proponía para ello a dominicos y agustinos. Estos y los clérigos de San Vicente de Paul, precisaba, «podrán vivir libremente en España a amparo de la Ley canónica, sin otro requisito que el de inscribir sus actuales casas o conventos en un Registro especial consagrado a ellas en el Ministerio de Gracia y Justicia con objeto de que el Estado sepa, conozca el número de casas, conventos y establecimientos docentes que disfrutan el régimen de favor».

Además de estas y de las de misioneros, hospitalarios y escolapios, amparados por «preceptos expresos de las leyes del Reino», a las demás que, conforme al *modus vivendi* de 1902, pidieron su inscripción se les «reconocerá la existencia legal, con personalidad jurídica perfecta, ... aunque no hubieran sido autorizadas para constituirse o establecerse en España por ninguna disposición del Gobierno». Lo que no las eximiría, sin embargo, de la sumisión al derecho común.

Por lo demás, el Gobierno necesitaba «terminar estas negociaciones antes de la apertura de las Cortes que en breve plazo van a ser elegidas⁴¹».

El proyecto de protocolo concordatario, que acompañaba y articulaba la nota, añadía no obstante importantes limitaciones. No habría institutos de perfección exentos. Todos dependerían «de uno o varios Vicarios Generales con residencia fijada en España y con entera autonomía de cualquier autoridad eclesiástica extranjera o establecida fuera de España, sin perjuicio de continuar sometidas a la inspección, vigilancia y obediencia de los Prelados diocesanos dentro de las respectivas Diócesis». El nombramiento de estos vicarios, de otro lado, habría de ser aceptado por el poder civil (artículo IV). En idéntica línea regalista, los bienes de los institutos serían «administrados y distribuidos justificadamente dentro del Reino, en armonía con los fines de cada Institución y confor-

me al espíritu de la Bula *Inter graviores* de 1804 (artículo V). Y, a todos los efectos, todos los religiosos serían ante el impuesto iguales a los demás españoles (artículo VI).

Las comunidades con menos de doce miembros quedarían suprimidas en término de seis meses. Esto, salvo las que cumplieran una función social externa: las «que no hacen vida conventual y que en virtud de su instituto se dedican a obras de beneficencia, enseñanza, caridad y asistencia a los enfermos, a los ancianos, a los pobres abandonados como también las casas de procura y los sanatorios» (artículo VIII).

Cualquier nuevo establecimiento de los ya autorizados requeriría consentimiento previo del obispo y del Ministerio, por Real decreto «publicado necesariamente en la *Gaceta de Madrid*» (artículo VII). Para los no instalados aún, en cambio, sería preciso la aprobación del Papa y «una ley del Reino» (artículo IX), ratificada en Cortes como tal.

Los extranjeros no podrían constituir comunidades sin naturalizarse antes en España. Si no lo hacían y formaban parte de alguna de las autorizadas, estarían sujetos al derecho común para los no españoles (artículo X) ⁴².

Por orden de 22 de enero de 1910, al encargar a Ojeda que viera al secretario de Estado del Pontífice Merry del Val, el ministro de Estado Juan Pérez Caballero subrayó las características del protocolo propuesto. Respecto al Convenio de 1904, «las diferencias esenciales consisten en ... la limitación a tres de las Ordenes religiosas privilegiadas y el mantenimiento, por no decir restablecimiento, de los derechos concedidos a la Corona de España por la Bula *Inter graviores*». Había además, respecto al *modus vivendi* que había comenzado a resolver el conflicto ocho años atrás, «una diferencia de criterio fundamental en la aplicación de la Real orden circular de 9 de abril de 1902 ...: el hecho de la inscripción [de los institutos de perfección en el registro impuesto en ella] según el protocolo de 1902 bastaba para exceptuar de la legislación común a las Ordenes y Congregaciones religiosas: según el proyecto sólo ha bastado para que el Estado reconociera su personalidad, pero quedando sujetas a las leyes en cuanto a su vida y funcionamiento».

«Aunque he dicho al Nuncio que el proyecto de Protocolo que acompaña a mi Nota constituía nuestra última palabra claro está que no me negaría a aceptar alguna alteración que propusiese la Santa Sede con tal que no afecte al principio fundamental de que sólo queden excluidas de las leyes del Reino las tres órdenes citadas en el artículo primero del citado proyecto quedando todas las demás sujetas a la legislación española en los términos que determina el Protocolo» ⁴³.

La entrevista de Ojeda y Merry del Val tuvo lugar el 28 de enero de 1910. El cardenal manifestó la «creencia de que Su Santidad no se presstará a reanudar [las] negociaciones en virtud [de los] tonos conminatorios del penúltimo párrafo [de la] Nota al Nuncio, que ha producido en [el] Vaticano honda y penosa impresión» ⁴⁴. En realidad, parecía que el secretario de Pío X «no abrigaba mucha confianza en la estabilidad del actual Gobierno. Este mi querido amigo —escribía el embajador al ministro— es el obstáculo más formidable con que habremos de luchar para

el planteamiento y éxito de las negociaciones que se inician. Así es que agarrarán a cualquier pretexto como el del párrafo penúltimo de la Nota con todo ahinco para ganar tiempo en la esperanza de que suceda a esa otra situación política más favorable a sus designios»⁴⁵.

Por encargo inmediato de Pérez Caballero, Ojeda aclaró a Merry que el urgimiento sobre la aprobación del protocolo antes de la apertura de las Cortes no era más que «expresión leal [y] sincera de apremios y exigencias políticas que obligarán [al] Gobierno [a] dar cuenta [en la] Cortes tan pronto se constituyan»⁴⁶. La diplomacia pontificia respondió, no obstante, de acuerdo a los temores del embajador, que «era inútil y peligroso poner a guisa de pretexto el Gobierno de S. M. limitaba de antemano la libertad de la Curia declarando que no admitiría otra acción por su parte que el consentimiento a las proposiciones contenidas en la Nota»⁴⁷.

En el mismo sentido, a tenor de las instrucciones recibidas del cardenal, se expresó el nuncio el 3 de febrero en escrito de contestación al protocolo del ministro: «Su Santidad no estima digno de la Santa Sede ni útil entrar en negociaciones que, con tal disposición del Gobierno, evidentemente no podrían conducir a ningún buen resultado»⁴⁸.

El propio Alfonso XIII insistió el 5 al nuncio en sus «vivos deseos [de] que [la] Santa Sede acepte [las] negociaciones»⁴⁹. Y Pérez Caballero le remitió una nueva nota el 6 donde templaba la conminación⁵⁰. Incluso contestó el Pontífice al rey⁵¹. Pero no hubo lugar a saber la respuesta. El 9, caía el Ministerio.

2. *Planteamiento político del Ministerio Canalejas*

Para Cambó, la crisis de febrero de 1910 fue imposición de Maura con una suerte de venganza por la crisis de octubre anterior⁵². Para Maura fue resultado de la convicción del monarca de que Moret obedecía los dictados masónicos⁵³.

En todo caso, coincidió con una intriga del propio grupo liberal. Parece que un sector del partido (a la cabeza Romanones, García Prieto, López Domínguez y Cobián, con aquiescencia de Canalejas; unos por discordancia con la apertura a izquierda de Moret, otros por su exclusión del Gabinete) recriminó al Gobierno por «colocar en manos de los republicanos los instrumentos todos que pueden considerarse como eficaces y decisivos en las luchas electorales»⁵⁴. Y cuando, el día 9 de febrero de 1910, Moret llevó a la firma de Alfonso XIII el decreto de disolución de las Cortes conservadoras que heredara del Ministerio Maura, a fin de convocar nuevamente elecciones, el rey hubo de responder, por aquella desautorización de los propios exfursionistas, que había de consultar primero a los jefes políticos. «Vendrá lo que viniere —sentenciaría *El Liberal* ante la consiguiente e inmediata dimisión del Gobierno—; podrá el señor Canalejas, a fuerza de buenas obras, limpiarse de la mancha original ... Pero, aun en este último caso, salvada la integridad de sus ideas y de sus propósitos, quedará pesando sobre él la responsabilidad de haber determinado en el avance de la democracia un lamentable retroceso»⁵⁵.

al aceptar al menos el provecho de aquella intriga que le daba el poder.

Llegaba Canalejas, por tanto, al Gabinete con el lastre de la condena por su complicidad, expresamente formulada por la Conjunción Republicano-Socialista en actos de protesta por toda España ⁵⁶, y también con el lastre de la división del partido, que no evitaba el carácter de Ministerio de concentración dado al suyo, sólo tres de cuyos integrantes eran canalejistas ⁵⁷.

No podía justificar acaso la irregularidad de su origen más que insistiendo en las diferencias. Rechazó en un principio, por tanto, las sugerencias de Montero Ríos para reunificar el Partido Liberal bajo la jefatura de Moret ⁵⁸. «El gobierno —subrayó Canalejas— no se somete a consejos de familia, ni acepta tutelas de nadie» ⁵⁹. Pero, el 22 de febrero, recordó también sus propósitos religiosos, en declaración a *L'Humanité*, que venía a dar fe de su propio radicalismo.

El programa seguía centrado en la revisión —como mera demostración en principio de la soberanía del poder civil— de las autorizaciones concedidas por el Estado para la instalación de los institutos de perfección no concordados; en la aprobación de una ley nueva de asociaciones, que los sometería al derecho común y al control oficial, y en la negociación con Roma de la reforma del presupuesto para el culto y el clero ⁶⁰.

El propio Cobián, ministro de Hacienda, a quien, como a García Prieto, de Estado, se le creyó contrario a estas metas, subrayó en marzo su conformidad. Se iría incluso, dijo, a la reducción de los institutos, conforme a las afirmaciones de León XIII y Pío X acerca de su excesivo número ⁶¹, y desde luego a sujetarlos al derecho común, a partir del propio ramo de Hacienda ⁶².

El radicalismo continuó siendo urgido por los republicanos en marzo y en abril del propio año 10, con algunas algaradas, sobre todo en apoyo de los acuerdos de los ayuntamientos de Valencia y de Barcelona contra la tradición de suspender el tránsito rodado el Jueves y Viernes Santos ⁶³.

La confianza de los más templados en la autenticidad de Canalejas llevó incluso a la monarquía al periodista Luis Morote, y a Palacio, a entrevistarse con el rey, al historiador institucionista Rafael Altamira y al naturalista Odón de Buen —que había colaborado con Ramón y Cajal en las publicaciones de Francisco Ferrer Guardia ⁶⁴.

«En todas partes advertíase que el jefe del Gobierno despertaba esperanzas» ⁶⁵. Restaba únicamente valorar la oposición que habría de vencer. Y, en febrero y marzo, las quejas contra la reapertura de las escuelas laicas dieron respuesta.

Hubo mítines confesionales en Badalona, Granollers, Vilanova i Geltrú, Monistrol de Montserrat, Berga, Centelles, Vic, Manresa, Gerona, Canet de Mar, San Andrés de Palomar, Vilafranca del Penedés, Igualada, Terrassa, Tarragona, Pueblo Seco, Tortosa, Valencia (con 25.000 asistentes), Alcira, Játiva, Liria, Benifayó, Ciudadela, Palma (10.000), Manacor, Zaragoza, Tarragona, Calatayud, Huesca, Irún, Bilbao (15.000), Azpeitia, Vergara, Tolosa (15-16.000), Mondragón, Villarreal (25.000), San Sebastián, Oviedo, Valladolid, Medina del Campo, Burgos (6 a 7.000), Palencia, Madrid (8.000), Ciudad Real, Piedralabes (1.000), Adrada (700), Santiago (15.000); Puenteáreas

(10.000), Tuy, Astorga, Dos Hermanas, Sevilla (600), Cádiz (3.000), Córdoba, Puerto de Santa María, Granada, Albaida, Málaga..., organizados por Defensa Social, tradicionalista y luisos (aquí la reciente A.C.N. de P.), entre otros movimientos ⁶⁶.

Ante las elecciones generales, convocadas por el Gobierno el 14 de abril para el 8 y 22 de mayo de 1910, la efervescencia se tradujo otra vez en candidaturas coaligadas —de nuevo, en Barcelona, tradicionalismo, Partido Conservador y Defensa Social ⁶⁷. Don Jaime, ahora jefe de la casa carlista, pudo manifestar que había acordado con Merry del Val el apoyo de los jaimistas al maurismo donde no hubiera candidatos de su partido. Era tal la oposición preparada, añadió, que, con la división del fusionismo y la que preveía en el Ministerio por la templanza de Cobián y García Prieto, hacía esperar que no llegase a efecto el anticlericalismo de la situación ⁶⁸.

Los resultados de las elecciones dieron, al fin, cierto aliento a estas esperanzas. La mayoría gubernamental del Congreso fue de 229 escaños, «cifra reveladora de que el Gobierno no quiso apretar los tornillos de la máquina electoral», según el canalejista Francos Rodríguez ⁶⁹. El conservatismo obtuvo 106, los tradicionalistas 10, pero los republicanos 37, y entró en las Cortes Pablo Iglesias, primer diputado socialista en el parlamento español ⁷⁰.

En Barcelona al menos, la candidatura confesional volvió a avanzar en número de votos y a demostrar que, unida a la *Lliga*, hubiera conseguido dos diputados ⁷¹. Mas, sobre todo, la composición del Senado fue adversa al Gabinete:

De 360 senadores, fueron 178 gubernamentales (menos de la mitad del total) y 150 de la oposición —de estos, 117 conservadores, 4 católicos independientes, uno de Defensa Social, 17 prelados, 6 carlistas y 5 regionalistas ⁷². El Ministerio, por lo tanto, habría de vivir «a merced de los senadores palatinos, que tienen por norma votar con el Gobierno; de los independientes y los de la izquierda que quisieran ayudarle» ⁷³.

En otras palabras, quedaba de salida a merced de la corte. Del planteamiento inicial, fue acaso significativo que no hubiera candidatura senatorial del Gabinete para Madrid, sino una de unión monárquica, en la que incluso se dio entrada a un individuo de Defensa Social, Bahía, al parecer después de una entrevista del ministro Cobián y el obispo Salvador y Barrera ⁷⁴.

De este modo, el programa gubernativo devenía de antemano imposible, si el Ministerio no ideaba una manera nueva de abordarlo.

En la primera mitad de marzo de 1910, el embajador ante la Santa Sede, Ojeda, fue llamado a Madrid. En varias entrevistas con el ministro de Estado García Prieto, recibió instrucciones sobre la actitud a adoptar en Roma ⁷⁵, conforme a un plan sabido por el rey ⁷⁶ y por los miembros del Consejo ⁷⁷. En una primera conversación con el secretario de Estado de Pío X Merry del Val, el embajador debía de hablar «solamente [de los] propósitos generales [del] Gobierno [de] proceder [con] absoluta lealtad, expresando aquellos extremos a que no intentaba llegar e indicando sobre [el] punto concreto [de las] órdenes religiosas que aspirábamos a reducir las y regularizar su situación jurídica» ⁷⁸.

El 5 de abril, el Consejo de ministros concretó esta intención en cinco bases, que radicalizaban el protocolo de Moret; pero que ya apuntaban esa nueva y original manera ideada por el Gobierno para abordar la cuestión. El Gabinete pretendía, primero, conseguir que la propia Iglesia redujera el número de institutos; someter a la ley común los acogidos al artículo 29 del Concordato; negarse a sustituir por otros los que, de estos, se hubieran extinguido o siguieran sin determinar (la famosa tercera orden de aquel artículo); aplicar a todos los demás la ley de asociaciones, que sería reformada sin negociación con el Vaticano, y cumplir el *modus vivendi* de 1902⁷⁹: disolviendo, por tanto, los institutos que no lo hubieran acaudado.

Las bases fueron desarrolladas en dos reales órdenes de García Prieto al embajador. La primera, de mera comunicación, había de ser leída «confidencialmente» al secretario de Estado de Pío X. Justificaba la postura en razones «derivadas unas de nuestro propio sentir y consiguiente significación del actual Gobierno en la política nacional, superiores otras a todo móvil o compromiso de partido y consistentes en atajar los daños de la discordia o inquietud moral producidas por la interinidad en que sobre tales materias se vive hace años». Advertía por eso la firmeza y la benevolencia del Ministerio:

«Primero, que, sin abandonar los principios que sirven de distintivo al partido liberal democrático en España, el actual Gabinete atenderá sobre todo a la eficacia práctica de sus iniciativas ...

Segundo, que la Santa Sede debe sentirse al abrigo de toda sorpresa, ya que ninguna determinación del Estado, susceptible de trascender a sus relaciones con la Iglesia, se tomaría sin que aquélla estuviera advertida.»

Y este era, precisamente, el primer caso práctico. Anunciaba que iba a cumplir aquel *modus vivendi* citado, concretado en la real orden de 9 de abril de 1902, que, de acuerdo con Roma, amenazara con la disolución a las comunidades religiosas instaladas de hecho o de derecho que no se dicran de alta en el término de tres meses en los registros de los gobiernos provinciales civiles⁸⁰.

La segunda real orden del 6 de abril de 1910 era más ambiciosa: «el crecimiento de las Ordenes y Congregaciones en España, la entrada en ellas de extranjeros, aparte de los problemas jurídicos que plantean, ofrecen consecuencias económicas y generales para el país y para la Iglesia». Urgía reducirlas. Pero no era bastante la aplicación de la orden antedicha del año 2. Sugería, por tanto, «que los Obispos diocesanos sean desde luego provistos por la Santa Sede de las facultades necesarias para reformar y suprimir en sus respectivas diócesis los monasterios, conventos, etc., que, aun habiendo observado en su creación los requisitos exigidos por la disciplina eclesiástica no fueren indispensables, a juicio del Obispo, para auxiliarles a ellos y a los Párrocos en el ejercicio de su sagrado ministerio o para satisfacer las demás necesidades espirituales.» En adelante, además, los que restasen habían de quedar supeditados a autoridades religiosas españolas o establecidas en España⁸¹.

Incluso designó el Gobierno, sin esperar respuesta vaticana, los dos vocales del Estado en la comisión mixta establecida por el protocolo con

el Vaticano de 12 de julio de 1904 para la reforma administrativa de culto y clero, que había de ser, en opinión del Gabinete, la que canalizase ahora esta otra reducción de los institutos ⁸².

Merry del Val acogió los proyectos ⁸³ sin comentarios, fuera de sugerir que el Ministerio acaso pretendía «poner un parche» a la situación política ⁸⁴, que parecía serle desfavorable. Pero, pedida audiencia al Papa en la misma ocasión, Pío X respondió a Ojeda el 22 de abril de 1910 en términos que dejaban la puerta franca a la solución liberal:

«Yo mismo desapruébo la extensión y el desarrollo de las órdenes religiosas no sólo en España sino en esta Capital del Orbe Católico ... Podéis por lo tanto estar seguro y manifestar al Rey y al Gabinete de Madrid que he de emplear toda mi autoridad, todas mis facultades, toda mi buena voluntad para remediar un estado de cosas que lamento.»

Esperaría únicamente el dictamen de la Congregación para Asuntos Eclesiásticos, «según costumbre» ⁸⁵.

En verdad, la petición de España y la respuesta del Pontífice parecían concordes con la actitud manifestada por el propio Pío X en decreto de 16 de julio de 1906: «tal es la fragilidad de la condición humana —había escrito entonces—, que de no introducir alguna moderación canónica, por causa del excesivo número de tales Asociaciones necesariamente resultan alguna vez desórdenes y confusión en la sagrada disciplina. Por lo cual la Sede Apostólica dio muchas disposiciones para evitar este perjuicio ... Mas con todo, la experiencia ha demostrado que todas estas disposiciones no han sido bastantes para evitar que algunas Asociaciones se hayan colocado en tal situación ya desde su origen, que al ser sometidas al examen de la Sede Apostólica se han visto, no sin grave daño, obligadas a retroceder». Había dispuesto, pues, que ningún ordinario pudiera fundar ni permitir el establecimiento de un instituto nuevo sin previa licencia escrita de la Sede Apostólica ⁸⁶.

Para el arreglo de 1910, el Ministerio llegó a ofrecer que, si los prelados realizaban la reducción como se pedía, el Gobierno procuraría «la formación de una ley civil [de asociaciones] que no cause a las que queden embarazo incompatible con su normal funcionamiento». De modo que ni siquiera haría falta volver a pretender el «arreglo sobre la interpretación de los artículos 29 y 30 del Concordato» ⁸⁷, cuyo marginamiento era, seguramente, el aspecto más atractivo de la propuesta.

Pero los términos de ésta habían provocado, según parece, disensiones en Roma ⁸⁸. Frente a la comprensión de Pío X y de Merry, «los demás miembros de la Congregación, ... en general y según tradición consuetudinaria, no se allanaban a consideraciones políticas momentáneas y fugaces sino al bien permanente de la Iglesia, aunque tomando en cuenta siempre las conveniencias nacionales de carácter trascendental». Y pesaba, por otra parte, «la fuerte oposición que se ha hecho, se hace y se hará por las órdenes religiosas, obispos y elementos más intransigentes tanto aquí [en Roma] como en España, a la actitud benévola del Vaticano hacia los liberales y *masones* españoles, como con frecuencia los denominan» ⁸⁹.

En todo caso, «sin tener a bien ilustrarnos sobre las razones que pudieran oponerse a la aceptación», según García Prieto ⁹⁰, la respuesta fue

negativa. La Santa Sede admitía tan solo, sin citarlo, lo que había concedido en 1904 a Maura. Podrían suprimirse las comunidades que no contasen doce miembros, «con excepción de las ... que no hacen vida común, o que se dedican a la enseñanza o a obras de caridad como también de las casas de procuración y de salud, así como ... aquellas otras que los obispos creyesen necesarias al ejercicio del sagrado ministerio en sus diócesis». Aceptaba que los institutos ya instalados no abrieran nuevas casas sin autorización del ordinario y del Gobierno, ni se establecieran otros nuevos sin previo entendimiento entre Madrid y Roma. Y que los extranjeros hubieran de naturalizarse para fundar, o someterse al derecho común para los no españoles si habitaban en una comunidad de peninsulares.

Todos quedarían sujetos a los impuestos generales. Pero todos también los acogidos a esta situación quedarían exentos de los preceptos de la vigente ley de asociaciones y podrían regirse «según las disposiciones del derecho canónico y las propias constituciones». Esto, sin merma de prerrogativas para los privilegiados por el artículo 29 del Concordato ⁹¹.

García Prieto no ocultó su contrariedad. La «primera impresión ha sido [de] extrañeza al advertir que después [de las] manifestaciones [de] Su Santidad y [de las] seguridades [del] Cardenal [de] que se buscaría remedio eficaz y práctico a [la] situación creada por [el] exceso [de] órdenes religiosas, no solamente no se acepta el muy equitativo propuesto por nosotros sino que se nos propone otro que consta de antemano a [la] Santa Sede no puede parecernos satisfactorio, a saber, [las] cláusulas [del] Convenio [de] 1904» ⁹².

Instado por Madrid, el cardenal Merry del Val justificó el giro pontificio en detalles que parecieron accidentales: en la inaplicabilidad de los medios y de los precedentes jurídicos aducidos por el Gobierno para la reducción. Ojeda lo advirtió: «Le objeté yo a mi vez que me parecía ocioso entrar en discusión sobre este u otro punto; que el objeto que se proponía el Gobierno, aprobado en principio por Su Santidad y por el propio Cardenal, era la disminución y supresión de asociaciones y órdenes superfluas y que el Vaticano, en lugar de querer desentenderse de los medios que, para lograrlo, proponía el Gobierno, debía por el contrario ayudarnos con todos los que le sugiriera la benevolencia tantas veces afirmada por el Vaticano hacia el Monarca y la Nación españoles y que la extensión que proponía V. E. [el ministro de Estado] de las facultades de dicha Comisión Mixta [de 1904] para la supresión de los conventos, congregaciones, etc., ofrecía una excelente ocasión a la Santa Sede para dar muestra de sus favorables disposiciones.

Me contestó el Cardenal que este punto sería tomado en consideración y podría desde luego ser objeto de negociación especial así como cualquier otro que no afectase las Constituciones Canónicas de la Iglesia Española». Pero no cabían urgencias en ello: «que hacía seis años que los Gobiernos españoles hablan de reformar el Concordato y sin embargo de las buenas disposiciones de la Santa Sede nada habían hecho en este intervalo, sino dejar las cosas tal cual quedaron en el Protocolo de 1904; que no podía por consiguiente acusarse de la demora al Vaticano, ni me-

nos pretender que a última hora y por razones de partido, a que forzosamente tiene que permanecer ajena la Santa Sede, se atropellen todos los procedimientos de esta Curia»⁹³.

3. Política radical y enfrentamiento a Roma

Canalejas volvía a hallarse en la disyuntiva tradicional, ahora apremiante por la proximidad de la apertura de Cortes y la rendición consiguiente de cuentas a que había de someterse: o la claudicación o el radicalismo, real o aparente, en la medida en que lo permitiera la estructura de las mayorías parlamentarias, supuesto ya el fracaso de la solución airosa pretendida de Roma.

En cuarenta y ocho horas, pareció virar por eso en redondo. El 19 de mayo de 1910, el ministro de Estado García Prieto telegrafió al embajador para que notificase al secretario de Estado del Papa, «sin que [la] indicación pueda interpretarse como aviso», que el Gobierno iba a publicar una real orden dirigida a los gobernadores para que cumplieran la del 9 de abril de 1902⁹⁴: disolviendo por tanto, al fin, los institutos no inscritos en los registros civiles. Merry le respondió que lo esperaba y que creía obedecía «a un plan hostil preconcebido»⁹⁵. Era, diría la prensa confesional, «el primer fogonazo del anticlericalismo en nuestra patria», que en algún caso se interpretó además como contestación a una protesta escrita publicada por la jerarquía eclesiástica contra la pretensión de reducir el número de religiosos⁹⁶.

Todavía García Prieto subrayó «que [el] propósito [de] expedir [la] Circular existió desde un principio y nunca dependió del resultado favorable o adverso de negociaciones sobre otros puntos». Que el Ministerio no la había promulgado antes «por extremar [el] respeto a[la] espíritu [de la] ley electoral, que le hizo abstenerse durante [el] período [de las] elecciones de una medida susceptible de influir en derecho tan político como el de asociación»⁹⁷.

Respecto a la propuesta de reducción de comunidades, repitió el 25 de mayo del año 10, en nota formal, su extrañeza ante el carácter secundario de los argumentos de Roma y la conveniencia de que el Vaticano lo reconsiderase⁹⁸. Pero enseguida dio un paso diferente al advertir el 27 que se reservaba la «libertad [de] presentar [a las] Cortes [un] proyecto [de] ley exigiendo autorización [de la] potestad civil para [el] establecimiento [de] casas religiosas en lo sucesivo»⁹⁹.

El 30, el rey firmó la real orden a los gobernadores para aplicar aquella de 9 de abril de 1902, disolviendo por tanto las comunidades no inscritas en el plazo que esta había previsto, las instaladas después y las extranjeras tampoco sujetas al *modus vivendi*¹⁰⁰. Y, a comienzos de junio de 1910, el embajador hubo de anunciar además al secretario de Estado el propósito de expedir otra orden sobre interpretación del artículo 11 de la Constitución¹⁰¹.

En concreto, declaraba este artículo la confesión católica del Estado, pero también la libertad para la práctica de otros cultos, siempre que

no mostraran «signos externos». La orden de ahora respondía al compromiso contraído por Canalejas en 1906, al afirmar que era imprudente la reforma constitucional pedida por Moret para imponer la libertad religiosa, cuando un simple decreto bastaba para establecerla de hecho a partir de la tolerancia de aquel artículo.

Ante la circular sobre el *modus vivendi*, Merry del Val advirtió a Ojeda el temor de que «fuese considerada por ciertos elementos como un reto lanzado por el Gobierno y un deseo de precipitar las cosas». En realidad, la firmeza de Roma podía basarse en efecto en el creciente mal-estar de los medios tradicionalistas y eclesiásticos españoles. De hecho, el Gabinete hubo de protestar de la «intempestiva publicación de la carta dirigida por el Episcopado español al presidente del Consejo» el 6 de abril de 1910, contra la reducción de los religiosos¹⁰². Y, al notificar aquella pretensión de interpretar de real orden el artículo 11, deslizó en Roma la «esperanza ... de que [la] opinión católica, apreciándolo [el] alcance estrictamente legal de la disposición, no intentará frustrar con su actitud los resultados eminentemente pacificadores de la obra que acometemos»¹⁰³.

Todavía unas declaraciones atribuidas a Canalejas, según las cuales pretendía legislar al margen de Roma si el Vaticano no ceptaba la transacción, contribuyeron a encrespar los ánimos a nivel diplomático¹⁰⁴. Según Merry del Val, tanto habían molestado al Pontífice, que la firma de la respuesta a la nota española del 25 de mayo de 1910, sobre la situación jurídica de los religiosos, había sido suspendida hasta comprobarlas.

El presidente las negó de manera explícita¹⁰⁵. Respecto a la real orden del artículo 11, el embajador insistió en que su contenido, «la derogación de la regla segunda de la Circular de 23 de octubre [de] 1876, era potestativa del Gobierno, a quien compete únicamente la interpretación y la aplicación de las leyes constitucionales y no podía por consiguiente ser objeto de negociación con el Vaticano ni sospechársela [sic] de hostilidad hacia la Santa Sede»¹⁰⁶. Pero, el 11 de junio de 1910, el Vaticano respondió «se vería obligada a emitir contra tal publicación la más formal protesta» cuando la recibiera, como medida anticoncordataria.¹⁰⁷

La orden había sido publicada ya en la *Gaceta* del 10. Consideraba «autorizados los letreros, banderas, emblemas, carteles» de confesiones acatólicas. Porque creía inadecuada la interpretación del artículo 11 que dio la real orden de 1876, al juzgar manifestación pública «todo acto ejecutado sobre la vía pública o en los muros exteriores del templo y del cementerio»¹⁰⁸.

Fuera de su justificación¹⁰⁹, el sentido político de la medida, en pleno esfuerzo de aproximación a Roma, venía al menos animado por la actitud de los republicanos. En mayo y junio de 1910, la prensa supuso de continuo la actitud reacia de la Santa Sede ante las reformas del Ministerio. «Corto y tímido —comentó *El Liberal*— es el avance que da el Gobierno» con esta orden de 10 de junio sobre signos externos, aplaudida no obstante¹¹⁰. Del Gabinete se esperaba ahora una decisión drástica que detuviera definitivamente, aun antes de su regulación jurídica,

la penetración de los religiosos foráneos: decisión que ya empezó a llamarse, al menos en la primera mitad de junio, ley «del candado»¹¹¹, por alusión, traída de Francia, a un tecnicismo económico en boga¹¹².

Inauguradas las sesiones de Cortes el 15, el Ministerio sintetizó «la situación creada por la excesiva multiplicación de las Ordenes y Congregaciones religiosas. Acerca de éstas, mi Gobierno —advirtió Alfonso XIII en el discurso de apertura— se esfuerza en dar satisfacción al público anhelo para que se reduzcan y se sujeten, en su funcionamiento, sin menoscabo de su independencia en lo espiritual, secuela de la libertad de conciencia, a las normas civiles reguladoras del ejercicio del derecho de Asociación».

A ello apuntaban, dijo, la orden de 30 de mayo a los gobernadores, el proyecto de «acuerdo con la Santa Sede sobre supresión de conventos y casas religiosas no indispensables a las necesidades de las diócesis» y la anunciada ley que impidiera «el establecimiento de Asociaciones de esa índole sin autorización de la Potestad temporal mientras es reformada la ley de 30 de junio de 1887».

Había promulgado además, inspirado «en el espíritu universal de la libertad de conciencia», la orden sobre la tolerancia de cultos del artículo 11, al que otorgaba «toda la amplitud que su texto autoriza». Y ahora anunciaba una intensificación y reforma de la enseñanza, concebida en «la independencia con que el Estado debe proceder, rechazando de sus escuelas el prejuicio y la coacción de los diferentes dogmatismo»¹¹³.

La parte del discurso sobre los institutos fue anunciada textualmente a la Santa Sede el mismo 15 de junio de 1910; pero no la alusión a la política educativa. Y, en el mismo camino de evitar la protesta, el Gabinete advirtió al comunicar aquella a Ojeda que el «proyecto [de] ley [a] que se alude en [el] mensaje [de la] Corona exigiendo autorización [de la] potestad temporal para [el] establecimiento en lo futuro de nuevas casas religiosas es el que V. E. anunció [el] 3 [de] junio a[ll] Cardenal y estaba previsto por [la] frase [de la] Nota [de] 26 [de] mayo sobre las 'reglas para el porvenir, etc.'. Autorización [del] poder civil [—insistía así mismo—] significa, en efecto, prácticamente, lo mismo que acuerdo entre ambas potestades, pues ciertamente aquélla no habría de concederse a [las] órdenes y congregaciones católicas con cuyo establecimiento no estuvieran conformes [las] autoridades eclesiásticas»¹¹⁴.

Merry del Val aceptó «no tener razón la prensa católica al atacar al Gobierno de S. M.» por esta norma futura, como había empezado a hacer. Y convino con el embajador «en la separación que hay que establecer entre las RR. OO. y [las] negociaciones» sobre los institutos¹¹⁵. Pero una nueva medida volvió a enturbiar la situación.

Aún el 15 de junio, el visitador de las Escuelas Cristianas solicitó del Gobierno Civil de Oviedo la inscripción de las comunidades de Llanes, Colunga, Gijón, Avilés, La Felguera y Mieres, en el registro civil correspondiente. Como habían sido establecidas después del *modus vivendi* de 1902, el gobernador consultó al ministro de la Gobernación, Merino, la oportunidad de inscribirlas o la de disolverlas, conforme al artículo 3.º de la ley del 87, que aquel pacto había recordado. Y, recibida contes-

acción de obrar «inmediatamente» según él ¹¹⁶, el 20 de junio de 1910 se hizo pública la denuncia de ilegalidad contra la comunidad de Mieres, formulada por el gobernador ¹¹⁷.

Al tiempo, el Vaticano conoció el texto íntegro del mensaje de la corona, con sus frases sobre enseñanza. Y, en vista de ambos acontecimientos, en nota oficial, el cardenal Merry del Val comunicó a Madrid que, antes de continuar las negociaciones sobre los institutos, requería del Gabinete «una seguridad leal» de que este no adoptaría nuevas medidas unilaterales ¹¹⁸.

El Gobierno consideró la petición muestra de «verdadera intransigencia» ¹¹⁹. La decisión del gobernador de Oviedo, adujo, obedecía a la circular de 30 de mayo, que había recordado el cumplimiento del *modus vivendi* y que no fue protestada por Roma. «Respecto a las instrucciones al parecer contrarias, en muchos puntos, a la Religión Católica que V. Eminencia advierte en el texto oficial del Mensaje de la Corona —alegó la embajada en nota de 22 de junio—, el Gobierno de S. M., sin hacerse cargo exacto por lo demás de aquello a que se refiere especialmente V. Eminencia, estima que puesto que la Santa Sede desea ofrecer muestra de sus disposiciones de concordia y deferencia sería natural aguardarse la presentación de los proyectos de ley en que aquellas supuestas intenciones habrían de manifestarse sin formar de antemano concepto que en el propio sentir de V. Eminencia habría de resultar por lo menos dudoso.

... El Gobierno de S. M. se da, en fin, tanto menos cuenta del objeto y alcance de la seguridad que se le pide cuanto que es público que en las sesiones que las Cortes van a celebrar, antes de interrumpir sus trabajos durante el verano, no se presentará otro proyecto de Ley sobre las materias del Mensaje, relativo a asuntos religiosos, que el concerniente a la autorización gubernamental para establecer conventos, etc., en lo futuro, acerca del cual he hecho a V. Eminencia las francas manifestaciones que me ha ordenado el Gobierno» ¹²⁰.

En vista en todo caso de la actitud de Roma, sin esperar respuesta, en el Consejo de ministros del 24 de junio de 1910, Canalejas «habló ante el Rey con suma claridad, recordando que al encargarse del Poder se había manifestado dispuesto a servir a la Patria y a la Monarquía; pero sin mengua de sus convencimientos. Dio cuenta del estado de las negociaciones con Roma y de su disposición inquebrantable a mantener los derechos del Gobierno» ¹²¹, aunque también de su empeño en no dar pretexto a la Santa Sede para la ruptura. «Como se ve —diría Soldevilla—, estas manifestaciones ante el Rey constituían una verdadera cuestión de confianza» ¹²², que le fue ratificada.

El Vaticano contestó el mismo 24 a la nota del Ministerio en respuesta a la exigencia de «una seguridad leal». La Santa Sede no se había opuesto en verdad a la orden de 30 de mayo sobre el cumplimiento del *modus vivendi*. Pero tampoco había dado su aquiescencia: «tenía fundados motivos para entender así mismo por las explícitas declaraciones verbales que a este respecto le hiciera el Señor Embajador, que aquel propósito del Gobierno no fuese más que un proyecto subordinado al éxito final de las negociaciones y fundamentadamente suponía que anteriormente a la con-

clusión del acuerdo, el mismo Gobierno se habría atendido estrictamente a las disposiciones concordadas en el denominado *Modus Vivendi* del 1902». Porque, además, la orden de 9 de abril de este año, no se había atendido a tal pacto. Ofrecía, por el contrario, «muchos puntos no conformes con aquel y no se contenía dentro de los límites pactados con la Santa Sede».

Era obvia, por otra parte, la significación de «los diferentes dogmatismos» a que se refería el discurso de la corona en la apertura de las Cortes de 1910. «Si a lo que ya viene expuesto se añaden las noticias ahora publicadas por los periódicos de la clausura de varias escuelas congregacionales y las preocupaciones que motiva el anuncio contenido en el mismo Mensaje, de una reforma de la Ley de 1887 sobre asociaciones en relación con las Congregaciones religiosas, aparece siempre mayormente manifiesto lo razonable del deseo expuesto por la Santa Sede de obtener del Gobierno de S. M. Católica francas y leales seguridades que permitan continuar con plena confianza los tratos iniciados»¹²³.

El Ministerio repitió que, en el «primer período parlamentario», no presentaría «a las Cortes proyecto alguno de reforma de la Ley de Asociaciones»¹²⁴. Y, ante la insistencia vaticana en la exigencia de seguridades estrictas¹²⁵, respondió concretando definitivamente «sus propósitos respecto:

1. Presentación inmediata a las Cortes de un proyecto de Ley restableciendo la necesidad de una autorización gubernativa para la apertura legal en lo sucesivo de casas religiosas;

2. Aplazamiento de la presentación del proyecto de Ley de reforma general de la Ley de 30 de junio de 1887, de modo que las negociaciones sobre órdenes y congregaciones religiosas entre España y la Santa Sede puedan desenvolverse normalmente;

3. Cumplimiento de las circulares de 30 de mayo último y 9 de abril de 1902»¹²⁶.

Al tiempo, sin embargo, se hacía público otro decreto real de 30 de junio de 1910 que autorizaba la presentación al parlamento de un proyecto de ley para la supresión de la obligatoriedad del juramento sobre la Biblia en los formularios oficiales¹²⁷. Era, dijo Merry del Val a Ojeda, «otro indicio de las tendencias antirreligiosas de[!] Gabinete»¹²⁸.

Como este debió temer, la Santa Sede no dio ahora, el 9 de julio, consentimiento a la legislación, ya en curso, que aquel había concretado en aquellas tres bases de la nota del 4. La ley del candado —que había sido presentada al Senado el 8¹²⁹— debía de ser negociada con Roma antes de su promulgación. Sobre la futura de asociaciones el Vaticano formulaba desde ahora «sus reservas, para el caso en que dicho proyecto no estuviese en conformidad con los principios del Derecho Canónico y de los Pactos ajustados entre la Santa Sede y España». En cuanto a las reales órdenes, insistía en su desajuste con el *modus vivendi*.

Estaba sin embargo dispuesto a proseguir la negociación. Pero la suspendería «inmediatamente» en cuanto el Gabinete «tomara cualquier disposición o llevara a efecto cualquier acto unilateral, que no se hallara

consignado en los convenios ya ajustados, relacionados con la materia que constituye el objeto de los presentes tratos»¹³⁰.

El Ministerio pretendió interpretar favorablemente el escrito. Se creía tras él «relevado de entrar de momento en la discusión de los [puntos de vista] que V. Ema. expresa toda vez que la Santa Sede se declara dispuesta a proseguir las negociaciones pendientes»¹³¹. Pero, precisamente como consecuencia de su postura, el secretario de Estado respondió de palabra que los tratos oficiales cesaban en tanto mantuviera el Gobierno el proyecto de ley del candado en Cortes. «Durante mucho tiempo —protestaría García Prieto el 14 de julio— ha trabajado para desvanecer [la] impresión aquí dominante de que, en el fondo, [el] Cardenal busca retrasar o romper [las] negociaciones para no evidenciar su voluntad de no transigir más allá del insuficiente límite [de la] Nota [de] nueve [de] mayo, pero mis argumentos mis esfuerzos y [mi] mejor deseo se estreñan contra [los] hechos»¹³².

Ratificada oficialmente la postura romana¹³³, el Consejo español de ministros se reunió el 28 y, comunicada el mismo día al rey su resolución¹³⁴, el 29 daba García Prieto a Ojeda la respuesta definitiva: «la condición puesta por el Cardenal Secretario de Estado en su Nota de 22 del corriente para proseguir las negociaciones; condición consistente en que el Gobierno de S. M. deje de mantener el precitado proyecto de ley llamado del candado debe reputarse nueva, contraria a lo hasta aquí tratado y enteramente injustificada ... [El Gabinete por lo tanto] declina toda responsabilidad en determinaciones que lejos de haber provocado, se ha esforzado en apartar; y declara que habiendo puesto sin resultado todos los medios a su alcance para llegar a un acuerdo con la Sede romana sobre la cuestión de las órdenes y congregaciones religiosas, no se sustraerá a los altos, imperiosos y cada vez más apremiantes deberes que demandan solucionarla adecuadamente»¹³⁵.

Al tiempo, el embajador habría de notificar a Merry «haber sido llamado a España por el Gobierno para recibir órdenes»¹³⁶. Lo hizo el 1 de agosto de 1910.

4. *La cuestión religiosa, conflicto social*

— No parece improbable que en ambas posturas pesara el respaldo social que se ofrecía a unos y otros al tiempo en que estos tratos sucedían. Ojeda lo supuso en los cambios del Vaticano: «sobrevinieron primero, la protesta del Cardenal Primado, la del Episcopado y después la R. O. sobre interpretación de la Cláusula XI de la Constitución, las manifestaciones de los elementos clericales españoles, y la Santa Sede, indecisa hasta entonces, aprovechó la oportunidad que se le ofrecía para salir airosa de una situación comprometida»¹³⁷.

Ante la real orden sobre la libertad de cultos, «las extremas derechas se agitaron en número e intensidad superiores a lo previsto. Arrecio la oposición del episcopado y alto clero; se constituyeron juntas de Acción Católica, bajo el patrocinio del marqués de Comillas; ofreció el tradi-

cionalismo 'vidas y haciendas', y para que la protesta cundiese en salones y hogares, el cardenal Aguirre se dirigió a la marquesa de Unzá de Valle, presidenta de la Unión del Sagrado Corazón de Jesús», para animarla a organizar tal «cruzada»¹³⁸.

Las protestas confesionales arreciaron en junio y julio de 1910, aún sirgan la calle. En numerosas diócesis, la jerarquía organizó actos litúrgicos de desagravio ante la política del Gabinete¹³⁹. La Junta Central de Acción Católica dirigió al Ministerio su protesta contra las reales órdenes comentadas de tema religioso. De ello y de otros 42 telegramas de asociaciones católicas españolas, dirigidos al Papa, se hacía eco *L'Ossevatore Romano* el 21 de junio¹⁴⁰. El mismo 21, la jerarquía eclesiástica fechaba una exposición contra las promesas del discurso de la corona en Cortes de contenido rico y tono a veces violento¹⁴¹.

También el Ministerio vio apretarse a su alrededor las filas. A la obra anticlerical, había escrito *El Liberal* ante la orden de 30 de mayo, «cooperaremos todos los demócratas con vida y alma»¹⁴². El 3 de julio, la Conjunción Republicano-Socialista organizó más de cien manifestaciones de adhesión en toda España. «Esta vez —anunció el mismo diario evocando los mítines confesionales de 1907— no sucede lo que ha tres años sucedía. Los indiferentes y los tímidos de entonces han perdido juntamente la paciencia y los escrúpulos. Ni quieren sufrir más las imposiciones de una cortísima minoría ultramontana, ni tienen ya reparo en salir a la calle, para afirmar a la luz del día sus ideas»¹⁴³.

Hubo así manifestaciones en La Coruña (con 6.000 participantes), Pontevedra, Vigo (7.000), Sama, Lugo, Gijón (23.000), Oviedo (10.000), Santander (20.000), Castro Urdiales, Bilbao (30.000), Eibar (3.000), San Sebastián, Irún, Logroño (7.000), Calahorra, Miranda de Ebro (2.000), Huesca, Calatayud, Teruel, Gerona, Barcelona —más de 60.000 según la prensa adicta, desmentida por la confesional¹⁴⁴—, Sagunto, Castellón, Valencia, Alicante (20.000), Chelva, Gandía, Alcira, Crevillente (4.000), Liria, Utiel, Carlet, Catarroja, Sueca, Játiva, Enguera, Mazarrón, Constantina, Casa Selva (1.000), Alberique, Oliva, Elche (4.000), Albacete, Almansa, Murcia (15.000), Alguazas, Cartagena (10.000), Almería (15.000), Málaga, Vélez-Málaga (6.000), Granada (8.000), Cádiz (15.000), Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María, Huelva (8.000), Sevilla (40.000), Córdoba (8.000), Bujalance, Martos, Linares (12.000), Puertollano, Alcázar de San Juan, Manzanares, Toledo, Mora de Toledo (2.000), Torre de Esteban, Talavera, Badajoz, Alcántara, Madrid (de 100.000 a 35.000, según las fuentes), Valladolid (20.000), Medina del Campo, Zamora, Benavente, Béjar, Salamanca, León, Santa Cruz de la Palma¹⁴⁵...

Todavía en domingos posteriores siguieron las concentraciones en Barcelona, Reus, Tortosa, Zaragoza, Vitoria, Bilbao, Navia, Hondos de las Nieves, Orense, El Ferrol, Toledo, Belmez, Ronda, Algeciras, Tenerife, el 10; el 17 en Tánger, Roquetas, Las Palmas, Tarragona (1.000)¹⁴⁶...

El 4 de julio de 1910, el canalejista *Heraldo de Madrid* podía hablar de *La realidad del bloque* en un editorial pleno de sentido político. Al renacido frente liberal monárquico-republicano, que parecía asimilarse ahora a la Conjunción Republicano-Socialista, el Ministerio ofrecía «ir al matrimonio civil sin trabas, a la secularización de los cementerios, a la

neutralidad absoluta de la enseñanza, a la reforma del Concordato, eliminando de él todos los compromisos incompatibles con el Derecho Moderno ...; al sometimiento de las Ordenes religiosas a la ley común, a la plena libertad de conciencia y a una nueva ley de Asociaciones que no consienta el nuevo establecimiento de aquellas Ordenes sino mediante autorización del Parlamento»¹⁴⁷.

Era preciso ahora que ese acuerdo se mostrara en las Cortes, para ratificar la confianza puesta en el Gabinete.

En el Senado, la discusión de la respuesta al mensaje de la corona, a partir de la sesión del 27 de junio, fue centrada por el conservador Sánchez de Toca en la cuestión religiosa. El 28, Canalejas declaró expresamente su propósito de disminuir el número de religiosos. Y la contestación fue aprobada¹⁴⁸.

En el Congreso, la efervescencia callejera fue traducida por los republicanos al lenguaje parlamentario. Soriano, el más inquieto, anunció el 25 una interpelación inmediata sobre las relaciones con la Santa Sede, tema ya vivo en la prensa política¹⁴⁹, que no llegó a formular, quizá de acuerdo con el Gabinete.

El 2 de julio, el ministro de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto para 1911 y varios textos legislativos, entre ellos el de reforma de los derechos reales en las sucesiones hereditarias, basado en la ley británica de 1894, con vistas a extender el impuesto a los bienes de manos muertas¹⁵⁰.

En principio, el debate sobre el discurso real en la cámara baja, a partir del 4 de julio del año 10, se ciñó a una enmienda republicana sobre la crisis de febrero, tachada de «oriental» (es decir gestada en el Palacio de Oriente según Azcárate) y en la crisis de la Semana Trágica, con sus implicaciones. El 19, Melquiades Álvarez, tercero en contra del dictamen de respuesta al mensaje, llevó la discusión al tema eclesiástico para insistir en su valor decisorio.

La contestación al monarca fue aprobada el 20 por 183 contra 81 sufragios. «El que vote este dictamen —había dicho Canalejas— vota su confianza en el Gobierno; el que no vote me niega su confianza, y yo quiero saber quiénes la tienen en mí»¹⁵¹. Volvía a quedar claro, por tanto, que el Gobierno carecía de mayoría. Si los republicanos, que lo hicieron en contra, como conservadores y tradicionalistas, se hubieran abstenido, no habría habido *quorum* para la aprobación.

En el Senado, el Gabinete vimos presentaba la anunciada ley del cándido el 8 de julio, de inmediato considerada inocua por voces de ambas oposiciones. Prohibía los establecimientos religiosos, se dijo, cuando todos se hallaban ya instalados en la península¹⁵².

«Mientras no se dicte una nueva ley regulando el ejercicio del derecho de Asociación —disponía su único artículo—, los gobernadores denegarán la admisión de los documentos requeridos por el artículo 4.º de la ley de 30 de junio de 1887 para el establecimiento de nuevas Asociaciones pertenecientes a Ordenes y Congregaciones religiosas, si los interesados no hubieren obtenido, al efecto, autorización del Ministerio de Gracia y Justicia, consignada en Real decreto dictado de acuerdo con el Consejo

de Ministros, que se publicará en la *Gaceta de Madrid*. No se concederá dicha autorización cuando más de la tercera parte de los individuos que hayan de formar la nueva Asociación sean extranjeros»¹⁵³.

Según informó el Ministerio, la población religiosa establecida ya en España a fines de junio de 1910 era esta, en tres clasificaciones diversas¹⁵⁴:

NUMERO DE RELIGIOSOS	<i>Varones</i>	<i>Hembras</i>
Espanoles	11.507	39.211
No espanoles	1.294	2.315
TOTALES	12.801	41.526

NUMERO DE COMUNIDADES RELIGIOSAS	<i>Masculinas</i>	<i>Femeninas</i>
----------------------------------	-------------------	------------------

según su situación jurídica:

Inscritas	544	2.211
No inscritas	234	732
Indeterminadas	16	64
TOTALES	794	3.007

según su dedicación:

Vida contemplativa y misiones	313	777
Caridad y beneficencia	34	845
Enseñanza	447	1.250
Indeterminadas	0	135
TOTALES	794	3.007

TOTAL GENERAL:

Comunidades religiosas masculinas	794
Comunidades religiosas femeninas	3.007
Religiosos	12.801
Religiosas	41.526

A últimos de julio de 1910, la *Ruptura inminente*¹⁵⁵ con la Santa Sede, aireada por la prensa al conocer la salida del embajador Ojeda para Madrid, que vimos acordaba el Gobierno ante la decisión de Roma de detener los

tratos si mantenía el proyecto de ley del candado, volvió a animar los medios tradicionalistas.

A lo largo del mes, habían sido celebradas ya algunas manifestaciones de protesta contra la política canalejista: el 3 en Barcelona y otros puntos, el 10 en Palma de Mallorca y Granada, el 17 en Gerona (con 3.000 asistentes, ahora según las fuentes confesionales), el 24 en Berga, el primero de agosto en Pamplona ¹⁵⁶.

Pero la protesta había de surgir especialmente viva en Vizcaya, animada por un infatigable activista católico, ya entonces conocido como tal: José María de Urquijo, abogado bilbaíno, nacido en 1872, educado en el Colegio de Estudios Superiores de Deusto que dirigía la Compañía de Jesús («a la que ama —según un periódico adicto ¹⁵⁶ b— entrañablemente»).

Desde los primeros años de la centuria, Urquijo destacaba como animador del Patronato de Obreros de Bilbao, como fundador del de Sestao y de las sociedades de socorros mutuos del propio Sestao y de Baracaldo, y como efectivo organizador de peregrinaciones a Lourdes, Roma y Tierra Santa. Candidato de la Liga Católica de Bilbao en las elecciones de 1903, según vimos, triunfó entonces por haber conseguido unir «alrededor de su persona a todos los partidos católicos militantes» de la ciudad, desde luego incluido el bizcaitarra, en línea de defensa católica estrictamente apartidista que mantendría en adelante ¹⁵⁷.

En 1904 era subrayada «su actividad incansable», conocida y posiblemente alentada por Roma ¹⁵⁷ b. De modo que, en 1910, no le fue difícil organizar (con otros hombres de formación jesuística, representados por *La Gaceta del Norte* desde 1901, siempre en la línea de idéntica politización puramente católica) una concentración contra la política del Gobierno para el día de San Ignacio en Bilbao ¹⁵⁸. El 29 de julio de 1910, atraídos por el prestigio de los organizadores, se habían adherido al proyecto 52 prelados, las representaciones oficiales en la región del carlismo, del integrismo y del nacionalismo vasco, la Diputación de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao y otros 110 de los 125 existentes en la provincia, 50 agrupaciones bizcaitarras (cuya existencia, de contenido casi integrista entonces, era un índice de su incipiente expansión), 25 asociaciones carlistas y las consabidas asociaciones de fieles: 27 de terciarios, 59 del Apostolado de la Oración, 6 de la Semana Devota, 52 de Hijas de María, 16 congregaciones de los luises y 32 sociedades obreras ¹⁵⁹.

Canalejas prohibió los actos, se pretextó de la aguda huelga minera coetánea, declarada para forzar la jornada de nueve horas entre otros extremos. Y esta decisión, adoptada en los mismos días finales de julio en que la prensa divulgaba la llamada de Ojeda a Madrid, contribuyó a agriar el ambiente del País Vasco.

En la protesta telegráfica que dirigió al jefe del Ministerio, la Junta organizadora, creada al efecto, le recordó representaba a «cien mil hombres vizcaínos con los partidos católicos antiliberales unidos para [la] defensa valerosa y enérgica de los derechos [de la] Iglesia ...

Advertimos a V. E —añadía— que considerábamos [la] manifestación como [el] primero, más obvio y menos eficaz de los medios para combatir

[el] sectarismo anticatólico, y que estamos dispuestos a utilizar los restantes con pleno conocimiento y aceptación de las consecuencias que de su empleo pudieran derivársenos.

Puesto que [el] pretexto para la suspensión es la huelga de Vizcaya —acababa—, anunciamos a V. E. que [el] domingo, 7 de agosto, iremos [los] vizcaínos en manifestación a San Sebastián»¹⁶⁰.

Alentados por efusivos cables de Merry del Val, en respuesta al enviado por la Junta y a telegramas ulteriores, los trabajos de esta habían venido a coincidir con una iniciativa esbozada en Pamplona. A comienzos de julio, *El Pensamiento Navarro* había sugerido «una manifestación enorme en San Sebastián cuando pasan en la capital guipuzcoana don Alfonso y su familia los rigores del verano»; manifestación que podía ser preparada por «la Junta permanente de peregrinaciones de Bilbao, que preside el activo católico don José María de Urquijo»¹⁶¹.

Desde el 1 de agosto, la prensa tradicionalista y las fuerzas vivas católicas de las cuatro provincias vascoespañolas iniciaron una exaltada campaña de protesta y exhortación a la concentración donostiarra, ahora organizada por cuatro Juntas de Defensa Católica formadas para ello en las cuatro demarcaciones. «Reina gran agitación en el Norte», podía asegurar *El Universo* aún el 30 de julio^{161 b}. «Vizcaya —sentenciaba *La Gaceta del Norte* el 3 de agosto— es buena y tendrá héroes si héroes necesita. Tendrá mártires si la causa de la religión lo exige, ofreciendo la vida todos y la de sus hijos»¹⁶². Irán los católicos —predicó un sacerdote en Oyarzun, en términos que debieron ser frecuentes en la prensa y sermones vasconavarros de aquellos días— «a derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la Religión»¹⁶³.

Pero la manifestación de San Sebastián también fue prohibida por Canalejas, para evitar, según las fuentes oficiosas por nadie aceptadas, que redundase «en perjuicio de los veraneantes»¹⁶⁴.

El Gobierno envió dos regimientos de caballería y 700 guardias civiles a la ciudad. Prohibió los trenes especiales y el aumento de las unidades de transporte en los ordinarios, razonándolo con la hipotética necesidad de movilizar tropas. Ordenó a los alcaldes de los pueblos costeros impedir «el embarque en ninguna clase de embarcación a quienes no estén inscritos en las mismas»¹⁶⁵. Intervino el teléfono y el telégrafo; secuestró la prensa confesional de Pamplona; diseminó fuerzas armadas por caminos y montes para impedir la entrada en la capital de Guipúzcoa. Obtuvo del Tribunal Supremo la orden de procesamiento criminal contra los individuos de las cuatro Juntas, por «ilegales y facciosas» (de acuerdo con la afirmación de Canalejas de que se trataba de un movimiento separatista)¹⁶⁶, en realidad por los términos de sus comunicaciones al Gabinete.

«Llegaremos en las medidas —advirtió incluso el jefe del Gobierno, visiblemente inquieto por la magnitud de los preparativos y de las previsiones— hasta donde sea preciso.

Por de pronto hemos cubierto con fuerzas del Ejército las estaciones de las vías férreas, para evitar actos de violencia, porque ya se sabe que todo el material móvil sobrante de los servicios ordinarios ha quedado a disposición de las autoridades.

Hemos enviado a Pasajes el cañonero *Marqués de Molins*.

Al capitán general de aquella región le hemos comunicado que, además de las fuerzas enviadas, hay 6.000 hombres preparados para salir al primer aviso ...

Además, por si el delirio de los enemigos del Gobierno les llevara al loco intento de un levantamiento faccioso, tenemos 50.000 hombres disponibles para ir adonde haga falta»¹⁶⁷.

«San Sebastián, ocupada militarmente», en palabras del propio Gabinete, el independiente *Diario de Navarra* terminó por desaconsejar el proyecto el 5, en artículo que pareció crear «gran sensación» en los medios católicos, en vista de la amenaza del Gobierno¹⁶⁸. En la noche del 5 al 6 de agosto de 1910, tras violentas diputadas en su seno, la Junta general, representante de las cuatro provinciales, desistió en el empeño¹⁶⁹.

El sábado 6, con todo, alrededor de 1.000 personas habían llegado ya a la ciudad. Pero no ocurrió nada. Algunos muertos a España y a Canalejas en el Centro Vasco, negados por la prensa regional, dieron lugar a detener a 138 personas, entre ellas el nacionalista Luis Arana Goiri, miembro de la Junta vizcaína¹⁷⁰.

El foco de los disturbios pasó enseguida a Cataluña.

Ya a comienzos de agosto de 1910, se había hablado del propósito —efectivamente adoptado en reunión del 8 de las cuatro Juntas vasconavarra, que así mostraban la amplitud de sus planteamientos— de formar células semejantes que organizaran las fuerzas en toda España¹⁷¹. El 7, Sabadell celebraba ya un mitin de protesta contra el anticlericalismo del Gabinete¹⁷². Mediado el mes, Juntas Diocesanas de Acción Católica (que venían a identificar en parte la iniciativa vasca con la organización nacida de los Congresos Católicos)¹⁷³ habían sido constituidas en las ocho diócesis catalanas. Para el 28, convocaron *aplecs* protestatarios a celebrar en todos los pueblos de la provincia eclesiástica tarraconense, en vista de las dificultades que pudieran interponerse a una concentración como la donostiarra. El entusiasmo creció enseguida, expresamente animado por el ejemplo del País Vasco. «He visto a católicos —relataría un testigo entusiasta— salvar a pie largas distancias para entregar a las más lejanas parroquias las valientes proclamas ... correr en automóvil sembrándolas a discreción, visitando a personalidades, formando Juntas ... arciprestes y párrocos ... regresando a pie a altas horas de la noche de dar instrucciones y proclamas a pueblos distantes de estaciones ferroviarias, de recabar la adhesión del Ayuntamiento, de anunciar a lejanos caseríos la celebración de SU *aplech* [sic] ...

Se celebran en toda Cataluña, de Nuria hasta el Ebro, de las playas catalanas hasta los primeros pueblos de la tierra aragonesa»¹⁷⁴: 160 en total, con 280.000 participantes sólo en 76 de ellos según sus datos¹⁷⁵.

Enseguida, el centro de las manifestaciones regresó a Vascongadas. Manteniendo la organización de las cuatro Juntas de julio¹⁷⁶, en reunión de 16 de agosto habían proyectado ya una «manifestación nacional» para el 2 de octubre inmediato en cada una de las capitales vasconavarra y en las demás de España que quisieran sumarse¹⁷⁷.

Para la propaganda, Urquijo contaría con la A.C.N. de P., nacida en 1908 por iniciativa, según vimos, del padre Ayala, «amigo y condiscípulo» del primero, y convertida ahora «en gran parte de España —según propia valoración, acaso exagerada— [en] el brazo ejecutivo de los planes de la Junta de Vizcaya».

Eran estos, por los demás —los de Urquijo, «muy bien vistos en Roma»¹⁷⁸—, aquella difusión de las propias Juntas, que «se hizo en las capitales de las cuarenta y nueve provincias y en las principales ciudades, villas y pueblos de aquéllas»¹⁷⁹.

Mas, en su seno, debió manifestarse pronto una lógica divergencia, que desmentía la filiación carlista o integrista que les atribuyera Canalejas y la opinión liberal.

A finales de agosto de 1910, se habló confusamente de la inminencia de un levantamiento jaimista¹⁸⁰, que en realidad venía a alejar a los moderados. Después, se entrevió la escisión en las mismas Juntas: entre los partidarios de llevar la protesta a la calle (los tradicionalistas no dinásticos, nacionalistas y Junta de Vizcaya, parece que con el beneplácito del cardenal Aguirre)¹⁸¹ y los empeñados en evitar el conflicto con el Ministerio y la acusación de facciosos sustituyendo la algarada por actos litúrgicos de reparación¹⁸².

La división debió ganar la jerarquía. En septiembre, se multiplicaron las reuniones episcopales en Toledo, convocadas por el primado, que, en opinión de *El Liberal*, «no sosiega ni un momento en su agresiva campaña» contra el Gobierno. Y en ellas se debieron mostrar los «criterios totalmente opuestos a la intransigencia cardenalicia» entre los propios obispos. Se dijo que una de estas reuniones llegó a tomar la decisión de centrar la manifestación, en su versión madrileña, en el cerro de los Angeles, y que el ordinario de la diócesis anunciaba se ausentaría, al parecer para no estar presente (lo que no sucedió)¹⁸³.

Mientras los prelados de Almería y Zamora se veían afines a Aguirre, el de Salamanca declaraba, incluso sobre los meros actos marianos proyectados allí para el 2 de octubre, «que única y exclusivamente como actos de carácter religioso» los apoyaba¹⁸⁴; aunque también rechazó la oposición de los conservadores a su celebración^{184 b}.

El Gabinete autorizó esta vez todo lo preparado para tal fecha, salvo en Bilbao, en razón de la huelga minera (y acaso por la actividad de su Junta), terminada a fines de septiembre, que podía agriar más los ánimos¹⁸⁵. Se conocía, en todo caso, la preparación de las manifestaciones «en las provincias vascas, donde se remueven febriles los Urquijo (don José), Orúe y compañía, las oficinas cuidadosamente montadas, el aluvión de cartas y telegramas, los ocho automóviles que para comunicar órdenes recorren día y noche aquellos caminos»¹⁸⁶.

La Junta de Vizcaya fue otra vez procesada¹⁸⁷. «Si nuevamente perpetrase [el Ministerio] esa monstruosa iniquidad —había dicho *La Gaceta del Norte* sobre la prohibición—, con ella abriría un nuevo período del que sería absolutamente responsable»¹⁸⁸.

Pero no ocurrió nada. Bilbao no presenció concentración alguna y, en cambio, el resto de España se volcó en la protesta.

Actos litúrgicos en unas diócesis (comuniones generales, rogativas, rosarios...), manifestaciones callejeras en otras, hubo reuniones católicas antigubernamentales en Vitoria (con 30.000 asistentes, otra vez con los datos confesionales), San Sebastián (cerca de 30.000), Pamplona (90.000), Haro, Zaragoza (1.000), Huesca, Barbastro, Gerona, Barcelona —donde se impuso al fin el criterio litúrgico y acudieron 5.000 hombres y 7.000 mujeres según la prensa adicta; 600 y 1.000 respectivamente según la liberal—, Sabadell, Tarragona, Palma (6.000), Castellón, Valencia y «numerosas localidades» de la provincia, Alicante, Alcoy, Orihuela (20.000, según la prensa confesional, menos de 3.000 a juicio de la anticlerical), Murcia, Málaga, Jerez de la Frontera, Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba (1.500) y «muchos pueblos» cordobeses, Granada, Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Madrid (de 8 a 10.000), Burgos, Palencia, Santander (10.000), los concejos de Quirós, Proaza, Teverga y Pravia, Oviedo (30.000), Orense, La Coruña...¹⁸⁹; «fracaso evidente», en suma, para los liberales¹⁹⁰, que silenciaron significativamente los resultados y calcularon 100.000 manifestados en toda la península; éxito para los organizadores, que los cifraron en 1.200.000, repartidos en más de 1.500 concentraciones¹⁹¹.

5. La ley del candado

Esta actitud de las fuerzas confesionales y la inseguridad de la mayoría parlamentaria del Ministerio, patente en las votaciones de la respuesta al mensaje del rey en junio de 1910, volvían a replantear el problema político. El poder legislativo (no el Gobierno, en rigor) había de decidir entre sancionar con sus votos el compromiso de un programa radical contraído por Canalejas, urgido por la Conjunción, o evitar la crispación de las posturas tradicionalistas, que parecieron hacer presagiar en algún momento la guerra civil.

En principio, ante la oposición republicana, y al comunicar la llamada a Madrid de Ojeda, a finales de julio, el Gabinete pareció insistir en el primer sentido, acentuando la importancia de la medida hasta mostrarla como retirada *sine die*¹⁹² de la embajada. Y así lo interpretó —preludio de ruptura en el mejor de los casos, «si no se ha consumado aún»¹⁹³— la prensa de ambos bandos.

La liberal, fiada en la suspensión de relaciones, juzgó la petición de audiencia del nuncio a María Cristina a mediados de agosto como síntoma de aproximación, y de claudicación por tanto, de la Santa Sede¹⁹⁴. Incluso se aventuró la hipótesis de que Roma veía fracasada su supuesta esperanza en que la ruptura trajera la caída de Canalejas, forzada por moretistas y conservadores¹⁹⁵.

Pero, en realidad, el propio Gabinete procuraba secretamente la relación lejos de todo rompimiento. «Salvo [el] llamamiento [del] Embajador —advirtió García Prieto el 2 de agosto al encargado de negocios que suplió a Ojeda, el marqués de González— [las] relaciones [del] Gobierno con [la] Santa Sede siguen siendo normales y ningún motivo hay para prescindir [de la] asistencia [de] V. S. a [los] actos oficiales»¹⁹⁶.

Así, en seguida, ante las manifestaciones del verano, el mismo Ministerio empleó el conducto diplomático «para decir [al] Cardenal Secretario que [la] actitud [de] gran parte [del] Clero, alentando manifestaciones ilegales, predicando que [el] Gobierno ataca [los] dogmas, propagando [que] ha expulsado [al] señor Nuncio y ejecutando otros actos que caen [en] sanción [del] Código», le obligaría a proceder contra ello. Aunque extremaría su «prudencia y consideración, si de aquella se desiste» y Merry intervenía para lograrlo ¹⁹⁷.

Incluso parecía cundir la preocupación por lograr de la Santa Sede una contestación a la nota estatal sobre los propósitos legislativos del Ministerio, que precediera a la suspensión de los tratos. En principio, se dijo que la Congregación integrada por Merry del Val, Rampolla, Vives, Gasparri y Ferrata esperaba a la celebración del acto de San Sebastián del 7 de agosto ¹⁹⁸. La «Santa Sede —explicó el secretario de Estado del Papa confidencialmente— había hecho mucho por la monarquía al refrenar a los facciosos que pretendían que Carlista era sinónimo de Católico, demostrándolos que se puede ser Católico sin ser Carlista» ¹⁹⁹.

El mismo día de la concentración confesional donostiarra, el Gabinete llegó a remitir a Roma una copia de aquella nota, razonándola en que Ojeda no la había transcrito bien ²⁰⁰.

Pero las declaraciones coetáneas de individuos ministeriales a la prensa, haciendo detallada historia de las negociaciones para disculpar al Gobierno, no podían favorecer la reconciliación ²⁰¹.

El Ministerio repitió el 18 de agosto su protesta contra la «actitud [de] gran parte [del] clero español y que en vista de ella y de que [la] campaña para excitar [los] ánimos alentándolos a [realizar] actos ilegales y desfigurando [los] hechos y propósitos del Gabinete, no cesa, [el] Gobierno acordó tomar disposiciones análogas a las adoptadas en casos de igual naturaleza». Pensaba que la «Santa Sede no carecería de medios para intervenir evitando al Estado la necesidad de emplear los medios suyos propios» ²⁰². Mas, divulgada esta gestión, la prensa liberal emplazó a Canalejas para que la negara, so pena de reconocer que había claudicado reiniciando los tratos ²⁰³. Sólo la recepción, al fin, de la respuesta oficial vaticana a la última nota española permitió a *Heraldo de Madrid* dejar airoso al Gabinete al afirmar que, con ella, la Santa Sede era quien reanudaba «el hilo roto de las relaciones diplomáticas» ²⁰⁴.

Estas, por lo demás, no daban esperanzas. El largo documento de la secretaría de Estado de Pío X, enviado el 22 de agosto de 1910, comenzaba por lamentar que el Ministerio hubiera dado «a conocer al público, por conducto de la prensa, el contenido de su Nota [de 31 de julio], antes de que ésta fuese entregada a la Santa Sede». Y, después de hacer historia de las negociaciones, repetía y precisaba las quejas contra las medidas unilaterales del Gabinete y contra el proyecto de ley del candado, que provocara la suspensión ²⁰⁵.

El Ministerio respondió así mismo insistiendo en su disposición a no adoptar más decisiones que las que entrañaba ese proyecto y la circular de 30 de mayo sobre cumplimiento del *modus vivendi*, en tanto hubiera tratos con el Vaticano ²⁰⁶. Pero, tal vez fiado en la atención prestada nue-

100

vamente por Roma ²⁰⁷, dio un nuevo y franco sesgo al planteamiento, aventurando sus proyectos a largo plazo, con pretensión de lograr un entendimiento sobre todos ellos:

El 13 de septiembre, en «gestión confidencial», un enviado especial del Gobierno ^{207b}, los resumía así a Merry del Val: «1.º Acuerdo [con el Vaticano] para reducir [las] órdenes. 2.º Sujetar todas ellas a leyes cuyas bases le serán dadas a conocer confidencialmente. 3.º Sustitución de la asistencia de la autoridad civil en el matrimonio canónico por una mayor intervención de dicha autoridad en los expedientes matrimoniales. 4.º Suprimir la declaración expresa de no pertenecer al catolicismo para contraer matrimonio civil. 5.º Asistencia voluntaria a [la] Enseñanza [del] catecismo y designación de un catecismo. 6.º Reforma que se precisará más adelante en cementerios y beneficencias.»

El secretario del Pontífice respondió que veía «posible entenderse sobre [los] puntos 1.º y 2.º; posible también, aunque complicado y difícil el 3.º; difícil y casi imposible los números 4.º y 5.º». Pero advirtió además que Pío X y la Congregación habían decidido suspender otra vez los tratos si el Ministerio mantenía el proyecto de ley del candado. El enviado repitió la imposibilidad política de retirarlo de las Cortes. Pero, según el confuso estilo del telegrama en que narró la entrevista, parece se esbozó ya la idea de introducir una enmienda que lo hiciera aceptable ²⁰⁸ o bien de que la Santa Sede lo admitiera íntegro con tres condiciones:

Primero, que la autorización gubernamental de los institutos de perfección cristiana «equivaldría a [un] acuerdo [de] ambas potestades, porque tratándose de asociaciones que según [la] ley canónica necesitan licencia [del] Pontífice u obispo, [el] poder civil no había [de] autorizarlas sin ese requisito; 2.º [La] Aplicación [de la] ley [del] 87 a los que se creasen en adelante, no prejuzga a[1] resultado [del] examen de la cuestión general de la aplicación de dicha ley; examen que ambas potestades tienen convenido hacer desde 1902; 3.º [La] Ley [del candado] de cuyo proyecto se trata tendrá, como su texto indica, carácter provisional en espera de que se regule definitivamente la condición jurídica de las órdenes y las congregaciones» ²⁰⁹.

A petición del cardenal ²¹⁰, y a cambio de que la Santa Sede, por boca de aquel, expusiera sus exigencias para reanudar la negociación sobre los institutos y renunciara a sus exigencias contra el candado, el Gobierno dio en escrito confidencial a Roma aquellas condiciones sobre el arreglo y explayó sus proyectos de educación y matrimonio:

«Conforme a los principios constitucionales, el Estado, a título de católico, mantendrá en el programa de las escuelas primarias oficiales la enseñanza de la doctrina cristiana e Historia Sagrada, pero no puede menos de garantizar la facultad de los padres para eximir a sus hijos de recibir dicha enseñanza y la facultad de los maestros para excusarse de darla por motivos de conciencia, siendo sustituidos adecuadamente en ese ministerio.»

Pretendía además llevar a cabo estas medidas: «Adición de un párrafo al artículo 42 del Código civil diciendo que para la celebración del matrimonio civil no se exigirá a los contrayentes manifestación expresa que

afecte a la conciencia. Sustitución de la asistencia de la autoridad civil a los matrimonios canónicos, conforme al artículo 77 del Código civil, por una intervención en los expedientes matrimoniales, además, naturalmente de las garantías necesarias sobre la inmediata inscripción del acto en el Registro civil.» Y pedía «se precisasen los reparos que sugería el dictamen del Congreso de 19 de noviembre de 1906 sobre el proyecto de nueva ley de asociaciones; y se expusiera desde luego en líneas generales el pensamiento de la Santa Sede sobre reducción del número de casas religiosas»²¹¹.

Merry del Val respondió el 28 de septiembre de 1910, también en apunte oficioso, que no aceptaba la postura del Gabinete sobre el primer asunto (ley del candado) expuesta el 13 por González, ni retiraba aquellas objeciones al proyecto de ley si no llegaba antes a un acuerdo con el Gobierno sobre la cuestión de las órdenes y congregaciones. Lo que se prestaba a alcanzar con rapidez, sin embargo, si el Ministerio dilataba la discusión de aquel en las Cortes hasta tanto hubiera entendimiento, aunque no lo retirase de las cámaras²¹².

En cuanto a los demás puntos, el Vaticano advertía: «Primero: [la] Santa Sede no consiente se legisle unilateralmente [acerca de] materias concordadas, ni sobre ellas dará su parecer sin conocer [los] proyectos concretos [del] Gobierno [de] S. M. Segundo: Admite la cuestión de un solo Catecismo e Historia Sagrada; consiente que [los] padres se abstengan de dar instrucción religiosa a sus hijos pero se opone a que los maestros puedan negarse a darla. Tercero: No admite ninguna reforma en lo relativo a matrimonio. Cuarto: Acerca [de las] Congregaciones religiosas, la Santa Sede exige que tengan existencia jurídica incluso las no subvencionadas; que las Asociaciones religiosas no se confundan con las comunes y que en ninguna ley relativa a aquellas exista cláusula contra instituciones o convenios vigentes. La Santa Sede se reserva dar su opinión sobre [la] disminución [de las] Casas religiosas hasta conocer número, naturaleza y servicio de las existentes»²¹³.

Mas la postura no podía ser aceptable para el Gabinete «por dificultades prácticas insuperables. En efecto —explicó—, tan pronto se abran las Cortes [el] Gobierno será llamado a explicarse sobre [sus] relaciones con [la] Santa Sede y [sobre su] propósito respecto [a la] ley [del] Candado. Si se aceptase [la] idea propuesta por [el] Cardenal, [el] Gobierno [no] podría aludir a [la] existencia de nuevos tratos puesto que habían de ser reservados y confidenciales, ni justificar por otras razones plausibles el aplazamiento de [la] discusión. Tal posición sería insostenible. [La] Santa Sede ofrece facilitarla con sus medios, pero evidentemente estos no van más allá de su influencia con Senadores y Diputados de cierto matiz y los inconvenientes vendrían de otros lados. Si para despejar la situación se acudiese al sistema de hacer público el comienzo de nuevas negociaciones subordinadas por una parte a cierto plazo y por la otra la condición de no discutir el proyecto, la fórmula propuesta por Su Eminencia perdería su carácter y eficacia»²¹⁴.

La existencia de estas negociaciones, aun fallidas, que terminaban de negar la ruptura de julio²¹⁵, se exteriorizó por completo cuando *La Epoca*

del 21 de octubre de 1910 notificó que, en la habitual recepción diplomática del rey, como todos los viernes, el nuncio había sido uno de los primeros en acudir. «Entre tantas informaciones semioficiosas acerca de nuestra actitud ante o contra el Vaticano —pudo decir *El Liberal*—, y tantos decires sobre la saturación de radicalismo del Gobierno, están pasando cosas que categóricamente deben ser explicadas y definidas»²¹⁶. Pero, pese a estos ataques de la prensa demócrata, que dijo del Gobierno que había «estado en Canosa»²¹⁷, Canalejas no explicó su postura.

De hecho, las medidas anticlericales habían cesado, hasta la reapertura de las Cortes el 6 de octubre. Tan sólo el 18 de septiembre el Ministerio convocó una Asamblea General de Enseñanza y Educación para «que se discutan y propongan las reformas necesarias o convenientes» en diciembre inmediato²¹⁸. La inscripción de 4.000 católicos en ella, urgida por la prensa confesional y la jerarquía eclesiástica en animada campaña²¹⁹, disuadió de la idea. Lo mismo ocurriría, por los mismos motivos, con el IV Congreso de Educación Popular intentado en 1911²²⁰.

El estallido de la revolución portuguesa a comienzos de octubre de 1910 fue presentado aún, significativamente, por la prensa oficiosa y republicana, como un paso en la lucha contra el clericalismo²²¹. Reabiertas el 6 las Cortes, Canalejas expuso en el Senado, el 7, la tesisura del Gobierno: entre la huelga obrera y el radicalismo carlointegrista, a despecho este, dijo, de la prudencia demostrada por los obispos y el Ministerio. El proyecto de ley del candado no alejaba al Gobierno de tal postura ecuaníme, afirmó: no era una pretensión de persona o partido sino una necesidad de vida y de gobierno, de la que había hecho cuestión de gabinete²²². En realidad, según aseguró menos prudente en el Congreso el 8, al acusar de incoherencia en los tratos a la Santa Sede, tampoco en la jerarquía peninsular faltaban los alientos para las «algaradas facciosas» del verano²²³.

A iniciativa del obispo de Jaca, los 17 obispos senadores acordaron estar presentes en la discusión de la política ministerial²²⁴, en decisión que quería ser expresión de buena voluntad. Pero el debate se planteó violento, entre el propio obispo de Jaca, López Peláez, y el presidente del Consejo, en torno a aquel programa expuesto por Canalejas el 7 y en torno a la sustitución —aprobada efectivamente el 15— del juramento bíblico por la promesa de honor en los casos en que el ordenamiento vigente exigiera aquel (objetos ambos, en frase del marqués de Pidal, de «preocupaciones de gente amamantada en la mala leche de la revolución francesa») ²²⁵.

En la cámara baja, tradicionalistas y republicanos interpellaron al Ministerio: sobre las manifestaciones del estío y su prohibición aquéllos y sobre la inmigración de los primeros religiosos expulsados de Portugal —más de 500 ya al mediar octubre²²⁶— y otros hechos incidentales a éstos ²²⁷.

El 26 de octubre de 1910, en fin, el Senado inició la discusión del proyecto de ley del candado.

Los tres primeros turnos del debate, en contra de la totalidad del dictamen, fueron consumidos por el carlista Polo y Peyrolón, el obispo Antolín López Peláez y el conservador neocatólico marqués de Pidal. Centrarón

los ataques en la historia de las negociaciones y en el desprecio de la Santa Sede por el Gobierno a la hora de presentar el proyecto; en la apariencia regalista de esta actitud, según el ordinario de Guadix (la ortodoxia de cuyo discurso sería discutida); en las posibles consecuencias sobre la agitada opinión católica y en la inexistencia de exceso de religioso presupuesta en todo ello ²²⁸.

Al responderles, Canalejas volvió a afirmar la mera función de control, y no de prohibición, que la ley perseguía; su disposición a redactarla de nuevo, si no quedaba clara, y el deseo de reanudar las relaciones con Roma. Expresamente en nombre del episcopado, el prelado de Madrid Alcalá, Salvador y Barrera, manifestó el deseo de recoger «las palabras de concordia» pronunciadas en tal discurso. Y, el 3 de noviembre, de nuevo el jefe del Gobierno las concretó. La nueva ley no pretendía constituir un régimen ordinario. Y, para evitar suspicacias, él mismo se adelantaba a fijar el plazo de «un año, año y medio o dos» a su vigencia y a simplificar los trámites en ella exigidos ²²⁹. En la misma sesión, por indicación del propio presidente ²³⁰ —quizás siguiendo gestiones anteriores ²³¹—, el liberal barón de Sacro-Lirio firmó una enmienda al proyecto que le fijaba en estos términos:

«Artículo único. No se establecerán nuevas Asociaciones pertenecientes a Ordenes o Congregaciones religiosas, canónicamente reconocidas, sin la autorización del Ministerio de Gracia y Justicia consignada en Real decreto, que se publicará en la *Gaceta de Madrid*, mientras no se regule definitivamente la condición de las mismas.

No se concederá dicha autorización cuando más de la tercera parte de los individuos que hayan de formar las nuevas Asociaciones sean extranjeros.

Si en el plazo de dos años no se publica la nueva ley de Asociaciones, quedará sin efecto la presente ley» ²³².

Aceptado por la comisión dictaminadora el 4 de noviembre, el proyecto quedó aprobado por 149 contra 85 votos. Entre estos fueron incluidos los de los 17 obispos senadores. El arzobispo de Zaragoza explicó la negativa episcopal por el carácter de excepción y la falta de tratos con el Vaticano que la medida suponía ²³³. Pero el mero hecho de votar era ya transacción, obediente, según se dijo, a una indicación de la nunciatura ²³⁴, aunque no, al parecer, querida propiamente por la Santa Sede ²³⁵.

Sin los votos de los obispos y de los senadores que los secundaron (conservadores y tradicionalistas), no habrían sido reunidos los 176 sufragios precisos para la aprobación de la ley. «Es evidente que en la alta Cámara los elementos conservadores tenían sobradas fuerzas para hacer fracasar la iniciativa ministerial; pero ello, sobre no aportar resultados prácticos, ponía a la Corona, dada la actitud en que se había colocado su gobierno, en crítico trance, y para evitarlo, el partido conservador y los Prelados mismos, hicieron comprender al jefe del Gobierno el peligro de una intransigencia.»

La presencia del nuncio en otra recepción diplomática, la del viernes 4 de noviembre de 1910, y su larga conversación con el ministro de Estado García Prieto fueron también interpretadas como «síntomas evidentes ..

de que el carácter transitorio dado al proyecto de ley del Candado ha sido aceptado por el Vaticano como base de arreglo para reanudar las negociaciones»²³⁶ —aunque no hubiera sido así²³⁷.

De hecho, la decisión de los obispos fue censurada explícitamente por un sector de la opinión tradicionalista²³⁸. No se abstuvieron, diría Vázquez de Mella, «porque los Obispos entendieron que en aquel momento no debía caer, porque le consideraron a S. S. [Canalejas], dadas aquellas circunstancias, como un mal menor»²³⁹; también, acaso, porque no interesaba que fuera el Senado el que impidiera directamente una ley radical, dando así otro argumento a los republicanos que clamaban contra su constitución institucionalmente antidemocrática.

Con los prelados, tal vez habían influido en Canalejas, para lograr el cambio, los marqueses de Pidal y Comillas, que se dijo fue autor de la nueva redacción del proyecto²⁴⁰, Maura y el nuncio Vico²⁴¹. En todo caso, los dos primeros telegrafiaron a Pío X para manifestarle que estimaban «procedente [la] aceptación [del] nuevo texto [de la] ley [del] candado, aunque envuelva [una] dolorosa concesión, porque parece responder [al] propósito [de una] tendencia conciliadora en [las] negociaciones con [la] Santa Sede» y evitaba el «grave conflicto a que puede conducir [el] choque de encontradas tendencias en [los] momento críticos por que atraviesa España desde [los] sucesos [del] verano [del] 909, dada [la] situación [del] asunto [de] Marruecos, [la] actitud de Francia y [los] efectos [de la] Revolución [de] Portugal»²⁴².

La enmienda fue así considerada como una puerta abierta por el Ministerio a la reanudación de los tratos²⁴³. Pero la Santa Sede no intervino en su propuesta ni preparación, e incluso manifestó, privadamente, su disconformidad con ella²⁴⁴.

En el Congreso, durante la inmediata discusión del presupuesto de Gracia y Justicia, que no disminuía las asignaciones al clero, la oposición republicana insistió en la lenidad de la política anticlerical del Gabinete²⁴⁵. La discusión de la ley del candado fue comenzada en esta cámara el 17 de noviembre de 1910. Centrada en los mismos términos del Senado, el carlista, Díaz Aguado, segundo en contra de la totalidad, añadió ya el propósito de ir a la obstrucción por medio de enmiendas. Y a ello se sumaba de nuevo el descontento del republicanismo, que, en boca del federal Zulueta, consideraba la ley «pobre, escasa, fragmentaria».

Estaba —hubo de confesar Canalejas— en negociaciones con Roma. Había sólo «un paréntesis, una solución de continuidad», que no podía romper sin aquella norma: «porque entonces no iría a Roma, iría a Canosa». Prometía para enero, no obstante, la ley de asociaciones, a cuya aprobación había quedado subordinada la del candado²⁴⁶.

A partir del 22 de noviembre, el debate hubo de ser suspendido para la redacción de modificaciones al proyecto y discutir otras medidas: los presupuestos, sobre todo, y la modificación del impuesto de derechos reales en sucesiones por herencia. Este último, que apenas atendieron los diputados traicionistas, contenía un artículo, el tercero, probablemente más efectivo que el mismo candado: «Se crea un impuesto de 0,25 por 100 anual sobre el valor de todos los bienes de que sean dueñas o poseedo-

ras las Asociaciones, Corporaciones y demás entidades de carácter permanente que no transmiten dichos bienes por sucesión hereditaria.» Y aumentaba además las tarifas en los legados y mandas testamentarias a favor del alma ²⁴⁷.

Mantenido el clima anticlerical con interpelaciones incidentales ²⁴⁸, la obstrucción a la ley del candado fue trabada por una larga serie de ermiendas carlistas e integristas. El 15 de diciembre, el Congreso reanuda el debate. Desde el principio se redujo a una prueba de resistencia entre obstruccionistas (con largos y voluntariamente dispersos discursos) y gubernamentales, armado el Ministerio de las defensas reglamentarias: la amenaza de prolongar la sesión hasta hacerla permanente en último término. La única novedad quedó en la intervención de Vázquez de Mella el 21, que dio publicidad a la conspiración mantenida entre 1891 y 1895 por el cardenal Cascajares para formar un partido católico, según el orador carlista en colaboración con el presidente del Gobierno.

La acusación no debió tener trascendencia. Venía siendo anunciada desde el verano de 1910. Durante la jornada parlamentaria del 21 de diciembre, Romanones hizo llegar apresuradamente, a la al parecer intranquila reina madre, avances del discurso de Mella que alejaban de María Cristina la sospecha de complicidad ²⁴⁹.

El 22, el Congreso al fin acordó que la sesión se prolongara hasta la aprobación de la ley. Así se hizo, por 174 votos contra 54 ²⁵⁰. La reunión acababa a las 9,25 del 23 ²⁵¹.

En realidad, pese al eco que se le hizo más tarde (en enero inmediato, un banquete dado en Madrid a los parlamentarios tradicionalistas por su actuación tuvo 800 comensales) ²⁵², el debate había mostrado importancia más simbólica que legal. El plazo de dos años hacía más inocua la medida. Mantenía en rigor la oposición a la política radical del Gobierno. La paradójica mayoría no estrictamente gubernamental del Senado y la división de la del Congreso habían dado sólo al Ministerio un plazo para resolver de otro modo el conflicto.

6. Marginamiento de la cuestión

En el estío de 1910, el presidente del Consejo, sin duda consciente de estas limitaciones impuestas desde las elecciones legislativas, había hablado privadamente de la necesidad de «buscar una persona de mi confianza para entenderme *secretamente* con el Vaticano». No podía hacerlo «públicamente, ni en notas, que es lo mismo». Tenía «pruebas de la mala fe y de la ignorancia con que el Papa ha procedido respecto a España». Y quería, por ello, exponer de aquel modo directo «al Vaticano lo que me propongo hacer y *hasta dónde puedo y quiero ir*» ²⁵³.

El 5 de noviembre, al día siguiente de la aprobación senatorial de ley del candado, Canalejas (que parecía desconfiar con esto del valor de la nueva medida) dio el primer paso en ese sentido. Celebró una entrevista en su domicilio con el provincial de los capuchinos en la región catalana, Miguel de Esplugas, preparada por dos amigos de ambos: el gobernador

de Barcelona Buenaventura Muñoz y el político catalanista Frances Cambó. En ella, el jefe del Gobierno expuso al capuchino su interés por buscar una mediación con Roma al margen de la vía diplomática: a través, en concreto, de otro capuchino catalán, el cardenal Vives y Tutó, prefecto de la Congregación de Religiosos, considerado como uno de los más íntimos colaboradores de Pío X.

No podía confiar (y éstos eran dos de los cinco puntos que Canalejas pretendía que Esplugas expusiera a Vives) en el nuncio, monseñor Antonio Vico, ni en el embajador Ojeda. El primero era «*chismoso* y hombre de muy pocos alcances... intentó y consiguió soliviantar a la Reina Madre contra el Gobierno ... y sobre todo contra su persona [Canalejas] ... la Nunciatura era en demasía frecuentada por carlistas e integristas, y ... de ella salían la mayor parte de proclamas contra el Gobierno, hechas durante el período de las pasadas manifestaciones católicas» del verano.

Ojeda, por su parte, «no le merecía confianza, pues a pesar de ser excelente sujeto, con todo —más solícito de conservar un cargo que necesita para vivir que de las obligaciones gravísimas que él le impone—, ... procura halagar a la vez al Gobierno y a la Santa Sede, sirviendo así mal a entrambos».

No eran, pues, personas que pudieran gestionar la solución del pleito, que apuntaba, sencillamente, a conseguir que Pío X aceptara la separación de la Iglesia y el Estado español.

Abogaban por ello los problemas planteados por el clero regular y secular. En opinión de Canalejas, la raíz «del atraso y sobre todo de la escasa fuerza social y del bajo nivel en cuanto a educación y cultura que distingue a la mayoría del Clero parroquial de España ...», en gran parte, se debe al Concordato. El tener que recibir del Gobierno sus sueldos respectivos hace a los clérigos generalmente indolentes, y además, o protestatarios por sistema o bien serviles, cuando no lo son todo a la vez...» (sic). El régimen de concesión de las prebendas eclesiásticas por el poder civil, con sus secuelas de oportunistas e irregularidades en los medios, no era sino un escolio de ese estado de cosas.

Y eran significativas así mismo, como expresión del orden de intereses que los movían, las gestiones de baja política que venían realizando algunos institutos de perfección cristiana (debía referirse a los jesuitas)^{253 b} para que el Estado los designara como la tercera orden prevista en el artículo 29 del Concordato a los efectos de obtener protección oficial.

Al margen de ello, urgía que el Vaticano corrigiera la acción política de algunos grupos. Los jesuitas en concreto (Canalejas tal vez palpaba la importancia de iniciativas de filiación jesuística como la A.C.N. de P. o la Junta vizcaína de Urquijo) sufrían «un ambiente de animadversión» que imputaba a influencia de algunos de sus miembros sobre los Comités de Defensa Social, especialmente en Madrid y Barcelona. Sobre éstos, «sería un bien inmenso el que rectificasen aquellos procedimientos e hiciesen una política más sensata y menos perjudicial a los mismos intereses sociales y religiosos que, con la mayor buena fe, intentan defender»²⁵⁴.

El político, en suma, quería del provincial que convenciera a Vives de la conveniencia de «una, más bien que efectiva, sólo aparente y desde luego

cordial y amigable separación de la Iglesia y del Estado; la cual separación ... además exigiese ... la continuación de las buenas relaciones entre ambas Potestades con la Nunciatura en España y la Embajada cerca del Vaticano ... En virtud de dicha casi separación, el Estado renunciaría a sus derechos de presentación sobre los beneficios eclesiásticos mayores y menores, o sea al Patronato Real, con todas sus consecuencias, devolviendo a la Iglesia su plena libertad e independencia natural y jurídica. El Estado cuidaría, además, de crear a la Iglesia una situación económica independiente y, habidas en cuenta las cargas del Estado, desahogada, desatando de esta suerte los lazos económicos que actualmente la tienen a él sujeta. Además, «la Religión oficial como propia que es de la inmensa mayoría de la cuasi totalidad de los españoles, continuaría siendo la Católica».

«Es evidente —insistió Esplugas al gestionarlo, quizá para evitar la carga ideológica del término— que una separación de esta índole, sobre no involucrar nada que sea menos decoroso para la Iglesia, apenas puede llamarse tal y es más bien una amplia reforma del Concordato, para que la Iglesia y el Estado tengan mayor libertad y holgura en su vida y movimientos»²⁵⁵.

El capuchino comenzó a negociarlo en el Vaticano entre el 15 y el 18 de noviembre de 1910, al menos con el padre Joaquín de Llaneras (hermano del cardenal Vives y también capuchino y catalán, consultor en Roma) y con el propio purpurado, quienes debieron acogerlo con agrado en principio. De nuevo en Cataluña, Esplugas puso por escrito las bases, en carta examinada por Cambó y enviada a Llaneras con fecha 26. De acuerdo con el cardenal, el consultor quedó en notificarlo a Merry del Val el 2 de diciembre. «*Vosté —escribía Llaneras al provincial el 1— procuri agafar testimonis escrits perque aixís podrà dir: Cántin papers y mentin barbes.*»²⁵⁶

Tal vez tanteó el terreno directamente (es una mera hipótesis, ni siquiera probable) la carta que, enseguida, remitió el 5 Canalejas al encargado de negocios González con «cierto encargo —resumiría éste— por si tengo ocasión de hablar con el Cardenal Secretario de Estado pero sin que fuerce ésta ni la rebusque»²⁵⁷. Aunque más bien parece que contuviera explicaciones sobre los proyectos legislativos del Gabinete²⁵⁸.

En todo caso, la gestión no empañó el tono firme adoptado por el Gobierno en la coetánea discusión del candado en el Congreso, que entonces tenía lugar. Convenía que la Santa Sede —advirtió incluso González en Roma— evitara la obstrucción con que habían amenazado los tradicionalistas y aceptase el proyecto como «mal menor». Si la ley no triunfaba (lo que, por tanto, reconocía posible, implícitamente), el Ministerio se vería obligado a sobreescribir los tratos con Roma y «presentar otras leyes a las Cortes que elaborarían de por sí solas».

Aún pretendía el Gobierno acaso que explorase González la postura del Vaticano sobre la gestión de los capuchinos cuando el 16 de diciembre, en conversación con el secretario de Estado Merry del Val, aludió al encargado a la posibilidad de que fuera nombrado otro embajador ante la Santa Sede. (En el proyecto comunicado a Esplugas, Canalejas habló de designar un plenipotenciario para que lo tratara sin mediación del

nuncio ni de Ojeda.) Pero, a las dos cuestiones —candado y embajada—, el cardenal respondió que, votada esta ley sin acuerdo entre las dos potencias, «la situación queda la misma que este verano y no habrá lugar a negociación» ²⁵⁹. Lo que fue corroborado además, parafraseándolo en «declaración categórica, inspirada de seguro por la Curia» según González, por *L'Osservatore Romano* del 24, cuando fue aprobada la norma por el Congreso ²⁶⁰.

Al comenzar enero de 1911, se hablaba así mismo en Roma de «que un miembro del actual Gobierno de S. M. ha llegado a esta Capital de incognito, hace ya algunos días, habiendo sido recibido en audiencia privada por Su Santidad». Aunque círculos de la curia lo negaban, había versado sobre «el modo de reanudar las buenas relaciones que han existido entre España y el Vaticano» ²⁶¹. Y hay síntomas para pensar que este enviado gubernamental fuera Francesc Cambó ^{261 b}.

Mas, sucediera o no y fuera otra o la misma gestión de Esplugas, la respuesta debió ser negativa.

El 31 de diciembre anterior, el presidente del Consejo había planteado la crisis total, seguramente con la pretensión de sustituir algunos ministros (entraron Rafael Gasset en Fomento, Amós Salvador en Instrucción Pública, Alonso Castrillo en Gobernación) y forzar la ratificación de su programa: la ley de asociaciones, la obligatoriedad del servicio en armas, la «cuestión de Canarias» —su división administrativa— y los presupuestos ²⁶².

En Consejo, el 4 de enero, anunció Canalejas la presentación del primero de estos proyectos en marzo, junto a otro sobre enseñanza en sentido laicista ²⁶³. Y Roma comentó la noticia con desagrado. No se entendía, dijo *L'Osservatore*, «*com'esse possano conciliarsi con la antiche e reiterare sue dichiarazioni di volere intavolare o riprendere i negoziati colla Santa Sede, fino al punto di affermare che l'approvazione della legge catenaccio gli era appunto necessaria per questa ripresa*» ²⁶⁴.

Disconforme también, por motivo contrario, la oposición republicana advirtió la dilación que ese anuncio incluía. No había motivo, subrayó *El Liberal*, para retrasar hasta marzo la reapertura de las Cortes —que habían sido clausuradas el 24 de diciembre de 1910—. La pequeña crisis ministerial del 31 no lo justificaba. «La obra que tantas veces y a plazos fijos ha anunciado el Gobierno radical, es ajena» a tales vicisitudes ²⁶⁵. «Hablamos —insistía el 26 de enero de 1911— de lo que constituye o constituía el programa medular del Gobierno.

El mes y medio que se ha perdido será un obstáculo invencible, no ya para el desenvolvimiento de la ley de Asociaciones, sino para el mero afianzamiento de sus bases. Será final de la obra lo que hubiera debido ser comienzo, y probablemente, al abordar la cuestión en los lugares donde esos asuntos se abordan, por hacerlo tarde, se convertiría en punto de parada, cuando no de fracaso, lo que estaba indicado para ser punto de partida» ²⁶⁶. En realidad, fracasada la segunda oportunidad de lograr una solución al margen del parlamento, el Ministerio había quedado abocado quizá a la derrota en Cortes, si proseguía en su empeño.

No lo hizo. Todavía en enero, oficiosamente ²⁶⁷, la Santa Sede insistió en la necesidad de negociar el proyecto de ley de asociaciones antes de presentarlo ²⁶⁸. Y, al comenzar febrero, el propio Gabinete notificó a la prensa (contra las esperanzas de quienes confiaban en una norma unitaria) ²⁶⁹ su intención de hacer tal gestión. García Prieto se entrevistó para ello con el nuncio ²⁷⁰ y, el 10, formuló a González su propuesta que vino a ser, no obstante, ciertamente diversa de la que el Vaticano consideraba: Roma había de aceptar la reanudación de los tratos oficiales para reducir el número de institutos de perfección y aclarar la interpretación de los artículos 29 y 30 del Concordato. A cambio, el Gobierno estaría dispuesto a «escuchar con la debida deferencia las observaciones que, una vez presentado el antes aludido proyecto [de ley de asociaciones] a la Cortes, creyera del caso hacer la Silla apostólica respecto a la aplicación de tal o cual proyecto de carácter general a la singular naturaleza de los Ordenes y Congregaciones religiosas» ²⁷¹.

El Vaticano insistió en la necesidad de acordar primero, diplomáticamente, cualquier proyecto de legislación que afectara a la Iglesia y abstenerse durante la negociación de tomar ninguna medida. Era «acordar bilateralmente y no sólo «escuchar», lo que preceptuaba el artículo 45 del Concordato para estas situaciones ²⁷².

El 3 de marzo de 1911 el Gabinete ofreció más aún para romper este hermetismo: «estaría dispuesto —dijo en nota formal a Merry—, si la Santa Sede se prestase a reanudar los tratos pendientes sobre las indicadas reducción e interpretación, a incluir en aquel proyecto de ley [de asociaciones] una cláusula por virtud de la cual pueda quedar a salvo el resultado de las negociaciones entre la Iglesia y el Estado acerca del derecho que las Ordenes y Congregaciones religiosas incluidas en el *modus vivendi* de 1902, puedan tener a subsistir con carácter definitivo, aunque sujetándose, naturalmente, a los preceptos de la legislación que rija en el Reino» ²⁷³.

Tampoco aceptó Roma. El *modus vivendi*, alegó el secretario de Estado entre otros extremos, ya había reconocido esa existencia legal a los institutos existentes de hecho entonces. No había, pues, ventaja en la nueva oferta ²⁷⁴ (salvo, tal vez, la implícita de no intentar la reducción en esas entidades anteriores a 1902). Digno también, el Ministerio respondió limitándose a lamentar la negativa ²⁷⁵. Lo que venía a suspender otra vez las gestiones.

Roma parecía sentirse segura. El Gabinete solamente contaba una ley eventual, la del candado, inútil al cabo de dos años si no llegaba a promulgar un nuevo ordenamiento del derecho de asociación. Y esto era poco probable con la constitución de las mayorías parlamentarias, de no mediar el consentimiento de la Santa Sede.

Lo revelaban así no sólo las protestas de la opinión confesional y la debilidad del Gobierno en la cámara alta, sino las actitudes de antiguos sagastinos. Al comenzar febrero, se anunció la dimisión de Montero Ríos como presidente del Senado, en desacuerdo con la prolongación del alejamiento en Roma ²⁷⁶. El 9, él, Canalejas y Moret, líderes de las fracciones más notables en que se había dividido el Partido Liberal, se reunieron para acordar la actitud a seguir ante la reapertura de Cortes. Montero, mode-

rado, intentó orientar el programa hacia la derogación de la ley de jurisdicciones, que desde 1905 sometía los delitos contra el ejército a la autoridad militar. Pero Moret volvió a poner al jefe del Gobierno en la implícita disyuntiva de demostrar su decisión o transigir, con estas recomendaciones públicas, eco de los planteamientos de 1905 y 1906:

«1.^a Que por decreto, e inmediatamente, lleve a cabo la secularización de los cementerios.

2.^a Que también por decreto, y sin pérdida de momento, establezca la neutralidad de la enseñanza; y

3.^a Que ganando horas, minutos si es posible, lleve a las Cortes el proyecto de ley de Asociaciones, y si encuentra para la aprobación de éste dificultades en el Senado, proceda sin vacilación a disolver la parte electiva de la alta Cámara y a reformar la vitalicia.»²⁷⁷

Acuciado de esta manera, Canalejas debió exponer en Consejo su decisión de continuar el plan legislativo previsto, a despecho del Vaticano. Pero ahora tres ministros del Gabinete —sobre todo el de Hacienda, Cobián— mostraron ante ello su deseo de dimitir. «A fin de que no pueda hablarse de si hay algún ministro disconforme»²⁷⁸, volvió a ratificarlo aquél en el Consejo del 1 de marzo, al que Cobián ya no asistió²⁷⁹.

La misma postura dio a entender el Gobierno al ir notificando a la prensa detalladamente los pasos dados en el Vaticano para reanudar los tratos²⁸⁰. «La Santa Sede —afirmó su órgano oficioso, *Heraldo de Madrid*— está dispuesta a una formal ruptura diplomática con España, y es imposible, si no rectifica su actitud, que salgan fallidos sus propósitos.» «La ruptura —han añadido el secretario de Estado de Su Santidad y monseñor Canali— únicamente podría ser evitada presentando pronto la dimisión el señor Canalejas.»²⁸¹

El 6 de marzo de 1911 fueron reabiertas las Cortes, y enseguida los republicanos reclamaron el cumplimiento del programa anticlerical²⁸²; pero, el 11, todavía el presidente del Consejo enviaba a los ministros un cuestionario sobre los puntos principales que creyeran debía desarrollar en el proyecto de ley de asociaciones²⁸³.

El tema religioso subsistió, de momento, en la legislación económica. El 30 de diciembre anterior, la *Gaceta* había publicado la ley aprobada días atrás que establecía el impuesto del 0,25 por 100 anual sobre el valor de todos los bienes de las entidades que no transmitieran por sucesión hereditaria. Ahora, el reglamento de aplicación de 20 de abril aclaró que «están sujetos al impuesto especial creado por el artículo 4.º de la ley de 29 de diciembre de 1910, los bienes de todas clases que pertenezcan a las Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones y Sociedades, cualquiera que sea su objeto, que tengan una personalidad propia y permanente, independientemente de las mutaciones que puedan ocurrir en las personas que las formen, administren o disfruten de sus beneficios, y cuyos bienes, por consiguiente, no son susceptibles de transmisión hereditaria, como las Provincias, Municipios, Iglesias, Capellanías, Casas, Calbidos, Comunidades e

Institutos religiosos, de cualquier culto, Sociedades, científicas, literarias artísticas, de recreo, etc.» ²⁸⁴.

En el Congreso, aún en marzo de 1911, se debatió asimismo el proyecto de ley para la recogida de la Deuda, en parte referido «a la prescripción de los derechos y a la caducidad de las reclamaciones de las Ordenes e institutos religiosos cuyos bienes no han sido vendidos todavía por el Estado, que se incautó de ellos» ²⁸⁵. Así lo planteó el liberal Urzáiz, precisamente contra Cobián, a quien culpó, entre otros extremos, de haber acogido de nuevo estas reclamaciones —como en 1908 Maura ²⁸⁶— con idea de resolverlas favorablemente ²⁸⁷.

No hubo proyecto de asociaciones, en todo caso, en marzo de 1911. El primero de abril, una segunda crisis ministerial dio un nuevo plazo dilatorio. En el coetáneo debate sobre el proceso de Ferrer de 1909 en la cámara baja, la petición de revisión hecha por los republicanos puso en otra dificultad a Canalejas. La denegó. Pero, en Consejo de ministros, el de la Guerra, Aznar (el proceso había sido llevado a cabo por tribunales militares), exigió que, además, la mayoría presentase y aprobara una proposición de «no ha lugar a deliberar» para el caso Ferrer. Negado a ello el presidente, Aznar dimitió, y la responsabilidad de la resolución de la crisis —a favor del ejército o de la democracia— fue hábilmente puesta en el rey por la prensa oficiosa. «El Sr. Canalejas —sentenció *Heraldo de Madrid* el mismo día 1 de abril del año 11— no quiere continuar al frente del Gobierno. La crisis que pone término al debate sobre el proceso Ferrer tiene una importancia colosal para la vida política de España ... Dimite Canalejas por causas inconfesables, independientes de su voluntad y extrañas en absoluto a su conducta como rector de los destinos públicos.

Solamente en España ... se bambolean y derrumban situaciones apoyadas en la opinión pública, sin que pueda decirse a voz en cuello la causa ...

No es lícito sacrificar a un prestigio muy respetable, no menoscabando, en nuestro sentir, otros prestigios muy altos, que quedan con sensible frecuencia a merced del azar» ²⁸⁸. Regresado de Andalucía el 2 Alfonso XIII, tuvo evidentemente (quizá también por propia convicción) que ratificar su confianza.

Aznar fue sustituido por Luque. Pero, en la crisis, salieron además Cobián ²⁸⁹, Alonso Castrillo y Arias de Miranda, reemplazados por Rodríguez, Ruiz Valarino —que dejó Gracia y Justicia a Barroso— y Gimeno, respectivamente, en Hacienda, Gobernación e Instrucción Pública ²⁹⁰.

Reanudadas las sesiones y la discusión el 4 de abril, el 8 desestimó el Congreso definitivamente la propuesta de revisión del asunto Ferrer. Pero, en la misma fecha, las Cortes fueron nuevamente cerradas ²⁹¹.

Se alegó ahora la necesidad de elaborar los proyectos a discutir. «Se ha evaporado, por obra de la magia —lamentó *El Liberal*—, toda la materia legislativa.

En marzo, sin falta ninguna, había de presentarse el proyecto de Asociaciones ... Y ahora, después de un año y pico de gobierno, allá se va el proyecto esencial, capital, fundamental, no ya al cesto, sino al pozo» ²⁹².

Reanudadas las sesiones en mayo, el 8 el Ministerio presentó el pro-

yecto de presupuestos y, al fin, el de asociaciones, que acababa de redactar el jefe del Gobierno²⁹³ (además, aún en mayo, de los que resolvían el problema canario y el de consumos).

El preámbulo de la esperada ley sugería la necesidad de rehacer el ordenamiento por la aparición de nuevas formas jurídicas, en especial los sindicatos. Pero centraba el problema en los religiosos. Al Gobierno no le fue dable, decía, «como deseaba, redactar las bases fundamentales de un código orgánico de la Asociación. No se halla preparada suficientemente en la esfera doctrinal la conexión de los principios reguladores de las múltiples modalidades de la personalidad jurídica». El proyecto actual, por lo tanto, se limitaba «a desenvolver los preceptos contenidos en los artículos 13 y 14 de la Constitución para las Asociaciones no reguladas por los Códigos civil y mercantil o por las leyes especiales, presentando a las Cortes una reforma legislativa, inspirada en el criterio de que un común derecho regule a todas las demás, así laicas como religiosas».

No lo hacía con fines restrictivos. «El Estado, que proclama la libertad de asociación para todos los fines de la vida, no puede ni debe impedir que los ciudadanos se asocien para las más altas devociones del espíritu.» Pero no podía tampoco, «en el orden civil, considerar los votos perpetuos sino como resoluciones individuales, sin otra garantía que la voluntad persistente de los que los pronuncian y como expresiones diariamente renovadas del libre albedrío, sin sanción jurídica en la esfera del derecho positivo. La ley, que no puede penetrar en el fuero interno de la conciencia religiosa, se limita a garantizar en todo momento la libertad del ciudadano, amparándole en el ejercicio de los derechos y obligaciones que constituyen íntegramente su personalidad política y jurídica.

La limitación de los bienes de las Asociaciones no sólo responde a la tradición histórica encarnada en nuestro derecho, sino también al principio aceptado por muchas legislaciones, dominante en el campo de la ciencia moderna, de que la capacidad de las personas colectivas se halla condicionada por sus fines».

El artículo recogía el espíritu del proyecto de 1906 —basado por su parte en la ley francesa Waldeck-Rousseau—; pero su redacción y detalles administrativos eran plenamente diversos. Añadía que las asociaciones habrían de tener un mínimo de 12 miembros (artículo 2), en recuerdo de este tema de debate con Roma. Suprimía la exigencia de una ley para autorizar institutos de perfección cristiana, contenida en el proyecto de López Domínguez. Pero, en cambio, asumía los requisitos sobre nacionalización de los extranjeros o reducción a menos de dos tercios (artículo 29) en parte recogidos por la ley del candado. Acaso inconscientemente, permitía de modo implícito los votos de pobreza, castidad y obediencia con tal de que no fueran perpetuos (puesto que el artículo 3 sólo impedía la renuncia por «toda la vida»). La mayor novedad, por último, estribaba tal vez en su carácter general: no restringido como el proyecto del año 6 a las asociaciones religiosas; y en que contemplaba explícitamente las dedicadas al «estudio, fomento y defensa de los intereses económicos, intelectuales y morales de industrias, profesiones u oficios» (ar-

título 25) y «las Asociaciones profesionales inscritas en las Delegaciones de Estadística de Instituto de Reformas Sociales» (artículo 26). A éstas les permitía «constituir y sostener cooperativas de todas clases, instituciones de socorros y de seguros mutuos», entre otras, y suscribir «contratos colectivos de trabajo» (artículo 27): en reconocimiento, en suma, de la pujanza del sindicalismo.

Una disposición transitoria daba un plazo de seis meses para la inscripción de las sociedades que no lo hubieran hecho en el registro civil. Y otra adicional, calcada del proyecto de 1906, excluía de las disposiciones de la ley a «los conventos y casas establecidos con anterioridad al 2 de diciembre de 1910 y que pertenezcan a las Ordenes religiosas de San Vicente de Paúl, San Felipe Neri, Misioneros franciscanos para Marruecos y Tierra Santa, e Hijos del Inmaculado Corazón de María para las posesiones españolas en África, por lo que se refiere a Institutos de varones y en cuanto a Institutos de mujeres, las casas de las Hijas de la Caridad y Hermanas Concepcionistas y las establecidas con arreglo al artículo 30 del Concordato de 1851, y con las garantías y solemnidades que el mismo establece»²⁹⁴: excepciones no exentas de interés, por lo que suponían de reconocimiento de un nuevo orden internacional, con sus necesidades religiosas, de una parte, y de otra, por la ambigüedad del artículo 30, que algunos interpretaban comprendía todos los institutos femeninos²⁹⁵.

7. *Agonía política y muerte de Canalejas*

La opinión confesional reaccionó vivamente contra el proyecto de ley de asociaciones. El episcopado lo rechazó, en exposición colectiva del Congreso, por no haber sido negociado con la Santa Sede²⁹⁶. El Comité de Defensa Social de Barcelona anunció expresamente que, «como en 1906», los católicos lo combatirían «por todos los medios»²⁹⁷. A lo largo de la legislatura de 1911, de hecho, las Cortes recibieron exposiciones contra la ley procedentes de unas 600 entidades jurídicas y ninguna a favor²⁹⁸.

El Vaticano suscribió oficialmente la postura de la jerarquía²⁹⁹. Mas no parece que en ningún momento se inquietara, aparentemente esforzado, por el contrario, en una actitud de benevolencia, aunque sin concesiones. En realidad ya tenía ganada la batalla. Y, sumiso el Gabinete, acaso Canalejas era el más indicado para capear el malestar creciente de los medios obreros, conscientes todos —Roma como Madrid— de que un nuevo orden social estaba exteriorizándose en España.

Desde el año anterior, venía preparándose la celebración en Madrid del XXII Congreso Eucarístico Internacional³⁰⁰, «con la ayuda del jefe de Gobierno —en palabras del arzobispo de Toledo, Aguirre, en enero de 1911—, que nos la ha prometido muy decidida y eficaz»³⁰¹. Contra todas las esperanzas del Estado español, la Santa Sede no envió un cardenal representante del Papa a los actos. Se redujo a nombrar como tal a Aguirre, «que no "hace ilusión", porque lo tenemos en casa»³⁰². Parece que el nuncio Vico había enviado un informe a Pío X aconsejándole tal medida, como respuesta al anticlericalismo de la situación³⁰³. Debió influir

ambién, quizá prioritariamente, la impresión de la coetánea visita de una embajada especial española a Víctor Manuel en Roma ³⁰⁴. En todo caso, consta que la decisión fue del Papa ³⁰⁵.

En junio, y quizá como contrapartida, muerto Ojeda ³⁰⁶, el Ministerio designó por su parte a un individuo poco grato en el Vaticano, Juan Navarro Reverter, como embajador cerca de Pío X ³⁰⁷.

La discusión de los presupuestos, comenzada el primero de junio de 1911, permitió el 29 a un individuo de la comisión dictaminadora, el criminólogo aragonés Rafael Salillas, volver al tema religioso en las Cortes, al defender un voto particular sobre las obligaciones eclesiásticas de Gracia y Justicia. Los desniveles respetados por el Gobierno entre el bajo y el alto clero, afirmó, denunciaban un afán contemporizador, manifiesto también en el sobreseimiento de la discusión del proyecto de asociaciones. Y en semejante línea se expresaron Albornoz y Nougués al debatir en días siguientes la totalidad de aquellas partidas. Pero, el día 23, las Cortes fueron otra vez clausuradas cara al verano ³⁰⁸.

En cuanto al anunciado Congreso Eucarístico de Madrid, revistió caracteres multitudinarios. «Parece indudable que el Gobierno —afirmaría una fuente eclesiástica—, no previó la importancia que iba a tener la manifestación eucarística» ³⁰⁹.

Fue por de pronto respetada por los republicanos, que expresa y acertadamente vieron en ella la «ocasión de un gran ejemplo de tolerancia» ³¹⁰. Se vaticinaron, no obstante, numerosos conflictos. Se habló de la importación de 5.000 kilogramos de pistolas Browning a través de Port Bou con destino a eclesiásticos y tradicionalistas laicos. Incluso se afirmó la intención política del Congreso en los vivas al «Papa rey» que ensayaban los coros en la capital del país ³¹¹. Pero el Ministerio fue consciente en todo momento de la atención y de la ocasión internacional. «El Gobierno —había dicho Canalejas—, cumpliendo con su deber y por honor de España, ha de hacer cuanto sea necesario para que ese acto se celebre dentro de las mismas condiciones en que se ha celebrado en todos los países del mundo», incluidos los acatólicos ³¹².

Los actos tuvieron plaza en la corte entre el 23 de junio y el 1 de julio de 1911, con absoluta calma; «y, aunque esto se debe a la cultura —diría un liberal—, cada día creciente, del pueblo de Madrid, a la discreción de hombres como Azcárate que no dejaron hablar siquiera de perturbación y protesta a los suyos, algo hay que abonar en cuenta al Gobierno» ³¹³, por lo demás prudentemente alabado por la jerarquía eclesiástica en los mismos días ³¹⁴.

Hubo 105.000 individuos inscritos «*formalmente*» en el Congreso ³¹⁵. En la procesión del 28, cuando la Custodia llegaba a la Cibeles, la cabeza de la comitiva alcanzaba casi el final de la calle Mayor: en más de dos kilómetros de «apretadas filas de doce personas» ³¹⁶: «Cien prelados, ocho mil sacerdotes, dos mil Terciarios, diez mil adoradores nocturnos con cuatrocientas banderas, Cofradías innumerables con quinientos cincuenta estandartes y banderas, Reales Academias, nutridas representaciones de Ministerios y dependencias oficiales, de organismos científicos, artísticos, literarios, comerciales, bancarios e industriales, cuatro mil jóvenes españoles y extran-

jeros, cuatro mil obreros, grandes y servidumbre, nobleza»...³¹⁷. En Palacio Real, el Gobierno, las presidencias de ambas cámaras y representaciones de los grupos monárquicos recibieron la bendición. «Momento de emoción intensa —retalaría Romanones—; todos los asistentes se hicieron de rodillas y hubo quien besaba el suelo con delirante fervor. Y no otros ... [sic] la representación liberal que allí se hallaba, nos dábamos cabal cuenta de resultar algo inarmónico en aquel ambiente»³¹⁸.

Los desaires del Gabinete se habían reducido a impedir al monarca la asistencia a la sesión inaugural y a los militares mostrar sus condoraciones en la procesión. El propio Gobierno rehusó estar presente en este acto y en la Misa pontifical del 29³¹⁹.

De parte eclesiástica, se oyeron el 28 el telegrama de Pío X, que exhortaba a rezar «como acto de reparación para la atribulada nación portuguesa», y el sermón del orador Luis Calpena en San Francisco el Grande: «Cuando os digan que este país es enemigo de las Ordenes religiosas negadlo; hay en España fe y alientos para defenderla, y sólo dejaría de ser católica cuando no le quedara una sola gota de sangre en las venas»³²⁰.

«Todas las clases sociales —comentaría el propio Pontífice, en términos que enlazaban con la canonización de la monarquía alfonsina formulada por León XIII en 1894—, sin distinción de jerarquías, fraternizaron en esta inmensa multitud, y entre todos se ha distinguido personalmente, con su augusta familia, el rey católico, que ha dado al mundo con sus palabras y su conducta, un testimonio indubitable de su grandiosidad»³²¹.

Durante el mismo verano y el otoño de 1911, las circunstancias permitieron el definitivo marginamiento de los problemas religiosos políticos.

Primero fue la tirantez de relaciones provocada por los intereses de Francia en Marruecos y la intromisión de Alemania³²². En septiembre, la oleada de huelgas obreras aconsejaba la suspensión de garantías constitucionales en toda España, mantenida hasta el 13 de octubre. El Ministerio habló de un *complot* anarquista descubierto en Barcelona para preparar la revolución. En Alcira y Carcagente, la supuesta conspiración llegó a triunfar con la formación de una «*petite Commune*»³²³. En Cullera, dos funcionarios del ayuntamiento y el juez de Sueca fueron asesinados³²⁴.

Si para entonces el radicalismo había huido ya del programa de Canalejas (no aludía siquiera a cuestión religiosa en la amplia nota programática que remitiera a Maura en el mismo mes de septiembre del año 11)³²⁵, ahora estos hechos le llevaron a mostrarse «resuelto a dejar el Poder muy pronto, y hasta deseoso de que ... [Maura] se apercibiera para la sustitución, y ofrecía proclamar que su fracaso no era imputable al Rey, que sincera, leal y constantemente, le había facilitado el desenvolvimiento de la política radical, ni al partido conservador, que tan templadamente le combatiera, sino a los elementos de la extrema izquierda, que habían hecho imposible, con insensatos intentos revolucionarios, toda reforma democrática inmediata, así en lo social, como en lo político, lo económico o lo religioso»³²⁶.

Aún en octubre, significativamente, Gumersindo de Azcárate encabezó una exposición de la debilitada Conjunción Republicano-Socialista a las Cortes que reclamaba su reunión para interpelar al Gobierno sobre su conducta en el problema obrero y en la cuestión de Africa³²⁷. Sintomático fue también el concierto de candidaturas monárquicas conjuntas (de liberales y conservadores) —en Bilbao, con apoyo incluso de los bizcaitarras, al parecer— frente a la Conjunción, en las elecciones municipales de noviembre³²⁸.

En el ámbito diplomático, las relaciones continuaron en fría normalidad, con el deseo implícito y compartido de no replantear el asunto de las negociaciones sobre los institutos. La falta de embajador, con ello (Navarro Reverter no hizo efectivo nunca su nombramiento), venía a facilitar un útil y discreto distanciamiento³²⁹.

La aplicación de la reforma del impuesto de derechos reales aprobada en 1910 recordó la cuestión del gravamen de 0,25 % establecido en ella para los bienes de los institutos, cabildos e iglesias. El reglamento consiguiente, publicado según veíamos en abril de 1911, ordenaba a todos los prelados, cabildos, rectores de seminarios, párrocos y superiores de institutos que, en plazo prorrogado luego a septiembre —a petición de los obispos—, presentarán en el correspondiente registro de la propiedad «relación detallada» de todos los bienes³³⁰.

El episcopado protestó en agosto, por crear tales entidades excluidas de aquella ley, que dijo desfiguraba el reglamento³³¹. El nuncio lo hizo oficialmente en nota de 27 de diciembre de 1911, que juzgaba la disposición contraria al Concordato, e indicó a las autoridades eclesiásticas que se abstuvieran de enviar las relaciones. Pero hubo de transigir, «sólo por el presente año» 1912, ante la decisión del Gobierno de suspender el pago de su dotación al clero ante aquella actitud y en vista de los ofrecimientos de Canalejas —luego cumplidos— de rebajar el tipo de la contribución³³².

El 15 de septiembre del mismo año 11, fue reorganizada por decreto la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio, haciendo facultativa en ella la enseñanza de la Religión. La Santa Sede protestó también por medio del nuncio. Calificaba el hecho de anticoncordatario y anticonstitucional, y preludio de una medida semejante en las escuelas primarias, dependientes de los maestros³³³. Pero el Gobierno no aceptó tal criterio: quitó importancia ideológica a la medida, manteniéndola, y la queja no prosperó³³⁴.

Aparentemente justificada en las promesas de reforma educacional contenidas en el discurso de la corona de 1910, la reorganización protestada se engarzaba probablemente en la serie de innovaciones sugeridas por los hombres de la Institución Libre de Enseñanza: creación del Centro de Estudios Históricos y de la Residencia de Estudiantes, reorganización del Museo de Ciencias —todo en Madrid—, establecimiento de una misión permanente de estudios históricos en Roma, fomento de intercambio universitario con otros países y de investigación científica, siempre en 1910; «además [—en palabras de la literatura detractora—] de nume-

rosas órdenes que facilitaban sus fines —caza menor— y de multitud d nombramientos de profesores y funcionarios adictos»³³⁵.

El programa de reforma educativa pretendió continuar después según parece —tras la llegada de Santiago Alba al Ministerio de Instrucción Pública en marzo de 1912— con la legislación temida por Roma: coeducación y aconfesionalismo en la enseñanza primaria, de nuevo reclamada por los institucionistas³³⁶. Pero ello no empañaba la claudicación del Gabinete en su ideario religioso. En el mismo año 12, un republicano afín a la Institución, Melquiades Alvarez, creaba el Partido Reformista (cuya génesis tal vez encuentra aquí su sentido) para buscar, en la legalidad monárquica vigente, la realización del programa democrático que había abandonado de hecho el Partido Liberal, Canalejas incluido³³⁷.

El nuevo grupo pretendía «la independencia soberana del Poder civil y la secularización completa del Estado ..., no de la sociedad» (sin ánimo por tanto de «ninguna orgía sacrilega contra las creencias católicas»): «Destruiremos —decía aquel— los privilegios de los institutos monacales, impediremos la ingerencia de la Iglesia en el Estado ... [con el] matrimonio civil, secularización de los cementerios, escuela neutra, libertad de cultos, y después, con la supresión del presupuesto de culto y clero, ... separación de la Iglesia y el Estado.»

A cambio impulsaría «la cultura como base fundamental de nuestra obra política», que había de implantar al fin «necesariamente una República socialista específica», no marxista ni colectivista, al parecer fundada sobre la nacionalización de los ferrocarriles y de las minas, el fomento de cooperativas, la previsión social y profundas reformas fiscales, en régimen descentralizador³³⁸.

Parecía terminar de quebrarse con ello, en el planteamiento de las fuerzas políticas, la Conjunción Republicano-Socialista —en realidad descompuesta desde el otoño de 1910³³⁹— y la última gran esperanza de recomposición del Partido Liberal Fusiónista.

Las sesiones de Cortes, por lo demás, suspendidas en junio de 1911, no habían sido reanudadas hasta el 18 de enero de 1912, cuando el indulto para todos los procesados por los crímenes de Cullera, decidido aparentemente por el rey a pesar del Gobierno —en realidad forzado por este—, fue seguido de una crisis del Ministerio, protocolaria acaso, que reavivó fugazmente su prestigio³⁴⁰. Mas, para entonces, nadie pudo creer en el radicalismo del presidente. «Viene desde que gobierna —lamentó *El Liberal*— mirando los asuntos difíciles, no de frente, sino de soslayo o por encima de los anteojos.

Procedió desde septiembre [de 1910] volviendo a cada momento la cabeza para observar el gesto displicente o complaciente de Maura. No se dejó guiar nunca por la sinceridad expansiva de sus ideas, y sí por la suspicacia de lo que en cada lance y trance estarían pensando o maquinando otros»³⁴¹.

La desconfianza se expresó en el inmediato debate del Congreso sobre su política general. Su obra, aseveró Melquiades Alvarez, se había reducido a tres leyes: «la ley de Consumos ..., ley preparada precipitadamente, deficientemente, ... la ley del *Candado* y la abolición del juramento

n los Tribunales», que era «copia de un proyecto que aprobó el Congreso en la época conservadora y que se dificultó en el Senado por la intransigencia de algunos elementos ultramontanos». La del candado ofrecía, sí, «el mérito de no estar paccionada con Roma». Pero «el contenido de esa ley estaba otorgado por el Romano Pontífice al Gobierno conservador del señor Maura, en aquel proyecto de Concordato [de 1904;] ... estaba limitada a un plazo de dos años, si acaso no se aprobaba antes la ley de Asociaciones, y la ley de Asociaciones, señor Canalejas, no se aprueba, ... aunque las conveniencias de Gobierno le impulsen a S. S. a hacer signos afirmativos en este instante para infundir esperanzas en algunos espíritus anticlericales»³⁴².

—Aquel proyecto no era más, en definitiva, en frase irónica del obispo de Jaca, que «el *coco* de Canalejas para presumir de anticlerical»³⁴³.

La crisis del Gabinete se repitió aún en enero (de «ultraoriental» la calificó ahora Azcárate), atribuida a la oposición de Maura y del rey contra el dictamen de ley de abolición de la de jurisdicciones de 1906³⁴⁴. En marzo de 1912, Canalejas reorganizó el Ministerio, a raíz de la dimisión de Gasset³⁴⁵. Y, en adelante, prescindió ya «de todo el cargamento político, religioso y social que declaró al principiar su viaje ... Ni ley de Asociaciones, ni reforma del Concordato, ni secularización del Estado, ni abolición de la pena de muerte, ni modificación de los Códigos penal y civil, ni redención de foros y, probablemente, ni aun asomos del proyecto de Mancomunidades»³⁴⁶ ... Ha embarrancado definitivamente, sin salir del antepuerto, aquel gallardo buque de argonautas que levó anclas a fines de 1909»³⁴⁷. Los intermitentes rumores de crisis provocadas por los conservadores —añadía *El Liberal*—, de las que en estos meses el Gabinete salía invariablemente triunfante, eran en realidad invención del Gobierno, sujeto a las limitaciones de la corona —según la implícita y tradicional acusación del mismo diario³⁴⁸— con la benevolencia de Maura, que habría sido poder cuando hubiera querido y lo consentía como mal menor.

Canalejas «ha estado dos años largos en el Gobierno sin alimentar su espíritu democrático más que de migajas ridículas y consagrado a huir de todas sus pregonadas reformas, no bien notaba al abordarlas que podían comprometer su existencia ministerial o su discutida jefatura»³⁴⁹.

A raíz de la crisis de marzo, las Cortes volvieron a permanecer cerradas hasta el 1 de mayo del mismo año 12. El Gobierno intentó resucitar el interés por la situación con el proyecto de Mancomunidades leído el 25 (sería parcialmente aprobado el 17 de octubre) que recogía la antigua aspiración catalana a la coordinación de sus cuatro diputaciones. El 28 de junio, en la misma línea, la comisión correspondiente leyó al Congreso su dictamen sobre el proyecto de ley de asociaciones, que habían anunciado modificaba la redacción de Canalejas «en sentido mucho más radical»³⁵⁰. En realidad, el propio dictamen declaró que la comisión no había tenido que «introducir en el articulado otras modificaciones que las encaminadas a afirmar las esencias del proyecto mismo y hacerlas más eficaces en su aplicación»³⁵¹; aunque la noticia del replanteamiento logró inquietar a los sectores eclesiásticos, expresados en las protestas episcopales del verano inmediato³⁵² y en quejas oficiosas de la Santa Sede³⁵³.

En septiembre, bajo la égida del moretista Santiago Alba en Instrucción Pública, según veíamos, el Gabinete intentó recuperar el pulso con aquellos propósitos de neutralización religiosa de la enseñanza primaria. «Par ello ideó Alba» —se afirmaría³⁵⁴— el proyecto de codificación de la legislación sobre enseñanza, que suscitó de nuevo la protesta de la jerarquía. Anunciaba que no comprendería las disposiciones que «hayan sido sustituidas indirectamente o hayan caído en comprobado desuso». Y esto podía referirse a los aspectos de control religioso³⁵⁵.

La Junta Central de Acción Católica, al mando aún de Comillas, secundó la defensa: «*El Universo* empezó la serie de artículos bien razonados: confidencialmente se repartieron hojas y folletos a senadores y diputados, se hicieron visitas a políticos, se buscaron influencias en el Consejo de Estado y no paró hasta lograr la certidumbre de que el proyecto de ley se trocaba en consulta al Consejo de Instrucción Pública, expediente dilatorio que disipaba la tormenta»³⁵⁶.

No hubo más. El 12 de noviembre de 1912 fue asesinado Canalejas por el anarquista Manuel Pardiñas. Quizás unas semanas antes tan solo —y posiblemente en octubre de 1911³⁵⁷—, el jefe del Gobierno había vuelto a intentar una gestión semejante a la del proyecto de separación cordial de Roma en el otoño-invierno de 1910. Lo había sondeado ahora, en las dos nuevas ocasiones de los años 11 y 12, Francesc Cambó, ante su amigo el cardenal Vives y ante Rampolla y Merry del Val. Pero la muerte impidió que siguiera adelante³⁵⁸.

En rigor, pues, el radicalismo religioso anunciado por Canalejas había terminado mucho antes del asesinato. De acuerdo con Salvador Canals, «no había hecho casi nada; una autorización a un pequeño número de capillas evangélicas de mostrar en su fachada lo que son; una ley temporal, dando, respecto al establecimiento de nuevas casas religiosas, las reglas que el Vaticano había convenido en 1904 con un gobierno conservador; la entrega a la Cámara de Diputados de un proyecto de ley de asociación, que ha quedado en eso. Ha ciertamente enfadado a la Santa Sede, al proceder autoritariamente en estos casos y cometer deplorables incidentes diplomáticos, pero en contra ha vivido en las mejores relaciones con los prelados»^{359 b}.

8. *Epígonos, 1913*

Romanones pareció remozar el antiguo fusionismo al suceder a García Prieto, presidente interino durante dos días, a la muerte de Canalejas. Tras concluir el tratado hispanofrancés sobre Marruecos, gestionado por éste, obtuvo la ratificación de la confianza real y organizó su propio Ministerio.

La crisis, desenvuelta en diciembre de 1912, constituyó una negación del poder a Maura, que consideró nuevamente roto el turno pacífico. Pero permitió que el Gabinete naciente atrajera al recién creado Partido Reformista a los lindes de la legalidad monárquica.

El presidente del Consejo fue nombrado, además, jefe del Partido Liberal en la asamblea de ex ministros del 30, sancionada por el falleci-

miento de Moret y Montero Ríos en 1913. Y, en el mismo orden restaurador, logró restablecer la cordialidad en las relaciones con Roma.

Por ley de 24 de diciembre de 1912, preparada por el Gobierno anterior, cumplió con la promesa de Canalejas de reducir el impuesto sobre bienes de manos muertas creado en 1910³⁵⁹. Y, en enero del año 13, sin necesidad de volver el tema a las Cortes, logró del Vaticano que los obispos y los superiores de los institutos de perfección cristiana prorrogasen de hecho la vigencia de la ley del candado durante otros dos años, mediante el compromiso de los religiosos de no instalar ninguna nueva comunidad. A cambio, el Ministerio ofrecía, privadamente, rechazar el proyecto de Ley de asociaciones de Canalejas y reelaborarlo, acordando con Roma cuanto a la religión afectase³⁶⁰. El entendimiento fue sancionado en febrero con la designación de embajador ante la Santa Sede, Fermín Calbetón (definitivamente ineficaz aquel nombramiento incumplido de Navarro Reverter), y de nuevo nuncio en Madrid: monseñor Ragonesi —en vista del desagrado con que la corte contemplaba a Vico, quizá por su proximidad y colaboración con tradicionalistas³⁶¹.

Las relaciones se enrarecieron brevemente en febrero, con los ofrecimientos del Gobierno, ya sugeridos en diciembre anterior, de reimponer la orden de 1906 sobre matrimonio civil (hecho efectivamente el 28 de junio de 1913) y la neutralización religiosa de las escuelas³⁶². El rumor tomó vuelo tras la visita de Azcárate y Cossío al rey en enero, y fue notificado a Roma enseguida de modo formal³⁶³.

El 5 de marzo, el Ministerio decidió oficialmente consultar al Consejo de Instrucción Pública la posibilidad de suprimir el catecismo en los estudios primarios, en pro de una mayor fidelidad a la Constitución³⁶⁴. Los sectores republicanos parecieron acoger fríamente el proyecto. Fuerzas vivas confesionales volvieron a protestar, en cambio, «en cándida cruzada»³⁶⁵. *El Debate* (ya en manos de la A.C.N. de P.) organizó un mitin en Madrid para exteriorizarla mejor. Menudearon los escritos³⁶⁶. Pero, el 15, una visita de Romanones al obispo de Madrid-Alcalá bastó para disipar la inquietud y los preparativos, por decisión episcopal³⁶⁷.

El Consejo de Instrucción Pública votó el dictamen el 25 de marzo³⁶⁸, y el Gabinete lo tradujo en decreto el 25 de abril de 1913. Exceptuaba del aprendizaje de la Religión a «los hijos de los padres que así lo deseen, por profesar religión distinta de la católica»³⁶⁹. La medida reducía, por tanto, al mínimo las esperanzas. «El *mons parturiens* —se dijo en uno de los mítines de protesta— resultó luego un *mus* ridículo, pero terrible y dañoso en su significación»³⁷⁰. Parece fue además inicio del desencanto de los republicanos atraídos por el Gobierno³⁷¹.

Todavía organizó éste en mayo la Inspección de Enseñanza Primaria, en la línea de sumisión de los centros privados. *El Debate* en Madrid y el Comité de Defensa Social en Barcelona organizaron sendos mítines contra la medida y contra la actuación del catedrático ovetense, afín a la Institución, Rafael Altamira, como director general de Primera Enseñanza³⁷². Y también ahora transigió el Gabinete, en nueva reforma de la propia Inspección, favorable a la independencia de los centros privados, que dio pie a la dimisión de Altamira³⁷.

En todo caso, reabiertas las Cortes el 26 de mayo tras su clausura de diciembre, los republicanos ya habían planteado un debate sobre la política del Ministerio para denunciar las mismas dilaciones que en Canalejas³⁷⁴. El 25 de octubre de 1913, una proposición de confianza en aquel fue rechazada en el Senado por 107 votos (de ellos 45 liberales) contra 102. Afloraba otra vez la escisión del partido, ahora entre romanonistas y seguidores de García Prieto, que había constituido el 21 el Partido Liberal Demócrata al margen de aquellos.

La vida política de los tres años últimos, por lo demás, venía siendo ganada abrumadoramente por los problemas internacionales. Y fue la guerra la que terminó de ocultar la problemática religiosa. «El Gobierno de Su Majestad, por el solo hecho de serlo, formáranlo quienes lo formasen, dejaba de ser de partido o de grupo para personificar a la Patria y servirle como único portavoz ante el mundo. Todo lo demás, incluso en ello el *Maura*, no y el *Maura*, sí, quedaba relegado a muy segundo término, frente a zozobras positivas y peligros previsibles de aquella hora crucial para la Humanidad entera»³⁷⁵.

La vigencia de la ley del candado cesó en diciembre de 1914, sin más renovación³⁷⁶. Pero el tema quedó como elemento aglutinante, que desembordaba ahora, sin embargo, el conservatismo social, crecientemente demostrado, del antiguo Partido Liberal Fusionista. Con caracteres más extremos que en 1896 y 98, la guerra venía a ocultar también una crisis de régimen que exigía otra vez la revisión del bipartidismo histórico. ¿Sería posible?

En el campo confesional, la presentación del hecho anticlerical como valor absoluto al menos entre 1906 y 12 contribuyó quizás a borrar, al fin, las diferencias doctrinales entre conservadores y tradicionalistas de diversos matices. A comienzos de 1910, como en 1899 ante Sancha, todavía el magistral hispalense Roca Ponsa había puesto simbólicamente sus consabidas puntualizaciones sobre el sentido de las *Instrucciones* dadas en Roma, en 1908, al Partido Integrista³⁷⁷. Al tiempo, las Normas de *Acción Católica y Social en España* publicadas por Aguirre en enero del año 10 eludieron el tema, acaso en línea con Comillas: «Si bien la acción política es indispensable para la acción social» —decían, en plena euforia de social-cristianismo—, era sobre esta última donde querían centrar la actividad confesional, incluso como modo de conseguir la unión de los católicos: «de forma que, en el campo social, pueden estar estrechamente unidos, aunque en política sustenten lícitamente ideas contrarias»³⁷⁸ (y de forma, además, que venía a cambiar el contenido predominantemente político en principio de aquellas Ligas o Juntas de Acción Católica de comienzos de siglo).

Pero la continuación de las disensiones entre los tradicionalistas, «precedentes en gran parte de conceptos inexactos y de falsas interpretaciones» de las *Instituciones* de 1908, y «las consultas que de varias partes se han sometido a la misma Santa Sede» obligaron a Pío X a intervenir de nuevo. En abril de 1911, Merry del Val comunicaba a Aguirre otras doce *Normas* dictadas por el Papa. En buena parte, parafraseaban o contenían las dirigidas al integrismo tres años antes, hasta el punto de de-

latar que estas habían servido de guía en la redacción. Pero reforzaban implícita y cuidadosamente, párrafo por párrafo, la posibilidad de un liberalismo católico, remitiendo a la carta de Rampolla al obispo Cámara de 1891³⁷⁹, que distinguía entre el liberalismo filosófico, condenado, y la denominación de liberal, en todo caso equívoca pero no repudiable en sí misma.

Las nuevas *Normas* corregían las de 1908 evitando la calificación de candidatos «menos indignos», frecuentemente utilizada al hablar de los conservadores³⁸⁰. No parecían mantener en cambio (y era importante) el carácter circunstancial dado en las *Instrucciones* a la unión de los católicos; puesto que la justificaban ahora en términos negativos: «Habiendo demostrado la experiencia cuánta dificultad hay siempre en obtener uniones *habituales* entre los católicos de España, es necesario e indispensable que el acuerdo se haga a lo menos *per modum actus transeuntis*, siempre que los intereses de la Religión y de la Patria exijan una acción común³⁸¹».

Tanto esa omisión de las alusiones peyorativas al conservatismo como el reforzamiento de cuanto podía referirse a la acción legal, con medios legales, tenía seguramente un significado preciso que fue ratificado en julio de 1911. A consulta del nuncio Vico sobre si las *Normas* sustituían o suponían las contenidas en la carta *Inter Catholicos Hispaniae* de 1906, en concreto en lo que atañía a la norma 11, la Santa Sede respondió en el primer sentido. Las *Normas* «deben considerarse como dadas *ex novo*; y de consiguiente la regla XI.³ sobre las elecciones, ella también debe entenderse como suena, sin recurrir a documentos anteriores»³⁸² —ni tampoco, por tanto, al planteamiento del «mal menor» y «los menos indignos» contenidos allí.

Implícitamente, la ortodoxia del Partido Conservador quedaba canonizada. Y esto no escapó todavía a los intransigentes. Por tercera vez, el magistral de Sevilla, José Roca Ponsa, respondía a las *Normas* pontificias con distinguos, en un tercer folleto: *¿Se puede en conciencia pertenecer al partido liberal-conservador?*³⁸³. No —contestaba—: por su ideología liberal, condenada, y sus procedimientos liberales, condenados también. Porque las *Normas* de Pío X aconsejaban sólo aprobar y apoyarle en lo que hiciera bien. Lo que cabía realizar sin afiliarse al partido. Todavía en 1912, otro libro suyo, *¿Cuál es el mal mayor y el mal menor?*, discutía la interpretación de esta doctrina transaccionista³⁸⁴.

En realidad, lo que se abría paso no era sólo el reconocimiento de la licitud del conservatismo ni una respuesta a la vieja polémica sobre la unión de los católicos. Se percibía el nacimiento de un nuevo estilo, lentamente gestado (en la larga historia que trazamos aquí) y avalorado ya por las manifestaciones confesionales de 1906 y 7: el activista católico, sin más apellido, ni otra intención que el testimonio y la presión política en sentido ortodoxo, sobre todo para lograr comprometer a la adormecida mayoría católica del país.

Las *Normas* de 1911 parecían ir ciertamente a despejar el camino hacia Maura, ya inmerso en su «implacable hostilidad», a quien, significativamente para Roma, su acentuado enfrentamiento al anticlericalismo contri-

buía a valerle el alejamiento de los elementos centristas de su partido en torno a Eduardo Dato ³⁸⁵.

Pero las *Normas* insistían también en la posibilidad de superar las divisiones con nuevas maneras de hacer política (en rigor en la línea del no menos viejo empeño del Partido Católico): en la licitud de «organizarse en las diversas regiones fuera de los partidos políticos hasta ahora existentes, e invocar la cooperación de todos los católicos indistintamente, dentro o fuera de tales partidos, con tal que dicha organización no tenga carácter antidinástico» ni exclusivista.

Sin olvidar que era este entonces aún un grupo naciente, tal vez fue sintomático que una de las consultas aludidas que motivaron tales reglas del año 11 había sido formulada por la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. En la primavera, José María de Urquijo había enviado a Roma a un miembro destacado de la A.C.N. de P. (Ángel Herrera Oria, un joven abogado estatal) y a dos representantes de aquella Junta de Vizcaya organizadora de las manifestaciones de 1910 (Epalza y Garmendía) a fin de pedir a la Santa Sede orientación «para sus propagandas futuras». Y Merry del Val les «ofreció el envío próximo de unas normas que ayudasen a esclarecer las principales cuestiones que entre nuestros católicos se planteaban» ³⁸⁶.

Es posible que también influyera en ello el replanteamiento del pleito doctrinal en las elecciones provinciales de marzo de 1911, cuando el obispo de Madrid invitó a la candidatura carlointegrísta —Defensa Social «a borrar el calificativo de antiliberal» que ostentaba ³⁸⁷ (lo que en principio sólo obedeció el último centro).

Tras las *Normas*, el acuerdo «de todos los elementos de orden» continuó siendo pasajero: así en las elecciones municipales de noviembre, en Barcelona y otras poblaciones de España ³⁸⁸. En 1913, aún volvió a sugerirlo la A. C. N. de P. a través de *El Debate*, ante el planteamiento de la defensa del catecismo en las escuelas por medios legales: «Véase dónde está un programa mínimo, alrededor del cual podríamos unirnos todos los católicos»; entendido que no se trataría «de fusión de ningún linaje, ni de pérdida de independencia, ni de renuncia a aspiraciones muy legítimas, sino de algo circunstancial y referente a puntos bien concretos» ³⁸⁹. En realidad, a la hora de precisar ese programa, también ahora se perfiló algo más que un mero criterio defensivo aceptable por todos: parece que la unión había de perseguir la defensa y el cumplimiento de la legislación católica ya vigente, la dotación presupuestaria a los centros educativos confesionales proporcionada al peso fiscal que soportasen los católicos, representación proporcional, regionalismo y sindicalismo agrario ³⁹⁰. En verdad, ni el intento era nuevo ni terminaba de resolverse la imposibilidad y la ilicitud de imponer a todos los católicos aspiraciones acertadas o no pero en principio discutibles como el regionalismo y la proporcionalidad.

De otro lado, las fuerzas históricas seguían pesando y haciendo su propio camino. También en 1913, Vázquez de Mella ofrecía inútilmente a Maura, según parece, la jefatura del tradicionalismo ³⁹¹. En 1914 en cambio, por su parte, Comillas y Defensa Social apoyaban a Dato, disconformes

aquéllos y éste con el aislamiento de Maura, en las elecciones legislativas³⁹².

NOTAS

¹ La densidad de la documentación diplomática que empleamos en el estudio del periodo 1909-1913, cuya inclusión en el texto lo haría aún más prolijo, nos fuerza a dar un desarrollo anormal a las notas a pie de página. De ahí que reduzcamos las referencias bibliográficas a las que nos parecen indispensables como apoyo del propio texto. Puede hallarse una relación de publicaciones mejor en José Manuel Cuenca: *Estudios sobre la Iglesia española del XIX*, Madrid, Ed. Rialp, 1973, pág. 103 ss., 233 ss. Para el contorno político, siguen siendo imprescindibles las obras del duque de Maura y Melchor Fernández Almagro: *Por qué cayó Alfonso XIII. Evolución y disolución de los partidos históricos durante su reinado*, 2.^a ed., Madrid, Ed. Ambos Mundos, 1948, y Jesús Pabón: *Cambó, 1876-1918*, Barcelona, Ed. Alpha, 1952.

² Puede verse nuestro planteamiento del *status quaestionis* en *Problemas en torno a la Semana Trágica*, «Atlántida», IX (1971), 71-79 y, sobre todo, el notable estudio de Joan Connelly Ullman: *The Tragic Week. A Study of Anticlericalism in Spain, 1875-1912*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1968, 441 pp.

³ «El resultado de los procesos substanciados fue el siguiente hasta el 19 de mayo de 1910: penas de muerte, 5; reclusión perpetua, 59; reclusión temporal, 18; prisión mayor, 13; prisión correccional, 39; arrestos, 85; multas, 98; absoluciones, 584; sobreseimientos, 469; rebeldías, 214; inhibiciones, 110; pendientes de fallo, 31» (Melchor Fernández Almagro: *Historia del reinado de don Alfonso XIII*, 2.^a ed. ilustrada, Barcelona, Montaner y Simón, 1934, pág. 144). Suman 1.725. Entre los sucesos de julio y el 31-VIII-1909, habían sido detenidos 1.112 personas, reclusas en las cárceles de Barcelona, según informe del gobernador (cfr. La Cierva: *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, sesión de 19-X-1909).

⁴ El propio ministro de la Gobernación Juan de la Cierva y Peñafiel dice sobre Ferrer que «la investigación de la Policía y de los Tribunales instructores le señalaba como el principal o uno de los principales jefes de la revolución» (*Notas de mi vida*, 2.^a ed., Madrid, Instituto Editorial Reus, 1955, pág. 143).

⁵ El mito de la culpabilidad de Ferrer se fue formando inmediatamente después de lo ocurrido. El 4 de agosto, *La Epoca* culpó a los lerrouxistas, en tesis que prosperó enseguida en la prensa conservadora y en la *Lliga* (y que ahora ha sido desarrollada en el libro de Ullman). Pero su misma insinuación del 3 y el 4 sobre el papel secundario de Ferrer fue ampliada al parecer por *El Siglo Futuro* del 9 y más tarde por *El Universo*, para cuajar definitivamente con las declaraciones en *La Epoca* del 28 del fiscal del Tribunal Supremo. Ugarte, enviado especialmente para informar sobre ello. En principio, el propio Ugarte había afirmado la responsabilidad del Partido Radical de Lerroux. Mas su investigación en Barcelona le hizo rectificar (cfr. Salillas: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 5-VII-1910). El defensor de Ferrer advertiría que quienes testificaron contra él eran precisamente sus enemigos políticos, sobre todo radicales (vid. Luis Antón de Olmet y Arturo García Carraffa: *Maura*, Madrid, Imprenta de «Alrededor del Mundo», 1913, pág. 325 ss., 338 ss.) y se dió después que los socialistas habían vetado en el comité de huelga la intervención del anarquista (cfr. Manuel Cosses Anaricio: *España bajo la dinastía de los Borbones*, Madrid, M. Aguilar, editor, 1932, pág. 407).

⁶ Vid. Pabón: *op. cit.*, 337 y 342.

⁷ *Au pays des inquisiteurs*, anunció *La Guerre Sociale*, habían sido apresados tras la Semana Trágica 8.000 individuos. Se habló de los tormentos que

padecían, sobre todo en Montjuic. Según el *Daily Express* del 6-VIII-1909, habían sido fusilados 150 en esa fecha (vid. La Cierva: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 19-X-1909). Apresado Ferrer al comenzar septiembre, el 4 se formaba en París un *Comité de Défense des victimes de la répression espagnole*. Las informaciones de este organismo y las de otras publicaciones no españolas fueron rectificadas por la prensa republicana peninsular y por Pablo Iglesias en *Le Peuple* de Bruselas (vid. *ibídem*; Fernández Almagro: *Historia del reinado...*, 149; Diego Sevilla Andrés: *Antonio Maura. La revolución desde arriba*, Barcelona, Ed. Aedos, 1954, pág. 360).

⁸ Cfr. Fernando Soldevilla: *El año político 1909*, Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas, 1910, pág. 363-394 (BDN), y Modesto H. Villaescusa: *La revolución de julio en Barcelona. Hechos, causas y remedios*, Barcelona, Herederos de Juan Gili, 1909, pág. 125 ss. (BCB). Para forzar el indulto de Ferrer, ya condenado, se habló de una petición de Pío X a Alfonso XIII en tal sentido (vid. Moret: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 19-X-1909), que, en realidad, fue un proyecto de telegrama, evitado por las gestiones de Ojeda (vid, nota 16

intra).

⁹ Vid. en ese sentido Alberto Mousset: *La política exterior de España 1873-1918*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1918, pág. 192. ss.

¹⁰ Sobre las exageraciones y acerca de la postura de ABC, vid. La Cierva: *op. cit.*, 104 s., 149; Villaescusa: *op. cit.*, 127 ss., 146; La Cierva: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 19-X-1909.

¹¹ Cfr. *ibidem*. Se hablaría de la influencia de Simarro o de Francisco Giner de los Ríos en este viraje de Moret contra Maura (vid. María Dolores Gómez Molleda: *Los reformadores de la España contemporánea*, Madrid, C. S. I. C., 1966, pág. 472).

¹² Nota de Maura a Alfonso XIII sobre la crisis, apud Villaescusa: *op. cit.*, 150. Vid. Antón de Olmet...: *op. cit.*, 344 s., sobre la crisis del Gobierno.

¹³ Cit. Pabón: *op. cit.*, 261.

¹⁴ Vid. Carlos Seco Serrano: *Alfonso XIII y la crisis de la restauración*, Barcelona, Ariel, 1969.

¹⁵ Cit. Maura...: *Por qué...*, 159.

¹⁶ Vid. las protestas formales de los prelados de la provincia eclesiástica de Zaragoza, del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, de la Junta Central de Acción Católica (apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 24-VIII-1909), del obispo de Vic Torras y Bages (cfr. Josep Benet: *Maragall davant la Setmana Tràgica*, 2.^a ed., Barcelona, Ediciones 62, 1964, pág. 74 s.), del Comité de Defensa Social (apud *Revista Popular*, 16-IX-1909), entre otros. Sobre la campaña internacional, el 12-X-1909, el embajador ante la Santa Sede, Ojeda, telegrafía sobre Roma al ministro español de Estado: «Decretada y cumplida huelga general ha tenido hoy lugar *meeting* pro Ferrer sin que hasta ahora haya ocurrido ningún incidente deplorable merced precaución extraordinaria autoridad italiana. Esta Embajada ha sido circundada por 600 soldados que han impedido todo acceso a plaza España y custodiada eficazmente Embajada. Las tropas permanecen formadas. Telegrafiaré V. E. si algo ocurre. Ojeda.» Lo hace el 13, sobre la cuestión apuntada en la nota 8 supra: «*Muy reservado*. En este momento —una y treinta de la tarde— recibo carta Cardenal Secretario Estado, que reproduzco literalmente a Vucencia a continuación: "Muy confidencial; habrá V. notado lo que dicen los periódicos sobre una intervención de S. S. en favor de Ferrer. Excuso decir que el Santo Padre nada hará que no fuera de acuerdo con S. M. y el Gobierno Español y de su completo agrado, pero, naturalmente, si S. M. y el Gobierno *desean* (esta palabra subrayada) que el Papa interceda, juzgando que sea ésta una manera útil y oportuna para salir de una situación, aquí me tiene V. a su disposición para hablar de la cosa a S. S. No tenemos elementos suficientes para formar una oposición aquí en un sentido o en otro, pero ya saben V. y el Rey que el Santo Padre desea siempre ayudarlo en todo lo que pueda. (Firmado, Cardenal Merry)" = Ojeda.» El ministro responde al embajador el 14: «Ferrer ejecutado ayer nueve mañana. Consejo Ministros había exa

minado anteayer sentencia poniendo fórmula de costumbre para casos en que no procede indulto. Supongo Santa Sede rectificará afirmaciones prensa respecto a su intervención en favor Ferrer y desde luego estimo más fácil y eficaz sea ella y no Gobierno de S. M. quien lo haga. De todas suertes agradezco términos carta Secretario Estado y su deseo ayudarnos, si doloroso, pero inexcusable cumplimiento justicia hubiera necesitado ceder a consideraciones oportunidad o conveniencia pública y circunstancias hubieran aconsejado ese procedimiento. = Allendesalazar.» El 14 aún, Ojeda explica a éste sus primeras gestiones: «Recibido telegrama de Vucencia, ayer mismo pedí Secretario de Estado carta privada rectificación noticias prensa sobre intervención S. S. Mañana, si estado de esta ciudad lo permite, iré ver Su Eminencia, recogeré respuesta y le comunicaré telegrama de Vucencia de hoy. Reanudada hoy huelga general de cuarenta y seis horas, siguen numerosas tropas y policía custodiando esta Embajada y plaza España en estado sitio. Municipio lanzado proclama violenta contra España e izado bandera negra. Varias Asambleas populares amenazan Gobierno Italia con continuar huelga si no rompe relaciones con España y arroja a sus Embajadores y Cardenales españoles y piden abrogación leyes garantías. Aunque reina grandísima agitación ánimos populacho y radicales y socialistas, no ha habido que lamentar hasta ahora desgracias, según tengo entendido, pues mi aislamiento me impide tener noticias. Actitud toda prensa en general, francamente hostil a España. Ojeda.» El 15, probablemente ante noticias semejantes del embajador español en el Quirinal, Allendesalazar telegrafía a éste: «Recibido telegrama V. E. situación pareceme delicada, pero no dudo Gobierno la dominará y se dará cuenta que en definitiva se trata aprovechar caso Ferrer para poner evidencia solidaridad partidos anarquistas Europa y su actitud para proceder acuerdo. Ayer escribí V. E. señalándole grave incorrección Consejo provincial Génova dirigiéndose a S. M. sobre indulto Ferrer. A ella hay ahora que añadir manifiesto alcalde Roma que V. E. me comunica. Parece, además, que Colegio abogados Roma ha escrito al de Madrid exponiendo no considera jurídica sentencia dictada. Confío tacto y prudencia V. E. para obtener Gobierno Italiano mantenga a corporaciones oficiales en límite sus atribuciones. Debo creer asimismo que seguridad ambas Embajadas y establecimientos españoles está a salvo todo ultraje. Dígame si otros puntos Italia se han producido manifestaciones. Allendesalazar» (AMAE/SCS, leg. 1.741).

¹⁷ Reproduce la protesta y la contestación la *Revista Popular*, 9-IX-1909.

¹⁸ Fernández Almagro: *Historia del reinado...*, 155.

¹⁹ Vid. Fernando Soldevilla: *El año político 1904*, Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas, 1905, pág. 386-370, 384 s. (BDN), y *La Cruz* (1905), I, 84.

²⁰ *Revista Popular*, 7-X-1909.

²¹ *Ibidem*, 14-X-1909.

²² Cfr. *ibidem*, 11-XI-1909. Ratifica el empeño solidario de la *Lliga* como raíz del fracaso Isidre Molas: *Lliga Catalana. Un estudi d'Estasiologia*, Barcelona, Edicions 62, 1972, vol. I, pág. 84.

²³ Cfr. Soldevilla: *op. cit.* (1909), 424.

²⁴ Cfr. *ibidem*, 465 ss.

²⁵ *Revista Popular*, 27-I-1910. Vid. Soldevilla: *op. cit.* (1909), 482 s., sobre ofertas de armamento para comunidades religiosas.

^{25 b} *La Avaluancha*, 24-XII-1909.

²⁶ Nicolás González Ruiz e Isidoro Martín Martínez: *Seglares en la historia del catolicismo español*, Madrid, Raycar, 1968, pág. 32 s. Estos mismos autores (*ibidem*, 30) recogen esta afirmación de Herrera en 1943: el nuncio Vico había llamado a Avala «para exponerle que era deseo de la Santa Sede la organización de la Acción Católica en España y consideraba conveniente comenzar por la Rama de la Juventud; el padre Ayala le propuso empezar por un grupo de jóvenes selectos que más tarde podrían ser los fundadores de la Juventud Católica Española». A más de treinta años de los sucesos, en realidad estos recuerdos desdibujan la realidad, pero en términos que siguen siendo repetidos por la historiografía más reciente. La A. C. N. de P. no pudo na-

cer para organizar la Acción Católica, porque ésta era ya una organización más o menos desarrollada, desde 1888 al menos, según veíamos en el capítulo I. Y de ningún modo pudo ser dirigida a la fundación de la Juventud Católica que existía desde 1868 y subsistía a comienzos del siglo xx. De hecho cuando la Acción Católica fuera reorganizada en 1926 (vid. nuestro estudio *Génesis de Acción Católica española, 1869-1926*, «Ius canonicum», XIII (1973) tanto la Juventud Católica como la A. C. N. de P. serían consignadas separadamente y de modo expreso entre los grupos asumidos por la propia organización (vid. Narciso Noguer: *La Acción Católica en la teoría y en la práctica, en España y en el extranjero*, Madrid, «Razón y Fe», 1929, tomo I). Así mismo por todo lo visto en los capítulos anteriores, no parece cierta la iniciativa exclusiva que atribuyen a la A. C. N. de P. estos párrafos transcritos por Manuel Fernández Areal: «Esta fuerza católica, que nació «al principio más como reacción contra el anticlericalismo del Gobierno de Canalejas que como acción positiva», hizo «por primera vez bandera política en la vida pública de los criterios sociales católicos», y por primera vez también «sin adscribirla a ningún pleito dinástico, se hizo pública afirmación de catolicismo como programa político en sus aplicaciones y consecuencias para la vida del Estado español» (*La política católica en España*, Barcelona, Dopesa, 1970, pág. 96).

^{28 b} *La Avalancha*, 24-XII-1909.

^{28 c} Severino Aznar: *Estudios religioso-sociales*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1949.

²⁷ José Francos Rodríguez: *La vida de Canalejas*, Madrid, Tip. de la «Rev de Arch., Bib. y Museos», 1918, pág. 494.

²⁸ Vid. Pabón: *op. cit.*, 366.

²⁹ Apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 15-XII-1909.

³⁰ «Contra la afirmación que se atribuye a la primera autoridad civil de la provincia [de Barcelona], de que nadie se ha preocupado de acudir a la información abierta sobre las escuelas clausuradas, es un hecho que por acuerdo de la Sección de Enseñanza del Comité de Defensa Social se vienen examinando desde hace días los expedientes de las que funcionaban en esta capital siendo de lamentar la escasez de tiempo señalado para este examen, ... a pesar de haberse anunciado en el *Boletín Oficial de la Provincia* del 24 de Noviembre último que durante veinte días hábiles se pondrían de manifiesto los expedientes de tales escuelas para que el público pudiera aducir los datos y exponer lo que estimase respecto de las condiciones de los maestros, libros de texto y enseñanzas que se den, resulta que faltan la mayor parte de dichos expedientes, y de los que existen no aparecen datos suficientes para informar» (*Revista Popular*, 16-XII-1909).

³¹ Cfr. *El Liberal*, 8-I-1910.

³² Cfr. *Revista Popular*, 20-I-1910; *El Imparcial*, 3-II-1910; José María Salvador y Barrera: *El estado docente. Carta pastoral que el Excmo. e Ilmo. Señor Dr. D. ... Obispo de Madrid-Alcalá dirige al clero y fieles de su diócesis con motivo del Santo Tiempo de Cuaresma*, Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1910, pág. 27 (BDN).

³³ Vid. *El Liberal*, todo enero y 2-II-1910.

⁴ *Ibidem*, 4-II-1910. Vid. V. Minteguaga: *La real orden circular sobre las escuelas laicas*, «Razón y Fe», 1-IV-1910. Sobre el tema de la enseñanza ácrata, vid. Clara de Lida: *Educación anarquista en la España del ochocientos*, «Revista de Occidente», núm. 97 (1971), 33 ss., y la valoración de Ferrer como pedagogo en la tesis de Sol Ferrer: *La vie et l'œuvre de Francisco Ferrer. Un martyr au XIX siècle*, París, Fischbacher, 1962, 239 pp.

³⁵ Vid. *Revista Popular*, 1-VII-1909.

⁶ *Ibidem*, 5-I-1910.

³⁷ *El Liberal*, 4-II-1910.

⁸ *Ibidem*, 1-I-1910.

³⁹ Daniel López: *El Partido Liberal. Conversaciones con D. José Canalejas*, 1.ª serie, Madrid, Establecimiento Tipográfico Editorial, 1912, pág. 119 (BDN).

⁴⁰ *El Imparcial*, 15-XII-1909.

⁴¹ AMAE/SPS, leg. 2.678, expediente «1910. Negociación para determinar la situación de las Ordenes y Congregaciones religiosas en España».

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Alteramos, sin variar el sentido, el orden de los párrafos citados en el texto original: «Aunque he dicho al Nuncio [sigue lo transcrito en el texto] ... que determina el Protocolo. = ... Comparando dicho protocolo con el que ahora se propone observará Vd. que las diferencias esenciales consisten en los dos extremos arriba mencionados, a saber, la limitación a tres ... [de nuevo en el texto] *inter graviores*. = El artículo primero del nuevo proyecto no es exactamente igual al que proponía el duque de Almodóvar, pues he modificado su redacción suprimiendo la frase «gozarán de especial protección y favor del Gobierno de S. M.» para evitar todo equívoco respecto al significado de esas palabras y aclarar bien que las tres Ordenes a que se refiere dicho artículo se hallan fuera de la legislación común. = El artículo segundo se ha modificado algo de como lo había redactado el duque de Almodóvar para ponerlo en armonía con las necesidades actuales, pues, perdidas las Colonias, no hay para qué mantener excepción alguna en favor de los colegios de misioneros a que se refería la ley de 1837 y, en cambio, en vista de la situación actual se han añadido los colegios de misioneros para Marruecos, Tierra Santa y posesiones españolas del África occidental. = El artículo tercero marca, comparado con el primero del Protocolo que firmó el Señor Rodríguez San Pedro una diferencia de criterio fundamental [sigue en el texto] en cuanto a su vida y funcionamiento. Además el artículo primero del protocolo del Señor Rodríguez San Pedro admitía la inscripción de las Ordenes y Congregaciones religiosas cualquiera que fuera la época en que se efectuara hasta la fecha de la ratificación de dicho instrumento: en el proyecto presentado ahora sólo se reconoce eficacia a las inscripciones efectuadas conforme a la Real orden de 9 de abril de 1902, pues las Ordenes y Congregaciones religiosas que no se hubieran inscrito oportunamente o que se hayan creado después quedaron sujetas a la legislación común conforme a las disposiciones de dicha Real orden. Los artículos cuarto y quinto de mi proyecto guardan relación con la Bula *inter graviores* que en ellos se cita. = Los artículos VI, VII, VIII y IX son iguales a los artículos III, IV, V y VI del protocolo de 1904 con ligeras variantes; la principal de ellas consiste en señalar que hará falta una ley y un Real Decreto en vez de un Real Decreto y una Real orden para la creación en España de una nueva Orden o de un nuevo Convento de cualquiera de las Ordenes ya establecidas. = El artículo X del proyecto es igual al IX del protocolo Rodríguez San Pedro. = El XI corresponde al X del referido protocolo, pero modificando la competencia del registro especial que se abrirá en Gracia y Justicia en consonancia con el distinto criterio aceptado respecto a la eficacia de la inscripción prevenida por la Real orden de 1902» (Real orden de 22-I-1910, del ministro de Estado al embajador ante la Santa Sede, *ibidem*).

⁴⁴ Telegrama del embajador al ministro de Estado, 28-I-1910, *ibidem*.

⁴⁵ Carta del embajador al ministro de Estado, 29-I-1910, *ibidem*.

⁴⁶ Telegrama del ministro de Estado al embajador, 29-I-1910, *ibidem*.

⁴⁷ Despacho núm. 4, 31-I-1910, del embajador al ministro de Estado, «Contestó el Cardenal —relata en él Oieda sobre su entrevista con Merry para comunicarle el contenido del telegrama del 29 citado en la nota anterior— que apreciaba las explicaciones que V. le daba en el mismo espíritu de amistosa concordia y que estaba dispuesto a admitir la sana intención que a V. animaba, pero que en vista del penúltimo párrafo de su Nota el Nuncio Su Santidad y él habían convenido que era inútil negociar ... [sigue lo transcrito en el texto] proposiciones contenidas en la Nota. = Es por lo tanto imposible, añadió, someter la Nota a la Congregación en su forma actual, Su Santidad se sentiría humillado al hacerlo y la Secretaría de Estado vería rebajado su prestigio ante el Colegio de Purpurados. = Al insistir yo más y más en desvanecer un error de concepto que no podía en mi sentir afectar al fondo de la cuestión; esto es la inteligencia cordial entre el Gobierno y la Santa Sede en materias de tan trascendental importancia me contestó el cardenal que no se

opondría a cualquier arreglo a formular entre el Nuncio y V. que contribuyera a poner las cosas en su punto y que había dado al efecto instrucciones a su representante que llegarían a sus manos probablemente hoy Lunes.»

⁴⁸ «Muy Señor mío: Tuve el honor de recibir a su tiempo la importante comunicación de V. E., fecha el 21 de enero último, y me apresuré, con la urgencia que V. E. me recomendaba, a pedir instrucciones al Eminentísimo Sr. Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad. Acabo de recibirlas y cumplo con el deber de poner en conocimiento de V. E., que Su Santidad, ansioso siempre de mantener las mejores relaciones con los Gobiernos de la Católica España, por más que no tenía interés, ni deseo de volver de nuevo sobre una cuestión ya resuelta, y aun previendo que sobre varios puntos no habría sido fácil llegar a un acuerdo; todavía estaba pronto, en el momento en que el Gobierno lo hubiese querido, a entrar con él en amigables tratos, conforme a las intenciones que V. E. mismo manifestó al Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado, en la conferencia que con él tuvo antes de salir de Roma para España. = Mas, ya que ahora el Gobierno, según aparece en la última parte de la Nota de V. E., se muestra del modo más abierto decidido ya desde ahora a no tener en cuenta la contestación de la Santa Sede, si no es favorable a sus proposiciones, y a tomar en tal caso por su parte las disposiciones que tenga por conveniente; Su Santidad no estima digno de la Santa Sede, ni útil entrar en negociaciones que, con tal disposición del Gobierno, evidentemente no podrían conducir a ningún buen resultado. = Pero ya se entiende que la Santa Sede se reserva plena libertad de juicio y acción sobre lo que el Gobierno haga en el asunto» (nota del nuncio de Su Santidad en Madrid al ministro de Estado, 3-II-1910, *ibidem*).

⁴⁹ Telegrama del ministro de Estado al embajador, 6-II-1910, sobre una entrevista del 5 entre el rey y el nuncio, *ibidem*.

⁵⁰ Cfr. nota del ministro de Estado al nuncio, 6-II-1910, *ibidem*. En ella le responde que la de los institutos de perfección cristiana no es cuestión ya resuelta; porque el Convenio de 1904 sólo fue aprobado por el Senado. Que la nota del Gobierno no tenía intención conminatoria ni pretendía despreciar el criterio de Roma; porque, de lo contrario, no la habrían presentado. «Al reproducir esta invitación, con el espíritu más leal, sincero y amistoso, me permito significar la conveniencia de que dichas observaciones sean presentadas cuanto antes, para poder aprovechar el plazo que nos separa de la reunión de las futuras Cortes, plazo abreviado ya por la negativa de la Nota a que contesto, pero que sería todavía suficiente si, como espero, la Santa Sede corresponde a la deferente actitud del Gobierno español, para lograr el acuerdo solicitado.»

⁵¹ En carta de 7-II-1910, el nuncio pide medio al ministro de Estado para comunicar al rey «la contestación de Su Santidad al telegrama que envié por encargo del Rey». En carta también del 7, el ministro le responde que Alfonso XIII está ausente (*ibidem*).

⁵² Vid. Pabón: *op. cit.*, 372.

⁵³ Vid. Maura...: *Por qué...*, 162.

⁵⁴ Cit. *ibidem*, 161. Cfr. *El Liberal*, 24-II-1910.

⁵⁵ *El Liberal*, 10-II-1910.

⁵⁶ Cfr. Fernández Almagro: *Historia del reinado...*, 164.

⁵⁷ Vid. Francos Rodríguez: *op. cit.*, 498.

⁵⁸ Cfr. *El Liberal*, 18 y 20-II-1910.

⁵⁹ Cit. Fernández Almagro: *Historia del reinado...*, 163.

⁶⁰ Cfr. *El Liberal*, 23-II-1910.

⁶¹ Cfr. Fernando Soldevilla: *El año político 1910*, Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas, 1911, pág. 86 s. (BDN).

⁶² Vid. *El Liberal*, 16-III-1910.

⁶³ Vid. *Revista Popular*, 24-III-1910, sobre Barcelona, y Fernández Almagro: *Historia del reinado...*, 164, sobre Valencia.

⁶⁴ Vid. Vicente Ramos: *Rafael Altamira*, Madrid, Alfaguara, 1968, página 148 ss.

⁶⁵ Francos: *op. cit.*, 501.

⁶⁶ Cfr. *Revista Popular*, 10-II a 28-IV-1910, y Soldevilla: *op. cit.* (1910), 67-126.

⁶⁷ Cfr. *Revista Popular*, 2-VI-1910. Vid. los resultados barceloneses en Molas: *op. cit.*, I, 88.

⁶⁸ Cfr. *El Imparcial*, 16-III-1910.

⁶⁹ *Op. cit.*, 501.

⁷⁰ Cfr. *ibidem* y Miguel M. Cuadrado: *Elecciones y partidos políticos de España (1868-1931)*, Madrid, Taurus, 1969, vol. II, pág. 762.

⁷¹ Vid. *Revista Popular*, 2-VI-1910. En Madrid, el Centro de Defensa Social «estuvo a punto de presentar candidatura separada. Luego no lo hizo, para no dispersar votos monárquicos, pero uno de sus miembros se presentó a las elecciones senatoriales, resultando elegido» (Javier Tusell: *Sociología electoral de Madrid*, Madrid, Edicusa, 1969, pág. 83).

⁷² Cfr. Fernández Almagro: *Historia del reinado...*, 168.

⁷³ Soldevilla: *op. cit.* (1910). 186 s.

⁷⁴ Cfr. *El Liberal*, 20-V-1910.

⁷⁵ Cfr. *ibidem*, 11 y 29-III-1910.

⁷⁶ Cfr. José María Javierre: *Merry del Val*, Barcelona, Juan Flors, editor, 1961, pág. 404.

⁷⁷ Cfr. *El Liberal*, 29-III-1910.

⁷⁸ Telegrama del ministro de Estado al embajador ante la Santa Sede, 4-IV-1910, AMAE/SPS, leg. 2.678, expediente «1910. Negociaciones sobre la cuestión de las Ordenes y Congregaciones religiosas desde la formación del Gabinete Canalejas hasta la llamada a España del Embajador Señor Ojeda».

⁷⁹ Antes del consejo, el 3-IV-1910, Ojeda comunicó ya en Roma a Merry del Val las primeras indicaciones recibidas del Gabinete; pero no las reprodujo fielmente: «le avisé propósito Gobierno de S. M. sobre limitación congregaciones, necesidad de aplicarles leyes vigentes y sometiéndolo en adelante a una futura ley general de asociaciones por medio de una comisión en que figurará un eclesiástico que podrá ser designado por S. S. a fin de que dicha comisión proceda en lo posible con Roma, e insistimos en los sinceros y vivos deseos del Gobierno de S. M. de obrar en armonía con la S. Sede y de no intentar en ningún caso nada a espaldas suyas y sin previo conocimiento de esta S. Sede». El cardenal quedó complacido, sobre todo por la idea de la comisión (telegrama del embajador al ministro de Estado, 3-IV-1910, *ibidem*). El ministro le contestó el 4: «Particular. Descifre V. E. mismo. Muy sorprendido con su telegrama pues le encarecí hablase primera entrevista solamente propósitos generales Gobierno proceder absoluta lealtad expresando aquellos extremos a que no intentaba llegar e indicando sobre punto concreto órdenes religiosas que aspirábamos a reducir las y regularizar su situación jurídica. Veo por telegrama que no sólo expuso V. E. todo lo que pudiesen ser ideas personales algunos miembros Gabinete, sin carácter oficial hasta que Consejo Ministros deliberase y las aceptase, nada de lo cual ha sucedido sino que las interpretó en términos que no estuvieron jamás en nuestra intención de que S. S. designase un Eclesiástico para Comisión futura ley Asociaciones, de modo que ésta procedería en lo posible acuerdo con Roma. Lo que dijo V. E. como idea mía no meditada aún ni para indicada, pues todavía no la sometí Consejo fue que si éste no decide presentar directamente a las Cortes proyecto ley Asociaciones y acuerda como muchos recomiendan nombramiento Comisión extra-parlamentaria que prepare trabajo sobre regularización derecho Asociación abriendo información pública, ante ella podrían informar Congregaciones como demás ciudadanos y hasta quizá podría intentarse formase parte de ella un Prelado designado por Gobierno pues éste no puede abdicar ni debilitar su potestad para regularizar aquel derecho. Tampoco nos proponemos consultar Episcopado sobre *statu quo* legal y canónico Congregaciones diferentes diócesis, sino aplicar disposiciones civiles vigentes y pedir aplicación de las canónicas solicitando además la reducción de innecesarias según cada Obispo. Pero aun eso lo iría indicando V. E. o Nuncio a medida lo aprobase Consejo

y fuese conveniente según circunstancias. Debo suponer, por lo tanto, que sus manifestaciones a Cardenal Secretario tuvieron carácter de impresiones puramente personales sujetas a las necesarias reservas y adecuadas rectificaciones. Ruego V. E. me diga urgentemente si es así y caso negativo aproveche primera ocasión para poner manifiesto ante Cardenal verdadero alcance de su conversación interin instrucciones Gobierno no concretan pensamiento y proposiciones — García Prieto.» En nuevo telegrama, Ojeda respondía el 5 al ministro que lo dicho a Merry fue «puramente confidencial». El mismo día fue «tratado el asunto en el Consejo de Ministros del 5 de Abril», según consta, manuscrito, en el documento que reproduce las bases acordadas sobre la política a seguir por el Ministerio: «Dada cuenta, por el Ministro de Estado, del proyecto de protocolo que el Gabinete anterior presentó al Nuncio Apostólico en... [sic] Enco último para definir la situación jurídica de las Ordenes religiosas en España, el Consejo acuerda: = 1.º Los esfuerzos del Gobierno tenderán a que el número de Ordenes y Congregaciones religiosas existentes en España se reduzca, intentando, para los fines de concordia entre ambas Potestades, que sea la Iglesia misma la que lleve a cabo la reducción. = 2.º El artículo 29 del Concordato, al reconocer a ciertas comunidades de varones el derecho a un auxilio especial del Estado, no puede interpretarse en el sentido de que aquéllas estén exentas de las leyes civiles. = 3.º En todo caso los favores que derivan del referido artículo 29 del Concordato sólo pueden invocarlos las Ordenes y Congregaciones mencionadas en el mismo y si alguna se ha extinguido o no ha llegado a determinarse, no es al Estado a quien toca la iniciativa para extender, en sustitución, a otras, aquellas ventajas. = 4.º Las Ordenes y Congregaciones, que, una vez realizada la reducción prevista por el acuerdo 1.º, hayan de subsistir, se sujetarán a los preceptos que regulen el ejercicio del derecho de asociación en España. Reconoce el Consejo que la ley de 30 de Junio de 1887 necesita sustituirse por otra que responda mejor a las modalidades variadísimas que el referido derecho, en su aplicación a los múltiples fines de la vida, ha tomado hoy. Los trabajos preparatorios de la reforma suministrarán oportunidad para que, en las mismas condiciones que a los demás ciudadanos, se oiga a los Prelados y Asociaciones religiosas sobre las dificultades que estas últimas afirman que hubieran hallado o hallarian en el cumplimiento de la citada ley de 1887. = 5.º Vigente el *modus vivendi* de Abril de 1902 con la Santa Sede procede que desde luego use la potestad civil de todas las facultades que consigna la Real Orden de 7 de dichos mes y año» (*ibidem*).

⁶⁰ «Al Embajador de Su Majestad cerca de la Santa Sede. = Madrid, 6 de Abril de 1910. = Excmo. Señor: = Durante la reciente estancia de V. E. en esta corte, hubimos de recomendarle, así el Señor Presidente del Consejo de Ministros como yo, que evidenciase ante la Santa Sede la necesidad en que el Gobierno de S. M., hoy más que nunca, se encuentra de llegar a la solución de los problemas jurídico-religiosos pendientes en España y muy en especial de los relativos a la disminución y situación legal de las Ordenes y Congregaciones. = Al enumerar, las razones que abonan esa necesidad, derivadas unas de nuestro propio sentir... [sigue en el texto] se vive hace años, encargamos a V. E. que manifestase al Cardenal Secretario de Estado, según ya por nuestra parte hemos manifestado al Muy Reverendo Nuncio Apostólico: = *Primero*, que, sin abandonar los principios que sirven de distintivo al partido liberal democrático en España, el actual Gabinete atenderá sobre todo a la eficacia práctica de sus iniciativas, esperando que, a su vez, la sabiduría y paternal benevolencia del Sumo Pontífice pondrán asimismo la mira en los resultados, coadyuvando a hallar reglas de aplicación fecundas y satisfactorias para ambas Potestades; y = *Segundo*, que la Santa Sede debe sentirse al abrigo de toda sorpresa, va que ninguna determinación del Estado susceptible de trascender a sus relaciones con la Iglesia, se tomaría sin que aquélla estuviera advertida, fieles nosotros a la lealtad que con todos guardamos, pero más aún si en semejantes materias caben grados, con la autoridad eminentemente moral del Pontificado. = En este orden de ideas, cúmplame hoy encargar

a V. E. que informe confidencialmente a Su Eminencia el Cardenal Secretario de Estado de un propósito del Gobierno de S. M., cuya corrección y legitimidad no se ocultarán a nadie, pero sobre el cual, en todo caso, conviene prevenir equívocos. = El Gabinete de Madrid, estimando que el Concordato de 1851 sólo autoriza las Ordenes expresamente previstas en este pacto y que, por tanto, únicamente a las mismas alcanza la exención de los preceptos de la ley de 30 de Junio de 1887 que la propia ley en su artículo 2.º señala, dictó en 19 de Septiembre de 1901 un Real decreto para que en el término de seis meses fueran cumplidos los requisitos de esta última por todas las demás Asociaciones ya creadas y que antes no los hubieran observado. Es bien conocido de V. E. que, ante la disparidad de criterio con la Santa Sede, respecto al alcance del Concordato referido, el Gabinete de Madrid, una vez más deseoso de mantenerse en las vías de la concordia con la Iglesia se allanó a un *modus vivendi*, estipulado entre el Muy Reverendo Nuncio Apostólico y el Ministro de Estado y mediante el cual, mientras aquella otra cuestión se discutía la ley de 30 de Junio de 1887 dejaría de aplicarse a las Ordenes y Congregaciones religiosas existentes a cambio de que las mismas se inscribiesen en el Registro de Sociedades previsto por el artículo 7.º del referido precepto legal sobre ejercicio del derecho de asociación. = La Real orden de 9 de Abril de 1902, publicada a su tiempo y conocida del Muy Reverendo Nuncio Apostólico y de los Obispos diocesanos españoles, quienes debían cooperar y en efecto cooperaron a su cumplimiento, sin suscitar reclamación alguna contra ella, desarrolló, para instrucción de los Gobernadores y de los interesados, el acuerdo provisional aludido. Estableció que las Asociaciones y Congregaciones religiosas de carácter regular o monástico, previamente autorizadas por el Gobierno, exhibirían ante los Gobernadores el documento original de autorización; que las Asociaciones de la misma índole no previamente autorizadas por el Gobierno, presentarían su solicitud de inscripción, mediante la exhibición de la aprobación canónica de la autoridad eclesiástica y de la lista de las personas que la compusieran con expresión de si habían recibido o no las órdenes sagradas y de las que ejercieran cargo, autoridad o administración; que las Asociaciones de todas clases que se creasen en adelante se atenderían a las disposiciones de la ley de 30 de Junio de 1887 y a las facultades que la misma concede a la autoridad gubernativa; que lo dispuesto sobre Asociaciones que cuenten entre sus miembros o reciban temporal o permanentemente a súbditos extranjeros se cumplierse con el rigor que estaba mandado; y en fin que las Asociaciones y Congregaciones religiosas que ejercieran alguna industria se inscribiesen sin pérdida de tiempo en la matrícula de la contribución industrial. = La Santa Sede se explicará que el Gobierno de Su Majestad Católica, considere, no ya como un derecho sino como un riguroso deber el ejercicio de las facultades que la R. O. de 9 de Abril de 1902 que acaba de extractarse, atribuye a la autoridad civil, y que en consecuencia el actual Gabinete tenga en estudio, para expedirlas en breve, instrucciones a los Gobernadores previniéndoles que: = 1.º Si alguna Orden o Congregación religiosa, de las fundadas o establecidas antes del *modus vivendi* de 1902, no hubiera cumplido oportunamente con los requisitos de la R. O. de 9 de Abril de aquel año, y hubiera continuado subsistente o, disuelta, se hubiese reconstituido se le aplique inmediatamente lo ordenado en el párrafo 5.º de la regla 1.ª de dicha R. O. por carecer tales Asociaciones o Congregaciones de existencia legal. = 2.º Como el intento, desenvuelto en la R. O., al exigir que las Asociaciones o Congregaciones comprendidas en el apartado C de la regla 1.ª exhibiesen la aprobación canónica y la lista de las personas que las componían, con expresión de si habían recibido o no las órdenes sagradas, y de las que ejercían cargo, autoridad o administración, fue evidentemente que el poder civil se hallará enterado de tales importantes detalles; y como no cabría considerar hoy transcurridos ocho años, realizado ese intento con los datos que en 1902 facilitaron, se recabará que los suministren de nuevo y que continúen suministrando noticias de cualquier alteración. = 3.º Puesto que la regla 2.ª de la R. O. manda aplicar el artículo 2.º del Real decreto

de 19 de Septiembre de 1901 a las Asociaciones que se creen en adelante, ateniéndose a las disposiciones de la ley de 1887 y a las facultades que la misma concede a la autoridad gubernativa, los Gobernadores exigirán a las Ordenes y Congregaciones religiosas o a las casas de las mismas, fundadas o abiertas en España con posterioridad al 9 de Abril de 1902, el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por dicha ley de 30 de Junio de 1887 y ejercerán respecto de ellas cuantas facultades al poder civil competen. = 4.º Idéntico estricto cumplimiento se dará a la regla 3.ª de la R. O. que manda observar el artículo 3.º del Real decreto de 19 de Septiembre de 1901, impidiéndose por tanto que los extranjeros formen Comunidades religiosas o ingresen en ellas sin que los superiores acrediten previamente ante el Gobernador la inscripción de aquéllos en los correspondientes registros consulares y del Gobierno civil de la provincia. = No necesito indicar a V. E. que, inspirándose las instrucciones de que se trata en criterios de exclusiva legalidad y desde luego ajenos a todo espíritu de vejación, los Gobernadores recibirán encargo de aplicarlas con el debido tacto, siendo de esperar que en los interesados y en las autoridades eclesiásticas encuentre el Estado la cooperación que el cumplimiento de las leyes debe merecer siempre de parte de todos los ciudadanos. = De Real orden lo digo a V. E., a los efectos antes expresados, esto es, para que informe confidencialmente a Su Eminencia el Cardenal Secretario de Estado para que pueda apreciar desde el primer momento la corrección y legitimidad del paso que el Gobierno de S. M. C. proyecta. = DIOS, etc. = MINUTA» (*ibidem*).

6.º Real orden del ministro de Estado al embajador ante la Santa Sede, 6-IV-1910, *ibidem*: «Excmo. Señor = En cumplimiento de las instrucciones verbales a que la Real Orden de esta misma fecha alude, V. E. se habrá servido exponer a S. E. el Cardenal Secretario de Estado las razones por las cuales el Gabinete de Madrid aspira a zanjar cuanto antes la diferencia desde hace años existente con la Santa Sede, acerca del alcance del Concordato de 1851, en lo que atañe a la situación legal de las Ordenes religiosas en España. = Surgió esa diferencia, como V. E. sabe, cuando, habiendo aumentado considerablemente el número de dichas Asociaciones y de sus individuos y previéndose que todavía más aumentase, no ya por causas propias del país y de la Iglesia nacional, sino por la entrada de religiosos de otras naciones, extrañados de ellas, entendió el Gobierno de S. M. inexcusable someterlas a leyes que los demás ciudadanos obedecen y que, inspiradas en principios sinceramente liberales, sólo atribuyen al poder público las facultades e intervención estrictamente indispensables. = Dio prueba (y la opinión pública lo ha juzgado luego de distintas maneras) el Gabinete de Madrid de singularísima deferencia a la Sede Apostólica, allanándose por el *modus vivendi* de 1902 a sobreseer provisionalmente en la aplicación de la ley salvo en cuanto a requisitos puramente formales en espera de un arreglo entre las dos Potestades sobre el punto de cuáles son las Ordenes que el Concordato ha autorizado. Dura ya la espera ocho años con ventaja quizá para los miembros de las Ordenes y Congregaciones, si ventaja cabe llamar a eximirse de los preceptos harto amplios de la ley de 30 de Junio de 1887, pero desde luego sin beneficio para los intereses generales de la Iglesia y del Estado y mucho menos para la paz moral en este país, necesitado con mayor urgencia cada día de que tal interinidad tenga término lo antes posible. = Para ponérselo, no duda el Gobierno de S. M. de encontrar la más favorable disposición en la alta sabiduría y paternal solicitud del Sumo Pontífice, ilustrado respecto a la presente condición de las cosas en España y al espíritu y propósitos del Gabinete, por quien, como V. E. ha hallado oportunidad de formar cabal juicio de la una y los otros. = La disparidad de puntos de vista entre el Gobierno de S. M. y la Sede Apostólica, surgida al tratar de determinar cuáles son las Ordenes y Congregaciones autorizadas por el Concordato y comprendidas en la excepción de la ley de 1887, disparidad que ha impedido en otras ocasiones el arreglo o sido causa de que no se alcanzase el consentimiento de la opinión pública ni de las Cortes para el acuerdo, podrá dejar de existir mediante

un nuevo, sereno, cordial examen del asunto. = Mas si se considera lo arriba apuntado sobre los hechos que movieron al Gobierno de S. M. a hacer uso, en 1901, de las facultades que le dan sus propias leyes, por igual aplicadas a todos los ciudadanos en el ejercicio variadísimo y legítimo del derecho de asociación, y si se tiene en cuenta que el crecimiento de las Ordenes y Congregaciones en España, la entrada en ellas de extranjeros, aparte de los problemas jurídicos que plantean, ofrecen consecuencias económicas y generales para el país y para la Iglesia, se comprenderá que el Gabinete de Madrid se pregunte, en su interés de llegar a resultados prácticos, si el camino para hacer desaparecer aquella disparidad no se allanaría en mucho merced a medidas preliminares, enderezadas a reducir el referido exceso. = En parte ese objeto se alcanzará aplicando el Gobierno estrictamente, como medida, la Real orden de 9 de Abril de 1902, ejecución del *modus vivendi* del mismo año; mas desde luego que los efectos de ello, no habiendo la autoridad gubernativa de llevar el ánimo preconcebido de vejaciones, no tendrían el alcance que se buscaría. = No está el Gobierno de S. M. en condiciones de apreciar con exactitud si una observancia igualmente estricta en lo que a la legislación canónica toca, revestiría mayor eficacia. Supónese que existen en España conventos y casas religiosas en cuya erección no se han observado los requisitos exigidos por la disciplina eclesiástica y en especial por la sesión XXV del Concilio tridentino y las constituciones *Quoniam ad instantiam* de Clemente VIII, *Instaurande* de Inocencio X, *Cum alias* de Gregorio XV y *Romanos Pontífices* de León XIII. Instrucciones dictadas de concierto a los Obispos diocesanos, podrán encarregarles que, mediante el ejercicio de las facultades que la disciplina eclesiástica les confiere, procedan a suprimir los monasterios, conventos, casas, etc., de Ordenes, Congregaciones, Sociedades o Institutos religiosos, cualesquiera que sea su nombre, que se hubieren establecido sin las condiciones requeridas por los preceptos canónicos vigentes y por consiguiente: primero, sin la venia de la Sede Apostólica; segundo, en términos que en la casa de que se trate, no vivan doce hermanos, monjes y religiosos y se sustenten decorosamente de las rentas y limosnas acostumbradas; tercero, sin la venia del Obispo diocesano, convocados y oídos los demás religiosos de los conventos o monasterios existentes con anterioridad en un radio de cuatro mil pasos; y cuarto, sin el consentimiento del Párroco o Cabildo a quienes correspondiera la cura de almas en el lugar. = Mas como ha de suponerse que la infracción de dichas disposiciones canónicas o de las demás vigentes sea excepcional y que su corrección no producirá, por lo tanto, en debida proporción el efecto apetecido de disminuir el número excesivo de Ordenes y Congregaciones religiosas, el Gobierno de S. M. respetuoso con la Santa Sede, estima, como procedimiento el más adecuado para los fines que en provecho recíproco de la Iglesia y del Estado persigue, el observado en siglos pasados por monarcas a cuya filial devoción a la Silla romana tanto debió la estrecha armonía entre los intereses espirituales y temporales en España, procedimiento del cual ofrece muestra la ley primera, título veintiséis, libro primero de la Novísima Recopilación, en la cual se dice que: «ha de suplicar el Rey a Su Santidad el Papa, como lo hicieron los Reyes Católicos y Felipe II que dé breve para visitar y extinguir, si fuere necesario, etc., algunas casas religiosas». = La demanda, pues, que en nombre del Gobierno de S. M. se servirá V. E. presentar a la benevolencia del Sumo Pontífice, además de lo que queda dicho sobre aplicación estricta de las disposiciones canónicas vigentes, será la de que los Obispos diocesanos sean desde luego provistos por la Santa Sede de las facultades necesarias para reformar y suprimir en sus respectivas diócesis los monasterios, conventos etc., que, aun habiendo observado en su erección los requisitos exigidos por la disciplina eclesiástica no fueren indispensables, a juicio del Obispo, para auxiliarles a ellos y a los Párrocos, en el ejercicio de su sagrado ministerio o para satisfacer las demás necesidades espirituales. En caso de duda entre dos o más Ordenes, Congregaciones, etc., los Obispos diocesanos elegirán para que subsistan: primero, las que existieren en virtud de leyes del Estado español anteriores al Concordato de 16 de Marzo de 1851; segundo,

las expresamente admitidas por dicho Concordato o sea, en cuanto a varo la de San Vicente Paúl, y en cuanto a mujeres, el Instituto de Hijas de la ridad y las demás que se conservaron en virtud del artículo 30; y tercero, que hubieran obtenido autorización especial y expresa del Gobierno p establecerse, en cuanto se conformaren a ella. Se señalará un término de t meses para que cada Obispo diocesano eleve a la Comisión mixta previ por el protocolo de 12 de julio de 1904, una memoria enumerando, con t claridad, respecto de los monasterios, conventos, casas, etc., cuya conservac. reputa precisa, la fecha, forma y condiciones con que se hubieren cumpli os requisitos de la legislación canónica y los establecidos por la Real ord de 9 de Abril de 1902 y el motivo por el cual considera necesario el Prelado q continúe existiendo. Indicará asimismo la memoria, mencionando sus no bres y los lugares donde se hallaban o siguen establecidos los monasterio conventos, casas, etc., que el Prelado haya suprimido y el plazo de equida concedido a cada uno de dichos Establecimientos para que se disuelvan, cuy plazo podrá ser hasta de doce meses, dentro del cual la decisión del Obisq se ejecutará desde luego. Si la Comisión mixta estimare todavía necesaria conveniente alguna nueva supresión de monasterios, conventos, casas, etc., o r hubiere unanimidad en aquélla sobre la subsistencia de alguna orden o cas conservada por el Obispo respectivo, se someterá el asunto a ambas Potestades para la resolución que fuere conveniente. = Excuso encarecer a V. E. porque a su recto juicio no se ocultarán los sentimientos de respetuosa deferencia a la Silla Romana, de plena confianza en la autoridad episcopal y de equidad hacia las Comunidades susceptibles de quedar disueltas, en que se inspira nuestra propuesta. = El Gobierno de S. M. solicita, en fin, del Santo Padre, que sean derogadas las disposiciones en contra de las Bulas *Inter graviores cura* de 15 de Mayo de 1804 e *In suprema* de 3 de Abril de 1833, cuyo vigor debió continuar conforme al artículo 44 del Concordato; de suerte que, sin quebranto de lo pactado entre ambas potestades sobre autoridad de los Obispos diocesanos en la materia, los Vicarios generales de que las Ordenes, Congregac[iones], etc., dependan tengan resid[enci]a fija en España y con entera autonomía de cualquier autoridad eclesiástica extranjera o establecida fuera de España; administrándose y distribuyéndose justificadamente dentro del país, en armonía con los fines de cada institución y conforme al espíritu de las indicadas Bulas, los bienes de dichas Asociaciones. Aunque esta medida forma parte del proyecto de protocolo presentado por mi predecesor al Muy Reverendo Nuncio Apostólico el 21 de Enero último (el examen de cuya utilidad como base de las ulteriores negociaciones entre el Gobierno de S. M. y la Santa Sede podría ir precedido del arreglo concerniente a la reducción de las Ordenes, Congregaciones, etc., conforme a las propuestas contenidas en la presente Nota) aguardamos a la solicitud del Santo Padre que se prestará a dictarla desde luego, toda vez que no se trata de novedad alguna sino del cumplimiento de reglas establecidas. = De Real orden encargo a V. E. que se sirva exponer por escrito cuanto procede a S. E. el Cardenal Secretario de Estado y apoyarlo verbalmente así cerca de él como del Santo Padre mismo. = Dios guarde a V. E. muchos años. = Madrid, 6 de Abril de 1910. = Minuta = Señor Embajador de S. M. cerca del Santo Padre.»

⁸² Vid. *El Liberal*, 8-IV-1910, según el cual el 7 fueron sometidos al rey los decretos que nombraban vocales de la comisión mixta a Eguillor y Santa María de Paredes, v la real orden del 8, del ministro de Estado al embajador cerca del Santo Padre, donde comunica tal designación (ésta, apud AMAE/SCS, leg. 1.741).

⁸³ El primer obstáculo notable contra el propecto del Gobierno vino de la propia jerarquía peninsular para la que éste pedía potestad. Desconociendo probablemente los términos de esta propuesta diplomática, el cardenal primado Gregorio María Aguirre salió al paso, en exposición al presidente de consejo de 6-IV-1910, de «la insistencia con que algunos periódicos vienen excitando al Gobierno de Su Majestad para que apliquen la Ley de Asociaciones

a la mayor parte de los Institutos religiosos». Recordaba además la existencia amplia del Concordato y la legislación civil, que autorizaba la existencia de todos los institutos, cuya necesidad, además, defendía. Enviada por Aguirre, la exposición llevaba, por otra parte, los nombres de todos los obispos de España (original de la exposición, *ibidem*, SPS, leg. 2.678, exp. «1910, Negociaciones...»). Al responderle, visiblemente contrariado por la inoportunidad de la apología de los religiosos, Canalejas, cludió el asunto, en escrito a Aguirre del 11, por ser tema de negociaciones (apud *El Imparcial*, 29-V-1910). El 14, el ministro de Estado telegrafió al embajador Ojeda notificándole y lamentando la exposición del primado, pero advirtiéndole que no variaba las instrucciones. Le añadía que el Gobierno se había quejado al nuncio por no evitar el escrito «en espera resultado negociación ni siquiera advertirlo Gobierno que tan lealmente procede» (AMAE/SPC, *loc. cit.*, supra).

⁸⁴ Cit. Javierre: *op. cit.*, 407. «A las siete y cuarto acudí al Vaticano e introducido inmediatamente a presencia del Cardenal [Secretario de Estado, narra Ojeda], le hice la exposición de motivos y le leí las instrucciones proyectadas a los Gobernadores sobre la aplicación de la Real Orden de 9 de Abril de 1902, que contiene la núm. 24 de fecha 6 del corriente. = Su Eminencia me escuchó con evidente preocupación y me hizo de cuando en cuando algunas preguntas a las que contesté yo con las aclaraciones oportunas, sin que por lo demás hiciese Su Eminencia comentario alguno» (despacho número 41, 16-IV-1910, del embajador al ministro de Estado, AMAE/SPS, *loc. cit.*, nota anterior).

⁸⁵ Despacho núm. 48, 23-IV-1910, del embajador al ministro, *ibidem*; «Como dejo dicho, ayer 22 a las 11 1/4, fui recibido por Su Santidad esmerándose sobre todo en pintarle la crítica situación en que se hallarían Su Majestad, su Gobierno, el Partido Liberal y España entera, de no acceder Su Santidad a las proposiciones tan justas como razonables que le había presentado V. E. A fin de reforzar mis argumentos y de dar mayor autoridad a mis afirmaciones, creí entonces conveniente pedir a Su Santidad permiso para leerle el apunte extracto de la conversación que me cupo la honra de tener con Su Majestad el Rey y habiendo accedido gustoso el Pontífice, se lo leí entero poniendo énfasis especial en aquellos párrafos de la Pro-memoria que juzgué habrían de interesarle mayormente. = ... Su Santidad entonces tomó la palabra en los siguientes términos: = ... Yo mismo desapruebo la extensión y el desarrollo de las órdenes religiosas no sólo en España sino en esta capital del Orbe católico. Puede ser cierto, invocarse por algunos que aquí, por muchas razones, es difícil si no imposible poner coto a esta exuberancia de comunidades de todo género.—No es menos cierto, sin embargo, que todo ello causa a esta Santa Sede embarazos y serias preocupaciones.—Siendo éste mi criterio por cuanto hace a la misma Roma, ya podéis imaginaros con cuánta solicitud he de acoger lo que vuestro Soberano y su Gobierno me piden. Podéis, por lo tanto, estar seguro y manifestar al Rey y al Gabinete de Madrid que he de emplear toda mi autoridad, todas mis facultades, toda mi buena voluntad para remediar un estado de cosas que lamento.—En este sentido he hablado ya con el Secretario de Estado y si no puedo aún dar contestación a vuestro Gobierno es que no nos ha parecido que podíamos resolver asunto de tanta importancia sin exponerlo previamente y según costumbre invariable a las deliberaciones de la Sagrada Congregación correspondiente.—... después de oírme atentamente y de deplorar la conducta poco discreta y correcta de su Representante me añadió: «Decid, Señor Embajador a vuestro Gobierno que prescinda del Nuncio y se entienda directamente con el Secretario de estado y con vos en cuanto es relativo a las negociaciones actuales». = Agradecí a Su Santidad su consejo y la confianza que en mí renosaba, pero le objeté que de todos modos y aun impidiendo estas medidas la inmixión del Nuncio en las negociaciones, su estancia en Madrid fomentaría como está fomentando resistencias, desafectos y esperanzas entre los enemigos de la Monarquía que el Gobierno no puede consentir y le añadí que sin acudir a medidas violentas o de carácter punitivo, que el Gobierno

... al Nuncio, podría concedérsele una licencia o un coadjutor de toda la confianza de la Santa Sede, que le vigilase y le mantuviera dentro de la corrección a que tenemos el derecho de aspirar por parte del representante del Supremo Pontífice. = Este dio su asentimiento a cuanto le había manifestado a ese respecto y me prometió estudiar el asunto... = Después de mi audiencia con Su Santidad, pasé como es costumbre inmediatamente a cumplimentar al Cardenal Secretario de Estado. = ... Le comuniqué al propio tiempo la carta del Presidente del Consejo, fecha 17 del corriente y la de V. E. del 18, relativas ambas a la actitud del Primado y Episcopado español y convino conmigo en que la representación o exposición hecha por aquéllos al Jefe del Gobierno, le parecía poco oportuna en el estado actual de las cosas en que existe una negociación pendiente entre España y la Santa Sede.—Me añadió que le sorprendió mucho el paso dado por los prelados de que no tenía más conocimiento que la decisión que hace pocos meses le comunicaron algunos prelados de haber facultado al Cardenal Aguirre a asumir su representación en cuantos asuntos interesasen o se relacionasen con la Iglesia Española, como en el presente caso.—El Cardenal añadió que no creía fuese ilegal ni anticanónica la actitud de los prelados al ejercer un derecho que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos.—Surgió sobre este punto una discrepancia entre el Cardenal y yo por cuanto apoyándome en las razones invocadas por el Presidente del Consejo y V. E., no pude admitir la similitud del caso que el Cardenal citaba. = Por lo demás, me ha parecido que no harán en el Vaticano hincapié en la actitud del Primado y Obispos, en primer lugar, porque siendo ya público el extraño proceder que con aquéllos se ha observado y su ignorancia casi total de lo que *a priori* se comprometían a suscribir, el documento en cuestión carece de aquella autoridad y seriedad propios de los argumentos y de las armas que en sus polémicas usa por lo general el Vaticano; y en segundo, porque los manejos tortuosos del Nuncio y sus indiscreciones acerca del alcance de la protesta, que he cuidado de poner en claro ante el Papa y el Secretario de Estado, han contribuido seguramente a desacreditar algún tanto la acción por el Nuncio secundada.—Por último hay que tener muy en cuenta, ante todo y sobre todo, la patente contradicción entre la defensa hecha por el Primado de los institutos y comunidades religiosas, cuya intangibilidad proclama su carta y la declaración casi *Ex cathedra* del Pontífice, hecha a un Embajador de S. M., de su decisión de limitar dichas asociaciones y de los embarazos que su desarrollo anormal le causan en la misma Roma.» El mismo 22, día de la entrevista, el ministro de Estado telegrafiaba a Ojeda: «Considero útil haga V. E. saber confidencialmente en Vaticano que carta primado a Presidente Consejo Ministros sobre Ordenes religiosas fue escrita sin previo conocimiento demás Obispos y haciendo uso autorización general conferida hace meses por éstos, para cuanto interese a la Iglesia. Algunos Obispos se manifestaron sorprendidos al saber paso dado. Conviene se tenga ahí en cuenta para apreciar verdadero alcance de la manifestación aunque *a posteriori*, como es natural, obispos aparezcan aprobándola e incluso complaciéndose de ello» (*ibidem*). Así sucedería en efecto cuando Canalejas hablase en el Senado de diferencias entre Aguirre y algunos prelados y de la improcedencia de esa «delegación permanente» de confianza en aquel que se había exteriorizado en la exposición del 6 de abril (cfr. *Diario de las Sesiones... Senado*, 6-VII-1910). Sobre la entrevista del 22, el ministro de Estado contestó a Ojeda, por Real orden de 1-V-1910, que había leído con agrado el despacho; pero que, a pesar de los deseos manifestados por el Papa de ser él quien adoptara las medidas necesarias para la disminución de los religiosos, «por otro género de motivos y entre ellos por su efecto sobre la opinión pública conviene... que las disposiciones de la autoridad eclesiástica se tomen en la forma y plazos y por los procedimientos indicados por el Gabinete de Madrid en su propuesta» (AMAE, *loc. cit.*, supra).

⁸⁰ AMAE/SPS. leg. 2.679, expediente «1912. Prórroga de la *Ley del Candado*».

⁸⁷ Real orden del ministro de Estado al embajador Ojeda, AMAE/SPS, leg. 2.678, expediente «1909-10. Proyecto de reforma del Concordato y Ley de Asociaciones»: «El Gobierno, considerando que la ley de 30 de Junio de 1887, por la cual se rige el ejercicio del derecho de asociación, no responde a la variedad de formas que este último reviste hoy, al desenvolvimiento de los principios científicos desde la época en que se dictó acá, y en fin a las corrientes dominantes en la opinión pública de España, tiene el propósito de llevar a cabo su reforma, pero de modo que, a la presentación del proyecto de ley a las Cortes, preceda un completo estudio y una amplia consulta a los directamente interesados y en general a todos los elementos a que pueda afectar. A ese fin se ha deliberado en Consejo de Ministros sobre la utilidad de nombrar una Comisión, formada de especialidades políticas y jurídicas y hasta donde es posible de representantes de las diversas formas de asociaciones, la cual, como preliminar de sus trabajos, abrirá información pública sobre los inconvenientes demostrados en la práctica por la ley vigente. = Ese procedimiento suministraría oportunidad para que la Iglesia hiciera valer sus indicaciones en lo que atañe a la regla civil de vida que ha de aplicarse a las Ordenes y Congregaciones religiosas ... = En consecuencia, el Gobierno estudia el medio de que la Iglesia pueda estar representada en la Comisión; y espera, además, que los Obispos y aun las interesadas mismas, acudirán a la información y expondrán los inconvenientes o dificultades que la observancia de la ley de 30 de Junio de 1887 representa para aquéllas. = De Real orden lo digo a V. E. a fin de que, en el terreno puramente confidencial, lo manifieste a Su Eminencia el Cardenal Secretario de Estado, haciéndole observar que, si de un lado, los Prelados ordinarios reducen, según el Gobierno de S. M. tiene pedido a la Santa Sede, el exceso de Ordenes y Congregaciones religiosas en España y, de otro, se llega a la formación de una ley civil que no cause a las que queden embarazo incompatible con su normal funcionamiento, se habrá facilitado considerablemente y hasta acaso llegue a resultar innecesaria toda negociación o arreglo sobre la interpretación de los artículos 29 y 30 del Concordato.»

⁸⁸ Vid. *El Imparcial*, 30-IV-1910, sobre las tendencias encontradas por ello en el seno de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos. Lo califica en cambio de «pura invención» Ojeda en telegrama al ministro de Estado, 1-V-1910 (AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «1910. Negociaciones...»).

⁸⁹ Despacho núm. 60, 18-V-1910, del embajador Ojeda al ministro de Estado, *ibidem*.

⁹⁰ Cit. Soldevilla: *op. cit.* (1910), 386.

⁹¹ Despacho núm. 54, 10-V-1910, del embajador Ojeda al ministro de Estado, AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «1910. Negociaciones...»: «me limito a señalar a su atención como rasgos generales, el tono cortés y deferente del Cardenal [Secretario de Estado]; la buena voluntad con que por parte del Vaticano se desea tratar la cuestión expuesta a su consideración por el Gobierno de S. M.; la carencia absoluta de toda polémica, refutación o controversia, que ya me anunció el Cardenal y yo telegraficé a V. E. el 6 del corriente; y, por último, la tendencia patente de la Curia, en que se trasluce el intento personalísimo del Pontífice, que yo oí de sus Augustos labios, de poner remedio a la situación de España merced a sus propios medios y a sus personales iniciativas.» Son éstos, dice, los rasgos principales de la nota del Secretario de Estado, fecha el 9-V-1910, que contiene la contrapropuesta del acuerdo señalada en el texto. He aquí esa nota, que transcribe el mismo despacho: «El fin principal a que tienden los propósitos del Gobierno de S. M., según se desprende de la citada Nota [española leída el 15 de abril, apud nota 81, supra], es el de llegar a una reducción de las casas religiosas en España y de fijar normas encaminadas a impedir que su número aumente aún más en el porvenir, especialmente con la entrada de religiosos extranjeros en territorio español. = En cuanto al primer punto, esto es, a fin de obtener en una medida equitativa y razonable la indicada reducción, la Santa Sede no es contraria a que sean suprimidas todas aquellas casas o conventos en que resi-

dan menos de doce religiosos con excepción de las comunidades que no hacen vida común, o que se dedican a la enseñanza o a obras de caridad, como también de las casas de procuración y de salud, así como también de aquellas otras que los Obispos creyesen necesarias al ejercicio del sagrado ministerio en sus diócesis. A limitar pues el excesivo aumento en lo futuro, el Santo Padre no se opondría a que para abrir nuevas casas con vida común de Congregaciones ya existentes en España, sea necesario el consentimiento del Ordinario y la autorización gubernativa, y que para establecer nuevas órdenes o congregaciones se requiera la licencia de Su Santidad, previo acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno. Además de esto, por cuanto concierne en modo especial a los extranjeros, no tendría la Santa Sede dificultad en conceder que aquéllos no puedan fundar órdenes o congregaciones religiosas con personalidad jurídica reconocida por el Estado, sin ser previamente naturalizados en el Reino, a tenor de la ley común, y que aquellos quienes conservando su condición legal de extranjeros, entren o residan en cualquier convento o casa religiosa de España, queden sometidos a todas las disposiciones del derecho común vigente para los extranjeros. = También admitiría el Santo Padre que las congregaciones religiosas sean sujetas a las contribuciones e impuestos del Reino que pesan sobre las demás personas jurídicas o súbditos españoles. Se entiende pues que las Congregaciones que se hubieran conformado a las reglas ^{ya} además cumplido la formalidad de la inscripción civil, deberán gozar de la plena personalidad jurídica y ser consideradas como comprendidas dentro de la excepción establecida en el párrafo primero del artículo segundo de la ley de 30 de Junio de 1887, y podrán regirse libremente según las disposiciones del derecho canónico y las propias constituciones, salvo el cumplimiento de las leyes generales del Reino, en cuanto toca a sus relaciones con el Poder Civil. Asimismo las órdenes religiosas que tienen en España una situación privilegiada, deberán ser mantenidas en el goce de sus derechos. = Y si en casos particulares se introdujesen abusos respecto de la existencia y del número de dichas casas religiosas, contrarios a las prescripciones canónicas y a los acuerdos entre la Santa Sede y el Gobierno español, éste no tendrá más que denunciarlos al Santo Padre, el cual se declara dispuesto a aplicarles el oportuno remedio, hasta por medio de visitas apostólicas. = . Al mismo tiempo [el Cardenal Secretario de Estado que suscribe], no duda que el mismo Gobierno, animado como lo está de sentimientos de moderación y de equidad, se prestará a retirar su demanda respecto a la absoluta autonomía y exención de las Ordenes religiosas españolas de los superiores residentes fuera del Reino. ... es claro que semejante exención mientras se opone a los principios fundamentales del derecho común respecto al régimen ~~de las órdenes y de las congregaciones religiosas, conduciría al decaimiento~~ de la disciplina regular en España con no menores perjuicios para la sociedad civil y para el bien general de la Iglesia.»

⁹² Telegrama del ministro de Estado al embajador Ojeda, 11-V-1910: «(Describe V. E. mismo.) Recibido telegrama. Aguando texto nota pero no ocultaré V. E. primera impresión ha sido. [sigue lo transcrito en el texto] Convenio 1904. Examinando artículos quinto, cuarto, sexto, noveno, tercero, segundo y primero dicho pacto observará V. E. que supuestas concesiones (varias de las cuales puede Gobierno S. M. tomar por sí mismo aun dentro teorías jurídicas Vaticano) son reproducción y hasta restricción en algún punto importante de aquel acuerdo que partido liberal combatió vivamente de conformidad con opinión general país y que partido conservador ni siquiera volvió presentar Cortes durante última etapa gobierno. Respeto y veneración que guardamos a Santo Padre nos impide dudar sus sentimientos conciliación pero es difícil encontrar huellas de ellos en pretensión de que al cabo seis años en que problema se ha agravado acepten los individuos del actual gabinete lo que rechazaban en la oposición. A menos que a juicio V. E. texto nota sea susceptible rectificar esos conceptos, sírvase expresarlos verbalmente Cardenal sin perjuicio más amplias instrucciones cuando llegue documento. = García Prieto.» Ojeda responde al ministro, en telegrama del 12, que cree a la Santa Sede bien dispues-

ta para negociar e inoportuno discutir la nota. Que sólo dirá a Merry que la impresión del Gobierno ha sido desfavorable, hasta recibir nuevas instrucciones. En nuevo telegrama, el 14, García Prieto notifica al embajador: «Acabo recibir nota aumentando impresión desagradable. Sírvase expresar verbalmente Cardenal cuanto decía mi telegrama del 11.» En despacho núm. 58, del 17, Ojeda le comunica que acaba de hacerlo (*ibidem*).

⁹³ Despacho núm. 58, 17-V-1910, *ibidem*: «(Muy reservado) = Excmo. Señor. = Muy Señor mío: En virtud de las instrucciones contenidas en la rectificación recibida anteanoche, del telegrama de V. E. del 11, acabo de tener una conferencia con el Cardenal Secretario de Estado, que la solemnidad del día me impidió celebrar ayer. = Después de haberle leído el telegrama, dije a Su Eminencia que no era de extrañar la desfavorable impresión que al Gobierno de S. M. había causado la contestación del Vaticano a su Nota del 15 de abril y le enumeré las razones de ello leyéndole al efecto los párrafos de dicha Nota en que se observan las mayores discrepancias entre los deseos del Gobierno y la escasa o ninguna satisfacción que les ha dado el Vaticano. = El Cardenal, a medida que iba yo leyendo, me interrumpía con frecuencia y viveza aduciendo sus razones y su justificación, en la forma que paso a detallar a V. E. = Cuando le cité las prescripciones canónicas cuyo estricto cumplimiento pide el Gobierno de S. M., me dijo el Cardenal que no le asistía el derecho para exigirlo, toda vez que casi todas estas disposiciones habían sido subsiguientemente derogadas y, o no están vigentes o tenían simplemente un carácter especial o local cual era lo relativo a la supresión o amalgamamiento unos con otros de los conventos en que haya menos de doce religiosos, disposición que se refirió desde un principio a los benedictinos ingleses y exclusivamente desde entonces a las casas de Misiones. = Esta concesión, me añadió el Cardenal, no la ha hecho Su Santidad a ninguna Nación, por lo cual creyeron aquí que por revelar un carácter de especial consideración hacia nosotros sería muy grata a España. = Pasé a citarle la Ley primera Título 26, Libro primero de la Novísima Recopilación, en virtud de la cual el Gobierno de S. M. pedía que fueran dadas instrucciones a los obispos diocesanos para que puedan reformar y suprimir Monasterios, conventos, etc. = Me replicó el Cardenal que la misma denominación de «Breve» que cita dicha Ley demuestra que el Santo Padre requerido por el Gobierno, es el único a quien compete proceder a dicha supresión y reforma y que ciertamente lo haría hasta en la forma de «visita apostólica» como consta en la contestación al Gobierno. Pasó en seguida el Cardenal a explicarmen, para que yo lo hiciera presente a V. E., que no hay autoridad eclesiástica en España ni en el mundo, por muy alta que sea, que pueda de por sí suprimir conventos o congregaciones como no sean las que se llaman «diocesanas» que los obispos autorizan para establecer en sus diócesis respectivas y que ignoradas por la Santa Sede dependen solamente del Ordinario y sobre las cuales no ejerce Roma jurisdicción directa. = A los argumentos que opuse al Cardenal basándome sobre todo en la Constitución de la Comisión Mixta prevista por el Protocolo de 12 de julio de 1904, que cita V. E. en la R. O. N.º 25, de 6 de abril próximo pasado y de que no hace mención la Nota del Vaticano, me contestó el Cardenal que en dicho Protocolo ni se alude tan siquiera a la supresión de conventos, congregaciones o casas religiosas, pues de lo que se trata es meramente de la supresión de Diócesis, siendo, por lo tanto, impropio invocar dicho Protocolo en el caso presente. = Le objeté yo a mi vez ... [sigue lo transcrito en el texto] de la Iglesia Española y que estimaba que siempre que el Gobierno se apoyase ya sea en las opiniones de los obispos solos, o en dictámenes de la Comisión Mixta, si así se acordase, para la reducción de las congregaciones o comunidades religiosas, creía él que Su Santidad no tendría inconveniente alguno en apoyar lo que propusiese el Gobierno, entendiéndose que la acción de Su Santidad no era indispensable sino en el caso de aquellas comunidades cuya creación o existencia en España hubieran sido regularmente sancionadas por la Santa Sede, pues por lo que se refiere a las llamadas Diocesanas, autorizadas sólo por los obispos, éstos pueden suprimirlas o limitarlas desde luego sin intervención alguna de esta Curia. = Le dije al Cardenal que en vista de las ma-

nifestaciones de su disposición a negociar, yo no dudaba de los buenos deseos del Santo Padre, ni de los suyos; pero que la situación del Gobierno liberal ante la necesidad de desarrollar al reunirse las Cortes su Programa respecto de las Congregaciones, no consentía aplazamientos ni dilaciones y que era, por tanto, precisa la conformidad del Vaticano con los proyectos del Gobierno antes del 15 del próximo junio. = Replicó el Cardenal que él comprendía esta necesidad y la deploraba, pero que hacía seis años ... [de nuevo arriba] procedimientos de esta Curia, la cual, me volvió a repetir, se hallaba siempre muy dispuesta a acoger amistosamente los tratos que desea iniciar el Gobierno de S. M. propios a robustecer las buenas relaciones entre ambas Potestades.» La relación de Ojeda se interrumpe aquí bruscamente, por «la solemnidad del día» —aniversario de la jura de Alfonso XIII—, y anuncia que continuará en otros despachos: el núm. 50, fecha 18-V-1910, que sigue así: «Insistiendo yo de nuevo en la necesidad de que las favorables disposiciones a tratar con nosotros se patentizasen y condensasen urgentemente por medio de acuerdos conformes a los proyectos del Gobierno de S. M., me dijo el Cardenal que si bien él personalmente comprendía la razón de tanto apremio, no sucedía así con los demás miembros de la Congregación, quienes, en general y según tradición consuetudinaria, no se allanaban a consideraciones políticas momentáneas y fugaces sino al bien permanente de la Iglesia, aunque tomando en cuenta siempre las conveniencias nacionales de carácter trascendental. Me aseguró, sin embargo, que si el Gobierno lo deseaba haría todos sus esfuerzos por complacerle. = Y aquí hizo un aparte el Cardenal para preguntarme en tono estrictamente confidencial, por qué en vez de estos apresuramientos a plazo fijo en que sería tan difícil discutir y negociar con serenidad algunas materias de importancia, no podría el Gobierno presentarse a las Cortes con las ventajas ya obtenidas de común acuerdo y una declaración al efecto de que el Gobierno y la Santa Sede proseguían negociaciones a fin de armonizar las necesidades y aspiraciones del Partido liberal con las conveniencias de la Iglesia.—«Vea, Señor Embajador», me dijo Su Eminencia «si el Señor Canalejas al abrirse las Cortes anuncia que se ha conseguido la reducción de las Congregaciones, 1) por el acuerdo relativo al número mínimo de los religiosos en cada casa; 2) por el funcionamiento de la Comisión Mixta con las atribuciones y reglamentación de que hemos hablado; 3) con la garantía que ha dado y está dispuesta a dar la Santa Sede contra el futuro desarrollo de las comunidades españolas y la invasión de las extranjeras; y 4) con la asimilación de las que fomentan industrias a las demás de la nación y la obligación de satisfacer cargas y gravámenes de carácter general que pesan sobre los demás súbditos. ¿No sería éste ya un triunfo para el Señor Canalejas, dentro de su programa, que le atraería las simpatías y la popularidad entre su partido y entre todas las clases industriales y menesterosas de la Nación y le permitiría seguir negociando con la Santa Sede con calma y serenidad los demás puntos aún en litigio?» - Contesté al Cardenal que dados los compromisos contraídos por el Jefe del Gobierno y aceptados por todo el Gabinete y considerando que las ventajas obtenidas que aquél habría de anunciar a las Cámaras habían ya sido concedidas al partido conservador, el curso que recomendaba el Cardenal no me parecía que habría de ser acogido favorablemente por el Gobierno. = El Cardenal pareció pesaroso de que así fuese y me dijo que con frecuencia los jefes de partido al asumir el poder se hallaban imposibilitados de realizar sus compromisos y de hacer buenas sus declaraciones, sin que por ello los partidos que los apovaban les retirasen su confianza ni su adhesión y añadió que el mismo Vaticano que se había negado a tratar con el Sr. Moret, se prestó desde luego a negociar con el Sr. Canalejas, dándole así muestras especiales de su aprecio y de la confianza que le inspiraba su gestión.—«Si así no fuese», me añadió, «nada más fácil que rehuir las negociaciones, basándose el Vaticano en anteriores declaraciones del Presidente del Consejo respecto de la Santa Sede y de la Iglesia y, sin embargo, no ha sido así como no podrá menos de admitirlo el mismo Gobierno, al que desde el primer momento hemos dado muestras de deferencia y simpatía.» = Dije al Cardenal que daría a

V. E. cuenta de nuestra entrevista y concluyó ésta haciendo votos por que pueda conseguirse una avenencia cordial y completa entre ambas Potestades. = Por cuanto he tenido la honra de exponer a V. E. en este y en mi anterior Despacho podrá fácilmente hacerse cargo del actual estado de cosas. = Mi impresión es que aquí se desea hacer cuanto sea posible por armonizar las miras del Gobierno con las exigencias canónicas y tradicionales de la Iglesia Romana. Vuelvo a repetir a V. E. que me consta que sobre este último punto la actitud del Vaticano será inmutable y que por tanto sería inútil tratar de modificarla. = Lo obtenido hasta ahora por España, se considera por la Curia como un «*Summum*» debido a la benevolencia del Pontífice y a la influencia del Cardenal Merry, quien me ha confesado la fuerte oposición que se ha hecho, se hace y se hará por las órdenes monásticas, obispos y elementos más intransigentes tanto aquí como en España, a la actitud benévola del Vaticano hacia los liberales y *masones* españoles, como con frecuencia los denominan. = Dios guarde a V. E. muchos años = Roma, 18 de Mayo de 1910.»

Ibidem.

⁹⁵ Telegrama del embajador Ojeda al ministro de Estado, 20-V-1910, donde refiere la entrevista consiguiente con Merry del Val. Ojeda presentó a este el propósito del Gobierno como reacción ante la nota de la Santa Sede acerca de la reducción de los institutos. Merry lamentó también la publicidad dada por el Ministerio a algunos aspectos de la negociación.

⁹⁶ Cfr. *Revista Popular*, 9-VI-1910. Se refiere a la protesta del cardenal Aguirre de 6-IV-1910, reseñada supra.

⁹⁷ Telegrama del ministro de Estado al embajador Ojeda, 22-V-1910, AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «Negociaciones...»: «Es sensible que (aun refiriéndose a informes particulares y en mera conversación V. E. con Cardenal Secretario) se estableciese relación entre Circular a Gobernadores sobre cumplimiento R. O. 1902 y efecto producido a Gobierno por respuesta Santa Sede nuestras proposiciones. A V. E. y Cardenal consta que propósito expedir Circular existió desde un principio y nunca dependió del resultado favorable o adverso de negociaciones sobre otros puntos. Conviene que V. E. lo haga constar así en evitación equívocos, pues si Gobierno no publicó hasta ahora Circular fue por extremado respeto a espíritu ley electoral, que le hizo abstenerse durante periodo elecciones de una medida susceptible de influir en derecho tan político como el de asociación. = Es tanto más de sentir equivocada explicación cuanto que Cardenal ha creído confirmados por ella conceptos que Gobierno S. M. no puede menos rechazar categóricamente, dando además por supuesto que si V. E. los escuchó fue por carácter puramente confidencial conversación y que, aun en ese terreno, los habrá rectificado como merecen. = En cuanto juicios prensa somos ajenos y se basan en gran parte en noticias ese correspondal *Imparcial*, que, si no en el fondo, continúa enterado exterioridades negociación. = Como V. E. verá en prensa española la mayoría de la liberal nos tacha de Vaticanistas y censura lo que llama nuestras pasividades, lo cual demuestra cuán ajeno es Gobierno a informaciones periodísticas, Garciprieto.» (Se refiere a algunas notas sobre los tratos diplomáticos publicadas por *El Imparcial* en mayo, sin novedad por lo demás.) Ojeda responde a García Prieto el 28 en otro telegrama: «En mi entrevista de ayer con Cardenal, cumplí instrucciones telegrama 22 respecto circular Gobernadores, manifestándole cuanto en él me decía V. E. El Cardenal no parece haber dado importancia a la reflexión que por orden de V. E. le he hecho, por no habérsela dado tampoco a la opinión puramente personal y oficiosa que yo le expresé anteriormente al respecto. = Ojeda.»

⁹⁸ Telegrama del ministro de Estado al embajador Ojeda, 25-V-1910, *ibidem*: «Consejo Ministros resolvió encargar V. E. dirija Secretario Estado Nota ajustada a lo siguiente: «Examinada Nota nueve Mayo con mismo espíritu conciliador y deseo concordia en que Santa Sede afirma inspirarse, Gobierno no puede menos deplorar que a pesar sólidas razones y motivos alta conveniencia en que se fundaban propuestas Nota quince Abril, Santa Sede las sustituya por otras que, contenidas ya una vez en varios artículos del Con-

venio de 19 de Abril de 1904 fueron examinadas por Cortes y opinión pública y no alcanzaron aprobación legislativa habiendo reconocido prácticamente los Gabinetes que desde entonces se sucedieron en España la ineficacia de volver someter aquel pacto al Parlamento. Nota 15 Abril podía, primero aplicación legislación canónica casas no ajustadas a ella; segundo reducción general de Ordenes y Congregaciones por Obispos provistos al efecto de facultades necesarias. Distancia entre tan equitativa demanda y actitud Santa Sede es evidente. Santa Sede está solamente dispuesta suprimir casas donde no se observe el requisito de tener doce individuos y aun entonces establece excepciones en favor casas procura, sanatorios o dedicadas enseñanza y beneficencia y hasta añade una restricción de que en 1904 no se habló, a saber que Obispos podrán exceptuar de supresión a casas que les parezca oportuno, lo que restringe considerablemente alcance cláusula y parece al Gobierno tanto menos fundado cuanto que el requisito del número de los individuos fue siempre exigido en España por numerosas disposiciones civiles inspiradas en legislación canónica. Respecto reducción Ordenes y Congregaciones, que, aun habiendo cumplido con preceptos canónicos y civiles, pudieran reducirse en obsequio a conveniencias temporales sin menoscabo necesidades religiosas, Gobierno lamenta que Santa Sede no haya creído útil exponer en su nota el concepto que la merece [sic] procedimiento de proveer a Obispos de facultades e instrucciones adecuadas para apreciar situación y tomar determinaciones en respectivas diócesis en bien tranquilidad espíritu y concordia ambas Potestades. Reglas que Santa Sede indica para porvenir coinciden con propósitos Gobierno S. M.; pero no resuelven cuestión como tampoco la resuelve el principio de igualdad contributiva entre Ordenes y Congregaciones religiosas y demás personas jurídicas, principio que Potestad civil siempre ha profesado y cuyas excepciones en la práctica no han dependido nunca más que de su apreciación.—Por eso Gobierno espera que, examinada de nuevo su Nota de 15 de Abril Santa Sede encontrará modo evidenciar más prácticamente sus sentimientos hacia Monarca y pueblo español. Gobierno deseoso facilitar por todos medios a su alcance acuerdo pide: primero, que Santa Sede retire excepciones a cláusula en cuya virtud se suprimirían casas menos doce individuos y que esa disposición comience a aplicarse desde luego; segundo, que precise la que está dispuesta a hacer para corregir las demás infracciones derecho canónico que puedan existir; tercero, que en caso resolver Gobierno dirigirse a Prelados para que con el fin de disminuir número congregaciones en España, supriman todas las diocesanas que, aun creadas con sujeción a preceptos civiles y canónicos no fuesen indispensables, Santa Sede apoye eficazmente esa resolución; cuarto, que para reducción casas en cuyo establecimiento haya intervenido Santa Sede se acepte lo propuesto 15 Abril u otro sistema igualmente breve y eficaz y quinto que el examen de los demás puntos susceptibles de negociación por naturaleza se prosiga entre ambas Potestades con el espíritu conciliador que las anima.» = 'Empleo telégrafo para ganar tiempo, pero al dirigir y entregar nota en forma acostumbrada V. E. no indicará que sus instrucciones son telegráficas.—García Prieto.»

⁹⁹ Telegrama del ministro de Estado al embajador Ojeda, 27-V-1910, *ibídem*, referido al transcripto en la nota anterior: «Ampliando telegrama anterior le manifiesto que con Frase «reglas que Santa Sede indica para porvenir coinciden con propósitos Gobierno S. M.», Gobierno se reserva libertad presentar Cortes proyecto ley exigiendo autorización potestad civil para establecimiento casas religiosas en lo sucesivo. V. E. puede verbalmente indicarlo a Cardenal Secretario primera oportunidad.—Garciprieto.»

¹⁰⁰ La reproduce íntegra P. Villada: *Sobre la real orden contra las Asociaciones religiosas: obra urgente*, «Razón y Fe», mayo-agosto 1910, 341, y Emilio Piñuela: *El Concordato de 1851 y Disposiciones complementarias vigentes*, Reus, Ed. Reus, 1921, pág. 250, entre otros.

¹⁰¹ Cfr. telegrama del ministro de Estado a Ojeda, 9-VI-1910, en que le notifica ese propósito para que comunique a Merry «nuestros intentos y razones, así como esperanzas que abrigamos de que opinión católica, apreciándolo al-

cance estrictamente legal de la disposición, no intentará frustrar con su actitud los resultados eminentemente pacificadores de la obra que acometemos. Todos los reparos doctrinales que el artículo 11 Constitución podía suscitar desde punto vista católico fueron expuestos por Santa Sede y Obispos a su tiempo y no parece, por tanto, que revista hoy ninguna oportunidad ni utilidad el reproducirlos.—*Garciprieto*» (AMAE/SPS, leg. 2.678, expediente «1910, Real orden interpretativa del Artículo 11 de la Constitución en lo que afecta a las manifestaciones exteriores del culto no católico»). Tales reparos han sido estudiados por Giovanni Barberini: *El artículo 11 de la Constitución de 1876. La controversia diplomática entre España y la Santa Sede*, Roma, Pontificia Universita Lateranense, 1962, 139 pp., o bien «*Anthologica Annua*», IX (1961), 279-409. El mismo 9-VI-1910, en sendas entrevistas, el nuncio en Madrid defendía ante García Prieto y Canalejas, contra la anunciada real orden sobre la libertad de cultos, que el Gobierno debía de abandonar toda cuestión religiosa mientras estuviera en negociaciones (cfr. Soldevilla: *op. cit.* (1910), 219), y lo mismo advertiría en seguida *L'Osservatore Romano*: porque el contenido del artículo 11 coincidía con el primero del Concordato en la materia contemplada y era la reforma de este pacto de 1851 la que se negociaba precisamente (vid. V. Minteguía: *La real orden de 10 de junio sobre manifestaciones de culto*, «*Razón y Fe*», mayo-agosto 1910, 440).

¹⁰² Despacho núm. 62, 3-VI-1910, del embajador Ojeda al ministro de Estado, AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «1910. Negociaciones...»: «Muy reservado. = Excmo. Señor, = Muy Señor mío: Tan pronto recibí en la mañana del 26 del próximo pasado mes, el telegrama de V. E. del 25 encargándome dirigir a este Secretario de Estado una Nota ajustada a los términos que en dicho telegrama se me comunicaban, y después de haberlo cuidadosamente descifrado, redacté la Nota que según las instrucciones de V. E. debía presentar al Cardenal y cuya copia tengo ahora la honra de remitir a V. E. en anexo N.º 1 a este Despacho. = En la mañana del día siguiente, 27 de mayo, puse dicha Nota en manos del Cardenal después de haberle dado lectura de su contenido. = Según telegrafí a V. E. al volver del Vaticano, el Cardenal me aseguró que pondría inmediatamente en conocimiento de Su Santidad tan importante documento; me reiteró que la Santa Sede haría el mayor esfuerzo para llegar a un acuerdo con el Gobierno de S. M., pero, a pesar de haber yo intentado varias veces averiguar la impresión que le causara la lectura de la Nota, no pude conseguirlo por excusarse siempre Su Eminencia de hacerlo, mientras Su Santidad no hubiera formulado su propia opinión en el asunto.—Sin embargo, pude colegir por el tono general de nuestra entrevista y por la acogida amistosa que hizo a mis explicaciones acerca del equivocado alcance que la Curia había dado o podía dar al intento del Gobierno de publicar en breve la Circular a los Gobernadores sobre la aplicación de la Real Orden de 9 de abril 1902, que no serían del todo desfavorables las disposiciones de esta Curia a negociar con el Gobierno de S. M. sobre las bases propuestas en su última Nota.—No creyendo todavía oportuno comunicar a V. E. esta impresión personal me limité a telegrafiarle que había cumplido sus instrucciones y entregado la Nota al Cardenal. (Anexo N.º 2). = Desde entonces acá nada ha ocurrido que me induzca a cambiar esta opinión, y más bien la robustece el hecho de que publicada por estos periódicos la noticia de la inserción en la «Gaceta» de las instrucciones a los Gobernadores dadas por el Gobierno de S. M., los órganos del Vaticano se han limitado a publicarla sin añadir observación alguna, lo cual parece indicar que han recibido encargo de la Curia de abstenerse de todo comentario que pudiera indisponer al Gobierno de S. M., o provocar inoportunamente los ánimos. = Recibidos esta mañana los dos telegramas de V. E. de ayer noche, relativos el primero a la denegación de los conceptos que un periódico extranjero atribuye al Presidente del Consejo, y el segundo, a los comentarios de la prensa ultramontana española sobre el preámbulo del Decreto de instrucciones a los Gobernadores, he acudido esta mañana a la recepción semanal del Secretario de Estado, pudiendo cerciorarme que ha oído con cierta satisfacción la lectura que le he dado de ambos

telegramas. Aproveché también la ocasión para expresarle en nombre de V. E. que el Gobierno, al coincidir con la Santa Sede, respecto de las reglas para el porvenir en materia de fundación de comunidades religiosas, se reservaba la libertad de presentar a las Cortes un proyecto de Ley exigiendo la autorización de la Potestad Civil para establecerlas en lo sucesivo.—El Cardenal nad objetó a esto, observando solamente que sin duda el Gobierno consideraba dicho proyecto de Ley como corolario del acuerdo con la Santa Sede sobre este punto. = Pasamos enseguida a hablar de la publicación de las instrucciones a los Gobernadores y comenzó el Cardenal por declararme su temor de que dicha publicación fuese considerada por ciertos elementos como un reto lanzado por el Gobierno y un deseo de precipitar las cosas.—Le contesté que lo que la malevolencia de ciertos elementos o la ignorancia de otros, atribuyese al Gobierno, carecía de toda base ante las explicaciones que yo le había dado respecto de la continuidad de propósito que desde un principio había animado al Gabinete, de adoptar tan pronto lo permitieran las circunstancias las medidas preceptuadas en la Real Orden de 1902, y a este propósito creí oportuno volver a repetirle lo que me comunicó V. E. en su telegrama de 22 de mayo próximo pasado, en que se explica la causa que había retardado la publicación de las antedichas instrucciones, rogándole de nuevo desvaneciera las sospechas que sobre este punto podían haber abrigado los miembros de la Congregación y la Curia en general, y le reiteré a este efecto la sinceridad de propósitos que ahora y siempre han animado y animarán al Gobierno de S. M. = En esto, se mencionó la intempestiva publicación de la carta dirigida por el Episcopado español al Presidente del Consejo y a este propósito me manifestó el Cardenal que coincidía con el Gobierno respecto de su inoportunidad y comprendía la mortificación que este acto debe de haber producido al Gobierno.—Me añadió que esta indiscreción, cuyos verdaderos móviles ignoraba, no podía achacarse ni al Nuncio ni a la Santa Sede toda vez que a él le constaba que el origen de la publicación se debía a una inadvertencia del Obispo de Pamplona, inadvertencia a la que presta muy poca fe el Cardenal, por proceder de un prelado cuya carencia de tacto es notoria en esta Curia y sobre la cual ha tenido esta Embajada que llamar varias veces la atención de los predecesores de V. E. = En el curso de la conversación me encargó el Cardenal asegurase a V. E. que las restricciones adicionales introducidas en la respuesta del Vaticano de que se queja V. E., no las juzga éstas restricciones, sino simplemente una confirmación de las facultades que el Gobierno pidió fueran concedidas a los Obispos; y que ha habido por lo tanto en este punto equívoco que conviene aclarar. = En cuanto a la excepción hecha en la regla relativa al minimum de los religiosos que debe haber en cada casa, me dijo el Cardenal que había sido introducida en atención a ciertas consideraciones puramente humanitarias, porque sería una crueldad, me dijo, que ni la Santa Sede ni el Gobierno de España se prestarían a sancionar seguramente el suprimir la asistencia a los enfermos y asilados, etc., porque los que tan amorosamente los atienden no alcancen al número de doce.—Le contesté que cumpliría el encargo que me daba comunicando a V. E. lo que acababa de manifestarme; pero añadí que, desde luego, podía darle las más completas seguridades respecto a los sentimientos humanitarios del Gobierno de S. M., el cual al perseguir su legítimo propósito de corregir los abusos creados por el exceso de casas religiosas en España sabría armonizar sus sentimientos filantrópicos con las medidas necesarias a aquel fin. = Por último insté al Cardenal a que me favoreciese cuanto antes con una contestación a la Nota última, de 26 de mayo, y Su Eminencia me aseguró que a pesar de los numerosos y largos trámites que el despacho de este género de asuntos exige, me contestaría hacia mediados de la próxima semana. = Concluida mi entrevista he dado cuenta de ella a V. E. en telegrama de hoy que confirmo. (Anezo N.º 3) = Dios guarde a V. E. muchos años. = Roma, 3 de junio de 1910.» Los telegramas anejos no añaden nada al despacho. En cuanto a la carta de Aquirre a Canalejas de 6-IV-1910, aparece efectivamente publicada en el *Bilettin Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 2-V-1910. Respecto a las declara-

ciones de Canalejas rectificadas telegráficamente, pueden ser las que publica ABC, 2-VI-1910, entre otros, sobre la limitación de los institutos religiosos: «La cuestión está planteada. Si la respuesta definitiva de Roma hace imposible el acuerdo entre nosotros, me pasaré sin ella, porque quiero establecer esta reforma necesaria. El español es dueño en su casa». He aquí el telegrama de rectificación dirigido por el ministro de Estado al embajador el 2-VI-1910 (*lic. cit. supra*, AMAE): «Prensa atribuye Presidente Consejo Ministros declaración a corresponsal extranjero en sentido que si respuesta definitiva Santa Sede no permite llegar acuerdo, prescindiremos de ella para solución problema órdenes religiosas. V. E. conociendo discreción Presidente Consejo Ministros comprenderá que durante curso negociaciones se abstiene enunciar propósitos para caso aquéllas no conduzcan al feliz resultado que esperamos si Santa Sede corresponde a nuestras buenas disposiciones.—Garciprieto.» Pero la cuestión no quedó resuelta con esto. El 9, el ministro tenía que volver a telegrafiar a Ojeda en estos términos: «Nuncio a pesar ser mañana día recepción diplomática pidió hoy verme para preguntarme de parte Secretario Estado (que dice necesitar saberlo para respuesta a nuestras últimas proposiciones) si era cierta declaración atribuida a Presidente Consejo Ministros por *Diario Universal* día 2 respecto propósitos en caso fracasar negociaciones. Respondí precisamente en dicha fecha telegrafíe V. E. desmintiendo declaraciones tomadas de prensa extranjera. Añadí que V. E. leyó día 3 a Cardenal mi telegrama y aquél pareció escuchar lectura con satisfacción por lo cual me sorprendía ahora este paso. Nuncio dio a entender que declaraciones hubieran debido desmentirse públicamente a lo que repuse que como Cardenal no lo indicó a V. E. no lo habíamos considerado necesario, no dando, por otra parte, más importancia a las suposiciones del periódico extranjero que a otras que diariamente y en diversas materias se atribuyen a gobernantes España y todos países y que no se rectifican sino allí donde importa, es decir, en este caso, cerca de Su Eminencia. Puede V. E. aludir a esta conversación en la suya de mañana y recordar los deseos que desde un principio hemos expuesto de llegar a un acuerdo sobre puntos materia de negociación; deseos que nos duele ver puestos en tela de juicio. Cardenal encontrará sin duda que lo procedente es no dejarse impresionar por hipótesis y comentarios ajenos a ambas partes y proseguir examen asunto con recíproca buena voluntad. = Garciprieto.» Antes, el 4, el propio ministro había teleografiado a Ojeda sobre otro extremo de su conversación con Merry: «Atribuyo declaraciones Cardenal sobre circular Gobernadores a no conocer todavía documento. De otro modo reconocería como prácticamente reconoció, al no presentar observaciones durante mes y medio transcurrido desde que se le informó nuestro propósito, que ninguna objeción era posible. Protesta Santa Sede versó sobre Real Decreto 1901 no sobre Real Orden 1902 que, al contrario, significó acuerdo provisional entre ambas potestades. Justicia nuestra tesis es tal que periódico «Universo» día dos expresaba extrañeza de que hubiéramos avisado a Santa Sede y declaraba que moralmente ésta no podía protestar contra estricto cumplimiento aquella disposición. = Garciprieto». Vid., efectivamente en ese sentido, *El Universo*, 2-VI-1910. De parte liberal, interesa la campaña de *El Imparcial*, 2, 3, 4 y 5-VI-1910, en apoyo de la supresión de las asociaciones que no hubieran cumplido la orden de 1902 y en pro de la presentación inmediata a Cortes del proyecto de ley de asociaciones.

¹⁰³ Telegrama 9-VI-1910, del ministro de Estado al embajador Ojeda, AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «1910, Real orden interpretativa...», transcrito nota 101 supra.

¹⁰⁴ Son las señaladas en la nota 102 supra.

¹⁰⁵ Cfr. telegrama del presidente del Consejo, Canalejas, al embajador Ojeda, sin fecha: «Descifre V. E. mismo. Ministro Estado me entrega su telegrama. Puede V. E. negar terminantemente autoridad a cuantas versiones se me atribuyan por periódicos nacionales o extranjeros que no estén de perfecto acuerdo con manifestaciones que Ministro Estado, de conformidad con resto Gobierno, tiene consignadas en notas, telegramas y cartas a V. E. = *Diario Universal* no es periódico oficioso del Gobierno ni mío. = Descartado este incidente, urge contestación nuestra última Nota por aproximarse debates

parlamentarios. = Canalejas.» Alude al contenido de la nota siguiente (AMAE SPS, leg. 2.678, exp. «1910. Negociaciones...»).

¹⁰⁶ Despacho núm. 67, 10-VI-1910, del embajador Ojeda al ministro de Estado, *ibidem*: «Muy reservado. = Excmo. Señor, = Muy Señor mío: Añche recibí el telegrama de V. E. de ayer tarde, y esta mañana ha llegado a mi poder el que me dirigió V. E. en la noche de ayer. = Apenas descifrado este último, me he apresurado a acudir a la audiencia semanal del Secretario de Estado.—Al cruzarse las primeras palabras, me he hecho cargo de la impresión penosa que le ha causado la publicación hecha ayer por esta prensa de un telegrama de Madrid anunciando los acuerdos tomados en Consejo de Ministros relativos a la interpretación y aplicación del Artículo XI de la Constitución.—No experimentó, por tanto, sorpresa el Cardenal al leerle yo el telegrama de V. E. referente al asunto y únicamente me interrumpió de cuando en cuando, dando muestras de desaliento y expresando al final su pesar de que se hubieran tomado tales decisiones en el momento presente. = Pasé luego a informarle de cuanto me dice V. E. en su segundo telegrama de ayer, relativo a su entrevista con el Nuncio, respecto de las declaraciones que la prensa ha atribuido al Presidente del Consejo [vid. nota 102 supra] y le expuse la extrañeza que ha causado al Gobierno el que después de haber oído con satisfacción la lectura del telegrama de V. E. del 2 del corriente, Su Eminencia hubiera encargado al Nuncio de averiguar lo que anterior y categóricamente había desmentido el Presidente. = El Cardenal me contestó en los siguientes términos: = «Es verdad, Señor Embajador, que cuando me leyó el telegrama el día tres y me dio Vd. las explicaciones que creyó convenientes acerca del carácter sincero y leal del Presidente del Consejo, quedé satisfecho y no di importancia al asunto por entender que, en general, no hay que dársela a las noticias de la prensa extranjera. En este espíritu cordial continué el examen de las proposiciones del Gobierno y fue redactada su contestación por esta Secretaría, a fin de entregársela a Vd. como se lo prometí a mediados de esta semana. En esto se llamó mi atención sobre un artículo de fondo que ha publicado el *Diario Universal* de Madrid, en que no se hacía mera referencia a las pretendidas afirmaciones del órgano extranjero, sino que se reproducían, entre comillas, sin duda para revestirlas de mayor autenticidad, las palabras del Presidente y se le tributaban aplausos por haberlas dicho, sin que el Gobierno cuidase de Jesmentirlas, ni de la desfavorable impresión que había de producir el hecho de ser estampadas en un diario oficial cuyas relaciones con el Presidente del Consejo son notorias.—El efecto que el artículo del *Diario Universal* ha producido en el ánimo de Su Santidad y en el Vaticano ha sido profundo y doloroso.—En el momento en que me preparaba yo para firmar la Nota de contestación al Gobierno, que contiene el mayor número de concesiones que jamás ha hecho la Santa Sede a Nación alguna, el Pontífice y la Congregación y yo nos preguntamos, ¿de qué utilidad era proseguir amistosamente negociaciones con un Gobierno que declaraba en la prensa y en múltiples manifestaciones que estaba dispuesto a prescindir de nosotros en el caso en que aquéllas no alcanzasen un feliz resultado? [sic] = Así es, Señor Embajador, que desde aquel momento ha reinado en nuestros ánimos la más desconcertante perplejidad, hasta el punto de haber declarado el Pontífice que puesto que era la intención del Gobierno de proseguir en su empeño cualesquiera que fuesen las disposiciones de la Santa Sede, más valía no negociar y dejar a aquél la responsabilidad de sus actos.—Sin embargo, antes de tomar una decisión convenía obtener una rectificación de las palabras del Presidente, que restableciese en la Curia la confianza que en un principio nos inspiró cuanto Vd. nos dijo al respecto y de aquí que hayamos dado instrucciones al Nuncio para obtenerla.—La contestación del Nuncio no ha llegado aún a esta Secretaría, pero la aguardamos de un momento a otro.—No puedo menos, sin embargo, de confesar a Vd. que mi impresión acerca del éxito de los esfuerzos que hacemos por llegar a una inteligencia con España, es bien poco alentadora porque a pesar de las amistosas disposiciones hacia el Vaticano que Vd. nos reitera, es lo cierto que los hechos las desmienten y que

las resoluciones del Gobierno en materia de asociaciones como en la reforma de la regla segunda de la Circular de 23 de octubre de 1876, son otros tantos síntomas de un estado de cosas poco halagüeño y lleno de amenazas para el porvenir.» = Le manifesté entonces al Cardenal, en primer término, y por lo que respecta al artículo del *Diario Universal*, que no me constaba que dicho periódico fuese órgano oficioso del Gobierno, sino simplemente afecto al Gabinete, como otros tantos cuyas declaraciones independientes de todo «control» oficial, no podían crear estado, ni envolver responsabilidad para el Gobierno. Le dije también que el mismo periódico declara en el citado artículo de fondo, que las palabras atribuidas al Presidente del Consejo proceden de esa misma prensa extranjera a la que el Cardenal había convenido anteriormente conmigo, en no dar importancia alguna y que, en cambio, de las declaraciones atribuidas al Presidente que aquí causaban tanto disgusto, podía yo citarle otras tantas y aún en mayor número que aquellas en que el Presidente del Consejo había rehusado anticipar impresión alguna ni aludir a determinación de ningún género por su parte mientras se hallasen pendientes las negociaciones con el Vaticano. = Respecto de las resoluciones del Gobierno que el Cardenal considera sintomáticamente de un espíritu hostil al Vaticano, repetí a Su Emi-nencia que en nada se relacionaban con las actuales negociaciones; que por lo que respecta a la circular sobre asociaciones religiosas, ésta no era más que la aplicación de una Real Orden convenida ya con el Vaticano y que por lo que hace a la derogación de la regla segunda de la Circular de 23 de octubre de 1876, era potestativa del Gobierno, a quien compete únicamente la interpretación y la aplicación de las leyes constitucionales y no podía por consiguiente ser objeto de negociación con el Vaticano ni sospechársela de hostilidad hacia la Santa Sede; pero que a pesar de ello el Gobierno había siempre cuidado como acto de especial deferencia, de informarla por mi conducto de cuanto se proponía hacer en todos aquellos asuntos que creía deber interesar, aun fuera remotamente, al Vaticano. = He tratado por todos los medios a mi alcance, Excmo. Señor, de devolverle la calma y la confianza en los amistosos sentimientos del Gobierno, al espíritu del Cardenal quien, al final de la entrevista, admitió que las necesidades de aquél en las actuales circunstancias le obligaban quizá a adoptar sin demora el curso que había emprendido, perseverando sin embargo, como yo le he repetido a saciedad, en negociar con la Santa Sede en todos aquellos asuntos cuya naturaleza así lo requiera. Mas no debo ocultar a V. E. que el Vaticano prevé complicaciones y conflictos, para los que, desde luego, parece apercibirse. La misma impresión he recogido al visitar después de mi entrevista con el Cardenal, a los más altos funcionarios de la Secretaría de Estado. = Al regresar a casa he condensado el relato de ella en telegrama de hoy dirigido a V. E. que ahora tengo el honor de confirmarle (anexo al presente Despacho). = Dios guarde a V. E. muchos años. = Roma, 10 de junio de 1910.»

¹⁰⁷ «Copia traducida» de la nota oficial del cardenal secretario de Estado de Su Santidad al embajador español cerca de la Santa Sede, 11-VI-1910, *ibidem*: «Desde el Vaticano, 11 de Junio 1910. = El Infrascrito Cardenal Secretario de Estado tiene la honra de comunicar a Su Excelencia el Señor Embajador de España que, en el momento en que iba a remitirle la respuesta de la Santa Sede a su apreciable Nota del 26 de Mayo próximo pasado, respuesta inspirada en los más sinceros sentimientos de benevolencia y de concordia, ha tenido conocimiento de la publicación inminente de una Real Orden relativa a la aplicación del Artículo XI de la Constitución Española. = Tratándose de una materia que no solamente de por sí es sumamente grave y delicada, sino que además toca las bases (*norme*) fundamentales del Concordato existente entre la Santa Sede y la España, el Cardenal que suscribe ha recibido del Santo Padre la orden de hacer saber a Su Excelencia que la Santa Sede se vería obligada a emitir contra tal publicación la más formal protesta. (= En la esperanza que el Gobierno de S. M. Católica se abstenga de proceder a semejante acto, que tanto dolor causaría al corazón paternal de Su Santidad, el infrascrito aprovecha esta ocasión, etc., etc. = (Firmado) R. Card. Merry del

Val. = Está conforme.» Ojeda remite esta nota al ministro de Estado con el despacho núm. 68, 12-VI-1910, que dice: «Muy Reservado. = Excmo. Señor, = Muy Señor mío: Ayer, apenas hube dirigido a V. E. mi carta en que ampliaba mi Despacho del día anterior, recibí la Nota del Cardenal cuyo contenido casi íntegro traduje y telegrafíé a V. E. a las cinco de la tarde y cuya copia tengo ahora la honra de remitir a V. E. (anexo N.º 1 a este Despacho). = Después de mi telegrama del 10, en que daba a V. E. cuenta de mi entrevista con el Secretario de Estado y de las impresiones desfavorables que de ella había recogido, no habrá extrañado a V. E. la Nota del Vaticano. = Sin permitirme hacer comentarios sobre el fondo de la misma, debo sin embargo hacer notar a V. E. una notable discrepancia entre la explicación que me dio el Cardenal de los motivos que le habían obligado a suspender el envío a esta Embajada de su contestación a mi Nota del 26 de mayo, y los que alega ahora para no continuar las negociaciones entabladas con el Gobierno de S. M. = En efecto, como habrá observado V. E. en mi telegrama del 10, el Cardenal, mucho antes de conocer la resolución del Gobierno relativa a la anulación de la Circular de 23 de Octubre de 1876, había suspendido la firma de su contestación a mi Nota del 26 de mayo y telegrafiado al Nuncio en vista del artículo del *Diario Universal* leído por Su Eminencia días antes. No podían, por tanto, atribuirse la vacilación y la repugnancia a contestarnos favorablemente que sentía el Vaticano, a la abrogación de la Circular sobre Cultos disidentes, puesto que la noticia de esta abrogación la recibió el Cardenal el nueve por la noche y le fue confirmada por mí el diez por la mañana. Carece por consiguiente de exactitud la razón en que se funda el Cardenal en su última Nota para anunciarnos una protesta contra la publicación de la Real Orden sobre aplicación del Art. XI de la Constitución, en vez de la contestación prometida a mi nota del 26 de mayo próximo pasado, puesto que declaró anteayer que días antes había quedado en suspenso. = También me permito hacer observar a V. E. que el anuncio de dicha protesta que hace ayer Su Eminencia puede ciertamente atribuirse a la impresión aquí causada por la publicación de la Real Orden en cuestión, pero no excluye en modo alguno una respuesta, sea cual fuere, a los puntos concretos que contenía mi última Nota, sobre los cuales guarda entera reserva este Secretario de Estado, resultando de todo ello, actualmente, una situación anómala, cual es, la de una protesta contra un hecho ajeno a negociaciones que hasta ahora pueden considerarse en curso, puesto que el Vaticano se abstiene de significarnos ya sea su suspensión, ya sea su ruptura. = Así las cosas, yo espero que el telegrama que me dirigió anoche V. E. y que yo he transmitido esta mañana en Nota Oficial al Secretario de Estado, según las instrucciones de V. E., así como el que me ha mandado el Presidente del Consejo y yo he transcrito también esta mañana en carta particular al Cardenal, en cuyo último párrafo se le insta para que conteste con urgencia a nuestra última Nota [vid. nota 105 supra], provocarán por parte de aquel explicaciones propias a aclarar la delicada situación respectiva en que actualmente nos hallamos. = Adjunto tengo la honra de remitir a V. E. (anexo N.º 2) copia de la Nota, estrictamente ajustada al telegrama de V. E. de anoche, que he dirigido esta mañana al Secretario de Estado. = Dios guarde a V. E. muchos años. = Roma, 12 de Junio de 1910». He aquí la nota del anexo 2: «El Embajador de S. M. cerca de la Santa Sede = al Cardenal Secretario de Estado de S. Santidad. = Roma, 12 de Junio de 1910 a las 11 a. m. = Eminentísimo Señor, = Recibida en la tarde de ayer la Nota que V. E. ha tenido a bien dirigirme en contestación a la mía del 26 de mayo próximo pasado, tengo la honra de informar a Vuestra Eminencia que dicha Nota llegó a mis manos después de haber publicado la *Gaceta Oficial* la Real Orden devolviendo al Art. XI de la Constitución su interpretación natural. = Telegrafiado por mi conducto al Gobierno de S. M. el contenido de la mencionada Nota de Vuestra Eminencia, aquél, en telegrama de ayer noche, me ordena manifieste a Vuestra Eminencia su esperanza de que cuando el texto de la Real Orden sea conocido del Santo Padre y de Vuestra Eminencia, podrá apreciar que se trata de una disposición que no modifica la situación de los ca-

tólicos en España; que se mantiene estrictamente dentro de las limitaciones del artículo constitucional cuya interpretación, como la de toda ley interior, corresponde al poder Civil; y que ni de cerca ni de lejos atañe a las materias que están tratándose entre ambas Potestades. = Me ordena asimismo el Señor Ministro de Estado exprese a V.^a Eminencia la confianza que abriga el Gobierno de S. M. que, dadas estas condiciones, se calmarán las inquietudes de Su Santidad, y sus disposiciones para facilitar un acuerdo sobre los asuntos que fueron objeto de mi Nota de 26 de mayo próximo pasado, no sufrirán alteración como no las sufren las del Gabinete de Madrid que me encarga renovar a V.^a Eminencia el testimonio de sus deseos en este sentido. = Aprovecho, etc., etc., etc. = (Firmado) E. De Ojeda.»

Apud *Heraldo de Madrid*, 10-VI-1902. Canalejas la justificaría en la recepción de «bastantes reclamaciones, quejándose los extranjeros de que en España no pudieran acudir con la frente alzada a los templos de sus religiones, como los católicos a la iglesia» (apud *El Imparcial*, 12-VI-1910).

¹⁰⁹ El Gobierno insistiría aun en el acierto de su postura en telegrama del ministro de Estado al embajador Ojeda de 12-VI-1910, AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «1910. Negociaciones...»: «Sirvase visitar cuanto antes Secretario Estado y hacerle siguientes reflexiones: = Primera. Un Gobierno perteneciente mismo partido y formado en parte por individuos Gabinete que se constituyó febrero último, había presentado en 1906 proyecto ley asociaciones sujetaando a él todas Ordenes y Congregaciones no mencionadas Concordato y exigiendo se sometiesen a revisión y nueva autorización del poder civil. Gabinete constituido en febrero, inspirándose en sentimientos deferencia a Santo Padre y consideración a opinión católica española ajustándose al precedente del Gabinete Moret y deseando ante todo asegurar resultados prácticos para pacificación espíritus, siguió línea conducta distinta de 1906 comenzando por abrir francas y leales negociaciones con Vaticano sobre posible reducción Ordenes y Congregaciones. = Segunda. Santa Sede en su respuesta, sin entrar siquiera en examen nuestras proposiciones opuso otras que de antemano debía suponer que no conducirían acuerdo toda vez que ni siquiera partido conservador en última etapa consideró útil volver presentarlas parlamento. = Tercera. Gobierno S. M. halló en sus propias conciliadoras disposiciones motivos para no desalentarse e insistió en sus equitativas propuestas. Solicitó de la manera más amistosa una pronta contestación fundada en motivo tan racional como la necesidad de redactar Mensaje Corona y aludir allí al particular. Ni en ese ruego ni en ningún otro acto del Gobierno podrá decirse que hubo presión, enunciación de propósitos para el caso de no llegarse a un acuerdo o exigencia de que las proposiciones fueran aceptadas sin discusión y sin cambio. Números 2 y 4 de Nota V. E. 26 mayo lo ponen de manifiesto. = Cuarta. Santa Sede no ha juzgado del caso complacer al Gobierno en la brevedad de la respuesta. Ha dado crédito o por lo menos ha considerado suficiente para justificar retraso y pedir excusas simples rumores y afirmaciones prensa formalmente desmentidas por V. E. Ha invocado el mal efecto producido por circular gobernadores recordando la de 1902 sobre la cual si algún reproche fuera posible, no había lugar a exponerlo después cerca de dos meses de conocer la intención y haber guardado silencio. = Quinta. Opone ahora a Real orden interpretando Constitución una protesta que nada justifica y que de todas suertes en nuestro sentir, era innecesaria, puesto que en 1875 salvó ya Santa Sede su opinión sobre ejercicio cultos disidentes. Gobierno S. M., al contestar, ha hecho presente que no por esa actitud del Santo Padre se alterarán buenas disposiciones Gabinete Madrid para llegar acuerdo sobre materias contenidas Nota 26 mayo. = Sexta. Si lo mismo no sucede por parte Santa Sede; si la perplejidad y confusión en que dice estar no se desvanecen con tan categóricas explicaciones y seguridades. Gobierno de S. M. lo deplorará pero está seguro de que opinión pública española y extranjera al conocer el texto mismo de los documentos y el detalle de los sucesos podrá quizá disentir de nuestros puntos de vista pero reconocerá unánimemente corrección nuestro proceder. Garciprieto». La entrevista consiguiente entre Me-

rry del Val y Ujeda queda reseñada por este en el despacho núm. 69, 14-V-1910: «Muy Reservado. = Exmo. Señor, = Muy Señor mío: Ayer a las ocl de la noche, según anuncie a V. E. en mi telegrama de la mañana, fui a v al Secretario de Estado de Su Santidad, con el objeto de cumplir las instrucciones que me dijo V. E. en su telegrama del día 12. = Comencé por leerle contenido íntegro de dicho telegrama que escucho Su Eminencia con conce tradísima atención, interrumpiéndome sin embargo de cuando en cuando co viveza, al oír ciertos hechos o alegaciones en cuya apreciación no se halla conforme con V. E. = La primera y más vehemente de sus protestas la formó S. Eminencia al leerle el párrafo relativo a la circular a los Gobernadores en que dice V. E. que: «Si algún reproche fuese posible no habría lugar exponerlo después de cerca de dos meses de conocer la intención y haber guardado silencio.» = El Cardenal opuso a esta una calurosa denegación fundada en que mi Nota del 15 de abril anunciaba simplemente el propósito del Gobierno de aplicar la R. O. del 9 de abril de 1902 mediante instrucciones a los Gobernadores; pero que todo ello era un proyecto que no podía, hasta ser definitiva y concretamente conocido por el Vaticano, dar lugar a observaciones por su parte. Añadió el Cardenal que la primera noticia que tuve de que se iba a aplicar la R. O. fue la que yo le di confidencialmente cuando V. E. me encargó hacerlo, y que dadas estas circunstancias le había sido imposible a la Santa Sede intervenir, si bien no negaba que la impresión recibida influyó de modo muy desfavorable en la acogida que podían merecer a la Santa Sede las últimas proposiciones del Gobierno. = Rogué a Su Eminencia que me dejase proseguir la lectura del apunte que contenía las demás observaciones de V. E. y así lo hice escuchándola con la más marcada atención al Cardenal. = Lo primero que me dijo después de esto, fue repetirme lo que ya me había manifestado anteriormente, respecto del sentimiento que le había causado ver que el Gobierno no había interpretado correctamente la inclusión entre las excepciones que se hacen en su Nota contestación al Gobierno de la facultad de los Obispos para conservar aquellas casas o institutos religiosos que a su parecer debería conservar. «Esto que el Gobierno llama restricción aportada al Protocolo de 1904», añadió el Cardenal, «ha sido más bien deseo de favorecer las miras del Gobierno, puesto que en la Nota de V. E. del 15 de abril se expresa que los obispos deberían mandar a una comisión mixta la lista de los monasterios, conventos, casas, etc., cuya conservación estimasen precisas». = Respecto del artículo de fondo del *Diario Universal* atribuyendo ciertas declaraciones al Presidente del Consejo, me declaró el Cardenal que, después del telegrama de aquel, consideraba terminado el incidente por cuanto se relata con la impresión desfavorable que había producido el artículo a la Santa Sede y con el aplazamiento de la contestación a la última nota. = «Lo que desgraciadamente subsiste», añadió el Cardenal «como obstáculo invencible para proseguir las negociaciones, es la publicación de la Real Orden sobre interpretación del artículo XI de la Constitución; porque la Santa Sede no puede consentir que los Gobiernos interpreten por sí mismos y sin intervención de la otra parte, lo concordado por ambas, y si el Gobierno de España consulta el voluminoso expediente de esta cuestión, aún en los tiempos del Cardenal Antonelli, podrá apreciar la actitud que entonces, ahora y siempre ha asumido la Santa Sede sobre este punto. Lo que hay es que ante las seguridades las más formales que nos dio entonces el Gobierno Español presidido por el Sr. Cánovas del Castillo, de que la infracción hecha al Concordato envolvía únicamente una simple medida de tolerancia hacia los cultos disidentes, la Santa Sede llena de benevolencia se allanó a tolerar tácitamente aquella infracción. Mas hoy con la publicación de la Real Orden interpretando la Ley Constitucional, ya no se trata de tolerancia sino del reconocimiento legal y explícito de atribuciones y facultades de los cultos disidentes en España, palmariamente contrarios al espíritu y a la letra del Concordato de 1851.» = A este propósito, me dijo también el Cardenal que dada la diferencia que existe entre la situación actual y el allanamiento simple de la Santa Sede a lo prescrito en la Real Orden de 23 de oc-

tubre de 1876, no podía esperar el Gobierno que la Santa Sede no formulase ahora su protesta y que si no lo había hecho ya, era en consideración a no haberse recibido aún el texto oficial de las disposiciones del Gobierno en la materia. = Hice muchas observaciones a cuanto me decía el Cardenal, basadas principalmente en las anteriores comunicaciones, telegramas y cartas de V. E. y del Presidente del Consejo, que por esta razón creo ocioso reproducir aquí y por último, le hice observar que, al anunciarme en su Nota del 11 que en los momentos en que se preparaba a dirigirme su contestación a nuestras últimas proposiciones, había llegado a su conocimiento la noticia de la publicación inminente de la Real Orden sobre cultos, no hacía declaración ninguna relativa a las negociaciones entabladas, yo entendía que estas y la protesta de la Santa Sede eran dos cosas completamente diferentes, y que mi última Nota exigía una contestación tan categórica y completa como lo eran nuestras últimas proposiciones. El Cardenal repuso que dicha contestación sería dada tan pronto como llegase a su conocimiento el texto de la Real Orden del 10 del corriente y que al mismo tiempo sería redactada la protesta si es que, como desgraciadamente preveía, había lugar a ello. = Al concluir, el Cardenal se mostró muy pesimista en sus apreciaciones sobre la actual situación entre la Santa Sede y España, así como sobre los efectos de la R. O. del 10, cuya aplicación, según él preveía, había de causar serios embarazos y dificultades al Gobierno y al deplorar el estado de cosas existente, me dijo que el desconsuelo de su ánimo estaba fundado en su creencia de que dados los compromisos y significación del Presidente del Consejo, éste se hallaría impelido, a pesar de sus disposiciones conciliadoras y su odio a toda coacción, a seguir un camino violento cuyas consecuencias serían desastrosas para las buenas relaciones entre la Potestad eclesiástica y la Civil. = Traté de combatir sus previsiones en este sentido, con los argumentos que me inspiran mi adhesión al Monarca y al Gobierno y mi convencimiento de los propósitos moderados que en todos los sentidos ha de desarrollar el Gabinete; pero mis palabras, si bien lo han mitigado, no han logrado vencer el pesimismo de Su Eminencia. = Dios guarde a V. E. muchos años. = Roma, 14 de junio de 1910». El telegrama aludido del 13, enviado por el propio Ojeda a García Prieto, no añade nada al despacho.

¹¹⁰ *El Liberal*, 10-VI-1910.

¹¹¹ Se usa la denominación *ibidem*, 11-VI-1910.

¹¹² Cfr. *ibidem*, 28-X-1910.

¹¹³ Apud *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 15-VI-1910.

¹¹⁴ Telegrama del ministro de Estado al embajador Ojeda, 15-VI-1910, AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «1910. Negociaciones...»: «Párrafos mensaje Corona que se leerá esta tarde y pueden interesar esa embajada son ...» (copia a continuación, fielmente, lo concerniente a la regulación y reducción de los institutos; no las alusiones a la Real orden sobre cultos y a reformas en la enseñanza. Y a renglón seguido añade lo que transcribimos en el texto correspondiente a esta nota) «... autoridades eclesiásticas. Equivale, por lo demás, a restablecimiento regla 4.ª Real orden 1880 firmada por Ministro conservador Alvarez Bugallal. Sin embargo algunos periódicos ultracatólicos, continuando su campaña de sembrar desconfianzas, excitar ánimos y crear dificultades entre Gobierno y Santa Sede, acusan proyecto de jacob[in]ismo, sin reparar en que siempre hubo conformidad fundamental puntos de vista sobre este particular entre Vaticano y sucesivos Gabinetes españoles. = Garciprieto». El 16, el ministro insistía al embajador: «Recibido despacho 68 [apud nota 107 supra] Gobierno estima como V. E. ninguna relación hubiera debido ni debería establecerse por Santa Sede entre interpretación artículo once Constitución y negociaciones pendientes sobre órdenes religiosas. V. E. insistirá mañana con Cardenal en ese punto vista. Después reiteradas seguridades de nuestro deseo acuerdo en negociación pendiente es excusado insistir en ellas; pero V. E. aprovechará alguna oportunidad para poner relieve que lo lógico sería aguardar a ver si en realización su programa Gobierno traspasa los límites de sus prerrogativas o se inspira en sentimiento sectario; lo cua

nadie puede sostener que ha sucedido en las dos Reales órdenes últimas. Sin embargo, elementos ultracatólicos juzgan al Gobierno, no por los hechos sino por las hipótesis que ellos mismos aventuran; y llevan su espíritu de hostilidad al extremo de tomar por base de su campaña una Real orden que principio «El Universo» reconocía correcta y otra que «El Siglo Futuro» declaró indiferente para los católicos. En esa actitud Gobierno tiene razones para entender que influido la publicidad dada por Santa Sede a su protesta, y publicidad que unida a circunstancias desconocer Santa Sede en aquel momento el texto de la disposición contra la que protestaba, a los diversos pretextos invocados para retrasar contestación a nuestras propuestas; y a la indiscreción cometida antes con carta Primado a Presidente Consejo Ministros son indicios de un estado de espíritu que el Gobierno se abstiene, sin embargo discutir ni calificar, en aras conciliación. = Garciprieto». (Puede seguirse la campaña de los «ultracatólicos», sobre la que hemos de volver, pese a la reiteración de sus argumentos, a través de los diarios citados, y *El Correo Español* entre otros.)

¹¹⁵ Telegrama del embajador Ojeda al ministro de Estado, sin fecha AMAE, *loc. cit.*, nota anterior: «Acabo ver Secret[ario] E[stado] a quien he expuesto observaciones que añadió V. E. en telegrama del 15 transmitiéndome mensaje Corona, que aquel mismo día comuniqué a Cardenal. Este está conforme con V. E. en proyecto exigiendo autorización potestad civil para establecer en lo futuro de nuevo casas religiosas previsto en nota 26 mayo y me ha declarado no tener razón prensa católica al atacar Gobierno de S. M. por este concepto. En cuanto a primer telegrama V. E. de anoche me ha dicho que la acción del Nuncio se refirió al simple anuncio de una protesta pero no a la protesta que la Santa Sede no podía formular sin la base indispensable que es el texto oficial de la R. O. relativa a cultos. Así entiendo yo y lo telegrafíe a V. E. La redacción de la protesta no puede él hacerla por sí solo y necesitará consultar con Congregaciones anunciadas por lo cual es posible dé aún algunos días [sic]. Respecto segundo telegrama V. E. de anoche [apud nota 114 supra], he vuelto a insistir sobre perfecta compatibilidad continuar negociación pendiente e interpretar Artículo XI Constitución y conveniencia de aguardar realización programa Gobierno de S. M. para ver si este traspasa sus prerrogativas o se inspira en sentimientos contrarios. Cardenal me ha dicho que la protesta versará sobre vulneración Concordato en principio y he podido comprender por algún concepto velado que no contendrá excitación ni comentarios hostiles al Gobierno de S. M. Ha convenido conmigo Cardenal en la separación que hay que establecer entre las RR. OO. y negociaciones congregaciones y reiterándome que el lunes tendré contestación a Nota última del Gob[ierno] de S. M. sin extenderse acerca de sus contenidos. Ojeda». Por el contexto, este telegrama parece ser del 17-VI-1910.

¹¹⁶ Telegrama del gobernador de Oviedo al ministro de la Gobernación, 17-VI-1910, *ibídem*: «El Visitador del Instituto de las Escuelas Cristianas, me pide en oficio fechado en esa Corte el día 15 del corriente, se inscriban las congregaciones establecidas en Llanes, Colunga, Gijón, Avilés, La Felguera y Mieres. Ruego a V. E. se sirva manifestarme si procede inscripción solicitada o la aplicación preceptos artículo tercero ley treinta junio de mil ochocientos ochenta y siete.» El ministro desponde el 18: «Una vez que las Congregaciones establecidas en Llanes, Colunga, Gijón, Avilés, La Felguera, y Mieres, se hallan en el estado que indica V. S. en su telegrama, hará V. S. inmediatamente con arreglo a la Real orden de 30 de mayo último, aplicación a las mismas de lo preceptuado en el artículo 3.º de la ley de 30 de junio de 1887 y demás disposiciones de esta ley, debiendo comunicarme las resoluciones que adopte.»

¹¹⁷ Vid. *El Liberal*, 20-VI-1910.

¹¹⁸ Traducción de la nota: «El Cardenal Secretario de Estado de S. Santidad = al Embaixador de S. M. cerca de la Santa Sede. = Vaticano 20 de junio de 1910. = El infrascrito Cardenal Secretario de Estado de S. Santidad, con referencia a cuanto participaba a S. Excelencia el Embajador de España con

fecha del 11 corriente, tiene ahora la honra de manifestarle que la Santa Sede, animada como esta de las más sinceras disposiciones de concordia y deferencia hacia el Gobierno de S. M. Católica, tiene ya preparada su respuesta a su apreciable Nota de 20 de mayo sobre el asunto de las órdenes y congregaciones religiosas en España. = Pero en estos últimos días se han verificado algunos nuevos hechos que han producido en el ánimo del Santo Padre una bien viva y dolorosa impresión. Pues, mientras de hecho, están pendientes tratos para regular de comun acuerdo aquella importante cuestión, ha llegado a la Santa Sede noticia de haberse verificado la disolución de una comunidad de pasionistas en Mieres. También en el Mensaje de la Corona, según resulta del texto oficial, el Gobierno ha expresado intenciones que en muchos puntos aparecen contrarios a los principios de la religión católica. = A consecuencia de ello, movida por el deber de tutelar su decoro y su dignidad, la Santa Sede antes de proseguir sus tratos y de entregar a V. E. la mencionada Nota, pide al Gobierno español una seguridad leal de que éste se abstendrá de tomar disposiciones las cuales no podrán más que comprometer el éxito de dichos tratos. = La Santa Sede cree que el Gobierno de S. M. Católica tendrá a bien secundar este justo deseo y entre tanto el infrascrito Cardenal aprovecha esta ocasión, etc., etc., etc. = (Firmado) R. Card. Merry del Val» (apud despacho núm. 74, 20-VI-1910, del embajador Ojeda al ministro de Estado, AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «1910. Negociaciones...»).

119 El Liberal, 24-VI-1910.

120 Nota de «El Embajador de S. M. cerca de la Santa Sede = al Cardenal Secretario de Estado de S. Santidad. = Roma, 22 de junio de 1910. = Eminentísimo Señor, = Por encargo expreso del Gobierno de S. M. y con referencia al telegrama que yo le dirigí el día 20 del corriente reproduciendo íntegro el texto de la Nota de V. Eminencia, de aquel mismo día, tengo la honra de poner en conocimiento de V. Eminencia que el Gobierno se ha enterado con penosa sorpresa de que la Santa Sede crea encontrar nuevo motivo para aplazar su respuesta a la Nota de esta Embajada de 26 de mayo, sobre supresión de órdenes y congregaciones religiosas. = Las medidas que el Gobierno Civil de Oviedo haya estimado oportuno tomar respecto de la Congregación Pasionista de Mieres, no pueden ser otras que las autorizadas por la Circular recordando el cumplimiento de la Real Orden de 9 de abril de 1902; circular conocida de V. Eminencia por manifestaciones verbales mías y apunte confidencial de 15 de abril último, así como por párrafo de la Nota oficial de la misma fecha, que no pareció suscitar ningún reparo entonces ni en el largo período que medió hasta su publicación, ni fue tampoco entonces a los ojos de Vuestra Eminencia causa para rehusar los amistosos tratos iniciados con dicha Nota, ni después de publicada se invocó por la Santa Sede entre los motivos de los anteriores aplazamientos. = Respecto a las instrucciones...» (sigue lo transcrito en el texto) «...resultar por lo menos dudoso. = El Gobierno de S. M., ajeno, como es natural, a todo espíritu de hostilidad contra una religión que es la del Estado; deseoso de mantener la armonía entre ambas Potestades como ha tenido ocasión de acreditarlo ampliamente en el curso de las negociaciones; respetuoso del Pacto entre la Santa Sede y España, rectamente entendido, piensa que el usar prerrogativas correspondientes al Poder Civil, no puede considerarse lesivo a la dignidad ni al decoro de la Santa Sede, ni debe influir en el curso de las negociaciones emprendidas por el Gabinete de Madrid con el más recto ánimo y la lealtad que constantemente le guían. = El Gobierno de S. M. se da, en fin ...» (de nuevo arriba) «... ha ordenado el Gobierno. = Aprovecho, etc., etc. = (Firmado) E. De Ojeda» (apud despacho núm. 77, 22-VI-1910, AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «1910. Negociaciones...»). La nota se ajusta estrictamente al texto del telegrama del ministro de Estado al embajador —receptor y autor respectivamente del citado despacho núm. 77— de 21-VI-1910, *ibidem*, que únicamente añade: «Deseo que esta respuesta escrita la reciba Cardenal mañana mismo. = García Prieto.» El propio ministro insiste por Real orden de 23-VI-1910: «Al Embajador de S. M. cerca del Santo Padre. = Madrid 23 de junio de 1910. = Excmo. Señor: = De

Real orden y al avisar a V. E. el recibo del Despacho núm. 69 del 14 del corriente, muy reservado, en que amplía los informes telegráficos comunicados el día antes acerca de una entrevista con el Cardenal Secretario de Estado para exponerle cuál ha sido desde el principio la actitud del actual Gabinete en su conducta y negociaciones con la Silla Apostólica, cúmpleme referirme a las instrucciones que anteriormente se le han transmitido y encargarle que cuando llegue el caso de volver a tratar de este asunto con Su Eminencia le haga observar, aunque bien claro está: 1.º, que la circular a los Gobernadores recordando la de 9 de abril de 1902, fue conocida de él desde un principio y no solamente por el párrafo oficial de la nota del 15 de abril sino por un apunte confidencial de V. E. en que constaba el detalle mismo de las órdenes que iban a expedirse; y 2.º que al proponer el Gobierno que los prelados sean investidos de facultades para suprimir las casas religiosas que no consideren indispensables a las necesidades de las diócesis, se refería a los monasterios, conventos, etc., que estuviesen de acuerdo con la legislación civil y la canónica; no pudiendo pues esa propuesta invocarse como motivo para restringir el alcance la cláusula concerniente a la supresión de las casas donde existan menos de doce religiosos profesos porque ya estas hubieran debido desaparecer conforme a la Legislación eclesiástica. = Dios & = Minuta».

¹²¹ Francos: *op. cit.*, 506 s.

¹²² *Op. cit.* (1910), 260. Las publica *El Imparcial*, 24-VI-1910.

¹²³ «Traducción» de la nota de «El Secretario de Estado de S. Santidad al = Embajador de S. M. cerca de la Santa Sede. = Roma, 24 de junio de 1910. = El infrascrito Cardenal Secretario de Estado tiene la honra de acusar a S. E. el Señor Embajador de España el recibo de su apreciable Nota fecha 22 del corriente y se apresura a manifestarle las principales observaciones respecto de su contenido, que después de un atento examen de aquélla, la Santa Sede se cree en el deber de presentar al Gobierno de S. M. Católica. = Ante todo el Señor Embajador estima poder legitimar la publicación de la R. O. de 30 de mayo próximo pasado y su ejecución en Mieres, con el hecho de que la Santa Sede a la cual había sido comunicado el propósito del Gobierno de exigir la aplicación de la anterior R. O. de 9 de abril de 1902, no hizo a ella oposición. Mal podría argüirse de ello una aquiescencia cualquiera de la Santa Sede a aquella R. O. Esta tenía fundados motivos para entender ...» (sigue lo transcrito en el texto) «... *Modus Vivendi* del 1902. = Ahora bien dichas disposiciones fueron consignadas con toda claridad en las notas cambiadas entre el Nuncio Apostólico de Madrid y el Duque de Almodóvar del Río, Ministro de Estado en marzo y abril de aquel año.—Pero mientras que la circular del Nuncio a los Prelados de España del 8 de abril reproducía exactamente el ante dicho «*Modus Vivendi*», no puede decirse otro tanto de la R. O. del 9 de abril, la cual contenía muchos puntos no conformes con aquel y no se contenía dentro de los límites pactados con la Santa Sede. = En la Nota de 20 del corriente a consecuencia del hecho de Mieres y a las intenciones expresadas en el Mensaje de la Corona, la Santa Sede pedía solamente al Gobierno español la seguridad de que durante el curso de los tratos se abstuviese de tomar medidas unilaterales relativas a la materia misma que está pendiente de discusión entre ambos poderes.—A nadie puede ocultársele lo razonable de tal demanda.—Por otra parte las prerrogativas del Estado no podrían extenderse hasta el punto de legislar unilateralmente sobre cosas que son de naturaleza esencialmente espiritual y que además han sido objeto de pactos concordatarios y deben en caso de contestación, ser resueltos de común acuerdo entre los dos Poderes contrayentes. = Resulta en fin particularmente doloroso al ánimo del Santo Padre, el deber confirmar su apreciación respecto del ya mencionado mensaje de la Corona.—Aun queriendo prescindir de otras expresiones no conformes con los principios de aquella Fe que constituye la más sagrada herencia de la Nación Española, se anuncia en él del modo más solemne el propósito de rechazar de las escuelas el prejuicio y la coacción de los diferetes dogmatismos. Ahora bien, ¿a qué otros dogmatismos podrían referirse tales palabras sino a los de la Religión cató-

lica que es la casi exclusivamente profesada en España? = Si a lo que ya viene expuesto ...» (de nuevo arriba) «... los tratos iniciados en los cuales la Santa Sede misma pondrá, como hasta ahora ha hecho, toda su buena voluntad para llegar a un resultado satisfactorio. = El infrascrito aprovecha, etc., etc., etc. = (firmado) R. Card[enal] Merry del Val» (apud despacho número 78, 25-VI-1910, del embajador Ojeda al ministro de Estado, AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «1910. Negociaciones...»). Sobre la inadecuación de la orden de 9-IV-1902 al *modus vivendi*, vid. nota 220, capítulo V. Antes de conocer la respuesta del Vaticano de 24-VI-1910, el mismo día y quizá como corolario del consejo de ministros con el rey (texto de la nota 121 supra), el ministro de Estado telegrafió a Ojeda disponiendo suspendiera en principio los tratos con Merry. «Razones recomendarle se abstenga momentáneamente tratar con Cardenal asuntos pendientes, son: — Primera.—Inutilidad anteriores esfuerzos persuadir Su Eminencia nuestro deseo acuerdo, puesto que si Vucencia logra influir en su espíritu, inmediatamente renace invencible perjuicio contra Gabinete.—Segunda.—Situación poco airosa para Gobierno y aun para país, de insistir en solicitar respuesta Santa Sede a Nota sobre Congregaciones. Futilidad pretextos para aplazarla, la apreciará Vucencia completamente cuando sepa que cuatro días antes quejarse Cardenal supuesta disolución Pasionistas Mieres, me habló Nuncio y le dije se trataba probablemente errónea interpretación Gobernador Oviedo, pero me enteraría y le aseguraba que si Congregación cumplía requisitos Circular Gobernadores y por tanto Ley Asociaciones, no se le pondrían obstáculos.—Tercera.—Esperanza que acaso reflexión haga a Santa Sede reconocer equivocado concepto que ha formado de nuestra conducta y situación de España, aunque desgraciadamente agitación fomentada según todos indicios por Nuncio en Episcopado y católicos, se interpreta al parecer ahí como movimiento susceptible paralizar iniciativas partido liberal, no obstante lo que recientes elecciones generales demuestran; y Cuarta.—Conveniencia en todo caso demorar nueva gestión hasta después respuesta Santa Sede a Nota Vucencia ayer.—Si Vucencia juzgando más de cerca personas y circunstancias Vaticano, encuentra preferible otra regla conducta, sírvase decírmelo. = García Prieto.» El silencio hubo de ser roto enseguida, por tanto, al llegar esa esperada respuesta del cardenal secretario de Estado en la nota del 24, cuyo contenido, por cierto, y el de la inmediata respuesta del Ministerio eran ya conocidos y divulgados por *El Imparcial* el 25.

¹²⁴ Nota de «El Embajador de S. M. cerca de la Santa Sede = al Cardenal Secretario de Estado de S. Santidad. = Roma, 26 de junio de 1910. = Eminentísimo Señor, = Tengo la honra de acusar a Vuestra Eminencia el recibo de su Nota de 24 del corriente cuyo contenido he teleografiado íntegro el mismo día al Gobierno de S. M.—Al hacerlo así, me he visto obligado a manifestarle que yo no he hecho ninguna declaración explícita verbal o en otra forma a V. Ema. por la cual pudiera inferir la Santa Sede como lo asegura V. Ema. en su citada Nota, que el Gobierno de S. M. subordinaba la publicación de las instrucciones a los Gobernadores sobre la aplicación de la R. O. de 9 de abril de 1902, al resultado final de las negociaciones en curso sobre asociaciones religiosas. = Recuerdo sí, que en una entrevista celebrada con V. Ema., en que le di aviso confidencial de la inminente publicación de la Circular, al lamentarme de la impresión penosa que había producido al Gobierno de S. M. la contestación a las proposiciones contenidas en mi Nota del 15 de abril, establecí una hipotética conexión entre el descontento justificado del Gobierno y la aplicación inmediata de la incumplida R. O.—Mas todo esto pasó, como recordará V. Ema., en el seno de la más estricta confianza con que me honra V. Ema., y, por tanto, nunca podía ser base de un argumento de controversia oficial como aparece en la Nota de V. Ema. = Por lo demás, aun admitiendo que una mera suposición mía, hubiera inducido a V. Ema. en momentáneo error, V. Ema. recordará que tan pronto comuniqué al Gobierno de S. M. la entrevista que juntos habíamos celebrado en todos sus detalles, aquel me ordenó corregir inmediatamente el equivocado concepto, lo que yo cumplí lealmente leyendo a V. Ema. el telegrama del Ministro de Estado en que se nega-

ba categóricamente que existiera relación alguna entre la Circular a los Gobernadores y las negociaciones pendientes y se explicaba la demora en publicar aquella por el respeto del Gobierno al espíritu de la Ley electoral que hizo abstenerse durante el período de las elecciones de adoptar una medida susceptible de influir en derecho tan político como el de asociaciones, vuestro Eminencia, después de la lectura del telegrama del Ministro, deploró la publicación de la Circular y mantuvo su criterio contrario a la separación entre esta materia y las negociaciones sobre asociaciones religiosas; pero V. Ema. nada me dijo entonces, ni nada me ha dicho después, que me permitiera creer que a pesar de la rectificación del Gobierno, que yo comuniqué a V. Ema. en 27 de mayo, la Santa Sede, como lo hace en su citada Nota del 24 corriente, contaba con la subordinación de la Circular a los Gobernadores a éxito final de las emprendidas negociaciones. = Como era de prever el Gobierno de S. M. sorprendido por estas declaraciones verbales explícitas mías cuya existencia afirma V. Ema., me ordena inquiera cerca de V. Ema. a qué declaraciones alude, puesto que las únicas que a este respecto constan al Gobierno son las contenidas en el telegrama del Ministro de Estado que le a V. Ema. el 27 de mayo próximo pasado. = Para mayor abundamiento, el Gobierno de S. M. me encarga recordar a V. M. que el texto de mi Nota oficial del 15 de abril revela de un modo indudable que el proyecto de instrucciones a los Gobernadores no constituía cláusula alguna de negociación, ni dependía de sus resultados. = Y es natural que así fuese: = 1—) Porque se trataba de una disposición vigente, cuya observancia al promulgarse, no originó ni dificultades, ni reparos; y = 2—) Porque, habiendo tenido ese régimen desde el principio un carácter provisional, toda solución era posible, menos la de esperar precisamente para aplicarlo, como V. Ema. afirma, a que se hubiese llegado a un resultado definitivo. = En todo caso, piensa el Gobierno de S. M. que era acreedor a una clara y categórica exposición de los reparos de V. Ema. en su respuesta del 9 de mayo; reparos que entonces el Gobierno con su habitual deferencia a la Santa Sede habría examinado. = Pero hoy faltaría el Gobierno de S. M. a sus constantes lealtad y franqueza, si ocultase la imposibilidad en que se encuentra de dejar de aplicar la circular de 30 de mayo en todas sus partes, aunque mantenga, claro es, la seguridad que se anticipó a ofrecer en su Nota del 15 de abril respecto a que «Autoridades no habrán de llevar ánimo preconcebido de vejación»; seguridad tan sincera que hasta ahora el hecho de Mieres es el único que ha motivado reclamación de la Santa Sede y aún esa reclamación está basada en datos equivocados que el Nuncio de Su Santidad habrá rectificado, al dar cuenta de su conferencia con el Ministro de Estado el día 17 del corriente; esto es, el día antes que formuló V. Ema. su queja. = También me encarga el Gobierno manifestar a V. Ema. que los demás extremos de su Nota pueden considerarse contenidos de antemano en mi Nota del 22. = Importa añadir, no obstante, que, al anunciar la reforma general de la Ley de asociaciones de 1887 y no presentar sin embargo el proyecto en este primer período de los trabajos parlamentarios, el Gobierno de S. M., lejos de ofrecer motivos de reproche, creía hacer algo que habría de estimar la Santa Sede como clara y pública muestra de que, antes de proceder a su modificación, se deseaba conocer el resultado de los iniciados tratos amistosos. = Las quejas por este concepto parecen tanto menos fundadas al Gobierno de S. M., cuanto que ante un anuncio análogo contenido, por ejemplo, en una declaración ministerial del Gabinete Sagasta en 7 de abril de 1902, la Santa Sede no se conmovió, ni halló razón para interrumpir las negociaciones comenzadas. = En conclusión, el Gobierno de S. M. al reiterar las seguridades de que las Reales Ordenes de 30 de mayo y 9 de abril 1902 se aplican y se aplicarán sin ánimo preconcebido de vejación; al hacer observar que siempre fue público que al especificar los trabajos parlamentarios de este primer período, no se presenta a las Cortes proyecto alguno de reforma general de la Ley de Asociaciones, de modo que las negociaciones iniciadas entre la Santa Sede y España podrán desenvolverse normalmente, y en fin al reiterar el contenido de la Nota del 22 corriente.

estima que la Santa Sede debe considerarse en las condiciones a que alude la Nota de V. Ema del 24 y en que el Gobierno de S. M. se ha esforzado siempre en ponerla. = El Gobierno de S. M. espera que V. Ema. inspirándose en las buenas disposiciones de que se halla animado contribuya en su respuesta a mi Nota de 26 de mayo próximo pasado, a tan deseado y conveniente acuerdo. = Aprovecho, etc., etc., etc. - (Firmado) E. de Ojeda» (AMAE, *loc. cit.* nota anterior). La nota transcribe fielmente el telegrama del ministro de Estado al embajador Ojeda de 25-VI-1910, añadiendo aquella los tres párrafos primeros, que tienden a exculpar al embajador. El citado telegrama comenzaba simplemente: «Sírvasse manifestar Cardenal no comprende a qué declaraciones verbales V. E. alude cuando afirma estas le hicieron suponer proyecto recordar Gobernadores Real orden nueve abril 1902 estaba subordinado éxito final negociaciones.» A continuación habla de la nota del 15 de abril, como el párrafo cuarto de la nota transcrita aquí.

¹²⁵ Despacho núm. 80, 1-VII-1910, del embajador Ojeda al ministro de Estado, *ibidem*: «Reservado. = Exmo. Señor, = Muy Señor mío: Tengo la honra de remitir a V. E. adjunto copia y traducción de la Nota del Cardenal Secretario de Estado que recibí anoche en contestación a la que le dirigí el día 27 de junio próximo pasado. = Mi deseo de que tenga V. E. entero conocimiento cuanto antes de su contenido, que sólo parcialmente he podido telegrafiar a V. E. esta mañana, me inclinan a remitírselo por el correo de hoy, dejando para el de mañana los comentarios que tengo que hacer a la Nota del Cardenal, en cuanto se refiere a mi intervención personal en el asunto. = Dios guarde a V. E. muchos años. = Roma, 1 de julio de 1910.» La nota adjunta es esta: «Traducción. = El Secretario de Estado de Su Santidad al = Embajador de S. M. cerca de la Santa Sede. = Roma, 30 de junio de 1910. = El infrascrito Cardenal Secretario de Estado, en respuesta a la apreciable Nota de Su Excelencia el Señor Embajador de España, llegada a sus manos en la tarde del 27 de junio y marcada con el N.º 12, tiene la honra de comunicarle cuanto sigue: = En primer lugar, puesto que el Gobierno de S. M. Católica pregunta a qué declaraciones verbales aludía la Nota del 24 de junio, el que suscribe no duda que el Señor Embajador recordará que al entregar al infrascrito su Nota del 15 de abril le dio asimismo unos apuntes intitulados «Proyectos de instrucciones a los gobernadores» declarando explícitamente que dichos apuntes eran comunicados a la Santa Sede al efecto de hacerle conocer las miras del Gobierno en vista de eventuales contingencias, pero que se trataba de un simple proyecto (y llamó sobre estas palabras la atención del que suscribe) y que la base de todas las negociaciones era la Nota oficial mencionada. Y no podía ser de otro modo. Refiriéndose la Nota y el proyecto a la misma materia, o sea a la cuestión de las órdenes religiosas, existía una estrecha unión entre el proyecto mismo y las negociaciones iniciadas con aquella Nota; por lo cual la Santa Sede tenía amplio derecho para entender que no estuviera en los propósitos del Gobierno el publicar las proyectadas instrucciones a los Gobernadores, sino subordinarlas al éxito final de los tratos. Tal persuasión aparecía tanto más legítima cuando se recuerde [sic] que el mencionado Proyecto contenía algunas disposiciones contrarias a las miras bien notorias del Vaticano y no comprendidas en el «*Modus Vivendi*» del 1902, o sea en las Notas cambiadas en aquel año entre el Nuncio Apostólico en Madrid, Monseñor Rinaldini, y el Señor Duque de Almodóvar del Río, Ministro de Estado. Esto fue reconocido bien claramente por el Señor Pérez-Caballero, Ministro de Estado, en la Nota a Monseñor el Nuncio Apostólico, con fecha 21 de enero próximo pasado, en la cual decía «Repasando las negociaciones que sobre el particular han mediado entre ambas Potestades, aparece como la base más indicada de la actual negociación el «*Modus Vivendi*» convenido entre España y la Santa Sede por el Canje de Notas de marzo-abril de 1902. En esas Notas el Señor Duque de Almodóvar del Río y el digno predecesor de V. E. consignaron con toda claridad los puntos en que coincidían y los en que no se hallaban conformes el Gobierno español y la Santa Sede por lo que concierne a las órdenes y congregaciones religiosas a la sazón existentes, afirmando de

común acuerdo en cuanto a las mismas la necesidad de estar inscritas para que su existencia legal fuese reconocida en España, pero quedando sujetas respecto a su funcionamiento a las resultas de lo que convinieran ambas Potestades, ya que sobre este punto existía disparidad de criterio entre el Gobierno de S. M. y la Santa Sede». = No podía por tanto la Santa Sede suponer que el Gobierno de S. M. Católica, antes de concluir el acuerdo sobre la cuestión de las Congregaciones religiosas, habría ordenado la aplicación de la Real Orden de 9 de abril de 1902, aun en la parte no comprendida en el «*Modus Vivendi*». = El Señor Embajador tendrá a bien reconocer cómo la declaración referida hecha cuando presentó la Nota del 15 de abril, no era ciertamente confidencial y es a esta solamente que el infrascrito ha hecho alusión en su Nota del 24 corriente y no ha entendido jamás valerse de cualesquiera palabras suyas confidenciales. = Es cierto que el Señor Embajador leyó al infrascrito Cardenal [un escrito] del Señor Ministro de Estado en el cual se trataba de separar la Circular a los Gobernadores del 30 de mayo, de las negociaciones en curso; y se decía que el Gobierno para promulgarla había solamente esperado a que terminase el período electoral; pero también es verdad que el infrascrito no aceptó esta explicación y mantuvo, como el mismo Señor Embajador lo reconoce en su última Nota, su punto de vista acerca de la inseparabilidad de la publicación de la Circular y de los tratos pendientes sobre congregaciones religiosas. = Es también verdad, como recuerda el Señor Embajador, que cuando se tuvo noticia de tal publicación contestó a las representaciones del infrascrito, exponiendo la opinión suya personal de que podría quizá atribuirse la publicación al descontento causado en el Gobierno de S. M. Católica por la contestación dada por la Santa Sede a las proposiciones contenidas en la Nota del 15 de Abril; mas a esta impresión personal del (*prelato*) Señor Embajador, el infrascrito no pretendió aludir ni de ella hizo uso alguno en su Nota del 24. = Aclarado así este punto meramente incidental a fin de satisfacer la expresa demanda del Señor Embajador, el infrascrito vuelve otra vez a declarar que la Santa Sede estaba y sigue estando animada de la más sincera intención de continuar los tratos emprendidos y de llegar a un satisfactorio acuerdo; sin embargo no puede retroceder de la demanda hecha en sus precedentes Notas del 20 y 24 de Junio, a fin de tener una plena seguridad por parte del Gobierno español de que éste durante dichos tratos se abstendrá no solamente, como promete, de actos vejatorios, pero también de tomar, sin previo acuerdo, cualesquiera medidas relativas a la cuestión de las Congregaciones religiosas que precisamente es objeto de discusión entre ambas Potestades. = El derecho de la Santa Sede a tener semejante seguridad es evidente, porque además de ser exigida por su decoro y su dignidad representa una inteligencia previa necesaria a cualquier trato. El Gobierno de S. M. Católica en su lealtad no podrá desconocer este derecho. Tampoco puede ocultarse a la penetración del Señor Embajador cómo la Santa Sede obrando de otro modo aparecería menos solícita de los intereses religiosos que el Episcopado y los católicos españoles, los cuales con numerosas y solemnes manifestaciones, han expresado su profundo dolor y sus justas representaciones por la actitud del Gobierno hacia aquella religión a la cual se hallan indisolublemente unidas la prosperidad de la Patria y las glorias más puras de la Nación. = El infrascrito Cardenal aprovecha, etc., etc., etc. = (Firmado) R. Card. Merry del Val.» Las anunciadas aclaraciones de Ojeda van en el despacho núm. 81, 2-VII-1910, al ministro de Estado: «Reservado. = Exmo. Señor, = Muy Señor mío: Según anuncié a V. E. en mi despacho de ayer, núm. 80, paso ahora a analizar la parte de la Nota del Secretario de Estado que contesta a las observaciones que, en la Nota de esta Embajada del 27 de Junio, creí deber hacer a Su Eminencia acerca de las declaraciones explícitas que me atribuye, al efecto de que el Gobierno de S. M. pensaba subordinar la publicación de la R. O. de 1902 al resultado de las negociaciones entre España y la Santa Sede, relativas a la disminución y supresión de Congregaciones religiosas. = Como ya habrá recibido V. E. copia de la Nota del 27, en que hice constar mi denegación de

sin prejuicios ni apasionamientos los peligros de un rompimiento y la conciencia de proseguir una sombra siquiera de negociación que arrebate a ricales y anticlericales, carlistas y demagogos, todo pretexto de agitación, pavorosa en sus consecuencias para unos como para otros, y permita al bierno proseguir su programa retrotrayendo las cosas a su origen y aprovechando el período de calma y olvido que habrá necesariamente de suceder excitación actual, para negociar con el Vaticano la disminución y supresión de las Congregaciones religiosas en España admitida ya en principio por Su Santidad. = Dios»...

¹²⁶ Nota de «El Embajador de S. M. cerca de la Santa Sede = al Cardenal Secretario de Su Santidad. = Roma, 3 de Julio de 1910. = Eminentísimo Señor, = El Gobierno de S. M. al que transmití tan pronto llegó a mis manos la Nota de V. Eminencia fechada en 30 de Junio próximo pasado, me encarga manifestar a V. Eminencia que en sus dos últimas notas ha expuesto sus propósitos respecto: = 1 — Presentación...» (sigue lo transcrito en el tomo 9 de Abril de 1902. = En su deseo de llevar tan lejos como sus procedimientos y decoro lo permitan, su deferencia hacia los escrúpulos del Santo Padre, el Gobierno de S. M. no tiene inconveniente en manifestar de manera expresa, lo que ya implícitamente contienen las dos últimas notas citadas, a saber: que mientras las negociaciones duren no es su ánimo tomar en materia de órdenes y congregaciones religiosas, ninguna disposición nueva y distinta de las arriba comprendidas en los párrafos marcados con los números 1 y 3. = El infrascrito Embajador de S. M., al tener la honra de transmitir a V. E. lo anteriormente expuesto, abraza la esperanza de que Su Santidad se dignará acoger favorablemente estas manifestaciones del Gobierno de S. M. y aprovecha esta nueva oportunidad para reiterarle, etc., etcétera = (Firmado) E. de Ojeda» (apud despacho núm. 85, 5-VII-1910, del embajador Ojeda al ministro de Estado, *ibidem*). La nota reproduce las instrucciones recibidas del ministro en telegrama del día 2. En otro telegrama del mismo día, García Prieto explicaba a Ojeda: «Respuesta a que se refiere anterior telegrama debe ser entregada por V. E. inmediata y personalmente al Cardenal exponiéndole de palabra todos esfuerzos que Gobierno ha hecho para conciliación; sinceridad que así ha demostrado; firmeza con que ha resistido cuantas solicitudes se le dirigían y dirigen para que en vista de la Santa Sede no prolongue negociaciones; y aplauso unánime que de esa manera hubiera recibido de izquierdas políticas. Ha tenido para ello en cuenta sus altos deberes, que cree sin embargo ya ampliamente cumplidos. Dirigirá V. E. por consiguiente una nueva y calurosa excitación a conciliación de disposiciones Santa Sede y amistosos sentimientos Cardenal para con el Gobierno considérase obligado hacer prudentes declaraciones exponiendo actual asunto a fin evitar opinión se extravíe.—Garciprieto.» El mismo día 2, Canalejas notificaba a la prensa haber contestado oficialmente a Roma (*Heraldo de Madrid*, 2-VII-1910). Siempre el 2, en Real orden del ministro de Estado al embajador, aquél deducía de esta nota de respuesta y de la historia de las negociaciones que «no se ha infringido estipulación alguna de las dos potestades. Si esa medida [sobre la libertad de cultos] significara un paso hacia un principio que la Santa Sede considera infausto y falso, el Gobierno de Madrid respetuoso con la suprema autoridad en materias espirituales, declarará que ha tenido para ello serias razones de oportunidad y en todo caso, no ha hecho sino sacar las consecuencias del artículo constitucional, amoldándose a los tiempos y a los precedentes de otras naciones y queriendo sinceramente contribuir con celo a la pacificación de los espíritus» (AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «1910. Real orden interpretativa...»).

¹²⁷ Cfr. *Heraldo de Madrid* y *El Liberal*, 1-VII-1910.

¹²⁸ Telegrama del embajador Ojeda al ministro de Estado, 4-VII-1910. AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «1910. Negociaciones»: «Muy Reservado. A cumplir instrucciones V. E. entregando Nota al Cardenal y hablándole al sentido de su segundo telegrama del dos.—Leída la Nota, Su Eminencia dijo que no era la promulgación de nuevas leyes lo que inspiraba lo

mejante aserto, creo inútil repetir aquí cuanto dije al Cardenal al respecto. Esperaba con cierta curiosidad la contestación que el Cardenal daría a mi titificación, y en efecto, como V. E. verá, la explicación que de Su Eminencia puede ser más ambigua ni más embrollada, pues no puede desprenderse de ella claramente si fue el mismo «Proyecto de Instrucciones a los Gobernadores» que originó la creencia del Cardenal en unas declaraciones explícitas, si fui yo quien al comunicárselas llamé su atención sobre el hecho de que se trataba de un simple proyecto. = Ruego a V. E. tenga a bien reparar que durante esta entrevista del 15 con el Cardenal, que relaté a la sazón exactamente a V. E. en telegramas, despachos y cartas, no hice más que leerle las Reales Ordenes del 6 de Abril, así como el proyecto de instrucciones a los Gobernadores, y que no me permití en absoluto hacer ni comentario ni argumento alguno acerca de su contenido. Ni era lógico que lo hiciera, ni aún menos lógico que el Cardenal creyera lo que alega haber creído, puesto que al leerle los documentos hubie de citar la frase de la R. O. núm. 24 que dice textualmente: «La Santa Sede se explicará que el Gobierno de S. M. considere ya como un derecho sino como un riguroso deber, el ejercicio de las facultades que la R. O. del 9 de Abril de 1902 que acaba de extractarse, atribuyen a Autoridad Civil, y que, en consecuencia el actual Gabinete tenga en estudio para expedirlas EN BREVE instrucciones a los Gobernadores, etc., etc., etc.» para mayor abundamiento, en la misma conferencia le leí a Su Eminencia la R. O. 25, de la misma fecha que la anterior, en uno de cuyos párrafos se dice: «En parte ese objeto se alcanzará aplicando el Gobierno estrictamente, como indica la R. O. del 9 de Abril de 1902, etc., etc., etc.» = Las citaciones que hago ahora son tan incompatibles con las declaraciones que me atribuye el Cardenal, que, aun suponiendo que yo las hubiera hecho, lo cual niego una vez más, rotundamente, el Cardenal, al oírlas, debería haberme hecho notar la inconsistencia, o haberlas considerado nulas en vista de las declaraciones más explícitas del Gobierno que acababa de leerla y dejar en sus manos. No se explica, por tanto, que haga hincapié el Cardenal en esas pretendidas declaraciones más, sobre todo si se tiene, además, en cuenta que, casi al mismo tiempo, según carta que Vd. me dirigió el 19 de Abril, había V. E. hablado al señor Vico, Nuncio en Madrid, del propósito del Gobierno de encargar a los Gobernadores la estricta observancia de la R. O. del 9 de Abril de 1902, inversión y propósito que el Nuncio debió indudablemente transmitir al Cardenal y que confirmaba lo que yo le había dicho en mi entrevista del 15. Lo que hay, es que entonces el Vaticano no prestó seria atención al asunto, o, aunque se la prestara, no creyó poder invocar la anunciada aplicación de la R. O. como pretexto para suspender sus negociaciones; y la prueba más clara de ello es, que el Cardenal, si bien deploró varias veces en sus conversaciones conmigo que el Gobierno llevara a cabo su resolución, que consistía estrechamente relacionada con las negociaciones sobre las Congregaciones jamás me dio a entender que pensase en suspenderlas por esta causa. Pero sobrevinieron primero, la protesta del Cardenal Primado, la del Episcopado y después la R. O. sobre interpretación de la Cláusula XI de la Constitución, las manifestaciones de los elementos clericales españoles, y la Santa Sede, indecisa hasta entonces, aprovechó la oportunidad que se le ofrecía para salir airoso de una situación comprometida, mediante las declaraciones hechas a V. E. respecto de las negociaciones entabladas, en sus dos últimas Notas. De aquí también la insistencia del Cardenal en declararse hoy sorprendido por el hecho de la aplicación de la R. O. de 1902, que se le anunció hace dos meses y medio, y la invocación de declaraciones que no existen, a fin de alejar su situación en el debate y justificar su actitud presente. = Dadas las explicaciones a V. E., por cuanto se refiere a las alusiones que hace el Cardenal a mi intervención personal en el asunto, me abstengo hasta que V. E. me lo ordene, de hacer comentarios o exponer opiniones sobre los dos puntos de la Nota del Secretario de Estado que ayer telegrafíé a V. E. El Presidente del Consejo y Vd., en cuyo recto criterio y en cuya serenidad los elementos más sensatos de la Nación, sabrán seguramente apreciar

celos del Vaticano, sino la aplicación de las últimas circulares que consideraba incompatibles con las negociaciones, pues el Santo Padre no podía admitir que mientras aquí se demostraban tan buenas disposiciones para resolver la cuestión de las Congregaciones, la más vital para España, se ejerciera coacción y se tomaran medidas que justamente debían ser el objeto de las negociaciones pendientes.—Contestéle yo que aunque el Gobierno de S. M. estaba resuelto a no derogar sus disposiciones, era evidente que estaba dispuesto a cumplir lo que había prometido al Vaticano evitando a todo trance vejaciones y rozamientos, y obrando con toda la lenidad compatible con el espíritu de las leyes, como lo probaba su conducta reciente.—Se quejó el Cardenal de que los periódicos de anoche publican abundantes extractos de las Notas cambiadas entre España y el Vaticano lo cual causaba aquí sorpresa y sentimiento.—Le contesté que si hubiera podido recibirme ayer como yo lo deseaba me hubiera adelantado a la prensa anunciándole el propósito del Gobierno de hacer declaraciones sobre el verdadero estado de la cuestión a fin de encauzar la opinión y evitar sus extravíos.—Pareció satisfacerle esta explicación.—A renglón seguido me dijo que la supresión del juramento había apenas al Vaticano porque aun reconociendo que es materia en la que no debe ni puede ingerirse, el abandono de la sagrada fórmula es otro indicio de las tendencias antirreligiosas del Gabinete.—Contesté al Cardenal que dada la solitud que al Santo Padre inspira siempre y ante todo la salud moral de los fieles y la tranquilidad de sus conciencias debía regocijarse de que se les evitase con esta medida la larga lista de perjurios que registra la historia moderna de España y demás naciones en sus numerosas crisis políticas.—Regocijó mucho al Cardenal esta explicación de los móviles que guían al Presidente del Consejo de Ministros, aunque deploró que la abolición del juramento abriese aún más anchas las puertas del Parlamento a los elementos enemigos de la religión, de la Monarquía y del orden; prometiéndome, por último, que tomaría muy en cuenta mi última Nota que calificó de más favorable que las anteriores al éxito de la negociación y que iba a someter cuanto antes a la Congregación respectiva. La entrevista, contra lo que yo esperaba, ha sido en extremo cordial y me permite abrigar alguna esperanza.—Para mí, la clave de la situación está en evitar que la aplicación de la Ley de 1902 dé lugar a medidas de coacción y a incidentes aparatosos de que se aprovecharían los enemigos del Gobierno y que excitarían aquí a la resistencia. = E. de Ojeda.» Tomamos esta versión, menos resumida que la definitiva, del despacho núm. 85. Acerca del juramento sobre la Biblia hay otro telegrama del ministro de Estado al embajador, 5-VII-1910: «Viernes último expliqué espontáneamente Nuncio precedentes proyecto ley que atribuye a promesa mismos efectos que a juramento cuando leyes procesales y orgánicas tribunales exigen este último. Deseoso facilitarle perfecta comprensión asunto, le envié diario sesiones legislatura mil novecientos seis donde figuraban todos datos y podía apreciarse que incluso Ministros Gracia y Justicia tan poco sospechosos para Santa Sede como Marqueses Vadillo y Figueroa reconocen necesidad reforma. Pero sin duda Nuncio no ha informado todavía Cardenal, pues éste, según telegrama V. E. ayer, continúa sin comprender naturaleza proyecto. Declaraciones prudentes a que se refería mi telegrama del dos son las que aquella misma tarde hice en sesión Senado. Extracto negociaciones publicado por Agencia Navas, en telegrama fechado Roma, no me llamó la atención porque, bajo apariencias de novedad, contiene noticias en su mayor parte anteriormente conocidas y juicios puramente hipotéticos cuya responsabilidad sólo corresponde a la Agencia. A causa de ello, periódicos Madrid sin distinción matices se han abstenido comentarlo y algunos ni siquiera lo han reproducido. Respecto aplicación circular gobernadores no dudo de que manifestaciones V. E. a Cardenal ayer se han mantenido en límites párrafo correspondiente nota 15 abril, sin hacer concebir esperanzas que Gobierno no podría cumplir toda vez que estima un deber la observancia de aquella disposición. Sírvasse tener en cuenta contenido este telegrama para su primera entrevista con Cardenal.—García Prieto.» (Vid. *Diario de las Sesiones... Senado*, 2-VII-1910. El debate sobre la temática religiosa sigue en

las sesiones posteriores.) En el mismo lugar de AMAE citado en esta nota hay otro telegrama del ministro de Estado al embajador Ojeda, 6-VII-1910 sobre el malentendido resenado en la nota 125 supra: «Recibido despacho { opino que si bien argumentos Cardenal, respecto razones que le autorizaba a suponer que Circular 30 Mayo no se publicaría durante curso negociaciones carecen fundamento, conviene contestarlos. Si V. E. no lo ha hecho ya por su cuenta sirvase dirigir inmediatamente nota a Secretario Estado diciendo que en vista de declarar el en la suya del 30 que ese asunto tenía carácter incidente V. E. se abstuvo de recoger lo concerniente a ese punto en su nota del lunes; pero que debe hacer constar que al recordar el Cardenal que oportunamente le fue entregado un apunte del contenido de la circular y se le indicó que se trataba de un proyecto y que la base de todas las negociaciones era la nota oficial del 15 de Abril viene a confirmar que desde un principio quedó claramente establecido que el Gobierno tenía el propósito de dictar las instrucciones independientemente del resultado de las negociaciones y por consiguiente sin necesidad de esperar al término de éstas. Añadiré V. E. que en vista de ello le parece innecesaria una discusión sobre los argumentos deducidos por el Cardenal de la nota de mi predecesor, pero que evidentemente no cabe admitir la hipótesis de que no habiendo sido derogada ni modificada la Real orden de 1902, un Gabinete presidido por la misma persona que como Ministro de la Gobernación la dictó precisamente al comenzar las negociaciones en aquella época, entendiera suspender sus efectos al proseguir ocho años después estas últimas.—Garciprieto» (AMAE, *loc. cit.*, supra). El mismo 6, el propio ministro de Estado dirige a Ojeda otro telegrama: «Aunque entiendo que última parte mi telegrama del 2 está enteramente claro desearía saber para prevenir todo equívoco en materia tan importante, si V. E. estima que con frase «no es su ánimo tomar en materia de Ordenes y Congregaciones ninguna disposición nueva y distinta de las arriba comprendidas en los números uno y tres» — Cardenal habrá entendido claramente que Gobierno se reserva presentar Cortes proyecto ley sobre autorización gubernativa para establecimiento nuevas Asociaciones religiosas (número uno del telegrama) y cumplir circular 30 Mayo (número tres del telegrama). Garciprieto.» (Se refiere al telegrama del ministro a Ojeda vertido en la nota oficial de éste a Merry transcrita en la nota 126 supra.) Un inconveniente dilata el cumplimiento del primer telegrama del 6-VII-1910, según consta en este otro del embajador al ministro: «Recibido telegrama de V. E. de esta mañana y en este momento R. O. núm. 60 de 2 del actual. Una súbita aunque no grave indisposición me impedirá acudir recepción diplomática Cardenal mañana viernes. Pendiente cumplimentar sus instrucciones pediré audiencia Secretario Estado para sábado o domingo que espero estar completamente repuesto. Lamento que dicha indisposición retrase muy a pesar mi voluntad negociación pendiente. Ojeda.» Insiste el 9: «Doctor declara absoluta imposibilidad levantarme antes de cuatro días. En estas circunstancias ruego a V. E. me diga si desea que última Nota e instrucciones sean presentadas y ejecutadas por Primer Secretario de esta Embajada o si prefiere esperar mejor mi estado. Ojeda.» García Prieto contesta el mismo 9: «Lamento vivamente indisposición que creía puramente pasajera y que deseo no tenga importancia. Conviene Consejero proceda inmediatamente dar lectura y copia a Cardenal de Real orden dos corrientes y le dirija nota mencionada mi telegrama del seis. Respecto carta confidencial aludida en el otro telegrama de misma fecha, V. E. la dirigirá o no según estime últi. Proyecto ley exigiendo autorización gubernativa para establecimiento nuevas asociaciones se presentó ayer Senado.—García Prieto.» Parece aludir a un mandato dirigido al embajador para que comunicase los propósitos del Gobierno a Merry; mandato que, no obstante, no consta en los textos transcritos.) El consejero de la embajada, en fin, entrega a Merry el 11 la nota en cuestión: «El Embajador de S. M. cerca de la Santa Sede = al Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad. = Roma, 8 de Julio de 1910. = Eminentísimo Señor, = Tan luego como fue en mi poder la Nota de V. Eminencia de 30 del mes próximo pasado, me apresuré a dar traslado de su contenido al

Gobierno de Su Majestad. = Este me encarga manifieste a V. Eminencia, como hoy tengo la honra de hacerlo, que considera infundados los argumentos que invoca para suponer que la Real Orden Circular de 30 de Mayo último no se publicaría durante el curso de las negociaciones pendientes entre España y la Santa Sede, por tratarse de un asunto de carácter puramente incidental. Prueba de ello ha sido también que me he abstenido de recoger lo concerniente a ese punto en la Nota que dirigí a V. Eminencia en 3 del actual, por creerlo así innecesario; toda vez que, cuando tuve la honra de entregarle personalmente un apunte del contenido de la Circular en cuestión no dejé de indicar a V. Eminencia que se trataba de un proyecto. Además, en aquella misma circunstancia, hice constar a V. Eminencia que el Gobierno de Su Majestad consideraba como base de toda negociación la Nota oficial del 15 de Abril; documento que venía a confirmar que, desde un principio, quedaba claramente establecido que el Gabinete de Madrid tenía el propósito de dictar las instrucciones de referencia, independientemente del resultado de las negociaciones en curso y sin aguardar el término de éstas. = En vista de cuanto queda más arriba expuesto, paréceme innecesaria toda discusión sobre los argumentos deducidos por V. Eminencia de la Nota del anterior Ministro de Estado del Rey, mi Augusto Soberano, pues es evidente que, en el caso actual, no cabe admitir la hipótesis de que, no habiendo sido modificada ni derogada la Real Orden de 1902, un Gabinete presidido por la misma persona que, como Ministro de la Gobernación, la dictó, por aquel entonces, precisamente para dar comienzo a estas negociaciones, entendiera ahora suspender sus efectos, al proseguir dichos tratos ocho años más tarde. = Para robustecer cuanto acabo de exponerle, de orden de mi Gobierno, creo oportuno deber recordar a Vuestra Eminencia que, en el curso de la conferencia que, sobre tan importante asunto, celebramos ambos el 15 del mes último, al darle lectura de la R. O. que me había sido comunicada oportunamente sobre aquél, llamé más especialmente la atención de Vuestra Eminencia, sobre un párrafo de esa Soberana disposición, que a la letra decía: = «La Santa Sede se explicará que el Gobierno de S. M. C. considere, no ya como un derecho, sino como un riguroso deber el ejercicio de las facultades que la R. O. del 9 de Abril de 1902, que acaba de extractarse atribuyen a la autoridad Civil y que, en consecuencia, el actual Gabinete tenga en estudio, *para expedirlas en breve*, instrucciones a los Gobernadores, etc., etc.» = Al cumplimentar así las instrucciones que he recibido del Gobierno de S. M., aprovecho esta nueva oportunidad que se me presenta para reiterar a V. Eminencia las seguridades, etc., etc. = (Firmado) E. de Ojeda» (apud despacho núm. 88, 11-VII-1910, del embajador al ministro de Estado, *ibidem*).

¹²⁹ Vid. *Diario de las Sesiones... Senado*, 8-VII-1910.

¹³⁰ «Traducción» de la nota oficial de «El Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad = al Exmo. Señor Embajador de S. M. cerca de la Santa Sede. = Desde el Vaticano, 9 de Julio de 1910. = El infrascrito Cardenal Secretario de Estado se apresura a manifestar al Exmo. Sr. Embajador de España, que la Santa Sede ha examinado debidamente la apreciable Nota que personalmente entregó al que suscribe, en la mañana del 4 del actual y en la que, señalada con el núm. 13, se hallan expuestos los propósitos del Gobierno de S. M. C. acerca de las diferencias suscitadas acerca de las órdenes y de las congregaciones religiosas. = Por cuanto se refiere al primer punto, o sea la presentación inmediata a las Cortes de un proyecto de Ley que tienda a restablecer la necesidad de la autorización gubernativa, a fin de que, en el porvenir, las casas religiosas puedan legalmente abrirse, el infrascrito no puede dispensarse de recordar cómo el Estado no podría legislar sobre tal punto, de por sí solo, independientemente de la autoridad de la Iglesia. = En efecto, la situación jurídica de las órdenes y de las congregaciones no tan sólo es por su propia naturaleza materia de suyo religiosa, y, por consiguiente de la competencia de la Autoridad eclesiástica, sino que, además, en España, aquella ha sido objeto de Convenios entre ambas Potestades; y el mismo actual Gabinete. lo mismo que todos los que le han precedido, al

iniciar los presentes tratos ha reconocido de hecho, de modo nada dudoso, el derecho de la Iglesia en la materia antedicha y la consiguiente necesidad de ponerse de acuerdo con la Santa Sede para regularla legítimamente. Verdad es que el Santo Padre se ha mostrado desde un principio dispuesto a conceder que, para fundar una nueva casa religiosa en el Reino, se pida además la autorización gubernativa; concesión que constituye una prueba de la particular benevolencia que anima al Soberano Pontífice para con la Nación Española y su Augusto Monarca.—Pero si antes de llegar al definitivo término de un acuerdo sobre diversos puntos que se hallan en discusión, el Gobierno no dictara de su sola propia autoridad disposiciones legislativas sobre tal materia, la cual, como queda dicho más arriba, es mixta, se excedería de sus prerrogativas e inferiría al propio tiempo una grave ofensa a Su Santidad. = En cuanto al segundo punto, la Santa Sede desconoce el proyecto de reforma general de la Ley de 30 de Junio de 1887, que el Gobierno de S. M. C. se propone presentar ulteriormente a las Cámaras. Sin embargo tiene desde ahora que hacer sus reservas, para el caso en que dicho proyecto no estuviese en conformidad con los principios del Derecho Canónico y de los Pactos ajustados entre la Santa Sede y España. = Finalmente en lo que se relaciona con el tercer punto, o sea con las Circulares del 30 de Mayo próximo pasado y del 9 de Abril de 1902, que el Gobierno español se propone ejecutar, el infrascrito se ve en la obligación de hacer constar que las referidas circulares no se hallan conformes con el «*Modus vivendi*» regularmente pactado en 1902. = La Santa Sede, sin embargo, desea sinceramente de llegar a un acuerdo con el Gobierno español sobre la importante y delicada cuestión de las órdenes religiosas, se declara dispuesta a proseguir las negociaciones emprendidas. = Debe sin embargo prevenir a ese mismo Gobierno que, en el caso de que este tomara cualquier disposición o llevara a efecto cualquier acto unilateral, que no se hallara consignado en los convenios ya ajustados, relacionados con la materia que constituye el objeto de los presentes tratos, la Santa Sede se vería, muy a pesar suyo, en la dolorosa necesidad de suspenderlos inmediatamente. Al propio tiempo se reserva, además, el derecho de iluminar convenientemente la opinión pública sobre la cuestión de las negociaciones, en el caso de que fuese necesario impedir que se extraviara a consecuencia de inexactas noticias. = El infrascrito Cardenal aprovecha, etc., etc. = (Firmado) R. Card. Merry del Val» (apud despacho núm. 87, 10-VII-1910, AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «1910. Negociaciones...»). La nota debió ser remitida a Ojeda por Merry el domingo 10-VII-1910. La entrevista del consejero de la embajada española con el cardenal celebrada el 11 para entregarle la nota española del 8 (apud nota 128 supra) pudo versar sobre ambos escritos, según el telegrama de Ojeda al ministro de Estado del día 11: «Reservado descifre V. E. mismo. Agradezco V. E. vivo interés por mi salud que sigue algo mejor. En cuanto recibí su telegrama de anteanoche llegado aquí ayer Domingo primera hora, pedí a Cardenal audiencia para consejero Embajada y por ser día festivo no pudo concederse hasta hoy mediodía. En cumplimiento orden V. E. mi subordinado dio lectura a Cardenal y le entregó copia de la R. O. número sesenta. La relación que hace el consejero de su entrevista con Cardenal es la siguiente: Secretario de Estado escuchó su lectura, añadiendo después que daría cuenta documento a S. S. y se contestaría en debida forma; pero que desde ahora podía asegurar que Santa Sede mantiene firme y solemne su protesta. Cardenal dijo también que los antiguos antecedentes invocados en dicha Real Orden eran inútiles por tratarse de una infracción del Concordato; y comentando el párrafo «amoldándose a los tiempos y los precedentes de otras naciones», agregó que esto carecía de lógica, pues las circunstancias de España son muy diferentes de aquellas de otras naciones en que impera otro régimen político y existen otras tendencias extrañas a la índole de nuestro pueblo. Enseguida consejero le leyó, como tenía dispuesto V. E., su telegrama del cinco contestando al mío en que daba cuenta a V. E. de mi última entrevista con Cardenal: así como del telegrama del seis aclarando los conceptos V. E. me transmitió por telegrafo en dos del actual y que sirvieron de base para redactar nota que

dirigí al Vaticano al siguiente día. Secretario Estado dijo a consejero que esto estaba de mas; pues Santa Sede había ya contestado por la nota que ayer en despacho número ochenta y siete trasladé a V. E. y cuya traducción telegrafié anteanoche. También mi subordinado le entregó la nota calcada en el telegrama de V. E. de seis del actual [cuya] copia transmito hoy a V. E. en despacho número ochenta y ocho, y al leerla, aunque dominando su contrariedad, insistió el Cardenal en que en el apunte al tratarse del contenido de las circulares, no se decía la palabra «independientemente» aludiendo a la negociación, con relación a la publicación de aquella disposición. El Cardenal repitió que jamás la Santa Sede...» (falta una línea o una hoja. Sigue:) «... aceptado y concordado con la Santa Sede. Finalmente y sin querer dar todo el crédito debido, Cardenal se dolía al consejero del modo como España adopta resolución durante negociación pendiente sobre asunto de carácter absolutamente bilateral anunciando un miembro del Gobierno al Nuncio en una estación de ferrocarril la posible y eventual publicación de una R. O. que al siguiente día por la mañana se insertaba en la «Gaceta Oficial». El Secretario de Estado añadió que acababa de leer un telegrama en el que se anunciaba que se iba a presentar un proyecto de ley a las Cortes por el que se proponía que ninguna asociación religiosa fuese admitida en España, no sólo hasta el término de la negociación, sino hasta que se aprobara una nueva ley reformando la general de asociación de 1887. Instado con insistencia por el consejero sobre origen telegrama e interrogado acerca de si procedía del nuncio, Cardenal por fin confesó que procedía del nuncio, añadiendo que hasta no conocer perfectamente texto, no daba entero crédito a esa noticia; por más que de ser veredicta [sic], era inadmisibile que las congregaciones religiosas quedaran privadas de su antiguo estado jurídico, sin gozar del que otras asociaciones no religiosas tienen ahora [y] tuvieran que aguardar así hasta que se conceda a aquéllas, otra nueva situación, al votarse en época que aún no puede prefijarse la nueva ley de referencia. El Secretario no disimuló su pesimismo mismos [sic], asegurando que personalmente tiene que tranquilizar a congregación pontificia que no se explica cómo durante curso negociación el Gobierno S. M. hace caso omiso de ello y cómo adopta aquella resolución sobre las materias en tratos, sin contar para nada con el Vaticano; lo cual teme el Cardenal induzca congregaciones a pensar que son inútiles las negociaciones si Gobierno S. M. se desentiende ella al adoptar sus disposiciones = Ojeda». Al tiempo, en sus números de 9, 10 y 12-VII-1910, *L'Osservatore Romano* (recogidos *ibidem*), la Santa Sede comenzaba a publicar oficiosamente el contenido de las negociaciones, tal como había advertido en la nota transcrita arriba. De ello se haría eco el carlista Felú: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 18-VII-1910, y *El Universo*, 5, 12, 14 y 16-VII-1910.

¹³¹ Nota del embajador Ojeda a Merry del Val, apud telegrama del ministro de Estado al embajador, 11-VI-1910, AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «1910. Negociaciones...» La nota fue remitida por Ojeda a Merry el 12 (cfr. telegrama del embajador al ministro, 12-VII-1910).

¹³² Telegrama del ministro de Estado al embajador Ojeda, 14-VII-1910, *ibidem*: «Supongo V. E. restablecido y en condiciones asistir mañana recepción diplomática. Caso afirmativo sírvase expresar Cardenal viva extrañeza causada Gobierno por su actitud respecto proyecto ley sometiendo [?] autorización gubernativa en lo sucesivo establecimiento casas religiosas; actitud inesperada después haber hecho Gobierno constar en mensaje que proyecto se presentaría «desde luego» y haberse mostrado S. Ema. conforme, según V. E. me telegrafió 17 Junio. A tal extremo llegaba nuestra confianza sobre particular que me proponía contestar en Senado declarando tengo motivos asegurar que proyecto no ocasionaría ninguna dificultad entre España Santa Sede. Sobre ese y demás reparos que Cardenal ha puesto a continuación negociaciones hemos dicho y hecho cuanto nuestro alcance estaba y creemos totalmente cumplidos nuestros deberes. Y no puedo ocultar que, dados todos antecedentes, negativa Santa Sede a proseguir negociaciones y valor que atribuye hoy ciertos hechos que en otras ocasiones juzgó distinta manera, no podrán

menos parecer arbitrarias a nuestra opinión pública. Durante mucho tiempo...» ((sigue lo transcrito arriba) «... contra hechos. Respecto manifestaciones hechas lunes por Cardenal a Marqués González, supongo V. E. se ocupará rectificarlas como merecen. = Garciprieto.» Se refiere a la entrevista telegrafiada en la nota anterior, entre Merry y el consejero de la Embajada, marqués de González.

¹³³ En entrevista con Ojeda del 15-VII-1910, Merry quiso quitar importancia a la situación: «Cardenal rechaza acusación de sustraerse Santa Sede a continuar negociaciones cuya momentánea suspensión atribuye a incidente que provoca Gobierno de S. M. con disposición unilateral en materia religiosa» (telegrama del embajador al ministro de Estado, 15-VII-1910, *ibidem*, donde narra la conversación ordenada por el Gobierno a Ojeda en el texto de la nota anterior). Todavía el 21, Merry fechaba una nota dirigida al embajador en respuesta a la del 3 (apud nota 126 supra), insistiendo en el carácter anticoncordatario de la legislación del Gabinete y en la necesidad de acudir, en último extremo, al artículo 45 del Concordato, que imponía la necesidad de negociar los asuntos en litigio (apud despacho núm. 92, de Ojeda al ministro de Estado, 22-VII-1910, *ibidem*, exp. «1910. Real orden interpretativa...»). El mismo día, el cardenal subrayaba la firmeza de su actitud: «Muy reservado. Descifre V. E. mismo. Acabo celebrar conferencia con Secretario de Estado. Me ha dicho que mañana o pasado dará contestación a mi Nota de 12 Julio en que V. E. me encargó pedir al Cardenal contestase a la de 22 de Mayo. Le he rogado me adelantase confidencialmente algo acerca de si el Vaticano se hallaba dispuesto a continuar las negociaciones y el Cardenal me ha dicho que temía mucho que la respuesta fuese negativa. Pedidas por mí algunas explicaciones sobre este particular, ha dado a entender que no sólo subsistirían las razones basadas en la acción unilateral del Gobierno de S. M. en materia de Concordato sino que prevalecería en el Vaticano el temor de que el Gobierno fuese aún mucho más allá y que no se sabía aquí a dónde iríamos a parar; a este propósito he tratado de desvanecer temor tan infundado y que las declaraciones hechas por el Gobierno de S. M. a la Santa Sede deben destruir. Hablando después del efecto aquí producido por la repatriación de los expulsados y prófugos de Barcelona, me ha dicho que tiene noticias y razones para asegurar que se preparan el regreso a Italia, Francia y de elementos tan numerosos como peligrosos compuestos de todos los anarquistas expulsados de Buenos Aires y que conviene extremar la vigilancia en España. Ojeda» (telegrama del embajador al ministro de Estado, 22-VII-1910, *ibidem*, exp. «1910. Negociaciones...»; parece referirse a un episodio ligado a las consecuencias de los sucesos de 1909). El mismo 22 por la noche, Merry comunica en nota oficial a Ojeda la actitud de la Santa Sede: «Desde el Vaticano, 22 de Julio 1910. = En respuesta a la atenta Nota de S. E. el Señor Embajador de España, fecha doce del corriente, el infrascrito Cardenal Secretario de Estado estima necesario formular las siguientes observaciones y declaraciones: = Desde que el Sr. Embajador expuso, en su Nota de quince de Abril último, la intención del actual Gabinete español de regular la cuestión de las Ordenes y de las Congregaciones religiosas en España, la Santa Sede declaró inmediatamente dispuesta a entrar con aquél en amistosos tratos y propuso por su Nota de 9 de Mayo, una serie de importantes concesiones, propias a favorecer la rápida y feliz conclusión de un acuerdo. = Dichas concesiones, en verdad sea dicho, no fueron apreciadas debidamente por el Gobierno, el cual, por su segunda Nota de 26 de Mayo, insistió en sus primeras demandas. = La Santa Sede examinó nuevamente esas demandas con la más atenta consideración y con el más sincero espíritu de concordia y de benevolencia, y hallábase ya dispuesta a enviar su respuesta, cuando algunos actos del Gobierno español pusieron a la Santa Sede en la necesidad de suspender su envío. = Esto, en realidad, prescindiendo de otros hechos de menor importancia (tales como): = 1.º la Real Orden de 30 de Mayo que volvía a poner en vigor la precedente circular de 9 de Abril de 1902, que contenía muchas disposiciones relativas a las Congregaciones religiosas no incluidas

en el «*Modus vivendi*» concordado en aquel mismo año por la S[an]ta Sede; = 2.º) la publicación de la Real Orden de 10 de Junio, sobre las manifestaciones públicas de los cultos heterodoxos, ofensivas para los derechos de la Iglesia y contrarias al pacto concordatario; 3.º) los propósitos expuestos en el mensaje de la Corona que, ante todo, en cuanto respecta a la reforma de la enseñanza tenía que preocupar vivamente el ánimo de Su Santidad. = La Santa Sede protestó contra la Real Orden relativa a los cultos, hizo sus reservas acerca de las intenciones anunciadas en el Mensaje y, en cuanto al incidente de las Ordenes y de las Congregaciones religiosas, para salvaguardar su dignidad, tuvo que pedir al Gobierno una leal y entera seguridad de que éste, durante que los tratos estuvieran pendientes, se abstendría de tomar cualquiera medida unilateral referente a la misma materia que se hallaba en discusión. = No tan sólo el Gobierno español no dio la seguridad que repetidas veces le había pedido la Santa Sede sino que declaró que mantenía íntegros sus propósitos y la ya dictada Real Orden de 30 de Mayo. = También, continuando en esa actitud, ha presentado antes de la conclusión de un acuerdo con la Santa Sede, un nuevo proyecto de ley llamado «del candado», desfavorable para las Congregaciones religiosas. = En fin, este proyecto de Ley parece entrañar disposiciones de mayor alcance que la de aquella autorización gubernativa, sobre la cual la Santa Sede habíase declarado dispuesta a entenderse con el Gobierno español, y parece que coloca, hasta una época indeterminada a las Asociaciones religiosas fuera del propio derecho comun. = El Cardenal que suscribe ha debido recordar brevemente toda la serie de hechos mas arriba indicados, ya que de ellos se despende con toda evidencia, que la Santa Sede no ha hecho por su parte nada para sustraerse a las ya empezadas negociaciones, ni para dilatarlas deliberadamente. = El Gobierno español, por el contrario, no ha vacilado en proceder unilateralmente durante los tratos, reformando las decisiones relativas a la materia de las Ordenes y Congregaciones religiosas que, por su naturaleza, es eclesiástica, y ha sido objeto de solemnes pactos entre ambos Poderes. Así pues, ha comprometido necesariamente el curso regular de esas mismas negociaciones. = Esto expuesto, mientras sea mantenido el precitado proyecto de ley llamado «del candado» la Santa Sede declara formalmente que, para tutelar su propio decoro y por el deber imprescindible de defender cuanto constituye de por sí los intereses religiosos de la Nación española, se halla en la penosa imposibilidad de continuar los tratos, sobre la cuestión de las Ordenes y de las Congregaciones religiosas, y de dejar al Gobierno toda la responsabilidad de lo que ha hecho o hará en esta materia y de las consecuencias que de ello podrán resultar. = El infrascrito Cardenal aprovecha, etc. = (Firmado) R. Card. Merry del Val» (apud despacho núm. 94, 23-VII-1910).

¹³⁴ Vid. *El Liberal*, 28-VII-1910, donde, sin notificar tal decisión, afirma la intención de Canalejas de comunicarla inmediatamente al rey.

¹³⁵ «La respuesta de V. E. a las observaciones y declaraciones contenidas en la Nota del Cardenal Secretario de Estado de 22 del corriente, será ésta: = El 15 de abril último, el Embajador de S. M. planteó ante la Santa Sede, en los términos más equitativos y conformes con la disciplina eclesiástica y la autoridad pontificia y episcopal, la cuestión de las órdenes y congregaciones religiosas en España. El 9 de mayo siguiente, Su Eminencia, sin tener a bien ilustrar a dicho Embajador sobre las razones que pudieran oponerse a la aceptación de la propuesta consignada en la referida Nota del 15 de abril, le contrapuso otra que, incluida va una vez en varios artículos del convenio de 19 de abril de 1904, fue examinada por las Cortes y la opinión pública y no alcanzó la aprobación legislativa. Es más, la contrapropuesta del 9 de mayo, en algún punto, por ejemplo, el relativo a supresión de las casas religiosas de menos de doce individuos es menos amplia que las correspondientes cláusulas del citado convenio; cláusulas a su vez más restrictivas que el derecho canónico vigente porque, mientras que ahora se pretende aceptar de la supresión a las casas destinadas a determinados objetos o reputadas útiles por los Ordinarios, la Santa Sede había reconocido en el curso de la negociación (Nota del 24 de agosto de 1902) que «las leyes canónicas exigen para el regular funciona-

miento de las comunidades de uno y otro sexo el número de doce religiosos profesos». = No obstante esa actitud, el Gobierno halló en sus propias conciliadoras disposiciones y estímulos para no desalentarse e insistió el 26 de mayo en su anterior propuesta. = Al tal proceder correspondió la Santa Sede con sucesivas dilaciones. En efecto; primero, el 11 de junio el Cardenal Secretario de Estado dio a entender que su respuesta a la Nota de 26 de mayo quedaba detenida ante la noticia de la publicación inminente de una Real orden relativa a la aplicación del artículo 11 de la Constitución de 1876. Y aunque la protesta antes anunciada envolvía la negación de dos prerrogativas de que ningún Estado puede desprenderse, a saber, la de interpretar las leyes interiores del país y la de apreciar hasta qué punto una medida concerniente a la situación de los cultos no católicos es aconsejable por razones de conveniencia pública y de concordia entre los ciudadanos, el Gobierno declaró que sus disposiciones para facilitar un acuerdo sobre el asunto (totalmente ajeno a ése) de las órdenes y congregaciones religiosas, no sufrirían alteración. = Segundo. En 20 de junio, el Cardenal Secretario de Estado, haciendo abstracción de aquel incidente y dejando que se tramitase por separado, invocaba sin embargo razones para un nuevo aplazamiento; y se fundaba principalmente en las intenciones expresadas en el mensaje de la corona que en muchos puntos aparecían como contrarias a la religión católica. Pedía en consecuencia, una seguridad de que el Gobierno se abstendría de tomar disposiciones, las cuales no podrían menos de comprometer el éxito de los tratos iniciados. El Gobierno contestó poniendo de relieve cuán ajeno es a todo espíritu de hostilidad contra la religión del Estado, cuán deseoso estaba de mantener la armonía entre ambas potestades; y cuán sincero respeto profesaba a los pactos entre una y otra, rectamente entendidos. Y rogaba que, si la Santa Sede quería ofrecer una muestra de sus sentimientos de concordia y deferencia, no formase concepto de antemano acerca de intenciones que, en la propia opinión del Cardenal Secretario de Estado, habrían de ser dudosas y aguardase los proyectos de ley en que aquéllas pudieran manifestarse. = Tercero. En esa situación el Cardenal Secretario de Estado hizo observaciones hasta entonces no formuladas acerca del alcance de la circular de 9 de abril de 1902 en relación con el llamado *modus vivendi* del mismo año y por lo tanto acerca de la legitimidad de la circular de 30 de mayo de 1910. Expuso que la Santa Sede pedía solamente al Gobierno español la seguridad de que durante los tratos se abstuviese de tomar medidas unilaterales relativas a la materia pendiente de discusión. El Gobierno, llevando la condescendencia con los escrúpulos de la Santa Sede tan lejos como su dignidad y decoro permitían, no vaciló en explicar categóricamente sus propósitos sobre el particular. La circular de 30 de mayo último, no ha venido, como el Cardenal Secretario de Estado afirma, a poner nuevamente en vigor la de 9 de abril de 1902 sino a recordar su cumplimiento; no constituía como el Cardenal da a entender, una *reforma* sino la aplicación estricta del derecho vigente. La pretensión de que ambas circulares quedasen sin efecto era de la misma índole que hubiera sido la del Gabinete de Madrid respecto a que durante los tratos suspendiese el Santo Padre la observancia de tales o cuáles preceptos canónicos susceptibles de estar en conflicto con la legislación civil, por ejemplo, los que fijan la edad de la profesión religiosa o los que establecen penas contra quienes violan la clausura. Pero el Gobierno se abstuvo de semejante pretensión como se abstuvo también (aunque en el terreno en que el Cardenal Secretario de Estado se coloca habría tenido fuerte motivo para hacerlo) de elevar quejas contra la conducta de la Santa Sede y de los Ordinarios, al conceder desde 1902, sin consulta con el Estado licencias para la creación de nuevas casas religiosas cuyo constante aumento agrava las dificultades modificando desfavorablemente el *statu quo*. Por otra parte habiendo el Gobierno anunciado a la Santa Sede en 15 de abril el proyecto de expedir la circular que luego llevó fecha 30 de mayo; habiéndose verificado ese anuncio en términos que excluía la hipótesis de que su realización dependiera del resultado de las negociaciones; habiendo Su Eminencia omitido todo reparo en su Nota del 9 de

mayo era contrario a la equidad que, después, la Santa Sede, en vez de limitarse a considerar esa materia como una que requería discusión supeditase a la derogación de la circular (derogación, pues mientras no quedase derogada, el Gobierno faltaría a sus deberes no aplicándola) la continuación de las negociaciones. Así, en parte, lo reconoció el Cardenal Secretario de Estado cuando, recogiendo el 9 de julio la reiterada afirmación del Gobierno de que las circulares de 30 de mayo pasado y de 9 de abril de 1902 tendrían que ser ejecutadas, manifestaba que la «Santa Sede, sin embargo, deseara sinceramente de llegar a un acuerdo con el Gobierno español sobre la importante y delicada cuestión de las órdenes religiosas, se declara dispuesta a proseguir las negociaciones emprendidas». = Ciertamente en esa Nota dicho Cardenal advertía que, si el Gobierno tomase disposiciones o llevara a efecto actos unilaterales no consignados en los convenios ya ajustados y relacionados con la materia objeto de los tratos, la Santa Sede se juzgaría en el caso de suspender éstos; cierto igualmente que semejante advertencia y otros párrafos del documento no revelaban una disposición de espíritu adecuada a un resultado útil. Ciertamente, en fin, que los conceptos de la Nota sobre la falta de facultades del Estado para regular la cuestión, eran inadmisibles y prejuzgaban el fondo mismo del asunto que iba a discutirse, a saber, el alcance de los artículos 29 y 30 del concordato; pero el Gobierno reservando la integridad de su punto de vista para mantenerlo en el momento oportuno, atendió exclusivamente a la parte de la Nota que podía constituir una esperanza de conciliación y dejar abierta la vía a un acuerdo, esto es, a la declaración arriba transcrita de que la Santa Sede estaba dispuesta a proseguir las negociaciones. Mas, ahora, Su Eminencia vuelve sobre su decisión y toma por motivos la persistencia del Gobierno en la actitud que era perfectamente conocida de la Santa Sede antes de aquella declaración y la presentación a las Cortes de un proyecto de ley sobre necesidad de la autorización gubernativa para establecimiento legal de asociaciones pertenecientes a órdenes y congregaciones. Cuando Su Eminencia, en 9 de mayo comunicó que el Santo Padre no se opondría a que para abrir nuevas casas religiosas sea necesaria dicha autorización del Gobierno y que además por cuanto concierne en modo especial a los extranjeros, no tendría dificultad en que aquéllos no puedan fundar órdenes y congregaciones religiosas sin naturalizarse previamente en el reino, a tenor de la ley común, el Embajador hizo saber (Nota del 26 de mayo) que esas reglas coincidían con el propósito del Gobierno. El Gabinete, por su parte, condensó este propósito en un párrafo del discurso leído por S. M. en las Cortes en 15 de junio anunciando la presentación del proyecto de ley de que ahora se trata; y el sentido del mismo fue explicado dos días después al Cardenal Secretario de Estado en términos que merecieron su conformidad. No se diga que el texto del proyecto se aparta de los principios a que Su Eminencia participó que el Santo Padre no se opondría: dicho texto sólo contiene la obligación de las órdenes y congregaciones religiosas de proveerse de la autorización del Gobierno para abrir legalmente casas en lo sucesivo, autorización que lógicamente, tratándose de asociaciones pertenecientes a la religión del Estado, se otorgaría de acuerdo con la autoridad eclesiástica; la prevención a los Gobernadores para que, sin esa autorización no admitan los documentos exigidos por el artículo 4.º de la ley de 30 de junio de 1887, es un simple precepto de forma en relación con la vigencia de la ley; la desigualdad que resulta entre las órdenes y congregaciones religiosas y las demás asociaciones que no necesitan de la autorización gubernativa para crearse, es la consecuencia del principio aceptado por la Santa Sede y respecto a los extranjeros claro es que si obtuvieran la naturalización, a tenor de la ley común, dejarían de ser extranjeros conforme a la constitución y código civil y el precepto que va a establecerse no les sería aplicable. = De suerte que la condición puesta por el Cardenal Secretario de Estado en su Nota de 22 del corriente para proseguir las negociaciones; condición consistente en que el Gobierno de S. M. deje de mantener el precitado proyecto de ley llamado del concordato, debe reputarse nueva, contraria a lo hasta aquí tratado y entera-

mente injustificada. Este último carácter se muestra si cabe, más evidente recordando que el año 1880, vigente el concordato, se publicó, sin observación de la Santa Sede una Real orden, prohibiendo «el establecimiento de ninguna congregación, convento o colegio formados por extranjeros pertenecientes a los institutos religiosos expulsados de Francia en las provincias limítrofes a aquella nación» y requiriendo, para el establecimiento de cualquiera otra asociación o comunidad religiosa en todas las provincias del reino, como venía requiriéndose hasta entonces, la autorización especial del Gobierno, que podía concederla previos los informes y con las condiciones que en cada caso juzgase conveniente. = Al recordar igualmente que la circular de 9 de abril de 1902, no fue obstáculo cuando su publicación, al comienzo de negociaciones análogas a las que ahora rehusa la Silla apostólica el Embajador de S. M. — rechaza en nombre del Gobierno el reproche de que se daba a actos de éste la decisión dada a conocer por el Cardenal Secretario de Estado el 22 del corriente; hace constar que serán razones peculiares de la Santa Sede las que la muevan a atribuir distinto valor a unos mismos hechos; declina toda responsabilidad...» (sigue el segundo párrafo transcrito en el texto) «... solucionarla adecuadamente. = El Embajador no terminará sin decir que conteniéndose en su Nota del 15 de abril demandas respecto a la aplicación del derecho canónico vigente, en parte pactado con la Corona, el Gobierno no duda de que la Santa Sede no se prevalecerá del término de las negociaciones para dejar de imponer el cumplimiento de aquéllos a quienes no los observan» (telegrama del ministro de Estado al embajador Ojeda, 29-VII-1910, AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «1910. Negociaciones...», que Ojeda transcribe fielmente —con parecidas incorrecciones de puntuación— en nota oficial a Merry fechada el 31, apud despacho núm. 96, del consejero de la embajada cerca de la Santa Sede, marqués de González, al ministro, de 1-VIII-1910, *ibidem*). Sobre el proceso de la decisión del Ministerio, hay un telegrama de García Prieto a Ojeda de 28-VII-1910: «Recibido anteanoche despacho 34 decisión Gobierno quedará acordada mañana en conferencia que tendrá aquí conmigo Señor Canalejas después celebrar hoy Consejo Ministros Madrid. Entre tanto conviene se abstenga V. E. ver Cardenal. = Garciprieto.»

¹³⁶ Telegrama del ministro de Estado al embajador Ojeda, 29-VII-1910, *ibidem*: «Gobierno resolvió remita V. E. a Cardenal respuesta cuyo texto voy telegrafiarle [apud nota anterior]. Deseo quede en poder Su Eminencia mañana por la noche o lo más tarde pasado mañana por la mañana. Al tiempo y con número posterior dirigirá V. E. a Cardenal otra nota participándole haber sido llamado a España por el Gobierno para recibir órdenes y acreditando a Consejero como encargado negocios en términos costumbre pero sin emplear fórmula «durante mi ausencia» que en casos ordinarios suele usarse. Garciprieto.» El embajador responde el mismo 29: «Recibido telegrama de V. E. de hoy puesto a la una y cincuenta. Remitiré inmediatamente a Cardenal Nota que me anuncia V. E. con la urgencia que desea y le dirigirá además la que V. E. me encarga en los términos convenidos por Gobierno S. M.—Ojeda.» Insiste el ministro el 30: «Recibido telegrama sírvase decirme sus planes viaje a España. Ninguna razón especial exige que V. E. lo efectúe con apresuramientos perjudiciales a su salud pero Gobierno desea que, una vez remitidas las notas, no prolongue V. E. más de unas horas su permanencia en Roma o Frascati. Garciprieto.» Después de nuevo intercambio de telegramas el 31 para aclarar algún párrafo del telegrama transcrito en nuestra nota anterior, Ojeda notifica el 1-VIII-1910: «A las seis y media de esta mañana he remitido las dos notas a Cardenal. Salgo dentro de media hora para Liorna, Turín y París = Ojeda.» De hecho, el despacho núm. 96 de la embajada, en la misma fecha, va ya firmado por el marqués de González.

¹³⁷ Despacho núm. 81, 2-VII-1910, de Ojeda a García Prieto, *ibidem*.

¹³⁸ Fernández Almagro: *Historia del reinado...*, 172.

¹³⁹ Así el acto de protesta de las «damas católicas» en el ministerio de Estado, el 25-VI, dirigidas por la duquesa de Bailén ante Canalejas y García Prieto; el telegrama de adhesión del jefe del Partido Integrista, Olazábal,

dirigido al Pontífice; el jubileo convocado a últimos de junio por el obispo de Madrid-Alcalá; el acto semejante celebrado en Pamplona en julio... (vid. *El Imparcial*, 26-VI-1910 ss.).

¹⁴⁰ Cfr. despacho núm. 76, 22-VI-1910, del embajador Ojeda al ministro de Estado, AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «1910. Negociaciones...» La protesta de la Junta Central de Acción Católica, apud *El Imparcial*, 20-VI-1910.

¹⁴¹ *Ibidem*, 21-VI-1910. Muy larga, insiste en la existencia de problemas sociales y económicos mucho más urgentes que el religioso.

¹⁴² *El Liberal*, 1-VII-1910.

¹⁴³ *Ibidem*, 2-VII-1910.

¹⁴⁴ Vid. *Revista Popular*, 7-VII-1910.

¹⁴⁵ Elaboramos la relación sobre fuentes liberales, tomando, cuando hay desacuerdo, la cifra más baja de manifestantes en cada lugar (cfr. *Heraldo de Madrid* y *El Imparcial*, 3 a 5-VII-1910, y *El Liberal*, 4 y 5-VII-1910).

¹⁴⁶ Cfr. *El Imparcial* y *El Liberal*, 12 y 18-VII-1910; *Heraldo de Madrid*, 11, 12, 17 y 18-VII-1910.

¹⁴⁷ *Heraldo de Madrid*, 4-VII-1910.

¹⁴⁸ Cfr. *Diario de las Sesiones... Senado*, 28-VI-1910, donde, lamentablemente, no consta el número de votos, que hubiera sido significativo.

¹⁴⁹ Cfr. *Diario de las Sesiones Congreso...*, 25-VI-1910. Soriano insiste en ese anuncio el 2-VII-1910.

¹⁵⁰ Cfr. *ibidem*, 2-VII-1910.

¹⁵¹ *Ibidem*, 20-VII-1910. Cfr. 4 a 19-VII-1910.

¹⁵² Cfr. *El Liberal*, 14-VII-1910.

¹⁵³ Apud *Diario de las Sesiones Senado*, 8 y 19-VII-1910, apéndices.

¹⁵⁴ Datos facilitados por los gobernadores civiles, *ibidem*, 20-VII-1910. Los datos de inscripción («situación legal») se entienden hasta fines de junio de 1910. El número total de religiosos y religiosas es incompleto por faltar datos de «un corto número» de establecimientos.

¹⁵⁵ Así titula su editorial *El Liberal*, 28-VII-1910. *El Imparcial*, 2-VIII-1910, hace va historia del conflicto.

¹⁵⁶ Cfr. *El Universo*, 3-VII-1910, *Revista Popular*, 28-VII-1910 y *Heraldo de Madrid*, 1-VIII-1910.

^{156 b} *La Avalancha*, 8-V-1904.

¹⁵⁷ *Ibidem*, 24-V-1910. Por eso seguramente Urquijo «pasaba por menos afecto a la monarquía», según Constantino Bayle: *El segundo Marqués de Comillas*, Don Claudio López Bru, Madrid, Administración de Razón y Fe, 1928, página 250.

^{157 b} En la Navidad de 1904 Urquijo y su esposa «fueron objeto de especiales deferencias [en Roma] por altas dignidades eclesiásticas, y muy en particular por Su Santidad Pío X, que los distinguió con una audiencia especial ... [de] más de veinte minutos» (*La Avalancha*, 8-I-1905).

¹⁵⁸ Por iniciativa de Juan Orúe expuesta en la prensa bilbaína, según Senante: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 23-X-1910.

¹⁵⁹ Cfr. *La Gaceta del Norte*, 29-VII-1910.

¹⁶⁰ Apud *Revista Popular*, 4-VIII-1910.

¹⁶¹ *El Pensamiento Navarro*, 3-VII-1910. Tal junta, explica, «tiene costumbre de organizar el movimiento de multitudes, y encuentra facilidades para disponer los viajes». En los números del *Boletín Eclesiástico del Obispado de Vitoria* de 1909 y 1910 al menos, aparece en efecto Urquijo como presidente de la Junta de Peregrinaciones. Vid. los telegramas de Merrv, siempre en contestación a adhesiones al Papa, apud *El Pensamiento Navarro*, 31-VII-1910 (a la Junta de Bilbao), 10-VIII-1910 (a las cuatro Juntas vasconavarras), 13-VIII-1910 (a la Diputación de Navarra).

^{161 b} *El Universo*, 30-VII-1910.

¹⁶² *La Gaceta del Norte*, 3-VIII-1910, que, con *El Pensamiento Navarro*, ofrece un buen aconio de documentación sobre estos hechos. Los seguimos también —además de la prensa madrileña— en *La Tradición Navarra* y el *Diario de Navarra*, de estos días, integrista y católico independiente uno y

otro. La Junta de Defensa Católica de Vizcaya aparece formada por Juan E. Orúe (presidente), Luis de Arana Goiri, Prudencio de Iturrino, Esteban Bilbao, Mariano de la Torre, Daniel de Abechuco, Jesús Castet, José María de Urquijo, Juan de Sagarminaga, Luis Emperaile, Fernando Manzanos, Vicente de Legórburu, Isacio Mangas, José Ortiz y Nazario de Oleaga (secretario); la de Guipúzcoa, por el jaimista Tirso de Olazábal, el jefe integrista Juan Olazábal, Santiago Azaldegui, José de Itarte, Jorge de Satrustegui, marqués de Valdespina, José María de Echeverría Torres, Manuel Pérez Icazategui, Toribio Alzaga, Carlos Urte, Gervasio Oliden, Silverio de Zaldúa, Ignacio María de Echaide, Juan Santo Domingo, Pablo Zabaleta y Agustín Brunet; la de Alava por Benito de Guinea, Claudio Lafuente, Cipriano del Valle, Isidro Guinea, Pedro Ortiz, Valentín S. de Santa María, Alejandro Valle, Modesto Ordoño, Ramón R. Olano y Francisco Ortiz; la de Navarra, por Fernando Gorosabel, Francisco Martínez, Estanislao Aranzadi, Juan Pedro Arraiza, Joaquín Eguaras, Teodosio Sagiés y el diputado integrista José Sánchez Marco. No hemos podido aclarar las fases de su formación ni, por tanto, las formalidades por las que reciben el mando. Salvo la de Vizcaya, las de más parecen surgir en los días 1 y 2-VIII-1910.

¹⁶³ Cit. *El Liberal*, 6-VIII-1910.

¹⁶⁴ *El Pensamiento Navarro*, 5-VIII-1910. Cfr. *El Correo Español*, 4-VIII-1910, Sobre la suspensión.

¹⁶⁵ Cit. *Revista Popular*, 11-VIII-1910. Lo ratifica la prensa tradicionalista diaria en los mismos términos que la liberal. Vid., por ejemplo, *El Liberal*, 6-VIII-1910 s., sobre las medidas del Gobierno.

¹⁶⁶ Cfr. *Revista Popular*, 11-VIII-1910, aunque *El Pensamiento Navarro*, 17-VIII-1910, señala como razón aducida para el procesamiento las «injurias graves» dirigidas a Canalejas por las Juntas en un telegrama.

¹⁶⁷ Apud *Heraldo de Madrid*, 6-VIII-1910. La acusación de carlismo o carlointegrismo contra las manifestaciones vascas sería rechazada insistentemente por Senante: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 23-X-1910.

¹⁶⁸ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 6-VIII-1910. No se conserva el *Diario de Navarra* del 5-VIII-1910, en la colección del Archivo de la Diputación Foral de Navarra.

¹⁶⁹ Cfr. *Heraldo de Madrid* y *El Liberal*, 6 y 7-VIII-1910.

¹⁷⁰ Cfr. *ibidem* y *El Pensamiento Navarro*, 8-VIII-1910. También los niega taxativamente Senante: *loc. cit.* nota 167 supra.

¹⁷¹ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 7-VIII-1910, *El Pensamiento Navarro*, 9-VIII-1910 y *La Gaceta del Norte*, 9-VIII-1910.

¹⁷² Cfr. *Revista Popular*, 11-VIII-1910.

¹⁷³ Vid. Bayle: *op. cit.*, 249 ss., sobre la decisión de Comillas, vicepresidente de la Junta Central de Acción Católica, de secundar la iniciativa de la vizcaína, iniciadora de las manifestaciones.

¹⁷⁴ *Revista Popular*, 25-VIII-1910.

¹⁷⁵ Vid. *ibidem*, 1-IX-1910, que hace una relación de *aplec*s de claro interés sociológico, v *El Pensamiento Navarro*, 7-IX-1910, que habla de 246.500 asistentes a 45 *aplec*s.

¹⁷⁶ En el Archivo Parroquial de una aldea de la Valdorba, en Navarra, hallamos esta circular impresa, con membrete «Protesta católica = de = Navarra = Junta Directiva»: «Pamplona, 20 Agosto de 1910. = Rvdo. Sr. Cura Párrroco. = Muy señor nuestro: Habiendo llegado a nosotros muchas cartas, en las que se preguntaba, si, suspendida la manifestación católica de San Sebastián, habría que desistirse también del envío de donativos a esta Junta, y enterados de que gran número de personas permanecen en la misma duda, a pesar de los buenos deseos y entusiasmos que les animan, nos creemos en la necesidad de molestarle de nuevo. = Ahora más que nunca son necesarios esos donativos, para poder llevar a la práctica los importantes provechos de las cuatro Juntas vasco-navarras, en los cuales nosotros nunca debemos dejar de estar a la envidiable altura de nuestros hermanos. = No terminó con la manifestación de San Sebastián el movimiento de protesta; se han de organi-

zar aún varios actos, cuando el desarrollo de los sucesos exija. = Esta Junta se propone no cejar hasta conseguir lo que todos anhelamos, el respecto para los derechos sagrados de Nuestra Madre la Iglesia. = De Vd. aftmo. S. S. = q. b. s. m. = Por la Junta Directiva = (Hay una firma de tapon:.) Fernando de Gorosabel.»

¹⁷⁷ Según José Tarín-Iglesias: *Periodismo de ayer y de hoy*, Barcelona, Editorial Poliglota, 1959, pág. 100.

¹⁷⁸ Artículo de Angel Herrera Oria, *La Gaceta del Norte*, 24-XI-1962.

¹⁷⁹ Soldevilla: *op. cit.* (1910), 435.

¹⁸⁰ Vid. *El Liberal*, 23-VIII-1910, que lo prevé para el 26, 27 ó 28. Detalla bien los rumores, negándolos, *El Pensamiento Navarro*, 17-VIII-1910.

¹⁸¹ Vid. Soldevilla: *op. cit.* (1910), 433 s.

¹⁸² Vid. *El Liberal*, 24-IX-1910.

¹⁸³ Cfr. *ibidem*, 22-IX-1910 ss. En la manifestación, el obispo estuvo presente (vid. *El Universo*, 17-X-1910).

¹⁸⁴ Cit. *El Liberal*, 28-IX-1910.

^{184 b} Cfr. *La Tradición Navarra*, 27-IX-1910.

¹⁸⁵ Cfr. *El Liberal*, 27-IX-1910.

¹⁸⁶ *Ibidem*, 28-IX-1910.

¹⁸⁷ Cfr. *ibidem*.

¹⁸⁸ Cit. *Revista Popular*, 22-IX-1910.

¹⁸⁹ Cfr. *ibidem*, 6-X-1910, y *Heraldo de Madrid*, 2-X-1910.

¹⁹⁰ Vid. *Heraldo de Madrid*, 2-X-1910.

¹⁹¹ Cfr. Feliú: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 10-X-1910, y *El Universo*, 3-X-1910.

¹⁹² Vid. *Heraldo de Madrid*, 29 a 31-VII-1910.

¹⁹³ *Revista Popular*, 4-VIII-1910.

¹⁹⁴ Vid. *El Liberal*, 15-VIII-1910.

¹⁹⁵ Cfr. *ibidem*, 18-VIII-1910.

¹⁹⁶ «... actos oficiales. Su criterio en ese punto debe ser corrección más absoluta sin ir más lejos de lo que exige. Respecto recepción diplomática viernes estimo V. S. debe acudir, pero si no tiene asuntos corrientes de que tratar debe justificar su presencia con deseo saludar Su Eminencia y ponerse a su disposición al quedarse Encargado Negocios. No tomará V. S. iniciativa ocuparse de retirada Embajador, término negociaciones y estado general relaciones entre ambas Potestades y si Cardenal le hablase responderá cortésmente que Gobierno ha consignado razones de su proceder en última Nota y no añadido a ellas ninguna nueva instrucción a V. S.—Garciprieto» (telegrama del ministro de Estado al encargado de negocios marqués de González, 2-VIII-1910, AMAE/SPS, leg. 2.679, expediente «1910-11. Cuestión de las órdenes y congregaciones religiosas. (Desde la salida de Roma del Embajador Sr. Ojeda hasta fines de Enero de 1911)». Responde a esta consulta de González al ministro fechada el 1: «Señor Embajador acaba de salir por tren 8 mañana. Por encargo expreso suyo ruego V. E. me diga si he de acudir, como suele[n] hacerlo los encargados Negocios presentados por notas, a Cardenal Secretario Estado el primer viernes de recepción diplomática: así como si debo asistir con personal Embajada día nueve de agosto a misa dicha por Su Santidad con motivo aniversario de su coronación y a la que cuerpo diplomático está invitado. Aguando ésta y otras instrucciones que V. E. tenga a bien darme — González.»

¹⁹⁷ Telegrama del ministro de Estado al encargado de negocios, 4-VIII-1910, *ibidem*. González le responde el 5: «Descifre V. E. mismo. Cumpliendo instrucciones V. E. consignadas telegrama 2 actual, acabo visitar Cardenal saludándole como Encargado de Negocios y poniéndome a sus órdenes, atención que me ha agradecido cortésmente. Acto continuo hice presente a Secretario de Estado contenido telegrama de V. E. de ayer noche. Cardenal me escuchó con marcado interés, aunque mostrándose muy reservado. Sólo al oír la frase «propalando ha expulsado Sr. Nuncio», exclamó algo contrariado: «¡esto no es verdad! todo el mundo sabe que el Nuncio sigue en España»; y terminadas mis manifestaciones hechas en nombre de Gobierno de S. M., Su Eminencia

dijo friamente: «no veo qué puede hacerse en este caso». Cambiando conversación me preguntó por Sr. Embajador y por su salud; y me habló de algunas cosas insignificantes. Mas al ver yo que no volvía a aludir a mis manifestaciones, insistí nuevamente, pero Cardenal cortó entonces entrevista diciendo: «es verdad que hay mucha agitación, pero repito, no veo qué puede hacerse en este caso». Entonces me concreté a contestarle que transmitiría sus palabras a V. E.; y Su Eminencia y yo nos (separamos) [sic] en términos amistosos. González.» Alude a los rumores sobre el nuncio *El Universo*, 6-VIII-1910.

¹⁹⁸ «Reservado. Descifre V. E. inismo. A pesar de que prensa generalmente bien informada asuntos Vaticano anuncia que S. S. y Cardenal Secretario de Estado han acordado los términos de una respuesta a última Nota y que ésta será enviada en cuanto su texto sea sometido a Congregación correspondiente, he recibido informaciones de personas que me merece[n] crédito, y es por eso me creo en deber de transmitirla[s] a V. E. De esta[s] resulta que, en cuanto Nota fue recibida, se reunió Congregación compuesta Cardenales Merry, Rampolla, Vives, Gaspa[r]i, y Ferrata, y que ésta decidió aplazar respuesta en esperanza acontecimientos sucesivos a manifestación proyectada para Domingo en San Sebastián. Aunque no puedo responder veracidad absoluta de tal noticia, me consta que los Representantes de las grandes potencias, a conocimiento de los cuales ha llegado esa información, la han comunicado hoy mismo a sus respectivos Gobiernos.—González» (telegrama del encargado de negocios al ministro de Estado, 4-VIII-1910, AMAE/SPS, leg. 2.679, exp. «1910-11. Cuestión...»).

¹⁹⁹ Telegrama del mismo al mismo, 6-VIII-1910, *ibidem*: «Descifre V. E. mismo. Confirmando telegrama anteayer manifestando V. E. que anoche invité a mi casa dos Jefes de Misión que supe habían visitado ayer Cardenal después de mí. Ambos separadamente y confidencialmente me dijeron habían preguntado a Su Eminencia si se había contestado a nuestra última nota; a lo cual Secretario de Estado respondió sin demostrar preocupación que S. S. no ha tomado aún decisión alguna a este respecto. = Uno de los Ministros me [dijo] exigiendo de mí la mayor reserva sobre el particular que Cardenal parecía esperar con curiosidad [?] la manifestación del domingo y que se franqueó con él, diciéndole que Santa Sede había hecho mucho por la monarquía al referir a los facciosos que pretendían que Carlista era sinónimo de Católico, demostrándoles que se puede ser Católico sin ser Carlista, pero que ahora tal demostración sería algo difícil hacerla. González.»

²⁰⁰ Real orden núm. 66: «Al Encargado de negocios en Roma (Santa Sede). = San Sebastián 7 de agosto de 1910. = Recibido el despacho n.º 96, de 1 del corriente, muy reservado, al que acompaña copia de la nota que el Señor Ojeda dirigió a Su Eminencia el Cardenal Secretario de Estado, en dicha fecha, antes de su salida de Roma, cúmplame advertir a V. S. que entre ese documento y las instrucciones telegráficas cifradas por mí, transmitidas al referido Embajador en 29 de julio hay algunas discrepancias que, aunque de alcance secundario, hacen oscuro el texto en algunos pasajes. = En consecuencia, encargo a V. S. que, en una carta particular se sirva inmediatamente manifestar a Su Eminencia que, habiendo recibido por correo el texto de las instrucciones que se comunicaron por telégrafo al Señor Ojeda y observando que, a causa de errores en la transmisión telegráfica cifrada, hay ligeras variantes de redacción con la nota de 1.º de agosto, cree V. S. útil, para la más clara comprensión de tal nota, remitir a Su Eminencia la copia misma que ha recibido del Ministerio de Estado. = De Real orden lo dejo [?] a V. S. a los efectos que se indican» (AMAE/SPS, leg. 2.679, exp. «1910-11. Cuestión...»). González responde en el despacho núm. 102, 11-VIII-1910, al ministro de Estado, que ha realizado el encargo (cfr. AMAE/SCS, leg. 1.741). Transcribimos el texto teleografiado por García Prieto a Ojeda en 29-VII-1910, al que se alude aquí, en la nota 135 supra. A diferencia de éste, el escrito definitivamente enviado por el embajador a Merry en esa fecha comenzaba: «El infrascrito Embajador de S. M. Católica cerca de la Santa Sede, en respuesta a la Nota de S. E. el

10000

Sr. Cardenal Secretario de Estado de S. Santidad, de fecha 22 del Actual, tiene la Honra de manifestarle, de orden de su Gobierno, que, a su debido tiempo, planteó en los términos ...» Sigue luego una reproducción casi exacta de aquel telegrama, con escasas variaciones de preposición o conjunción que a veces alteran ligeramente el sentido. Donde el telegrama decía «casas destinadas a determinados objetos o reputadas útiles por los Ordinarios», Ojeda sustituye la «o» por una coma. En el paréntesis «(totalmente ajeno a ese)» el embajador escribe: «totalmente ajeno al esencial». Y en vez de «invocaba sin embargo, razones para un nuevo aplazamiento», dice «invocaba, sin embargo, querer conseguir un nuevo aplazamiento». Donde el ministro habla de «pactos entre una y otra»; éste, de «el pacto ajustado entre una y otra», suprimiendo, además «rectamente entendidos». Donde García Prieto escribe «hizo observaciones hasta entonces no formuladas acerca del alcance», Ojeda entiende «no hizo observaciones hasta entonces, ni las formuló acerca del alcance». La «conducta de la Santa Sede y de los Ordinarios» en aquél queda reducida en éste a la «conducta de la Santa Sede». Cuando aquél dice «la Santa Sede se juzgaría en el caso de suspender éstos», Ojeda entiende «la Santa Sede juzgaría el caso como una suspensión de éstos». Donde dice «condición consistente en que», el embajador lee «condición persistente que». Por «hasta entonces», transcribe «desde entonces» (sobre la norma de 1880). El resto es una repetición casi literal de las instrucciones telegráficas (nota de 29-VII-1910, de Ojeda a Merry del Val, apud despacho núm. 96, 1-VIII-1910, del encargado de negocios al ministro de Estado, AMAE/SPS, leg. 2.678, exp. «1910. Negociaciones...»).

201 En el despacho núm. 103, 14-VIII-1910, del encargado de negocios al ministro de Estado, AMAE/SCS, leg. 1.741, aquél adjunta un artículo de *L'Osservatore Romano* del 13 «en el que se inserta una nota oficiosa de la Santa Sede, relativa a la suspensión de negociaciones habida entre el Gobierno de S. M. y la Curia Romana, en lo que se refiere a la reglamentación de las Asociaciones religiosas en el Reino». Tal nota contestaba, según González, a las declaraciones hechas por García Prieto a la Agencia Fabra (probablemente «en la famosa interviú publicada por *La Voz de Guipúzcoa* y reproducida en otros periódicos» que transcribe entre otros, presentándolas con estas palabras, P. Villada: *La llamada del Embajador español en el Vaticano*, «Razón y Fe», septiembre-diciembre 1910, 73-77); declaraciones que sintetizaban con fidelidad las fases de la negociación fracasada, sin aludir, no obstante, como *L'Osservatore* recordaba el 13 al rebatir «la desenfrenada locuacidad de los Gobernantes de España» (traducción de González, en su telegrama al ministro de Estado del 14, AMAE/SPS, leg. 2.679, exp. «1910-11. Cuestión...»), a la exigencia de la Santa Sede de que el Gobierno no emitiera más medidas unilaterales si deseaba proseguir los tratos. En el despacho núm. 104, 18-VIII-1910, González remitía al ministro de Estado otros dos sueltos del diario romano: uno del 18, contra otro telegrama de la Agencia Fabra sobre una entrevista con un exministro en San Sebastián, para negar que el Vaticano hubiera dado nunca su conformidad al proyecto de ley del candado; otro del 17, negando cualquier intervención del Vaticano en contra o a favor de la manifestación de San Sebastián (AMAE/SCS, leg. 1.741). El 20, en el despacho núm. 105 del encargado al ministro, *ibidem*, González ha de insistir sobre otro suelto del mismo periódico: «Muy señor mío: Tengo la honra de llamar la superior atención de V. E. sobre el adjunto artículo que publica en sus columnas *L'Osservatore Romano* de anoche. = Como V. E. podrá ver por su texto, el órgano oficioso de la Santa Sede afirma que varios periódicos franceses han difundido inverosímiles noticias acerca de los asuntos de España, anunciando que varios misteriosos cajones habían sido expedidos desde nuestro país al Vaticano; que muy en breve llegarán a esta Ciudad varios Prelados españoles, y que la publicación de una Encíclica Pontificia al Episcopado de nuestra Nación es inminente. = El mismo *Osservatore* se lamenta de que muchos periódicos católicos hayan recogido, de buena fe, tan insubsistentes e inverosímiles especies y de que las expresas o tácitas reservas con que aquéllos las han publicado,

no siempre obtengan el resultado de disipar equívocos, a veces intencionado: y de ilustrar la opinión pública. = En fin, la hoja vaticana formula el deseo de que los diarios católicos sean cautos en el modo de acoger noticias que a veces, son tendenciosas y más a menudo aun fantásticas.» *El Liberal* 8-VIII-1910, al margen de toda esta polémica, habla de una carta escrita por Pío X a Alfonso XIII que Canalejas desconoce.

²⁰² «...medios suyos propios. Es dudoso que baste a tal objeto la declaración (cuyo alcance podré apreciar cuando conozca texto íntegro) del *Osservatore* de que la Santa Sede es ajena a acción católicos españoles, pues agitadores invocan como aprobación su conducta las respuestas laudatorias de Secretario Estado y el calor prestado a movimiento agitación por periódicos órganos oficiosos Vaticano con publicación listas protestas, elogios a la provida manifestación ilegal, etc. Gobierno no pretende que católicos abandonar defensa de lo que ellos consideran sus derechos, pero para esa defensa no es necesario ni lícito al clero, en el ejercicio de su ministerio apelar a determinados extremos y procedimientos y Santa Sede podría hacer mucho para que límites debidos no se traspasasen. En todo caso Gobierno estima haber dado con el paso de V. S. cerca del Cardenal el día cinco y con mis propias indicaciones al Nuncio una nueva prueba de prudencia, de consideración a Santa Sede y de preocupación por paz espíritus. Garciprieto» (telegrama al encargo de negocios, 18-VIII-1910, AMAE/SPS, leg. 2.679, exp. «1910-11. Causa...») Puede aludir a la entrevista entre Vico y García Prieto del 13 (vid. *El Liberal*, 15-VIII-1910). Las listas de protestas son continuas en *El Universo* de julio y agosto.

²⁰³ Cfr. *El Liberal*, 21-VIII-1910.

²⁰⁴ «...diplomáticas. A ella, que hizo el ademán de retirarse, le correspondía el deber de la *aperitio oris* ... celebramos *l'esprit de suite* que descubre la renovación del diálogo» (*Heraldo de Madrid*, 25-VIII-1910).

²⁰⁵ «Traducción literal. El Cardenal Secretario de Estado de S. S. al Encargado de Negocios de España cerca de la Santa Sede. = Desde el Vaticano, ... [sic] Agosto de 1910 = El infrascrito Cardenal Secretario de Estado ha recibido en la mañana del primero del corriente, la atenta Nota del Excmo. Señor Embajador de España, de fecha 31 de Julio próximo pasado, que contestaba a la suya precedente de 22 del mismo mes de Julio. = Ante todo, es de deplorar que el Gobierno de S. M. Católica haya creído deber dar a conocer al público por conducto de la prensa, el contenido de su Nota, antes de que ésta fuese entregada a la Santa Sede, la cual por tal razón, no puede abstenerse de lamentar que no se hayan guardado para con ella las consideraciones que generalmente se observan en las negociaciones diplomáticas. = Para todo cuanto se relaciona después, con la materia de esa misma Nota, el infrascrito, en su precitada Nota del 22 de Julio, recordando sucintamente la historia de la presente cuestión, ha demostrado ya plenamente cuán justa y leal ha sido siempre la actitud de la Santa Sede. = En vista de la réplica del Gobierno español, cree, sin embargo, deber añadir algunas ulteriores observaciones, por las cuales resulte todavía más evidentemente justificada la conducta de la propia Santa Sede. = Como el que suscribe lo demostró ya, la Santa Sede, en su primera Nota de 9 de Mayo, al declararse dispuesta a entrar en amistosos tratos acerca de la cuestión de las Ordenes y Congregaciones religiosas, propuso, por su parte, una serie de concesiones que, sin embargo, no fueron debidamente apreciadas por el Gobierno español. Entre éstas, era sin duda alguna muy importante aquella por la cual la Santa Sede, conforme con la idea de conseguir en una medida equitativa y razonable la reducción de las casas religiosas en España que deseaba el Gobierno, se declaraba no contraria a la supresión de todos los conventos o monasterios, en los cuales residiesen menos de doce religiosos; con excepción de las comunidades que no hacen vida común o que se dedican a la enseñanza o bien a obras de caridad, como también de las casas de Procuración y de salud, y de aquellas que los Obispos estimasen necesarias para el ejercicio del sagrado ministerio, en sus respectivas Diócesis. A este propósito, es pertinente proponer, que no

sería exacta la afirmación de que la supresión de las casas de menos de doce religiosos, no representa más que la mera aplicación de la vigente legislación canónica. = Basta para convencerse de esto, examinar el sumario de las Constituciones Pontificias relativas a este punto, algunas de las cuales son conocidas del Gobierno español, puesto que se hallan citadas en la Nota del Señor Embajador, de fecha 15 de Abril próximo pasado. = Empezando, pues, por la Constitución *Cum alias* de Gregorio XV (17 de Agosto de 1622), esta no estipulaba ya que, de hecho, cada comunidad debiese componerse de doce individuos, pero establecía que las nuevas casas que se erigieran, fuesen capaces de dar convenientemente alojamiento y sostenimiento, por lo menos a doce religiosos. = Posteriormente, Urbano VIII, en el Decreto de 21 de Junio de 1625 confirmando la disposición de Gregorio XV, añadía que, para el porvenir, los conventos en los cuales no residieran de hecho religiosos en ese número, deberían estar sometidos a la visita, a la corrección y a la jurisdicción de los Ordinarios: = «*Attoquin monasteria et loca huiusmodi posthac recipienda, in quibus duodecim religiosi, ut supra sustentari atque inhabitaverint, ordinarii loci visitationi, correctioni atque omnimoda iurisdictioni subiecta esse intelligantur.*» = De lo cual se desprende claramente que los pequeños conventos fueron, no ya prohibidos, sino tan sólo privados del privilegio de exención de la jurisdicción de los Ordinarios; así es que el número de los religiosos fue necesario, no ya por que el convento existiese legítimamente, pero para que pudiese disfrutar del mencionado privilegio. = Inocencio X, por su Constitución *Instaurandae* de 15 de Octubre de 1652, suprimió las casas en las cuales, por el exiguo número de religiosos, no podía practicarse convenientemente la regular disciplina; y eso, con excepción de aquellas que la Santa Sede hubiera, por alguna razonable causa, juzgado pertinente conservarlas; y, en primer término, ese Decreto Pontificio fue promulgado exclusivamente para los Conventos de Italia e Islas adyacentes. = Además, éste tuvo vigor, únicamente para las casas que entonces subsistían, y no ya para las que habrían de erigirse en el porvenir. = Finalmente ese mismo Pontífice, Inocencio X, con objeto de impedir que muchos lugares, en los cuales los referidos conventos hubieran debido cerrarse, quedaran privados de los necesarios auxilios espirituales, autorizó por un posterior Decreto *Ut in parvis*, en 10 de Febrero de 1654, a varios de aquellos Conventos para que continuasen en su primitivo estado, confirmando la precitada disposición de Urbano VIII, en virtud de la cual las pequeñas casas debían seguir sometidas a la jurisdicción de los Ordinarios. Además, para disipar cualquier duda, acerca del alcance de la legislación canónica actualmente vigente, vale sobre todo la Constitución del Sumo Pontífice León XIII *Romanos Pontifices* (8 de Mayo de 1881), la cual incluso declara que el número de seis religiosos exigido por el derecho común, para que una casa goce del privilegio de la exención: «*Iure communi constitutum est, ut domus, quae sodales religiosos sex minimum non capiant, in potestate Episcoporum esse omnino debeant.*» Y a las disposiciones de la ley escrita, corresponde la práctica universal, ya que en todas partes existen pequeñas casas que, en la mayor parte de los casos, sería imposible extinguirlas sin grave daño para las almas. El infrascrito Cardenal ha creído necesario exponer todo esto, a fin de que resulte evidente que la proposición de suprimir los conventos donde residen menos de doce religiosos, constituía una verdadera y real concesión, que salía de los límites del derecho común en todas partes. A nadie puede ocultarse, además, la suma razón de esas meditadas excepciones. = ¿Cómo podrá ser posible suponer que el Gobierno español lejos de alentar y facilitar tan nobilísimos esfuerzos, exija, por el contrario, la supresión de comunidades que se dedican a obras altamente generosas y humanitarias de beneficencia, de enseñanza, de caridad, de asistencia a los enfermos, a los ancianos, a los pobres y a los abandonados, con tan gran provecho para el progreso de la civilización como para el socorro de los desvalidos, porque los individuos que componen aquellas (comunidades) [sic] no llegan a ser doce? Proponiendo pues la excepción referente a los conventos y monasterios que los Obispos juzgasen necesarios para el ejercicio del sagrado ministerio, la

Santa Sede estimó oportuno entrar en las miras del Gobierno de S. M. C., bien sea porque ella daba, de conformidad con los deseos expresados por ese mismo Gobierno, una participación al Episcopado, para apreciar la situación y las necesidades espirituales de sus respectivas Diócesis, bien sea porque el propio Señor Embajador en su Nota de 15 de Abril, daba a conocer como la supresión que se pedía, hubiera debido alcanzar a los conventos que: = «n fueren indispensables a juicio del Obispo, para auxiliarlos a ellos (Obispos [sic] y a los Parrocos, en el ejercicio de su sagrado ministerio o para satisfacer las demás necesidades espirituales», = y repetida [sic] en la segunda Nota del 26 de Mayo, que la reducción de las ordenes y de las congregaciones religiosas debía efectuarse, = «sin menoscabo de las necesidades religiosas» = Actualmente, y en especial en pequeños centros, es, en muchas ocasiones imposible a las Ordenes y Congregaciones poseer casas con doce religiosos y, sin embargo, allí, muy a menudo, la presencia de aquéllos se hace imperiosamente necesaria, para el bien de las almas. = No menos que la supresión de las casas, a la cual nos hemos referido hasta ahora, debía ser considerada como una concesión importante por parte de la Santa Sede, la intervención gubernativa para la fundación de nuevas Ordenes y Congregaciones, así como para abrir nuevas Casas de Congregaciones ya existentes; —que los extranjeros no pudieran fundar órdenes o congregaciones religiosas con personalidad jurídica reconocida por el Estado, sin haberse hecho previamente naturalizar en el Reino, a tenor de las Leyes Comunes, y que aquellos que, aun conservando sus condiciones legales de extranjeros, entrasen o residiesen en cualquier Convento o casa religiosa en España, quedasen sujetos a todas las disposiciones del derecho común vigente para los extranjeros; —que, no obstante el derecho que corresponde a la Iglesia, cual sociedad perfecta, de ser exenta de impuestos y contribuciones sobre sus bienes, las Congregaciones religiosas estuviesen sujetas a las contribuciones del Reino, que afectan a las personas jurídicas o súbditos españoles. = El Gobierno de S. M. C. ha objetado que dichas concesiones se hallaban ya contenidas en el Protocolo del 19 de Abril de 1904, el cual examinado por las Cortes y por la opinión pública, no obtuvo la aprobación legislativa. Pero es evidente que el hecho que aquéllas hubieran estado ya incluidas en un precedente Convenio, no les mengua en absoluto su valor real y su importancia objetiva. = Además, ese Convenio presentado al Senado en aquel mismo mes de Junio, fue aprobado con grandísima mayoría; y si no tuvo del mismo modo la sanción del Congreso de los Diputados, fue porque el Gabinete que lo había ajustado, presentó su dimisión, por un motivo completamente ajeno a este asunto, antes de que tuviera el tiempo oportuno para presentarlo al otro ramo del Parlamento. = Finalmente, la Nota del 9 de Mayo próximo pasado añadía una prueba ulterior de la sinceridad de los sentimientos paternos en que se inspiraba Su Santidad para con el Gobierno de S. M. C. y de su propósito de prestarle su valioso concurso para allanar las dificultades de la presente situación, ya que la Santa Sede se declaraba dispuesta a poner oportuno remedio, incluso por medio de las visitas apostólicas a los abusos que el mismo Gobierno le hubiese denunciado, referentes a la existencia y al número de las casas religiosas en relación con los preceptos canónicos y a las especiales normas concordadas entre ambas Potestades. = A pesar de que la Santa Sede creyera haber convenientemente satisfecho, de esta manera, los deseos del Gobierno español y echado una base sólida y oportuna para llegar a una rápida solución de la cuestión, dispuesta a evidenciar aún más su espíritu conciliador y de equitativa condescendencia, a tenor de las demandas del mismo Gobierno, reiteradas en la segunda Nota del 26 de Mayo, había ya, como es sabido, redactado una Nota de contestación que debía mayormente manifestar sus benévolas disposiciones. = No puede culparse ciertamente a la Santa Sede, de conformidad con la verdad y la justicia, de haber ido buscando siempre nuevos pretextos para sustraerse a las conclusiones de un acuerdo, si la entrega de esa respuesta debía sufrir sucesivas dilaciones. = El Gobierno español —huelga repetirlo otra vez—, a pesar de las reiteradas manifestaciones de la Santa Sede, creyó deber tomar unilateralmente, mientras

los tratos estaban pendientes, disposiciones que eran todas no conformes con los pactos concordados y que más de una de ellas respectaba precisamente a la materia que era objeto de discusión. = En verdad, los motivos aducidos por el Gobierno para justificar las precitadas medidas, tienen su valor. = En cuanto a la Real Orden de 10 de Junio, relativa a las manifestaciones públicas de los cultos heterodoxos, el infrascrito Cardenal, por sus Notas de 20 de Junio y 21 de Julio, ha puesto ya en plena luz la naturaleza esencialmente anti-concordataria de aquel Decreto, demostrando cómo éste se relacionaba, no ya con la sencilla interpretación de leyes puramente internas de la Nación española, sino que tocaba a las propias normas fundamentales del Concordato, y cómo el Gobierno no podía de por sí sólo apreciar la conveniencia mayor o menor del mantenimiento de la unidad religiosa del país, desde el momento en que ésta constituye la base necesaria del mismo Concordato. = La actual conducta de la Santa Sede sobre este punto, es, por supuesto, del todo idéntica a la invariablemente observada por los Romanos Pontífices, para con los diversos Gobiernos que se han sucedido en España. = No menor razón tenía la Santa Sede de preocuparse de las intenciones expresadas en el Mensaje de la Corona. Si bien ella conociese o no conozca el anunciado proyecto de reforma general de la Ley de 30 de Junio de 1887, aun así no podía abstenerse de formular sus reservas, para el caso en que el proyecto entrañase disposiciones contrarias a las normas del derecho canónico y a los pactos ajustados entre la Santa Sede y España. Hacía notar, al propio tiempo, cómo las prerrogativas del Estado, que la Iglesia ha reconocido y respetado siempre, no podrían, sin embargo, sin perturbar los principios que determinan la naturaleza y la esfera de acción de ambas Potestades, y sin evidente injusticia, extenderse a legislar unilateralmente sobre materias que, por su naturaleza, son eclesiásticas; que han constituido el objeto de solemnes pactos entre las dos Potestades, y que deben, a tenor de esos mismos convenios, en casos de discusión, ser regulados de común acuerdo por las altas Partes Contratantes. = Y que tal fuese en realidad el carácter de la actual cuestión pendiente sobre las Ordenes y las Congregaciones religiosas, ha quedado admitido del mismo modo por el hecho de que los diferentes Gabinetes que se han sucedido en España, en el gobierno de la cosa pública sin distinción de partidos políticos, han creído necesario tratar tales asuntos de acuerdo con la S[an]ta Sede. = Por eso, aun después de que fue unilateralmente promulgado el bien conocido Real Decreto de 19 de Septiembre de 1901, el Gobierno español, en vista de las justas manifestaciones y de la actitud firme de la Santa Sede, comprendió la necesidad de negociar con Roma, y dejando sin efecto el referido Decreto, empezó regulares tratos para definir la situación jurídica de los Institutos religiosos en el Reino. = Pero aún más doloroso debía resultar en el ánimo del Santo Padre, el propósito abiertamente manifestado en el Mensaje ya citado, de excluir de las escuelas las doctrinas de la Fe: propósito éste igualmente, no tan sólo ofensivo en alto grado a las máximas de la Religión católica, que es la del Estado, sino también contrario al Concordato, en cuyo art. II se dispone que «la enseñanza de las Universidades, Colegios, Seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase, será en todo conforme a la doctrina de la Religión católica: y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los Obispos y demás Prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la Fe y de las costumbres y sobre la educación religiosa de la juventud no serán molestados bajo ningún pretexto en el ejercicio de sus funciones incluso en las escuelas públicas». = Por cuanto se relaciona después con la Circular del 30 de Mayo, el infrascrito ha hecho ya notar repetidas veces que la Real Orden de 9 de Abril de 1902, cuya aplicación era exigida por aquella circular contiene disposiciones no incluidas en el llamado *modus vivendi* concordado en aquel mismo año de 1902, entre la Santa Sede y el Gobierno español. Esto resulta con toda evidencia, a todo aquel que coteja aquello con las Notas cruzadas en los meses de Marzo y Abril, entre el Nuncio Apostólico Monseñor Rinaldini y el Ministro de Estado Señor Duque de Almodóvar del Río en las cuales el referido *modus vivendi* viene

consignado con toda claridad. = También debe recordarse que precisamente a causa de tal divergencia, la citada Real Orden del 9 de Abril de 1902 quedó sin ser aplicada y como letra muerta; de modo que la Santa Sede no se halló en la necesidad de emitir contra la misma, formales protestas; y pudo continuar los tratos iniciados. = Además el Nuncio Apostólico no dejó entonces de formular verbalmente las oportunas observaciones a las cuales correspondió explícitamente y satisfactoriamente el Sr. Moret, Ministro de la Gobernación, en lo tocante a la aplicación y a los efectos de aquella Real Orden. = El Gobierno español opone a esto que su propósito de dictar la precitada circular del 30 de mayo, había sido anteriormente manifestado a la Santa Sede y que ésta no se lamentó de ello. Pero el infrascrito Cardenal ha demostrado ya ampliamente en sus Notas del 24 y del 30 de Junio próximo pasado, cómo, cuando esa intención fue expresada, la Santa Sede tenía ya todas las razones para creer que se trataba de un sencillo proyecto del Gobierno, subordinado al éxito final de las negociaciones pendientes, de las cuales se entendía inseparable la publicación de la mencionada Circular. = No tiene mayor consistencia el otro argumento aducido en la Nota del Sr. Embajador, en el que se afirma que el Gobierno hubiera tenido igual derecho de pedir, durante los tratos, la suspensión de varios preceptos canónicos en eventual conflicto con las Leyes Civiles. La invocada paridad no existe. En efecto, aun mismo omitiendo el examen del valor de las disposiciones dictadas unilateralmente por el Estado, por cuanto se refiere al funcionamiento de los Institutos religiosos tales como los ejemplos de la edad para hacer los votos y de la violación de la clausura, es cierto que el supuesto conflicto hubiera subsistido entre el derecho canónico y las leyes exclusivamente civiles; mientras que el litigio, del que se lamenta la Santa Sede, existe entre los Decretos del Gobierno y las solemnes normas concordadas entre ambas Potestades. = En cuanto a los nuevos conventos o monasterios abiertos posteriormente al año 1902, ocurre en primer término, recordar cómo teniendo todas las Congregaciones modernas votos sencillos, la Santa Sede no entra, por derecho común, en la fundación de sus casas y sólo se requiere la licencia del Ordinario. = Que si la Santa Sede ha concedido su consentimiento que es necesario a las casas regulares pertenecientes, esto es, a las antiguas Ordenes de votos solemnes, es claro que aquella, siempre que fuesen observadas las normas de la ley canónica, no tendrá, por su parte, motivo alguno para denegar tal autorización, ni hubiera podido razonablemente negarla siempre que el Gobierno, por su parte, no hubiera formulado ninguna oposición. = En vista de estas disposiciones del Gobierno de S. M. C. y de la persistencia con que este declaraba mantener integralmente sus propósitos contra los que el Santo Padre había formulado repetidamente sus manifestaciones, el Cardenal que suscribe, en su Nota del 9 de Julio último, después de haber discutido los diferentes puntos de vista del mismo Gobierno, con argumentos que éste pretende inadmisibles, pero que, sin embargo, están en realidad fundados sobre principios más verdaderos del derecho público, hallóse en la necesidad de apercibirle de que la Santa Sede, a pesar del deseo que tenía de llegar a un acuerdo en la cuestión de las Ordenes religiosas y lo dispuesta que, por consiguiente, estaba a continuar los tratos, se vería obligada, muy a pesar suyo a suspender inmediatamente las negociaciones, si el Gobierno llegaba a realizar cualquier acto unilateral, no mencionado en los Convenios ya ajustados, relacionado con la materia que constituye el objeto de los tratos. = Acababa el infrascrito de transmitir al Señor Embajador la Nota más arriba citada, cuando la Santa Sede tuvo conocimiento del nuevo proyecto de la Ley llamada del «Candado». ~ Penosísima impresión fue la que este (proyecto) [sic] produjo en el ánimo de Su Santidad, no menos a causa de su contenido, que por la forma unilateral en que fue presentado. = El Gobierno de S. M. C. pretende que el proyecto es perfectamente conforme con las concesiones que el Santo Padre, desde el principio de los tratos, había mostrado dispuesto a otorgar; esto es que para abrir nuevas casas con vida común de Congregaciones ya existentes en España, fuese necesaria, además del consentimiento de la Autoridad eclesiástica competente, la autoriza-

ción gubernativa y que los extranjeros que [= no] pudieran fundar órdenes y congregaciones religiosas, con personalidad jurídica reconocida por el Estado, sin haberse previamente naturalizado en el Reino, a tenor del derecho común. = Lo que es fácil de probar, es cómo el proyecto de referencia tiene un carácter muy diverso de las mencionadas concesiones propuestas. = En primer término, por cuanto efectivamente se relaciona con la autorización gubernativa, es cierto que la Santa Sede en su Nota del 9 de Mayo, habíase declarado dispuesta a admitirla, añadiendo, sin embargo, que las Congregaciones que la hubieran ya obtenido, deberían gozar de la plenitud de su personalidad jurídica y considerarse como comprendidas en la excepción establecida en el párrafo primero del art. II de la Ley de 30 de junio de 1887 y podrían libremente regirse, según las disposiciones del derecho canónico y sus propias Constituciones, salvo la observancia de las Leyes generales del Reino en lo que se refiere a sus relaciones con la Potestad civil. Esta segunda parte de la proposición de la Santa Sede formaba evidentemente un conjunto orgánico con la primera (parte) [sic] de la cual era *necesario complemento*, siendo exigido por las normas más elementales de la justicia que, si algunas Asociaciones dudosamente lícitas se sometían a especiales reglas para su fundación, debían, por otra parte, en compensación, disfrutar del mismo modo de una especial posición jurídica. - El Gobierno, por el contrario, en su nuevo proyecto de Ley para las Congregaciones religiosas, prescribe la primera parte, o sea la necesidad de una autorización particular gubernativa, no reconocida de la Ley común, sobre las Asociaciones; y omite la segunda parte. = De ello se desprende, como necesaria consecuencia, que el proyecto tiende a establecer para las susodichas Congregaciones, un verdadero y propio régimen de excepción, ya que mientras por un lado no se reconoce a esas ninguna situación privilegiada, pues incluso se consideran como implícitamente sujetas a la Ley común de 30 de Junio de 1887, por el otro se las impone para abrir sus casas, condiciones que no se exigen a las demás Asociaciones. = Ahora bien, ¿qué cosa se diría si mientras que dos Potencias negocian acerca de un determinado asunto, proponiendo para la conclusión de un equitativo acuerdo mutuas concesiones y respectivamente recíprocas obligaciones, una de las dos Partes hallándose aún pendientes los tratos, pretendiera aplicar inmediatamente, por su propia cuenta, las cláusulas que le fueren favorables, sin tener en cuenta sus correlativas obligaciones? - Idéntico razonamiento vale, del mismo modo, para las disposiciones referentes a los extranjeros. La proposición de la Santa Sede acerca de la fundación de nuevas Órdenes y Congregaciones religiosas, relativa a los extranjeros, suponía esa también el reconocimiento, para las mismas órdenes, de una especial posición legal. Segregada de las demás cláusulas del proyectado Convenio, aquella constituiría ya de por sí sola, una medida de excepción. Pero además, la indicada proposición de la Santa Sede sobre este punto, difiere completamente de la disposición del proyecto de Ley del «Candidato». La Santa Sede, como ya se ha recordado, declaraba que no tenía dificultad en admitir que los extranjeros no pudieran fundar órdenes y congregaciones religiosas con personalidad jurídica reconocida por el Estado, sin haberse precisamente naturalizado en el Reino, a tenor de la Ley Común y que aquellos que conservando su condición legal de extranjeros, entrasen o residiesen en cualquier convento o casa religiosa en España, quedarían sujetos a todas las disposiciones del derecho común vigente para los extranjeros = Por consiguiente, la previa naturalización estaba indicada como necesaria, tan solo para el fundador de una nueva Congregación religiosa; en cuanto a los individuos de la misma, admitíase explícitamente que pudieran serlo, mismo los extranjeros, incluso conservando también sus condiciones legales. Por el contrario el nuevo proyecto, con disposición tan nueva como excepcional y odiosa niega a las Comunidades religiosas la autorización gubernativa, cuando más de una tercera parte de los que las componen, son extranjeros. Objeta además el Gobierno de Su Majestad Católica que la Santa Sede no hiciera oposición a la Real Orden de 1880. Este precedente fue ya invocado por el Gobierno español durante los tratos iniciados en

1902, pero ya entonces, el Emo. Señor Cardenal Rampolla, Secretario de Estado, en Nota dirigida en 27 de noviembre de aquel mismo año al Excmo. Señor Embajador de España, hacia notar que: = «si la Santa Sede, en 1880, no hizo observaciones contra la circular comunicada por el Ministro de Gracia y Justicia, para impedir que se estableciesen en territorio español, religiosos expulsados de Francia, los motivos de tal silencio deben únicamente relacionarse con el hecho de que, en realidad, no obstante la referida circular, varias Ordenes y Congregaciones religiosas fueron libremente acogidas en España. Por consiguiente, la indicada actitud de la Santa Sede no prueba, de manera alguna verdadera, que ella aprobase las disposiciones contenidas, en dicha Circular, ya privada de valor, por los hechos contrarios que venían realizándose.» = Todo esto ha debido recordarlo y exponerlo, de orden de Su Santidad, el infrascrito Cardenal; a fin de que se ponga claramente de manifiesto, que la actitud asumida por la Santa Sede, con su Nota de 22 de Julio, no es injustificada, como así quisiera calificarla el Gobierno español, sino completamente legítima y razonable. = Tal actitud no le ha sido inspirada, como ya se declaraba en la citada Nota, más que por el indeclinable deber de tutelar su decoro y dignidad, y, sobre todo, de defender los intereses de la Religión en España. = Por esto, el Cardenal que suscribe rechaza la acusación de haber querido, contrariamente a toda equidad, romper las negociaciones, cuando la Santa Sede no tenía mayor empeño que el de llegar a un pronto y conveniente acuerdo. = El Infrascrito aprovecha en fin esta ocasión, para reiterar al Señor Encargado de Negocios de España cerca de la Santa Sede, las seguridades de su más distinguida consideración. = (Firmado:) R. Card. Merry del Val. = Está conforme» (apud despacho núm. 106, 23-VIII-1910, del encargado de negocios al ministro de Estado, AMAE/SPS, leg. 2.679, exp. «1910-11. Cuestión...»).

²⁰⁶ Real orden de 5-IX-1910, *ibidem*, del ministro de Estado al encargado de negocios: «Recibido oportunamente el despacho de esa Embajada, n.º 106 al que acompañan copia y traducción de una Nota dirigida a V. S. por el Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad, le encargo de R. O. que, sin pérdida de momento, se sirva dar a dicha comunicación una respuesta ajustada a los términos del documento adjunto.» Dice así: «El Encargado de Negocios de España, al acusar recibo al Señor Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad de su Nota, recibida el 22 de agosto, desvanecerá ante todo la confusión que se ha producido en el ánimo de Su Eminencia al suponer éste que el Gobierno de S. M. hizo público por la prensa el contenido de su Nota de 31 de Julio antes de que hubiera sido entregada a la Santa Sede. Esa hipótesis tiene sin duda origen en haberse facilitado a los periódicos, al terminar el Consejo de Ministros en Madrid el sábado 30, una «nota oficiosa» sobre las determinaciones del Gabinete en vista de la actitud de la Curia romana; nota oficiosa conforme naturalmente en el fondo con el documento antes citado pero no constitutiva, como parece suponerse de un extracto de aquél y publicada en la inteligencia de que las instrucciones dadas al Señor Ojeda se habrían cumplido, lo que no sucedió por errores en la transmisión telegráfica cifrada que fue preciso rectificar y de los cuales el Consejo de Ministros en Madrid no tuvo inmediata noticia por hallarse en San Sebastián el Ministro de Estado. El Encargado de Negocios de España citaría precedentes de publicaciones análogas en negociaciones diplomáticas pero estima superfluo y seguramente contrario al deseo mismo de Su Eminencia entrar en un debate de ese orden ya que es evidente que el Gobierno, tan deferente con la Silla apostólica en cuestiones de fondo y en particulares más importantes, no prescindiría voluntariamente de guardarle las consideraciones debidas en materia secundaria y de pura forma. = Innecesario juzga asimismo el Encargado de Negocios analizar el alcance de las disposiciones canónicas que se citan por Su Eminencia para demostrar que, al prestarse la Santa Sede en los comienzos de la negociación a suprimir, salvo ciertas excepciones, las comunidades religiosas de menos de doce individuos hacía una verdadera concesión respecto del derecho vigente. Para interpretar este último, el Gobierno se

atiene a las declaraciones de la Secretaría de Estado de Su Santidad en 24 de agosto y 27 de noviembre de 1902 en el sentido de que las leyes canónicas exigen el número de doce religiosos profesos para el regular funcionamiento de las comunidades de uno y otro sexo. Los preceptos pontificios que Su Eminencia menciona en la Nota, a que ahora se contesta, no contienen excepción especial en favor de los institutos o de las casas que se dedican a determinados fines; esas excepciones tenían, pues, desde que se propusieron un carácter contractual y nuevo; pero, sea de ello lo que quiera, salta a la vista que el sugerir la Santa Sede que los Obispos pudieran, además, excluir de la supresión a las casas que reputasen convenientes sustituía a la generalidad de la norma vigente la personal apreciación de cada Ordinario, lo que equivalía a derogar aquélla cuando lo pedido por el Gobierno era que puntualmente se cumpliera. Y no se diga que los términos de la demanda del Gobierno indujeran a ello pues la Nota del Señor Ojeda de 15 de abril de 1910 exponía claramente que, en primer término, habría de observarse y aplicarse el derecho canónico vigente (aludiendo expresamente, al hablar de él a las normas que requieren el número de doce individuos para el regular funcionamiento de las comunidades religiosas) y que el arbitrio de los Obispos para conservar o suprimir casas o comunidades no recaería sino sobre las demás, establecidas con arreglo a la disciplina eclesiástica. = Si el Gobierno de S. M. no podía, pues, ver en lo ofrecido por la Santa Sede, una concesión, tampoco por otra parte le era posible calificar de tales las que el Cardenal Secretario de Estado enumera porque *verbigratia* (y esto también se aplica a la cláusula según la cual los religiosos súbditos de otras naciones quedarían sujetos a las reglas de derecho común para los extranjeros), el principio de igualdad contributiva entre las órdenes y congregaciones religiosas y las demás personas jurídicas fue siempre profesado por la Potestad civil y sus excepciones prácticas no dependieron nunca más que de la voluntad de ésta. Por conceptuar insuficientes esas llamadas concesiones, gran parte de la opinión pública española, a la que pertenece el actual Gabinete negó su aprobación al Convenio de 19 de junio de 1904; y de hecho el Poder ejecutivo no fue autorizado por el legislativo para ratificarlo. Mediando estos antecedentes perfectamente conocidos de la Santa Sede, el Gobierno tenía que deplorar que ese fuera el límite puesto por Su Eminencia en la Nota del 9 de mayo a sus conciliadoras disposiciones. = Asegura el Señor Cardenal Secretario de Estado que, en vista de la insistencia del Gabinete de Madrid, estaba redactada una Nota llevando más lejos la benevolencia del Sumo Pontífice. La esperanza de que así sucedería animó al Ministro de Estado a proseguir las negociaciones. = Que el Gobierno de S. M. no ha justificado con sus actos la interrupción de aquéllas, está demostrado en la Nota del Señor Ojeda de 31 de julio. Continúa, sin embargo, Su Eminencia sosteniendo que «a pesar de las renovadas observaciones de la Santa Sede, el Gobierno creyó deber tomar unilateralmente, estando pendientes los tratos, disposiciones que no todas eran conformes con los pactos concordatarios y que, además más de una se refería precisamente a la materia objeto de discusión. Esto evidentemente hacía imposible el curso regular de las negociaciones». Pero después de la Real orden interpretativa del artículo once de la Constitución y después del discurso leído por S. M. en las Cortes enunciando los propósitos del Gobierno, la actitud de la Santa Sede quedó fijada por la Nota del Señor Cardenal Secretario de Estado de 24 de junio en que la «Santa Sede pedía solamente al Gobierno español la seguridad de que durante el curso de los tratos se abstuviese de tomar medidas unilaterales relativas a la materia misma que está pendiente de discusión entre ambos poderes». Y en 30 del mismo mes precisó todavía más que su deseo era obtener una plena seguridad de que el Gobierno español se abstenía de «tomar sin previo acuerdo cualquiera medida relativa a la cuestión de las congregaciones religiosas que precisamente es objeto de discusión». El Señor Ojeda, conforme a instrucciones del Gobierno reiteró el 3 de julio que los propósitos del Gabinete eran: «Primero; presentación inmediata a las Cortes de un proyecto de ley restableciendo la necesidad de una autorización

gubernativa para la apertura legal en lo sucesivo de casas religiosas. Segundo; aplazamiento de la presentación del proyecto de ley de reforma general de la ley de 30 de junio de 1887 de modo que las negociaciones sobre órdenes y congregaciones religiosas entre España y la Santa Sede puedan desenvolverse normalmente. Tercero; cumplimiento de las circulares de 30 de mayo último y 9 de abril de 1902». Y añadía que «en su desecho de llevar tan lejos como sus propios dignidad y decoro lo permitan su deferencia hacia los escrúpulos del Santo Padre, el Gobierno de S. M. no tiene inconveniente en manifestar de una manera expresa lo que ya implícitamente contienen las dos últimas Notas citadas, a saber: que mientras las negociaciones duren, no es su ánimo tomar, en materia de órdenes y congregaciones religiosas, ninguna disposición nueva y distinta de las arriba comprendidas en los párrafos marcados con los números uno y tres». = A esas declaraciones el Gobierno ha sido fiel. No es del caso recoger las reservas que el Señor Cardenal Secretario de Estado formula acerca del punto número dos o sea el futuro proyecto de reforma general de la ley de 30 de junio de 1887. Concretándose el Encargado de Negocios a los otros dos extremos, no quiere molestar la atención de Su Eminencia con la renovación de los argumentos anteriormente hechos para acreditar la perfecta legitimidad de la conducta del Gobierno español. = Necesita decir, sin embargo, en lo que toca a la circular de 30 de mayo que ninguna contradicción existe entre la R. O. de 9 de abril de 1902 y las bases acordadas por el Ministro de Estado y el Nuncio apostólico pocos días antes; que ningún rastro existe en los archivos oficiales españoles de las observaciones verbales de Monseñor Rinaldini; que la respuesta a esas observaciones no pudo, en todo caso, ser en el sentido de que la R. O. dejaría de aplicarse puesto que de hecho no se derogó; y, en fin, que si dicha disposición quedó como «letra muerta» porque las órdenes y congregaciones religiosas la infringieron se era precisamente el motivo y la justificación de que el Gabinete actual dictase la nueva circular recordando la antigua. = Un argumento análogo al que queda contestado formuló Su Eminencia por lo que atañe al llamado proyecto de ley del «candado» al decir que, si la Santa Sede en 1880 no hizo observaciones contra la R. O. que impedía que se estableciesen en el suelo español los religiosos expulsados de Francia, fue porque en realidad, no obstante dicha circular, varias órdenes y congregaciones religiosas tuvieron libre acogida en España. El razonamiento carece de fuerza, primero, por las consideraciones apuntadas; segundo, porque la R. O. de 1880 no prohibía el establecimiento de las órdenes religiosas procedentes de Francia, más que en ciertas provincias, y tercero, porque así en el preámbulo como en el texto de la disposición se recordaba que la autorización gubernativa se venía *exigiendo anteriormente* a las asociaciones de esa índole en el reino. Semejante régimen tradicional e independiente de todo concordato v la R. O. de 1880 dejaron de estar en vigor porque la ley de 30 de junio de 1887 colocó a las órdenes y congregaciones religiosas en un pie de igualdad con las demás asociaciones y es claro que un precepto legal independientemente dictado por el Poder público español, independientemente también puede ser modificado por él. Y como en la práctica a pesar de haber declarado repetidamente el Gabinete de Madrid que el número de institutos de aquella clase, ya existentes en el reino era a sus ojos excesivo y de haber indicado la necesidad de su reducción los Ordinarios seguían aumentándolo y la propia Santa Sede no creía tampoco, según el Señor Cardenal Secretario de Estado confirma ahora, que hubiese motivo racional de negar la licencia para nuevas erecciones de casas, el Gobierno en beneficio mismo de los fines que con la negociación se perseguían, juzgó deber y poder solucionar ese aspecto, del problema aisladamente de los demás. Lo hizo saber así a la Silla apostólica y no se apartó, aunque otra cosa se persista en asegurar de los principios a que el Señor Cardenal Secretario de Estado manifestó que no se suscitara dificultad. En efecto, siempre se habló de un proyecto de ley, acto que por su naturaleza es unilateral de la Potestad civil. Y si en ese proyecto de ley se contiene una alusión a la ley de 30 de junio de 1887 es porque dicha ley, según la Santa Sede no ignora, es la que el Gobierno

reputa de plano aplicable a todas las asociaciones fundadas después de 9 de abril de 1902, pero sin que fuese el propósito prejuzgar la cuestión de las normas a que haora de sujetarse el funcionamiento de las demás ordenes ni congregaciones religiosas ni por consiguiente el resultado del examen de la discrepancia que a ese respecto existe entre España y la Sede romana. En cuanto a la manera como el Señor Cardenal Secretario de Estado interpreta el punto concerniente a los extranjeros, no cabe duda de que si la incapacidad de estos para constituir asociaciones religiosas del género de las que nos vienen ocupando recayese únicamente sobre la persona del fundador, sería bien fácil eludir la prohibición. Y como ese no pudo ser el ánimo de las partes contratantes, de ahí que el Gabinete entendiéndose de otro modo lo concerniente al particular. Por lo demás al Señor Cardenal Secretario de Estado no se le ocultara que la divergencia ofrece escaso alcance porque, habiendo de quedar el establecimiento de las órdenes y congregaciones religiosas sujeto a la autorización gubernativa, dicho se está [sic] que la autorización no se concedería si al Gobierno en cada caso, no le pareciese adecuada la proporción de extranjeros. Y en esas condiciones era más franco incluir el precepto en el texto de la ley y fijar desde el principio una norma general a la que el Estado, la Iglesia y los interesados, se atenderían. Importa, en fin, no olvidar que la Constitución de 1876 no reconoce el derecho de asociación a los extranjeros en España y que, según fue aclarado en discusiones importantes de las Cortes, no podrían gozar éstos de aquel beneficio sino por extensión voluntaria y expresamente otorgada por el Poder público. = De cuanto queda dicho se desprende la conclusión de que, mientras la Santa Sede entiende que después del llamado *modus vivendi* de 1902, la facultad del Estado para tomar disposiciones respecto a las ordenes y congregaciones religiosas quedó supeditada al previo acuerdo con la silla apostólica, ésta y los Obispos conservaron plena libertad para seguir estableciendo asociaciones de dicha especie sin sujeción a otro requisito civil que la inscripción. Entre tanto que el tema de la situación jurídica de las órdenes y congregaciones religiosas y la reducción de estas se discute, la Silla apostólica juzga de su derecho aumentar el número de las mismas y niega al Estado la facultad de oponerse a semejante aumento exigiendo que tal interpretación se acepte por el Gabinete como requisito previo para continuar los tratos. = El infrascrito Encargado de Negocios renueva la expresión del sentimiento que produce al Gabinete de Madrid tal actitud de la Silla apostólica y reitera que sin pretender, naturalmente, recompensar con su propio criterio la apreciación del Sumo Pontífice tocante a la tutela de la dignidad y decoro de la Iglesia y a la defensa de los intereses religiosos, abraza la firme convicción de no haber lesionado tales dignidad y decoro ni justificado desconfianza alguna del sincero propósito de concordia que ha presidido sus actos.» Na nota oficiosa a que alude el primer párrafo ya publicada ya en *El Imparcial*, 30-VII-1910, entre otros. En cuanto a la nota ordenada en el texto transcrito, fue remitida a Merry por González el 8-IX-1910 (cfr. telegrama al ministro de Estado, *loc. cit.* AMAE). Anterior a estos documentos es el despacho núm. 108, del encargado al ministro, 29-VIII-1910, que remite una nota oficiosa del Vaticano aparecida en *L'Osservatore Romano* del 28, para rectificar unas declaraciones de Canalejas acerca de la imposibilidad de retirar el proyecto de ley del candidato por haber sido ya aprobado por el Senado español. Insiste en que esto no es cierto.

²⁰⁷ En 1-IX-1910, insistía en sus quejas el ministro de Estado, en telegrama a González, *ibidem*: «Si mañana hubiera recepción diplomática V. S. manifestará Cardenal que respuesta a indicaciones sobre violencia campaña católicos y sobre excitaciones desde púlpito a rebeldía nos produce vivo sentimiento aunque no podemos dejar seguir operando que Santa Sede acabará por reconocer necesidad y posibilidad interponer su acción para que no se perseverare en procedimientos reprobables y totalmente desproporcionados a las circunstancias. La oferta de examinar casos concretos que se presenten significa bien poco pues para esos casos tiene el Estado sus leyes y tribunales y de lo que se trata es precisamente de evitar que estos tengan que ponerse

en ejercicio gracias a una intervención previa de Santa Sede en sentido moderación y respeto a autoridad y derecho; intervención cuya oportunidad se muestra más de relieve considerando pasividad de Prelados ante desmanes de parte clero. Añadirá V. S. que ataques prensa radical a Curia Romana no pueden compararse en importancia a los de órganos oficiosos contra Gobierno, dada independencia con que la primera obra. En cuanto reciente Nota cardenal [apud nota 205 supra], V. S. dirá sabe la tenemos en estudio. Garpiprieto.» La entrevista no se realiza hasta el 9, según telegrama de esta fecha de González al ministro (que alude a otro de García Prieto del 8 en que éste insiste en que comunique sus instrucciones a Merry): «Recibido telegrama de V. E. de anoche y no habiendo tenido recepción Cardenal, he ido al Vaticano a cumplimentar instrucciones de V. E. de 1.º de septiembre. He hallado Secretario de Estado amable, conmigo más reservado que en última entrevista. A manifestaciones que le hice ciñéndome a órdenes de V. E., me contestó que siempre tenía que decirme lo mismo, que no veía cómo S. S. podía ahora dirigirse a Obispos para generalidades, cuando hechos concretos son poco numerosos y obispos saben su deber; como lo prueba la Pastoral del Arzobispo de Valencia, en cuya diócesis no se ha propasado ningún sacerdote y sin hacer alusión a comedimiento en sermones y a concordia en general. Insistió también el Cardenal en que S. S. está dispuesto a castigar casos concretos; y me manifestó tratarse a menudo de exageraciones como aquella de *El Predicador de la Corte*, que parecía se trataba del capellán particular de S. M. y resulta que era un fraile de los mil que ostentan ese título. En fin Su Eminencia se extrañaba de que no haya más casos de esta índole, cuando la efervescencia es grande y no hay freno en muchos que carecen de buen sentido y mesura. Yo terminé haciéndole resaltar que Gobierno S. M. tiene medios sobrados coercitivos pero que por deferencia a S. S. no ha querido aplicarlos por ahora y por esto insiste nuevamente. Cardenal cortó conversación pues regresaba a Monte Mario; yo le hablé entonces de la cuestión de prensa. Me manifestó que vaticano no tiene órgano oficioso; que el *Osservatore* publica ciertos artículos oficiales; pero que para lo demás deja plena libertad a sus redactores de publicar bajo su responsabilidad lo que les plazca. En fin al despedirnos y sin comentario alguno me dijo que todavía no había podido leer la Nota que le mandé ayer tarde. González.» Arriba se refiere a una pastoral del arzobispo Guisasola que difundió la prensa confesional (la hallamos al menos en *El Pensamiento Navarro*) de fechas anteriores. La comenta la *Revista Popular*, 7-IX-1910.

^{207 b} Hontoria, según la nota 211 infra.

²⁰⁸ Telegrama del encargado de negocios al ministro de Estado, 13-IX-1910, AMAE/SPS, leg. 2.678, expediente «1910. Ley del candado (Gestión confidencial)»: «Estrictamente reservado. Visto Cardenal durante tres horas dedicadas a explicaciones sobre el pasado y propósitos para el porvenir que fijé así: 1.º Acuerdo para reducir órdenes...» (sigue lo transcrito en el texto) «... y beneficencias. Contestó cree posible entenderse ...» (sigue el segundo párrafo transcrito) «... 4.º y 5.º. Especificado último dio lugar a discusión sobre art. II Concordato que él pretende que debe ponerse íntegro en vigor. Dije que si en lo demás se llega a acuerdo cabría alguna fórmula reglamentaria para garantizar que primera enseñanza no tenga carácter anticristiana, por ejemplo el examen de los alumnos por el párroco en materia de doctrina. Me dijo que en todo caso no puede emitir parecer sin Consultar S. Santidad y congregación y para esto último sería preciso condensar ideas por escrito. Añadía que Su Santidad y Congregación (para reunir la cual sería menester cierto tiempo por ausencia varios Cardenales) han resuelto que negociaciones no continúen si se mantiene proyecto Candado; le repuse ya sabía no es posible desistir de él ni prestarse siquiera a aplazamiento discusión parlamentaria; habló amigo entonces de posible modificación [sic] y él aludió a una análoga a la que presentó a V. E. un amigo. Iba a terminar conversación sin más resultado ni compromisos de volver a vernos cuando le propuse fijar ideas en un breve apunte que discutiríamos él y yo antes de sometérsela yo telegráficamente

a V. E. y pedirle autorización para entregársela con objeto de que *continuen* [sic] él a Su Santidad. Ha aceptado y nos veremos mañana. Impresión general más bien desfavorable.»

²⁰⁹ Telegrama del mismo al mismo, 14-IX-1910, *ibidem*: «Estrictamente reservado. Cardenal expresó ante todo esta mañana, que después de reflexiones no podía entrar conmigo en discusión, porque siendo inseparable su persona del carácter de Secretario de Estado, cuanto me dijese comprometería a él más o menos, mientras yo seguiría hablando en nombre propio, o nombre personal de V. E. y no en nombre del Gobierno. El estaba dispuesto a oírme nuevamente y tomar mis manifestaciones, como elementos útiles de información pero sin expresar concepto y estimaba que camino recto es hacer margen propuesto en un *Memorandum* que se le entregue confidencialmente en nombre del Gobierno y que él sometería con ese carácter a Su Santidad. Curso larga entrevista hallé modo de precisar y aclarar de punto tratado ayer pero sin lograr sacarle de su reserva más que para declarar unas cosas contrarias al catolicismo y repetir que otras las examinaría Su Santidad si se incluyen en *Memorandum*. Hablando proyecto candado dije, siempre por cuenta propia, cabría que, manteniendo texto íntegro, Su Santidad lo acepte en vista explicaciones y seguridades en sentido: 1.º Autorizar ...» (sigue en el texto) «... congregaciones. (Continúa) González.»

²¹⁰ Vid. la nota anterior y este telegrama del mismo al mismo, también del 14-XI-1910, *ibidem*, que se dice continuación del transcrito en la propia nota 209 supra: «Continuación. Si esa explicación constase en Nota del Encargado de Negocios ésta agregaría un párrafo expresando que en esa condición Gobierno esperaba Santa Sede retiraría objeción proyectada y facilitaría mediante adecuada negociación dicha regularización. No pareció impresionarle mal y hasta pidió aclaración respecto diversos puntos y respecto a si se publicaría texto nota para que se supiera estábamos de acuerdo a lo cual contesté afirmativamente. Pero hasta cuando le pedí autorización para manifestar simplemente a V. E. que «él no cree imposible la aceptación» se negó alegando no debe anticipar juicio sobre asunto perteneciente a decisión Su Santidad y Congregación. Quedamos yo telegrafiaría a V. E. pidiendo autorización para entregar o hacer que Encargado de Negocios entregue confidencialmente fórmula en nombre Gobierno. Tiene entendido que Nota oficial no se dirigirá sino después de estar Su Santidad y Congregación conformes en contestarla favorablemente. A mi entender a menos V. E. desee sea yo quien entregue fórmula y guarde aquí resolución (sobre cuya utilidad no me atrevo formar concepto aunque me inclino pensar no la tendrá) o insista todavía en tocante plantear diciendo estoy autorizado en nombre Gobierno aunque confidencialmente lo mejor sería no resolver hasta que pueda informarle verbalmente y más ampliamente observando cuyo fin me despediría del Cardenal el viernes diciendo V. E. se ha limitado contestarme que como de todos modos asunto tardaría aquí en solucionarse y ya he cumplido mi principal cometido que era información leal a Su Eminencia, regrese desde luego. Aguardo sus órdenes; le saluda — González.» Tanto el texto de este telegrama como los de las dos notas anteriores firmados por González, parecen sin embargo ser de Hontoria: aluden al encargado de negocios en tercera persona y hablan de un regreso rápido a Madrid que, de lo contrario, hubiera dejado la embajada sin representante oficial. En todo caso, la gestión no parece haber sido hecha a espaldas del propio González, cuyos medios de comunicación con Madrid eran utilizados por Hontoria (vid nota 211 infra).

²¹¹ El resultado de las negociaciones narradas en las dos anteriores notas debió ser sintetizado en este apunte manuscrito sin firma ni fecha, *ibidem*: «Si el Gobierno, confidencialmente, y por el conducto que crea más oportuno, somete a la consideración de la Santa Sede un apunte consignando: = 1.º la fórmula que cree posible sobre la ley del candado para facilitar que se reanuden las negociaciones; = 2.º sus propósitos en materia de enseñanza; = 3.º lo mismo por lo que se refiere a la legislación del matrimonio; y = 4.º invitación a la Santa Sede para que exponga en líneas generales su pensamiento en mate-

ria de reducción de casas religiosas y los reparos que le merece el proyecto de ley de asociaciones de 1906 con objeto de que el Gobierno pueda tenerlo en cuenta al redactar un proyecto nuevo; Su Eminencia, en el mismo terreno confidencial y sin que ni la pregunta ni la respuesta causen estado ni ningún otro valor que el de un cambio preliminar de ideas, expone su parecer.» El ministro de Estado responde en telegrama dirigido al encargado de negocios el 19-XI-1910: «Respecto ley candado [el Gobierno] entiende que, ante adecuadas seguridades sobre su recto sentido y verdadero alcance, Santa Sede podría, sin inconveniente, para facilitar conciliación, no insistir en sus objeciones. De todas suertes sírvase V. S. visitar Cardenal y, después de manifestarle lo que procede, hágale entrega de un apunte confidencial y así concebido: = «La Santa Sede podrá, sin duda, no insistir en sus reparos al proyecto ley candado ante la seguridad de que: 1.º la autorización del Gobierno para el establecimiento legal de casas religiosas en lo sucesivo equivale al acuerdo entre ambas Potestades, ya que, necesitando aquellas, según la disciplina eclesiástica, licencia pontificia o diocesana para su regular funcionamiento, el Poder civil no habría de autorizarlas sin ese requisito; 2.º la ley cuyo voto pide el Gobierno a las Cortes tiene carácter provisional; y 3.º la aplicación de la ley de 30 de junio de 1887 a las casas religiosas que se establezcan conforme al proyecto de que se trata, no prejuzga el resultado de negociaciones para regular de una manera definitiva la condición jurídica de las Ordenes y Congregaciones. = Conforme a los principios constitucionales, el Estado, a título de católico, mantendrá en el programa de las escuelas ...» (sigue lo transcrito en el texto) «... casas religiosas.» = Al entregar el anterior apunte, V. S. indicará que contiene los puntos de vista y propósitos del Gobierno, el cual cuenta con que Su Eminencia expresará su parecer acerca de ellos en el mismo terreno confidencial. Rogará V. S. al Cardenal que, en consideración a la próxima apertura de las Cortes, lo haga cuanto antes. Puede ofrecer que, si las seguridades relativas a la ley del candado parecieran suficientes a la Santa Sede para retirar sus objeciones, se harían constar expresamente en una nota oficial, publicándose su texto y el de la respuesta que se concertaría de antemano. = Garcí-Prieto.» González se entrevistó con Merry el 21. Según carta de aquel al ministro de Estado del mismo día, el cardenal le dijo que lo que proponía García Prieto «lo hallaba conforme con lo que confidencial y privadamente había V. hecho llegar a su conocimiento por conducto de mi querido amigo y eminentemente compañero Hontoria. = Pero al llegar al párrafo en que se pide a la Santa Sede una exposición, en términos generales, de su criterio acerca de la reducción de Casas religiosas, en España, me añadí que esto último, lo subordinaría a la solución que se diera al asunto de la Ley del Candado». Lo demás sería contestado.

²¹² Telegrama del encargado de negocios al ministro de Estado, 28-IX-1910, *ibidem*: «MUY RESERVADO - DESCIFRE V. E. MISMO = Apunte Cardenal en lo relativo a Ley Candado dice a la letra lo siguiente: «En cuanto a la fórmula proyectada y confidencialmente comunicada por el mismo Gobierno de S. M. para reanudar los tratos, la Santa Sede ha tenido que reconocer que no podría adoptar tal fórmula por no corresponder esta práctica al objeto de poner a la Santa Sede en condiciones de poder lógica y decorosamente reanudar sus tratos. Además, también para demostrar toda su buena voluntad, la Santa Sede siempre del modo más estrictamente confidencial, como ha hecho con ella el Gobierno de S. M., le presenta el siguiente proyecto: Así como el Gobierno cede al Gobierno de S. M. le presenta el siguiente proyecto: Así como el Gobierno cede de ley, así también la Santa Sede se ve obligada a permanecer oficialmente en la posición precisada en sus dos notas del 22 de julio y 22 de agosto últimos permaneciendo de este modo interinmidos los tratos oficiales. Pero esto no impide que si el Gobierno de S. M. quisiese (cosa no difícil para un Gobierno) aplazar por el menor tiempo posible (y la Santa Sede se prestaría gustosa a facilitarlo) la discusión del referido proyecto de ley, podrían tener lugar durante ese tiempo tratos estrictamente reservados y confidenciales, como los presentes, entre las dos partes, a fin de buscar un acuerdo definitivo

sobre la cuestión de las congregaciones religiosas. Si se llegase a dicho acuerdo éste sería en seguida fijado oficialmente por ambas partes mediante dos notas «reversibles» que se publicarían y que servirían para el proyecto de ley definitivo acerca de las congregaciones religiosas. De esta manera caería por sí mismo el actual proyecto de ley provisional, y la cuestión quedaría radicalmente eliminada sin sacrificio de una u otra parte». Continúo. — González.»

²¹³ Telegrama del mismo al mismo, 28-IX-1910, continuación del transcrito en la nota anterior, *ibidem*: «Descifre V. E. mismo. = Ahora bien, cumpliendo órdenes de V. E. consignadas en su telegrama de anteayer le resumiré demás extremos apunte: Primero; .» (sigue en el texto) «... existentes. Tal es el texto resumido del apunte cuyo original sale hoy por correo. Acabo de recibir aviso que Cardenal no recibirá viernes próximo. = González».

²¹⁴ Telegrama del ministro de Estado al encargado de negocios, sin fecha, *ibidem*: Sirvase pedir urgentemente audiencia Secretario Estado y expresarle me ha teleografiado íntegra parte apunte relativa Ley Candado y en extracto el resto. Que Consejo Ministros reservándose examinar el documento cuando llegue desea, en vista del apremio circunstancias, presentar verbalmente y con el mismo carácter confidencial que esta negociación viene teniendo las siguientes observaciones: fórmula Gobierno respecto proyecto Candado tendía a colocar Santa Sede en situación no insistir en sus objeciones y parecía adecuada a ese objeto, ya que, mediante ella, la Santa Sede no resultaba cediendo sino tomando en justa consideración ciertas razones y aceptando en vista de determinadas explicaciones y seguridades lo que antes no había podido aceptar pura y simplemente. En cuanto a fórmula propuesta por Cardenal la hemos estudiado con el espíritu más conciliador y dejando aparte todo estímulo de amor propio. Pero nos vemos imposibilitados de darle nuestra adhesión por dificultades prácticas insuperables ...» (sigue lo transcrito en el texto) «... eficacia. Gobierno no ha hablado de modificar el proyecto porque entendía que los fines que pudieran perseguirse con un cambio de redacción quedaban alcanzados mediante las seguridades ofrecidas, toda vez que si modificaciones hubieran de tener otro alcance no se habrían conciliado con fundamentos proyecto. Deplorará por ello, especialmente, que sus indicaciones no puedan ser en definitiva acogidas por Santa Sede y espera que por lo menos habrá servido para demostrar sus buenos deseos. = García Prieto.» González le contesta el 7-X-1910: «Descifre V. E. mismo.—Cardenal me ha recibido al mediodía en Vaticano. Le dije cuán pesaroso está V. E. porque Santa Sede no ha aceptado nuestra fórmula, haciéndole todas las consideraciones que V. E. me detallaba en su programa del Martes. Su Eminencia hizo un ademán para indicar que lo lamentaba pero sin decir palabra. Al tocarle yo el punto referente a facilidades Santa Sede prohibió llegar a un acuerdo definitivo, Cardenal me añadió que esto es precisamente lo que se ha querido hacer y que por equivocación, al estudiarla prestándose la Santa Sede a facilitar sus gestiones para llegar al deseado acuerdo, no era necesario mantener R. O. ley candado; puesto que esta tenía carácter transitorio hasta llegar al referido acuerdo y que por consiguiente, conseguido el definitivo era inútil la otra ley provisional. Aseguróme que si los tratos se suspendieron, no fue porque se iban a cerrar las Cortes; sino porque después de varios meses durante los cuales se dictaron Decretos y R. O., la Santa Sede vio que se había llegado a formular un Proyecto de Ley de igual índole unilateral de la de aquél. Esta fue la única razón de la suspensión de las negociaciones sin tener en cuenta si las Cortes iban a cerrarse. Al referirme a que el proyecto de Ley del candado necesitaría ir incorporado al de Reformas generales de Asociaciones, S. E. insinuando en que se podía haber llegado a una fórmula en la que ambas potestades hubieran fijado de común acuerdo algunas reglas para impedir la multiplicación de Ordenes religiosas en España. Entonces cree el Cardenal que ya firmadas las notas reversibles sobre este particular, el Proyecto de candado estaba de más. Insistí discretamente como me lo mandaba V. E., en los puntos consignados en su telegrama del Viernes pero por toda respuesta S. E. me contestó que, en una palabra la Santa Sede y el mismo Papa habían hallado insuficientes los

tres puntos que proponía nuestro apunte y al aludir también hoy el Cardenal al primero de esos tres, le manifesté cuanto V. E. me había teleografiado el Martes. Mas el Señor Secretario no se dejó convencer, añadiéndome que era natural que al tratarse de Asociaciones católicas, no iba el Gobierno de S. M. a sancionar Asociaciones de religión que por no hallarse autorizadas por la Santa Sede serían cismáticas o protestantes, y que por consiguiente Asociaciones de tal índole indecisa podrían ir incluidas entre las positivas e inéditas en la Ley general de Asociaciones, pero jamás como católicas. Esto es todo lo que puedo decir telegráficamente a V. E. sobre mi entrevista con Cardenal. Este se halla muy preocupado sin noticias del Nuncio en Lisboa. Amplio este telegrama en carta particular.—González.» Alude a los sucesos de la revolución portuguesa, que acababa de estallar.

²¹⁵ Telegrama del encargado de negocios al ministro de Estado, 21-X-1910, AMAE/SPS, leg. 2.679, exp. «1910-11. Cuestión...»: Descifre V. E. mismo. Hoy al mediodía he ido a visitar al Cardenal con pretexto de informarme asuntos de Portugal y Su Emin^a me ha anunciado que después declaraciones hechas por el Presidente Braga, ha llamado al Nuncio en Lisboa, dejando al Auditor. Después cumpliendo instrucciones telegrama de V. E. de ayer, hice recaer conversaciones sobre últimas noticias de Portugal y en fin de España; manifestándole que lo único que había llegado a mi conocimiento, era que discusión proyecto «candado» empezaría próximo miércoles no comenzando antes por deber ausentarse P[residente]te Consejo M[inis]tros. Cardenal con cierta frialdad me dijo que esto lo esperaba; añadiéndome que los discursos del P[residente]te Con[se]jo M[inistros] habían producido penosísima impresión en el Vaticano y que a hora de reunirse un Consistorio, temía mucho que como están las cosas, Su Santidad no se acordase de España para dar capelo a los prelados españoles. En fin Su Emin^a me dijo que, como buen español, quiso días pasados recoger ligero rumor que hasta él había llegado sobre manejos realizados con dinero Francia, por agentes franceses en América del Sur contra España para aumentar nuestras dificultades interiores y agravar nuestra situación en Marruecos. El Cardenal espera poder precisar y completar sus vagos datos, pues cree que así podría prestar un servicio de importancia a España. Por correo amplió este telegrama = González». Es claro que con este telegrama se considera terminada y fallida la «gestión confidencial». El diplomático debe referirse en él a los discursos de Canalejas en el Senado a partir del 7-X-1910 (vid. *Diario de las Sesiones* correspondiente) y en el Congreso desde el 8 (vid. *ibidem*).

²¹⁶ *El Liberal*, 22-X-1910. Vid. *La Epoca*, 21-X-1910.

²¹⁷ *El Liberal*, 23-X-1910.

²¹⁸ Apud *Heraldo de Madrid*, 19-IX-1910, y *El Liberal*, 20-IX-1910.

²¹⁹ La seguimos a través de *El Correo Español* de estas semanas, aunque hay rastro de ella prácticamente en toda la prensa tradicionalista y eclesiástica (así, por ejemplo, *El Pensamiento Navarro*, septiembre-octubre 1910, y *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 1-XII-1910). Vid. también *El Universo*, 6-IX, 25-X y 13-XI-1910.

²²⁰ Cfr. Gómez Molleda: *op. cit.*, 479 s.

²²¹ Vid. *Heraldo de Madrid*, 5-X-1910 ss., insistente en el aspecto anticlerical del conflicto.

²²² Cfr. *Diario de las Sesiones... Senado*, 7-X-1910.

²²³ Vid. *ibidem*, *Congreso...*, 8-X-1910. *L'Osservatore Romano*, 9-X-1910, contestaba a las acusaciones de Canalejas en artículo que González remite al ministro de Estado en despacho núm. 123, 10-X-1910, AMAE/SCS, leg. 1.741.

²²⁴ Cfr. *El Liberal*, 9-X-1910.

²²⁵ *Diario de las Sesiones... Senado*, 14-X-1910. Cfr. *ibidem*, 10 a 29-X-1910.

²²⁶ Según Nogués: *Ibidem*, *Congreso...*, 14-X-1910.

²²⁷ Cfr. *ibidem*, 10-X a 4-XI-1910. Vid. despacho núm. 129, 24-X-1910, del encargado de negocios cerca del Santo Padre al ministro de Estado, AMAE/SCS, leg. 1.741, de nuevo para remitirle un artículo de *L'Osservatore Romano*,

23-X-1910, contra las afirmaciones de Canalejas en estos debates y en favor de las manifestaciones católicas antigubernamentales.

²²⁸ Cfr. *Diario de las Sesiones... Senado*, 26 a 28-X-1910. El 29-X-1910, el encargado de negocios remite al ministro de Estado un artículo de *L'Osservatore Romano* sobre el discurso del obispo de Guadix, Timoteo Hernández Mulas (que equivocadamente atribuye al de Cádiz, Rancés), del que transcribe un cable de la Agencia Stefani. «A continuación del texto de dicho telegrama procedente de Madrid, la Redacción del mencionado Diario publica una declaración en la que se atribuye a un error de transmisión, las palabras que se achacan al Señor Rancés; asegurando que dicho Prelado jamás ha podido pronunciar semejantes frases en la Alta Cámara española. = Tan categórica rectificación hecha por el órgano oficioso del Vaticano, concuerda, en un todo, con cuanto me manifestó ayer mismo el Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad» (despacho núm. 133, 29-X-1910, AMAE/SCS, leg. 1.741). En el número 134, 3-XI-1910, AMAE/SPS, leg. 2.679, exp. «1910-11 Cuestión...», González remite al ministro otro artículo del mismo *Osservatore*, 2-XI-1910, en que reproduce los discursos de los prelados de Jaca y Guadix, «afirmando que el Prelado de Guadix ha dicho textualmente que «desde el momento en que los religiosos pronuncian sus votos y desde que renuncian a sus bienes y a los derechos de que gozan los demás ciudadanos, para ser vasallos de la Iglesia, ésta es la única que tiene el derecho de legislar sobre aquéllos», mientras que los diarios españoles de diferentes matices que hoy se han recibido en Roma, concuerdan en que el Obispo Hernández Mulas sostuvo que "los religiosos no son ciudadanos españoles sino súbditos de la autoridad de la Iglesia".»

²²⁹ *Diario de las Sesiones... Senado*, 28-X a 3-XI-1910.

²³⁰ Cfr. *El Liberal*, 17-XI-1910.

²³¹ Las afirma *El Pensamiento Navarro*, 3-XI-1910.

²³² Apud *Diario de las Sesiones... Senado*, apéndice 5 al núm. 55.

²³³ Cfr. *ibidem*, 4-XI-1910.

²³⁴ Cfr. Angel Salcedo Ruiz: *Historia de España (Resumen crítico)*, Madrid, Ed. Calleja, 1914, pág. 904.

²³⁵ No hay prueba de lo contrario en AMAE. En cambio, el mismo 4-XI-1910 el encargado de negocios telegrafaba al ministro de Estado: «Descifre V. E. mismo. Sin instrucciones especiales de V. E., acabo visitar a Secretario Estado. S. E. se ha mostrado muy pesimista acerca giro tomado por discusión ley candado. Sorprendido yo por esos pesimismos que no concuerdan con optimismos que he podido recoger en las entrevistas que he celebrado con Cardenal Vives, con Cardenal Cagiano, con el Mayordomo de S. S. y con prelado a que me refiero hoy en mi carta particular a V. E. le manifesté esa extrañeza mía al Secretario de Estado quien me ha asegurado que ayer no veía las cosas tan mal como hoy. Apremiado por mí, no quiso precisar más las razones de tales pesimismos, y me dijo que eran por noticias e indicios que hasta él acababan de llegar de España. Ampliando sobre manejos revolucionarios en América con capitales franceses contra España, me participó había completado datos, pero me dijo que más bien aquéllos iban dirigidos contra comercio español en América que contra instituciones: y me comunicó noticias que hoy transmito V. E. por correo. En fin tratado de disculpar conceptos expuestos por Obispos sobre estatuto personal frailes, pero sin negarlos categóricamente. González» (AMAE/SPS, leg. 2.679, exp. «1910-11. Cuestión...»). De no ser que la modificación del proyecto de ley candado fuera negociada en Roma a espaldas de Merry del Val y por cauces no oficiales, no hubo tratos. Merry niega expresamente su consentimiento (vid. nota 244, infra).

²³⁶ *Diario de Barcelona*, 6-XI-1910, cit. *El Pensamiento Navarro*, 10-XI-1910.

²³⁷ Vid. de nuevo nota 235, supra.

²³⁸ Vid., por ejemplo, *Folleto radical El «candado», los obispos y las minorías católicas* Barcelona, Impresor Félix Costa 1911. 31 pp. (AEV).

²³⁹ *Diario de las Sesiones Congreso*, 21-XII-1910. Los comentarios de la prensa republicana más moderada no fueron excesivos ante la transacción. Así *El Liberal* 9-XI-1910 se dirige más bien contra el barón de Sacro Lirio,

«hombre de probada fe ...; mas, por los indicios y barruntos, se podría pensar que no la tiene ni en el partido liberal, ni en su actual jefe prestigioso, ni aun en cosas más altas.»

²⁴⁰ Cfr. Berta Pensado: *El Marqués de Comillas*, Madrid, Temas Españoles, 1959, pág. 26.

²⁴¹ Cfr. Maximiano García Venero: *Melquiades Alvarez. Historia de un liberal*, Madrid, Ed. Alhambra, 1954, pág. 227, que añade a Comillas, a María Cristina y «otros personajes».

²⁴² Apud Bayle: *op. cit.*, 251.

²⁴ Vid. en ese sentido el artículo de *L'Osservatore Romano*, 5-XI-1910, inspirado «sin duda alguna» por Merry según González, que lo envía al ministro de Estado en el despacho núm. 137, 6-XI-1910, AMAE/SPS, leg. 2.679, exp. «1910-11. Cuestión...».

²⁴⁴ Telegrama de 29-XI-1910, del mismo al mismo: «Muy reservado descifre V. E. mismo. Aunque tenía arreglado entrevista con Cardenal para mañana miércoles, al recibir esta tarde carta Presidente Consejo Ministros antes de lo que yo había calculado, he tratado y conseguido ver en este momento a Secretario de Estado en vista de la urgencia del caso. He dado cuenta a Su Eminencia del contenido de lo que, de acuerdo con V. E., me ha escrito el Presidente del Consejo de Ministros; y el Cardenal declarándome que se enteraba su contenido verbal como en conversación particular, me aseguró y me encargó lo hiciera así saber al Gobierno de S. M., que jamás la Secretaría de Estado se ha inmiscuido en dar instrucciones a Carlistas e Integristas sobre esta materia. Además Su Eminencia me ha afirmado que tampoco el Nuncio se ha prestado a intervenir en tal cuestión, por más que le hayan solicitado, y no se explica a qué personas pueden aludir esos Diputados de la extrema derecha. Ahora bien, el Cardenal no niega que el candado tal como ha sido votado por el Senado, ha disgustado a la Santa Sede pues ésta estaba de acuerdo con el acuerdo primitivo, pero no con la enmienda introducida horas antes de su votación. Mañana escribiré a Presidente Consejo Ministros como me lo ha mandado, lo mismo que a V. E., ampliando detalladamente este telegrama. González» (*ibidem*). La carta de Canalejas, que no hallamos en AMAE, APR, APG ni en su inexistente archivo privado, aludiría posiblemente a la decisión de los diputados tradicionalistas de ir a la obstrucción en el debate del proyecto. Lo que se comentaba ya entonces (vid. por ejemplo *El Imparcial*, 21-XI-1910). Por otra parte, la intervención de Canalejas en la discusión (vid. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 19-XI-1910) había suscitado ya malestar en el Vaticano por sus anuncios sobre cuestiones de enseñanza (vid. *L'Osservatore Romano*, 22-XI-1910, apud despacho núm. 143, 23-XI-1910, del encargado de negocios al ministro de Estado, AMAE/SCS, leg. 1.741).

²⁴⁵ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 9 a 11-XI-1910.

²⁴⁶ *Ibidem*, 19-XI-1910.

²⁴⁷ *Ibidem*.

²⁴⁸ Vid. *ibidem*, 25 y 26-XI, 9 y 14-XII-1910.

²⁴⁹ Se conservan en APR. Utilizamos el discurso de Vázquez de Mella en los capítulos II, III y IV.

²⁵⁰ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 15 a 23-XII-1910, y *El Imparcial*, 23 y 24-XII-1910.

²⁵¹ Cfr. Sevilla Andrés: *op. cit.*, 417. Puede seguirse también el debate parlamentario en la obra de este mismo autor sobre *Canalejas*, Barcelona, Ed. Aedos, 1956, 482 pp.

²⁵² Vid. *El Correo Español*, 16-I-1911.

²⁵³ Apud Maura...: *Por qué...*, 171.

^{253 b} Vid. *La Avalancha*, 23-VII-1910.

²⁵⁴ Notas de Esplugas sobre la conversación con Canalejas de 5-XI-1910, apud Jesús Pabón: *El Provincial y el Presidente* (apuntillo histórico), «Boletín de la Real Academia de la Historia», CLXVIII (1971), 46-48. De la influencia coetánea del Comité de Defensa Social da idea el hecho de que, a fines de 1910 o comienzos del 11, se formase en Barcelona un Comité de Acción Social

Progresiva para contrarrestarlo, formado por «elementos de la Unión Federal Nacionalista Republicana, partido radical, partido republicano nacional, partido socialista obrero, antiguos federales y progresistas, elementos socalistas y ácratas, agrupaciones librepensadoras y entidades masónicas y representación de la prensa democrática», según la *Revista Popular*, 5-I-1911.

²⁵⁵ Escrito de Esplugas a Vives, apud Pabón: *El Provincial...*, 49-54.

²⁵⁶ Cit. *ibidem*, 57. Es significativo que Cambó hubiera declarado en octubre de 1910 a la prensa que la solución para el conflicto religioso «sería dejar a la Iglesia libre,, separada del Estado» (cit. Soldevilla: *op. cit.* (1910), 456 s.).

²⁵⁷ Telegrama del encargado de negocios al ministro de Estado, 9-XII-1910, AMAE/SCS, leg. 1.741.

²⁵⁸ Vid. telegrama del mismo al mismo, 13-I-1911, apud nota 268, infra.

²⁵⁹ Telegrama 16-XII-1910, del encargado de negocios González al ministro de Estado, AMAE/SPS, leg. 2.679, exp. «1910-11. Cuestión...»: «Reservado decir V. E. mismo. De conformidad con mi carta de 11 del actual y en cumplimiento de la del P[residente] Consejo M[inis]tros del cinco y del telegrama de V. E. del 10, he conferenciado esta mañana como viernes con el Secretario Estado. Como éste no me hablaba de nuestra política, le manifesté que ayer habrán sido reanudados debates candado y que esperaba que los carlistas no obstruyesen su votación, porque indudablemente de no pasar así [?] Ley, veríase el Gobierno S. M. obligado a ir adelante y a presentar otras Leyes a las Cortes que elaborarían de por sí solas; haciendo resarir la seriedad y consecuencia del P[residente] Consejo M[inis]tros y del Gabinete para cumplir sus compromisos, con el apoyo de la Corona. El Cardenal me contestó que la Santa Sede no podía aprobar el Candado, pues ni siquiera entrañaba la fórmula que, sin ser aceptada por él, conocía de antemano el Vaticano; pero se mostró reservado en absoluto sobre actitud que Roma adoptara cuando desestimando ley llegue a ser votada. Yo le puntualicé que, de votarse, el Gobierno S. M. estaría dispuesto a negociar otros proyectos con la Santa Sede, mientras que en el caso contrario se sobreseerían las negociaciones, y que por consiguiente la Santa Sede debía aceptar el mal menor y no exponerse al mayor. Pero Su Em[inen]cia insistió que la situación actual entre España y Roma no ha cambiado, puesto que se quiere votar y promulgar una ley que la Santa Sede ha dicho desde un principio que no podía admitir. El Cardenal insistió en que jamás ha hecho presión sobre políticos carlistas e integristas. Habiéndole hecho alusión personal a los ideales de Vázquez Mella, me ha asegurado Su Em[inen]cia que los ignoraba totalmente y que casi no conoce al diputado carlista, pues lo ha visto una sola vez cuando acompañando a don Jaime le visitó en Roma pero sin hablarle de política. En fin, hablando recayó la conversación como cosa mía personal sobre eventualidad nuevo nombramiento Embajador cerca de la Santa Sede, el Cardenal no hizo comentario alguno sobre las dos personalidades que le cité aunque dijo que había conocido al padre de la primera y que no conoce a la segunda, que es el que tiene más posibilidad según el Presidente Consejo M[inis]tros, ni de nombre; pero me añadió textualmente: «Reconociendo que ambos sean muy inteligentes y simpáticos no veo sobre qué base podría ser nombrado ninguno de los dos, pues votado el Candado, la situación queda la misma que este verano y no habría lugar a negociar.» {Ahora bien reitero a V. E. lo que le he dicho repetidas veces en mi carta así como al P[residente] C[onsejo] M[inis]tros: que según mi impresión personal el Cardenal quiere mantener más bien una actitud expectante que batalladora ante el desarrollo de los sucesos. Por correo amplió a V. E. detalles entrevista y contestación a la carta del P. C. M. del día cinco, González». Hay otra entrevista anterior entre Merry y el encargado que éste telegrafía al ministro de Estado el 9-XII-1910: «Acabo de asistir como viernes a recepción Secretario de Estado. Cumpliendo órdenes que Presidente Consejo Ministros me comunicó en su última carta del 30 Noviembre y a pesar de que Cardenal no me habló absolutamente de ello, desmentí categóricamente rumores de que el Gobierno prepara una ley sobre

el divorcio; haciendo resaltar, al propio tiempo, gratitud Primado y Obispo por el apoyo que presta el Gabinete a preparativos Congreso Eucarístico. Cardenal me manifestó que aquellos rumores los desconocía y que indudablemente también los han ignorado los funcionarios del Vaticano, quienes con toda seguridad se los hubieran señalado. Además de haber tenido conocimiento de tal noticia, parece que S. E. no la hubiera dado crédito alguno. En cuanto lo referente al Congreso Eucarístico, el Cardenal pareció escucharme con complacencia agregándome que todavía no se ha fijado si ha de celebrarse en Madrid o Sevilla, esperando con impaciencia la llegada a Roma del Obispo de Namur procedente de España con amplias informaciones sobre el particular volvió a negarme el aserto de la «Correspondencia de Roma» sobre instrucciones dadas desde Roma a integrista y carlistas para obstruir [sic] el congreso en el Congreso; y entrevista fue cortada por anuncio llegada Conde Seczen, Embajador de Austria quien acaba ayer de ser trasladado a París. Por correo amplió este telegrama. = González.»

²⁰⁰ Despacho núm. 154, del encargado de negocios al ministro de Estado 25-XII-1910, *ibidem*, que traduce el artículo.

²⁰¹ «Muy Señor mío: En ampliación del telegrama reservado que he tenido la honra de dirigir a V. E. esta misma tarde, cúpleme pasar, adjunto, a sus superiores manos el recorte del núm. 11 del *Giornale d'Italia* de esta fecha a que aquél se refería. = Como V. E. podrá ver, en el artículo de referencia se asegura que un miembro ...» (sigue lo transcrito en el texto) «... Su Santidad. = Además el órgano italiano de que se trata que, por cierto, es uno de los rotativos que más se leen en Roma, añade que en los círculos del Vaticano se desmiente tal noticia; pero afirma aquél que de muy buenas fuentes puede asegurar que el coloquio celebrado entre el Papa y el personaje español, ha tenido por exclusivo objeto estudiar el modo de reanudar ...» (sigue de nuevo arriba) (despacho núm. 8, 11-I-1911, del encargado de negocios al ministro de Estado, AMAE/SCS, leg. 1.741). Alude a este telegrama del mismo al mismo e igual fecha: «Reservado. *Giornale de Italia*, periódico romano liberal de los más difundidos afirma, en su número de hoy del modo más irrecusable, que se halla ahora en Roma un Ministro del actual Gabinete español, que ha sido recibido secretamente por Su Santidad a quien ha venido a ver ...» (repite los términos del despacho).

^{201 b} Alude a ello *El Debate*, 31-I-1911, según nos comunica el Prof. Juan María Guasch.

²⁰² Cfr. *Heraldo de Madrid*, 1-I-1911.

²⁰³ Cfr. *El Liberal*, 4-I-1911.

²⁰⁴ Apud despacho núm. 6, 7-I-1911, del encargado de negocios al ministro de Estado, AMAE/SCS, leg. 1.741.

²⁰⁵ *El Liberal*, 20-I-1911.

²⁰⁶ *Ibidem*, 26-I-1911.

²⁰⁷ *L'Osservatore Romano*, 27-I-1911, insistía en asegurar que la «Santa Sede ha exigido siempre que Ley asociaciones, para todo cuanto toca a las Congregaciones y a todo lo concordado, no salga del Gobierno sin un previo acuerdo que supone tratado llevado a cabo seriamente, y de modo a hacer esperar un éxito satisfactorio» (telegrama del encargado de negocios al ministro de Estado, 28-I-1911, AMAE/SPS, leg. 2.679, exp. «1910-11. Cuestión. »). González lo transmite íntegro en el despacho núm. 18, 28-I-1911, AMAE/SCS, leg. 1.741.

²⁰⁸ Telegrama del encargado de negocios al ministro de Estado, 13-I-1911, AMAE/SPS, leg. 2.679, exp. «1910-11. Cuestión. »). Muy reservado, Descifre V. E. mismo. Autorizado por telegrama de V. E. de ayer y cumpliendo instrucciones P[residente] Consejo M[inis]tros, en mi visita de esta mañana a Secretario Estado, he explorado actitud que piensa adoptar Santa Sede ante los proyectos que va a realizar Gobierno S. M. Mi gestión siendo de carácter puramente oficiosa, S. Eminencia me ha escuchado con suma atención pero resistiéndose a tomar acta de cuanto le he manifestado de modo verbal y confidencial. En concreto, el Cardenal estima que la situación queda la misma

que en Julio último; que el pensar de la Santa Sede viene a ser el mismo que el consignado en el apunte confidencial que transmití a V. E. en mi carta particular de veinte y ocho septiembre; que estando ya en vigor el Candado, no puede reanudar negociaciones sobre situación jurídica de Ordenes religiosas; pero que no le sucede ... [?] otro tanto para lo que se refiere a la elaboración de otras leyes, en lo tocante a exclusiva, la parte dogmática y religiosa, inclusiones o la ley de asociaciones cuya promulgación derogaría la del Candado; en fin, que con tal de que el Gobierno de S. M. se ponga de acuerdo con la Santa Sede aunque fuera secretamente y haciendo ver en apariencia que para esa decisión [?] material ha obrado unilateralmente, debe hacerlo de perfecto acuerdo con Roma, la que se hallaría dispuesta a discutir las cuestiones que se le sometieran. Ahora bien y antes de todo, el Cardenal desearía que en un apunte confidencial como el que le entregué en veinte y uno de Septiembre, se entrañen los pr[incip]ales extremos que contiene la carta que el P[residen]te Consejo M[inis]tros me ha dirigido en cuatro de Enero y se le especificquen por escrito las bases sobre las cuales el Gobierno de S. M. entienda fundar sus nuevos proyectos de ley. Pero eso sí: me ha recalcado que aunque para el público se lleve a efecto ley que parezca unilateral dictada por España, han de ser hechos de perfecto acuerdo con la Santa Sede; es decir, que lo que la Santa Sede no admite es que se la consulte sobre copia material [?] y que después, sin tener en cuenta su opinión, se lleve a efecto lo que desde un principio que Gobierno de S. M. haya decidido haciendo caso omiso del juicio formado por Roma. Claro está que la Secretaría de Estado desea tener un apunte preciso aunque oficiosamente de las intenciones del Gobierno de S. M. y de las bases sobre las cuales un Embajador sería enviado a negociar en realidad, aunque no pareciera públicamente una negociación bilateral. El Cardenal me añadió que en lo que se refiere al proyecto de reforma de instrucción pública habría de estar aquél conforme en un todo con el artículo segundo del Concordato vigente, pues éste no está derogado. Por correo amplio este telegrama a V. E. y a Presidente del Consejo Ministros a quien supongo mi carta alcanzará en Madrid. No telegrafio al Presidente Consejo Ministros dándole cuenta de haber cumplido las instrucciones oficiosas que me transmitió en su carta particular de cuatro del actual por ignorar si ha llevado a Africa una clave que corresponda con las que aquí tengo. González.» Sobre el nombramiento de embajador, Daniel López afirma: «Varias veces se ha dicho que cuando se trató de reemplazar al embajador Ojeda, verbalmente y por escrito, se previno al Gobierno español que el nuevo nombramiento implicaba la sumisión a que todas estas materias calificadas de mixtas fuesen sometidas al debate oficial y a la oficial concordia del Gobierno del Rey de España con la Secretaría de Estado de Su Santidad» (*op. cit.*, 122).

²⁶⁹ Vid. *El Liberal*, 19-II-1911.

²⁷⁰ Cfr. *Heraldo de Madrid*, 2-II-1911.

²⁷¹ «Al encargado de Negocios de España cerca del Santo Padre = Madrid, 10 Febrero 1911. = Obligado por necesidades públicas imperiosas, el Gobierno de S. M. tiene el compromiso de presentar a las Cortes, durante el mes de Marzo próximo, un proyecto de ley para la reforma de la de 30 de Junio de 1887 sobre ejercicio del derecho de asociación, proyecto cuyos trabajos preparatorios se han confiado a los Ministros de Gracia y Justicia y Gobernación y en el cual las Ordenes y Congregaciones religiosas quedarán sujetas en su funcionamiento, por lo que a las relaciones con el Estado toca, a los preceptos que en general servirán de norma a las asociaciones en España. = Movido el Gabinete que preside el Señor Canalejas por el compromiso que sus predecesores adquirieran de aplicar el artículo 45 del Concordato a la interpretación de los artículos 29 y 30 del mismo, hubiera deseado llegar, en primer término, a una inteligencia con la Silla apostólica acerca de semejante interpretación y así lo puso inequívocamente de relieve cuando, en 15 de abril de 1910, inició tratos sobre la reducción de las Ordenes y Congregaciones religiosas, por entender que el camino para que desapareciera la discrepancia entre ambas potestades se allanaría en mucho mediante tal

reducción. = Suspendidos esos tratos y acercándose el momento en que, según queda dicho, no podrá declinar el Gobierno la presentación del proyecto que afecta a tantos y tan diversos intereses, V. S. se servirá visitar a Su Eminencia el Cardenal Secretario de Estado y, después de exponerle lo que precede, manifestarle en mi nombre el deseo de saber si, en atención a las circunstancias y a que la solución que intenta darse al problema de las Ordenes y Congregaciones religiosas apartaría definitivamente cualquier dificultad derivada del régimen provisional en que viven, el Santo Padre, inspirado en paternal solicitud hacia el pueblo español, estaría dispuesto a reanudar las negociaciones sobre reducción de aquellos institutos e interpretación de los artículos 29 y 30 del Concordato. El Gobierno de S. M., por su parte, lo estará a escuchar con la debida ...» (sigue en el texto) «... religiosas. = De Real orden lo digo a V. S. a los efectos que se indican. = Dios, etc. = Minuta» (Real orden, AMAE/SPS, leg. 2.679, expediente «1911. Propuesta para reanudar las negociaciones»). En despacho núm. 23, 14-II-1910, González le comunica al ministro de Estado que ha cumplido el encargo, sin recibir aún la respuesta.

³⁷² Apunte confidencial entregado por Merry del Val a González, apud despacho núm. 29, 24-II-1911, *ibidem*: «Copia Traducida) = La Santa Sede ha prestado toda su consideración al deseo expresado por el Gobierno de S. M. Católica de reanudar las negociaciones acerca de la reducción de las Ordenes y de las Congregaciones religiosas y de la interpretación de los Artículos 29 y 30 del Concordato. = A tal propósito la Santa Sede cree necesario exponer: = 1) Que las Ordenes y Congregaciones religiosas, a más de que deben ser clasificadas entre las materias genuinamente espirituales y eclesiásticas y que, como tales, dependen de la autoridad de la Iglesia, han sido expresamente incluidas además, en España en el Concordato que es también Ley del Estado y siendo el resultado de un acuerdo entre dos Altas Partes contratantes, o sea entre Su Santidad y Su Majestad Católica, no puede ser modificado sin su mutuo consentimiento, y debe quedar en una esfera en absoluto superior e independiente de los cambios de Gabinetes y de los compromisos de partidos. = 2) Que el Art. 45 del mismo Concordato prescribe explícitamente que siempre que surja alguna dificultad, Su Santidad y S. M. Católica deben negociar para llegar a una amistosa componenda; = 3) Que, por consiguiente, sería incompatible con la dignidad de la Santa Sede, que el Gobierno español entendiera sencillamente *consultarla*, acerca de la futura Ley de las Asociaciones para lo que atañe a las Ordenes y Congregaciones Religiosas, sin suponer la necesidad de un *acuerdo*, ya que de esa manera la Santa Sede se vería equiparada a una de tantas otras asociaciones interesadas en esa Ley, de las que el Gobierno escuchará las observaciones y demandas, y quedaría del todo desconocida su naturaleza de persona soberana, con la cual la Nación española está ligada por solemnes pactos; = 4) Que la Santa Sede no encontraría decoroso, ni útil, tratar, cuando el Gobierno entendiese obrar unilateralmente, en el caso de que no se llegase a un acuerdo sobre cualquier otro punto. = Esto expuesto, debe también recordarse cómo, después de la votación de la Ley llamada de «Candado», sin las enmiendas discutidas y concordadas confidencialmente por el Gobierno con los Obispos y elevadas debidamente a conocimiento del Santo Padre (enmiendas que hubieran facilitado la continuación de los tratos) la Santa Sede tendría todo derecho de mantenerse en la actitud que hubo de adoptar en Julio último. = A pesar de esto, la misma Santa Sede, para dar una prueba ulterior de su condescendencia, de su deseo de concordia y de su solicitud para con la Nación Española, e inspirándose en el ya mencionado Art. 45 del Concordato, consentiría en reanudar las interrumpidas negociaciones, si por su parte, el Gobierno de S. M. aceptara las siguientes condiciones: = 1) Que los nuevos tratos relativos a las órdenes y congregaciones religiosas tengan como punto de partida las disposiciones concordatarias referentes a las mismas y los principios del Derecho Canónico (a tenor también del Art. 43 del Concordato), de manera que ninguna modificación en la actual

uación jurídica de las precitadas Ordenes y Congregaciones sea introducida y previo acuerdo con la Santa Sede. = 2) Que los tratos se extiendan lógicamente a la parte de la proyectada Ley de Asociaciones que se refiere a las asociaciones religiosas; = 3) Que, durante las negociaciones, el Gobierno español se abstenga de dictar disposición alguna legislativa o administrativa que impida o perjudique el resultado eventual de esos mismos tratos. = 4) La Santa Sede no pretendería que el acuerdo sobre la Ley de las asociaciones hiciera público o fuese explícitamente mencionado en la propia Ley. Pero no podría admitir se declarara oficialmente que aquélla se adopta unilateralmente por el Estado, negando el hecho de los tratos. = Finalmente la Santa Sede o cree oportuno que el anunciado proyecto de Ley, en lo que tan sólo se refiere a las asociaciones religiosas, sea presentado a las Cortes o de otro modo dado a conocimiento del público, antes de que se llegue al acuerdo. = 24 de febrero de 1911.» La respuesta de Roma, en sus líneas fundamentales, era diluida por la prensa inmediatamente (vid. *El Liberal*, 27-II-1911 ss.) y, quizás antes, *L'Osservatore Romano*, 1-III-1911, publicó casi textualmente buena parte del apunte de Merry del 24, transcrito aquí (vid. telegrama del encargado de negocios al ministro de Estado, 1-III-1911, y despacho núm. 33, del mismo al mismo, 2-III-1911, AMAE/SCS, leg. 1.741).

«Al Encargado de Negocios cerca del Santo Padre. = Madrid, 3 de Marzo de 1911. = He dado cuenta al Consejo de Ministros de que, habiendo V. S. practicado cerca del Señor Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad la gestión que se le encomendó por Real orden de 10 del pasado, Su Eminencia le ha contestado con un *memorándum* del cual es aneja copia al despacho de esa Embajada núm. 29 de 24 de febrero. = Dedicó el Consejo de Ministros a dicho *memorándum* la más detenida y madura consideración, penetrado de la importancia del documento y teniendo, asimismo, en cuenta determinados antecedentes de los cuales no resulta que el problema en cuestión deba por su naturaleza plantearse en los términos que Su Eminencia el Cardenal Secretario de Estado indica. = En diversas ocasiones, los Gobiernos españoles han puesto de relieve ante la Silla Apostólica que el Concordato de 1851 no encierra cláusula alguna por cuya virtud el Estado venga obligado a consentir el establecimiento de las Ordenes y Congregaciones religiosas en general y, lo que es más, a dispensarlas de la observancia del derecho común en materia de asociación. Los artículos 29 y 30 de aquel Concordato, lejos de ser susceptibles de tal interpretación y de entrañar el reconocimiento de la libertad de las Ordenes y Congregaciones religiosas para establecerse en España, limitan y condicionan por acuerdo de ambas partes contratantes esa libertad, en los términos estrictos de su letra, de modo que cualesquiera facilidades y amplitudes dejadas después en la práctica a dichos institutos son revocables por el Estado, y el pacto, en vez de justificar, excluye todo reparo de la Iglesia contra semejante revocación y garantiza al Estado contra la eventualidad legal de que se formule. Al ejercitar, con el Real Decreto de 19 de septiembre de 1901, esa prerrogativa del Poder público que antes, en diversas formas, habían ejercitado otros Gobiernos Españoles (Decreto de 18 de octubre de 1868; Reales órdenes de 25 de abril de 1875; Real orden de ... [sic] de ... [sic] 1880), el partido liberal en cuyo programa no entraba entonces ni entra ahora la hostilidad contra las instituciones monásticas, no llevaba el intento de poner trabas a una manifestación del espíritu de asociación que reputa respetable en sí misma; buscaba, no más, remediar los inconvenientes que, en presencia de la excesiva multiplicación de semejantes institutos, tenía la inobservancia por los mismos, de una ley a la que siempre fue el ánimo del legislador que viviesen sujetos. Y bastó, por otra parte, que la Silla Apostólica invocase en contra de aquel Real Decreto estipulaciones entre ambas Potestades, para que el Gabinete de Madrid, no obstante ser aquéllas a su juicio claras y categóricas, se prestara a examinarlas en común como si fueran dudosas, con arreglo al artículo 45 del Concordato. El alcance del compromiso del Estado se fijó por la Nota del Señor Duque de Almodóvar del Río al Señor Nuncio Apostólico, Monseñor Rinaldini, de 6 de abril de 1902. De esa Nota resulta

que, con tal de que las Ordenes y Congregaciones religiosas que hasta entonces no se hubiesen inscrito en los registros gubernativos cumplieren formalidad, se considerarían como reconocidas por el Gobierno y se compendiarían entre las aprobadas por él, discutiéndose entre ambas Potestades una y otra clase de asociaciones estaban o no autorizadas por el Concord y sin que aquel régimen provisional prejuzgase en nada las negociaciones sobre la interpretación y reforma eventual del pacto de 1851, siendo únicamente *un punto de partida*. De suerte que el Gabinete de Madrid conserve 1.º, plena facultad para regular la situación de las Ordenes y Congregaciones religiosas que se creasen en lo sucesivo; 2.º, la integridad de su punto de vista respecto a no estar incluidas en el Concordato las Ordenes y Congregaciones existentes en abril de 1902 no mencionadas en los artículos 29 y 30 y aprobadas por el Gobierno o simplemente inscritas en los registros; 3.º completa verdad, por ende, para sostener que, en definitiva, tales o cuales de esas asociaciones, admitidas provisionalmente a funcionar, debían disolverse y tocaba sujetarse, en sus relaciones con el Poder civil, a las normas que éste reputa adecuadas. = Cuando con estos antecedentes y principios se comparan las indicaciones contenidas en el *memorándum* del Emmo. Señor Cardenal Secretario de Estado que ha examinado el Consejo de Ministros, salta a la vista la novedad que ese documento representa. = Continúa reprochándose en el Gobierno de S. M. la promulgación del proyecto de ley vulgarmente denominado del candado, no obstante que (aparte de la interpretación de hechos de la hipótesis de compromisos, respecto de los cuales he de formular expresiones reservadas), versa sobre materias no incluidas en el llamado *modus vivendi* de 1902, que sólo se extendía, como más arriba se ha dicho, a las Ordenes y Congregaciones entonces existentes, no a las que pretendieran crearse en lo sucesivo. = Pónese por condición que, durante los tratos, el Gobierno de S. M. se abstenga de dictar disposición alguna legislativa o administrativa que prejudique o perjudique el resultado eventual de esos tratos; condición que, si tiene por objeto impedir que el Estado aplique preceptos ya en vigor, inherentes al *statu quo* legal, no puede menos de ser declinada por el Gabinete de Madrid, y si reviste otro alcance parece innecesaria después de las categóricas declaraciones, hechas por el Señor Ojeda en la Nota al Cardenal Secretario de Estado de 3 de Julio de 1910 y mantenidas por el Gobierno en la práctica, pese a la interrupción de los tratos por la Santa Sede. = Reclámesese asimismo como condición que las negociaciones tengan por punto de partida las disposiciones del Concordato y los principios del derecho canónico conforme también al artículo 43 de aquél, cuando en realidad hay un punto de partida convenido entre ambas partes, que es el resultante del compromiso de 1902, o sea la situación provisional de hecho entonces pactada y la divergencia de apreciación sobre los artículos 29 y 30 del Concordato y cuando, a mayor abundamiento, el artículo 43, que ahora se invoca, presupone una interpretación determinada de aquellos otros dos y prejuzga, en consecuencia, la cuestión misma que ha de examinarse, siendo, por lo tanto, inaplicable. Atento el Consejo de Ministros al aspecto práctico de las cosas, se hubiera lisonjeado con la esperanza de que la Silla Apostólica, a su vez, se prestaría a no insistir en las condiciones dichas, que son de alcance principalmente teórico, a fin de no entorpecer con un debate preliminar sobre las mismas la entrada en la materia principal. Mas el Gabinete de Madrid ha necesitado tomar en muy singular consideración la condición que también se pone de que «los tratos se extiendan lógicamente a la parte de la proyectada ley de Asociaciones que se refiera a las Asociaciones religiosas» y el párrafo final del *memorándum* en que se consigna que la Santa Sede no cree oportuno que el enunciado proyecto de ley, en lo que tan sólo se refiere a las Asociaciones religiosas, sea presentado a las Cortes, o de otro modo dado a conocimiento del público antes de que se llegue al acuerdo. = No pretende —dice— que el acuerdo se haga público o se mencione explícitamente en la ley; pero la Santa Sede no podría admitir se declarara oficialmente que aquélla se adopta unilateralmente por el Estado, negando el hecho de los tratos. = Al expresar-

se así, no se advierte que la gestión practicada por V. S. cerca del Eminentísimo Señor Cardenal Secretario de Estado, no revistió carácter confidencial sino oficial; que, para mayor precisión, le dejó V. S. copia literal de sus instrucciones; y que, además, durante el debate parlamentario de la ley del candado, el Presidente del Consejo reiteradamente anunció su propósito de intentar reanudar los tratos, de suerte que nada podía inducir hoy a suponer al Gabinete de Madrid contrario a un acuerdo público con la Silla Apostólica y desearo de una inteligencia secreta. Lo que hay es que el Gobierno de S. M. no ha aceptado nunca, ni puede aceptar ahora, que las prerrogativas del Poder público, en relación con las Ordenes y Congregaciones religiosas estén menoscabadas en los límites que el *memorandum* de Su Eminencia presupone. Trátase —fuerza es repetirlo— de un punto de interpretación entre dos Potestades soberanas; el cual se fijó claramente en la Nota del Excmo. Señor Duque de Almodóvar del Río a Monseñor Rinaldini, de 6 de abril de 1902. El compromiso del Estado fue no aplicar de momento su propia interpretación a las Ordenes y Congregaciones religiosas entonces existentes que cumplieran el requisito de la inscripción en los registros gubernativos. Al cabo de nueve años y cuando la Santa Sede rehusa, como rehusó en julio último, proseguir los tratos, el Gobierno de S. M. estaría facultado a considerar cumplidas sus obligaciones contractuales, intentando el acuerdo amigable a que se refiere el artículo 45 del Concordato y expedita la vía para resolver la dificultad mediante un criterio de interpretación unilateral, ya que no le ha sido posible establecer bilateralmente ninguno. Lejos de procer así, el Gobierno de S. M. invita a la Santa Sede a reanudar las negociaciones aunque sin incluir, naturalmente, en ellas más que lo que es propio de las mismas. = No entiende el Consejo de Ministros que para fijar la situación jurídica de las Ordenes y Congregaciones religiosas creadas con posterioridad a abril de 1902, sea necesaria inteligencia alguna con la Silla Romana. No entiende que tampoco lo sea para regular las obligaciones, por decirlo así, externas de las Ordenes y Congregaciones religiosas, anteriores a aquella fecha, que en definitiva sean reconocidas con derecho a subsistir, de común acuerdo entre las dos Potestades, por efecto del Concordato, de autorizaciones del Gobierno antes del *modus vivendi* de 1902 o de la inscripción prevista por éste. Podrá pretender la Santa Sede que el Estado español, como católico que es, al exigir a las Ordenes y Congregaciones el cumplimiento de deberes —sin los cuales los religiosos, súbditos de la Corona o extranjeros en el Reino resultarían ajenos a la obediencia de leyes obligatorias para los demás ciudadanos— deje a salvo su vida espiritual y régimen interior. Pero ya por los labios de S. M. el Rey, en el discurso de apertura de las Cortes, se dio la seguridad de que así sería y a mayor abundamiento V. S. ha hecho saber a Su Eminencia el Cardenal Secretario de Estado que el Gobierno escucharía con deferencia las observaciones que la Santa Sede creyera del caso formular acerca de la aplicación de preceptos de carácter general a la singular naturaleza de aquellas entidades. No hay —cree el Gobierno de S. M.— presente de que una Potestad internacional formule reparos a la publicidad y a la presentación, por otra, a su Parlamento, de un proyecto de ley que, por consecuencia de principios y reglas generales, afecte a intereses y aun a cláusulas especiales suyas. Podrá discutirse el tema *a posteriori* y con vista de si realmente hay lesión para dichos intereses o pactos. La limitación que de otra manera experimentaría la soberanía del país interesado no sería compatible con su decoro. Considérase, además que en el caso actual y no obstante hallarse planteada la cuestión desde 1901 todavía en el mes de junio último declaró el Gabinete de Madrid que la presentación del proyecto de ley de que se trata se aplazaría por entonces «de modo que las negociaciones sobre Ordenes y Congregaciones religiosas entre España y La Santa Sede pudieran desenvolverse normalmente», estando, pues bien claro que no ha escaseado sus esfuerzos para llegar a una inteligencia previa con la Sede Romana en aquellos puntos que la dignidad del Estado permitía. = No pudiendo el Gobierno, por las razones que expuso la Real orden de 10 del pasado, posponer más allá del mes corriente la presentació

al Congreso de su proyecto de ley de Asociaciones, no inspirado, ciertamente, en ningún espíritu persecutorio ni en ningún pensamiento de vejación, incompatibles con los sentimientos católicos de todos los miembros responsables del actual Gabinete de Madrid, el Consejo de Ministros me encarga transmitir a V. S. cuanto precede para que, por su conducto, llegue al Eminentísimo Señor Cardenal Secretario de Estado como contestación a su último *memorandum* y en la esperanza de que el Sumo Pontifice, movido de solicitud por la concordia entre la Iglesia y el Estado, reconocerá que el ánimo del Poder civil de promover un acuerdo no puede demostrarse más claramente que con la invitación a reanudar las negociaciones sobre reducción de las Ordenes y Congregaciones religiosas e interpretación de los artículos 29 y 30 del Concordato. Ese ánimo, correspondido por la Silla Apostólica, excusa, a juicio del Consejo de Ministros, la necesidad de condiciones especiales. = Sin embargo, deseoso siempre el Gobierno de conciliar sus compromisos y deberes con la buena inteligencia entre las dos potestades, estaría dispuesto, si la Santa Sede se prestase ...» (sigue lo transcrito en el texto) «... el Reino. = Lo que de Real orden digo a V. S. para su conocimiento encargándole que dé lectura y copia de la presente comunicación a Su Eminencia el Cardenal Secretario de Estado y le ruegue que con toda la brevedad que esté a su alcance se sirva informar al Gobierno de la acogida que merece al Santo Padre esta nueva y conciliadora propuesta. = Dios &» (Real orden del ministro de Estado, AMAE/SPS, leg. 2.679, exp. «1911. Propuesta...»).

²⁷⁴ En el despacho núm. 34, 7-II-1911, *ibidem*, González notifica al ministro de Estado haber leído y entregado «copia textual» de la real orden transcrita en la nota 273 supra al cardenal secretario de Estado, con esta misma fecha. Merry promete al diplomático dar, a la mayor brevedad, pero sin poder marcarle plazo, una respuesta. Llega ésta el 15 «en forma de Nota Verbal y sin fecha», según el despacho núm. 37, 16-III-1911, en que el encargado de negocios la transmite al ministro. Es ésta: «(Traducción) = El Despacho del Señor Ministro de Estado de fecha 3 del corriente, dirigido al Señor Encargado de Negocios y por éste entregada copia, el día 7 al Cardenal Secretario de Estado, ha sido objeto, como todas las precedentes comunicaciones del Gobierno de S. M. C., de una madura reflexión por parte de la Santa Sede, que lo ha examinado con ese espíritu de deferencia y de concordia, del que se halla animada para con el Augusto Monarca y la Nación española. = El importante documento empieza por invocar algunos precedentes de derecho y de hecho relativos a las Ordenes y Congregaciones religiosas en España; pero la Santa Sede, aun formulando sus más explícitas reservas acerca de varios puntos tocados por el Señor Ministro de Estado, no cree necesario, ni útil para el práctico desenvolvimiento de los actuales tratos, entrar en discusión teórica de los mismos, con tanta más razón cuanto que aquélla tuvo ocasión, a su debido tiempo, de dar a conocer al Gobierno español y de probar con mayor acopio de argumentos sus miras sobre el particular. = Esto expuesto, el Santo Padre no puede ocultar el dolor que le ha producido ver, por el precitado Despacho, que el Gobierno de S. M. C. no cree deber aceptar las equitativas y razonables condiciones propuestas para reanudar las negociaciones emprendidas, y singularmente la Segunda (condición) [sic] en la que la Santa Sede pedía que las negociaciones se extendieran lógicamente a la parte de la futura Ley de Asociaciones que se refiere a las Congregaciones religiosas. Lejos de negarla, ha defendido siempre la Santa Sede la soberanía del Estado y muy particularmente su derecho de legislar en la esfera jurídica de su competencia, como por ejemplo, acerca de las asociaciones meramente laicas, y jamás ha cesado de inculcar a todos el deber de obediencia a las leyes promulgadas a tenor del derecho. Pero, cuando se trata de asociaciones cuya principal finalidad es religiosa y no temporal y política, es doctrina católica que aquéllas dependen de la Potestad de la Iglesia y que, por consiguiente, la sociedad Civil no pueda, en lo que se refiere a las mismas, emanar de por sí sola disposiciones legislativas sin el concurso de la Autoridad eclesiástica. = Ahora bien, nadie podrá poner en duda que así son las Congregaciones religiosas, las cuales,

si bien tienen por su parte algún carácter civil, tienden, sin embargo, principalmente a un fin espiritual. = Estas, como lo dijo el Sumo Pontífice León XIII, de santa memoria, en su memorable Carta al Cardenal-Arzbispo de París, de fecha 23 de Diciembre de 1900, nacidas bajo el impulso de la Iglesia, cuya autoridad sanciona su gobierno y su disciplina, forman una parte escogida de la Grey de Jesucristo. = Y es por esto que, también insignes juriconsultos y hombres políticos españoles han podido fundadamente aseverar que las Ordenes religiosas no son meras asociaciones, sino más bien institutos de la Iglesia dependientes de la suprema autoridad del Romano Pontífice. = Por otra parte, la Santa Sede ha demostrado, en todo tiempo, tomar en consideración los legítimos intereses de la sociedad civil, por lo cual, desde el principio de las actuales negociaciones, se declaró dispuesta a admitir que, para el establecimiento de nuevas órdenes y congregaciones religiosas en España, debiese recaer, como fuese procedente, el previo acuerdo entre esa misma Santa Sede y el Gobierno. = Así, pues, las Congregaciones religiosas constituyen una materia no tan sólo esencialmente *eclesiástica* en el sentido más arriba expuesto, sino, además, *concordataria*. = En la Nota entregada el 3 de Enero de 1902 al Emmo. Señor Cardenal Rampolla, a la sazón Secretario de Estado de Su Santidad, al Señor Embajador de España [sic], quedó demostrado con argumentos a los cuales jamás se ha respondido suficientemente, que en el Concordato de 1851, todos los Institutos religiosos aprobados por la Santa Sede han sido no tan sólo implícita, sino positivamente reconocidos; y, si para lo que concierne a las comunidades de hombres, se mencionan únicamente en el Artículo 29 las Congregaciones de San Vicente de Paul, la de San Felipe Neri y otra que debe ser escogida entre aquéllas que se hallan aprobadas por la Santa Sede, la razón es que tan sólo para ellas el Gobierno asumía la obligación especial de proveer a su establecimiento y a la congrua subsistencia de sus casas. = Además, el Artículo 43 estipulaba que todas las materias *concernientes a cosas y personas eclesiásticas*, que no se hallasen mencionadas en los artículos precedentes, deberían ser reguladas según la disciplina eclesiástica, canónicamente vigente; y no hay duda de que entre éstas entran las Congregaciones religiosas. = Por consiguiente, la demanda de la Santa Sede de que la futura ley sobre Asociaciones, en los límites más arriba indicados, no sea emanada sin un previo acuerdo de ambas Potestades, es no tan sólo de por sí razonable, sino que se halla aquella perfectamente en consonancia con el solemne pacto concordatario; siendo claro que el poder laico no podría de por sí sólo aplicar e interpretar los principios y las disposiciones del Derecho Canónico. = Además, la necesidad de tratar previamente con la Santa Sede en todo lo que se relaciona con las Ordenes religiosas, ha sido admitida de hecho, tanto por los varios Gabinetes que se han sucedido en España, como por el actual Gobierno, que ha invitado a la Santa Sede a negociar acerca de la eventual reducción de aquéllas mismas y sobre la interpretación de los Artículos 29 y 30 del Concordato. = Resulta, pues, difícil comprender cómo, mientras aquél reconoce de esa manera con lealtad y prudencia que la situación jurídica de las mencionadas congregaciones entra en las materias cuya organización exige el previo acuerdo entre el poder civil y el eclesiástico, quiera después, al propio tiempo y sobre el mismo asunto, presentar unilateralmente a las Cámaras, un proyecto de Ley, prescindiendo de negociaciones propiamente dichas y del consiguiente acuerdo con la Santa Sede. Esta, además, por oficiosas declaraciones hechas por el Presidente del Consejo de Ministros a Prelados españoles, y también en otra circunstancia, tenía motivos para esperar, de la alta penetración de aquél, disposiciones favorables a la reanudación de los tratos de referencia. = Y si la Santa Sede ha manifestado que no pretendía que el acuerdo sobre la Ley de Asociaciones se hiciera público o se mencionara explícitamente en la misma Ley, es que tenía únicamente por mira, facilitar, en todo lo que de ella dependiera, la tan deseada conclusión (de los tratos) [sic]. = En la última parte de su Despacho, el Sr. Ministro de Estado ha declarado que, si la Santa Sede consiente en reanudar los tratos sobre los puntos que él ha indicado, el Gobierno se halla dispuesto: «A incluir en aquel

proyecto de Ley (de Asociaciones) [sic] una cláusula, por virtud de la cual pueda quedar a salvo el resultado de las negociaciones entre la Iglesia y el Estado acerca del derecho que las Ordenes y Congregaciones religiosas incluidas en el *Modus Vivendi* de 1902, puedan tener a subsistir con carácter definitivo, aunque sujetándose naturalmente a los preceptos de la Legislación que rige en el Reino». = Sea permitido hacer observar, a tal propósito, con esa entera franqueza que pudiese soia hacer posible un amistoso acuerdo, que, como la existencia legal y definitiva de las Congregaciones incluidas en el *Modus Vivendi*, está ya prejuzgada en ese mismo, de manera a excluir cualquier duda y como base para futuras negociaciones, no podría ser ver ahora, en tal reconocimiento, una concesión por parte del actual Gobierno Español. = Además, mientras que en el *Modus Vivendi* la Santa Sede mantenía firme su tesis de que las Comunidades religiosas que hubieran obtenido la aprobación del Gobierno o cumplieran la formalidad de la inscripción civil, debían ser consideradas como autorizadas por el Concordato y, por consiguiente, comprendidas en la excepción estipulada en el Art. 2 de la Ley de 1887, y si convenía a las dos partes que este argumento fuese discutido a tenor del Art. 45, ahora, por el contrario, el Gobierno español admitiría ciertamente que las Comunidades puedan existir de modo legal y definitivo, pero «sujetándose, naturalmente, a los preceptos de la legislación que rige en el Reino», lo cual prejuzga de un modo manifiesto, los términos del *Modus Vivendi* de referencia, bajo el punto de vista de la Santa Sede. = Movido por las razones más arriba expuestas, el Santo Padre se ve en la necesidad de insistir, a fin de que el Gobierno de S. M. C. se adhiera a las condiciones formuladas en la precedente Pro-Memoria. = Por su parte la Santa Sede declárase sinceramente dispuesta a llevar las negociaciones, no sólo del modo más solícito y expeditivo, sino con esos sentimientos de benevolencia que siempre ha patentizado hacia España, al tratar con los diversos Gabinetes, fuera de toda consideración de partidos políticos y teniendo únicamente en cuenta los principios fundamentales de la disciplina eclesiástica, el bien de la religión y, al propio tiempo, el beneficio de la Sociedad Civil.»

²⁷⁵ Envía para ello una Real orden (núm. 25, 29-III-1911), sobre la que González escribe este apunte, entregado a Merry del Val confidencialmente el 7-IV-1911: «El documento entregado por el Cardenal Secretario de Estado al Encargado de Negocios en 15 de Marzo, en el cual S[u] Eminencia expone el punto de vista de la Santa Sede acerca de la última conciliadora propuesta formulada por el Gobierno de S. M. para facilitar que se reanuden los tratos sobre reducción de las Ordenes y Congregaciones religiosas e interpretación de los Arts. 29 y 30 del Concordato, ha sido objeto de reflexivo examen por el Consejo de Ministros. = Llevado a cabo ese estudio no ya solamente con recto espíritu, sino con singular deseo de concordia, el Gobierno de S. M. no ha podido menos de deplorar que la Santa Sede no acepte la conciliadora propuesta que, por intermediario de su Representante cerca de ella, se le hizo; e insista en condiciones para dimitir las cuales se halla el Gabinete de Madrid imposibilitado, por las importantes razones que con todo detalle se han expuesto» (apud despacho núm. 47, 7-IV-1911, del encargado de negocios al ministro de Estado, AMAE/SCS, leg. 1.741, donde González advierte que Merry recibió el escrito, tras escucharlo, «insinuándome que no tenía nada que manifestarme sobre ese particular»). La Real orden de 29-III-1911 es reproducida en el apunte transcrito casi textualmente (hay copia en AMAE/SPS, leg. 2.679, exp. «1911. Propuesta...») Antes de ella, el ministro había enviado al encargado de negocios un telegrama, 19-III-1911, en el que le preguntaba si era verdad la publicación en francés del libro *Un año de lucha religiosa en España* (que no hemos localizado) con toda la correspondencia diplomática entre España y el Vaticano de 1910. González le contesta el 20 que se trata de una colección de artículos de *L'Osservatore Romano* atribuida a monseñor Benigni (cfr. AMAE/SCS, leg. 1.741). Se hace eco de tal publicación *El Imparcial*, 20-III-1911, entre otros.

²⁷⁶ Vid. *Heraldo de Madrid*, 1-III-1911, ya se habla de enfrentamiento entre Montero y Canalejas en *El Universo*, 27-XII-1910.

²⁷⁷ Cit. Fernando Soldevilla: *El año político 1911*, Madrid, Imprenta de Ricardo F. de Rojas, 1912, pág. 61 (BDN).

²⁷⁸ *Heraldo de Madrid*, 28-II-1911.

²⁷⁹ Por enfermedad, según *El Liberal*, 2-III-1911; por negativa, según *Heraldo de Madrid*, 2-III-1911.

²⁸⁰ Vid. ambos diarios, 1 a 18-III-1911.

²⁸¹ *Heraldo de Madrid*, 1-III-1911.

²⁸² Vid. Salvatella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 6-III-1911.

²⁸³ Cfr. *El Liberal*, 11-III-1911.

²⁸⁴ Copia de los artículos, apud AMAE/SPS, leg. 2.679, expediente «1911. Reclamación contra la Ley de Impuesto sobre Asociaciones (Personas jurídicas)».

²⁸⁵ *Heraldo de Madrid*, 16-III-1911.

²⁸⁶ Vid. texto correspondiente a la nota 204 del capítulo anterior.

²⁸⁷ Cfr. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 14-III-1911 ss.

²⁸⁸ *Heraldo de Madrid*, 1-IV-1911.

²⁸⁹ A quien Comillas consideraba (y era significativo) «un buen elemento en el Ministerio» (cit. Bayle: *op. cit.*, 112).

²⁹⁰ Cfr. Francos: *op. cit.*, 539, y *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 4-IV-1911.

²⁹¹ Cfr., *ibidem*, 4 y 8-IV-1911.

²⁹² *El Liberal*, 17-IV-1911.

²⁹³ Según se afirma *ibidem*, 27-IV-1911.

²⁹⁴ Apud *Diario de las Sesiones... Congreso...*, apéndice 1.º al núm. 29, legislatura de 1911.

²⁹⁵ Vid. texto correspondiente a la nota 82 del capítulo V.

²⁹⁶ Apud *El Imparcial*, 19-V-1911.

²⁹⁷ Apud *Revista Popular*, 12-V-1911.

²⁹⁸ Vid. *Diario de las Sesiones... Congreso...*, índice, voz «Asociaciones», legislatura de 1911.

²⁹⁹ En *L'Osservatore Romano*, 5 a 14-V-1911, según los artículos que comunica el encargado de negocios ante la Santa Sede al ministro de Estado (apud despachos núms. 60, 65 y 66; 5, 7 y 14-V-1911, respectivamente, AMAE/SCS, leg. 1.741).

³⁰⁰ Vid. nota 259 supra.

³⁰¹ Apud *Revista Popular*, 26-I-1911.

³⁰² *El Liberal*, 10-VI-1911.

³⁰³ Cfr. Javierre: *op. cit.*, 427. El ministro de Estado encargaba telegráficamente al encargado de negocios González, el 4-V-1911, que averiguase si el Papa iba a enviar un cardenal representante al Congreso Eucarístico de Madrid. El mismo día González respondió que lo ignoraba y, el 17, que ya había sido designado Aguirre; «bien podría ser —explicaba— la consecuencia del discurso pronunciado esta mañana por Embajador extraordinario en el acto entrega uniforme al Rey de Italia». El mismo día, sin embargo, González notificaba al ministro haber acabado de realizar otra gestión que no conocemos, de acuerdo con las instrucciones recibidas en carta del segundo, ante Merry del Val: «Le he dado conocimiento confidencial y verbal leyendo lista documentos y pruebas que acompañan a su última carta llegada esta tarde a mi poder. No ha suscitado ningún reparo y le parece según lectura que, palabra más palabra menos, todo se ajusta a la esencia de sus conversaciones sobre los tratos pendientes.» Parece obvio se refiere a un nuevo planteamiento del tema de los institutos (apud AMAE/SCS, leg. 1.741).

³⁰⁴ Vid. nota anterior. Sobre la embajada extraordinaria del marqués de Estella ante Víctor Manuel, que en ella se cita, hay un comentario de la prensa italiana transmitido por González al ministro de Estado en despacho núm. 72, 20-V-1911, *ibidem*.

³⁰⁵ Vid. nota 307 infra.

³⁰⁶ El 4, según *Heraldo de Madrid*, 5-VI-1911.

³⁰⁷ El 22-V-1911, el ministro de Estado telegrafiaba a González: «Al entregar carta S. M. al Santo Padre sírvase decir verbalmente que invitación del Rey para alojamiento Real Palacio era para Cardenal Curia venido de esa y que sentimiento Monarca y elementos católicos dinásticos por no haberse designado aquél es muy profundo» (AMAE/SCS, leg. 1.741). Se refiere a una misiva de Alfonso XIII que no conocemos, que se diría fechada el 7-VI y destinada a pedir a Pío X que nombrase un legado (cfr. *Reseña histórica del XXII Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Madrid el 23 de Junio al 1.º de Julio de 1911*. Redactada por La Lámpara del Santuario, Madrid, Est. Tip. «Sucesores de Rivadeneyra», 1912, pág. 71 ss.). El 23-V, González responde al ministro de Estado telegráficamente: «Reservado. Acabo de ser recibido por Su Santidad. Cumplí orden de Su Majestad entregándole carta Real. Su Santidad me encargó dijera al Rey que había recibido de mis manos ese documento y que lo leería después. Entonces encaucé conversación para hacerla recaer en términos que me permitieran decirle verbalmente cuanto V. E. me encargaba por su telegrama de ayer tarde. Su Santidad me replicó que legado, yendo de Roma o de Toledo, era siempre su Representante especial y me añadió que no podía más que lamentar profundamente sentir de Su Majestad y de elementos católicos dinásticos españoles a que se refería V. E. en su telegrama. Su Santidad parecióme en bastante buena salud, muy correcto, bondadoso, pero nada más; pues ahí puso fin a entrevista. Después visité a Secretario Estado, quien afectando extrema amabilidad e incluso forzando jovialidad, al decirle según costumbre que acababa yo de cumplir ese Real encargo y manifestarle verbalmente extremos telegrama de V. E. de ayer, me repuso que todo ello era cosa personal y particular de Su Santidad. Carta que escribo a V. E. hoy, le llegará el viernes o sábado a más.—González» (AMAE/SCS, leg. 1.741). Según la *Reseña histórica...*, 71 ss., a la carta de Alfonso XIII, que dice fechada el 7-VI, habría contestado el Papa con otra datada dos días antes, el 5, en la que nombraba a Aguirre (lo que, en realidad, vimos era cuestión sabida en mayo). Muchos vieron en ello, añade, «una especie de castigo impuesto a España por la actitud de su Estado oficial». En cuanto al nombramiento de Navarro Reverter, era comentado por González en telegrama al ministro de Estado de 30-VI-1911 (AMAE/SCS, leg. 1.741). El nuevo embajador, siendo ministro de Hacienda, había incurrido en excomunión en 1897, según advirtió en una circular el obispo de Mallorca Jacinto María Cervera, por disponer la incautación de los bienes del santuario de Nuestra Señora de Lluc (vid. este documento apud *Revista Popular*, LIII (1897), 196 s. No se puede desprender de él, como se diría en adelante, que el prelado excomulgó al ministro. En rigor se limitaba a advertir que esa era la pena que correspondía canónicamente al supuesto en que aquel había incurrido). Anuncia el nombramiento de embajador *Heraldo de Madrid*, 27-VI-1911.

³⁰⁸ *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 19 a 23-VI-1911.

³⁰⁹ *Reseña histórica...*, 63.

³¹⁰ *El Liberal*, 15-VI-1911. Lo reconoce la *Reseña histórica...*, 82.

³¹¹ Vid. Emiliano Iglesias: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 21-VI-1911.

³¹² *Ibidem*. También lo ratifica la *Reseña histórica...*, 82.

³¹ López: *op. cit.*, 52.

³¹⁴ Cfr. *ibidem*.

³¹⁵ Cfr. *Reseña histórica...*

³¹⁶ *Revista Popular*, 6-VII-1911.

³¹⁷ Telegrama del primado a Merry del Val, *ibidem*.

³¹⁸ Romanones: *Notas de una vida*, en «Obras completas», Madrid, Ed. Plus Ultra, s. d., t. III, pág. 260.

³¹⁹ Cfr. Luis Antón del Olmet y Arturo García Carraffa: *Canalejas*, Madrid, 1913, pág. 219, y *Revista Popular*, 6-VII-1911.

³²⁰ Cit. *ibidem*.

³²¹ Alocución, apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 27-XII-1911.

³²² Vid. Tomás García Figueras: *La acción africana de España en torno al 98 (1860-1912)*, Madrid, C. S. I. C., 1966, t. II, pág. 255, 364 ss.

³²³ *Heraldo de Madrid*, 19-IX-1911.

³²⁴ Vid. el relato de Maura...: *Por qué...*, 199-201.

³²⁵ Integra *ibidem*, 185-189.

³²⁶ Carta de Dato a Maura, 5-X-1911, *ibidem*, 212.

³²⁷ La reproduce *Heraldo de Madrid*, 13-X-1911.

³²⁸ Cfr. *El Liberal*, 31-X-1911 y Soldevilla: *op. cit.* (1911), 476 s.

³²⁹ A comienzos de enero de 1912, la prensa comentaba que Navarro Reverter aún no había tomado posesión (nunca lo hizo) de la embajada cerca de la Santa Sede (cfr. *El Imparcial*, 8-I-1912, y *Heraldo de Madrid*, 10-I-1912). En abril el nuncio escribía sobre ello esta nota al Gobierno: «La S. Sede mucho agradece que el Gobierno de S. M. C. piense en nombrar Embajador cerca de Su Santidad en lugar del Sr. Navarro Reverter, o mejor dicho del Sr. Ojeda. = Observa, sin embargo, que si como tantas declaraciones del mismo Gobierno lo indican, este nombramiento se hace con el fin tan sólo de llegar a un simple acuerdo con la Santa Sede acerca de la ley de asociaciones, como si la Iglesia no fuera una Sociedad perfecta como es, sino un Colegio del Estado o en el Estado, y se excluyeran las negociaciones propiamente dichas; viene aquí en propósito recordar lo que la misma S. Sede indicó también de muchas maneras, y en modo especial en su Nota de 24 de Febrero de 1911, y es que, de verificarse el nombramiento en las condiciones dichas, se colocaría a la S. Sede en la triste, pero imperiosa situación de no prestarse a nada que no tenga razón de negociación propiamente dicha, cual es la que pasa entre dos Soberanos, ya que las Ordenes y Congregaciones Religiosas son materia esencialmente eclesiástica, y son además materia concordataria: de consiguiente, 1.º la S. Sede tiene derecho absoluto de legislar sobre ellas, derecho que es anterior y superior al del Estado, y 2.º éste tiene obligación de entenderse en el modo dicho con la S. Sede, al punto que se separaría de su profesión de católico aquel Gobierno que intentase legislar en materia religiosa, como la presente, desentendiéndose del Romano Pontífice. A pesar de que el Gobierno hubo de conocer, hace meses, estas disposiciones de la S. Sede en un caso parecido al actual, no obstante cree Ella oportuno ratificarlas y confirmarlas hoy expresamente; pues quiere evitar al Gobierno cualquier motivo de queja el día en que presente a las Cortes su proyecto de ley sobre Asociaciones, sin la intervención que a la S. Sede corresponde, y ésta defendiera sus propios derechos. = Abril 10 del 1912.» Se refiere al dictamen sobre el proyecto de ley; puesto que éste ya había sido presentado según vimos. El ministerio contestaría al escrito de la nunciatura con otra nota sin membrete ni firma entregada al pronuncio el 3-V-1912: «El nombramiento de Embajador cerca del Santo Padre es una determinación de orden general, concerniente al conjunto de las relaciones entre España y la Santa Sede y destinada a promoverlas; en consecuencia, con motivo de ella, no parece haber lugar a entrar en el examen de asunto particular alguno de los que pueden existir pendientes entre las dos potestades. = Es lo que el Ministro de Estado indicó al Pronuncio Apostólico en nota de 17 de julio de 1911» (AMAE/SPS, leg. 2.679, expediente «1912. Nombramiento de Embajador de S. M. cerca de S. S.»).

³³⁰ Cfr. *Revista Popular*, 7-IX-1911.

³³¹ Integra *ibidem*, 14-IX-1911.

³³² Traza la historia del conflicto esta nota de la nunciatura al ministro de Estado: «Madrid, 23 de Febrero de 1912 = Excmo. Señor. = Muy Señor mío: Una carta que me ha hecho el honor de enviarme el Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros con fecha 18 del pasado mes de Enero, me da motivo para dirigirme de nuevo a Vuestra Excelencia y volver sobre la cuestión del impuesto a las entidades eclesiásticas, de la cual tuve que tratar en mi Nota de 27 de Diciembre de 1911. En ella está ampliamente demostrado que los re-

cientes impuestos no sólo violan el derecho de inmunidad real que a la Iglesia corresponde, sino que, además, son contrarios al Concordato. Lo cual equivale a decir que una ley puramente civil no tiene fuerza de derogar una ley concordada, o canonicocivil. = Es cierto que la Santa Sede, así como en los pasados tiempos no ha rehusado hacer en este punto largas concesiones al Estado, así también ahora está dispuesta a hacerlas en razonables proporciones y por tiempo limitado; mas no podría admitir que tales gabelas viniesen a gravar los bienes eclesiásticos sin previo acuerdo de entrambas Potestades. Y si la Santa Sede se abstuvo de reclamar cuando vio presentada y aprobada la ley de 29 de Diciembre de 1910, lo hizo así por no aumentar aún más el número de las protestas, ni acrecentar las divergencias ya existentes con el Gobierno español; esperando con esto que, por lo menos al aplicarse la ley, se guardarían los respetos debidos a las prerrogativas de la Iglesia y a las disposiciones concordatarias. = De la misma manera, si los Obispos, después que vinieron en conocimiento del Reglamento que siguió a la ley en 20 de Abril de 1911, pidieron una prórroga para la presentación de los documentos, fue porque se vieron forzados por la excesiva limitación del plazo allí consignado para tales efectos. Semejante dilación se les ofreció en aquel primer momento como un recurso provisional e indispensable para salir de las angustias en que se encontraban, y poder así con la calma necesaria atender a formular las oportunas reclamaciones, y defender sus esenciales derechos. Bien pronto, en efecto, presentó el Eminentísimo Cardenal Aguirre a nombre de todo el Episcopado, aquel conocido memorial en que reivindicaba, apoyado en argumentos irrefragables, la exención correspondiente a los bienes de la Iglesia. De igual modo la Santa Sede por su parte, al ver fallidas sus esperanzas de lograr siquiera una interpretación más equitativa de la ley, se sintió obligada, aunque mal de su grado, a protestar formalmente por medio del Nuncio Apostólico, y a dar instrucciones a los Obispos y al Clero secular y regular para que se mantuviesen ante la mencionada ley en actitud pasiva, sin practicar acto alguno que pudiera interpretarse como una aceptación de la misma ley. = Inmediatamente a esto el Gobierno español se negó a pagar a las entidades eclesiásticas los cupones de las láminas intransferibles: pagos que, además de serles debidos por rigurosa justicia, y en fuerza de solemnes concordatos, no representan sino una corta restitución de las rentas pertenecientes a la Iglesia, fundadas en los títulos más legítimos y sagrados. Por eso es por lo que el Padre Santo, reconociendo, en vista de tales negativas, que para no exponer a los ministros del culto a quedar destituidos de los medios necesarios para su mantenimiento, era inevitable ceder a la violencia y tolerar la presentación de los documentos y el pago de los impuestos, veía con dolor acercarse el momento en que debería hacer pública su protesta. Sin embargo, porque El tiene presentes las graves circunstancias en que actualmente se encuentra España, para dar una nueva prueba de su espíritu de concordia y de su paternal benevolencia hacia esa católica nación, y además en vista de la promesa contenida en la carta del Sr. Presidente del Consejo, a saber, la de modificar las disposiciones legislativas, suavizándolas «en la cuantía y en el procedimiento», ha determinado suspender esa pública protesta, y permitir entre tanto a las entidades eclesiásticas, pero sólo por el presente año, la presentación y los pagos susodichos, y con la obligación de que cada entidad haga en propósitos las debidas reservas, a fin de que se conserven incólumes los derechos de la Iglesia. Y como es cierto que el impuesto en cuestión acarrearía a algunas comunidades eclesiásticas y principalmente a muchas casas de monjas claustrales casi su total destrucción, y les colocaría en la imposibilidad de atender (aunque sea pobremente) aun a las más urgentes necesidades, por eso la Santa Sede no puede abstenerse de reclamar especialmente para ellas la exención de los gravámenes causantes de su total ruina. = Aprovecho esta ocasión para reiterar a V. E. las seguridades de mi más alta consideración = [Firmado:] † A. Card. Vico = Pro-Nuncio Ap[ostó]lico». García Prieto le responde: «Madrid 3 de Junio de 1912 = Eminentísimo Señor = Muy Señor mío:

El Señor Ministro de Hacienda, a quien oportunamente di traslado de la atenta Nota de V. E. de 23 de Febrero último, relativa al impuesto sobre bienes de las personas jurídicas, acaba de manifestarme que habiendo sido resuelta ya por Reales Ordenes de 21 de Octubre y 3 de Febrero último la cuestión fundamental, nada puede ni debe añadirse a lo consignado en aquellas resoluciones; no dudando de que, dispuesto ya el cumplimiento de las leyes dictadas sobre esta materia, las entidades de carácter religioso persistirán en su plausible actitud para lo sucesivo. = Añade mi colega que en cuanto a la exención y reducción del impuesto para ciertas comunidades religiosas hay que atenerse al art. 5 de la vigente Ley de contabilidad que prohíbe conceder exenciones, perdones o rebajas de las contribuciones o impuestos públicos, salvo en los casos y en la forma que las leyes hubieren determinado; pero que el Gobierno de S. M. por acto espontáneo y atendiendo a altas consideraciones de Estado ha propuesto al Parlamento la reducción del tipo contributivo de 0,25 a 0,15 por % = Y, finalmente, manifiesta que al dictarse el Reglamento definitivo para el régimen del impuesto, se tendrá en cuenta la observación contenida en la Nota de V. E. como opinión valiosa, por si se estima oportuno aplicarla dándole cabida en las disposiciones que aquél contenga. = Al tener la honra de comunicarlo a V. E., aprovecho & = Minuta = (firmado) M. García Prieto» (AMAE/SPS, leg. 2.679, expediente «1911. Reclamación contra Ley de Impuestos sobre Asociaciones (Personas jurídicas)»).

³³ *L'Osservatore Romano*, 26-IX-1911, protestaba contra el decreto ampliamente (cfr. despacho núm. 114, 27-IX-1911, del encargado de negocios cerca de la Santa Sede al ministro de Estado, AMAE/SPS, leg. 2.679, expediente «1911. Protesta del Nuncio contra Real Decreto de 15 de Septiembre reorganizando la Escuela de estudios superiores del Magisterio»). *Ibidem* se halla esta protesta: «Madrid, 16 de Octubre de 1911 = Excmo. Señor = Muy Señor mío: Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con el fin de llamar su benévola atención sobre el gravísimo asunto relativo a la observancia del Concordato vigente de 1851. = El Padre Santo siente profundamente que, constando en el Concordato el criterio práctico regulador de las relaciones entre la Iglesia y el Estado y consignándose en él prescripciones determinadas y precisas de suma utilidad para el bien común de ambas sociedades supremas; el Gobierno de Su Majestad Católica en sus disposiciones y proyectos prescinda de ellas y las infrinja con tanta frecuencia. = Concretándome al Real Decreto de 10 de Septiembre publicado en la «Gaceta» del 15, no puedo menos de lamentar sobre todo el que se haya quitado el carácter de obligatorio que ha tenido hasta ahora, la enseñanza de la Religión y Moral en la Escuela Superior del Magisterio, y se le haya dado el carácter de libre o potestativo, como antes se les dio en contra de la misma ley de Instrucción Pública a los Institutos de segunda enseñanza: lo cual, después del discurso del Trono y de ciertas recientes indicaciones de la prensa oficiosa, hace temer que el mismo criterio vaya a extenderse a la enseñanza primaria. = No ignora V. E. lo establecido en el Art. 2.º del Concordato, que «la instrucción en las Universidades, Colegios, Seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquiera clase, será en todo conforme a la doctrina de la misma Religión Católica; y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los Obispos y demás Prelados Diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina, de la fe y de las costumbres y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo aun en las escuelas públicas»; lo cual claramente indica que ha de ser obligatoria en esos centros docentes la instrucción y la educación católica: porque ni es católica la instrucción o educación que prescinde o está separada de la doctrina católica, ni es posible velar sin impedimento alguno por la pureza de una doctrina y de una educación religiosa que no se de, o puede no darse, por ser libre. = La enseñanza positivamente católica en las escuelas de España, es consecuencia natural de ser católica la Nación —Artículo 1.º del Concordato—, y ser oficialmente católico el Estado, según el Artículo 11, apartado 1.º de la Constitución. Por eso, no obstante, la

legalidad del Art[ícu]lo 11 apartados 2.º y 3.º establecida contra la protesta del Sumo Pontífice y los Obispos y el pueblo español, hubo de reconocer expresamente en acto diplomático el Gobierno de Su Majestad, que sería fielmente observado el Concordato, manteniéndose la enseñanza obligatoria de la Religión católica, según los Art[ícu]los 2.º y 3.º, y que la tolerancia se restringiría a los cultos disidentes «dentro de los templos o edificios a él destinados»; y así lo declaró en la Real Orden de 23 de Octubre de 1876. = Por consiguiente, bien se puede afirmar que [el] mencionado Decreto de 10 de Septiembre no sólo infringe el Concordato, sino también la Constitución, interpretada auténticamente por el mismo Gobierno que la dio. = Pero lo que de un modo particular aflige a los católicos españoles, que tan admirables manifestaciones hicieron contra las escuelas laicas, es la tendencia del Decreto a disminuir el influjo de la religión en la vida pública con su limitación en las escuelas, cuando más se necesita freno tan saludable contra las pasiones desbordadas de los revolucionarios, y la deplorable orientación hacia las escuelas neutras o aconfesionales insinuadas en el mencionado discurso de la Corona. Esto nunca podrá tolerarlo la Santa Sede. = Permitame V. E. le represente con todo respeto, pero con toda franqueza, que la Santa Sede siempre defenderá la escuela católica en la España católica, y, por tanto, la instrucción y educación católica dada oficialmente con maestros católicos y libros de texto católicos, a juicio de la competente Autoridad Eclesiástica. Y desde ahora protesto contra cualesquiera proyectos que a esto se opongan, como protesto contra el Real Decreto mencionado. = Aprovecho la presente ocasión para reiterar a V. E. las seguridades de mi más alta consideración. = [Firmado:] † A. Arzobispo de Filipo = Nuncio Ap[osto]lico».

³³⁴ En el mismo lugar de AMAE citado en la nota anterior está la respuesta de García Prieto: «Al Nuncio Apostólico = Madrid, 9 de Noviembre de 1911 = Excmo. Señor = Muy Señor mío: He recibido y sometido al Consejo de Ministros la Nota de V. E. fecha 16 del pasado, en la que, después de manifestar el sentimiento del Santo Padre por la omisión e infracción de las cláusulas del Concordato de 1851 en que, según V. E., frecuentemente incurre el Gobierno de S. M., se lamenta de que el Real Decreto de 10 de Septiembre último haya declarado facultativa la asistencia a la clase de Religión y Moral en la Escuela Superior del Magisterio; expone el temor de que el mismo criterio sea extendido a la enseñanza primaria; formula diversas consideraciones en demostración de que ello sería contrario al citado Concordato y a la Constitución de la Monarquía; declara que la Santa Sede siempre defenderá en España la escuela católica y por tanto la instrucción y educación católicas dadas oficialmente; y, en fin, protesta desde ahora contra cualesquiera proyectos que a esto se opongan y contra el Real Decreto mencionado. = En respuesta, séame lícito, ante todo, manifestar a V. E. la penosa sorpresa que al Consejo de Ministros produjeron el fondo del expresado documento y los términos injustificados de algunas de sus aseveraciones, que no vienen, ciertamente, en auxilio de los perseverantes esfuerzos del Gobierno para apartar, mediante un mutuo espíritu de conciliación, cuanto pudiera ser origen de rozamientos entre ambas Potestades. = Conocedor el Gobierno de S. M. de sus obligaciones contractuales, excusado es renovar su constante disposición de respetarlas y cumplirlas; sin que la diferencia con la Santa Sede, en punto a interpretación de tal o cual artículo del Concordato vigente, autorice la hipótesis de que el Gabinete de Madrid intente prescindir o haya prescindido, en la práctica, de sus compromisos, rectamente entendidos. = Para sustentar, precisamente a la hora actual, semejante supuesto, en lo que a la enseñanza se refiere, parece fuera menester base más inmediata que el programa general que el Gobierno, como producto de un firme convencimiento, condensó en el último mensaje de la Corona y que por tanto es conocido desde hace dieciséis meses. = Mas cualesquiera que sean las razones de oportunidad, por V. E. libremente apreciadas para este paso, no es posible al Gobierno de S. M. admitir que hechos de una naturaleza tengan valor distinto, en relación con el Concordato, según

las circunstancias; y si el Gabinete de Madrid pudo, según V. E. adecuadamente recuerda, declarar facultativa y aun omitir enteramente, sin observación ni protesta de la Santa Sede, la asignatura de Religión y Moral en los Institutos de segunda enseñanza, no se alcanza en qué pueda apoyarse la protesta contra una decisión análoga respecto a la Escuela Superior del Magisterio, cuando a mayor abundamiento, los alumnos de ese Centro pasan antes por las Escuelas Normales donde la asistencia a las clases de las expresadas materias es obligatoria. = La tesis que V. E. desarrolla respecto al alcance del artículo 2.º del Concordato, a la ley de Instrucción pública y a la Constitución de la Monarquía y las consecuencias que deduce del uno y de las otras, me llevarían a exponer, a mi vez, argumentos ya en otras ocasiones aducidos por el Gobierno de S. M.; pero firme en el propósito de emplear todos los medios a mi alcance para promover la mejor armonía entre ambas Potestades, estimo servir ese fin declinando una discusión que, en todo caso, sólo podría versar sobre el Concordato, puesto que la interpretación de las leyes interiores es prerrogativa exclusiva de la soberanía española. = Me limitaré pues a hacer constar las reservas del Gobierno de S. M. y a expresar que, independientemente de las mismas, es por lo demás evidente que el artículo 2.º del Concordato no tendría nunca el alcance de comprometer al Gobierno español a incluir y declarar obligatoria la asignatura de Religión y Moral en los programas de todos los grados de la enseñanza pública siendo obvia la razón que abona lo contrario en el caso concreto de la Escuela Superior del Magisterio. = Aprovecho, etc. = Minuta = M. García Prieto».

³³⁵ Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza, San Sebastián, Editorial española, 1940, pág. 103 s. Cfr. Vicente Ramos: *Rafael Altamira*, Madrid, Alfaguara, 1968, pág. 151, y Pierre Conard: *Sexualité et anticlericalisme* (Madrid 1910), «Hispania», XXXI (1971), 103.

³³⁶ Cfr. Bayle: *op. cit.*, 252, y Gómez Molleda: *op. cit.*, 261.

³³⁷ Vid. Vicente Cachó Viu: *Las tres Españas de la España contemporánea*, Madrid, Ateneo, 1962, pág. 19 ss.

³³⁸ Discurso de Melquiades Alvarez, apud *Heraldo de Madrid*, 7-IV-1912.

³³⁹ Vid. *ibidem*, 21-XII-1910, a raíz de las palabras de Gumersindo de Azcarate: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 20-XII-1910.

³⁴⁰ El Gobierno aconsejó a Alfonso XIII el indulto de seis de los siete reos: no para el Chato de Cuqueta, irrevocablemente, «porque no lo consentían los términos en que estaban concebidos los fundamentos de derecho de la sentencia del Consejo Supremo de Guerra y Marina» (*Heraldo de Madrid*, 14-I-1912). Ante la opinión pública, por tanto, sería el rey el que impusiera al Gabinete el indulto de este séptimo individuo. Y Canalejas, conforme con la decisión por su contenido pero no por su forma, que se enfrentaba a un consejo ministerial, hubo de dimitir, para ser, naturalmente, ratificado en el poder por la misma rectitud de tal postura (cfr. *ibidem*, 14-I-1912 s.). En realidad, según demuestra Maura (*Por qué...*, 204-207), el presidente del Gobierno pretendía precisamente todo esto. Hizo las cosas de manera que la conducta del Gabinete pareciera irreprochable jurídicamente y en cuanto defensor de la justicia y el orden; pero dejó al monarca en la disyuntiva de aparecer como único responsable de la muerte del Chato o indultarlo. Lo que, por lo demás, encomia y no disminuye la figura de Canalejas.

³⁴¹ *El Liberal*, 21-I-1912.

³⁴² *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 26-I-1912.

³⁴³ Apud *Heraldo de Madrid*, 6-III-1912.

³⁴⁴ Cfr. *ibidem*, 23-I-1912.

³⁴⁵ Cfr. *ibidem*, 11-III-1912.

³⁴⁶ Sobre la situación de este problema, vid. Pabón: *Cambó...*, 383 s.; Maximiano García Venero: *Santiago Alba, monárquico de razón*, Madrid, Aguilar, 1963, pág. 81; Rafael Olivar Bertrand: *La «cuestión catalana»: Prat de la Riba*, Madrid, «Arbor» (C. S. I. C.), 1953, pág. 650; Joaquín de Camps y Arboix:

La Mancomunitat de Catalunya, Barcelona, Ed. Bruguera, 1968, 168 pp. (que sintetiza su desenvolvimiento).

³⁴⁷ *El Liberal*, 13-III-1912.

³⁴⁸ *Ibidem*, 26-IV-1912.

³⁴⁹ *Ibidem*, 10-V-1912.

³⁵⁰ *Ibidem*, 25-VI-1912.

³⁵¹ Apud *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 28-VI-1912.

³⁵² La más importante, la exposición del primado Aguirre a Canalejas de 31-VII-1912, apud *Revista Popular*, 14-VIII-1912.

³⁵³ Vid. los artículos de la prensa vaticanista italiana que transmite el encargo de negocios cerca de la Santa Sede al ministro de Estado, apud pachos núm. 114 y 115, 12 y 13-VII-1912 respectivamente, AMAE/SCS, leg. 1.742.

³⁵⁴ Bayle: *op. cit.*, 252.

³⁵⁵ Protesta del episcopado español de 14-IX-1912, apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 1-X-1912.

³⁵⁶ Bayle: *op. cit.*, 252.

³⁵⁷ Según Pabón: *Cambó...*, 386.

³⁵⁸ Que se trata de una gestión distinta de la narrada por Pabón en *El Provincial*.. se desprende de esta carta de Cambó a Romanones, de 1944, sobre «una misión que cumplí en Roma, en 1912, por encargo de Canalejas, y con conocimiento y aprobación de Maura. = ... me llamó un día para decirme lo siguiente: «Yo desearía, amigo Cambó, entenderme con Roma, pero, en todo caso, hacerlo con dignidad. Tal como se han puesto las cosas, lo difícil es el primer paso, y no quiero exponerme a dar un resbalón que no sólo me haga saltar del Gobierno, sino que me deje desfigurado ante la opinión. Yo no sé cuál es el pensamiento del Vaticano, y lo que estaría buenamente dispuesto a concederme para reanudar sus cordiales relaciones con España y con el Gobierno que presido. Yo he sabido que es usted amigo del hombre en quien el Papa (entonces Pío X) tiene máxima confianza: el Cardenal Vives y Tutó, un catalán. Si usted fuera a Roma sin ostentar representación alguna, como si obrase por su cuenta, pero hablando con claridad al Cardenal Vives y pidiéndole la mayor reserva, pudiera usted hacerme una exploración que permitiera orientarme, me prestaría un gran favor y se lo prestaría a España y a la Iglesia». = Le hablé yo de la influencia que en el Vaticano tenía entonces Merry del Val, Secretario de Estado, y de la que aún conservaba Monseñor Rampolla, el que había sido brazo derecho de León XIII. Canalejas me autorizó para que, como cosa propia y como si no tuviera más que finalidades turísticas, hablara yo a Maura de mi viaje y le pidiera cartas de representación para Rampolla y Merry. Don Antonio ... me dio las cartas que yo le pedía. = En Roma realicé mis gestiones, y pude llevar a Canalejas la información que deseaba, con indicación de los caminos a seguir para llegar a un acuerdo, «tanto —frase del Cardenal Merry— para un guiso con salsa de libertad, como con salsa concordatoria, pero sin que jamás pudiera mezclarse, porque Roma no lo aceptaría, pues estima que las dos salsas son incompatibles». Desgraciadamente, el asesinato de Canalejas, que se produjo a pocos días de regresar yo de Roma, impidió que mi viaje tuviera trascendencia práctica» (apud Duquesa viuda de Canalejas: *La vida íntima de Canalejas*, Madrid, Afrodisio Aguado, s. d., pág. 217 s.). Los datos que permiten datar la gestión de Cambó parecen muy claros. Sin embargo, la entrevista inicial de Canalejas, de haber tenido lugar en 1912, supondría que Cambó desconocía el intento de separación de 1910-11, contra lo que se desprende de la citada obra de Pabón. Hay que pensar, por tanto, que, a treinta años de los sucesos, el político catalán pudo mezclar en su recuerdo la comunicación de los propósitos del jefe del Gobierno en 1910 que se habría traducido en el viaje de Esplugas narrado ya, y un segundo viaje, dos años después, de Cambó mismo. Por otra parte, tampoco parece probable que sea esa gestión de Esplugas la llevada a cabo en 1912 en vez de 1910-11: entre otros motivos porque, en la documentación publicada por Pabón se habla de Ojeda como hombre vivo (moriría en

1911). Hay que pensar, en consecuencia, en la existencia, al menos, de los dos viajes y gestiones.

^{388 b} Cit. José Manuel Castells: *Las asociaciones religiosas en la España contemporánea. Un estudio jurídico-administrativo (1767-1965)*. Madrid, Taurus, 1973, pág. 369.

³⁸⁹ «Copia del anejo a la carta de monseñor Solari, de 6-II-1913»: «Madrid, 3 de Enero de 1913. = Muy Señor mío = Con referencia a la Nota de mi digno predecesor, de 3 de Junio de 1912 [vid., nota 332 supra], relativa al impuesto sobre los bienes de las personas jurídicas, me es satisfactorio participar a V. S. que el Gobierno de S. M. poniendo por obra el propósito enunciado en la expresada comunicacion, presentó a las Cortes y obtuvo que éstas aprobasen los proyectos de Ley rebajando el tipo desde veinticinco a quince centésimas por ciento y condonando los recargos, multas e intereses de demora en que las Corporaciones y particulares hubiesen incurrido por delitos tributarios, siempre que los declaren y satisfagan antes del 1.º de Abril del corriente año. = La Ley de 24 de Diciembre último, donde la citada rebaja se establece, contiene asimismo preceptos que han de pasar, en su día, al reglamento, pero que ya desde ahora están en vigor acerca de la exención en favor de ciertos bienes = Este conjunto de disposiciones representa un alivio del gravamen que a las entidades eclesiásticas, como a las demás personas jurídicas, se ha visto el Estado en la obligación de imponer para levantar las cargas públicas y es, por tanto, una facilidad más que se les da para que, secundando la indicación que el Señor Nuncio Apostólico, en 23 de Febrero de 1912, participó a mi predecesor haber hecho a aquellas y acatando las leyes del Reino, se conformen a los deberes que en el particular le corresponden. = No dudo de que V. S. acogerá la noticia con la misma complacencia que se la comunico, ni de que tratándose de bienes eclesiásticos la Santa Sede por su parte, otorgará, en este caso, la oportuna autorización correspondiente al vivo deseo del Gobierno de S. M. de fomentar la cordialidad de relaciones que debe existir entre ambas Potestades. = Aprovecho la oportunidad para reiterar a V. S. las seguridades de mi más distinguida consideración. = Es copia. = A Monseñor Solari, Encargado de Negocios de la Santa Sede» (nota que se supone del ministro de Estado, AMAE/SPS, leg. 2.679, exp. «1911. Reclamación...»). *Ibidem* siguen varias cartas que parecen conseguir la demora del pago durante todo el año 1913.

³⁹⁰ *Ibidem*, expediente «1912. Prórroga de la Ley del Candado», hay una nota sin firma, manuscrita, con membrete del «Congreso de los Diputados», sin duda escrita en diciembre de 1912: «No podemos dejar llegue el 27 sin tomar actitud. = Deseamos no asumir responsabilidad de suscitar de nuevo discusión sobre sit[uació]n órdenes religiosas. q[ue?] es en España el pr[incip]al contenido del problema clerical. = Y como la present[ació]n de proyecto de prórroga plantearía toda la cuestión creemos q[ue] p[ar]a evitarlo no existe más q[ue] un medio. Que la S[anta] S[ede] adopte aquellas disp[osicione]s suficientes p[ar]a mantener de hecho la situación actual hasta tanto q[ue] la condició]n jurídica sea definida en virtud de una ley —ley que el Gob[iern]o desea poderla formular en inteligencia con la S[anta] S[ede].» El 6-XII-1912, el encargado de negocios de la nunciatura, Solari, escribe al ministro de Estado: «particular = 6 de Diciembre de 1912 = Excmo. Señor Ministro de Estado = Muy Sr. mío: Solo hoy puedo enviar a V. Exc. copia del Decreto o *Motu proprio* de Su Santidad del 16 de Julio de 1906, que me ha sido facilitado por el Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá y del cuál V. E. me habló el miércoles pasado. Como verá V. E. el *Motu proprio* es general para toda la Iglesia y prohíbe la fundación de nuevos Institutos Religiosos sin haber obtenido el permiso de la Santa Sede: naturalmente vale también para España, pero no prohíbe que se abran nuevas Casas Religiosas de Congregaciones ya existentes: de todos modos dicho *Motu proprio* ya es mucho para los efectos que se quieren conseguir con la ley del candado. = El Sr. Obispo de Madrid me habló también de lo que el Excmo. Sr. Presidente del Con-

sejo le había dicho sobre el particular, y me comunicó una fórmula de concordia que yo habría participado a V. E. hoy si hubiera tenido lugar la recepción diplomática. Me permito transcribirla aquí para conocimiento de V. E. y para cumplir mi deber. El Sr. Conde de Romanones me hizo saber que él abandonaba el proyecto de ley de Asociaciones del Sr. Canalejas y que habría preparado otro concordando con la S. Sede los puntos referentes a las Congregaciones Religiosas: en cuanto a la ley del Candado, él no habría presentado a las Cortes la prórroga, si la S. Sede hubiese ordenado a los Sres. Obispos españoles que no permitiesen en sus Diócesis nuevas casas religiosas, mientras tanto no se apruebe la ley de Asociaciones. Por conducto del Sr. Obispo he hecho saber al Excmo. Sr. Presidente que deseaba tener por escrito dichas declaraciones o directamente de él, o por el conducto muy digno de V. E. a fin de que la S. Sede tuviera una base sobre la cual fundar su determinación: hoy sin embargo he transmitido a la S. Sede por carta cuanto me comunicó el Sr. Obispo de Madrid. = Se reitera de Vuestra Excelencia con el más profundo respeto = Su atento Seguro Servidor = q. b. s. m. = Alejandro Solari, Encargado de Negocios de la S. Sede.» Habla al principio del *Motu proprio* al que nos referimos en el texto correspondiente a la nota 86 de este capítulo. La noticia de la prórroga «por dos años» la publica *L'Osservatore Romano*, 17-I-1913 (apud despacho núm. 12, 18-I-1913, del encargado de negocios de España cerca de la Santa Sede al ministro de Estado, AMAE/SPS, leg. 2.679, exp. «1912. Prórroga...») y la prensa española del 16 en adelante (vid. Fernando Soldevilla: *El año político 1913*, Madrid, Imprenta de Ricardo F. de Rojas, 1914, pág. 61 s.). En la asamblea de la Junta Central de Acción Católica celebrada en Madrid desde el 23-XI-1912, Comillas declaraba significativamente sobre la ley de asociaciones «que creía no llegaría a discutirse en la presente legislatura; pero que, caso de que llegara a discutirse, la Junta Central contaba con medios suficientes para impedir que se convirtiera en ley o para conseguir su derogación en el caso de que llegara a serlo» (apud *Boletín Oficial del Obispado de Pamplona*, 14-XII-1912).

³⁶¹ Vid. telegrama del embajador Calbetón al ministro de Estado, 31-I-1912, notificándole su llegada a Roma (AMAE/SCS, leg. 1.742). Sobre el nombramiento de Ragonesi, cfr. José María Javierre: Pío X, 4.ª ed., Barcelona, Juan Flors, editor, 1955, pág. 234. De la sustitución se hablaba al menos desde comienzos de 1912, aunque entonces se pensaba en monseñor Della Chiesa (vid. *El Imparcial*, 12-I-1912). El propio Javierre (*Merry del Val*, 427) explica el desagrado del rey hacia Vico por el informe de este a la Santa Sede en contra del nombramiento de un legado para el Congreso Eucarístico de 1911. «Dicen que el informe del nuncio llegó a manos de Alfonso XIII.» Aparte de esto, la creencia del Gobierno de Canalejas en la intervención de Vico en las agitaciones tradicionalistas es continua en la documentación que publicamos en este capítulo.

³⁶² Despacho núm. 209, 30-XII-1912; del encargado de negocios cerca de la Santa Sede al ministro de Estado: «Muy Señor mío: Tengo la honra de acusar a V. E. el recibo de la R. O. n.º 163 que se ha servido transmitirme en 19 del actual, a la que venía anexa la copia de la protesta presentada por los obispos nacionales al Gobierno de S. M., con motivo de la proyectada reforma de la enseñanza. = Al manifestar a V. E. que me he enterado con todo el interés que se merece del texto del referido documento episcopal, cúmpleme participarle que en algunos círculos eclesiásticos de Roma, se considera que el Congreso Catequista que ha de reunirse en Valladolid, a mediados de mes de Junio próximo venidero, bajo la presidencia del Excmo. Señor Cardenal Cos, Metropolitano de aquella Archidiócesis, será como una solemne respuesta de la Iglesia y de los católicos españoles a esos mismos proyectos relativos a la enseñanza, que el Gobierno de S. M. entiende presentar a la aprobación de las Cortes del Reino» (AMAE/SCS, leg. 1.742). A esta mera expectación siguen los temores que refleja este telegrama del 15-II-1913, del embajador Calbetón al ministro: «Mantenido larga conferencia con Cardenal Secretario quien empe-

zó manifestando profundo sentimiento Su Santidad por noticias transmitidas por Encargado de Negocios Santa Sede ahí, relativas enseñanza y matrimonio civil por creer que esto es contrario manifestaciones Gobierno de no proceder en materias mixtas sin acuerdo de Santa Sede. Díjome esto inmediatamente después de fórmulas cortesía, como quien prorrumpe en algo que estaba conteniendo. Dije que no encontraba causa suficiente para esa tristeza y enfado porque asunto enseñanza fue convenido en discusión Senado y harto ha hecho Gobierno de S. M. con reconocer necesidad maestros católicos primarios y disposiciones anunciadas solo prescribirán libertad alumnos para no asistir enseñanzas religiosas con debida autorización. Quedó al parecer calmado sobre esto, después de alguna discusión, pero insistió sobre matrimonio civil. Dije que esto lo discutiría cuando tuviese noticias oficiales pues las privadas no se referían al aspecto de la Real orden de nuestro Presidente. Concluida la escaramuza me dio gracias de Su Santidad para Presidente por pésame; me anunció que había reiterado directamente custodio Tierra Santa suspender todo sin excusa alguna y que en materia nombramientos obispos aguardaba instrucciones de esa y abreviarían trámites. Hecho esto comenzamos discusión *memorándum* mi proyecto asociaciones que duró hora y media quedando en que pondría por escrito Secretario de Estado, sus observaciones teniendo en cuenta la discusión entre ambos mar... Sin perjuicio enviar V. E. nota detallada discusión, creo que se resistirá mucho a nuestras pretensiones aunque impresión mía es que desean llegar acuerdo. Entiendo que puede modificarse alguna cosa sin quebranto por supuesto de la soberanía civil, sobre todo en lo relativo a novicios, clausura y extranjerías y que puntos debatidos serán obligar invertir adquisiciones título gratuito en láminas intransferibles. Enviaré V. E. relación detallada y copia *memorándum* del Secretario Estado cuando lo reciba y espero presentar lunes nota referente Jerusalén. Salúdole afectuosamente. Calbetón» (AMAE/SPS, leg. 2.679, expediente «1913. Ley de asociaciones»). Alude a un proyecto que no conocemos; sí, en cambio, el *memorándum* de Merry del Val que anuncia, fechado el 21-II-1913 (apud expediente «1913. Negociaciones acerca de la Ley sobre Asociaciones en lo que afecta a las Religiosas»), cuya gran extensión y nulo porvenir no animan a reproducirlo aquí. Calbetón propone algunas concesiones del Estado en despacho del 25 (*ibidem*).

³⁶³ El contenido de las medidas sobre enseñanza y matrimonio civil fue oficialmente comunicado por Calbetón a Merry el 22 (cfr. telegrama del primero al ministro de Estado, 23-II-1913, expediente «1913. Real orden sobre matrimonio»).

³⁶⁴ Cfr. Gómez Molleda: *op. cit.*, 483.

³⁶⁵ Maura...: *Por qué...*, 243. En tal cruzada habría que situar quizá el discurso de Antonio Maura, padre del anterior, en la Academia de Jurisprudencia, 6-III-1913 (apud *Ideario político*, Madrid, Aldus, 1953, pág. 151 ss). *El Imparcial* y *El Liberal*, 26-IV-1913 ss., en cambio, consideran intrascendente la medida.

³⁶⁶ Vid. *El Universo* y *El Correo Español*, marzo-abril 1913, que registran numerosos actos de ese tipo: protesta de la Liga de Padres de Familia, de las damas acaudilladas por la marquesa de Comillas, de los caballeros de las órdenes militares (con la firma del infante Fernando de Baviera y Borbón, que provocaría cierto malestar entre la familia real y el Gobierno), ente otras.

³⁶⁷ Cfr. Soldevilla: *op. cit.* (1913), 107.

³⁶⁸ Vid. *Heraldo de Madrid* y *El Liberal*, 8-IV-1913.

³⁶⁹ Apud *El Imparcial*, 26-IV-1913.

³⁷⁰ Discurso de Camín, en el mitin del Comité de Defensa Social, 8-VI-1913, apud *Revista Popular*, 10-VI-1913.

³⁷¹ Vid. Gómez Molleda: *op. cit.*, 484 s.

³⁷² Cfr. *Revista Popular*, 10-VI-1913.

³⁷³ Vid. Gómez Molleda: *op. cit.*, 484 s., y Ramos: *op. cit.*, 164-166.

³⁷⁴ Vid. Salvatella: *Diario de las Sesiones... Congreso...*, 26-V-1913, que inicia un debate continuado hasta el 7-VI.

³⁷⁵ Maura...: *Por qué...*, 270. Todavía cabía ver cierto fondo anticlerical en la legislación sobre el servicio militar de 1915; aunque las protestas fueron acaso más eco del tremendismo de algunos sectores, que hablaban, a raíz de ella, «la gran batalla [que] se está librando en estos días con la saña del delirio» (P. Fabo: *Los aborrecidos o en defensa de la vida religiosa*, Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1915, pág. 5 (BDN)).

³⁷⁶ Aunque, a raíz de un discurso de Fermín Calbetón (*Diario de las Sesiones... Senado*, 27-IV-1914), el nuncio advertiría en nota del 22-VI-1914 al ministro de Estado que, en el mes de diciembre de 1912, «la Santa Sede, en virtud de la potestad que tiene sobre las Ordenes Religiosas de España, como sobre las de todo el mundo, ... se dignó disponer transitoriamente que no se fundasen en España nuevos establecimientos religiosos sin permiso apostólico, que ofreció no conceder antes de ponerse de acuerdo con S. M. C. = No puede ocultarse al perspicaz talento de V. E., Sr. Ministro, cuánta distancia existe entre esta medida de soberana condescendencia del Padre Santo, y la supuesta prórroga de la ley del *candado*, expresamente rechazada por la Santa Sede, que parece quiso dar a entender el Sr. Calbetón, y lo cual hubiera equivalido a poner bajo el amparo de la autoridad eclesiástica una ley que fue dictada por una sola de las potestades sin consideración a la otra.» Lo advertía para que tales términos «no sirvan de antecedentes para ulteriores y eventuales negociaciones». En carta de 24-VI-1914, el ministro de Estado se limitó a acusar recibo (AMAE/SPS, leg. 2.679, expediente «1914. Nota particular del Nuncio Apostólico, protestando de las afirmaciones hechas en el Senado por D. Fermín Calbetón»).

³⁷⁷ Vid. *Las Normas dadas en Roma a los integristas y su explicación, por el Magistral de Sevilla*, Comillas, Anselmo Bracho, 1910.

³⁷⁸ Apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, Precisamente por eso, versan principalmente acerca de la organización de la acción social confesional.

³⁷⁹ Vid. texto correspondiente a la nota 170 del capítulo II.

³⁸⁰ Así, la instrucción octava de las dirigidas al integrismo (vid. nota 107 c del capítulo anterior) y la onceava de las Normas que comentamos (vid. nota siguiente) son redacciones parecidas de una misma idea: la conveniencia de participar en las elecciones. Pero el segundo texto excluye la alusión de aquel a la necesidad de votar a los candidatos «menos indignos» cuando no los hubiera mejores.

³⁸¹ La Norma 1.^a reproduce casi literalmente la Instrucción 1.^a (vid. nota 107 c del capítulo anterior de nuevo), calificando de «*reconquista religiosa*» lo que allí se denomina «lucha» por la unidad católica. La Norma 2.^a aclara: «La existencia de los partidos políticos es en sí misma lícita y honesta en cuanto sus doctrinas y sus actos no se oponen a la Religión y la moral; pero a la Iglesia no se le debe en manera alguna identificar o confundir con alguno de ellos; ni puede pretenderse que Ella intervenga en los intereses y controversias de los partidos para favorecer a los unos con preferencia a los otros.» La Norma 3.^a simplifica la Instrucción 2.^a y evita la frase «partidos políticos llamados o no llamados liberales» de la Instrucción (el Conservador, en efecto, había dejado de llamarse Liberal-Conservador desde 1899 al menos). Dice: «3.^o A nadie es lícito acusar o combatir como católicos no verdaderos o no buenos a los que por motivo legítimo y con recto fin, sin abandonar nunca la defensa de los principios de la Iglesia, quieren pertenecer o pertenecen a los partidos políticos hasta ahora existentes en España.» La Norma 4.^a explicaba esta nueva redacción: «4.^o Para evitar mejor cualquier idea inexacta en el uso y aplicación de la palabra «liberalismo», téngase siempre presente la doctrina de León XIII en la Encíclica *Libertas*, del 20 de Junio de 1888, como también las importantes instrucciones comunicadas, por orden del mismo Sumo Pontífice, por el Emmo. Cardenal Rampolla, Secretario de Estado, al Arzobispo de Bo-

gotá y a los otros Obispos de Colombia en la Carta *Plures e Columbiae* del 6 de Abril de 1900, donde entre las demás cosas se lee: «En esta materia se ha de tener a la vista lo que la Suprema Congregación del Santo Oficio hizo saber a los Obispos del Canadá el día 29 de Agosto de 1887, a saber: que la Iglesia, al condenar el liberalismo, no ha intentado condenar todos y cada uno de los partidos políticos que por ventura se llaman liberales. Esto mismo se declaró también en carta que por orden del Pontífice dirigió yo al Obispo de Salamanca el 17 de Febrero de 1891, pero añadiendo estas condiciones, a saber: que los católicos que se llaman liberales, en primer lugar acepten sinceramente todos los capítulos doctrinales enseñados por la Iglesia y estén prontos a recibir los que en adelante ella misma enseñare; además, ninguna cosa se propongan que explícita o implícitamente haya sido condenada por la Iglesia; finalmente, siempre que las circunstancias lo exigieren no rehusen, como es razón, expresar abiertamente su modo de sentir conforme en todo con las doctrinas de la Iglesia. Decíase además en la misma carta que era de desear el que los católicos escogiesen y tomaran otra denominación con que apellidar sus propios partidos, no fuera que adoptando la de liberales, diesen a los fieles ocasión de equívoco o de extrañeza; por lo demás, que no era lícito notar con censura teológica y mucho menos tachar de herético al liberalismo, cuando se le atribuye sentido diferente al fijado por la Iglesia al condenarlo, mientras que la misma Iglesia no manifieste otra cosa.» «Las Normas 5.^a, 6.^a y 7.^a parafrasean respectivamente las Instrucciones 3.^a, 4.^a y 5.^a, diciendo allí, en la 6.^a, que la disolución de los partidos «por nadie se ha de pretender» en vez de «a nadie se le puede exigir». Se añade la Norma 8.^a: «Los que entran a formar parte de un partido político cualquiera, deben conservar siempre íntegra su libertad de acción y de voto para negarse a cooperar de cualquier manera a leyes o disposiciones contrarias a los derechos de Dios y de la Iglesia; antes bien, están obligados a hacer en toda ocasión oportuna cuanto de ellos dependa para sostener positivamente los derechos sobredichos. Exigir de los afiliados a un partido una subordinación incondicional a la dirección de los jefes aún en el caso de ser opuesta a la justicia, a los intereses religiosos, o a las enseñanzas y reclamaciones de la Santa Sede y del Episcopado, serían una petición inhumana, que no puede someterse en los que dirigen esos mismos partidos, sin hacer ultraje a su rectitud y a sus sentimientos cristianos.» En cambio, desaparece la Instrucción 6.^a, que era aún arma contra el Partido Conservador. Las Normas 9 y 10 afirman de otro modo la unión de los católicos: «9.^o Para defender la Religión y los derechos de la Iglesia en España contra los ataques crecientes que frecuentemente se fraguan invocando al «liberalismo», es lícito a los católicos organizarse en las diversas regiones fuera de los partidos políticos hasta ahora existentes, e invocar la cooperación de todos los católicos indistintamente, dentro o fuera de tales partidos, con tal que dicha organización no tenga carácter antidinástico, ni pretenda negar la cualidad de católicos a los que prefieren abstenerse de tener parte en ella.» La Norma 11 es una nueva redacción de la instrucción 8.^o, según dijimos, callando lo que se refiere a los candidatos «menos indignos» y a la actitud del integrista ante ellos, así como el recurso a los prelados en los casos dudosos. Se suprimen las Instrucciones 9.^a y 11.^a La 10.^a queda redactada en la Norma 12.^a con algunos cambios: «No merecen represión los que declaran ser su ardiente deseo el que en el gobierno del Estado vayan renaciendo, según las leyes de la prudencia y las necesidades de la Patria lo exijan, las grandes instituciones y tradiciones religioso-sociales que hicieron tan gloriosa en otro tiempo a la Monarquía española; y por tanto, trabajan para la elevación progresiva de las leyes y de las reglas de gobierno hacia aquel grande ideal; pero es necesario que a estas nobles aspiraciones junten siempre el propósito firme de aprovechar cuanto bueno y honesto hay en las costumbres y legislación viente para mejorar eficazmente las condiciones religiosas y sociales de España. = Por voluntad del Padre Santo ruego a Vuestra Eminencia dé conocimiento de estas Normas a todos los Reverendísimos Prelados de España.

Confía Su Santidad que tales reglas, no menos que todas las otras enseñanzas y direcciones de los Sumos Pontífices relativas a la acción religioso-social de nuestros tiempos, serán acogidas por todos los verdaderos católicos y puestas en práctica sin reserva, absteniéndose de inútiles y perjudiciales polémicas acerca de las mismas, y con aquel espíritu de sincera y filial sumisión a las decisiones de la Santa Sede, de religiosa obediencia a los Obispos y de mutua caridad fraterna, que es el único que puede asegurar el triunfo de los ideales cristianos contra los enemigos de la Iglesia y de la Patria en la nobilísima nación española.» Firma el cardenal Merry del Val, secretario de Estado, en el Vaticano, el 20-IV-1911. En Madrid, el 3-V-1911, lo transcribe el nuncio, declarando «que la presente traducción es oficial» (apud *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona*, 1-VI-1911).

³⁸² Carta del nuncio al arzobispo de Toledo, 20-VII-1911, que se limita a transcribir textualmente los términos de la Santa Sede, *ibidem*, 16-VIII-1911.

³⁸³ Bilbao, La Editorial Vizcaína, 1912.

³⁸⁴ Vid. *Revista Popular*, 14-VIII-1912.

³⁸⁵ Vid. *El Liberal*, 24 y 26-X-1910.

³⁸⁶ González Ruiz...: *op. cit.*, 48. Ratifica el viaje de Herrera a Roma como encargado recibido de Urquijo (cuya influencia en la A. C. N. de P. inicial reaparece así) el propio Herrera, apud *La Gaceta del Norte*, 24-XI-1962, en artículo que nos facilita el Prof. Juan María Guasch Borrat.

³⁸⁷ *El Liberal*, 26-II-1911.

³⁸⁸ *Revista Popular*, 16-XI-1911, de donde proceden las palabras entre comillas.

³⁸⁹ Apud Oscar Alzaga: *La primera democracia cristiana en España*. Barcelona, Ariel, 1973, pág. 120 s.

³⁹⁰ Cfr. *ibidem*, 121 ss.

³⁹¹ Cfr. Marcos Guimerá Peraza: *Maura y Galdós*. Las Palmas, Ediciones del Excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria, 1967, pág. 55.

³⁹² Cfr. Bayle: *op. cit.*, 113 y Tusell: *op. cit.*, 100.

CONCLUSION

La propia amplitud y la naturaleza del tema estudiado hasta aquí es obvio que han impuesto limitaciones importantes a estas páginas. Lo que se ha pretendido en ellas (y esto debe de quedar claro para disipar cualquier duda sobre sus ambiciones) es una narración de lo que, traduciendo *grosso modo* el conocido adjetivo francés, puede considerarse historia eventual de la política religiosa española entre 1889 y 1914.

Tan reducido propósito era imprescindible por la escasez de estudios sobre la época, que resultan insuficientes para ahondar en otro tipo de aspectos históricos de la religiosidad. Este es sólo, por tanto, un punto de partida, que ojalá sirva para muchos pero que al menos compromete desde ahora al autor en futuros trabajos.

En efecto, desde los primeros momentos de la realización de esta obra, ha habido dos cuestiones que habrán de constituir otros dos grandes temas de investigación por de pronto:

Primero, ¿hasta qué punto el gran conflicto religioso que se da en la política peninsular contemporánea es en verdad expresión, como se pretende, de dos Españas, o más bien de una minoría dividida en dos, o cuándo pasa de ser esto a ser aquello, si es que sucede así?

Segundo, que engloba lo anterior, ¿cuál es y ha sido el talante religioso de los españoles?

La historia de las mentalidades y de la cultura sabia y popular, la de la sociedad y de la economía plantean en la Iglesia una problemática rica y compleja, que en nuestra historiografía permanece prácticamente inédita.

Pero es que, incluso en lo que directamente aborda este libro, los puntos confusos siguen siendo muy numerosos.

En él se han podido encontrar, creo, personalidades eclesiásticas decisivas (Tomás Cámara, Cascajares y Azara, Monescillo, Sancha, López Peláez...) de las que, sin embargo, bien poco sabemos aún acerca del alcance, de las raíces y del contorno en que se apoyaron.

En él se han estudiado las actividades de grupos políticos cuyas dimensiones cuantitativas y cuyo peso numerable en la vida política todavía no han sido medidos por la bibliografía especializada.

Se han podido esbozar, en fin, algunos conflictos locales que alcanzaron resonancia nacional en aquellos años: así las polémicas salmantinas en torno a Cámara, las catalanas acerca de Solidaridad, el activismo inusitado de los católicos vascos o el foco sevillano de Spínola y la Buena Prensa. Pero será preciso realizar una buena serie de trabajos de ámbito restringido, regional y local, que completen, amplíen y rectifiquen los datos de esta obra y que redescubran además el comportamiento religioso en todos los órdenes, más allá del campo político.

La magnitud de la investigación necesaria para conocer todos esos temas, incluso en un mero plano eventual, explica la redacción sucinta de este libro y mi decisión de callar las conclusiones que me sugiere.

Sólo con estas salvedades me permito sugerir algunos de los puntos más generales y seguros.

En primer lugar, la actitud de las fuerzas vivas católicas de 1868 a 1914, en España, parece configurarse en particular como versión precisamente política del conflicto creado a la Iglesia por la desacralización de lo que ellas mismas llaman mundo moderno: desacralización que no es sólo política e ideológica ni tampoco económica (por citar las dos principales hipótesis esbozadas por la bibliografía acerca del tema), sino total.

En lo propiamente político, la crisis del Antiguo Régimen, en el sentido más amplio de esta denominación, supone el derrumbamiento de instituciones jurídicas que tutelaban la presencia del clero en los puestos rectores de la vida social. De modo que el consiguiente y paulatino marginamiento de esos puestos, acaso porque brota en buena medida de una legislación lograda por acciones políticas, provoca una reacción sobre todo también política en el clero, que es la que ocurre a lo largo de los siglos XIX y XX.

En otras palabras: al condenar el mundo moderno, la jerarquía eclesiástica culpa a la ley como causante de la maldad de ese mundo. Y, en rigurosa consecuencia, preconiza una acción de los católicos dirigida a la reconquista del poder legislativo.

Lo que de aquí se sigue es nada menos que esta doble consecuencia. Al exhortarle a contender en la vida pública, en primer lugar, el clero está realizando una instrumentalización del laicado: que nace al primer plano de la Iglesia para llegar allí donde la jerarquía no alcanza. En segundo lugar, se lleva a cabo así una politización de la misma Iglesia, cuyos primeros tanteos a fin de dar cauce corporativo a esa «acción católica» de los seglares para recuperar la dirección del mundo moderno son tanteos políticos, formen o no partidos estrictos. Porque, con muy notables diferencias, políticas son las razones de la creación de la Asociación de Católicos en 1868, de la Unión Católica de 1881, del Partido Católico de 1891 y de las Ligas o Juntas de Acción Católica de 1903, por referirme a algunos de los primeros pasos de la organización de la futura democracia cristiana en España.

Al antiguo clericalismo (digámoslo en los términos justos, aun a riesgo de aparentar una incomprensión que de verdad no siento), que daba al clero aquel papel rector en el Antiguo Régimen, pretende suceder un nuevo clericalismo, en el que ese papel rector es perseguido por medio de la instrumentalización del laicado.

En la otra vertiente, este libro recoge una conclusión que considero importante. Esa acción católica del siglo xx en España no nace justificada por el anticlericalismo, como se ha dicho, sino al revés.

Aquella oleada activista de grupos confesionales alcanza un primer punto de madurez que en parte se concreta en la coalición Silvela-Polavieja de 1899. Fue más, seguramente, un señuelo que una realidad. Porque la Deuda pública acabó con la coalición en seis meses. O se regeneraba el país a partir de la Hacienda (Villaverde) o a partir del Ejército (Polavieja). Pero el señuelo bastó para advertir el peligro de desequilibrio entre un conservatismo recrecido y un Partido Liberal sin programa desde 1890, sin prestigio desde 1898 y sin jefe desde 1903. El anticlericalismo fue para este grupo, por tanto, necesidad de subsistencia, tan lícita como reales fueran las compromisos clericales en la política conservadora y tradicionalista.

Otra cosa es su concreción.

En un plano jurídico, se trata de una cuestión técnica insoslayable. El Concordato de 1851 compromete al Estado en proteger a tres institutos de perfección cristiana. Pero no dice nada de los demás masculinos y es confuso en lo que atañe a los femeninos. Si había necesidad de aclarar la situación legal (y parece la había), fue oportuno abordarlo.

En el terreno de los objetivos, el problema es distinto. A la impropiciada complicidad política de una parte del clero, el liberalismo responde afirmando, un tanto sin coherencia, que los religiosos son muchos, en vez de proceder a aplicarles el derecho común por su participación en actividades comunes (políticas, educativas, mercantiles o del orden que fuere) en un igualitarismo que hubiera sido real y tajantemente liberal.

Y el planteamiento fue además poco eficaz, en la medida en que aquellas amenazas verbales se hicieron al tiempo en que, casi sin excepción, los Gobiernos fusionistas de 1901 a 1913 ofrecían ocultamente a Roma ponerse de acuerdo para moderar las consecuencias de su propia política.

De esto no escapa, contra lo que a veces se afirma, José Canalejas.

El político gallego tuvo la habilidad y el acierto de aparentar en vida una firmeza y autenticidad programática que han llevado a una parte de la historiografía al convencimiento de que su asesinato en 1912 frustra la última gran oportunidad de revitalizar el sistema de Cánovas al obtener para el Partido Liberal un jefe y un programa coherentes.

No fue así.

Fuera por la división de la mayoría parlamentaria, fuera por la falta misma de mayoría en el Senado, Canalejas supo desde el principio que no podía realizar sus promesas anticlericales por medio de las Cortes. La ley del candado (símbolo más que otra cosa desde su nacimiento) sólo pudo ser promulgada cuando se le quitó la poca virtualidad que tenía al limitar su vigencia a dos años. Por eso desde el principio también, el

jefe del Gobierno de 1910 realiza esas curiosas gestiones diplomáticas para lograr que Roma le conceda por las buenas lo que él no puede conseguir por medios parlamentarios: que sean los mismos obispos los que reduzcan el número de religiosos y que sea la propia Santa Sede la que acepte cordialmente la separación entre Iglesia y Estado.

Pero, cuando estas gestiones fracasan y el programa radical se hace inviable por cauces legales, Canalejas no adopta la decisión con la que había amenazado para el caso de que no le dejaran llevarlo a término: enfrentarse al sistema. Transige, y vuelve al uso sagastino de las dilaciones reiteradas. La razón de esta cesión puede ser de muy distinto cariz (desde el burdo afán de seguir gobernando, hasta el deseo generoso de evitar al país males mayores, con una gama infinita de posibilidades intermedias). De cualquier modo, tras el invierno de 1910 a 1911, el Partido Liberal había perdido ya su oportunidad.

Por lo demás, la trascendencia de la equivocación de ambos frentes —jerarquía y fusionismo—, si en efecto la ha habido en sus actitudes políticas, había de palpase al menos durante toda la primera mitad del siglo xx en España: tanto en el orden anticlerical como en el de la política confesionalista. El tema, en verdad, sabido es que no acaba, como estas páginas, en 1913.